



Organización
Internacional
del Trabajo

100
1919-2019

Aplicación de las normas internacionales del trabajo, 2019



Informe III (Parte A)

Informe
de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones

Conferencia Internacional del Trabajo, 108.^a reunión, 2019

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

(artículos 19, 22, 23 y 35 de la Constitución)

**Tercer punto del orden del día:
Informaciones y memorias sobre la aplicación
de convenios y recomendaciones**

Informe III (Parte A)

**Informe General
y observaciones referidas a ciertos países**

ISBN: 978-92-2-131806-4 (impreso)
ISBN: 978-92-2-131807-1 (web pdf)
ISSN: 0251-3226

Primera edición 2019

La publicación de informaciones sobre las medidas tomadas respecto de los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo no implica opinión alguna de la Oficina Internacional del Trabajo acerca del estatuto jurídico del Estado que comunica tales informaciones (incluida la comunicación de una ratificación o de una declaración), ni acerca de su autoridad sobre las zonas o territorios a los que se refieran las informaciones comunicadas; en algunos casos ello puede plantear problemas sobre los cuales la OIT no tiene competencia para expresar una opinión.

Para más información sobre las publicaciones y los productos digitales de la OIT, visite nuestro sitio web:
www.ilo.org/publns.

La **Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones** es un órgano independiente, constituido por juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de la Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la OIT. La estructura del informe, tal como se modificó en el 2003, se divide en las siguientes partes:

- a) La **Nota al lector** aporta indicaciones sobre la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (su mandato, funcionamiento y el marco institucional en el que se inscriben sus labores respectivas (**volumen A, páginas 1-4**).
- b) **Parte I: el Informe General** describe el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y hasta qué punto los Estados Miembros han cumplido con sus obligaciones constitucionales respecto a las normas internacionales del trabajo, y hace hincapié en cuestiones de interés general que se derivan de la labor de la Comisión (**volumen A, páginas 5-41**).
- c) **Parte II: las Observaciones referidas de ciertos países** sobre la aplicación de los convenios ratificados (véase sección I), y sobre la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes (véase sección II) (**volumen A, páginas 43-699**).
- d) **Parte III: el Estudio General**, en el que la Comisión de Expertos examina el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones. Este examen concierne al conjunto de los Estados Miembros, tanto si han ratificado los convenios en cuestión como si no lo han hecho. El Estudio General se publica en un volumen separado (Informe III (Parte B)) y este año se examina la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) (**volumen B**).

El informe de la Comisión de Expertos se puede encontrar asimismo en la siguiente dirección de Internet: <http://www.ilo.org/normes>.

	<i>Página</i>
NOTA AL LECTOR.....	1
Panorama general de los mecanismos de control de la OIT.....	1
Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores	1
Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.....	2
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones	2
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo.....	3
La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.....	4
PARTE I. INFORME GENERAL	5
I. INTRODUCCIÓN	7
Composición de la Comisión	7
Métodos de trabajo	7
Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.....	9
Mandato.....	12
Mirando hacia el futuro con motivo del centenario de la OIT	13
II. RESPETO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS NORMAS	17
A. Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)	17
B. Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos	20
C. Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución.....	33
D. Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)	33
ANEXO AL INFORME GENERAL	37
Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones	37
PARTE II. OBSERVACIONES REFERIDAS A CIERTOS PAÍSES.....	43
I. OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS (ARTÍCULOS 22, 23, PÁRRAFO 2, Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN)	45
Observación general	45
Observaciones generales.....	45
Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo	51
Trabajo forzoso.....	201
Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores.....	259
Igualdad de oportunidades y de trato	387
Consultas tripartitas	501
Administración e inspección del trabajo.....	513
Política y promoción del empleo.....	555
Orientación y formación profesionales	591
Seguridad del empleo	599
Salarios.....	601
Tiempo de trabajo	613
Seguridad y salud en el trabajo	617
Seguridad social	627
Protección de la maternidad.....	637
Política social.....	639
Trabajadores migrantes	643
Gente de mar.....	647
Pescadores.....	655
Trabajadores portuarios	657

	<i>Página</i>
Pueblos indígenas y tribales	665
Categorías específicas de trabajadores	679
II. OBSERVACIONES ACERCA DE LA SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN)	687
ANEXOS	
I. Cuadro de las memorias registradas sobre convenios ratificados al 8 de diciembre de 2018 (artículos 22 y 35 de la Constitución).....	703
II. Cuadro estadístico de las memorias registradas sobre los convenios ratificados al 8 de diciembre de 2018 (artículo 22 de la Constitución).....	717
III. Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.....	719
IV. Resumen de la información proporcionada por los gobiernos en lo que respecta a la obligación de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes.....	728
V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes (31. ^a a 107. ^a reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2018)	730
VI. Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 8 de diciembre de 2018	744
VII. Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país	746

Lista de los Convenios y Protocolos por tema

Los Convenios fundamentales están en negritas y los Convenios prioritarios en cursiva

- ★ Convenio revisado, total o parcialmente, por un convenio o protocolo posterior.
- Convenio que ya no puede ser ratificado debido a la entrada en vigor de un convenio que lo revisa.
- ◆ Convenio o Protocolo que no ha entrado en vigor.
- Convenio retirado.
- Convenio derogado.

1 Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

- C011 Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)
- C084 Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84)
- C087 **Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)**
- C098 **Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)**
- C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)
- C141 Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
- C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151)
- C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

2 Trabajo forzoso

- C029 **Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)**
- C105 **Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)**
- P029 Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

3 Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

- ★ C005 Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)
- ★ C006 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)
- ★ C010 Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10)
- C015 **Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)**
- C033 Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33)
- ★ C059 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59)
- C060 **Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 (núm. 60)**
- C077 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77)
- C078 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78)
- C079 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79)
- C090 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)
- ★ C123 Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)
- C124 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)
- C138 **Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)**
- C182 **Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)**

4 Igualdad de oportunidades y de trato

- C100 **Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)**
- C111 **Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)**
- C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

5 Consultas tripartitas

- C144 *Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)*

6 Administración e inspección del trabajo

- C063 Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63)
- ★ C081 *Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)*
- C085 Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)
- C129 *Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)*
- C150 Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)
- C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
- P081 Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947

7 Política y promoción del empleo

- C002 Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)
- C034 Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34)
- C088 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
- C096 Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)
- C122 *Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)*
- C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)
- C181 Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

8 Orientación y formación profesionales

- C140 Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)
- C142 Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

9 Seguridad del empleo

- C158 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)

10 Salarios

- C026 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)
- C094 Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
- ★ C095 Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)
- C099 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)
- C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)
- C173 Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173)

11 Tiempo de trabajo

- C001 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)
- C004 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)
- C014 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)
- C020 Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20)
- C030 Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30)
- C031 Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31)
- C041 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41)
- C043 Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43)
- C046 Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46)
- C047 Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47)
- C049 Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49)
- C051 Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51)
- C052 Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52)
- C061 Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61)
- C067 Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67)
- ★ C089 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)
- ★ C101 Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101)
- C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106)
- C132 Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132)
- C153 Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153)
- C171 Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)
- C175 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175)
- P089 Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948

12 Seguridad y salud en el trabajo

- C013 Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)
- C045 Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45)
- C062 Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)
- C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)
- C119 Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)
- C120 Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
- C127 Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)
- C136 Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
- C139 Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
- C148 Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)
- ★ C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
- C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)
- C162 Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)
- C167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)
- C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)
- C174 Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)
- C176 Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)
- C184 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)
- C187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)
- P155 Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

13 Seguridad social

- ★ C012 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12)
- ★ C017 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)
- ★ C018 Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)
- C019 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)
- ★ C024 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24)
- ★ C025 Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25)
- C035 Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35)
- C036 Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36)
- C037 Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37)
- C038 Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38)
- C039 Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39)
- C040 Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40)
- ★ C042 Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)
- C044 Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44)
- C048 Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)
- ★ C102 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)
- C118 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)
- C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121)
- C128 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)
- C130 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)
- C157 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)
- C168 Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

14 Protección de la maternidad

- ★ C003 Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3)
- C103 Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)
- C183 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

15 Política social

- ★ C082 Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82)
- C117 Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117)

16 Trabajadores migrantes

- C021 Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)
- C066 Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66)
- C097 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)
- C143 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

17 Gente de mar

★	C007	Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)
★	C008	Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)
★	C009	Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)
★	C016	Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)
★	C022	Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)
★	C023	Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23)
★ ●	C053	Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53)
★◆●	C054	Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936 (núm. 54)
★ ●	C055	Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55)
★●	C056	Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56)
★◆●	C057	Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57)
★ ●	C058	Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58)
★ ●	C068	Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)
★ ●	C069	Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)
★◆●	C070	Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (núm. 70)
	C071	Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71)
★◆●	C072	Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 (núm. 72)
★ ●	C073	Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73)
★ ●	C074	Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)
★◆●	C075	Convenio sobre el alojamiento de la tripulación, 1946 (núm. 75)
★◆●	C076	Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76)
★●	C091	Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91)
★ ●	C092	Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92)
★◆●	C093	Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93)
●	C108	Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)
★◆●	C109	Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109)
★ ●	C133	Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133)
★ ●	C134	Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)
★ ●	C145	Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145)
★ ●	C146	Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146)
★ ●	C147	Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)
★ ●	C163	Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)
★ ●	C164	Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)
★ ●	C165	Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165)
★ ●	C166	Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)
★ ●	C178	Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178)
★ ●	C179	Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179)
★ ●	C180	Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180)
	C185	Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)
	MLC, 2006	Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)
●	P147	Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976

18 Pescadores

★	C112	Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)
	C113	Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)
	C114	Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)
	C125	Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125)
	C126	Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)
	C188	Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

19 Trabajadores portuarios

- C027 Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 1929 (núm. 27)
- C028 Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929 (núm. 28)
- C032 Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932 (núm. 32)
- C137 Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)
- C152 Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152)

20 Pueblos indígenas y tribales

- C050 Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)
- C064 Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)
- C065 Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)
- C086 Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)
- C104 Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104)
- C107 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107)
- C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

21 Categorías específicas de trabajadores

- C083 Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 83)
- ★ C110 Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110)
- C149 Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149)
- C172 Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172)
- C177 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)
- C189 Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)
- P110 Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958

22 Convenios sobre los artículos finales

- C080 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80)
- C116 Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (núm. 116)

Índice de los comentarios por Convenio

C001			
Haití	613	Marruecos	246
C006		Myanmar	249
Argelia	262	Nepal	251
C012		Nigeria	254
Haití	631	Sierra Leona	255
C014		Viet Nam	256
Haití	613	C030	
Sarawak (Malasia)	614	Haití	613
C017		C037	
Antigua y Barbuda	627	Djibouti	629
Armenia	627	C038	
Haití	631	Djibouti	629
Kenya	632	C042	
República Unida de Tanzania	634	Haití	631
Santa Lucía	634	C055	
Sierra Leona	634	México	648
C018		C081	
Armenia	627	Albania	513
C019		Antigua y Barbuda	514
Djibouti	628	Arabia Saudita	514
Malasia Peninsular (Malasia)	633	Bangladesh	516
República Unida de Tanzania	634	Congo	519
Sarawak (Malasia)	633	Croacia	519
C022		Dominica	521
México	648	Eslovaquia	521
C024		Eslovenia	522
Djibouti	629	Ex República Yugoslava de Macedonia	523
Haití	631	Federación de Rusia	543
C025		Ghana	524
Haití	631	Granada	525
C026		Guinea-Bissau	525
Burundi	602	Haití	525
Nigeria	606	Hungría	527
Uganda	609	India	528
C029		Indonesia	530
Alemania	201	Kirguistán	531
Argelia	202	Pakistán	536
Argentina	204	Polonia	538
Australia	206	Qatar	540
Belarús	208	República Centroafricana	518
Estado Plurinacional de Bolivia	211	República de Moldova	532
Chad	216	Rumania	542
Colombia	217	San Vicente y las Granadinas	545
Congo	219	Senegal	546
Dominica	220	Serbia	547
Eritrea	222	Sierra Leona	547
Guinea	226	Singapur	548
India	228	Sudán	548
Indonesia	231	Tayikistán	549
Iraq	234	Ucrania	550
Japón	235	Uganda	552
Kazajstán	238	C087	
Kuwait	239	Argelia	51
Libano	240	Argentina	53
Libia	242	Belice	56
Malasia	244	Botswana	57
Malawi	246	Camerún	64
		Congo	66

Egipto.....	71	Uruguay.....	609
El Salvador.....	74	Yemen.....	610
Eritrea.....	77	C095	
Eswatini.....	79	Belarús.....	601
Federación de Rusia.....	154	Estado Plurinacional de Bolivia.....	601
Fiji.....	81	Nigeria.....	606
Filipinas.....	83	República Centroafricana.....	603
Gambia.....	87	Ucrania.....	607
Grecia.....	87	Zambia.....	610
Guatemala.....	90	C097	
Guinea Ecuatorial.....	95	Barbados.....	643
Haití.....	96	España.....	643
Honduras.....	98	Sabah (Malasia).....	644
Jamaica.....	101	C098	
Japón.....	103	Barbados.....	55
Jersey (Reino Unido).....	149	Belice.....	56
Kazajistán.....	105	Botswana.....	59
Liberia.....	109	Brasil.....	60
México.....	114	Croacia.....	66
Mozambique.....	117	Ecuador.....	69
Myanmar.....	118	Eritrea.....	78
Pakistán.....	123	Eslovenia.....	79
Panamá.....	132	Ex República Yugoslava de Macedonia.....	80
Paraguay.....	136	Federación de Rusia.....	154
Perú.....	139	Filipinas.....	86
Polonia.....	144	Gambia.....	87
Reino Unido.....	148	Grecia.....	88
República Árabe Siria.....	162	Guinea Ecuatorial.....	95
República Democrática del Congo.....	67	Guinea-Bissau.....	94
República Unida de Tanzania.....	172	Guyana.....	96
Rumania.....	151	Haití.....	97
Rwanda.....	156	Jamaica.....	102
San Vicente y las Granadinas.....	157	Jersey (Reino Unido).....	150
Santa Lucía.....	158	Kiribati.....	107
Senegal.....	159	Líbano.....	108
Serbia.....	160	Liberia.....	110
Somalia.....	165	Malasia.....	111
Sri Lanka.....	166	Mozambique.....	118
Sudáfrica.....	169	Nepal.....	120
Suecia.....	170	Nigeria.....	122
Togo.....	174	Pakistán.....	128
Trinidad y Tabago.....	175	Panamá.....	134
Túnez.....	177	Papua Nueva Guinea.....	136
Turquía.....	178	Paraguay.....	138
Ucrania.....	187	Perú.....	141
Uganda.....	188	Polonia.....	145
Uruguay.....	190	Portugal.....	146
República Bolivariana de Venezuela.....	193	República Árabe Siria.....	164
Yemen.....	193	República Democrática del Congo.....	68
Zambia.....	195	República Unida de Tanzania.....	174
Zimbabwe.....	196	Rumania.....	152
C088		Rwanda.....	156
Nigeria.....	576	San Vicente y las Granadinas.....	157
Sierra Leona.....	583	Santa Elena (Reino Unido).....	151
C092		Santa Lucía.....	158
Egipto.....	647	Santo Tomé y Príncipe.....	158
C094		Serbia.....	160
Dominica.....	604	Seychelles.....	162
Jamaica.....	604	Sierra Leona.....	162
Marruecos.....	605	Somalia.....	166
República Democrática del Congo.....	603	Sri Lanka.....	168
Rwanda.....	607	Suecia.....	171

Suiza.....	172	Mozambique.....	248
Togo.....	175	C106	
Trinidad y Tabago.....	176	Haití.....	613
Turquía.....	180	Indonesia.....	614
Uganda.....	189	C107	
Uruguay.....	191	El Salvador.....	670
Uzbekistán.....	192	C108	
Yemen.....	194	Ghana.....	647
Zambia.....	196	C110	
Zimbabwe.....	198	Cuba.....	680
C100		C111	
Afganistán.....	390	Observación general.....	387
Alemania.....	393	Afganistán.....	391
Antigua y Barbuda.....	397	Albania.....	393
Bahamas.....	400	Alemania.....	395
Barbados.....	411	Angola.....	396
Chile.....	415	Antigua y Barbuda.....	397
Congo.....	417	Argentina.....	398
España.....	427	Bahamas.....	402
Fiji.....	431	Bahrein.....	403
Georgia.....	440	Barbados.....	412
Ghana.....	442	Burundi.....	413
Gibraltar (Reino Unido).....	477	Chad.....	414
Iraq.....	447	Chile.....	415
Libano.....	456	Congo.....	417
Libia.....	458	España.....	429
Lituania.....	459	Ex República Yugoslava de Macedonia.....	431
Malasia.....	462	Federación de Rusia.....	479
Mauritania.....	464	Fiji.....	432
Mozambique.....	464	Gambia.....	439
Nueva Caledonia (Francia).....	436	Ghana.....	444
Perú.....	467	Guinea.....	445
República Democrática del Congo.....	423	Guinea Ecuatorial.....	446
Rwanda.....	482	Iraq.....	447
San Vicente y las Granadinas.....	482	Irlanda.....	448
Santa Lucía.....	483	Israel.....	449
Sri Lanka.....	484	Jordania.....	451
Tayikistán.....	488	Kuwait.....	452
Trinidad y Tabago.....	490	Libano.....	457
Ucrania.....	491	Libia.....	458
Uruguay.....	492	Lituania.....	461
Uzbekistán.....	493	Marruecos.....	462
Zambia.....	495	Namibia.....	465
Zimbabwe.....	498	Nueva Caledonia (Francia).....	437
C103		Papua Nueva Guinea.....	466
Guinea Ecuatorial.....	637	Perú.....	470
C105		Polinesia Francesa (Francia).....	438
Argelia.....	203	Qatar.....	471
Belice.....	211	República de Corea.....	418
Botswana.....	212	República Democrática del Congo.....	424
Burundi.....	213	República Democrática Popular Lao.....	454
Camboya.....	214	Rumania.....	478
Egipto.....	220	Senegal.....	483
Eritrea.....	224	Sri Lanka.....	486
Etiopía.....	225	Tayikistán.....	489
Guinea.....	227	Trinidad y Tabago.....	491
Indonesia.....	233	Uzbekistán.....	494
Jamaica.....	234	Zambia.....	497
Kuwait.....	240	Zimbabwe.....	499
Libia.....	242	C113	
Madagascar.....	243	Federación de Rusia.....	655
Marruecos.....	247	Guinea.....	655

C115		
Belice		618
C117		
Jamaica		639
Nicaragua		639
República Bolivariana de Venezuela		641
C118		
Barbados		628
Guinea		630
C119		
Sierra Leona		624
C122		
Albania		555
Armenia		557
Bosnia y Herzegovina		558
Brasil		560
Canadá		562
Chile		563
Chipre		565
Costa Rica		567
Djibouti		567
Francia		569
Grecia		571
Libia		574
Panamá		578
Polonia		580
Rumania		582
Sudán		584
Uganda		585
República Bolivariana de Venezuela		586
C124		
Madagascar		334
C125		
Sierra Leona		656
C126		
Federación de Rusia		655
C129		
Albania		513
Croacia		519
Eslovaquia		521
Eslovenia		522
Ex República Yugoslava de Macedonia		523
Hungría		527
Malawi		532
Polonia		538
República de Moldova		532
Rumania		542
Serbia		547
Ucrania		550
C131		
Estado Plurinacional de Bolivia		601
República Centroafricana		603
Zambia		610
C134		
México		648
C135		
República Democrática del Congo		69
C136		
Estado Plurinacional de Bolivia		619
C137		
España		659
Guyana		666

Portugal	662
C138	
Albania	259
Armenia	263
Aruba (Países Bajos)	373
Bahamas	265
Benin	267
Estado Plurinacional de Bolivia	270
Brasil	273
Burundi	276
Cabo Verde	279
Côte d'Ivoire	281
Djibouti	283
Dominica	285
Ecuador	286
Eritrea	289
Etiopía	290
Grecia	294
Guatemala	295
Guinea	299
Guyana	303
Honduras	306
Indonesia	310
Jamaica	315
Jordania	318
Kenya	321
Kirguistán	323
Lesotho	327
Libano	329
Madagascar	335
Malasia	338
Malawi	341
Mali	344
Marruecos	348
Mauritania	351
Mozambique	354
Nepal	359
Nicaragua	363
Níger	364
Nigeria	368
Papua Nueva Guinea	374
República Democrática Popular Lao	325
Viet Nam	378
Yemen	380
Zambia	383
C139	
Guyana	623
C140	
Guyana	592
Polonia	593
República Bolivariana de Venezuela	596
C142	
Guinea	591
Polonia	594
República de Moldova	592
República Bolivariana de Venezuela	596
C143	
Kenya	644
C144	
Antigua y Barbuda	501
Botswana	501
Chad	502

Côte d'Ivoire.....	502	República Centroafricana.....	667
El Salvador.....	503	República Bolivariana de Venezuela.....	676
Granada.....	505	C176	
Guatemala.....	506	Ucrania.....	624
Irlanda.....	506	C177	
Jamaica.....	507	Bulgaria.....	679
Madagascar.....	507	C181	
Malawi.....	508	Argelia.....	556
Nigeria.....	509	España.....	568
República Democrática del Congo.....	503	C182	
Serbia.....	510	Albania.....	260
Sierra Leona.....	510	Australia.....	264
Dominica.....	647	Barbados.....	266
República Bolivariana de Venezuela.....	510	Benin.....	268
C148		Botswana.....	272
San Marino.....	623	Brasil.....	275
C149		Burundi.....	277
Polonia.....	682	Cabo Verde.....	279
República Bolivariana de Venezuela.....	683	Chad.....	279
C151		Congo.....	281
Chad.....	65	Côte d'Ivoire.....	282
C152		Djibouti.....	284
Congo.....	657	Ecuador.....	286
República de Moldova.....	661	El Salvador.....	288
C155		Etiopía.....	292
Antigua y Barbuda.....	617	Ghana.....	293
China.....	620	Guatemala.....	296
Croacia.....	621	Guinea.....	301
República Centroafricana.....	619	Haití.....	304
C156		Honduras.....	308
Eslovaquia.....	426	Indonesia.....	311
Finlandia.....	433	Iraq.....	313
Francia.....	435	Jamaica.....	316
Guinea.....	446	Jordania.....	319
República de Corea.....	419	Kazajstán.....	320
C158		Kenya.....	322
Papua Nueva Guinea.....	599	Kirguistán.....	324
República Democrática del Congo.....	599	Lesotho.....	328
C159		Líbano.....	330
Perú.....	579	Liberia.....	331
C160		Libia.....	332
San Marino.....	544	Madagascar.....	337
C161		Malasia.....	339
Antigua y Barbuda.....	617	Malawi.....	342
Croacia.....	621	Mali.....	345
C162		Marruecos.....	349
Estado Plurinacional de Bolivia.....	619	Mauritania.....	352
Croacia.....	621	Mozambique.....	355
Uruguay.....	625	Myanmar.....	356
C163		Nepal.....	361
México.....	648	Nicaragua.....	363
C164		Níger.....	365
México.....	648	Nigeria.....	370
C166		Nueva Zelandia.....	372
México.....	648	Papua Nueva Guinea.....	375
C167		República Democrática Popular Lao.....	326
China.....	620	Samoa.....	376
C169		San Vicente y las Granadinas.....	378
Observación general.....	665	Viet Nam.....	379
Chile.....	668	Yemen.....	381
Guatemala.....	671	C189	
Nicaragua.....	675	Uruguay.....	683

Observaciones generales

Brunei Darussalam	45
Chad	45
Congo	46
Curazao (Países Bajos)	48
Dominica	46
Gabón	46
Gambia	46
General	45
Granada	46
Guinea Ecuatorial	47
Guinea-Bissau	46
Kiribati	47
Nicaragua	48
República de Maldivas	47
Rumania	48
Sabah (Malasia)	47
San Vicente y las Granadinas	48
Santa Lucía	48
Sierra Leona	49
Somalia	49
Sudán del Sur	49
Timor-Leste	49
Trinidad y Tabago	49

Sumisión a las autoridades competentes

Afganistán	687
Albania	687
Angola	687
Antigua y Barbuda	687
Azerbaiyán	688
Bahamas	688
Bahrein	688
Bangladesh	688
Belice	689
Estado Plurinacional de Bolivia	689
Brunei Darussalam	689
Burkina Faso	689
Burundi	689
Chad	690
Chile	690
Comoras	690
Congo	690
Croacia	690
Dominica	690
El Salvador	691
Emiratos Árabes Unidos	691
Eswatini	691
Ex República Yugoslava de Macedonia	691

Fiji	691
Gabón	692
Gambia	692
Granada	692
Guinea	692
Guinea Ecuatorial	692
Guinea-Bissau	692
Guyana	693
Haití	693
Hungría	693
Islas Marshall	693
Islas Salomón	693
Kazajstán	693
Kirguistán	694
Kiribati	694
Kuwait	694
Lesotho	694
Líbano	694
Liberia	695
Libia	695
Malasia	695
Malawi	695
Malí	695
Malta	696
México	696
Mozambique	696
Pakistán	696
Papua Nueva Guinea	696
República Árabe Siria	698
República Centroafricana	690
República de Maldivas	695
República de Moldova	696
República Democrática del Congo	690
República Islámica del Irán	693
Rwanda	696
Saint Kitts y Nevis	696
Samoa	697
San Vicente y las Granadinas	697
Santa Lucía	697
Seychelles	697
Sierra Leona	697
Somalia	698
Timor-Leste	698
Tuvalu	698
Vanuatu	698
Yemen	699
Zambia	699

Índice de los comentarios por país

Afganistán			
C100.....	390		
C111.....	391		
Sumisión a las autoridades competentes	687		
Albania			
C081.....	513		
C111.....	393		
C122.....	555		
C129.....	513		
C138.....	259		
C182.....	260		
Sumisión a las autoridades competentes	687		
Alemania			
C029.....	201		
C100.....	393		
C111.....	395		
Angola			
C111.....	396		
Sumisión a las autoridades competentes	687		
Antigua y Barbuda			
C017.....	627		
C081.....	514		
C100.....	397		
C111.....	397		
C144.....	501		
C155.....	617		
C161.....	617		
Sumisión a las autoridades competentes	687		
Arabia Saudita			
C081.....	514		
Argelia			
C006.....	262		
C029.....	202		
C087.....	51		
C105.....	203		
C181.....	556		
Argentina			
C029.....	204		
C087.....	53		
C111.....	398		
Armenia			
C017.....	627		
C018.....	627		
C122.....	557		
C138.....	263		
Aruba (Países Bajos)			
C138.....	373		
Australia			
C029.....	206		
C182.....	264		
Azerbaiyán			
Sumisión a las autoridades competentes	688		
Bahamas			
C100.....	400		
C111.....	402		
C138.....	265		
Sumisión a las autoridades competentes	688		
Bahrein			
C111.....	403		
		Sumisión a las autoridades competentes	688
Bangladesh			
C081.....	516		
Sumisión a las autoridades competentes	688		
Barbados			
C097.....	643		
C098.....	55		
C100.....	411		
C111.....	412		
C118.....	628		
C182.....	266		
Belarús			
C029.....	208		
C095.....	601		
Belice			
C087.....	56		
C098.....	56		
C105.....	211		
C115.....	618		
Sumisión a las autoridades competentes	689		
Benin			
C138.....	267		
C182.....	268		
Estado Plurinacional de Bolivia			
C029.....	211		
C095.....	601		
C131.....	601		
C136.....	619		
C138.....	270		
C162.....	619		
Sumisión a las autoridades competentes	689		
Bosnia y Herzegovina			
C122.....	558		
Botswana			
C087.....	57		
C098.....	59		
C105.....	212		
C144.....	501		
C182.....	272		
Brasil			
C098.....	60		
C122.....	560		
C138.....	273		
C182.....	275		
Brunei Darussalam			
Observación general	45		
Sumisión a las autoridades competentes	689		
Bulgaria			
C177.....	679		
Burkina Faso			
Sumisión a las autoridades competentes	689		
Burundi			
C026.....	602		
C105.....	213		
C111.....	413		
C138.....	276		
C182.....	277		
Sumisión a las autoridades competentes	689		

Cabo Verde	
C138	279
C182	279
Camboya	
C105	214
Camerún	
C087	64
Canadá	
C122	562
Chad	
C029	216
C111	414
C144	502
C151	65
C182	279
Observación general	45
Sumisión a las autoridades competentes	690
Chile	
C100	415
C111	415
C122	563
C169	668
Sumisión a las autoridades competentes	690
China	
C155	620
C167	620
Chipre	
C122	565
Colombia	
C029	217
Comoras	
Sumisión a las autoridades competentes	690
Congo	
C029	219
C081	519
C087	66
C100	417
C111	417
C152	657
C182	281
Observación general	46
Sumisión a las autoridades competentes	690
Costa Rica	
C122	567
Côte d'Ivoire	
C138	281
C144	502
C182	282
Croacia	
C081	519
C098	66
C129	519
C155	621
C161	621
C162	621
Sumisión a las autoridades competentes	690
Cuba	
C110	680
Curazao (Países Bajos)	
Observación general	48
Djibouti	
C019	628

C024	629
C037	629
C038	629
C122	567
C138	283
C182	284
Dominica	
C029	220
C081	521
C094	604
C138	285
C147	647
Observación general	46
Sumisión a las autoridades competentes.....	690
Ecuador	
C098	69
C138	286
C182	286
Egipto	
C087	71
C092	647
C105	220
El Salvador	
C087	74
C107	670
C144	503
C182	288
Sumisión a las autoridades competentes.....	691
Emiratos Árabes Unidos	
Sumisión a las autoridades competentes.....	691
Eritrea	
C029	222
C087	77
C098	78
C105	224
C138	289
Eslovaquia	
C081	521
C129	521
C156	426
Eslovenia	
C081	522
C098	79
C129	522
España	
C097	643
C100	427
C111	429
C137	659
C181	568
Eswatini	
C087	79
Sumisión a las autoridades competentes.....	691
Etiopía	
C105	225
C138	290
C182	292
Ex República Yugoslava de Macedonia	
C081	523
C098	80
C111	431
C129	523

Sumisión a las autoridades competentes	691	C138	299
Federación de Rusia		C142	591
C081	543	C156	446
C087	154	C182	301
C098	154	Sumisión a las autoridades competentes	692
C111	479	Guinea Ecuatorial	
C113	655	C087	95
C126	655	C098	95
Fiji		C103	637
C087	81	C111	446
C100	431	Observación general	47
C111	432	Sumisión a las autoridades competentes	692
Sumisión a las autoridades competentes	691	Guinea-Bissau	
Filipinas		C081	525
C087	83	C098	94
C098	86	Observación general	46
Finlandia		Sumisión a las autoridades competentes	692
C156	433	Guyana	
Francia		C098	96
C122	569	C137	660
C156	435	C138	303
Gabón		C139	623
Observación general	46	C140	592
Sumisión a las autoridades competentes	692	Sumisión a las autoridades competentes	693
Gambia		Haití	
C087	87	C001	613
C098	87	C012	631
C111	439	C014	613
Observación general	46	C017	631
Sumisión a las autoridades competentes	692	C024	631
Georgia		C025	631
C100	440	C030	613
Ghana		C042	631
C081	524	C081	525
C100	442	C087	96
C108	647	C098	97
C111	444	C106	613
C182	293	C182	304
Gibraltar (Reino Unido)		Sumisión a las autoridades competentes	693
C100	477	Honduras	
Granada		C087	98
C081	525	C138	306
C144	505	C182	308
Observación general	46	Hungría	
Sumisión a las autoridades competentes	692	C081	527
Grecia		C129	527
C087	87	Sumisión a las autoridades competentes	693
C098	88	India	
C122	571	C029	228
C138	294	C081	528
Guatemala		Indonesia	
C087	90	C029	231
C138	295	C081	530
C144	506	C105	233
C169	671	C106	614
C182	296	C138	310
Guinea		C182	311
C029	226	Iraq	
C105	227	C029	234
C111	445	C100	447
C113	655	C111	447
C118	630	C182	313

Irlanda	
C111	448
C144	506
Islas Marshall	
Sumisión a las autoridades competentes	693
Islas Salomón	
Sumisión a las autoridades competentes	693
Israel	
C111	449
Jamaica	
C087	101
C094	604
C098	102
C105	234
C117	639
C138	315
C144	507
C182	316
Japón	
C029	235
C087	103
Jersey (Reino Unido)	
C087	149
C098	150
Jordania	
C111	451
C138	318
C182	319
Kazajstán	
C029	238
C087	105
C182	320
Sumisión a las autoridades competentes	693
Kenya	
C017	632
C138	321
C143	644
C182	322
Kirguistán	
C081	531
C138	323
C182	324
Sumisión a las autoridades competentes	694
Kiribati	
C098	107
Observación general	47
Sumisión a las autoridades competentes	694
Kuwait	
C029	239
C105	240
C111	452
Sumisión a las autoridades competentes	694
Lesotho	
C138	327
C182	328
Sumisión a las autoridades competentes	694
Líbano	
C029	240
C098	108
C100	456
C111	457
C138	329

C182	330
Sumisión a las autoridades competentes	694
Liberia	
C087	109
C098	110
C182	331
Sumisión a las autoridades competentes	695
Libia	
C029	242
C100	458
C105	242
C111	458
C122	574
C182	332
Sumisión a las autoridades competentes	695
Lituania	
C100	459
C111	461
Madagascar	
C105	243
C124	334
C138	335
C144	507
C182	337
Malasia	
C029	244
C098	111
C100	462
C138	338
C182	339
Sumisión a las autoridades competentes	695
Malasia Peninsular (Malasia)	
C019	633
Malawi	
C029	246
C129	532
C138	341
C144	508
C182	342
Sumisión a las autoridades competentes	695
Mali	
C138	344
C182	345
Sumisión a las autoridades competentes	695
Malta	
Sumisión a las autoridades competentes	696
Marruecos	
C029	246
C094	605
C105	247
C111	462
C138	348
C182	349
Mauritania	
C100	464
C138	351
C182	352
México	
C022	648
C055	648
C087	114
C134	648

C163.....	648	Paraguay	
C164.....	648	C087.....	136
C166.....	648	C098.....	138
Sumisión a las autoridades competentes.....	696	Perú	
Mozambique		C087.....	139
C087.....	117	C098.....	141
C098.....	118	C100.....	467
C100.....	464	C111.....	470
C105.....	248	C159.....	579
C138.....	354	Polinesia Francesa (Francia)	
C182.....	355	C111.....	438
Sumisión a las autoridades competentes.....	696	Polonia	
Myanmar		C081.....	538
C029.....	249	C087.....	144
C087.....	118	C098.....	145
C182.....	356	C122.....	580
Namibia		C129.....	538
C111.....	465	C140.....	593
Nepal		C142.....	594
C029.....	251	C149.....	682
C098.....	120	Portugal	
C138.....	359	C098.....	146
C182.....	361	C137.....	662
Nicaragua		Qatar	
C117.....	639	C081.....	540
C138.....	363	C111.....	471
C169.....	675	Reino Unido	
C182.....	363	C087.....	148
Observación general.....	48	República Árabe Siria	
Níger		C087.....	162
C138.....	364	C098.....	164
C182.....	365	Sumisión a las autoridades competentes.....	698
Nigeria		República Centroafricana	
C026.....	606	C081.....	518
C029.....	254	C095.....	603
C088.....	576	C131.....	603
C095.....	606	C155.....	619
C098.....	122	C169.....	667
C138.....	368	Sumisión a las autoridades competentes.....	690
C144.....	509	República de Corea	
C182.....	370	C111.....	418
Nueva Caledonia (Francia)		C156.....	419
C100.....	436	República de Maldivas	
C111.....	437	Observación general.....	47
Nueva Zelandia		Sumisión a las autoridades competentes.....	695
C182.....	372	República de Moldova	
Pakistán		C081.....	532
C081.....	536	C129.....	532
C087.....	123	C142.....	592
C098.....	128	C152.....	661
Sumisión a las autoridades competentes.....	696	Sumisión a las autoridades competentes.....	696
Panamá		República Democrática del Congo	
C087.....	132	C087.....	67
C098.....	134	C094.....	603
C122.....	578	C098.....	68
Papua Nueva Guinea		C100.....	423
C098.....	136	C111.....	424
C111.....	466	C135.....	69
C138.....	374	C144.....	503
C158.....	599	C158.....	599
C182.....	375	Sumisión a las autoridades competentes.....	690
Sumisión a las autoridades competentes.....	696		

República Democrática Popular Lao		Serbia	
C111	454	C081	547
C138	325	C087	160
C182	326	C098	160
República Islámica del Irán		C129	547
Sumisión a las autoridades competentes	693	C144	510
República Unida de Tanzania		Seychelles	
C017	634	C098	162
C019	634	Sumisión a las autoridades competentes	697
C087	172	Sierra Leona	
C098	174	C017	634
Rumania		C029	255
C081	542	C081	547
C087	151	C088	583
C098	152	C098	162
C111	478	C119	624
C122	582	C125	656
C129	542	C144	510
Observación general	48	Observación general	49
Rwanda		Sumisión a las autoridades competentes	697
C087	156	Singapur	
C094	607	C081	548
C098	156	Somalia	
C100	482	C087	165
Sumisión a las autoridades competentes	696	C098	166
Sabah (Malasia)		Observación general	49
C097	644	Sumisión a las autoridades competentes	698
Observación general	47	Sri Lanka	
Saint Kitts y Nevis		C087	166
Sumisión a las autoridades competentes	696	C098	168
Samoa		C100	484
C182	376	C111	486
Sumisión a las autoridades competentes	697	Sudáfrica	
San Marino		C087	169
C148	623	Sudán	
C160	544	C081	548
San Vicente y las Granadinas		C122	584
C081	545	Sudán del Sur	
C087	157	Observación general	49
C098	157	Suecia	
C100	482	C087	170
C182	378	C098	171
Observación general	48	Suiza	
Sumisión a las autoridades competentes	697	C098	172
Santa Elena (Reino Unido)		Tayikistán	
C098	151	C081	549
Santa Lucía		C100	488
C017	634	C111	489
C087	158	Timor-Leste	
C098	158	Observación general	49
C100	483	Sumisión a las autoridades competentes	698
Observación general	48	Togo	
Sumisión a las autoridades competentes	697	C087	174
Santo Tomé y Príncipe		C098	175
C098	158	Trinidad y Tabago	
Sarawak (Malasia)		C087	175
C014	614	C098	176
C019	633	C100	490
Senegal		C111	491
C081	546	Observación general	49
C087	159		
C111	483		

Túnez	
C087.....	177
Turquía	
C087.....	178
C098.....	180
Tuvalu	
Sumisión a las autoridades competentes	698
Ucrania	
C081.....	550
C087.....	187
C095.....	607
C100.....	491
C129.....	550
C176.....	624
Uganda	
C026.....	609
C081.....	552
C087.....	188
C098.....	189
C122.....	585
Uruguay	
C087.....	190
C094.....	609
C098.....	191
C100.....	492
C162.....	625
C189.....	683
Uzbekistán	
C098.....	192
C100.....	493
C111.....	494
Vanuatu	
Sumisión a las autoridades competentes	698

República Bolivariana de Venezuela	
C087.....	193
C117.....	641
C122.....	586
C140.....	596
C142.....	596
C144.....	510
C149.....	683
C169.....	676
Viet Nam	
C029.....	256
C138.....	378
C182.....	379
Yemen	
C087.....	193
C094.....	610
C098.....	194
C138.....	380
C182.....	381
Sumisión a las autoridades competentes	699
Zambia	
C087.....	195
C095.....	610
C098.....	196
C100.....	495
C111.....	497
C131.....	610
C138.....	383
Sumisión a las autoridades competentes	699
Zimbabwe	
C087.....	196
C098.....	198
C100.....	498
C111.....	499

Nota al lector

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, su mandato comprende la adopción de normas internacionales del trabajo y la promoción de la ratificación y la aplicación de esas normas en sus Estados Miembros y el control de esta aplicación como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin de supervisar los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la OIT ha desarrollado mecanismos de control únicos a escala internacional¹.

En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, a partir de la adopción de una norma internacional del trabajo los Estados Miembros tienen algunas obligaciones, especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado a las autoridades nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las recomendaciones.

Existen diversos mecanismos de control mediante los cuales la Organización examina el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias al procedimiento regular, fundado en el envío periódico de memorias (artículo 22 de la Constitución de la OIT)², y a los procedimientos especiales, basados en las reclamaciones o en las quejas dirigidas al Consejo de Administración por los mandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución). Desde 1950, existe un procedimiento especial para el tratamiento de las quejas en materia de libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro interesado no haya ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

En razón de su propia estructura tripartita, la OIT fue la primera organización internacional que asoció directamente en sus actividades a los interlocutores sociales. La participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los mecanismos de control está prevista en el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, en virtud del cual las memorias y las informaciones presentadas por los gobiernos en aplicación de los artículos 19 y 22 deben comunicarse a las organizaciones representativas.

En la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos comentarios sobre las memorias relativas a la aplicación por estos últimos de las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, pueden señalar la falta de conformidad del derecho o de la práctica con la aplicación de un convenio ratificado. Además, toda organización de empleadores o de trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina sus comentarios sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Oficina los transmitirá al gobierno correspondiente, que

¹ Para obtener información detallada sobre todos los procedimientos de control, véase el *Manual sobre los procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo* (edición revisada, 2012), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Rev., 2012.

² Las memorias se solicitan cada tres años para los convenios llamados fundamentales y de gobernanza, y a partir de ahora cada seis años para los demás convenios. De hecho, en su 334.ª reunión, el Consejo de Administración decidió prolongar de cinco a seis años el ciclo de presentación de memorias para esta última categoría de convenios (documento GB.334/INS/5). Los gobiernos transmiten las memorias que se presentan según una agrupación de los convenios por materia.

tendrá la posibilidad de responder a los mismos antes de que sean examinados por la Comisión de Expertos salvo en circunstancias excepcionales ³.

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

En los primeros años de existencia de la OIT la adopción de las normas internacionales del trabajo y las actividades de control regular tenían lugar cada año en el marco de las sesiones plenarias de la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, el considerable aumento del número de ratificaciones de los convenios entrañó rápidamente un importante incremento del número de memorias anuales presentadas. Pronto se puso de manifiesto que, en el marco de sus sesiones plenarias, la Conferencia ya no podría examinar todas esas memorias, adoptar normas nuevas y ocuparse de otros asuntos importantes. Es por ello que la Conferencia adoptó, en 1926, una resolución ⁴ instituyendo cada año una Comisión de la Conferencia (luego denominada Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia) y solicitó al Consejo de Administración que estableciera una comisión técnica (que se denominaría en lo sucesivo Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se encargaría de la preparación de un informe para la Conferencia. Estas dos Comisiones se han convertido en los pilares del sistema de control de la OIT.

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Composición

La Comisión de Expertos está compuesta por 20 expertos. Se trata de destacados juristas a escala nacional e internacional, que son nombrados por el Consejo de Administración por recomendación de su Mesa sobre la base de las propuestas del Director General. Los nombramientos se realizan a título personal, efectuándose la elección entre personalidades de todas las regiones del mundo reputadas por su imparcialidad, competencia e independencia, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una experiencia directa en diferentes sistemas legales, económicos y sociales. Cada miembro es nombrado por un período de tres años renovable. En 2002, la Comisión decidió que los miembros ejercieran sus funciones durante un máximo de quince años, a saber, que después del primer mandato de tres años su mandato sólo se pudiera renovar cuatro veces. En su 79.^a reunión (noviembre-diciembre de 2008), la Comisión decidió que su Presidente sea elegido por un período de tres años renovable una sola vez (por otro período de tres años). La Comisión elige a un ponente al principio de cada reunión.

Trabajos de la Comisión

La Comisión de Expertos se reúne cada año en noviembre-diciembre. De conformidad con el mandato conferido por el Consejo de Administración ⁵, se invita a la Comisión a examinar lo siguiente:

- las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios de los que son parte;
- las informaciones y las memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones que comunican los Miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución, y
- las informaciones y las memorias sobre las medidas adoptadas por los Miembros con arreglo al artículo 35 de la Constitución ⁶.

La Comisión de Expertos tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica de cada Estado están de conformidad con los convenios ratificados y en qué medida los Estados cumplen con sus obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT en relación con las normas. Al realizar esa tarea, la Comisión se adhiere a sus principios de independencia, objetividad e imparcialidad ⁷. Los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la manera en que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones normativas adoptan la forma de observaciones o de solicitudes directas. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Se publican en el informe anual de la Comisión de Expertos que se presenta luego a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que se reúne en el mes de junio de cada año. Las solicitudes directas no se publican en el informe de la Comisión de Expertos, pero se comunican directamente al gobierno interesado y se pueden

³ Véanse los párrafos 88-96 del Informe General.

⁴ Véase el anexo VII, *Actas* de la 8.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1926, vol. I.

⁵ Mandato de la Comisión de Expertos, *actas* de la 103.^a reunión del Consejo de Administración (1947), anexo XII, párrafo 37.

⁶ El artículo 35 se refiere a la aplicación de los convenios en los territorios no metropolitanos.

⁷ Véase párrafo 32 del Informe General.

encontrar en Internet⁸. Además, la Comisión de Expertos envía acuses de recibo a los gobiernos que responden a las solicitudes de información adicional y no se pide ningún comentario adicional. Por último, la Comisión examina en el marco de un Estudio General el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones seleccionados por el Consejo de Administración⁹. Este Estudio General se basa en las memorias presentadas en virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución y concierne a todos los Estados Miembros, tanto a los que han ratificado los convenios como a los que no lo han hecho. El Estudio General de este año cubre la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202).

El informe de la Comisión de Expertos

Después de haber llevado a cabo sus trabajos, la Comisión elabora un informe anual. El informe se presenta en dos volúmenes.

El primer volumen (Informe III (Parte A))¹⁰ se divide en dos partes:

- **Parte I: el Informe General** da cuenta, por una parte, del desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y de las cuestiones específicas relacionadas que ésta ha tratado, y, por otra parte, de la medida en la que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales respecto de las normas internacionales del trabajo.
- **Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países** se refieren al respeto de las obligaciones vinculadas con el envío de memorias, a la aplicación de los convenios ratificados, agrupados por tema, y a la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes.

El segundo volumen contiene el **Estudio General** (Informe III (Parte B)).

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo

Composición

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una de las dos comisiones permanentes de la Conferencia. Es tripartita y comprende, por consiguiente, a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. En cada reunión, la Comisión elige su Mesa, compuesta de un presidente (miembro gubernamental), de dos vicepresidentes (miembro empleador y miembro trabajador) y de un ponente (miembro gubernamental).

Trabajos de la Comisión

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada año con ocasión de la reunión de la Conferencia que se celebra en junio. En virtud del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, la Comisión tiene por mandato examinar:

- las medidas adoptadas para dar efecto a los convenios ratificados (artículo 22 de la Constitución);
- las memorias comunicadas de conformidad con el artículo 19 de la Constitución (Estudios Generales);
- las medidas adoptadas con arreglo al artículo 35 de la Constitución (territorios no metropolitanos).

La Comisión debe presentar su informe a la sesión plenaria de la Conferencia.

Tras el examen técnico e independiente realizado por la Comisión de Expertos, el procedimiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia brinda a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la

⁸ Véase párrafo 66 del Informe General. Las observaciones y las solicitudes directas se encuentran en la base de datos NORMLEX a la que se puede acceder a través de la dirección siguiente: www.ilo.org/normes.

⁹ En virtud del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 se ha establecido un sistema de discusiones recurrentes en el marco de la Conferencia a fin de que la Organización pueda comprender mejor la situación y las necesidades diversas de sus Miembros en relación con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: empleo; protección social (seguridad social y protección de los trabajadores); diálogo social y tripartismo, y principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Consejo de Administración consideró que los informes recurrentes preparados por la Oficina para que sean debatidos por la Conferencia deberían aprovechar la información sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros que contienen los Estudios Generales así como los resultados de la discusión de dichos Estudios Generales por la Comisión de la Conferencia. Los temas de los Estudios Generales se han armonizado con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. La importancia de la coordinación entre los Estudios Generales y las discusiones recurrentes se reafirmó en el contexto de la adopción en noviembre de 2016 por el Consejo de Administración de un ciclo de cinco años de discusiones recurrentes. En el contexto de la discusión de medidas para fortalecer el sistema de control que tuvo lugar en noviembre de 2018, el Consejo de Administración invitó a la Comisión de Expertos a que formulara propuestas sobre su posible contribución a fin de optimizar la utilización de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución, en particular mediante el examen de medidas destinadas a mejorar la presentación de los Estudios Generales, a fin de adoptar un enfoque práctico y un formato sencillo que maximice su valor para los mandantes (documento GB.334/INS/5).

¹⁰ Esta designación refleja el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo que contiene, como punto inscrito de oficio, el punto III relativo a la información y las memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones.

oportunidad de examinar juntos la manera en la que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas. Los gobiernos tienen la posibilidad de completar las informaciones que figuran en las memorias examinadas por la Comisión de Expertos, de indicar las demás medidas adoptadas o propuestas desde la última reunión de esta Comisión, de señalar las dificultades que encuentran para cumplir con sus obligaciones, y de solicitar asistencia para superar esos obstáculos.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina el informe de la Comisión de Expertos, al igual que los documentos enviados por los gobiernos. Los trabajos de la Comisión de la Conferencia comienzan por una discusión general que se basa, fundamentalmente, en el Informe General de la Comisión de Expertos. Después, la Comisión de la Conferencia realiza un debate sobre el Estudio General. También examina los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentación de memorias o de otras obligaciones vinculadas con las normas. Por último, la Comisión de la Conferencia examina algunos casos individuales de aplicación de convenios ratificados que han sido objeto de observaciones de la Comisión de Expertos. Tras la discusión de cada caso individual, la Comisión de la Conferencia adopta las conclusiones sobre el caso de que se trate.

En su informe ¹¹ presentado a la Conferencia en sesión plenaria para su adopción, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia puede invitar al Estado Miembro cuyo caso individual se haya discutido a recibir una misión de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo a fin de ayudarle a dar cumplimiento a sus obligaciones, o proponer otro tipo de misión. La Comisión de la Conferencia puede asimismo invitar a un Gobierno a que transmita informaciones complementarias o a que tenga en cuenta algunas de sus preocupaciones cuando elabore su próxima memoria para la Comisión de Expertos. Por otra parte, en el informe la Comisión señala a la atención de la Conferencia algunos casos, tales como los casos de progreso y los casos de incumplimiento grave de los convenios ratificados.

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

En muchos informes, la Comisión de Expertos ha insistido en la importancia del respeto mutuo, el sentido de la responsabilidad y el espíritu de cooperación que siempre han caracterizado las relaciones entre la Comisión de Expertos y la Comisión de la Conferencia. A este respecto, es costumbre que el Presidente de la Comisión de Expertos asista como observador a la discusión general de la Comisión de la Conferencia, así como a la discusión sobre el Estudio General y que, además, tenga la posibilidad de dirigirse a esta Comisión en la apertura de la discusión general y de formular observaciones al final de la discusión del Estudio General. De igual modo, en el marco de las reuniones de la Comisión de Expertos se invita a los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de la Conferencia a reunirse con los expertos para abordar cuestiones de interés común en una sesión especialmente prevista a tal efecto.

¹¹ El informe se publica en las *Actas* de la Conferencia. Desde 2007, también se publica por separado. En lo que respecta al último informe, véase: Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, extractos de las *Actas*, Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, Ginebra, 2018.



Parte I. Informe General

I. Introducción

1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instituida por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo para examinar las informaciones y las memorias comunicadas por los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas en relación con los convenios y las recomendaciones, celebró su 89.^a reunión en Ginebra del 21 de noviembre al 8 de diciembre de 2018. La Comisión tiene el honor de presentar su informe al Consejo de Administración.

Composición de la Comisión

2. La composición de la Comisión es la siguiente: Sr. Shinichi AGO (Japón), Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia), Sra. Leila AZOURI (Líbano), Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil), Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos), Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica), Sra. Graciela Josefina DIXON CATON (Panamá), Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos), Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona), Sr. Alain LACABARATS (Francia), Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia), Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido), Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia), Sra. Rosemary OWENS (Australia), Sra. Mónica PINTO (Argentina), Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún), Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar), Sra. Kamala SANKARAN (India), Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y Tabago) y Sr. Bernd WAAS (Alemania). El anexo I del Informe General contiene una breve biografía de todos los miembros de la Comisión.

3. La Comisión tomó nota de que el mandato del Sr. Cheadle, que había sido miembro de la Comisión desde 2004, llegaría a su fin después de quince años al final de esta reunión. La Comisión expresó su sincero agradecimiento por la manera excepcional en que el Sr. Cheadle había desempeñado sus funciones durante su servicio en la Comisión.

4. En la presente reunión, la Comisión llevó a cabo sus trabajos con un total de 20 expertos, y dio la bienvenida a la Sra. Kamala Sankaran, designada por el Consejo de Administración en su 334.^a reunión (octubre-noviembre de 2018).

5. Por sexto año, el Sr. Koroma prosiguió su mandato como Presidente de la Comisión. De conformidad con la decisión de la Comisión de 2008 de que su Presidente sería elegido por un período de tres años, renovable una vez, la Comisión eligió a la Sra. Jueza Graciela Dixon Caton como su nueva Presidenta a partir de 2019. El Sr. Ago fue elegido como Ponente.

Métodos de trabajo

6. Desde su creación, la Comisión de Expertos ha estado examinado sus métodos de trabajo y, en ese proceso, siempre ha dado la debida consideración a las opiniones expresadas por los mandantes tripartitos. En los últimos años, en su reflexión sobre las posibles mejoras y el reforzamiento de sus métodos de trabajo, la Comisión de Expertos ha encaminado sus esfuerzos hacia la determinación de las formas de ajustar dichos métodos de trabajo a fin de cumplir con sus funciones de la manera más adecuada y efectiva posible y de esta forma ayudar a los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones en relación con las normas internacionales del trabajo y mejorar el funcionamiento del sistema de control.

7. A efectos de orientar la reflexión de la Comisión sobre la mejora continua de sus métodos de trabajo, en 2001, se estableció una subcomisión sobre los métodos de trabajo, con el mandato de examinar los métodos de trabajo de la Comisión y temas afines, con miras a formular recomendaciones apropiadas a la Comisión. Este año la subcomisión sobre los métodos de trabajo se reunió por 18.^a vez y este año bajo la dirección del Sr. Bentes Corrêa, que fue elegido Presidente. La subcomisión sobre los métodos de trabajo centró sus debates en cuatro cuestiones principales: i) las consecuencias de las discusiones y decisiones del Consejo de Administración sobre la iniciativa relativa a las normas en los métodos de trabajo de la Comisión; ii) el tratamiento de las observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores en virtud del artículo 23 de la Constitución de la OIT; iii) las mejoras en la racionalización

del tratamiento de las repeticiones y de los llamamientos urgentes, y iv) el refuerzo de los plazos para la recepción de memorias en virtud del artículo 22.

8. En lo que respecta al punto i) anterior, la subcomisión discutió las importantes decisiones tomadas por el Consejo de Administración en su 334.^a reunión y sus consecuencias en los métodos de trabajo de la Comisión. La subcomisión consideró en particular la solicitud de propuestas formulada por el Consejo de Administración con el fin de optimizar la utilización de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución, en especial las medidas destinadas a mejorar la presentación de los Estudios Generales, con miras a adoptar un enfoque práctico y un formato sencillo que maximice su valor para los mandantes. La Comisión informó a la Secretaría, la cual procurará presentar el Estudio General en un formato revisado el próximo año, posiblemente con un resumen ejecutivo en el que se destaquen los puntos principales. También discutió diversas modalidades para el examen de los Estudios Generales, aprovechando plenamente el sistema electrónico de gestión de documentos y otros avances de la tecnología de la información (TI) en curso tras las decisiones anteriores del Consejo de Administración, con miras a fortalecer el mecanismo de control. La Comisión también tuvo la oportunidad de examinar el proyecto experimental para el establecimiento de criterios de referencia electrónicos que facilitarían la presentación de memorias por los gobiernos y el intercambio de información sobre las prácticas conformes. Los expertos expresaron un interés particular en este proyecto y continuarán siguiendo de cerca su desarrollo en colaboración con la Oficina.

9. En lo referente al punto ii) anterior, en su última reunión, la Comisión discutió las consecuencias que un nuevo ciclo de presentación de memorias de seis años para los convenios técnicos podría tener en los criterios para el examen de las observaciones presentadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores fuera del ciclo regular de presentación de memorias. La Comisión indicó su buena disposición a considerar la manera en que podría ampliar los criterios sumamente estrictos para romper su círculo de examen al recibir los comentarios de las organizaciones de trabajadores o de empleadores sobre un país determinado en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT, y decidió que los criterios utilizados para incluir casos en notas de pie de página podrían servir de inspiración a este respecto. En su 334.^a reunión, el Consejo de Administración decidió aprobar una agrupación temática de los convenios con fines de presentación de memorias en un ciclo de seis años para los convenios técnicos, en el entendimiento de que la Comisión de Expertos siga examinando, aclarando y, cuando proceda, ampliando los criterios para romper el ciclo de presentación de memorias con respecto a los convenios técnicos. Sobre la base de un profundo debate, la Comisión tomó decisiones en relación con esto. El resultado de sus discusiones se refleja en los párrafos 94 a 104 que figuran más adelante.

10. Con respecto al punto iii) anterior, la Comisión decidió reforzar la práctica de los llamamientos urgentes ¹ que había iniciado el año anterior basándose en la experiencia con la ejecución de esta decisión. Ya en esta reunión, la Comisión ha realizado llamamientos urgentes a ocho países que no han enviado una primera memoria durante al menos tres años (véase el párrafo 59 más adelante). La Comisión decidió que, en su próxima reunión, generalizará esta práctica realizando llamamientos urgentes en todos los casos en los que no se hayan recibido memorias, de conformidad con el artículo 22, durante tres años consecutivos. Así pues, las repeticiones de comentarios anteriores se limitarán a un máximo de tres años, tras los cuales la Comisión examinará a fondo la aplicación del Convenio sobre la base de la información públicamente disponible, aún si el gobierno no ha enviado una memoria, asegurando así un examen de la aplicación de los convenios ratificados al menos una vez durante el ciclo regular de presentación de memorias. El texto de la repetición seguirá una cierta «escalada» en relación con el número de veces que el Gobierno no haya presentado una memoria:

- primer año: una repetición simple: la Comisión tomará nota de no se ha recibido la memoria;
- segundo año: la Comisión tomará nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria;
- tercer año: la Comisión tomará nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria y realizará un llamamiento urgente, informando al gobierno de que si no se recibe la memoria a tiempo para su examen por la Comisión en su próxima reunión, esta última procederá a examinar la aplicación del Convenio en el país de que se trate sobre la base de la información de que disponga, y
- cuarto año: la Comisión realizará un examen aun cuando el gobierno no haya presentado su memoria.

11. En lo tocante al punto iv) mencionado anteriormente, la Comisión decidió establecer una distinción más clara entre las memorias que deben presentarse en virtud del artículo 22 después del plazo del 1.º de septiembre cuyo examen podría aplazarse debido al retraso en su presentación, y las memorias recibidas en este plazo cuyo examen podría aplazarse por otros motivos (por ejemplo, la necesidad de traducción en los idiomas de trabajo de la OIT). La Comisión tomó nota con agrado de la información proporcionada por la Oficina sobre el impacto potencial a medio plazo de las decisiones del Consejo de Administración en el marco de la iniciativa relativa a las normas, desde la perspectiva del mantenimiento de la sostenibilidad y efectividad del mecanismo de control a la luz del número cada vez mayor de ratificaciones y de obligaciones consiguientes de presentación de memorias.

¹ Véase el párrafo 59 del Informe General.

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

12. A lo largo de los años, ha prevalecido continuamente un espíritu de respeto mutuo, cooperación y responsabilidad en las relaciones de la Comisión con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. En este contexto, la Comisión acogió con satisfacción una vez más la participación de su Presidente en la discusión general de la Comisión de Aplicación de Normas en la 107.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2018). Tomó nota de la decisión de la Comisión de la Conferencia de pedir al Director General que renueve esta invitación al Presidente de la Comisión de Expertos para la 108.^a reunión (junio de 2019) de la Conferencia. La Comisión de Expertos aceptó esta invitación.

13. El Presidente de la Comisión de Expertos invitó a la Vicepresidenta empleadora (Sra. Sonia Regenbogen) y al Vicepresidente trabajador (Sr. Marc Leemans) a participar en una sesión especial de esta reunión de la Comisión. Ambos aceptaron esta invitación y hubo un intercambio de impresiones participativo y minucioso sobre cuestiones de interés mutuo.

14. Ambos Vicepresidentes apreciaron la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias entre los órganos de control en un entorno propicio.

15. El Vicepresidente trabajador manifestó que la sesión especial brindaba una oportunidad de intercambiar experiencias y de aprender unos de otros. Observó que ambas Comisiones formaban parte de un sistema de control reconocido, que compartían el objetivo de contribuir efectivamente a la aplicación de las normas internacionales del trabajo, aunque tenían maneras distintas de conseguirlo. Su colaboración era de vital importancia para el cumplimiento del mandato de la OIT y de la Declaración de Filadelfia a la luz del centenario de la OIT. La Comisión de la Conferencia respetaba enormemente la manera neutra, independiente y basada en principios en la que la Comisión de Expertos había estado cumpliendo su mandato. El Vicepresidente trabajador felicitó a la Comisión por la labor sumamente valiosa que realizaba y subrayó la contribución de las organizaciones de trabajadores y de empleadores al buen funcionamiento del mecanismo de control a través de las numerosas observaciones que habían realizado una vez más este año en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. El informe presentado a la Comisión de la Conferencia en 2018 fue una vez más de gran calidad y permitió unas discusiones enriquecedoras y constructivas. El Vicepresidente trabajador apreciaba que la Comisión de Expertos funcionara como el eje de todo el sistema de control, al examinar regularmente el seguimiento de las discusiones de la Comisión de la Conferencia, las recomendaciones de los comités tripartitos *ad hoc* establecidos para examinar las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT y las recomendaciones de la comisión de encuesta establecida de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, a fin de garantizar la coherencia general en el sistema de control.

16. El Vicepresidente trabajador indicó que la nueva práctica de llamamientos urgentes introducida por la Comisión de Expertos era un enfoque innovador y convincente para encarar el problema de larga data de los casos de incumplimiento grave. Expresó su agradecimiento a la Comisión por el equilibrio que mantenía en la selección de casos de doble nota a pie de página sobre los convenios tanto técnicos como fundamentales. También hizo referencia a la necesidad de mantener un equilibrio regional en la selección de las dobles notas a pie de página y propuso que las dos Comisiones se alinearan lo máximo posible a este respecto teniendo en cuenta que la gravedad de cada caso debería seguir siendo el principal criterio de las dobles notas a pie de página. A la luz de la enorme carga de trabajo de la Secretaría, también era importante concebir maneras de asegurar que no se excluyeran los casos graves y las observaciones de los interlocutores sociales del examen el año en que debían presentarse. Pidió que se prestara atención a los convenios técnicos, tales como los relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo. Esto era más importante todavía a la luz de la decisión adoptada en el marco de la iniciativa relativa a las normas de prolongar a seis años el ciclo de presentación de memorias para los convenios técnicos. En relación con esto, acogió con agrado la indicación de la Comisión en su informe del año pasado de que estaba considerando ampliar los criterios para romper el ciclo de presentación de memorias al recibir las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT, y la información compartida por la Comisión sobre las decisiones adoptadas en relación con esta cuestión en su reunión actual.

17. Al tiempo que era necesario un informe accesible y transparente, el Vicepresidente trabajador subrayó que redundaba en interés de todos los mandantes contar con un informe completo. Para los trabajadores era importante formular comentarios como observaciones cuando fuera posible, en lugar de como solicitudes directas, para que pudieran mantener una discusión en la Comisión de la Conferencia. Unos criterios claros para distinguir las observaciones de las solicitudes directas eran importantes por motivos de coherencia y seguridad jurídica. Más en general, se consideraba que la reducción del informe en los últimos años estaba teniendo un impacto inesperado en la participación tripartita tanto a nivel nacional como de la OIT. El formato anterior del informe, al ser más completo y complejo, permitía que la Comisión de la Conferencia examinara mejor los casos, ya que se precisaba tanto información detallada como claridad para celebrar una discusión fructífera y para orientar a los mandantes sobre las medidas conducentes a la aplicación efectiva de los convenios ratificados.

18. El Vicepresidente trabajador, respondiendo a ciertos comentarios realizados por la Vicepresidenta empleadora, añadió que, tal como los expertos habían observado sin ninguna duda, el derecho de huelga seguía siendo objeto de divergencias entre los miembros trabajadores y los miembros empleadores de la Comisión de la Conferencia. A pesar de esto, los mandantes tripartitos habían reconocido el mandato de la Comisión de Expertos y, en este marco, los expertos continuaban examinando la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) indicando que, durante los últimos setenta años el derecho de huelga había sido parte inherente del derecho de libertad sindical y del Convenio. Los órganos judiciales y otras instituciones seguían apoyándose en las opiniones de los expertos y citándolas al tomar decisiones importantes como la adoptada recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que confirmó que el derecho de huelga estaba contemplado en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como un aspecto importante de la libertad sindical ². Al tomar esta decisión, el Tribunal se había apoyado explícitamente en las recomendaciones de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical. A fin de mantener su autoridad, la Comisión de Expertos debe seguir siendo imparcial y coherente en el cumplimiento de su mandato. Las preocupaciones relativas a la interpretación de los convenios de conformidad con la Constitución de la OIT deben abordarse en las disposiciones contenidas en su artículo 37. Concluyó deseando a la Comisión unas deliberaciones fructíferas.

19. La Vicepresidenta empleadora subrayó que el diálogo constante y directo entre las dos Comisiones, junto con la Oficina, era de vital importancia, no sólo para orientar a los mandantes hacia una mejor aplicación de los instrumentos ratificados, sino también para que los expertos comprendieran las realidades y necesidades de los mandantes como usuarios del sistema. Este año, la labor de los expertos tendría particular visibilidad y sería objeto de gran interés a la luz del centenario. Esto brindaba una oportunidad para estudiar la manera de seguir mejorando la transparencia, la participación y la buena gobernanza entre los órganos de control. La Vicepresidenta empleadora informó a los expertos sobre los resultados de la Comisión de la Conferencia, que habían demostrado una vez más su capacidad para conducir a un diálogo tripartito orientado a la obtención de resultados concretos, y que permitían que se expresaran opiniones divergentes, en los casos en que éstas existieran, en un espíritu de respeto y de entendimiento mutuo. El lugar reservado a los casos de progreso en la discusión ante la Comisión de la Conferencia era de vital importancia para los empleadores, y el año del centenario era el momento oportuno para asegurar que la discusión celebrada en la Comisión de la Conferencia servía para subrayar casos importantes de progreso. La Vicepresidenta empleadora invitó a los expertos a que destacaran casos que mostrasen prácticas ejemplares con miras a facilitar los trabajos de la Comisión de la Conferencia.

20. La Vicepresidenta empleadora también se refirió a la posición de su Grupo con respecto al derecho de huelga en un espíritu de diálogo constructivo, poniendo de relieve la opinión de los usuarios del informe de la Comisión de Expertos. Observó que aproximadamente dos tercios de las observaciones sobre el Convenio núm. 87, así como la mayoría de las 52 solicitudes directas relativas a este Convenio, hacían referencia de uno u otro modo a ese derecho. Según estas cifras, casi ningún país actuaba plenamente de conformidad con las interpretaciones de los expertos del derecho de huelga, lo que reflejaba una discrepancia considerable entre las reglas válidas para todos los expertos sobre el derecho de huelga y la realidad mucho más diversa de los sistemas de relaciones laborales. Si bien reconocía en principio el derecho a emprender acciones colectivas, consideraba que el establecimiento de normas detalladas sobre esta cuestión tan delicada debía tener lugar a nivel nacional. Los mandantes tripartitos habían expresado esta opinión en la Conferencia Internacional del Trabajo en el momento de la adopción del Convenio núm. 87, y dicha opinión se confirmaba en esencia en la declaración conjunta de 2015 del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, así como en la declaración del Grupo Gubernamental.

21. Otro tema que destacó la Vicepresidenta empleadora fue la diferenciación entre las observaciones y las solicitudes directas. Los criterios establecidos por la Comisión de Expertos no estaban totalmente claros, y parecía haber un margen considerable a la hora de clasificar los comentarios en una u otra categoría. Dado que las solicitudes directas no estaban incluidas en el informe de la Comisión de Expertos, las cuestiones sustantivas a las que hacían referencia se suprimían del control tripartito. Indicó que los expertos tal vez consideraran oportuno perfeccionar los criterios e inclinarse hacia la clasificación de un comentario como una observación, salvo si entraba claramente en la categoría de las solicitudes directas.

22. La Vicepresidenta empleadora tomó nota con agrado de que los expertos realizaban sistemáticamente un seguimiento de las conclusiones alcanzadas por la Comisión de la Conferencia sobre los casos individuales, y expresó la esperanza de que los expertos siguieran proporcionando esta consideración que creaba importantes sinergias y coherencia entre los dos pilares del sistema de control. De cara a 2019, la Vicepresidenta empleadora notificó a la Comisión de Expertos que el grupo de trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión de la Conferencia se había reunido en dos ocasiones este año, en marzo y en noviembre de 2018, adoptando una serie de decisiones concretas para hacer la labor de la Comisión de la Conferencia más transparente, eficiente e impactante. Por ejemplo, los informes de la Comisión de la Conferencia a partir de 2019 contendrían actas literales de todas las discusiones, lo que aumentaría más aún la transparencia al tiempo que ahorraría a la Oficina costos y tiempo en la preparación de estos informes. Dado el énfasis que los miembros gubernamentales de la Comisión de la Conferencia ponen en asegurar un equilibrio en la lista de casos considerados desde una perspectiva geográfica y temática, convendría que los expertos proporcionaran una breve

² Aplicación núm. 44873/09; ECHR 393 (2018).

explicación de los motivos por los que se incluyen casos de doble nota a pie de página. Esto permitiría que los dos Vicepresidentes presentaran mejor las razones para seleccionar estos casos cuando proporcionaran información detallada a los delegados gubernamentales. La oradora apoyaba plenamente los comentarios del Vicepresidente trabajador sobre la necesidad de que se prestara más atención a los convenios técnicos, tanto cuando se incluyeran dobles notas a pie de página como en términos más generales. Los dos Vicepresidentes buscaban observaciones sobre los convenios técnicos que constituyeran una base sólida para una discusión constructiva.

23. Por último, la Vicepresidenta empleadora pidió que se aclararan los progresos de las discusiones relativas a los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos, en particular con respecto al aumento continuo de la carga de trabajo, e invitó, en la medida de lo posible desde el punto de vista operacional, a fomentar el diálogo entre ambos órganos. El año del centenario no sólo brindaba una oportunidad para reflexionar sobre los éxitos pasados, sino también para seguir reflexionando sobre las maneras de fortalecer el sistema de control con coraje y ambición, apoyándose en un mejor conocimiento de las necesidades y prioridades de los mandantes y en una presentación más accesible, clara y concisa de las conclusiones y recomendaciones. La Oficina hace una importante contribución a una mayor efectividad, así como a un mayor apoyo a los gobiernos que no cumplían sus obligaciones de presentación de memorias. Concluyó expresando su agradecimiento por la notoria e importante labor de la Comisión de Expertos, y señaló que esperaba con interés proseguir el diálogo con ellos.

24. La Comisión recuerda que el mecanismo de control de la OIT del que ambas Comisiones formaban parte era el más antiguo del sistema de las Naciones Unidas, y estaba firmemente anclado en la libertad sindical como una condición fundamental para su funcionamiento. En vísperas del centenario, las dos Comisiones deberían seguir respetando la función y la competencia respectivas, y aunar esfuerzos al mismo tiempo. El reconocimiento de la naturaleza independiente de la Comisión de Expertos como su razón de ser contribuía al diálogo constructivo que los dos órganos habían estado entablando. Toda evolución del sistema de control debía basarse en los puntos fuertes del sistema. Las normas internacionales del trabajo no sólo constituían la principal fuente de la legislación laboral internacional, sino también las bases de la legislación laboral nacional en muchos países de todo el mundo. Las normas internacionales del trabajo habían logrado ejercer esta influencia y mantener su pertinencia con el transcurso de los años gracias a los comentarios del órgano de control que vinculaban los convenios ratificados con las circunstancias nacionales en continua evolución, y a través de la integración de estas recomendaciones y comentarios en numerosas decisiones adoptadas por los órganos judiciales nacionales. Los comentarios de la Comisión de Expertos no habrían producido los mismos resultados si no hubieran sido reforzados por el impacto político de la discusión en la Comisión de la Conferencia en un contexto tripartito. Una importante condición para mantener el impacto de los comentarios de los expertos era la coherencia entre los dos órganos, basada en sus mandatos complementarios y en la cooperación que habían construido con el tiempo. La reunión con los dos Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia se había convertido con el tiempo en un momento privilegiado de diálogo y cooperación con el apoyo inestimable de la Secretaría. Esta última no restaba de ninguna manera autonomía a ninguno de los dos órganos en lo referente a sus métodos de trabajo, ni disminuía el compromiso personal que los miembros de cada órgano de control compartían con respecto a las normas internacionales del trabajo. La contribución de la Oficina era esencial para mantener una colaboración permanente entre las dos Comisiones, así como con los otros órganos de control de la OIT. Este triunvirato entre las dos Comisiones y la Oficina debería desarrollarse más aún en el marco de los mandatos respectivos de cada órgano.

25. La iniciativa relativa a las normas, orientada a una discusión tripartita constructiva y saludable sobre el futuro del sistema de control, había alentado a ambos órganos de control a seguir mejorando la manera en que cumplía con sus responsabilidades, a fin de lograr un mayor impacto. A lo largo de los años, la Comisión de Expertos había pretendido proporcionar una evaluación rigurosa, coherente e imparcial del cumplimiento de los convenios ratificados, introduciendo constantemente mejoras graduales para producir unos comentarios más prácticos, precisos y concisos. Esto no sólo era necesario para ofrecer orientación clara a los gobiernos, sino también para facilitar las medidas de seguimiento y la asistencia técnica de la Oficina. La necesidad de coherencia con el tiempo significaba que el texto de la Comisión debería mejorarse y simplificarse cuidadosamente en un esfuerzo delicado y continuo. La subcomisión sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos estaba establecida desde 2001 y este año había celebrado su 18.^a reunión. La subcomisión había introducido muchas mejoras con el transcurso de los años y este año una vez más había tomado decisiones importantes que se reproducían en los párrafos 8 a 11 de este Informe General, prestando particular atención a las solicitudes formuladas por el Consejo de Administración en el contexto de la iniciativa relativa a las normas.

26. Consciente de las sinergias entre ambos órganos, la Comisión de Expertos había venido haciendo referencia a las conclusiones alcanzadas por la Comisión de la Conferencia en sus comentarios. También había realizado llamamientos urgentes y proyectaría extender esta práctica incluso más para abordar, en sinergia con la Comisión de la Conferencia, la preocupante falta de cooperación en la presentación de memorias. La Comisión de Expertos ponía particular énfasis en las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, examinando cuidadosamente su seguimiento en sus comentarios, y le complacía observar la dinámica discusión que había tenido lugar durante la última reunión de la Conferencia basada en los comentarios refundidos que había realizado sobre Haití, República de Moldova y Ucrania.

27. La Comisión concedió una gran importancia a la claridad de los criterios para establecer una distinción entre las observaciones y las solicitudes directas, a fin de asegurar la visibilidad, la transparencia y la coherencia de la labor de la Comisión y la seguridad jurídica con el tiempo a la luz de la composición y las prácticas cambiantes de la Comisión. Esta

distinción era el resultado de un largo proceso iniciado en 1957. Los criterios implicaban una consideración minuciosa, tanto de los plazos como del contenido. Aun cuando los criterios podrían parecer claros a primera vista, su aplicación algunas veces requería un delicado equilibrio. La Comisión necesitaba cierto margen de discreción razonada en este ámbito, a fin de mantener un diálogo con los gobiernos y de facilitar los progresos efectivos en la aplicación de los convenios ratificados. No obstante, la Comisión estaba dispuesta a considerar debidamente las propuestas formuladas por los dos Vicepresidentes en futuras discusiones relativas a esta cuestión.

28. Por último, la Comisión apreciaba la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el Convenio núm. 87 y el derecho de huelga, y también sobre el uso que se hacía en los comentarios de la Comisión de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el Comité de Libertad Sindical. Esta última cuestión había sido planteada por la Vicepresidenta empleadora en la última sesión de la Comisión de la Conferencia, en mayo-junio de 2018. La posición de la Comisión de Expertos respecto del derecho de huelga se había indicado claramente en numerosos intercambios con los Vicepresidentes desde 2013. Los expertos apreciaban que estas partes tuvieran diferentes opiniones sobre la cuestión. Al mismo tiempo, las dos Comisiones estaban de acuerdo en los temas recurrentes planteados en los comentarios de la Comisión en relación con la libertad sindical. Éstos hacían referencia, en primer lugar, al derecho a estar libre de violencia y de amenazas a las libertades civiles; en segundo lugar, a la exclusión de ciertas categorías de trabajadores del derecho a sindicarse en virtud del Convenio y, en tercer lugar, a la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores protegidas explícitamente por el Convenio en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6. Un aspecto de esta autonomía, a saber, el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y formular sus programas, conllevaba emprender acciones colectivas en circunstancias adecuadas. El derecho de huelga no era la principal cuestión en la que se centraba el examen de la Comisión, aunque era una cuestión importante. Los comentarios de la Comisión, que se basaban en la obligación constitucional de presentar memorias sobre la manera en que se aplicaban en la legislación y en la práctica los convenios ratificados, tenían por objeto orientar las medidas que adoptaran las autoridades nacionales respecto de este derecho. La orientación de la Comisión también se basaba en las memorias de los gobiernos y en los comentarios de los interlocutores sociales que reflejaban la aplicación del derecho en variadas circunstancias nacionales. Se realizó un esfuerzo para entender la diversidad y la complejidad de la situación de los países cuando los expertos examinaban la aplicación de todos los convenios, y no sólo del Convenio núm. 87, e indudablemente era una cuestión que los expertos tomaban muy en serio al examinar las cuestiones en torno al derecho de huelga.

29. En lo que respecta a los comentarios de la Vicepresidenta empleadora sobre las referencias a los casos del Comité de Libertad Sindical, la Comisión reconocía plenamente los diferentes mandatos y métodos de trabajo de las dos Comisiones y no se remitían habitualmente a las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Cuando la Comisión lo hacía, era fundamentalmente por dos motivos: ya fuera porque el Comité de Libertad Sindical había remitido los aspectos legislativos de un caso a la Comisión de Expertos, o por otros motivos intersectoriales, por ejemplo, cuando el Comité de Libertad Sindical había abordado cuestiones similares en el pasado reciente como indicaban algunas veces el gobierno o los propios interlocutores sociales. La evaluación por el Comité de Libertad Sindical de la aplicación práctica de los convenios relativos a la libertad sindical algunas veces servía de orientación a la Comisión de Expertos en cuanto a la manera en que se aplicaba el Convenio en la práctica, en particular dado que el examen del Comité de Libertad Sindical se apoyaba en quejas. El enfoque de la Comisión reforzaba la integración de los mecanismos de control, a través de un conjunto adaptado de circunstancias como parte de la independencia y la discreción que se esperaba ejerciera la Comisión.

30. En lo que concierne a la diversidad en la inclusión de dobles notas a pie de página, el criterio más importante para los expertos era la urgencia de la cuestión, si bien eran conscientes de la necesidad de mantener todos los tipos de equilibrio. Los expertos eran conscientes de los desafíos a los que se enfrentaban los dos Vicepresidentes a la hora de mantener un equilibrio entre los casos discutidos en la Comisión de la Conferencia en particular en relación con la diversidad regional. Los expertos tomaban muy en serio las preocupaciones expresadas por los dos Vicepresidentes y las tendrían en cuenta al seguir avanzando.

31. En el párrafo 73 del presente Informe General se proporciona información sobre el seguimiento dado por la Comisión a las conclusiones de la 107.ª reunión (2018) de la Comisión de la Conferencia³.

Mandato

32. **La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la OIT. Está compuesta por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de los convenios. Sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las autoridades**

³ Además, a partir del 1.º de abril de 2019 podrá encontrarse información actualizada sobre el seguimiento dado por la Secretaría a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en el sitio web oficial de la Comisión de la Conferencia.

nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, experiencia y competencia técnica. La función técnica y la autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su labor de supervisión durante más de noventa años, y debido a su composición, independencia y métodos de trabajo cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales.

Mirando hacia el futuro con motivo del centenario de la OIT

33. Cien años de existencia en cualquier institución invitan tanto a una celebración como a una reflexión. Cuando la OIT está a punto de embarcarse en su segundo siglo de vida, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones desea plantear algunas reflexiones sobre su propia trayectoria y el papel que probablemente desempeñará en el futuro. Si bien el contexto hoy, año 2019, es sumamente distinto del que fue en 1919, no está exento de dificultades: la pertinaz separación entre las políticas económicas y las sociales; la erosión del multilateralismo; la persistencia de la pobreza y el aumento de las desigualdades dentro y entre los Estados Miembros; un panorama dispar en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, y la fragilidad en la que nos encontramos a causa del cambio climático y los conflictos sociales. Además, la velocidad a la que se suceden las transformaciones en el mundo del trabajo que conocemos por la acción combinada de la tecnología, los cambios demográficos y climáticos, la globalización y las migraciones presenta desafíos adicionales para las instituciones de ámbito nacional y mundial que articulan el contrato social de nuestro tiempo y, por lo tanto, para la paz y la seguridad que este contrato garantiza.

34. Antes de formular una reflexión, la Comisión tiene que ser consciente del mandato recibido inicialmente por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1926: examinar las memorias recibidas de los gobiernos en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT e informar de sus conclusiones a la Conferencia.

35. En 1926, la Organización funcionaba con la idea de armonizar la legislación del trabajo de 56 países con niveles de desarrollo relativamente comparables. Inicialmente, sus competencias consistían en controlar la aplicación de unos 20 convenios. En 1969, ese cometido esencial se había expandido a 121 Miembros y a más de 250 convenios. Entretanto, la descolonización, especialmente, no sólo había propiciado el aumento del número de Estados Miembros de la Organización, sino que empezaba a modificar la formulación de las normas internacionales del trabajo y el control sobre éstas. La introducción de cláusulas de flexibilidad en los convenios y, desde un punto de vista más general, de normas menos encaminadas a un cumplimiento predominantemente legislativo y más a servir de pautas orientativas rigurosas de las políticas y las instituciones que se precisaban para hacer realidad la justicia social en los Estados que acababan de independizarse, impulsó a la Comisión a invitar cada vez más a los Estados Miembros a que confiaran en las actividades de cooperación técnica que la Organización iba ampliando progresivamente.

36. La Comisión ha tenido que diversificar sus funciones y sus métodos de trabajo para ir adaptándose a cada época. En 1946, la Constitución de la OIT fue enmendada para incluir la obligación de los Estados Miembros de presentar, a petición del Consejo de Administración, memorias sobre los convenios no ratificados. Los Estudios Generales a los que estas memorias dan lugar permiten a la Comisión examinar las dificultades que se presentan a los gobiernos en la aplicación de los convenios, clarificar el ámbito de aplicación de estas normas y, en ocasiones, indicar las formas de superar los obstáculos para su aplicación. Hoy, los Estudios Generales, además de proporcionar orientación a la legislación nacional, cumplen un papel crucial para servir de base a las discusiones recurrentes de la Conferencia que examinan periódicamente la efectividad de los distintos medios de acción de la Organización, en particular, la acción normativa, para hacer frente a la diversas realidades y necesidades de los Estados Miembros con respecto a cada uno de los objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente. Cabe esperar que estos Estudios Generales aporten, cada vez en mayor medida, datos básicos para la labor del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas, que tiene el mandato de garantizar que la OIT cuente con un cuerpo claro, sólido y actualizado de normas internacionales del trabajo que encare las transformaciones del mundo del trabajo, con el propósito de proteger a los trabajadores y atendiendo a las necesidades de las empresas sostenibles.

37. En 1957, la Comisión empezó a formular algunos comentarios que dirigía directamente a los gobiernos, en vez de incluirlos en su informe. Esta distinción entre observaciones y solicitudes directas permitió a la Comisión simplificar el procedimiento en caso de solicitudes de comentarios con información complementaria en cuestiones de menor importancia y reducir la extensión de su informe, y, en el proceso, hizo posible clarificar paulatinamente las cuestiones de orden secundario con los gobiernos que se encontraban en las etapas iniciales de su desarrollo institucional. De nuevo, en 1968, la Comisión introdujo una medida discreta de carácter diplomático, las misiones de «contactos directos», cuya finalidad consistía en fomentar el diálogo con los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores con el fin de superar las dificultades con las que éstos tropezaban en la aplicación de los convenios a través de una valoración detallada de las cuestiones planteadas.

38. En 1926, la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo la previsión de que el original método de que los Estados Miembros se supervisasen unos a otros en el cumplimiento de sus propias obligaciones dimanantes de los instrumentos sobre la base del diálogo entre sí y con los interlocutores sociales fuese complementado con un elemento de

control más independiente y objetivo, facilitando así un mecanismo de supervisión más coherente y un fortalecimiento del Estado de derecho.

39. La interrelación entre el control independiente y el control tripartito del cumplimiento no ha estado siempre exenta de polémica. La Comisión ha tenido que recordar que, sobre todo durante las primeras décadas de posguerra, su labor consistía en cumplir su rol de intermediario imparcial para proporcionar una interpretación coherente de la legislación internacional a la luz de las exigencias de la justicia social y dar con el equilibrio preciso entre las diversas perspectivas inherentes al tripartismo. A lo largo de ese proceso, la Comisión ha recalcado en varias ocasiones que su función de control periódico consiste en determinar si un país cumple con los requisitos que establece un ratificado convenio, sean cuales sean las condiciones económicas y sociales en que se encuentre. Estos requisitos son constantes y uniformes para todos los países y únicamente están sujetos a las excepciones que prevea el convenio en cuestión. La Comisión, a partir del conocimiento profundo de los más diversos ordenamientos jurídicos merced a su composición universal, ha podido encontrar un equilibrio entre su adhesión a los principios fundamentales de objetividad, imparcialidad, independencia y especialización en la aplicación tanto de las normas internacionales como de la legislación laboral, y una comprensión más profunda del tiempo y el espacio que los países necesitan para dar satisfacción a sus propias necesidades de desarrollo con una amplia participación de las partes interesadas.

40. La Comisión considera esencial el planteamiento de la Organización con respecto al multilateralismo normativo o basado en normas, especialmente la cobertura global que brindan sus instrumentos relativos con el trabajo. Además, la progresión de la organización dio testimonio del hecho de que, de los miles de casos de progreso observados por la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas en los últimos 91 años, el Consejo de Administración estimó que era preciso constituir una comisión de encuesta, en 13 ocasiones en los últimos cien años, y sólo en una ocasión ha dado un paso más, tomando medidas para garantizar el cumplimiento de los convenios ratificados, en aplicación del artículo 33 de la Constitución. Al centrar prioritariamente su labor en desvelar los casos de incumplimiento, la Comisión se congratula de haber contribuido a un sistema de control que promueve el diálogo y el cumplimiento de la necesidad sustancial de una aplicación más efectiva de los derechos laborales en todo el mundo.

41. La Comisión estima que las características fundamentales que aseguran su independencia han cumplido y seguirán cumpliendo bien su propósito. La única manera de llevar a cabo su misión es colaborando con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, el órgano de control al que informa, a través del Consejo de Administración, sobre sus conclusiones objetivas. Hay dos prácticas que han mejorado el entendimiento mutuo entre, por una parte, la Comisión de Expertos como órgano independiente y, por otra, la Comisión de la Conferencia, como órgano tripartito. Los Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia son invitados a una reunión especial que la Comisión celebra todos los años, lo que les brinda una plataforma para expresar sus opiniones, propuestas y preocupaciones. Por otra parte, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Administración, el Director General invita al Presidente de la Comisión de Expertos a asistir a las reuniones de la Comisión de la Conferencia. De este modo, la Comisión de Expertos conoce cómo se aborda su informe en el seno de la Comisión de la Conferencia tripartita, los casos que ésta selecciona para su examen a partir del informe de la Comisión de Expertos, y su Estudio General. Esta práctica ha sido útil y podría seguir reforzando las funciones de ambos órganos en el futuro. Si bien es cierto que esta práctica ha propiciado a veces que se entiendan de forma distinta los instrumentos jurídicos examinados, esto se debe únicamente a que la Comisión sustenta su labor sobre los principios básicos del derecho público internacional y a las características singulares de la Organización que crea esta normativa para gobernar el mundo del trabajo. En virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, acudir a los trabajos preparatorios de un instrumento da lugar a que se confirme la interpretación de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin; o a que se determine el sentido cuando la interpretación: *a)* deje ambiguo u oscuro el sentido, o *b)* conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. En la OIT suele hacerse referencia a la vez al texto de la norma internacional del trabajo y a sus trabajos preparatorios. Esta práctica es respetuosa con la información que proporcionan los mandantes tripartitos durante la elaboración de un instrumento y con la singular estructura tripartita de la OIT, que da voz por igual a los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, a fin de garantizar que las opiniones de los interlocutores sociales se vean rigurosamente reflejadas en las normas internacionales del trabajo y en la formulación de sus políticas y programas.

42. La primera década de este nuevo siglo de vida de la Organización estará marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que tiene la ambición inequívoca de lograr que la pobreza, en todas sus formas, se transforme en prosperidad para todos los seres humanos; proteger el planeta de la degradación; y fomentar sociedades pacíficas, justas, inclusivas y sostenidas por un impulso de renovada solidaridad mundial. El Programa de Trabajo Decente y las normas internacionales del trabajo que delimitan y fijan sus criterios de aplicación cubren los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 pone de manifiesto que «el trabajo decente es a la vez un medio y un fin en la consecución del desarrollo sostenible»⁴. La Agenda 2030 «establece el compromiso de fomentar un sector empresarial dinámico, de proteger los derechos laborales y de cumplir los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con los acuerdos pertinentes, como las normas de la

⁴ Memoria del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo, 105.^a reunión, 2016 (Informe I (B)), *La iniciativa para poner fin a la pobreza: La OIT y la Agenda 2030*, párrafo 10.

OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos definidos por las Naciones Unidas»⁵. Tiene «un fuerte carácter normativo y traza una vía para el desarrollo sostenible verdaderamente centrada en el ejercicio de los derechos humanos»⁶. Las 169 metas y los 232 indicadores de trabajo decente de la Agenda 2030 constituyen las señales de referencia en ese camino.

43. La OIT es la organización responsable de no menos de 17 de estos indicadores estadísticos que registran los progresos logrados de aquí a 2030. El indicador 8.8.2 mide «el nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad sindical y negociación colectiva) sobre la base de fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación nacional, desglosado por sexo y condición de migrante»⁷. La Comisión toma nota con interés de que la metodología recientemente adoptada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se basará de manera muy destacada en la labor de control que lleva a cabo la propia Comisión⁸.

44. Otros objetivos de la Agenda 2030 tienen también la posibilidad de beneficiarse de la labor de control de la Comisión y hacer más visibles sus funciones en los próximos cien años de la OIT. El ODS 8.7 se propone eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil y se ajusta por tanto a uno de los convenios fundamentales más ampliamente ratificados — y esperemos que pronto también universalmente. Lo mismo cabe decir para los instrumentos relativos a la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, que constituye la meta del ODS 8.5. El ODS 10 prevé «combatir la discriminación y aplicar medidas reforzadas a favor de la igualdad, en especial políticas fiscales, salariales y de protección social»⁹. En este sentido, es evidente la pertinencia de los comentarios formulados por la Comisión en relación con la aplicación de las normas sobre igualdad de oportunidades y de trato y política de empleo. El ODS 17 trata de cuestiones relativas a cómo lograr mayor estabilidad y coherencia macroeconómicas, promoción de la inversión y del comercio a nivel mundial. La lógica de las Declaraciones de 1998 y 2008 implica que no debería dejarse que éstas sean consideradas con independencia de las normas internacionales del trabajo, y que los informes de la Comisión podrían fundamentar adecuadamente el examen anual del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

45. Varios indicadores ODS se refieren a la legislación y las normas que entran dentro del ámbito de aplicación de muchos convenios ratificados de la OIT. Por ejemplo, el indicador 5.5.1 en el marco del ODS 5 («Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas») trata de «determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo». Los informes de la Comisión constituyen una fuente evidente para recopilar esa información. El indicador 1.3.1 refleja la proporción de la población que está efectivamente cubierta por un sistema de protección social, en particular por los pisos de protección social, así como los principales elementos que configuran la protección social: prestaciones por hijo y por maternidad, ayuda a las personas sin trabajo, personas con discapacidades, víctimas de accidentes del trabajo y personas de edad. Estos parámetros de cobertura efectiva de la protección social tienen la finalidad de reflejar de qué modo las disposiciones legales basadas en instrumentos como el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) o la Recomendación núm. 202 se llevan a la práctica en conformidad con las observaciones de los órganos de control.

46. La Comisión toma nota con interés de los esfuerzos en curso para reposicionar el sistema de las Naciones Unidas en torno a los ODS. Se congratula de la especial importancia que se otorga a potenciar las capacidades del sistema relativas a la prestación de un servicio integrado de asesoramiento en materia de políticas, el apoyo a la aplicación de normas y criterios, y la recopilación y el análisis de datos. Se adhiere plenamente a la necesidad de una comprensión clara de los marcos normativos pertinentes de las Naciones Unidas, la capacidad para traducirlos en análisis, planes y programas aplicables a todo el sistema con miras a la consecución de los ODS. Se siente reconfortada por la visión estratégica, evocada en la última revisión quadrienal amplia de la política de las Naciones Unidas, de que, en consonancia con el compromiso enunciado en la Agenda 2030 de «no dejar a nadie atrás», las normas y principios internacionales constituyen un núcleo esencial de la labor de las Naciones Unidas a nivel nacional y de su papel singular, su empeño y su impulso en favor de un planteamiento integrado y centrado en las personas que incorpore los derechos humanos y la igualdad de género como elementos esenciales. Manifiesta asimismo su coincidencia con el Secretario General de las Naciones Unidas de que las Naciones Unidas «debe ser firme en la defensa de los valores universales y las normas acordadas por nuestros Estados Miembros, pero flexible en la adaptación de su presencia, apoyo y conocimientos específicos a cada país». La Comisión confía en que los valores pragmáticos del tripartismo ocuparán un lugar preferente en el proceso de llevar a la práctica esa adaptación. Espera que los Programas de Trabajo Decente por País puedan seguir siendo la plataforma sobre la cual fomentar la labor normativa de la OIT entre las múltiples declaraciones en materia de

⁵ Memoria del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, 2016 (Informe I (B)), *op. cit.*, párrafo 52.

⁶ *Ibid.*, párrafo 26.

⁷ OIT: *Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market Indicators*, 2018 (aún no disponible en español).

⁸ Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), 10-19 de octubre de 2018, Ginebra, Resolución sobre la metodología del indicador 8.8.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativo a los derechos laborales (documento ICLS/20/2018/Resolución II).

⁹ *Ibid.*, CIET.

derechos humanos, y que el reforzamiento del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) aprovechará al máximo la cooperación de los interlocutores sociales.

47. Al mismo tiempo, la Comisión considera que estas afirmaciones tranquilizadoras sobre la importancia en estos tiempos de la legislación internacional del trabajo y su control no deben ser una excusa para la complacencia. En este sentido, la Comisión permanece alerta ante los desafíos que se plantean al control efectivo de las normas internacionales del trabajo. Algunos de estos retos se derivan de las vertiginosas transformaciones en el mundo del trabajo, y a los cuales los órganos de control internacionales deberán prestar atención en igual medida a fin de evaluar oportunamente los problemas delicados que están generando. En consecuencia, la Comisión tiene interés en examinar, el año entrante, el Informe final que está elaborando la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo a fin de seguir reflexionando sobre el modo en que la Comisión de Expertos podrá garantizar un control objetivo e imparcial de los instrumentos internacionales del trabajo ya ratificados.

48. La Comisión aprovecha la oportunidad para recordar que en 2019 también se conmemora el aniversario de varios convenios que no han perdido pertinencia alguna de cara a los retos para la justicia social que se presentarán. El Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) da expresión a un principio y derecho fundamental en el trabajo, y la negociación colectiva sigue siendo un pilar de la paz social y de la capacidad de los trabajadores y de los empleadores para negociar unas condiciones decentes de trabajo en libertad y dignidad. El Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) estableció normas para asegurar que también se paguen efectivamente los salarios acordados. El Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) estableció el principio de igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes, que sigue forjando las trayectorias de crecimiento económico sostenido y sostenible e impulsando la financiación para el desarrollo. En 2019, se conmemorará el 50.º aniversario del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), extendiendo el alcance de un instrumento de gobernanza fundamental para la protección de los trabajadores rurales. Otro convenio esencial para asegurar medios de sustento sostenibles en las zonas rurales cumplirá treinta años, a saber, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). La Comisión confía en que los Estados Miembros aprovechen la ocasión del centenario para reconsiderar la ratificación y aplicación de estas normas al elaborar o poner en práctica sus planes de desarrollo sostenible.

II. *Respeto de las obligaciones relacionadas con las normas*

A. **Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)**

49. La principal función de la Comisión consiste en examinar las memorias presentadas por los gobiernos sobre los convenios ratificados por los Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución) y sobre aquellos convenios que han sido declarados aplicables en los territorios no metropolitanos (artículo 35 de la Constitución).

Modalidades para la presentación de memorias

50. Con arreglo a la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 258.^a reunión (noviembre de 1993), las memorias debidas sobre los convenios ratificados deben enviarse a la Oficina **entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre** de cada año.

51. La Comisión recuerda que deben enviarse memorias detalladas cuando se trate de primeras memorias (que deben enviarse tras la ratificación) o cuando lo pidan expresamente la Comisión de Expertos o la Comisión de la Conferencia. Después se solicitan memorias simplificadas a intervalos regulares¹⁰. La Comisión recuerda que en su 306.^a reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración decidió que el ciclo de presentación de memorias se prolongara de dos a tres años para los convenios fundamentales y los convenios de gobernanza. En su 334.^a reunión (octubre-noviembre de 2018), el Consejo de Administración decidió prolongar a seis años el ciclo de presentación de memorias para los demás convenios.

52. Además, la Comisión puede solicitar que se envíen memorias fuera del ciclo regular de presentación de memorias¹¹. La Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración también pueden solicitar expresamente que se envíen memorias fuera del ciclo normal. En cada reunión, la Comisión también tiene que examinar las memorias solicitadas en los casos en que los gobiernos no habían transmitido una memoria debida para el período anterior o no habían respondido a los comentarios anteriores de la Comisión.

Cumplimiento de la obligación de presentación de memorias

53. Este año se solicitaron a los gobiernos un total de 1 790 memorias (1 683 memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución y 107 memorias en virtud del artículo 35 de la Constitución) sobre la aplicación de los convenios ratificados por los Estados Miembros en comparación con 2 242 el año pasado.

54. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el porcentaje de memorias recibidas hasta el 1.º de septiembre de 2018 sigue siendo reducido (el **35,4** por ciento en comparación con el 38,2 por ciento en su anterior

¹⁰ En 1993, se estableció una distinción entre memorias detalladas y simplificadas. Tal como se explica en los formularios de memoria en el caso de las memorias simplificadas sólo hará falta facilitar información sobre los siguientes puntos: *a)* toda nueva medida legislativa u otras medidas relacionadas con la aplicación del Convenio; *b)* las respuestas a las preguntas que figuran en el formulario de memoria sobre la aplicación práctica del convenio (por ejemplo, datos estadísticos, resultados de evaluaciones o auditorías, decisiones judiciales o administrativas), así como sobre el envío de copias de la memoria a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y sobre las observaciones que se hayan recibido de dichas organizaciones, y *c)* las respuestas a los comentarios formulados por los órganos de control. En su 334.^a reunión, el Consejo de Administración adoptó un nuevo formulario de memoria con miras a facilitar la presentación de memorias por los gobiernos cuando se espera que proporcionen memorias simplificadas (documento GB.334/INS/5).

¹¹ Véase párrafo 75 y siguientes del Informe General.

reunión). Recuerda que el hecho de que un número significativo de memorias se reciban con posterioridad al 1.º de septiembre perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular. **Por consiguiente, la Comisión reitera a los Estados Miembros su solicitud de que realicen esfuerzos particulares para que el próximo año sus memorias se presenten respetando el plazo establecido y contengan toda la información solicitada a fin de que la Comisión pueda realizar un examen completo.**

55. Al finalizar la presente reunión de la Comisión, la Oficina había recibido 1 122 memorias. Esta cifra representa el 62,7 por ciento de las memorias solicitadas y es más baja que el porcentaje de memorias recibidas el año anterior, cuando la Oficina recibió un total de 1 519 memorias, que representaron el 67,8 por ciento ¹². La Comisión toma nota en particular de que, al finalizar su presente reunión, se habían recibido 52 de las 89 primeras memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados (en comparación con 61 de las 95 primeras memorias debidas el año pasado).

56. Cuando examina el incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones en materia de envío de memorias, la Comisión adopta comentarios «generales» (que figuran al principio de la parte II (sección I) de su informe). Realiza observaciones generales cuando no se ha enviado ninguna de las memorias debidas durante dos o más años y cuando una primera memoria no se envió durante dos o más años. Realiza solicitudes directas generales cuando, durante el año en curso, un país no ha enviado las memorias debidas o la mayor parte de las memorias debidas; o no ha enviado una primera memoria debida. Este año, tras la introducción de una nueva práctica de llamamientos urgentes, la Comisión realizó dichos llamamientos para ocho países que no habían enviado primeras memorias durante al menos tres años (véase el párrafo 59 más adelante).

57. Los 14 países siguientes no han enviado ninguna de las memorias debidas desde hace dos años o más: **Brunei Darussalam, Chad, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Granada, Guinea-Bissau, Malasia-Sabah, Santa Lucía, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Timor-Leste y Trinidad y Tabago.**

58. Los 11 países que figuran a continuación no han transmitido primeras memorias durante dos años o más:

Estados	Convenios núms.
Chad	– Desde 2017: Convenios núms. 102 y 122
Congo	– Desde 2015: Convenio núm. 185, y – Desde 2016: MLC, 2006
Gabón	– Desde 2016: MLC, 2006
Guinea Ecuatorial	– Desde 1998: Convenios núms. 68 y 92
Kiribati	– Desde 2015: Convenio núm. 185
República de Maldivas	– Desde 2015: Convenio núm. 100 y – Desde 2016: Convenios núm. 185 y MLC, 2006
Países Bajos – Curazao	– Desde 2017: MLC, 2006
Nicaragua	– Desde 2015: MLC, 2006
Rumania	– Desde 2017: MLC, 2006
San Vicente y las Granadinas	– Desde 2014: MLC, 2006
Somalia	– Desde 2016: Convenios núms. 87, 98 y 182

59. **La Comisión insta a los gobiernos en cuestión a no escatimar esfuerzos para comunicar las memorias solicitadas sobre los convenios ratificados y a poner un especial empeño en transmitir las primeras memorias debidas. En particular, la Comisión señala a la atención de los siguientes Gobiernos que si una memoria no se recibe a tiempo para su examen por la Comisión en su siguiente reunión, esta última procederá al examen de la aplicación del Convenio en los países de que se trate sobre la base de la información pública de que disponga: Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Kiribati, República de Maldivas, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Somalia.** Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión hace hincapié en la particular importancia que tienen las primeras memorias, que constituyen la base sobre la que la Comisión realiza su evaluación inicial sobre la aplicación de los convenios de que se trate. La Comisión es consciente de que, cuando pasa mucho tiempo sin que se envíen memorias, las dificultades que tienen los gobiernos para cumplir con sus obligaciones constitucionales a menudo obedecen a problemas administrativos o

¹² En el anexo I del presente Informe se indica, en relación con cada país, si las memorias solicitadas (en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución) se habían registrado o no al final de la reunión de la Comisión. En el anexo II se indica, a partir de 1932 y en lo que respecta a las memorias solicitadas en virtud del artículo 22 de la Constitución, el número y el porcentaje de las memorias recibidas en la fecha establecida, en la fecha de la reunión de la Comisión de Expertos y, por último, en la fecha de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

de otra índole. *En esos casos, es importante que los gobiernos soliciten asistencia técnica a la Oficina y que esa asistencia se proporcione rápidamente* ¹³.

60. Los siguientes países no han indicado durante los últimos tres años cuáles son las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución, se han comunicado copias de las memorias transmitidas a la Oficina con arreglo al artículo 22 de la Constitución: *Fiji y Rwanda* ¹⁴.

61. La Comisión recuerda que, en virtud del carácter tripartito de la OIT, el cumplimiento de esta obligación constitucional tiene por objetivo permitir que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo ¹⁵. Si un gobierno no cumple con esta obligación, estas organizaciones no tienen la posibilidad de realizar comentarios y se pierde un elemento fundamental del tripartismo. *La Comisión pide a los Estados Miembros en cuestión que continúen cumpliendo con su obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución.*

Respuestas a los comentarios de la Comisión

62. Se solicita a los gobiernos que en sus memorias respondan a las observaciones y solicitudes directas de la Comisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. En algunos casos, las memorias recibidas no contienen respuestas a las solicitudes de la Comisión o no se adjunta a ellas la legislación correspondiente ni otros documentos necesarios para su examen completo. En esos casos, a solicitud de la Comisión, la Oficina escribe a los gobiernos interesados pidiéndoles que transmitan la información o la documentación solicitadas, si no se dispone de esa documentación.

63. Este año, no se ha recibido información referente a todas o la mayor parte de las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período considerado, de los países siguientes: Afganistán, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brunei Darussalam, Chad, Congo, Djibouti, Dominica, Guinea Ecuatorial, Francia (Polinesia francesa), Gambia, Ghana, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Hungría, Jamaica, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesotho, Malawi, Malasia-Sabah, República de Maldivas, Malta, Mauritania, República de Moldova, Países Bajos (Aruba), Papua Nueva Guinea, Rumania, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tayikistán, Timor-Leste, Trinidad y Tabago y Uganda.

64. La Comisión toma nota con *preocupación* de que el número de comentarios sin respuesta sigue siendo muy elevado. La Comisión subraya que el valor que los mandantes de la OIT acuerdan al diálogo con los órganos de control sobre la aplicación de los convenios ratificados se ve considerablemente limitado por el hecho de que los gobiernos no cumplan con sus obligaciones en la materia. Asimismo, la Comisión señala a la atención de los gobiernos los criterios revisados para el examen de las repeticiones en los casos en que los gobiernos no hayan respondido durante tres o más años a los comentarios de la Comisión. *La Comisión insta a los países interesados a transmitir toda la información solicitada y recuerda que, de ser necesario, pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.*

Seguimiento de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de su obligación de presentación de memorias mencionada en el informe de la Comisión de Aplicación de Normas

65. Habida cuenta de que el funcionamiento del sistema de control se basa esencialmente en la información proporcionada por los gobiernos en sus memorias, tanto la Comisión como la Conferencia consideran que hay que prestar la misma atención al incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones a este respecto que al incumplimiento de sus obligaciones en relación con la aplicación de los convenios ratificados. Por consiguiente, ambas Comisiones han decidido reforzar, con la asistencia de la Oficina, el seguimiento dado a esos casos de incumplimiento.

66. La Comisión ha sido informada de que dando seguimiento a los debates de la Comisión de la Conferencia de mayo-junio de 2018, la Oficina ha enviado comunicaciones específicas a los Estados Miembros citados en los párrafos pertinentes del informe de la Comisión de la Conferencia en relación con casos de incumplimiento ¹⁶. La Comisión se felicita por el hecho de que, desde el final de la reunión de la Conferencia, 13 de los Estados Miembros concernidos han cumplido con una parte de sus obligaciones de envío de memorias ¹⁷.

¹³ En ciertos casos excepcionales la falta de envío de memorias es el resultado de dificultades más generales relacionadas con la situación nacional, que con frecuencia impiden que la Oficina pueda prestar asistencia técnica.

¹⁴ Véase la observación general que figura en la parte II.I del informe de este año.

¹⁵ Véase párrafo 94 del Informe General.

¹⁶ Véase el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2018, párrafos 157-164.

¹⁷ Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Comoras, Guyana, Haití, Islas Cook, Islas Salomón, Malasia, Malasia (Malasia Peninsular y Sarawak), Mozambique, Serbia, Vanuatu y Yemen.

67. La Comisión espera que la Oficina mantenga la asistencia técnica sostenida que ha estado proporcionando a los Estados Miembros. Por último, la Comisión saluda la eficaz colaboración que mantiene con la Comisión de la Conferencia sobre esta cuestión de interés común, colaboración que resulta fundamental para el buen desarrollo de sus trabajos respectivos. La Comisión hace hincapié en su decisión de señalar a la atención de la Comisión de la Conferencia ciertos casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias a fin de que se pueda hacer un llamamiento urgente a los gobiernos de que se trate y se les avise de que si no envían la memoria debida, la Comisión examinará el fondo de la cuestión sobre la base de la información que tenga a su disposición.

B. Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos

68. En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y sobre aquellos que han sido declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos, la Comisión ha atribuido, como es su práctica habitual, a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Cada experto presenta sus conclusiones preliminares sobre los instrumentos a su cargo. Esas conclusiones se presentan luego a la Comisión en sesión plenaria para su discusión y aprobación. Las decisiones relativas a los comentarios son adoptadas por consenso.

69. La Comisión considera oportuno informar a los Estados Miembros de que ha examinado todas las memorias que se le han sometido. Habida cuenta del gran volumen de trabajo de la Secretaría, debido principalmente al elevado número de memorias recibidas tardíamente, a saber después del 1.º de septiembre, algunas memorias no se pusieron en conocimiento de la Comisión y se examinarán en su próxima reunión.

Observaciones y solicitudes directas

70. La Comisión considera que cabe señalar que en 122 casos ha comprobado, tras el examen de las memorias correspondientes, que la forma en que se aplican los convenios ratificados no requiere otros comentarios. Sin embargo, en ciertos casos, la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los gobiernos interesados la necesidad de adoptar medidas adicionales para dar efecto a algunas disposiciones de los convenios o de facilitar informaciones complementarias sobre determinados puntos. Como en años anteriores, los comentarios de la Comisión han sido redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la Comisión, o de «solicitudes directas», que no se reproducen en el informe, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados y se pueden encontrar en Internet¹⁸. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Sirven para indicar discrepancias importantes entre las obligaciones que se derivan de un convenio y la legislación y/o las prácticas en la materia de los Estados Miembros. En ellas se puede abordar la falta de medidas para dar cumplimiento a un convenio o para dar curso mediante acciones apropiadas a las solicitudes de la Comisión. También sirven para, si procede, subrayar los progresos. Las solicitudes directas permiten a la Comisión mantener un diálogo continuo con los gobiernos, a menudo cuando las cuestiones planteadas son principalmente de orden técnico. Además, pueden utilizarse para aclarar determinados puntos, cuando la información disponible no permita una plena valoración de la medida en que se da cumplimiento a las obligaciones. Las solicitudes directas también se utilizan para examinar las primeras memorias.

71. Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la parte II del presente Informe y al final de cada tema figura una lista de las solicitudes directas. En el anexo VII del presente Informe figura un índice de todas las observaciones y solicitudes directas, clasificadas por país.

72. Además, la Comisión realizó dos observaciones generales con ocasión del aniversario del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas

73. La Comisión examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. La información a este respecto es parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados. Este año, la Comisión ha examinado el seguimiento de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas durante la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (107.ª reunión, mayo-junio de 2018), en los casos siguientes:

¹⁸ Las observaciones y las solicitudes directas se pueden encontrar en la base de datos NORMLEX, que está en el portal de la OIT (www.ilo.org/normes).

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)		
Estados	Convenios núms.	Página
Argelia	87	51
Bahrein	111	403
Belarús	29	208
Estado Plurinacional de Bolivia	131 y 138	601 y 270
Botswana	87	57
Brasil	98	60
Camboya	105	214
El Salvador	144	503
Eritrea	29	222
Georgia	100	440
Grecia	98	88
Haití	1/14/30/106	613
Honduras	87	98
Japón	87	103
Libia	122	574
Malasia-Malasia Peninsular/Sarawak	19	633
México	87	114
República de Moldova	81/129	532
Myanmar	87	118
Nigeria	98	122
Samoa	182	376
Serbia	144	510
Ucrania	81/129	550

Seguimiento de las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución y de las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución

74. Según la práctica establecida, la Comisión también examina las medidas adoptadas por los gobiernos con arreglo a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (establecidas para examinar las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución) y de las comisiones de encuesta (establecidas para examinar las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución). La información correspondiente forma parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados. La Comisión considera que es útil indicar los comentarios en relación con esos procedimientos constitucionales de control, de las que el cuadro siguiente ofrece una visión general.

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos a las recomendaciones de las comisiones de encuesta (quejas en virtud del artículo 26)	
Estado	Convenios núms.
Zimbabwe	87 y 98

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (reclamaciones en virtud del artículo 24)	
Estados	Convenios núms.
Portugal	137
Qatar	111
Ucrania	95

Notas especiales

75. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas especiales (conocidas tradicionalmente como «notas a pie de página»), que figuran al final de los comentarios, los casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para aplicar los convenios correspondientes, considera apropiado solicitar a los gobiernos que faciliten una memoria antes de la fecha prevista, y, en ciertos casos, que transmitan información completa a la Conferencia en su próxima reunión de junio de 2019.

76. A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas especiales, la Comisión recurre a los criterios básicos que se describen a continuación, teniendo en cuenta las consideraciones generales siguientes. En primer término, estos criterios son indicativos. En el ejercicio de sus facultades discrecionales en lo que respecta a la aplicación de estos criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración del ciclo de presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos respecto de los cuales se solicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia como «nota a pie de página simple», al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita al gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se alude con frecuencia como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer lugar, un caso grave que justifique una nota especial para que se comunique información completa a la Conferencia (nota a pie de página doble), sólo puede ser objeto de una nota especial para que se presente una memoria anticipada (nota a pie de página simple), en la medida en que haya sido objeto de una discusión reciente en la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión señala que utiliza las dobles notas a pie de página por deferencia a las decisiones de la Comisión de la Conferencia en materia de determinación de los casos que desea discutir.

77. Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes:

- la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante consideración es la necesidad de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto y de tener en cuenta los temas que implican los derechos fundamentales, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto adverso, especialmente en el ámbito internacional, sobre los trabajadores y las otras categorías de personas protegidas;
- la persistencia del problema;
- la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para cada caso, según criterios de derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas que suponen una amenaza para la vida, cuando es previsible un daño irreversible, y
- la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de respuesta a los asuntos planteados por la Comisión, especialmente los casos de claro y reiterado incumplimiento por parte de un Estado de sus obligaciones.

78. Además, la Comisión desea destacar que su decisión de no introducir una doble nota a pie de página en un caso que, anteriormente, ha sido señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia, no significa de ninguna manera que dicho caso sea considerado como un caso de progreso.

79. En su 76.^a reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión decidió que la identificación de los casos respecto de los cuales se solicitaba a los gobiernos la comunicación de informaciones detalladas a la Conferencia, se realizase en dos etapas: en primer lugar, el experto responsable inicialmente de un grupo concreto de convenios puede recomendar a la Comisión la inserción de notas especiales; en segundo lugar, habida cuenta de todas las recomendaciones formuladas, la Comisión adoptará, después de la discusión, una decisión final y colegiada, una vez examinada la aplicación de todos los convenios.

80. Este año, la Comisión pidió a los gobiernos que transmitieran información completa a la reunión de la Conferencia de 2019 sobre los casos que figuran a continuación:

Lista de casos en los que la Comisión solicitó a los gobiernos que transmitiesen a la reunión de la Conferencia de junio de 2019 datos completos	
Estados	Convenios núms.
Etiopía	138
Iraq	182
Libia	111
Myanmar	29
Nicaragua	117
Turquía	87

81. La Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas fuera del ciclo de presentación de memorias en los casos siguientes:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas fuera del ciclo de presentación de memorias	
Estado	Convenio núm.
Cuba	110

82. Además, la Comisión pidió respuestas completas a sus comentarios fuera del ciclo de presentación de memorias en los casos siguientes:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos respuestas completas a sus comentarios fuera del ciclo de presentación de memorias	
Estados	Convenios núms.
Argentina	MLC, 2006
Armenia	17/18
Bangladesh	81 y MLC, 2006
Estado Plurinacional de Bolivia	131, 136/162 y 167
Burundi	26
Cabo Verde	MLC, 2006
China	155/167, 170 y MLC, 2006
Filipinas	87
Ghana	MLC, 2006
Guatemala	87
Haití	1/14/30/106
Honduras	87 y MLC, 2006
India	81 y MLC, 2006
República Islámica del Irán	MLC, 2006
Irlanda	MLC, 2006
Japón	87
Kazajstán	87

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos respuestas completas a sus comentarios fuera del ciclo de presentación de memorias	
Estados	Convenios núms.
Kenya	17 y MLC, 2006
Madagascar	159
Malasia-Malasia Peninsular/Sarawak	19
República de Moldova	81/129
Mongolia	MLC, 2006
Montenegro	MLC, 2006
Nigeria	MLC, 2006
Nueva Zelandia	MLC, 2006
Reino Unido-Bermudas	MLC, 2006
Senegal	87
Sri Lanka	98
Turquía	98
Zimbabwe	87 y 98

Casos de progreso

83. Tras su examen de las memorias enviadas por los gobiernos, y con arreglo a su práctica habitual, la Comisión menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su *satisfacción* o su *interés* por los progresos realizados en la aplicación de los convenios correspondientes.

84. En sus 80.^a y 82.^a reuniones (2009 y 2011), la Comisión proporcionó las siguientes precisiones sobre el enfoque general elaborado durante el transcurso de los años en relación con la identificación de los casos de progreso:

- 1) La expresión de interés o satisfacción no significa que considere que el país en cuestión cumple de manera general las disposiciones del convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, **la Comisión puede expresar satisfacción o interés sobre una cuestión determinada mientras lamenta que**, desde su punto de vista, **otras cuestiones importantes**, no se hayan abordado de manera satisfactoria.
- 2) La Comisión desea hacer hincapié en que **sólo se señala que se ha realizado un progreso en lo que respecta a una cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de la naturaleza de las medidas adoptadas por el Gobierno interesado.**
- 3) La Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en cuenta la naturaleza particular del convenio así como las circunstancias específicas del país.
- 4) El hecho de señalar que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos de medidas adoptadas en la legislación, la práctica o las políticas nacionales.
- 5) Si la satisfacción está relacionada con la adopción de legislación, la Comisión también puede considerar apropiado adoptar medidas a fin de garantizar el seguimiento de su aplicación práctica.
- 6) En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la información transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

85. Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su informe de 1964 ¹⁹, la Comisión ha utilizado los mismos criterios generales. La Comisión expresa su *satisfacción* en los casos en los que, **tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de nueva legislación o de una enmienda a la legislación existente, o realizando un cambio significativo en la política o en la práctica nacional, con lo que logran un mejor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios correspondientes.** Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los gobiernos y a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto un asunto concreto. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble:

¹⁹ Véase párrafo 16 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.^a reunión (1964) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

- dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y
- aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares.

86. En la parte II del presente Informe, se incluye información detallada sobre los casos de progreso; se trata de **18** casos en los que se han adoptado tales medidas en **15** países. La lista completa es la siguiente:

Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:	
Estados	Convenios núms.
Albania	138
Cabo Verde	182
Côte d'Ivoire	138
República Democrática del Congo	111
Ecuador	138
El Salvador	182
Eswatini	87
Guinea	29
Iraq	100
Malasia	182
Marruecos	105 y 182
Mozambique	138 y 182
Níger	182
Polonia	87 y 98
Viet Nam	29

87. Desde que la Comisión comenzara a enumerarlos en su Informe, el número total de casos respecto de los cuales la Comisión ha **expresado su satisfacción** por los progresos alcanzados como consecuencia de sus comentarios asciende a **3 077**.

88. En lo que respecta a los casos de progreso, en 1979 se formalizó la distinción entre casos de satisfacción y casos de interés²⁰. En general, los casos de **interés** son los casos en los que las **medidas están lo suficientemente elaboradas para justificar la expectativa de alcanzar nuevos progresos en el futuro y respecto de los cuales la Comisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno y los interlocutores sociales**. La práctica de la Comisión ha evolucionado de tal manera que, actualmente, los casos sobre los que expresa su interés también pueden englobar diversas medidas. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución general de los objetivos de un determinado convenio. Esto puede incluir:

- proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún no se han presentado a la Comisión o puesto a su disposición;
- consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales;
- nuevas políticas;
- desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina;
- las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones en un determinado sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés, salvo que exista una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una determinada decisión judicial, o
- la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un Estado, una provincia, un territorio, en el marco de un sistema federal.

89. Los pormenores relativos a los casos en consideración se encuentran en la parte II de este Informe o en las solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos interesados, e incluyen **170** casos en los que se han adoptado medidas de este tipo en **80** países. La lista completa es la siguiente:

²⁰ Véase párrafo 122 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:	
Estados	Convenios núms.
Albania	95/173, 122 y 181
Alemania	111
Angola	81
Arabia Saudita	81
Argentina	29 y 156
Armenia	182
Australia	MLC, 2006
Bahamas	182
Bangladesh	81
Estado Plurinacional de Bolivia	81/129 y 138
Botswana	182
Bulgaria	122
Cabo Verde	29
Canadá	26
Chile	111, 122, 140 y 169
China	122 y 148/155/167
República de Corea	156
Côte d'Ivoire	29
Croacia	45/139/148/155/161/162 y 98
República Democrática del Congo	87 y 111
Dinamarca	142
Ecuador	29, 122 y 182
Egipto	87
El Salvador	29 y 107
Eslovenia	81/129 y 187
España	181
Estonia	122
Eswatini	87
Etiopía	29 y 182
Ex República Yugoslava de Macedonia	81/129/150 y 162
Fiji	87
Filipinas	87 y 98
Finlandia	156
Francia	156
Francia-Nueva Caledonia	111 y 181
Georgia	142
Grecia	87 y 122

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:	
Estados	Convenios núms.
Guatemala	87, 144, 169 y 182
Guinea	29, 105 y 182
Honduras	144
India	29
Indonesia	19
Iraq	111
Irlanda	98 y 111
Islandia	144
Jamaica	87
Jordania	182
Kuwait	111
República Democrática Popular Lao	182
Líbano	122
Letonia	142
Liberia	182
Libia	100
Lituania	29, 144 y 156
Madagascar	144
Malasia	138
Mali	138, 144 y 182
Marruecos	29, 138 y 182
Mauricio	144
México	87
República de Moldova	81/129
Mozambique	111, 138 y 182
Myanmar	87 y 182
Namibia	111
Nepal	182
Nicaragua	189
Nigeria	81 y 88
Nueva Zelandia	144 y 182
Pakistán	87 y 98
Panamá	87, 98 y 122
Paraguay	111
Perú	98
Polonia	81/129, 122 y 142
Portugal	98

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:	
Estados	Convenios núms.
Qatar	81 y 111
Reino Unido	98
Reino Unido-Anguilla	82 y 87
Reino Unido-Islas Malvinas (Falkland Islands)	82
Reino Unido-Jersey	97 y 140
Reino Unido-Montserrat	82
Rumania	81/129
Federación de Rusia	95, 98 y 156
Samoa	182
Serbia	162
Seychelles	81 y 87
Suecia	87 y 98
Suiza	142
Suriname	81/150
República Unida de Tanzania	17/19 y 81
Togo	87 y MLC, 2006
Ucrania	117, 156 y 176
Uruguay	81/129, 100, 111 y 189
Vanuatu	87
Zambia	100 y 111
Zimbabue	87 y 111

Aplicación práctica

90. Como parte de la aplicación de los convenios en la práctica, la Comisión toma nota de la información que contienen las memorias de los gobiernos, por ejemplo en relación con las decisiones judiciales, las estadísticas y la inspección del trabajo. El envío de esta información se solicita en casi todos los formularios de memoria y también en los términos específicos de algunos convenios.

91. La Comisión toma nota de que aproximadamente una cuarta parte de las memorias recibidas este año contienen información sobre la aplicación práctica de los convenios, incluida información sobre la jurisprudencia nacional y la inspección del trabajo así como información estadística.

92. La Comisión insiste ante los gobiernos sobre la importancia del envío de esa información, que es indispensable para completar el examen de la legislación nacional y contribuye a que la Comisión identifique las cuestiones que plantean verdaderos problemas de aplicación práctica. La Comisión desea asimismo alentar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a que le comuniquen información precisa y actualizada sobre la aplicación de los convenios en la práctica.

93. Asimismo, sobre la base de una investigación llevada a cabo por la Oficina a solicitud de los expertos, la Comisión inició un debate sobre la protección contra la discriminación por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales en el mundo del trabajo, en el contexto del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La Comisión pidió que se pusiera a disposición del público el informe comparativo compilado por la Oficina.

Observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

94. En cada una de sus reuniones, la Comisión recuerda que la contribución de las organizaciones de empleadores y de trabajadores es fundamental para que pueda evaluar la aplicación de los convenios en la legislación y la práctica

nacionales. Los Estados Miembros tienen la obligación, en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, de comunicar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores representativas copias de las memorias presentadas con arreglo a los artículos 19 y 22 de la Constitución. El cumplimiento de esta obligación constitucional tiene por objeto permitir que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo. En algunos casos, los gobiernos transmiten adjuntas a sus memorias las observaciones realizadas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y algunas veces añaden sus propios comentarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores se envían directamente a la Oficina, la cual, con arreglo a la práctica establecida, las transmite a los gobiernos de que se trate para que realicen sus comentarios al respecto, a fin de garantizar que se respeta el debido proceso. Por razones de transparencia, todas las observaciones recibidas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de los convenios ratificados desde la última reunión de la Comisión figuran en el anexo III de su Informe. En los casos en que la Comisión de Expertos considera que las observaciones no entran en el ámbito de aplicación del convenio en cuestión o no contienen información que represente un valor añadido para el examen de la aplicación de dicho convenio, no las menciona en sus comentarios. Por lo demás, las observaciones recibidas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden tenerse en cuenta en una observación o en una solicitud directa, según proceda.

En un año en que se debe presentar una memoria

95. La Comisión, en su 86.^a reunión (2015), realizó las aclaraciones que figuran a continuación sobre el enfoque general desarrollado a lo largo de los años para dar seguimiento a las observaciones formuladas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión recordó que, **en el año en que se debe presentar una memoria**, cuando las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores no se transmiten junto con la memoria del gobierno, la Oficina debe recibir dichas observaciones a más tardar el 1.º de septiembre, a fin de que el gobierno disponga de un tiempo razonable para responder, y de que la Comisión pueda examinar asimismo los asuntos de que se trate en su reunión del mismo año. Cuando las observaciones se reciben después del 1.º de septiembre, no se examinan en cuanto al fondo en ausencia de una respuesta del gobierno, salvo en casos excepcionales. A lo largo de los años, la Comisión ha establecido que los casos excepcionales son aquéllos en los que las alegaciones están suficientemente fundamentadas y en los que urge hacer frente a la situación, ya sea porque se trata de cuestiones de vida o muerte o relacionadas con los derechos humanos fundamentales, o porque cualquier retraso puede causar un daño irreparable. Además, las observaciones relativas a propuestas legislativas o proyectos de ley también pueden ser examinadas por la Comisión en ausencia de una respuesta del Gobierno en los casos en que esto pueda resultar útil para el país en la fase de redacción.

En un año en el que no se debe presentar una memoria

96. En su 88.^a reunión, tras su consideración del examen por el Consejo de Administración de la prolongación de cinco a seis años del ciclo de presentación de memorias relativas a los convenios técnicos, la Comisión expresó su voluntad de considerar la manera en que podría ampliar el criterio sumamente estricto de romper su círculo de examen al recibir los comentarios de las organizaciones de trabajadores o de empleadores sobre un país determinado en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT, y decidió que los criterios utilizados para incluir casos en notas de pie de página y establecidos en el párrafo 47 de su Informe General podrían servir de inspiración a este respecto.

97. A la luz de la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2018 (documento GB/334/INS/5) de prolongar de cinco a seis años el ciclo de presentación de memorias relativas a los convenios técnicos, y expresando su entendimiento de que la Comisión seguirá examinando, aclarando y, cuando proceda, ampliando los criterios para romper el ciclo de presentación de memorias relativas a los convenios técnicos, la Comisión procedió al examen de los criterios arriba mencionados.

98. La Comisión recuerda que, **en un año en el que no se debe presentar una memoria**, cuando las organizaciones de empleadores y de trabajadores envían observaciones en las que se limitan a repetir comentarios formulados en años anteriores, o a hacer referencia a cuestiones ya planteadas por la Comisión, dichos comentarios se examinarán el año en el que el Gobierno deba presentar su memoria, de conformidad con el ciclo de presentación de memorias. En este caso, no se solicitará una memoria del gobierno fuera de este ciclo.

99. En los casos en que las observaciones sobre un convenio técnico cumplen los criterios establecidos en el párrafo 100 que figura a continuación, la Comisión pedirá a la Oficina que envíe una notificación a los gobiernos indicando que las observaciones recibidas en virtud del artículo 23 se examinarán en su siguiente reunión, con independencia de que el gobierno haya proporcionado una respuesta. De esta manera se asegurará que se informa a los gobiernos con suficiente antelación y, además, que el examen de las cuestiones importantes no se retrase más aún.

100. Así pues, la Comisión examinará la aplicación de un **convenio técnico** en un año en el que no se debe presentar una memoria, a raíz de las observaciones presentadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

- la gravedad del problema y sus efectos negativos en la aplicación del Convenio;
- la persistencia del problema, y

- la pertinencia y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias, o la ausencia de respuesta a las cuestiones planteadas por la Comisión, incluidos los casos de negativa clara y reiterada de un Estado a cumplir sus obligaciones.

101. En lo que respecta a **cualquier convenio (fundamental, de gobernanza o técnico)**, recordando su práctica bien establecida, la Comisión examinará las observaciones de los empleadores y de los trabajadores en un año en el que no se debe presentar la memoria en los casos excepcionales especificados en el párrafo 95 anterior, incluso en ausencia de una respuesta del Gobierno de que se trate.

102. La Comisión puso de relieve que el procedimiento establecido en los párrafos anteriores tiene por objeto dar efecto a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración que han prolongado el ciclo de presentación de memorias, y pidió que se establecieran salvaguardias en dicho contexto, a fin de asegurar que se mantenga el control efectivo de la aplicación de los convenios ratificados. Una de estas salvaguardias consiste en reconocer debidamente la oportunidad que se brinda a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de señalar a la atención de la Comisión las cuestiones que suscitan particular preocupación derivadas de la aplicación de los convenios ratificados, incluso en un año en el que no se debe presentar una memoria. El enfoque indicado más arriba también se centra en particular en la importancia de advertir debidamente a los gobiernos, salvo en circunstancias excepcionales, y en todos los casos la Comisión indicará los motivos para romper el ciclo.

103. La Comisión toma nota de que, este año, el número de observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores es inferior al de años anteriores, cuando alcanzó unos niveles sin precedentes. Desde su última reunión, la Comisión ha recibido **745** observaciones (en comparación con las 1 325 del año anterior), de las cuales **173** (en comparación con 330 del año anterior) fueron comunicadas por organizaciones de empleadores y **572** (en comparación con 995 el año anterior) por organizaciones de trabajadores. La mayoría de las observaciones recibidas (**699** en comparación con 836 el año anterior) hacían referencia a la aplicación de los convenios ratificados²¹, **367** de estas observaciones (en comparación con 334 el año anterior) hacían referencia a convenios fundamentales, **84** (en comparación con 97 el año anterior) estaban relacionadas con convenios de gobernanza y **248** (en comparación con 405 el año anterior) eran relativas a la aplicación de otros convenios. Además, **46** observaciones (en comparación con 489 el año anterior) hacían referencia al Estudio General relativo a la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202).

104. La Comisión toma nota de que **521** de las observaciones recibidas este año sobre la aplicación de los convenios ratificados se transmitieron directamente a la Oficina. En **178** casos, los gobiernos transmitieron las observaciones realizadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores junto con sus memorias. La Comisión toma nota de que, en general, las organizaciones de empleadores y de trabajadores procuraron reunir y presentar información sobre la aplicación de los convenios ratificados en determinados países, tanto en la legislación como en la práctica. La Comisión recuerda que las observaciones de carácter general en relación con ciertos convenios se abordan de manera más apropiada en el marco del examen por la comisión de los Estudios Generales o en otros foros de la OIT.

Observaciones de la Cámara Naviera Internacional (ICS) en lo que respecta al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006)

105. La Comisión toma nota de las observaciones de la Cámara Naviera Internacional (ICS) basadas en el artículo 23 de la Constitución de la OIT en lo que respecta al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006). La ICS indica que, a su juicio, el Convenio no prevé ninguna duración máxima del período de servicio a bordo. Si bien la ICS entiende que la *regla 2.5* define claramente la duración máxima del período de servicio a bordo al término del cual la gente de mar tiene derecho a la repatriación, considera que el marino puede decidir no ejercer este derecho. La ICS sostiene que la gente de mar debería poder trabajar más allá del período de once meses «si lo desea», a condición de que se les compense de manera adecuada por diversos motivos: i) formación de los cadetes; ii) necesidad de la gente de mar de completar su tiempo de servicio en el mar en virtud del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su versión enmendada (Convenio de Formación); iii) asegurar que la gente de mar consiga tiempo de servicio en el mar para obtener promociones, y iv) la preferencia de la gente de mar, en algunos casos, por prestar servicio a bordo durante períodos más largos. La ICS hace referencia en particular a los comentarios formulados por la Comisión en los casos de las Islas Marshall y de las Bahamas.

106. La Comisión recuerda que, en virtud de la *regla 2.4*, todo Miembro deberá exigir que la gente de mar empleada en buques que enarbolan su pabellón disfrute de vacaciones anuales pagadas en condiciones apropiadas, de conformidad con las disposiciones del Código (sobre la base de un mínimo de 2,5 días naturales de vacaciones por mes de empleo). De conformidad con la *norma A2.4, párrafo 3*, se deberá prohibir todo acuerdo que implique renunciar a las vacaciones anuales pagadas mínimas definidas en la presente norma, salvo en los casos previstos por la autoridad competente. Además, a tenor de lo dispuesto en la *norma A2.5.1, párrafo 2, b)*, todo Miembro deberá velar por que en su legislación, en otras medidas o en los convenios de negociación colectiva se recojan disposiciones apropiadas que prevean la duración máxima del período de servicio a bordo al término del cual la gente de mar tiene derecho a la repatriación (ese período deberá ser inferior a doce meses).

²¹ Véase anexo III de este Informe.

107. El Convenio establece los dos siguientes principios normativos independientes, pero interrelacionados: i) la gente de mar tiene derecho a ser repatriada sin costo alguno para ella, a intervalos regulares no superiores a doce meses de servicio continuo, y ii) se debe conceder a la gente de mar al menos treinta días de vacaciones pagadas por un año de servicio.

108. En lo que respecta a las vacaciones pagadas, la *norma A2.4* prevé explícitamente que *se deberá prohibir* todo acuerdo que implique renunciar a las vacaciones anuales pagadas mínimas definidas, salvo en los casos previstos por la autoridad competente. Así pues, por norma general, todo acuerdo por el que se pague a la gente de mar una suma para compensar las vacaciones anuales no estaría en conformidad con el Convenio. Esta prohibición tiene por objeto garantizar la realización efectiva del objetivo de la *regla 2.4*, que es asegurar que la gente de mar disfrute de un período de vacaciones anuales en beneficio de su salud y bienestar, y que también está intrínsecamente vinculado con la seguridad y la protección de los buques. El objetivo no sólo es alentar a la gente de mar a tomar sus vacaciones anuales, sino también evitar la fatiga, la incapacidad del buque para la navegación y los riesgos conexos.

109. En lo que respecta a la repatriación, la situación es ligeramente diferente. De conformidad con la *regla 2.5, párrafo 1*, la gente de mar tiene derecho a ser repatriada. Sin embargo, puede decidir por varios motivos no ejercer este derecho cuando se plantea.

110. La Comisión ha considerado sistemáticamente que, de la lectura combinada de la *norma A2.4, párrafos 2 y 3*, sobre las vacaciones anuales, y de la *norma A2.5.1, párrafo 2, b)*, sobre la repatriación, se desprende que la duración máxima del período continuo de servicio a bordo de un buque sin vacaciones es, en principio, once meses. En efecto, tal como ha indicado claramente la Comisión, la *norma A2.4, párrafo 3*, del MLC, 2006, no establece una prohibición absoluta, ya que la autoridad competente puede autorizar excepciones. Si bien el Convenio no hace referencia a la naturaleza y el alcance de las excepciones permisibles, la Comisión considera que esta disposición debe entenderse de una manera restrictiva para no ser contraria al objetivo de la *regla 2.4*.

111. Sin embargo, se permiten efectivamente excepciones sobre la base de casos específicos previstos por las autoridades competentes, teniendo en cuenta las necesidades de la gente de mar y las particularidades del viaje por mar propiamente dicho. A este respecto, la Comisión recuerda que ha considerado, en diversas ocasiones, que la posibilidad de que los cadetes renuncien a las vacaciones anuales mínimas a fin de completar su tiempo en el mar o su formación a bordo de conformidad con los acuerdos de formación está plenamente en conformidad con el Convenio. Otra excepción podría estar relacionada más en general con la necesidad de que los oficiales completen su servicio a bordo con miras a obtener certificados en virtud del Convenio de Formación. El propio Convenio prevé una posible excepción en la *pauta B2.4.3* en relación con la posibilidad de fraccionar las vacaciones anuales pagadas, o de acumular las vacaciones correspondientes con las de un período ulterior, a condición de que esto haya sido autorizado en cada país por la autoridad competente o mediante los procedimientos apropiados.

112. Por último, la Comisión toma nota de que un número considerable de países que han ratificado el Convenio no han tenido dificultades en relación con la prohibición de la renuncia a las vacaciones anuales y a la duración máxima del período de servicio a bordo.

113. Por lo tanto, la Comisión considera que el Convenio brinda la flexibilidad adecuada para responder a las preocupaciones expresadas por la ICS.

Casos en los que se hace hincapié en la necesidad de asistencia técnica

114. La combinación de la labor de los órganos de control y de las orientaciones prácticas proporcionadas a los Estados Miembros a través de la cooperación para el desarrollo y la asistencia técnica siempre ha sido una de las principales características del sistema de control de la OIT. A este respecto, la Comisión acogió con agrado que el Informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2016-2017 pusiera particular énfasis en los resultados de las medidas específicas adoptadas por la Oficina para mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo, especialmente en respuesta a las cuestiones planteadas por los órganos de control, y en la asistencia de la OIT encaminada a fortalecer la capacidad de los mandantes para afrontar los casos de incumplimiento grave, así como en la creación de un círculo virtuoso entre la labor de los órganos de control y la acción de la OIT a nivel de los países ²². La Comisión también acogió con agrado la información suministrada por la Oficina, según la cual, en 2018, se siguió prestando asistencia técnica específica, y ésta reforzó más aún a fin de prestar apoyo a los países en la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo y de fortalecer la capacidad de los ministerios del trabajo para cumplir sus obligaciones constitucionales (incluida la preparación de memorias sobre la aplicación de los convenios). La Comisión valora los esfuerzos de la Oficina para vincular mejor su programa de asistencia técnica con la labor de los órganos de supervisión como una manera de mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la legislación y en la práctica, en particular asignando recursos específicos con este fin. En el contexto de la Agenda 2030 y de la reforma en curso de las Naciones Unidas, la Comisión subraya la importancia de integrar plenamente las normas internacionales del trabajo en los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT y en todos los marcos de cooperación de las Naciones Unidas a nivel nacional y mundial. A este respecto, la Comisión toma nota de la Resolución relativa a la cooperación eficaz de la OIT

²² Véase documento GB.332/PFA/1, párrafos 79 y 126-129.

para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.^a reunión (2018) y le resulta particularmente alentador el llamamiento realizado en la Resolución para que la OIT «ayude a los países a aplicar las recomendaciones de los órganos de control de la OIT con respecto a la aplicación de las normas internacionales del trabajo, previa solicitud». **La Comisión reitera su esperanza de que se elabore un programa integral de asistencia técnica en un futuro cercano, y de que se asignen a dicho programa los fondos adecuados para ayudar a todos los mandantes a mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo tanto en la legislación como en la práctica.**

115. Además de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de ciertas obligaciones concretas en materia de envío de memorias, los casos en los que, según la Comisión, sería especialmente útil que la Oficina proporcione asistencia técnica a fin de ayudar a los Estados Miembros a solucionar las lagunas en la legislación y la práctica en lo que respecta a la aplicación de los convenios ratificados aparecen en la lista del cuadro que figura a continuación y en la parte II de este Informe se proporciona información al respecto.

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros	
Estados	Convenios núms.
Bahrein	111
Belice	98
Estado Plurinacional de Bolivia	131 y 138
Botswana	87 y 138
Brasil	98
Cabo Verde	MLC, 2006
Camboya	105
República Centroafricana	62 y 142
Côte d'Ivoire	144
Croacia	98
República Dominicana	187
Ecuador	98
El Salvador	87, 107 y 144
Eritrea	87 y 98
Fiji	87
Guatemala	87 y 182
Guinea	45
Haití	1/14/30/106
Honduras	87 y 144
Jamaica	98
Líbano	98
Libia	29, 105 y 182
Lituania	144
Malasia	98
México	87
Mongolia	MLC, 2006
Mozambique	87 y 98
Myanmar	63 y 87
Nigeria	45 y 98

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros	
Estados	Convenios núms.
Pakistán	98
Panamá	98 y 189
Papua Nueva Guinea	98
Paraguay	87
Reino Unido	98
Reino Unido-Anguilla	82
Federación de Rusia	98 y 150
San Kitts y Nevis	138
San Vicente y las Granadinas	98
Santo Tomé y Príncipe	98
Serbia	144
Seychelles	87 y 98
Sri Lanka	87 y 98
República Unida de Tanzania	87 y 98
Ucrania	95
Uruguay	87 y 98
Yemen	94, 122 y 144
Zambia	98

C. Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

116. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración decidió que el tema de los Estudios Generales debería alinearse con el tema de las discusiones anuales recurrentes de la Conferencia con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Este año se ha pedido a los gobiernos que envíen, en virtud del artículo 19 de la Constitución, memorias para elaborar un Estudio General relativo a la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) ²³. De conformidad con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio se ha elaborado sobre la base de un examen preliminar realizado por un grupo de trabajo compuesto por siete miembros de la Comisión.

117. La Comisión *lamenta* comprobar que los **32** países que figuran a continuación no han comunicado, durante los cinco últimos años, ninguna de las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución en relación con los convenios no ratificados y las recomendaciones. Estos países son: **Afganistán, Angola, Armenia, Belice, Botswana, Chad, Congo, Islas Cook, Dominica, Eswatini, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Kiribati, Liberia, Libia, República de Maldivas, Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán del Sur, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu y Yemen.**

118. *La Comisión insta nuevamente a los gobiernos a que comuniquen las memorias solicitadas, de modo que sus Estudios Generales puedan ser lo más completos posible.*

D. Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

119. De conformidad con su mandato, la Comisión examinó este año la siguiente información comunicada por los gobiernos de los Estados Miembros en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización:

²³ Véase Informe III (Parte B), Conferencia Internacional del Trabajo, 108.ª reunión, Ginebra, 2019.

- a) información sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia de junio de 1970 (54.^a reunión) a junio de 2017 (106.^a reunión) (Convenios núms. 131 a 189, Recomendaciones núms. 135 a 205 y Protocolos), y
- b) respuestas a las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión en su 88.^a reunión (noviembre-diciembre de 2017).

120. El anexo IV de la parte II del Informe contiene un resumen de la última información que se ha recibido acerca de cuáles son las autoridades competentes a las que se han sometido el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.^a reunión, la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.^a reunión, así como la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.^a reunión, y la fecha de dicha sumisión. Además, en el anexo IV se resume la información proporcionada por los gobiernos en relación con instrumentos adoptados anteriormente que fueron sometidos a las autoridades competentes en 2018.

121. Los anexos V y VI de la parte II del Informe contienen información estadística adicional. En el anexo V, elaborado sobre la base de la información proporcionada por los gobiernos, se expone la situación de cada uno de los Estados Miembros en relación con su obligación constitucional de sumisión. En el anexo VI se presenta un panorama general de la situación relativa a la sumisión de cada uno de los instrumentos adoptados desde la 54.^a reunión (junio de 1970) de la Conferencia. Todos los instrumentos adoptados antes de la 54.^a reunión de la Conferencia han sido sometidos. Los datos estadísticos que figuran en los anexos V y VI son actualizados con regularidad por los servicios competentes de la Oficina y se pueden consultar en NORMLEX.

103.^a reunión

122. En su 103.^a reunión (junio de 2014), la Conferencia adoptó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203). La Comisión toma nota con *interés* de que el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, entró en vigor el 9 de noviembre de 2016 y ha sido ratificado por 27 Estados Miembros: **Argentina, Bosnia y Herzegovina, Chipre, República Checa, Dinamarca, Djibouti, Estonia, España, Finlandia, Francia, Islandia, Israel, Jamaica, Letonia, Malí, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Tailandia.** *La Comisión alienta a todos los gobiernos a que prosigan sus esfuerzos para someter a sus órganos legislativos los instrumentos adoptados por la 103.^a reunión de la Conferencia, y a que informen sobre las medidas adoptadas con respecto a estos instrumentos.*

104.^a reunión

123. En su 104.^a reunión (junio de 2015), la Conferencia adoptó la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). El plazo de doce meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 204, concluyó el 12 de junio de 2016, habiéndose cumplido el plazo de dieciocho meses en circunstancias excepcionales el 12 de diciembre de 2016. La Comisión toma nota de que 83 gobiernos han comunicado información sobre la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 204. En este sentido, se refiere al anexo IV de la parte II del informe, que contiene un resumen de la información sobre la sumisión comunicada por los gobiernos, incluida la relativa a la Recomendación núm. 204. *La Comisión alienta a todos los gobiernos a que prosigan sus esfuerzos para someter a sus órganos legislativos la Recomendación núm. 204, y a que informen sobre las medidas adoptadas con respecto a este instrumento.*

105.^a y 106.^a reuniones

124. La Comisión recuerda que no se adoptó ningún instrumento en la 105.^a reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2016). En su 106.^a reunión, en junio de 2017, la Conferencia adoptó la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). El plazo de doce meses para la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 205, finalizó el 16 de junio de 2018, y el plazo de dieciocho meses (en circunstancias excepcionales) finalizará el 16 de diciembre de 2018. La Comisión toma nota de que hasta la fecha 41 gobiernos han comunicado información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes de la Recomendación núm. 205. *La Comisión acoge con beneplácito la información comunicada hasta la fecha y alienta a todos los gobiernos a que continúen sus esfuerzos para someter la Recomendación núm. 205 a sus órganos legislativos y a que informen sobre toda medida adoptada respecto de este instrumento.*

Casos de progreso

125. La Comisión toma nota con *interés* de la información comunicada por los Gobiernos de los siguientes países: **Bangladesh, Burundi y Malí.** Acoge los esfuerzos realizados por estos Gobiernos para superar retrasos significativos en la sumisión y adoptar medidas importantes, con el fin de cumplir con su obligación constitucional de someter a sus órganos legislativos los instrumentos adoptados por la Conferencia durante varios años.

Problemas especiales

126. Con miras a facilitar los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en este Informe sólo se mencionan los gobiernos que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia desde al menos siete reuniones consecutivas. Se hace referencia a estos problemas especiales como casos de «falta grave de sumisión». **Este período comienza con la 96.^a reunión (2007) y concluye con la 106.^a reunión (2017), habida cuenta de que la Conferencia no adoptó ningún convenio o recomendación en sus 97.^a (2008), 98.^a (2009), 102.^a (2013) y 105.^a (2016) reuniones.** Dicho período se consideró lo suficientemente prolongado como para justificar que se invitara a los gobiernos concernidos a señalar los motivos de los retrasos en la sumisión en una sesión especial de la Comisión de la Conferencia. Además, en sus observaciones sobre los casos de «falta de sumisión», la Comisión también proporciona información en relación a los gobiernos que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adoptados en las seis últimas reuniones de la Conferencia.

127. La Comisión toma nota de que, al clausurarse su 89.^a reunión, el 8 de diciembre de 2018, los **39** (32 en 2015, 38 en 2016 y 31 en 2017) Estados Miembros siguientes se encontraban en esta categoría de «falta grave de sumisión»: **Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Belice, Brunei Darussalam, Chile, Comoras, Congo, Croacia, Dominica, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Fiji, Gabón, Granada, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Liberia, Libia, Malasia, Malta, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, República Árabe Siria, Somalia y Vanuatu.**

128. La Comisión es consciente de que, desde hace varios años, algunos de estos países se han visto afectados por circunstancias excepcionales, producto de las cuales carecen de las instituciones necesarias para el cumplimiento de su obligación de sumisión de los instrumentos. En la 107.^a reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2018), algunas delegaciones gubernamentales comunicaron información sobre las razones por las cuales sus países no habían podido dar cumplimiento a su obligación constitucional de sumisión de los convenios, las recomendaciones y los protocolos a sus órganos legislativos nacionales. Luego de que la Comisión de Expertos expresara su preocupación, la Comisión de la Conferencia también manifestó su profunda preocupación por el incumplimiento de esta obligación. Señaló que el cumplimiento de esta obligación constitucional, que implica la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a los órganos legislativos nacionales, reviste suma importancia para asegurar la eficacia de las actividades normativas de la Organización.

129. Los países antes mencionados son objeto de las observaciones publicadas en este Informe, y los convenios, las recomendaciones y los protocolos que no han sido sometidos se indican en los anexos correspondientes. La Comisión considera oportuno llamar la atención de los gobiernos interesados para permitirles adoptar inmediatamente, y con carácter urgente, las medidas adecuadas para subsanar el retraso acumulado y cumplir con esta obligación constitucional. La Comisión recuerda que, si así lo solicitan, los gobiernos pueden beneficiarse de la asistencia técnica que la Oficina puede proporcionarles con el fin de apoyarlos en adoptar los trámites necesarios para someter rápidamente a sus órganos legislativos los instrumentos pendientes.

Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos

130. Al igual que en sus informes anteriores, la Comisión presenta, en la sección II de la parte II de este Informe, observaciones individuales sobre los puntos que deben ser especialmente señalados a la atención de los gobiernos. En general, las observaciones se refieren a los casos en los que no se ha comunicado información durante al menos cinco reuniones de la Conferencia. Además, se cursaron directamente a algunos países solicitudes de información sobre otros puntos (véase la lista de solicitudes directas que figura al final de la sección II).

131. La Comisión recuerda la importancia que concede a la comunicación por los gobiernos de la información y los documentos solicitados en el cuestionario adjunto al Memorándum adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2005. La Comisión debe recibir, para proceder a su examen, un resumen o una copia de los documentos mediante los cuales los instrumentos se han sometido a los órganos legislativos, así como información sobre la fecha de la sumisión y debe ser informada asimismo de las propuestas realizadas sobre el curso que debe darse a estos instrumentos. La obligación de sumisión sólo se puede considerar efectivamente cumplida cuando los instrumentos adoptados por la Conferencia han sido sometidos al órgano legislativo y se ha tomado una decisión sobre éstos. La Oficina debe ser informada de esa decisión, así como de la sumisión de los instrumentos al órgano legislativo. La Comisión espera seguir tomando nota en su próximo informe de casos de progreso a este respecto. Asimismo, recuerda nuevamente a los gobiernos que pueden solicitar la asistencia técnica de la OIT y, en particular, de los especialistas en normas en el terreno.

* * *

132. Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa ayuda aportada por los funcionarios de la Oficina, cuya competencia y dedicación le permiten realizar una labor cada vez más amplia y compleja en un período de tiempo limitado.

Ginebra, 8 de diciembre de 2018

(Firmado) Abdul G. Koroma
Presidente

Shinichi Ago
Ponente

Anexo al Informe General

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Sr. Shinichi AGO (Japón)

Profesor de Derecho, Universidad de Ritsumeikan, Kyoto; ex Profesor de Derecho Económico Internacional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kyushu; miembro de la Sociedad Asiática de Derecho Internacional, de la Asociación de Derecho Internacional y de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Juez del Tribunal Administrativo del Banco Asiático de Desarrollo.

Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia)

Profesora titular de Derecho Marítimo y Mercantil de la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas (Facultad de Derecho); miembro electo del Consejo del Decanato de la Facultad de Derecho y Directora del Programa de Postgrado sobre Negocios y Derecho Marítimo; Presidenta del Comité organizador de la Conferencia Internacional sobre Derecho Marítimo que se celebra cada tres años en el Pireo (Grecia); Doctora en Derecho por la Universidad de París I-Sorbona; autorizada por esta Universidad a supervisar investigaciones académicas; máster en Derecho por la Universidad Aix-Marsella III y por la Universidad París II-Assas; profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y en el programa de becas Fulbright (2007-2008); miembro de diversos comités legislativos en materia de derecho mercantil; ha impartido conferencias y realizado investigaciones académicas en instituciones de diversos países, como, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Italia, Malta y Estados Unidos; ha publicado numerosos trabajos sobre derecho marítimo, de la competencia, de la propiedad industrial, de sociedades, europeo y del transporte (ocho libros y más de 60 artículos y contribuciones a obras colectivas en griego, inglés y francés); abogada en ejercicio y árbitro con especialización en derecho europeo, mercantil y marítimo.

Sra. Leila AZOURI (Líbano)

Doctora en Derecho; Catedrática de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad La Sagesse de Beirut hasta 2016; Directora de Investigación en la Escuela de Doctorado en Derecho de la Universidad del Líbano; ex Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Líbano; miembro de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas; Presidenta de la Comisión nacional encargada de la preparación de los informes presentados por el Líbano al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hasta 2017; especialista jurídica de la Organización de Mujeres Árabes; miembro del «ILO Policy Advisory Committee on Fair Migration» en Oriente Medio.

Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil)

Juez del Tribunal Superior del Trabajo (Tribunal Superior do Trabalho) del Brasil; LLM de la Universidad de ESSEX, Reino Unido; Antiguo Miembro del Consejo Nacional de Justicia del Brasil; ex Procurador del Ministerio Público del Trabajo del Brasil; Profesor del Instituto de Ensino Superior de Brasilia; profesor de la Escuela Nacional para Jueces del Trabajo.

Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos)

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York, N.Y.; Copresidente del «Public Review Board» del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil de los Estados Unidos; ex profesor Visitante en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; fue profesor de Derecho en la facultad de Derecho de Moritz de la Universidad del estado de Ohio; ex Consejero Jefe y Director del Personal de la Subcomisión de Trabajo del Senado de los Estados Unidos; ejerció en un bufete de abogados; ex auxiliar del Juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica)

Profesor Emérito de Derecho Público en la Universidad de Ciudad del Cabo; ex consejero especial del Ministro de Justicia; ex jefe del Servicio Jurídico del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU); ex consejero especial del Ministro de Trabajo; ex presidente del Grupo de Trabajo para la preparación de la Ley sobre Relaciones Laborales de Sudáfrica.

Sra. Graciela DIXON CATON (Panamá)

Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; ex Presidenta de la Sala de Casación Penal y de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá; ex Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces; ex Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados; ex Consultora Nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); actualmente Jueza del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo; Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid; Árbitro del Centro de Solución de Conflictos (CESCON) de la Cámara Panameña de la Construcción y del Centro de Conciliación y Arbitraje (CECAP) de la Cámara de Comercio de Panamá; Asesora Jurídica y Consultora Internacional.

Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos)

Doctor en Derecho; ex Profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos); Miembro del Consejo Superior de la docencia, la formación y la investigación científica; Consultor de organismos públicos nacionales e internacionales, entre los que cabe señalar el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Coordinador nacional del proyecto «Desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial», OIT (2005-2008).

Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona)

Juez de la Corte Internacional de Justicia (1994-2012); ex Presidente del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario en Ginebra; ex miembro y Presidente de la Comisión de Derecho Internacional; ex Embajador y Representante permanente de Sierra Leona ante las Naciones Unidas (Nueva York), y ex Embajador plenipotenciario ante la Unión Europea, la Organización para la Unidad Africana y muchos países.

Sr. Alain LACABARATS (Francia)

Juez del Tribunal de Casación; ex Presidente de la sala civil del Tribunal de Casación; ex Presidente de la Cámara de Asuntos Sociales del Tribunal de Casación; miembro del Consejo Superior de la Magistratura; miembro de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (Consejo de Europa); ex Vicepresidente del Tribunal Superior de París; ex Presidente de una sala del Tribunal de Apelaciones de París; ha sido profesor titular y catedrático en diferentes universidades francesas y es autor de un gran número de publicaciones.

Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia)

Profesora de Derecho en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov; profesora de Derecho en el Departamento de Procedimientos Civiles y Derecho Laboral de la Universidad Estatal Rusa del Petróleo y el Gas; secretaria de la Asociación Rusa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2011-2016); miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales; miembro (no remunerado) de la Comisión Presidencial de la Federación de Rusia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido)

Abogada de la Reina (Queen's Counsel); Jueza adjunta del Tribunal Superior; ex Jueza del Tribunal de Trabajo (2000-2008); trabaja en el estudio de abogados «Matrix Chambers» y está especializada en legislación en materia de discriminación e igualdad, legislación sobre derechos humanos, legislación de la Unión Europea, derecho público y derecho del trabajo; asesora especial del Comité de Empresas, Innovación y Calificaciones de la Cámara de los Comunes para una encuesta sobre las mujeres en el lugar de trabajo (2013-2014). Profesora Visitante Honoraria, Facultad de Derecho, University College London.

Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia)

Profesor Emérito de Derecho en la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia; antiguo encargado de investigación, con una beca de la Universidad de las Naciones Unidas, en el programa de estudios sobre los refugiados de la Universidad de Oxford; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; Presidente de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (2011); ex Presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas; ex miembro de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana; Comisionado de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria (2012-2016); Premio UNESCO 2004 de Educación para los Derechos Humanos; antiguo experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección de las personas contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género; miembro de la Junta del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO.

Sra. Rosemary OWENS (Australia)

Profesora Emérita de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Adelaida; ex Profesora de Derecho Dame Roma Mitchell (2008-2015) y ex decana (2007-2011); Oficial de la Orden de Australia; miembro y posteriormente Directora (2014-2016) de la Academia Australiana de derecho; miembro de la Junta editorial y ex editora de la *Revista Australiana de Derecho Laboral*; miembro del Consejo científico y editorial de la *Révue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale*; miembro de la Asociación Australiana de Derecho Laboral (y ex miembro de la ejecutiva nacional); conferenciante del Consejo Australiano de Investigación; Presidenta de la Comisión Consultiva Ministerial sobre el Equilibrio entre el Trabajo y la Vida Privada (2010-2013) del Gobierno de Australia Meridional; ex Presidenta y miembro del Consejo de Administración del Centro de Mujeres Trabajadoras (Australia Meridional) (1990-2014).

Sra. Mónica PINTO (Argentina)

Profesora de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y ex Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro asociado del *Institut de droit international*. Es la presidenta del Tribunal Administrativo del Banco Mundial y jueza en el Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo; integra el panel de conciliadores y árbitros del CIADI; es la Vicepresidenta del Comité Consultivo de Candidaturas para la Corte Penal Internacional; es miembro del Panel de Asesores Internacionales del *American Law Institute* para el *Fourth Restatement on International Law*. Ha actuado ante órganos de derechos humanos, tribunales arbitrales y la Corte Internacional de Justicia como abogada y como perito. Actualmente también se desempeña como árbitro. Ha cumplido distintas misiones como experta en derechos humanos para las Naciones Unidas. Fue profesora visitante en Columbia Law School, Universidad de París I y II, Universidad de Rouen. Ha dictado un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ha escrito varios libros y numerosos artículos.

Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún)

Profesor (*agrégé*) de las Facultades de Derecho; Profesor emérito de la Universidad de Yaundé; Profesor invitado o adjunto en varias universidades y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya; en varias ocasiones ha sido Presidente del Jurado del Concurso de Agregación del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior (CAMES), Sección Derecho Privado y Ciencias Penales; ex miembro del Consejo Científico de la Agencia Universitaria de la Francofonía (1993-2001); ex miembro del Consejo Internacional de Palmas Académicas del CAMES (2002-2012); miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Fundación Internacional para la enseñanza del derecho empresarial, de la Asociación Henri Capitant y de la Sociedad de Derecho Comparado; fundador y director de la revista *Juridis periodique*; Presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos en África Central (APDHAC); Presidente del Consejo científico del Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT).

Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar)

Presidente de la Academia Malgache, Academia Nacional de Artes, Letras y Ciencias de Madagascar; ex miembro (1991-2009), Vicepresidente (2003-2006) y Juez Principal (2006-2009) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ); Presidente (2005) de la Cámara constituida por la CIJ para conocer del caso sobre el conflicto fronterizo entre Benin y Níger; licenciatura en derecho, Universidad de Madagascar (Antananarivo, 1965); doctorado en Derecho, Universidad de París II. *Agrégé* de las Facultades de Derecho y Economía, sección de derecho público y ciencias políticas (París, 1972); doctor *honoris causa* por las Universidades de Limoges, de Estrasburgo y de Burdeos-Montesquieu; ex Catedrático de la Universidad de Madagascar (1981-1991) y ex profesor en otras instituciones; fue el primer rector de la Universidad de Antananarivo (1988-1990); miembro de varias delegaciones malgaches en diversas conferencias internacionales; jefe de la Delegación de Madagascar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (1976-1977); fue el primer vicepresidente africano de la Conferencia Internacional de Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de Lengua Francesa (1987-1991); miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; miembro del Tribunal Internacional del Deporte; miembro del Instituto de Derecho Internacional; miembro de numerosos grupos académicos y profesionales nacionales e internacionales; Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional; miembro del Consejo Pontifical Justicia y Paz; desde 2012, Presidente de la Sociedad Africana de Derecho Internacional y ex Vicepresidente del Instituto de Derecho Internacional (2015-2017); Presidente de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre Zimbabwe.

Sra. Kamala SANKARAN (India)

Profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad de Delhi, y actualmente Vicerrectora de Tamil Nadu National Law University, en Tiruchirappalli; ex Decana de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Delhi; miembro del Grupo de Trabajo sobre Migración, del Ministerio de Vivienda y Reducción de la Pobreza Urbana; miembro del Grupo de Trabajo para Examinar la Legislación Laboral, de la Comisión Nacional para Empresas en el Sector no Organizado e Informal, Gobierno de la India; miembro de la Junta Consultiva Internacional, del Boletín Internacional de Derecho Laboral Comparativo y de Relaciones Laborales; miembro del Instituto Stellenbosch de Estudios Avanzados, en Sudáfrica (2011, 2009); profesora visitante del Departamento de Investigación de Asia Meridional, de la Escuela de Estudios de Ámbito Interdisciplinario, Oxford University (2010), y becaria de investigación Fulbright para una investigación de postgrado, en Georgetown University Law Center, Washington D.C. (2001).

Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y Tabago)

Presidenta del Tribunal del Trabajo de Trinidad y Tabago desde 2011; Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas desde 2014; ex Presidenta y Segunda Vicepresidenta del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas; ex Presidenta de la Comisión de Bolsa y Valores de Trinidad y Tabago; ex Presidenta del Grupo del Caribe de Reguladores de Valores; ex Magistrada Presidenta adjunta del Poder Judicial de Trinidad y Tabago; ex Presidenta del Tribunal de Familia de San Vicente y las Granadinas; encargada de investigación en el Programa Hubert Humphrey Fullbright, la Universidad de Georgetown y el Instituto de Educación Judicial de la Commonwealth.

Sr. Bernd WAAS (Alemania)

Profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho Civil en la Universidad de Frankfurt; coordinador y miembro de la Red Europea de Derecho del Trabajo; Coordinador del Centro Europeo de conocimientos especializados en legislación laboral, empleo y políticas del mercado laboral; Presidente de la Sociedad Alemana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del Comité Consultivo de la Red de Investigación sobre Derecho del Trabajo.



Parte II. Observaciones referidas a ciertos países

I. Observaciones acerca de las memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22, 23, párrafo 2, y 35 de la Constitución)

Observación general (artículo 23, párrafo 2, de la Constitución)

La Comisión recuerda que la finalidad de la obligación de comunicar copias de las memorias sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, tal como establece el artículo 23, párrafo 2 de la Constitución, tiene por objeto permitir que estas organizaciones puedan presentar sus propios comentarios sobre la aplicación de los convenios ratificados. La Comisión hace hincapié en que la información recibida de las organizaciones de empleadores y de trabajadores refleja la participación de estas organizaciones en el sistema de presentación de memorias, y que esta información a menudo sirve para conocer y comprender mejor las dificultades a las que tienen que hacer frente los países. En relación con su observación general del año pasado, la Comisión se congratula por el hecho de que este año casi la totalidad de los países han cumplido con esta obligación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en ninguna de las memorias transmitidas por los países siguientes se indica cuáles son las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se ha comunicado una copia de las mismas: **Angola** (2018), **Etiopía** (2018), **Fiji** (2016, 2017 y 2018), **Islas Salomón** (2018), **Jordania** (2018), **Kenya** (2018), **República Democrática Popular Lao** (2017 y 2018), **Libia** (2018), **Mozambique** (2018), **Rwanda** (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), **Samoa** (2018), **República Unida de Tanzania** (2018), **Turkmenistán** (2018) y **Yemen** (2018). La Comisión también toma nota de que la mayoría de las memorias recibidas de **Liberia** (2018) y **Nigeria** (2018), no indica cuáles son las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que se han comunicado copias de las mismas. *La Comisión solicita a cada uno de estos Gobiernos que cumplan sin dilación con su obligación constitucional.*

Observaciones generales (artículos 22 y 35 de la Constitución)

Brunei Darussalam

La Comisión *lamenta* tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, dos memorias sobre los convenios fundamentales que deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Chad

La Comisión *lamenta* tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 14 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, incluidas las primeras memorias relativas al Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y al

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), debidas desde 2017. Además, la mayoría de estas memorias deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Congo

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), en su forma enmendada, debida desde 2015, y la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2016. No se ha recibido ninguna de las 13 memorias solicitadas este año sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, incluida la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). Además, la mayoría de estas memorias deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, sus memorias sobre el Convenio núm. 185 y el MLC, 2006, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá, en su próxima reunión, a un examen completo de la aplicación de estos Convenios, en base a la información disponible. Recordando que este año el Centro Internacional de Formación de la OIT proporcionó asistencia técnica sobre estas cuestiones, la Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Dominica

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que, por sexto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 26 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Gabón

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2016. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, su memoria relativa al MLC, 2006, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá a un examen completo de la aplicación de este Convenio en su próxima reunión, en base a la información disponible. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Gambia

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que, por séptimo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, ocho memorias sobre los convenios fundamentales, que deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Granada

La Comisión *lamenta* tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 11 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Guinea-Bissau

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que, por quinto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 25 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los

comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Guinea Ecuatorial

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se han recibido, por duodécimo año, las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 14 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De estas 14 memorias, dos son primeras memorias relativas a la aplicación del Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68) y del Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92), debidas desde 1998. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre casos de grave incumplimiento cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, sus memorias sobre los Convenios núms. 68 y 92, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá a un examen completo de la aplicación de estos Convenios en su próxima reunión, en base a la información disponible. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Kiribati

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), en su forma enmendada, debida desde 2015. Sólo se han recibido dos memorias de las nueve solicitadas. Aún se deben, para este país, siete memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento, cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, su memoria relativa al Convenio núm. 185, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá a un examen completo de la aplicación de este Convenio en su próxima reunión, en base a la información disponible. La Comisión también toma nota de que durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno indicó que se han experimentado grandes cambios de personal en los últimos años, no obstante lo cual la asistencia técnica recibida de la OIT, aumentará la capacidad del Gobierno de presentar las memorias, como se requiere. Recordando que este año el Centro Internacional de Formación de la OIT proporcionó asistencia técnica sobre estas cuestiones, la Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Malasia

Sabah

La Comisión toma nota con *preocupación* de que, por tercer año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, tres memorias sobre los convenios técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión toma nota de que, durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno indicó que se habían adoptado medidas para fomentar la participación de los organismos y ministerios implicados en las cuestiones relacionadas con las normas del trabajo, para abordar estos asuntos relativos a la obligación de presentación de memorias. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

República de Maldivas

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), debida desde 2015, y las primeras memorias relativas al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) y al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), en su forma enmendada, debidas desde 2016. No se ha recibido ninguna de las siete memorias solicitadas este año sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, sus memorias sobre los Convenios núms. 100, 185 y MLC, 2006, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, el Comisión procederá, en su próxima

reunión, a un examen completo de la aplicación de estos Convenios, en base a la información disponible. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Nicaragua

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2015. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento, cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado, por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, su memoria relativa al MLC, 2006, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá, en su próxima reunión, a un examen completo de la aplicación de este Convenio, en base a la información disponible. La Comisión también toma nota de que, durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno indicó que el retraso se debió al hecho de que las autoridades competentes celebran en la actualidad discusiones y consultas, con la participación de los interlocutores sociales y de otras partes interesadas, y que, en cuanto se haya completado el proceso, se enviará la memoria correspondiente. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Países Bajos

Curazao

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2017, y la primera memoria debida este año relativa al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). La Comisión toma nota de que, durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno de los Países Bajos indicó que estaba en contacto con el Gobierno de Curazao para garantizar la presentación puntual de la información solicitada. La Comisión espera que el Gobierno de Curazao presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Rumania

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2017. No se ha recibido ninguna de las seis memorias solicitadas este año sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, algunas de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

San Vicente y las Granadinas

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la primera memoria del Gobierno relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2014. Sólo se han recibido cinco de las 21 memorias solicitadas este año sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento, cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un *llamamiento urgente* al Gobierno para que envíe, sin dilación, su memoria relativa al MLC, 2006, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá, en su próxima reunión, a un examen completo de la aplicación de este Convenio, en base a la información disponible. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Santa Lucía

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que, por quinto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 22 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. Recordando que este año el Centro Internacional de Formación de la OIT proporcionó asistencia sobre estas cuestiones, la Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Sierra Leona

La Comisión toma nota con **preocupación** de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 23 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. Recordando que se proporcionó asistencia técnica sobre estas cuestiones en 2017 y 2018, por el Equipo de trabajo decente para la región del Sahel y por el Centro Internacional de Formación de la OIT, la Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Somalia

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que, por decimotercer año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, 16 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, algunas de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De estas 16 memorias, tres son primeras memorias relativas al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), debidas desde 2016. De conformidad con la decisión adoptada el año pasado sobre los casos de grave incumplimiento cuando un gobierno no ha enviado su primera memoria sobre un convenio ratificado por tercer año consecutivo (véanse los párrafos 8 a 10 de su informe de 2018), la Comisión hace un **llamamiento urgente** al Gobierno para que envíe, sin dilación, sus memorias sobre los Convenios núms. 87, 98 y 182, y aconseja al Gobierno que, incluso en ausencia de una memoria, la Comisión procederá, en su próxima reunión, a un examen completo de la aplicación de estos Convenios, en base a la información disponible. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Sudán del Sur

La Comisión **lamenta** tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, tres memorias sobre los convenios fundamentales, que deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión toma nota de que, durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno subrayó su compromiso de cumplir con sus obligaciones constitucionales. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Timor-Leste

La Comisión toma nota con **preocupación** de que, por cuarto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, seis memorias sobre los convenios fundamentales, incluidas las primeras memorias relativas al Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), la mayoría de las cuales deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión. A este respecto, recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Trinidad y Tabago

La Comisión **lamenta** tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben, para este país, siete memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, que deberían haber incluido información en respuesta a los comentarios de la Comisión. Recordando que este año el Equipo de trabajo decente para el Caribe de la OIT y el Centro Internacional de Formación de la OIT proporcionaron asistencia técnica sobre estas cuestiones, la Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional, y responda a los comentarios de la Comisión.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: *Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Barbados, Comoras, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Djibouti, República Dominicana, Eslovenia, Francia: Polinesia Francesa, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Ghana, Guinea, Guyana, Haití, Hungría, Jamaica, Jordania, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Líbano, Liberia, Malasia: Malasia Peninsular, Malasia: Sarawak, Malawi, Malta, Mauritania, México, República de Moldova, Montenegro, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva Guinea, Portugal, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Tayikistán, Uganda.*

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

Argelia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que se refieren a cuestiones de orden legislativo cuyos aspectos fundamentales ya están siendo examinados por la Comisión y que, además, denuncian la persistencia de las violaciones del Convenio en la práctica, en particular la prohibición de salir del territorio dirigida a la secretaria general del Sindicato Nacional Autónomo de Personal de la Administración Pública (SNAPAP), aunque ésta debía participar en las labores de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2018, la intervención de las fuerzas policiales para impedir que se celebrara, en febrero de 2018, la asamblea general del Sindicato Argelino de Editores de Prensa Electrónica, y el recurso judicial contra un dirigente sindical tras realizar un llamamiento para que se celebrara una asamblea general del Sindicato de Docentes de la Enseñanza Superior (SESS), en noviembre de 2017. La Comisión toma nota asimismo de que las observaciones de la CSI, apoyadas por las de la Confederación General Autónoma de Trabajadores en Argelia (CGATA), recibidas el 28 de agosto de 2018, indican que no ha cambiado la situación en lo que respecta a los plazos de tramitación particularmente largos y a las denegaciones injustificadas de las solicitudes de registro de los nuevos sindicatos. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.**

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y del Gas (SNATEGS), recibidas el 5 de julio de 2018, relativas a los numerosos obstáculos a la libertad para organizar sus actividades. En relación con esto, la Comisión observa que en su reunión de junio de 2018, el Comité de Libertad Sindical examinó la queja presentada por el SNATEGS y formuló recomendaciones pidiendo en particular al Gobierno que vele por que se cumplan las disposiciones de la ley a fin de que el sindicato pueda ejercer sus actividades y representar a sus miembros (caso núm. 3210, 86.º informe del Comité de Libertad Sindical). **La Comisión confía en que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias a este respecto y en que notifique medidas tangibles.** Por último, la Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 10 de septiembre de 2018, respectivamente, de la Confederación Sindical de Fuerzas Productivas (COSYFOP), del Sindicato Nacional del Sector Industrial (SNSI) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía (SNT ENERGIE) que alegan violaciones del Convenio en la práctica. **Pide al Gobierno que formule comentarios a este respecto.**

Habida cuenta de la persistencia de las alegaciones relativas a los obstáculos particularmente graves al ejercicio de la libertad sindical, la Comisión se ve en la obligación de recordar que los órganos de control de la OIT han insistido constantemente en la interdependencia entre las libertades civiles y los derechos sindicales, subrayando así la idea de que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima desprovisto de violencia, de presión o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 59). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que vele por que se respete este principio.**

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2018, relativa a la aplicación del Convenio por Argelia. La Comisión observa que, en sus conclusiones, esta última pidió al Gobierno que: i) velara por que el registro de los sindicatos, tanto en la legislación como en la práctica, sea conforme al Convenio; ii) tramitara las solicitudes pendientes de registro de los sindicatos que cumplan los requisitos establecidos en la legislación y que permitiera a los sindicatos realizar libremente sus actividades; iii) velara por que el nuevo proyecto del Código del Trabajo se adopte en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas y por que esté de conformidad con el Convenio; iv) enmendara el artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores para constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes, con independencia del sector al que pertenezcan; v) enmendara el artículo 6 de la ley núm. 90-14 con objeto de reconocer el derecho de todos los trabajadores, sin ninguna distinción, a constituir sindicatos; vi) velara por que la libertad sindical pueda ejercerse en un clima desprovisto de actos de intimidación y de violencia hacia los trabajadores, los sindicatos, los empleadores o las organizaciones de empleadores, y vii) proporcionara más información sobre la rápida reintegración de los agentes de la administración a quienes se despidió por motivo de discriminación antisindical. Por último, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que aceptara una misión de alto nivel de la OIT y a que indicara a la Comisión de Expertos los progresos realizados a este respecto este año. La Comisión toma nota de que, en una comunicación recibida el 13 de noviembre de 2018, el Gobierno expresa su desacuerdo con ciertas conclusiones de la Comisión de la Conferencia que considera selectivas, discriminatorias y una amenaza contra la soberanía nacional y la independencia del Poder Judicial. El Gobierno indica además que, desde agosto de 2018, mantiene

discusiones constructivas con la Oficina Internacional del Trabajo a fin de hallar una solución a la situación. **Tomando nota de que la misión de alto nivel requerida por la Comisión de la Conferencia aún no ha tenido lugar, la Comisión confía en que el Gobierno acepte próximamente dicha misión, para que esta última pueda observar las medidas adoptadas y los progresos realizados sobre las cuestiones planteadas en relación con la aplicación del Convenio.**

Cuestiones legislativas

Modificación de la Ley sobre el Código del Trabajo. La Comisión recuerda una vez más que el Gobierno hace referencia, desde 2011, al proceso de reforma del Código del Trabajo. En respuesta a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, el Gobierno había indicado que el proyecto del nuevo Código del Trabajo, en su última versión, se había transmitido a los sindicatos autónomos para que formularan opiniones y comentarios, así como a las administraciones del sector de las autoridades locales. En junio de 2018, el Gobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que no estaba escatimando esfuerzos en el marco de la concertación con sus agentes económicos y sociales para producir un Código del Trabajo consensuado que reforzara los logros alcanzados a raíz de la experiencia de la puesta en práctica de las leyes sociales vigentes y que respondiera a las expectativas de los actores de la vida económica. **Lamentando tomar nota de que el proceso sigue sin concluirse a pesar de haber transcurrido varios años, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para concluir sin más dilación la reforma del Código del Trabajo. La Comisión, en una solicitud que presenta directamente al Gobierno, formula comentarios sobre el proyecto de texto en su versión de 2015 en relación con la aplicación del Convenio, y confía en que el Gobierno los tenga debidamente en cuenta y en que adopte las modificaciones solicitadas.**

Además, en lo referente a las demás cuestiones legislativas planteadas en sus comentarios anteriores, la Comisión **lamenta** la ausencia de toda medida tangible del Gobierno para poner en práctica las modificaciones solicitadas desde 2006. **La Comisión confía en que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias, en un futuro cercano, para adoptar las modificaciones solicitadas a las disposiciones que figuran a continuación.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que sus comentarios hacían referencia al artículo 6 de la ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho sindical que limitan el derecho de constituir una organización sindical a las personas de nacionalidad argelina de origen o adquirida hace al menos diez años. El Gobierno había indicado anteriormente que la antigüedad requerida se había reducido a cinco años y que la disposición en cuestión estaba discutiéndose con los interlocutores sociales. **En ausencia de información a este respecto, la Comisión confía en que las discusiones conduzcan rápidamente a la revisión del artículo 6 de la ley núm. 90-14 a fin de suprimir la condición de nacionalidad, y en que se garantice a todos los trabajadores, sin ningún tipo de distinción, el derecho a constituir una organización sindical. Además, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios que formula en su solicitud directa, pidiéndole que modifique las disposiciones del anteproyecto de ley sobre el Código del Trabajo relativas a la misma cuestión.**

Artículo 5. Derecho de constituir federaciones y confederaciones. La Comisión recuerda que sus comentarios hacen referencia desde hace muchos años a los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14, los cuales, leídos conjuntamente, limitan la constitución de federaciones y confederaciones en una profesión, rama o sector de actividad. La Comisión había tomado nota anteriormente de la indicación del Gobierno de que el artículo 4 en cuestión se enmendaría a través de la inclusión de una definición de federaciones y confederaciones. **En ausencia de información a este respecto, la Comisión se ve obligada a recordar una vez más que espera que el Gobierno proceda sin demora a la revisión del artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de eliminar todo obstáculo a la constitución de federaciones y confederaciones que estimen convenientes, con independencia del sector al que pertenezcan. Además, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios que ella formula en su solicitud directa, en los que le pide que modifique las disposiciones del anteproyecto de ley sobre el Código del Trabajo relativas a la misma cuestión.**

Registro de sindicatos en la práctica

La Comisión recuerda que sus comentarios hacen referencia desde hace muchos años a la cuestión de los plazos particularmente largos, algunas veces de varios años, para la tramitación de las solicitudes de registro de sindicatos, o a la cuestión de la negativa de las autoridades a registrar ciertas organizaciones sindicales autónomas sin indicar los motivos. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo referencia en particular a la situación de la CGATA, del Sindicato Autónomo de Abogados de Argelia (SAAA) y del Sindicato Autónomo Argelino de Trabajadores del Transporte (SATT). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia en relación con esto. En lo tocante al SATT, el cual presentó su solicitud en 2014, el Gobierno indica que la documentación presentada no cumplía las condiciones previstas por las disposiciones de la ley, y que las autoridades habían observado en particular imprecisiones en la determinación de la categoría profesional cubierta por el estatuto, así como la ausencia de disposiciones que el estatuto debía contener (enunciadas en el artículo 21 de la ley). El Gobierno indicó entonces que los interesados no habían respondido ni solicitado aclaraciones sobre la documentación. En lo referente al SAAA, el cual presentó su solicitud en 2015, el Gobierno señala que las autoridades habían identificado en el proyecto de estatuto categorías que tenían la calidad de trabajadores asalariados, pero también categorías que tenían la calidad de empleadores. El Gobierno ha recordado que la ley establece una distinción entre un sindicato de trabajadores asalariados y un sindicato de empleadores, y que se ha advertido a los interesados de la necesidad de estar en conformidad con las disposiciones de la ley, pero éstos no han respondido. En lo que respecta a la CGATA, el Gobierno recuerda de nuevo que desde 2015,

año en el que presentó su solicitud, viene invitando a dicha organización a poner sus textos fundadores en conformidad con la ley y que, a día de hoy, no se ha dado curso a la solicitud de la administración. El Gobierno añade que el presunto presidente de la CGATA había sido destituido de su cargo respetando los procedimientos legales y reglamentarios para el abandono del puesto debido a sus ausencias irregulares, y que este último había perdido su calidad de asalariado a causa de esta situación. En relación con esto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones respectivas, la CGATA y la CSI indican que la respuesta de las autoridades que deniegan el registro no contenía ninguna indicación sobre los puntos que debían modificarse para estar de conformidad con la legislación, y que las autoridades no han dado seguimiento hasta la fecha al intento de contacto por parte de la CGATA para obtener estas indicaciones. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI relativas al plazo particularmente largo para tramitar el registro del SESS, que presentó una solicitud en 2012 y a pesar de que este sindicato había reformulado sus estatutos de conformidad con la solicitud de las autoridades. La Comisión toma nota asimismo con *preocupación* de la lista proporcionada por la CSI y la CGATA de nueve organizaciones sindicales que habían solicitado su registro y que han acabado por abandonar su empeño debido a las peticiones de las autoridades y al tiempo transcurrido sin que hubieran podido lograr su registro. Por último, la Comisión toma nota de que la CSI denuncia que el 6 de marzo de 2016, el Gobierno pidió, fuera de todo marco legal, a las 65 organizaciones sindicales acreditadas del país que mostraran su representatividad por medio de un formulario transmitido a través del sitio web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, excluyendo así del proceso a todas las organizaciones sindicales autónomas, entre ellas la CGATA y el SNATEGS.

La Comisión *lamenta* tomar nota de que el registro de organizaciones sindicales sigue siendo particularmente problemático, en particular dada la información divergente proporcionada por el Gobierno y las organizaciones sindicales sobre la práctica. La Comisión recuerda que, a su parecer, las normas que exigen el cumplimiento de ciertas formalidades no son en sí incompatibles con el Convenio, habida cuenta de que no equivalen a imponer en la práctica una «previa autorización», que infringiría lo dispuesto en el artículo 2, de que no conceden a las autoridades una facultad discrecional para denegar la constitución de una organización, y de que no representan un obstáculo que conduzca realmente a una prohibición pura y simple. La Comisión subraya además que un recurso contra toda decisión administrativa de esta naturaleza debería poder ser examinado sin demora por una jurisdicción independiente e imparcial. Por último, a juicio de la Comisión, si bien el reconocimiento oficial de una organización a través de su registro constituye un aspecto pertinente del derecho de organización — ya que es la primera medida que debe adoptarse para que las organizaciones puedan desempeñar eficazmente su función —, el ejercicio de actividades sindicales legítimas no debería depender de ello (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 82 y 83). *La Comisión espera que el Gobierno vele por el pleno respeto de estos principios. En este sentido, la Comisión alienta al Gobierno a adoptar la práctica consistente en indicar de manera rápida, sistemática y diligente a las organizaciones sindicales que solicitan su registro, en su caso, los posibles motivos de la denegación, a fin de que puedan adoptar con conocimiento de causa las medidas correctivas necesarias. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que vele por que se advierta rápidamente a las organizaciones que expresen interés de las formalidades complementarias que deben cumplir con miras a su registro, y por que las autoridades competentes adopten todas las medidas necesarias para garantizar el rápido registro de las organizaciones que hayan cumplido las medidas solicitadas en virtud de la ley. Como consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno proceda con carácter urgente al registro de la CGATA, del SESS, del SAAA y del SATT en el caso de que estos últimos hayan cumplido las medidas solicitadas en virtud de la ley.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las siguientes observaciones: de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), recibidas el 13 de julio de 2017 — así como de la respuesta del Gobierno a las mismas — de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, ambas recibidas el 1.º de septiembre de 2017; de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibida el 31 de agosto de 2018; de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la CTA Autónoma, ambas recibidas el 1.º de septiembre de 2018; así como de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT), recibidas el 4 de septiembre de 2018; y de la CTA de los Trabajadores, recibidas el 12 de septiembre de 2018. La Comisión observa que algunas de las cuestiones que plantean los interlocutores sociales son objeto de casos ante el Comité de Libertad Sindical (en particular los casos núms. 3229, 3257, 3272) — a cuyo examen, recomendaciones y seguimiento la Comisión se remite.

La Comisión toma nota de que las demás observaciones versan sobre cuestiones objeto de este comentario y toma nota asimismo de los alegatos de vulneraciones del Convenio en la práctica: represión violenta de protestas sindicales, agresiones físicas y amenazas a trabajadores por motivos sindicales y detenciones, procesamientos y encarcelamiento de sindicalistas; ataques a sedes sindicales; obstáculos y prohibiciones para realizar huelgas, con sanciones, reemplazo y despidos de huelguistas; intervenciones e injerencias indebidas de las autoridades en la vida de los sindicatos; trabas en la

recaudación de cuotas sindicales e imposición de multas desproporcionadas por acciones directas durante la conciliación obligatoria y ataques verbales del Gobierno al movimiento sindical.

Por otra parte la Comisión toma nota de que el Gobierno, en el marco de sus respuestas a las observaciones de 2016 de la CTA Autónoma y de la CGT-RA, indica necesitar mayores informaciones para investigar ciertos alegatos que habían sido planteados previamente. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno: i) afirma que en el país algunos sectores tienden a acompañar el conflicto laboral con el desconocimiento de los derechos de otros ciudadanos y de las instituciones de la República; ii) considera que a la protesta social se incorpora un cuestionamiento de la gobernabilidad política y que ello va más allá del ejercicio de la libertad sindical, y iii) en cuanto al Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas de 17 de febrero de 2016 — que las organizaciones de trabajadores alegaron que limita las actividades de los piquetes — remite copia del mismo e indica que su única finalidad es de preservar los derechos de todos los ciudadanos — como de circular libremente o de trabajar — dando un marco de previsibilidad al desarrollo del conflicto y preservando la armonía social. La Comisión toma igualmente nota de que el Gobierno destaca que el país tiene un alto nivel de litigiosidad ante el sistema de control de la OIT y que ello se debe: al prestigio de la OIT en la realidad nacional y entre los actores sociales; a la presencia activa de esta organización en la vida social, política e institucional del país; y al acompañamiento que la Argentina, como país fundador, ha dado siempre a todas las instancias de la OIT. En estas condiciones, el Gobierno propone la creación de dos comisiones tripartitas con la asistencia de la OIT para el tratamiento de los temas pendientes o que puedan plantearse en un futuro en relación al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, de conformidad con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144): i) una comisión para el tratamiento de los temas que se susciten en el sistema de control periódico en virtud de los artículos 19, 22 y 23 y de las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, y ii) otra comisión en relación al procedimiento especial de presentación de quejas en materia de libertad sindical.

Al tiempo que toma nota de que tanto el Gobierno como los interlocutores sociales aluden con preocupación a crecientes niveles de conflictividad y protesta, la Comisión confía en que la iniciativa propuesta para promover el diálogo social pueda materializarse en un futuro próximo en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión alienta al Gobierno a que someta a estas nuevas comisiones tripartitas las cuestiones objeto de este comentario, así como los alegatos planteados en las observaciones de las organizaciones de trabajadores; e invita a éstas a brindar las informaciones adicionales que sean necesarias para tratar las cuestiones de aplicación del Convenio en la práctica que pudieran quedar pendientes. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

Artículos 2, 3 y 6 del Convenio. Autonomía sindical y principio de no injerencia del Estado. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años solicita al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS) núm. 23551 de 1988, y del correspondiente decreto reglamentario núm. 467/88 que no están en conformidad con el Convenio:

- *Personería gremial:* i) el artículo 28 de la LAS, que requiere, para poder disputar la personería gremial a una asociación, que la demandante posea una cantidad de afiliados «considerablemente superior»; y el artículo 21 del decreto reglamentario núm. 467/88 que califica el término «considerablemente superior» al establecer que la asociación que pretenda obtener la personería gremial deberá superar a la que la posea como mínimo en un 10 por ciento de sus afiliados cotizantes; ii) el artículo 29 de la LAS, que dispone que sólo se otorgará la personería gremial a un sindicato de empresa cuando no exista otro sindicato con personería gremial en la zona de actuación y en la actividad o categoría, y iii) el artículo 30 de la LAS que dispone que para que los sindicatos de oficio, profesión o categoría puedan obtener la personería gremial deberán acreditar la existencia de intereses diferenciados de la unión o sindicato preexistente, cuya personería no deberá comprender la representación solicitada.
- *Beneficios que derivan de la personería gremial:* i) el artículo 38 de la LAS que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas sindicales, y ii) los artículos 48 y 52 de la LAS que prevén que únicamente los representantes de las organizaciones con personería gremial se benefician de una protección especial (fuero sindical).

En sus anteriores comentarios la Comisión había tomado nota de las decisiones pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otras instancias judiciales nacionales y provinciales en las que se declara la inconstitucionalidad de diversos artículos de la legislación antes mencionada, en particular, en lo concerniente a la personería gremial y en materia de protección sindical. La Comisión había igualmente observado que el Gobierno había informado sobre diferentes iniciativas legislativas para reformar la LAS.

La Comisión toma nota de que las observaciones de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores reiteran la necesidad de modificar la LAS y denuncian la inacción del Gobierno al respecto a pesar de los pronunciamientos judiciales ya recaídos. Destacan que este último no ha convocado ninguna mesa tripartita y no ha impulsado ninguna modificación al régimen vigente ni apoyado ninguno de los proyectos que habían sido presentados al respecto ante el Congreso Nacional por legisladores de diversos grupos, responsabilizando al Gobierno de la ausencia de debate parlamentario.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los legisladores del partido gubernamental son los que más han impulsado los proyectos de modificación de la LAS; pero que ii) ha sido imposible avanzar en este

debate desde hace largo tiempo, incluso con otras condiciones políticas; iii) la situación resulta mucho más dificultosa para el actual Gobierno que asumió en 2015, ya que se trata de una reforma legislativa delicada que requiere la intervención parlamentaria y en la actualidad el Congreso se ha convertido en un escenario de conflicto cada vez que se debate una cuestión social — en el que las metodologías llevadas a cabo por algunos sectores sindicales van acompañadas de actitudes que violentan y condicionan la gobernabilidad; iv) en este contexto político no se dan las condiciones necesarias para un diálogo social en los términos de la OIT; v) en estas condiciones resultan infructuosos los esfuerzos que pudiera hacer el Gobierno por el momento para llevar a la práctica las modificaciones propuestas por la OIT, y vi) el Gobierno se propone constituir una comisión tripartita para el tratamiento de las cuestiones planteadas por el sistema de control periódico de la OIT — incluida la reforma de la LAS — en la medida en que los actores sociales estén dispuestos a participar en la misma y se comprometan con sus resultados.

Al tiempo que recuerda que desde hace numerosos años pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para adecuar la legislación al Convenio, la Comisión espera firmemente que las comisiones tripartitas anunciadas por el Gobierno brinden un espacio de diálogo social apropiado para el examen de las cuestiones pendientes con el conjunto de los interlocutores sociales. La Comisión insta de nuevo firmemente al Gobierno a que, sin demora tras dicho examen tripartito, tome las medidas necesarias para poner la LAS y su decreto reglamentario en plena conformidad con el Convenio y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina al respecto.

Artículo 3. Derecho de los sindicatos de elegir libremente sus representantes y de organizar su administración y sus actividades. En sus precedentes comentarios la Comisión tomó nota de alegatos de organizaciones de trabajadores denunciando la injerencia del Gobierno en los procesos electorales sindicales y observó con preocupación que los mismos ya habían sido objeto de recomendaciones por parte del Comité de Libertad Sindical (en particular los casos núms. 2865 y 2979). La Comisión toma nota de que en sus observaciones la CGT-RA y la CTA Autónoma plantean nuevos alegatos de injerencia en procesos electorales y que estas organizaciones, junto a la CSI, denuncian la aparición de nuevas formas de injerencia gubernamental indebida en la vida de los sindicatos, aludiendo en particular a intervenciones de sindicatos — incluido con nombramiento de administradores externos — y a demoras injustificadas de las autoridades administrativas en la certificación de autoridades de los sindicatos — que se alega resultarían en la paralización de la capacidad de actuación de las organizaciones de trabajadores afectadas. Asimismo, la CGT-RA y la CTA Autónoma aluden a la publicación de la disposición núm. 17-E/2017 por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales — que ordena excluir del registro sindical las entidades que no hayan acreditado en el plazo de tres años su actividad operativa cumplimiento de obligaciones legales periódicas establecidas a la LAS — denunciando la CTA Autónoma que esta disposición atribuye un enorme poder discrecional para sancionar a sindicatos críticos. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno remite el tratamiento de estas cuestiones a la creación de las comisiones tripartitas propuestas. ***Recordando la importancia de asegurar la no injerencia de las autoridades administrativas en los procesos electorales sindicales y de evitar dilaciones indebidas en la certificación de autoridades sindicales, así como cesar toda otra intervención que menoscabe el derecho de los sindicatos de elegir libremente sus representantes y de organizar su administración y sus actividades, la Comisión espera firmemente que las cuestiones planteadas por las organizaciones de trabajadores serán examinadas por las nuevas comisiones tripartitas, en aras de que se tomen las medidas que puedan ser necesarias, y pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.***

Procedimiento administrativo para obtener la inscripción o la personería gremial. La Comisión recuerda que en sus precedentes comentarios pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias para evitar demoras injustificadas en los procedimientos de inscripción o de personería gremial. La Comisión toma nota de que la CSI, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma alegan nuevamente la persistencia de retrasos y de negativas de las autoridades administrativas a realizar inscripciones gremiales y reconocer personerías gremiales (se citan numerosos ejemplos, destacando que todavía no se ha otorgado la personería gremial a la Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina (FeTERA) ni a la CTA de los Trabajadores, transcurridos 18 y 14 años respectivamente desde sus solicitudes iniciales). Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas cuestiones también podrían tratarse ante las comisiones tripartitas propuestas. ***Recordando que este tipo de alegatos de dilaciones indebidas ha sido objeto de varios casos ante el Comité de Libertad Sindical, que ha referido a la Comisión los aspectos legislativos de esta problemática, la Comisión debe otra vez instar firmemente al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias, incluidas las que pudieran surgir de las discusiones tripartitas antes aludidas, para evitar demoras o denegaciones injustificadas en los procedimientos de inscripción o de personería gremial y que informe de todo avance al respecto.***

Barbados

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. ***La Comisión pide al Gobierno que brinde sus comentarios al respecto.***

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que además de cubrir los casos de despidos antisindicales, la nueva legislación en materia de derechos en el empleo estableciera una protección adecuada contra todos los actos de discriminación antisindical previstos en el artículo 1 del Convenio, así como sanciones adecuadas y disuasorias a fin de garantizar el derecho de sindicación. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la Ley de Derechos en el Empleo ha sido aprobada por el Parlamento y está en espera de promulgación. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la ley sólo cubre los casos de despidos antisindicales (artículo 27) y limita la protección a los empleados que han trabajado de forma continua durante un periodo de más de un año. La Comisión recuerda que una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical no debe limitarse a penalizar los despidos por motivos antisindicales, sino que debe cubrir todos los actos de discriminación antisindical (despido, traslado y otros actos perjudiciales) en todas las fases de la relación de trabajo, independientemente de la duración del empleo, e incluso en la fase de contratación. **La Comisión reitera sus comentarios anteriores y solicita al Gobierno que modifique la nueva ley para ponerla de conformidad con lo antes mencionado. Solicita al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.**

Además, la Comisión toma nota de que aunque los artículos 33 a 37 de la ley prevén la posibilidad de la reintegración y la readmisión en el puesto de trabajo y de que se conceda una indemnización, el monto máximo de indemnización que puede otorgarse a los empleados que han trabajado durante menos de dos años corresponde al salario de cinco semanas. En función del número de años de trabajo sin interrupción, este monto se aumentará con el salario correspondiente a entre dos semanas y media y tres semanas y media de salario por cada año de ese período (quinto anexo). La Comisión considera que los montos previstos no representan sanciones lo suficientemente disuasorias en relación con los despidos antisindicales. **Por consiguiente, solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el quinto anexo de la ley a fin de prever indemnizaciones adecuadas, que constituyan sanciones lo suficientemente disuasorias de los despidos antisindicales.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Belice

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1983)

Artículo 3 del Convenio. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que en comentarios anteriores solicitó al Gobierno que modificase la Ley de Resolución de Conflictos Laborales en los Servicios Esenciales (SDESA), de 1939, en su versión modificada, en la que se concede a las autoridades la potestad de someter los conflictos colectivos a arbitraje obligatorio y de prohibir o poner fin a una huelga en servicios que no se consideran esenciales en el sentido estricto del término, como el sector bancario, la aviación civil, las autoridades portuarias, el servicio postal, el sistema de seguridad social y el sector petrolero. La Comisión lamenta observar que, según las indicaciones del Gobierno, si bien el anexo de la SDESA se modificó dos veces en 2015, no se atendieron las reiteradas demandas de la Comisión. En cambio, mediante las dos modificaciones se amplió el ámbito de aplicación de la SDESA y se añadieron a la enumeración del anexo los «servicios portuarios que conllevan la carga o descarga del cargamento de un buque», que también son servicios que no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquéllos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. **La Comisión pide al Gobierno que modifique el anexo de la SDESA de modo que se permita el arbitraje obligatorio o la prohibición de huelgas únicamente en los servicios que sean esenciales en el sentido estricto del término, y que proporcione información sobre todo progreso que se realice en la materia.**

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)

La Comisión había tomado nota, en 2014, de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI). **La Comisión lamenta tomar nota que el Gobierno no ha respondido todavía a dichas observaciones y le pide una vez más que transmita sus comentarios a este respecto.**

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, a raíz de las observaciones de 2011 relativas a estos dos sectores, la Comisión había pedido al Gobierno que aportara estadísticas sobre el número de actos de discriminación antisindical denunciados ante las autoridades en el sector de las plantaciones bananeras y en las zonas francas de exportación, y sobre los resultados de las denuncias a este respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, durante el período de presentación de memorias (de julio de 2013 a junio de 2017), no se denunció a las autoridades de estos sectores ningún acto de discriminación antisindical. **Destacando que la ausencia de quejas de discriminación antisindical puede resultar de otros motivos que la ausencia de actos de discriminación antisindical, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que, por una parte, las autoridades competentes tengan plenamente en cuenta en sus actividades de control y prevención el problema de la discriminación antisindical, y por otra parte, que los trabajadores del país estén plenamente informados de sus derechos en este ámbito. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como toda estadística relativa a los actos de discriminación antisindical denunciados ante las autoridades.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para enmendar el artículo 27, 2), de la Ley de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (Registro, Reconocimiento y Estatuto) (TUEOA), que dispone que un sindicato puede ser autorizado como agente de negociación, si cuenta con al menos el 51 por ciento de los empleados, puesto que este requisito de una mayoría absoluta puede dar lugar a problemas, dado que, cuando no se alcanza este porcentaje, se denegará al sindicato mayoritario la posibilidad de negociación. En su último comentario, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) el órgano tripartito y el Consejo Consultivo del Trabajo llevaron a cabo discusiones sobre una posible enmienda a la ley, y ii) en base a estas consultas, recomendó que se redujera al 20 por ciento el umbral de representatividad sindical requerido para poder llamar a una votación, al tiempo que se mantenía el requisito de una aprobación del 51 por ciento de esos trabajadores que votan y el requisito de ser elegido con al menos el 40 por ciento de la unidad de negociación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se enmendó el artículo 27, 2), de la TUEOA, pero que siguen las discusiones al respecto entre los interlocutores sociales. **La Comisión pide al Gobierno que siga promoviendo el diálogo social, con el fin de armonizar el artículo 27, 2), de la TUEOA con el Convenio y que comunique información sobre toda evolución al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.**

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos concluidos y en vigor, en los sectores interesados, y el número de trabajadores comprendidos en estos convenios.**

Botswana

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1997)

La Comisión toma debida nota de los comentarios formulados por el Gobierno en respuesta a las observaciones de 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en las que alega despidos de trabajadores debido a las huelgas, y la represión brutal de la policía de un piquete pacífico organizado en agosto de 2016. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a las observaciones restantes realizadas por: i) la CSI, en 2014 (que alegan violaciones de los derechos sindicales en la práctica); ii) el Sindicato de Formadores y Trabajadores Afines (TAWU), en 2013 (que alegan favoritismo de ciertos sindicatos por el Gobierno), y iii) la CSI, en 2013 (que alegan actos de intimidación contra los trabajadores públicos que participan en manifestaciones). **Por lo tanto, la Comisión reitera su solicitud y confía en que el Gobierno responda a estas observaciones.**

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2018. Toma nota de la declaración del Gobierno durante la discusión, según la cual, desde la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (en adelante Comisión de la Conferencia), en 2017, el Gobierno y los representantes de los empleadores y de los trabajadores celebran consultas continuas sobre el proceso de enmienda de las leyes laborales. En particular, el Gobierno y los representantes de los empleadores y de los trabajadores se reunieron en siete ocasiones, entre julio de 2017 y abril de 2018, y en octubre de 2017 se realizaron progresos considerables al adoptarse un plan de acción tripartito de plazo determinado que se presentó al Equipo de Trabajo Decente de la OIT para África Oriental y Meridional. También hubo un consenso general sobre la necesidad de revisar las normas del trabajo a fin de colmar las lagunas, incorporar diversas decisiones judiciales y poner la legislación en conformidad con los convenios ratificados de la OIT. Si bien se había decidido anteriormente que la revisión se centraría en la Ley de Empleo y en la Ley de Sindicatos y de Organizaciones de Empleadores (Ley TUEO), se acordó que la revisión podía ampliarse para incluir otras leyes como la Ley de la Administración Pública (PSA) y la Ley de Conflictos Laborales (TDA), con miras a asegurar la armonización y la coherencia. Con el fin de llevar a cabo la revisión, el Gobierno y los interlocutores sociales acordaron establecer un comité de revisión de la legislación laboral (LLRC), integrado por miembros del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, cuyo objetivo fue liberar el proceso de revisión de la legislación laboral.

La Comisión de la Conferencia acogió con agrado el acuerdo del Gobierno para ampliar el alcance de la revisión de la legislación laboral e instó al Gobierno a que: i) adoptara medidas apropiadas en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con objeto de asegurar que la legislación laboral otorgue a los miembros de los servicios penitenciarios que no son considerados parte de la policía los derechos consagrados en el Convenio; ii) enmendara la Ley TUEO, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a fin de ponerla en conformidad con el Convenio; iii) proporcionara más información sobre el Tribunal de Apelación que dictamina sobre la invalidez de las disposiciones legales; iv) velara por que el registro de los sindicatos en la legislación y en la práctica esté de conformidad con el Convenio, y v) tramitara las solicitudes pendientes de registro de sindicatos, en particular en el sector público, que han cumplido los requisitos establecidos por la legislación. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que abordara estas recomendaciones en el marco de la revisión en curso de la legislación laboral y en plena consulta con los interlocutores sociales.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que indican los progresos realizados en la puesta en práctica de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. Toma nota además de que, según la memoria del Gobierno, la labor del LLRC está llevándose a cabo en colaboración con la Oficina, y de que se contrató a un experto para facilitar el proceso. El experto, acompañado por el Director del Equipo de Trabajo Decente de la OIT para África Oriental y Meridional, celebró una reunión con el LLRC el 21 de agosto de 2018. La reunión proporcionó una plataforma para que los interlocutores tripartitos compartieran sus expectativas. En general, el Gobierno y los interlocutores sociales expresaron la necesidad de que el experto ayude a revisar y modernizar las leyes laborales. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, el BFTU saluda los compromisos contraídos por el Gobierno, así como el acuerdo de este último de ampliar el alcance de la revisión de la legislación laboral. **La Comisión saluda las iniciativas tripartitas emprendidas en el proceso de revisión de la legislación laboral y, al tiempo que expresa la firme esperanza de que se tengan en cuenta sus comentarios anteriores en el marco de esta revisión, pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal penitenciario. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas legislativas necesarias para asegurar que los funcionarios de prisiones gocen del derecho a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos. Al tiempo que toma nota de la clasificación a nivel nacional del servicio penitenciario como «fuerza disciplinada», y de que el Tribunal de Apelación reafirmó la constitucionalidad de la exclusión de los funcionarios de prisiones de la cobertura de la TDA y la Ley TUEO, la Comisión reiteró que la policía, las fuerzas armadas y el servicio penitenciario eran regulados por una legislación aparte, que no concedía a los miembros del servicio penitenciario el mismo estatus que a las fuerzas armadas o la policía, y destacó que la excepción contemplada en el artículo 9 del Convenio para las fuerzas armadas y la policía debía interpretarse de manera restrictiva. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la legislación sigue prohibiendo al personal penitenciario que se syndique, y de que el grado en que esta cuestión se examinará en el marco de la revisión en curso de las leyes laborales aún no se conoce. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas legislativas necesarias para asegurar que los funcionarios de prisiones gocen del derecho a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los progresos realizados a este respecto en el marco de la revisión en curso de la legislación laboral.**

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con preocupación de que el artículo 46 de la TDA enumeraba una amplia lista de servicios esenciales, y de que, de conformidad con su artículo 46, 2), el Ministerio podía declarar esencial cualquier otro servicio si su interrupción durante al menos siete días pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o perjudica la economía. La Comisión recordó que los servicios esenciales, en los que el derecho de huelga puede restringirse o incluso prohibirse, como es el caso de Botswana, deberían limitarse a aquéllos cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, y subrayó que, si bien el impacto económico de las acciones colectivas y sus repercusiones en el comercio podrían ser lamentables, dichas consecuencias en sí mismas no deberían hacer que un servicio sea «esencial». Por lo tanto, la Comisión consideró que ciertos servicios enumerados en el artículo 46, incluyendo: la selección, el tallado y la venta de diamantes; los servicios de enseñanza; los servicios de radiodifusión gubernamentales; el Banco de Botswana; el servicio de funcionamiento y mantenimiento de ferrocarriles; los servicios veterinarios públicos, y los servicios necesarios para el funcionamiento de cualquiera de estos servicios, no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno ante la Comisión de la Conferencia, según la cual, durante su discusión con los interlocutores sociales había quedado claro que la enmienda de la TDA, en particular la revisión de la lista de servicios esenciales, era de vital importancia para los trabajadores, por lo que había considerado necesario reexaminar la lista de servicios esenciales. De esta manera, la TDA formaría parte de las leyes que deberían revisarse. En su memoria, el Gobierno indica que, en el proceso de enmienda de la TDA, se ha constituido un equipo de trabajo con el fin de revisar la lista de servicios esenciales en virtud del artículo 46. **Refiriéndose a la solicitud de la Comisión de la Conferencia de asegurar que la TDA esté en plena conformidad con el Convenio, la Comisión espera que se adopten las medidas legislativas necesarias en el marco del proceso de revisión en curso de la legislación laboral para asegurar que la lista contenida en el artículo 46, 1), de la TDA se limite a los servicios esenciales en el sentido estricto del término.**

La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que suministrara información sobre los progresos realizados en relación con la enmienda del artículo 48B, 1), de la Ley TUEO, que proporciona ciertos medios (tales como el acceso a las instalaciones o la representación de los miembros en caso de queja, etc.) sólo a los sindicatos que representan a al menos un tercio de los trabajadores de la empresa, y con el artículo 43 de la Ley TUEO, que prevé la inspección de las cuentas, los libros y los documentos de un sindicato por el funcionario encargado en «cualquier momento razonable». La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que confía en que los artículos mencionados anteriormente se consideren durante la revisión de la Ley TUEO. **Remitiéndose a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para asegurar que, en el marco de la reforma en curso de la legislación laboral, se enmienden las disposiciones antes mencionadas mediante la celebración de consultas plenas y francas con los interlocutores sociales, a fin de poner en conformidad estas disposiciones con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre cualquier progreso realizado en relación con esto y que comunique una copia de la Ley TUEO enmendada, una vez se haya adoptado.**

La Comisión toma nota de que, tras celebrar amplias consultas con los sindicatos de la administración pública, el nuevo proyecto de ley de la administración pública se encontraba en la fase de publicación en el *Diario Oficial*, lo que permitiría celebrar más consultas y lo que podría conducir a la introducción de nuevas enmiendas antes de su examen por el Parlamento. Tomó nota, sin embargo, de que la observación de la CSI de 2017 relativa a la negativa de permitir a la Federación Botswana de Sindicatos del Sector Público (BOFEPUSU) que expresara sus preocupaciones ante el Parlamento en lo referente a las enmiendas propuestas que afectan el sector público. La Comisión subrayó el valor de las consultas previas detalladas con los interlocutores sociales (incluida la BOFEPUSU) durante la preparación de la legislación que afectaba a sus intereses. En relación con esto, la Comisión toma nota de que tanto el Gobierno en su memoria como el BFTU en sus observaciones indicaron que el proceso de revisión tripartita de la legislación laboral — dirigido por el LLRC, que está integrado por representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, inclusive de la BOFEPUSU — se extendió con miras a incluir la Ley de Administración Pública núm. 30, de 2008 (ya que, a día de hoy, el proyecto de ley de la administración pública no se ha promulgado como ley). ***Saludando la naturaleza consultiva y tripartita de la revisión de la legislación laboral, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en la revisión de la Ley de Administración Pública, y a que proporcione una copia de la ley enmendada, una vez se haya adoptado.***

La Comisión recuerda al Gobierno que puede seguir recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina con respecto a todas las cuestiones planteadas en sus comentarios actuales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones formuladas en 2017 por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se refieren a alegatos de discriminación antisindical y de obstrucción a la negociación colectiva. Sin embargo, la Comisión ***lamenta*** tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna respuesta a las restantes observaciones formuladas por el Sindicato de Formadores y de Trabajadores Afines (TAWU), en las que se alegan violaciones del derecho a la negociación colectiva en la práctica.

La Comisión toma nota de las iniciativas tomadas en el marco de la revisión de la legislación laboral y observa, en particular, que, según el Gobierno, la Ley de la Administración Pública, de 2008, la Ley sobre Conflictos Sindicales (TDA), de 2016, y la Ley sobre Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (TUEO) tienen que ser armonizadas durante el proceso de revisión de la legislación laboral en curso. ***La Comisión expresa la esperanza de que se tomaran en cuenta sus comentarios que vienen a continuación, en el marco de la revisión, para garantizar la plena conformidad de estas leyes con el Convenio y de que se encuentre en condiciones de tomar nota de los progresos en un futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que comunique toda información sobre los progresos logrados.***

Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios de prisiones. En varias ocasiones, la Comisión, considerando que el servicio de prisiones no puede considerarse como parte de las fuerzas armadas o de la policía con fines de exclusión, en virtud del artículo 5 del Convenio, había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, incluidas las enmiendas legislativas pertinentes, para otorgar a los miembros del servicio de prisiones todos los derechos garantizados por el Convenio. ***Tomando nota de que, según el Gobierno, esta cuestión va a ser considerada durante la revisión de la legislación laboral en curso, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre los progresos realizados al respecto.***

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En varias ocasiones, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que todos los afiliados de los comités sindicales, incluidos los sindicatos no registrados, gocen de una adecuada protección contra la discriminación antisindical. La Comisión ***lamenta*** que el Gobierno haya dejado de comunicar, una vez más, todo comentario sobre este punto y recuerda que los derechos fundamentales otorgados por el Convenio a los afiliados o dirigentes de un sindicato, como la protección contra los actos de discriminación antisindical, abarca a todos los trabajadores que deseen constituir un sindicato o afiliarse al mismo. En consecuencia, esa protección no debería depender de la condición de que un sindicato esté o no registrado, incluso si las autoridades consideran que el registro es una simple formalidad. ***En estas circunstancias, la Comisión reitera una vez más su petición anterior.***

Artículos 2 y 4. Protección adecuada contra actos de injerencia. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos realizados en lo que respecta a: i) la adopción de disposiciones legislativas específicas que garanticen una adecuada protección contra los actos de injerencia de los empleadores, junto con sanciones efectivas y suficientemente disuasorias; ii) la derogación del artículo 35, 1), b), de la TDA, que autoriza a un empleador o a una organización de empleadores a recurrir al comisionado para retirar el reconocimiento otorgado a un sindicato, con el argumento de que este sindicato se niega a negociar de buena fe con el empleador, y iii) la enmienda del artículo 20, 3), de la TDA (este artículo, leído conjuntamente con el artículo 18, 1), a) y e), permite al Tribunal Laboral remitir un conflicto laboral al arbitraje, incluso cuando sólo una de las partes haya presentado un recurso urgente al tribunal para que emita un fallo sobre el conflicto), de modo que se garantice que el recurso al arbitraje obligatorio no afecte a la promoción de la negociación colectiva. En este sentido, la Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio sólo es aceptable en relación con los funcionarios adscritos a la administración del

Estado (*artículo 6 del Convenio*) o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término o en los casos de crisis nacional aguda. ***Tomando nota de la indicación del Gobierno de que estas cuestiones deberían considerarse durante la revisión de la legislación laboral en curso y que ya se había buscado la asistencia técnica con tal fin, la Comisión espera que se adopten las medidas legislativas necesarias para armonizar estas disposiciones con el Convenio.***

Umbral de representatividad. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 48 de la TUEO, leído conjuntamente con el artículo 32 de la TDA, el umbral mínimo para que un sindicato sea reconocido por el empleador a los fines de la negociación colectiva, es de un tercio del total de la fuerza de trabajo considerada. La Comisión recordó que la determinación del umbral de representatividad para designar un agente exclusivo para la negociación de los convenios colectivos que han de aplicarse a todos los trabajadores en un sector o establecimiento, es compatible con el Convenio en la medida en que las condiciones requeridas no constituyan en la práctica un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. ***Tomando nota de la indicación del Gobierno de que estas cuestiones deberían considerarse durante la revisión de la legislación laboral en curso, la Comisión espera que se enmienden las mencionadas disposiciones para garantizar que, si ningún sindicato llega al umbral requerido para ser reconocido como agente de negociación, debería darse a los sindicatos la posibilidad de negociar, de manera conjunta o por separado, al menos en nombre de sus propios afiliados.***

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que especificara qué disposiciones del Reglamento de la Administración Pública, de 2011, no están abiertas para la negociación e invitó al Gobierno que reconsiderara la limitación impuesta al ámbito de aplicación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público no adscritos a la administración del Estado. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, las disposiciones del Reglamento de la Administración Pública constituyen unas cláusulas mínimas de protección legislativa a las que las partes pueden atenerse para negociar unas mejores y/o adicionales prestaciones, y que deberían leerse con la TUEO que también se aplica al sector público. Además, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, si bien la enmienda a la Ley de la Administración Pública, de 2008, se encuentra en un estado avanzado y lista para su presentación al Parlamento, sin embargo, ésta fue incluida en el mecanismo de revisión de la legislación laboral. ***Si bien toma debida nota de la declaración del Gobierno, la Comisión espera que el proceso de revisión de la legislación laboral en curso garantice que las disposiciones que definen el ámbito de aplicación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público no adscritos a la administración del Estado, den pleno cumplimiento al Convenio.***

Artículo 4. Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos suscritos y en vigor en el país, indicando los sectores y el número de trabajadores comprendidos.

La Comisión recuerda que el Gobierno puede seguir recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina respecto de todas las cuestiones planteadas en sus presentes comentarios.

Brasil

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de: i) la Asociación Nacional de Magistrados del Trabajo (ANAMATRA), recibidas el 1.º de junio de 2018; ii) la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, y iii) la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enviadas junto con las observaciones de la CSI y que también se recibieron el 1.º de septiembre de 2018. La Comisión toma nota de que estas observaciones, presentadas tanto en virtud del presente Convenio como del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), se refieren a los aspectos de la ley núm. 13467 relativos a la negociación colectiva.

Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, en las que también se abordan los aspectos de la ley núm. 13467 relativos a la negociación colectiva examinados por la Comisión en su comentario anterior.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, la Comisión de la Conferencia) en junio de 2018 sobre la aplicación del Convenio por el Brasil. En particular, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, teniendo en cuenta que la Comisión de Expertos examinó este caso fuera del ciclo regular de presentación de memorias y tomando nota de las declaraciones orales realizadas por el representante gubernamental ante la Comisión en lo que respecta a la reforma laboral y la conformidad de la misma con sus obligaciones en virtud del Convenio, así como de la discusión subsiguiente, recomendó al Gobierno que: i) proporcionara información y análisis sobre la aplicación de los principios de la negociación colectiva libre y voluntaria en la nueva reforma de la legislación laboral, y ii) suministrara información sobre las consultas tripartitas con los interlocutores sociales relativas a la reforma de la legislación laboral.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Adopción de la ley núm. 13467. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno sobre el examen anticipado de la aplicación del Convenio por la Comisión, en 2017. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el mandato de la Comisión consiste en examinar la aplicación de los convenios de la OIT por los Estados Miembros en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales, y ii) en este sentido, tal como se mencionó en la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, el Gobierno habría preferido que el examen del Convenio se realizara en el marco del ciclo regular de presentación de memorias a fin de permitir que transcurriera el tiempo suficiente para poder evaluar en la práctica la aplicación de la ley. A este respecto, la Comisión señala que, en 2017, tras haber recibido observaciones, tanto de las organizaciones sindicales como de las organizaciones de empleadores, sobre el proceso de reforma de la legislación laboral y habiendo tomado nota de las afirmaciones de las organizaciones sindicales en relación a que la adopción de la ley núm. 13467 podía afectar de manera significativa al ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, consideró apropiado, en aplicación de los criterios que ha establecido en la materia, examinar la aplicación del Convenio por el Brasil de forma anticipada.

Articulación entre la negociación colectiva y la ley. En su comentario anterior, la Comisión observó que en virtud de la ley núm. 13467, adoptada el 13 de noviembre de 2017, el nuevo artículo 611-A de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) introdujo el principio general según el cual los convenios y acuerdos colectivos prevalecen sobre la legislación, permitiendo de esta forma que, a través de la negociación colectiva, no se dé efecto a disposiciones protectoras de la legislación, teniendo como único límite los derechos constitucionales previstos en el artículo 611-B de la CLT. Considerando que el principio mencionado era contrario al objetivo de promover la negociación colectiva libre y voluntaria, la Comisión pidió al Gobierno que examinara, en consulta con los interlocutores sociales, la revisión de los artículos 611-A y 611-B a fin de ponerlos en conformidad con el artículo 4 del Convenio.

A este respecto, la Comisión toma nota en primer lugar de las observaciones de las organizaciones sindicales nacionales e internacionales sobre el alcance y el impacto del principio establecido en el artículo 611-A de la CLT. En particular, la Comisión toma nota de que las organizaciones sindicales alegan, apoyándose, entre otros, en el informe del Ministerio Público del Trabajo brasileño (*Ministério Público do Trabalho*), que las posibilidades de dejar de lado las disposiciones protectoras de la legislación a través de acuerdos y convenios colectivos son particularmente amplias e importantes en la medida en la que: i) la lista de materias derogables que figura en el artículo 611-A de la CLT se define como no exhaustiva; ii) el artículo 611-A prevé explícitamente que la ausencia de contraparte a la derogación de una protección legal no constituye una causa de nulidad de las cláusulas de los convenios y acuerdos colectivos; iii) las derogaciones que son posibles en virtud del artículo 611-A pueden ser el fruto de acuerdos de empresa que, en virtud del artículo 620 de la CLT, prevalecen a su vez sobre los convenios colectivos que cubren un ámbito más amplio; iv) las materias explícitamente definidas como derogables en el artículo 611-A cubren elementos básicos de la protección de los trabajadores, tales como el tiempo de trabajo y de descanso, incluida la reglamentación del trabajo y de su duración en entornos insalubres; v) en violación de los principios básicos del derecho internacional del trabajo, los artículos 611-A y 611-B de la CLT determinan que las cuestiones en materia del tiempo de trabajo y de descanso no se considerarán relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo; vi) la posibilidad de establecer excepciones a las disposiciones legales que establecen el sistema de remuneración basado en la productividad del trabajo puede tener consecuencias peligrosas sobre la duración del trabajo y la salud de los trabajadores, y vii) no se señala que el respeto de los convenios internacionales del trabajo ratificados por el Brasil constituya un límite a las posibilidades de establecer excepciones en la legislación del trabajo a través de la negociación colectiva, lo que pone especialmente en peligro la aplicación del Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1), el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30), y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) de la OIT.

En segundo lugar, la Comisión toma nota de que las organizaciones sindicales afirman que la facultad de dejar de lado las disposiciones protectoras de la legislación crea las condiciones para una competencia a la baja entre empleadores en materia de condiciones de trabajo y de empleo, lo que en la práctica hará que la negociación colectiva pierda su función de instrumento de mejora de las condiciones de trabajo. La Comisión también toma nota de que en el informe del Ministerio Público del Trabajo, que la CUT ha adjuntado, se afirma que en el contexto particular de las relaciones colectivas del trabajo en el Brasil el principio establecido en el artículo 611-A de la CLT puede conducir a que los representantes sindicales sean objeto de amenazas y presiones para que acepten las excepciones a la legislación y que autorizar a todos los sindicatos, independientemente de su representatividad efectiva, a negociar condiciones que estén por debajo de la protección legal, podría constituir una incitación a la corrupción en las relaciones colectivas de trabajo. Por último, la Comisión toma nota de que las organizaciones sindicales afirman que las primeras estadísticas disponibles confirman los temores anteriormente expresados sobre las consecuencias nefastas de dar prioridad a los acuerdos y convenios colectivos sobre la legislación. A este respecto, la Comisión toma nota de los diferentes estudios transmitidos por las organizaciones sindicales en los que se indica que el número de acuerdos y convenios colectivos firmados durante el primer semestre de 2018 ha sido entre un 30 y un 45 por ciento inferior al del primer semestre de 2017.

Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones de empleadores en las que se afirma que: i) el principio de la negociación colectiva libre y voluntaria está plenamente garantizado en la Constitución brasileña que, en su artículo 7, también prevé supuestos en los que es posible, a través de la negociación colectiva, flexibilizar ciertos derechos; ii) el reconocimiento de la primacía de la negociación colectiva sobre la legislación era necesario en un

contexto hasta ahora marcado por el intervencionismo excesivo del Poder Judicial en los acuerdos firmados por los interlocutores sociales; iii) la primacía de la negociación colectiva sobre la legislación garantizará, por lo tanto, una mayor seguridad jurídica a los interlocutores sociales, lo que permitirá promover la negociación colectiva; iv) sin embargo, la primacía de la negociación colectiva sobre la legislación no es para nada absoluta ya que el artículo 611-B de la CLT establece una larga lista de derechos inderogables, tales como la duración normal del trabajo diario (ocho horas) y semanal (44 horas) o el 50 por ciento de remuneración adicional por las horas extraordinarias, y v) la negociación colectiva sigue siendo totalmente libre y voluntaria ya que los sindicatos pueden decidir perfectamente no firmar un acuerdo que contenga excepciones a la legislación.

Por último, la Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre el contenido y el alcance de los artículos 611-A y 611-B de la CLT. A este respecto, el Gobierno afirma que: i) la reforma refuerza la función y el valor de la negociación colectiva aumentando su campo material de intervención, lo cual es plenamente conforme con la finalidad de los convenios de la OIT en la materia; ii) la primacía reconocida a los acuerdos y convenios colectivos sobre la legislación refuerza la seguridad jurídica de la negociación colectiva, elemento indispensable habida cuenta de la tradicional injerencia del Poder Judicial brasileño en la materia, y permite flexibilizar una legislación del trabajo excesivamente detallada; iii) la reforma asegura al mismo tiempo la protección de numerosos derechos contenidos en el artículo 611-B de la CLT; iv) la posibilidad de dejar de lado disposiciones legislativas específicas no significa que el acuerdo o convenio colectivo no sea en su conjunto más favorable a los trabajadores; v) de esta forma se consagra legislativamente la posición del Tribunal Supremo Federal que en una sentencia reciente ha reconocido la primacía de la negociación colectiva desde el momento en que la legislación garantice una «base mínima de civilización»; vi) el reconocimiento de la primacía de la negociación colectiva sobre la legislación va en la dirección de lo que propuso un sindicato metalúrgico en 2011, y vii) el artículo 611-A no obliga en ningún caso a que los sindicatos firmen acuerdos que dejen de lado las disposiciones protectoras de la legislación y los interlocutores sociales pueden elegir continuar siendo regulados, cuando esto redunde en interés de las partes, por las disposiciones legales. La Comisión también toma nota de las consideraciones del Gobierno sobre el significado y el alcance del Convenio en materia de negociación colectiva. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que: i) no hay ningún elemento en el *artículo 4* del Convenio que permita establecer un vínculo entre los contenidos respectivos de los convenios colectivos y de la legislación, ya que el único objetivo del Convenio es promover la negociación colectiva; ii) lo mismo ocurre con el artículo 2 del Convenio núm. 154 que define la finalidad de la negociación colectiva y cuyo único objetivo también consiste en ampliar al máximo su ámbito de aplicación; iii) no es jurídicamente correcto referirse a los trabajos preparatorios del Convenio núm. 154 para interpretar el Convenio núm. 98, y iv) de todas formas, no se justifica recurrir a los trabajos preparatorios en el caso del *artículo 4* del Convenio en la medida en que, en virtud del artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, recurrir a los trabajos preparatorios constituye únicamente un medio complementario de interpretación al cual conviene recurrir para confirmar los resultados de las reglas generales de interpretación o cuando éstas conduzcan a un resultado ambiguo, oscuro o manifiestamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso.

La Comisión toma debida nota de la información proporcionada tanto por las organizaciones de empleadores y de trabajadores como por el Gobierno sobre los artículos 611-A y 611-B de la CLT y, en particular, acerca de los vínculos entre dichas disposiciones y las obligaciones que se derivan del Convenio, sobre el alcance de las excepciones a la legislación a través de la negociación colectiva que son posibles en virtud del artículo 611-A así como sobre los límites establecidos a este respecto por el artículo 611-B. La Comisión observa que de todo esto se deriva que: i) la posibilidad de establecer excepciones a las disposiciones protectoras de la legislación a través de la negociación colectiva no es absoluta ya que el artículo 611-B establece una lista limitativa de 30 derechos (que incluyen, por ejemplo, el salario mínimo, la duración normal del trabajo diario (ocho horas) y semanal (44 horas) o el porcentaje de remuneración adicional por las horas extraordinarias), basados en la Constitución brasileña que no pueden dejarse de lado por medio de acuerdos o convenios colectivos, y ii) las posibilidades de establecer excepciones a la legislación que ofrece el artículo 611-A son, sin embargo, muy amplias en la medida en que, por una parte, los 14 puntos explícitamente mencionados en este artículo cubren numerosos aspectos de la relación de trabajo y que, por otra parte, esta lista, contrariamente a la que figura en el artículo 611-B, es únicamente indicativa («entre otros»). Habida cuenta de estos elementos, la Comisión observa que, aunque está limitada por un número significativo de excepciones, la posibilidad de dejar de lado las disposiciones protectoras de la legislación a través de la negociación colectiva establecida como principio general por el artículo 611-A de la CLT, la cual puede ser realizada tanto por convenio colectivo de rama como por acuerdo de empresa, sigue siendo especialmente amplia. Señalando que el *artículo 4* del Convenio, al igual que los Convenios núms. 151 y 154 también ratificados por el Brasil, tiene por objetivo general promover la negociación colectiva a fin de establecer unas condiciones de trabajo más favorables que las previstas en la legislación, la Comisión recuerda que considera que introducir la posibilidad general de reducir a través de la negociación colectiva la protección legislativa de los trabajadores puede, en la práctica, tener un importante efecto disuasorio sobre el ejercicio de este derecho y contribuir a la deslegitimación duradera de este mecanismo. En el presente caso, la Comisión considera que la amplitud de las excepciones permitidas por el artículo 611-A de la CLT puede afectar la finalidad y la capacidad de atracción del mecanismo de negociación colectiva del país, o, al menos, modificar significativamente la percepción de este último por los actores interesados y comprometer de esta forma su promoción y su ejercicio. A este respecto, la Comisión toma nota con *preocupación* de la información que figura en los estudios transmitidos por las organizaciones sindicales en relación con una reducción significativa del

número de convenios y acuerdos colectivos firmados en el país desde la entrada en vigor de la reforma legislativa en noviembre de 2017. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno menciona que las organizaciones sindicales continúan negociando y firmando convenios y acuerdos colectivos.

Habida cuenta de lo señalado anteriormente, la Comisión recuerda que considera que, si bien pueden ser compatibles con el Convenio disposiciones legislativas de ámbito específico, relativas a determinados aspectos de las condiciones de trabajo, que prevean de forma circunscrita y motivada su derogabilidad por medio de la negociación colectiva, en cambio, una disposición que establezca la derogabilidad general de la legislación laboral por medio de la negociación colectiva sería contraria al objetivo de promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria prevista por el artículo 4 del Convenio. Señalando la importancia de obtener, en la medida de lo posible, un acuerdo tripartito sobre las reglas básicas de la negociación colectiva, la Comisión pide, por consiguiente al Gobierno que adopte, en consulta con los interlocutores sociales representativos, las medidas necesarias para revisar los artículos 611-A y 611-B de la CLT a fin de enmarcar de manera más precisa las situaciones en las que las cláusulas sobre excepciones a la legislación podrían negociarse así como el alcance de estas últimas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo avance a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información detallada en relación con la evolución del número de convenios y acuerdos colectivos concluidos en el país, así como en relación con el número, el contenido y el alcance de las cláusulas derogatorias a la legislación incluidas en dichos acuerdos y convenios.

Articulación entre la negociación colectiva y los contratos individuales de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del nuevo artículo 444 de la CLT, los trabajadores que dispongan de un diploma de enseñanza superior y que perciban un salario por lo menos dos veces superior al límite máximo del beneficio del régimen general de la previsión social (actualmente alrededor de 11 000 reales, o sea aproximadamente 3 390 dólares de los Estados Unidos) podrán derogar, por medio de sus contratos individuales de trabajo, lo dispuesto en la legislación y en los convenios y acuerdos colectivos. La Comisión recordó que las disposiciones legislativas que permiten que los contratos individuales de trabajo contengan cláusulas contrarias a aquéllas contenidas en los contratos colectivos aplicables (siendo siempre posible que los contratos individuales de trabajo prevean cláusulas más favorables para los trabajadores) no son compatibles con la obligación de promoción de la negociación colectiva que figura en el artículo 4 del Convenio. A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que examinara, en consulta con los interlocutores sociales, la revisión de esta disposición a fin de ponerla en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que en relación con el artículo 444 de la CLT el Gobierno señala que: i) esta disposición concierne a un porcentaje muy reducido de trabajadores (alrededor del 2 por ciento de la población activa) que disponen de la autonomía suficiente para defender adecuadamente sus derechos en el marco de una negociación individual; ii) la situación de dichos trabajadores no es generalmente contemplada por los convenios colectivos; iii) los trabajadores cubiertos por el artículo 444 de la CLT continúan disfrutando de la garantía de los derechos fundamentales enumerados en el artículo 611-B de la CLT, y iv) el artículo 4 del Convenio no prohíbe que los contratos individuales de trabajo puedan establecer excepciones al contenido de los convenios colectivos de trabajo. A este respecto, la Comisión recuerda que la obligación de promover la negociación colectiva establecida en el artículo 4 del Convenio requiere que los convenios colectivos aplicables al empleador no puedan ser derogados por la negociación individual de las cláusulas del contrato de trabajo, en el entendido de que los contratos de trabajo siempre pueden prever condiciones de trabajo y de empleo más favorables. La Comisión recuerda que, por otra parte, este principio se expresa explícitamente en el párrafo 3 de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91). Señalando que los mecanismos de negociación colectiva pueden tomar en cuenta las necesidades e intereses específicos de categorías diferentes de trabajadores, que pueden, si así lo desean, ser representadas por sus propias organizaciones, la Comisión recuerda que el presente Convenio es plenamente aplicable a los trabajadores cubiertos por el artículo 444 de la CLT en la medida en que, en virtud de sus artículos 5 y 6, sólo pueden excluirse de su campo de aplicación las fuerzas armadas y la policía (artículo 5) y los funcionarios públicos en la administración del Estado (artículo 6). ***Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte, previa consulta con los interlocutores sociales representativos interesados, las medidas necesarias para garantizar la conformidad del artículo 444 de la CLT con el Convenio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre todos los avances que se produzcan a este respecto.***

Ámbito de aplicación del Convenio. Trabajadores autónomos o independientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que respondiera a las organizaciones sindicales que alegan que la ampliación de la definición de trabajadores independientes que se deriva del nuevo artículo 442-B de la CLT tiene por efecto excluir a una categoría importante de trabajadores de los derechos reconocidos en el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) si bien el Convenio no define el término trabajador, por definición no es aplicable a los trabajadores autónomos, y además la negociación colectiva constituye un mecanismo poco adaptado al carácter ocasional e independiente de su actividad, y que ii) el artículo 442-B de la CLT tiene por único objetivo aclarar los criterios ya existentes en la legislación brasileña en materia de definición de los trabajadores autónomos. La Comisión recuerda que el artículo 4 del Convenio prevé el principio de negociación colectiva libre y voluntaria y la autonomía de las partes en la negociación en relación con todos los trabajadores y todos los empleadores cubiertos por el Convenio. En lo que respecta a los trabajadores independientes, la Comisión recuerda que, en el párrafo 209 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, señaló que el derecho a la negociación colectiva también debería ser aplicable a las

organizaciones de trabajadores independientes. Al mismo tiempo, la Comisión es consciente de que los mecanismos de negociación colectiva aplicables a las relaciones tradicionales de trabajo puede que no se adapten a las circunstancias y condiciones específicas de las actividades realizadas por los trabajadores independientes. ***Por consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a realizar consultas con todas las partes interesadas a fin de garantizar que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos e independientes, sean autorizados a participar en una negociación colectiva libre y voluntaria. Considerando que esas consultas pueden permitir que el Gobierno y los interlocutores sociales interesados identifiquen las adaptaciones que habría que introducir en los mecanismos de negociación colectiva a fin de facilitar su aplicación a los trabajadores autónomos e independientes, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.***

Articulación entre los diferentes niveles de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de las indicaciones de la CSI respecto al artículo 620 de la CLT, en su tenor modificado por la ley núm. 13467. La Comisión observa que, según esta disposición, las condiciones establecidas en los acuerdos colectivos de trabajo (concluidos, en virtud de la legislación brasileña, a nivel de una o varias empresas) siempre prevalecen sobre las que se establecen en los convenios colectivos de trabajo (que se concluyen, en virtud de la legislación brasileña, a un nivel más amplio, como el nivel de sector de actividad o de profesión). La Comisión toma nota de que de esta disposición se desprende que las cláusulas más favorables a los trabajadores negociadas a nivel del sector de actividad o de profesión en todos los casos serán superadas por cláusulas menos protectoras negociadas a nivel de empresa. ***Recordando que con arreglo al artículo 4 del Convenio la negociación colectiva debe promoverse a todos los niveles y que, según el principio general enunciado en el párrafo 3, 1), de la Recomendación núm. 91, todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebra el contrato, la Comisión pide al Gobierno que: i) indique de qué forma se garantiza el respeto de los compromisos adoptados por los interlocutores sociales en el marco de los convenios concluidos a nivel de sector de actividad o de profesión, y ii) transmita información sobre el impacto del artículo 620 de la CLT sobre el recurso a la negociación de convenios colectivos y de acuerdos colectivos así como sobre las tasas de cobertura global de la negociación colectiva en el país.***

Consultas previas a la adopción de la ley núm. 13467. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada a este respecto por el Gobierno y los interlocutores sociales y observa las diferentes apreciaciones de las organizaciones sindicales, por una parte y de las organizaciones empresariales y del Gobierno por otra. Al tiempo que toma debida nota de los intensos debates que han tenido lugar en las dos cámaras del Parlamento con la participación de organizaciones sindicales y empresariales, la Comisión no dispone de elementos que indiquen que la discusión parlamentaria haya estado precedida de un proceso estructurado de diálogo social tripartito destinado a construir acuerdos sobre el contenido de la reforma. ***Habida cuenta de la necesaria puesta en conformidad de distintos aspectos de esta reforma con el Convenio, la Comisión invita al Gobierno a entablar un diálogo amplio con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a fin de garantizar que, en la medida de lo posible, las reformas aporten a la legislación en materia de negociación colectiva sean fruto de un consenso de los interlocutores sociales. Recordando que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión le pide que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.***

Observación de 2016. En su comentario anterior, la Comisión también pidió al Gobierno que transmitiera respuestas detalladas sobre los otros puntos que figuran en su observación de 2016 relativos a: i) la protección adecuada contra la discriminación antisindical; ii) el arbitraje obligatorio en el contexto de la obligación de promover la negociación colectiva libre y voluntaria; iii) el derecho de negociación colectiva en el sector público, y iv) la sumisión de los convenios colectivos a la política económica y financiera. ***La Comisión pide de nuevo al Gobierno que responda a estos comentarios indicando, en particular, en relación con cada uno de ellos, los posibles impactos de la reforma de la legislación laboral de 2017.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camerún

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

Aplicación del Convenio en la práctica. En lo que respecta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2016, relativas en particular a casos de injerencia de las autoridades en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Fako (FAWU), y en los sectores de la construcción y la salud; a actos de vandalismo contra los locales de un sindicato (DISAWOFA) en el departamento de Fako; al acoso sindical contra los miembros sindicales del FESYLTEFCAM en el sector bancario, y a la violencia policial reiterada contra los huelguistas en el sector de la construcción, la Comisión ***lamenta*** constatar que el Gobierno no ha proporcionado la información detallada que se le pidió.

Del mismo modo, tampoco han recibido una respuesta concreta las observaciones, recibidas el 6 de septiembre de 2016, de la Internacional de la Educación (IE) y de sus afiliados de la plataforma de los sindicatos de la educación, según las cuales las ocho organizaciones sindicales de funcionarios públicos del sector de la educación siguen sin gozar de reconocimiento legal, a pesar de sus esfuerzos por obtener la aprobación de las autoridades competentes, ya que el

Gobierno se limita a señalar que el retraso en el registro de los sindicatos no era algo específico de los sindicatos de docentes, sino que estaba relacionado con la vacante del puesto de secretario de los sindicatos. ***Al tiempo que reitera su preocupación respecto de los alegatos que han llegado a su conocimiento, la Comisión insta de nuevo firmemente al Gobierno a que presente comentarios detallados sobre todas las cuestiones suscitadas.***

Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT), recibidas el 4 de septiembre de 2018, en las que se describe la intervención violenta de la policía para reprimir la huelga de los cargadores de muelle del puerto de Duala, el 22 de junio de 2018, la detención arbitraria de 32 cargadores de muelle, así como el retraso de las autoridades públicas a la hora de realizar una investigación independiente. ***Al tiempo que toma nota con preocupación una vez más de alegatos de actos de violencia policial contra huelguistas, la Comisión insta firmemente al Gobierno que proporcione comentarios e información detallada a este respecto.***

Cuestiones legislativas. Ley relativa a la Represión de los Actos de Terrorismo. La Comisión recuerda que, en su reunión de noviembre de 2016, el Comité de Libertad Sindical formuló recomendaciones sobre el tema de la aplicación de la Ley relativa a la Represión de los Actos de Terrorismo (núm. 2014/028, de 23 de diciembre de 2014) y remitió a la Comisión el examen de la conformidad de la ley con las disposiciones del Convenio [véase el caso núm. 3134, 380.º informe]. A este respecto, la Comisión desea señalar una vez más a la atención del Gobierno lo siguiente: en virtud del artículo 2 de la ley, «Se castigará con la pena de muerte a aquél que [...] cometa cualquier acto o profiera cualquier amenaza que pueda causar la muerte, poner en peligro la integridad física, u ocasionar daños corporales o materiales, daños a recursos naturales, al medio ambiente o al patrimonio cultural, y que tenga por objeto: 1, a) intimidar a la población, provocar una situación de terror u obligar a la víctima, al gobierno y/o a una organización nacional o internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, cualquier acto, a adoptar una posición particular, o a renunciar a ésta, o a actuar con arreglo a ciertos principios; 2, b) perturbar el buen funcionamiento de los servicios públicos, la prestación de servicios esenciales a la población, o provocar una situación de crisis dentro de la población [...]». La Comisión expresa de nuevo su ***profunda preocupación*** por el hecho de que algunas de estas situaciones podrían hacer referencia a actos vinculados con el ejercicio legítimo de actividades sindicales por parte de representantes de organizaciones de trabajadores o empleadores en virtud del Convenio. La Comisión se refiere específicamente a acciones de protesta o a huelgas que tendrían repercusiones directas en los servicios públicos. La Comisión recuerda además que, habida cuenta de la pena aplicada, dicha disposición puede tener un carácter particularmente intimidante en lo que respecta a los representantes sindicales o patronales que se expresen o actúen en el marco de sus mandatos. ***Al tiempo que toma nota de que el Gobierno ha indicado que las preocupaciones de la Comisión se tendrán en cuenta de cara a la aplicación de la ley y que ésta sólo se centra en los actos terroristas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 2 de la Ley relativa a la Represión de los Actos de Terrorismo, con el fin de asegurar que no se aplique a las actividades legítimas realizadas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, protegidos éstos por el Convenio. Mientras tanto, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para garantizar: i) que la aplicación de esta ley no perjudique a los dirigentes y miembros que se expresen en el marco de sus mandatos y que realicen actividades sindicales o patronales en virtud del derecho que confiere el artículo 3 del Convenio, y ii) que la ley se aplique de tal manera que no se perciba como una amenaza o una intimidación destinada a los sindicalistas o al movimiento sindical en su conjunto.***

Reforma legislativa. Artículos 2 y 5 del Convenio. La Comisión recuerda desde hace varios años la necesidad de: i) modificar la ley núm. 68/LF/19, de 18 de noviembre de 1968 (que prevé que la existencia jurídica de un sindicato o de una asociación profesional de funcionarios esté sujeta al acuerdo previo del Ministro de Administración Territorial); ii) modificar los artículos 6, 2), y 166 del Código del Trabajo (relativos a la imposición de una sanción a los promotores de un sindicato que aún no está registrado que se comportan como si lo estuviera), y iii) derogar el artículo 19 del decreto núm. 69/DF/7, de 6 de enero de 1969 (que establece la autorización previa para la afiliación de los sindicatos de funcionarios a una organización internacional). ***La Comisión insta al Gobierno a que proporcione información sobre todo progreso o desarrollo al respecto.***

Al tiempo que lamenta profundamente una vez más que, como ha comunicado el Gobierno, el proceso de revisión del Código del Trabajo aún no se haya finalizado, la Comisión se ve obligada una vez más a instar firmemente al Gobierno a que concluya este proceso de revisión legislativa sin más demora, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio sobre los puntos mencionados.

Chad

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota con ***profunda preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2009.

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación. Tomando nota de que el artículo 3 del Estatuto General de la Función Pública excluye de su campo de aplicación al personal de las colectividades locales y de los establecimientos públicos, así como a los auxiliares de la administración, cuyo trabajo está regido por un texto particular, la Comisión pide al Gobierno que

precise cuáles son los textos en vigor que reconocen a estas distintas categorías del personal de los derechos y garantías previstos en el Convenio. En caso de que estos textos que rigen los estatutos particulares de estos empleados públicos otorguen los derechos y garantías previstos en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que transmita copia de ellos.

Artículo 4. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que si bien el artículo 10 del Estatuto General de la Función Pública establece que no puede discriminarse a los empleados públicos debido a sus opiniones sindicales, ninguna disposición del Estatuto en cuestión o de los demás textos aplicables a los funcionarios públicos prevé la protección contra la discriminación en el ejercicio de las actividades sindicales. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas para que la legislación incluya disposiciones explícitas que garanticen una protección adecuada contra la discriminación de los empleados públicos debido a su afiliación o a sus actividades sindicales.

Artículo 5. Protección adecuada contra los actos de injerencia. Tomando nota de que ni el Estatuto General de la Función Pública ni los otros textos aplicables a los empleados públicos contienen disposiciones que prohíban los actos de injerencia de las autoridades públicas en los asuntos internos de los sindicatos y recordando la necesidad, en virtud del Convenio, de garantizar plenamente a las organizaciones una protección adecuada contra todos los actos de injerencia de las autoridades públicas en su formación, funcionamiento y administración, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para incluir en la legislación este tipo de disposiciones en materia de protección.

Artículo 6. Facilidades que deben proporcionarse a los representantes de los trabajadores. Tomando nota de que en el Estatuto General de la Función Pública no hay disposiciones que prevean explícitamente facilidades para los representantes de los trabajadores, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a adoptar medidas, tal como lo requiere el Convenio, a fin de garantizar, a través de la adopción de disposiciones legislativas o por otros medios, que se proporcionen facilidades a los representantes de las organizaciones de funcionarios públicos reconocidas, a fin de permitirles cumplir rápida y eficazmente sus funciones tanto durante sus horas de trabajo como fuera de éstas.

Artículo 7. Procedimientos de determinación de las condiciones de empleo. La Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir el texto del decreto que establece la composición, el funcionamiento y la designación de los miembros del Comité consultivo de la función pública, y le pide que indique todas las consultas o todos los acuerdos realizados con las organizaciones sindicales del sector público durante los últimos años.

Artículo 8. Solución de conflictos. Tomando nota de la respuesta del Gobierno sobre la falta de disposiciones a este respecto, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a adoptar medidas para establecer un procedimiento que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad (como la mediación, la conciliación o el arbitraje), a fin de solucionar los conflictos que se planteen en relación con la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno adopte sin demora y en consulta con las organizaciones representativas interesadas todas las medidas necesarias para dar seguimiento a sus comentarios y de esa forma dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Congo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2014 en relación con una huelga de docentes que habría conducido a: i) el arresto arbitrario de docentes sindicalistas por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), y ii) el secuestro, en junio de 2013, del Sr. Dominique Ntsienkoulou, miembro de la Concertación para la Revalorización de la Profesión Docente (CRPE), por agentes de la Dirección Provincial de Vigilancia del Territorio (DDST) y su desaparición desde entonces. La Comisión toma nota de que según el Gobierno: i) la Dirección General de la Policía (y no la DGST) ha convocado a los dirigentes de la CRPE para explicarles los motivos por los que las acciones que llevó a cabo en el marco de la huelga rebasaron ciertos límites, y ii) el Sr. Ntsienkoulou abandonó su domicilio por voluntad propia y nunca ha sido secuestrado ni arrestado ni perseguido por la policía nacional. Habida cuenta de las discrepancias entre la información transmitida por la CSI y la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión quiere recordar que los poderes públicos no deben intervenir en las actividades sindicales legítimas arrestando y deteniendo de manera arbitraria a trabajadores y que el arresto y la detención de sindicalistas, sin que se les impute delito alguno, o sin orden judicial, constituyen una grave violación de los derechos sindicales consagrados en el Convenio. *La Comisión confía en que el Gobierno garantice el pleno respeto de estos principios y le pide de forma urgente que investigue más a fondo acerca de la situación personal del Sr. Ntsienkoulou, en particular su seguridad y paradero, y que informe al respecto.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Croacia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que figuran en una comunicación de 1.º de septiembre de 2018, en las que se alega que los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, socavan el proceso de negociación colectiva retrasando las negociaciones, favoreciendo las negociaciones

con sindicatos amarillos y realizando acuerdos directamente con los comités de empresa. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. Procedimientos de apelación rápidos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los alegatos de retrasos excesivos de los tribunales que se ocupan de los casos de discriminación antisindical y pidió al Gobierno que siguiera comunicando información sobre las medidas adoptadas o previstas para acelerar los procedimientos judiciales en los casos de discriminación antisindical y que transmitiera estadísticas sobre el impacto de esas medidas en la duración de los procedimientos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) debido al gran número de conflictos laborales en este ámbito, el Gobierno está realizando reformas judiciales a fin de acelerar los procedimientos judiciales, incluido el establecimiento de un tribunal municipal del trabajo en Zagreb; ii) en virtud de la Ley sobre las Áreas y la Ubicación de los Tribunales, que entró en vigor el 1.º de abril de 2015, cinco tribunales de condado (Tribunal de Condado de Bjelovar, Tribunal de Condado de Osijel, Tribunal de Condado de Rijela, Tribunal de Condado de Split y Tribunal de Condado de Zagreb) se encargan de la armonización de las prácticas judiciales y la aceleración de los procedimientos de apelación en relación con los conflictos laborales presentados ante los tribunales municipales, y iii) desde 2014, se han presentado ante los tribunales 30 acciones civiles en materia de discriminación antisindical; durante el mismo período, los tribunales han solucionado ocho casos, y 31 siguen pendientes (nueve de esas denuncias se presentaron antes de 2014). Tomando debida nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno, la Comisión observa con **preocupación** que de esa información se desprende que la resolución judicial de los casos en materia de discriminación antisindical sigue sufriendo demasiosos retrasos. **Recordando que la existencia de disposiciones legislativas que prohíben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si éstas no van acompañadas de procedimientos rápidos y eficaces que garanticen su aplicación en la práctica, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar, junto con las autoridades competentes, medidas eficaces a fin de acelerar significativamente los procedimientos judiciales en los casos de discriminación antisindical. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto así como sobre los resultados obtenidos y recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.**

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda que desde 2007 ha estado examinando alegatos en relación con la modificación unilateral, por motivos financieros, del contenido de los convenios colectivos en el sector público a través de la adopción de diversas leyes. La Comisión recuerda que esta cuestión también fue abordada por la Comisión de Aplicación de Normas en 2014 y por el Comité de Libertad Sindical. Asimismo, la Comisión indica que tanto las observaciones de 2016 de la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (UATUC) como las de la Asociación de Sindicatos Croatas (MATICA) se refieren a esa cuestión. La Comisión toma nota de que, en lo que respecta a los efectos de la ley sobre el despojo del derecho al aumento salarial basado en los años de servicio, el Comité de Libertad Sindical tomó nota en octubre de 2016 de que la ley dejó de estar en vigor el 1.º de enero de 2016 y entendió que las negociaciones sobre el aumento salarial entre el Gobierno y los sindicatos de la administración pública comenzaron desde entonces. Reiterando que en contextos de estabilización económica se debe dar prioridad a la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de los funcionarios, en lugar de preferir promulgar una ley sobre limitación de los salarios en el sector público, el Comité de Libertad Sindical confió en que, para el mantenimiento de un desarrollo armonioso de las relaciones laborales, las partes que participaran en las negociaciones de buena fe hicieran todo lo posible por llegar a un acuerdo (véase 380.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 3130, párrafo 398). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) en todos los textos en materia de aplicación adoptados para el período 2011-2017 no hay disposiciones sobre la modificación unilateral de los convenios colectivos en el sector público por motivos financieros; ii) la ley sobre el impago de ciertos derechos financieros de las personas empleadas en los servicios públicos ya no está en vigor desde el 1.º de enero de 2016, y iii) desde 2017, el salario básico tanto de los funcionarios públicos como de los empleados públicos ha aumentado un 2 por ciento, y otras prestaciones pecuniarias se pagan completamente tal como se acuerda en los convenios colectivos. La Comisión toma debida nota de esta información. **Subrayando la importancia de garantizar que toda ley futura en relación con el presupuesto del Estado no permita al Gobierno modificar, por motivos financieros, el contenido de los convenios colectivos aplicables a los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los convenios colectivos negociados y firmados en el sector público y que indique si el aumento del 2 por ciento de los salarios es el resultado de la negociación colectiva.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones en la administración pública. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la Ley núm. 16/013, de 15 de julio de 2016, sobre el Estatuto de los Agentes de Carrera de los Servicios Públicos del Estado. Toma nota de que, en virtud del artículo 94, la libertad sindical está garantizada a los agentes de los servicios públicos del Estado, que éstos pueden crear libremente organizaciones sindicales

y afiliarse a las mismas, y ejercer los mandatos, y estas organizaciones pueden entablar acciones judiciales. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 93 de la ley, el ejercicio del derecho de huelga de los agentes de los servicios públicos del Estado, sólo puede limitarse en las condiciones establecidas por la ley, especialmente para tener en cuenta el funcionamiento regular «de los servicios públicos de interés vital que no pueden sufrir ninguna interrupción». Un decreto del Primer Ministro dictado en el Consejo de Ministros, sobre la proposición conjunta de los ministros de la administración pública y los derechos humanos en sus atribuciones, fija la lista de los servicios de interés vital, así como las modalidades del servicio mínimo en estos servicios. ***La Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar, junto a su próxima memoria, el mencionado decreto del Primer Ministro.***

En cuanto a los derechos sindicales de los magistrados, la Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, la libertad sindical de los magistrados se reconoce en virtud de un decreto provisional de 1996 y de que existen sindicatos de magistrados. La Comisión toma nota de que la Ley Orgánica núm. 06/020, de 10 de octubre de 2006, sobre el Estatuto de los Magistrados, a la que se refiere el Gobierno en su memoria, no contiene disposiciones que respondan a las preocupaciones de la Comisión. ***En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar si se prevén expresamente disposiciones dirigidas a garantizar que los magistrados gocen de los derechos previstos en el Convenio.***

Artículo 3. Derecho de los trabajadores extranjeros a acceder a funciones de dirigentes sindicales. En sus comentarios anteriores, la Comisión lamentó tomar nota de que la ley núm. 16/010, de 15 de julio de 2016, que modifica y completa la Ley núm. 015-2002, sobre el Código del Trabajo, no derogó la duración de residencia de veinte años como condición de elegibilidad para encargarse de la administración y de la dirección de una organización sindical (nuevo artículo 241). Al tiempo que toma nota de que el Gobierno se refiere a los trabajos del Consejo Nacional del Trabajo para el que debe mantenerse la disposición en consideración, con el fin de permitir que el trabajador extranjero domine la legislación y la práctica nacionales en materia de trabajo, la Comisión observa que se ha considerado que un período de tres años podía considerarse razonable a este respecto pero que un período de veinte años para poder desempeñar funciones sindicales es excesivo (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 103). ***Recordando que la legislación nacional debería permitir el acceso de los trabajadores extranjeros a las funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un periodo razonable de residencia en el país de acogida, la Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas para modificar en ese sentido el artículo 241 del Código del Trabajo, en su forma revisada por la ley de julio de 2016.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión recordó anteriormente que si bien el artículo 235 del Código del Trabajo prohíbe todo acto de injerencia por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores unas respecto de las otras, el artículo 236 del Código del Trabajo, establece que los actos de injerencia deben estar definidos más precisamente por decreto del Ministro del Trabajo y Previsión Social competente, previa consulta con el Consejo Nacional del Trabajo. ***Al tiempo que lamenta tomar nota de que sigue sin adoptarse el decreto en cuestión, la Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno podrá comunicar progresos concretos a este respecto, y que el decreto incluirá los diferentes casos previstos en el artículo 2 del Convenio.***

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la existencia en el sector público de negociaciones y acuerdos salariales, así como del funcionamiento de las comisiones paritarias; y, por otra parte, de que el artículo 1 del Código del Trabajo excluye de manera explícita de su método de aplicación a los funcionarios públicos de carrera al servicio del Estado que se rigen por sus propios estatutos. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para que se prevea expresamente en la legislación nacional el derecho de negociación colectiva para todos los funcionarios no adscritos a la administración del Estado, asegurando así que la legislación coincida con la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha creado en 2017 una comisión paritaria gubernamental — el Plenario Sindical de la Administración Pública — con miras a la elaboración de un baremo de categorías; y que la ley núm. 16/013, de 15 de julio de 2016, relativa al estatuto de los funcionarios públicos de carrera al servicio del Estado, aplica las disposiciones del Convenio. La Comisión observa que la ley de 2016 reconoce el derecho de sindicación y de huelga a los funcionarios públicos y establece órganos consultivos, pero no prevé mecanismos de negociación colectiva sobre las condiciones de empleo. La Comisión toma nota al mismo tiempo que el ámbito de aplicación de la ley abarca esencialmente a los funcionarios adscritos a la administración del Estado (artículo 2). En este sentido, la Comisión recuerda que, en virtud de su *artículo 6*, el Convenio se aplica a los trabajadores y funcionarios públicos que no están adscritos a la administración del Estado (los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de transporte, etc., véase a este respecto el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172). ***La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien precisar de qué manera se reconoce el derecho de negociación colectiva para las diferentes categorías de funcionarios no adscritos a la administración del Estado, y que adopte si es necesario, medidas que permitan garantizar que el ejercicio de este derecho esté reconocido tanto en la legislación como en la práctica.***

Negociación colectiva por rama(s) de actividad. La Comisión **lamenta** observar que no se le ha informado de la adopción del decreto que establece el funcionamiento de las comisiones paritarias, previsto por el artículo 284 del Código del Trabajo relativo a la negociación colectiva sectorial. **Recordando nuevamente que su petición inicial sobre esta cuestión se remonta a 2003, la Comisión espera que el Gobierno informará en su próxima memoria de la aprobación de un decreto ministerial que determine el funcionamiento de las comisiones paritarias.**

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. La Comisión **pide al Gobierno que suministre información sobre el número de convenios colectivos concluidos y en vigor en el país, así como sobre los sectores afectados y el número de trabajadores cubiertos por estos convenios.**

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 2001)

La Comisión **lamenta** tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna en respuesta a las observaciones presentadas por la Confederación Sindical del Congo (CSC) en 2014, en las que se alega que los representantes de los trabajadores de varias empresas no gozan de una protección eficaz como contempla el artículo 1 del Convenio, y que algunos de ellos han sido incluso objeto de despido o descenso de categoría. **La Comisión pide encarecidamente al Gobierno que presente comentarios a este respecto.**

La Comisión toma nota de que el artículo 258 del Código del Trabajo prevé que todo despido de un delegado titular o suplente por parte del empleador o del representante de éste, así como todo traslado que le haga perder su cargo de delegado están sujetos a la condición de que el inspector del trabajo competente los apruebe. Asimismo, la Comisión toma nota de: i) el decreto ministerial núm. 12/CAB.MIN/ETPS/041/08, de 8 de agosto de 2008, relativo al recurso judicial contra la decisión del inspector del trabajo en caso de despido o traslado de un delegado sindical titular o suplente; ii) el decreto ministerial núm. 048/CAB/VPM/METPS/2015, de 8 de octubre de 2015, por el que se modifica y completa el decreto ministerial núm. 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054, de 12 de octubre de 2004, en el que se establecen las modalidades de representación e impugnación del resultado electoral a disposición de los trabajadores en empresas o establecimientos de todo tipo, y iii) medidas de protección previstas en estos dos textos, en el artículo 1 y los capítulos VI (Desautorización de un delegado sindical) y VII (Medios de los que disponen los delegados), respectivamente.

No obstante, habida cuenta de los numerosos casos examinados por el Comité de Libertad Sindical relativos principalmente a actos de discriminación antisindical contra dirigentes y representantes sindicales, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias (por ejemplo, dando instrucciones precisas a la inspección del trabajo) para garantizar en la práctica la plena aplicación de las disposiciones del Convenio, en especial las que se refieren a la protección de los representantes de los trabajadores y las facilidades que se les debe otorgar para el ejercicio de sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que le transmita información sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo y los decretos mencionados, indicando en particular el número de casos o actos de discriminación contra representantes de los trabajadores que se han observado, y el seguimiento que se les ha dado.

Ecuador

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador (ISP-Ecuador) y de la Unión Nacional de Educadores (UNE), recibidas el 31 de agosto de 2018, que se refieren a cuestiones examinadas en el marco del presente comentario así como a alegaciones específicas de discriminación antisindical en los sectores público y privado. La Comisión constata que dichas observaciones se refieren también a temas relacionados con la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), los cuales serán por lo tanto tomados en consideración en el próximo examen de la aplicación de dicho Convenio por parte de la Comisión. **La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios respecto de las mencionadas alegaciones de discriminación antisindical así como de las alegaciones contenidas en las observaciones de la UNE y la ISP-Ecuador de 2016. La Comisión insta al Gobierno a que envíe también sus comentarios en relación con los alegatos específicos de despidos antisindicales en una empresa del sector bananero contenidos en las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2014.**

Aplicación del Convenio en el sector público

Artículos 1, 2 y 6 del Convenio. Protección de los trabajadores del sector público que no trabajan para la administración del Estado contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. En sus comentarios anteriores, después de haber tomado nota con interés de que la Ley Orgánica Reformativa a la las leyes que rigen el sector público contenía varias disposiciones protectoras en materia de discriminación e injerencia antisindicales, inclusive con respecto del mecanismo de compra de renuncia obligatoria, la Comisión había pedido al Gobierno que informara sobre las sanciones y reparaciones aplicables al respecto así como sobre el ámbito de aplicación de algunas de estas disposiciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la adopción del acuerdo ministerial

núm. MDT-2018-0010 que regula el ejercicio del derecho de organización de las y los servidores públicos. La Comisión constata al respecto que: i) la disposición general cuarta del acuerdo ministerial prevé que cualquier acto tendiente a coartar, restringir o menoscabar el derecho de organización constituirá una causal de destitución del autor del mismo, y ii) el artículo 15 relativo a la lesión de la libertad de organización prevé que cualquier servidor o comité de servidores públicos podrá recabar la tutela del derecho de organización ante la jurisdicción competente. La Comisión observa sin embargo que: i) la definición de la lesión al derecho de organización brindada por la mencionada disposición se ciñe a los actos de injerencia y parece por lo tanto más restringida que el ámbito de las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público que prohíben tanto la injerencia como la discriminación antisindical, y ii) con la limitada excepción de la disposición general cuarta que concierne únicamente la sanción personal aplicable al autor de un acto antisindical, el acuerdo ministerial no determina las demás sanciones y reparaciones aplicables en caso de discriminación o injerencia antisindical. ***Recordando nuevamente la importancia de contar con sanciones efectivas y disuasorias al respecto, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las sanciones y reparaciones aplicables a los actos de discriminación e injerencia antisindicales cometidos en el sector público, indicando las disposiciones legislativas o reglamentarias que prevén las mismas. Adicionalmente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique si, además de los miembros de la dirección del comité de servidores públicos, los dirigentes de las organizaciones de servidores públicos cuentan también con una protección reforzada contra la supresión de su puesto o de otras medidas similares inclusive en el caso de implementación del mecanismo de compra de renuncia obligatoria. Observando finalmente que la ISP-Ecuador y la UNE indican que una acción de inconstitucionalidad ha sido presentada en contra del mencionado mecanismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información con respecto al resultado de la misma.***

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva de los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había tomado nota con preocupación de que las enmiendas constitucionales adoptadas en diciembre de 2015 limitan el derecho de negociación colectiva al sector privado y que la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público adoptada en mayo de 2017 no prevé mecanismos de negociación colectiva sino que tan sólo reconoce una posibilidad de diálogo social entre el comité de servidores públicos y las instituciones públicas respecto de un número limitado de temas que no incluyen la remuneración. Con base en lo anterior, la Comisión había instado al Gobierno a que reabriera un debate de fondo con las organizaciones sindicales concernidas con miras al establecimiento de un mecanismo adecuado de negociación colectiva para todas las categorías de empleados del sector público abarcados por el Convenio y había pedido al Gobierno que proporcionara datos sobre los convenios colectivos firmados con los obreros del sector público, contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales de 2015.

La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta a este respecto que: i) el Ministerio de Trabajo ha emitido el 4 de abril de 2018 dos oficios circulares (núms. MDT-2018-0018 y MDT-2018-0019) que confirman que no existen restricciones para que las personas contratadas como obreros públicos antes de las enmiendas constitucionales de 2015 y que se encontraban por lo tanto bajo el régimen del Código del Trabajo mantengan su derecho de negociación colectiva; ii) desde la emisión de estos dos oficios circulares, seis primeros contratos colectivos han sido firmados en el sector público a favor de la categoría de trabajadores antes mencionada, y iii) tal como mencionado anteriormente, se ha adoptado en 2018 el acuerdo ministerial núm. MDT-2018-0010 que regula el ejercicio del derecho de organización de las y los servidores públicos. La Comisión toma también nota de que la ISP-Ecuador y la UNE manifiestan que: i) las enmiendas constitucionales de 2015 que excluyen la totalidad del sector público del ámbito de la negociación colectiva han sido anuladas por la Corte Constitucional (sentencia núm. 018-18-SIN-CC de 1.º de agosto de 2018) por vicios de forma, lo cual agudiza el limbo jurídico en el cual se encuentran los trabajadores del sector público que se encontraban regidos con anterioridad por el Código del Trabajo; ii) el Ministerio del Trabajo informó de una propuesta de reforma del Código del Trabajo que abarcaría tanto a los trabajadores del sector privado como del sector público pero la elaboración de la misma es muy lenta; iii) se ha creado una mesa del sector público con papel consultivo en materia de remuneraciones en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, sin embargo existen problemas de cooptación de los representantes sindicales de dicha mesa por parte del Gobierno, y iv) si bien se puede notar cierta reactivación de la negociación colectiva con los obreros del sector público contratados antes de las enmiendas constitucionales de 2015 (y que en virtud de la misma mantienen su derecho de negociación colectiva), las mencionadas negociaciones son sujetas a las múltiples restricciones constatadas desde 2008 por los órganos de control de la OIT, especialmente en materia de remuneración.

Al tiempo que saluda la reactivación de la negociación colectiva con los obreros del sector público contratados anteriormente a las enmiendas constitucionales de 2015, la Comisión observa que la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público y el nuevo acuerdo ministerial que regula el ejercicio del derecho de organización de las y los servidores públicos siguen sin reconocer el derecho de negociación colectiva a los demás trabajadores del sector público. A este respecto, la Comisión recuerda nuevamente que en virtud de los *artículos 4 y 6* del Convenio, las personas empleadas en el sector público pero que no cumplen actividades propias de la administración del Estado (empleados de empresas públicas, empleados de servicios municipales, de entidades descentralizadas, docentes del sector público, personal del sector de los transportes, etc.) están abarcadas por el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172) y deberían por lo tanto poder negociar colectivamente sus condiciones de empleo, inclusive sus condiciones salariales, una mera consulta con los sindicatos interesados no bastando para satisfacer las prescripciones del Convenio al respecto (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 219). ***Observando que tanto los***

efectos de la sentencia de 2018 de la Corte Constitucional relativa a las enmiendas constitucionales de 2015 como el proyecto de revisión del Código del Trabajo pueden constituir un contexto propicio al respecto, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que reabra un debate de fondo con las organizaciones sindicales concernidas con miras al establecimiento, para todas las categorías de empleados del sector público abarcadas por el Convenio, de un mecanismo de negociación colectiva adecuado a las especificidades de dicho sector. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo avance y le recuerda que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

Aplicación del Convenio en el sector privado

Artículo 1. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que la legislación incluyera una disposición específica que garantizara la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento del acceso al empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el 16 de junio de 2017 se expidió el acuerdo ministerial núm. 16 que contiene la normativa de erradicación de la discriminación en el Ámbito Laboral; ii) sin embargo, la normativa vigente no contiene disposiciones específicas respecto de la prohibición de la discriminación antisindical en el momento del empleo, y iii) tanto en el proceso de reforma normativa como en la construcción de la normativa secundaria, se arbitrarán las medidas que corresponden al cumplimiento de lo indicado por la Comisión. **Recordando que los comentarios de la Comisión al respecto se repiten desde hace varios decenios, la Comisión confía en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la introducción de una disposición específica que garantice la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento del acceso al empleo.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado la necesidad de modificar el artículo 221 del Código del Trabajo relativo a la presentación del proyecto de convenio colectivo, de manera que, cuando no exista una organización que reúna a más del 50 por ciento de los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias puedan, por sí solas o en forma conjunta, negociar en nombre de sus miembros. La Comisión toma nuevamente nota de que el Gobierno vuelve a indicar que el contenido del artículo 221 del Código del Trabajo, en armonía con los artículos 452 y 459 de dicho Código relativos al comité de empresa se asienta en los principios democráticos al determinar que quien está autorizado para negociar con el empleador es la organización que cuente con mayor representatividad. La Comisión recuerda nuevamente a este respecto que, si bien es aceptable que el sindicato que represente a la mayoría o a un alto porcentaje de los trabajadores en una unidad de negociación goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos, la Comisión considera que en los casos en que ningún sindicato cumpla esas condiciones, o que no goce de esos derechos exclusivos, los sindicatos minoritarios deberían, al menos, poder concluir un convenio colectivo o directo en nombre de sus propios afiliados (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 226). **A la luz de lo anterior, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para modificar el artículo 221 del Código del Trabajo de manera que cuando no exista una organización que reúna a más del 50 por ciento de los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias puedan, por sí solas o en forma conjunta, negociar por lo menos en nombre de sus miembros. Adicionalmente, observando que el Gobierno indica que no se encuentra actualmente en condiciones de proporcionar las estadísticas solicitadas, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe del número de convenios colectivos firmados y en vigor en el país así como de los sectores de actividad y número de trabajadores abarcados por los mismos.**

Acuerdos ministeriales que establecen nuevas formas contractuales para los trabajadores de plantaciones bananeras y trabajadores agrícolas. La Comisión toma nota de que ISP-Ecuador y la UNE transmiten las observaciones de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC) según las cuales los acuerdos núms. MDT-029-2017, MDT-074-2018 y MDT-096-2018 que establecen nuevas formas contractuales para los trabajadores de plantaciones bananeras y trabajadores agrícolas obstaculizarían el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva en dichos sectores. **La Comisión pide al Gobierno que comunice sus comentarios al respecto y que proporcione elementos sobre los convenios colectivos existentes en los sectores mencionados.**

Recordando que, en 2017, el Gobierno había acordado con la Oficina un proceso de asistencia técnica en materia legislativa respecto del cual la Comisión no ha vuelto a recibir informaciones, la Comisión sigue confiando en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la adopción de disposiciones legislativas que atiendan los comentarios que la Comisión viene formulando desde hace varios años tanto respecto del sector público como del sector privado.

Egipto

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato de Trabajadores Democráticos Egipcios y por la Organización Sindical de Trabajadores del Transporte en el Gran Cairo (TUWC), recibidas el 31 de agosto de 2018; de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), del Sindicato de la Autoridad de Recaudación de Impuestos Inmobiliarios, del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca de Alejandría, del Comité Sindical de los

Trabajadores en Suez, y del Comité Sindical de Pescadores en Damietta, recibidas el 1.º de septiembre de 2018; de las observaciones de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), recibidas el 4 de septiembre de 2018, y de las observaciones del Sindicato General de Trabajadores y Servicios de Transporte, recibidas el 18 y el 23 de octubre de 2018, en relación con la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, y la respuesta del Gobierno a estas observaciones.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión recuerda que, junto con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, ha venido instando al Gobierno a que adopte medidas para garantizar a todos los trabajadores el pleno disfrute de su derecho fundamental a organizarse libremente y, en particular, para garantizar la independencia de los sindicatos y la eliminación de todas las formas de injerencia en las organizaciones de trabajadores. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que la filosofía de la nueva Ley de Sindicatos se basaba en la consolidación del principio de libre constitución de organizaciones y federaciones sindicales, así como en la garantía de su democracia y estabilidad. Sin embargo, la Comisión había tomado nota de las preocupaciones expresadas por varias partes interesadas a la misión de contactos directos en 2017, acerca de que la disposición que garantizaba la continuidad de la personalidad jurídica únicamente a las organizaciones sindicales reconocidas por ley en el momento de su aplicación supondría una gran desventaja para los sindicatos que se habían registrado de conformidad con la Declaración Ministerial sobre la Libertad Sindical, de 2011, al no estar reconocidos por la ley. La Comisión había destacado que, en el contexto de un sistema profundamente arraigado de monopolio sindical impuesto por ley, era fundamental que se concediera a todos los sindicatos igualdad de oportunidades para registrarse en virtud de la nueva Ley de Sindicatos. Instó al Gobierno a que asegurara que todos los sindicatos existentes en el momento de la adopción de la ley sobre organizaciones sindicales pudieran funcionar libremente y llevar a cabo sus actividades sin injerencia mientras esté pendiente su regularización en virtud de la ley, a fin de garantizar que los trabajadores que deseen cambiar su afiliación sindical pudieran hacerlo sin que ello redundara en menoscabo de sus derechos adquiridos en relación con los fondos de previsión contributivos, puesto que, de lo contrario, se podría obstaculizar la libertad de los trabajadores de elegir la organización a la que desean afiliarse.

La Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno de que la Ley de Sindicatos núm. 213 se promulgó el 17 de diciembre de 2017, y de que el reglamento de aplicación se estableció en virtud del decreto ministerial núm. 35, el 13 de marzo de 2018. El Gobierno indica que todas las organizaciones sindicales han conciliado su situación, con independencia de que se hubieran constituido en virtud de la ley núm. 35, de 1976, anterior o de la Declaración Ministerial de 2011. El Gobierno indica además que las elecciones sindicales se celebraron por escrutinio secreto y directo, y que todas las organizaciones son libres de afiliarse a otras, de constituir federaciones o de actuar de manera autónoma.

Al tiempo que acoge con agrado la adopción de la nueva Ley de Sindicatos, la cual no hace más referencia a una federación sindical específica, lo que había dado lugar a una situación de monopolio sindical impuesta por ley, la Comisión toma nota con **preocupación** de las numerosas observaciones recibidas de sindicatos egipcios e internacionales en las que se indica que la aplicación de la Ley de Sindicatos se llevó a cabo con numerosas injerencias y planteándose numerosos obstáculos al registro de sindicatos independientes y autónomos que no querían figurar entre los pertenecientes a la tradicional Federación Sindical Egipcia (ETUF). A este respecto, el Gobierno hace referencia a una serie de motivos por los que ciertos comités sindicales no se conciliaron, incluidos los siguientes: no se presentó una solicitud de regularización; la empresa se fusionó o liquidó; surgieron problemas entre los miembros de la junta directiva del sindicato; un sindicato no se comunicó con sus afiliados; los documentos presentados no cumplían los requisitos y el sindicato no logró subsanar la deficiencia; la doble afiliación a más de un sindicato al mismo nivel sin ejercer más de una ocupación, y el incumplimiento del requisito mínimo de afiliación. El Gobierno indica que, tras la regularización, se registraron 2 214 comités sindicales, 27 sindicatos generales y una confederación. Del número indicado anteriormente, se regularizaron 135 comités sindicales y tres sindicatos generales que se habían establecido en virtud de la Declaración Ministerial de 2011. En una comunicación posterior, el Gobierno indica que 142 comités sindicales que no están afiliados al ETUF habían normalizado sus estatus. El Gobierno añade que aquéllos que no lograron regularizar su situación pueden solicitar un certificado de establecimiento y depositarlo en un órgano administrativo en cualquier momento.

La Comisión toma nota de que, según numerosas comunicaciones recibidas de las organizaciones de trabajadores, existen diversas preocupaciones por los procesos de registro y de elección indicadas en las numerosas comunicaciones recibidas de las organizaciones de trabajadores, entre ellas las siguientes: los sindicatos que pudieron conciliar su situación, pero a los que se excluyó de las elecciones y a los que, por tanto, se les prohibió efectivamente llevar a cabo actividades sindicales; las solicitudes injustificadas de documentos o de registros; los aplazamientos de la aceptación de solicitudes; la imposición de estatutos modelo; los retrasos en la expedición de certificados, lo que hace imposible cualquier actividad; la negativa a registrar comités sindicales en los casos en que ya exista otro sindicato; la eliminación de candidatos electorales del proceso por parte del Gobierno. Se formularon otras quejas acerca de la presión ejercida para afiliarse a la ETUF con referencia a varios ejemplos de sindicatos generales que finalmente terminaron por afiliarse y se proporcionaron detalles sobre las descalificación de cientos de candidatos independientes a las elecciones sindicales. Según estas organizaciones, las autoridades competentes no habían adoptado medidas correctivas, a pesar de haber planteado estas cuestiones al Ministerio. La CSI transmite una lista de 40 comités sindicales cuya situación sigue

pendiente de regularización, y concluye que la aplicación de la Ley de Sindicatos se llevó a cabo de tal manera que perpetuara el monopolio sindical impuesto anteriormente.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estas observaciones según la cual: i) la mayoría de las reclamaciones carecen de pruebas tangibles y concretas o de documentos exactos e incluyen reclamaciones o impresiones sin fundamento que no pueden probarse; ii) tres sindicatos generales que no estaban afiliados a la ETUF solicitaron voluntariamente su afiliación a la organización tras haber regularizado su estatus; iii) fue constituido el Sindicato General de Trabajadores de Transportes y Servicios, el cual no está afiliado a la ETUF, pese a que los sindicatos generales tienen sindicatos similares afiliados; iv) 14 de los 25 comités sindicales del Sindicato de la Autoridad de Recaudación de Impuestos Inmobiliarios han logrado regularizar su estatus; v) no se han aportado pruebas ni del retiro de los trabajadores de la ETUF, a petición de los mismos, ni de su solicitud del cese de deducciones del pago de cuotas sindicales; vi) el rol del Ministerio de Recursos Humanos en las elecciones se limita a la organización, mientras que la exclusión de los candidatos y el examen de las reclamaciones se encuentran bajo la autoridad del juez; vii) cualquier retraso daba lugar a una prórroga del plazo de votación, y viii) el hecho de no participar en las elecciones no le impide al sindicato el ejercicio de sus actividades ni afecta la personalidad jurídica adquirida. El Gobierno asegura que seguirá trabajando con plena transparencia y en cooperación con la Oficina a fin de superar los desafíos que plantea la experiencia egipcia en el establecimiento de una naciente libertad sindical, la cual no se ha conocido en Egipto desde hace muchos años.

Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de organizaciones de trabajadores de que varias disposiciones de la ley interfieren con el derecho de las organizaciones de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y elegir libremente a sus representantes y de la respuesta general del Gobierno. La Comisión examinará estas cuestiones en detalle junto con la memoria detallada del Gobierno la cual ha de enviarse el año próximo.

Al tiempo que toma nota de la información proporcionada por el Gobierno la Comisión se encuentra obligada a ***lamentar profundamente*** que a pesar de los esfuerzos realizados durante muchos años para poner la legislación en conformidad con el Convenio, algunas de las disposiciones de la Ley de Sindicatos, su reglamento correspondiente y su aplicación práctica hayan dado lugar a alegaciones de graves obstáculos que impiden el pleno ejercicio de la libertad sindical para todos los trabajadores. ***La Comisión acoge con agrado la invitación del Gobierno a ayudar a aquellas organizaciones que no pudieron regularizar su situación y, a la luz de las observaciones detalladas y de los casos específicos planteados en las comunicaciones de las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, pide al Gobierno que revise cada uno de los casos con la organización interesada y proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto.***

Requisitos mínimos de afiliación. En su comentario anterior de 2017, la Comisión había tomado nota de las preocupaciones expresadas por la CSI, transmitidas asimismo por varias partes interesadas a la misión de contactos directos, acerca de que los requisitos mínimos de afiliación para constituir un sindicato a los diversos niveles (empresarial, sectorial y nacional) eran excesivos y probablemente obstaculizaran el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimaran convenientes e impidieran el establecimiento de sindicatos independientes en la práctica. La Comisión pidió al Gobierno que rebajara el requisito mínimo para constituir un sindicato a nivel de empresa, establecido en 150 trabajadores, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de que, según la información contenida en la última memoria del Gobierno, este último está estudiando actualmente el impacto de las disposiciones de la Ley de Sindicatos y entablando un diálogo social en el que toman parte todas las organizaciones sindicales, los representantes de los empleadores y algunos representantes de los trabajadores que no han logrado regularizar su situación, a fin de discutir la posibilidad de rebajar el número mínimo requerido para constituir un comité sindical a 50 trabajadores. El Gobierno añade en su respuesta a las observaciones de las organizaciones de trabajadores nacionales e internacionales que numerosos sindicatos pudieron satisfacer dicho requisito y que no se ha recibido ninguna queja indicando algún obstáculo para registrarse. Sin embargo, la Comisión debe observar que las numerosas observaciones recibidas de las organizaciones internacionales y nacionales de trabajadores indican, al contrario, que los elementos del movimiento sindical, que se han beneficiado de décadas de imposiciones legislativas de monopolios sindicales, pueden cumplir fácilmente con el requisito de afiliación mínima, el cual resulta un desafío mayor para los sindicatos independientes. A este respecto, la Comisión recuerda que anteriormente había señalado que más del 90 por ciento de la economía egipcia consistía en micro y pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. ***La Comisión confía en que la Ley de Sindicatos se modificará en un futuro próximo para garantizar que el nivel de requisito de membresía mínimo a nivel de empresa, así como los de formación de sindicatos generales y confederaciones (establecido en 15 sindicatos de empresas y 20 000 trabajadores y diez sindicatos generales y 200 000 trabajadores, respectivamente) sean enmendados para que no impidan el derecho de todos los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas.***

En relación con sus comentarios anteriores acerca de que la prohibición de que los trabajadores se afilien a más de un sindicato no debería aplicarse en los casos en los que el trabajador tiene más de un trabajo en diferentes lugares, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la frase «aun cuando el trabajador ejerza más de una ocupación» se suprimió de la prohibición prevista en el artículo 21, h) relativo a la afiliación a más de una organización de trabajadores. Sin embargo, el Gobierno añade que un trabajador que se afilie a dos sindicatos del mismo nivel no estaría en conformidad con esta disposición. ***La Comisión confía en que esta modificación mencionada por el Gobierno***

permita a los trabajadores que tienen más de un trabajo afiliarse a cada uno de los sindicatos correspondientes en la práctica, aun cuando son del mismo nivel (comités sindicales y sindicatos generales).

Artículos 3 y 5. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar su administración sin injerencia y a disfrutar de los beneficios de la afiliación internacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las preocupaciones expresadas por la CSI en sus observaciones, transmitidas asimismo por varias partes interesadas a la misión de contactos directos, acerca de la prohibición de recibir ayuda financiera de organizaciones extranjeras prevista en la ley sobre organizaciones sindicales. Recordando su solicitud de que el Gobierno modificara esta prohibición a fin de asegurar que permita claramente que los sindicatos se beneficien de la asistencia y el apoyo técnicos que puedan proporcionarles entidades extranjeras para el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas, la Comisión toma nota con **interés** de que el artículo 5 del reglamento de aplicación dispone explícitamente que las organizaciones sindicales pueden beneficiarse de las actividades y programas de cooperación técnica proporcionados por las organizaciones internacionales que se encargan de los asuntos laborales y de los trabajadores.

Por último, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha enmendado el artículo de la Ley de Sindicatos que penaliza diversas violaciones con penas de prisión e indica simplemente que su objetivo es proteger las labores sindicales contra intrusos o contra el uso inapropiado del nombre de un sindicato en labores ilícitas. **Al tiempo que el Gobierno reitera que las sanciones impuestas están relacionadas a infracciones previstas por el Código Penal y sin relación a la actividad sindical, la Comisión observa que pueden imponerse penas de prisión por violaciones de muy diversa índole y pide al Gobierno que siga examinando estas disposiciones y que suministre información detallada sobre su aplicación.**

Código del Trabajo. En relación con los comentarios que ha venido formulando durante años sobre el Código del Trabajo núm. 12, de 2003, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que muchas de las disposiciones que han sido objeto de comentarios de la Comisión se han suprimido en el último proyecto de Código del Trabajo. El Gobierno proporciona ciertas explicaciones en respuesta a algunos comentarios de la Comisión; sin embargo, parecería que persisten ciertas cuestiones en relación con la obligación legal de las organizaciones de trabajadores de especificar de antemano la duración de una huelga, cuyo incumplimiento se considera una falta grave que puede conducir al despido de trabajadores (artículos 201 y 121, 8), del proyecto del Código del Trabajo); la capacidad de recurrir al arbitraje obligatorio a solicitud de tan sólo una de las partes (artículos 186 y 198), y la necesidad de establecer en un decreto emitido por el Primer Ministro la prohibición de las acciones colectivas en empresas vitales o estratégicas en las que la interrupción del trabajo podría comprometer la seguridad nacional o los servicios básicos proporcionados para que los ciudadanos (artículo 203). **La Comisión pide al Gobierno que comuniqué una copia del último proyecto de Código del Trabajo y confía en que tenga plenamente en cuenta sus comentarios anteriores a fin de ponerlo en consonancia con el Convenio.**

En lo que respecta al alcance de proyecto de Código del Trabajo, la Comisión había tomado nota de que, en sus comentarios anteriores, el Gobierno señaló que prepararía un nuevo proyecto de ley que regularía el trabajo doméstico y protegería los derechos de los trabajadores domésticos. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione una copia de la ley que regula el trabajo doméstico.**

El Salvador

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la OIE, recibidas el 11 de septiembre de 2018, sobre cuestiones objeto de esta observación, así como denunciando una campaña de intimidación en contra de la ANEP. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota adicionalmente de las observaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), recibidas el 8 de junio de 2018, indicando que el anteproyecto de la Ley de la Función Pública menoscabaría el derecho de sindicación y la libertad sindical en el sector público garantizado por el Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota asimismo del informe de la Misión de Contactos Directos (MCD), que visitó el país del 3 al 7 de julio de 2017, tras la petición cursada por la Comisión de la Conferencia Internacional del Trabajo (en adelante Comisión de la Conferencia) en junio de 2016.

Derechos sindicales y libertades civiles. Asesinato de un sindicalista. En relación con el asesinato del Sr. Victoriano Abel Vega, ocurrido en 2010, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en marzo de 2018 solicitó un informe actualizado al Fiscal General de la República, quien manifestó que: i) la investigación, tramitada ante la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado (UFEDCO), se encuentra activa y se han desarrollado algunas diligencias por parte de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (DECO); ii) por el momento no arrojan elementos materiales concretos sobre la autoría o participación en los hechos, y iii) una vez se logre obtenerlos se iniciaría la acción penal correspondiente. A la luz de estas informaciones el Gobierno precisa que

envió solicitudes de información adicional a la UFEDCO y a la DECO. Observando que el Comité de Libertad Sindical ha venido examinando la cuestión en el marco del caso núm. 2923 (marzo de 2017, 381.^{er} informe), la Comisión se remite a las recomendaciones del Comité al respecto. ***Al tiempo que toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, la Comisión espera firmemente que el Gobierno y las autoridades competentes den plena aplicación a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, de manera que se determinen las responsabilidades penales y se sancionen a la brevedad a los culpables de este crimen.***

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa de constituir las organizaciones que estimen convenientes o de afiliarse a las mismas. Exclusión de algunas categorías de trabajadores públicos de las garantías del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomase las medidas necesarias para revisar los artículos 219 y 236 de la Constitución de la República y 73 de la Ley del Servicio Civil (LSC) que excluyen a ciertas categorías de servidores públicos del derecho de sindicación (los miembros de la carrera judicial, los servidores públicos que ejerzan poder decisorio o desempeñen cargos directivos, los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial, los secretarios particulares de los funcionarios de alto rango, los representantes diplomáticos, los adjuntos del Ministerio Público, los agentes auxiliares, los procuradores auxiliares, los procuradores de trabajo y los delegados). La Comisión, habiendo tomado nota de que la reforma del texto constitucional requiere la ratificación de dos asambleas legislativas ordinarias de períodos consecutivos, pidió al Gobierno que le informase de las medidas tomadas para tramitar las revisiones necesarias. La Comisión observa que el Gobierno nuevamente: i) reitera que la reforma del artículo 73 de la LSC supone la reforma de los artículos 219 y 236 de la Constitución; ii) destaca, entre otros requisitos, que la modificación de la Constitución requiere en primer lugar la presentación de una propuesta por diputados en un número no menor de diez, y iii) precisa que, de momento, no existe un grupo de diez o más diputados que tenga contemplada una propuesta de reforma a los artículos 219 y 236 de la Constitución. ***Esperando poder constatar progresos en un futuro cercano con respecto a la exclusión de categorías de trabajadores públicos de las garantías del Convenio, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para tramitar la revisión de los artículos 219 y 236 de la Constitución y del artículo 73 de la LSC en el sentido indicado.***

Artículos 2 y 3. Otras reformas legislativas solicitadas. Desde hace varios años, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las siguientes disposiciones legislativas y constitucionales:

- el artículo 204 del Código del Trabajo (CT) que prohíbe la afiliación a más de un sindicato, de manera que los trabajadores que tengan más de un empleo en diferentes ocupaciones o sectores puedan afiliarse a las organizaciones sindicales;
- los artículos 211 y 212 del CT (y la disposición correspondiente de la LSC en relación con los sindicatos de trabajadores de la función pública) que establecen respectivamente la necesidad de un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato de trabajadores y de siete patronos como mínimo para poder constituir un sindicato de patronos, de manera que los mínimos impuestos por la ley no obstaculicen la libre conformación de las organizaciones de trabajadores y empleadores;
- el artículo 219 del CT que prevé que, en el proceso de registro del sindicato, el empleador certifique la condición de asalariados de los miembros fundadores, de manera que se garantice la no comunicación al empleador de la lista de los afiliados al sindicato en formación;
- el artículo 248 del CT, eliminando el plazo de seis meses exigido para volver a intentar constituir un sindicato en caso de denegación del registro, y
- el artículo 47, párrafo 4, de la Constitución de la República, el artículo 225 del CT y el artículo 90 de la LSC que establecen el requisito de ser «salvadoreño por nacimiento» para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato. Asimismo, la Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical le ha remitido el seguimiento de los aspectos legislativos del caso núm. 3117 (véase 382.^o informe del Comité de Libertad Sindical, junio de 2017, párrafo 314), en cuanto al requisito de la mayoría de edad para integrar una junta directiva contenido en dicho artículo, considerando que la imposición de este requisito constituye una restricción excesiva al derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes.

Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) las iniciativas de reforma al Código de Trabajo presentadas en el año 2015 aún se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa, y ii) respecto a la reforma de la disposición que exige ser salvadoreño de nacimiento para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato, dicho artículo no se encuentra en estudio por parte de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, la Comisión observa que la MCD tomó nota de que los miembros de la Asamblea Legislativa expresaron interés en contar con la asistencia técnica de la Oficina, incluido en relación a la reforma del CT. ***Recordando que la asistencia técnica de la Oficina permanece a la disposición de las autoridades competentes, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar la conformidad de las disposiciones indicadas con el Convenio, esperando poder constatar progresos en un futuro próximo.***

Artículo 3. Libertad y autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores para designar a sus representantes. Reactivación del Consejo Superior del Trabajo y designación de representantes en instituciones

oficiales autónomas. En cuanto a la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (en adelante el Consejo), la Comisión recuerda que la falta de designación de los representantes de los trabajadores había paralizado su actuación desde 2013. La Comisión observa que el Gobierno informa que: i) el 1.º de mayo de 2017 se solicitó a las federaciones y confederaciones sindicales legalmente inscritas que presentaran sus propuestas de representantes para el sector laboral del Consejo; ii) se recibieron tres propuestas: una primera designando a ocho representantes y sus suplentes, respaldada por ocho federaciones y una confederación (representativa de 39 sindicatos, 19 107 afiliados y cinco contratos colectivos), una segunda designando también ocho representantes y sus suplentes presentada por 18 federaciones y dos confederaciones (representativa de 197 sindicatos, 108 779 afiliados y 74 contratos colectivos) y una tercera designando solamente a una persona y su suplencia (representando a 15 sindicatos, 4 130 personas y tres contratos colectivos); iii) en atención a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, así como la decisión de la Corte Suprema de Justicia emitida al respecto, las autoridades tomaron en cuenta los criterios de afiliación, contratos colectivos y número de sindicatos representados por cada propuesta (como criterios de representatividad más universalizados) y procedieron a solicitar designaciones en proporción a las estadísticas relativas a estos criterios: se invitó a las organizaciones que presentaron la primera propuesta a que designaran a cinco representantes y suplentes; a las que presentaron la segunda propuesta que designaran a dos representantes y sus suplentes y a las que presentaron la tercera propuesta a que designaran a un representante y su suplente; iv) las federaciones y confederaciones que presentaron la primera y tercera propuesta presentaron sus representantes — sin embargo, las federaciones y confederaciones que presentaron la segunda propuesta (incluida la CNTS y que habían presentado una queja ante el Comité de Libertad Sindical sobre esta cuestión en 2013 — caso núm. 3054) lamentablemente no presentaron su propuesta de designación; v) los representantes empleadores y el Gobierno realizaron sus designaciones respectivas; vi) el 28 de junio se solicitó a los representantes empleadores y trabajadores que se presentaran al despacho de la Ministra de Trabajo y Previsión Social (Presidenta del Consejo conforme a su Reglamento) pero solamente asistió la representación trabajadora; vii) en el marco de la MCD se convocó a los miembros de los tres sectores a la sesión de instalación del Consejo el 6 de julio de 2018 — sin embargo el sector empleador no asistió, argumentando estar en desacuerdo con el mecanismo de designación del sector trabajador; viii) a pesar de que el Gobierno ha tomado todas las iniciativas necesarias para reactivar el Consejo las mismas no han dado los resultados positivos esperados; ix) en diciembre de 2017 el Gobierno solicitó al respecto el apoyo de la OIT; x) como resultado de la cooperación técnica de la Oficina se han llevado a cabo diferentes talleres en junio y julio de 2018 con los tres sectores para analizar posibles propuestas de reforma del Reglamento del Consejo superior del Trabajo, y xi) el Gobierno espera que, como resultado de la cooperación en curso, se puedan identificar consensos para una reforma del Reglamento para solventar las causas de la inactividad de este ente tripartito. La Comisión, por otra parte, observa que la MCD, al tiempo que había tomado nota de las medidas indicadas por el Gobierno, había asimismo observado que ciertos interlocutores sociales cuestionaron la legalidad del procedimiento de designación de miembros y de convocatoria del Consejo, alegando en particular irregularidades de procedimiento e injerencia indebida del Gobierno en la determinación de los criterios y composición final del sector trabajador designado. En este sentido, la Comisión toma nota de las recomendaciones de la MCD, recordando la importancia de la consulta efectiva con las confederaciones y federaciones concernidas para la determinación de procedimientos de elección estables con criterios de representatividad precisos, objetivos, y preestablecidos, y reconociendo asimismo la responsabilidad que incumbe al Gobierno de tomar las medidas bajo su competencia para asegurar el funcionamiento del Consejo. Asimismo, la Comisión toma debida nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia de junio de 2018 sobre la aplicación del Convenio núm. 144 relativas a la reactivación del Consejo. ***La Comisión espera firmemente que el Gobierno, en consulta con las organizaciones más representativas y con la asistencia técnica de la Oficina, tomará las medidas adicionales que sean necesarias para la adopción de criterios precisos, objetivos y preestablecidos para la designación del sector trabajador del Consejo, en aras de asegurar cuanto antes la plena reactivación de este órgano tripartito. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.***

En cuanto al nombramiento directo por el Presidente de la República de los representantes patronales a los espacios paritarios o tripartitos de 19 instituciones autónomas, consecutivo a la adopción el 22 de agosto de 2012, de 19 decretos legislativos, la Comisión observa que el Gobierno informa que: i) las 19 leyes en cuestión fueron declaradas inconstitucionales por motivos relativos a su tramitación (no habiéndose justificado la urgencia en su aprobación); ii) con ello se vuelve a la situación legislativa anterior y que, no habiendo una nueva iniciativa legislativa contemplada al respecto no se ha realizado ninguna consulta tripartita al respecto, y iii) la sentencia de inconstitucionalidad no afectó las designaciones existentes de los consejos directivos de las instituciones oficiales autónomas concernidas, por lo que la operación del régimen legislativo anterior empezará a ejecutarse cuando se proceda a renovar los miembros de los consejos directivos respectivos. Por otra parte la Comisión observa que, según se desprende del informe de la MCD: i) por una parte, representantes de la ANEP han seguido denunciando la continuación de la injerencia del Gobierno en los procesos de designación de sus representantes y los de sus afiliados en instituciones públicas, inclusive después de la declaración de inconstitucionalidad, y ii) por otra parte, la Secretaría Jurídica de la Presidencia del Gobierno informó que, en el marco del proceso de modernización de las instituciones del Estado, se tomarían debidamente en consideración las explicaciones brindadas por la MCD en relación a las normas de la OIT sobre el respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la libre elección de sus representantes, y que se invita a cualquier organización concernida a plantear todo alegato pendiente de injerencia en aras de asegurar su resolución. ***La Comisión invita al Gobierno, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores concernidas, a tomar las medidas***

que sean necesarias para asegurar, tanto en la legislación como en la práctica, el pleno respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores en la designación de sus representantes, incluido en las instancias públicas en las que participen, y recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eritrea

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

Libertades civiles. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la manera en que garantiza los derechos de los sindicatos de organizar su administración y sus actividades y celebrar reuniones y manifestaciones públicas en la práctica. Al respecto, el Gobierno reitera sus declaraciones anteriores en relación a disposiciones existentes en el marco de la Proclama de 2001, e indica que, en marzo de 2017, la Confederación Nacional de Trabajadores de Eritrea (NCEW), celebró su séptimo congreso y eligió a sus representantes con total libertad. Además, se estableció recientemente, en la empresa accionaria de minas de Bisha la asociación de trabajadores de base, en la que las partes están comprometidas en un proceso de negociación colectiva. El Gobierno indica que esta última evolución viene a demostrar que la NCEW amplió su cobertura a nuevos sectores. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión **lamenta** que el Gobierno no comunique ninguna información sobre cualquier medida tomada en los últimos años para asegurar la protección para el ejercicio del derecho de realizar manifestaciones y reuniones públicas, en la ley y en la práctica. **Recordando que el derecho de los sindicatos de realizar reuniones y manifestaciones públicas, constituye un aspecto esencial de la libertad sindical, la Comisión reitera su solicitud.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. Servicio nacional obligatorio. La Comisión toma nota de que, en virtud de los artículos 19 y 30 de la Proclama sobre el Servicio Nacional (núm. 82/1995), aquellos que realicen un trabajo en el marco del servicio nacional, están sujetos a la ley marcial y a los reglamentos marciales, y el artículo 3 de la Proclama del Trabajo excluye del campo de aplicación de la legislación laboral a los miembros de las fuerzas militares, policiales y de seguridad. La Comisión toma nota asimismo de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia acerca de la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y de sus conclusiones de 2015 y 2018, que hacen referencia a una práctica de gran escala y sistemática de imposición a la población de un trabajo obligatorio por un período indefinido de tiempo, en el marco de unos programas relacionados con la obligación del servicio nacional. La Comisión de Investigación sobre Eritrea del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea nombrada por dicho Consejo también han informado ampliamente en relación a esta práctica. La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que se denegó a un gran número de nacionales de Eritrea el derecho de sindicación por períodos indefinidos de su vida activa, al tiempo que eran forzados a realizar un trabajo como parte de su obligación de servicio nacional obligatorio. La Comisión recuerda que la excepción del *artículo 9, 1)*, del Convenio, se justifica basándose en la responsabilidad de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad en relación con la seguridad exterior e interior del Estado. Esta excepción debe interpretarse de manera restrictiva, a efectos de su aplicación sólo a funciones puramente militares y policiales y no a toda la población activa movilizada para trabajar en zonas no militares tan diversas como la agricultura, la construcción, la administración pública y la educación por períodos de tiempo indefinidos, en virtud de la ley marcial que les deniega el derecho de sindicación. **Habida cuenta de las consideraciones anteriores y tomando nota del final de la «situación de no guerra no paz» que duró desde la guerra fronteriza de 1998-2000 con Etiopía hasta la restauración formal de relaciones entre los dos países, en julio de 2018, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que ponga fin a la movilización general de la población por períodos de tiempo indefinidos, en virtud de la ley marcial, y a que revoque o enmiende la Proclama sobre el Servicio Nacional en consecuencia, con el fin de garantizar que no se deniegue a los nacionales de Eritrea el derecho de sindicación más allá del período exigido por ley del servicio militar, durante el cual realizarían un trabajo de carácter puramente militar.**

Funcionarios públicos. La Comisión recuerda que, en su observación de 2014, señaló con preocupación que el Gobierno había venido refiriéndose, los últimos doce años, a la inminente adopción de la Proclama sobre los Funcionarios Públicos, e instó al Gobierno a que adoptara todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de adopción de esa proclama, con el fin de otorgar, sin más retrasos, el derecho de sindicación a todos los funcionarios públicos, de conformidad con el Convenio y que repitió la misma observación con preocupación en 2016 y 2017. La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que el Gobierno indica una vez más que el proceso de redacción de esta ley se encuentra aún en la fase final para su aprobación. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en su última memoria, la Relator Especial informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no existe aún un parlamento en Eritrea en el que puedan discutirse las leyes y debatirse las cuestiones de importancia nacional (documento A/HRC/38/50, de 25 de junio de 2018, párrafo 28). La Comisión se ve obligada a señalar que la paralización institucional descrita en el informe del Relator Especial, no favorece la inminente adopción de la nueva legislación. **Recordando que los funcionarios públicos, como todos los demás trabajadores, con la única excepción de las fuerzas armadas y de la policía, deberían gozar del derecho de constituir las organizaciones que estimaran convenientes y afiliarse a las**

mismas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar se concluya el proceso de adopción del código de los funcionarios públicos y se garantice, sin más retrasos, el derecho de sindicación a todos los funcionarios públicos. La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que, desde su primer examen de la aplicación del Convenio en Eritrea, en 2002, se centró en algunas cuestiones legislativas y pidió al Gobierno que enmendara la legislación o que adoptara leyes y reglamentos adicionales para abordar los siguientes asuntos:

- *Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia.* La Comisión tomó nota de que la Proclama del Trabajo de 2001 no prevé una adecuada protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia en cuanto al período de protección, las personas protegidas, las sanciones impuestas y las reparaciones previstas en la ley, y pidió al Gobierno que enmendara la proclama para fortalecer la protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia.
- *Artículos 1, 2 y 4. Trabajadores domésticos.* La Comisión tomó nota de que la Proclama del Trabajo no otorga de manera explícita los derechos establecidos en el Convenio a los trabajadores domésticos, dado que el artículo 40 de la misma faculta al Ministro para determinar, mediante un reglamento, qué disposiciones de la Proclama se aplican a dichos trabajadores. La Comisión expresó la esperanza de que se otorgaran pronto, de manera explícita, las garantías consagradas en el Convenio a los trabajadores domésticos mediante un reglamento.
- *Artículo 6. Sector público.* La Comisión tomó nota de que los funcionarios de la administración central del personal que no están adscritos a la administración del Estado quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Proclama del Trabajo y solicitó al Gobierno que reconociera de manera explícita sus derechos para la protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia, así como su derecho a negociar colectivamente sus condiciones de empleo en la nueva Proclama de la Administración Pública.

La Comisión toma nota de que el Gobierno: i) reconoce que deberían adoptarse medidas legislativas, como solicitó la Comisión, para garantizar una adecuada protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia, pero el proceso de enmienda aún no ha finalizado y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene la intención de realizar un taller tripartito, dirigido a finalizar el proceso de redacción; ii) con respecto a los trabajadores domésticos, indica que dar efecto al artículo 40 de la Proclama del Trabajo requiere tiempo y capacidades profesionales, y que el nuevo Código Civil contiene algunas disposiciones vinculadas con los derechos de los sirvientes domésticos, en virtud del Convenio, sin aportar, no obstante, el texto de las disposiciones pertinentes del nuevo Código Civil, y iii) declara que tampoco se ha promulgado el proyecto de código de la administración pública. La Comisión toma nota de que las respuestas del Gobierno a las cuestiones legislativas destacadas en los comentarios de la Comisión revelan lagunas institucionales que han obstaculizado la conclusión del proceso de redacción y promulgación de la nueva legislación durante muchos años. En este sentido, la Comisión toma nota de que la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea, de las Naciones Unidas, constató que debido a la incertidumbre de normas que rigen los procedimientos legislativos, los códigos, los decretos y la legislación nacional, se preparan y adoptan en ausencia de un proceso claro, transparente, consultivo e inclusivo. Nadie conoce en verdad el procedimiento que da lugar a la promulgación de la legislación o al autor de un decreto específico (documento A/HRC/29/CRP.1, de 5 de junio de 2015, párrafo 299). La Comisión toma nota asimismo de que, en su última memoria, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informa al Consejo que no existe aún en Eritrea un Parlamento en el que se puedan discutir las leyes y puedan debatirse las cuestiones de importancia nacional (documento A/HRC/38/50, de 25 de junio de 2018, párrafo 28). La Comisión toma nota de que la paralización institucional descrita en el informe de la Relatora Especial, no favorece la inminente adopción de la nueva legislación. ***En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias de modo que puedan llevarse a cabo con éxito los procesos de redacción y promulgación de la nueva legislación, con miras a garantizar la conformidad de la legislación de Eritrea con el Convenio. La Comisión alienta asimismo al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, con un foco específico en las cuestiones planteadas en esta observación.***

Artículos 4, 5 y 6. Promoción de la negociación colectiva. Servicio nacional obligatorio. La Comisión toma nota de que, en virtud de los artículos 19 y 30 de la Proclama del Servicio Nacional (núm. 82/1995), los nacionales de Eritrea que realicen un trabajo en el marco del servicio nacional, están sujetos a la ley marcial y sus reglamentos, y el artículo 3 de la Proclama del Trabajo de Eritrea excluye a los miembros de las fuerzas militares, policiales y de seguridad del ámbito de aplicación de la legislación laboral. La Comisión toma nota de que surge de la lectura conjunta de las disposiciones antes mencionadas que las personas que trabajan en el marco de las actividades del servicio nacional no se encuentran cubiertas por las disposiciones de la Proclama del Trabajo relativas a la negociación colectiva. La Comisión toma nota asimismo de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo relativas a la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y a las

conclusiones de la mencionada Comisión en este sentido, en junio de 2015 y 2018, respectivamente, en las que se hizo una referencia a la práctica a gran escala y sistemática de exigir que los nacionales eritreos efectúen trabajos por un período indefinido de tiempo, en el marco de programas relacionados con la obligación del servicio nacional, el cual incluye numerosas actividades tales como la construcción y la agricultura. La Comisión recuerda que las únicas restricciones al ámbito de aplicación del Convenio se refieren a las fuerzas armadas y a la policía, así como a los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (*artículos 5 y 6 del Convenio*). Además, la Comisión destaca que la excepción contenida en el *artículo 5* del Convenio, como la que está incorporada en el *artículo 9* del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) se justifica en base a la responsabilidad de la policía y de las fuerzas armadas en la seguridad exterior e interior del Estado. Sin embargo, esta excepción debe interpretarse de manera restrictiva, aplicándose sólo a funciones puramente militares y policiales. Como consecuencia, las personas ocupadas, en virtud de la ley marcial, en actividades como la agricultura, la construcción, la administración civil y la educación que no se sitúan dentro de las actividades militares, policiales o de la administración del Estado, deberían poder negociar colectivamente sus condiciones de empleo. Habida cuenta de las consideraciones jurídicas y factuales que preceden, la Comisión toma nota con **preocupación** de que se ha denegado a un sinnúmero de nacionales eritreos el derecho de negociar colectivamente por períodos indefinidos en su vida activa, durante los cuales éstos realizan, en el marco del servicio nacional obligatorio, actividades civiles incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. **Tomando nota del final de la «situación de no guerra no paz» de la guerra de fronteras de 1998 a 2000 con Etiopía, y de la restauración formal de relaciones entre los dos países, en julio de 2018, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se deniegue a los nacionales de Eritrea el derecho de negociar colectivamente más allá del ámbito de aplicación de las excepciones establecidas en los artículos 5 y 6 del Convenio.**

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos concluidos y en vigor, los sectores interesados y el número de trabajadores comprendidos en estos acuerdos.

Eslovenia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional contuviera disposiciones específicas que prohibieran los actos de injerencia de los empleadores o de sus organizaciones, en la constitución, el funcionamiento y la administración de las organizaciones de trabajadores, y que impusiera sanciones efectivas y suficientemente disuasorias contra tales actos. La Comisión toma nota de que, además de reiterar que las actividades sindicales ya están en general protegidas por la Constitución de la República de Eslovenia y que se establece en la Ley de Relaciones de Empleo, en los artículos 217 y 218, una adecuada protección judicial y sanciones contra la injerencia antisindical, el Gobierno indica que la violación de los derechos sindicales se define como delito penal en el párrafo 2 del artículo 200 del Código Penal, que estipula que, quienquiera que viole la normativa y las leyes generales, impidiendo que los empleados ejerzan su libertad sindical y la realización de actividades sindicales o se obstaculicen las mismas, o que obstruya la aplicación de los derechos sindicales, o se haga cargo de un sindicato, será castigado con una multa o una pena de reclusión de no más de un año. **La Comisión toma debida nota del contenido del artículo 200 del Código Penal y pide al Gobierno que indique qué circunstancias están comprendidas en la definición de «hacerse cargo de un sindicato» y que comunique información sobre su aplicación en la práctica.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eswatini

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2016 y el 1.º de septiembre de 2018 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la aplicación del Convenio en la práctica. La CSI denuncia: i) la violencia de la policía contra manifestaciones pacíficas en agosto de 2017, y en julio y agosto de 2018, y la alteración pública, el arresto y la detención de dirigentes sindicales a raíz de estas manifestaciones; ii) el despido de dirigentes sindicales por su participación en una acción de huelga en la industria azucarera; y el rechazo de dos empresas de la industria textil a reconocer a sindicatos de empresa afiliados al Sindicato Unificado de Swazilandia (ATUSWA). La Comisión considera que el ejercicio de los derechos sindicales es incompatible con violencia o amenazas de ningún tipo. Por consiguiente, es importante que todos los alegatos de violencia cometida contra trabajadores que están organizando un sindicato o defendiendo los intereses de los trabajadores sea rigurosamente investigados con miras a establecer los hechos, las violaciones y determinar las responsabilidades, castigando a los autores del delito e impidiendo que vuelvan a producirse dichos actos. En este sentido, la Comisión toma nota de los comentarios detallados transmitidos por el

Gobierno, en respuesta a los alegatos en los que explica las circunstancias particulares de la intervención de las fuerzas de seguridad en cada caso y señala que, en algunos casos los sindicatos recurrieron posteriormente a la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje y al Tribunal del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno de que, transcurridos dos años desde la promulgación del Código de Buenas Prácticas para gestionar las acciones de protesta (2015) y las acciones colectivas públicas (2017) y desde la Ley de Orden Público (2017), las relaciones entre el Gobierno y el movimiento de los trabajadores han mejorado a raíz de la difusión en marcha de estos códigos a través de varios talleres con los principales actores sociales, en particular, los interlocutores sociales, la policía, el personal de servicios penitenciarios, los consejos municipales, etc., con la asistencia técnica de la Oficina. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el seguimiento de los resultados de los procedimientos legales y de mediación mencionados, y confía en que la nueva dinámica que describe el Gobierno contribuirá a crear un clima propicio libre de violencia, presión y amenazas de todo tipo en caso de manifestaciones pacíficas de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto.**

Artículos 2, 3 y 5 del Convenio. Registro de las federaciones de trabajadores y de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas para inscribir al ATUSWA tras la adopción por el Parlamento de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de 2014. La Comisión toma nota con **interés** de que el registro del ATUSWA concluyó en mayo de 2016 con la expedición de su certificado de registro.

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado solicitando al Gobierno que modifique una serie de textos legales que dieron lugar a prácticas que restringieron indebidamente manifestaciones sindicales y otras actividades sindicales, en contra de lo establecido por el Convenio. Recuerda asimismo que desde 2011 el Gobierno se ha beneficiado de la asistencia técnica de la Oficina para revisar las disposiciones de dichos textos legales y adoptar las disposiciones de modificación necesarias para asegurar que la legislación sea utilizada en plena conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota con **satisfacción** de que el Gobierno ha emprendido consultas significativas con los interlocutores sociales, que han llevado a la promulgación de los siguientes textos legales: i) la Ley de Supresión del Terrorismo (enmienda), de 2017 (ley núm. 11 de 2017, publicada en el *Boletín Oficial* de 8 de agosto de 2017); ii) la Ley de Orden Público (ley núm. 12 de 2017, publicada en el *Boletín Oficial* de 8 de agosto de 2017); iii) la Ley de Servicios Correccionales (ley núm. 13 de 2017, publicada en el *Boletín Oficial* de 31 de octubre de 2017), y iv) la Ley de la Función Pública (núm. 5 de 2018 publicada en el *Boletín Oficial* de 22 de febrero de 2018). En particular la Comisión toma nota con **satisfacción** de que la Ley de Servicios Correccionales reconoce el derecho de sindicación a los miembros de los servicios penitenciarios, es decir, el personal de prisiones (artículo 112 de la ley), y establece que el proceso de registro, seguimiento y reglamentación de su asociación de personal se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Relaciones Laborales (artículo 113). **Desde un punto de vista general, la Comisión saluda este progreso significativo y confía en que el Gobierno continuará haciendo lo posible para garantizar que estos nuevos textos legales sean aplicados con miras a garantizar el ejercicio de los derechos sindicales en plena conformidad con los principios consagrados en el Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios realizados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que hacían referencia al funcionamiento de la inspección del trabajo y a la duración de los procedimientos judiciales en casos de discriminación antisindical.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión saluda la información proporcionada por el Gobierno sobre: i) la puesta en marcha de un proyecto sobre la Promoción del Diálogo Social, financiado por la Unión Europea y cuyo objetivo es fortalecer el diálogo social tripartito, promover la negociación tripartita y establecer infraestructuras sectoriales para los convenios colectivos, así como mecanismos operativos para la solución de conflictos, y ii) la revisión por el Gobierno de la Ley de Relaciones Laborales, en particular en lo que respecta a la negociación colectiva, con la asistencia de la OIT y en consulta con los interlocutores sociales, con el fin de asegurar el pleno cumplimiento de los convenios de la Oficina. **La Comisión pide al Gobierno que informe del resultado del proyecto y del proceso de revisión con miras a la promoción de la negociación colectiva, también en relación con cualquier medida adoptada en consecuencia.**

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el número de convenios colectivos concluidos en el país. **La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación en la práctica del Convenio, incluidos datos estadísticos sobre el número de convenios colectivos concluidos en los sectores tanto públicos como privados, y el número de trabajadores contemplados.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Fiji

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Fiji (FTUC), recibidas el 19 de octubre de 2017 y el 23 de agosto de 2018 y pide al Gobierno que responda detalladamente a las cuestiones planteadas en las mismas.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del informe de aplicación conjunta (JIR) suscrito por el Gobierno, el FTUC y la Federación de Comercio y Empleadores de Fiji (FCEF), el 29 de enero de 2016, que da lugar a la clausura del procedimiento invocado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. La Comisión pidió al Gobierno que siguiera comunicando información sobre la evolución relativa al seguimiento dado al JIR y a la enmienda de 2016 de la promulgación de la Ley de Relaciones Laborales (ERP). A la luz de la información comunicada en la memoria del Gobierno, en noviembre de 2017, y de los alegatos presentados por el FTUC de la significativa y persistente falta de progresos en la aplicación del JIR, el continuo acoso e intimidación a los sindicalistas y violaciones de derechos humanos fundamentales, la Comisión decidió examinar este Convenio fuera del año de presentación de memorias.

La Comisión toma nota de las conclusiones y de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 2723, señalando a la atención de la Comisión de Expertos los aspectos legislativos del caso (381.º y 386.º informes, párrafos 36-55 y 18-38, respectivamente) y observa que algunos de los alegatos de hecho presentados por el FTUC fueron abordados en el marco del examen de Comité de Libertad Sindical.

Derechos sindicales y libertades civiles. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con **interés** de que se retiraron todas las acusaciones restantes contra los dirigentes y afiliados sindicales, incluido al Sr. Nitendra Goundar, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias de Hotelería, Restauración y Turismo. Sin embargo, la Comisión toma nota con **preocupación** de los alegatos del FTUC, según los cuales continúa el acoso y la intimidación a sindicalistas, especialmente a su secretario general, Sr. Felix Anthony. **Pide al Gobierno que responda de forma muy detallada en este sentido.**

Cuestiones legislativas

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de 2017, según la cual el Consejo Consultivo de Relaciones Laborales (ERAB), se reúne con regularidad para revisar la legislación laboral, como se acordó con arreglo al JIR, y el 27 de octubre de 2017, se convino en dar a conocer sus opiniones en el plazo de dos semanas sobre la posición de los trabajadores y de los empleadores, con un subcomité que había de reunirse en la primera semana de diciembre de 2017 para un examen detallado. El Gobierno indica en su informe que, posteriormente, el ERAB se reuniría cada dos meses.

Sin embargo, la Comisión observa, de la comunicación del FTUC de 2018, que a pesar de haber suscrito el JIR, el Gobierno no participó de buena fe en la enmienda de la legislación para armonizarla con el Convenio, y el ERAB no celebró reuniones, como se había acordado, habiéndose cerrado en la actualidad, sin ninguna revisión de la legislación, ni enmienda legislativa. Además, según el FTUC, resultó difícil, si no imposible, organizar manifestaciones, celebrar reuniones y resolver conflictos.

En lo que atañe a la composición del ERAB, la Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían al derecho de las organizaciones representativas nacionales de trabajadores y de empleadores a participar en los órganos tripartitos nacionales y a nombrar delegados para los organismos internacionales, y que solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la composición del ERAB y del Tribunal de Arbitraje, y que explicara de qué manera lograron determinar las organizaciones representativas nacionales de trabajadores y de empleadores su representatividad. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministro de Empleo nombró miembros adicionales para el ERAB, con el fin de garantizar que todos los sectores de los interlocutores sociales estuvieran ampliamente representados y que los nombramientos para el Tribunal de Arbitraje incluyeran los nombramientos para la FCEF y el FTUC. Sin embargo, la Comisión toma nota con **preocupación** de los alegatos del FTUC de que el Gobierno ha desmantelado sistemáticamente el tripartismo, retirando o sustituyendo la representación tripartita en algunos órganos (incluido el ERAB, el Fondo Nacional de Previsión de Fiji, la Dirección de Formación y Productividad de la Universidad Nacional de Fiji, el Servicio de Terminales Aéreas y los Consejos de Salarios), por sus propios candidatos. **Recordando el papel que desempeñan las organizaciones representativas nacionales de trabajadores y de empleadores en la determinación de la representación en los organismos nacionales, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la manera en que son designados sus miembros para esos organismos y la naturaleza representativa de las organizaciones que ahora aparecen en estos órganos.**

De manera más general, la Comisión **lamenta** tomar nota de que aparentemente no ha habido progresos en la revisión de la legislación laboral, como se convino en el JIR. **En relación con sus comentarios a continuación, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, incluida una nueva convocatoria del ERAB, con miras a armonizar rápidamente la legislación con el Convenio.**

Artículo 2 del Convenio. **Derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas.** La Comisión tomó nota con anterioridad de que se siguen aún pendientes, tras la adopción de

la Ley de Relaciones de Empleo (enmienda), de 2016, las cuestiones siguientes: denegación del derecho de sindicación a los guardias de prisiones (artículo 3, 2)), y potestades excesivamente amplias al funcionario encargado del registro para decidir, previa consulta, si un sindicato reúne o no las condiciones para el registro previstas en la ERP (artículo 125, 1), a), en su forma enmendada). ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que revise las mencionadas disposiciones, de conformidad con el acuerdo relativo al JIR, y en consulta con las organizaciones nacionales representativas de trabajadores y de empleadores, con miras a su enmienda, para armonizar plenamente la legislación con el Convenio.***

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de elegir a sus representantes con total libertad, organizar sus actividades y formular sus programas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 185 de la ERP en su forma enmendada en 2015, la lista de las industrias consideradas como servicios esenciales, incluye en la actualidad los servicios enumerados en la lista del anexo 7 de la ERP, y de las industrias nacionales esenciales declaradas con arreglo al ex ENID y las correspondientes empresas designadas, así como toda la administración pública (esto es, el Gobierno, las autoridades legales, las autoridades locales y las empresas comerciales gubernamentales). La Comisión acogió con agrado el acuerdo con el JIR, en el que los interlocutores tripartitos acordaron invitar a la Oficina a que suministrara asistencia técnica y conocimientos especializados para ayudar al ERAB a reexaminar, evaluar y determinar la lista de servicios e industrias esenciales y solicitó al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución relativa a la modificación de la lista de servicios esenciales. ***Observando que el Gobierno expresa su interés por la asistencia técnica de la Oficina en este sentido, la Comisión confía en que se proporcionará, sin retrasos, la asistencia necesaria, y solicita al Gobierno que informe de la evolución al respecto.***

La Comisión también desea referirse a las siguientes cuestiones relativas a la ERP que siguen pendientes o de las cuales el Gobierno no ha comunicado ninguna información: obligación de los dirigentes sindicales de haber trabajado durante un período no menor de tres meses (artículo 127, a), en su forma enmendada); prohibición a los ciudadanos que no sean nacionales de ser dirigentes sindicales (artículo 127, d)); injerencia en los estatutos y reglamentos sindicales (artículo 184); facultades excesivas del funcionario encargado del registro para examinar en cualquier momento los libros de cuentas de una organización (artículo 128, 3)); disposiciones que puedan obstaculizar las acciones sindicales (artículos 175, 3), b) y 180); arbitraje obligatorio (artículos 169 y 170, artículo 181, c), en forma enmendada; nuevo artículo 191BS (ex 191, 1), c)); sanciones bajo la forma de una multa, en caso de realizarse una huelga ilegal, pero pacífica (artículos 250 y 256, a)); disposiciones que puedan obstaculizar las acciones sindicales (artículo 191BN); sanción de prisión, en caso de que se realice una huelga pacífica (ilegal o incluso posiblemente legal) en los servicios calificados de esenciales (artículos 191BQ, 1), 256, a), 179 y 191BM); facultades discrecionales excesivas del Ministro respecto de la designación y la destitución de los miembros del tribunal de arbitraje y la designación de mediadores, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de los órganos de solución de conflictos (artículos 191D, 191E, 191G y 191Y), y arbitraje obligatorio en los servicios calificados de esenciales (artículos 101Q, 191R, 191S, 191T y 191AA). ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para revisar las mencionadas disposiciones de la ERP, de conformidad con el acuerdo en el JIR, y en consulta con las organizaciones nacionales representativas de trabajadores y de empleadores, con miras a su enmienda, para armonizar plenamente la legislación con el Convenio.***

Derecho de orden público (enmienda) (POAD). Con respecto a sus comentarios anteriores sobre la aplicación práctica del POAD, la Comisión toma nota de los alegatos del FTUC según los cuales se sigue denegando arbitrariamente el permiso de que los sindicatos puedan realizar reuniones en lugares públicos. ***Solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar el artículo 8 con el Convenio, derogando completamente o enmendando esta disposición, con el fin de garantizar que se pueda ejercer libremente el derecho de reunión, y que comunique información detallada en respuesta a los alegatos del FTUC.***

Decreto relativo a los partidos políticos. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que, en virtud del artículo 14 del decreto relativo a los partidos políticos, de 2013, se prohíbe que las personas que desempeñan un cargo en cualquier organización de trabajadores o de empleadores se afilien a un partido político o desempeñen un cargo en el mismo y participen en actividades políticas, incluida la simple expresión de apoyo u oposición a un partido político, y que los artículos 113, 2) y 115, 1), del decreto electoral, prohíbe a todo funcionario público la realización de las actividades relativas a las campañas, y a toda persona, entidad u organización que reciba una financiación o asistencia de un gobierno extranjero y de una organización intergubernamental o no gubernamental, para comprometerse, participar o realizar cualquier campaña (incluyéndose la organización de debates, foros públicos, reuniones, entrevistas, panel de discusiones o publicación de cualquier material) que se relacione con la elección, y solicitó información a este respecto.

La Comisión toma nota de la reiteración del Gobierno de que ha emprendido reformas, incluso en el sistema de votación, para crear reglas transparentes de gobernanza y que estas disposiciones apuntan a garantizar la neutralidad política de los funcionarios públicos, incluidos los dirigentes sindicales. Toma nota asimismo de las continuas preocupaciones del FTUC, de que estas disposiciones han generado miedo en los sindicalistas, puesto que han sido acusados de participar en actividades políticas cuando simplemente participaron en reuniones sindicales, al tiempo que el propio decreto deniega el derecho básico de los sindicalistas de participar en actividades políticas. ***Observando que el decreto relativo a los partidos políticos es indebidamente restrictivo al prohibir la afiliación a un partido político o a cualquier expresión de apoyo político u oposición por parte de dirigentes de las organizaciones de empleadores o de trabajadores, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para revisar las mencionadas***

disposiciones, en consulta con las organizaciones nacionales representativas de trabajadores y de empleadores, con miras a su enmienda.

Filipinas

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2018 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de que, a solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas de 2016, se llevó a cabo una misión de contactos directos en el país del 6 al 10 de febrero de 2017. La Comisión saluda la participación constructiva de todas las partes en la misión de contactos directos y toma nota de las conclusiones y recomendaciones de esta última, en particular, de los siguientes aspectos: i) las libertades civiles y los derechos sindicales; ii) cuestiones legislativas, y iii) la promoción de un clima propicio a la libertad sindical.

Libertades civiles y derechos sindicales

La Comisión toma nota de la respuesta detallada del Gobierno en relación con las observaciones anteriores de la CSI, relativas sobre todo a los esfuerzos del Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) para mediar en los casos de conflicto en acciones colectivas, así como en casos de intervenciones de la policía para investigar alegatos de violencia y en la solución de determinados conflictos laborales, a través de la creación de un grupo de trabajo tripartito de carácter técnico. El Gobierno se refiere también a la investigación en curso del Comité de Derechos Humanos sobre los alegatos de acoso a varios dirigentes sindicales y a activistas sindicales de la Confederación para la Unidad, el Reconocimiento y el Progreso de los Empleados del Estado (COURAGE).

No obstante, la Comisión toma nota con **profunda preocupación** de los nuevos y graves alegatos de asesinato de dos dirigentes sindicales en 2016, uno de los cuales fue abatido por disparos frente a la sede de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, en ciudad Quezón, así como de la preocupación de la CSI por el hecho de que la reciente declaración de guerra por parte de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) contra los denominados «rojos» evoca épocas pasadas cuando dirigentes y activistas sindicales eran acosados, arrestados, encarcelados, secuestrados y asesinados tras ser previamente etiquetados como «rojos» por los militares. La CSI ofrece ejemplos de arrestos selectivos de dirigentes sindicales de Kilusang Mayo Uno (KMU) en 2017, así como de varios alegatos de violencia policial y arrestos de sindicalistas en el curso de acciones de huelga pacífica. **La Comisión pide al Gobierno que comunique una respuesta detallada sobre estos alegatos.**

Mecanismos de seguimiento. En sus comentarios anteriores, La Comisión pidió al Gobierno que siguiera proporcionando información sobre el funcionamiento de los órganos de seguimiento en la práctica, los progresos sobre los casos de los que se ocupan y las medidas adicionales adoptadas o contempladas para garantizar un clima de justicia y seguridad para los sindicalistas en Filipinas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno recuerda el establecimiento de la Comisión Interinstitucional (IAC), creada por la orden administrativa núm. 35 (AO35) sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura y otras graves violaciones del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, que ya en 2016 había examinado 335 casos, incluidos 65 casos de ejecuciones extrajudiciales y tentativas de asesinato que fueron confirmadas por el órgano de control del Consejo Nacional Tripartito para la Armonía Laboral (NTIPC-MB). De estos 65 casos, la IAC sólo reconoció 11 como ejecuciones extrajudiciales. La Comisión **lamenta**, no obstante, tomar nota de que, según la memoria del Gobierno, la AO35-IAC todavía tiene que volver a reunirse debido a la transición en la dirección del Departamento de Justicia, y confía en que reanudará sus trabajos en un futuro muy próximo. El Gobierno señala, mientras tanto, que el DOLE emitió la AO32, el 25 de enero de 2018, en la que se proponen pautas rectoras para los mecanismos y competencias del NTIPC-MB y de los organismos regionales de control tripartito en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, acoso y secuestro de dirigentes y afiliados sindicales en el ejercicio de su derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva. La AO32 institucionalizó asimismo la creación de equipos tripartitos de validación. Al tiempo que toma nota de las iniciativas recientes adoptadas por el Gobierno, incluida la creación de estos equipos tripartitos de validación, la Comisión **lamenta** verse obligada, no obstante, a tomar nota de que varios años después sigan registrándose numerosos casos de asesinatos y otros actos de violencia contra los sindicatos, delitos de los cuales aún tienen que ser identificados sus presuntos autores y castigados si son culpables. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los progresos realizados por los equipos de validación tripartita, el NTIPC-MB y otros organismos pertinentes para asegurar la recopilación de la información necesaria para llevar a los tribunales los casos pendientes de violencia, así como los resultados obtenidos a este respecto.**

La Comisión toma nota en este sentido de las conclusiones de la misión de contactos directos sobre las medidas para luchar contra la impunidad y de que el Gobierno señala que se han formulado recomendaciones para llevar a cabo reformas encaminadas a proporcionar suficiente protección a los testigos de los delitos y crear capacidades para los enjuiciadores, los órganos encargados de aplicar la ley y otros actores relevantes, especialmente para llevar a cabo

investigaciones forenses. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto.***

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en relación con los progresos realizados en el enjuiciamiento de los tres casos de asesinato de dirigentes sindicales que fueron planteados en las observaciones anteriores de la CSI, pero ***lamenta*** observar que en el homicidio del Sr. Rolando Pango, un dirigente trabajador agrícola, el caso fue sobreesido por falta de pruebas; que el homicidio del Sr. Florencio «Bong» Romano aún no ha sido examinado por los tribunales debido a que no se ha reactivado la AO35-IAC; y que se ha incoado un expediente en el caso del homicidio del Sr. Victoriano Embang, pero aún no ha concluido. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que se llevarán a término, en un futuro muy próximo, las investigaciones sobre los graves alegatos de homicidios de dirigentes sindicales, así como los correspondientes procedimientos judiciales en curso, con miras a esclarecer la verdad lo antes posible sobre los hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos actos y, en la medida de lo posible, determinar las responsabilidades, castigar a los autores del delito e impedir que se repitan hechos similares. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre todos los progresos logrados a este respecto.***

La Comisión espera firmemente que todos los alegatos pendientes de casos de violaciones de derechos sindicales serán objeto de investigaciones apropiadas y que se seguirán realizando vigorosos esfuerzos y adoptando medidas efectivas para garantizar que se rindan cuentas por ellos. Recordando que la misión de contactos directos insiste en la necesidad de velar por el cumplimiento de la ley a nivel nacional, regional y local por medio de la aplicación de medidas inclusivas, ágiles, transparentes y responsables de calidad, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

Cuestiones legislativas

Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión ha venido tomando nota de los numerosos proyectos de ley de enmiendas que están pendientes de aprobación en el Congreso desde hace muchos años y en diversas fases con miras a poner la legislación nacional en conformidad con los siguientes artículos del Convenio.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas sin autorización previa. Extranjeros. La Comisión se refirió anteriormente a la necesidad de modificar los artículos 284 y 287, b), del Código del Trabajo con el fin de otorgar el derecho de sindicación a todos los trabajadores que residen legalmente dentro del territorio de Filipinas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 1354, que autoriza a los extranjeros a participar en actividades sindicales, y que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 4488, que permite a los extranjeros ejercer su derecho a la autoorganización, son objeto de deliberación por parte de las comisiones del Parlamento. ***Al tiempo que observa que el Gobierno ha venido refiriéndose desde hace varios años a la necesidad de modificar la legislación y que el proyecto de ley ha sido planteado pero aún no aprobado en las sesiones del Parlamento, la Comisión confía en que se adoptarán las enmiendas necesarias en un futuro muy próximo y que éstas garantizarán que todos los residentes en el territorio del Estado, tengan o no residencia o un permiso de trabajo, puedan beneficiarse de los derechos sindicales establecidos en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto, y que transmita copias de la legislación enmendada cuando haya sido adoptada.***

Otras categorías de trabajadores excluidas de los derechos enunciados en el Convenio. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, expresó la esperanza de que las enmiendas legislativas propuestas garantizarían en un futuro próximo que todos los trabajadores (aparte de las fuerzas armadas y la policía, según determine la ley nacional), incluso los que ocupan puestos de gestión o tienen acceso a información confidencial, los bomberos, los guardias de prisiones y otros trabajadores del sector público, así como los trabajadores temporales y subcontratados y los trabajadores sin contrato de trabajo, puedan disfrutar del derecho a constituir organizaciones para defender sus intereses profesionales y afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de que el Gobierno menciona, en su memoria, que los proyectos de ley de la Cámara de Representantes núms. 4533 y 5477 y el proyecto de ley del Senado núm. 641, que establecen un Código de la Función Pública, están pendientes de aprobación en las comisiones pertinentes del Parlamento y recuerda que el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) ha sido ratificado en octubre de 2017. ***La Comisión, al tiempo que saluda la reciente ratificación por el Gobierno del Convenio núm. 151, le pide a éste que señale las medidas adoptadas para garantizar que todos los trabajadores, sin distinción o discriminación de ningún tipo, incluidos los mencionados más arriba, puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas, y a que transmita copias de la legislación enmendada cuando haya sido adoptada.***

Requisitos relativos al registro. La Comisión se refirió anteriormente a la necesidad de modificar el artículo 240, c), del Código del Trabajo a fin de reducir el requisito excesivo de afiliación mínima para constituir un sindicato independiente (el 20 por ciento de todos los empleados de la unidad de negociación en la que desea funcionar el sindicato). La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a varios proyectos de ley para reducir el requisito mínimo de afiliación: i) el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 1355 que busca reducir el requisito de afiliación mínima para el registro de sindicatos del 20 al 10 por ciento, ya ha sido aprobado y está pendiente de una segunda lectura; ii) el proyecto de ley del Senado núm. 1169, que tiene la finalidad de reducir el requisito mínimo de afiliación para el registro de sindicatos del 20 al 5 por ciento y suprimir el requisito de una autorización previa para poder recibir asistencia

extranjera, y iii) el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 4466, que suprime los requisitos de registro de las filiales locales y promueve «la libertad de elección del trabajador», facilitando a los trabajadores que constituyan sindicatos y/o se afilien a ellos mediante «la firma de la mayoría». ***Al tiempo que observa que el Gobierno ha venido mencionando desde hace varios años la necesidad de enmendar la legislación, la Comisión espera que estas necesarias enmiendas se adoptarán en un próximo futuro, reduciendo el requisito mínimo de afiliación de modo que no se obstaculice la constitución de organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto y a que transmita copias de la nueva legislación cuando haya sido adoptada.***

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de los trabajadores a organizar su administración y sus actividades y a formular sus programas sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión se refirió anteriormente a la necesidad de modificar el artículo 278, g), del Código del Trabajo con el fin de restringir a los servicios esenciales la intervención del Gobierno que conduce al arbitraje obligatorio. Al tiempo que saluda la emisión de la orden núm. 40-H-13, que armoniza la lista de sectores que son indispensables para el interés nacional con el criterio de los servicios esenciales contemplado en el Convenio, la Comisión esperaba que los proyectos de enmiendas legislativas pendientes garantizarían que la intervención del Gobierno se reduciría a los sectores que puedan considerarse servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han presentado a la Cámara de Representantes cuatro proyectos de ley con objeto de modificar el artículo 278 (proyectos de ley de la Cámara de Representantes núms. 175, 711, 1908 y 4447), y que hay un proyecto de ley que es objeto de deliberación en el Senado (proyecto de ley del Senado núm. 1221). ***La Comisión confía en que las enmiendas legislativas al artículo 278, g), a las que el Gobierno viene refiriéndose desde hace varios años serán adoptadas muy próximamente y que éstas garantizarán que la intervención del Gobierno que lleva al arbitraje obligatorio se limita a los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto y que transmita copias de la nueva legislación cuando haya sido adoptada.***

En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su confianza en que se enmendarían los artículos 279 y 287 del Código del Trabajo a fin de garantizar que no se imponga ninguna sanción penal a un trabajador por participar en una huelga pacífica. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que los proyectos de ley de la Cámara de Representantes núms. 175, 711, 1908 y 4447 siguen pendientes de aprobación por la Comisión de Trabajo y Empleo de la Cámara de Representantes, y que el proyecto de ley del Senado núm. 1221 sigue siendo objeto de deliberación por el Comité de Trabajo, Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos de esta misma Cámara. ***Al tiempo que observa que el Gobierno ha venido refiriéndose a la nueva legislación desde hace varios años, la Comisión expresa firmemente su confianza en que se enmendarán muy próximamente los artículos 279 y 287 del Código del Trabajo, garantizando así que no se imponga ninguna sanción penal a un trabajador por llevar a cabo una huelga pacífica, aun cuando no cumpla los requisitos relativos a la negociación o el aviso previo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto y que transmita copias de la nueva legislación cuando haya sido adoptada.***

La Comisión se refirió anteriormente a la necesidad de enmendar el artículo 285 del Código del Trabajo, que supedita la recepción de asistencia extranjera por los sindicatos a una autorización previa de la Secretaría del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 1354 establece también la ampliación de la asistencia extranjera a las organizaciones del trabajo y los grupos de trabajadores, y que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 4448 suprime la prohibición a las organizaciones sindicales extranjeras de participar en actividades sindicales así como la reglamentación de la asistencia extranjera a sindicatos filipinos. Ambos proyectos de ley están pendientes de examen por la Comisión de Trabajo y Empleo. ***Al tiempo que observa que el Gobierno ha venido refiriéndose a la legislación enmendada desde hace varios años, la Comisión espera que las enmiendas legislativas propuestas, que suprimen la necesidad de autorización gubernamental para la recepción de asistencia extranjera a los sindicatos, serán adoptadas en un próximo futuro. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto y que transmita copias de la nueva legislación cuando haya sido adoptada.***

Artículo 5. Derecho de las organizaciones a constituir federaciones y confederaciones. La Comisión se refirió anteriormente a la necesidad de rebajar el requisito, excesivamente elevado, de diez sindicatos o secciones locales o agentes de negociación debidamente reconocidos para el registro de federaciones o de sindicatos nacionales que establece el artículo 244 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 1355, que reduce el requisito mínimo de afiliación para el registro de sindicatos o federaciones, ya ha sido aprobado a nivel de la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes y está a la espera de una segunda lectura; y que el proyecto de ley del Senado núm. 1169, que reduce el requisito del número de afiliados para el registro de federaciones de diez a cinco agentes de negociación o secciones locales debidamente reconocidos, es objeto de deliberación en una comisión del Senado. ***Al tiempo que observa que el Gobierno ha venido mencionando la nueva legislación desde hace varios años, la Comisión confía en que las enmiendas legislativas propuestas rebajarán el requisito, excesivamente elevado para el registro de sindicatos y federaciones, y que será adoptado muy próximamente. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todos los progresos realizados a este respecto y a que transmita copias de la nueva legislación cuando haya sido adoptada.***

La Comisión toma nota además con *interés* de la información relativa a los progresos realizados dentro del marco del proyecto de DOLE-ILO-EU-GSP+ de Cooperación al Desarrollo destinado a impulsar la capacidad de los

trabajadores, los empleadores y el Gobierno para una mejor aplicación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. El lanzamiento del proyecto, en 2017, dio lugar a la firma de un Manifiesto tripartito de compromiso y esfuerzo colectivo para sostener la observancia y el mejoramiento adicional de la aplicación de los principios de libertad sindical y negociación colectiva. ***Tomando nota de que parte del Plan de acción nacional en aplicación del proyecto consiste en el examen y actualización de las pautas de funcionamiento de los organismos de investigación y control con el fin de impulsar el fortalecimiento y la mejora de su funcionamiento así como la coordinación e interacción, la Comisión pide al Gobierno que informe de cualquier evolución ulterior a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2020.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 1.º de septiembre de 2018, sobre los desafíos a la aplicación del Convenio en la práctica. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre los alegatos presentados a las mismas.***

Artículos 1, 2, y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que siguiera comunicando información sobre las medidas adoptadas para garantizar, si fuere necesario, la adopción de medidas adecuadas de reparación y la imposición de unas sanciones suficientemente disuasorias, con el fin de garantizar la efectiva protección del derecho de sindicación. La Comisión toma debida nota de la información detallada comunicada por el Gobierno y de la resolución de estos casos.

En cuanto a la necesidad de adoptar medidas para fortalecer en la práctica la protección disponible contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia, la Comisión toma nota con ***interés*** de que se dictó, el 18 de octubre de 2017, la orden ministerial núm. 183 sobre la nueva reglamentación relativa a la inspección de la legislación del trabajo y el reglamento revisado sobre la administración y la aplicación de la legislación laboral, que apunta a fortalecer la aplicación de las facultades de visitas y las facultades ejecutivas en virtud del Código del Trabajo, hacia la garantía de un nivel más elevado de cumplimiento de las normas de la legislación laboral. Toma nota con ***interés*** de las medidas adoptadas para garantizar la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la inspección de los establecimientos, a través de la orden administrativa del departamento de trabajo y empleo (DOLE) núm. 164, de 2017, y la consecutiva sustitución de 126 inspectores sindicales. En general, el Gobierno informa que, con más de 900 000 establecimientos en toda la nación, se inspeccionaron 136 986, de junio de 2016 a junio de 2018. El intensificado sistema de cumplimiento laboral dio lugar a que se regularizara a 217 491 trabajadores.

En lo que respecta a la autoridad de inspección de las zonas francas de exportación (ZFE) y las zonas económicas especiales, el Gobierno indica que el memorando de acuerdo que se estableció entre el DOLE y la Dirección de la zona económicas de Filipinas (PEZA), se revocó el 8 de enero de 2018, con lo que se afirmó la autoridad del DOLE para inspeccionar los establecimientos de esas zonas. El DOLE se compromete asimismo a intensificar la realización de inspecciones de todos los establecimientos dentro de las zonas, para aplicar estrictamente las normas de trabajo, técnicas y de seguridad y salud en el trabajo.

La Comisión también toma nota con ***interés*** de la información relativa a los progresos realizados en el marco del proyecto de cooperación para el desarrollo DOLE-OIT-UE-GSP, dirigido a una mejora de la capacidad de los trabajadores, de los empleadores y del Gobierno de cara a una mejor aplicación de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Artículo 4. Negociación pública en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que, en virtud del artículo 13 de la orden ejecutiva núm. 180, sólo los términos y condiciones que no hayan sido fijados por ley pueden ser negociados entre las organizaciones de empleados del sector público y las autoridades gubernamentales, y solicitó al Gobierno que adoptara medidas legislativas u otro tipo de medidas para ampliar los temas comprendidos en la negociación colectiva, con el fin de garantizar que los empleados del sector público que no están adscritos a la administración del Estado disfruten plenamente del derecho a negociar sus condiciones de empleo, incluidos los salarios, las prestaciones, las asignaciones, y el tiempo de trabajo, de conformidad con el ***artículo 4*** del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se presentaron los proyectos de ley núms. 4553 y 5477, de la Cámara Baja, hacia el establecimiento de un Código de la Administración Pública, que están pendientes de tramitación en el Congreso. La Comisión toma nota asimismo con ***interés*** de la reciente ratificación Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y de la indicación del Gobierno de que aún necesita desarrollar un marco de relaciones laborales en el sector público que esté en consonancia con el Convenio núm. 151. La Comisión espera que, a la hora de diseñar este marco, tenga en cuenta que el ***artículo 4*** del presente Convenio exige la adopción de medidas para promover el mecanismo de la negociación voluntaria sobre las condiciones de empleo de todos los trabajadores, incluidos los de la administración pública, sólo con excepción de aquellos no adscritos a la administración del Estado. ***La Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio (incluidos los maestros, los trabajadores de la salud, etc.) puedan negociar sus condiciones de empleo, incluso respecto de los salarios, las prestaciones, las asignaciones y el tiempo de trabajo, y le solicita que la mantenga informada de la evolución a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gambia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que contienen alegaciones de arrestos de varios dirigentes de la Asociación Nacional de Control del Transporte de Gambia (GNTCA), del fallecimiento del Sr. Sheriff Diba, uno de los dirigentes arrestados, durante su detención, y de la prohibición impuesta a las actividades de la GNTCA. *La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de estas alegaciones y pide al Gobierno que formule comentarios al respecto.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios públicos, funcionarios de prisiones y trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que garantizase que los derechos que prevé el Convenio se otorgan a los funcionarios de prisiones, los trabajadores del servicio doméstico y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión lamentó que la nueva Ley de Trabajo no se aplique a las categorías antes mencionadas de trabajadores (artículo 3, 2)). Recordó que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden excluirse de las garantías que otorga el Convenio. La Comisión toma nota de que según el Gobierno el derecho a la negociación colectiva en virtud de la parte XIII de la Ley de Trabajo es un derecho de la comunidad garantizado a todos los trabajadores. La Comisión observa que aunque los funcionarios de prisiones, los trabajadores domésticos y los funcionarios están excluidos de la aplicación de la Ley de Trabajo, el artículo 3, 3), faculta al Secretario de Estado para ampliar la aplicación de la ley, a través de una orden publicada en el *Boletín Oficial*, a todas las categorías de trabajadores que estén excluidas. *Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique si los trabajadores excluidos en virtud del artículo 3, 2), de la Ley de Trabajo tienen derecho a la negociación colectiva en virtud de la parte XIII de dicha ley como resultado de una orden publicada en el Boletín Oficial por el Secretario de Estado, y, de ser así, que transmita una copia de dicha orden. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique cómo se concede a estas categorías de trabajadores una protección adecuada contra actos de discriminación antisindical e injerencia, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Convenio.*

Artículo 4. Medidas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización del mecanismo de la negociación voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que según el artículo 130 de la ley, a fin de ser reconocido como único agente de negociación, un sindicato debe representar un cierto porcentaje de empleados con contrato de servicio (el 30 por ciento en el caso de un sindicato único y al menos un 45 por ciento si el establecimiento en cuestión emplea al menos a 100 personas; en este caso, el organismo de negociación puede integrar dos o más sindicatos). La Comisión recordó que cuando, en un sistema de designación de agente exclusivo de negociación, no existe ningún sindicato que represente al porcentaje exigido para ser declarado agente negociador exclusivo, los derechos de negociación colectiva no deben negarse a los otros sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus miembros. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 131 de la ley dispone que un empleador puede, si así lo desea, organizar una votación secreta para establecer un único agente de negociación. La Comisión recordó que la organización de una votación para determinar la representatividad debe ser llevada a cabo por las autoridades o una parte independiente previa presentación de una solicitud por parte de un sindicato. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el Convenio con arreglo a los principios antes mencionados. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que el Departamento de Trabajo está realizando consultas con el Gobierno Central para que las enmiendas se presenten al Parlamento para su aprobación. *La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Grecia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las detalladas observaciones proporcionadas por la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), recibidas el 1.º de noviembre de 2018. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios anteriores de la GSEE, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y la Federación Panhelénica de Marinos (PNO). *Pide al Gobierno que responda con detalle a la última comunicación de la GSEE.*

En lo relativo a los comentarios anteriores relacionados con las órdenes de movilización civil en el sector marítimo, los enfrentamientos con las fuerzas policiales durante una acción de protesta en un astillero y la detención de 12 sindicalistas, a los que se había imputado cargos, la Comisión toma nota con *interés* de la información proporcionada

por el Gobierno, según la cual la legislación relativa a la movilización civil se enmendó por la ley núm. 4325/2015, en la que se prohíbe la movilización civil o la requisita como medida contra la huelga u otras formas relevantes de movilización empleadas por profesionales independientes o trabajadores por cuenta propia. El Gobierno añade que esto permite que se entablen procedimientos pertinentes durante los períodos de paz sólo para cubrir necesidades de defensa inmediata del país o necesidades sociales urgentes que se deriven de toda forma de catástrofe natural o de peligro para la salud. El Gobierno describe con detalle las precauciones que se han tomado respecto de la orden de movilización civil emitida en 2013 e indica que la autoridad judicial competente declaró inocentes a los sindicatos acusados. El Gobierno destaca que desde entonces evita emitir órdenes de movilización civil y el funcionamiento de la red nacional marítima se ha restablecido por fin reforzando el diálogo social y celebrando amplias consultas con la PNO y todas las autoridades competentes.

Además, la Comisión toma nota de la detallada información que proporciona el Gobierno en lo relativo a la evolución reciente de la legislación, en particular en lo tocante a la ley núm. 4472/2017 sobre las licencias pagadas y no pagadas y las facilidades que se conceden para desempeñar actividades sindicales en los sectores público y privado, y a la solución rápida de conflictos en los casos en que un empleador no permite la vuelta al trabajo o deja de pagar los salarios a consecuencia de una huelga.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y formular sus programas de acción. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las preocupaciones manifestadas por la GSEE en lo relativo a la representación y las actividades de la agencia de contratación (OAED), que ha reemplazado totalmente al Fondo Social de los Trabajadores y la Organización para la Vivienda de los Trabajadores, ya que ofrece financiación a los sindicatos únicamente a partir de las contribuciones de los trabajadores. En especial, la Comisión toma nota de los detalles que se han proporcionado en lo concerniente al fondo de política social, que se creó bajo la tutela de la OAED y que sigue teniendo completa independencia administrativa y está sujeto a una supervisión y una auditoría específicas. El proceso de financiación tiene por objeto ofrecer un respaldo sin restricciones a la fuerza de trabajo para sus acciones colectivas y su organización con vistas a mejorar el nivel de vida.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones detalladas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV), en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2018. Toma nota además de las observaciones detalladas proporcionadas por la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), recibidas el 1.º de noviembre de 2018 y *pide al Gobierno que responda detalladamente a todas ellas.*

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (en adelante la Comisión de la Conferencia) en la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2018). Observa que la Comisión de la Conferencia expresó su preocupación por la información proporcionada por el Gobierno relativa al sistema de arbitraje obligatorio y añade que la decisión del Consejo de Estado en la que se concluye que la disposición de la ley núm. 4046, que disponía la supresión del recurso unilateral al arbitraje obligatorio es inconstitucional. La Comisión de la Conferencia manifestó asimismo su preocupación por el hecho de que el Gobierno no presentara una memoria a la Comisión de Expertos a tiempo para su reunión más reciente, en noviembre de 2017. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Gobierno y la discusión que tuvo lugar a continuación, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: i) vele por que el recurso unilateral al arbitraje obligatorio como medio de evitar la negociación colectiva libre y voluntaria se emplee únicamente en circunstancias muy limitadas; ii) se asegure de que las autoridades públicas se abstengan de actos de injerencia que limiten el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria o que obstaculicen su ejercicio legal; iii) aporte información sobre el número de convenios colectivos suscritos, los sectores concernidos y el número de trabajadores cubiertos por esos convenios colectivos; iv) aporte información y estadísticas en relación con las quejas de discriminación antisindical y con las medidas de reparación aplicadas; v) recurra a la asistencia técnica de la OIT para asegurar la aplicación de estas medidas, y vi) informe a la Comisión de Expertos sobre la aplicación de estas recomendaciones antes de su reunión de noviembre de 2018.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se refirieron a la decisión del Consejo de Estado en la que se concluía la inconstitucionalidad de la disposición que figuraba en la ley núm. 4046, de 14 de febrero de 2012, que preveía la supresión del recurso unilateral al arbitraje obligatorio. La Comisión confió en que las medidas adoptadas por el Gobierno para acatar esta decisión tendrían plenamente en cuenta sus consideraciones anteriores de que, por regla general, las disposiciones legislativas que permiten a cualquiera de las partes solicitar unilateralmente el arbitraje obligatorio para la solución de un conflicto no promueven la negociación colectiva voluntaria y, en consecuencia, son contrarias al Convenio. La Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por la SEV de que el Gobierno ha ignorado sus propuestas para que se considere la introducción de enmiendas, que reducirían considerablemente las distorsiones actuales y estarían más en consonancia con las normas internacionales del trabajo, como medida provisional hasta que se presente la oportunidad de resolver esta cuestión a nivel constitucional o su interpretación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las recientes enmiendas introducidas en la ley núm. 1876/1990 a través de la ley núm. 4549/2018, que favorece la resolución autónoma de conflictos durante la mediación y posibilita la petición unilateral a una solución de arbitraje por aquella de las partes que haya aceptado la propuesta de mediación cuando la otra parte la ha rechazado. El Gobierno afirma que el principio fundamental del sistema de mediación y arbitraje en Grecia consiste en que son los propios interlocutores sociales los que pueden especificar las condiciones para recurrir a él, aplicándose únicamente las disposiciones de la ley sobre mediación y arbitraje cuando no se ha llegado a dicho acuerdo. El Gobierno destaca que la mediación tiene únicamente una función auxiliar y que la gran mayoría de los acuerdos colectivos se resuelven por consentimiento mutuo de las partes. A fin de fortalecer el principio de buena fe, en virtud de la ley núm. 4549/2018, el derecho al recurso unilateral al arbitraje sólo se concede en dos casos: i) a iniciativa de cualquiera de las dos partes cuando la otra se niegue a participar en el proceso de mediación, y ii) a iniciativa de cualquiera de las dos partes que acepte la propuesta del mediador si ésta fue rechazada por la otra parte. Anteriormente no era necesario aceptar la propuesta del mediador con el fin de poder acceder al recurso unilateral al arbitraje. Según el Gobierno, el acceso al recurso unilateral de arbitraje sólo se concede, por tanto, como último recurso únicamente cuando las partes han agotado todos sus esfuerzos encaminados a una conducta de buena fe y una manifiesta voluntad de consentimiento. El Gobierno añade que, entre las consideraciones para una propuesta de mediación o un laudo arbitral, la ley núm. 4549/2018 introduce explícitamente la evolución del poder adquisitivo de los salarios con el fin de hacer frente al aumento del costo de la vida, que suele afectar negativamente al poder adquisitivo de los trabajadores. El Gobierno afirma que los cambios anteriores se realizaron tras un intenso diálogo social con los interlocutores sociales en torno a un amplio estudio sobre la evaluación del sistema de arbitraje desde la entrada en vigor de la ley núm. 1876/1990. El Gobierno añade que estas modificaciones se han introducido en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo griego en virtud de la cual se garantiza con arreglo a la Constitución el establecimiento del derecho al recurso unilateral al arbitraje como mecanismo auxiliar para la resolución de conflictos colectivos, si bien se restringe su ámbito de aplicación al hacer hincapié en la importancia de la conducta de buena fe. Con el fin de demostrar que el recurso al mecanismo de arbitraje es infrecuente, el Gobierno proporciona estadísticas del período 2010-2017, en las que se firmaron 3 506 convenios colectivos, de los cuales el 96,38 por ciento son acuerdos colectivos laborales y el 3,62 por ciento laudos arbitrales.

La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio en caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo es generalmente contrario a los principios de la negociación colectiva. En opinión de la Comisión, el arbitraje obligatorio sólo es aceptable en ciertas circunstancias específicas, a saber: i) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población); ii) en los casos de conflicto en la función pública respecto de funcionarios empleados en la administración del Estado; iii) cuando, tras negociaciones prolongadas e infructuosas, puede justificarse la intervención de las autoridades, si es obvio que el bloqueo de las mismas no será superado sin una iniciativa de su parte, o iv) en caso de crisis aguda (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 247). La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para restringir aún más el recurso al arbitraje obligatorio en el marco de la ley núm. 4549/2018, tomando en consideración las normas constitucionales a las cuales está sujeto. ***La Comisión confía en que el Gobierno continuará colaborando con los interlocutores sociales, tanto durante la revisión de la ley como en el contexto de la reforma constitucional, para poner dicho mecanismo en plena armonía con la obligación de promover la negociación colectiva libre y voluntaria, eliminando, salvo los casos de descritos anteriormente, la posibilidad de que una sola parte recurra al arbitraje obligatorio si la otra parte rechaza la propuesta resultante de la mediación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada a este respecto.***

En lo que se refiere a la ampliación de los convenios colectivos, la Comisión toma nota de la información proporcionada por la SEV de que la reciente recuperación del derecho del Ministerio a ampliar la cobertura de los convenios sectoriales tras haber concluido el tercer Programa de ajuste económico en Grecia debería tener en cuenta las siguientes condiciones básicas: i) la aplicación de métodos fiables para garantizar que el convenio colectivo cubre como mínimo al 51 por ciento de los trabajadores; ii) el consentimiento de las partes en el convenio a la ampliación del mismo, y iii) la exclusión del mecanismo de extensión de los laudos de arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, el 13 de junio de 2018, publicó la circular núm. 3291/2175/13.06.2018, que establece el procedimiento que debe seguirse para determinar si el 51 por ciento de los trabajadores del sector están cubiertos por el convenio colectivo antes de decidir si se declara éste universalmente aplicable en virtud del artículo 11.2 de la ley núm. 1876. El Gobierno señala que este planteamiento ha sido objeto de consultas intensivas y que fue aceptado por todos los interlocutores sociales. En relación con el posterior intercambio de cartas con la SEV, el Gobierno señala que corresponde únicamente al Ministerio de Trabajo la potestad discrecional para declarar universalmente aplicable un convenio colectivo laboral.

La Comisión recuerda a este respecto que el subpárrafo 2) del párrafo 5 de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), establece que: la legislación nacional podrá supeditar la extensión de un contrato colectivo, entre otras a las condiciones siguientes: a) el contrato colectivo debería comprender desde un principio un número de empleadores y de trabajadores interesados que, según la opinión de la autoridad competente, sea suficientemente representativo; b) la solicitud de extensión del contrato colectivo debería, por regla general, formularse por una o varias organizaciones de trabajadores o de empleadores que sean parte en el contrato colectivo, y c) debería darse una oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a quienes vaya a aplicarse un contrato colectivo para que presenten previamente sus observaciones.

Convenios colectivos a nivel de empresa y asociación de personas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre la ley núm. 4024/2011, en la cual se establece que, cuando no haya ningún sindicato en la empresa, una asociación de personas estará facultada para concertar un convenio colectivo a nivel de empresa. La Comisión manifestó anteriormente su preocupación sobre el hecho de que, en vista del predominio de las pequeñas empresas en el mercado de trabajo griego, la facilitación de la negociación para las asociaciones de personas, combinado con la supresión del principio del trato más favorable establecido en la ley núm. 3845/2010 y al cual se da cumplimiento en la ley núm. 4024/2011, podría menoscabar gravemente el fundamento de la negociación colectiva en el país.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el principio de trato más favorable ha sido reinstaurado y observa las estadísticas recientes suministradas por el Gobierno, con arreglo a las cuales, en 2017, se firmaron 155 convenios colectivos a nivel de empresa y concertados con sindicatos y 91 se concertaron entre empleadores y asociaciones de personas. Además, hay 26 convenios sectoriales y 15 convenios profesionales en vigor. No obstante, la Comisión señala además las constantes preocupaciones de la GSEE de que sigan vigentes las asociaciones de personas en detrimento de los sindicatos de funcionamiento sectorial que han sido elegidos democráticamente. ***Recordando la importancia de promover la negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores y, por consiguiente, de mejorar el alcance de la negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que responda pormenorizadamente y señale las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva con los sindicatos a todos los niveles, en particular, teniendo en cuenta la posibilidad, en consulta con los interlocutores sociales, de que se constituyan secciones sindicales en las pequeñas empresas.***

Artículos 1 y 3. Protección adecuada contra el despido antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que, a raíz de las preocupaciones planteadas por la GSEE, comunicara en su próxima memoria información y estadísticas relativas a las quejas por discriminación antisindical, así como sobre las medidas de reparación aplicadas. La Comisión toma nota de la información proporcionada, según la cual, en 2017, la inspección del trabajo tramitó 30 quejas relativas a obstáculos que han entorpecido el ejercicio de una acción sindical por parte de afiliados sindicales. Doce de estos casos fueron resueltos con arreglo a la recomendación de la inspección del trabajo, se abrieron siete expedientes y 11 causas se remitieron a los tribunales civiles. La inspección del trabajo ha tramitado asimismo 22 casos de despedidos de funcionarios sindicales de los cuales se han resuelto diez, otros diez se han remitido a los tribunales y dos se han resuelto con multas. El Gobierno adjudica un gran interés a estas infracciones y las clasifica como muy graves. ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información y estadísticas relativas a las quejas de discriminación antisindical y a todas las medidas de reparación que se hayan adoptado.***

Guatemala

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018 así como de las observaciones conjuntas del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala recibidas en la misma fecha. ***La Comisión toma nota de que dichas observaciones se refieren a cuestiones examinadas en el presente comentario, así como a denuncias de violaciones del Convenio en la práctica respecto de las cuales la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios.***

La Comisión también toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 y que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en el presente comentario.

La Comisión toma finalmente nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones formuladas en 2017 por la CSI, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala. Dichas respuestas fueron tomadas en consideración por la Comisión en el examen de las distintas cuestiones planteadas en el presente comentario.

Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio

La Comisión toma nota de que en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), en vista del informe de la misión tripartita que se desplazó a Guatemala del 26 al 29 de septiembre de 2018, tomando nota, por una parte, de la contribución significativa de la Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical en favor de un diálogo social más maduro y constructivo y del acuerdo que alcanzaron los mandantes tripartitos nacionales sobre los principios que deberían guiar las reformas legislativas que buscan garantizar la conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, y por otra parte, de la necesidad de dar continuidad a las medidas adoptadas con el fin de que el proceso positivo de diálogo social conduzca a una aplicación completa, eficaz y sostenible de la Hoja de ruta y, a la luz de los avances alcanzados y de los puntos todavía pendientes de solución, el Consejo de Administración: i) declaró cerrado el procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en relación con la queja antes mencionada; ii) instó firmemente al Gobierno, a los interlocutores sociales de Guatemala y a las demás autoridades públicas pertinentes a que, con el apoyo de la OIE y de la CSI, y con la asistencia técnica de la Oficina, elaborase y adoptase las reformas legislativas que se ajustan

plenamente al punto 5 de la Hoja de ruta; iii) instó firmemente al Gobierno a que, junto con los interlocutores sociales de Guatemala, y con la asistencia técnica de la Oficina, siguiera dedicando todos los esfuerzos y recursos necesarios para lograr una aplicación sostenible y completa de las demás disposiciones de la Hoja de ruta; iv) estableció que, de conformidad con el acuerdo tripartito nacional de noviembre de 2017, el Gobierno de Guatemala deberá informar al Consejo de Administración, en sus reuniones de octubre-noviembre de 2019 y de octubre-noviembre de 2020, de las medidas adicionales adoptadas; v) solicitó a la Oficina que pusiera en marcha, sin demora, un programa de asistencia técnica sólido y completo para lograr la sostenibilidad del proceso actual de diálogo social e impulsar los avances en la aplicación de la Hoja de ruta, y vi) alentó a la comunidad internacional a que contribuyera al mencionado programa de asistencia técnica con los recursos necesarios.

Derechos sindicales y libertades públicas

La Comisión *lamenta* tomar nota de que desde hace varios años ha venido examinando, al igual que el Comité de Libertad Sindical, alegatos de graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, incluyendo numerosos homicidios, y la situación de impunidad al respecto. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, tanto en su memoria relativa a la aplicación del presente Convenio como en sus informes de septiembre y octubre de 2018 dirigidos a la misión tripartita y al Consejo de Administración en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. La Comisión toma nota en primer lugar de que, en relación con 90 casos de muerte de dirigentes sindicales y sindicalistas, registrados desde 2004, el Gobierno indica que: i) se dictaron 17 sentencias condenatorias en relación con 15 casos (dos casos cuentan con dos sentencias cada uno); ii) en cuatro casos se dictaron sentencias absolutorias; iii) en un caso se dictó una sentencia por juicio de medidas de seguridad y corrección; iv) en seis casos se extinguió la acción penal por la muerte de los presuntos autores; v) un caso está siendo objeto de debate judicial; vi) tres casos se encuentran en procedimiento intermedio; vii) existen órdenes de aprehensión pendientes respecto de seis casos, y viii) 54 casos están en fase de investigación. La Comisión toma nota adicionalmente de que el Gobierno manifiesta que: i) desde 2011, se ha reforzado sustancialmente la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público; ii) el número de sentencias dictadas con respecto a la muerte de sindicalistas es mucho mayor desde que se creó la Unidad Fiscal Especial; iii) si bien varias sentencias relativas a la muerte de miembros del movimiento sindical pronunciadas en los últimos años han sido dictadas por tribunales de mayor riesgo (cortes especializadas), la importante carga procesal que afecta dichos tribunales hace que la remisión a los mismos de los casos pendientes de homicidios de sindicalistas no constituye siempre la mejor opción para agilizar el tratamiento judicial de dichos casos; iv) la aplicación de la instrucción general núm. 1-2015 del Ministerio Público facilita el establecimiento de la posible relación entre los homicidios y la actividad sindical de las víctimas y contribuye a impulsar las investigaciones, como puesto de manifiesto por la rápida identificación de los presuntos autores de los asesinatos de la Sra. Brenda Marlen Estrada Tambito (asesinada en 2016) y del Sr. Tomás Francisco Ochoa Salazar (asesinado en 2017); v) se realizaron entre agosto de 2017 y mayo de 2018, 17 reuniones entre la Unidad Fiscal Especial y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la policía civil con miras a analizar los distintos hechos delictivos, tomando en cuenta su contexto sindical; vi) se ha mantenido la colaboración entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en relación con 12 homicidios seleccionados por el movimiento sindical, la cual ha permitido una adecuada transferencia de capacidades investigativas para este tipo de delitos; vii) el Ministerio Público sigue con la plena disposición de continuar intercambiando informaciones con el movimiento sindical, sea por medio de un mantenimiento de la mesa sindical o por medio de otra modalidad, y viii) la Subcomisión de seguimiento de la Hoja de ruta que forma parte de la nueva Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical contribuye a un eficaz monitoreo tripartito de la investigación de las muertes de miembros del movimiento sindical.

La Comisión toma nota adicionalmente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de las medidas de protección a favor de los miembros del movimiento sindical que se encontrarían en situación de riesgo, en las cuales se indica que: i) todas las solicitudes de medidas de seguridad relativas a miembros del movimiento sindical recibidas por el Ministerio de Gobernación dan lugar a la realización de un estudio de riesgo; ii) a raíz de dichos estudios, se otorgaron entre enero y julio de 2018, 59 medidas de seguridad perimetral y una medida de seguridad personal; iii) en este momento, son objeto de medidas de seguridad personal cuatro dirigentes sindicales en total; iv) sigue aplicándose el protocolo de implementación de medidas de seguridad, inmediatas y preventivas en favor de trabajadores y trabajadoras sindicalizados, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de los derechos laborales, cuyo contenido había sido consensuado con las organizaciones sindicales; v) sigue funcionando la Instancia de análisis de ataques contra defensores de derechos humanos en la cual pueden participar las organizaciones sindicales, y vi) sigue funcionando 24 horas al día el número de teléfono de urgencia para denunciar hechos de violencia y amenazas en contra de dirigentes sindicales y sindicalistas.

La Comisión toma nota por otra parte de que, la CSI en sus observaciones, y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala, tanto en sus observaciones sobre la aplicación del presente Convenio como en sus informes de septiembre y octubre de 2018 dirigidos a la misión tripartita y al Consejo de Administración en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, denuncian: i) la persistente impunidad respecto de los actos de violencia cometidos contra los defensores de derechos humanos en general y los miembros del movimiento sindical en particular; ii) la ausencia de investigaciones serias por

parte del Ministerio Público y, especialmente, la persistente ausencia de toma en cuenta de las actividades sindicales de las víctimas en la investigación de los móviles de los homicidios; iii) la consiguiente ausencia de avances concretos en la investigación de los homicidios de miembros del movimiento sindical y la condena de sus autores especialmente en aquellos casos identificados como prioritarios por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2609 (véase 382.º informe, junio de 2017, párrafo 339); iv) las acciones del Gobierno y del Congreso de la República para acabar con la presencia de la CICIG en el país mientras que se requeriría un involucramiento concreto de la misma en la investigación de los asesinatos de miembros del movimiento sindical ya que, en muchos de ellos, existen abundantes indicios de la participación de grupos organizados; v) el empeoramiento notable, desde la instalación del nuevo Ministro de Gobernación en enero de 2018, de las medidas de seguridad otorgadas por las autoridades a los defensores de los derechos humanos, en general, y a los sindicalistas, en particular; vi) la no renovación en 2018 de la mesa técnica sindical de atención permanente de protección integral del Ministerio de Gobernación, y vii) el debilitamiento de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación por el cambio constante de los funcionarios gubernamentales a cargo de esa dependencia.

La Comisión toma nota adicionalmente con **profunda preocupación** de que las mencionadas organizaciones sindicales denuncian específicamente: i) el asesinato, el 29 de abril de 2018, del Sr. Alejandro García Felipe, secretario general de la filial local del departamento de Santa Rosa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG); ii) el asesinato, entre el 15 y el 20 de junio de 2018, del Sr. Domingo Nach Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad de Villa Canales, Departamento de Guatemala (SITRAMVCG); iii) el asesinato, el 21 de junio de 2018, del Sr. Juan Carlos Chavarria Cruz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la municipalidad de Melchor de Mencos, Petén; iv) el asesinato del Sr. David Figueroa García, presidente de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala con sede en Petén en junio de 2018, y v) el asesinato de la Sra. Juana Raymundo, afiliada al SNTSG, el 29 de julio de 2018. Las organizaciones sindicales añaden que en los tres primeros casos, existen elementos y antecedentes concretos que apuntan al posible carácter antisindical de los homicidios y que, en dos casos, las víctimas habían solicitado previamente al Ministerio de Gobernación medidas de seguridad sin que se les otorgaran.

Al tiempo que toma debida nota de las acciones que sigue tomando el Gobierno y de la dificultad que supone el esclarecimiento de los homicidios más antiguos, la Comisión expresa su **profunda preocupación** por la denuncia de cinco nuevos asesinatos de miembros del movimiento sindical en los últimos meses y por la persistencia del alto grado de impunidad relativo a los numerosos homicidios y actos de violencia antisindical denunciados en los últimos años. La Comisión toma nota también de la anunciada finalización del mandato de la CICIG en septiembre de 2019. Al igual que el Comité de Libertad Sindical, la Comisión considera que la importancia y magnitud de los mencionados retos, aunadas a la voluntad expresada por los mandantes tripartitos por medio de la creación de la Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical hacen necesaria y oportuna la toma de medidas ambiciosas para fortalecer y efectivizar la política nacional de lucha contra la violencia antisindical y la impunidad.

A la luz de lo anterior, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, con el fin de dar plena aplicación al Convenio y a la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2018, siga tomando e intensifique de urgencia todas las medidas necesarias para: i) investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo de deslindar las responsabilidades y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de los hechos, tomando plenamente en consideración en las investigaciones las actividades sindicales de las víctimas, y ii) brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. En relación con las acciones concretas requeridas para lograr dichos objetivos, la Comisión se remite a las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2609 (véase 387.º informe, octubre-noviembre de 2018, párrafo 410). La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas al respecto.

Problemas de carácter legislativo

Artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones legislativas:

- el artículo 215, c), del Código del Trabajo que prevé la necesidad de contar con la mitad más uno de los trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria; a este respecto, la Comisión toma nota con **preocupación** de la indicación de las organizaciones sindicales según las cuales la conjunción de la imposibilidad de crear sindicatos de industria consecutiva a los requisitos del artículo 215, c) y de la imposibilidad, en las pequeñas empresas que representan la casi totalidad de las compañías guatemaltecas, de afiliar a los 20 trabajadores requeridos por el Código del Trabajo para la creación de cualquier sindicato, conlleva a que la gran mayoría de los trabajadores del país no tenga ningún acceso al derecho de afiliación sindical, situación reflejada en una tasa general de afiliación sindical que amontaría al 1,5 por ciento;
- los artículos 220 y 223 del Código del Trabajo que prevén la necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser trabajador de la empresa o actividad económica correspondiente para ser elegido dirigente sindical;
- el artículo 241 del Código del Trabajo que prevé que la huelga es declarada no por la mayoría de los votantes sino por la mayoría de los trabajadores;

- el artículo 4, incisos d), e) y g), del decreto núm. 71-86 modificado por el decreto legislativo núm. 35-96, de 27 de marzo de 1996, que prevé la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio en servicios que no son esenciales y otros obstáculos al derecho de huelga, y
- los artículos 390, inciso 2, y 430 del Código Penal y el decreto núm. 71-86 que prevén sanciones laborales, civiles y penales en caso de huelga de los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas.

Adicionalmente, la Comisión pide desde hace muchos años que el Gobierno tome medidas para que varias categorías de trabajadores del sector público (contratados en virtud del renglón núm. 029 y otros renglones del presupuesto) gocen de las garantías previstas en el Convenio.

En su comentario anterior, la Comisión había observado con interés que el acuerdo tripartito firmado en noviembre de 2017 preveía que, para marzo de 2018, se presentarían, de forma tripartita, al Congreso de la República las propuestas legislativas referidas en el punto de la Hoja de ruta que tiene la finalidad de adecuar la legislación nacional con el contenido del Convenio, y que el acuerdo se refería a varios aspectos concretos destacados por la Comisión. La Comisión observa que se desprende de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y los interlocutores sociales que, en febrero de 2018, los mandantes tripartitos consensuaron, con miras a dar plena aplicación al Convenio, textos consolidados relativos a: i) la revisión de los artículos 390, inciso 2, y 430 del Código Penal, ii) la revisión de las disposiciones del decreto núm. 71-86 relativas a la lista de los servicios esenciales, y iii) el reconocimiento de los derechos sindicales a los trabajadores del sector público regidos por contratos temporales y regímenes especiales. La Comisión toma nota adicionalmente de que, en virtud de un acuerdo firmado el 28 de agosto de 2018, los mandantes tripartitos nacionales consensuaron una serie de principios en los que debería basarse la legislación futura sobre la creación de los sindicatos de industria y su derecho de negociación colectiva así como sobre la votación de la huelga y sus efectos. Al tiempo que constata que el proyecto de ley referido en el acuerdo de noviembre de 2017 no ha sido presentado todavía, la Comisión toma nota con *interés* de los acuerdos logrados en febrero y agosto de 2018. **La Comisión confía en que, de conformidad con la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2018, y con la participación activa de los interlocutores sociales, el Gobierno podrá informar a la brevedad de la adopción, solicitada desde hace muchos años, de una legislación que cumpla plenamente con las obligaciones contenidas en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los avances a este respecto, incluyendo una copia de la legislación que se adopte.**

Aplicación del Convenio en la práctica

Registro de organizaciones sindicales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que profundizara el diálogo con las organizaciones sindicales acerca de la revisión y agilización del procedimiento de inscripción de los sindicatos. La Comisión había expresado en su último comentario la esperanza de que el acuerdo tripartito de noviembre de 2017 contribuiría a dar un nuevo ímpetu al mencionado diálogo. De las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria y en sus informes remitidos a la misión tripartita, de septiembre de 2018, y al Consejo de Administración, se desprende que: i) 29 sindicatos (16 del sector público y 13 del sector privado) fueron inscritos entre enero y el 21 de septiembre de 2018; ii) en los últimos tres años ha existido un promedio de 20 peticiones archivadas; iii) el trámite de inscripción en el registro del Ministerio toma, en promedio, entre tres y cinco meses, y iv) en 2018 fueron inscritos por primera vez en el registro del Ministerio organizaciones sindicales integradas por trabajadores con contratos de duración determinada, así como asociaciones gremiales (sindicatos de trabajadoras y trabajadores domésticos y sindicatos de futbolistas). La Comisión toma nota sin embargo de que, en sus observaciones en el marco del presente Convenio y en su informe a la misión tripartita, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala afirman que los sindicatos siguen enfrentándose a obstáculos injustificados antes de poder ser inscritos y, que bajo la autoridad de la anterior Ministra de Trabajo y Previsión Social, se introdujeron de forma unilateral requisitos adicionales para la inscripción en el registro que deberían ser suprimidos. **Al tiempo que toma debida nota de las informaciones proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y, en especial, de la inscripción de sindicatos gremiales, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que profundice y concrete el diálogo con las organizaciones sindicales de manera que se revise y agilice el proceso de inscripción de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.**

Resolución de conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La Comisión toma debida nota de que: i) la Comisión nacional tripartita cuenta en su seno con la Subcomisión de mediación y resolución de conflictos, la cual sustituye la Comisión de resolución de conflictos ante la OIT que estuvo en funcionamiento entre 2015 y 2017; ii) la subcomisión se dispone a adoptar su reglamento, quedando todavía pendiente la designación de su mediador independiente. **Constatando el gran número de conflictos reportados ante la OIT y recordando sus comentarios realizados al respecto en el marco de su observación de 2017 relativa a la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), la Comisión alienta al Gobierno y a los interlocutores sociales a que dediquen los esfuerzos necesarios para que la nueva subcomisión pueda contribuir a la mayor brevedad a una mejor aplicación de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por Guatemala. La Comisión recuerda nuevamente que el Gobierno puede seguir contando con la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.**

Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había instado al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores sociales, tomara todas las medidas necesarias para que la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva adquiriera una auténtica visibilidad en los medios de comunicación masivos del país. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) la firma del acuerdo tripartito de noviembre de 2017 y el inicio del funcionamiento de la Comisión nacional tripartita dieron lugar a una amplia cobertura en los medios de comunicación; ii) se proseguirá con la campaña de sensibilización, especialmente a través de las redes sociales del Gobierno, el Diario de Centroamérica (el diario oficial de Guatemala) y la radio de Guatemala TWG; iii) con motivo de la conmemoración del centenario de la OIT, se organizarán cuatro conferencias sobre diálogo social y libertad sindical y de asociación en colaboración con las tres principales universidades del país, y iv) la Comisión nacional tripartita debería funcionar como un catalizador por medio del cual los mandantes tripartitos podrían poner en marcha iniciativas conjuntas de sensibilización sobre la libertad sindical y de asociación y negociación colectiva. La Comisión también toma nota de que, en el marco de la misión tripartita, las organizaciones sindicales manifestaron que las medidas para poner en marcha la campaña de sensibilización no habían sido satisfactorias y que debido a los limitados recursos presupuestarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, era necesario que el Gobierno, bajo la autoridad del Presidente de la República, recaudara fondos para financiar la campaña. La Comisión toma nota finalmente de que, en el marco de la mencionada misión, el CACIF: i) coincidió en la necesidad de recaudar fondos para la campaña pero subrayó el reto que esto suponía, y ii) señaló que, por medio de la Comisión nacional tripartita, los mandantes tripartitos podrían publicar declaraciones conjuntas sobre temas de interés tales como la negociación colectiva en el sector público. ***Observando que tanto la implementación de la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2018 como la institucionalización de la Comisión nacional tripartita constituyen un contexto propicio al respecto, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores sociales, tome todas las medidas necesarias para que la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva adquiera una visibilidad sustancial en los medios de comunicación masivos del país. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.***

La Comisión confía en que, en el marco de la implementación de la decisión del Consejo de Administración de noviembre de 2018 y de la institucionalización de la Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical, el Gobierno, con la participación de los interlocutores sociales y la asistencia técnica de la Oficina, tomará las medidas necesarias para remediar a la brevedad las graves violaciones al Convenio constatadas desde hace muchos años por la Comisión.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Guinea-Bissau

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota con ***profunda preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 4 de agosto de 2011 que se refieren a la negociación de los salarios en el marco del Consejo Nacional Tripartito de Consultación Social y a la debilidad de las disposiciones de la Ley General del Trabajo en materia de protección contra la discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Unión Nacional de Trabajadores de Guinea (UNTG-CS) de fecha 30 de agosto de 2011 que se refieren a la necesidad de reforzar las capacidades de la Inspección General del Trabajo y de los tribunales para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. ***La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.***

Artículos 4 y 6 del Convenio. Campo de aplicación del Convenio. Trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión había tomado nota de la voluntad del Gobierno de continuar revisando la Ley General del Trabajo que, en su título XI, contiene disposiciones sobre la negociación colectiva y la adopción de medidas para garantizar a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio. La Comisión observa que el Gobierno informa que este proceso de revisión legal sigue en curso. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de código preveía la adaptación de la aplicación de sus disposiciones a las características particulares del trabajo realizado por trabajadores agrícolas y portuarios. ***La Comisión pide al Gobierno que informe de la evolución legislativa de este proyecto y confía en que éste garantizará a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio.***

La Comisión tomó nota de que el Gobierno había declarado que no hay una legislación que regule específicamente esta materia, la cual se trata en el ámbito de foros creados a tal efecto como el denominado Consejo Permanente de Concertación Social. La Comisión recuerda que había solicitado al Gobierno que enviara informaciones sobre las medidas adoptadas con miras a la adopción de la ley especial que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, de la Ley núm. 8/41 sobre la Libertad Sindical, debía reglamentar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la Administración del Estado. ***La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe a este respecto.***

Por último, la Comisión había pedido al Gobierno que facilite informaciones sobre la evolución de la situación en lo que concierne a la promoción de la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado (actividades de formación y de información, seminarios con los interlocutores sociales, etc.), y que transmitiese estadísticas sobre los convenios colectivos (por sector) firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión tomó nota de que de los comentarios de la CSI se desprende que la situación de la negociación colectiva no es satisfactoria. La Comisión recuerda al Gobierno una vez más que el artículo 4 del Convenio establece que «deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea

necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, y por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo». **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas concretas con miras a promover una mayor utilización en la práctica de la negociación colectiva en los sectores público y privado, y que informe sobre la evolución de la situación, el número de nuevos convenios firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones completas sobre los puntos planteados así como sobre los comentarios de la CSI.**

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

La Comisión nuevamente recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que: i) modifique el artículo 5 de la ley núm. 12/1992 que dispone que las asociaciones de empleados pueden ser profesionales o sectoriales — a fin de que los trabajadores puedan, si así lo desean, constituir sindicatos de empresa; ii) modifique el artículo 10 de la ley núm. 12/1992, que dispone que para que una asociación profesional obtenga personalidad jurídica debe tener, entre otros requisitos, un número mínimo de 50 empleados, a fin de reducir dicho número mínimo a un nivel razonable; iii) confirme si en virtud de la revisión de la Ley Fundamental, en 1995 (ley núm. 1 de 1995), el derecho de huelga es reconocido en los servicios de utilidad pública y si el mismo se ejerce en las condiciones previstas por la ley; iv) informe sobre los servicios considerados como esenciales y sobre la forma en que se determinan los servicios mínimos que deben garantizarse previstos en el artículo 37 de la ley núm. 12/1992, y v) informe si los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado gozan del derecho de huelga (artículo 58 de la Ley Fundamental).

La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de ponerla en plena conformidad con las disposiciones del Convenio y a que informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada o que prevé adoptar a este respecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tome sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.

Además, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación del Convenio y la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC). La Comisión recuerda, una vez más, que la facultad discrecional de la autoridad competente para aceptar o negar la solicitud de inscripción en el registro equivale a la imposición de una autorización previa, lo cual es incompatible con el artículo 2 del Convenio. **En estas condiciones, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora proceda a inscribir en el registro a aquellas organizaciones sindicales que hayan cumplido los requisitos legales y que informe al respecto en su próxima memoria.**

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión tomó nota de los comentarios anteriores de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC) y la falta de marco legislativo para el desarrollo de la negociación colectiva. La Comisión subraya una vez más, que la existencia de sindicatos libremente constituidos es un prerrequisito necesario para la aplicación del Convenio. **La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias tendientes a crear condiciones adecuadas para la constitución de sindicatos que puedan negociar colectivamente con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo.**

Artículo 6. Derecho de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado a negociar colectivamente. La Comisión tomó nota de que según los comentarios de la CSI, el derecho de los trabajadores de la administración pública de constituir sindicatos no ha sido reconocido aún por la legislación a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo, núm. 12/1992, establece que la sindicación de los funcionarios de la administración pública será regulada por una ley especial. La Comisión tomó nota de que la CSI indicó además que el marco legal de la negociación colectiva sigue siendo deficiente y ambiguo. **La Comisión urge al Gobierno a que le indique si la ley especial ha sido adoptada, si la misma garantiza el derecho de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública y que envíe información detallada sobre la aplicación del Convenio respecto de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y expresa la firme esperanza de que tomará sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.**

Aplicación del Convenio en la práctica. **La Comisión pide al Gobierno que envíe estadísticas sobre el número de organizaciones sindicales, sobre el número de convenios colectivos suscritos con organizaciones sindicales y el número de trabajadores y los sectores cubiertos.**

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión lamenta tomar nota con *profunda preocupación* de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2009.

En su observación anterior, la Comisión sólo se había referido a la cuestión del reconocimiento de sólo aquellos sindicatos que contaban con el apoyo del 40 por ciento de los trabajadores, como establecía la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual, a solicitud del congreso de sindicatos, la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos había previsto el reconocimiento de sindicatos que se habían reconocido con anterioridad a la ley, sin haber tenido que probar que contaban con un apoyo de la mayoría (artículo 32); todos los sindicatos se habían beneficiado de esa disposición, respecto de la cual el Gobierno manifiesta que ya no es aplicable, puesto que se habían expedido todos los certificados aplicables en virtud de ese artículo. Dado que la representatividad de los sindicatos podía cambiar, la Comisión recuerda una vez más que, cuando ningún sindicato agrupe a más del 40 por ciento de los trabajadores en la unidad de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva, párrafo 241). *La Comisión espera que en un futuro próximo se realicen progresos significativos respecto de este asunto y pide al Gobierno que la mantenga informada de los resultados del proceso consultivo.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas tomadas, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, para promover la negociación colectiva y que informe asimismo sobre el número de convenios colectivos firmados y vigentes en el país, indicando los sectores concernidos así como el número de trabajadores cubiertos por los mismos.

Haití

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la que informa a la Comisión que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, solicitó la asistencia técnica de la Oficina, sobre todo con el fin de recabar ayuda para presentar las memorias debidas, reforzar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social para que prosigan las reformas sociales y tratar los demás puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indica asimismo que espera poder recibir esta asistencia antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que esta asistencia técnica pueda ser proporcionada sin retrasos.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación de la Industria de Haití (ADIH), recibidas el 31 de agosto de 2018. Toma nota igualmente de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores del sector público y privado (CTSP) y por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como las de la Coordinadora Sindical de Haití (CSH) recibidas el 28 de agosto de 2018, que tratan de la aplicación en la práctica de los principios de la libertad sindical.

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público y Privado (CTSP) y por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 30 de agosto y el 1.º de septiembre de 2017, respectivamente, que tratan de la aplicación en la práctica de los principios de libertad sindical. *La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.*

La Comisión recuerda que viene solicitando al Gobierno, desde hace muchos años, que modifique la legislación nacional, especialmente el Código del Trabajo, para ponerla de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios se referían, en particular, a lo siguiente:

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas.

- La necesidad de modificar los artículos 229 y 233 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que los menores que tengan la edad mínima legal de admisión al empleo puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental.
- La necesidad de modificar el artículo 239 del Código del Trabajo, a fin de permitir que los trabajadores extranjeros puedan ocupar funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país.
- La necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos los derechos consagrados en el Convenio (el artículo 257 del Código del Trabajo dispone que el trabajo doméstico no está regido por ese código, y que la ley adoptada por el Parlamento en 2009 para modificar ese artículo — la cual no ha sido promulgada, aunque el Gobierno se refería a ella en sus memorias anteriores — tampoco reconoce los derechos sindicales de los trabajadores domésticos).

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción.

- La necesidad de revisar las disposiciones del Código del Trabajo relativas al recurso al arbitraje obligatorio a fin de garantizar que este último sólo pueda imponerse, para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo o a una huelga, en determinadas circunstancias, a saber: 1) cuando lo acepten las dos partes en el conflicto, o 2) cuando la huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de una prohibición, es decir: a) cuando se trata de conflictos relativos a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; b) cuando se trata de conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o c) en situaciones de crisis nacional o local aguda, con una duración limitada y sólo en la medida necesaria para hacer frente a la situación.

La Comisión espera firmemente que, con la asistencia técnica de la que se beneficia, especialmente con miras al restablecimiento del diálogo tripartito para la reforma del Código del Trabajo, el Gobierno se encuentre en condiciones de informar, en su próxima memoria, de los progresos realizados en la revisión de la legislación nacional, para ponerla plenamente de conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la que informa a la Comisión que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, solicitó la asistencia técnica de la Oficina, sobre todo con el fin de recabar ayuda para presentar las memorias debidas, reforzar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social para que prosigan las reformas sociales y tratar los demás puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indica asimismo que espera poder recibir esta asistencia antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que esta asistencia técnica pueda ser proporcionada sin retrasos.

La Comisión toma nota de las observaciones de: i) la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que denuncian la ausencia de negociación colectiva en el país por la alegada oposición de los empleadores a la misma; ii) la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 29 de agosto de 2018, relativas a puntos examinados por la Comisión en su comentario precedente, y iii) la Coordinadora Sindical de Haití (CSH), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que contienen alegatos de discriminación antisindical. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota finalmente de las observaciones de la Asociación de la Industria de Haití (ADH) recibidas el 31 de agosto de 2018.

La Comisión recuerda las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de los Sectores Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017, sobre violaciones graves de la libertad sindical tanto en el sector público como en el privado, en particular en empresas de las zonas francas de exportación de textiles, donde alrededor de 200 trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales fueron despedidos como consecuencia de un movimiento de huelga iniciado en mayo de 2017 para reclamar un aumento del salario mínimo. La Comisión toma nota a este respecto de la campaña de denuncia de las violaciones de la libertad sindical lanzada en julio de 2017 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA). La Comisión expresa su **profunda preocupación** ante esas informaciones. La Comisión toma nota de que estas cuestiones están dando lugar a un seguimiento por parte del programa *Better Work*, resultante de la colaboración entre la OIT y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del grupo del Banco Mundial, presente en Haití desde 2009. **Recordando que los actos de acoso e intimidación llevados a cabo contra trabajadores o su despido por motivos de afiliación a un sindicato o por realizar actividades sindicales legítimas violan gravemente los principios de libertad sindical consagrados en el Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de esos principios y le pide que proporcione informaciones sobre toda investigación realizada por iniciativa del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo (MAST), así como sobre todo otro procedimiento judicial iniciado a ese respecto.**

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían en particular a la necesidad de adoptar una disposición específica que prevea una protección contra la discriminación antisindical en la contratación, así como la necesidad de adoptar disposiciones que garanticen a los trabajadores, de manera general, una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en el empleo (motivada por la afiliación o la actividad sindical), acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 251 del Código del Trabajo dispone que «Todo empleador que despidiera o suspenda, rebaje de categoría o reduzca el salario de un trabajador con objeto de impedir que se afilie a un sindicato, organice una asociación sindical o ejerza sus derechos sindicales, será sancionado con una multa de 1 000 a 3 000 gourdes (es decir, aproximadamente de 15 a 45 dólares de los Estados Unidos) que se impondrá por el Tribunal del Trabajo, sin perjuicio de la reparación a que el trabajador tenga derecho». **La Comisión pide al Gobierno que vele por que, en el marco de la reanudación del diálogo tripartito para la reforma del Código del Trabajo, sean reforzadas las sanciones previstas con objeto de garantizar que sean suficientemente disuasorias. Además, la Comisión pide al Gobierno que vele por la adopción de una disposición específica que prevea protección contra la discriminación antisindical al momento de la contratación.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda nuevamente la necesidad de modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al servicio de organizaciones sociales de la dirección del trabajo del MAST, el poder «de intervenir en la elaboración de los convenios colectivos de trabajo respecto de toda cuestión relativa a la libertad sindical». **La Comisión espera que el Gobierno se basará en la asistencia técnica proporcionada por la Oficina a este respecto para modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, con objeto de garantizar que el servicio de organizaciones sociales no pueden intervenir en la negociación colectiva salvo a solicitud de las partes.**

Derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado y de los empleados públicos. **La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las disposiciones de la legislación a este respecto.**

Derecho de negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en oportunidad de la formación tripartita organizada por la Oficina en 2012 en Puerto Príncipe, y destinada a actores del sector textil, los participantes afirmaron la necesidad de instituir un foro de diálogo bipartito permanente con objeto de seguir fortaleciendo el diálogo entre los actores de dicho sector. **La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones a este respecto, incluso teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos en el sector textil en mayo de 2017.** La Comisión toma nota con preocupación de que según la CTSP en el país sólo existen cuatro convenios colectivos en vigor y algunos de ellos no estarían firmados por los representantes legítimos de los trabajadores. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto y que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la negociación en el país.**

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Honduras

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en el marco del presente comentario así como de las respuestas correspondientes del Gobierno.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, la Comisión de la Conferencia), en junio de 2018, sobre la aplicación del Convenio por Honduras. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, lamentando los graves alegatos de violencia sindical, pidió al Gobierno que: i) adopte sin demora todas las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo con prontitud investigaciones sobre los asesinatos y para determinar las personas responsables, y que se castigue a los culpables de los mencionados delitos; ii) proporcione protección rápida y efectiva a todos los dirigentes y afiliados sindicales que son objeto de amenazas de manera de garantizar la protección de sus vidas e integridad física, y que adopte medidas que eviten otros casos de asesinatos y violencia contra sindicalistas; iii) realice con apremio las investigaciones de dichos actos de violencia antisindical y que enjuicie a las personas consideradas responsables de dichos delitos; iv) vele por que las autoridades competentes dispongan de recursos y personas suficientes para llevar a cabo este trabajo con eficacia, y v) adopte las medidas necesarias para crear un entorno en que los trabajadores puedan ejercer su derecho de libertad sindical sin verse amenazados por la violencia o por otras violaciones de sus libertades civiles. Adicionalmente, refiriéndose a las disposiciones legislativas del Código del Trabajo incompatibles con el Convenio, la Comisión pidió al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, realizara las modificaciones legislativas siguientes: i) la exclusión de las organizaciones de trabajadores de aquellas explotaciones agrícolas o ganaderas que no ocupen en forma permanente a más de diez trabajadores (artículo 2, párrafo 1); ii) la prohibición que exista más de un sindicato de empresa (artículo 472); iii) el requisito de 30 trabajadores para constituir un sindicato (artículo 475), y iv) los requisitos para ser miembro de la junta directiva de una organización sindical relativos a tener la nacionalidad hondureña (artículos 510, a), y 541, a)), pertenecer a la actividad correspondiente (artículos 510, c), y 541, c)), y saber leer y escribir (artículos 510, d), y 541, d)).

En aquella ocasión, la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a que aceptara la misión de contactos directos antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo y que recurriera a la asistencia técnica de la Oficina. A este respecto, la Comisión toma debida nota de que el Gobierno: i) dirigió a la Oficina una invitación oficial en relación con la misión de contactos directos y solicitó la asistencia técnica de la Oficina en relación con la aplicación del Convenio, y ii) una misión de preparación de la misión de contactos directos fue llevada a cabo por la Oficina entre el 23 y 26 de octubre de 2018. La Comisión toma nota adicionalmente de la instalación, el 10 de septiembre de 2018, en el seno del Consejo Económico y Social de la Mesa Sectorial para la Prevención de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo (MEPCOIT), instancia tripartita cuyo mandato abarcará no sólo la resolución de conflictos puntuales sino también la revisión de la legislación laboral y la protección contra la violencia antisindical. **La Comisión saluda las iniciativas tomadas por el Gobierno y confía en que la realización de la próxima misión de contactos directos contribuirá a avances significativos en materia de libertad sindical en el país.**

Derechos sindicales y libertades públicas

En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con profunda preocupación de numerosos crímenes antisindicales, incluyendo numerosos homicidios y amenazas de muerte, ocurridos desde el año 2010. La Comisión había instado firmemente al Gobierno a que tomara sin demora todas las medidas necesarias para: i) asegurar la rapidez de las investigaciones relativas a los homicidios procediendo a determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables de esos crímenes, y ii) brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. En cuanto a los casos de homicidios de dirigentes sindicales y de sindicalistas, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los homicidios de las Sras. Sonia Landaverde Miranda, Maribel Sánchez García y Juana Suyapa Bustillo, y de los Sres. Alfredo Misael Ávila Castellanos, Fredis Omar Rodríguez, Martín Florencio Rivera Barrientos, Roger Abraham Vallejo y Félix Murillo López se encuentran en fase de investigación; ii) el homicidio del Sr. Evelio Posadas Velázquez se encuentra en proceso de análisis para determinar el requerimiento fiscal o la ampliación de investigación, sin que se cuente, sin embargo, hasta la fecha con información que acredite que el origen del asesinato esté relacionado con sus actividades sindicales; iii) con respecto a los homicidios de las Sras. Alma Yaneth Díaz Ortega y Uva Erlinda Castellanos Vigil, la orden de captura a la que el Gobierno se refirió en sus observaciones anteriores sigue pendiente de ejecución; iv) en cuanto al asesinato de la Sra. Claudia Larissa Brizuela, se declaró sentencia condenatoria en contra de dos imputados, y éstos a su vez interpusieron un recurso de casación que se encuentra pendiente de resolución, y v) con respecto a los asesinatos del dirigente sindical Sr. José Ángel Flores, el cual contaba con medidas cautelares, y del sindicalista Sr. Silmer Dionisios George, el Ministerio Público presentó, el 22 de noviembre de 2016 un requerimiento fiscal contra dos personas y ambas órdenes de captura se encuentran pendientes de ejecución.

En cuanto al secuestro del dirigente sindical Sr. Moisés Sánchez y la agresión física de su hermano y afiliado, el Sr. Hermes Misael Sánchez, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que ambos hechos fueron denunciados ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, pero que hasta el momento los perpetradores no han sido identificados e indica desconocer si son beneficiarios de medidas específicas de protección. En cuanto a los alegatos de amenazas de muerte examinados en sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) la denuncia del Sr. Miguel Ángel López Murillo, dirigente sindical y beneficiario de medidas cautelares, se encuentra en fase de investigación; sin embargo, para ejercer acción penal pública, una disposición penal exige al Ministerio Público que la víctima brinde su autorización, la cual no ha sido obtenida; ii) con respecto al Sr. Nelson Geovanny Núñez Chávez, en reacción a las amenazas, se había activado un mecanismo de protección a su favor, sin embargo, dicho dirigente emigró de Honduras, y iii) con respecto a la situación de la dirigente sindical Sra. Patricia Rivera, el Ministerio Público no tiene registro de su denuncia por amenazas, y según la legislación en vigor, dicha instancia no puede actuar de oficio.

La Comisión toma nota adicionalmente de las informaciones de carácter general proporcionadas por el Gobierno con respecto a las medidas dirigidas a asegurar la rapidez de las investigaciones relativas a los crímenes contra sindicalistas, y a brindar una protección rápida y eficaz a los sindicalistas en situación de riesgo. La Comisión toma nota de que el Gobierno subraya en primer lugar que no existe ninguna política de persecución y violencia desde el Estado y que la violencia y la inseguridad son problemas muy profundos y de graves consecuencias para la sociedad hondureña. El Gobierno añade que dedica muchos esfuerzos para combatir este fenómeno y reducir la impunidad, acciones que han contribuido a una reducción notable de la tasa de homicidios en los últimos años. En relación con iniciativas específicas dirigidas a asegurar la rapidez de las investigaciones, el Gobierno manifiesta que: i) se aumentó el presupuesto del ministerio público, permitiendo la creación de nuevas dependencias, incluyendo el módulo de recepción de denuncias, el módulo estratégico de persecución penal y la sección especial de derechos humanos en la ciudad de Tocoa; ii) en seguimiento del marco estratégico institucional (2015-2022) de la Secretaría de Seguridad, se adoptaron medidas para fortalecer la labor de la Policía de Investigación Criminal, incluyendo la adquisición de nuevos laboratorios y la capacitación de policías; iii) se aumentó el presupuesto del Poder Judicial y se reformó la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial, creando juzgados especiales con jurisdicción nacional para conocer casos de corrupción y extorsión; iv) fue aprobado el Plan nacional de erradicación de la mora judicial y se adicionaron los artículos 127-A y 127-B al Código Procesal Penal posibilitando, de esta manera la realización de audiencias virtuales, y v) en el marco del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH) se creó en enero de 2018 la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.

La Comisión toma nota adicionalmente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de las medidas de protección a favor de los miembros del movimiento sindical que se encontrarían en situación de riesgo, en las cuales se indica que: i) desde la entrada en vigor de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, el 15 de mayo de 2015, hasta el 30 de abril de 2018, se atendieron 293 solicitudes de medidas de protección y fueron otorgadas 193, de las cuales siete corresponden a sindicalistas; ii) en 2018 fue creado el sistema de monitoreo con el propósito de obtener información actualizada y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Gobierno por las distintas organizaciones regionales e internacionales; iii) el 15 de marzo de 2017 entró en vigor el decreto núm. 178-2016 el cual prevé en el párrafo 2 del artículo 90 una multa de 300 000 lempiras (12 396 dólares de los Estados Unidos) «a toda persona que, por medio de violencias o amenazas, atente en cualquier forma contra el derecho a la libertad de asociación y libertad sindical», y iv) la recién creada MEPCOIT permitirá establecer un canal de intercambio de información entre el movimiento sindical, el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La Comisión toma debida nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno. Al tiempo que saluda las iniciativas generales tomadas para atajar la situación general de violencia e impunidad en el país así como los avances para fortalecer la institucionalidad en materia de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión observa con **preocupación** que: i) de los 14 homicidios de dirigentes miembros del movimiento sindical denunciados ante la Comisión y ocurridos entre 2010 y 2016, tan sólo un caso ha dado lugar hasta la fecha a una sentencia condenatoria que se encuentra pendiente de un recurso; ii) no se han reportado avances en las investigaciones relativas a amenazas contra miembros del movimiento sindical; iii) las informaciones proporcionadas sobre la investigación de los reportados homicidios no especifican la metodología con la cual se exploran los posibles vínculos entre los mismos y las actividades sindicales de las víctimas, y iv) con excepción de la creación de una multa administrativa por el decreto núm. 178-2016, las iniciativas reportadas tienen como objeto la situación de violencia en general sin que se detallen acciones específicamente enfocadas en la violencia antisindical.

A este respecto, la Comisión subraya que las actividades sindicales que, por su naturaleza, están relacionadas con la resolución de conflictos económicos y sociales, pueden verse desproporcionadamente afectadas por la existencia de un contexto general de violencia, lo cual requiere de parte de las autoridades una especial atención y protección. **A la luz de lo anterior, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para: i) investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo de deslindar las responsabilidades y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de los hechos, y ii) brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todas las quejas presentadas y las multas administrativas impuestas en virtud del decreto núm. 178-2016, así como sobre los procesos judiciales resultantes o relacionados con los procedimientos del decreto. Tomando debida nota de la indicación del Gobierno de que se utilizará la recién creada MEPCOIT para establecer un canal de información entre las autoridades y el movimiento sindical en materia de violencia antisindical, la Comisión insta especialmente al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que: i) todas las autoridades competentes y, especialmente las fuerzas policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial afronten de manera coordinada y prioritaria las violencias que afectan a los miembros del movimiento sindical; ii) se asegure que, en la concepción y desarrollo de las investigaciones, se tome plena y sistemáticamente en consideración el posible carácter antisindical de los homicidios de miembros del movimiento sindical, los posibles vínculos existentes entre los homicidios de miembros de una misma organización sindical, y que las investigaciones se dirijan a la vez a los autores materiales e intelectuales de los hechos; iii) se fortalezca el intercambio de informaciones entre el Ministerio Público y el movimiento sindical, y iv) aumente el presupuesto dedicado tanto a las investigaciones de los actos de violencia antisindical como a los esquemas de protección a favor de miembros del movimiento sindical. La Comisión confía en que la misión de alto nivel que visitará el país a la brevedad podrá constatar avances significativos al respecto. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance al respecto y que siga proporcionando informaciones actualizadas sobre el estado de las investigaciones en curso.**

La Comisión toma nota de los nuevos alegatos formulados por la CSI en los que afirma que: i) el 9 de marzo de 2018, una represión policial violenta puso fin a una huelga organizada por los trabajadores de la empresa agrícola transnacional, dando lugar a la tortura de varios sindicalistas y a la emisión de 34 órdenes de captura, y ii) durante 2017, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Star (SintraStar) fue objeto de amenazas y en febrero de 2018, el Sr. Lino Hernández, dirigente sindical de este mismo sindicato, renunció a su puesto laboral por supuestas amenazas de muerte contra él y su familia. Respecto de la alegada represión policial, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que la inspección del trabajo ha seguido con mucha atención la mencionada huelga que se inició el 26 de septiembre de 2017 y que el referido conflicto colectivo está todavía pendiente de resolución. **Observando con preocupación que el Gobierno no se refiere a las alegadas violencias policiales y órdenes de captura, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.** Respecto de las alegadas amenazas de muerte en contra del presidente de SintraStar, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que ha solicitado informaciones a la autoridad competente sin, hasta la fecha, obtener respuestas. **La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la protección brindada al Sr. Lino Hernández así como sobre las investigaciones en relación con las amenazas de muerte de las cuales sería víctima.**

Problemas de carácter legislativo

Artículos 2 y siguientes del Convenio relativos a la constitución, autonomía y actividades de las organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años pide al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones legislativas:

- la exclusión de los derechos y garantías del Convenio para los trabajadores de aquellas explotaciones agrícolas o ganaderas que no ocupen en forma permanente a más de diez trabajadores (artículo 2, párrafo 1);
- la prohibición de que exista más de un sindicato en una misma empresa (artículo 472);
- el requisito de 30 trabajadores para constituir un sindicato (artículo 475);
- los requisitos para ser miembro de la junta directiva de una organización sindical relativos a: tener nacionalidad hondureña (artículos 510, a), y 541, a)), pertenecer a la actividad correspondiente (artículos 510, c), y 541, c)), y saber leer y escribir (artículos 510, d), y 541, d));
- la prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga (artículo 537);

- f) el requisito de mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la organización sindical para declarar la huelga (artículos 495 y 563);
- g) la facultad del ministro competente de poner fin a un litigio en los servicios de la industria del petróleo (artículo 555, párrafo 2);
- h) la autorización del Gobierno o un aviso previo de seis meses para toda suspensión del trabajo en los servicios públicos que no dependan directa o indirectamente del Estado (artículo 558), e
- i) el sometimiento a arbitraje obligatorio, sin posibilidad de declarar la huelga durante la vigencia del fallo arbitral (dos años) de los conflictos colectivos en los servicios públicos que no son esenciales en el sentido estricto del término (artículos 554, párrafos 2 y 7, 820 y 826).

La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había lamentado tomar nota de que no se habían concretado los avances registrados en 2014 con respecto a la discusión y adopción de un proyecto de ley para poner el Código del Trabajo en conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que, con miras a armonizar el Código del Trabajo con los Convenios núms. 87 y 98: i) la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social está elaborando un nuevo proyecto de reforma que servirá de base para las discusiones tripartitas en el seno del CES; ii) en el seno del CES, se encomendó a la recién creada MEPCOIT la tarea de revisar y emitir una opción técnica en relación al borrador de reformas al Código del Trabajo, la cual presentará su primer informe de avances en la próxima reunión del CES, y iii) se ha solicitado la asistencia técnica de la Oficina para acompañar este proceso. La Comisión saluda el reinicio de las consultas tripartitas para poner la legislación en conformidad con el Convenio. ***La Comisión confía en que la misión de alto nivel que visitará en breve el país podrá constatar avances sustanciales en dicho proceso y que el Gobierno podrá informar próximamente de la adopción de un proyecto de ley que atienda los distintos comentarios expresados por la Comisión desde hace numerosos años.***

Enmienda de 2017 al artículo 335 del Código Penal. La Comisión toma nota de que la CSI afirma que en 2017 se aprobó una enmienda al Código Penal que criminaliza una amplia diversidad de actividades como actos de terrorismo, de manera que un dirigente sindical podría ser acusado de terrorismo si su sindicato participa en una protesta social considerada posteriormente por un fiscal como una subversión del orden constitucional. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno que manifiesta que: i) el artículo 335 del Código Penal establece que comete delito de terrorismo quien realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad (...) cuando el propósito de dicho acto o evento por naturaleza o contexto sea el de intimidar o causar estado de terror en la población o, de obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto, y ii) la mencionada enmienda al Código Penal tiene el único propósito de asegurar la seguridad de la población y la garantía de los derechos señalados en la Constitución y los convenios internacionales. ***Observando que ciertas conductas tipificadas en el artículo 335 del Código Penal son definidas de manera general, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que la aplicación de este artículo por las autoridades competentes no coarte el derecho de las organizaciones sindicales a la protesta y a la huelga pacífica. La Comisión pide al Gobierno que proporcione toda información relativa al posible impacto del artículo 335 del Código Penal sobre las actividades sindicales.***

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre el reconocimiento, entre enero de 2014 y mayo de 2017, de la personalidad jurídica de 25 organizaciones sindicales (13 de las cuales son del sector de la maquila) y de dos organizaciones sindicales de mayo de 2017 a marzo de 2018. La Comisión toma igualmente nota de que el Gobierno manifiesta que desde la entrada en vigor de la Ley de Inspección se han registrado mejoras indiscutibles en relación con el número de inspecciones realizadas y que el cumplimiento de las sanciones impuestas ha mejorado en un 81 por ciento. ***La Comisión toma debida nota de dichas informaciones y pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las nuevas inscripciones sindicales que se vayan registrando, así como sobre las inspecciones realizadas y el cumplimiento de las sanciones impuestas.***

Tomando debida nota de las iniciativas tomadas por el Gobierno a raíz de la discusión ante la Comisión de Aplicación de Normas, la Comisión espera que la misión de alto nivel que visitará el país a la brevedad podrá constatar avances significativos en la resolución de las graves violaciones al Convenio constatadas desde hace varios años.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Jamaica

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que tomara las medidas necesarias para modificar el artículo 6, 4), de la Ley sobre los Sindicatos (TUA) con vistas a garantizar que no se impongan sanciones a los trabajadores por su afiliación a un sindicato no registrado o su participación en las actividades de éste. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se está debatiendo esta cuestión con los interlocutores sociales en el Consejo Consultivo Laboral. ***La***

Comisión expresa su firme esperanza de que se modifique la ley en un futuro cercano y pide al Gobierno que informe sobre todo avance a este respecto.

Artículo 3. Intervención en la administración financiera de un sindicato. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que tomara las medidas necesarias para limitar los poderes del funcionario principal encargado del registro de realizar inspecciones y pedir información sobre las finanzas de los sindicatos en todo momento, como establece el artículo 16, 2), de la TUA. *Al tiempo que lamenta observar que el Gobierno no ha proporcionado información alguna a este respecto, la Comisión reitera su solicitud previa. Espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información sobre las medidas adoptadas y previstas para modificar el artículo 16, 2), de la TUA de modo que se garantice que el control de las autoridades públicas sobre las finanzas de los sindicatos se limite a la obligación por parte de éstos de presentar informes periódicos.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, que denunciaban requisitos de procedimiento rígidos y poco razonables así como limitaciones en materia de negociación colectiva. *La Comisión pide al Gobierno una vez más que presente sus comentarios a este respecto.*

Artículo 4 del Convenio. Fomento de la negociación colectiva. Reconocimiento de las organizaciones a los efectos de la negociación colectiva. Durante muchos años, la Comisión ha solicitado al Gobierno que enmiende el artículo 5, 5), de la Ley de Relaciones de Trabajo y Conflictos Laborales (LRIDA), de 1975, y el artículo 3, 1), d), de su reglamento con vistas a ajustarlos a su compromiso, contraído en virtud del artículo 4 del Convenio, de fomentar la negociación colectiva. La Comisión recuerda que la legislación permite el reconocimiento de los derechos de negociación de un sindicato siempre y cuando el 50 por ciento de los trabajadores o una categoría específica de trabajadores acuerde que dicho sindicato tiene derechos de negociación en lo que a ellos respecta. En caso de duda o conflicto en cuanto a la representatividad de un sindicato, los reglamentos permiten que el Ministro organice una votación sólo si tiene la certeza de que el sindicato solicitante representa al menos al 40 por ciento de los trabajadores que hayan motivado la solicitud. Una vez se cumpla el requisito y se celebre la votación, es preciso que el 50 por ciento de los trabajadores aptos para la votación hayan indicado que desean que un sindicato concreto obtenga derechos de negociación colectiva en su nombre. Además, la Comisión toma nota de la observación de la CSI, según la cual en virtud del artículo 5, 6), de la LRIDA los sindicatos sólo pueden reclamar derechos de negociación conjunta si cada sindicato obtiene al menos el 30 por ciento de los votos. Como indicó en comentarios anteriores, la Comisión constata que: i) la legislación no prevé el reconocimiento de derechos de negociación colectiva cuando no hay ningún sindicato que alcance el umbral exigido, y ii) el requisito de que un sindicato tenga que representar al 40 por ciento de los trabajadores para poder solicitar una votación restringe considerablemente la posibilidad de poner en cuestión la representatividad que mantiene el agente de negociación que cuenta con el reconocimiento previo. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que estas cuestiones se están examinando y se debatirán con los interlocutores sociales en el Consejo Consultivo Laboral, la Comisión recuerda que la definición de un umbral de representatividad para designar a un agente exclusivo a los efectos de negociar convenios colectivos que se aplicarán a todos los trabajadores de un sector o establecimiento es compatible con el Convenio siempre y cuando las condiciones que se impongan no constituyan en la práctica un obstáculo al fomento de la negociación colectiva libre y voluntaria. En este sentido, la Comisión considera que si ningún sindicato de una unidad de negociación específica llega al umbral de representatividad exigido para poder negociar en nombre de todos los trabajadores, los sindicatos minoritarios deben al menos poder negociar, de forma conjunta o por separado, en nombre de sus afiliados. Además, ya que los niveles de representatividad cambian con el tiempo cualquier organización que no haya logrado obtener un número suficiente de votos, en una elección previa, debe tener el derecho de solicitar una nueva votación después de transcurrido un período determinado. En el mismo espíritu, cualquier organización nueva, distinta a aquella que hasta ese momento poseía la certificación, también debería tener el derecho de solicitar una nueva votación después de transcurrido un período razonable. *Lamentando la falta de progresos, la Comisión insta al Gobierno a que adopte, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias para enmendar su legislación con el fin de: i) garantizar que, si ningún sindicato alcanza el umbral exigido para ser considerado agente de negociación, se otorgue a los sindicatos la posibilidad de negociar, de forma conjunta o por separado, al menos en representación de sus afiliados; ii) reconocer el derecho de cualquier organización que, en una elección previa, no haya logrado obtener un número suficiente de votos, a solicitar una nueva votación después de transcurrido un período determinado, y iii) reconocer el derecho de una nueva organización, distinta a aquella que hasta ese momento poseía la certificación, a solicitar una nueva votación después de que haya transcurrido un período razonable. La Comisión pide al Gobierno que informe de los avances que se produzcan a este respecto y lo invita, si lo desea, a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.*

Fomento de la negociación colectiva en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el número de convenios colectivos firmados y vigentes, los sectores a los que atañen y el número de trabajadores que cubren.

Japón

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), transmitidas junto a la memoria del Gobierno y de la respuesta a las mismas. **La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), recibidas el 28 de septiembre de 2018 y pide al Gobierno que comunique información en respuesta a estas observaciones.**

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en mayo-junio de 2018, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia tomó nota de las sumisiones al Gobierno, en el sentido de que se realizó, en enero de 2018, un estudio especial para detectar los problemas relativos al funcionamiento del sistema de comités del personal de extinción de incendios (FDPC) y habiéndose consultado, en varias ocasiones, desde marzo de 2018, a los trabajadores y a los empleadores al respecto, y del declarado compromiso del Gobierno de elaborar un plan para mejorar el funcionamiento de los FDPC en consulta continua con los empleadores y los trabajadores. La Comisión de la Conferencia observó con preocupación que los comentarios de esta Comisión sobre la aplicación de este Convenio se vinieron refiriendo durante décadas a las discrepancias entre la legislación y la práctica en cuanto a los derechos de los bomberos y los derechos de los funcionarios de prisiones de constituir los sindicatos que estimen convenientes y afiliarse a éstos. La Comisión tomó nota de la falta de progresos significativos en la adopción de las medidas necesarias en relación con el sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores. La Comisión de la Conferencia hizo un llamamiento al Gobierno para que: examinara detenidamente el sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores, teniendo en cuenta la declaración del Gobierno de que existen varias cuestiones relativas a este sistema; comunicara información sobre la iniciativa discutida anteriormente destinada a detectar los problemas relativos al funcionamiento del sistema de FDPC y acerca de las medidas que se han adoptado a raíz de dicha iniciativa; celebrara consultas con los interlocutores sociales a escala nacional sobre la opinión del Gobierno de que debe considerarse que los bomberos son considerados como policías y sobre de qué manera se ajusta esta opinión a la aplicación del Convenio, y que comunicara información sobre el resultado de estas consultas; evaluara, en consulta con los interlocutores sociales, qué categorías de funcionarios penitenciarios pueden considerarse que pertenecen a la policía y, por lo tanto, están excluidas del derecho de sindicación, y que examinara, en consulta con los interlocutores sociales, si los procedimientos de la Autoridad Nacional del Personal garantizan un mecanismo rápido e imparcial de conciliación y arbitraje. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que desarrollara, en colaboración con los interlocutores sociales, un plan de acción sujeto a un calendario para aplicar estas recomendaciones e informar a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión en noviembre de 2018.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal de extinción de incendios y de los funcionarios de prisiones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a la necesidad de reconocer el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios y a los funcionarios de prisiones. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las recomendaciones de la Comisión de la Conferencia se discutieron con la JTUC-RENGO, el 20 de agosto de 2018. En lo que atañe al sistema de FDPC, el Gobierno indica que, en septiembre de 2018, procedió a la revisión de la política de aplicación, obteniendo el acuerdo, tanto de los trabajadores como de los empleadores, y que la nueva política entrará en vigor en abril de 2019. Recordando su consideración de que el personal de extinción de incendios debería considerarse como policía, que se deriva de su comprensión en el momento de ratificación del Convenio, el Gobierno describe los principales objetivos de la manera siguiente: con el fin de lograr una mayor utilización del sistema de FDPC, un jefe de bomberos y un presidente del comité, procurarán crear un entorno para el personal de extinción de incendios, a efectos de que den su opinión fácilmente y de que se garantice la equidad y la transparencia en la gestión de los FDPC. Si el FDPC decide no deliberar sobre las opiniones, informará al personal que hubiese ofrecido la opinión acerca de las razones por las que no ha de deliberarse el día de la reunión del FDPC; facilitar la emisión de dictámenes, pudiendo hacerlo el personal de extinción de incendios de manera anónima, a través del coordinador de opinión, que la aportará a la secretaría del FDPC. Se celebrarán sesiones de información a escala nacional y se distribuirán panfletos para aplicar exhaustivamente la nueva política. Se compilará una lista de buenas prácticas de la gestión del FDPC, en consulta con los representantes de los trabajadores, que se compartirá con los departamentos de bomberos. Por último, se introducirá asimismo un diálogo social regular sobre el sistema de FDPC.

Sin embargo, la Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la JTUC-RENGO, de que el Gobierno no ha respondido de manera directa a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia y de que no se desarrolló ningún plan de acción con plazos establecidos con los interlocutores, como se había solicitado. La única novedad que puede señalarse es la intención de proceder a consultas entre el Ministerio del Interior y Comunicaciones y la Agencia de Defensa contra Incendios, con la Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores de Prefecturas y Municipios (JICHIROREN), que se fueron llevando a cabo desde julio de 2018. La JTUC-RENGO lamenta que el Gobierno siga aludiendo a los informes anteriores del Comité de Libertad Sindical (CLS), que precedieron a la ratificación del Gobierno, como justificación del *status quo* y recuerda que, en el examen de junio de 2018 por el CLS de estas cuestiones, se instó al

Gobierno a que otorgara plenamente el derecho de sindicación y de negociación colectiva a estas categorías de trabajadores.

La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores tomó nota de que el Gobierno está considerando una nueva iniciativa que comprende estudios de investigaciones sobre la manera en que se está administrando el sistema de FDPC, que permitiría que, tanto la administración como el personal de toda la nación expresaran sus opiniones a través de un cuestionario. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la realización de los estudios, sus resultados y las medidas adoptadas o contempladas como resultado de los mismos. Tomando nota de la iniciativa adicional indicada por el Gobierno en su memoria sobre el sistema de FDPC y observando al mismo tiempo que la política de implementación revisada para el FDPC difiere del derecho de sindicación en virtud del Convenio, la Comisión una vez más expresa su firme expectativa de que las consultas continuas contribuyan a nuevos progresos hacia garantizar el derecho del personal de extinción de incendios de constituir las organizaciones que estimen convenientes para la defensa de sus intereses profesionales y de afiliarse a las mismas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre todas las nuevas medidas adoptadas en este sentido, así como información detallada en relación a las medidas previstas para el futuro.***

En cuanto al derecho de sindicación del personal de instituciones penitenciarias, la Comisión recuerda la información comunicada por el Gobierno en su memoria anterior sobre la distinción entre los miembros del personal de instituciones penitenciarias: i) los funcionarios de prisiones que tienen la obligación de operar totalmente en las instituciones penitenciarias, incluida la prestación de servicios de seguridad, con uso de la fuerza física y con autorización de utilizar armas ligeras y de pequeño calibre; ii) el personal de instituciones penitenciarias sin el rango de funcionarios de prisiones que participa directamente en la gestión de las instituciones penitenciarias o en el tratamiento de los reclusos; y iii) el personal de instituciones penitenciarias que tienen la facultad, en virtud del Código de Procedimiento Penal, de llevar a cabo funciones de agentes de policía judicial en relación con los delitos cometidos dentro de las instituciones penales y con autoridad para practicar arrestos, registros e incautaciones. La Comisión toma nota de la breve explicación del Gobierno en su presente memoria de que pasó por la revisión del Comité de la sede de promoción de la reforma administrativa, considerando que los funcionarios de prisiones están incluidos en la policía. El Gobierno también considera que esta opinión fue compartida por el CLS en sus 12.º y 54.º informes. Sin embargo, la Comisión también toma nota, en lo que respecta al informe al que hace referencia el Gobierno sobre el personal penitenciario, de la indicación de la JTUC-RENGO de que el informe de 2007 emitido por el comité de peritaje de la sede para la promoción de la reforma administrativa, señala que las opiniones están divididas entre otorgar o no el derecho de sindicación al personal penitenciario.

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que, a pesar de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, hicieron un llamamiento al Gobierno para que considerara, en consulta con los interlocutores sociales, las categorías de los funcionarios de prisiones consideradas como parte de la policía y aquellas categorías no consideradas como tales, el Gobierno simplemente declaró que considera que los funcionarios de prisiones son policías, sin ninguna indicación en cuanto a la revisión llevada a cabo con los interlocutores sociales para diferenciar entre las diferentes categorías de trabajadores. ***En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales nacionales y otras partes interesadas, adopte las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios de prisiones diferentes de aquellos que tienen funciones específicas de policía judicial, puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas para defender sus intereses laborales, y que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto.***

Artículo 3. Derecho de los trabajadores del sector público a organizar sus actividades y a formular sus preguntas. La Comisión recuerda sus comentarios de larga data sobre la necesidad de garantizar a los trabajadores de la administración pública los derechos laborales básicos, con la posible excepción de los funcionarios públicos que ejercen una autoridad en nombre del Estado y de los trabajadores empleados en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión toma nota de la información general comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para escuchar continuamente las opiniones de las organizaciones de trabajadores y su intención de examinar detenidamente el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores. La Autoridad Nacional del Personal, como organización neutral independiente, aporta recomendaciones sobre las condiciones laborales, al tiempo que escucha detenidamente las opiniones y las peticiones de los trabajadores y de los empleadores, habiendo celebrado 216 reuniones oficiales en 2017. El Gobierno elaborará entonces proyectos de ley, adoptando una postura básica de respeto del sistema de recomendaciones de la NPA que se deliberan en la Dieta. El Gobierno concluye que las condiciones laborales de los trabajadores de la administración pública se mantienen de manera adecuada a través de estas medidas compensatorias. La Comisión toma nota asimismo de que la JTUC-RENGO lamenta que no haya evolucionado la posición del Gobierno en cuanto al sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores. La JTUC-RENGO expresa ***profunda preocupación*** por la aparente falta de intenciones del Gobierno de reconsiderar el sistema legal respecto de los derechos laborales básicos de los trabajadores de la administración pública y pide que a la luz de la negligencia del Gobierno en relación a los temas relativos al Convenio y discutidos por la Comisión de la Conferencia, se dé consideración a la investigación de estos asuntos a través de una misión al país.

Recordando las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al Gobierno que elabore, en plena consulta con los interlocutores sociales interesados, un plan de acción con plazos establecidos para la revisión

del actual sistema, con miras a garantizar la efectiva conciliación imparcial y rápida y unos procedimientos de arbitraje en los que las partes tengan confianza y puedan participar en todas sus etapas, y en los que los laudos, una vez dictados, se apliquen plenamente y con rapidez. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este respecto y, mientras tanto, que siga comunicando información detallada sobre el funcionamiento del sistema de recomendaciones de la NPA. La Comisión pide además al Gobierno que indique toda medida adoptada o prevista para garantizar el pleno ejercicio de los derechos en virtud del artículo 3 del Convenio de los trabajadores de la administración pública que no ejercen una autoridad en nombre del Estado.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Kazajstán

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre, el 12 de octubre y el 15 de noviembre de 2018, relativas a las cuestiones planteadas por la Comisión a continuación, así como alegatos de violaciones de derechos humanos fundamentales, incluyendo la agresión física al presidente de un sindicato de trabajadores del complejo de combustible y energía en la región de Karaganda. **La Comisión toma nota con profunda preocupación de la presunta paliza propinada al dirigente sindical y las presuntas lesiones que sufrió, e insta firmemente al Gobierno a que investigue la cuestión sin demora y lleve a los autores ante la justicia. Pide al Gobierno que informe de cualquier avance a este respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Empleadores de la República de Kazajstán (KRRK), a los que se refiere a continuación.**

La Comisión recuerda que, en junio de 2017, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia consideró que el Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel antes de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018, con el fin de evaluar los progresos realizados con miras al cumplimiento de sus conclusiones. La Comisión toma nota del informe de dicha misión, la cual tuvo lugar en mayo de 2018. Toma nota, en particular, de la Hoja de ruta para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Expertos en relación con la aplicación del Convenio preparada por el Gobierno y presentada en la reunión tripartita con la misión tripartita de alto nivel.

La Comisión había tomado nota anteriormente del caso de la Sra. Larisa Kharkova, la presidenta de la ahora liquidada Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán (KNPRK), que fue sentenciada a cuatro años de restricción de su libertad de movimiento, a cien días de trabajo obligatorio y a una prohibición de cinco años de ostentar ningún cargo en una organización pública o no gubernamental, y de los casos del Sr. Amin Eleusinov, el presidente de un sindicato afiliado a la KNPRK, y del Sr. Nurbek Kushakbaev, el vicepresidente de la KNPRK, que fueron sentenciados a dos y dos años y medio de prisión, respectivamente, y a quienes se prohibió tomar parte en actividades sindicales después de su puesta en libertad. La Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical ha examinado detenidamente los tres casos en el marco del caso núm. 3283 (véase 386.º informe, junio de 2018, párrafos 424 a 474). Toma nota asimismo de que, según el informe de la misión tripartita de alto nivel y la indicación del Gobierno, se ha puesto en libertad al Sr. Eleusinov y al Sr. Kushakbaev.

Artículo 2 del Convenio. *Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas. Personal penitenciario y bomberos.* La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa al derecho de sindicación de los bomberos y del personal penitenciario, así como de la información al respecto contenida en el informe de la misión tripartita de alto nivel. Toma nota, en particular, de que el personal penitenciario, como parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y, como tal, tiene prohibido constituir sindicatos y afiliarse a ellos. Sin embargo, de los trabajadores de estos organismos (incluido el personal penitenciario y los bomberos), sólo los militares y los policías tienen prohibido constituir sindicatos y afiliarse a ellos; todo el personal civil empleado en los mismos goza de este derecho. La Comisión toma nota de que la misión tripartita de alto nivel se reunió con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Fuerzas de Defensa, así como con los presidentes de las principales organizaciones sindicales de los sistemas penitenciarios para dos regiones. Toma nota asimismo de que, de manera análoga, según el informe de la misión, todos los civiles que trabajan en los servicios de extinción de incendios gozan del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a ellos.

Derecho a establecer organizaciones sin previa autorización. La Comisión recuerda que, tras la entrada en vigor de la Ley de Sindicatos, todos los sindicatos existentes debían registrarse nuevamente. Recuerda asimismo que había tomado nota anteriormente con preocupación de que se había denegado a los afiliados de la KNPRK el registro y el nuevo registro, lo que había acabado conduciendo a su liquidación. La Comisión recuerda que esto sucedió a pesar de las garantías que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (MLSD) dieron en 2016 a la misión de contactos directos de la OIT de que analizarían este asunto y prestarían asistencia a los sindicatos, según fuera pertinente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, el 29 de junio de 2018, con arreglo a la Hoja de ruta, se había establecido un servicio permanente de atención telefónica al nivel del MLSD relativo a las cuestiones del registro de los sindicatos y a las actividades de los mismos. Sin embargo, la Comisión toma nota de la alegación de la CSI de que dicho servicio carece de la capacidad y del mandato para desempeñar su función. La CSI hace referencia a este

respecto a las negativas recientes a registrar organizaciones sobre la base de la KNPRK anterior. ***La Comisión pide al Gobierno que formule sus comentarios al respecto.*** La Comisión toma nota además de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, que señaló los aspectos legislativos del caso núm. 3283 a la atención de la Comisión. Toma nota, en particular, que varias leyes regulan el registro y que se denegó a algunos sindicatos el nuevo registro debido a que sus estatutos no estaban en conformidad con una de las leyes aplicables o con todas ellas. ***Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que colabore con los interlocutores sociales a fin de pasar revista a las dificultades a las que se enfrentan los sindicatos al tratar de registrarse, con miras a hallar medidas apropiadas, incluidas legislativas, para dar pleno cumplimiento al artículo 2 del Convenio y para garantizar el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin previa autorización. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los avances realizados a este respecto.***

Derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas. La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que enmendara los siguientes artículos de la Ley de Sindicatos, a fin de garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente si desean asociarse o afiliarse a una estructura sindical de nivel superior, y de rebajar los requisitos en lo que respecta a los umbrales con miras a establecer organizaciones de nivel superior:

- los artículos 11, 3), 12, 3), 13, 3) y 14, 4), que exigen, bajo la amenaza de cancelación del registro en virtud del artículo 10, 3), la afiliación obligatoria de los sindicatos sectoriales, territoriales y locales a una asociación sindical nacional en el plazo de seis meses tras su registro, a fin de garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente si desean asociarse o afiliarse a una estructura sindical superior, y
- el artículo 13, 2), que exige que un sindicato sectorial represente a no menos de la mitad del total de la fuerza de trabajo del sector o de sectores conexos, o a organizaciones del sector o sectores conexos, o que tenga subdivisiones estructurales y organizaciones miembros en el territorio de más de la mitad de todas las regiones, ciudades de importancia nacional y la capital, con miras a rebajar este requisito en lo que respecta a los umbrales.

La Comisión toma nota de que la Hoja de ruta prevé una serie de medidas que deben adoptarse en consulta con los sindicatos interesados a fin de abordar esta cuestión y, en último término, de lograr una propuesta común para la enmienda de la ley con miras a su presentación ante el Parlamento en noviembre de 2018. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el MLSD estaba recopilando propuestas de los organismos estatales pertinentes y de los interlocutores sociales. Al tiempo que toma nota de que se llevaron a cabo, con el apoyo de la Oficina, dos actividades encaminadas a discutir posibles enmiendas a la Ley de Sindicatos con los sindicatos, la Comisión ***lamenta*** tomar nota de la falta de progresos en relación a las discusiones de las propuestas de los sindicatos y en llegar a una posición común. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con el fin de enmendar sin demora los artículos 11, 3), 12, 3), 13, 2) y 3), y 14, 4), de la Ley de Sindicatos en consulta con los interlocutores sociales, con objeto de garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente si desean asociarse a una estructura sindical de nivel superior o afiliarse a la misma, y de rebajar los requisitos en lo que respecta a los umbrales para establecer organizaciones de nivel superior. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.***

Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios. La Comisión había instado anteriormente al Gobierno a que enmendara la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios (NCE), con el fin de eliminar toda posible injerencia por el Gobierno en el funcionamiento de la Cámara, y de asegurar la plena autonomía e independencia de las organizaciones libres e independientes de empleadores en Kazajstán. La Comisión recuerda que la ley fomenta la afiliación obligatoria a la NCE (artículo 4,2)) y, durante el período de transición que durará hasta julio de 2018, la participación del Gobierno en la misma y su derecho a vetar las decisiones de la NCE (artículos 19, 2), y 21,1)). La Comisión había tomado nota de las dificultades a las que se enfrentaba la KRRK en la práctica, que se derivaban de la afiliación obligatoria y del monopolio de la NCE y, en particular, de que la acreditación de las organizaciones de empleadores por la NCE y la obligación impuesta en la práctica a las organizaciones de empleadores para que concluyeran un acuerdo anual (un contrato modelo) con la NCE significaban, a todos los efectos, que esta última aprobaba y formulaba los programas de las organizaciones de empleadores, por lo que intervenía en los asuntos internos. La Comisión toma nota de que, según el informe de la misión tripartita de alto nivel y la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, existe un acuerdo para enmendar el artículo 148, 5), del Código del Trabajo con el fin de suprimir la referencia a la autoridad de la NCE para representar a los empleadores a nivel nacional, sectorial y regional. La Comisión toma nota además de que la Hoja de ruta prevé que se adopten medidas con miras a responder a las preocupaciones arriba mencionadas que culminen en la presentación de un proyecto de ley para enmendar diversas leyes, incluida la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios, ante el Parlamento, en noviembre de 2018. La Comisión ***lamenta*** tomar nota de la falta de información en cuanto a progresos en lo que respecta a la enmienda de la legislación. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias sin demora para enmendar la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios y cualquier otra ley pertinente para asegurar la autonomía e independencia plena de las organizaciones de empleadores libres e independientes. Pide al Gobierno que suministre información sobre todos los avances realizados a este respecto.***

La Comisión toma nota además de las observaciones de la KRRK, recibidas el 17 de noviembre de 2018, relativas a la Hoja de ruta. ***Pide al Gobierno que formule comentarios al respecto.***

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas. La Comisión había acogido anteriormente con agrado la intención del Gobierno de enmendar el Código del Trabajo relativo al derecho de huelga, haciendo que el artículo 176, 1), 1), en virtud del cual las huelgas se considerarán ilegales cuando tengan lugar en entidades que manejan instalaciones de producción peligrosas, sea más explícito en lo que respecta a las instalaciones que se consideran peligrosas. En la actualidad, las «instalaciones de producción peligrosas» se enumeran en los artículos 70 y 71 de la Ley de Protección Civil, y la empresa en cuestión puede determinarlas con más precisión, de conformidad con la orden núm. 353 del Ministerio de Inversión y Desarrollo (2014). ***Al tiempo que toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa al procedimiento que ha de seguirse para declarar una huelga, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la situación de la enmienda del Código del Trabajo propuesta anteriormente.***

La Comisión había tomado nota con preocupación anteriormente de que los dirigentes sindicales habían sido declarados culpables y condenados en aplicación del artículo 402 del Código Penal (2016), conforme al cual toda incitación a seguir una huelga declarada ilegal por el tribunal se podía castigar hasta con un año de prisión y, en ciertos casos (menoscabo considerable de los derechos e intereses de los ciudadanos, etc.), hasta con tres años de prisión. Recordó que no debían imponerse sanciones penales contra un trabajador por haber llevado a cabo una huelga pacífica y, por tanto, por ejercer meramente un derecho esencial y, por ende, no debían imponerse bajo ningún concepto medidas de encarcelamiento o multas. Tales sanciones sólo podían preverse en los casos en que, durante una huelga, se hubieran cometido actos de violencia contra las personas o los bienes, u otras violaciones graves del derecho penal, y podían imponerse exclusivamente en aplicación de las disposiciones legales que castigan tales actos (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 158). La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 402 del Código Penal para ponerlo en conformidad con este principio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, el 17 de agosto de 2018, había organizado una reunión sobre la aplicación de esta disposición con todos los organismos estatales pertinentes. Se decidió que esta cuestión debería ser examinada por el grupo de trabajo interinstitucional del Ministerio Público, que está considerando enmendar diversas leyes con miras a reformar el derecho y el procedimiento penales. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información en relación a todos los avances realizados a este respecto.***

Artículo 5. Derecho de las organizaciones a recibir asistencia financiera de organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que adoptara, en consulta con los interlocutores sociales, disposiciones legislativas específicas que autorizaran claramente a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a beneficiarse, con fines normales y lícitos, de la asistencia financiera o de otro tipo de organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que la Hoja de ruta prevé la redacción de una nota explicativa sobre esta cuestión y sobre el procedimiento que ha de seguirse para la distribución pública. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha redactado una recomendación sobre la obtención de asistencia financiera de organizaciones internacionales. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia de la misma y que suministre información en relación a las medidas tomadas para adoptar esta recomendación como cuestión de derecho.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Kiribati

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra actos de discriminación e injerencia antisindicales. Con el fin de permitirle evaluar si se proporciona protección adecuada en la práctica contra actos de discriminación e injerencia antisindicales, la Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre el número de quejas de discriminación antisindical y de injerencia de los empleadores presentadas ante las diversas autoridades competentes, la duración promedio de los procedimientos pertinentes y su resultado, y el tipo de vías de recurso y de sanciones impuestas en tales casos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual sólo se ha registrado un caso de discriminación antisindical y que los diez sindicalistas víctimas de discriminación fueron readmitidos por orden del tribunal de arbitraje. ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de quejas de discriminación antisindical y de injerencia de los empleadores presentadas ante las diversas autoridades competentes, incluidos los procedimientos judiciales, la duración promedio de los procedimientos pertinentes y su resultado, y el tipo de vías de recurso y de sanciones impuestas en tales casos.***

Artículo 4. Fomento de la negociación colectiva. En comentarios anteriores, al tiempo que tomó nota de que en los artículos 4 (definición de negociación colectiva) y 60 (partes con la facultad de iniciar una negociación colectiva) del Código de Empleo y Relaciones Laborales, de 2015, no se hace referencia explícita a las federaciones y confederaciones, la Comisión solicitó al Gobierno que: i) aclarara si las federaciones y confederaciones tienen la posibilidad de entablar una negociación colectiva a niveles superiores al de la empresa, y ii) proporcionara información sobre el número de convenios colectivos concluidos durante el período en cuestión e indicara los sectores y el número de trabajadores cubiertos. ***Al tiempo que lamenta que el Gobierno no proporcione información alguna a este respecto y habida cuenta de que el***

Código de Empleo y Relaciones Laborales (enmendado en 2017), no contempla ninguna enmienda en este sentido, la Comisión reitera su solicitud anterior.

Líbano

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de los Trabajadores Libaneses (CGTL), comunicadas junto con la memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión observa que el Gobierno no ha respondido a las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2010 en las que denunciaba el elevado umbral que la ley impone a las organizaciones representativas para realizar negociaciones colectivas, que exige que para validar un convenio colectivo sea necesario obtener los votos de dos terceras partes de los miembros del sindicato durante una asamblea general. ***La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las observaciones de 2010 de la CSI.***

En relación con las observaciones presentadas, en 2015 y 2016, por la Internacional de la Educación (IE) relativas a la situación del personal de la enseñanza pública y privada y la congelación de los salarios desde 1996, la Comisión toma nota de que: i) mediante la adopción del decreto núm. 63 de 2008, los docentes del sector público y privado han disfrutado de un aumento salarial; ii) en 2013, tras un aumento salarial en el sector privado, los asalariados del sector público, incluidos los docentes, recibieron un anticipo salarial, y iii) la ley núm. 26, publicada en el *Boletín Oficial* el 21 de agosto de 2017, también prevé un aumento salarial para los docentes de los sectores público y privado. ***La Comisión pide al Gobierno que indique si estos aumentos salariales son el resultado de las negociaciones colectivas.***

Ámbito de aplicación del Convenio. Trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el Gobierno no había respondido a las observaciones formuladas por la CSI sobre la exclusión de los trabajadores domésticos del Código del Trabajo. La Comisión señala que «los empleados del hogar que trabajan en casa de particulares» están excluidos del campo de aplicación del Código del Trabajo de 1946 (artículo 7, 1)), y que las relaciones contractuales entre trabajadores domésticos y los particulares que los emplean para realizar trabajo doméstico en su domicilio están regidas por la ley sobre las obligaciones y los contratos. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2018, el Comité de Derechos Humanos señaló que le preocupa que los trabajadores domésticos migrantes se hallen excluidos de la protección prevista en la legislación laboral nacional y sean víctimas de abusos y explotación en el marco del sistema de patrocinio (*kafala*). Asimismo, señaló su preocupación por la falta de recursos efectivos contra los abusos y por la existencia de represalias antisindicales (documento CCPR/C/LBN/CO/3). ***La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto, indicando la forma en la que los trabajadores domésticos y los trabajadores domésticos migrantes pueden beneficiarse de la protección prevista en el Convenio, incluido el derecho a la negociación colectiva a través de las organizaciones que estimen convenientes, y que señale si está previsto modificar la disposición antes mencionada del Código del Trabajo. Además, pide al Gobierno que indique la manera en la que estos derechos se ejercen en la práctica, citando, si procede, el nombre de toda organización que representa a los trabajadores domésticos y a los trabajadores domésticos migrantes y señalando cuántos convenios colectivos les son aplicables.***

Modificaciones legislativas

Artículos 4 y 6 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que, en los comentarios que reitera desde hace bastantes años, señala tanto la necesidad de revisar una serie de disposiciones del Código del Trabajo en vigor como la de reformular ciertos artículos relativos a la negociación colectiva del proyecto de Código del Trabajo, comunicado por el Gobierno en 2004.

Limitaciones excesivas al derecho de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 3 del decreto núm. 17386/64 prevé que para negociar de forma válida un convenio colectivo los sindicatos deben obtener el apoyo de al menos el 60 por ciento de los asalariados libaneses interesados y consideró que este umbral era excesivo. Asimismo, había tomado nota de que el artículo 180 del proyecto de Código del Trabajo preveía reducir el umbral al 50 por ciento y había recordado al Gobierno que, sin embargo, esta solución podría plantear problemas de compatibilidad con el Convenio ya que privaría de la posibilidad de negociar a un sindicato representativo que no reuniera la mayoría absoluta. Por consiguiente, pidió al Gobierno que garantizara que, si ningún sindicato representa al porcentaje de trabajadores requeridos para ser declarado agente negociador exclusivo, los derechos de negociación colectiva se otorguen a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en nombre de sus propios afiliados.

Derecho de negociación colectiva en el sector público y la función pública. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara su legislación a fin de que los trabajadores del sector público no adscritos a la administración del Estado, regidos por el decreto núm. 5883 de 1994, pudieran disfrutar del derecho de negociación colectiva. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el artículo 131 del proyecto de Código del Trabajo preveía que los trabajadores de las administraciones públicas, los municipios y las empresas públicas encargadas de administrar los servicios públicos por cuenta del Estado o por su propia cuenta tuvieran derecho a la negociación colectiva.

Arbitraje obligatorio. Desde hace varios años, la Comisión pide que se adopten medidas a fin de que el recurso al arbitraje en las tres empresas del sector público sujetas al decreto núm. 2952, de 20 de octubre de 1965, sólo pueda efectuarse a solicitud de las dos partes. La Comisión también había pedido que se modificara el artículo 224 del proyecto de Código del Trabajo que preveía que, en caso de fracaso de la mediación, los conflictos relacionados con las tres empresas del sector público sujetas al decreto núm. 2952 se solucionaran a través de un comité de arbitraje. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno indica que el decreto núm. 2952 ha sido reemplazado por el decreto núm. 13896, de 3 de enero de 2005, y que, a partir de ahora, todas las empresas de inversión de los sectores público y privado encargadas de gestionar los servicios públicos por cuenta del Estado o por su propia cuenta deben recurrir al arbitraje obligatorio en caso de fracaso de las negociaciones. La Comisión recuerda que, en general, el arbitraje obligatorio no es compatible con la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria requerida por el artículo 4 y que, a este respecto, el arbitraje obligatorio en el marco de la negociación colectiva sólo es aceptable para los funcionarios adscritos a la administración del Estado (artículo 6), en los servicios esenciales en el estricto sentido del término (servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) y en situaciones de crisis nacional aguda.

Lamentando tomar nota de que, desde hace más de un decenio, el Gobierno se limita a indicar que el proyecto de Código del Trabajo está siendo examinado y que en este marco tendrá debidamente en cuenta los comentarios formulados por la Comisión, y que el Código del Trabajo en vigor aún contiene disposiciones que son incompatibles con el Convenio, la Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para modificar el Código del Trabajo en vigor a fin de garantizar a los trabajadores, incluso a los trabajadores domésticos, el derecho de negociación colectiva. La Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita estadísticas sobre el número de convenios colectivos que se han concluido y están en vigor, indicando los sectores de actividad concernidos y el número de trabajadores cubiertos.

Liberia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con cuestiones que se han estado planteando desde 2012 y se examinan en este comentario, así como sobre cuestiones que están siendo examinadas por el Comité de Libertad Sindical en el marco de los casos núms. 3081 y 3202.

Cambios legislativos. La Comisión recuerda que desde hace muchos años formula comentarios sobre la necesidad de modificar o derogar las disposiciones siguientes del título 18 de la Ley sobre el Trabajo que no están en conformidad con las disposiciones del Convenio: i) el artículo 4506, que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la administración pública constituir una organización sindical; ii) el artículo 4601-A, que prohíbe a los trabajadores de la agricultura afiliarse a organizaciones de trabajadores de la industria, y iii) el artículo 4102, párrafos 10 y 11, que impone el control de las elecciones sindicales por el Consejo de control de las prácticas de trabajo. La Comisión toma nota con **satisfacción** de que, tal como indica el Gobierno en su memoria, el título 18 de la Ley sobre el Trabajo ha sido derogado por la Ley sobre el Trabajo Decente de 2015 (la ley) que entró en vigor el 1.º de marzo de 2016. La Comisión quiere plantear los puntos siguientes en relación con la ley.

Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el artículo 1.5, c), i) y ii) de la ley excluye de su ámbito de aplicación el trabajo que cubre la Ley sobre los Organismos de la Administración Pública. A este respecto, la Comisión recuerda que en su comentario anterior tomó nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza el derecho de los funcionarios públicos a establecer sindicatos (ordenanza sobre la función pública) estaba siendo revisada con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información nueva a este respecto. **La Comisión espera firmemente que la revisión de la ordenanza haga posible dar pleno efecto al Convenio en lo que atañe a los funcionarios públicos y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a ese respecto.**

La Comisión toma nota de que el artículo 1.5, c), i) y ii), de la ley también excluye de su ámbito de aplicación a los oficiales, miembros de la tripulación y otras personas que trabajan o se forman en buques. **Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la legislación que garantiza el derecho a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas a los que trabajan en buques, la Comisión le pide que indique la manera en que los trabajadores del sector marítimo, incluso los que se están formando, tienen garantizados los derechos consagrados en el Convenio, incluyendo todas las leyes o reglamentos adoptados o previstos que cubran a esta categoría de trabajadores.**

Artículo 1 del Convenio. **Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas.** La Comisión toma nota de que el artículo 2.6 de la ley prevé que todos los empleadores y trabajadores, sin distinción alguna, pueden constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas sin autorización previa, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. La Comisión también toma nota de que el artículo 45.6 de la ley reconoce el derecho de los trabajadores extranjeros a afiliarse a organizaciones. **La Comisión pide al Gobierno que indique si, además del derecho a afiliarse a organizaciones, los trabajadores extranjeros tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes.**

Artículo 3. Determinación de los servicios esenciales. La Comisión toma nota de que el Consejo Nacional Tripartito (establecido en virtud del artículo 4.1 de la ley) tiene la función de identificar y recomendar al Ministro los servicios que se tienen

que considerar esenciales (artículo 41.4, a), de la ley). Asimismo, la Comisión toma nota con *interés* de que en el artículo 41.4 de la ley define los servicios esenciales como aquellos servicios cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población. La ley también prevé que el Presidente, previo examen de las recomendaciones del Consejo Nacional Tripartito, tendrá que decidir si alguna parte de un servicio se considerará un servicio esencial y publicar una notificación en el *Boletín Oficial* señalando que se trata de un servicio esencial. La Comisión toma nota de que la decisión final sobre la determinación de un servicio como esencial recae en el Presidente, que no está obligado a seguir las recomendaciones del Consejo Nacional Tripartito. ***La Comisión solicita al Gobierno que indique si, al determinar los servicios que se considerarán esenciales, el Presidente debe atenerse a la definición de servicios esenciales establecida en el artículo 41.4 de la ley. La Comisión también pide al Gobierno información en relación a la manera en la que el artículo 41.4 ha operado en la práctica respecto a la determinación de servicios esenciales.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que se abordan cuestiones examinadas en esta observación así como cuestiones que el Comité de Libertad Sindical examina en el marco de los casos núms. 3081 y 3202.

Cambios legislativos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley sobre el Trabajo Decente, que garantiza los derechos consagrados en el Convenio, se adoptó en 2015 y entró en vigor el 1.º de marzo de 2016. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado realizado comentarios sobre la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que garanticen: i) una protección suficiente frente a la discriminación antisindical en el momento de la contratación y durante la relación de empleo, acompañada de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias; ii) una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones, que incluya sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias, y iii) el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de las empresas del Estado y de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 5), c), i) y ii), de la Ley sobre el Trabajo Decente, de 2015 (la ley), excluye de su ámbito de aplicación el trabajo que está cubierto por la ley sobre organismos de la administración pública. A este respecto, la Comisión recuerda que en su anterior memoria, el Gobierno había indicado que la legislación que garantiza el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos y los empleados de las empresas estatales (ordenanza sobre la función pública) estaba en curso de revisión con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información a este respecto. ***La Comisión confía en que a través de la revisión de la ordenanza sobre la función pública se pueda dar pleno efecto al Convenio en lo que respecta a los empleados de las empresas estatales y los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.***

La Comisión toma nota de que el artículo 1, 5), c), i) y ii), de la ley también excluye de su ámbito de aplicación a los oficiales, miembros de la tripulación y otras personas que trabajan o se forman en buques. ***Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la legislación que garantiza el derecho de negociación colectiva a los trabajadores marítimos, la Comisión le pide que indique la manera en que los derechos consagrados en el Convenio se aplican a esos trabajadores, incluyendo todas las leyes o reglamentos, adoptados o que está previsto adoptar, que los cubren.***

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado pidiendo al Gobierno que adopte medidas para introducir en la legislación disposiciones que garanticen una protección efectiva contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el artículo 2.6 de la ley prevé que formar organizaciones y negociar colectivamente son derechos fundamentales y el artículo 2.7 prohíbe la discriminación en el marco del ejercicio de los derechos conferidos por la ley. La Comisión también toma nota de que el artículo 2.11 de la ley prevé la protección de la libertad sindical de los trabajadores (estableciendo, entre otras cosas, que ninguna persona podrá perjudicar o amenazar con perjudicar a un trabajador debido a que ha estado, está o prevé estar afiliado a una organización de trabajadores) y que su artículo 2.12 de la ley prevé la protección de la libertad de asociación de los empleadores. La Comisión toma nota de que los artículos 2.11 y 2.12 prevén que se aplicarán además del artículo 2.7 de la ley y en la mayor medida posible junto con él habida cuenta de que este último artículo prohíbe la discriminación en general. Además, la Comisión toma nota de que, si bien la ley no prohíbe expresamente la terminación de la relación de trabajo sobre la base de la discriminación antisindical, el artículo 14.8 prohíbe la terminación debido al ejercicio de los derechos que otorga la ley. Asimismo, toma nota de que las quejas por vulneración de los derechos garantizados por la ley pueden presentarse al Ministerio, cuyas decisiones pueden apelarse ante el tribunal del trabajo (capítulos 9 y 10 de la ley). ***Haciendo hincapié en la importancia de garantizar una protección efectiva contra los actos de discriminación antisindical y de prever sanciones suficientemente disuasorias, la Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre las sanciones impuestas en casos de discriminación antisindical. También pide al Gobierno que transmita estadísticas sobre el número de casos de discriminación examinados así como sobre la duración de los procedimientos y el tipo de sanciones impuestas y de compensaciones ordenadas.***

Artículo 2. Protección adecuada contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado pidiendo al Gobierno que adopte medidas para incluir en la legislación disposiciones que garanticen una adecuada protección de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores en sus asuntos, incluyendo sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión *lamenta* tomar nota de que la ley aún no contiene disposiciones específicas sobre la protección contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras en su constitución, funcionamiento o administración (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 194). ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para introducir en la legislación la prohibición de los actos de injerencia así como procedimientos rápidos de apelación y sanciones disuasorias para estos actos. Pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.***

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el artículo 37.1, a), de la ley, prevé que los sindicatos que representan a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación apropiada pueden pedir el reconocimiento como agentes exclusivos de negociación de esa unidad de negociación. Asimismo, toma nota de que un sindicato que ya no representa a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación debe conseguir esa mayoría en tres meses y, si no lo hace, el empleador deberá retirarle el reconocimiento (artículo 37.1, k)). La Comisión recuerda que si bien es aceptable que el sindicato que represente a la mayoría o a un alto porcentaje de los trabajadores en una unidad de negociación goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos, considera que en los casos de que ningún sindicato cumpla esas condiciones, o que no gocen de esos derechos exclusivos, los sindicatos minoritarios deberían, al menos, poder concluir un convenio colectivo o directo en nombre de sus propios afiliados (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 226). **La Comisión pide al Gobierno que indique si, en caso de que ningún sindicato represente a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación apropiada, los sindicatos minoritarios en la misma unidad de negociación disfrutan de derechos de negociación, al menos en nombre de sus propios afiliados.**

Solución de conflictos que afectan a los intereses nacionales. La Comisión toma nota de que el artículo 42.1 de la ley establece que si el Presidente lo considera de interés nacional, puede: i) solicitar al ministro que nombre a un conciliador para solucionar un conflicto, o un conflicto potencial, entre empleadores y sus organizaciones, por una parte, y trabajadores y sus sindicatos, por otra parte, o ii) en consulta con el Consejo Nacional tripartito, establecer un grupo de examen que represente los intereses de los empleadores, los trabajadores y el Estado para investigar cualquier conflicto laboral, o conflicto laboral potencial, con fines de informar y realizar recomendaciones al Presidente. **Recordando que, con arreglo al artículo 4 del Convenio, la solución de conflictos colectivos debe ser coherente con la promoción de la negociación colectiva voluntaria, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información adicional en relación con las prerrogativas en virtud del artículo 42.1 de la ley, y que indique en qué medida esta disposición otorga a las partes libertad plena de negociación colectiva y no altera el principio de arbitraje voluntario.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que incluyen alegatos de discriminación antisindical. La Comisión nota con **preocupación** que, a pesar de sus solicitudes, el Gobierno no ha transmitido comentarios sobre las observaciones anteriores de la CSI, ni sobre la información adicional que en junio de 2016 declaró ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (en adelante Comisión de la Conferencia) que proporcionaría en relación con los alegatos de 2015 sobre discriminación antisindical e injerencia realizados por el Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione sus comentarios en relación con las observaciones de 2016, 2017 y 2018 de la CSI sobre violaciones del Convenio en la práctica, así como sobre las alegaciones de discriminación antisindical e injerencia presentadas en 2015 por el MTUC.**

En relación con la revisión general de las principales leyes del trabajo que anteriormente había anunciado el Gobierno (incluidas la Ley sobre el Empleo, 1955, la Ley de Sindicatos, 1959, y la Ley de Relaciones Laborales (IRA), 1967), la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la revisión general sigue en curso con la asistencia de la Oficina y que se han realizado varias reuniones tripartitas de colaboración; y añade que está previsto que la versión enmendada de la IRA se presentara al Parlamento en el segundo trimestre de 2019. **La Comisión espera firmemente que el Gobierno tenga en cuenta los comentarios reiterados a continuación a fin de garantizar, con la asistencia técnica de la Oficina, la plena conformidad de esas leyes con el Convenio, y poder tomar nota en un futuro próximo de la realización de progresos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.**

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que en los últimos años la mayor parte de los casos de discriminación antisindical notificados habían sido examinados en virtud de los procedimientos establecidos en los artículos 5 y 8 de la IRA (que no prevén sanciones específicas ni indican explícitamente la posibilidad de reintegro) y en menos del 6 por ciento de los casos notificados se ha utilizado el procedimiento en relación con los delitos en materia de discriminación antisindical establecido en el artículo 59 de la IRA (que prevé expresamente sanciones penales así como la posibilidad de reintegro). La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara más información detallada sobre: i) las sanciones y compensaciones en relación con actos de discriminación antisindical, especialmente en aquellos casos en los que los actos de discriminación antisindical han sido examinados con arreglo a los artículos 5 y 8 de la IRA, y ii) los factores que explican el uso limitado del artículo 59 de la IRA que prevé sanciones específicas en caso de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las partes afectadas prefieren el proceso más fácil y flexible (la conciliación) previsto en el artículo 8 de la IRA, frente al artículo 59 que requiere una investigación y un procedimiento ante un tribunal penal, habida cuenta de que la queja es de naturaleza casi penal, y que la carga de la prueba es rigurosa (más allá de toda duda razonable). La Comisión toma nota de que el Gobierno sólo respondió a su solicitud de información sobre los factores que explican el uso limitado del artículo 59, y recuerda la necesidad de garantizar que todos los procedimientos establecidos para abordar la discriminación antisindical ofrezcan protección adecuada — incluidas compensaciones adecuadas y sanciones los suficientemente disuasorias. Si bien reconoce que los procedimientos penales prevén una carga de la prueba

más estricta, la Comisión recuerda la importancia de evitar obstáculos que dificulten la interposición de acciones y la obtención de medidas de reparación adecuadas en casos de discriminación antisindical (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 192). A este respecto, la Comisión observa que la inversión de la carga de la prueba, al hacer recaer la carga de la prueba sobre el empleador una vez que se hayan presentado «indicios razonables» de discriminación antisindical, es uno de los mecanismos preventivos utilizados por algunos Estados para ofrecer protección contra la discriminación antisindical, mientras que otros Estados han, en tales casos, optado por reducir la carga de la prueba aplicable a los trabajadores. La Comisión considera que trasladar a los trabajadores la carga de la prueba más allá de toda duda razonable que el acto en cuestión obedece a motivos de discriminación antisindical a fin de obtener una protección adecuada constituía un obstáculo disuasorio para la presentación de las quejas respectivas y para la reparación adecuada de los perjuicios sufridos. ***La Comisión pide al Gobierno que: i) transmita información detallada sobre las reparaciones generales efectivamente concedidas en relación con los actos de discriminación antisindical que se abordan a través de los artículos 5 y 8 de la IRA, así como las sanciones y medidas de compensación en relación con los actos de discriminación antisindical examinados con arreglo al artículo 59 de la IRA, y ii) habida cuenta de esta información, adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la Oficina en el contexto de la revisión de la IRA, a fin de garantizar que las reglas y los procedimientos en materia de discriminación antisindical ofrecen una protección adecuada — incluidas compensaciones adecuadas y sanciones lo suficientemente disuasorias, sin trasladar a las víctimas una carga de la prueba que constituya un obstáculo importante para el establecimiento de responsabilidades y para la reparación adecuada de los perjuicios sufridos.***

Artículos 2 y 4. Reconocimiento de los sindicatos a los fines de la negociación colectiva. Criterio y procedimiento de reconocimiento. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 9 de la IRA, cuando un empleador rechace una solicitud de reconocimiento a los fines de la negociación colectiva: i) el sindicato deberá informar al Director General de Relaciones Laborales (DGIR) para que éste adopte las medidas que correspondan, incluido un control de la competencia, y ii) el control de la competencia se realiza a través de una votación secreta para determinar si el sindicato alcanza el porcentaje requerido (el 50 por ciento más uno) de los trabajadores o la categoría de trabajadores en relación a los que se solicita el reconocimiento. La Comisión también toma nota de que el MTUC y la CSI han planteado una serie de preocupaciones sobre la aplicación de este procedimiento (alegando que el DGIR utiliza el número total de trabajadores en la fecha en la que el sindicato solicitó el reconocimiento y no en la fecha de la votación, lo cual, habida cuenta de la duración del procedimiento, puede impedir el reconocimiento de un sindicato que tiene apoyo mayoritario; que en determinados casos más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo está formada por trabajadores migrantes que han vuelto a sus países de origen pero que cuentan a los efectos de la votación secreta en detrimento del sindicato; y que el procedimiento de votación secreta no ofrece protección frente a la injerencia del empleador). Habida cuenta de lo anterior, la Comisión: i) recordó que en el procedimiento de reconocimiento se debería tener en cuenta la representatividad que tiene un sindicato en el momento en que se realiza la votación, con miras a tomar en consideración la fuerza de trabajo que debe ser realmente representada, y que el proceso debería ofrecer salvaguardias para prevenir actos de injerencia, y ii) pidió al Gobierno que se asegure de que el derecho a la negociación colectiva sea garantizado aunque ningún sindicato tenga mayoría suficiente para ser declarado agente negociador exclusivo.

Tomando debida nota de que el Gobierno señala que no impone restricciones a los sindicatos minoritarios para que capten nuevos afiliados a fin de obtener la mayoría y sometan de nuevo una solicitud de reconocimiento, la Comisión observa que esto no tiene relación con la cuestión del derecho a realizar negociaciones colectivas cuando ningún sindicato tiene la mayoría requerida. ***Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales y en el contexto de la revisión de la IRA, tome las medidas necesarias para que el procedimiento de reconocimiento prevea salvaguardias para prevenir los actos de injerencia y permita que, cuando ningún sindicato tenga la mayoría requerida para ser declarado agente negociador exclusivo, los sindicatos minoritarios puedan negociar, de manera conjunta o separada, al menos en nombre de sus propios afiliados.***

Duración de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato. En su memoria anterior, el Gobierno indicó que la duración media del proceso de reconocimiento tarda: i) un poco más de tres meses para las solicitudes resueltas mediante el reconocimiento voluntario, y ii) cuatro meses y medio para las solicitudes resueltas por el Departamento de Relaciones Industriales, cuando éstas no son objeto de un recurso judicial. La Comisión consideró que la duración de los procedimientos para el reconocimiento de sindicatos seguía siendo excesivamente larga y pidió al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para reducir más la duración de dichos procedimientos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está trabajando para mejorar el procedimiento; toma nota en particular de que el Departamento de Relaciones Industriales está tomando medidas administrativas y jurídicas para acelerar el procedimiento y de que la IRA está siendo objeto de una revisión general. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Relaciones Industriales a fin de acelerar el procedimiento y que, en el contexto del examen antes mencionado y en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para reducir aún más la duración de los procedimientos para el reconocimiento de sindicatos.***

Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores la Comisión: i) consideró que el requisito de que los trabajadores extranjeros obtengan la autorización del Ministerio de Recursos Humanos para poder ser elegidos representantes sindicales entorpece el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes a los fines de la negociación colectiva; ii) saludó la declaración del Gobierno de que la legislación actual no prohíbe que los

trabajadores extranjeros se afilien a sindicatos y que se realizaría una modificación legislativa para permitir que los extranjeros puedan presentar su candidatura para desempeñar cargos en los sindicatos si han estado residiendo legalmente en el país durante al menos tres años, y iii) tomó nota de la preocupación planteada por los miembros trabajadores en la Comisión de la Conferencia de 2016 respecto a que los trabajadores migrantes tienen que hacer frente a una serie de obstáculos prácticos para realizar negociaciones colectivas, incluso debido a que sus contratos tienen que ser como mínimo de dos años de duración y a su vulnerabilidad frente a la discriminación antisindical, así como sobre una reciente sentencia judicial en la industria del papel en la que se consideró que los trabajadores migrantes que tienen contratos de duración determinada no pueden beneficiarse de las condiciones acordadas en los convenios colectivos. La Comisión observa que el Gobierno: i) por una parte, reitera que no impone ninguna restricción a los migrantes para que realicen negociaciones colectivas — un derecho que está reconocido en la IRA para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, que pueden votar en el proceso de reconocimiento, participar en negociaciones y disfrutar de las ventajas de los acuerdos colectivos —, y ii) por otra parte, no proporciona información sobre las medidas que anunció que adoptaría después de tomar nota de las preocupaciones de la Comisión, algunas de las cuales son de naturaleza práctica. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las enmiendas anunciadas a la IRA para encontrar soluciones a las preocupaciones anteriormente expresadas, de manera que se garantice la plena utilización de la negociación colectiva por parte de los trabajadores migrantes, inclusive por medio del reconocimiento de la posibilidad de que los mismos se presenten a las elecciones sindicales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo avance al respecto.***

Ámbito de la negociación colectiva. La Comisión instó previamente al Gobierno a modificar el artículo 13, 3), de la IRA, que prevé restricciones a la negociación colectiva respecto del traslado, el despido y el reintegro (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas internas de la administración») y a que iniciara discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de directrices en materia de negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión saludó la indicación del Gobierno de que el artículo 13, 3), de la IRA se enmendaría a fin de eliminar amplias restricciones en relación con el alcance de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está enmendando la IRA con arreglo a los requisitos del capítulo laboral del Acuerdo amplio y progresivo de asociación transpacífica, en particular en lo que respecta al artículo 13, 3). ***Esperando firmemente que el artículo 13, 3), de la IRA se enmiende en un futuro próximo a fin de eliminar las amplias restricciones en lo que respecta al alcance de la negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.***

Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 26, 2), de la IRA permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministerio de Trabajo, por propia iniciativa, en caso de fracaso de la negociación colectiva. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la legislación sólo autorizara el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, en relación con los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en casos de crisis nacional aguda. De igual forma, la Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical le remitió el seguimiento de los aspectos legislativos del caso núm. 3126, en el que el Comité pidió al Gobierno que pusiera su legislación y su práctica en relación con la remisión de los conflictos de interés al arbitraje obligatorio en conformidad con los principios de la libertad sindical (véase 383.º informe, octubre de 2017, párrafo 454). La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno indica que necesita más información y tiempo antes de cambiar las leyes y políticas actuales sobre el arbitraje obligatorio y saluda la declaración del Gobierno en relación a que está colaborando con la Oficina a fin de garantizar que las enmiendas a la legislación estén de conformidad con las normas internacionales del trabajo. ***La Comisión espera que, con la asistencia técnica de la Oficina, el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, para los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado o en caso de crisis nacional aguda.***

Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. Durante muchos años, la Comisión ha estado solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no están adscritos a la administración del Estado el derecho de negociar colectivamente sus salarios y su remuneración y otras condiciones de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera una vez más que, a través del Consejo Paritario Nacional (del cual forman parte sindicatos y asociaciones del sector público) y el Consejo Paritario Departamental, los representantes de los empleados públicos pueden realizar debates y consultas con el Gobierno sobre cuestiones que incluyen las condiciones de servicio, la formación, la remuneración, la promoción y las prestaciones. El Gobierno añade que los principales sindicatos, como, por ejemplo, el Congreso de Sindicatos de Empleados del Sector Público y de la Administración del Estado (CUEPACS) y el Sindicato Nacional de las Profesiones Docentes de Malasia (NUTP) se han dirigido directamente al Gobierno para solicitar mejoras en las condiciones de servicio de sus miembros. El Gobierno también declara que si bien la aprobación de todas las mejoras se realiza a su discreción, la ley núm. 177 prevé un mecanismo de resolución de conflictos que incluye la remisión de los conflictos laborales de cualquier servicio gubernamental o autoridad pública al Tribunal de Trabajo, y que los empleados públicos pueden realizar acciones industriales como huelgas y piquetes (aunque estos derechos nunca han sido ejercidos por los sindicatos de la función pública, ya que nunca han llegado al estancamiento de una discusión). El Gobierno concluye que, en general, la práctica actual de negociar los términos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos respeta las reglas y el espíritu de la negociación colectiva, aunque, hasta cierto punto, no está plenamente en conformidad con las normas internacionales del trabajo. A este respecto, si bien la

Comisión reconoce que la singularidad de la función pública permite modalidades especiales, debe recordar de nuevo que considera que las simples consultas con los sindicatos de los funcionarios públicos que no están adscritos a la administración del Estado no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4 del Convenio. ***La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios públicos que no están adscritos a la administración del Estado el derecho a realizar negociaciones colectivas sobre los salarios y la remuneración y otras condiciones de trabajo, en conformidad con el artículo 4 del Convenio, y recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.***

Aplicación del Convenio en la práctica. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que los miembros trabajadores de la Comisión de la Conferencia de 2016 plantearon su preocupación por el reducido porcentaje de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos en el país (según ellos, entre el 1 y el 2 por ciento a pesar de que la tasa de sindicación es de casi el 10 por ciento). ***Tomando nota de que el Gobierno no ha transmitido la información estadística solicitada, la Comisión le pide de nuevo que transmita información sobre el número de convenios colectivos concluidos y en vigor, especificando los sectores concernidos y el número de trabajadores cubiertos por esos acuerdos, así como sobre todas las medidas adicionales adoptadas para promover el pleno desarrollo y utilización de los convenios colectivos con arreglo al Convenio.***

México

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota con *interés* de la aprobación el 20 de septiembre de 2018 por el Senado de la República de la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) comunicadas junto con la memoria del Gobierno, sobre cuestiones objeto de este comentario. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) recibidas el 2 de septiembre de 2018 y de IndustriALL Global Union (IndustriALL), recibidas el 10 de septiembre de 2018, sobre cuestiones objeto de este comentario. Por otra parte, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI y de IndustriALL de 2017, brindando información sobre el proceso de consulta que acompañó la reforma constitucional y respuestas a alegatos de vulneraciones concretas. La Comisión observa asimismo que, como indica el Gobierno, algunos de los alegatos planteados en estas observaciones son objeto de casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, en particular el caso núm. 2694, a cuyo examen y recomendaciones se remite la Comisión. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo sus comentarios sobre las demás observaciones relativas a la aplicación del Convenio en la práctica que no estén incluidas en el caso núm. 2694.***

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2018, así como de las conclusiones de la misma alentando al Gobierno a que: siga adoptando las medidas legislativas previstas en el contexto de la reforma constitucional en consulta continuada con los interlocutores sociales a nivel nacional; asegure, en consulta con los interlocutores sociales, que la legislación secundaria necesaria para dar efecto a las reformas de la Constitución y la legislación federal del trabajo estén de conformidad con el Convenio; siga cumpliendo con su actual obligación legal de publicar el registro y los estatutos de los sindicatos, así como los convenios colectivos existentes, y se asegure de que los sindicatos puedan ejercer su derecho de libertad sindical en la legislación y en la práctica.

Derechos sindicales y libertades públicas. En relación a los alegatos de varios muertos y numerosos heridos y detenciones en el contexto de un conflicto en el sector de la educación en Oaxaca, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que, según se desprende de los informes que el Senado de la República y la Comisión nacional de los derechos humanos hicieron públicos sobre estos acontecimientos, no se acredita que la causa de los hechos fuera la existencia de una huelga o controversia laboral o que las víctimas hayan estado afiliadas a sindicato alguno. El Gobierno indica que, en relación a los otros supuestos actos de violencia contenidos en las observaciones de la CSI e IndustriALL de 2015 y de 2016, continúa a la espera de los elementos adicionales que pudieran brindar las organizaciones en aras de poder proceder a su investigación. Por otra parte, la Comisión toma nota de que en sus últimas observaciones la CSI y la UNT alegan nuevos actos de violencia antisindical, incluidos el asesinato el 18 de noviembre de 2017 de dos mineros que participaban en una huelga en el estado de Guerrero, ataques a más de 130 trabajadores universitarios sindicalizados en San Cristóbal de las Casas el 9 de febrero de 2017, otro asesinato (sometido al Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2694), así como la muerte de un activista sindical en enero de 2018 después de haber recibido amenazas por promover un nuevo sindicato (sin precisarse en este último caso la identidad del fallecido). ***La Comisión pide al Gobierno***

sus comentarios al respecto e invita a las organizaciones concernidas a remitir al Gobierno las informaciones adicionales de las que dispongan.

Artículo 2 del Convenio. Juntas de conciliación y arbitraje. Reforma constitucional de la justicia laboral. En relación a sus comentarios precedentes, relativos a observaciones de organizaciones de trabajadores, alegando que el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje obstaculizaba el ejercicio de la libertad sindical, la Comisión había tomado nota con satisfacción de la aprobación y entrada en vigor en febrero de 2017 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del proceso de reforma de la justicia laboral que introduce, como principales cambios: que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial federal o local (a los que se transfieren las funciones que en este sentido tenían reconocidas las juntas); que los procesos de conciliación (etapa que se establece de manera general antes de acudir a los tribunales laborales) sean más ágiles y eficaces (con la creación de centros de conciliación especializados e imparciales en cada una de las entidades federativas), y que la instancia federal de conciliación sea un organismo descentralizado que conozca el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. El Gobierno informa que se presentaron cuatro iniciativas de leyes reglamentarias para la aplicación de la reforma constitucional; que el Senado emitió, en abril de 2018, un acuerdo por el que se aprobó la celebración de audiencias públicas, y que el 29 de agosto de 2018 se conformó una nueva legislatura del Congreso de la Unión, que se espera retome y dé curso a la celebración de las citadas audiencias. Asimismo, indica que nueve entidades federativas ya han modificado su Constitución para armonizarla con lo dispuesto por la Constitución Federal y que, en lo que se refiere a la creación del organismo público descentralizado para la conciliación de conflictos de jurisdicción federal y el registro nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha preparado herramientas administrativas, organizacionales, tecnológicas y logísticas para su implementación y la transferencia de expedientes. En cuanto a la creación de los tribunales laborales, el Poder Judicial de la Federación creó en mayo de 2018 una Unidad de Implementación de la Reforma y, en el orden local, la Comisión nacional de tribunales superiores y supremos de justicia acordó en mayo de 2017 la instalación de una Comisión laboral para dar seguimiento a la implementación de la reforma. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la CSI, IndustriALL y UNT expresan su preocupación en torno a la elaboración de la legislación secundaria para implementar la reforma, denunciando tanto el retraso en su adopción (que tenía como fecha límite el 24 de febrero de 2018) como la no materialización de las consultas anunciadas por el Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas (alegando la UNT una negativa de dialogar con los sindicatos democráticos) y el intento de aprobar una iniciativa de ley de senadores provenientes del sindicalismo corporativista cuyo objetivo sería desvirtuar la reforma constitucional y perpetuar el sistema de contratos de protección y de falso tripartismo. La CSI destaca como motivos de preocupación en cuanto al proyecto de ley aludido, que: i) no superaría los problemas de sesgo político y corrupción que plantean actualmente las juntas de conciliación y arbitraje al proponer someter el nuevo organismo descentralizado (el Instituto Federal de Conciliación Laboral y Registro) a un consejo tripartito que estaría controlado por las organizaciones responsables de los contratos de protección, habiendo declarado la STPS que los tribunales laborales independientes no iniciarían su actividad hasta que las juntas no hayan resuelto todos los casos pendientes, que son miles, lo que puede llevar años; ii) el mecanismo de recuento para cuestionar la titularidad de un convenio colectivo contenido en el proyecto prevé un complejo procedimiento administrativo que prácticamente impediría reemplazar a los sindicatos no representativos; iii) el proyecto prevé debilitar las medidas de transparencia prevista para dar publicidad a los datos sobre sindicatos y convenios colectivos vigentes, y iv) el requisito de votaciones secretas que los trabajadores deberían realizar para la adopción de convenios colectivos se desvirtúa al establecer con vaguedad que las organizaciones que supuestamente representan a los trabajadores deben demostrar que cuentan con el respaldo de los mismos, pero sin definir criterios ni prever inspecciones al respecto, confiriendo amplias facultades discrecionales al Instituto para decidir si existen pruebas o no al respecto. La Comisión toma nota asimismo de que la CONCAMIN y la COPARMEX coinciden en destacar la importancia de continuar con las consultas en relación a la legislación para desarrollar la reforma constitucional. **Habiendo tomado nota tanto de las inquietudes expresadas por los interlocutores sociales así como de las informaciones brindadas por el Gobierno en cuanto a la implementación de la reforma, la Comisión alienta nuevamente al Gobierno a que someta a una amplia consulta tripartita los desarrollos legislativos previstos para dar aplicación a la reforma constitucional. Reiterándole que la asistencia técnica de la OIT permanece a su disposición, la Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.**

Representatividad sindical. Sindicatos y contratos de protección. En su observación precedente la Comisión renovó su pedido al Gobierno de que, en consulta con los interlocutores sociales, siguiera tomando las medidas legislativas y prácticas que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas planteados por el fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección. La Comisión recuerda que desde larga data varias organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores han venido denunciando ante los órganos de control de la OIT la vulneración del derecho de sindicación mediante los contratos de protección, en los que se alega que sindicatos no representativos, en connivencia con las autoridades, celebran, a espaldas de los trabajadores, contratos colectivos con los empleadores, intercambiando dinero y prebendas para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales — reduciendo los salarios e impidiendo la constitución de sindicatos independientes, al resultar extremadamente difícil su creación una vez que se registra un contrato de protección. Al respecto, el Gobierno recapitula las distintas medidas legislativas y prácticas que ha venido tomando en aras de encontrar soluciones a los problemas planteados por este fenómeno, destacando las siguientes: i) la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2012, incorporando la obligación que la

STPS pusiera a disposición del público el contenido de los estatutos, directiva y toma de nota registrados por los sindicatos; ii) el sistema de consulta de agrupaciones sindicales, la página web que permite conocer los registros de 3 371 organizaciones sindicales (existentes al cierre de 2017) y de las tomas de nota vigentes; iii) la posibilidad de consultar electrónicamente los contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y convenios vigentes depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); iv) la reforma constitucional de 2017 antes mencionada y que incluye como objeto establecer reglas precisas para un desahogo ágil de los conflictos de titularidad entre los sindicatos y limitar los abusos en los emplazamientos por firma de convenios colectivos (destacando el Gobierno que en los últimos años en las disputas por titularidad de un convenio, un 43 por ciento de los sindicatos titulares perdieron la prueba de recuento — lo que refleja la libertad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales — y que en los casos en los que se han alegado presuntas violaciones el Gobierno siempre ha llevado a cabo las investigaciones pertinentes y brindado la información oportuna a la OIT); v) la adopción de un protocolo de inspección del trabajo sobre la libre contratación colectiva (que obliga a los empleadores a presentar varios documentos tras una visita de inspección — como la constancia de que el contrato colectivo se dio a conocer a los trabajadores — y en virtud del cual desde 2016 hasta septiembre de 2018 se habrían practicado 217 inspecciones, derivando en 528 probables violaciones y beneficiando a 71 687 trabajadores), y vi) la ratificación del Convenio núm. 98. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la CSI, IndustriALL y UNT alegan que, a pesar de las medidas adoptadas, persiste en el país la práctica de los sindicatos y contratos de protección, que se siguen registrando inclusive antes de que las empresas entren en operación. IndustriALL se refiere a ejemplos de vulneraciones al Convenio planteados ante el CLS en el caso núm. 2694 y destaca la importancia de recibir la asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la CSI y la UNT denuncian irregularidades en el tratamiento de demandas sobre la titularidad de contratos colectivos. Finalmente, la Comisión observa que la CONCAMIN y la COPARMEX coinciden en destacar la importancia de asegurar la representatividad real de las organizaciones sindicales. ***Habiendo tomado nota con profunda preocupación de las distintas aseveraciones brindadas, la Comisión alienta al Gobierno a someter las cuestiones planteadas a un amplio debate con los interlocutores sociales concernidos y le insta firmemente a que tome las medidas legislativas y prácticas adicionales que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas que el fenómeno de los sindicatos y contratos de protección plantea al ejercicio de los derechos y garantías previstas en el Convenio. Reiterando que la asistencia técnica de la Oficina permanece a su disposición y esperando que la implementación de la reforma constitucional y su legislación secundaria brinde una oportunidad para seguir avanzando en el tratamiento de estos problemas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas de toda evolución al respecto.***

Publicación del registro de las organizaciones sindicales. La Comisión observa que la Comisión de Aplicación de Normas, en junio de 2018, pidió al Gobierno que siga cumpliendo con su actual obligación legal de publicar el registro y los estatutos de los sindicatos, así como los convenios colectivos existentes. La Comisión observa que el Gobierno reitera las informaciones que proporcionó a la Comisión de Aplicación de Normas, indicando que: i) al 30 de abril de 2018 se había publicado en el «sistema de consulta de organizaciones sindicales» la información de las 3 422 organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones y confederaciones) registradas de competencia federal — a la fecha, el sistema ha reportado 254 512 consultas y la JFCA efectúa periódicamente la digitalización y publicación de todos los contratos colectivos; ii) respecto a los registros del ámbito local, las juntas de conciliación y arbitraje dan cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia a través de los diversos mecanismos contemplados por el artículo 124, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y iii) dichas obligaciones recaerán en el organismo público descentralizado tras la aprobación y entrada en vigor de la legislación secundaria. Por otra parte, la Comisión toma nota de que: i) la UNT alega que la gran mayoría de las entidades federativas no tienen disponible en sus páginas de Internet la publicación de los contratos colectivos de trabajo que registran día a día, y ii) la CSI expresa sus inquietudes en cuanto al principal proyecto de legislación secundaria de aplicación de la reforma constitucional, estimando que podría debilitar las medidas de transparencia previstas para dar publicación a los datos sobre sindicatos y convenios colectivos. ***La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre la aplicación de la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por parte de las juntas de conciliación y arbitraje, así como de todo impacto que la aplicación de la nueva reforma constitucional y su legislación secundaria tenga sobre el procedimiento de registro sindical, incluida la publicación de registros y estatutos sindicales.***

Artículos 2 y 3. Posibilidad de pluralismo sindical en las dependencias del Estado y posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones: i) la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos en el seno de una misma dependencia del Estado (artículos 68, 71, 72 y 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)); ii) la prohibición a los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se hayan afiliado (artículo 69 de la LFTSE); iii) la prohibición a que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas (artículo 79 de la LFTSE); iv) referencia a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única central sindical reconocida por el Estado (artículo 84 de la LFTSE); v) la declaración legislativa de monopolio sindical a favor de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB) (artículo 23 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución), y vi) la prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 75 de la LFTSE). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las mencionadas restricciones legislativas a la libertad sindical de los funcionarios públicos no se aplican, destacando que es posible la reelección de dirigentes y que se lleva a cabo un

registro plural de sindicatos, sin que sea un obstáculo para obtener el registro el hecho de que los sindicatos solicitantes pertenezcan a una misma dependencia (cita como ejemplo el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal — con ocho sindicatos registrados). El Gobierno informa que miembros de la Cámara de Diputados han presentado diversas iniciativas para modificar las disposiciones concernidas, detallando diez iniciativas pasadas que no obtuvieron el dictamen favorable del órgano legislativo — y refiriéndose a una reciente iniciativa de 26 de julio de 2017 que propone la reforma de la mayoría de estas disposiciones (artículos 68-69, 71-73, 79 y 84) y que se encuentra pendiente de dictamen. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la UNT recuerda que la LFTSE fue promulgada en 1963 — habiendo la Comisión señalado inmediatamente su incompatibilidad con el Convenio — y alega que la afirmación del Gobierno de que las disposiciones en cuestión no son aplicables describe muy parcialmente la realidad, ya que los pronunciamientos de la Corte no implicaron la derogación de los artículos, de manera que los trabajadores que requieren la aplicación de sus criterios a veces deben promover acciones de larga duración. **Recordando la necesidad de asegurar la conformidad de las disposiciones legislativas con el Convenio, aun cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto o no se apliquen en la práctica, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar las disposiciones restrictivas mencionadas a efectos de ponerlas en conformidad con la jurisprudencia nacional y el Convenio y que le proporcione información de toda evolución al respecto.**

Artículo 3. Derecho de elegir libremente a los representantes sindicales. Prohibición de que los extranjeros formen parte de la dirección de los sindicatos (artículo 372, fracción II, de la LFTSE). En anteriores observaciones la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno de que: i) la fracción II del artículo 372 de la LFTSE, cuyo tenor no permite a los extranjeros formar parte de la dirección de los sindicatos, quedó tácitamente derogada con la modificación del artículo 2 de la misma ley, que prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional, y ii) las autoridades registrales no exigen como requisito la acreditación de la nacionalidad mexicana de los dirigentes y que esta prohibición no se aplica en la práctica. La Comisión toma nota de que, en su última memoria el Gobierno reitera que la restricción legislativa no se aplica en la práctica. **Recordando nuevamente la necesidad de asegurar la conformidad de las disposiciones legislativas con el Convenio, aun cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto o no se apliquen en la práctica, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la fracción II del artículo 372 de la LFT, en aras de hacer explícita la derogación tácita de la restricción en cuestión.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mozambique

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)

La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las observaciones de 2008 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación con los graves actos de violencia cometida contra trabajadores en huelga en el sector de las plantaciones de caña de azúcar. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Comisión de Mediación y Arbitraje Laboral (COMAL), creada en 2009 para promover el diálogo social, no ha recibido ninguna notificación de violencia contra los trabajadores de dicho sector. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha tomado medidas para investigar los alegatos de actos de violencia que en 2008 la Comisión señaló a su atención. La Comisión hace hincapié en que cuando se presentan a la atención del Gobierno casos de supuesta violencia, las autoridades competentes deberían iniciar inmediatamente una investigación y adoptar las medidas adecuadas para llevar a los culpables ante la justicia. La Comisión espera que en el futuro el Gobierno dé pleno efecto a este principio.

Artículo 2 del Convenio. Registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 150 de la Ley del Trabajo, que otorga un plazo excesivamente restrictivo de 45 días al órgano central de la administración del trabajo para proceder al registro de un sindicato o de una organización de empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que esta cuestión se examinará durante la revisión de la actual Ley del Trabajo. **Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas legislativas necesarias, en plena consulta con los interlocutores sociales, para poner el artículo 150 de la Ley del Trabajo en conformidad con el Convenio. Pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 3. Responsabilidad penal de los trabajadores en huelga. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 268, 3), de la Ley del Trabajo, que prevé que toda violación de los artículos 199 (libertad de trabajo de no huelguistas), 202, 1) y 209, 1) (servicios mínimos), constituye una infracción disciplinaria, siendo responsables civil y penalmente los trabajadores en huelga. Tomando nota de que el Gobierno indica que las cuestiones antes planteadas se examinarán a fin de tomar medidas al respecto, la Comisión recuerda que las sanciones penales sólo pueden preverse cuando, por motivo de huelga, se cometen actos de violencia contra las personas o los bienes u otras infracciones graves de derecho común, y en aplicación de los textos que sancionan los hechos antes mencionados. **La Comisión reitera su solicitud anterior y espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias, en plena consulta con los interlocutores sociales, a fin de enmendar el artículo 268, 3), de la Ley del Trabajo. Pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos alcanzados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que comunicara sus comentarios relativos a las observaciones de 2010 realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre los actos de discriminación antisindical en las zonas francas de exportación y la violación constante de los convenios colectivos. ***Lamentando tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior.***

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre el número de quejas recibidas en relación con los actos de discriminación antisindical y de injerencia, así como sobre el número de multas impuestas, con miras a poder evaluar si las sanciones previstas son suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) la Comisión de Mediación y Arbitraje del Trabajo (COMAL), órgano tripartito creado en 2009, ha tramitado, desde su inicio en 2010 hasta la primera mitad de 2018, 60 888 casos, que dieron lugar a 48 229 acuerdos y a 12 659 situaciones de bloqueo; y ii) el 83 por ciento de los casos relacionados con el trabajo se resolvieron a través de ese mecanismo extrajudicial, demostrando la utilidad del mismo para la resolución de los conflictos relacionados con el trabajo. ***Al tiempo que saluda la creación de la COMAL y la promoción del mecanismo extrajudicial en los conflictos relacionados con el trabajo en general, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique una información específica sobre el número de quejas, incluidas las demandas judiciales relativas a los actos de discriminación antisindical y de injerencia, y sobre el número de multas impuestas. La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos para adoptar, en un futuro próximo, las medidas necesarias.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Myanmar

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Conferencia Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2018.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2018, en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia lamentó la falta de progresos con respecto al tan esperado marco jurídico en el que los trabajadores y los empleadores pueden ejercer libremente sus derechos en virtud del Convenio e instó al Gobierno a que: i) vele por que la Ley sobre Organizaciones Sindicales (LOL) y la Ley de Solución de Conflictos Laborales se pongan plenamente en conformidad con el Convenio, recurriendo a la asistencia técnica de la OIT durante el proceso de reforma legislativa; ii) asegure que los trabajadores puedan desempeñar sus actividades sindicales sin amenazas de violencia ni otras violaciones de sus libertades civiles por parte de la policía o de la seguridad privada; iii) asegure que el registro de organizaciones de trabajadores y de empleadores no esté sujeto a requisitos no razonables para garantizar que en la práctica no se obstaculice el derecho a constituir las organizaciones que se estimen convenientes o a afiliarse a ellas; iv) se asegure de que las solicitudes de registro de sindicatos se transmiten con rapidez y no se denieguen a menos que se incumplan criterios claros y objetivos establecidos en la legislación, y v) ponga la legislación del trabajo en relación con las zonas económicas especiales (ZEE) de conformidad con el Convenio, en plena consulta con los interlocutores sociales. La Comisión de la Conferencia pidió además al Gobierno que aceptara una misión de contactos directos y a que informara a la Comisión de Expertos, para su reunión prevista en noviembre de 2018, sobre los progresos realizados en relación con las recomendaciones anteriores.

La Comisión toma nota de que la misión de contactos directos tuvo lugar del 1.º al 4 de octubre de 2018 y saluda la forma en que el Gobierno y las organizaciones de trabajadores y de empleadores de Myanmar participaron y colaboraron con un espíritu constructivo con la misión. En particular, la Comisión toma nota con ***interés*** de que, según las conclusiones del informe de la misión, todas las partes han demostrado un grado considerable de compromiso con la creación de un clima de pleno respeto de la libertad sindical en el espacio breve de tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigor de la legislación marco en materia de libertad sindical. ***La Comisión alienta a que se siga un entorno propicio para la plena aplicación del Convenio.***

Proceso de reforma de la legislación laboral. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había solicitado al Gobierno que suministrara información sobre los progresos realizados en la reforma de la legislación laboral.

Artículo 2 del Convenio. En relación con la LOL, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha puesto en marcha el proceso de reforma de la legislación laboral dentro del marco del Foro Nacional de Diálogo Tripartito (NTDF) que ha disfrutado en varias ocasiones de la asistencia técnica de la Oficina. A pesar de que el proyecto de ley de enmienda está siendo examinado todavía a nivel interno, el Gobierno se refiere a una serie de cambios propuestos, en particular, la eliminación del requisito del 10 por ciento adicional para constituir una organización sindical de base, tal

como le había solicitado anteriormente la Comisión. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que desde que entró en vigor la ley, se han registrado 2 761 organizaciones sindicales de base, 146 organizaciones sindicales municipales, 22 organizaciones de ámbito estatal o regional, ocho federaciones sindicales y una confederación. El Gobierno menciona también que se han registrado legalmente 26 organizaciones de base de empleadores, una organización municipal de empleadores y una federación de empleadores. La Comisión toma nota de que, para comprender mejor los obstáculos con que tropiezan los trabajadores que desean formar organizaciones, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población celebraron consultas a nivel nacional con varias organizaciones de nivel básico y municipal. La Comisión reconoce, como lo hace el propio Gobierno, que una gran parte de la población del país está diseminada en municipios y distritos alejados de la autoridad centralizada, donde es probable que el conocimiento de la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados sean muy limitados. **La Comisión alienta al Gobierno a proseguir estas consultas en todo su territorio para garantizar que todos los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, puedan, no sólo en la ley sino también en la práctica, ejercer plenamente sus derechos en virtud del Convenio, teniendo en cuenta dificultades claves que enfrentan partes de la población, como las de áreas remotas.**

La Comisión recuerda también su solicitud de información sobre los resultados de todas las revisiones sobre la incidencia de la estructura piramidal en la constitución de organizaciones sindicales con arreglo al artículo 4 de la LOL. **Tomando nota del informe de la misión de contactos, según el cual esta estructura impuesta plantea un problema para la constitución tanto de las organizaciones sindicales de trabajadores como de las de empleadores, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas, tanto en la ley como en la práctica también a nivel sectorial, y a que comunique una copia de las enmiendas propuestas cuando hayan sido presentadas al Parlamento.**

La Comisión toma nota también de los alegatos formulados en la observación de la CSI de que a los sindicatos se les deniega a menudo la solicitud de registro por razones arbitrarias, se les pide a todos los miembros del comité ejecutivo que presenten su curriculum vitae, y a todos los afiliados que presenten fotocopias de sus tarjetas de identidad, y al sindicato que obtenga una carta del empleador reconociendo que informó a la dirección de su intención de proceder a su inscripción en el registro. La Comisión toma nota con *interés* de que, según el informe de la misión, el Ministerio de Trabajo ha realizado un seguimiento a nivel municipal, tras las consultas celebradas en todo el país, sobre los obstáculos con los que se ha tropezado, y ha publicado una directiva en la que instruye a los funcionarios del trabajo a que dejen de pedir estos documentos que no están contemplados en la ley, y a que facilite en cambio tarjetas de identidad para los miembros fundadores. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier denegación de registro, incluyendo las razones que motivaron dichas decisiones y procedimientos para rever y apelar la denegación del registro.**

Artículo 3. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con las restricciones a la elegibilidad para desempeñar cargos sindicales establecidas en el reglamento de la LOL, incluida la obligación de haber trabajado en la misma profesión u actividad durante al menos seis meses (no debería exigirse ningún plazo inicial) y la obligación de los trabajadores extranjeros de haber cumplido el requisito de cinco años de residencia (este período debería reducirse a un plazo razonable de por ejemplo tres años). La Comisión toma nota además de las preocupaciones expresadas por la CSI ante el requisito de que los representantes sindicales tengan que haber cumplido al menos 21 años de edad. **La Comisión expresa una vez más su esperanza de que estos requisitos serán revisados dentro del marco del proceso de reforma legislativa en consulta con los interlocutores sociales, a fin de garantizar el derecho de los trabajadores a elegir libremente sus representantes, y pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para modificar la regla 5.**

Además, reiterando sus comentarios anteriores en relación con el requisito de que para permitir el ejercicio de huelga haya de obtenerse la aprobación de la correspondiente federación de trabajadores en virtud del artículo 40, b), de la LOL, la Comisión pide al Gobierno que informe de los progresos realizados para modificar esta disposición dentro del marco de la revisión de la legislación laboral.

En lo que se refiere a la Ley de Solución de Conflictos Laborales, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley de enmienda está siendo examinado en el Parlamento y que se plantea la necesidad de prorrogar el mandato de los órganos de solución de conflictos y de modificar las sanciones establecidas en la ley para ajustarlas al contexto nacional. **Confiando en que el texto adoptado habrá suprimido todas las condenas de prisión, asegurando protección efectiva al derecho de asociación, la Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de la ley en su versión enmendada.**

Libertades civiles. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la nueva Ley sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacífica, adoptada el 4 de octubre de 2016. Teniendo en cuenta que el capítulo sobre reglas y el capítulo correspondiente a delitos y sanciones aún podrían dar lugar a graves restricciones del derecho de las organizaciones sindicales a llevar a cabo sus actividades sin injerencia, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la manera en que se aplica esta ley y sobre las sanciones impuestas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las fuerzas de seguridad no restringen derechos ni adoptan medidas al margen de la ley, pero que todas las violaciones de la ley deben castigarse. El Gobierno además señala que, todos los ciudadanos son responsables de la paz pública y la prevalencia del imperio de la ley.

La Comisión toma nota también de las preocupaciones expresadas por la CSI de que, el 7 de marzo de 2018, la Cámara Alta del Parlamento aprobó las enmiendas a la citada ley, en cuyo artículo 18 se establece que cualquier persona que apoye una protesta ya sea de forma económica o material o por otros medios podrá considerarse que infringe la seguridad nacional, el imperio de la ley, el orden o la moral públicos y podría ser castigado con una pena de tres años de prisión y una multa. La Comisión entiende que, según el informe de la misión, esta disposición no ha sido adoptada finalmente por el Parlamento. ***La Comisión pide al Gobierno que garantice que los trabajadores y los empleadores pueden llevar a cabo y apoyar sus actividades sin amenaza de encarcelamiento, violencia y sin ser objeto de otras violaciones de sus libertades civiles por parte de la policía o la seguridad privada, y le pide que informe de cualquier otra novedad legislativa en relación con la enmienda propuesta, así como sobre todas las sanciones impuestas a las organizaciones de trabajadores o de empleadores en virtud de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacífica.***

Zonas económicas especiales (ZEE). En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos con arreglo al Convenio incluso garantizando que la Ley sobre las ZEE no es incompatible con la aplicación de la LOL ni con la Ley de Solución de Conflictos Laborales en dichas zonas. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la manera en que se solucionan en la práctica los conflictos en las mencionadas zonas y a que proporcionara estadísticas pertinentes sobre la inspección del trabajo en las ZEE, incluyendo el número de inspecciones efectuadas por inspectores del trabajo, todas las violaciones detectadas, así como el número y la naturaleza de las sanciones aplicadas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población colabora con el comité de gestión en las ZEE de Thilawa en materia de cuestiones laborales, incluida la solución de conflictos. Los centros de servicio integrado han recopilado informes mensuales de todas las empresas y llevan a cabo inspecciones y supervisiones para garantizar que las fábricas aplican los compromisos contraídos. Esta sección del trabajo sirve como negociador o mediador para solucionar conflictos laborales, y ha resuelto 24 casos en 2017 y 16 casos hasta el mes de agosto de 2018. La sección celebra también sesiones de intercambio de información sobre legislación laboral. Además, los funcionarios del Departamento de fábricas e inspecciones del cumplimiento de la legislación laboral llevan a cabo visitas mensuales a las fábricas para explicar la legislación en materia de seguridad social. La OIT fue invitada asimismo en 2016 a celebrar un seminario en las ZEE del Thilawa sobre el derecho de sindicación, y el presidente del comité de gestión ha solicitado la asistencia de la OIT para la redacción de directrices laborales destinadas a empleadores y trabajadores. El Gobierno afirma que el comité de gestión de las ZEE no pondrá ningún obstáculo a la actividad de trabajadores y empleadores para la constitución de asociaciones, la redacción de sus estatutos, la elección de sus representantes y el libre ejercicio de sus actividades de conformidad con la legislación actual de Myanmar.

No obstante, la Comisión toma nota también de las preocupaciones planteadas por la CSI de que la Ley sobre las ZEE impone laudos arbitrales para la solución de conflictos sin consultar a los interlocutores sociales y que los comités de gestión de las ZEE están compuestos sin representantes de trabajadores. ***La Comisión pide al Gobierno que responda a estas preocupaciones. Tomando nota de que en el informe de la misión de contactos directos el Gobierno vuelve a pedir a la OIT que realice actividades de sensibilización en las ZEE sobre los derechos aplicables en virtud del Convenio y sobre las peticiones para el desarrollo de directrices en materia laboral, la Comisión confía en que se proporcionará esta asistencia próximamente y pide al Gobierno que informe sobre los progresos realizados a este respecto.***

Nepal

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma debida nota de los comentarios formulados por el Gobierno en respuesta a las observaciones de 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como de las observaciones de 2014 realizadas por la Internacional de la Educación. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el artículo 16, e) y j), de la Ley de Educación, 1971 (7.ª enmienda), permite a los docentes de las escuelas públicas y privadas constituir sindicatos y negociar colectivamente, y prevé la solución de conflictos, y ii) los sectores tanto formal como informal están contemplados en la nueva Ley del Trabajo, de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para introducir en la legislación: i) una prohibición explícita de todos los actos perjudiciales cometidos contra los trabajadores por motivo de su afiliación sindical o por su participación en actividades en el momento de la contratación, durante el empleo en el momento del despido (por ejemplo, traslados, degradaciones, denegación de formación, despidos, etc.), y ii) sanciones efectivas y suficientemente disuasorias en los casos de violación de esta prohibición. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que si cualquier trabajador experimenta discriminación mientras lleva a cabo actividades sindicales legítimas, incluida discriminación por motivos de ideología, religión, género y otros motivos, puede presentar una queja ante las autoridades competentes en virtud de los artículos 9 y 162 de la Ley del Trabajo, de 2017. Además, de conformidad con el artículo 165 de la Ley del Trabajo, tiene el derecho de interponer un recurso contra la decisión. La Comisión recuerda que la prohibición de discriminación establecida en el artículo 6 de la Ley del Trabajo, así como en el artículo 24 de la

Constitución de 2015, no contiene una prohibición *explícita* de discriminación contra los trabajadores por motivo de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. ***En vista de lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para introducir en la legislación: i) una prohibición explícita de todos los actos perjudiciales cometidos contra los trabajadores por motivo de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales en el momento de la contratación, durante el empleo o en el momento del despido (por ejemplo, traslados, degradaciones, denegación de formación, despidos, etc.), y iii) sanciones efectivas y suficientemente disuasorias en los casos de violación de esta prohibición. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre todo progreso realizado a este respecto.***

Artículo 2. Protección adecuada contra actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que suministrara información sobre las sanciones impuestas en los casos de actos de injerencia, así como estadísticas sobre el número de quejas examinadas, la duración de los procedimientos y el tipo de sanciones y de indemnizaciones impuestas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las disposiciones legales introducidas por la Ley del Trabajo en virtud del capítulo 14 han salvaguardado el interés de los empleadores y los trabajadores, y han asegurado la protección contra la injerencia recíproca. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que, durante el periodo de examen, no se ha notificado ni señalado a su atención ningún caso de injerencia. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información en relación con esto, poniendo particular énfasis en las sanciones impuestas en los casos de actos de injerencia.***

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Con el fin de evaluar plenamente la conformidad del artículo 116.1 de la Ley del Trabajo con el Convenio, la Comisión, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno que especificara las condiciones en las que se autoriza a los sindicatos a negociar colectivamente y que proporcionara información sobre el número de acuerdos directos concluidos con trabajadores no sindicalizados en comparación con el número de convenios colectivos suscritos con sindicatos. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a indicar que el artículo 116.1 de la Ley del Trabajo prevé que toda empresa que emplee a diez o más trabajadores deberá contar con un comité de negociación colectiva y que dicho comité estará integrado por: a) un equipo de representantes designados para entablar negociaciones en nombre de los sindicatos autorizados electos de la empresa; b) en los casos en que no haya podido tener lugar una elección del sindicato autorizado o en que haya vencido el mandato del sindicato autorizado electo, un equipo de representantes nombrados a través de un acuerdo mutuo de todos los sindicatos de la empresa, o c) en los casos en que no haya podido constituirse un sindicato autorizado o un equipo de representantes, un equipo de representantes apoyado por las firmas de más del 60 por ciento de los trabajadores de la empresa. La Comisión recuerda que: i) la negociación directa entre la empresa y sus empleados con miras a evitar unas organizaciones suficientemente representativas, cuando éstas existan, puede socavar el principio de promoción de la negociación colectiva establecido en el Convenio, y ii) en los casos en que exista un sindicato representativo y en que esté activo en la empresa o sector de actividad de que se trate, la autorización a otros representantes de los trabajadores para negociar colectivamente no sólo debilita la posición del sindicato, sino que también menoscaba los derechos y principios de la OIT sobre la negociación colectiva. ***Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que especifique las condiciones en las que se autoriza a los sindicatos a negociar colectivamente.*** Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionó datos sobre los convenios colectivos registrados en la Oficina del Trabajo para el periodo 2014-2017, y del número de trabajadores cubiertos. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información en relación con esto y que especifique el número de acuerdos directos concluidos con trabajadores no sindicalizados en comparación con el número de convenios colectivos suscritos con sindicatos, y que indique los sectores y el número de trabajadores cubiertos.***

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 123 de la Ley del Trabajo, a fin de que se respete el principio de la autonomía de las partes y de que la negociación colectiva sea posible a cualquier nivel, en particular el del establecimiento, la empresa, el sector de actividad, la industria o los niveles regional o nacional. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no suministra ninguna información a este respecto, la Comisión reitera que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria y respetar el principio de la autonomía de las partes. La Comisión recuerda asimismo la necesidad de asegurar que la negociación colectiva es posible a todos los niveles, y que la legislación que impone unilateralmente un nivel de negociación o que establece la obligatoriedad de la negociación colectiva a niveles específicos, plantea problemas de compatibilidad con el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 200 y 222). ***A la luz de lo anterior, la Comisión confía en que se adopten en un futuro cercano las enmiendas necesarias para poner el artículo 123 de la Ley del Trabajo en plena conformidad con el Convenio.***

Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que pusiera las disposiciones del artículo 119 de la Ley del Trabajo, relativo al arbitraje obligatorio, en plena conformidad con el Convenio, recordando que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto laboral colectivo sólo es aceptable: i) en la administración pública en la que trabajan funcionarios públicos en la administración del Estado (artículo 6 del Convenio); ii) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, en particular aquellos servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población, o iii) en caso de crisis nacional grave. ***Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado ninguna información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que, de conformidad con el Convenio, el arbitraje obligatorio sólo pueda***

tener lugar en las situaciones mencionadas anteriormente. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Composición de los órganos de arbitraje. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la composición del panel de arbitraje (en virtud del artículo 119, 3), de la Ley del Trabajo) y del tribunal (artículo 120), y, concretamente, que indicara el procedimiento llevado a cabo para seleccionar a los representantes de los trabajadores y de los empleadores a fin de asegurar la plena independencia de estos órganos de arbitraje. También pidió al Gobierno que aclarara la diferencia entre el panel de arbitraje y el tribunal de arbitraje. **Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre estas cuestiones, la Comisión reitera sus solicitudes anteriores.**

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con todas las cuestiones planteadas en sus comentarios actuales.

Nigeria

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1960)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (en adelante la Conferencia), en mayo-junio de 2018, sobre la aplicación del Convenio por Nigeria. La Comisión observa que, en sus conclusiones, esta última instó al Gobierno: i) que ponga la legislación pertinente, incluyendo la Ley de Sindicatos, la Ley de Conflictos Laborales, la Ley sobre la Junta Salarial y el Consejo Laboral, el decreto de 1992 sobre zonas francas de exportación, y el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo, en conformidad con el Convenio; ii) que lleve a cabo investigaciones efectivas y emprendan acciones judiciales con respecto a todas las relaciones de violencia antisindical y discriminación, y iii) que establezca mecanismos de supervisión y cumplimiento adecuados y efectivos para velar por que los principios y derechos protegidos por el Convenio se observen efectivamente. Por último, la Comisión de la Conferencia reiteró la invitación de la Comisión de Expertos al Gobierno para que acepte una misión de contactos directos de la OIT a fin de abordar las cuestiones pendientes, e informe a la Comisión de Expertos antes de su reunión del año en curso sobre los progresos realizados. **Al tiempo que observa que la misión de contactos directos no ha tenido lugar, la Comisión espera que el Gobierno la acepte próximamente con objeto de dejar que esta última constate las medidas adoptadas y los progresos realizados sobre las cuestiones planteadas en relación con la aplicación del Convenio.**

La Comisión recuerda que viene recibiendo desde hace varios años observaciones de las organizaciones sindicales internacionales, en particular de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de la Internacional de la Educación (IE), y de un sindicato nacional (Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT)), que denuncian actos de discriminación antisindical, de injerencia y de obstrucción a la negociación colectiva, sin que el Gobierno haya respondido hasta ahora a esos comentarios al respecto. La Comisión toma nota de la declaración de la representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2018, según la cual el país presenta una estructura social y económica compleja, con un Estado federal y 36 gobiernos de estados, de forma que cuando se señalan a su intención las infracciones cometidas por un gobierno de estado, el Gobierno federal que tiene la responsabilidad constitucional de supervisar las cuestiones laborales, siempre invita a las partes a resolver los problemas. En lo que se refiere por ejemplo a los alegatos de despidos masivos por motivos antisindicales en el sector de la educación en el estado de Kaduna, el Gobierno señala que la decisión cuestionada se tomó tras un diálogo de dos años con el sindicato nacional de docentes para solucionar un problema de nombramiento fraudulento de maestros que no estaban calificados para su trabajo en las escuelas primarias. **La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las investigaciones que se han podido realizar y los resultados relativos a los alegatos de discriminación antisindical y de injerencia en los sectores de la banca, la educación, la electricidad, el petróleo, el gas y las telecomunicaciones, que la CSI ha mencionado en sus sucesivas comunicaciones. La Comisión le pide asimismo que proporcione sus comentarios en relación con los alegatos de la IE y del NUT en los que se denuncia la promoción de un sindicato no registrado en el sector de la educación por diversos gobiernos de estados, en lo que parecía ser un intento de injerencia.**

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se refieren al hecho de que, atendiendo a la legislación, algunas categorías de trabajadores no se benefician del derecho de sindicación y, se encuentran despojados del derecho de negociación colectiva. Se trata de los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración, de los servicios penitenciarios y del Banco Central de Nigeria. El Gobierno señala que estas exclusiones son motivadas por el interés nacional y la seguridad nacional y que los comités consultivos paritarios creados en estas instituciones velan por los intereses de los trabajadores, que gozan a menudo de mejores condiciones de trabajo que los empleados en otros ámbitos del sector público. El Gobierno precisa, por último, que la propuesta de levantar la prohibición del derecho de sindicación para estas categorías de trabajadores se presentará ante el Consejo Nacional Consultivo del Trabajo (NLAC), que deberá reunirse en el curso del presente año. La Comisión

subraya que la exclusión de las categorías mencionadas del derecho de sindicación plantea problemas de compatibilidad con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y que examinará esta cuestión cuando lleve a cabo su próximo examen sobre la aplicación por Nigeria del mencionado Convenio. ***Al tiempo que observa que, además de algunas de las categorías mencionadas que se refieren a trabajadores del sector público no adscritos a la administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los resultados de la consulta ante el NLAC y sobre toda acción subsecuente, en particular en materia de reconocimiento del derecho de negociación colectiva.***

Artículo 4. Negociación libre y voluntaria. La Comisión recuerda que, a raíz de los alegatos de la CSI, pidió al Gobierno que proporcionara explicaciones sobre la obligación legal de contar con la aprobación gubernamental para suscribir convenios colectivos sobre salarios. La Comisión recordó que las disposiciones legales que someten los convenios colectivos a la aprobación del Ministerio de Trabajo por razones de política económica, impidiendo así que las organizaciones de empleadores y de trabajadores fijen libremente los salarios, no son conformes al artículo 4 del Convenio, cuya finalidad es alentar y promover el desarrollo y el uso de procedimientos de negociación colectiva voluntarios. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de que la única finalidad de la obligación legal de presentar los convenios colectivos ante el Ministerio Federal del Trabajo es que se registre y verifique que se están aplicando. Además, al tiempo que precisa que, en la práctica, no existe ninguna restricción en cuanto a la decisión de un empleador de aumentar los salarios, en cifras o en porcentajes, el Gobierno señala que el problema de prohibir a un empleador el aumento general de los salarios sin la aprobación del Ministro, que figura en el artículo 19 de la Ley sobre Conflictos Sindicales, se señalará a la atención de la Comisión Técnica tripartita que se encarga actualmente de revisar la legislación del trabajo. La Comisión toma nota de las aclaraciones facilitadas por el Gobierno y recuerda que las disposiciones legales que prevén la obligación de someter los convenios colectivos a la aprobación previa de las autoridades no son compatibles con el Convenio a no ser que el rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presente vicios de forma o no se ajuste a las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 201). ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas con el fin de garantizar que la ley se compatibilice con la práctica indicada y dé plenamente cumplimiento al principio de una negociación colectiva libre, de conformidad con el Convenio.***

Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno de que tiene la intención de velar por que la reforma legislativa del trabajo en curso, en consulta con los interlocutores sociales, sea conforme a las normas internacionales del trabajo, la Comisión confía en que la nueva ley sobre las relaciones colectivas de trabajo y los demás textos adoptados en el marco de esta reforma del derecho laboral respetarán plenamente lo dispuesto en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que suministre una copia de estos textos en cuanto hayan sido adoptados.

Pakistán

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1951)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF), recibidas el 19 de octubre de 2017, en relación especialmente con las cuestiones legislativas que examina la Comisión, así como de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, en las que se alega la prohibición de una huelga en el sector de la salud, la denegación de concesión de un permiso de manifestación a las enfermeras y nuevos incidentes de violencia política contra los trabajadores en huelga y que protestan, en los sectores de la salud, de la educación, del transporte y del turismo, y su arresto, detención y enjuiciamiento penal. ***La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.*** También toma nota de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y de la respuesta del Gobierno a las mismas.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los actos de violencia contra los trabajadores en huelga que protestaban y su detención alegada por la CSI en 2015. La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que el Gobierno no ha respondido a estos alegatos y de que, en sus últimas observaciones, la CSI alega nuevos incidentes de violencia policial, arresto, detención y procedimientos judiciales de los trabajadores bajo acusaciones de terrorismo por las actividades sindicales. Tomando nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2017, la Comisión ***deplora***, en particular, el asesinato por parte de las fuerzas del orden de varios trabajadores de la línea aérea internacional del Pakistán (PIA) y las heridas ocasionadas a otros durante una protesta contra los planes de privatización de la empresa, el 2 de febrero de 2016. Toma nota de la indicación, según la cual no se pagó una indemnización monetaria a las familias de las víctimas y a los trabajadores heridos. Sin embargo, la Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha comunicado ninguna información respecto de alguna investigación de la conducta violenta de las fuerzas del orden o respecto del presunto secuestro de cuatro dirigentes y afiliados sindicales, en la madrugada del 3 de febrero de 2016, en relación con el conflicto laboral de la PIA. ***Recordando que los órganos de control de la OIT han venido destacando ininterrumpidamente la interdependencia entre las libertades civiles y los derechos sindicales y resaltando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima libre de violencia, de presiones y de amenazas de cualquier tipo contra dirigentes y afiliados de esas organizaciones, la Comisión insta***

firmemente al Gobierno a que comuniqué sus comentarios sobre todos los alegatos de actos de violencia contra trabajadores y su presunto arresto, detención y acusación por actividades sindicales, que garantice que las autoridades públicas realicen investigaciones de los alegatos de la CSI correspondientes a 2015, 2017 y 2018, y que se impongan sanciones contra las fuerzas del orden.

Artículo 2 del Convenio. *Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que la Ley de Relaciones Laborales (IRA), de 2012, excluye de su ámbito de aplicación a las siguientes categorías de trabajadores: los trabajadores empleados en servicios o instalaciones exclusivamente vinculados con las fuerzas armadas del Pakistán, incluidas las fábricas de artillería que mantiene el Gobierno federal (artículo 1, 3), a)); los trabajadores empleados en la administración pública, con excepción de los que trabajan como obreros (artículo 1, 3), b)); los miembros del personal de seguridad de la Corporación de Aerolíneas Internacionales del Pakistán (PIAC), o los que perciben salarios no inferiores a la escala salarial del grupo V en un establecimiento de la PIAC (artículo 1, 3), c)); los trabajadores empleados por la Corporación Pakistán de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad (artículo 1, 3), d)); los trabajadores empleados en empresas o instituciones dedicadas al tratamiento o a la hospitalización de enfermos, lisiados, indigentes o discapacitados psíquicos, excluyendo a las empresas o las instituciones de este tipo con fines comerciales (artículo 1, 3), e)); y los trabajadores de organizaciones benéficas (artículo 1, 3), leído conjuntamente con el artículo 2, x) y xvii)).

La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 1 de la Ley de Relaciones Laborales de Balochistán (BIRA), de 2010, la Ley de Relaciones Laborales de Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), de 2010, y la Ley de Relaciones Laborales de Punjab (PIRA), de 2010, excluye asimismo: i) a los trabajadores empleados en servicios o instalaciones exclusivamente vinculadas con las fuerzas armadas del Pakistán o accesorias a las mismas, incluidas las fábricas de artillería que mantiene el Gobierno federal; ii) los miembros de los cuerpos de vigilancia y defensa, seguridad o extinción de incendios de una refinería de petróleo o de un aeropuerto (y un puerto marítimo: BIRA y KPIRA); iii) los miembros de la seguridad o del servicio de extinción de incendios de una empresa dedicada a la producción, transmisión o distribución de gas natural o gas de petróleo licuado; iv) las personas empleadas en la administración del Estado, excepto aquellas empleadas como obreros por el ferrocarril y los servicios postales del Pakistán, y v) en las PIRA y KPIRA, las personas que trabajan en un establecimiento o en una institución dedicada a prestar servicios educativos o de emergencia, con excepción de los administrados con fines comerciales. La Comisión también tomó nota de que el artículo 1 de la Ley de Relaciones Laborales de Sindh (SIRA), de 2013, excluye a las cinco categorías de trabajadores mencionadas, excepto a los miembros de los cuerpos de vigilancia y defensa, de seguridad o de extinción de incendios de un puerto de mar, y que la BIRA, en su forma enmendada de 2015, mantiene las exclusiones que vienen de enumerarse. La Comisión pidió al Gobierno que asegurara que la legislación federal y provincial garantizara a las mencionadas categorías de trabajadores el derecho de constituir las organizaciones que estimaran convenientes y de afiliarse a las mismas, con la única excepción siendo las categorías de las fuerzas armadas y la policía que deben interpretarse de manera restrictiva. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las restricciones establecidas en las leyes provinciales son específicas en su naturaleza y requieren su imposición en los casos en que se prevea cualquier tipo de acción colectiva que pueda dar lugar a una infracción grave de la seguridad o a una pérdida irreparable para el público en general. La Comisión ***lamentó*** tomar nota de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley de la BIRA propuesto, de 2017, mantiene las mismas excepciones. Además, el Gobierno indica que no se puede conceder el derecho a agitar o a declararse en huelga a las personas empleadas en la administración del Estado y que ejercen sus funciones vinculadas con los asuntos relativos a las fuerzas armadas o a la policía. Sin embargo, el Gobierno indica que se autoriza a los trabajadores de las empresas de seguridad privada la constitución de sindicatos y diferentes categorías de empleados que constituyeron sindicatos/asociaciones no registrados, en virtud de la KPIRA de 2010, y defienden con éxito sus intereses sociales, económicos y laborales.

Tomando nota de que el Gobierno expresa su preocupación respecto de las consecuencias de las acciones colectivas en esos servicios la Comisión desea subrayar la distinción entre el derecho de constituir un sindicato y el derecho de afiliarse al mismo, del que sólo pueden ser privadas las fuerzas armadas y la policía, y el derecho de huelga que puede limitarse a determinadas categorías de funcionarios públicos, a los servicios esenciales en el sentido estricto del término y a situaciones de crisis nacional o local aguda. La Comisión recuerda asimismo que las excepciones al derecho de constituir un sindicato y afiliarse al mismo que se relacionan con las fuerzas armadas y la policía, no se aplican automáticamente a todos los empleados que pueden portar un arma en el curso de sus funciones o al personal civil de las fuerzas armadas, el personal de bomberos, los trabajadores de las empresas de seguridad privada y los miembros de los servicios de seguridad de las empresas de aviación civil, los trabajadores empleados en la imprenta de los servicios de seguridad y los miembros de los servicios de seguridad o de extinción de incendios de las refinerías de petróleo, y de los aeropuertos y puertos de mar. La Comisión destaca que debe conferirse a esos trabajadores, sin distinción, el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión recuerda una vez más que el derecho de huelga no es absoluto y puede restringirse en circunstancias excepcionales, o incluso prohibirse, por ejemplo, en los servicios esenciales cuya interrupción ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud personal de toda o parte de la población. ***Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que garantice que, tanto el Gobierno federal como todos los gobiernos provinciales, adopten las medidas necesarias para asegurar que la legislación garantice a las mencionadas categorías de empleados el derecho de constituir las organizaciones que***

estimen convenientes y de afiliarse a las mismas para fomentar y defender sus intereses sociales, económicos y laborales, y que comunique información detallada sobre todo progreso realizado a este respecto. En cuanto a la administración pública, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información legislativa y de otro tipo, detallando de qué manera las asociaciones de funcionarios y empleados públicos de las empresas públicas gozan de los derechos sindicales consagrados en el Convenio.

Empleados en funciones de dirección. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de los artículos 31, 2), de la IRA y 17, 2), de las BIRA, KPIRA, SIRA y PIRA, un empleador puede exigir que, tras su nombramiento o ascenso para ocupar un puesto de dirección, una persona se dé de baja como afiliado o dirigente de un sindicato y sea inhabilitado para ese puesto. A este respecto, la Comisión toma nota con **preocupación** de la observación de la PWF que alega que, como consecuencia de estas disposiciones, un trabajador que asciende tiene que dejar el sindicato y privarse del beneficio de la negociación colectiva o del convenio colectivo, con lo cual no puede proseguir sus esfuerzos de mejora del nivel de vida, y así, la mayoría de los trabajadores se ven obligados a vivir alrededor de la línea de la pobreza. La Comisión recuerda a este respecto que siempre consideró que puede denegarse al personal directivo el derecho de constituir las mismas organizaciones que otros trabajadores, siempre que tengan el derecho de constituir sus propias organizaciones para la defensa de sus intereses. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los trabajadores directivos que son asimilados a los empleadores en virtud de la ley, tienen el derecho inalienable de constituir las asociaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, pero con sujeción a limitaciones razonables. Sin embargo, la Comisión toma nota de que si bien en virtud de las IRA, BIRA, KPIRA, PIRA y SIRA, los sindicatos de obreros pueden obtener el reconocimiento como agentes de negociación colectiva, entablar una negociación colectiva, plantear un conflicto laboral, comunicar un preaviso de huelga y tener acceso a los procedimientos de conciliación y de arbitraje voluntario, no parece aplicarse lo mismo a las asociaciones de trabajadores directivos. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que garantice la revisión de las leyes federales y provinciales, con miras a garantizar que los trabajadores directivos puedan constituir y afiliarse a organizaciones que puedan defender adecuadamente sus intereses laborales.**

Además, toma nota de que el artículo 2 de las IRA, BIRA, KPIRA, PIRA y SIRA, define como «empleador» a toda persona responsable de la dirección, la supervisión y el control de la empresa y que las mismas disposiciones definen «trabajador» y «obrero», como la persona empleada en una empresa o industria por cuenta ajena, incluido el empleo como supervisor o como aprendiz, pero no entra en la definición de empleador. La definición de trabajador también excluye expresamente a toda persona empleada principalmente en su capacidad gerencial o de dirección administrativa. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el gobierno de Sindh tiene la intención de llevar la cuestión relativa a los trabajadores que ocupan puestos de dirección a los Comités Consultivos Tripartitos Provinciales (PTCC) para una mayor clarificación. A este respecto, la Comisión recuerda que siempre consideró que, cuando se deniega al personal directivo el derecho de afiliarse a las mismas organizaciones que los demás trabajadores, la categoría de personal ejecutivo y directivo, no debería definirse de manera tan amplia que debilitara a las organizaciones y a otros trabajadores, privándolos de un porcentaje sustancial de su verdadera y potencial afiliación. Tomando nota de que, según el artículo 2 de las mencionadas leyes de relaciones laborales federales y provinciales, las personas empleadas principalmente en una capacidad administrativa y todos aquellos responsables de la supervisión y el control de la empresa, no son considerados obreros, y que en los departamentos del Gobierno federal, con la finalidad de distinguir la categoría de «trabajadores» o de «obrero», los funcionarios y empleados que pertenecen al personal de secretaría, de supervisión o de agencia, serán considerados dentro de la categoría de empleadores, la Comisión considera que las categorías de personal inhabilitado por su participación en sindicatos de obreros, también pueden estar definidas de manera demasiado amplia. **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que revise, con los interlocutores sociales, la aplicación de la legislación, con miras a garantizar, incluso a través de medios legislativos, que las organizaciones de trabajadores no se vean privadas de un porcentaje sustancial de su verdadera y potencial afiliación, debido a las actuales definiciones legales de «obrero» y de «empleador». La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto.**

Derechos de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas. La Comisión se refirió con anterioridad a la necesidad de enmendar el artículo 3, a), de las IRA, SIRA y BIRA, el artículo 3, i), de la KPIRA y el artículo 3, ii), de la PIRA, según los cuales ningún trabajador tendrá el derecho de afiliarse a más de un sindicato, con el fin de garantizar que se permita a los trabajadores de los sectores público y privado que tienen más de un trabajo, la afiliación a los correspondientes sindicatos como afiliados de pleno derecho, o al menos, si lo estiman conveniente, afiliarse al mismo tiempo a los sindicatos de empresa, de rama y de ámbito nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más a la restricción al doble empleo de un trabajador en virtud del artículo 48 de la Ley de Fábricas, que significa que no puede autorizarse que un trabajador esté afiliado a más de un sindicato, y añade asimismo que el proyecto de ley de la BIRA propuesto, de 2017, también prohíbe el doble empleo y establece que, a efectos de afiliación a un sindicato, el trabajador deberá estar empleado en la empresa. El Gobierno considera que la afiliación a más de un sindicato, no está justificada, puesto que en la misma empresa ello redundaría en una superposición de afiliaciones a más de un sindicato rival. Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, de conformidad con la KPIRA, los afiliados y los responsables de los sindicatos, también pueden convertirse en dirigentes sindicales, en federaciones y confederaciones, y, de conformidad con la parte del formulario-C

de la KPIRA, de 1974, si bien la misma persona no puede estar afiliada a más de un sindicato en la misma empresa/grupo de industrias/industria con que se relaciona el sindicato, esto es posible si las empresas son diferentes.

La Comisión observó en su comentario anterior que, si bien, como indicó el Gobierno, en virtud del artículo 48 de la Ley de Fábricas, no se permitirá que los trabajadores adultos trabajen en ninguna fábrica en los días en que ya hayan estado trabajando en otra fábrica, ello no parece excluir que los trabajadores de los sectores público y privado puedan trabajar en más de un trabajo en la misma ocupación o en ocupaciones diferentes. Además, la Comisión recuerda una vez más que debería permitirse a los trabajadores que tienen más de un trabajo afiliarse al correspondiente sindicato que estimen conveniente, es decir, a más de un sindicato, y que, en caso de que se autorice, si lo estiman conveniente, afiliarse a sindicatos a nivel nacional y de rama, así como a nivel de empresa al mismo tiempo, y señala a la atención del Gobierno el hecho de que el cumplimiento de este principio no entrañará una superposición de afiliaciones. La Comisión toma nota de que, con arreglo a la indicación del Gobierno, en Khyber-Pakhtunkhwa, la ley y la práctica autorizan a los trabajadores esa elección. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se modifiquen las leyes federales y provinciales a fin de garantizar que los trabajadores que desempeñan más de un trabajo puedan afiliarse al sindicato de su elección, es decir, a más de un sindicato, y que, en cualquier caso, los trabajadores puedan afiliarse simultáneamente a los sindicatos a nivel nacional y sectorial, así como a los de las empresas, si así lo desean, y que comuniquen información sobre las medidas que se hayan adoptado a este respecto.***

Derechos y ventajas de los sindicatos más representativos. La Comisión tomó nota con anterioridad de que determinados derechos (en particular, el derecho a representar a los trabajadores en cualquier procedimiento y a descontar en nómina las cuotas sindicales), sólo se garantizan a los agentes de negociación colectiva, a saber, los sindicatos más representativos (artículos 20, b) y c), 22, 33, 35 y 65, 1), de la IRA; artículos 24, 13), b) y c), 32, 41, 42, 68, 1), de la BIRA; artículos 24, 13), b) y c), 28, 37, 38, 64, 1), de la KPIRA; artículos 24, 20), b) y c), 27, 33, 34, 60, 1), de la PIRA y artículos 24, 20), b) y c), 27, 34, 35, 61, 1), de la SIRA. Toma nota con ***interés*** de la indicación del Gobierno, según la cual tratará de concebir un mecanismo en consulta con las partes interesadas, para resolver las cuestiones relativas al descuento en nómina de las cuotas sindicales y la representación de los trabajadores en el caso de reclamaciones individuales. La Comisión también toma nota de que el Gobierno considera que el reconocimiento del derecho a declarar un huelga y a negociar colectivamente de sindicatos que no sean el CBA, pueden conducir a una multiplicidad de foros y de diferentes cartas y demandas, que se derivan en diferentes derechos para diferentes trabajadores del mismo establecimiento. Por último, indica que los gobiernos de Sindh y de Balochistán discutirán las observaciones de la Comisión en los PTCC para una decisión final. La Comisión reitera que la distinción entre los sindicatos más representativos y los sindicatos minoritarios deberá limitarse al reconocimiento de determinados derechos preferenciales (por ejemplo, para fines de negociación colectiva, de consulta por parte de las autoridades o de designación de delegados a las organizaciones internacionales); sin embargo, la distinción no deberá tener el efecto de privar a aquellos sindicatos no reconocidos entre los más representativos de los medios esenciales de defender los intereses laborales de sus afiliados (por ejemplo, presentar reclamaciones en su nombre, incluso representándolos en el caso de reclamaciones individuales), de organizar su administración y sus actividades, y de formular sus programas (incluido el preaviso relativo a la huelga y su declaración), como prevé el Convenio. ***Acogiendo con agrado la intención declarada del Gobierno de abordar la falta de un derecho de reclamación y de descuento en nómina de las cuotas sindicales para los sindicatos minoritarios, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar, lo antes posible, la legislación, para garantizar el pleno respeto de los mencionados principios, y a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los gobiernos de las provincias enmienden de la misma manera la legislación y que informe de la evolución al respecto.***

En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno enmendara el artículo 27-B de la ordenanza relativa a las empresas bancarias, de 1962, que restringe, con la imposición de penas de hasta tres años de reclusión, la posibilidad de ocupar un cargo en un sindicato bancario, de manera que sólo puedan hacerlo los empleados del banco en cuestión. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en una reunión tripartita celebrada en agosto de 2018, en el Ministerio de Pakistaníes Residentes en el Exterior y de Desarrollo de Recursos Humanos, se acordó que el Ministerio presentara una propuesta de enmienda del artículo 27-B al Gobierno. Sin embargo, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de que, según la memoria del Gobierno, en la mencionada reunión tripartita, se decidió permitir que los trabajadores despedidos trabajaran en sindicatos hasta tanto no se dieran por finalizados sus casos en los tribunales. No obstante, la Comisión considera que, si la propuesta de enmienda del Ministerio no va más allá de la decisión adoptada en la reunión tripartita, no logrará armonizar la ley con el Convenio. En opinión de la Comisión, disposiciones como el artículo 27-B, infringen el derecho de las organizaciones de redactar sus estatutos y elegir a sus representantes con total libertad, impidiendo que personas cualificadas (como los dirigentes sindicales a tiempo completo o los pensionistas) sean elegidas y creando un verdadero riesgo de injerencia por parte del empleador, a través del despido de dirigentes sindicales, lo cual los priva de sus cargos sindicales. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar la legislación, haciéndola más flexible, admitiendo como candidatos a las personas que hubiesen estado previamente empleadas en la ocupación de que se trata o eximiéndolas de la exigencia laboral de un porcentaje razonable de dirigentes y de una organización, en consonancia con el artículo 8, d), de la IRA.***

Artículo 3. Derecho de elegir libremente a sus representantes. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la IRA y las leyes provinciales de relaciones laborales, contienen varios artículos sobre la inhabilitación para ser elegido o para ocupar un cargo sindical, por los siguientes motivos: condena o pena de prisión de dos o más años por un delito que

implique inmoralidad, en virtud del Código Penal del Pakistán, salvo que hubiese transcurrido un período de cinco años después del cumplimiento de la sentencia (artículo 18 de la IRA); condena por contravenciones de la ley (artículo 7 de la KPIRA); condena por un delito de odio, en virtud del Código Penal del Pakistán (artículo 7 de las BIRA, KPIRA, PIRA y SIRA); violación de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) o de una orden del Tribunal del Trabajo de poner fin a una huelga (artículos 44, 10), de la IRA, 64, 7), de la BIRA, 60, 7), de la KPIRA, 56, 7) de la PIRA y 57, 7), de la SIRA) y condena por malversación o apropiación indebida de fondos (artículos 7 y 77 de la BIRA, 7 y 69 de la PIRA y 70 de la SIRA). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) los motivos de inhabilitación por condena a una pena de prisión, como estipula la IRA, son razonables para proteger la disciplina y la buena gobernanza a nivel de empresa, y los delitos de robos, malversación de fondos e inmoralidad, dañan gravemente la relación de confianza y de respeto mutuo entre empleadores y trabajadores y la capacidad de representar a los trabajadores; ii) el artículo 56 de la PIRA destaca las competencias del Tribunal de Apelación para abordar los casos de huelgas ilegales y para aprobar algunas órdenes contra los violadores. Estas competencias permiten la creación de controles y contrapesos para la promoción de un sindicalismo sano, y iii) los motivos de inhabilitación en virtud de la PIRA sólo comprenden los requisitos mínimos esenciales para un determinado período especificado. El Gobierno reitera asimismo que el Gobierno de Sindh tiene el proyecto de llevar el asunto al PTCC e indica que el Gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa hará otro tanto. Indica asimismo que el Gobierno de Balochistán propuso omitir la referencia al artículo 77, de la sección 7, de la BIRA, y se pondrá fin, previa consulta con los interlocutores sociales, al procedimiento relativo a los casos de huelga ilegales o de cierres patronales. La Comisión subraya una vez más que la legislación que establece unos criterios de inhabilitación excesivamente amplios, mediante una larga lista, que incluye leyes que no tienen una verdadera vinculación con las calidades de integridad requeridas para el ejercicio de un cargo sindical, es incompatible con el Convenio. Es este sentido, la Comisión considera que no toda contravención de la legislación de relaciones laborales, ni toda violación de una orden judicial para poner fin a una huelga, ni toda condena por una variedad de delitos penales a que se hace referencia, constituyen necesariamente leyes de tal naturaleza que perjudiquen el ejercicio de las funciones sindicales. A la luz de lo anterior, la Comisión acoge con agrado las iniciativas de los gobiernos de Khyber-Pakhtunkhwa y de Sindh de referirse a los comentarios de la Comisión al PTCC y esperan que estas consultas arrojen resultados concretos en un futuro próximo. Sin embargo, toma nota de que, ni el Gobierno Federal ni el gobierno de Punjab, parecen prever ninguna enmienda legislativa en relación con este asunto y la enmienda propuesta por el gobierno de Balochistán no limita de manera adecuada los motivos de inhabilitación para ser elegido o para ejercer un cargo sindical. ***Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que enmiende la legislación federal para hacer más restrictivos los motivos de inhabilitación y a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los gobiernos de las provincias enmienden su legislación de la misma manera.***

Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y formular sus programas. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 5, d), de la IRA, 15, e), de las BIRA y SIRA, y 15, d), de las KPIRA y PIRA, confieren al registrador la facultad de inspeccionar las cuentas y los registros de un sindicato registrado o de investigar o llevar a cabo esa investigación sobre los asuntos relativos al sindicato que consideren necesario examinar. También toma nota de que el Gobierno reitera que estas disposiciones legales se dirigen a hacer más responsable y transparente al sistema. En relación con las provincias, el Gobierno indica que la finalidad de las facultades de inspección del registrador en virtud de la PIRA, se limita a la revelación de algunos hechos y cifras determinantes y, en virtud de la SIRA, la facultad de descontar en nómina las cuotas sindicales, se dirige a garantizar que los gastos se hayan hecho de manera más adecuada, y por último, que el Gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa se compromete a que las facultades financieras del registrador, en virtud de la KPIRA, queden minimizadas para resolver las cuestiones relativas a la apropiación indebida y a la malversación de fondos. Al tiempo que toma nota de las opiniones de los gobiernos federal y provinciales sobre la limitada finalidad de las facultades del registrador, la Comisión considera que la redacción de las disposiciones legislativas pertinentes, «como él lo estime conveniente», es excesivamente amplia. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar la legislación, limitando de manera explícita las facultades de supervisión financiera del registrador a la obligación de presentar informes financieros anuales y a la verificación de los casos de motivos graves para creer que las acciones de una organización estén en contradicción con sus normas o con la ley o en los casos de denuncia o de solicitud de una investigación de los alegatos de malversación de fondos de un número significativo de trabajadores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 109). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que también los gobiernos de las provincias adopten esas medidas.***

Artículo 4. Disolución de las organizaciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la autoridad registradora puede anular el registro de un sindicato, por numerosas razones establecidas en los artículos 11, 1), a), d), e) y f), 11, 5), y 16, 5), de la IRA; y en el artículo 12, 1), a) y b), 12, 3), d), y 12, 2), y 7), de las BIRA, KPIRA y PIRA, y que, en virtud de la IRA, la decisión de la Comisión que ordena al registrador anular el registro de un sindicato, no puede apelarse ante los tribunales (artículo 59). La Comisión también tomó nota de que el artículo 12 de la SIRA establece los fundamentos para la anulación del registro, cuando es ordenado por un Tribunal del Trabajo, y recordó que la disolución y la suspensión de organizaciones sindicales, constituyen formas extremas de injerencia por las autoridades en las actividades de las organizaciones, por lo cual debería acompañarse de todas las garantías necesarias, que sólo pueden asegurarse a través de un procedimiento judicial normal, que también debería tener el efecto de una suspensión de la ejecución. Además, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) el registro de un sindicato se

anula a nivel federal sólo por orden de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) (órgano judicial de decisión al que puede recurrirse ante su órgano judicial colegiado (artículos 54, 57 y 58 de la IRA)) o a nivel provincial por los tribunales del trabajo, y ii) el registrador de sindicatos, por sí solo, carece de jurisdicción para anular el registro sindical (artículos 11, 2), de la IRA; 12, 2), de las BIRA, KPIRA, PIRA y SIRA). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todos los casos de anulación de registros, desde enero de 2016, y los procedimientos que se siguieron para tales casos. En ese sentido, toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se anularon 66 registros de Punjab y hubo cinco apelaciones ante el tribunal del trabajo contra estas anulaciones, al tiempo que, en 2017 se anularon los registros de 73 sindicatos y se realizaron nueve apelaciones. El Gobierno indica asimismo que, en Khyber-Pakhtunkhwa se anularon ocho registros, en virtud del artículo 12, 3), a), de la KPIRA, que prevé la anulación del registro de un sindicato que se haya disuelto o que haya dejado de existir. ***Tomando debida nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los casos de anulación de registros en todas las provincias, así como a nivel federal, desde enero de 2016, y sobre los procedimientos seguidos para tales casos, incluidos los resultados de todas las apelaciones que se hicieron.***

Zonas francas de exportación (ZFE). En lo que respecta al derecho de sindicación en las ZFE, la Comisión recuerda que tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno, según la cual el reglamento sobre las zonas francas de exportación (condiciones de empleo y de servicio), de 2009, ha sido finalizado, en consulta con las partes interesadas, y será sometido al Gabinete para su aprobación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), que el reglamento propuesto se comparte con los inversores de la dirección de la ZFE (DZFE), dado que no se realizará ningún cambio en el paquete de incentivos, con arreglo al cual se ha aprobado una inversión/un programa, como una zona, excepto cuando tal cambio sea más ventajoso para los inversores y sea también aceptado por éstos. El Gobierno añade que todo cambio en la legislación relativa a la DZFE, implicaría el respaldo formal del consejo de la DZFE, seguido de la aprobación del Parlamento, siendo aún discutida la cuestión en un nivel más elevado, con el fin de forjar una estrategia dirigida a enmendar la legislación. Recordando que, a lo largo de los últimos trece años, el Gobierno ha venido indicando que se encuentra en el proceso de elaboración de normas que otorgarían el derecho de sindicación a los trabajadores de las ZFE, la Comisión ***lamenta profundamente*** la falta de progresos en este sentido. ***Recordando que los trabajadores de las ZFE deberían gozar de los derechos garantizados en virtud del Convenio, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que se adopte, sin más retrasos, el reglamento, con el fin de garantizar el derecho de sindicación en las ZFE. Pide al Gobierno que transmita una copia del mismo, en cuanto se haya adoptado.***

La Comisión espera que se adopten todas las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación nacional y provincial con el Convenio, y solicita al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, y de las respuestas del Gobierno a las mismas. Toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2017. Además, la Comisión ***lamenta*** que el Gobierno no haya respondido plenamente a los alegatos de la CSI de 2012 y 2015 de despidos antisindicales y de actos de injerencia en los asuntos internos sindicales por parte de los empleadores (intimidación y listas negras de sindicatos y de sus afiliados). ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita sus comentarios sobre estas observaciones.***

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que: i) se promulgó la 18.ª enmienda de la Constitución, en virtud de la cual las cuestiones relativas a las relaciones laborales y a los sindicatos se habían transferido de nuevo a las provincias; ii) la adopción de la Ley de Relaciones Laborales (IRA), de 2012, que regula las relaciones laborales y la inscripción de los sindicatos y de las federaciones sindicales en el territorio de la capital, Islamabad, y en los establecimientos que cubren más de una provincia (artículo 1, 2) y 3), de la IRA), y cuyo contenido no atendía la mayor parte de los comentarios anteriores de la Comisión, y iii) la adopción, en 2010, de la IRA de Balochistán (BIRA), de la IRA de Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), de la IRA de Punjab (PIRA), y de la Ley de Relaciones Laborales de Sindh (en versión renovada y enmendada), todas las cuales planteaban cuestiones similares a las que plantea la IRA. La Comisión también tomó nota de la adopción, en 2013, de la Ley de Relaciones Laborales de Sindh, 2013 (SIRA), que reemplaza a la legislación anterior en materia de relaciones laborales, y de la enmienda de la BIRA, en 2015. También tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual la responsabilidad de la coordinación de las cuestiones relacionadas con el trabajo y la responsabilidad de garantizar que se elaboren las leyes del trabajo provinciales, de conformidad con los convenios internacionales ratificados, residen en el Gobierno federal.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA y la SIRA, excluyen a numerosas categorías de trabajadores (enumeradas por la Comisión en su observación sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)), de su ámbito de aplicación, y — en lo que respecta a la BIRA — excluye a los trabajadores empleados en las zonas tribales.

Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) las exclusiones identificadas en virtud de la PIRA, están destinadas a facilitar el buen funcionamiento de la gobernanza y a prestar unos servicios públicos ininterrumpidos, sin ocasionar ningún daño o dificultad al público; ii) el Gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, presentará el punto de debate y opinión al Comité Provincial de Consulta Tripartito (PTCC); iii) el Gobierno de Balochistán propuso las enmiendas necesarias en la próxima BIRA, 2017; además en su memoria en relación con el Convenio núm. 87, el Gobierno declara que se realizó una propuesta de enmienda que permitiría que los trabajadores empleados en las zonas tribales de administración provincial gozaran de derechos sindicales, y iv) el Gobierno de Sindh, en virtud de la SIRA de 2013, ya adoptó medidas para otorgar el derecho de sindicación a los trabajadores agrícolas y pesqueros y, por otra parte, los trabajadores empleados en varios departamentos gubernamentales gozan del derecho de sindicación. Sin embargo, no puede concederse al personal de seguridad el derecho de sindicación, por razones de seguridad y por interés público. Además, el Gobierno de Sindh va a presentar una propuesta para ampliar la cobertura de la SIRA en hospitales e instituciones educativas.

Con respecto a los funcionarios públicos en particular, la Comisión tomó nota con anterioridad de que la IRA no se aplica a los trabajadores empleados en la administración del Estado diferentes de los empleados como obreros (artículo 1, 3), b)), y de que la BIRA, la KPIRA y la PIRA, así como el artículo 1, 3), ii), de la SIRA añaden las palabras «como obreros empleados *por el ferrocarril y el servicio de correos del Pakistán*». La Comisión también observó que la redacción del artículo 1, 3), b), de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA y de la SIRA, «no se aplicarán a las personas empleadas en la administración del Estado que no sean aquellas empleadas como obreros *por el ferrocarril y el servicio de correos del Pakistán*», lo cual puede implicar que algunas personas empleadas en empresas públicas sean consideradas empleadas de la administración del Estado y excluidas del ámbito de aplicación de las leyes, y solicitó al Gobierno que comunicara información en este sentido. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) los comentarios de la Comisión se señalan como futuros progresos y evolución de la legislación, y los respectivos gobiernos, con el apoyo de los interlocutores sociales, están haciendo lo necesario para abordar las anomalías y ambigüedades de la legislación; ii) los empleados de las «autoridades», los «organismos autónomos» y las corporaciones estatales en los ministerios y gobiernos provinciales, con algunas excepciones, están comprendidos en las leyes sobre relaciones laborales; iii) los trabajadores de la «administración del Estado» y sus departamentos adscritos, en los que los trabajadores están comprendidos en la definición de funcionarios públicos, no constituyen sindicatos en virtud de las leyes sobre relaciones laborales, pero pueden constituir «asociaciones»; en las dos últimas décadas, estas asociaciones fueron muy activas, el movimiento de la Asociación de Empleados y la Asociación de Trabajadoras de la Salud del Pakistán son dos ejemplos destacados; iv) las personas empleadas en empresas públicas están dentro del ámbito de aplicación de las leyes sobre relaciones laborales vigentes, dado que esas leyes son aplicables a todos los establecimientos, ya sean empresas públicas/instituciones gubernamentales, ya sean empresas privadas, excepto en el caso de aquellas que están excluidas; el único criterio es la situación de la persona empleada. Si la persona cumple con los requisitos para ser un obrero, con arreglo a la definición de la ley, se sitúa en el ámbito de aplicación de la ley; v) en Khyber Pakhtunkhwa, los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado que se unen temporalmente a empresarios públicos, quedan excluidos del ámbito de la KPIRA, puesto que se sitúan en el ámbito de aplicación del Código de los Establecimientos Públicos/Ley sobre los Funcionarios Públicos, de 1973, y vi) en Sindh, los obreros empleados en departamentos gubernamentales, como la agricultura, irrigaciones, consejos sindicales y comités municipales, y en la Dirección de Desarrollo de Karachi, gozan del derecho de sindicación y han constituido sindicatos en sus respectivos departamentos.

La Comisión toma nota, en particular, de la indicación del Gobierno, según la cual, en todos los establecimientos que incluyen a las empresas públicas, sólo los «obreros» se sitúan en el ámbito de aplicación de las leyes sobre relaciones laborales. Toma nota asimismo de que, con arreglo a la «explicación» del artículo 2, ix), d) y e), de la IRA; el artículo 2, i), iv) y v), de la BIRA; el artículo 2, vii), d) y e), de la KPIRA y el artículo 2, viii), d) y e), de la PIRA y de la SIRA, los funcionarios y los empleados de los gobiernos federales y provinciales o las autoridades locales que pertenecen al personal superior, administrativo, de secretaría, directivo, de supervisión o de organismos y que fueron clasificados a tal fin en el *Boletín Oficial*, y se considerará que se sitúan en la categoría de «empleadores» y en relación con cualquier otro establecimiento, el propietario de ese establecimiento y cualquier director, gerente, secretario, agente o funcionario, o la persona interesada, con la administración de los asuntos correspondientes, se considera empleador. La Comisión toma nota con **preocupación** de que las leyes sobre relaciones laborales establecen que los derechos que confiere el Convenio, incluido el derecho de representar a los afiliados a los fines de la negociación colectiva, están reconocidos sólo en el caso de los sindicatos de obreros (artículos 19 y 20 de la IRA y artículo 24 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA y de la SIRA), con lo que se excluye al personal de secretaría, de supervisión y de agencias en los gobiernos, y cada director, gerente, secretario, agente o funcionario, o persona interesada con la administración de cualquier otro establecimiento, del derecho de negociación colectiva. A este respecto, la Comisión toma nota de la observación de la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF), según la cual, en virtud de la restrictiva definición de trabajador y de obrero, y en virtud de los artículos 31, 2), de la IRA y 17, 2), de la BIRA, la KPIRA, la SIRA y la PIRA, un obrero que asciende tiene que dejar el sindicato y privarse del beneficio de la negociación colectiva y del convenio colectivo.

Tomando debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión destaca nuevamente que las únicas categorías de trabajadores que pueden excluirse de la aplicación del Convenio, son: las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (*artículo 6* del Convenio). En particular, la Comisión recuerda que las excepciones relacionadas con las fuerzas armadas y la policía, no se aplican automáticamente a todos los

empleados que pueden portar un arma en el curso de sus funciones o al personal civil de las fuerzas armadas, al personal de extinción de incendios y a los miembros de los servicios de seguridad de las empresas de aviación civil, a los trabajadores contratados en los servicios de impresión de seguridad y a los miembros de la seguridad o de los servicios de extinción de incendios de las refinерías de petróleo, aeropuertos y puertos marítimos. La Comisión también considera que, privar a todos los empleados administrativos, de secretaría y de agencias, en los sectores público y privado, que no son miembros de las fuerzas armadas, ni de la policía, y que no están adscritos a la administración del Estado, del derecho de negociación colectiva, las leyes federales y provinciales sobre relaciones laborales no cumplen con la totalidad del ámbito de aplicación personal del Convenio. ***Recordando sus repetidas solicitudes en este sentido, la Comisión insta al Gobierno a que garantice que, al igual que los gobiernos de las provincias, se adopten las medidas necesarias para enmendar la legislación, con el fin de que todos los trabajadores, con la única posible excepción de las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado, gocen plenamente de los derechos consagrados en el Convenio.***

Zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión recuerda que tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno, según la cual se finalizó el reglamento sobre las zonas francas de exportación (condiciones de empleo y de servicio), de 2009, en consulta con las partes interesadas, que se presentaría al Gabinete para su aprobación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el reglamento propuesto se compartió con los inversores de la Dirección de las ZFE (DZFE) en aplicación de la regla según la cual cualquier cambio en el paquete de incentivos con arreglo al cual se realiza un plan de inversiones en una zona, debe ser más ventajoso para los inversores y también sea aceptado por éstos. El Gobierno añade que todo cambio en la legislación relativa a la DZFE, implicaría el respaldo formal del Consejo de la DZFE, seguido de la aprobación del Parlamento, discutiéndose aún el asunto en un nivel más alto, con el fin de elaborar una estrategia para enmendar la ley. Recordando que en los últimos trece años, el Gobierno indicó que se encuentra en el proceso de elaborar leyes que otorguen el derecho de sindicación a los trabajadores de las ZFE, la Comisión ***lamenta profundamente*** la falta de progresos en ese sentido. ***Recordando que los trabajadores de las ZFE deberían gozar de los derechos garantizados en virtud del Convenio y que privar a los trabajadores del derecho de sindicación no debería considerarse un incentivo para los inversores, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que el nuevo reglamento garantice el derecho de sindicación, acelere el proceso de su elaboración y aprobación y que comunique información detallada sobre los progresos realizados.***

Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. Sector bancario. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que enmendara el artículo 27-B de la ordenanza sobre las empresas bancarias, de 1962, que impone penas de reclusión y/o multas por el ejercicio de actividades sindicales durante las horas de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en una reunión tripartita celebrada en agosto de 2018, en el Ministerio de Pakistaníes en el Exterior y Desarrollo de Recursos Humanos, se acordó que el Ministerio presentara al Gobierno una propuesta de enmienda al artículo 27-B. El Gobierno indica asimismo que, cuando finalizó esta reunión, se decidió permitir esas actividades sindicales sólo durante el horario de oficina y en relación con la solución de reclamaciones. Recordando que en los últimos dieciséis años ha venido solicitando al Gobierno que derogara las sanciones penales previstas en el artículo 27-B, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de que el resultado de la reunión tripartita parece no estar a la altura de su petición de larga data. ***La Comisión por consiguiente, insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para derogar el artículo 27-B, con el fin de permitir que los trabajadores del sector bancario ejerzan sus actividades sindicales, con el consentimiento del empleador, en las horas de trabajo.***

Artículo 4. Negociación colectiva. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, con arreglo al artículo 19, 1), de la IRA, y al artículo 24, 1), de la BIRA, la KPIRA, la PIRA y la SIRA, si un sindicato es el único presente en una empresa o grupo de empresas (o industria, según la BIRA, la KPIRA, la PIRA y la SIRA), pero no cuenta con al menos un tercio de los empleados en nómina, no será posible llevar a cabo ninguna negociación colectiva en dichas empresas o industrias. La Comisión recuerda que solicitó con anterioridad al Gobierno que enmendara los artículos similares vigentes que existían en virtud de la legislación anterior sobre relaciones laborales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la finalidad de las mencionadas disposiciones no es hacer pasar un mal rato a los sindicatos genuinos y limitar la actuación del único sindicato como un agente de negociación colectiva (CBA), sino limitar y desalentar a los sindicatos falsos y ficticios. No se celebran votaciones en un solo sindicato para probar un tercio de la fuerza, sino que depende de la satisfacción del registrador, adoptándose, en general, un procedimiento simple (firmas de los afiliados y de los obreros). El Gobierno indica asimismo que la eliminación del requisito de una mayoría de un tercio, podría dar lugar a una amenaza de los sindicatos con un menor número de afiliados, a través de pequeños agentes de negociación colectiva sin representación que trabajan en interés de la administración y contra los obreros y, si se otorga a los sindicatos con un menor número de afiliados el derecho de negociación colectiva, ningún sindicato competirá para conseguir el estatuto de CBA. Tomando debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión recuerda a este respecto que la determinación de un umbral de representatividad para designar a un agente exclusivo para los convenios de negociación colectiva destinados a su aplicación a todos los trabajadores de un sector o empresa, es compatible con el Convenio, en la medida en que las condiciones requeridas no constituyan en la práctica un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. En consecuencia, la Comisión no está solicitando al Gobierno que elimine la mayoría de un tercio requerida para la adquisición del estatuto exclusivo de CBA. Sin embargo, la Comisión considera que, si ningún sindicato en una unidad de negociación específica reúne el requerido umbral de representatividad para poder negociar en nombre de todos los trabajadores, los sindicatos minoritarios deberían poder

negociar, conjuntamente o por separado, al menos en nombre de sus propios afiliados. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que, si ningún sindicato reúne el porcentaje de representatividad exigido para ser designado como agente de negociación colectiva, los derechos de negociación colectiva se otorgan a los sindicatos existentes para que puedan negociar, de manera conjunta o por separado al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión subraya la importancia de que los gobiernos de las provincias adopten medidas en la misma dirección.***

La Comisión toma nota de que los artículos 62, 3), de la IRA; 25, 3), de la KPIRA y de la PIRA; 25, 2), de la SIRA, y 30, 3), de la BIRA, disponen que, después de la certificación de una unidad de negociación colectiva (CBU), no se registrará a ningún sindicato en relación con esa unidad, excepto en lo que respecta a toda esa unidad. Toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 62 de la IRA, y del artículo 30 de la BIRA, respectivamente, la Comisión nacional y provincial de relaciones laborales tiene competencia en la determinación de las unidades de negociación colectiva; y, en virtud del artículo 25 de la KPIRA y de la PIRA, y del Tribunal de Apelación del Trabajo, y de conformidad con el artículo 25 de la SIRA, el Registrador tienen competencias en este sentido. Las decisiones sobre la determinación de las unidades de negociación colectiva son apelables ante el pleno de la Comisión, con arreglo a la IRA y a la BIRA, ante el Tribunal Supremo, en virtud de la KPIRA y de la PIRA, y ante el Tribunal de Apelación del Trabajo en virtud de la SIRA. La Comisión toma nota de que estas disposiciones pueden entrañar la pérdida del estatuto del agente de negociación colectiva en el caso de los sindicatos acreditados con anterioridad, como consecuencia de una decisión en la que las partes no desempeñan ninguna función, y que un caso de este tipo se menciona en las observaciones de la CSI de 2017. La Comisión recuerda que tomó nota de similares disposiciones con arreglo a la IRA anterior, según las cuales la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) puede determinar o modificar una unidad de negociación colectiva sobre una aplicación realizada por una organización de trabajadores o una referencia realizada por el Gobierno federal, y solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que, en virtud de la nueva legislación sobre relaciones laborales, la elección de la unidad de negociación colectiva puede depender de los propios interlocutores sociales, dado que se encuentran en la mejor posición para decidir el nivel de negociación más adecuado. La Comisión ***lamenta*** que las leyes federales y provinciales adoptadas posteriormente, reproduzcan las disposiciones anteriores. ***La Comisión pide al Gobierno que garantice la adopción de las medidas necesarias por parte de los gobiernos federales y provinciales, para enmendar la legislación, con el fin de que los interlocutores sociales puedan desempeñar un papel en la determinación o modificación de las unidades de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión tomó nota con anterioridad de que: i) los representantes de los trabajadores serán designados (por un agente de negociación colectiva) o elegidos (a falta de un agente de negociación colectiva) en cada empresa que emplea a más de 50 trabajadores (25 trabajadores, en el caso de la IRA), para que actúen como enlaces entre los trabajadores y el empleador, para asistir en la mejora de las disposiciones sobre las condiciones físicas del trabajo y para ayudar a los trabajadores a resolver sus problemas (artículos 23 y 24 de la IRA, 33 de la BIRA, 29 de la KPIRA y 28 de la PIRA); ii) los consejos de trabajo (órganos bipartitos) que se establecen en cada empresa que emplea a más de 50 trabajadores, tienen múltiples funciones (artículos 25 y 26 de la IRA, 39 y 40 de la BIRA, 35 y 36 de la KPIRA, y 29 de la PIRA y de la SIRA), y sus miembros son nombrados por un agente de negociación colectiva o, a falta de agente de negociación colectiva, son elegidos (PIRA y SIRA) o «escogidos de la manera prescrita entre todos los obreros empleados en la empresa» (IRA, BIRA y KPIRA); iii) la dirección de la empresa no debe tomar ninguna decisión relativa a las condiciones de trabajo, sin el asesoramiento correspondiente de los representantes de los trabajadores, que pueden ser nombrados (por un agente de negociación colectiva) o ser elegidos (a falta de un agente de negociación colectiva) (artículos 27 de la IRA, 34 de la BIRA, 30 de la KPIRA y 29 de la PIRA y de la SIRA), y iv) los órganos de gestión conjunta fijarán los pagos por el empleo y por la producción por piezas, planificarán la reagrupación o el traslado de trabajadores, establecerán los principios de remuneración e introducirán métodos de remuneración, etc. (artículos 28 de la IRA, 35 de la BIRA, y 31 de la KPIRA). Esas funciones son asignadas a los consejos del trabajo en virtud de la PIRA y de la SIRA (artículo 29, 5)). La Comisión solicitó al Gobierno que asegurara que, al igual que los gobiernos de las provincias, se adoptaran medidas para garantizar que, ante la falta de un agente de negociación colectiva, todos los representantes de los trabajadores que forman parte de las entidades sean elegidos, y que la existencia de representantes de los trabajadores elegidos no se utilice para socavar la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes. En este sentido, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) en los casos en los que exista un agente de negociación colectiva, el empleador celebrará elecciones para elegir a los representantes de los obreros para el consejo de trabajo, mediante un preaviso y un procedimiento establecido en el reglamento, y ii) en una reunión organizada para discutir las recomendaciones de la Comisión, todas las partes interesadas acordaron que un sistema alternativo para la determinación de los representantes de los trabajadores en empresas en las que no se dispone de sindicato, podría ser más efectivo a través de la reforma. Por consiguiente, se pidió a todos los representantes de los departamentos provinciales del trabajo que discutieran la cuestión en las reuniones de sus respectivos PTCC. La Comisión toma nota con ***interés*** de la indicación del Gobierno, según la cual los miembros trabajadores de los consejos de trabajo son elegidos, y solicita al Gobierno que transmita una copia del reglamento que dispone el preaviso y el procedimiento para su elección. Sin embargo, la Comisión considera que, cuando no existe un agente de negociación colectiva, el hecho de que el sindicato pueda apuntar a persuadir a los trabajadores durante las elecciones de que voten por sus afiliados para que los representen en las mencionadas entidades, no elimina completamente el riesgo de que el sindicato sea socavado por los representantes

de los trabajadores. **Tomando nota de que se está considerando la posibilidad de una reforma dentro de los PTCC, la Comisión pide al Gobierno que asegure que, al igual que los gobiernos de las provincias, garantice que la existencia de los representantes de los trabajadores elegidos no se utilice para socavar la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes. También pide al Gobierno que presente una copia del reglamento que dispone el preaviso y el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores en los consejos de trabajo.**

Conciliación obligatoria. Habiendo tomado nota de que la ley exige la conciliación obligatoria en el proceso de negociación colectiva, la Comisión observó con anterioridad que el conciliador será designado directamente por el Gobierno (artículos 43 de la BIRA, 39 de la KPIRA, 35 de la PIRA y 36 de la SIRA) o por una comisión cuyos diez miembros serán designados por el Gobierno, de los cuales tan sólo uno representará a los empleadores y otro a los sindicatos (artículo 53 de la IRA). Subrayó que el sistema de nombramiento del conciliador y la composición de la comisión, podrían plantear cuestiones sobre la confianza de los interlocutores sociales en el sistema. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual está de acuerdo con el comentario de la Comisión y funciona de manera satisfactoria el procedimiento actual para el nombramiento de los conciliadores. El Gobierno transmite asimismo las respuestas de los Gobiernos de Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh y de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, en las que todos declaran que el proceso está funcionando bien, que no se han recibido quejas de ninguna de las partes y que, en caso de que haya una queja de parcialidad, se dispone de mecanismos adecuados para la parte agraviada. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno.

En relación con el artículo 6 de la IRA, la Comisión se remite a sus comentarios formulados en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), en la solicitud directa.

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos concluidos y en vigor, los sectores interesados y el número de trabajadores abarcados por dichos convenios, así como sobre toda medida adicional adoptada para promover el pleno desarrollo y utilización de la negociación colectiva en virtud del Convenio.

La Comisión espera que se adopten todas las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación nacional y provincial con el Convenio y pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión toma nota de que se está aplicando en el Pakistán el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas (SPG)+, con miras a la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo y confía en que el proyecto ayude al Gobierno a atender las cuestiones planteadas en esta observación.

Panamá

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) recibidas el 9 de marzo de 2017 y 31 de agosto de 2018, así como de la respuesta de carácter general del Gobierno a las mismas. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) recibidas el 4 de septiembre y 21 de noviembre de 2018 que se refieren principalmente a cuestiones tratadas por la Comisión en la presente observación. La Comisión toma nota de que tanto las observaciones de la CONUSI como de la ITF se refieren a la eficacia de los procedimientos de tratamiento de controversias en el Canal de Panamá, tema que fue examinado por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3106, en el cual el Comité dio su examen por concluido, confiando en que el Gobierno continuará dando seguimiento a las cuestiones planteadas con los sindicatos concernidos para considerar toda mejora pertinente. **La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota con *interés* de que tanto la CONUSI como el Gobierno informan que, por medio de una sentencia, de 30 de diciembre de 2015, que declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley sobre la Carrera Administrativa (incluida aquella que aumentaba de 40 a 50 el número mínimo de trabajadores requerido para conformar una asociación de servidores públicos), la Corte Suprema de Justicia determinó que el Convenio forma parte del bloque de constitucionalidad del país.

Comisiones tripartitas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los avances logrados por las comisiones que conforman el acuerdo tripartito de Panamá del año 2012 y que cuentan con el apoyo técnico de la OIT: la comisión de tratamiento rápido de quejas sobre libertad sindical y negociación colectiva y la comisión de adecuación; la cual busca armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio con base en los comentarios de los órganos de control de la OIT. La Comisión toma nota con *interés* del papel desempeñado por la comisión de quejas en relación al otorgamiento de la personería jurídica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE) y de la contribución de la comisión de adecuación para la elaboración de un proyecto de ley sobre la libertad sindical en el sector público consensuado tripartitamente. La Comisión toma nota asimismo de que, según está estipulado en la Hoja de ruta elaborada en el mes de junio de 2018 por el moderador de las comisiones del acuerdo tripartito, se prevé instalar un

órgano nacional tripartito de carácter consultivo socio-laboral, con la posibilidad de que las actuales dos comisiones tripartitas se transformen en subcomisiones permanentes de dicho órgano.

La Comisión subraya el papel sustancial que las dos comisiones pueden desempeñar para alcanzar la plena aplicación del Convenio, ya que no sólo contribuyen a la resolución de conflictos puntuales sino que permiten también construir consensos tripartitos sobre cuestiones de fondo en materia de libertad sindical y negociación colectiva. ***La Comisión alienta al Gobierno a que, con el continuo apoyo técnico de la Oficina, prosiga el fortalecimiento de las comisiones tripartitas e invita a que las distintas autoridades del Estado tomen debidamente en cuenta sus decisiones. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones al respecto.***

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años formula comentarios sobre las siguientes cuestiones que plantean problemas de conformidad con el Convenio:

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores sin ninguna distinción de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas:

- la regla según la cual no podrá haber más de una asociación en una institución pública, y que las asociaciones podrán tener capítulos provinciales o comarcales, pero no más de un capítulo por provincia, establecida en los artículos 179 y 182 del texto único de la ley núm. 9, modificado por la ley núm. 43, de 31 de julio de 2009;
- la exigencia de un número demasiado elevado de miembros para constituir una organización profesional de empleadores (diez) y aún más elevado para constituir una organización de trabajadores a nivel de empresa (40) en virtud del artículo 41 de la ley núm. 44 de 1995 (modificatoria del artículo 344 del Código del Trabajo), así como de un número elevado de miembros para constituir una organización de servidores públicos (40) en virtud del artículo 182 del texto único de la ley núm. 9 (la cual, según ha indicado el Gobierno, ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 30 de diciembre de 2015), y
- la denegación a los servidores públicos (los que no son de carrera y los de libre nombramiento regulado por la Constitución, los de selección y en funciones) del derecho de formar sindicatos.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de elegir libremente a los representantes:

- la exigencia en la Constitución de ser de nacionalidad panameña para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato.

Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular sus programas de acción:

- la injerencia legislativa en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores (artículos 452, 2), 493, 4) y 494 del Código del Trabajo) (cierre de la empresa en caso de huelga e interdicción de acceso a los trabajadores no huelguistas); la obligación para los no afiliados de pagar una cuota de solidaridad en concepto de beneficios derivados de la negociación colectiva (artículo 405 del Código del Trabajo); y la intervención automática de la policía en caso de huelga (artículo 493, 1), del Código del Trabajo), y
- la prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga, así como la prohibición de huelgas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno y de huelgas no vinculadas a un convenio colectivo en una empresa; la facultad de la Dirección Regional o General del Trabajo de someter el conflicto colectivo al arbitraje obligatorio en las empresas de transporte privado (artículos 452 y 486 del Código del Trabajo) así como la obligación de prestar servicios mínimos con un 50 por ciento del personal en el sector del transporte, así como la sanción con destitución directa de los servidores públicos por incumplir los servicios mínimos (artículos 155 y 192 del texto único de 29 de agosto de 2008, modificado por la ley núm. 43 de 31 de julio de 2009).

En relación con las disposiciones antes mencionadas relativas al sector público, la Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, se encuentra en primer debate de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de relaciones colectivas laborales del sector público, el cual es el resultado del consenso tripartito dentro de la comisión de adecuación. La Comisión toma nota de que, tanto el Gobierno como la CONUSI destacan que dicho proyecto de ley representa un avance histórico de reivindicación de los derechos a la libertad sindical ya que hasta el momento no hay en la legislación un reconocimiento positivo explícito de los derechos de libertad sindical para los trabajadores del sector público. La Comisión toma nota de que, según lo dispuesto en su artículo 1, dicho proyecto tiene como propósito garantizar el reconocimiento y plena vigencia de los derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva, así como un adecuado y eficaz sistema de solución de conflictos. La Comisión toma nota con ***interés*** de que, según indica el Gobierno y según se desprende del texto anexo por el Gobierno, el proyecto de ley: i) no contempla límites para la existencia de una o más organizaciones sindicales por institución; ii) establece que todos los servidores públicos podrán formar organizaciones sindicales, sin necesidad de autorización previa y afiliarse a las mismas, cualquiera que sea el oficio, profesión o sector en el que laboren, salvo excepciones para aquellos servidores públicos que ejerzan principalmente mando o jurisdicción en nombre del Estado, y iii) garantiza los derechos de las organizaciones sindicales de servidores públicos a celebrar convenciones colectivas, así como a ejercer el derecho a huelga. Al tiempo que observa que, según lo dispuesto en el artículo 9 del proyecto de ley, el mismo mantiene la exigencia de un número elevado de miembros para constituir una organización de servidores públicos (40), la Comisión toma nota con ***interés*** de los avances logrados por la comisión de adecuación en la elaboración consensuada del mencionado proyecto que constituye un paso muy importante

para adecuar la legislación aplicable al sector público con el Convenio. ***Tomando debida nota de que el proyecto de ley sobre la regulación de las relaciones colectivas laborales en el sector público ha entrado en debate en la Asamblea Nacional, la Comisión espera firmemente que el mismo sea adoptado a la brevedad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.***

En relación con las cuestiones legislativas pendientes relativas al sector privado, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en la Hoja de ruta elaborada en el mes de junio de 2018 por el moderador de las comisiones del acuerdo tripartito, se acordó que en primer lugar se adecuaría la legislación relativa al sector público y luego la legislación laboral del sector privado conforme a los criterios de los órganos de control en lo que se refiere a libertad sindical y negociación colectiva. ***La Comisión espera que la comisión de adecuación trate cuanto antes las otras cuestiones legislativas pendientes, incluidas las referentes al Código del Trabajo, de modo de poner el mismo en plena conformidad con el Convenio. Pide asimismo al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.***

Aplicación del convenio en la práctica. Otorgamiento de personerías jurídicas por la autoridad administrativa. En sus comentarios anteriores y en relación a observaciones de varias organizaciones sindicales, entre ellas la CONUSI, de que la autoridad administrativa se negaba a otorgar personerías jurídicas, la Comisión había tomado nota con interés de que, según había informado el Gobierno, a partir de 2014 se había normalizado el otorgamiento de las personerías jurídicas a sindicatos. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno destaca que: i) frente a las nueve personerías jurídicas otorgadas de junio de 2009 a junio de 2014, en el periodo de junio de 2014 a junio de 2018 se otorgaron un total de 46 personerías jurídicas, y ii) dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de noviembre de 2014, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral entregó el 15 de abril de 2016 la personería jurídica al SINTE. La Comisión toma nota, sin embargo, de que la CONUSI manifiesta que: i) las estadísticas que el Gobierno ha presentado no develan cuántas de las 46 personerías se otorgaron a sindicatos del sector público o privado; ii) tampoco indica cuántas personerías jurídicas fueron negadas a sindicatos del sector público o cuántas personerías están en trámite y cuándo es que éstas fueron solicitadas, y iii) se han otorgado hasta el momento cinco personerías a sindicatos en el sector público y está pendiente de aprobación el otorgamiento de personerías jurídicas a nueve sindicatos del sector público pese a que algunas de ellas han sido solicitadas hace más de seis meses. ***Al tiempo que toma debida nota del aumento general del número de personerías jurídicas otorgadas, la Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones de la CONUSI y que garantice que la normalización del proceso de otorgamiento de personerías jurídicas se aplique plenamente a las organizaciones del sector público así como las del sector privado.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) recibidas el 31 de agosto de 2018 y de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) recibidas el 4 de septiembre y 21 de noviembre de 2018 que se refieren a cuestiones tratadas por la Comisión en la presente observación, así como a casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical. La Comisión toma nota adicionalmente de que las observaciones de la CONUSI se refieren también a denuncias de violaciones del Convenio en la práctica, en particular en relación a la implementación de una política que impediría, retrasaría y restringiría la presentación de pliegos de peticiones. ***Al tiempo que toma nota de la respuesta de carácter general del Gobierno a las observaciones de la CONUSI, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios detallados respecto de las mencionadas alegaciones.***

Comisiones tripartitas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los avances logrados por las comisiones que conforman el acuerdo tripartito de Panamá de 2012 y que cuentan con el apoyo técnico de la OIT: la comisión de adecuación (que busca armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio) y la comisión de tratamiento rápido de quejas sobre libertad sindical y negociación colectiva (comisión de quejas). La Comisión toma nota con ***interés*** de que: i) según indica el Gobierno, desde 2016 y hasta la fecha la comisión de quejas ha llegado a una serie de acuerdos mediante los cuales se resolvieron cuestiones que eran objeto de casos ante el Comité de Libertad Sindical y en los que se acordó el cierre de varios de estos casos, y ii) la comisión de adecuación contribuyó de manera decisiva a la elaboración de un proyecto de ley sobre la libertad sindical en el sector público consensuado tripartitamente. La Comisión saluda asimismo las iniciativas y acciones acordadas en la Hoja de ruta aprobada en junio de 2018, entre las que se encuentran la formación de instancias de diálogo bipartito en todas las instituciones públicas y la instalación de un órgano nacional tripartito de carácter consultivo sociolaboral, con la posibilidad de que las actuales dos comisiones tripartitas se trasformen en subcomisiones permanentes de dicho órgano. La Comisión subraya el papel sustancial que las dos comisiones pueden desempeñar para alcanzar la plena aplicación del convenio, ya que no sólo contribuyen a la resolución de conflictos puntuales sino que permiten también construir consensos tripartitos sobre cuestiones de fondo en materia de libertad sindical y negociación colectiva. ***La Comisión alienta a que, con el continuo apoyo técnico de la Oficina, prosiga el fortalecimiento de las comisiones tripartitas e invita a que las distintas autoridades del Estado tomen debidamente en cuenta sus decisiones. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones al respecto.***

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, si bien en virtud del acuerdo núm. 4, de 23 de marzo de 2015, la

comisión tripartita de quejas había recomendado el reintegro de todos los dirigentes sindicales del sector público cuyos despidos se habían dado infringiendo la libertad sindical, algunos dirigentes no habían sido restituidos a sus antiguos puestos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, sin perjuicio de que la comisión de quejas ha solicitado a las distintas instituciones información respecto del reintegro de los dirigentes sindicales, algunas instituciones no han dado respuesta al pedido de información. Al respecto, la Comisión observa que, en sus observaciones, la CONUSI pone de relieve que la Universidad de Panamá, el Centro Regional de Colón, no ha dado respuesta a las notas enviadas por la comisión de quejas, ignorando así el pedido de reintegro de seis dirigentes sindicales que fueron despedidos por su actividad sindical. La Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, en la Hoja de ruta aprobada en junio de 2018, la comisión de quejas ha decidido dar prioridad a los despidos que aún no fueron resueltos en la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Educación. **La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que todos los dirigentes sindicales mencionados en el acuerdo núm. 4 de la comisión de quejas sean reintegrados en sus puestos de trabajo cuanto antes y que el reintegro se lleve a cabo conforme a lo previsto en dicho acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.**

Artículos 4 y 6. Derecho de negociación colectiva. Cuestiones legislativas pendientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado confianza en que la comisión de adecuación iba a seguir haciendo el mayor de los esfuerzos para elaborar fórmulas de avenimiento que permitan armonizar la legislación nacional con el Convenio, tratando cuanto antes todas las cuestiones legislativas pendientes:

- la necesidad de modificar el artículo 514 del Código del Trabajo de manera que el pago de los salarios correspondientes a los días de huelga imputable al patrono no sea impuesto automáticamente por la legislación sino que sea materia de negociación colectiva entre las partes;
- la necesidad de modificar el artículo 427 del Código del Trabajo en el que se obliga a que el número de delegados de las partes en la negociación sea de entre dos y cinco;
- la necesidad de regular mecanismos de solución de conflictos jurídicos y la posibilidad de que los empleadores presenten pliegos de peticiones e inicien un procedimiento de conciliación, y
- la necesidad de garantizar el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos o funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado.

En relación con las disposiciones antes mencionadas relativas al sector público, la Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, se encuentra en primer debate de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de relaciones colectivas laborales del sector público, el cual es el resultado del consenso tripartito dentro de la comisión de adecuación. La Comisión toma nota de que, tanto el Gobierno como la CONUSI destacan que dicho proyecto de ley representa un avance histórico de reivindicación de los derechos a la libertad sindical ya que hasta el momento no hay en la legislación un reconocimiento positivo explícito de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva para los trabajadores del sector público. La Comisión toma nota de que, según lo dispuesto en su artículo 1, el proyecto tiene como propósito garantizar el reconocimiento y plena vigencia de los derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva, así como un adecuado y eficaz sistema de solución de conflictos. La Comisión toma nota con *interés* de que, según indica el Gobierno y según se desprende del texto anexado por el Gobierno, el proyecto de ley garantiza los derechos de las organizaciones sindicales de servidores públicos a celebrar convenciones colectivas, así como a ejercer el derecho a huelga. La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones, la CONUSI indica que sin perjuicio de que el mencionado proyecto de ley aún no ha sido aprobado, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá y la Administración de la Universidad de Panamá acordaron negociar la primera convención colectiva, la cual sería la primera que se firmaría en el sector público. La Comisión toma nota con *interés* de los avances logrados por la comisión de adecuación en la elaboración consensuada del mencionado proyecto que constituye un paso muy importante para adecuar la legislación aplicable al sector público con el convenio. **Tomando debida nota de que el proyecto de ley sobre la regulación de las relaciones colectivas laborales en el sector público ha entrado en debate en la Asamblea Nacional, la Comisión espera firmemente que el mismo será adoptado a la brevedad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.**

En relación con las cuestiones legislativas pendientes relativas al sector privado, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en la Hoja de ruta elaborada, en el mes de junio de 2018, por el moderador de las comisiones del acuerdo tripartito, se acordó que en primer lugar se adecuaría la legislación relativa al sector público, y luego la legislación laboral del sector privado, conforme a los criterios de los órganos de control en lo que se refiere a libertad sindical y negociación colectiva. **La Comisión espera que la comisión de adecuación trate cuanto antes las otras cuestiones legislativas pendientes, incluidas las referentes al Código del Trabajo, de modo de poner el mismo en plena conformidad con el Convenio. Pide asimismo al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.**

Otras cuestiones. Negociación colectiva en el sector marítimo. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que un decreto-ley que había dado lugar en la práctica al rechazo por empleadores del sector marítimo de pliegos de peticiones había sido declarado inconstitucional y había pedido al Gobierno que informara sobre el número de convenios colectivos celebrados en dicho sector. Al respecto, el Gobierno indica que si bien, en septiembre de 2017, la administración de la autoridad del Canal de Panamá completó la renovación de las convenciones colectivas con las seis unidades negociadoras, que aglutinan la fuerza laboral del Canal de Panamá, aún está a la espera de informaciones más

detalladas respecto del sector marítimo. Por otra parte, la Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que entre junio de 2014 y junio de 2018 se celebraron un total de 319 convenciones colectivas a nivel nacional, las cuales han beneficiado a 141 945 trabajadores. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística completa sobre el número de convenciones colectivas firmadas en el país, indicando los sectores de actividad y el número de trabajadores cubiertos, así como el número de convenios colectivos celebrados en el sector marítimo.**

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)

Cuestiones legislativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el nuevo proyecto de ley de relaciones laborales atraviesa, en la actualidad, un proceso de examen en la Comisión Ejecutiva del Gobierno, en el organismo central y en el Consejo Consultivo, para armonizarlo con otra legislación pertinente, debiendo presentarse al Gabinete el proyecto de ley revisado, antes de noviembre de 2016 o a principios de 2017 y debiendo celebrarse las consultas sobre la cuestión en el Consejo Consultivo Tripartito Nacional. **Tomando nota de que la última información remitida por el Gobierno, a través de una memoria anticipada, data del 5 de enero de 2017 y de que no se ha recibido su memoria de 2018, la Comisión espera que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre los resultados de estas consultas y sobre si se promulgó el proyecto de ley de relaciones laborales (2014).**

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para garantizar la efectiva aplicación de la prohibición de la discriminación antisindical en la práctica y que transmitiera estadísticas en cuanto al número de quejas por discriminación antisindical que se presentaron a las autoridades competentes, su seguimiento y sanciones, y las medidas correctivas impuestas. **Tomando nota de que el Gobierno no comunicó ninguna información específica a este respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Facultad del Ministro de evaluar los convenios colectivos en base al interés público. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para armonizar el artículo 50 del proyecto de ley de relaciones laborales (2011) con el principio de que la aprobación de un convenio colectivo sólo puede denegarse si existe un vicio de procedimiento o si no está de conformidad con las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo. Al tiempo que observa, una vez más, que el Gobierno no trasmite una copia del proyecto de ley, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se enmendó el artículo 50 del proyecto de ley de relaciones laborales, y de que, con arreglo a la versión revisada, el Fiscal General no tiene derecho a recurrir contra un laudo por motivos de interés público.

Arbitraje obligatorio en los casos en que haya fracasado la conciliación entre las partes. Al tiempo que recuerda que señaló la conformidad del artículo 78 del proyecto de ley de relaciones laborales (2014), como describió el Gobierno, con el Convenio, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha aclarado aún el contenido del artículo 79 del proyecto de ley de relaciones laborales (2014).

La Comisión confía una vez más en que el Gobierno, teniendo en cuenta los comentarios de la Comisión, garantizará la plena conformidad de toda la legislación revisada con el Convenio. En este sentido, la Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, y le solicita que comunique información detallada sobre el proceso de revisión del proyecto de ley de relaciones laborales.

Paraguay

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), de 27 de mayo de 2016 y 26 de julio de 2018, cuyo contenido está siendo examinado por la Comisión en el marco del presente comentario. Asimismo, la Comisión observa que el Gobierno no respondió a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2010 que se referían al arresto de sindicalistas, ni a las observaciones de la mencionada confederación recibidas el 1.º de septiembre de 2015, las cuales se referían por su parte a despidos y traslados antisindicales, así como a la negativa del Gobierno de registrar ciertas organizaciones sindicales. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione informaciones detalladas con respecto a las observaciones antes mencionadas.**

Artículos 2 y 3 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado que desde hace varios años venía subrayando la falta de conformidad de ciertas disposiciones legislativas con el Convenio y había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para modificar las disposiciones legislativas enlistadas a continuación:

- la exigencia de un número mínimo demasiado elevado de trabajadores (300) para constituir un sindicato de industria (artículo 292 del Código del Trabajo);

- la imposibilidad de que el trabajador, incluso si tiene más de un contrato de trabajo a tiempo parcial, se asocie a más de un sindicato, ya sea de su empresa o industria, profesión u oficio, o institución (artículo 293, c), del Código del Trabajo);
- la exigencia de requisitos excesivos para poder integrar la junta directiva de un sindicato: ser trabajador dependiente de la empresa, industria, profesión o institución, en actividad o con permiso (artículo 298, a), del Código del Trabajo), ser mayor de edad y ser socio activo del sindicato (artículo 293, d), del Código del Trabajo);
- la obligación de las organizaciones sindicales de responder a todas las consultas o pedidos de informes que les sean dirigidos por las autoridades del trabajo (artículos 290, f), y 304, c), del Código del Trabajo);
- el requisito para declarar la huelga, de que ésta tenga por objeto solamente la defensa directa y exclusiva de los intereses profesionales de los trabajadores (artículos 358 y 376, a), del Código del Trabajo), y
- la obligación de asegurar un suministro mínimo, en caso de huelga en los servicios públicos imprescindibles para la comunidad sin que se establezca el requisito de consultar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas (artículo 362 del Código del Trabajo).

Observando que el Gobierno no informa sobre ningún progreso específico en cuanto a medidas tomadas para armonizar el Código del Trabajo con el Convenio, la Comisión pide que se tomen las medidas necesarias en un futuro cercano para modificar estas disposiciones.

Arbitraje obligatorio. La Comisión había pedido también al Gobierno en sus comentarios anteriores, relativos al sometimiento de los conflictos colectivos al arbitraje obligatorio, que, con arreglo a evitar toda ambigüedad, pese a que el artículo 97 de la Constitución de la República del Paraguay derogó tácitamente los artículos 284 a 320 del Código Procesal Laboral al establecer que el arbitraje será optativo, se tomaran las medidas para enmendar o derogar dichas disposiciones. ***Ante la falta de nueva información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que, siguiendo lo dispuesto en la Constitución del Paraguay y a efectos de evitar toda posible ambigüedad en la interpretación, tome las medidas necesarias para enmendar o derogar expresamente los artículos 284 a 320 sobre arbitraje obligatorio.***

La Comisión observa adicionalmente que el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 3019 (véase 381.º informe del Comité de Libertad Sindical, marzo de 2017, párrafo 535) llamó la atención del Gobierno sobre el artículo 292 del Código del Trabajo que subordina la creación de los sindicatos en las instituciones del sector público a la afiliación de determinados porcentajes del personal, los cuales varían en función del tamaño de la institución (un 20 por ciento de afiliados para las instituciones que empleen hasta 500 trabajadores; un 10 por ciento para aquellas que empleen hasta 1 000 trabajadores y un 5 por ciento para aquellas que empleen a más de 1 000). La Comisión recuerda que, si bien la exigencia por la legislación de un número mínimo de afiliados no es, en sí misma, incompatible con el Convenio, el umbral establecido debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 89). Observando que la aplicación de los porcentajes establecidos por el artículo 292 del Código del Trabajo puede resultar en el requerimiento de hasta 100 trabajadores para constituir un sindicato en instituciones de hasta 500 trabajadores y en una exigencia de un número aún mayor de afiliados para instituciones públicas con un alto número de trabajadores y recordando que existen mecanismos que permiten al mismo tiempo evitar la atomización sindical y preservar el derecho de los trabajadores de crear las organizaciones que estimen convenientes, la Comisión pide al Gobierno que celebre consultas con los interlocutores sociales concernidos en aras de asegurar que el artículo 292 del Código del Trabajo no restrinja efectivamente el derecho de los trabajadores del sector público de constituir las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.

La Comisión también toma nota de que el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 3101 (386.º informe, junio de 2017, párrafos 57 y 58) estimó que el artículo 38 del estatuto del educador, al establecer un plazo de cinco años de antigüedad para el goce de licencias sindicales, planteaba problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical y remitió este aspecto legislativo del caso a la Comisión. La Comisión recuerda que las disposiciones que exigen que todos los candidatos a un cargo sindical pertenezcan a una empresa durante cierto período antes de las elecciones, atentan contra el derecho de las organizaciones a redactar sus estatutos y elegir libremente sus representantes (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 102). ***La Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales concernidos, adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 28 del estatuto del educador, de manera a armonizar dicha disposición con el artículo 3 del Convenio.***

En lo que atañe a la revisión de la legislación con miras a ponerla de conformidad con el Convenio, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que ha solicitado asistencia técnica a la OIT y que, por nota núm. 449/17, de 30 de mayo de 2017, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se inició el proceso para la contratación de un experto el cual estará encargado de elaborar un anteproyecto de ley a fin de adecuar el Código del Trabajo a los convenios ratificados sobre la libertad sindical y a los comentarios formulados por la Comisión. ***A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia del anteproyecto de ley tan pronto como esté disponible la versión final y confía, una vez más, que en un futuro próximo y que en consulta con los interlocutores sociales, se tomarán las medidas necesarias para asegurar la plena conformidad de la legislación y la práctica nacionales con las exigencias del Convenio indicadas en la presente observación.***

La Comisión espera firmemente que con la asistencia técnica de la OIT se podrán constatar, en un futuro próximo, progresos tangibles a nivel legislativo con respecto a todas las cuestiones mencionadas y pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

Registro de las organizaciones sindicales y de sus juntas directivas en la práctica. La Comisión toma nota de que la CUT-A alega en sus observaciones que la autoridad administrativa del trabajo, al no hacer lugar al registro y reconocimiento de los cargos vacantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Unidos de la ESSAP (SITUE), incurrió en actos contrarios a la libertad sindical. ***La Comisión toma nota a este respecto de la indicación del Gobierno de que, del 16 de agosto al 23 de octubre de 2018, fueron registradas y reconocidas 77 comisiones directivas y pide al Gobierno que indique si la comisión directiva del SITUE forma parte de las comisiones recientemente registradas.***

La Comisión también toma nota de que el Gobierno manifiesta que, con miras a modernizar el sistema de inscripción automática, facilitar los trámites de constitución de organizaciones sindicales y aumentar la celeridad de dichos procedimientos, ha adoptado varias resoluciones ministeriales. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) la resolución MTESS núm. 740, de 10 de noviembre de 2016, establece nuevos requisitos para la inscripción provisoria de sindicatos, federaciones y confederaciones del sector público y privado; ii) que desde la adopción de dicha resolución el Gobierno ha puesto a disposición de los usuarios de la página web de la institución modelos de documentos constitutivos; iii) la resolución MTESS núm. 792, de 2 de diciembre de 2016, aprobó un procedimiento para la actualización de datos de las organizaciones gremiales vía Internet; iv) la resolución MTESS núm. 856/16 implementa la solicitud de inscripción provisoria de las organizaciones gremiales vía Internet, y v) desde la adopción de las mencionadas resoluciones, se ha observado un aumento en el número de organizaciones gremiales que se han registrado vía la página web del MTESS. Asimismo, la Comisión toma nota de que según los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno, desde 2013 a junio de 2018 un total de 110 sindicatos obtuvieron su inscripción provisoria y 102 sindicatos obtuvieron su inscripción definitiva. Por último, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) el 6 de septiembre se celebró la primera reunión de una mesa de diálogo social, la cual contó con la amplia participación de las centrales sindicales del país y en la que se abordaron diferentes temas, incluyendo el reconocimiento de organizaciones sindicales, y ii) del 16 de agosto de 2018 al 23 de octubre de 2018 fueron inscritos 16 nuevos sindicatos. ***La Comisión toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y le pide que continúe comunicando toda nueva información al respecto.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) de fechas 27 de mayo de 2016 y 26 de julio de 2018 indicando que miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos de la ESSAP (SITUE) fueron objeto de discriminación y de despidos antisindicales. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus observaciones con respecto a dichos alegatos.***

Artículos 1 a 3 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. La Comisión recuerda que, desde la adopción de la ley núm. 213 de 1993 que establece el Código del Trabajo, viene subrayando la falta de conformidad de ciertas disposiciones del Código con el Convenio y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar las disposiciones legislativas enunciadas a continuación:

- la inexistencia de disposiciones legales sobre la protección de los trabajadores que no sean dirigentes sindicales contra todos los actos de discriminación antisindical (el artículo 88 de la Constitución sólo protege contra la discriminación fundada en las preferencias sindicales);
- la falta de sanciones adecuadas por incumplimiento de las disposiciones relativas a la estabilidad sindical y a la injerencia entre organizaciones de trabajadores y de empleadores (la Comisión había señalado que las sanciones previstas en el Código del Trabajo por el incumplimiento de las disposiciones legales sobre este punto en los artículos 385, 393 y 395 no son suficientemente disuasorias, salvo en el caso de reincidencia del empleador en el cual la multa se duplica); en este sentido, la Comisión recuerda, en lo que respecta a la protección contra los actos de discriminación antisindical, que el Comité de Libertad Sindical también pidió al Gobierno que se asegure, en consulta con los interlocutores sociales, la eficacia de procedimientos nacionales para prevenir o sancionar los actos de discriminación (véase 381.º informe, caso núm. 3019, párrafo 548; 365.º informe, caso núm. 2648, párrafo 1132), y
- la demora en la aplicación de la justicia en relación con los actos de discriminación antisindical y de injerencia.

A este respecto, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que ha solicitado asistencia técnica a la OIT con miras a adecuar el Código del Trabajo y el Código Procesal Penal a los convenios ratificados. De igual forma, la Comisión toma nota de que, por nota MTESS núm. 449/17 de fecha 30 de mayo de 2017, se inició el proceso para la contratación de un experto, el cual estará encargado de elaborar un anteproyecto de ley a fin de adecuar el Código del Trabajo a los convenios ratificados en materia de libertad sindical y a los comentarios formulados por la Comisión. ***La Comisión pide al Gobierno que comunique copia del anteproyecto de ley tan pronto como esté disponible la versión final. Recordando que viene solicitando las mencionadas reformas legislativas desde 1994, la Comisión confía, una vez***

más, en que, en un futuro próximo, se tomarán las medidas necesarias para asegurar la plena conformidad de la legislación y la práctica nacionales con las exigencias de los artículos 1 a 3 del Convenio.

Artículos 1 y 6. Protección contra la discriminación antisindical de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias a fin de garantizar a los funcionarios y empleados públicos abarcados por el convenio una protección legislativa adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los derechos a la estabilidad sindical, la protección contra actos antisindicales y el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado de los trabajadores de los sectores público y privado se encuentran expresamente previstos en los artículos 88, 94 y 102 de la Constitución; ii) en virtud de la ley núm. 1626/00, un funcionario público amparado por la estabilidad laboral puede ser únicamente destituido previo sumario administrativo (artículo 63), y iii) la Secretaría de la Función Pública adoptó la resolución SFP núm. 415/16 de fecha 30 de mayo de 2016 por la cual se aprueba el Protocolo de intervención y guía de atención para casos de discriminación y acoso laboral en la función pública. La Comisión observa que dicha resolución: i) pese a que contiene una enumeración amplia y no limitativa de motivos de discriminación, no menciona explícitamente la afiliación o actividad sindical, y ii) prevé que cualquier denuncia relativa a hechos de discriminación o de acoso laboral puede ser presentada ante la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública, la cual no cuenta, sin embargo, con el poder de imponer sanciones. ***Al tiempo que pide al Gobierno que comunique informaciones con respecto a las denuncias relativas a actos de discriminación antisindical presentadas en virtud del mencionado Protocolo ante la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, la Comisión observa que la legislación aplicable a los trabajadores públicos sigue sin contar con disposiciones que prohíban de manera explícita los actos de discriminación antisindical abarcados por el Convenio y que prevean una protección eficaz al respecto. Recordando que viene solicitando las mencionadas reformas desde 2004, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para la adopción de disposiciones legislativas que prohíban de manera explícita la discriminación antisindical en el sector público y que establezcan mecanismos que garanticen a todos los trabajadores del sector público abarcados por el Convenio una protección eficaz contra los actos de discriminación antisindical, incluyendo procedimientos rápidos e imparciales, con recursos y sanciones suficientemente disuasivos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.***

Artículo 4. Fomento de la negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara medidas para estimular y promover la negociación colectiva. La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno en las que indica que: i) el 18 de abril de 2018, fueron establecidas por decreto presidencial (núm. 5159/16) las atribuciones del Consejo Consultivo Tripartito que abarcan la facultad de emitir recomendaciones sobre anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales, elaborar o encargar informes y estudios sobre diferentes temas, incluyendo la libertad sindical; ii) se celebró el 6 de septiembre de 2018 la primera reunión de la mesa de diálogo social, la cual contó con la amplia participación de las centrales sindicales del país, y en la que se abordaron diferentes temas, incluyendo la libertad sindical y el diálogo social, y iii) el 16 de agosto y el 23 de octubre de 2018 fueron registrados dos contratos colectivos de condiciones de trabajo, del sector público y privado. ***La Comisión saluda la primera reunión de la mesa de diálogo social e invita nuevamente al Gobierno a que tome medidas para estimular y promover la negociación colectiva, inclusive por medio de la mencionada mesa. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que informe sobre el número de convenios colectivos concluidos en el país y en vigor, e indique el número de trabajadores y los sectores abarcados por los mismos.***

Perú

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas por la Oficina el 2 de septiembre de 2018, relativas a la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, incluyendo alegaciones de limitación al otorgamiento de licencias sindicales en el sector de la educación. ***La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.***

La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que enviara sus comentarios en relación con las alegaciones de violación en empresas e instituciones públicas específicas mencionadas en las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 2017. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.***

Artículo 2 del Convenio. Derecho de todos los trabajadores, sin distinción alguna, de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para revisar el contenido de la ley núm. 28518, su respectivo reglamento y la Ley General de Educación de manera que se reconozca de manera expresa la libertad sindical bajo modalidades formativas. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de la CATP que denuncian una utilización abusiva de las modalidades formativas por parte de los empleadores, las cuales se convertirían en una manera de encubrir una relación laboral y pagar por debajo del salario mínimo. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en relación con la ley núm. 28518, el Gobierno indica que: i) pese a que las modalidades formativas cuentan con un componente de laboralidad, su finalidad no es la producción de

bienes o servicios, sino más bien la formación de competencias y capacidades de los beneficiarios, a modo de facilitar su empleabilidad y productividad laboral, por lo que los mismos no pueden ser calificados como trabajadores y se encontrarían excluidos del ámbito de protección del artículo 2 del Convenio; ii) en la actualidad se está trabajando en la adopción de la ley de prácticas pre profesionales y profesionales exclusiva para el sector público y se está revisando el contenido de la ley núm. 28518 a efectos de plantear su posible modificatoria e incluir los comentarios formulados por esta Comisión; iii) si bien la ley núm. 28518 excluye las modalidades formativas laborales de la normatividad laboral vigente, dicho derecho sí está reconocido por el ordenamiento jurídico peruano en su conjunto en la medida en que la Constitución reconoce de manera amplia los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga e incluso otorga a los convenios internacionales ratificados valor constitucional; iv) la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta y reconoce el derecho a la libertad sindical de modo amplio y sin fundarse en la existencia de un vínculo laboral con el empleador; a este respecto, en la base de datos del Registro Sindical, se advierte la existencia de organizaciones de trabajadores autónomas e independientes, y v) en la práctica, la autoridad administrativa del trabajo no ha denegado ninguna solicitud de registro de una organización sindical conformada por personas bajo modalidades formativas. ***Al tiempo que toma debida nota de la amplitud del reconocimiento de la libertad sindical por la Constitución, la Comisión confía en que la futura adopción de la ley de prácticas pre profesionales y profesionales exclusiva para el sector público así como la mencionada revisión de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales permitirán a la brevedad que se reconozca de manera explícita la libertad sindical de los trabajadores bajo modalidades formativas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo avance a este respecto.***

En relación con las restricciones al ámbito de la libertad sindical contenidas en el artículo 153 de la Constitución, el cual impide a los jueces y fiscales de participar en política, sindicarse y declararse en huelga, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno según la cual, en la práctica, los jueces y fiscales de diversos órganos jurisdiccionales gozan de dicho derecho y que en la actualidad existen por lo menos tres organizaciones de jueces y fiscales, a saber la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas. En relación con las restricciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución el cual no reconoce el derecho de sindicación a los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza o de dirección, la Comisión toma nota de las observaciones de la CATP indicando que existe una falta de voluntad política del Gobierno para realizar los cambios legislativos respectivos. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la norma jurídica que impide la sindicalización de los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza o de dirección tiene carácter constitucional, de manera que cualquier norma de menos jerarquía debe adecuarse a los parámetros constitucionales y que el artículo 40 de la Ley del Servicio Civil (LSC) se limita a reiterar la excepción constitucional. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 9, 1), del Convenio, las únicas excepciones autorizadas en lo que respecta al ámbito de aplicación del mismo son los miembros de la policía y de las fuerzas armadas; y dichas excepciones deben interpretarse en un sentido restrictivo. La Comisión desea asimismo recordar que el artículo 2 del Convenio otorga el derecho básico de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, a todos los trabajadores «sin ninguna distinción», incluidos todos los funcionarios públicos, sea cual sea la naturaleza de sus funciones, con las únicas excepciones autorizadas por el Convenio para los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. No obstante, la Comisión ha afirmado que puede prohibirse a los funcionarios de categoría superior el derecho a afiliarse a sindicatos siempre que tengan el derecho de crear sus propias organizaciones para defender sus intereses (véanse Estudio General de 2013, Relaciones de trabajo en la administración pública y negociación colectiva, párrafos 43 y siguientes, y Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 66). ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las disposiciones pertinentes de su ordenamiento jurídico de manera de asegurar el ejercicio del derecho de organización, en la ley y en la práctica, de jueces y fiscales así como del personal de dirección y de confianza de la administración pública. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.***

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción. Votación para declarar la huelga. En sus comentarios precedentes, la Comisión había pedido al Gobierno que indicara si el artículo 62 revisado del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (TUO de la LRCT) se aplica a la administración pública. La Comisión toma debida nota de la respuesta del Gobierno que indica que el artículo 72 del TUO de la LRCT y el artículo 80 del reglamento de la LSC configuran la huelga como una acción colectiva adoptada por la voluntad mayoritaria; que el artículo 62 del reglamento del TUO de la LRCT prevé que la decisión de declaratoria de la huelga debe ser adoptada por «más de la mitad de los trabajadores votantes en la asamblea»; y que si bien dicha disposición no ha sido recogida de forma expresa por la LSC ni por su respectivo reglamento, el TUO de la LRCT y su respectivo reglamento se aplican de manera supletoria al LSC en virtud de su artículo 40, y, por consiguiente, el artículo 62 del reglamento de la LRCT resulta aplicable a las huelgas en la administración pública.

Calificación de la ilegalidad de la huelga. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que la calificación de ilegalidad de la huelga en el sector privado no correspondiera a la administración del trabajo sino a un órgano independiente. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona sus observaciones al respecto. En relación con la administración pública, la Comisión había pedido al Gobierno que comunicara informaciones sobre la comisión de apoyo al servicio civil y que indicara si los artículos 86, 87 y 88 del reglamento de la LSC eran aplicables a las huelgas en el sector de la educación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la comisión de apoyo al servicio civil es competente para resolver la

improcedencia e ilegalidad de la huelga, y en caso de controversia, determinar los servicios mínimos de los servicios indispensables y esenciales o elegir al presidente del tribunal arbitral. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que debido a que la mencionada comisión no ha sido establecida todavía: i) aún corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pronunciarse sobre esta cuestión, y ii) por el momento el Gobierno no está en condiciones de remitir información sobre las reglas que rigen el funcionamiento de la comisión, su composición y su naturaleza ni precisar si las huelgas del sector educativo se encuentran dentro del ámbito de competencia de la mencionada comisión. ***A la luz de lo anterior y observando que la comisión de apoyo al servicio civil no ha sido establecida todavía, la Comisión vuelve a pedir al Gobierno que tome a la brevedad las medidas necesarias para garantizar que la calificación de la huelga, tanto en el sector privado como público no corresponda al Gobierno sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su confianza. A este respecto, la Comisión confía en que la comisión de apoyo al servicio civil se establecerá a la brevedad y que se configurará como un órgano auténticamente independiente. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo avance al respecto.***

Definición de los servicios mínimos en los servicios públicos esenciales. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: i) el artículo 82 del TUO de la LRCT establece que los trabajadores deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir la interrupción total de los servicios públicos esenciales, así como asegurar la continuidad de los servicios y actividades que lo exijan; ii) a raíz de las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical, fue modificado en 2006 el artículo 68 del reglamento del TUO de la LRCT y el texto enmendado prevé que en caso de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben proporcionar un servicio esencial durante la huelga, la autoridad administrativa del trabajo designará a un órgano independiente, la comisión de apoyo al servicio civil, para que los determine, siendo dicha decisión asumida como propia por la referida autoridad; iii) la comisión de apoyo al servicio civil no ha sido establecida todavía y no existe una regulación al respecto, y iv) sin embargo el 5 de julio de 2018 fue pre publicado un proyecto de decreto supremo que modificará el reglamento de la LRCT y establecerá que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determinará, por resolución, las características técnicas que debe cumplir dicho órgano así como sus honorarios referenciales, de manera a regular integralmente el procedimiento de divergencias sobre los servicios mínimos en los servicios públicos esenciales. A la luz de lo anterior, la Comisión entiende que la comisión de apoyo al servicio civil será el órgano competente para determinar los servicios mínimos respecto de todas las huelgas que afecten un servicio esencial, que este último sea asegurado por funcionarios de la administración pública o por trabajadores del sector privado. ***La Comisión confía en que la comisión de apoyo al servicio civil se establecerá a la brevedad y que se configurará como un órgano auténticamente independiente. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.***

Derecho de las organizaciones sindicales de celebrar reuniones y de poder acceder a los lugares de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que los numerales 4 y 5 de las disposiciones complementarias finales del decreto supremo núm. 017-2007-ED definen como faltas graves de los directores y subdirectores de los centros educativos el hecho de facilitar el local escolar para reuniones de carácter sindical y permitir el proselitismo político y/o sindical en las instituciones educativas. ***Observando que el Gobierno no proporciona informaciones al respecto, la Comisión le pide una vez más que revise las disposiciones finales del decreto supremo antes mencionado de manera que los directores de los centros educativos puedan acordar con las organizaciones sindicales concernidas modalidades de acceso a los lugares de trabajo que no perjudiquen el funcionamiento eficiente de dichos centros y que proporcione informaciones sobre todo avance a este respecto.***

Artículo 5. Creación de federaciones y confederaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al tiempo que notaba que en virtud del artículo 57 del reglamento de la LSC se requerían dos organizaciones sindicales del mismo ámbito para constituir una federación, había pedido al Gobierno que indicara las normas que rigen el funcionamiento de las confederaciones que agrupan federaciones de trabajadores del sector privado y de la administración pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el marco regulatorio relativo a las federaciones y confederaciones del sector privado lo constituye el TUO de la LRCT y su reglamento, mientras que la normativa relativa al sector público está compuesta por la LSC y su reglamento, y ii) con respecto a las federaciones y confederaciones mixtas, es decir integradas simultáneamente por sindicatos y trabajadores del sector privado y público, la posibilidad de constituir y afiliarse a tales organizaciones se encuentra garantizada por el artículo 28 de la Constitución Política y por la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, disposiciones que prevén de manera general el derecho de los trabajadores de constituir las federaciones sindicales que estimen convenientes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas por la Oficina el 2 de septiembre de 2018, que denuncian actos de discriminación antisindical y violaciones a la negociación colectiva en la práctica. ***La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.***

La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones planteadas en 2015 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial-Lima-Perú (SUTRAPOJ) y relativas a alegadas violaciones del Convenio en la práctica.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. Procesos judiciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la duración de los procesos laborales ordinarios y constitucionales relativos a afectaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, así como sobre las sanciones impuestas por violaciones a estos derechos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los expedientes referidos a la afectación de los derechos de libertad sindical son tramitados bajo el proceso abreviado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; ii) en el 2016 seis expedientes relativos a la afectación de derechos sindicales fueron resueltos, en 2017 dicho número aumentó a 22 y en lo que va de 2018 un total de 11 expedientes han sido resueltos; iii) la implementación progresiva de la Nueva Ley Procesal del Trabajo abarca hoy 23 de los 35 distritos judiciales del país y ha dado lugar, especialmente en segunda instancia, a una reducción de los plazos de resolución de los recursos, y iv) debido a la limitada asignación de recursos y otros factores, los procesos laborales en primera instancia relativos a la afectación de derechos sindicales han incrementado su duración, pasando de 170 días en 2016 a 379 días en 2017 y que, en 2018, la duración promedio será de 635 días. La Comisión recuerda que la existencia de disposiciones legislativas que prohíben los actos de discriminación antisindical es insuficiente si éstas no van acompañadas de procedimientos rápidos y eficaces que garanticen su aplicación en la práctica (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 190). **Observando con preocupación que, a pesar de la progresiva implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la duración de los procesos laborales en primera instancia relativos a la afectación de derechos sindicales ha aumentado considerablemente en los últimos tres años, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con las autoridades pertinentes, tome las medidas necesarias para disminuir la duración de los mismos y garantizar que den lugar a una pronta resolución. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance al respecto y que continúe proporcionando información actualizada sobre la duración de los procesos laborales relativos a las afectaciones de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, incluyendo los procesos ordinarios, constitucionales y en segunda instancia. Adicionalmente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las sanciones impuestas en casos de discriminación antisindical.**

Trabajadores con contratos a plazo fijo del sector privado. En sus comentarios precedentes, tomando nota de las observaciones de la CSI así como de la existencia de varios casos del Comité de Libertad Sindical respecto de esta cuestión, la Comisión había pedido al Gobierno que sometiera el tema de la protección contra la discriminación antisindical de los trabajadores con contrato a plazo fijo al diálogo con las organizaciones de trabajadores y empleadores concernidas y que informara del resultado de los mismos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno según la cual: i) la Ley General del Trabajo y la Nueva Ley Procesal del Trabajo establecen respectivamente sanciones a nivel administrativo y judicial, así como mecanismos más rápidos y ágiles de manera a facilitar el cumplimiento de las normas legales en materia de derechos fundamentales laborales; ii) el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia de diálogo tripartito, fue reinstalado el 24 de julio de 2018, y contará con la asistencia de una comisión permanente en materia de trabajo en el marco de la cual se desarrollará una agenda de diálogo social laboral la cual abordará varios temas, incluyendo la libertad sindical, negociación colectiva, arbitraje y huelga. La Comisión toma nota de las indicaciones generales del Gobierno relativas a los mecanismos de cumplimiento de la legislación laboral. **A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las eventuales medidas específicas tomadas por la inspección del trabajo para asegurar una protección eficaz de los trabajadores con contratos a plazo fijo contra posibles no renovaciones antisindicales de sus contratos de trabajo. La Comisión saluda la reactivación del CNTPE e invita al Gobierno a que utilice dicho foro tripartito para examinar la protección contra la discriminación antisindical de los trabajadores con contratos a plazo fijo en el sector privado. Observando que en varios casos ante el Comité de Libertad Sindical relativos a esta cuestión (véanse especialmente los casos núms. 3065 y 3170) el Gobierno se refirió a la posibilidad de revisar las disposiciones de la Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales que permitirían la utilización recurrente de contratación de corta duración, la Comisión invita al Gobierno a que incluya este aspecto legislativo en las consultas tripartitas. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las mencionadas discusiones y sus resultados.**

Trabajadores con contratos a plazo fijo del sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que sometiera la cuestión de la protección contra la discriminación antisindical de los trabajadores empleados mediante contratos administrativos de servicios (CAS) al diálogo con las organizaciones sindicales del sector público y que informara del resultado de los mismos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) la reforma en curso del servicio civil tiene por finalidad establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, y ii) los CAS surgieron como un régimen temporal, que progresivamente debe ser sustituido por la Ley del Servicio Civil y que el derecho de libertad sindical de estos trabajadores se encuentra expresamente reconocido en el literal i) del artículo 6 del decreto legislativo núm. 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Asimismo, la Comisión toma nota de que según la CATP, el Gobierno ha realizado despidos masivos de los trabajadores empleados mediante CAS. **Al tiempo que toma nota de que los CAS serán gradualmente sustituidos y que dicho régimen prevé de manera expresa el derecho de libertad sindical, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que someta la cuestión de la protección contra la discriminación antisindical de los**

trabajadores empleados mediante CAS al diálogo con las organizaciones sindicales del sector público y que informe del resultado del mismo.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Trabajadores bajo modalidades formativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que revisara la legislación pertinente de manera a reconocer el derecho de negociación colectiva de los trabajadores bajo modalidades formativas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno: i) reitera que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales (ley núm. 28518), las mencionadas modalidades no están sujetas a la normatividad laboral vigente, sino a una específica; ii) la finalidad de las actividades formativas no es la producción de bienes o servicios, sino más bien la formación de competencias y capacidades de los beneficiarios, por lo que los mismos no pueden ser calificados como trabajadores, y iii) el Gobierno se encuentra trabajando en la adopción de la ley de prácticas pre profesionales y profesionales exclusiva para el sector público y que se está revisando el contenido de la ley núm. 28518 a efectos de plantear su posible modificatoria e incluir los comentarios formulados por esta Comisión. La Comisión quiere recordar que, en virtud del Convenio, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva tiene un alcance general y que la misma debería abarcar en particular a los aprendices (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 209). En este sentido, la Comisión subraya que, en la medida en que los trabajadores bajo modalidades formativas participan en la actividad de una empresa o una institución pública, los mismos deben disponer del derecho de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo y de empleo. **Al tiempo que toma nota de la futura adopción de la ley de prácticas pre profesionales y profesionales exclusiva para el sector público y de la revisión de la ley núm. 28518, la Comisión espera que el Gobierno efectuará los cambios legislativos necesarios de manera que se reconozca de manera expresa el derecho de negociación colectiva de los trabajadores bajo modalidades formativas. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.**

Libre determinación del nivel de negociación. La Comisión recuerda que la cuestión de la libre determinación por las partes del nivel de la negociación ha sido objeto de su atención desde hace varios años y que ha dado lugar también a una serie de casos ante el Comité de Libertad Sindical (véanse 338.º informe, caso núm. 2375, párrafo 1227; 362.º informe, caso núm. 2826, párrafo 1298; y el 387.º informe, caso núm. 3170, párrafo 589). Después de haber recordado que el nivel de la negociación debe ser una cuestión negociada entre las partes, la Comisión había tomado nota de la modificación del artículo 61 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo por el decreto supremo núm. 014-2011-TR en virtud del cual las partes tienen la facultad de interponer el arbitraje potestativo en caso de no ponerse de acuerdo en la primera negociación sobre el nivel de la misma, siempre que durante tres meses la negociación haya resultado infructuosa. A este respecto, la Comisión toma adicionalmente nota de que el artículo 61 del reglamento fue modificado nuevamente por el decreto supremo núm. 09-2017-TR de 31 de mayo de 2017 que, además de los tres meses antes mencionados, añade la condición de que hayan transcurrido al menos seis reuniones de trato directo o de conciliación antes de poder acudir al mencionado arbitraje potestativo. La Comisión observa sin embargo que sigue vigente el artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT) que establece que, de no existir convención colectiva, a falta de acuerdo sobre el nivel de la misma, la negociación se llevará a nivel de empresa, y seguidamente establece que, de existir convención en algún nivel, para entablar otra en un nivel distinto, con carácter sustitutorio o complementario, es requisito indispensable contar con el acuerdo de las partes. Observando que, en virtud del artículo 45 de la LRCT, en caso de desacuerdo entre las partes y de no existir convención colectiva, la legislación sigue dando preeminencia a la negociación a nivel de empresa, la Comisión recuerda que es preciso garantizar que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, sea éste a nivel empresarial, multiempresarial, sectorial o nacional y que debe corresponderles a las partes la determinación del mismo. **La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que entable una consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores sobre las modificaciones al artículo 45 de la LRCT que sean necesarias para asegurar que el nivel de la negociación colectiva sea determinado libremente por las partes concernidas así como sobre el mecanismo de solución de los conflictos relativos al nivel en que debe realizarse la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.**

Mecanismos para la determinación de los presidentes de los tribunales arbitrales. La Comisión toma debida nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de la designación por sorteo, en caso de desacuerdo entre las partes, de los presidentes de los tribunales arbitrales. La Comisión toma nota con *interés* de que dicho mecanismo se aplica tanto al sector privado como al sector público.

Artículos 4 y 6. Promoción de la negociación colectiva. Trabajadores del sector público. La Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical le remitió el examen de los aspectos legislativos del caso núm. 3160 relativos a las limitaciones a la negociación colectiva en materia de remuneraciones en el sector público (véase 382.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 518). En sus comentarios anteriores, la Comisión había instado al Gobierno a que, en consulta con las organizaciones sindicales concernidas, tomara las medidas necesarias para revisar la Ley del Servicio Civil, de 2013, así como toda la normativa pertinente de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) si bien el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las restricciones absolutas a la negociación colectiva en el sector público previstas en la Ley del Servicio Civil (expedientes núms. 0025-2013-PI/TC, 003-2014-PI/TC, 008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC) y en las leyes de presupuestos de 2013, 2014 y 2015 (expedientes núms. 0003-2014-PI/TC, 004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC), la

negociación colectiva es un derecho fundamental de «configuración legal» cuyo contenido y alcance específico corren a cargo del legislador; ii) el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República para que apruebe la regulación de la negociación colectiva para el sector público y, entre tanto, se configura una *vacatio sententiae*, es decir, se mantienen válidas las prohibiciones de negociación colectiva para incrementos salariales; iii) mediante la ley núm. 30823, adoptada el 19 de julio de 2018, se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros, en materia de gestión económica, incluyendo la negociación colectiva en el sector público, y iv) varios proyectos de ley referentes a la negociación colectiva en el sector público fueron presentados al Congreso de la República. A este respecto, la Comisión toma nota de que, el 18 de octubre de 2018, a raíz de una iniciativa parlamentaria, el Congreso de la República aprobó una ley de negociación colectiva en el sector estatal, que, según establece su artículo 1, tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones de trabajadores estatales de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y lo señalado en este Convenio así como en el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y que, según su artículo 4, las materias negociables comprenden las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica. La Comisión observa, sin embargo, que no ha sido informada de la promulgación de dicha ley por parte del Presidente de la República. En relación con la negociación colectiva de los elementos de remuneración de los trabajadores del sector público, la Comisión recuerda, por una parte, la existencia de mecanismos que permiten compaginar los equilibrios presupuestarios con el ejercicio genuino de la negociación colectiva en dicho sector y, por otra, la importancia de que la legislación en su conjunto, inclusive las leyes de presupuestos, cumpla con el convenio. ***Al tiempo que subraya las obligaciones específicas del Gobierno en virtud del Convenio núm. 151, respecto del derecho de los empleados públicos que trabajan en la administración del Estado de participar en la determinación de sus remuneraciones, la Comisión espera firmemente que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la entrada en vigor y aplicación de una legislación que permita que, de conformidad con el Convenio, los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.***

Polonia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Comisión Nacional del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc», recibidas el 9 de agosto de 2018. Solidarnosc alega que la Ley de Defensa Nacional prohíbe que los soldados de las fuerzas de defensa territorial que además trabajan en el sector privado constituyan sindicatos y se afilien a éstos en el sector privado. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se está elaborando un proyecto legislativo para enmendar dicha ley y garantizar así que los soldados de las fuerzas de defensa territorial que prestan servicio de manera rotatoria gocen de derechos sindicales, a menos que la actividad sindical esté relacionada con su servicio militar; dicho proyecto se presentará al Comité Permanente del Consejo de Ministros. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo acontecimiento a este respecto.*** Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, alegando infracciones del principio de consulta verdaderamente tripartita a escala nacional, y de la detallada respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ), recibidas el 27 de agosto de 2018, que están relacionadas con las cuestiones suscitadas por la Comisión a continuación.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su confianza en que el proyecto de ley sobre los sindicatos se adoptaría en un futuro próximo para garantizar el derecho de todos los trabajadores, sin ninguna distinción, incluidos los trabajadores sin un contrato de trabajo, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, con la única excepción del personal de las fuerzas armadas y de la policía. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre los sindicatos se firmó el 25 de julio de 2018 y está previsto que entre en vigor el 1.º de enero de 2019. La Comisión toma nota con **satisfacción** de que, en virtud de la ley enmendada, el derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas se extenderá a las «personas que trabajan por dinero», lo que incluye no solamente a los trabajadores sino también a toda persona que desempeñan un trabajo a cambio de una remuneración, independientemente de la base jurídica de la relación contractual. El Gobierno indica que la nueva definición de «persona que trabaja por dinero» conlleva a que ahora también podrán afiliarse a sindicatos las personas contratadas en virtud de un mandato, un contrato de prestación de servicios, un contrato para desempeñar tareas específicas, así como los trabajadores por cuenta propia (por ejemplo, comerciantes individuales y personas que dirigen un negocio unipersonal, siempre y cuando no sea en el sector agrícola). A los voluntarios, pasantes y demás personas que trabajen sin recibir remuneración también se les garantizará el derecho de afiliarse a sindicatos en los términos y las condiciones que especifiquen los estatutos de los sindicatos en cuestión.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78, 6), de la Ley sobre la Administración Pública, los funcionarios de la administración pública que ocupan puestos de grado superior no pueden ejercer funciones sindicales, y

solicitó al Gobierno que enmendara esa disposición para garantizar el derecho de todos los trabajadores de la administración pública de elegir libremente a sus representantes, así como de desempeñar funciones sindicales, en sus respectivos sindicatos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su intención de eliminar esta discrepancia con ocasión de la inminente revisión de la ley. ***La Comisión espera firmemente que se modifique sin más demora el artículo 78, 6), de la Ley sobre la Administración Pública en consulta con los interlocutores sociales. Pide al Gobierno que transmita un ejemplar de la ley modificada.***

Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 78, 3), de la Ley sobre la Administración Pública prohíbe a los funcionarios públicos que participen en huelgas o acciones de protesta que interfieran en el funcionamiento normal de la administración de la oficina. La Comisión indicó que confiaba en que el Gobierno consideraría la posibilidad de establecer un procedimiento para determinar exactamente qué funcionarios enumerados en el artículo 19, 3), de la Ley sobre Conflictos Laborales Colectivos, así como en el artículo 2 de la Ley sobre la Administración Pública, ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y respecto de los cuales, en consecuencia, el derecho de huelga puede limitarse. A este respecto, la Comisión sugirió el establecimiento de un órgano tripartito encargado de identificar a los funcionarios públicos pertinentes y la posibilidad de que todo desacuerdo fuera resuelto por un órgano independiente. La Comisión tomó nota de la recomendación que formuló el Comité de Libertad Sindical en el mismo sentido en lo relativo al caso núm. 3111 (véase 378.º informe, junio de 2016, párrafos 647 a 718). La Comisión acoge con agrado la indicación del Gobierno, según la cual se ha presentado ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley relativo al derecho de huelga de los funcionarios públicos. ***Pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a la hora de enmendar la Ley sobre la Administración Pública para garantizar el derecho de huelga de los funcionarios públicos, con la única excepción posible de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, que se refieren a varios actos de discriminación antisindical, y en particular al despido de más de 20 representantes del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc». ***La Comisión pide al Gobierno que presente sus comentarios sobre estas observaciones, en especial en lo relativo al despido de representantes del Solidarnosc a los que aún no se ha readmitido en sus puestos.*** Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones del Solidarnosc y de la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ), recibidas el 9 y el 27 de agosto de 2018, respectivamente, y los comentarios al respecto del Gobierno.

Trabajadores abarcados por el Convenio. La Comisión recuerda que el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 2888) había solicitado al Gobierno que garantizase la protección adecuada de todos los trabajadores y sus representantes frente a actos de discriminación antisindical así sean o no considerados como empleados en virtud del Código del Trabajo. El Comité de Libertad Sindical había referido los aspectos legislativos de este caso a la Comisión. A este respecto, la Comisión toma nota de que el 25 de julio de 2018 se modificó la Ley sobre los Sindicatos (ATU) y de que las enmiendas entrarán en vigor el 1.º de enero de 2019. La Comisión constata que: i) el artículo 2, 1), de la ATU se ha modificado para reconocer el derecho de constituir un sindicato y afiliarse a éste no solamente a los empleados sino también a las «personas que trabajan por dinero», personas a las que se define como aquellas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración, siempre y cuando no empleen a ninguna otra persona para realizar este tipo de trabajo e independientemente de la tipificación jurídica de su empleo; ii) en los párrafos 5 a 7 también se amplía el derecho de constituir un sindicato y afiliarse a éste a los pensionistas, las personas que reciben una pensión de invalidez, los desempleados, los voluntarios, los pasantes y otras personas que trabajan en persona sin que se les pague, así como a personas a las que se destina a trabajar con empleadores para realizar servicios de reemplazo, agentes de policía, guardias fronterizos, empleados de los servicios de aduanas, funcionarios de prisiones, bomberos y empleados de la Auditoría Superior del Estado; iii) los nuevos artículos 3 a 5 de la ATU amplían la prohibición del trato desigual basado en la pertenencia a un sindicato o la participación en actividades sindicales a las categorías mencionadas de trabajadores; iv) el nuevo artículo 32, 1), de la ATU extiende la protección especial contra la terminación de un contrato y la modificación unilateral de la remuneración o las condiciones de trabajo a las «personas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración», que sean representantes sindicales, y v) el artículo 26, 2), de la ATU modificada establece que las organizaciones sindicales deben tener derecho a tomar posición en asuntos relativos a los intereses colectivos y los derechos de las «personas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración». La Comisión toma nota con **satisfacción** de que el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre discriminación antisindical de la ATU comprende nuevas categorías de trabajadores y que no se limita únicamente a los empleados.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. Protección judicial rápida y eficaz. La Comisión tomó nota en comentarios anteriores de que los procedimientos judiciales podían llevar hasta dos años en los casos de denuncias por despido antisindical. A este respecto, la Comisión constató la intención del Gobierno de considerar la posibilidad de introducir medidas nuevas en el Código de Procedimiento Civil que garantizarían a los empleados afectados el derecho a permanecer en su puesto de trabajo durante el procedimiento. La Comisión toma nota de

que el Gobierno se refiere una vez más a la posible reforma legislativa del Código de Procedimiento Civil, y en especial a la revisión del artículo 477 y la adición del artículo 755. El Gobierno indica que con estas modificaciones se otorgaría a los tribunales la facultad de ordenar medidas en favor de los empleados permitiéndoles permanecer en su puesto de trabajo hasta la resolución final del tribunal en la materia. ***Al tiempo que saluda la iniciativa de conceder a los tribunales la facultad de permitir que los trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo en espera de la resolución final sobre la denuncia por despido antisindical, la Comisión confía en que el Gobierno pronto podrá informar sobre la adopción de las modificaciones en cuestión.***

En comentarios anteriores, la Comisión también solicitó al Gobierno que proporcionara sus observaciones sobre el número extremadamente bajo de sanciones impuestas en relación con la cantidad de acciones judiciales emprendidas en virtud del artículo 35 de la ATU por casos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) la aplicación de sanciones civiles y penales queda a discreción de los tribunales, de acuerdo con el principio de independencia judicial que garantiza la Constitución polaca, y ii) el artículo 35, 1), de la ATU se ha modificado con vistas a ofrecer una definición más detallada de los actos de discriminación antisindical prohibidos y lograr que la intervención de las autoridades que otorgan protección jurídica sea más eficaz. Al tiempo que saluda que, mediante la modificación del artículo 35, 1), se haya ampliado la lista de actos antisindicales sancionables, la Comisión observa que la definición de discriminación antisindical ha evolucionado poco. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre el número de sanciones impuestas en virtud del nuevo artículo 35, 1), de la ATU, y que informe sobre el modo en que los tribunales abordan la carga de la prueba al aplicar la disposición mencionada.***

Sanciones y compensación efectivas para prevenir la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, según las informaciones recibidas por el Gobierno, con arreglo a la legislación y la práctica judicial polacas: i) se puede readmitir en su puesto u ofrecer una compensación a los trabajadores objeto de discriminación antisindical; ii) mientras que los representantes sindicales reintegrados en sus puestos tienen derecho a un pago completo retroactivo de su salario íntegro, el monto adeudado a otros trabajadores reintegrados se limita a dos meses de salario; iii) las víctimas de despidos antisindicales a las que no se readmita en su puesto por decisión del tribunal recibirán una compensación de hasta tres meses de salario, y iv) la cuantía de las multas impuestas en la práctica por discriminación antisindical parecen ser muy bajas (entre 375 y 425 dólares de los Estados Unidos). Con el fin de asegurar que se fijan y aplican sanciones lo suficientemente disuasorias para prevenir futuros actos de discriminación antisindical, la Comisión había solicitado al Gobierno, en diversos comentarios, que tome las medidas necesarias para aumentar la cuantía de las multas que se aplican en caso de actos de este tipo, así como elevar el importe de la compensación por despido antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha previsto modificar las disposiciones jurídicas con vistas a aumentar las sanciones que se aplican a los actos de discriminación antisindical. ***Al tiempo que saluda el hecho de que los tribunales, como se describe en las observaciones de la CSI, ordenen que se readmita a trabajadores víctimas de despido antisindical, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para aumentar la cuantía de las multas que se imponen por actos de discriminación antisindical, así como para elevar el importe de la compensación en casos de despido antisindical. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo avance que se realice al respecto. Finalmente, con respecto a la protección contra la discriminación antisindical de las «personas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración», recientemente protegidos por la ATU, la Comisión pide al Gobierno que aclare: i) si las consecuencias de la terminación antisindical de la relación contractual de una «persona que realiza un trabajo a cambio de una remuneración» se limita a la indemnización económica o si van más allá, y ii) sobre qué base y de qué manera se calcula la indemnización equivalente a seis meses de remuneración aplicable a las «personas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración» cuando éstas ocupen un puesto de representante sindical y fuesen víctimas de discriminación antisindical.***

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que aclare si las condiciones de trabajo, incluida la remuneración, de las «personas que realizan un trabajo a cambio de una remuneración» pueden negociarse colectivamente.

Portugal

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) y de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), recibidas el 10 de agosto de 2018 y el 4 de septiembre de 2018, respectivamente, en relación con las cuestiones examinadas por la Comisión más abajo.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Extensión de los convenios colectivos. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el modelo de extensión de convenios colectivos establecidos por la resolución del Consejo de Ministros núm. 90/2012, de 31 de octubre de 2012, era puesto en entredicho tanto por las organizaciones de trabajadores como de empleadores. La Comisión invitó, en consecuencia al Gobierno a llevar a cabo un diálogo tripartito sobre la normativa aplicable a la extensión de los convenios colectivos con miras a llegar a soluciones

compartidas. La Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno señala que, en virtud del Acuerdo tripartito sobre la estrategia a medio plazo, suscrito el 17 de enero de 2017, por el Gobierno y la mayoría de los interlocutores sociales miembros de la Comisión Permanente de Concertación Social (CPCS) del Consejo Económico y Social (CES), se introdujeron modificaciones en el régimen de concesión de la extensión a los contratos colectivos mediante la resolución del Consejo de Ministros núm. 82/2017, de 9 de junio, por la que se revocó la resolución anterior núm. 90/2012, y que introduce disposiciones claras sobre plazos legales razonables para la concesión de dichas extensiones. El Gobierno declara que, a partir de ahora, antes que imponer criterios condicionados para la concesión de estas extensiones, el formulador de políticas debe tener acceso a los datos con el fin de ponderar las circunstancias sociales y económicas que pueden justificar la extensión de un contrato colectivo, a saber, la identidad económica y social y la semejanza con otras situaciones en cuanto al ámbito de la extensión y de los instrumentos en los que ha de basarse la decisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, de conformidad con esta enmienda, la concesión de extensiones debe ir precedida por un análisis de los siguientes aspectos: i) impacto en la nómina de los trabajadores a los que afecta y a los que se prevé que afectará con miras a evaluar la posible repercusión de la extensión en su economía; ii) el aumento salarial para los trabajadores que están cubiertos por dicha extensión; iii) el impacto en la escala salarial y en la disminución de las desigualdades dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo objeto de extensión; iv) porcentaje de los trabajadores (cifra total y desglosada por géneros) a los que cubrirá, y v) porcentaje de las mujeres a las que cubrirá. **La Comisión toma debida nota de estos elementos y pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del nuevo régimen de extensión, incluida su incidencia en la cobertura general de los convenios colectivos.**

Condiciones para el régimen de expiración de la vigencia de los convenios colectivos. La Comisión toma nota de que la CGTP-IN reitera en su observación que la legislación que regula las condiciones de expiración de los convenios colectivos es contraria a los principios de la negociación colectiva libre y voluntaria. La CGTP-IN afirma que: i) de conformidad con los artículos 501 y 502 del Código del Trabajo, las cláusulas de los convenios colectivos que prevén que el convenio debe expirar únicamente cuando sea sustituido por la firma de un nuevo convenio colectivo, caducarán después de tres años, y ii) de conformidad con dichas disposiciones, más de 100 convenios colectivos han expirado en los últimos años. La Comisión toma nota de que la CGTP-IN afirma, finalmente, que una propuesta gubernamental encaminada a superar algunas dificultades causadas por la reforma del sistema de negociación colectiva de 2012 no soluciona el problema debido a que mantiene el régimen de expiración de los convenios colectivos. Al respecto, la Comisión toma nota también de la declaración de la CIP de que la expiración de la validez de los convenios colectivos no vulnera el artículo 4 del Convenio, porque tiene por objeto, por medio de una promoción efectiva de la negociación colectiva, permitir que los convenios colectivos no queden congelados en el tiempo y que puedan adaptarse a las nuevas realidades sociolaborales, el anterior régimen legislativo habiendo por el contrario generado una total inercia y estancamiento a este respecto. La Comisión toma nota de las opiniones respectivas de la CGTP-IN y de la CIP. **Subrayando que, de acuerdo con la lógica de la negociación colectiva libre y voluntaria promovida por el Convenio, la duración de los convenios colectivos así como las condiciones para su expiración deberían recaer principalmente sobre las partes interesadas y que, en caso de contemplarse una regulación del tema, ésta debería reflejar, en la mayor medida posible, un acuerdo tripartito, la Comisión alienta al Gobierno a que continúe promoviendo el diálogo social en relación con las cuestiones antes mencionadas con miras a tratar de encontrar soluciones aceptadas por el conjunto de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las novedades legislativas a este respecto.**

Arbitraje obligatorio. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que suministrara información sobre todo los casos recientes que se refieren a la aplicación de los artículos 508, 1), c), y 509 del Código del Trabajo, en virtud de los cuales el ministro responsable del área laboral está autorizado a determinar por decisión fundamentada el recurso al arbitraje obligatorio, en particular, si se requieren laudos arbitrales obligatorios en virtud del artículo 508, 1), c), así como que señalara si, en ese caso, puede interponerse un recurso judicial contra la decisión del ministro de trabajo competente. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en el período objeto de examen (1.º de junio de 2015 a 31 de mayo de 2018) no se registró ningún laudo de arbitraje obligatorio en virtud del artículo 508, 1), c), y que puede interponerse recurso contra la referida decisión del Ministro de Trabajo, con arreglo al artículo 268, 4), de la Constitución de la República de Portugal. **La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de todos los casos recientes que se refieran a la aplicación de los artículos del Código del Trabajo mencionados anteriormente.**

Representatividad de las organizaciones. Desde hace varios años, la Comisión observa que la legislación: i) menciona por sus nombres a las organizaciones sindicales que deben formar parte del CES y de la CPCS lo que implica que algunas organizaciones que se consideran representativas no son incluidas en dichos órganos, y ii) no precisa criterios objetivos para determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores; y en consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para determinar y establecer criterios objetivos, precisos y predeterminados para evaluar la representatividad y la independencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores que forman parte del CES y del CPCS, y a que modifique el artículo 9 de la ley núm. 108/91 del CES en el sentido indicado. Al tiempo que observa que la CIP considera que el mencionado proceso es pertinente, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que consultará a los interlocutores sociales sobre la posibilidad de reexaminar el «acuerdo tripartito para un nuevo sistema de reglamentación de las relaciones laborales, de las políticas de empleo y de protección social», suscrito el 25 de junio de 2008, con objeto de verificar sus puntos de vistas sobre la posibilidad de dar cumplimiento al acuerdo sobre la representatividad de las organizaciones, y que se espera que las confederaciones

sindicales y las confederaciones de empleadores determinen conjuntamente una serie de directrices básicas para llegar a un acuerdo tripartito de forma que pueda modificarse el Código del Trabajo. ***La Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales examinarán estas cuestiones en un próximo futuro y que el resultado de sus discusiones llevará a un acuerdo para modificar la legislación en consonancia con lo que la Comisión ha venido sugiriendo desde hace años. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las novedades que se produzcan en este sentido.***

Reino Unido

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos (TUC), recibidas el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2018, y de los comentarios del Gobierno al respecto, relativas a las cuestiones suscitadas por la Comisión. ***La Comisión toma nota con preocupación de que el TUC denuncia casos de vigilancia de sindicatos y sindicalistas por parte de la policía en relación a los cuales el Gobierno no ha respondido, y solicita por lo tanto al Gobierno que formule comentarios al respecto.***

Artículo 3 del Convenio. *Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y elaborar sus programas.* En su comentario anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para facilitar la votación electrónica en el marco de los nuevos requisitos establecidos en la Ley de Sindicatos, de 2016. La Comisión toma nota de que tanto el TUC como el Gobierno indican que este último encargó la realización de un examen, que se publicó en 2017 y cuyas principales recomendaciones son que: i) la votación electrónica en las votaciones para emprender acciones colectivas sólo podrá contar con la confianza del público si se consigue que dé una imagen de tanta seguridad y fiabilidad como el actual sistema de votación por correo, en especial, será necesario alcanzar el nivel exigido en el artículo 54 de la Ley de Derechos del Empleo, de 2004, es decir, garantizar que aquellos que puedan votar tengan la oportunidad de hacerlo; ii) es preciso realizar una prueba de votación electrónica con ocasión de una votación no estatutaria como paso preliminar, la cual servirá para que la Secretaría de Estado tome una decisión en la materia; iii) la votación electrónica deberá introducirse en determinadas votaciones no estatutarias en Inglaterra, Escocia y Gales con el objeto de evaluar, entre otras cosas, el funcionamiento y la eficacia de la comprobación de la identidad de los votantes, y iv) los proveedores de todo sistema que se use para probar la votación electrónica deben poder demostrar su resistencia a los ataques cibernéticos y la piratería informática por parte de aquellos que quieran alterar la votación. Al tiempo que toma nota de las alegaciones del TUC, según las cuales hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una respuesta a estas recomendaciones, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que antes de contestar a las recomendaciones debe, con arreglo al artículo 4, 4), de la Ley de Sindicatos, consultar con las organizaciones pertinentes, por ejemplo, asociaciones de expertos, para pedirles consejo. El Gobierno está evaluando en estos momentos los mejores medios de obtener este asesoramiento con el fin de tomar una decisión debidamente fundamentada y transparente sobre los riesgos inherentes a la votación electrónica, y en último caso decidir si debe adoptarse este sistema o no. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre los avances que se realicen a este respecto.***

La Comisión pidió al Gobierno con anterioridad que revisara el artículo 3 de la Ley de Sindicatos con los interlocutores sociales interesados y que tomara las medidas necesarias para que el requisito de la necesidad de contar con el apoyo del 40 por ciento de todos los trabajadores para aprobar una votación de huelga en los servicios públicos importantes no se aplicara a los servicios de educación y transporte. La Comisión toma nota de que al TUC le preocupa el requisito del apoyo del 40 por ciento en lo relativo a los otros cuatro sectores en los que se aplica. La Comisión recuerda que ya había observado que varios servicios contemplados en el artículo 3 se corresponden con los que la Comisión entiende que son servicios esenciales en el sentido estricto del término o servicios ofrecidos por funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, casos en los que está permitida la restricción de acciones colectivas. La Comisión había notado, sin embargo, que una restricción relativa a los servicios de educación en particular afectaría al sector de las enseñanzas primaria y secundaria y que una restricción en todos los servicios del transporte tendría un efecto de barrido similar y amplio. La Comisión considera que una restricción en lo tocante a los servicios de educación y transporte podría mermar gravemente el derecho de estos trabajadores y sus organizaciones de organizar sus actividades en apoyo y defensa de sus intereses profesionales sin injerencia. Además, la Comisión constata que el TUC indica que el Gobierno no ha hecho un intento serio de modificar el artículo 3 de la ley. La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que el Gobierno reitera su posición anterior sobre la necesidad de mantener el umbral del 40 por ciento en los servicios de educación y transporte. El Gobierno señala que, como la votación que se contempla en la Ley de Sindicatos no se implantó hasta el 1.º de marzo de 2017, es muy pronto para que el Gobierno se plantee una modificación al respecto. La Comisión recuerda que en comentarios anteriores indicaba que un requisito de aprobación del 40 por ciento de todos los trabajadores implica un requisito de apoyo del 80 por ciento cuando solamente se alcanza el quórum de participación del 50 por ciento. ***La Comisión pide nuevamente al Gobierno que revise el artículo 3 de la Ley de Sindicatos, en consulta con los interlocutores sociales interesados, y que adopte las medidas necesarias para que el requisito de la necesidad de***

obtener el apoyo del 40 por ciento de todos los trabajadores para aprobar una votación de huelga no se aplique a los servicios de educación y transporte.

En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de las observaciones del TUC acerca de que las nuevas condiciones para la formación de piquetes por cauces lícitos suscitan una serie de inquietudes: el requisito de comunicar a la policía la identidad y la información de contacto de los activistas puede exponer a las personas al riesgo de ser incluidas en listas negras; el sindicato es automáticamente responsable de cualquier fracaso, y estos requisitos son discriminatorios, ya que sólo afectan a los piquetes organizados por los sindicatos, pero no a los organizados por otros grupos. Por lo tanto, la Comisión pidió al Gobierno y al TUC que proporcionaran información sobre la repercusión de la aplicación de este requisito de notificación en la práctica, incluyendo toda queja que pudiera haberse presentado en relación con el manejo de esta información o de su impacto en las acciones colectivas lícitas, así como toda información sobre la inclusión en listas negras de personas por haber participado en piquetes de huelga lícitos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, cuando se comunica a la policía la información de contacto de los supervisores de los piquetes, existen garantías sobre la manera en que se va a manejar la información, de modo que la confidencialidad de los datos personales quede amparada por la Ley de Derechos Humanos, de 1998, y la Ley de Protección de Datos, de 2018, que se ajustan al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, el Gobierno afirma que pueden presentarse quejas relativas al manejo de los datos ante la Comisión independiente para quejas sobre la policía, si la policía no gestiona los datos de forma adecuada, o ante el Comisionado de Información, que se encarga de atender las quejas específicas relacionadas con la protección de datos. ***Tomando debida nota de esta información, la Comisión una vez más pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de esta notificación en la práctica, incluidas las quejas que se hayan presentado en relación con el manejo de esta información o su impacto en el ejercicio de acciones colectivas con arreglo al derecho y cualquier información sobre la lista negra de personas involucradas en piquetes llevados a cabo con arreglo a derecho.***

En su comentario anterior, la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que la Ley de Sindicatos expanda notablemente las competencias de investigación y control del cumplimiento de la autoridad de certificación, incluso en los casos en que no se ha presentado una solicitud, e invitó al Gobierno a examinar la repercusión de esta función ampliada, recogida en los artículos 16 a 20 de la ley con los interlocutores sociales interesados, con vistas a garantizar que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer de forma efectiva su derecho de organizar su administración y sus actividades y el de formular sus programas sin la injerencia de las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que ninguna de las reformas de la autoridad de certificación afecta a la libertad sindical de los trabajadores ni a su derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a éstos, sino que aumenta la transparencia para beneficio de los sindicalistas y el público en general. Sin embargo, la Comisión constata que el TUC afirma que el Gobierno no ha tomado medida alguna para responder a la sugerencia de la Comisión de revisar las competencias de la autoridad de certificación con los interlocutores sociales. ***La Comisión invita una vez más al Gobierno a que revise el impacto de los artículos 16 a 20 de la Ley de Sindicatos conjuntamente con los interlocutores sociales interesados, con el fin de asegurar que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan ejercer efectivamente su derecho de organizar su administración y sus actividades y el de formular sus programas sin la injerencia de las autoridades públicas. Pide al Gobierno que informe sobre los resultados de las consultas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jersey

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)

Artículo 3 del Convenio. *Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y formular sus programas de acción.* En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución relativa a la revisión de la Ley de Relaciones de Empleo (ERL) y sus códigos de prácticas, en particular las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de huelga (derecho a una acción secundaria y a protestas por motivos económicos y sociales: véase artículo 20, 3), de la ERL y código de prácticas 2; arbitraje obligatorio: artículos 22 y 24 de la ERL y código 3; servicios esenciales: código de prácticas 2; y condiciones para la protección de las acciones colectivas y la aplicación por los tribunales de los artículos 3 y 20, 2), de la ERL y del código de prácticas 3).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la ERL sigue logrando su objetivo de crear un sistema de solución de conflictos que no se preste a la confrontación y precedido de un buen número de consultas públicas, tal como se manifiesta en el historial de buenas relaciones laborales de Jersey. El Gobierno señala que, según el servicio de asesoramiento y conciliación de Jersey, tanto las organizaciones de trabajadores como las de empleadores siguen considerando que la ERL y los códigos de prácticas proporcionan un marco efectivo en un formato accesible y de fácil interpretación, cuyo éxito viene avalado por el hecho de que las partes celebren actos de mediación desde muy pronto para solucionar los conflictos y la ausencia de acciones laborales.

El Gobierno además reitera que todas sus iniciativas se han centrado en esta cuestión a raíz de la decisión política de centrarse en elaborar una nueva legislación que proteja a los trabajadores contra la discriminación. Esta normativa ya está

en vigor y se ha complementado en 2018. A pesar de que el Gobierno está satisfecho con los progresos realizados a este respecto, lamenta que no haya sido posible emprender un examen de la ERL durante este período.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que cabe esperar que se emprenda un examen de la ERL cuando cuente con los recursos suficientes para ello, aunque esto está pendiente de la postura del nuevo Ministro de Seguridad Social, nombrado en junio de 2018. El Gobierno asegura que esta revisión legislativa tendrá en cuenta los comentarios de la Comisión. *En estas circunstancias, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno y confía en que éste se encontrará pronto en disposición de informar de los progresos relativos a la revisión de la ERL y sus códigos de prácticas.*

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según los artículos 77B y 77C de la Ley sobre el Empleo (enmienda núm. 4) (Jersey), de 2009, si bien el tribunal tiene la potestad de emitir una orden de reintegro en el mismo puesto de trabajo o un puesto similar, en casos de despido improcedente, no tiene la facultad de indemnizar a un empleado por pérdidas económicas, como atrasos en la remuneración, para el período comprendido entre el despido y la emisión de la orden de reintegro. La Comisión había invitado al Gobierno a que prosiguiera el diálogo con los interlocutores sociales para garantizar que, en los casos de despidos antisindicales, se otorgara a los trabajadores reintegrados por orden de la autoridad judicial una indemnización completa por pérdida de salario.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala una vez más que: i) desde que entró en vigor la Ley sobre el Empleo en 2005, no se han presentado quejas ante los tribunales por despido antisindical, y por consiguiente no se han emitido órdenes de reintegro derivadas de algún despido antisindical, y ii) un nuevo examen general del poder decisorio del Tribunal de Empleo y Discriminación será posiblemente contemplado en el futuro. La Comisión reafirma que, en los casos de reintegro tras un despido antisindical, las reparaciones también deberían incluir una indemnización por pérdida de salario durante el período comprendido entre el despido y el reintegro, así como una compensación por el perjuicio sufrido, de manera que todas las medidas adoptadas conjuntamente constituyan una sanción suficientemente disuasoria, como «adecuada protección», en virtud del artículo 1, 1), del Convenio. La Comisión recuerda que la sanción por actos de discriminación antisindical debe ser la reparación total, tanto en el plano económico como en el profesional, del perjuicio sufrido por el trabajador (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 193). *Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que entable un diálogo con los interlocutores sociales para garantizar que, en los casos de despidos antisindicales, se otorgue a los trabajadores reintegrados por decisión judicial una indemnización completa por pérdida de salario. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance que se realice al respecto.*

Artículo 2. Protección adecuada contra los actos de injerencia. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no existían disposiciones específicas que protegieran contra los actos de injerencia en la Ley sobre el Empleo (Jersey) o en la Ley sobre Relaciones de Empleo, pero que el Ministro tenía intención de, a través de esta última, prohibir que los empleadores «compraran» los derechos de los trabajadores respecto de las actividades sindicales, induciendo a éstos a no afiliarse a una organización de trabajadores o a dejar de ser miembros de una organización de ese tipo a cambio de una remuneración. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que se está centrando en elaborar una legislación nueva para otorgar protección frente a diversos motivos de discriminación, la Comisión lamenta constatar que no ha habido ningún progreso más hasta la fecha en lo relativo a la protección contra los actos de injerencia. *Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome, en consulta con los interlocutores sociales, las medidas necesarias para introducir disposiciones en las que se prohíban los actos de injerencia por parte de los empleadores o de sus organizaciones en la constitución, el funcionamiento o la administración de organizaciones de trabajadores y viceversa, así como disposiciones que aseguren procedimientos rápidos y sanciones suficientemente disuasorias contra estos actos. La Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre todo avance que se realice a este respecto.*

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Cuestiones legislativas. En comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tomara las medidas necesarias para enmendar la Recopilación de recomendaciones prácticas núm. 1 en lo relativo al reconocimiento de los sindicatos, a efectos de garantizar el derecho de negociación colectiva cuando ningún sindicato represente a la mayoría de los trabajadores en una unidad de negociación. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica que, por el momento, no se ha avanzado en este sentido. *Al tiempo que recuerda que el establecimiento de umbrales de representatividad para designar a un agente exclusivo para la negociación de convenios colectivos aplicables a todos los trabajadores de un sector o de un establecimiento es compatible con el Convenio, siempre y cuando las condiciones impuestas no constituyan en la práctica un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria, la Comisión pide al Gobierno que adopte, tras consultar con los interlocutores sociales, las medidas necesarias para garantizar que, en caso de que no haya ningún sindicato que alcance el umbral que se requiere para ser reconocido como agente de negociación, se ofrezca la posibilidad de que los sindicatos negocien, de forma conjunta o por separado, al menos en nombre de sus propios miembros. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance que se realice en la materia.*

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre el número de convenios colectivos celebrados y vigentes en el país, los sectores a los que afectan y el número de trabajadores cubiertos por dichos convenios.

Santa Elena

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

Artículo 4 del Convenio. Medidas legislativas para fomentar la negociación colectiva en el sector privado. En su comentario anterior, la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que no existieran convenios colectivos en vigor y solicitó al Gobierno que adoptara toda medida que fuese necesaria para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva y que comunicara información al respecto.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) la falta de convenios colectivos es un reflejo de la magnitud y la naturaleza de los empleadores del sector privado en la isla y del bajo nivel de desempleo en la misma, que implica que cada trabajador, especialmente en las pequeñas empresas, tiene mayor poder de negociación que en otros territorios, en los que pueden ser fácilmente sustituidos; ii) la población en edad de trabajar de Santa Elena es de 2 851 personas y existen sólo siete empleadores del sector privado con un número significativo de personal, estando empleados los restantes trabajadores en pequeñas empresas, y iii) no existen obstáculos legislativos o de procedimiento a la regulación de las condiciones de empleo a través de convenios colectivos, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, dado que la ordenanza de derechos laborales permite que se constituyan grupos de empleados y que la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos presta asistencia a todo grupo de empleados que tal vez estime oportuno entablar negociaciones colectivas. *Tomando nota de que la ordenanza de derechos en el empleo no contiene disposiciones específicas que regulen la negociación colectiva, y recordando que, en virtud del artículo 4, se adoptarán, cuando proceda, medidas adecuadas a las condiciones nacionales, para alentar y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas legislativas para fomentar la negociación colectiva en el sector privado. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto, esperando que pueda tomar nota, en un futuro próximo, de progresos tangibles.*

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en el sector público. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indica que se estableció un comité de representantes de los empleados, que reconoce a los empleados públicos el derecho de negociación colectiva. *Recordando que, en virtud de los artículos 4 y 6, las organizaciones de trabajadores que representan a los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, deberían poder negociar las condiciones de empleo de sus afiliados, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los procedimientos de negociación colectiva que tienen lugar a través del comité de representantes de los empleados y sobre sus resultados conexos.*

Rumania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018 así como de las observaciones conjuntas de la Confederación Nacional Sindical (CNS «CARTEL ALFA»), el Bloque de los Sindicatos Nacionales (BNS) y la Confederación de Sindicatos Democráticos de Rumania (CSDR) recibidas el 31 de agosto de 2018, que se refieren principalmente a cuestiones tratadas por la Comisión en sus comentarios anteriores acerca de la ley sobre el diálogo social. *La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.*

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, que se refieren principalmente a los asuntos planteados por la Comisión en virtud del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI y de los comentarios del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.

En su observación anterior, la Comisión tomó nota con satisfacción de que, mediante la adopción de la ley núm. 62 relativa al diálogo social, de 2011 (Ley sobre el Diálogo Social), se habían resuelto varios de los asuntos planteados anteriormente. La Comisión tomó nota, no obstante, de que algunas cuestiones permanecían pendientes, en particular, la denegación del derecho de sindicación a determinadas categorías de funcionarios públicos (artículo 4), y el excesivo control de las finanzas de los sindicatos (artículo 26, 2)). La Comisión tomó nota asimismo de una serie de discrepancias adicionales entre las disposiciones de la Ley sobre el Diálogo Social y las del Convenio en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la libertad sindical virtud del artículo 3, 1) (trabajadores por cuenta propia, aprendices, trabajadores despedidos o jubilados no cubiertos); las condiciones de elegibilidad de los dirigentes sindicales (artículo 8), y las restricciones a las actividades sindicales (prohibición de las actividades con carácter político en el artículo 2, 2)).

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes. Los trabajadores sin contrato de trabajo. En lo que se refiere al ámbito de aplicación, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en su memoria de que los trabajadores por cuenta propia gozan de la libertad sindical en virtud de la orden núm. 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones, y que los aprendices tienen el derecho de afiliación sindical en virtud de la Ley núm. 279 sobre Aprendizaje, de 2005, leída conjuntamente con el Código del Trabajo. Al tiempo que toma nota de que, en lo que se refiere a los trabajadores jubilados, el Gobierno remite simplemente a la orden núm. 26/2000, la Comisión recuerda que la legislación no debería impedir que los antiguos trabajadores y jubilados se afilien a organizaciones sindicales y, si lo estiman conveniente, en particular, cuando han participado en alguna actividad representada por el sindicato. **Al tiempo que toma nota de que, cuando no existe un contrato de trabajo, los trabajadores jubilados y despedidos, o los desempleados, no están abarcados por el ámbito de aplicación del Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que clarifique si estas categorías de trabajadores pueden, a reserva únicamente de lo dispuesto en los estatutos y reglamentos del mismo, afiliarse a un sindicato o mantener su condición de afiliados después de haber dejado de trabajar.**

Funcionarios públicos. Con respecto a la denegación del derecho de constituir sindicatos a determinadas categorías de funcionarios públicos, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno de que: i) el artículo 4 de la Ley sobre el Diálogo Social excluye de su aplicación a las personas elegidas o nombradas en puestos de dignidad como presidente, parlamentario, alcalde, primer ministro, ministro, presidente del Tribunal Supremo, etc., y ii) los jueces están excluidos en virtud del artículo 4 pero tienen el derecho de afiliarse a las asociaciones profesionales, según lo establecido en la Carta Social Europea sobre el Estatuto de los Jueces.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración. En relación con el excesivo control de las finanzas de los sindicatos, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los sindicatos como entidades legales están sujetos, sin discriminación, a la legislación fiscal nacional, la cual fue adoptada después de ser consultada con los interlocutores sociales. La Comisión considera que se requiere que las facultades conferidas a los organismos administrativos del Estado, en virtud del artículo 26, 2) (control de la actividad económica y financiera y pago de las deudas al presupuesto del Estado), se limiten a la obligación de presentar informes periódicos, en casos de quejas o graves motivos para sospechar infracciones. **La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para suprimir o enmendar el artículo 26, 2), de la Ley sobre el Diálogo Social, para armonizarlo con el Convenio.**

Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas. En relación con la prohibición de las actividades políticas, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la prohibición es una medida constitucional que apunta a garantizar la independencia de los sindicatos y el Convenio sólo protege las actividades sindicales que se relacionan con los intereses de los afiliados sindicales. La Comisión recuerda que, si bien los sindicatos no deberían participar en actividades políticas de manera abusiva, promoviendo esencialmente intereses políticos, las disposiciones que imponen una prohibición general a las actividades políticas por parte de los sindicatos para la promoción de sus objetivos específicos, están en contradicción con los principios de libertad sindical y son poco realistas en la práctica, dado que los sindicatos pueden desear, por ejemplo, expresar públicamente sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno. **La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para suprimir o enmendar el artículo 2, 2), de la Ley sobre el Diálogo Social, con el fin de garantizar el respeto del principio anterior.**

Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir a sus representantes con total libertad. Ante la ausencia de una información comunicada por el Gobierno sobre el asunto anteriormente planteado de las condiciones de elegibilidad para cargos de dirigencia sindical, la Comisión recuerda que la condena debido a los delitos que no ponen en cuestión la integridad de la persona y no son perjudiciales para el ejercicio de las funciones sindicales, no debería constituir motivos de descalificación. **La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para enmendar el artículo 8 de la Ley sobre el Diálogo Social, para garantizar el respeto de este principio.**

La Comisión en general toma nota de que el Gobierno indica que: i) tras un acuerdo, en 2014, del Consejo tripartito nacional para el diálogo social, se establecieron dos grupos de trabajo bipartitos sobre las enmiendas a la Ley sobre el Diálogo Social y sobre los sectores y procedimientos de la negociación colectiva, pero no pudieron alcanzar un consenso en un proyecto común de enmienda de la legislación pertinente, y ii) se presentaron a la OIT una serie de propuestas de enmienda de la Ley sobre el Diálogo Social para sus comentarios en 2015, y el Consejo tripartito nacional discutirá el memorándum. **La Comisión confía en que el Gobierno tenga debidamente en cuenta sus comentarios en el contexto de esta revisión legislativa y en que la nueva legislación estará de plena conformidad con el Convenio. Pide al Gobierno que indique todo progreso realizado a este respecto. Recordando también que el Gobierno se benefició recientemente de la asistencia técnica de la OIT, que apunta a garantizar la conformidad con el Convenio de un proyecto de ordenanza de emergencia que enmienda de manera sustancial la Ley sobre el Diálogo Social, la Comisión pide al Gobierno que comuniqué información sobre toda evolución a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de: i) las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 que alegan que la Ley sobre el Diálogo Social de 2011 produciría efectos desastrosos sobre la negociación colectiva y que el proyecto de enmiendas de 2018 a dicha ley no sería objeto de consultas con las organizaciones sindicales representativas, y ii) las observaciones conjuntas del Bloque de los Sindicatos Nacionales (BNS), de la Confederación de Sindicatos Democráticos de Rumania (CSDR) y de la Confederación Nacional Sindical (CNS «CARTEL ALFA») recibidas el 31 de agosto de 2018 que denuncian también los efectos negativos sobre la negociación colectiva de la Ley sobre el Diálogo Social. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2015, que alegan actos de discriminación antisindical y de injerencia por parte del empleador. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.** Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, de 2014, y de los comentarios del Gobierno a este respecto.

Artículo 4 del Convenio. Criterio de representación. La Comisión tomó nota anteriormente de los criterios de representatividad a nivel de empresa establecidos en el artículo 51 de la Ley sobre Diálogo Social (afiliación de al menos el 50 por ciento más uno de los trabajadores de la empresa), y pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que si ningún sindicato alcanza la mayoría para ser reconocido como agente de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían otorgarse a todos los sindicatos de esa unidad, al menos en nombre de sus propios miembros. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno, según la cual: i) en virtud del artículo 1, b), iii), y u), de la Ley sobre Diálogo Social, todos los sindicatos gozan del derecho de negociación colectiva de conformidad con el artículo 153 (esta disposición establece que cualquier sindicato legalmente reconocido podrá concertar acuerdos con un empleador o una organización de empleadores que sean únicamente aplicables a los miembros del sindicato firmante), y ii) la negociación colectiva por medio de sindicatos representativos conduce a que, a causa de la legitimidad de éstos, se establezcan convenios colectivos aplicables por la legislación vigente a todos los trabajadores de la unidad.

Además, la Comisión observó anteriormente que, según el artículo 135, 1): i) en las empresas en las que no hay un sindicato que cumpla con los criterios de representatividad, si existe un sindicato a nivel de empresa y está afiliado a una federación que cumpla con los criterios de representatividad en el sector pertinente de actividad, la negociación de un convenio colectivo se llevará a cabo por los representantes de esa federación junto con los representantes elegidos por los trabajadores, y ii) en las empresas en las que no hay un sindicato que cumpla con los criterios de representatividad, si existe un sindicato a nivel de empresa y no está afiliado a una federación que cumpla con los requisitos de representatividad del sector pertinente de actividad, la negociación colectiva se llevará a cabo por los representantes elegidos por los trabajadores. La Comisión pidió al Gobierno que garantizara la modificación de la legislación pertinente con el fin de garantizar la observancia del principio de que debe alentarse y fomentarse la negociación colectiva entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) en caso de que exista únicamente un sindicato de empresa no representativo, el requisito de su afiliación a una federación representativa al nivel sectorial correspondiente, surge de la legislación anterior y cuenta con el apoyo de los sindicatos, y ii) el reconocimiento del derecho de los representantes de los trabajadores (elegidos entre los miembros del sindicato de empresa o entre los trabajadores no afiliados) a negociar en ausencia de un sindicato representativo de empresa o de un sindicato de empresa no representativo afiliado a una federación sectorial representativa, responde a la necesidad de cooperar a nivel de empresa con objeto de evitar los desafíos que se plantean recíprocamente entre sindicatos y los puntos muertos en una negociación colectiva. La Comisión entiende que el artículo 135 establece la manera de negociar un convenio colectivo aplicable a todos los trabajadores de la unidad (*erga omnes*) en ausencia de un sindicato representativo y de su consiguiente legitimidad. La Comisión observa que esta falta de legitimidad podría explicar la obligación de que un sindicato no representativo tenga que afiliarse a una federación representativa en el sector pertinente para estar en condiciones de negociar, a petición del sindicato y dentro de su mandato, junto con los representantes elegidos por los trabajadores, un convenio colectivo *erga omnes* (artículo 135, 1), a). Sin embargo, la Comisión observa que, en los casos en los que un sindicato no representativo no esté afiliado a una federación representativa sectorial, la negociación de un convenio colectivo *erga omnes* podrá efectuarse exclusivamente por los representantes elegidos por los trabajadores, por lo que dejaría sin efecto el derecho de los sindicatos no representativos a negociar en nombre de sus propios afiliados (artículo 153). La Comisión recuerda, en este aspecto, que la negociación colectiva con representantes de trabajadores no sindicalizados solamente debería ser posible cuando no haya sindicatos en el nivel correspondiente, y que deberían adoptarse las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para garantizar que la existencia de representantes elegidos por los trabajadores no se utiliza para menoscabar la posición de las organizaciones de trabajadores interesados. **La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para enmendar la legislación pertinente a fin de garantizar la aplicación de estos principios.**

Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el presupuesto del sector público que abarca a todos los funcionarios públicos, incluidos aquéllos que no están al servicio de la administración del Estado, la fijación de salarios se realiza exclusivamente por ley, de forma que no puede ser objeto de negociación colectiva ningún otro tipo de salarios u otros derechos pecuniarios que no estén previstos en las disposiciones (artículos 3, b), y 37, 1), de la Ley sobre Salarios Unitarios núm. 284/2010, del personal remunerado con cargo a los fondos públicos). La Comisión saludó lo dispuesto en el artículo 138, 3), de la Ley sobre Diálogo Social, en su versión enmendada, según la cual, en los casos en que los derechos salariales sean establecidos en leyes especiales con la fijación de un límite mínimo y un límite máximo, los salarios concretos se determinan mediante la negociación colectiva dentro de los límites legales. Considerando que esta disposición puede ser compatible con el Convenio, dependiendo de su aplicación práctica, la Comisión pidió al Gobierno que señale las categorías de empleados remunerados con cargo a fondos públicos respecto de los cuales se establecen derechos salariales en leyes especiales en las que se fijan un límite mínimo y un límite máximo de modo que los salarios concretos sean determinados por la negociación colectiva dentro de sus límites.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala: i) las disposiciones relativas a la negociación de primas, aumentos y derechos pecuniarios (artículo 138, 3), de la Ley sobre Diálogo Social y artículos 12, 21-23 y 32 de la ley núm. 284/2010) se aplica mediante la observancia, durante las negociaciones, de los límites máximos y mínimos establecidos por la ley y las leyes especiales; ii) tales negociaciones tuvieron lugar en el sector de la sanidad y la educación y se tradujeron en acuerdos relativos a los derechos pecuniarios o en ventajas fiscales; iii) los salarios unitarios en virtud de la ley núm. 284/2010 se basan en un coeficiente que es examinado periódicamente en consulta/negociación con los interlocutores sociales y con arreglo al cual guardan una relación directa todos los aumentos salariales, y iv) el proyecto de enmienda de la ley núm. 284/2010 es objeto de discusión en la actualidad. La Comisión entiende que la información suministrada por el Gobierno y de los anexos a la ley núm. 284/2010 que: i) en caso de derechos pecuniarios tales como bonificaciones (por ejemplo, en razón de condiciones de trabajo especiales, difíciles o peligrosas) y subsidios, se está negociando con los sindicatos pertinentes sobre los establecimientos, las categorías del personal y los montos salariales (que no pueden exceder de los límites legales), y ii) en caso de salarios base, no obstante, el coeficiente salarial de la categoría de personal correspondiente se establece en los anexos a la ley núm. 284/2010 previa consulta con los interlocutores sociales. **Al tiempo que destaca una vez más la necesidad de garantizar que los salarios, además de los demás derechos pecuniarios, se incluyen en el ámbito de la negociación colectiva para todas las categorías de funcionarios públicos cubiertos por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en plena consulta con los interlocutores sociales y, de ser necesario, con la asistencia técnica de la Oficina, con objeto de poner la legislación y la práctica nacionales en conformidad con el artículo 4 del Convenio, quedando entendido que pueden establecerse límites máximos y mínimos para las negociaciones salariales con los sindicatos. La Comisión confía en que el**

Gobierno tendrá debidamente en cuenta en los comentarios técnicos formulados por la Comisión ante la revisión legal en marcha de la ley núm. 284/2010 y pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

Desde un punto de vista más general, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) teniendo en cuenta un acuerdo del Consejo Nacional Tripartito para el Diálogo Social, de 2014, se han establecido dos grupos bipartitos de trabajo en relación con las enmiendas a la Ley sobre el Diálogo Social y en relación a los sectores y el procedimiento de negociación colectiva, pero éstos no han podido llegar a un consenso sobre un proyecto común que modifique la legislación pertinente, y ii) se han presentado a la OIT una serie de propuestas de enmienda a la Ley sobre el Diálogo Social para que ésta se pronuncie en 2015 y el memorándum de la OIT será objeto de discusión por parte del Consejo Tripartito Nacional. ***La Comisión confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta sus comentarios en el contexto de esta revisión legislativa y que la nueva legislación estará en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que señale todos los progresos realizados a este respecto. Al tiempo que recuerda también que el Gobierno se ha beneficiado recientemente de la asistencia técnica de la OIT en un intento de garantizar la conformidad con lo dispuesto en el Convenio de un proyecto de orden de emergencia que modifica sustancialmente la Ley sobre el Diálogo Social, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre cualquier novedad a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Federación de Rusia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de la detallada respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajo de Rusia (KTR) en 2015, así como a las observaciones de la KTR transmitidas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de organizar su administración y sus actividades. La Comisión recuerda que anteriormente pidió al Gobierno que asegurara que los trabajadores de los servicios municipales así como los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado gozaran del derecho de huelga. La Comisión toma nota de la explicación del Gobierno sobre el sistema de la función pública en la Federación de Rusia. El Gobierno se refiere, en particular, al artículo 3, 1), de la Ley sobre la Función Pública del Estado, en el que se define la función pública del Estado como un tipo de servicio llevado a cabo por ciudadanos en sus respectivos puestos gubernamentales con el fin de ejecutar la autoridad de diversos órganos estatales. Así, la prohibición de realizar huelgas en la función pública es necesaria dadas las funciones específicas de ésta, que no deben interrumpirse para poder garantizar el ejercicio de la autoridad en nombre de distintos órganos del Estado. El Gobierno señala que esta prohibición afecta a los funcionarios públicos independientemente del nivel o la categoría de su puesto, ya que todos los funcionarios contribuyen tanto individual como colectivamente al fin público de la administración, mediante la cual se ejerce la autoridad del Estado. Del mismo modo, la legislación prohíbe el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios municipales, quienes ejercen funciones de autoridad en nombre de órganos municipales. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que la KTR había indicado previamente que el artículo 9 de la Ley sobre la Función Pública del Estado divide las obligaciones de la función pública en cuatro categorías y que no todos los funcionarios públicos cubiertos por la ley son «funcionarios que ejercen su autoridad en nombre del Estado». ***Al tiempo que recuerda que el derecho de huelga sólo puede prohibirse o restringirse en el caso de los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, la Comisión invita al Gobierno a que revise, en consulta con los interlocutores sociales, las diversas categorías de la función pública estatal y municipal con vistas a identificar a los funcionarios que están excluidos de esta categoría, interpretada en sentido estricto.***

En lo relativo a la solicitud anterior de enmendar el artículo 26, 2), de la Ley Federal sobre el Transporte Ferroviario, de 2003, con el fin de garantizar el derecho de huelga de los trabajadores ferroviarios, la Comisión toma nota de que el Gobierno confirma la prohibición impuesta por la legislación a los trabajadores de los sectores ferroviario y de transporte de carga públicos. La Comisión recuerda que el transporte ferroviario no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término en el que las huelgas pueden ser prohibidas y que, en su lugar, puede establecerse un servicio mínimo negociado en este servicio público de importancia fundamental. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 26, 2), de la Ley Federal sobre el Transporte Ferroviario con el fin de ajustarlo al Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajo de Rusia (KTR) sobre la aplicación del Convenio. Saluda las observaciones del Gobierno, según las cuales éstas se examinarán atentamente con los interlocutores sociales, en el marco de las actividades destinadas a dar efecto al Convenio. ***Al tiempo que toma nota de la intención del compromiso del***

Gobierno de comunicar toda evolución al respecto en su próxima memoria, la Comisión confía en que se dará seguimiento, en consulta con los interlocutores sociales, a los comentarios que formula a continuación.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. En comentarios anteriores, la Comisión lamentó profundamente la falta de progresos en la aplicación de una propuesta elaborada por la KTR y la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR), tras una misión de asistencia técnica de la OIT, que tuvo lugar en 2011 en el marco del caso núm. 2758 del Comité de Libertad Sindical, que los representantes gubernamentales y de los empleadores habían acordado examinar en el seno de la Comisión Tripartita para la Regulación de las Relaciones Sociales y Laborales de la Federación de Rusia (RTK). La Comisión recuerda que esta propuesta hace referencia a la necesidad de redactar disposiciones legislativas concretas para que la protección contra las violaciones de los derechos sindicales, en general, y la discriminación antisindical, en particular, sea más eficaz, y propone crear un órgano con un mandato específico para que examine los casos de violación de los derechos sindicales, incluida la discriminación antisindical (dicho mandato también puede ser desempeñado por un organismo existente). La propuesta insta asimismo a que se imparta formación a los órganos y tribunales pertinentes en materia de libertad sindical.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual un grupo de trabajo tripartito de la RTK se reunió en agosto del 2018 y seguirá reuniéndose de forma periódica para debatir la cuestión de la protección frente a actos de discriminación antisindical. Al mismo tiempo, el Gobierno observa que el Ministerio de Trabajo ha examinado, en varias ocasiones, las propuestas de enmiendas legislativas presentadas por la KTR para ajustar la legislación nacional a las normas internacionales del trabajo. El Ministro señaló a la KTR que la mayoría de sus propuestas de enmienda habían formado parte previamente de dos proyectos legislativos destinados a modificar el Código del Trabajo, que no contaron con el apoyo ulterior del Gobierno y que la Duma desestimó; por tanto, no podía volver a apoyar la presentación de las mismas propuestas. Además, el Gobierno indica que los niveles existentes de protección de los derechos sindicales y de los afiliados es suficiente y, de nuevo, se refiere a este respecto a las disposiciones legislativas de la Ley de Sindicatos, el Código de Delitos Administrativos y el Código Penal. Si bien no son los tribunales los que recaban datos estadísticos sobre casos civiles y penales relacionados con la discriminación antisindical, según el Gobierno, esto no implica que esos casos no se examinen. El Gobierno indica que, desde el 1.º de enero de 2019, el Servicio Federal de Trabajo y Empleo (Rostrud) comenzará a recabar las estadísticas pertinentes para presentárselas, cada semestre, al Ministerio de Trabajo. Este último indica que está dispuesto a colaborar con la KTR para detectar y analizar casos de discriminación antisindical, en particular en el marco de la RTK, así como con la OIT con vistas a la posible elaboración de instrumentos nuevos en el ámbito de la protección contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno solicita asistencia técnica a este respecto. Además, el Gobierno señala que la cuestión de la protección de los derechos sindicales es parte integrante de la formación ordinaria de los inspectores del trabajo, y que tiene previsto celebrar en el último trimestre de 2018 un seminario sobre las normas pertinentes dirigido al Poder Judicial.

La Comisión toma nota de las observaciones de la KTR y la FNPR, presentadas junto con la memoria del Gobierno. La FNPR considera que el nivel de protección de los sindicatos y sus afiliados no es suficiente y que por tanto no es plenamente conforme con el Convenio, y hace referencia a varios ejemplos de actos de discriminación antisindical de los que son víctimas sus miembros. Además, señala que el Rostrud (inspección del trabajo) no se ocupa de la cuestión de la discriminación antisindical, y que ésta es competencia de los fiscales y los tribunales. La FNPR considera que la compilación de datos estadísticos en lo relativo a los presuntos casos de discriminación antisindical puede seguir debatiéndose con las autoridades competentes (Rostrud, Oficina del Fiscal y departamento judicial del Tribunal Supremo). Además, en referencia al acuerdo de 2011, si finalmente se decide que la RTK se encargará de los supuestos casos de discriminación antisindical, será preciso tomar las medidas normativas necesarias a estos efectos. Las observaciones de la KTR defienden el mismo objetivo. **Al tiempo que toma nota con interés de la intención manifestada por el Gobierno de abordar, con la asistencia técnica de la Oficina, las cuestiones que la Comisión ha estado suscitando durante varios años, ésta espera que prosigan las consultas con los interlocutores sociales en torno a la aplicación de las propuestas con las que ya había expresado su acuerdo anteriormente y que se logre así dar pleno efecto al Convenio. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todo avance que se realice en este sentido.**

Artículo 4. Partes en la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 31 del Código del Trabajo, cuando el sindicato de una empresa representa a menos de la mitad de los trabajadores de dicha empresa, otros representantes no sindicalizados podrían representar los intereses de los trabajadores. Habida cuenta de que, en estas circunstancias, la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores, pasando por alto las organizaciones de trabajadores suficientemente representativas, si las hubiere, podría socavar el principio de que la negociación entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores debería alentarse y promoverse, la Comisión esperaba que el Gobierno tomara medidas inmediatas y decisivas para enmendar el artículo 31 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su explicación anterior de que la elección de un órgano representativo distinto del sindicato principal es una medida extrema y ocurre únicamente cuando no existe una representación plena (más del 50 por ciento) de los intereses de los trabajadores por una organización sindical. Por consiguiente, el Gobierno considera que esta norma permite la mejor forma de representación posible de los intereses de los trabajadores dentro de una organización o empresa. No obstante, está dispuesto a aprovechar todas las oportunidades a su alcance para reforzar el diálogo social mediante las mejores prácticas internacionales y, a este respecto, desea recibir la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de que la FNPR también considera que es preciso enmendar esta disposición para

asegurar que otros representantes puedan salir elegidos sólo en caso de que no haya otro sindicato. **La Comisión saluda la solicitud del Gobierno de asistencia técnica de la Oficina y confía en que esta asistencia se ofrezca en un futuro cercano con vistas a garantizar que se enmiende la legislación nacional para que se dé pleno efecto al Convenio. Pide al Gobierno que informe acerca de toda evolución que se produzca a este respecto.**

Rwanda

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de que no se recibió la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, a constituir las organizaciones que estimen convenientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que revisara las disposiciones del decreto ministerial núm. 11 mencionado más abajo, a fin de garantizar que el procedimiento de registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores estuviera en plena conformidad con el Convenio:

- *Antecedentes judiciales.* En virtud del artículo 3, 5), del decreto ministerial núm. 11, de septiembre de 2010, para que una organización profesional de empleadores o de trabajadores sea registrada, debe estar en condiciones de probar que sus representantes no hayan sido nunca condenados por infracciones con penas de prisión iguales o superiores a seis meses. En opinión de la Comisión, no debe constituir un motivo de descalificación para el ejercicio de las funciones sindicales una condena por un acto que, por su naturaleza, no ponga en tela de juicio la integridad de los interesados y no presente verdaderos riesgos para el ejercicio de dichas funciones.
- *Plazo de tramitación del registro.* Según el artículo 5 del decreto ministerial núm. 11, las autoridades tienen un plazo de noventa días para realizar la solicitud de tramitación del registro de un sindicato. La Comisión recuerda que un largo procedimiento de registro constituye un grave obstáculo a la creación de organizaciones sin autorización previa, en virtud del artículo 2 del Convenio.

La Comisión **lamentó** que el Gobierno no haya proporcionado información sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para modificar las disposiciones arriba mencionadas, con el fin de garantizar que el procedimiento de registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores esté en plena conformidad con el Convenio.**

Derecho de los funcionarios a afiliarse a un sindicato que estimen conveniente. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la Ley núm. 86/2013, de 19 de septiembre de 2013, sobre el Estatuto General de la Administración Pública, cuyo artículo 51 reconoce el derecho de los funcionarios a afiliarse a un sindicato que estimen conveniente, había pedido al Gobierno que señalara si los funcionarios públicos, además del derecho a afiliarse a un sindicato, también gozaban del derecho a constituir un sindicato que estimaran conveniente, y que indicara las disposiciones legislativas pertinentes. La Comisión **lamentó** que el Gobierno no haya respondido a dicha solicitud. **En ausencia de una respuesta al respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior.**

Artículo 3. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y a formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 124 del Código del Trabajo, toda organización que solicite ser reconocida como la más representativa, deberá autorizar a la administración del trabajo a tener conocimiento del registro de sus afiliados y de sus bienes. A este respecto, el Gobierno había indicado previamente que estaba contemplándose la necesidad de modificar esta disposición, en consulta con los interlocutores sociales y ahora indica que una reunión tripartita ha decidido que el requisito de autorización debería permanecer. La Comisión toma debida nota de esta información.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación y de injerencia antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para establecer sanciones suficientemente disuasivas contra los actos de injerencia y de discriminación antisindical, en particular en lo que respecta a la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios debida a los trabajadores afiliados a los sindicatos. La Comisión tomó nota de que, según las disposiciones del artículo 114 del Código del Trabajo (ley núm. 13/2009), todo acto contrario a las disposiciones que establecen una protección contra los actos de discriminación e injerencia se considera como abusivo y permite reclamar una indemnización por daños y perjuicios, sin que la ley precise la cuantía de las indemnizaciones aplicables a los actos de discriminación antisindical contra sindicalistas y dirigentes sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que esta cuestión será debidamente tenida en cuenta en la revisión en curso del Código del Trabajo. **Recordando que es importante que la versión futura del Código del Trabajo se aplique a todos los actos de injerencia y de discriminación antisindical y que prevea sanciones suficientemente disuasivas, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto y que comunique, cuando se adopte, una copia del texto en cuestión.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En relación con sus comentarios anteriores sobre el arbitraje obligatorio en el marco de la negociación colectiva, la Comisión había tomado nota de que siguiendo el procedimiento de solución de conflictos colectivos previsto en los artículos 143 y siguientes del Código del Trabajo, en caso de no llegarse a una conciliación la cuestión se somete a un comité de arbitraje cuyas decisiones pueden ser objeto de apelación ante el tribunal

competente, cuya decisión es de obligado cumplimiento. La Comisión recuerda de nuevo que, a fin de preservar el principio de negociación voluntaria reconocido en el Convenio, el recurso obligatorio al arbitraje sólo es aceptable en ciertas circunstancias especiales, a saber, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, en los casos de conflictos en la administración pública que impliquen a funcionarios que ejercen su autoridad en nombre del Estado (*artículo 6 del Convenio*), o en casos de crisis nacional aguda. **Tomando nota de la declaración del Gobierno respecto a que los comentarios de la Comisión serán debidamente tenidos en cuenta, la Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de que, excepto en los casos antes mencionados, un conflicto colectivo de trabajo en el marco de la negociación colectiva sólo pueda ser sometido al arbitraje o al tribunal competente con el acuerdo de las partes.**

Por otra parte, en relación con sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 121 del Código del Trabajo prevé que, a petición de una organización representativa de trabajadores o de empleadores, la negociación de un convenio colectivo se realice en una comisión paritaria convocada por el Ministro de Trabajo o su delegado o representantes de la inspección del trabajo que participen en calidad de asesores. Habida cuenta de que el Gobierno no ha comunicado información nueva sobre este punto, la Comisión recuerda que una disposición de esa índole puede limitar el principio de negociación libre y voluntaria de las partes establecido por el Convenio. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 121 del Código del Trabajo a fin de que las partes puedan determinar libremente las modalidades de la negociación colectiva y que puedan, en particular, decidir si desean que un representante de la administración del trabajo esté presente.**

En lo que respecta a la cuestión de la extensión de los convenios colectivos, en sus observaciones anteriores la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 133 del Código del Trabajo, a petición de una organización sindical o patronal representativa, parte o no en el convenio, o por su propia iniciativa, el Ministro de Trabajo puede decretar la aplicación obligatoria de todas o algunas disposiciones de un convenio a todos los empleadores o trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación profesional o territorial del convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, en la práctica, la extensión de un convenio colectivo sólo puede realizarse si dicho convenio es objeto de consultas tripartitas exhaustivas. **La Comisión pide al Gobierno que indique en qué marco institucional ocurren estas consultas tripartitas y que informe sobre el desarrollo de procedimientos de extensión de convenios colectivos ocurridos recientemente.**

Negociación colectiva en la práctica. **Tomando nota de la declaración del Gobierno según la cual se compromete a promover la negociación colectiva, la Comisión confía en que se adopten medidas en este sentido y que el Gobierno transmita información sobre las actividades del Consejo Nacional del Trabajo en el ámbito de la negociación colectiva, así como sobre el número de convenios colectivos concluidos, los sectores concernidos y el número de trabajadores cubiertos.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

Artículos 2 y 3 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión se refirió a la necesidad de modificar los artículos 11, 3) y 25 de la Ley de Sindicatos (TUA) con el fin de eliminar la autoridad discrecional del registrador respecto de la inscripción de los sindicatos, y limitar los poderes del registrador para llevar a cabo investigaciones en las cuentas de los sindicatos. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno continuaría las consultas con los interlocutores sociales, que adoptaría, en un futuro próximo, el proyecto de ley de relaciones del trabajo para reemplazar a la TUA y que abordaría las cuestiones mencionadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha introducido ninguna modificación en la legislación y que, dado el tiempo transcurrido desde la última ronda de consultas legislativas, se ha hecho necesario iniciar nuevamente el proceso. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que ha recibido fondos de una institución financiera internacional con el fin de emprender, en consulta con los interlocutores sociales, la revisión del proyecto de ley de relaciones del trabajo. Según el Gobierno el proceso de consulta durará un período de dieciocho meses, al término del cual el proyecto se presentará a la aprobación del Consejo de Ministros y espera que éste sea aprobado posteriormente por el Parlamento. **La Comisión lamenta tomar nota de la falta de progresos constatados en la modificación de los artículos 11, 3) y 25 de la TUA y espera firmemente que el proyecto de ley revisado de relaciones del trabajo será adoptado en un futuro próximo y que los comentarios formulados por la Comisión más arriba se tendrán en cuenta con miras a dar pleno cumplimiento al Convenio.**

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

Cuestiones legislativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que incluyera en la legislación disposiciones que previeran la protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia de los empleadores o de las organizaciones de empleadores en las organizaciones de trabajadores (y viceversa) y que estimularan la negociación colectiva en los sectores público y privado. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha introducido ninguna modificación en la legislación y que, en vista del mucho tiempo transcurrido desde la última ronda de consultas legislativas, se ha hecho necesario volver a iniciar el proceso. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que ha recibido fondos de una institución financiera internacional con el fin de emprender, en consulta con los interlocutores sociales, la revisión del proyecto de ley de relaciones de trabajo y que este proceso incluirá, entre otros, los comentarios formulados por la Comisión. **Recordando que sus comentarios a este respecto se remontan a 2001, la Comisión espera firmemente que la revisión del proyecto de ley de relaciones de trabajo propiciará la pronta**

adopción de una legislación que dé pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio. La Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

Santa Lucía

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a ellas. Durante varios años, tomando nota de que los «servicios de protección» — que incluyen los servicios de lucha contra incendios y el personal de los establecimientos penitenciarios — estaban excluidos de la aplicación de la Ley de Registro, Estatus y Reconocimiento de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores, 1999, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho de sindicación al personal de lucha contra incendios y de los establecimientos penitenciarios. La Comisión toma nota de que el artículo 325 de la Ley del Trabajo, 2006, también excluye los «servicios de protección» (que según el artículo 2 de la ley incluyen los servicios de lucha contra incendios y los servicios correccionales) del ámbito de aplicación de las disposiciones de la nueva ley que se ocupan del derecho de sindicación. *Al tiempo que toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la cuestión del derecho de sindicación del personal de lucha contra incendios y de los servicios penitenciarios se planteará al Ministro de Trabajo, y recordando que había señalado que en la práctica los trabajadores de estos servicios disfrutaban de ese derecho, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique de qué manera se garantizan los derechos sindicales del personal de lucha contra incendios y de los servicios penitenciarios.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículos 1, 2, 4 y 6 del Convenio. Desde hace varios años, tomando nota de que «los servicios de protección» — que incluyen los servicios de extinción de incendios y el personal de los servicios penitenciarios — habían sido excluidos de la Ley sobre el Registro, el Estatuto y el Reconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para conceder al personal de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios los derechos y garantías establecidos en el Convenio. La Comisión toma nota de que la Ley del Trabajo de 2006, que entró en vigor el 1.º de agosto de 2012, deroga la Ley sobre el Registro, el Estatuto y el Reconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999. Toma nota, además, de que el artículo 355 de la Ley del Trabajo de 2006 excluye también a los «servicios de protección» (que, según el artículo 2 de la ley, incluyen a los servicios de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios) del ámbito de aplicación de las disposiciones que se ocupan del derecho de negociación colectiva en la nueva legislación. *Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el personal de lucha contra incendios y el personal de servicios penitenciarios se benefician en la práctica del derecho a la negociación colectiva, y que esta cuestión sería planteada ante el Ministerio de Trabajo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reconocer expresamente en la legislación el derecho a la negociación colectiva al personal de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santo Tomé y Príncipe

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión recuerda que, a lo largo de algunos años, viene solicitando al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia contra las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. *Lamentando tomar nota de que el Gobierno se limita a mencionar que, en la práctica, se recurre a otras leyes para compensar la mencionada laguna legislativa, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación contenga disposiciones específicas y eficaces sobre la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.*

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Ausencia de un marco jurídico para el ejercicio del derecho de negociación colectiva y ausencia de la negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, pero que no es objeto de una reglamentación legal y que, desde hace varios años, está pendiente de adopción un proyecto de ley sobre el marco jurídico de la negociación colectiva. La Comisión *lamenta* tomar nota de que, a diferencia de sus memorias anteriores, el

Gobierno afirma que no se está elaborando a este respecto ningún proyecto de ley. Recordando que, en su observación anterior, la Comisión expresó su preocupación ante la ausencia de convenios colectivos en el país, la Comisión destaca que la ausencia de un marco jurídico puede dificultar el ejercicio del derecho de negociación colectiva. **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias, tanto en la ley como en la práctica, para alentar y promover el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con las diversas cuestiones planteadas y confía en que en un futuro próximo pueda indicar los progresos realizados.**

Senegal

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidos el 1.º de septiembre de 2015 y el 1.º de septiembre de 2018, respectivamente y que tratan de las dificultades recurrentes vinculadas con el registro de los sindicatos, así como sobre las modalidades de organización de las elecciones sindicales en el sector de la educación. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos del Senegal (UNSAS) y de la respuesta del Gobierno relativa a las mismas, recibidas el 31 de agosto de 2018, que tratan de las cuestiones ya planteadas por la Comisión. Por último, la Comisión toma nota de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 3209 (véase el 384.º informe, de marzo de 2018), en las que se invita al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para modificar el artículo 8 de la Ley núm. 69-64, de 30 de octubre de 1969, sobre el Estatuto del Personal de Aduanas, con el fin de eliminar la prohibición de que el personal de aduanas ejerza sus derechos sindicales. **La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar todo progreso al respecto.**

Puesta en conformidad de la legislación con el Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios vienen tratando, desde hace muchos años, de la necesidad de modificar algunas disposiciones legislativas, con el fin de armonizarlas con el Convenio. Mientras que el Gobierno siempre manifestó su voluntad de proceder a modificaciones, la Comisión **lamenta profundamente** tomar nota de la ausencia de todo progreso significativo en la materia. **En esas condiciones, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin retrasos, las medidas que se impongan para garantizar la plena conformidad de la legislación con el Convenio en todos los puntos que figuran a continuación.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho sindical de los menores. Necesidad de enmendar el artículo 11 del Código del Trabajo, para garantizar el derecho sindical a los menores que tuviesen la edad mínima legal de admisión en el empleo (15 años, en virtud del artículo L.145 del Código del Trabajo), como trabajadores y como aprendices, sin que fuese necesaria la autorización parental o del tutor. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que un proyecto de texto sobre la modificación del artículo 11 fue validado por el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo y que dicha modificación se dirige a garantizar la libre afiliación de los menores a los sindicatos, sin ninguna restricción ni autorización previa, a partir de los 16 años, que corresponde a la edad de fin de la escolaridad obligatoria en Senegal. **La Comisión confía una vez más en que, en un futuro próximo, todo se pondrá en marcha para permitir que los menores se afilien libremente a un sindicato, en cuanto lleguen a la edad mínima de acceso al empleo, como prevé el Código del Trabajo.**

Artículos 2, 5 y 6. Derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, sin autorización previa. Necesidad de derogar la ley núm.76-28, de 6 de abril de 1976 y de modificar el artículo L.8 del Código del Trabajo, con el fin de garantizar a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa. **Lamentando tomar nota de que el Gobierno se limita a recordar que el procedimiento en cuestión se refiere únicamente a simples formalidades administrativas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte sin retrasos medidas para derogar las disposiciones legislativas que restringen la libertad de los trabajadores de constituir sus propias organizaciones, especialmente las disposiciones relativas a la moralidad y a la capacidad de los dirigentes sindicales, o que confieren de hecho a las autoridades una facultad de aprobación previa discrecional, que está en contradicción con el Convenio.**

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de ejercer libremente sus actividades y de formular su programa de acción. Movilización en caso de huelga. Necesidad de adoptar el decreto de aplicación del artículo L.276, del Código del Trabajo, que determina la lista de empleos de modo de autorizar la movilización de trabajadores en caso de huelga solamente para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno, haciendo referencia al decreto núm. 72-17, de 11 de enero de 1972 — que establece la lista de puestos, empleos o funciones, cuyos ocupantes pueden ser objeto de movilización —, no tiene en cuenta los comentarios que ya había formulado en 2006, a saber, que el decreto en cuestión prevé la movilización de trabajadores en caso de huelga para numerosos puestos, empleos o funciones a los que no se aplica la definición de servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos cuya interrupción pusiera en peligro, en toda o en una parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de la persona). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas que se impongan para que el decreto de aplicación del artículo núm. L.276 del Código del**

Trabajo, sólo autorice la movilización de trabajadores para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en el sentido estricto del término.

Ocupación de los locales en caso de huelga. Necesidad de incluir, en el Código del Trabajo, una disposición que prevea que las restricciones contempladas en el artículo núm. L.276 del Código del Trabajo, sobre la ocupación de los locales o de los sitios adyacentes durante la huelga, sólo se apliquen en los casos en los que las huelgas pierdan su carácter pacífico, o en los casos en los que se obstaculice el respeto de la libertad de trabajar de los no-huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de ingresar en los locales. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar la legislación en este sentido.**

Artículo 4. Disolución por vía administrativa. Necesidad de adoptar una disposición, por vía legislativa o reglamentaria, que prevea expresamente que la disolución de asociaciones sediciosas, que contempla la Ley núm. 65-40, de 22 de mayo de 1965, sobre las Asociaciones, no puede de ninguna manera aplicarse a las organizaciones profesionales. Mientras que el Gobierno indicó en su memoria anterior que está en curso la armonización de la ley en este punto, la Comisión lamenta que el Gobierno no informe de ningún avance en la materia y que se limite a indicar que la disolución administrativa no es posible en absoluto en el derecho senegalés. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas que se impongan para modificar la legislación en este sentido.**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2020.]

Serbia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones de la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost», de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS) y de la Asociación Serbia de Empleadores (SAE), recibidas el 7 de noviembre de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto, así como las observaciones pendientes formuladas por la Unión de Empleadores de Serbia y la Confederación de Sindicatos Libres (CFTU) en 2012.**

Libertades civiles. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas de seguimiento adoptadas por el Ministerio del Interior para investigar el alegato de la CSI en relación con un intento de agresión durante una huelga organizada por el Sindicato Independiente de la Policía (NSP). El Gobierno señala que ha recabado información del NSP, que señala que no tiene ninguna información relativa a los activistas sindicales que sufrieron violencia física antes, durante o después de la huelga y que solamente tiene conocimiento de la existencia de procedimientos disciplinarios que se resolvieron con una decisión judicial.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas sin autorización previa. La Comisión recuerda otra vez que ha venido formulando comentarios desde hace varios años sobre la necesidad de modificar el artículo 216 de la Ley del Trabajo, que dispone que las asociaciones de empleadores pueden ser creadas por empleadores con no menos del 5 por ciento del número total de empleados en una determinada rama, grupo, subgrupo, línea de negocio o territorio de una unidad territorial, con el fin de establecer un requisito de afiliación mínima razonable. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se tomarían en consideración los comentarios de la Comisión durante el proceso de modificación de la Ley del Trabajo. La Comisión observó asimismo que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia de 2012 consideró que el Gobierno debería acelerar la enmienda, de largo tiempo esperada, del artículo 216 de la Ley del Trabajo, especialmente a fin de derogar el umbral del 5 por ciento, y señaló que seguía existiendo preocupación acerca de la falta de una plena participación de los interlocutores sociales en la revisión legislativa anunciada. **La Comisión lamenta que la memoria del Gobierno no contenga ninguna información en este sentido y espera que el proceso de revisión de la legislación permanente se llevará a cabo en plena consulta con los interlocutores sociales y que se tomará debidamente en cuenta la necesidad de enmendar el artículo 216 de la Ley del Trabajo a fin de establecer un requisito razonable en lo que respecta al número mínimo de miembros de forma que no obstaculice el establecimiento de las organizaciones de empleadores. La Comisión espera que el proceso legislativo se complete en un futuro próximo y pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se produzcan a este respecto.**

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, en relación con: i) las supuestas tentativas del Ministerio de Educación para configurar una lista negra de sindicalistas en el sector de la educación recabando de los directores de escuelas listas confidenciales de sus empleados sindicalizados; y ii) el supuesto incumplimiento del Gobierno contribuye al debilitamiento persistente y generalizado del diálogo social y la negociación colectiva al favorecer a los denominados sindicatos «amarillos» y el entorpecimiento de la negociación colectiva de buena fe mediante el retraso indebido de la inscripción en el registro y de la publicación de los

convenios colectivos. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost», recibidas el 7 de noviembre de 2018, en torno a la supuesta deficiente aplicación de la negociación colectiva de buena fe en el país, debido a que la representatividad de algunos sindicatos habría sido retirada una vez que el proceso de negociación estaba en curso y con la negativa de algunos empleadores a iniciar el proceso de negociación colectiva o mediante la ampliación inadecuada de este proceso durante largos períodos. La Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), recibidas el 7 de noviembre de 2018, en relación con: i) los alegatos de discriminación antisindical; ii) la solicitud de modificar la Ley del Trabajo con el fin de otorgar el derecho, a todos los trabajadores y no sólo a los empleados, a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos para, teniendo en cuenta que un elevado número de personas en el país son contratadas para efectuar formas atípicas de trabajo y siguen sin poder constituir plenamente un sindicato ni convertirse en afiliados de las organizaciones existentes. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las cuestiones planteadas por la CSI, la Nezavisnost y la CATUS.**

Además, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no comunicó su respuesta a las observaciones anteriores de las siguientes organizaciones de trabajadores y de empleadores: i) la CATUS y el Sindicato de Empleados Judiciales de Serbia (TUJES) (2013); ii) la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Serbia de Empleadores (SAE) (2013); iii) la Unión de Empleadores de Serbia (UES) (2012 y 2014); iv) la CSI (2015); v) la Nezavisnost (2012), y vi) la Confederación de Sindicatos Libres (2012). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione sus comentarios sobre las mencionadas observaciones pendientes de los sindicatos.**

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno información más detallada sobre los procedimientos especialmente relacionados con la discriminación antisindical, incluidos los remitidos a los órganos judiciales, así como su duración media; la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Comisionado para la Protección de la Igualdad, que está encargado de recibir y examinar las quejas relativas a la discriminación antisindical está autorizado para presentar demandas estratégicas y/o formular recomendaciones a las personas acusadas de discriminación. Aun cuando la persona acusada de discriminación no tenga que seguir las recomendaciones, el Gobierno señala que fueron adoptadas medidas basadas en las recomendaciones en el 89,1 por ciento de los casos en 2015, en el 76,7 por ciento de los casos en 2016, y en el 75,86 por ciento de los casos en 2017. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que el mayor número de quejas presentadas ante el Comisionado pertenecen al ámbito del trabajo y del empleo (36,3 por ciento en 2015; 33,9 por ciento en 2016, y 31,2 por ciento en 2017), no se ha suministrado ninguna información sobre el número de casos de discriminación antisindical que han sido tramitados por el Comisionado así como tampoco sobre el tipo de medidas y recomendaciones tomadas y formuladas por éste. **La Comisión, en consecuencia, pide al Gobierno que: i) transmita información más detallada sobre los casos tramitados por el Comisionado para la Protección de la Igualdad que estén específicamente relacionados con discriminación antisindical, y ii) comunique información sobre los procedimientos de la inspección del trabajo y del sistema judicial relativos a los casos de discriminación antisindical, la duración promedio de los mismos y sus resultados.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión reitera que desde hace muchos años ha venido examinando las condiciones y el mecanismo para el establecimiento de la representatividad de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores. En sus últimos comentarios, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre el funcionamiento y la eficacia de las enmiendas introducidas en el artículo 229 de la Ley del Trabajo, que establece que las decisiones sean adoptadas por mayoría y permiten al Ministro decidir sobre una solicitud de representatividad sin la aprobación del Panel correspondiente si éste no le presenta una propuesta en los treinta días posteriores a la fecha de solicitud. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no comunicó ninguna información a este respecto y que, al mismo tiempo, sigue recibiendo las observaciones de los sindicatos en las que se plantean cuestiones sobre la determinación de la representatividad. **Reiterando que los métodos para la determinación de las organizaciones más representativas deberían basarse en criterios objetivos, preestablecidos y precisos, la Comisión pide una vez más al Gobierno que señale si las nuevas enmiendas han mejorado el funcionamiento y la eficacia del Panel para el establecimiento de la representatividad cuando aborda las solicitudes de representatividad, y si el Gobierno está elaborando nuevas enmiendas a la Ley del Trabajo a este respecto.**

Porcentaje requerido para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, habiendo tomado nota de que el Gobierno y los interlocutores sociales han puesto en marcha una iniciativa para examinar la Ley del Trabajo, la Comisión confió en que el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para suprimir el requisito del 10 por ciento para que las organizaciones de empleadores puedan realizar negociaciones colectivas. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto. **Recordando que el porcentaje mencionado es especialmente elevado, tanto más en el contexto de negociaciones a nivel sectorial o nacional, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, en consulta con los interlocutores sociales representativos, las medidas necesarias para rebajar los porcentajes antes mencionados y a que transmita información sobre cualquier evolución legislativa a este respecto.**

La Comisión manifiesta una vez más la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias sin demora para poner la legislación de conformidad con los requisitos del Convenio, teniendo en cuenta los comentarios anteriores, y pide al Gobierno que señale los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Seychelles

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)

Artículos 2, 4 y 6 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. La Comisión recuerda que durante varios años ha venido solicitado al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar diversas disposiciones de la Ley sobre Relaciones Laborales (IRA). En sus comentarios anteriores, la Comisión saludó la indicación del Gobierno de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo de los Recursos Humanos había establecido un comité tripartito para revisar la IRA. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en 2015 se realizaron consultas con los interlocutores sociales y otras partes interesadas clave sobre las enmiendas propuestas a la IRA. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se firmó un nuevo contrato de consultoría y que la labor a fin de continuar la revisión de la IRA se iniciaría en julio de 2018. **La Comisión confía en que la revisión de la IRA finalizará pronto, en consulta con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la Oficina, y teniendo en cuenta los comentarios anteriores de la Comisión en los que pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para:**

- **adoptar disposiciones legislativas que prevean la protección contra los actos de injerencia de los empleadores o sus organizaciones, en particular, los actos cuyo objetivo es promover el establecimiento de organizaciones de trabajadores dirigidas o controladas por los empleadores o las organizaciones de empleadores, junto con medidas efectivas y suficientemente disuasorias, y**
- **enmendar su legislación a fin de garantizar que el recurso al arbitraje obligatorio en los casos en los que las partes no alcancen un acuerdo a través de la negociación colectiva sólo sea admisible en relación con los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), en los servicios esenciales en el sentido estricto del término y en caso de crisis nacional aguda.**

Nuevos acontecimientos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en junio de 2016 se refundieron nuevas disposiciones en el proyecto de ley sobre la prevención de la discriminación y el acoso en el empleo 2016 (EB 2016). A este respecto, la Comisión observa que el Gobierno menciona diversas disposiciones en materia de protección contra la discriminación antisindical. **La Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre la elaboración y adopción de la EB 2016.**

Sierra Leona

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2010.

La Comisión toma nota de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2013 relativos a restricciones a la negociación colectiva en el sector minero. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Necesidad de adoptar medidas específicas acompañadas de sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias para proteger a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión había tomado nota de que la revisión de la legislación laboral, preparada con la asistencia técnica de la OIT, había sido sometida a reuniones tripartitas, que los comentarios tripartitos ya habían sido recibidos y que el documento había sido enviado a la asesoría jurídica. La Comisión había pedido al Gobierno que la mantuviese informada sobre todo progreso realizado en la preparación del proyecto final del documento y que le suministrase una copia de la legislación modificada tan pronto como la misma fuese adoptada. **Tomando nota de que según la información anterior enviada por el Gobierno, la revisión de la legislación laboral fue sometida a la asesoría jurídica en 1995, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas necesarias a fin de adoptar la nueva legislación en un futuro próximo y que informe a este respecto.**

Artículo 4. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los convenios colectivos que están en vigor en el sector de la educación y en otros sectores.**

La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, acompañada de copias de todo texto relativo a la libertad sindical que se haya adoptado desde 1992 (año del proyecto de ley sobre relaciones laborales).

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Árabe Siria

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de que en su respuesta a las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en la que se alega la utilización de la policía y de las fuerzas paramilitares para hacer frente a las protestas, muertes, detenciones y encarcelamientos de activistas políticos y activistas de los derechos humanos, el

Gobierno indica que: i) la OIT no tiene el mandato constitucional de interferir en los asuntos políticos internos de los países, sino que su mandato es examinar los alegatos de índole económica o el tratamiento de las condiciones laborales; ii) las cuestiones planteadas por la CSI son discutidas por el Consejo de Derechos Humanos desde 2011; iii) el Gobierno refuta categóricamente el uso de la violencia contra sus ciudadanos; las protestas, los asesinatos y los actos de vandalismo los llevó a cabo un grupo terrorista armado, para desestabilizar al país, y iv) el derecho de huelga está previsto en el artículo 44 de la Constitución (2012), que especifica que los ciudadanos tienen el derecho de reunión, de manifestación pacífica y de huelga. La Comisión recuerda que la libertad sindical es un principio con implicaciones que van mucho más allá del simple marco de la legislación laboral. Recuerda asimismo que los órganos de control de la OIT han insistido constantemente en la interdependencia entre las libertades civiles y los derechos sindicales, subrayando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 59). **La Comisión confía en que el Gobierno garantice el respeto de este principio.**

Artículo 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que indicara si gozan de los derechos previstos en el Convenio los trabajadores independientes, los funcionarios públicos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores domésticos y categorías similares, y los trabajadores temporales y a tiempo parcial cuyos horarios de trabajo no superan las dos horas al día. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud del artículo 5, b), de la Ley del Trabajo núm. 17, de 2010, los trabajadores domésticos y categorías similares, los trabajadores de asociaciones y organizaciones benéficas, los trabajadores temporales y los trabajadores a tiempo parcial (trabajadores cuyas horas de trabajo no superan las dos horas al día), estarán sujetos a las disposiciones de sus contratos de trabajo, que no pueden, bajo ninguna circunstancia, prescribir menos derechos que los que prescribe la Ley del Trabajo, incluida las disposiciones de la Ley sobre las Organizaciones Sindicales. La Comisión considera, sin embargo, que el derecho de sindicación de las categorías mencionadas de trabajadores excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo debería de estar explícitamente protegido por la ley. **La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome medidas, en consulta con los interlocutores sociales, para adoptar las disposiciones legislativas necesarias a fin de garantizar que estas categorías de trabajadores disfruten de los derechos previstos en el Convenio.** La Comisión también toma nota de que los trabajadores agrícolas y las relaciones del trabajo agrícolas, incluyendo la negociación colectiva, se rigen por la Ley de Relaciones Agrícolas núm. 56, de 2004, que los trabajadores domésticos se rigen por la ley núm. 201 de 2010, y los funcionarios públicos se rigen por la Ley Fundamental de los Empleados Públicos núm. 50, de 2004. **La Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones legislativas específicas que regulan aspectos particulares del el derecho de sindicación de los funcionarios públicos, trabajadores agrícolas, trabajadores domésticos así como trabajadores independientes y que proporcione una copia de las mismas.**

Monopolio sindical. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a la necesidad de que el Gobierno enmendara o derogara las disposiciones legislativas que establecen un monopolio sindical (artículos 3, 4, 5 y 7 del decreto legislativo núm. 84; artículos 4, 6, 8, 13, 14 y 15 del decreto legislativo núm. 3, que enmienda el decreto legislativo núm. 84; el artículo 2 del decreto legislativo núm. 250, de 1969, y los artículos 26-31, de la ley núm. 21, de 1974). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los trabajadores tienen el derecho de constituir sindicatos independientes, si el sindicato está afiliado a la Federación General de Sindicatos de Siria (GFTU). Según el Gobierno, la aplicación del pluralismo sindical en varios países debilita el movimiento sindical y disminuye los derechos de los trabajadores. Observando que todas las organizaciones de trabajadores deben pertenecer a la GFTU y que toda intención de constituir un sindicato debe estar sujeta al consentimiento de esta Federación, la Comisión considera que, aunque en general es en beneficio de los trabajadores y de los empleadores evitar una proliferación de organizaciones competidoras, el derecho de los trabajadores de poder constituir las organizaciones que estimen convenientes, como establece el artículo 2 del Convenio, implica que el pluralismo sindical debería ser posible en todos los casos. La Comisión considera que es importante que los trabajadores puedan cambiar de sindicatos o constituir nuevos sindicatos por motivos de independencia, eficacia, o afinidad ideológica. En consecuencia, la unidad sindical impuesta por la ley, ya sea directa o indirectamente, no está de conformidad con el Convenio (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 92). **La Comisión reitera su solicitud anterior y espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias, en plena consulta con los interlocutores sociales, para armonizar la legislación nacional con el artículo 2 del Convenio. Solicita al Gobierno que informe sobre todo progreso realizado a este respecto.**

Artículo 3. Administración financiera de las organizaciones. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se relacionan con la necesidad de enmendar el artículo 18, a), del decreto legislativo núm. 84, en su forma enmendada por el artículo 4, 5), del decreto legislativo núm. 30, de 1982, con el fin de suprimir las facultades del ministro de establecer las condiciones y procedimientos para la inversión de los fondos sindicales en servicios financieros y en sectores industriales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, de conformidad con los derechos que les confiere la Constitución, la GFTU y otros sindicatos son independientes en el plano financiero y tienen el derecho de concluir convenios y contratos de trabajo, con arreglo al artículo 17 de la Ley sobre Organizaciones Sindicales y el derecho de disponer de sus fondos y de sus ingresos, de conformidad con sus decisiones y reglamentos internos. **Lamentando tomar nota de la ausencia de toda nueva evolución en este sentido, la Comisión espera que el Gobierno dé inicio, lo antes posible, a la revisión del artículo 18, a), del decreto legislativo núm. 84, en su forma enmendada por el**

artículo 4, 5), del decreto legislativo núm. 30, de 1982, en plena consulta con los interlocutores sociales. También solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus representantes. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que comunicara información específica sobre las medidas adoptadas o contempladas para derogar o enmendar el artículo 1, 4), de la ley núm. 29 de 1986, que enmienda el decreto legislativo núm. 84, que determina la composición del congreso de la GFTU y de la presidencia de su mesa. La Comisión ha indicado en múltiples ocasiones que corresponde a los estatutos, reglamentos sindicales establecer la composición y la presidencia de la mesa en los congresos sindicales. **Lamentando tomar nota de la ausencia de una nueva evolución en ese sentido, la Comisión espera que el Gobierno adopte, lo antes posible, las medidas necesarias para enmendar o derogar las mencionadas disposiciones, en consulta con los interlocutores sociales, con el fin de garantizar que las organizaciones puedan elegir a sus representantes con plena libertad. Solicita al Gobierno que comunique información acerca de las medidas adoptadas o previstas a este respecto.**

Derecho de las organizaciones a formular sus programas y organizar sus actividades. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar las disposiciones legislativas que limitan el derecho de huelga, mediante la imposición de severas sanciones que incluyen la reclusión (artículos 330, 332, 333 y 334 del decreto legislativo núm. 148, de 1949, que promulga el Código Penal). La Comisión observó, además, que, en el capítulo sobre conflictos colectivos laborales de la Ley del Trabajo no se hacía referencia alguna a la posibilidad de que los trabajadores ejercieran su derecho de huelga. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 67 de la Ley del Trabajo prevé la protección contra los despidos de los trabajadores sindicalizados por haber participado en actividades sindicales. **Recordando que en el pasado, el Gobierno indicó que la GFTU trabaja en la modificación en la Ley del Trabajo, para garantizar una coherencia con los artículos de la Constitución que confieren a los trabajadores el derecho de huelga, la Comisión espera que se enmiende la ley, para armonizarla con el Convenio, y solicita al Gobierno que comunique información en este sentido. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el sector agrícola se rige en la actualidad por la ley núm. 56, de 2004, la Comisión también solicita al Gobierno que indique si los trabajadores de este sector gozan del derecho de huelga y que identifique las disposiciones legislativas pertinentes.**

Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno, debido a la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión confía en que el Gobierno no escatimará esfuerzos en armonizar su legislación y su práctica con el Convenio.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que especificara y proporcionara datos relativos a las disposiciones legislativas que confieren a todas las categorías de trabajadores los derechos consagrados en el Convenio: trabajadores independientes, funcionarios, trabajadores domésticos y categorías similares, trabajadores de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, trabajadores ocasionales y trabajadores a tiempo parcial cuyas horas de trabajo no exceden de dos horas al día. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) con arreglo al artículo 5, b), de la Ley del Trabajo núm. 17, de 2010, los trabajadores domésticos y categorías similares, los trabajadores de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, los trabajadores ocasionales y los trabajadores a tiempo parcial deben registrarse por las disposiciones de sus contratos de trabajo, que bajo ninguna circunstancia pueden establecer menos derechos que los que prevé la Ley del Trabajo, incluidas las disposiciones de la Ley de Sindicatos, y ii) los funcionarios públicos se rigen por la Ley Fundamental de Funcionarios del Estado núm. 50, de 2004. **Al tiempo que toma nota de que el artículo 5, b), de la Ley del Trabajo excluye varias categorías de trabajadores de su ámbito de aplicación y se remite exclusivamente al contenido de sus contratos de trabajo individuales, la Comisión solicita al Gobierno que especifique cuál es la disposición legislativa que reconoce el derecho de negociación colectiva. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones legislativas que regulan el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no prestan servicio en la administración del Estado. Asimismo, solicita al Gobierno que indique si los trabajadores independientes gozan de los derechos que se otorgan en el Convenio y que especifique cuáles son las disposiciones legislativas correspondientes.**

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra actos de injerencia. En comentarios anteriores, al tomar nota de que la Ley del Trabajo, de 2010, no prohíbe expresamente actos de injerencia por parte de las organizaciones de empleadores o de las organizaciones de trabajadores de unas respecto de las otras, la Comisión solicitó al Gobierno que tomara medidas con el fin de adoptar disposiciones claras y precisas que prohíban actos de injerencia, acompañadas de sanciones suficientemente disuasorias. Al tiempo que observa que el Gobierno no proporciona información específica a este respecto, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran concretamente actos de injerencia las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el

control de un empleador o de una organización de empleadores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 194). ***Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación prohíba de forma explícita todos los actos que abarca el artículo 2 del Convenio, y que contemple sanciones lo suficientemente disuasorias a este respecto.***

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 187, c), de la Ley del Trabajo otorga al Ministerio un poder excesivo para oponerse o negarse a registrar un convenio colectivo por cualquier motivo que considere apropiado durante el período de treinta días tras la presentación del convenio colectivo, y por lo tanto solicitó al Gobierno que modificara esta disposición con el fin de garantizar plenamente el principio de negociación colectiva libre y voluntaria establecido en el Convenio. Además, señaló que, en virtud del artículo 214 de la Ley del Trabajo, si fracasaba la mediación, cualquier parte podía presentar una solicitud para iniciar la solución del conflicto por medio del arbitraje, y recordó que el arbitraje obligatorio sólo era aceptable en relación con funcionarios públicos que prestan servicio en la administración del Estado, los servicios esenciales en el sentido estricto del término, y las crisis nacionales graves. La Comisión observa que el Gobierno sólo señala que todas las leyes y las enmiendas correspondientes de la Ley del Trabajo se aprobaron en estrecha consulta con los interlocutores sociales, y reitera que el artículo 187, c), de la Ley del Trabajo tiene por objeto garantizar que los convenios colectivos se ajusten a la ley antes mencionada. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que los artículos 187, c), y 214 de la Ley del Trabajo se armonicen con el Convenio.***

Organismos de arbitraje. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptara medidas para modificar el artículo 215 de la Ley del Trabajo con el fin de asegurar que la composición del tribunal de arbitraje sea equilibrada y cuente con la confianza de las partes en el mecanismo de arbitraje. ***Al tiempo que lamenta la falta de progresos a este respecto, la Comisión espera que el Gobierno lleve a cabo, lo antes posible, la enmienda de la disposición mencionada.***

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para promover y preconizar la elaboración y utilización de procedimientos de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. ***Al tiempo que toma nota de que en el artículo 178 de la Ley del Trabajo se hace referencia a la negociación colectiva y el diálogo social, la Comisión solicita al Gobierno qué medidas se han adoptado o contemplado para promover y preconizar la elaboración y utilización de procedimientos de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, con el fin de regular las condiciones de trabajo por conducto de la negociación colectiva. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de convenios colectivos vigentes, los sectores a los que se refieren y el número de trabajadores cubiertos.***

Si bien reconoce la complejidad de la situación en el terreno debido al conflicto armado y a la presencia de grupos armados en el país, la Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo posible por asegurar que el derecho y la práctica sean conformes al Convenio.

Somalia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2014)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, denunciando el clima de violencia e impunidad, la denegación del reconocimiento de organizaciones sindicales en los ministerios y el requisito de aprobación previa del Gobierno por el registro sindical. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que nuevamente no se ha recibido la primera memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión tomó nota de las observaciones de 2015 de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU), alegando restricciones en el ejercicio de los derechos sindicales, en particular en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, así como actos repetidos de acoso contra sindicalistas. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con las mismas cuestiones que, mientras tanto, han sido examinadas por el Comité de Libertad Sindical en un caso presentado por la FESTU (caso núm. 3113). A este respecto, la Comisión toma nota de que en sus últimas conclusiones el Comité de Libertad Sindical se refirió a la comunicación de septiembre de 2017 en la que el Gobierno: i) reconocía que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había solicitado el asesoramiento del Fiscal General sobre el caso y que éste escribió a los ministerios pertinentes y orientó a las autoridades interesadas para que cumplieran las recomendaciones del Comité; ii) reconocía a la FESTU, dirigida por el Sr. Omar Faruk Osman, como la organización de trabajadores más representativa del país; iii) indicaba que estaba tratando de resolver las diferencias políticas entre la FESTU y los responsables de la formulación de políticas en el seno del Gobierno, y iv) solicitaba la asistencia de la OIT para facilitar un diálogo constructivo y encontrar una solución armoniosa a este conflicto de larga data (véase 383.º informe, caso núm. 3113). ***La Comisión saluda el compromiso del Gobierno de intentar buscar soluciones con la asistencia de la Oficina. La Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para transmitir sin demora su primera memoria sobre la aplicación del Convenio así como información sobre progresos significativos en relación con las cuestiones planteadas por la CSI y la FESTU.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2014)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 que contienen alegatos de actos de discriminación e injerencia antisindicales. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.***

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU), de 2015, que denunciaba la injerencia de las autoridades en las actividades sindicales y el acoso de los dirigentes sindicales, en especial en el sector de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, referentes a las mismas cuestiones, que entretanto han sido examinadas por el Comité de Libertad Sindical en un caso presentado por la FESTU (caso núm. 3113). A este respecto, la Comisión toma nota de que en sus últimas conclusiones, el Comité de Libertad Sindical se refirió a una comunicación de septiembre de 2017, en la que el Gobierno: i) reconocía que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había solicitado el asesoramiento del Fiscal General del Estado sobre el caso, y que este último había escrito a los Ministerios pertinentes y había orientado a las autoridades competentes para que cumplieran las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical; ii) reconocía que la FESTU, dirigida por el Sr. Omar Faruk Osman, era la organización de trabajadores más representativa en el país; iii) indicaba que estaba tratando de resolver las diferencias políticas entre la FESTU y los responsables de las formulaciones de políticas en el Gobierno, y iv) solicitaba la asistencia de la Oficina para facilitar un diálogo constructivo y hallar una solución a este conflicto de larga data de forma armoniosa (véase 383.º informe del Comité de Libertad Sindical, noviembre de 2017, caso núm. 3113). ***La Comisión acoge con agrado el compromiso del Gobierno de tratar de hallar soluciones en relación con las graves alegaciones de violación de los derechos sindicales en el sector de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación, con la asistencia de la Oficina, y confía en que el Gobierno tomará también todas las medidas necesarias para proporcionar sin demora su primera memoria sobre la aplicación del Convenio, así como información sobre los progresos significativos realizados en relación con las cuestiones planteadas por la CSI y la FESTU.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sri Lanka

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales (FTZ & GSEU), recibidas el 1.º y 14 de septiembre de 2018, respectivamente.

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno relativos a las observaciones de la CSI de 2012, en las que se alegaban casos de intimidación, arresto, detención y suspensión de sindicalistas y de trabajadores, tras una huelga en una zona franca de exportación (ZFE), así como de violencia policial durante una manifestación de trabajadores en una ZFE, en la que la policía llegó incluso a disparar, lo que dio lugar al fallecimiento de un trabajador y a cientos de heridos. En particular, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que respeta la libertad sindical y toma medidas correctivas para asegurarla tanto en las ZFE como en otros lugares del país, en particular en el marco del Plan de acción nacional de derechos humanos 2017-2021. El Gobierno señala que un hecho puntual, que tuvo lugar en 2011, causó el fallecimiento de un trabajador en un disturbio, pero que se tomaron medidas en lo relativo a este incidente y que no se han comunicado otros casos de intimidación, arresto, detención o suspensión de sindicalistas y trabajadores en el transcurso de una huelga. Sin embargo, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de las observaciones de la CSI, según las cuales varias huelgas pacíficas fueron atajadas de forma violenta por la policía y el ejército en 2016 y 2017, saldándose con varios trabajadores heridos, y en las que se relatan actos de intimidación y amenaza de agresiones físicas, en particular contra trabajadores de ZFE. ***Al tiempo que recuerda una vez más que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un ambiente exento de violencia, de presiones y de amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes y los afiliados de las organizaciones de trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las mencionadas alegaciones y que adopte las medidas necesarias para garantizar que se prohíba el uso de una violencia excesiva a la hora de tratar de controlar las manifestaciones, que sólo se realicen arrestos cuando se hayan cometido graves actos de violencia u otros actos delictivos y que se llame a la policía durante una huelga sólo cuando exista una genuina e inminente amenaza al orden público.***

En cuanto a los procesos tripartitos de los que la Comisión tomó nota en ocasiones anteriores, la Comisión constata que el Gobierno indica que se debatió en el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC) la creación de una comisión tripartita para las ZFE, pero que finalmente la idea fue descartada porque los interlocutores sociales no se pusieron de acuerdo. El Gobierno señala que, en lugar de establecer esta comisión, debería ampliarse el ámbito de competencias del NLAC y éste debería reformarse con vistas a tomar decisiones relacionadas con las políticas laborales. A este respecto, la labor relacionada con la reconstitución/revitalización del NLAC se inició en julio de 2018 con la asistencia técnica de la OIT, en el marco del Programa de Trabajo Decente Por País (PTDP) 2018-2022. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que se ha llevado a cabo un estudio sobre reformas de la legislación

laboral, también con la asistencia técnica de la OIT, y que se están abordando varias de las deficiencias que se han detectado en el estudio con vistas a realizar las modificaciones legislativas necesarias. La Comisión toma nota de que el proceso de reforma de la legislación laboral está en curso y figura en el PTDP 2018-2022 como asunto prioritario. ***Al tiempo que confía en que se modifique la legislación laboral en un futuro cercano, consultando exhaustivamente a los interlocutores sociales y teniendo en cuenta los comentarios formulados por la Comisión, ésta pide al Gobierno que proporcione información sobre todo avance que se realice a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información acerca de la evolución de la reforma del NLAC, en particular en lo relativo al modo en que éste abordará la aplicación del Convenio en el caso de los trabajadores de las ZFE.***

Artículo 2 del Convenio. Edad mínima de afiliación a un sindicato. En su observación anterior, al observar que la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años y que la edad mínima de afiliación a un sindicato es de 16 años (artículo 31 de la ordenanza sobre los sindicatos), la Comisión recordó que la edad mínima para la afiliación a un sindicato debería ser la misma que la edad mínima para la admisión al empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Relaciones Sindicales (MoLTUR) está llevando a cabo la modificación de la legislación existente para aumentar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 16 años, y eliminar así esta diferencia. Según la información transmitida por el Gobierno en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) entre las leyes que el MoLTUR está modificando a este respecto, se encuentran la Ley de Mujeres, Jóvenes y Niños núm. 47, de 1956, la Ley de Empleados de Comercios y Oficinas núm. 15, de 1954, la ordenanza de fábricas núm. 45, de 1942, y la Ley sobre el Fondo de Previsión del Empleado núm. 15, de 1958. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información en relación a todo avance realizado a este respecto, y en espera de que se lleven a cabo las modificaciones a la edad mínima de admisión al empleo, la Comisión expresa una vez más su esperanza de que se modifique el artículo 31 de la ordenanza sobre los sindicatos en un futuro cercano y pide al Gobierno que proporcione información acerca de todo avance que se produzca en este sentido.***

Artículos 2 y 5. Derecho de las organizaciones de funcionarios públicos de constituir federaciones y confederaciones y afiliarse a las mismas. La Comisión solicitó con anterioridad que se modificara el artículo 21 de la ordenanza sobre los sindicatos con el fin de garantizar que los sindicatos del sector público puedan afiliarse a las confederaciones que estimen convenientes, y que las organizaciones de base de los empleados públicos puedan abarcar a más de un ministerio o departamento de la administración pública. La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que el Gobierno reitera en que sólo se impide a los funcionarios del sector público constituir federaciones, y no hace referencia alguna a la posibilidad de modificar la ordenanza sobre los sindicatos, que se había llegado a contemplar. Una vez más la Comisión destaca la necesidad de asegurar que las organizaciones de funcionarios del Gobierno puedan afiliarse a las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, incluidas aquéllas que también agrupen a organizaciones de trabajadores del sector privado, y que las organizaciones de base de los empleados públicos puedan abarcar a más de un ministerio o departamento de la administración pública. ***Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 21 de la ordenanza sobre los sindicatos e informe acerca de los avances realizados al respecto.***

Artículo 3. Mecanismo para la solución de conflictos en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley de Solución de Conflictos Laborales — que establece mecanismos de conciliación, arbitraje y procedimientos ante la magistratura del trabajo y los tribunales laborales —, no se aplica en la administración pública (artículo 49), y que se está desarrollando un mecanismo para la prevención y solución de conflictos en el sector público, con la asistencia técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que el Gobierno asegura que va a proseguir su labor relativa a este mecanismo, con el respaldo del Ministerio de la Administración Pública, y que proporcionará a la OIT en su debido momento información sobre todo progreso que se realice. ***La Comisión expresa su esperanza de que se desarrolle pronto un mecanismo adecuado y pide al Gobierno que siga informando sobre toda evolución a este respecto.***

Arbitraje obligatorio. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 4, 1), de la Ley de Solución de Conflictos Laborales, el Ministro puede, si es de la opinión de que un conflicto laboral es un conflicto menor, remitirlo, mediante una orden por escrito, para una solución a través del arbitraje, a un árbitro nombrado por él mismo o a un tribunal laboral, aun cuando las partes en tal conflicto o sus representantes no den su consentimiento para tal remisión; y de que en virtud del artículo 4, 2), el Ministro puede, mediante una orden por escrito, remitir cualquier conflicto laboral a un tribunal de relaciones laborales para que dictamine al respecto. La Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para enmendar estas disposiciones a fin de armonizarlas con el Convenio. El Gobierno toma nota de que el Gobierno indica que el 2,5 por ciento del total de los conflictos laborales que se presentan ante el departamento de trabajo se remiten al arbitraje obligatorio, y que el 95 por ciento de estos casos son conflictos relacionados con asuntos como la discriminación, el pago de primas, los ascensos, etc. El Gobierno especifica que entre los casos remitidos últimamente al arbitraje obligatorio no había ninguno relacionado con medidas de huelga. Además, el Gobierno señala que la mayoría de los representantes sindicales y de empleadores del NLAC no consideran necesario modificar la Ley de Solución de Conflictos Laborales, como solicita la Comisión, y que el arbitraje obligatorio es necesario como último recurso para proteger tanto el empleo de los trabajadores como a la industria. La Comisión resalta una vez más que el artículo 4 de la Ley de Solución de Conflictos Laborales confiere un amplio poder al Ministro para remitir los conflictos laborales al arbitraje obligatorio, ya que esta disposición permite que el Ministro prohíba una huelga

o la termine rápidamente en casos que no se ajustan al Convenio. A pesar de que ningún conflicto laboral relacionado con las huelgas ha sido sometido a arbitraje en el pasado reciente, la Comisión se ve obligada a reiterar que el recurso al arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto laboral colectivo o una huelga es aceptable únicamente si la huelga en cuestión puede restringirse, o incluso prohibirse, esto es: i) en caso de conflictos relativos al personal público que ejerce funciones de autoridad en nombre del Estado; ii) en caso de conflictos en servicios esenciales en el sentido estricto del término, y iii) en situaciones de crisis nacional o local grave. ***Por tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para enmendar el artículo 4, 1) y 2), de la Ley de Solución de Conflictos Laborales, con el fin de garantizar el respeto del principio mencionado anteriormente.***

Artículo 4. Disolución de organizaciones por la autoridad administrativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que, en todos los casos en los que las decisiones administrativas sobre la disolución de un sindicato se apelen ante los tribunales, la decisión administrativa en cuestión no tendrá efecto hasta que no se haya dictado la resolución final. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno aporta información sobre la posibilidad de que los sindicatos a los que se haya disuelto apelen la decisión y soliciten registrarse nuevamente, no indica si la apelación tiene el efecto de suspender la ejecución de dicha decisión. ***La Comisión pide por lo tanto una vez más al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar que en todos los casos en los que se apele ante los tribunales la decisión del registrador de retirar o suprimir el registro de un sindicato (de conformidad con los artículos 16 y 17 de la ordenanza sobre sindicatos), la retirada o supresión del registro sindical ordenada por el registrador (autoridad administrativa) no tenga efecto hasta que no se haya dictado una decisión judicial definitiva.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales (FTZ & GSEU), recibidas el 1.º y el 14 de septiembre de 2018, respectivamente, relativas a las alegaciones de despidos antisindicales en las zonas francas de exportación, los actos de injerencia en las actividades sindicales, incluida la creación de organizaciones paralelas de trabajadores controladas por los empleadores, y la negativa a reconocer a los sindicatos y a negociar colectivamente. ***La Comisión pide al Gobierno que formule sus comentarios a este respecto.***

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. Procedimientos efectivos y expeditivos. Habiendo tomado nota en varias ocasiones de que, en la práctica, sólo el Departamento de Trabajo puede presentar casos de discriminación antisindical ante el Tribunal de Magistrados, y de que no existen plazos obligatorios para la presentación de quejas al Tribunal, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores que son víctimas de discriminación antisindical puedan presentar una queja ante los tribunales judiciales. También expresó la esperanza de que la Ley de Conflictos Laborales se enmendara a fin de otorgar a los sindicatos el derecho a presentar casos de discriminación antisindical directamente ante los tribunales. Con respecto a la posibilidad de que los trabajadores sometan una queja ante los tribunales judiciales, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que reconoce que la cuestión se ha discutido durante muchos años, pero que la mayoría de los sindicatos y empleadores que son representados ante el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC) siguen sin estar de acuerdo en enmendar la legislación en relación con esto. ***Tomando nota de las observaciones anteriormente mencionadas de la CSI y de la FTZ & GSEU, las cuales contienen una serie de alegaciones de actos de discriminación antisindical, y subrayando que la discriminación antisindical, la cual constituye una de las violaciones más graves a la libertad sindical, afecta a la vez los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de la misma y los de la organización a la cual pertenecen, la Comisión, una vez más: i) insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en un futuro cercano para asegurar que los trabajadores que son víctimas de discriminación antisindical puedan presentar una queja ante los tribunales judiciales; ii) expresa la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para enmendar la Ley de Conflictos Laborales a fin de otorgar a los sindicatos el derecho de presentar casos de discriminación antisindical ante los tribunales, y iii) pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de casos de discriminación antisindical examinados por los tribunales, la duración de los procedimientos y las sanciones impuestas y las medidas de reparación concedidas.***

Artículo 4. Medidas para promover la negociación colectiva. Zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión toma nota de que, según las indicaciones del Gobierno, en 2017 se llevaron a cabo 622 inspecciones en las ZFE, en relación con las 422 realizadas en 2016, y de que hasta junio de 2018 tuvieron lugar 378 inspecciones. El Gobierno destaca asimismo que 20 sindicatos tienen facilidades para el pago de cuotas; 7 empresas han suscrito convenios colectivos, y 5 centros de facilitación sindical están operativos actualmente en las ZFE, con el fin de propiciar las reuniones privadas entre los trabajadores y sus representantes. ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva en las ZFE, y sobre el número de convenios colectivos concluidos por los sindicatos en las ZFE y el número de trabajadores cubiertos. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique el número respectivo de sindicatos y de comités de empresa en las ZFE, así como las medidas adoptadas para asegurar que los comités de empresa no socaven la posición de los sindicatos.***

Requisitos de representatividad para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 32, A), g), de la Ley de Conflictos Laborales, según el cual ningún empleador deberá negarse a negociar con un sindicato que cuente con un número de afiliados no inferior al 40 por ciento de los trabajadores en cuyo nombre ese sindicato pretende negociar. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la cuestión se discutió en el NLAC, pero la mayoría de los sindicatos no quieren cambiar el umbral del 40 por ciento. El Gobierno indica que los representantes de los empleadores también tienen objeciones a esta enmienda, ya que deben tratar con múltiples sindicatos y que, en estas circunstancias, el Departamento de Trabajo ha tomado la iniciativa de explicar a los sindicatos que no alcanzan el umbral requerido que podrían organizarse para funcionar como tales. La Comisión recuerda que la determinación del umbral de representatividad para designar a un agente exclusivo con el fin de negociar convenios colectivos que están destinados a ser aplicados a todos los trabajadores de un sector o un establecimiento es compatible con el Convenio en la medida en que las condiciones requeridas no constituyen un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria en la práctica. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 233, la Comisión consideró que el requisito de un porcentaje de representatividad demasiado elevado para poder negociar colectivamente tal vez obstaculice la promoción y el desarrollo de la negociación colectiva libre y voluntaria en el sentido del Convenio. No obstante, la Comisión considera que si ningún sindicato en una unidad de negociación específica cumple el umbral de representatividad requerido para poder negociar en nombre de todos los trabajadores, los sindicatos minoritarios deberían poder negociar, de manera conjunta o por separado, al menos en nombre de sus propios miembros. ***La Comisión confía en que el NLAC y el Gobierno adopten las medidas necesarias para revisar el artículo 32, A), g), de la Ley de Conflictos Laborales, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, a fin de asegurar que si no existe un sindicato que represente el porcentaje requerido para ser designado como el agente de negociación colectiva, los sindicatos existentes dispongan de la posibilidad, de manera conjunta o por separado, de negociar colectivamente al menos en nombre de sus propios miembros. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto.***

Artículo 6. Derecho de negociación colectiva para los trabajadores de la administración pública distintos de los trabajadores al servicio de la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que los procedimientos relativos al derecho de negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública no preveían la verdadera negociación colectiva, sino que establecían un mecanismo consultivo. La Comisión había tomado nota de que, según las indicaciones del Gobierno: i) la Ley de Conflictos Laborales reconoce el derecho de los sindicatos del sector privado a negociar colectivamente con el empleador o la autoridad competente; ii) en Sri Lanka, el sector privado incluye las empresas estatales en las que trabaja una gran parte de los trabajadores, y iii) el artículo 32, A), de la ley, que hace referencia a la negociación colectiva y las prácticas laborales desleales, no sólo se aplica a los sindicatos del sector privado, sino también a los sindicatos de las empresas estatales. La Comisión observa que, según las indicaciones del Gobierno, aunque considera que la facilitación de la negociación colectiva en el sector público podría generar unas condiciones de desigualdad, está tomando medidas con el fin de abordar esta cuestión y proporcionará más información al respecto en su próxima memoria. En relación con esto, la Comisión recuerda que existen mecanismos para permitir la conciliación de la protección del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en el sector público con el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. También recuerda que, para dar cumplimiento al artículo 6 del Convenio, debería establecerse una distinción entre, por una parte, los funcionarios públicos que, debido a sus funciones, trabajan directamente para la administración del Estado (tales como, en algunos países, los funcionarios de los ministerios gubernamentales y otros organismos comparables, y el personal auxiliar), los cuales pueden estar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio y, por otra, todas las personas empleadas por el Gobierno, por las empresas públicas o por las instituciones públicas autónomas, las cuales deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172). ***En vista de lo anterior y a la luz del artículo 49, de la Ley de Conflictos Laborales, que excluye a los trabajadores estatales y gubernamentales del ámbito de aplicación de la ley, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público cubiertos por el Convenio con respecto a los salarios y a otras condiciones de trabajo. Recordando que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que indique todo progreso realizado a este respecto.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Sudáfrica

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.

Derechos sindicales y libertades civiles. Alegatos de represión violenta de las acciones de huelga y detenciones de los trabajadores en huelga. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2008, 2010,

2011 y 2012, en las que se denuncian en diferentes sectores, muchos casos de represión violenta de las acciones de huelga, que dieron lugar a lesiones y muertes, así como a la detención de los trabajadores en huelga por parte de las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: i) los incidentes que destaca la CSI, aunque lamentables, no reflejan la situación general de control de las multitudes por la policía de orden público; ii) la policía de orden público interviene sólo en casos de extrema provocación y mala conducta de la multitud durante las huelgas; iii) en tales casos, sólo se utilizan medidas no letales, como balas de goma (que no consisten en balas), granadas de concusión, gases lacrimógenos y cañones de agua; iv) a partir del 1.º de abril de 2012, todas las armas de fuego disparadas por la policía son investigadas por la Dirección de Investigación Independiente de la Policía, y v) conductas violentas durante las acciones de huelga son inaceptables y socavan el sistema de negociación colectiva en el país. Al tiempo que toma debida nota de las respuestas del Gobierno, la Comisión señala que, en sus observaciones de 2015, la CSI denuncia la detención de 100 trabajadores de la salud comunitaria en huelga, en junio de 2014, y el asesinato, en enero de 2014, durante un enfrentamiento con la policía que tuvo lugar en el contexto de una huelga, de un representante sindical de la Asociación de Sindicatos Mineros y de Construcción de Sudáfrica (AMCU).

La Comisión expresa su **preocupación** acerca de la persistencia, por una parte, de incidentes violentos, que dieron lugar a lesiones y muertes, como consecuencia de la intervención policial durante las acciones de huelga, y, por otra parte, de los alegatos de detenciones de trabajadores que realizaban huelgas pacíficas. La Comisión recuerda que, si bien las acciones de huelga se realizarán de manera pacífica, las autoridades sólo deberían recurrir al uso de la fuerza en circunstancias excepcionales y en situaciones de gravedad en las que exista una seria amenaza de alteración del orden público y que, tal uso de la fuerza debe ser proporcionado a las circunstancias. Además, la Comisión recuerda que la detención, aunque sólo sea breve, de dirigentes sindicales y de sindicalistas, y de los dirigentes de organizaciones de empleadores, por el ejercicio de actividades legítimas en relación con su derecho de asociación, constituye una violación de los derechos consagrados en el Convenio.

La Comisión también ha tomado nota de la publicación, el 25 de junio de 2015, del informe de la *Comisión judicial de encuesta de los hechos en la mina marikana en Rustenburg* sobre la muerte violenta de muchos trabajadores durante una acción de huelga, en agosto de 2012. La Comisión observa que el informe contiene recomendaciones generales dirigidas, entre otros elementos, al uso de armas de fuego por la policía durante acciones de huelga violentas, la responsabilidad pública del servicio de policía de Sudáfrica en dichas circunstancias, así como el funcionamiento eficaz de la Dirección de Investigación Independiente de la Policía. **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las acciones emprendidas para aplicar las recomendaciones de la mencionada comisión judicial de encuesta, y confía en que se consulte a este respecto a los interlocutores sociales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que responda a las observaciones de la CSI de 2015 y que comunique los resultados de la investigación relativa a la muerte del representante sindical de la AMCU.**

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derechos de los trabajadores vulnerables a ser representados eficazmente por sus organizaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los alegatos de la CSI sobre las dificultades a las que hacen frente los trabajadores ocasionales para gozar de los derechos del Convenio. La Comisión toma nota con **interés** de que la Ley de Relaciones del Trabajo (Enmendada), adoptada en agosto de 2014, contiene disposiciones destinadas a facilitar la representación por parte de sindicatos de empleados de servicios de empleo temporal o de intermediarios laborales (es decir, los empleados puestos a disposición de un cliente que asigna sus tareas y supervisa la ejecución de las mismas). La Comisión toma nota especialmente de que: i) en virtud de Ley de Relaciones del Trabajo (Enmendada), los sindicatos que representan a los empleados de servicios de empleo temporal o de un intermediario laboral se encuentran en la actualidad en condiciones de ejercer sus derechos organizativos, no sólo en el lugar de trabajo del empleador sino también en el lugar de trabajo del cliente, y ii) los empleados de servicios de empleo temporal o de un intermediario laboral que participen en una acción de huelga legalmente protegida tienen derecho a participar en piquetes en las instalaciones del cliente. **La Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la aplicación y el impacto de estas disposiciones.**

Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2015, la CSI alega que los trabajadores agrícolas no se encuentran en condiciones de dar cumplimiento a los requisitos necesarios para participar en acciones colectivas legalmente protegidas. La Comisión toma nota de que el Gobierno comunica las conclusiones del informe de 2011, *Identificación de los obstáculos a la constitución de organizaciones sindicales en el sector agrícola. Hacia una estrategia de trabajo decente en el sector agrícola*. **La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas medidas adoptadas o previstas para aplicar las conclusiones del mencionado informe y para responder a las observaciones de la CSI.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Suecia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)

Avances legislativos. Desplazamiento de los trabajadores. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había tomado nota con **interés** de que un comité parlamentario establecido en noviembre de 2014 para considerar enmiendas legales a la Ley sobre el Desplazamiento de los Trabajadores al Extranjero (Lex Laval) había formulado una serie de propuestas para salvaguardar el modelo de mercado de trabajo sueco y el estatus de los convenios colectivos en situaciones de desplazamiento de trabajadores. La Comisión había expresado su confianza en que las enmiendas finalmente adoptadas asegurarían un cumplimiento más pleno del Convenio para los trabajadores desplazados y para las organizaciones que los representan.

La Comisión toma nota con **interés** de la indicación del Gobierno de que las enmiendas a la Ley sobre el Desplazamiento de los Trabajadores, que se presentaron al Parlamento en febrero de 2017 y entraron en vigor el 1.º de junio de 2017, crean un sistema más efectivo y eficiente para la protección de los derechos de los trabajadores desplazados. La Comisión toma nota asimismo con **interés** de que, además de las enmiendas relativas al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en virtud de la ley, en su forma enmendada: i) pueden emprenderse acciones colectivas contra un empleador con el objetivo de establecer una norma por convenio colectivo (las condiciones de trabajo que los sindicatos pueden exigir siguen limitándose a las condiciones mínimas previstas en la

Directiva de la Unión Europea sobre el Desplazamiento de Trabajadores; ii) los trabajadores desplazados que no son miembros del sindicato que concluyó el convenio colectivo tienen el derecho a invocar ciertas condiciones contempladas en el convenio colectivo, en último término ante un tribunal sueco, y iii) existen disposiciones sobre la necesidad de una mayor transparencia y previsibilidad cuando los trabajadores están desplazados, para que los trabajadores extranjeros puedan fácilmente conocer con antelación las condiciones que se aplican en el mercado de trabajo sueco. La Comisión toma nota además de que los artículos 10 y 11 de la ley exigen que los empleadores extranjeros notifiquen a la Autoridad Sueca del Entorno Laboral los desplazamientos de trabajadores a Suecia, y que designen a una persona de contacto en Suecia, la cual pueda proporcionar documentos a los organismos y a las organizaciones de trabajadores que muestren que los requisitos de la ley se han cumplido. Además los artículos 14 y 24 prevén sanciones financieras, así como daños y perjuicios en caso de incumplimiento. ***La Comisión saluda los avances legislativos que han tenido lugar desde que examinó por última vez la situación, en 2015, y pide al Gobierno que proporcione información en sus informes futuros sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre el Desplazamiento de los Trabajadores enmendada desde que entró en vigor, en junio de 2017.***

Otros avances. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, dado que el conflicto en el mercado de trabajo de larga data en el puerto de contenedores de Gotemburgo ha mostrado que el modelo de mercado de trabajo sueco no funciona satisfactoriamente, el 22 de junio de 2017 se decidió nombrar una comisión de encuesta para que revisara el ejercicio del derecho a emprender acciones colectivas y, en particular, para que decidiera si era posible y apropiado: i) limitar el derecho a emprender acciones colectivas con otros fines que no sean los de regular las condiciones por medio de los convenios colectivos (excepto las acciones de solidaridad y las acciones colectivas para recuperar los salarios no pagados); ii) cambiar las disposiciones sobre las obligaciones de paz en las situaciones en que un empleador que está vinculado por un convenio colectivo con una organización de trabajadores esté enfrentándose a las acciones colectivas emprendidas por otra organización de trabajadores, y iii) establecer una junta que, en caso necesario, pueda adoptar decisiones sobre la coordinación de convenios colectivos y sobre las obligaciones de paz dimanantes de un convenio colectivo. El Gobierno indica asimismo que, además, el Ministerio de Empleo está considerando actualmente un proyecto de ley redactado por los interlocutores sociales que aborda las cuestiones relacionadas con el derecho de huelga. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre las propuestas formuladas por la comisión de encuesta, así como sobre los avances relacionados con la adopción del proyecto de ley redactado por los interlocutores sociales que el Ministerio de Empleo está considerando actualmente.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1950)

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Evolución legislativa. Desplazamiento de trabajadores. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había tomado nota con interés de que un comité parlamentario establecido en noviembre de 2014 para considerar enmiendas legales a la Ley sobre el Desplazamiento de Trabajadores Extranjeros (Lex Laval) había formulado una serie de propuestas para salvaguardar el modelo de mercado de trabajo sueco y el estatus de los convenios colectivos en situaciones de desplazamiento de los trabajadores. La Comisión había expresado su confianza en que las enmiendas finalmente adoptadas tendrían el efecto de promover la negociación colectiva voluntaria para las organizaciones que representan a los trabajadores desplazados.

La Comisión toma nota con ***interés*** de la indicación del Gobierno de que las enmiendas a la Ley sobre el Desplazamiento de Trabajadores Extranjeros, que se presentaron al Parlamento, en febrero de 2017 y entraron en vigor el 1.º de junio de 2017, crean un sistema más efectivo y eficiente para la protección de los derechos de los trabajadores desplazados. La Comisión toma nota asimismo con ***interés*** de que las enmiendas incluyen, entre otras cosas, que: i) todo empleador que determine el desplazamiento de trabajadores a Suecia debe nombrar a un representante que esté autorizado a negociar y concluir convenios colectivos solicitados por una organización de trabajadores; ii) pueden emprenderse acciones colectivas contra un empleador con el objetivo de establecer una norma por convenio colectivo (las condiciones de trabajo que los sindicatos pueden exigir se limitan a las condiciones mínimas previstas en la Directiva de la Unión Europea sobre el Desplazamiento de Trabajadores); iii) los trabajadores desplazados que no son miembros del sindicato que concluyó el convenio colectivo tienen el derecho a invocar ciertas condiciones contempladas en el convenio colectivo, en último término ante un tribunal sueco, y iv) existen disposiciones sobre la necesidad de una mayor transparencia y previsibilidad cuando los trabajadores están desplazados, para que los trabajadores extranjeros puedan conocer más fácilmente con antelación las condiciones que se aplican en el mercado de trabajo sueco. La Comisión toma nota, además, de que los artículos 10 y 11 de la ley exigen que los empleadores extranjeros notifiquen a la Autoridad Sueca del Entorno Laboral los desplazamientos de trabajadores a Suecia, y que designen a una persona de contacto en Suecia, la cual podrá proporcionar documentos a los organismos y a las organizaciones de trabajadores que muestren que los requisitos de la ley se han cumplido. Además los artículos 14 y 24 prevén sanciones financieras, así como daños en caso de incumplimiento. ***La Comisión saluda los avances legislativos que han tenido lugar desde que examinó por última vez la situación, en 2015, y pide al Gobierno que proporcione en futuras memorias información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre el Desplazamiento de Trabajadores Extranjeros enmendada desde que entró en vigor, en junio de 2017. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre estadísticas sobre los convenios colectivos concluidos con empleadores extranjeros, así como estadísticas sobre los empleadores extranjeros que quedaron vinculados por convenios colectivos a través de su afiliación a una organización de empleadores.***

Suiza

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)

La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que presentara sus comentarios en respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de septiembre de 2015, en relación con los despidos antisindicales en los sectores de la prensa, la edición y la salud, así como intimidaciones de las que han sido objeto algunos sindicalistas en las empresas que prestan servicios en el aeropuerto de Ginebra. La Comisión toma nota de que el Gobierno remite a las respuestas que presentó al Comité de Libertad Sindical en lo concerniente a casos de despido en un hospital del cantón de Neuchâtel. **La Comisión recuerda que la protección que se otorga a los trabajadores y dirigentes sindicales frente a actos de discriminación antisindical constituye un aspecto esencial del derecho de sindicación e invita al Gobierno a proporcionar información sobre la situación de los demás casos suscitados en la comunicación de la CSI.** En opinión de la Comisión, esta información permite evaluar la eficacia general de la protección que se ofrece en el ámbito nacional frente a actos de discriminación antisindical.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los despidos antisindicales. En su observación anterior, la Comisión saludó la continuación del diálogo tripartito en torno al aumento del límite máximo de las sanciones aplicables en caso de despido antisindical. El Gobierno encargó un estudio sobre la protección de los representantes de los trabajadores al Centro de Estudios sobre las Relaciones Laborales de la Universidad de Neuchâtel, que concluyó en enero de 2015 y fue objeto de discusión en febrero de 2015 en el seno de la Comisión Federal Tripartita para los asuntos de la OIT, con el fin de decidir el seguimiento que se daría al anteproyecto de revisión parcial del Código de las Obligaciones.

En su última memoria, el Gobierno indica que el 8 de mayo de 2017 se celebró un seminario en el que participaron miembros de la Comisión Federal Tripartita para los asuntos de la OIT, de la administración federal y de representantes de organizaciones sindicales y patronales, para debatir de manera abierta y franca las quejas presentadas ante la OIT contra el Gobierno. Según éste, los interlocutores sociales mantuvieron posiciones contrarias. Los representantes de los empleadores consideran que el número de despidos antisindicales abusivos es discutible, dado que no se cuentan con datos fiables procedentes de los tribunales. No desean modificar el derecho del contrato de trabajo para aumentar la sanción en caso de despido abusivo y remiten a las soluciones relativas a las ramas para mejorar la protección mediante convenios colectivos de trabajo, como el que se ha concluido en el sector de la maquinaria. Por su parte, los representantes de los trabajadores piden que se opte por la solución del reintegro, o al menos que la cuantía máxima de la indemnización por despido antisindical equivalente a seis meses de salario previsto por la ley se aumente a doce meses, ya que consideran insuficientes las soluciones convencionales. El Gobierno añade que, conforme al espíritu de las conclusiones de este seminario, la Secretaría de Estado de Economía (SECO) y la Oficina Federal de Justicia han realizado una evaluación de sus resultados en colaboración con la Unión Sindical Suiza y la Unión Patronal Suiza. El Gobierno constata que, en cuanto al punto de vista de los interlocutores sociales, los frentes son irreconciliables en la actualidad. Sin embargo, tiene la intención de seguir tratando de encontrar una solución. La Comisión destaca que las indemnizaciones previstas en caso de despido antisindical deberían reunir ciertas condiciones, en particular: i) ser más elevadas que las previstas para otros tipos de despido, con miras a lograr una disuasión eficaz de esta clase de despido, y ii) estar adaptadas a las dimensiones de las empresas consideradas (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 185). **La Comisión espera que el diálogo tripartito abierto que el Gobierno tiene la intención de proseguir sobre la cuestión de la protección adecuada frente al despido antisindical continúe y permita llegar a una solución que dé pleno efecto al artículo 1 del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que comunique todo nuevo acontecimiento en la materia.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de los datos estadísticos disponibles en la Oficina Federal de Estadísticas sobre los convenios colectivos firmados y el número de trabajadores cubiertos (a fecha 1.º de marzo de 2016, se han declarado obligatorios 38 convenios colectivos nacionales, que cubren a 933 591 trabajadores, así como 38 convenios colectivos cantonales ampliados, que cubren a 99 038 trabajadores). **La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando datos estadísticos actualizados sobre el número de convenios colectivos por sector y sobre el número de trabajadores cubiertos.**

República Unida de Tanzania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, a constituir organizaciones sin previa autorización. Derecho de las organizaciones a organizar sus actividades y a formular sus programas libremente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que la mayoría de las cuestiones planteadas por la Comisión en sus comentarios anteriores se tendrían en cuenta durante la reforma de la legislación laboral en curso. **La Comisión confía en que el Gobierno proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas en consulta con los interlocutores sociales a fin de cumplir con sus comentarios y de poner su legislación en conformidad con el Convenio en lo que respecta a las siguientes cuestiones:**

- la necesidad de enmendar el artículo 2, 1), iii), de la Ley de Empleo y de Relaciones Laborales (núm. 6, de 2004) (ELRA), con el fin de asegurar que el personal penitenciario goce del derecho a constituir las organizaciones que estime convenientes y a afiliarse a ellas;
- la necesidad de enmendar el artículo 2, 1), iv), de la ELRA, con el fin de indicar claramente que sólo los militares están excluidos del ámbito de aplicación de la ley;
- la necesidad de enmendar el artículo 76, 3), a), que prohíbe organizar piquetes en apoyo a una huelga o en oposición a un cierre patronal legítimo;
- la necesidad de enmendar el artículo 26, 2), de la Ley de la Administración Pública (Mecanismo de negociación) (núm. 19, de 2003) que exige que los funcionarios públicos deben cumplir ciertas condiciones para tomar parte en una huelga, a fin de ponerla en conformidad con las disposiciones pertinentes de la ELRA que también se aplican a los trabajadores de la administración pública, y
- la necesidad de asegurar que cualquier servicio concebido como esencial por el Comité de servicios esenciales de conformidad con el artículo 77 de la ELRA se base en la definición estricta del término.

En relación con los artículos 4 y 85 de la ELRA, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que indicó que, si bien la solución a los conflictos legales que surjan a raíz de una diferencia en la interpretación de un texto jurídico debería incumbir a los tribunales competentes, prohibir la acción de protesta con respecto a todos los conflictos que tienen una solución legal puede vulnerar indebidamente el derecho de huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a referirse a la existencia de un mecanismo competente para lidiar con los conflictos laborales. ***Por lo tanto, pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre la aplicación práctica de las disposiciones mencionadas anteriormente.***

Zanzíbar

Artículos 2 y 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que enmendara las disposiciones que figuran a continuación, con objeto de poner su legislación en conformidad con el Convenio:

- El artículo 2, 2), de la Ley de Relaciones Laborales (núm. 1, de 2005) (LRA), que excluye a las siguientes categorías de trabajadores de las disposiciones de la LRA: i) los jueces y todos los oficiales judiciales; ii) los miembros de departamentos especiales, y iii) los trabajadores de la Cámara de Representantes. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas categorías se rigen por sus propias leyes, pero no están excluidas del derecho de sindicación. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione las leyes pertinentes.***
- El artículo 42 de la LRA, que prohíbe al sindicato utilizar, directa o indirectamente, sus fondos para pagar cualquier multa o sanción que le haya sido impuesta a un dirigente sindical en el desempeño de sus funciones en nombre de la organización. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la ley permite que los fondos sindicales se utilicen en caso de faltas en las que hayan incurrido dirigentes sindicales mientras desempeñan funciones en nombre de la organización, aunque no permite que se paguen multas con los fondos sindicales. La Comisión había recordado que los sindicatos deberían tener la facultad de gestionar sus fondos sin restricciones indebidas previstas en la legislación.
- El artículo 64, 1) y 2), de la LRA, que establece categorías de trabajadores que no pueden participar en una huelga, incluido el personal directivo, y enumera varios servicios considerados esenciales, incluidos los servicios de sanidad, y en los que las huelgas están prohibidas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no se puede permitir que participen en huelgas las categorías mencionadas en estos artículos debido a la naturaleza de sus cargos y de su trabajo. La Comisión recuerda, sin embargo, que la prohibición del derecho de huelga en los servicios públicos debería limitarse a los funcionarios que ejercen autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a saber, los servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población.
- El artículo 41, 2), j), de la LRA, que exige la aprobación del funcionario del registro en lo que respecta a las instituciones a las que un sindicato desee contribuir. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que este artículo será eliminado.

La Comisión confía en que se adopten las medidas pertinentes sin demora y en consulta con los interlocutores sociales a fin de enmendar las disposiciones legislativas mencionadas anteriormente. Pide al Gobierno que proporcione información sobre los avances a este respecto, y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en lo tocante a todas las cuestiones planteadas en sus comentarios actuales.

Con respecto a los artículos 63, 2), b), y 69, 2), de la LRA, que determinan que, antes de recurrir a la huelga y a acciones de protesta, el sindicato debe conceder a la autoridad de mediación al menos 30 días para resolver el conflicto y, ulteriormente, dar 14 días de preaviso explicando el objetivo, la naturaleza, el lugar y la fecha de la acción de protesta, la Comisión pidió al Gobierno que recortara este período de 44 días. La Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno de que el preaviso no son 14 días, sino 48 horas en el sector privado y siete días en el sector público. ***La Comisión pide al Gobierno que indique si el mismo plazo de preaviso se aplica a las huelgas y a las acciones de protesta.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios se refirieron a los siguientes aspectos:

Ámbito de aplicación del Convenio. La necesidad de adoptar medidas para: i) modificar el artículo 2, 1), iii), de la Ley del Empleo y Relaciones Laborales, núm. 6, de 2004 (ELRA), para que los miembros del servicio penitenciario gocen de los derechos consagrados en el Convenio, y ii) modificar el artículo 2, 1), iv), de la ELRA con el fin de que se indique claramente que sólo los empleados militares del servicio nacional están excluidos del ámbito de aplicación de la ley.

Artículo 4 del Convenio. Arbitraje obligatorio. Sobre la necesidad de adoptar medidas para modificar los artículos 17 y 18 de la Ley de Servicios Públicos (mecanismos de negociación), a fin de garantizar que el arbitraje obligatorio, en el marco de la negociación colectiva, sólo sea aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis nacionales agudas.

Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que las cuestiones mencionadas anteriormente se tendrán en cuenta durante la reforma en curso de la Ley del Trabajo, la Comisión espera que el Gobierno, en su próxima memoria, incluirá información detallada sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 4. Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos firmados y en vigor en el país, señalando los sectores y el número de trabajadores cubiertos.

Zanzíbar

Artículo 4 del Convenio. Reconocimiento sindical para fines de negociación colectiva. En varias ocasiones, la Comisión pidió al Gobierno que señalara si, en virtud del artículo 57, 2), de la Ley de Relaciones Laborales de 2005 (LRA), según el cual cuando ningún sindicato representa a más del 50 por ciento de los trabajadores en la unidad de negociación, los sindicatos minoritarios pueden participar en la negociación colectiva, al menos en representación de sus respectivos afiliados. La Comisión toma nota de que, en opinión del Gobierno, el artículo 57, 2), de la ley no se refiere a la mayoría absoluta de los trabajadores y, por lo tanto, no puede interpretarse como la imposición de un límite del 50 por ciento de representación de los trabajadores para que un sindicato esté autorizado a negociar colectivamente, ya que el texto se encuentra así redactado: «un sindicato representativo con fines de [negociación colectiva] significa un sindicato registrado que represente a la mayoría de trabajadores al nivel de negociación adecuado y reconocido como tal en virtud del presente artículo». *A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias con miras a modificar el artículo 57 de la LRA con objeto de suprimir cualquier ambigüedad relativa al significado del término «mayoría» y clarificar que el sindicato más representativo podrá ejercer en exclusiva el derecho a negociar con el empleador.*

Categorías de trabajadores excluidos del derecho de negociar colectivamente. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 52, 2), b), de la LRA, con el fin de garantizar a los empleados que ocupan puestos directivos el derecho a la negociación colectiva con respecto a los salarios y otras condiciones de trabajo, y que indicara las categorías de trabajadores excluidas del derecho de negociación colectiva por decisión ministerial en virtud del artículo 54, 2, c), de la LRA. La Comisión toma nota de que el Gobierno conviene en que esas disposiciones pueden ser modificadas. *La Comisión espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento del mencionado principio y que se encuentre en condiciones de informar sobre los progresos realizados a este respecto.*

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina con respecto a todas las cuestiones planteadas en sus actuales comentarios.

Togo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

En lo que respecta al seguimiento dado a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y del Consejo de Administración sobre los obstáculos al derecho de los miembros del Consejo Nacional de Empleadores del Togo (CNP-Togo) de elegir libremente a sus representantes y llevar a cabo sus actividades sin injerencia alguna, la Comisión toma nota con *interés* del desenlace de este conflicto (véase, 382.º informe de junio de 2017, caso núm. 3015).

Sin embargo, la Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no responde a los comentarios que formula desde hace muchos años y se limita a reiterar que los tendrá en cuenta en el marco del proceso de revisión legislativa en curso. *La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de la legislación y la reglamentación nacionales con el Convenio en relación con todos los puntos que figuran a continuación:*

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación de los menores. La necesidad de modificar el artículo 12 del Código del Trabajo a fin de que los menores que han alcanzado la edad mínima legal de admisión al empleo (15 años en virtud del artículo 150 del Código del Trabajo) puedan ejercer sus derechos sindicales sin la autorización de sus padres o de su tutor.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular su programa de acción. La necesidad de: i) adoptar las medidas necesarias con miras a la adopción de los decretos previstos en los artículos 273 y 274 del Código del Trabajo relativos a la determinación de los servicios esenciales en caso de huelga, y de ii) revisar el artículo 275 del Código del Trabajo a fin de garantizar que las partes en un conflicto colectivo puedan elegir libremente los procedimientos para solucionar dicho conflicto.

Aplicación del Convenio en la zona franca de exportación. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que: i) precisara cuáles son las autoridades competentes en materia de control de la aplicación de los derechos garantizados en el Convenio en la zona franca de exportación; ii) indicara cuáles son las instancias competentes para zanjar los conflictos colectivos del trabajo que se producen en la zona franca de exportación, y iii) proporcionara información sobre todos los casos de conflictos del trabajo en la zona franca de exportación que, desde octubre de 2012, se han presentado ante los tribunales del trabajo y sobre sus resultados, así como sobre todos los casos de conciliación de conflictos individuales o colectivos del trabajo en la zona franca de exportación que se han producido desde la misma fecha.

La Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre todos los elementos nuevos en relación con las cuestiones planteadas.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)

Artículo 4 del Convenio. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían al artículo 260 del Código del Trabajo, que prevé que, en caso de desacuerdo persistente entre las partes en la negociación colectiva sobre determinados puntos en un conflicto colectivo, el Ministro de Trabajo podrá someter la cuestión a un consejo de arbitraje, cuando la conciliación hubiera fracasado. La Comisión recordó que el artículo en consideración es contrario al principio de autonomía de las partes y al principio de negociación libre y voluntaria contenidos en el artículo 4 del Convenio. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio sólo es aceptable en relación con los funcionarios adscritos a la administración del Estado (*artículo 6*), con los servicios esenciales en el sentido estricto del término y en las crisis nacionales agudas. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la modificación del artículo 260 se contempla en el marco más general de la revisión del Código del Trabajo. ***La Comisión confía en que se modifique, en un futuro próximo, el artículo 260 del Código del Trabajo, para ponerlo plenamente de conformidad con el Convenio, y solicita al Gobierno que tenga a bien informar de cualquier novedad al respecto.***

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de las informaciones relativas a los convenios colectivos en vigor en Togo, cuyo número es de seis, y el último de los cuales hasta la fecha, adoptado en diciembre de 2016, se refiere al sector del comercio. ***La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre el número de convenios colectivos concluidos en vigor en el país, así como sobre los sectores interesados y el número de trabajadores comprendidos en estos convenios.***

Trinidad y Tabago

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2016. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2016. Toma nota igualmente de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI.

Artículos 2 a 4 del Convenio. Ley de Sindicatos. La Comisión toma nota de que la CSI alega que una serie de disposiciones de la Ley de Sindicatos (TUA) restringen indebidamente los derechos sindicales en virtud del Convenio. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tiene el propósito de revisar la TUA y de que en el proyecto de reforma legislativa se tomarán en consideración los comentarios de la CSI como parte del proceso de revisión. A este respecto, la Comisión observa que los siguientes artículos de la TUA plantean cuestiones de compatibilidad con el Convenio: i) el artículo 10 que requiere el registro de los sindicatos, sujeta el registro a la autorización del Registrador y dispone que en caso de no realizarse la inscripción en el registro, los dirigentes sindicales o el sindicato no registrado están sujetos al pago de una multa de 40 dólares diarios por cada día que el sindicato permanezca sin registrar (la Comisión recuerda que el derecho de constituir organizaciones sin autorización previa no confiere a las autoridades un poder discrecional para oponerse al establecimiento de un sindicato y que el ejercicio de actividades sindicales legítimas no debería depender del registro de la organización sindical); ii) el artículo 16, 4), permite al Registrador ordenar la inspección de los libros, cuentas, títulos, valores, fondos y documentos del sindicato (la Comisión recuerda que los controles financieros de un sindicato deben limitarse a la obligación de presentar informes financieros anuales y las verificaciones sólo pueden llevarse a cabo cuando existen razones graves para suponer que las actividades de una organización son contrarias a los reglamentos o a la ley, o en los casos en que un número significativo de trabajadores pide que se

realice la verificación para presentar una queja o por fraude o malversación; iii) el artículo 18, 1), d), permite al Registrador retirar o cancelar el certificado de registro por determinados motivos (la Comisión observa que en virtud del Convenio los sindicatos no están sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, y de que la posibilidad de apelar tales decisiones del Registrador debería tener un efecto suspensivo de la decisión administrativa), y iv) el artículo 33 limita el derecho de los sindicatos de administrar sus fondos en relación con las actividades políticas (limitando indebidamente las posibilidades de que los sindicatos realicen actividades relacionadas con la política económica o social que afecten a sus miembros o a los trabajadores en general). **La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias de modo de enmendar las disposiciones antes mencionadas y que ponga la TUA y su aplicación en plena conformidad con el Convenio. Recordándole que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolución relativa a la revisión y enmienda de la TUA.**

Artículo 3. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y a formular sus programas de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado que, durante varios años, había hecho referencia a la necesidad de enmendar o derogar los siguientes artículos de la Ley de Relaciones Laborales (IRA): i) el artículo 59, 4), a), relativo a la mayoría exigida para declarar una huelga; ii) los artículos 61, d), y 65, relativos al recurso a los tribunales por una de las partes o por el Ministerio de Trabajo para poner fin a una huelga, y iii) los artículos 67 (conjuntamente con el segundo anexo) y 69, relativos a los servicios en los que se puede prohibir la acción colectiva. La Comisión observa además que el artículo 2, 3), de la IRA excluye de su ámbito de aplicación a las siguientes categorías de trabajadores: los miembros del sector docente o empleados en actividades de enseñanza por una universidad u otra institución de enseñanza superior, aprendices, trabajadores domésticos, y el personal de empresas con responsabilidad de gestión política u otras actividades de dirección (todas las cuales deberían gozar de las garantías establecidas en el Convenio en virtud de la IRA o de otra legislación aplicable). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de enmienda de la Ley de Relaciones Laborales de 2015 se presentó a la Cámara de Representantes el 1.º de mayo de 2015, pero que, tras dos lecturas, el proyecto de ley caducó en junio de 2015 debido al término de la legislatura. El Gobierno toma nota de que la nueva legislatura comenzó el 23 de septiembre de 2015 y de que se prevé que adoptarán medidas en lo que respecta a la enmienda de la IRA en su debido momento. **La Comisión espera firmemente que las modificaciones a la IRA darán respuesta a sus comentarios relativos a los artículos 59, 4), a), 61, d), 65, 67 y 69. La Comisión pide asimismo al Gobierno que clarifique de qué manera las categorías de trabajadores mencionadas anteriormente excluidas del ámbito de aplicación de la IRA en virtud del artículo 2, 3), gozan de los derechos consagrados en el artículo 3 del Convenio. Recordando que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que indique todos los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 31 de agosto de 2016. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI, incluida la indicación del Gobierno que tomará en consideración dichas observaciones como parte de su revisión en curso de la Ley de Relaciones de Trabajo (IRA).

Trabajadores abarcados por el Convenio. El Comité observa que el artículo 2, 3), de la IRA excluye de su ámbito de aplicación las siguientes categorías de trabajadores: miembros del servicio de educación o empleados docentes en una universidad u otro centro de enseñanza superior, aprendices, trabajadores domésticos y personas en empresas con responsabilidades políticas o de gestión. A este respecto, la Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 5 y 6 del Convenio, tan sólo los miembros de las fuerzas armadas y de la policía así como los funcionarios adscritos a la administración del Estado pueden verse excluidos del ámbito de aplicación del Convenio. **La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que indique de qué manera se reconoce a las categorías de trabajadores excluidas de la IRA antes mencionadas las garantías previstas en el Convenio.**

Artículo 4 del Convenio. Representatividad para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la necesidad de enmendar el artículo 24, párrafo 3, de la Ley de la Función Pública, que confiere una posición privilegiada a las asociaciones ya registradas, sin aportar criterios objetivos y preestablecidos de determinación de la asociación más representativa de la función pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica una vez más que la cuestión de la enmienda del artículo 24, párrafo 3, sigue siendo objeto de examen y que se requiere un diálogo amplio y continuo a este respecto. La Comisión recuerda que, cuando existe un sindicato que goza de derechos de negociación preferenciales o exclusivos, como ocurre en el sistema actual, deberían adoptarse decisiones sobre la organización más representativa, en virtud de criterios objetivos y preestablecidos, en lugar de limitarse a dar prioridad al que hubiese sido registrado con anterioridad, a efectos de evitar cualquier posibilidad de parcialidad o de abuso. **La Comisión expresa la firme esperanza de que en un futuro próximo se modificará el artículo 24, párrafo 3, de la Ley de la Función Pública para ponerlo en conformidad con el Convenio y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.**

En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió también a la necesidad de enmendar el artículo 34 de la Ley de Relaciones de Trabajo (IRA), a efectos de garantizar que, en los casos en que ningún sindicato represente a la mayoría de los trabajadores, los sindicatos minoritarios puedan negociar conjuntamente un convenio colectivo aplicable en la unidad de negociación, o al menos, concluir un convenio colectivo en nombre de sus propios afiliados. La Comisión observa que según el Gobierno se ha tomado nota de las preocupaciones de la Comisión y que éstas seguirán siendo objeto de la atención del Comité Asesor de Relaciones Laborales. La Comisión también observa que en su memoria relativa al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Gobierno indica que en 2015 presentó un proyecto de ley de enmienda de la IRA que se encuentra ante la Cámara de Representantes. **La Comisión expresa la esperanza de que al enmendar la IRA se tendrán en cuenta sus comentarios y que se adoptarán medidas para garantizar que cuando no exista un sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores, los sindicatos minoritarios puedan negociar conjuntamente un convenio colectivo aplicable en la unidad de negociación, o al menos concluir un convenio colectivo en nombre de sus propios afiliados. Recordando que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia del proyecto de ley y que informe sobre todo progreso realizado a este respecto.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Túnez

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione su respuesta al respecto. Al tiempo que recuerda las graves alegaciones formuladas anteriormente por la CSI en lo relativo a intimidaciones y amenazas proferidas a través de llamadas anónimas contra la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) y sus dirigentes, y en vista de la falta de respuesta al respecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que aporte información sin demora sobre toda investigación realizada o toda medida que se haya podido tomar para proteger a los dirigentes de la UGTT con el fin de que la organización sindical pueda desempeñar sus actividades sin trabas.***

Artículos 2 y 3 del Convenio. Modificaciones legislativas. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que estaba considerando la posibilidad de ajustar determinadas disposiciones del Código del Trabajo al Convenio, como lo había solicitado la Comisión. En este sentido, la Comisión ***lamenta*** constatar que el Gobierno se limita a proporcionar prácticamente las mismas explicaciones que ya ha comunicado en sus memorias anteriores en respuesta a las recomendaciones en favor de la modificación de dichas disposiciones. ***Por lo tanto, la Comisión se ve obligada a reiterarlas e insta firmemente al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias al respecto con el fin de dar pleno efecto al Convenio.***

Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir organizaciones y de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para modificar el artículo 242 del Código del Trabajo, que prevé que los menores de más de 16 años de edad pueden afiliarse a sindicatos, salvo oposición de su padre o tutor. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera nuevamente que la salvaguardia instaurada sólo está motivada por consideraciones jurídicas relativas al ejercicio de la autoridad del padre o del tutor, de conformidad con el artículo 93 bis del Código de Contratos y de Obligaciones. Asimismo, el Gobierno indica nuevamente que el artículo 242 del Código del Trabajo no ha sido cuestionado por la organización representativa de trabajadores. La Comisión se ve obligada a recordar una vez más que toda distinción que involucre el consentimiento parental cuando los menores han alcanzado la edad de admisión al empleo en materia de afiliación sindical, está en contradicción con el artículo 2 del Convenio. ***Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 242 del Código del Trabajo con el fin de garantizar que los menores que hayan llegado a la edad mínima legal de admisión al empleo (16 años, según el artículo 53 del Código del Trabajo) puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental o del tutor.***

Derecho de las organizaciones de elegir libremente sus representantes. La Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para modificar el artículo 251 del Código del Trabajo, de modo que garantice a las organizaciones de trabajadores el derecho de elegir libremente sus representantes, incluso entre los trabajadores extranjeros, cuando menos tras un período razonable de residencia en el país. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que no se trata, en modo alguno, de una limitación del derecho sindical de los extranjeros, que pueden afiliarse libremente a sindicatos y ejercer todos los derechos relativos a los mismos. Sin embargo, el Gobierno confirma que estos últimos no pueden participar en la dirección de los sindicatos en consideración. ***La Comisión se ve obligada a recordar que, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, la legislación nacional debería permitir que los trabajadores extranjeros accedieran a las funciones de dirigentes sindicales, al menos tras un período razonable de residencia en el país de acogida, y pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 251 del Código del Trabajo en este sentido.***

Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción. La Comisión había pedido al Gobierno que modificara los artículos 376 bis, apartado 2, 376 ter, 381 ter, 387 y 388 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que las disposiciones en consideración están dirigidas a permitir que los empleadores estén informados de la huelga y entablen procedimientos de conciliación para evitar el conflicto, y que las sanciones previstas tienen por objeto evitar todo recurso anárquico a la huelga, que podría poner en peligro el porvenir de la empresa, el clima social o los intereses del país. En lo que atañe a las sanciones impuestas a los huelguistas en caso de huelga ilegal, el Gobierno indica que es competencia del juez que conoce del asunto valorar la gravedad de las infracciones cometidas y que este último está plenamente facultado para imponer una simple multa en lugar de una pena de prisión. ***La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien revisar estas disposiciones en consulta con los interlocutores sociales interesados, con miras a su eventual modificación, y dar cuenta de toda medida adoptada a este respecto.***

En cuanto al apartado 2 del artículo 376 bis del Código del Trabajo, el Gobierno precisa que, cuando se celebraron consultas en 1994 y 1996 sobre la reforma del Código del Trabajo, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores indicaron que querían mantener esta disposición que, en su opinión, permite informar a la organización de coordinación antes de toda huelga o cierre patronal, a efectos de una solución más eficaz del conflicto. El Gobierno añade que los sindicatos de base insisten con frecuencia en la intervención de una organización de coordinación para consolidar el ejercicio del derecho de huelga. A este respecto, la Comisión considera de utilidad recordar que la exigencia de obtener la aprobación previa de la huelga por una organización sindical de grado superior no constituiría en sí misma un obstáculo

para la libertad de los sindicatos interesados de organizar sus actividades, si esta exigencia emana de la libre elección de los sindicatos de que se trate, por ejemplo, cuando la misma figura en los estatutos de la organización de coordinación a la que están libremente afiliados los mencionados sindicatos. Por el contrario, la Comisión es de la opinión de que tal exigencia contenida en la legislación nacional — como en el presente caso — constituye una violación del artículo 3 del Convenio. **En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 376 bis, apartado 2, del Código del Trabajo, de modo que respete el principio antes recordado.**

En cuanto a sus comentarios anteriores relativos al artículo 381 ter del Código del Trabajo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, en la que indica que la definición de servicio esencial contenida en este artículo, que retoma la de los órganos de control de la OIT, y el enfoque de consenso que caracteriza la determinación de los servicios mínimos con los interlocutores sociales han permitido siempre evitar el recurso al arbitraje contemplado. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que informe, en caso necesario, de la aprobación del decreto previsto por este artículo del Código del Trabajo.**

Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción sin la intervención de las autoridades públicas. La Comisión toma nota de la aprobación de la ley núm. 2017-54, de 24 de julio de 2017, por la que se crea el Consejo Nacional de Diálogo Social y por la que se establecen sus competencias y las modalidades de su funcionamiento. Asimismo, la Comisión constata que el Gobierno indica que, con el fin de garantizar el nombramiento de los miembros de dicho consejo, el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo los procedimientos de aprobación de un decreto por el que se establecen los criterios de representatividad sindical a escala nacional. Estos criterios abarcan: i) el número de afiliados al finalizar 2017; ii) la fecha del último congreso electoral; iii) las estructuras sectoriales y su naturaleza, y iv) las estructuras locales y regionales. El Gobierno añade que comunicará a la Oficina la aprobación de este decreto, que permitirá designar a la organización más representativa a escala nacional, que contará con representación en el Consejo Nacional de Diálogo Social. Al tiempo que toma nota de los avances tangibles hacia la definición de criterios de representatividad sindical, que lleva años pidiendo al Gobierno, la Comisión resalta no obstante que en sus comentarios recordaba también la necesidad de que el Gobierno entable consultas tripartitas inclusivas sobre esta cuestión, es decir, en un marco que comprenda a la totalidad de las organizaciones interesadas. Además, la Comisión señala que, en virtud del artículo 8 de la ley núm. 2017-54, la asamblea general del consejo debe estar compuesta del mismo número de representantes del Gobierno, representantes de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores de los sectores agrícola y no agrícola. La Comisión entiende que esto significa que la representación de los interlocutores sociales podría involucrar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas del país, en función del resultado de las elecciones que tendrán lugar sobre la base de los criterios de representatividad establecidos en el decreto gubernamental. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todo progreso que se realice en este sentido, que detalle en especial las consultas tripartitas que se celebren sobre los criterios de representatividad, que transmita un ejemplar del decreto gubernamental una vez que se haya aprobado, y que informe, si procede, acerca de la composición del Consejo Nacional de Diálogo Social.**

Turquía

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Internacional de Sindicatos (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK), adjuntos a las anteriores, y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK) transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones de la Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de la Ciencia de Turquía (EGITIM SEN), recibidas el 1.º de octubre de 2018, y de la respuesta del Gobierno a éstas. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la TISK y la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. En las observaciones de la TÜRK-IS, se alega que los trabajadores empleados de forma temporal mediante agencias privadas de colocación no disfrutaban de derechos sindicales porque cambian de sector a menudo y en Turquía la sindicación está basada en el sector. Asimismo, contienen acusaciones acerca de la presión a la que se somete a los trabajadores, en particular en el sector público, para que se afilien a sindicatos designados por el empleador. **La Comisión solicita al Gobierno que presente sus comentarios al respecto.**

Libertades civiles. La Comisión recuerda que, durante varios años, ha formulado comentarios sobre la situación de las libertades civiles en Turquía. Toma nota de las observaciones de la CSI, la KESK y la DISK, alegando la prohibición de muchas manifestaciones y declaraciones de prensa de la DISK y la KESK y sus sindicatos afiliados, y numerosas detenciones de sindicalistas y dirigentes sindicales, así como la retirada de pasaportes de los directivos de la KESK a los que se ha despedido. La Comisión toma nota de la respuesta general del Gobierno en cuanto a los presuntos actos de opresión contra algunos sindicatos y sus afiliados, en la que indica que los ejemplos citados se refieren sobre todo a

situaciones en las que los requisitos del estado de emergencia se ignoraron o incumplieron de forma persistente; en las que se llamó a tomar medidas de huelga ilegales; en las que se llevaron a cabo actividades al aire libre contraviniendo la ley núm. 2911; o en las que se aplicaron procedimientos disciplinarios a funcionarios que llevaron a cabo actividades políticas incompatibles con sus funciones. Por último, el Gobierno indica que se dispone de vías administrativas y judiciales nacionales de reparación para protestar contra todo acto de la administración. **La Comisión pide al Gobierno una vez más que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar un ambiente exento de violencia, presión o amenazas de cualquier tipo de modo que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer plena y libremente los derechos que les concede el Convenio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son las vías administrativas y judiciales mencionadas que habrían sido utilizadas por afiliados sindicales o funcionarios, y cuáles han sido los resultados.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas. La Comisión tomó nota, en sus comentarios anteriores, de que el artículo 15 de la ley núm. 4688, en su versión modificada en 2012, excluye a los funcionarios de categoría superior, los magistrados y el personal de los servicios penitenciarios del derecho de sindicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en respuesta a las observaciones de la KESK de 2015, que en el juicio que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2015 el Tribunal Constitucional revocó la restricción que establecía el artículo 15, a), de la ley núm. 4688, autorizando así a sindicarse al personal de la organización administrativa de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Además, el Gobierno añade que las restricciones que contempla el artículo 15 de dicha ley se limitan a aquellos servicios públicos en los que no puede subsanarse una perturbación de los mismos como la seguridad, la justicia y el servicio que desempeñan los funcionarios de alto rango. La Comisión toma nota de las observaciones de la KESK, en las que al tiempo que celebra las decisiones del Tribunal Constitucional de abril de 2013 y enero de 2014 por las que se suprimen ciertas restricciones sobre el derecho de sindicación de los funcionarios públicos, denuncia que sigue habiendo restricciones que al parecer afectan a uno de cada seis funcionarios. **Recordando que las únicas excepciones a la aplicación del Convenio se refieren a las fuerzas armadas y la policía, la Comisión pide una vez más que el Gobierno tome las medidas necesarias para revisar el artículo 15 de la ley núm. 4688, en su versión modificada, con vistas a garantizar a todos los funcionarios públicos el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas.**

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que el artículo 63, 1), de la ley núm. 6356 se establece que una huelga o un cierre patronal legal que se haya convocado o iniciado puede ser suspendida por el Consejo de Ministros durante sesenta días mediante decreto si considera que va en detrimento de la salud pública o la seguridad nacional y, en caso de que no se llegue a un acuerdo durante el período de suspensión, el conflicto se someterá al arbitraje obligatorio. Durante varios años, la Comisión y el Comité de Libertad Sindical han estado solicitando al Gobierno que garantice que el artículo 63 de la ley núm. 6356 se aplica de manera tal que no vulnere el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades sin injerencia del Gobierno. La Comisión constata que el Tribunal Constitucional, en una decisión de 22 de octubre de 2014, dictaminó que la prohibición de realizar huelgas y cierres patronales en los servicios bancarios y los servicios municipales de transporte en virtud del artículo 62, 1) es inconstitucional. Sin embargo, la Comisión también constata que el Comité de Libertad Sindical, en su último examen del caso núm. 3021, observa que el reciente decreto ley (KHK) núm. 678 faculta al Consejo de Ministros para aplazar en sesenta días las huelgas en las empresas de transporte local y en las instituciones bancarias. En esa ocasión, el Comité de Libertad Sindical invitó al Gobierno a que enviara información detallada sobre la aplicación del decreto núm. 678 a la Comisión de Expertos, habiendo remitido los aspectos legislativos del caso a esta Comisión (véase 382.º informe del Comité de Libertad Sindical, junio de 2017, párrafo 144). A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de la DISK de 2018, indicando que el KHK núm. 678 permite a los municipios metropolitanos aplazar huelgas en los servicios de transporte urbano y de banca, y alegando que en 2017 se suspendieron cinco huelgas, en virtud del artículo 63, durante el estado de emergencia. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual estas huelgas, que afectaban a los sectores de la energía, el vidrio, el acero, la industria farmacéutica y la banca, los cuales reúnen a 24 000 trabajadores, se consideraron una amenaza para la seguridad nacional, la salud pública y la estabilidad económica y financiera. Además, el Gobierno señala que los conflictos en los sectores del acero y la banca se sometieron al arbitraje obligatorio y que en los demás casos, las partes llegaron a un acuerdo. Por último, el Gobierno indica que, al margen de estos cinco casos, no se limitó el derecho de huelga durante el estado de emergencia y que los trabajadores de 20 lugares de trabajo fueron a la huelga. La Comisión toma nota con **preocupación** de que, poco después de que la sentencia del Tribunal Constitucional anulara la prohibición de hacer huelga en los servicios de transporte y banca, un decreto otorgó la facultad a los municipios metropolitanos de prohibir la huelga en estos sectores. Además, la Comisión constata con **preocupación** que en 2017 se suspendieron cinco huelgas, en particular en el sector del vidrio, por considerarse una amenaza para la seguridad nacional, a pesar de que en 2015 el Tribunal Constitucional de Turquía había considerado inconstitucional la suspensión de una huelga en el mismo sector. Recuerda que el derecho de huelga puede restringirse o prohibirse únicamente en lo relativo a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, los servicios esenciales en el sentido estricto del término y las situaciones de crisis nacional o local grave, durante un período de tiempo limitado y en la medida necesaria para hacer frente a la situación. **Recordando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que la suspensión de huelgas en estos sectores era inconstitucional,**

la Comisión pide al Gobierno que tenga en cuenta los principios mencionados a la hora de aplicar el artículo 63 de la ley núm. 6356 y el KHK núm. 678. Además, pide al Gobierno que le transmita un ejemplar del KHK núm. 678.

La Comisión toma nota de que la CSI alega que el decreto núm. 5 adoptado en julio de 2018 establece que una institución que rinda cuentas directamente ante la oficina del Presidente, el Consejo de Supervisión del Estado (DDK) ha sido investida con la autoridad de investigar y auditar sindicatos, asociaciones profesionales, fundaciones y asociaciones en cualquier momento. Según la CSI, todos los documentos y actividades de los sindicatos pueden ser investigados sin una orden judicial y el DDK tiene la discreción de eliminar o cambiar el liderazgo de los sindicatos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno sobre este asunto, indicando que el DDK lleva a cabo sus exámenes con el fin de garantizar la legalidad, el funcionamiento regular y eficiente y el mejoramiento de la administración y que no hay intención de interferir con el funcionamiento interno de los sindicatos. El Gobierno agrega además que la facultad de despedir o suspender a los administradores de sindicatos es una disposición destinada únicamente a los funcionarios públicos. ***Recordando que cualquier ley que otorgue a las autoridades poderes extendidos de control del funcionamiento interno de los sindicatos más allá de la obligación de presentar informes financieros anuales sería incompatible con el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que transmita una copia del decreto núm. 5 para que pueda realizar un examen a fondo de su conformidad con el Convenio de acuerdo con el principio anterior. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información específica en relación a toda investigación o auditoría llevada a cabo en virtud del decreto núm. 5 así como sus resultados, incluyendo cualquier despido o suspensión de dirigentes sindicales.***

Artículo 4. Disolución de sindicatos. La Comisión toma nota de las observaciones de la DISK, alegando que, con arreglo al KHK núm. 667, se ordenó el cierre de 19 sindicatos afiliados a la CIHAN-SEN y la AKSIYON-İŞ, que cuentan aproximadamente con 22 000 y 33 000 miembros, respectivamente, por su vinculación con la Organización Terrorista Fethullahist/Estructura Paralela del Estado (FETO/PSS). Además, la DISK añade que una disposición del KHK contempla que «si hay sindicatos, federaciones y confederaciones que no constan en la lista que figura en anexo, pero se ha descubierto que tienen una vinculación, conexión o afiliación a formaciones que constituyen una amenaza para la seguridad nacional u organizaciones terroristas, éstos quedarán prohibidos por sugerencia de la comisión y aprobación del ministro competente». La Comisión recuerda que la disolución o suspensión de una organización sindical constituye una forma extrema de injerencia por las autoridades en las actividades de las organizaciones y por tanto debe ir acompañada de todas las garantías necesarias. Esto sólo puede asegurarse mediante un procedimiento judicial regular, que también deberá tener efecto de suspensión de la ejecución. La Comisión toma nota de que, después del intento de golpe de Estado de 15 de julio de 2016, Turquía se encontraba en situación de crisis nacional grave, y que en ese momento se creó una comisión de investigación, que recibe solicitudes en contra de la disolución de los sindicatos por decreto durante el estado de emergencia y cuyas decisiones pueden recurrirse ante los tribunales administrativos de Ankara. La Comisión ha examinado la función de esta comisión en su comentario sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) en Turquía. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que la comisión de investigación sea accesible para todas las organizaciones que deseen que se examine su caso y que dicha comisión, y los tribunales administrativos que revisan las decisiones de ésta que se recurren, examinen con detenimiento los motivos de la disolución de los sindicatos prestando la debida atención a los principios por los que se rige la libertad sindical. Solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de solicitudes presentadas por las organizaciones disueltas, y el resultado de su examen por la comisión de investigación. Además, la Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre el número de recursos presentados contra las decisiones desfavorables de la comisión de investigación en lo relativo a los sindicatos disueltos, y acerca de su resultado.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) y las de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK), adjuntas a las anteriores, recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de la respuesta del Gobierno al respecto. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones de la Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de la Ciencia de Turquía (EGITIM SEN), recibidas el 1.º de octubre de 2018, y de la respuesta del Gobierno al respecto. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la TISK, que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión, y la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İS), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. En las observaciones de la TÜRK-İS se acusa al Consejo Superior de Arbitraje de actuar con parcialidad y se alega una protección inadecuada de los sindicalistas frente a la discriminación antisindical en el periodo de espera de la autorización necesaria para que una organización pueda actuar como agente de negociación colectiva. ***La Comisión solicita al Gobierno que formule comentarios al respecto.***

Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el personal de establecimientos penitenciarios, al igual que los demás funcionarios públicos, está amparado por los convenios colectivos concluidos en la función pública, aunque, en virtud del artículo 15 de la Ley de Sindicatos y Convenios Colectivos de la Función Pública (ley núm. 4688), no gozan del derecho de sindicación. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, inclusive una revisión de la legislación, para garantizar que el personal de los establecimientos penitenciarios pueda estar representado efectivamente en las negociaciones colectivas que le afecten por las organizaciones que estime conveniente. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno indica que no se ha avanzado al respecto y por lo tanto reitera su solicitud previa. ***Al tiempo que recuerda que todos los funcionarios públicos que no trabajen en la administración del Estado deben disfrutar de los derechos que se contemplan en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas necesarias, incluida la revisión del artículo 15 de la ley núm. 4688, con miras a garantizar que el personal de los establecimientos penitenciarios pueda estar representado efectivamente en las negociaciones colectivas que le afecten por las organizaciones que estime conveniente.***

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2013, la Comisión pidió al Gobierno que estableciera un sistema de compilación de datos en materia de discriminación antisindical tanto en el sector privado como en el público. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se está preparando el establecimiento de tal sistema de datos en el marco del proyecto «Mejorar el diálogo social en la vida laboral», cuya ejecución está en curso actualmente con la asistencia técnica de la Oficina. Asimismo, la Comisión toma nota de los textos de la decisión del Consejo de Estado y del último reglamento para el nombramiento de los administradores de los institutos de enseñanza, que se han presentado al Gobierno a petición suya. ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los progresos realizados en el establecimiento de un sistema para la compilación de datos sobre la discriminación antisindical, tanto en el sector privado como en el público.***

Artículos 1, 2 y 3. Despidos masivos en el sector público en virtud de los decretos del estado de emergencia. En su comentario anterior, la Comisión instó al Gobierno a que garantizara que la comisión *ad hoc* establecida para revisar los despidos en el sector público en virtud de los decretos del estado de emergencia (en adelante, la comisión de investigación) fuera accesible para todos los afiliados sindicales que desearan utilizarla, y de que se le asignaran la capacidad, los recursos y el tiempo adecuados para llevar a cabo el proceso de revisión de manera pronta, imparcial y expeditiva. Además, la Comisión pidió al Gobierno que asegurara que no recayera exclusivamente en los sindicalistas despedidos la carga de probar que los despidos eran de índole antisindical, y que se requiriera a los empleadores o a las autoridades pertinentes que demostraran que la decisión de despedirlos estuvo basada en otros motivos. En el caso de que se estableciera que el despido de los sindicalistas se hubiera basado en motivos antisindicales, la Comisión expresó su firme esperanza de que se les readmitiera en sus puestos y se les indemnizara con el pago de los salarios adeudados, manteniéndose sus derechos adquiridos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que todos los funcionarios públicos objeto de un despido, a excepción de los miembros del Poder Judicial, que tiene que seguir una vía diferente, tiene derecho a presentar un recurso ante la comisión de investigación para que se revise su despido. En cuanto a la capacidad y los recursos de la comisión de investigación, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, puede extenderse el mandato de esta comisión hasta que examine todas las solicitudes que se hayan presentado. Además, el Gobierno señala que, además de sus siete miembros, la comisión emplea a un total de 250 personas, de las cuales 80 son jueces, expertos e inspectores empleados como relatores. En cuanto al proceso de presentación de solicitudes y examen, el Gobierno indica que se ha puesto en pie una infraestructura de procesamiento de datos para el proceso de presentación de solicitudes, en la que se registra toda la información relativa a los solicitantes físicos y jurídicos y se reciben solicitudes electrónicas las 24 horas del día. También se ha creado un sitio web en el que los solicitantes pueden seguir el estado de su solicitud. En caso de que se admita la solicitud, la decisión se comunica a la institución pública en la que el solicitante estuvo empleado por última vez para su readmisión. Deberán pagarse al solicitante las deudas financieras y sociales correspondientes a la duración del despido hasta la fecha de readmisión. En caso de que la decisión sea negativa, el solicitante puede recurrir a los tribunales administrativos competentes de Ankara. En cuanto a la carga de la prueba, el Gobierno indica que la comisión de investigación solicita a las instituciones públicas correspondientes que presenten documentación e información que demuestren la pertenencia, afiliación o vinculación del solicitante a una organización terrorista. Si la institución pública en cuestión no presenta dicha documentación o información y no existen investigaciones o enjuiciamientos en torno al solicitante, la comisión acepta entonces la solicitud de readmisión. Asimismo, la Comisión toma nota de los siguientes datos estadísticos proporcionados por el Gobierno: a 9 de noviembre de 2018, la comisión de investigación había recibido 125 000 solicitudes. La comisión de investigación inició su proceso de toma de decisiones el 22 de diciembre de 2017 y a 9 de noviembre de 2018 había emitido 42 000 decisiones, de las cuales 3 000 eran favorables a los solicitantes y 39 000 negativas. Por último, el Gobierno señala que la comisión toma decisiones individualizadas y motivadas sobre unas 1 200 solicitudes por semana mediante un examen rápido, pero minucioso a la vez. La Comisión toma nota de que, según los datos estadísticos del Gobierno, sólo se había dado lugar al 7 por ciento de las solicitudes de readmisión. Sin embargo, la Comisión no ha recibido información sobre la tasa de aceptación/denegación de las solicitudes presentadas por los sindicalistas o dirigentes sindicales despedidos. En este sentido, la Comisión toma nota de la observación del EGITIM SEN, en la que alega que, en virtud de los decretos-ley del

estado de emergencia (Kanun Hükümünde Kararname (KHK)), se despidió a 1 628 afiliados del EGITIM SEN, pero que a finales de septiembre de 2018 sólo 12 solicitudes habían dado pie a la readmisión de los solicitantes despedidos.

En su comentario anterior, la Comisión también solicitó al Gobierno que garantizara que, en caso de prolongación del estado de emergencia, no se despidiera a ningún trabajador por su afiliación a un sindicato o su participación en actividades sindicales. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el estado de emergencia finalizó el 18 de julio de 2018, dos años después del intento de golpe de Estado. Asimismo, la Comisión constata que, según las observaciones de la CSI, la DISK, la KESK y el EGITIM SEN, en las que actualizan y complementan las alegaciones relativas a despidos y suspensiones antisindicales en virtud de los decretos del estado de emergencia: i) en mayo de 2018, se había despedido a un total de 4 312 afiliados a la KESK, incluidos 138 trabajadores despedidos en virtud del KHK núm. 695, con fecha de 24 de diciembre de 2017, cuatro despedidos en virtud del KHK núm. 697, con fecha de 12 de enero de 2018, y 102 despedidos en virtud de la decisión del órgano disciplinario superior. El número de afiliados de la KESK readmitidos en el mismo período fue de 94; ii) un grupo de 18 miembros del Comité Ejecutivo de la KESK y al menos 330 de sus representantes de sucursales locales, juntas disciplinarias y auditorías se encontraban entre los despedidos; iii) se efectuaron suspensiones masivas en varias ciudades mediante las cuales se suspendió de sus funciones a 11 329 afiliados de la KESK, desde el 20 de julio de 2016, de los cuales unos 240 seguían suspendidos a finales de 2017; iv) se expulsó de la universidad, en virtud de los decretos del estado de emergencia, a cerca de 400 miembros de «Academics for Peace» (la Universidad Por la Paz), la mayoría de los cuales eran miembros del EGITIM SEN y el SES (ambos afiliados a la KESK) y habían firmado una declaración pidiendo el fin de la lucha en el este y el sureste de Anatolia, y v) sólo 50 de los 1 959 afiliados de la DISK Genel-İş y despedidos mediante KHK volvieron a sus empleos, y los contratos de 28 afiliados permanecieron suspendidos. En cuanto a los motivos de los despidos, la Comisión toma nota de que el Gobierno hace hincapié en que éstos tuvieron lugar por motivos de pertenencia, afiliación o vinculación a organizaciones terroristas y no guardaron relación alguna ni se basaron en la afiliación a un sindicato o el rango dentro de éste ni en la participación en actividades sindicales, de carácter legítimo, de las personas en cuestión. No obstante, la Comisión toma nota de las observaciones de la KESK y el EGITIM SEN, alegando que el Gobierno usa las expresiones «actividad terrorista» o «propaganda terrorista» para etiquetar a todo grupo político de la oposición y sus actividades. Además, la Comisión toma nota de la alegación de la KESK según la cual, dado que se aplican criterios muy amplios y vagos, que permiten que se despidan a funcionarios públicos que se «considera» vinculados a grupos o entidades ilegales, hasta mayo de 2018, se despidió a 4 218 afiliados de la KESK a los que el *Gülenist Structure* había sometido a amenazas y presiones. A este respecto, la Comisión constata que el Gobierno indica que nadie goza de inmunidad ante un enjuiciamiento por actividades ilegales y que todos los sindicatos y sus miembros deben respetar la ley.

Por otra parte, la Comisión toma nota de la observación de la KESK y el EGITIM SEN, en la que se alega que el poder político ataca y castiga a determinados sindicatos mediante los decretos del estado de emergencia, incluso después de que dicho estado haya finalizado, dado que el empleador público apoya a los sindicatos progubernamentales, mientras que somete a presión a los sindicatos de la oposición. En ese sentido, la Comisión recuerda que tomó nota, en su comentario anterior de la alegación de que los afiliados del EGITIM SEN y la DISK habían sido el blanco de suspensiones y despidos debido a su pertenencia a los sindicatos afiliados a sus confederaciones (KESK y DISK) y que el EGITIM SEN alegó que los directores de muchas instituciones públicas formularon acusaciones falsas contra sus afiliados y dirigentes, que tuvieron como consecuencia el despido y la suspensión de los mismos, con el fin de debilitar a las organizaciones sindicales favoreciendo a los sindicatos denominados «partidarios». La Comisión instó firmemente al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para prevenir y reparar todo posible abuso del estado de emergencia que tuviera el efecto de interferir en las actividades y el funcionamiento de un sindicato, y que transmitiera información sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a dicha solicitud ni a las observaciones correspondientes de los sindicatos.

La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno indica que los despidos estaban motivados exclusivamente en las actividades ilegales de los trabajadores en cuestión, las observaciones de las organizaciones de trabajadores indican que los criterios de «vinculación a organizaciones terroristas» se empleaba de manera excesivamente amplia para atacar a los afiliados de sindicatos que comparten afinidades políticas con la oposición, con vistas a reforzar la posición de los sindicatos progubernamentales dentro del sector público. Aunque la Comisión no tiene la capacidad de comprobar estas alegaciones, considera que la protección frente a la discriminación antisindical que el Convenio ofrece a los trabajadores es válida independientemente de la situación política. Debe protegerse a los sindicalistas de los despidos basados únicamente en las afinidades políticas de sus organizaciones, en particular durante un estado de emergencia, siempre y cuando éstos estén actuando de conformidad con la legislación en vigor. Además, la Comisión considera que, en el sector público, los despidos realizados con el objeto de debilitar a los sindicatos cercanos a la oposición política en beneficio de los sindicatos progubernamentales serían equivalentes a actos de injerencia destinados a fomentar las organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador y contravendrían tanto el *artículo 1* como el *artículo 2* del Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que la comisión de investigación, que dispone de los medios necesarios para examinar los hechos relevantes, y los tribunales administrativos de Ankara, cuya competencia es examinar los recursos contra las decisiones de dicha comisión, prestarán la debida atención a estos aspectos. *Al tiempo que toma nota de la información presentada sobre los despidos de afiliados y dirigentes sindicalistas en virtud de decretos del estado de emergencia y acerca del funcionamiento de la comisión de investigación, la Comisión expresa su profunda preocupación por la evolución de la situación, considerando el elevado número de medidas de suspensión y despido*

que siguen afectando a dirigentes y miembros de organizaciones sindicales. La Comisión expresa su firme esperanza de que esta comisión y los tribunales administrativos de Ankara, que revisan sus decisiones, examinen atentamente los motivos de los despidos de afiliados y dirigentes de sindicatos en el sector público, y que se readmita a los sindicalistas que así lo soliciten y cuyo despido sea la consecuencia de actos de discriminación antisindical o injerencia. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre el funcionamiento de la comisión de investigación y, en particular, que indique el número de solicitudes recibidas de afiliados y dirigentes sindicales, y el resultado de su examen por dicha comisión. Además, la Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre el número y el resultado de los recursos contra las decisiones negativas de la comisión de investigación en lo relativo a los afiliados y dirigentes sindicales.

Artículo 1. Discriminación antisindical durante el período de empleo. La Comisión toma nota de las observaciones de la KESK y el EGITIM SEN, alegando que cientos de sus miembros y afiliados, sobre todo del sector de la educación, fueron trasladados en contra de su voluntad desde sus lugares de trabajo en 2016 (al menos 122 traslados, principalmente por haber participado en actividades y actos sindicales) y 2017 (1 267 traslados, de los cuales 1 190 en el sector de la educación). En las observaciones de los sindicatos se describen con detalle 116 casos en los que afiliados y dirigentes fueron objeto de investigaciones disciplinarias y traslados forzosos, en ocasiones acompañados de descensos de categoría, por haber participado en diversas actividades sindicales, como conferencias de prensa, protestas o huelgas organizadas en repulsa del atentado de Ankara, del 10 de octubre de 2015, o en relación con comentarios publicados en las redes sociales. La Comisión toma nota de que la KESK indica que, tras las iniciativas que tomaron los sindicatos y el diálogo que entablaron con las autoridades para resolver el problema, se destinó a algunos de los sindicalistas que habían sido trasladados a lugares de trabajo cercanos a su lugar de trabajo inicial y algunos pocos, que tenían personas a su cargo con necesidades especiales, volvieron al lugar inicial. Sin embargo, según la KESK, no se revocó la reubicación de 14 funcionarios públicos, a pesar de que tenían personas a su cargo con necesidades especiales. Además, la Comisión constata que las observaciones de la KESK, alegando que los acuerdos denominados de «compensación para el equilibrio social», concluidos en virtud del artículo 32 de la ley núm. 4688, contienen disposiciones con arreglo a las cuales se discrimina a los miembros de sindicatos minoritarios, ya que se les imponen precios más altos y la distribución de los beneficios se realiza en función de los antecedentes disciplinarios del trabajador. A este respecto, la KESK hace referencia a los acuerdos celebrados en Gaziantep y Kocaeli, en los que el Sindicato de Empleados de las Municipalidades y Administraciones Privadas (BEM-BIR-SEN), afiliado a la Confederación de Sindicatos de la Administración Pública (MEMUR-SEN), supuestamente afín al Gobierno, representa a la mayoría, y el Sindicato de Empleados Municipales (TÜM-BEL-SEN), afiliado a la KESK, es el sindicato minoritario. Además, la KESK indica que una serie de trabajadores afectados han denunciado las disposiciones discriminatorias ante un tribunal y los casos aún están pendientes de resolución. La Comisión toma nota de la respuesta general del Gobierno sobre la alegada opresión de determinados sindicatos y sus afiliados, en la que indica que los ejemplos se refieren sobre todo a situaciones en las que los requisitos del estado de emergencia se ignoraron o incumplieron de forma persistente; en las que se llamó a tomar medidas de huelga ilegales; en las que se llevaron a cabo actividades al aire libre contraviniendo la ley núm. 2911; o en las que se aplicaron procedimientos disciplinarios a funcionarios que llevaron a cabo actividades políticas incompatibles con sus funciones. Por último, el Gobierno indica que se dispone de vías administrativas y judiciales nacionales de reparación para impugnar todo acto de la administración. Si bien la Comisión toma nota de que, según las observaciones, los sindicatos han recurrido a las autoridades para resolver el problema, con cierto éxito, es necesario recordar que, en virtud del artículo 1, 2), b), del Convenio, debe protegerse a los trabajadores durante el período de empleo de medidas, como los traslados y los descensos de categoría, que vayan en su perjuicio y estén motivadas por su afiliación a un sindicato o su participación en actividades sindicales, y que la participación en actos de protesta y huelgas y conferencias de prensa constituye una actividad sindical legítima. **Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para prevenir que se produzcan en el futuro traslados y descensos de categoría antisindicales, y garantizar que se revoque inmediatamente toda medida antisindical que siga en vigor. Asimismo, pide al Gobierno que responda a la alegación de la KESK en lo relativo a la inclusión de cláusulas discriminatorias en determinados acuerdos de compensación para el equilibrio social.**

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Negociación intersectorial. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que revisara el impacto del artículo 34 de la Ley sobre Sindicatos y Acuerdos de Negociación Colectiva (ley núm. 6356), en la que se dispone que un convenio colectivo de trabajo puede cubrir a uno o más lugares de trabajo de la misma rama de actividad, y que considerara la posibilidad de su enmienda a fin de garantizar que no limite las posibilidades de las partes para concertar convenios regionales o nacionales con alcance intersectorial. La Comisión toma nota de que el Gobierno y la TISK indican que el sistema actual de negociación colectiva, que conjuga múltiples niveles, ya que permite la concertación de convenios colectivos a nivel de lugar de trabajo, de empresa y de grupo, así como de convenios marco a nivel de rama, es producto de un sistema de relaciones laborales bien establecido desde hace largo tiempo en Turquía y no parece que los interlocutores sociales consideren que es necesario introducir modificaciones a este respecto. Además, la Comisión toma nota de que en la práctica la negociación intersectorial se lleva a cabo en las empresas públicas, lo que da lugar a «protocolos marco de convenios colectivos públicos». Sin embargo, la Comisión constata que, con arreglo al artículo 34 de la ley núm. 6356, la negociación intersectorial en el sector privado no tiene lugar ni parece posible. **Al tomar debida nota de la información proporcionada por el Gobierno y la TISK, y en vista del principio de que el nivel en el que se realiza la negociación se debe dejar a discreción de las partes, la**

Comisión pide al Gobierno que contemple, en consulta con los interlocutores sociales, la modificación del artículo 34 de la ley núm. 6356 de modo que no se limite la posibilidad de que las partes del sector privado participen en convenios intersectoriales regionales o nacionales si así lo desean. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre toda medida que se adopte en la materia.

Requisitos para ser agente de negociación. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores tomó nota de que el artículo 41, 1), de la ley núm. 6356 estableció inicialmente los siguientes requisitos para ser agente de negociación colectiva: el sindicato debía representar como mínimo al 1 por ciento (y más adelante, progresivamente al 3 por ciento) de los trabajadores de una determinada rama de actividad, a más del 50 por ciento de los trabajadores empleados en el lugar de trabajo y al 40 por ciento de los trabajadores de la empresa cubierta por el convenio colectivo. Además, recuerda que en la ley núm. 6552, de 10 de septiembre de 2014, se rebajó el umbral de representatividad del 3 al 1 por ciento, y que, adicionalmente, el artículo 1 de la ley núm. 6356 que establecía que el umbral de representatividad del 1 por ciento de los miembros debía ser aumentado a un 3 por ciento para los sindicatos que no están afiliados a confederaciones miembros del Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue derogado por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, el umbral de la rama de actividad del 3 por ciento se redujo al 1 por ciento para todos los sindicatos. Por otra parte, la Comisión recuerda que, hasta el 6 de septiembre de 2018, se otorgaron exenciones legales al requisito del umbral de la rama a tres categorías de sindicatos previamente autorizados, para que no perdieran la autorización para poder negociar. Por último, la Comisión recuerda que el Comité de Libertad Sindical (CLS) le ha remitido los aspectos legislativos del caso núm. 3021 (véase 382.º informe, junio de 2017, párrafo 144) en relación con el impacto que la aplicación de la ley núm. 6356 tenía sobre el movimiento sindical y el sistema nacional de negociación colectiva en su conjunto. La Comisión recuerda que el CLS había considerado que la existencia del umbral de la rama de actividad, en virtud de la ley núm. 6356, además del umbral del lugar de trabajo/empresa, como requisito para concluir convenios colectivos de trabajo no es propicia para el establecimiento de relaciones laborales armoniosas y no promueve la negociación colectiva de conformidad con el artículo 4 del Convenio, ya que puede generar en última instancia un descenso del número de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos en el país (véase 373.º informe, octubre de 2014, párrafo 529). La Comisión toma nota de que el Gobierno no indica si se ha prolongado más allá del 6 de septiembre de 2018 la exención concedida a los sindicatos previamente autorizados. Sin embargo, el Gobierno indica que si los interlocutores sociales llegan a un consenso sobre el umbral de la rama de actividad, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales le prestará la debida atención en el curso de sus labores. Según los datos estadísticos proporcionados en la memoria del Gobierno, la tasa de sindicación en el sector privado era del 12,38 por ciento en enero de 2018, y la tasa de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos en 2017 era del 14,4 por ciento. ***Recordando las preocupaciones expresadas por varias organizaciones de trabajadores en relación con la persistencia del doble umbral y observando que la exención concedida a los sindicatos previamente autorizados es transitoria, la Comisión pide al Gobierno que indique si se ha prolongado la exención más allá del 6 de septiembre de 2018, y que informe sobre la repercusión de la decisión tomada a este respecto en la capacidad de negociar de los sindicatos previamente autorizados. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga examinando, en estrecha consulta con los interlocutores sociales, la repercusión de mantener la imposición de un umbral sectorial en el movimiento sindical y en el mecanismo nacional de negociación colectiva en su conjunto y que, de confirmarse que el mantenimiento del umbral del 1 por ciento redundaría en detrimento del mecanismo nacional de negociación colectiva, revise la ley con miras a eliminar dicho umbral.***

En cuanto al umbral de representatividad del lugar de trabajo/empresa, la Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que en el artículo 42, 3), de la ley núm. 6356, se dispone que si se determina que no existe ningún sindicato de trabajadores que cumpla con los requisitos necesarios para ser autorizado a realizar negociaciones colectivas, esta información se notificará a la parte que ha realizado la solicitud de determinación de competencias; y el artículo 45, 1), dispone que un convenio concluido sin documento de autorización se considerará nulo y sin efecto. A este respecto, la Comisión recordó que, si ningún sindicato alcanza el umbral requerido, los derechos de negociación deben otorgarse a todos los sindicatos para que, por lo menos, puedan negociar colectivamente en nombre de sus afiliados, y solicitó al Gobierno que garantizara la modificación de la legislación para ajustarla a este principio. A este respecto, la Comisión toma nota de la observación de la TISK, en la que destaca que el sistema de negociación colectiva turco contiene el principio de que haya un solo acuerdo para cada lugar de trabajo o empresa y para cada período, y que este principio se adoptó habida cuenta de lo mucho que los enfrentamientos y conflictos habían alterado la paz laboral. Además, la TISK expresa su rotundo desacuerdo con la sugerencia de autorizar a más de un sindicato para que negocien de forma colectiva para el mismo período. Tomando debida nota de esta observación, la Comisión recuerda asimismo las observaciones previas de la TÜRK-IS, indicando que el umbral del 50 por ciento de representatividad en el lugar de trabajo es difícil de alcanzar en un contexto en el que los sistemas de flexibilidad laboral se incrementan y tienen el apoyo de la legislación. En relación con el umbral de empresas, la Comisión recuerda la indicación de la TÜRK-IS de que en los casos en que ninguno de los sindicatos que organizan a los trabajadores en la misma empresa represente al 40 por ciento de los trabajadores, o de otro modo, en los casos excepcionales en que dos sindicatos obtienen el mismo umbral, ningún sindicato se considerará competente para desempeñarse como agente de negociación colectiva. Al tiempo que toma nota de la preocupación de la TISK en lo relativo a la paz laboral, la Comisión constata que, según las observaciones anteriores de la TÜRK-IS, los umbrales actuales de representatividad en el lugar de trabajo y la empresa no parecen favorables al desarrollo de la negociación colectiva en Turquía, ya que impiden que un sindicato representativo, pero que no cuenta con la mayoría absoluta en el lugar de trabajo o no representa al menos al 40 por ciento de los trabajadores de la empresa,

tenga la posibilidad de negociar y, por lo tanto, privan a los afiliados de este sindicato del derecho de determinar sus condiciones de trabajo mediante negociación colectiva. La Comisión recuerda una vez más que, en virtud del sistema de designación de un agente exclusivo de negociación, si no hay un sindicato que represente al porcentaje de trabajadores exigido para ser declarado agente exclusivo, todos los sindicatos de la unidad, juntos o por separado, deben poder entablar una negociación colectiva, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión hace hincapié en que, si permitiera que los sindicatos minoritarios negociaran de forma conjunta, la ley podría adoptar un enfoque más propicio para el desarrollo de la negociación colectiva sin comprometer el principio de «un solo acuerdo para cada lugar de trabajo o empresa», adoptado por la legislación turca. Del mismo modo, la Comisión considera que, cuando más de un sindicato alcanza el umbral de la empresa, todos ellos deberían poder entablar conjuntamente una negociación colectiva voluntaria, al menos en nombre de sus propios afiliados. **A la luz de lo expuesto, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar la legislación, en consulta con los interlocutores sociales, y que proporcione información al respecto.**

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la utilización de los artículos 46, 2), 47, 2), 49, 1), 51, 1), 60, 1) y 4), 61, 3), y 63, 3), que prevén diversas situaciones en las que el certificado de competencia para negociar puede ser retirado por las autoridades por una serie de motivos (no pedir a la otra parte que inicie las negociaciones en un plazo de quince días desde la recepción del certificado de competencia; no asistir a la primera reunión de la negociación colectiva o no abrir la negociación colectiva en el plazo de treinta días desde la fecha en que se ha hecho la petición; no notificar un conflicto a la autoridad competente en un plazo de seis días laborables; no recurrir al órgano disciplinario superior; incumplimiento de los requisitos legales en la toma de decisión sobre una huelga o en el inicio de la misma y no alcanzar un acuerdo al final del plazo de aplazamiento de la huelga), y que continuara revisando su aplicación con los interlocutores sociales interesados con miras a su modificación eventual, propiciando la negociación colectiva cuando las partes así lo deseen. Asimismo, la Comisión tomó nota de la observación de la TISK, según la cual en la práctica esas disposiciones no tienen efecto negativo en el proceso de negociación colectiva debido a que los sindicatos son muy cuidadosos con las normas de procedimiento, y de que el Gobierno reitera que estas disposiciones tienen la finalidad de garantizar, acelerar o acortar el procedimiento de negociación. La Comisión **lamenta** constatar que el Gobierno no ha proporcionado información alguna a este respecto. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que examine la aplicación de esas disposiciones con los interlocutores sociales interesados de forma regular y que proporcione información sobre la utilización de dichas disposiciones.**

Artículos 4 y 6. Derechos de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. Ámbito de aplicación de la negociación colectiva. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 28 de la ley núm. 4688, en su versión modificada en 2012, limita el ámbito de aplicación de los convenios colectivos a los «derechos sociales y pecuniarios» únicamente, excluyendo en consecuencia cuestiones tales como el tiempo de trabajo, los ascensos y las perspectivas de carrera profesional, así como las sanciones disciplinarias. La Comisión tomó nota también de que el Gobierno indicaba a este respecto que las enmiendas de 2012 al artículo 28 tenían por objeto otorgar a la negociación colectiva un papel considerablemente más amplio a la hora de determinar los derechos económicos y sociales de los funcionarios públicos. El Gobierno añade, sin embargo, que cuando las partes de la negociación acuerdan la necesidad de una modificación legislativa, es preciso que el acuerdo se centre en que se lleve a cabo dicha modificación, debido a que la condición jurídica de los funcionarios públicos se rige por la legislación. La Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno indica que las demandas de los sindicatos y sus confederaciones que no entran en la categoría de derechos sociales y pecuniarios se reciben y atienden en otras plataformas, más apropiadas, que se establecen en paralelo a la negociación colectiva. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno, la Comisión recuerda una vez más que los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio y, en consecuencia, tener la posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de empleo, y que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el ámbito de las cuestiones negociables suelen ser incompatibles con el Convenio. Sin embargo, la Comisión desea asimismo recordar que el Convenio es compatible con los sistemas que requieren la aprobación parlamentaria de determinadas condiciones o cláusulas económicas de los convenios colectivos relativos a la función pública, en la medida en que las autoridades respeten el acuerdo adoptado. **Teniendo presente la compatibilidad con el Convenio de las modalidades especiales de negociación en el sector público, como se ha expuesto anteriormente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para suprimir las restricciones sobre las cuestiones objeto de negociación colectiva de manera que el ámbito de aplicación de los derechos de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado se ajuste plenamente al Convenio.**

Negociación colectiva en el sector público. Participación de los sindicatos sectoriales más representativos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, de conformidad con el artículo 29 de la ley núm. 4688, la delegación de empleadores públicos (PED) y la delegación de sindicatos de funcionarios públicos (PSUD) son las partes en los convenios colectivos concluidos en la función pública. Las propuestas para la sección general del convenio colectivo son elaboradas por los miembros de la confederación de la PSUD y las propuestas de convenios colectivos en cada rama de servicios son elaboradas por los sindicatos representativos de dicho sector en la PSUD. Asimismo, la Comisión tomó nota de la observación de la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos de Turquía (TÜRKİYE KAMU-SEN) a este respecto, señalando que muchas de las propuestas de los sindicatos autorizados en el sector son aceptadas en tanto que propuestas relativas a la sección general del acuerdo, es decir, que deben ser presentadas

por una confederación, de conformidad con las disposiciones del artículo 29, y que este mecanismo priva a los sindicatos sectoriales de la capacidad de ejercer directamente su derecho a efectuar propuestas. Al tiempo que tomó nota de que, si bien los sindicatos más representativos de la rama están representados en la PSUD y toman parte en las comisiones técnicas sectoriales específicas, su papel en el ámbito de la PSUD está limitado debido a que no tienen derecho a formular propuestas de convenios colectivos, en particular cuando sus peticiones son calificadas como generales o relacionadas con más de una rama de servicios, la Comisión solicitó al Gobierno que garantizara que esos sindicatos puedan formular propuestas generales. La Comisión constata que el Gobierno señala a este respecto que es lógico que sean los miembros que representan a las confederaciones de la PSUD, que son las organizaciones sindicales de más alto nivel, las que presenten las propuestas que se refieren a todos los funcionarios públicos, y que durante las cuatro rondas de negociación colectiva que tuvieron lugar desde la instauración del sistema, en 2012, los sindicatos de funcionarios públicos han participado en las negociaciones en tanto que miembros de la PSUD y han podido así influir en las propuestas generales. La Comisión toma nota de que el Gobierno parece confirmar que, en el seno de la PSUD, sólo las confederaciones están autorizadas a formular propuestas relativas a cuestiones que puedan afectar a más de una rama. ***Ya que considera que, cuando se establecen órganos paritarios en el marco de la conclusión de convenios colectivos y las condiciones impuestas por la ley para la participación de esos órganos es tal que impide al sindicato más representativo de la rama de actividad participar en la labor de esos órganos, se menoscaban los principios establecidos por el Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que, en lo relativo a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, garantice que la ley núm. 4688 y su aplicación se ajusten al Convenio para permitir que los sindicatos más representativos de cada rama de servicios puedan formular propuestas de convenios colectivos, con inclusión de las cuestiones que puedan afectar a más de una rama de servicio.***

Negociación colectiva en el sector público. Consejo de arbitraje de los empleados del sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo a los artículos 29, 33 y 34 de la ley núm. 4688, en caso de que fracasen las negociaciones en el sector público, la presidencia de la PED (Ministro de Trabajo), en nombre de la administración pública, y la presidencia de la PSUD (en la actualidad, el presidente de la MEMUR-SEN), en nombre de los empleados públicos, pueden presentar un recurso ante el Consejo de arbitraje de los empleados del sector público. Las decisiones del Consejo son definitivas y tendrán el mismo efecto y vigor que el convenio colectivo. La Comisión solicitó una respuesta a la observación de la KESK según la cual la mayoría de los miembros del Consejo de arbitraje de los empleados del sector público son designados por los empleadores y el Consejo de Ministros, circunstancia que genera dudas acerca de la independencia de este órgano. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica a este respecto que, según el KHK núm. 703, de 2 de julio de 2018, el Presidente de la República tiene la facultad de designar a un magistrado superior para que presida el Consejo, así como a cuatro miembros de ministerios e instituciones públicas y un investigador que se dedique a un campo relacionado con este ámbito. Por otra parte, las tres confederaciones de funcionarios públicos más representativas designan directamente a cuatro miembros del Consejo, y otro miembro es designado por el Presidente de la República de entre los investigadores propuestos por esas confederaciones. A modo de conclusión, el Gobierno indica que, dado que el Consejo se compone de un juez que la preside, que goza de independencia judicial, y diez miembros, cinco de los cuales han sido elegidos por organizaciones de funcionarios públicos, se trata de una institución que presenta un buen equilibrio. Habida cuenta de la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión toma nota de que, de acuerdo con el KHK núm. 703, siete de los 11 miembros del Consejo, incluido el presidente, son designados por el Presidente de la República. La Comisión considera que este proceso de selección puede suscitar dudas en cuanto a la independencia e imparcialidad del Consejo. ***Por lo tanto, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para reestructurar la composición del Consejo de arbitraje o el método de designación de sus miembros para que se exprese mejor su independencia e imparcialidad y ganarse así la confianza de las partes.***

Negociación colectiva en el sector público. Acuerdos de compensación para el equilibrio social. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en la rama de servicios de la administración local, las negociaciones entre el empleador directo (administración local) y los sindicatos que representan a los funcionarios públicos se llevaron a cabo durante un largo periodo de tiempo con anterioridad a las enmiendas de 2012 y resultaron en la conclusión de numerosos convenios colectivos de los que se beneficiaron decenas de miles de trabajadores, mientras como consecuencia de la aplicación del artículo 32, en su forma enmendada, de la ley núm. 4688, los acuerdos denominados de «compensación para el equilibrio social» han dejado de considerarse convenios colectivos. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que indicara si todas las cuestiones tratadas con anterioridad en negociaciones directas entre la administración local y las organizaciones representativas de los trabajadores aún pueden ser abarcadas por medio del sistema centralizado de negociación establecido en virtud de la legislación enmendada, y de qué manera las organizaciones que representan a los trabajadores de las administraciones locales tienen derecho a participar en las negociaciones con arreglo al nuevo sistema. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera a este respecto que el procedimiento para concluir un convenio colectivo para la rama de servicios de la administración local es el mismo que para otras ramas, y un convenio colectivo para esta rama debe ser concluido entre la PED y el sindicato mayoritario de la rama. Además, el Gobierno indica que, ya que los acuerdos de compensación para el equilibrio social no se consideran convenios colectivos en virtud de la ley núm. 4688, hay otro procedimiento posible que pueden seguir las administraciones locales que quieran y puedan permitirse económicamente celebrar este tipo de acuerdos, como se describe en el artículo 32 de la ley. De conformidad con esta disposición, las administraciones especiales municipales y provinciales pueden concluir acuerdos de compensación para el equilibrio social directamente con los sindicatos de

funcionarios públicos más representativos en la municipalidad o administración correspondiente. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la KESK relativas a los acuerdos celebrados con las municipalidades de Gaziantep y Kocaeli, con arreglo al artículo 32 de la ley núm. 4688. La Comisión constata por lo tanto que la práctica de negociar y concluir directamente acuerdos de compensación para el equilibrio social en los servicios de administración locales siguen dándose en el marco establecido por el artículo 32 de la ley núm. 4688.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Ucrania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Independientes de Ucrania (KVPU), recibidas el 9 de octubre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, así como de la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), recibidas el 11 de octubre de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre los numerosos alegatos de violaciones de libertades civiles y del Convenio en la práctica que contienen.**

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, a constituir organizaciones y afiliarse a ellas. La Comisión recuerda que anteriormente había solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho de los jueces a constituir las organizaciones que estimaran convenientes, con el fin de promover y defender los intereses de sus miembros. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera, que en virtud del artículo 127 de la Constitución, los jueces profesionales no pueden ser miembros de sindicatos. Con el fin de poner remedio a esta situación y de garantizar el derecho de los jueces a sindicarse, el Ministerio de Política Social se dirigió al Presidente del país, en noviembre de 2014, así como al Parlamento (*Verkhovna Rada*), en junio de 2015, pidiéndoles que tuvieran en cuenta las observaciones de la Comisión y que levantaran la restricción constitucional. La administración presidencial envió una propuesta correspondiente a dicha petición dirigida a los miembros del grupo de trabajo sobre justicia e instituciones conexas de la Comisión Constitucional para su consideración. La Comisión **lamenta** que la situación no haya evolucionado a este respecto. **La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando las medidas necesarias con objeto de garantizar el derecho de los jueces a constituir las organizaciones que estimen convenientes con el fin de promover y defender los intereses de sus miembros, y a que informe de todos los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 3. Derecho a organizar sus actividades y a elaborar sus programas con plena libertad. En relación con la solicitud anterior de la Comisión para que el Gobierno modifique el artículo 19 de la Ley sobre el Procedimiento para la Solución de Conflictos Laborales Colectivos, que dispone que la decisión de declarar una huelga debe contar con el apoyo de la mayoría de los trabajadores o de dos tercios de los delegados de una conferencia, la Comisión reitera que el propósito inicial del Gobierno es rebajar la exigencia de este requisito en el proyecto del Código del Trabajo. Posteriormente la Comisión tomó nota de que el proyecto del Código del Trabajo no contiene disposiciones que hagan referencia al modo de adoptar las decisiones con las que se declara una huelga ni a cómo las huelgas se llevan a la práctica. En consecuencia, la Comisión se vio en la obligación de pedir al Gobierno que aclarara qué disposición legal reglamentaría el ejercicio de derecho de huelga cuando se adopte el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la actual versión del proyecto del Código del Trabajo menciona la disposición correspondiente de la Ley sobre el Procedimiento para la Solución de Conflictos Laborales Colectivos y su artículo 19 relativo a la mayoría requerida para poder convocar una huelga. La Comisión reitera una vez más que si la legislación nacional exige votar antes de convocar una huelga, debería garantizar que sólo tengan en cuenta los votos emitidos y que la mayoría se fije a un nivel razonable. **En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 19 de la Ley sobre el Procedimiento para la Solución de Conflictos Laborales Colectivos en consecuencia y a que señale los progresos logrados a este respecto.**

La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que enumerara las categorías específicas de funcionarios cuyo derecho de huelga se restringe o prohíbe en virtud de Ley sobre la Administración Pública, cuyo artículo 10, 5) establece la prohibición a los funcionarios de ejercer el derecho de huelga. La Comisión toma nota de la información detallada suministrada por el Gobierno sobre las diversas categorías sobre los cuales no se indica con precisión si pueden o no ejercer el derecho de huelga. **Reiterando que el derecho de huelga a la administración pública puede ser restringido o incluso prohibido únicamente para los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, la Comisión pide al Gobierno que clarifique las categorías de funcionarios que ejercen dichas funciones si la prohibición de ejercer el derecho de huelga afecta a algunos o a todos los funcionarios públicos, y si éste es el caso, a que modifique la ley en consecuencia.**

La Comisión tomó nota anteriormente de que, con arreglo al artículo 293 del Código Penal, las acciones colectivas que perturben seriamente el orden público o que dificulten considerablemente el funcionamiento del transporte público o de cualquier empresa, institución u organización, así como la participación en las mismas, podrán ser castigados con una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales o con penas de prisión de hasta seis meses. **La Comisión toma nota de la información general del Gobierno acerca de la investigación antes de los juicios en relación con la comisión de delitos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de este artículo en lo que respecta a las acciones colectivas.**

Uganda

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2005)

La Comisión recuerda que, en respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2012 y 2013, en relación con las restricciones a la libertad sindical impuestas por la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público, de 2013, el Gobierno indicó que dicha ley se aplica para garantizar que las reuniones públicas tengan lugar en un ambiente de armonía y paz. La Comisión recuerda que la ley establece que los organizadores de reuniones públicas que no cumplan con los requisitos de la ley (como los plazos para avisar de las reuniones y el límite del tiempo que pueden durar las reuniones públicas) cometerán un acto de desobediencia de sus obligaciones legales que serán susceptibles de ser castigadas con pena de reclusión, según el Código Penal. La Comisión recuerda que: i) el derecho a organizar reuniones públicas y manifestaciones constituye un aspecto importante de los derechos sindicales; ii) las autoridades deberían recurrir a la policía únicamente en una situación de huelga o en una manifestación cuando ésta suponga una amenaza para el orden público; iii) no debería imponerse ninguna sanción penal a los trabajadores por haber llevado a cabo una huelga o manifestación pacífica, y iv) la aplicación de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público no debería obstaculizar el ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión indicó que confiaba en que el Gobierno garantizaría el respeto de estos principios y, a tal efecto, le pidió que debatiera con los interlocutores sociales interesados la aplicación y la repercusión de la ley de 2013. La Comisión **lamenta** que el Gobierno no proporcione información al respecto. **Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que debata con los interlocutores sociales la aplicación y la repercusión de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público, de 2013, y que informe acerca del resultado de los debates.**

Artículos 2 y 3 del Convenio. Asuntos legislativos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para modificar o derogar varias disposiciones de la Ley sobre Sindicatos (LUA), de 2006, y de la Ley de Conflictos Laborales (arbitraje o resolución de conflictos) (LDASA) de 2006:

- Artículo 18 de la LUA (el procedimiento de registro de un sindicato deberá realizarse dentro de un plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación de la solicitud). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que el plazo de noventa días es el tiempo máximo que se prevé para concluir el procedimiento en su totalidad y emitir el certificado para el solicitante. **Recordando que los procedimientos de inscripción excesivamente largos pueden representar un obstáculo grave para la creación de organizaciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 18 de la LUA a fin de acortar el plazo para la inscripción de un sindicato en el registro.**
- Artículo 23, 1), de la LUA (prohibición o suspensión de los dirigentes sindicales por el funcionario encargado del registro). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la intención del artículo 23, 1), de la LUA consiste en suspender al dirigente en cuestión con objeto de que tengan lugar las investigaciones y prevalezca la justicia. La Comisión recuerda una vez más que cualquier destitución o suspensión de los dirigentes sindicales que no sea el resultado de una decisión interna del sindicato, de una votación por sus afiliados, o de un procedimiento judicial ordinario, interfiere seriamente con el derecho de los sindicatos a elegir libremente a sus representantes, consagrado en el artículo 3 del Convenio. Las disposiciones que autorizan a la suspensión y destitución de los dirigentes sindicales por parte de las autoridades administrativas son incompatibles con el Convenio. La Comisión recuerda además que sólo la condena por delitos cuya naturaleza comprometa la actitud o la integridad necesarias para el ejercicio de las funciones sindicales puede constituir un motivo de destitución para ocupar esos cargos. **En consecuencia, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para modificar el artículo 23, 1), de la LUA de manera que se garantice que el funcionario encargado del registro sólo pueda destituir o suspender a un dirigente sindical como resultado de una actuación judicial y únicamente por razones que se ajusten a los principios antes mencionados.**
- Artículo 31, 1), de la LUA (haber ejercido una ocupación previamente como condición de elegibilidad para la misma). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su intención de ponerse en contacto con los sindicatos para que expresen sus puntos de vista sobre esta cuestión. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que, en combinación con estas consultas, adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 31, 1), de la LUA a efectos de introducir cierta flexibilidad, ya sea admitiendo como candidatos al cargo de dirigente sindical a personas que hayan ejercido previamente esta ocupación, ya sea eximiendo de este requisito a una proporción razonable de los dirigentes de una organización sindical.**
- Artículo 33 de la LUA (regulación excesiva de la asamblea general anual de una organización por parte del funcionario del registro; la infracción de la disposición correspondiente será sancionable en virtud del artículo 23, 1)). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su intención de debatir esta cuestión con los sindicatos para ajustar el artículo 33 de la LUA a las disposiciones del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para derogar el artículo 33 de la LUA a efectos de garantizar el derecho de las organizaciones sindicales a organizar su administración.**

- Artículo 29, 2), de la LDASA (la declaración de ilegalidad de una huelga corresponde al Gobierno). La Comisión recuerda que el Gobierno señaló anteriormente que corresponde al funcionario responsable de las cuestiones laborales declarar ilegal una huelga y que, como se trata de un funcionario del Gobierno, cualquier medida adoptada por dicho funcionario es una acción gubernamental. La Comisión **lamenta** que la memoria del Gobierno no contenga información alguna sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 29, 2), de la LDASA. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar esta disposición con el fin de garantizar que la declaración de ilegalidad de una huelga no corresponda al Gobierno, sino a un órgano independiente que tenga la confianza de las partes interesadas.**

En relación con el anexo 2 de la LDASA (lista de servicios esenciales), la Comisión recuerda que el Gobierno señaló en ocasiones anteriores que el Consejo Consultivo del Trabajo, que fue designado en octubre de 2015, se ocupará de la armonización de la lista de servicios esenciales que contiene la LDASA con la lista que figura en la Ley de Servicio Público de 2008 (mecanismo para la negociación, la consulta y la resolución de conflictos). **Dada la falta de nueva información sobre este aspecto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione nueva información sobre toda evolución al respecto.**

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de la respuesta general del Gobierno a las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Nacional de Sindicatos de Uganda (NOTU), en 2014 y 2012, respectivamente. **Pide al Gobierno que proporcione comentarios detallados sobre las prácticas de discriminación antisindical.**

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión reitera sus comentarios anteriores sobre las disposiciones siguientes de la Ley sobre los Sindicatos, de 2006 (LUA), y de la Ley de Conflictos Laborales (arbitraje y resolución de conflictos), de 2006 (LDASA):

- Artículo 7 de la LUA (los fines legales para los cuales pueden establecerse federaciones de sindicatos no incluyen la negociación colectiva). La Comisión toma nota de que el Gobierno confirma que, en virtud de la LUA, las federaciones de sindicatos no tienen el derecho a negociar colectivamente. **Al tiempo que recuerda que el derecho a la negociación colectiva debería concederse a las federaciones y confederaciones de sindicatos, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 7 de la LUA con el fin de garantizar que las federaciones de sindicatos tengan el derecho a negociar colectivamente. La Comisión pide al Gobierno que la informe de todas las novedades legislativas a este respecto.**
- Artículos 5, 1) y 3), y 27, de la LDASA (remisión por cualquier parte, o a solicitud de cualquier parte, de los conflictos no resueltos al arbitraje obligatorio). En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para enmendar estas disposiciones con el fin de garantizar que el arbitraje obligatorio sólo pueda imponerse en los casos de conflictos en la administración pública que impliquen a los funcionarios públicos que ejercen una autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la salud, o la seguridad de toda o parte de la población), o en caso de crisis nacionales agudas. La Comisión reiteró en este sentido que, con la excepción de los casos mencionados anteriormente, el arbitraje impuesto por la legislación o a solicitud de únicamente una de las partes implicadas en el conflicto está en contradicción con la obligación de promover el pleno desarrollo y la utilización de los procedimientos de negociación voluntaria, tal como establece el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que están en curso consultas con los interlocutores sociales con respecto a los enmiendas a dichos artículos. **La Comisión confía en que, previa consulta con los interlocutores sociales, el Gobierno adopte las medidas necesarias para modificar esas disposiciones a fin de garantizar que el arbitraje en situaciones distintas de las mencionadas más arriba pueda tener lugar a solicitud de las dos partes interesadas en el conflicto. La Comisión pide al Gobierno que la informe de cualquier evolución legislativa en esta materia.**

Artículos 4 y 6. Promoción de la negociación colectiva de todos los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que garantizara la efectiva aplicación en la práctica de los derechos de negociación colectiva previstos en la Ley sobre la Administración Pública, de 2008 (mecanismos de negociación, consultas y solución de conflictos) para el ejercicio de la función pública de al menos todos los empleados y funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que suministrara una copia de las directrices que se están formulando para ayudar a los ministerios y gobiernos locales a constituir estructuras de negociación colectiva correspondientes a su nivel, así como a que comunique información sobre el número de convenios colectivos concertados en la administración pública y el número de trabajadores que abarcan. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el Consejo Consultivo y de Negociación en la Administración Pública, que fue establecido por la Ley sobre la Función Pública de 2008 para facilitar las consultas, el diálogo, y la negociación entre el Gobierno y los sindicatos de la administración pública, ha funcionado con deficiencias. La Comisión señala también que se pondrá en contacto con el Ministerio pertinente para mejorarlo. **La**

Comisión pide una vez más al Gobierno que garantice la aplicación efectiva en la práctica de los derechos de negociación colectiva que establece la Ley sobre la Administración Pública de al menos todos los empleados y funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que: i) suministre una copia de las directrices publicadas a este respecto y la informe de las medidas adoptadas para mejorar el funcionamiento del Consejo Consultivo y de Negociación en la Administración Pública, y ii) suministre información sobre el número de convenios colectivos concertados y en vigor en la administración pública, y sobre el número de trabajadores a los que cubren.

Uruguay

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1954)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) recibidas el 31 de agosto de 2016 y el 31 de agosto de 2018 sobre aspectos tratados en esta observación. La Comisión toma nota de las observaciones adicionales conjuntas de la OIE, la CIU y la CNCS recibidas el 28 de noviembre de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.**

Artículo 3 del Convenio. Ocupación del lugar de trabajo y derecho de la dirección de la empresa a penetrar en la misma en contextos de conflictos laborales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había saludado la firma, en marzo de 2015, de un acuerdo tripartito por medio del cual el Gobierno y los interlocutores sociales se comprometían a entablar un diálogo constructivo sobre los temas señalados por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2699. La Comisión había expresado la firme esperanza de que el acuerdo facilitaría la realización de un diálogo tripartito fructífero en el que, teniendo en cuenta los comentarios del Comité de Libertad Sindical y de esta Comisión sobre la cuestión de la ocupación de los lugares de trabajo, se tomarían medidas concretas a fin de poner la legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones conjuntas, la OIE, la CIU y la CNCS afirman que: i) en el marco del diálogo tripartito consecutivo al acuerdo de 2015, el Gobierno sometió en 2016 y 2017 a la discusión tripartita dos propuestas normativas cuyo contenido en materia de ocupación del lugar de trabajo no cumplen con las observaciones y recomendaciones de los órganos de control de la OIT; ii) la adopción en marzo de 2017 del decreto núm. 76/017 sobre el derecho de libre circulación en las calles, caminos y carreteras aleja aún más al Gobierno del cumplimiento de sus compromisos ya que el decreto excluye las huelgas de su ámbito de aplicación; iii) no existen en el país piquetes u ocupaciones de empresas que se lleven a cabo de manera pacífica ya que la inmensa mayoría de estas medidas se llevan adelante bajo amenazas y la violencia física y que todos estos actos se acompañan, cuanto menos, de violencia moral; iv) todos los tribunales civiles que han examinado amparos presentados por trabajadores en defensa de su libertad de trabajo han fallado a su favor; v) en cambio, en el marco del decreto núm. 165/2006 que regula los pasos que los sindicatos deben seguir para ocupar un centro de trabajo, no se ha dado ningún caso en el cual un empleador haya logrado que la autoridad laboral desocupe su empresa, y vi) dicho decreto que considera la ocupación de la empresa como una modalidad del derecho de huelga debe ser derogado. La Comisión observa que las organizaciones de empleadores manifiestan finalmente que el Gobierno incumple desde hace más de ocho años su obligación de enviar al Parlamento un proyecto de ley que atienda las observaciones de los órganos de control en materia de ocupación de los lugares de trabajo y que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito al respecto, incumbe al Gobierno dar los pasos necesarios para poner fin a esta situación de incumplimiento. La Comisión toma nota por otra parte de que el Gobierno manifiesta que, en casos de ocupación de los lugares de trabajo, la justicia civil es competente para conocer los amparos promovidos por los trabajadores que estimen conculcada su libertad de trabajo y que, al respecto, existe jurisprudencia firme en resguardo de la libertad de trabajo.

La Comisión observa adicionalmente que, en el marco de las discusiones tripartitas consecutivas al acuerdo de marzo de 2015 el Gobierno sometió a los interlocutores sociales dos propuestas de modificaciones normativas en septiembre de 2016 y marzo de 2017. La Comisión toma particular nota de que la propuesta de marzo de 2017 contempla un mecanismo de procedimiento de prevención y solución de conflictos que prevé específicamente: i) en los casos en los cuales los piquetes o las ocupaciones de empresas no respetarían el proceso previo de prevención y solución de conflictos, la facultad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y/o del Ministerio del Interior de intimar, en plazo perentorio de 24 horas, el cese de las medidas, con posible uso de la fuerza pública, y ii) la obligación de que los piquetes dispuestos como medida gremial se efectúen pacíficamente, sin perturbar el orden público, permitiéndose la libre circulación y el ingreso en la empresa, siendo posible la intervención del Ministerio del Interior y de la Fuerza Pública en caso de incumplimiento de esta obligación. La Comisión constata, sin embargo, que la propuesta gubernamental de marzo de 2017: i) no parece contemplar modificaciones respecto de las ocupaciones de empresa, que tendrían lugar posteriormente al agotamiento del procedimiento propuesto de prevención y solución de conflictos, y ii) no prevé explícitamente la sumisión de las ocupaciones de empresa a la obligación de respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas. A este respecto, la Comisión reitera que «los piquetes de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo deberían estar permitidos siempre que estas acciones se desarrollen pacíficamente. Sólo pueden imponerse restricciones a

este tipo de acciones cuando pierdan su carácter pacífico. Ahora bien, en todos los casos debe garantizarse el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 149).

La Comisión observa finalmente que: i) el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), si bien comparte la iniciativa de acordar un proceso genérico de prevención de conflictos para aquellos contextos que no lo tuviesen, no apoya la modificación de la legislación en materia de ocupación de empresas propuesta por el Gobierno ya que considera que ésta es una cuestión para la negociación colectiva, y ii) tal como lo han señalado en sus observaciones dirigidas a la Comisión, las organizaciones de empleadores, que presentaron un proyecto alternativo de modificaciones legislativas, no apoyan la propuesta gubernamental al considerar en particular que las ocupaciones de empresas no constituyen una manifestación del derecho de huelga y que se debería derogar el decreto que las regula.

A la luz de lo anterior, la Comisión observa que, en aplicación del acuerdo tripartito de marzo de 2015, se han celebrado consultas sustanciales sobre la reforma de la legislación en materia de relaciones colectivas de trabajo, con intercambio de criterios sobre varios proyectos de textos. La Comisión constata, sin embargo, que los esfuerzos no han permitido lograr un consenso tripartito sobre la cuestión específica de la ocupación de las empresas y, que hasta la fecha, no se ha presentado un proyecto de ley que atienda todas las solicitudes de la Comisión. ***Subrayando nuevamente la relevancia de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia nacional a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que, después de haber sometido el texto a la consulta de los interlocutores sociales, someta al Parlamento un proyecto que regule las ocupaciones de empresas de una manera plenamente conforme con el Convenio. Recordando que puede seguir contando con la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión espera firmemente que el Gobierno podrá informar a la brevedad de avances concretos a este respecto.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1954)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) recibidas el 31 de agosto de 2016, de 2017 y de 2018, que se refieren a las cuestiones examinadas por la Comisión en el marco del presente comentario. La Comisión toma nota de las observaciones adicionales conjuntas de la OIE, la CIU y la CNCS recibidas el 28 de noviembre de 2018. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.***

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. En relación con la revisión de la ley núm. 18566 de 2009 (ley que establece los principios y derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva, en adelante la ley núm. 18566) solicitada por el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 2699) y por la Comisión con miras a asegurar su plena conformidad con los principios de la negociación colectiva y los convenios ratificados por el Uruguay en la materia, la Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había: i) saludado el acuerdo tripartito de marzo de 2015 por medio del cual se iniciaba un proceso de diálogo tripartito al respecto; ii) tomado nota de la preocupación expresada por las organizaciones de empleadores sobre la ausencia de avances de dicho diálogo, y iii) esperado firmemente que el proceso de diálogo permitiría la toma de medidas concretas a fin de poner la legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, las organizaciones de empleadores: i) se refieren a las propuestas normativas intercambiadas en 2016 y 2017 por el Gobierno y el sector empleador en el marco del mencionado diálogo tripartito y a la asistencia técnica proporcionada al respecto por la Oficina por medio de una nota técnica de octubre de 2017; ii) explicitan sus propuestas alternativas a las del Gobierno respecto de varios aspectos de la revisión de la ley núm. 18566; iii) manifiestan que, respecto de las competencias de los Consejos de Salarios en materia de remuneraciones y condiciones de trabajo, el Gobierno no ha propuesto ninguna modificación legislativa y sigue sin reconocer que las negociaciones tripartitas que se dan en el marco de los Consejos de Salarios equivalen en la práctica a una forma de arbitraje obligatorio donde los delegados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social marcan y definen las pautas de la negociación, y iv) afirman que, en la medida en que el Gobierno no ha logrado alcanzar un acuerdo tripartito respecto de las reformas solicitadas desde hace ocho años por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión, debe ahora cumplir con su obligación de enviar al Parlamento un proyecto de ley que ponga fin al incumplimiento de los principios emanados de los convenios internacionales ratificados por el Uruguay en materia de negociación colectiva.

La Comisión toma debida nota de que, en el marco de las discusiones tripartitas consecutivas al acuerdo de marzo de 2015, el Gobierno sometió a los interlocutores sociales varias propuestas de modificaciones normativas en diciembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017. La Comisión considera que varias modificaciones a la ley núm. 18566 planteadas por el Gobierno y dirigidas a atender los comentarios de los órganos de control de la OIT son acordes con la obligación que se desprende del artículo 4 del Convenio de promover la negociación colectiva libre y voluntaria. La Comisión se refiere en particular a la propuesta de: i) incluir una frase final al artículo 4 de la ley núm. 18566, exigiendo personería jurídica a los sindicatos para que puedan recibir informaciones por parte de las empresas en el marco del proceso de negociación colectiva, con miras a que se facilite la posibilidad de entablar acciones en responsabilidad en caso de violación del deber de confidencialidad; ii) eliminar el artículo 10, d) de la mencionada ley que establece la competencia del Consejo Superior Tripartito para definir el nivel de las negociaciones bipartitas o tripartitas; iii) eliminar

la parte final del artículo 14 de la ley que atribuye, en ausencia de presencia sindical en la empresa, la capacidad negociadora a los sindicatos de nivel superior; iv) modificar el artículo 17, inciso 2 de la ley de manera que la cuestión de la ultractividad sea objeto de negociación en cada convenio, pudiéndose establecer bien la ultractividad total, bien la ultractividad parcial, bien un plazo para la extensión de la vigencia del convenio que permita su renegociación, y v) aclarar que el registro y la publicación de las resoluciones de los Consejos de Salarios y de los convenios colectivos no constituyen requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo.

Al tiempo que constata que algunas de estas propuestas son objeto de un acuerdo tripartito o de acercamientos parciales mientras que otras siguen sin recabar un consenso, la Comisión saluda la elaboración de las mismas y subraya la contribución que pueden desempeñar en la adecuación de la ley núm. 18566 con el Convenio. La Comisión *lamenta* observar, sin embargo, que las propuestas normativas del Gobierno siguen sin plantear modificaciones y esclarecimientos acerca de la competencia de los Consejos de Salarios, órganos de composición tripartita, en materia de ajustes a las remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría y de condiciones de trabajo. La Comisión toma nota a este respecto de: i) la manifestación del Gobierno de que la ley núm. 18566 da absoluta prioridad a la negociación bipartita ya que los Consejos de Salarios podrán no ser convocados si existiera un convenio colectivo de igual nivel vigente en la misma rama de actividad, y ii) la mencionada manifestación de las organizaciones de empleadores de que las negociaciones tripartitas que se dan en el marco de los Consejos de Salarios equivalen en la práctica a una forma de arbitraje obligatorio que se extiende más allá de la fijación de los salarios mínimos. La Comisión recuerda nuevamente a este respecto que si bien la fijación de los salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas, el artículo 4 del Convenio persigue la promoción de la negociación bipartita para la fijación de las condiciones de trabajo, por lo cual todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo debería ser el fruto de un acuerdo entre los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y organizaciones de trabajadores, por otra. La Comisión subraya adicionalmente que se pueden establecer mecanismos que permitirían garantizar a la vez el carácter libre y voluntario de la negociación colectiva con el eficaz fomento de la misma, asegurando el mantenimiento del alto grado de cobertura de los convenios colectivos.

A la luz de lo anterior y tomando debida nota del diálogo tripartito llevado a cabo desde la firma del acuerdo de marzo de 2015, así como de la elaboración de propuestas normativas que atienden parte de sus comentarios, la Comisión pide al Gobierno que, después de haber sometido el texto a la consulta de los interlocutores sociales, remita al Parlamento un proyecto de ley que garantice la plena compatibilidad de la legislación y práctica nacionales con el Convenio. Recordando que puede seguir contando con la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión espera firmemente que el Gobierno podrá informar a la brevedad de los avances concretos a este respecto.

Uzbekistán

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)

La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que comunicara sus comentarios respecto de las observaciones formuladas en 2016 por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), en las que expresa los alegatos de represión gubernamental en relación con la sindicación llevada a cabo por organizaciones sindicales independientes, del control ejercido por el Gobierno en la Federación de Sindicatos de Uzbekistán (FPU) y de represalias respecto de los militantes, con miras a controlar las relaciones y las prácticas laborales. La Comisión toma nota con *preocupación* de que, en lugar de presentar su propia respuesta, el Gobierno transmite la de la FPU a los alegatos de la UITA y a la solicitud directa anterior de la Comisión, mediante la cual rechaza los alegatos de la UITA. *La Comisión recuerda que corresponde al Gobierno asumir la responsabilidad última de velar por el respeto de los Convenios ratificados y espera que el Gobierno comunique informaciones sobre las medidas adoptadas para abordar los problemas planteados por la Comisión.*

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que, desde hace algunos años, viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 21, 1), 23, 1), 31, 35, 36, 48, 49 y 59 del Código del Trabajo, con el fin de que la legislación establezca claramente que, sólo en ausencia de un sindicato en la empresa, rama de actividad o territorio, la autorización de negociar colectivamente puede conferirse a otros representantes elegidos por los trabajadores. La Comisión toma nota de que la FPU considera que las mencionadas disposiciones están de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) y, en consecuencia, que no es necesario modificar el Código del Trabajo a ese respecto. La Comisión recuerda nuevamente que la negociación directa entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que elude a organizaciones de trabajadores suficientemente representativas, cuando esas existen, podría ser perjudicial para el principio de que debería impulsarse y favorecerse la negociación entre los empleadores y las organizaciones representativas de trabajadores. *Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar los mencionados artículos, con el fin de establecer claramente que sólo en caso de que no exista un sindicato en la empresa, la rama de actividad o el territorio, puede admitirse la negociación colectiva con otros representantes de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas a este respecto.*

Conflictos laborales colectivos. La Comisión recuerda que tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual está trabajando en un proyecto de ley que debe reglamentar los conflictos laborales colectivos. Toma nota de que la FPU indica que no se adoptó la ley en consideración. Además, la FPU señala que, conjuntamente con la Cámara de Comercio y de Industria de Uzbekistán, y en consulta con el Ministerio de Trabajo y Protección Social, se adoptaron, a principios de 2015, las recomendaciones sobre la organización de las actividades de las comisiones encargadas de los conflictos laborales. ***La Comisión pide al Gobierno que se sirva transmitir una copia de estas recomendaciones.***

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno relativa al número de convenios colectivos concluidos a nivel de los sectores, de los territorios y de las empresas, y al número de trabajadores comprendidos. ***La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando este tipo de informaciones.***

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 332.^a reunión de constituir una Comisión de Encuesta en relación con la queja alegando el incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de los Convenios núms. 26, 87 y 144. En estas circunstancias, y de acuerdo con la práctica usual que suspende el funcionamiento de los otros mecanismos de control durante el período de funcionamiento de la Comisión de Encuesta, la Comisión retomará su examen de la aplicación del Convenio en la República Bolivariana de Venezuela una vez que la Comisión de Encuesta haya concluido con su misión.

Yemen

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1976)

La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que realizara comentarios sobre las observaciones de 2012 formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en las que se alegaba que se había despedido a docentes en huelga, que trabajadores de la sanidad habían resultado heridos, y que las oficinas del Sindicato de Periodistas del Yemen habían sido objeto de ataques. ***Lamentando tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a estas observaciones, la Comisión reitera su solicitud anterior.***

La Ley sobre Sindicatos (2002)

Artículos 2 y 5 del Convenio. La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que indicara si los empleados de las autoridades públicas de alto nivel y el Gabinete de Ministros, excluidos en virtud de su artículo 4 de la Ley sobre Sindicatos (LTU), gozaban del derecho a constituir sindicatos y a afiliarse a ellos. ***Tomando debida nota de la indicación del Gobierno de que, desde 2011, se han establecido comités sindicales en todas las oficinas ministeriales, la Comisión pide al Gobierno que aclare si los altos funcionarios públicos también tienen derecho a crear sus propias organizaciones y a afiliarse a ellas.***

También había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar los artículos 2, 20 y 21 de la LTU, con el fin de suprimir la referencia específica a la Federación General de Sindicatos del Yemen (GFTUY) y, por tanto, de permitir que los trabajadores y sus organizaciones crearan la federación que estimaran oportuna y se afiliaran a ella. La Comisión toma nota de la reiteración del Gobierno de que no impone restricciones a la actividad sindical, y de que existen muchos sindicatos que representan los intereses de los trabajadores que no despliegan su actividad en el marco de la GFTUY (por ejemplo, el Sindicato de Médicos, el Sindicato de Farmacéuticos, el Sindicato de Ingenieros y el Sindicato de Abogados). ***Tomando nota de que la legislación sigue conteniendo la referencia específica a la GFTUY y que ello podría resultar en hacer que sea imposible establecer una segunda federación para representar los intereses de los trabajadores, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar la LTU, con el fin de suprimir dicha referencia específica.***

Artículo 3. La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que aclarara si el artículo 40, b), de la LTU exigía una autorización del sindicato de nivel superior para poder convocar una huelga y, si éste era el caso, que adoptara las medidas necesarias para enmendar la legislación con miras a ponerla en conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en virtud de su artículo 40, b), de la LTU, existe un requisito de coordinar con el órgano sindical superior una huelga parcial o general, y de que se está considerando el comentario anterior de la Comisión sobre esta cuestión legislativa a fin de enmendar la ley. ***La Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para enmendar la LTU, a fin de garantizar el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular sus programas. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todo avance a este respecto.***

El proyecto de Código del Trabajo. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había expresado la esperanza de que el proyecto de Código del Trabajo se adoptara en un futuro cercano y de que el Gobierno tuviera en

cuenta los comentarios de la Comisión para seguir enmendando o revisando algunas de las disposiciones del proyecto. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, debido al conflicto armado que afecta al país desde 2011, no ha podido finalizar las enmiendas a la legislación laboral. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que el proyecto de Código del Trabajo no es aplicable a los trabajadores domésticos, a los miembros del Poder Judicial y al personal consular, pero que sus derechos están garantizados por ley. ***Recordando que las únicas excepciones autorizadas del ámbito de aplicación del Convenio que se contemplan son las referentes a los miembros de la policía y de las fuerzas armadas, la Comisión pide al Gobierno que indique todas las disposiciones legislativas que otorgan el derecho a los trabajadores domésticos, a los miembros del Poder Judicial y al personal diplomático y consular a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas y sin previa autorización.***

La Comisión toma nota además de la indicación del Gobierno de que el proyecto de Código del Trabajo no contiene disposiciones que denieguen el derecho de las organizaciones de trabajadores a afiliarse a organizaciones laborales internacionales.

La Comisión recuerda que también ha pedido al Gobierno que:

- revise el artículo 173, 2), del proyecto de Código del Trabajo, con el fin de asegurar que los menores de edades comprendidas entre 16 y 18 años puedan afiliarse a sindicatos sin la autorización parental;
- proporcione una lista de servicios esenciales mencionados en el artículo 219, 3), del proyecto de Código del Trabajo, que faculta al Ministro para someter conflictos al arbitraje obligatorio, la cual será difundida por el Consejo de Ministros una vez se promulgue el Código del Trabajo, y
- enmiende el artículo 211 del proyecto de Código del Trabajo, que establece que el preaviso de huelga debe incluir una indicación de la duración de una huelga a fin de asegurar que un sindicato pueda convocar una huelga durante un período indefinido.

Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno debido a la presencia de grupos armados y del conflicto armado en el país, la Comisión confía en que la reforma legislativa actual ponga la legislación nacional en conformidad con el Convenio, y pide al Gobierno que indique cualquier avance a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra la injerencia antisindical. La Comisión recuerda que viene pidiendo al Gobierno desde hace años que vele por que la legislación nacional prevea expresamente sanciones efectivas y suficientemente disuasorias que garanticen la protección de las organizaciones de los trabajadores contra actos de injerencia de los empleadores o sus organizaciones en las actividades sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica una vez más que la protección contra la injerencia en las actividades sindicales está prevista en el Código del Trabajo, y que procurara brindar más protección jurídica cuando enmiende la Ley de Sindicatos (ATU) de conformidad con el Convenio. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique los progresos realizados a este respecto, y que proporcione copias de los textos legislativos enmendados encaminados a asegurar el pleno respeto de los derechos consagrados en el Convenio, tan pronto se hayan adoptado.***

Artículo 4. Negativa a registrar un convenio colectivo sobre la base de la consideración de «los intereses económicos del país». La Comisión recuerda que había solicitado anteriormente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar los artículos 32, 6), y 34, 2), del Código del Trabajo, con miras a asegurar que la negativa a registrar un convenio colectivo sólo sea posible debido a faltas de procedimiento o porque no respeta las normas mínimas establecidas por la legislación laboral, y no sobre la base de la consideración de «los intereses económicos del país». Si bien la Comisión había tomado nota anteriormente de que el Gobierno había adoptado la propuesta de la Comisión con respecto a la enmienda del artículo del Código del Trabajo mencionado anteriormente, la Comisión toma nota de la nueva indicación del Gobierno de que estudiará las opiniones de la Comisión a este respecto. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner los artículos 32, 6), y 34, 2), del Código del Trabajo en conformidad con el Convenio.***

Artículos 4 y 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las disposiciones legales que garantizan el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado.

Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno debido a la presencia de grupos armados y del conflicto armado en el país, la Comisión confía en que el Gobierno no escatime esfuerzos para poner su legislación y su práctica en conformidad con el Convenio.

Zambia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de la reiteración del Gobierno, en respuesta a las observaciones de 2015 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) relativas a las alegaciones de despido de los trabajadores del sector minero por motivo de su participación en huelgas, de que las protestas y huelgas están permitidas siempre y cuando cumplan lo dispuesto en la Ley de Relaciones Profesionales y Laborales. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de septiembre de 2016 relativas a las cuestiones que están siendo examinadas por la Comisión.

Revisión de la Ley de Relaciones Profesionales y Laborales (en su forma enmendada por la Ley de Relaciones Profesionales y Laborales (enmienda), de 2008). La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que enmendara las siguientes disposiciones de la Ley de Relaciones Profesionales y Laborales (enmienda) núm. 8, de 2008 (ILRA), con el fin de ponerlas en conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio:

Artículo 2 del Convenio

- El artículo 2, e), que excluye del ámbito de aplicación de la ley y, por ende, de las garantías previstas en el Convenio, a los trabajadores de los servicios penitenciarios, jueces, secretarios judiciales, magistrados y jueces locales, y el artículo 2, 2), que otorga al Ministro el poder discrecional de excluir a ciertas categorías de trabajadores del ámbito de aplicación de la ley.
- El artículo 5, b), que dispone que un trabajador sólo puede ser miembro de «un sindicato en el sector, comercio, empresa, establecimiento o industria en el que trabaja», ya que limita la afiliación a un sindicato a los trabajadores de la misma ocupación o rama de actividad. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más que dichas condiciones pueden aplicarse a organizaciones de base, a condición de que estas organizaciones tengan libertad para constituir organizaciones interprofesionales y confederaciones en la forma considerada apropiada por los trabajadores interesados.
- El artículo 9, 3), a fin de reducir el período de registro de un sindicato que actualmente es de un máximo de seis meses, lo cual constituye un grave obstáculo para la constitución de organizaciones y conlleva la denegación del derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa.

Artículo 3

- El artículo 7, 3), que permite a un Comisionado de Asuntos Laborales prohibir que un dirigente ejerza funciones en cualquier sindicato durante un período de un año si, tras la negativa del Comisionado a registrar el sindicato, éste no se disuelve en seis meses. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más que un acto cuya naturaleza no pone en cuestión la integridad de la persona de que se trate y que no es perjudicial para la realización de las funciones sindicales, no debe constituir un motivo de descalificación para el ejercicio de la función de dirigente sindical.
- El artículo 21, 5) y 6), que confiere al Comisionado la facultad de suspender y nombrar un órgano ejecutivo provisional de un sindicato, así como de disolver el órgano y convocar una nueva elección.
- Los artículos 18, 1), b), y 43, 1), a), en virtud de los cuales puede impedirse a una persona ejercer funciones de responsable sindical si anteriormente ejerció el cargo de representante de una organización de empleadores o de trabajadores cuyo registro ha sido cancelado, si no puede demostrar al Comisionado que no ha contribuido a las circunstancias que provocaron tal cancelación.
- El artículo 78, 4), que limita la duración máxima de una huelga a catorce días, después de lo cual, si el conflicto sigue sin solución, se remitirá a un tribunal; el artículo 78, 6) a 8), en virtud del cual puede suspenderse una huelga si un tribunal llega a la conclusión de que ésta no se realiza «en interés público»; el artículo 78, 1), en virtud del cual una interpretación del Tribunal de Relaciones Laborales permite que cada parte pueda llevar un conflicto laboral ante los tribunales; el artículo 107, que prohíbe la huelga en los servicios esenciales, definidos de forma demasiado amplia, y habilita al Ministro para añadir otros servicios a la lista de servicios esenciales, en consulta con el Consejo consultivo tripartito laboral, y que habilita a los oficiales de policía para arrestar, sin posibilidad de libertad condicional, a las personas que se considera que han recurrido a la huelga en un servicio esencial y que impone una multa y de hasta seis meses de prisión.

La Comisión **lamentó** tomar nota de que en la última revisión de la ILRA (ley núm. 19, de 22 de diciembre de 2017) no se abordaron las cuestiones de fondo señaladas por la Comisión. **La Comisión confía en que la ILRA se modifique en un futuro muy cercano tras la celebración de consultas detalladas y francas con los interlocutores sociales, y teniendo en cuenta los comentarios que viene realizando desde hace muchos años. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.**

La Comisión recordó que hace años que viene pidiendo al Gobierno que aborde la cuestión del reconocimiento de la Unión de Instituciones Financieras y Trabajadores Asociados de Zambia (ZUFIAW) por la Administración Fiscal de Zambia (ZRA). Había tomado nota anteriormente de la indicación del Gobierno de que tal vez tuviera que revisarse la

legislación pertinente a fin de resolver la cuestión del reconocimiento. La Comisión toma nota con *preocupación* de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual la cuestión del reconocimiento de la ZUFIW por la ZRA se ha resuelto siguiendo orientaciones del Ministerio de Justicia y el Banco de Zambia, ya que la ZRA no está en el sector representado por la ZUFIW. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada a este respecto y que indique si los trabajadores de la ZRA pueden constituir los sindicatos que estimen convenientes o afiliarse a ellos, sin necesidad de autorización previa, tal como lo dispone el Convenio.***

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno sobre las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2017, y del compromiso expresado por el Gobierno de cumplir con los convenios ratificados.

Artículos 1 a 4 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical y promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. En varias ocasiones, la Comisión había solicitado al Gobierno que considerara enmendar las siguientes disposiciones de la Ley sobre Relaciones Profesionales y Laborales (ILRA), con el fin de poner la ley en plena conformidad con las disposiciones del Convenio:

- El artículo 85, 3), de la ILRA, que dispone que el tribunal decidirá sobre la cuestión que se le plantee (incluidos los conflictos entre un empleador y un empleado, así como las cuestiones que afecten a los sindicatos y a los derechos de negociación colectiva) en el plazo de un año a partir del día en que la queja o solicitud se le presente. La Comisión recordó anteriormente que, cuando se trata de alegaciones de violación de los derechos sindicales, tanto los órganos administrativos como los jueces competentes deberían estar facultados para dictar sentencia rápidamente. ***Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que la revitalización de un mecanismo alternativo de solución de conflictos podría ayudar a reducir el número de casos pendientes de resolución judicial, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para reducir el período máximo en el que un tribunal debería considerar el asunto y emitir su dictamen al respecto. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado al respecto.***
- Los artículos 78, 1), a) y c), y 78, 4), de la ILRA, que permiten, en ciertos casos, a las partes remitir el conflicto a un tribunal o al arbitraje. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien la ILRA puede mostrar deficiencias en los procesos y procedimientos de la resolución de conflictos colectivos, y de que cabe remitirse a otras leyes, como la Ley de Arbitraje núm. 19, de 2000, la Comisión reitera que sus comentarios se refieren específicamente al hecho de que las dos partes en el conflicto deben aceptar los procedimientos de arbitraje para que estos últimos sean voluntarios. Por consiguiente, la Comisión se ve en la obligación de recordar que, de conformidad con el principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos, el arbitraje impuesto por la legislación a solicitud de tan sólo una parte sólo es aceptable en relación con los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (*artículo 6 del Convenio*), los servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis nacionales graves. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que contemple la posibilidad de enmendar las disposiciones mencionadas anteriormente, a fin de asegurar que el arbitraje en situaciones distintas a las arriba indicadas sólo pueda tener lugar a solicitud de las dos partes en el conflicto.***

Lamentando tomar nota de que la última revisión de la ILRA (ley núm. 19, de 22 de diciembre de 2017) no abordó las cuestiones de fondo que se han venido señalando durante varios años, la Comisión confía sinceramente en que se introduzcan en un futuro cercano las enmiendas necesarias para poner la ley en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. Recordando que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

Artículo 4. Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de convenios colectivos firmados y que están en vigor en el país, y que indique los sectores y el número de trabajadores cubiertos.

Zimbabwe

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2003)

La Comisión toma de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto y el 1.º de septiembre de 2018, respectivamente, relativas a las cuestiones planteadas por la Comisión que figuran a continuación.

La Comisión toma nota del informe de la misión de alto nivel de la Oficina que visitó el país en febrero de 2017, tras las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas adoptadas en la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo con respecto a la aplicación por Zimbabwe del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta de 2009.

Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta nombrada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT

Derechos sindicales y libertades civiles. En sus observaciones anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la puesta en práctica de las conclusiones del taller de formación de instructores destinado a los miembros de la Policía de la República de Zimbabwe (ZRP), llevado a cabo por el Gobierno, en noviembre de 2016, con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota con *interés* de la indicación del Gobierno en su memoria de que, tras este taller, se elaboró un programa de formación que se difundió a todos los Centros de Actualización de las Competencias Profesionales (Centros de Formación) de la ZRP. El Gobierno indica que el programa de formación forma parte actualmente del material que se imparte a todos los miembros de la ZRP durante los cursos de iniciación y de perfeccionamiento. La ZRP ha elaborado un curso cuyo objetivo principal es dotar a los policías de las competencias necesarias e inculcarles una actitud positiva en la gestión de los casos relacionados con el trabajo. Durante el curso, se proporciona información a los policías sobre la estructura y el funcionamiento de la OIT, las leyes laborales nacionales y el papel de la policía y de otros actores estatales esenciales. La Comisión toma nota con *interés* de una copia del programa anexo a la memoria del Gobierno.

Al tiempo que toma nota de la indicación de la ZCTU de que se puso en libertad a todos los miembros del Sindicato de Trabajadores de Banca y Afines de Zimbabwe (ZIBAWU) que habían sido arrestados el 20 de julio de 2016 por protestar contra el impago de las indemnizaciones de fin de contrato de los trabajadores tras la terminación de sus contratos de trabajo, la Comisión toma nota con *preocupación* de las alegaciones presentadas por la CSI y la ZCTU relativas a: i) las lesiones sufridas por el personal de la ZCTU durante los ataques perpetrados por soldados a la oficina en el curso de las manifestaciones del 1.º de agosto de 2018; ii) los casos de prohibición y de tipificación de las huelgas como delito, y iii) la denegación o el retraso del registro de los sindicatos. **La Comisión pide al Gobierno que formule sus comentarios al respecto y confía sinceramente en que estas graves alegaciones sean objeto de investigaciones apropiadas y se persigan enérgicamente.**

Ley de Orden Público y Seguridad (POSA). La Comisión toma nota de que, según el informe de la misión de alto nivel, las divergencias en la comprensión por el Ministerio Público, la policía y los funcionarios letrados de la ZRP del ámbito de aplicación de la POSA condujeron a una falta de seguridad jurídica y de que, al parecer, esta percepción fue reforzada por el hecho de que se utilizaran las continuas alegaciones de la POSA para prohibir las acciones de protesta. A la luz de lo que precede, la misión propuso revisar la aplicación de la POSA en el Foro de Negociación Tripartita (TNF) con miras a formular propuestas para asegurar con mayor claridad que las actividades sindicales están fuera de su ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de la indicación de la ZCTU de que no se ha introducido ningún cambio legislativo para poner la POSA en conformidad con la Constitución y con el Convenio. **Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que revise la aplicación de la POSA, en consulta con los interlocutores sociales.**

Reforma y armonización de la legislación laboral. Ley del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que suministrara información sobre los progresos realizados con miras a poner la legislación laboral y de la administración pública en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la información detallada facilitada por el Gobierno a este respecto y, en particular, de que tras la aprobación por el Gabinete de los principios para la enmienda de la Ley del Trabajo, en diciembre de 2016, el Gobierno contrató a un consultor para que acelerara la redacción del proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto elaborado por el consultor no fue aceptado por los mandantes tripartitos. Ulteriormente, el Gobierno y los interlocutores sociales acordaron contratar al Fiscal General para que redactara el proyecto de ley, en consulta con los interlocutores sociales. El proyecto final se sometió al Gabinete y se presentó ante el Parlamento cuando éste reanuda su sesión. La Comisión toma nota de que, según la ZCTU, aunque los interlocutores sociales habían discutido el anteproyecto de ley para enmendar la Ley del Trabajo, los principios acordados no se reflejaban en el anteproyecto producido por la Fiscalía General ni en el segundo proyecto producido por el Gobierno. En diciembre de 2017 se celebró otra reunión tripartita, durante la cual se alcanzó un consenso con el Gobierno sobre cómo mejorar el proyecto. Sin embargo, según la ZCTU, el Gobierno no cumplió su promesa de compartir con ella a la mayor brevedad una nueva versión del proyecto. **La Comisión insta al Gobierno a que comparta la última versión del proyecto revisado para enmendar sin más dilación la Ley del Trabajo con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de sus numerosas solicitudes, algunas de las cuales son anteriores a la Comisión de Encuesta de 2009, no se han realizado progresos concretos en lo que respecta a la enmienda de la Ley del Trabajo para ponerla en conformidad con el Convenio. Tomando nota de que, según el informe de la misión de alto nivel, los interlocutores sociales estaban preocupados por la lentitud e irregularidad de la reforma legislativa, lo que conducía a la percepción de una falta de voluntad política para llevarla a cabo, la Comisión espera que la revisión de la legislación laboral se concluya sin más dilación en plena consulta con los interlocutores sociales.**

Ley de la Administración Pública. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Fiscal General está redactando actualmente un proyecto de ley que enmendaría la Ley de la Administración Pública sobre la base de principios acordados anteriormente por el Gabinete. La Comisión recuerda a este respecto que había tomado nota con anterioridad de que, de conformidad con el principio 4.4 de la Ley de la Administración Pública, el personal de la Comisión de la Administración Pública no tendrá el derecho de sindicarse, y de que había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para asegurar que, en virtud de las nuevas disposiciones de la Ley de la Administración Pública, el personal de la Comisión de la Administración Pública goce de los derechos garantizados en el Convenio. La

Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Secretaría de la Comisión de la Administración Pública en Zimbabwe es de naturaleza peculiar, y no sólo se encarga de toda la administración pública, sino también de las fuerzas uniformadas, de conformidad con la Constitución del país. La Comisión reitera que el Convenio no contiene una disposición que excluya de su ámbito de aplicación a ciertas categorías de funcionarios públicos. Por consiguiente, el derecho a constituir organizaciones profesionales y a afiliarse a ellas debería garantizarse a todos los funcionarios públicos, independientemente de que trabajen en la administración del Estado o de que sean funcionarios de organismos que prestan servicios públicos importantes. ***Por lo tanto, la Comisión reitera su solicitud anterior y confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que el personal de la Comisión de la Administración Pública goce de los derechos consagrados en el Convenio.***

La Comisión también había tomado nota de que, de conformidad con el principio 9.2, el registro de las asociaciones y sindicatos de la administración pública debe llevarse a cabo con el asesoramiento de la Comisión de la Administración Pública, y había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para asegurar que las disposiciones legislativas adoptadas sobre la base de este principio no impusieran en la práctica un requisito de «autorización previa» en violación del artículo 2 del Convenio, o concedieran a las autoridades la facultad discrecional para denegar el establecimiento de una organización. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la expresión «con la recomendación de» significa que la Comisión tendrá una función administrativa en la tramitación de solicitudes de registro, y no tendrá la facultad discrecional de denegar el registro. ***La Comisión espera que las disposiciones legislativas relativas al registro de organizaciones de funcionarios públicos sean suficientemente claras para no dar lugar a que la ley pueda interpretarse en el sentido de que conceda a las autoridades la facultad discrecional para denegar el registro de una organización.***

En lo referente al principio 11.3, que prevé que la definición de servicios esenciales incluya los servicios cuya interrupción «menoscabaría [...] todos los derechos consagrados en la Constitución», la Comisión había observado que dicha limitación general al derecho de huelga podría utilizarse de tal manera que se restringiera el ejercicio legítimo del derecho de huelga, y había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para asegurar que la disposición legislativa pertinente no contuviera la referencia excesivamente amplia a «todos los derechos consagrados en la Constitución» en la definición de servicios esenciales, a fin de asegurar que los trabajadores gozaran de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la definición de servicios esenciales contenida en la Ley de Enmienda estará en consonancia con el Convenio y con la Constitución de Zimbabwe.

La Comisión había tomado nota anteriormente con preocupación de que, según la ZCTU, el proceso de armonización de la Ley sobre la Administración Pública no incluía a los interlocutores sociales representados en el TNF. La Comisión observa que, en su última observación, la ZCTU afirma que el Gobierno sigue desdeñando a los interlocutores sociales en lo que respecta a la enmienda de la Ley sobre la Administración Pública. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se celebraron consultas en una reunión tripartita celebrada en Pandahri, en 2014, la cual contó con la asistencia de la ZCTU, y de que en 2017 se llevaron a cabo otras consultas en el Consejo Nacional de Negociación Paritaria (NJNC). El Gobierno asegura asimismo que las consultas tripartitas continuarán una vez el Fiscal General haya producido el primer proyecto de ley. ***La Comisión espera que el proceso de revisión de la Ley sobre la Administración Pública se lleve a cabo en plena consulta con los interlocutores sociales.***

Ley de Servicios de Salud. La Comisión toma nota de la indicación de la ZCTU de que la Ley de Servicios de Salud requiere reformas, ya que prácticamente duplica la Ley sobre la Administración Pública, en particular en lo que respecta a los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, y de que, entre 2010 y 2014, el TNF alcanzó un acuerdo sobre la necesidad de armonizar las disposiciones de la Ley con los convenios y con la Constitución. ***Tomando nota de la alegación de la ZCTU de que se ha excluido a los interlocutores sociales en el proceso, la Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre las medidas tomadas o contempladas, en consulta con los interlocutores sociales, acerca de la reforma de la Ley de Servicios de Salud.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto y el 1.º de septiembre de 2018, respectivamente, así como de la respuesta del Gobierno a las observaciones del ZCTU. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Internacional de la Educación (IE) y de la Asociación de Docentes de Zimbabwe (ZIMTA), recibidas el 1.º de octubre de 2018, en relación con las cuestiones que plantea la Comisión a continuación.

La Comisión toma nota del informe de la Misión de Alto Nivel de la Oficina, que tuvo lugar en febrero de 2017, en seguimiento de las conclusiones de la 105.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativas a la aplicación por Zimbabwe del Convenio y a la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta de 2009.

Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta (queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)

Reforma y armonización de la legislación del trabajo

La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en la armonización de la legislación del trabajo y de la administración pública con la Constitución nacional y el Convenio.

Ley del Trabajo. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno, de acuerdo con los interlocutores sociales, había dado inicio a la enmienda de la Ley del Trabajo, a través de los principios adoptados por el Foro de Negociación Tripartita (TNF), el 1.º de septiembre de 2016, que apuntan a armonizar la ley con la Constitución y el Convenio en base a los comentarios de los órganos de control de la OIT y a abordar las preocupaciones planteadas por el ZCTU y la CSI, en 2014 y 2015, sobre la discriminación antisindical en el país.

La Comisión recuerda, en particular, los siguientes principios adoptados por el TNF:

- el principio 2 (negociación colectiva) prevé la modificación de los artículos 25, 79 y 89 de la Ley del Trabajo, así como del artículo 14 de la Ley del Trabajo (enmienda núm. 5), a fin de que los convenios colectivos no dependan de la aprobación del Ministerio con el pretexto de que el Convenio es o se ha convertido en «... infundado o abusivo» o «contrario al interés público»;
- el principio 4 (acción laboral colectiva) se refiere, entre otros asuntos, a la necesidad de que exista una legislación inequívoca para la protección de los trabajadores y sus representantes frente a la discriminación antisindical.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en seguimiento de la adopción de los principios de reforma de la Ley del Trabajo por parte del Gabinete, en diciembre de 2016, el Gobierno acordó, con los interlocutores sociales, la contratación de un consultor para acelerar el proceso de redacción del proyecto de ley. Sin embargo, al terminar el consultor su trabajo, el proyecto no fue aceptado por los mandantes tripartitos. Posteriormente, tras celebrarse algunas reuniones consultivas en 2017 y 2018, con miras a discutir la redacción de los proyectos de ley presentados por el Fiscal General, se finaliza en la actualidad la redacción final del proyecto de enmienda de la Ley del Trabajo, que se presentará al Gabinete y luego al Parlamento. La Comisión toma nota con **preocupación** del alegato del ZCTU, según el cual: i) la redacción del proyecto de enmienda de la Ley del Trabajo realizada por la Fiscalía General ignoró deliberadamente las observaciones de la Comisión, a pesar de los recordatorios del ZCTU y de la necesidad de dar efecto a los principios acordados, y ii) el proyecto no incluye ninguna disposición que establezca claramente la protección de los trabajadores y de sus representantes contra la discriminación antisindical.

Ley de la Administración Pública. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en armonizar la legislación del trabajo y de la administración pública con la Constitución y el Convenio. La Comisión tomó nota con anterioridad con preocupación de que, según el ZCTU, el proceso de armonización de la Ley de la Administración Pública no incluye a los interlocutores sociales representados en el TNF. La Comisión observa que, en sus últimas observaciones, el ZCTU, la IE y la ZIMTA afirman que el Gobierno sigue haciendo caso omiso de los interlocutores sociales respecto de la enmienda de la Ley de la Administración Pública y que el incumplimiento de proceder a cambios legislativos perjudica a los empleados de la administración pública, dado que, tanto la Ley de la Administración Pública como la Ley de los Servicios de Salud, no reconocen el derecho a la negociación colectiva, excepto para las consultas en las que el empleador tiene una ventaja en la adopción de decisiones. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los principios para enmendar la Ley de la Administración Pública fueron aprobados por el TNF en Pandari, en 2014, y se celebraron nuevas consultas en el Consejo Nacional de Negociación Conjunta (NJNC). El Gobierno indica que la Fiscalía General se encuentra en el proceso de redacción del proyecto de ley y que se prevé que los interlocutores sociales sean consultados una vez que el Fiscal General haya elaborado el primer proyecto.

Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno de que valora la preocupación por el retraso de la finalización de la reforma y armonización de la Ley del Trabajo, y de que se puso término a la redacción final del proyecto de enmienda de la Ley del Trabajo tomando en consideración todos los comentarios y las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, la Comisión toma nota con **preocupación** de que, a pesar de sus numerosas solicitudes, algunas de las cuales son anteriores a la comisión de encuesta de 2009, no existen progresos concretos en la enmienda, tanto de la Ley del Trabajo como de la Ley de la Administración Pública, para armonizarlas con el Convenio. A este respecto, la Comisión observa que la Misión de Alto Nivel señaló en su informe que los interlocutores sociales manifestaron su preocupación porque la reforma legislativa fue lenta y desordenada, dando lugar a la percepción de una falta de voluntad política para llevarla a cabo. **A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que dedique todos los esfuerzos necesarios para garantizar que se realice el proceso de revisión de la legislación del trabajo y de la administración pública, con miras a garantizar su conformidad con el Convenio, en plena consulta con los interlocutores sociales y avanzar sin más demora. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.**

Artículo 4 del Convenio. Fomento de la negociación colectiva. La Comisión toma nota con **preocupación** de la indicación del ZCTU, según la cual el artículo 56, 2), de la Ley sobre Zonas Económicas Especiales, recientemente promulgada, no reconoce el derecho de negociación colectiva y otorga poderes a la autoridad de las zonas económicas

especiales y al ministro para determinar las condiciones del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que la Misión de Alto Nivel concluyó en su informe que la Ley sobre Zonas Económicas Especiales sigue refiriéndose a las condiciones de empleo como determinadas por el Ministerio y la autoridad, sin mencionar la aportación de los interlocutores sociales, ni la negociación colectiva (artículo 56 de la ley). **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar la legislación, en consulta con los interlocutores sociales, para armonizarla con el Convenio y que comunique información sobre toda evolución a este respecto.**

Aplicación del Convenio en la práctica

Artículo 1. Adecuada protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido al Gobierno que comunicara información detallada sobre su compromiso con el ZCTU en relación con los casos de presunta discriminación antisindical, recopilados por el ZCTU. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en diciembre de 2016, colaboró con el ZCTU, lo que dio lugar posteriormente a la resolución de la mayoría de los mismos. Algunos de los casos no pudieron ser localizados debido a una insuficiente información. El Gobierno indica asimismo que, con la asistencia de la OIT, se encuentra en el proceso de crear un sistema electrónico de gestión de casos que ayudará en el seguimiento de los casos de conflictos laborales, especialmente de aquéllos relacionados con la discriminación antisindical. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre toda evolución a este respecto.**

La Comisión toma nota con **preocupación** del alegato de la CSI de una extendida discriminación antisindical en el sector de la construcción, en el que varios afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Oficios Afines de Zimbabwe (ZCATWU) habrían sido víctimas de agresiones y de acoso por su afiliación sindical, especialmente en las empresas multinacionales y en las empresas de propiedad extranjera, habiéndose denegado a los representantes del ZCATWU el acceso a las instalaciones de las empresas. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto y espera que estos graves alegatos sean objeto de investigaciones adecuadas y se los persiga enérgicamente.**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 11** (Islas Cook, Islas Salomón); el **Convenio núm. 87** (Argelia, Botswana, Congo, República Democrática del Congo, Dominica, El Salvador, Eritrea, España, Eswatini, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Gambia, Granada, Haití, Islas Salomón, Jamaica, Kirguistán, Kiribati, Libia, Malawi, México, Mozambique, Países Bajos: Aruba, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Montserrat, Rumania, Rwanda, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Suiza, Suriname, Tayikistán, Timor-Leste, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Vanuatu); el **Convenio núm. 98** (Barbados, Brasil, Chad, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Eswatini, Filipinas, Irlanda, Islas Salomón, Kirguistán, Libia, Malawi, Mozambique, Reino Unido, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Bermudas, Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido: Montserrat, Rumania, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suriname, Tayikistán, Timor-Leste, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela); el **Convenio núm. 135** (Dominica); el **Convenio núm. 141** (India); el **Convenio núm. 151** (Países Bajos: Curazao); el **Convenio núm. 154** (Belice, Kirguistán, Santa Lucía).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 87** (Países Bajos: Curazao); el **Convenio núm. 141** (Belice).

Trabajo forzoso

Alemania

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1956)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. Trabajo obligatorio de los reclusos en talleres de administración privada. Durante algunos años, la Comisión ha señalado a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar medidas apropiadas para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio, asegurando que se requiera el consentimiento libre e informado para el trabajo de los reclusos en talleres de administración privada en las cárceles estatales, y que las condiciones de trabajo de estos reclusos se aproximen a una relación de trabajo libre. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 41, 3), de la Ley sobre Ejecución de Sentencias, de 13 de marzo de 1976, el empleo en un taller administrado por una empresa privada dependerá del consentimiento del recluso. Sin embargo, el requisito de consentimiento previsto en el artículo 41, 3), fue suspendido por la «Segunda ley para mejorar la estructura presupuestaria», de 22 de diciembre de 1981, y ha seguido siendo letra muerta desde entonces.

La Comisión tomó nota asimismo de que, desde 2006, la legislación sobre la ejecución penal pasó a ser competencia de los estados federados (*Länder*). De los 13 *Länder* en los que se habían adoptado disposiciones legales a este respecto, cuatro han adoptado leyes sobre ejecución penal que ya no prevén el deber de trabajar de los reclusos (Brandemburgo, Renania-Palatinado, Sarre y Sajonia). En 12 *Länder* sigue en vigor la obligación general de que los reclusos trabajen (ya sea en virtud de la Ley sobre las Cárceles Federales, o en virtud de las leyes de ejecución penal adoptadas recientemente). Además, salvo en el caso de tres *Länder*, sigue existiendo la posibilidad de asignar reclusos para trabajar en talleres administrados por empresas privadas. Según las estadísticas proporcionadas para 2013, el 62,5 por ciento del número promedio total de reclusos estaba ocupado en período de formación, y el 21,36 de ellos trabajaba en talleres de empresarios. El Gobierno indicó que hasta entonces había sido imposible ofrecer un empleo a todos los reclusos que querían trabajar. La Comisión tomó nota asimismo de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Alemania (BDA), según las cuales seguía habiendo un déficit de puestos de trabajo en las cárceles, por lo que las autoridades penitenciarias habían acogido favorablemente los trabajos puestos a disposición por las entidades privadas. No se obligaba a los reclusos a trabajar, ya que había menos posibilidades de empleo que reclusos que querían trabajar.

La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, los 16 *Länder* han adoptado sus propias disposiciones legales relativas a la ejecución de las sanciones penales, incluido el trabajo desempeñado por reclusos al cumplir sus sentencias. Con la salvedad de los cuatro *Länder* mencionados en los comentarios anteriores de la Comisión, las disposiciones legales pertinentes de los *Länder* restantes prevén una obligación general de trabajar para los prisioneros condenados. Además, la legislación de todos los *Länder*, salvo Hamburgo, contempla la posibilidad de asignar a los prisioneros trabajo en «talleres de empresarios» dentro de la institución penitenciaria. El Gobierno destaca que, si bien el personal de las empresas privadas puede proporcionar instrucciones relacionadas con el trabajo, incumbe a la autoridad de ejecución penal la responsabilidad de la supervisión de los reclusos y todas las decisiones relativas al trato dado a los mismos. Reitera que el trabajo asignado a los reclusos como consecuencia de un dictamen en un tribunal judicial es fundamental para la integración y forma parte de los planes de reinserción social. El Gobierno señala asimismo que los reclusos pueden encontrarse en una «relación de trabajo libre», en la que se aseguren unas condiciones de trabajo apropiadas, incluida la remuneración. Esta relación de trabajo puede continuar tras la puesta en libertad de los reclusos de que se trate.

La Comisión toma nota igualmente de la información detallada de cada *Land* proporcionada por el Gobierno a este respecto. En Bremen, el deber de trabajar sólo se considera necesario durante el proceso de diagnóstico para determinar el plan de cumplimiento de la condena de un recluso, tomando en consideración otras medidas de rehabilitación y reinserción social. Además, cuando se formula una recomendación de empleo tras el proceso de diagnóstico, el recluso de que se trate debe formular una solicitud de empleo, indicando los lugares de trabajo deseados. Sin embargo, la Comisión toma nota de que se puede asignar a los reclusos un trabajo en talleres de administración privada con su consentimiento formal de conformidad con las disposiciones legales pertinentes en los otros *Länder*, a saber, Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia. En 2017, una serie de reclusos trabajaron en talleres de empresarios (oscilando entre el 5,5 por ciento en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el 37,27 por ciento en Baja Sajonia), si bien a algunos se les brindó la oportunidad de trabajar en el marco de una relación de trabajo libre o de trabajar por cuenta propia (oscilando entre el 0,66 en Baviera y el 8,92 por ciento en Baden-Württemberg). La Comisión toma nota asimismo de que, en Hamburgo, aunque no hay «talleres de empresarios» administrados por empresas privadas dentro de las instalaciones penitenciarias, el 14,84 por ciento de los reclusos trabaja fuera de dichas instalaciones. La Comisión observa que no queda claro si las empresas privadas han participado en este tipo de organización del trabajo fuera de la cárcel. Además, la Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por algunos *Länder*, como Berlín y Hesse, se paga a los reclusos entre 9,87 euros y 16,44 euros al día, y se les aplica igualmente las normas de seguridad y salud en el trabajo.

La Comisión considera que, en virtud del *artículo 2, 2)*, del Convenio, el trabajo obligatorio de los reclusos está excluido del ámbito de aplicación del Convenio, a condición de que «se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas» y de que el individuo en cuestión «no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o empresas jurídicas de carácter privado». Estas dos condiciones son igualmente importantes y se aplican de manera acumulativa: el hecho de que el recluso esté en todo momento bajo la supervisión y el control de una autoridad pública no exime al Gobierno de cumplir la segunda condición, a saber, que la persona no sea cedida o puesta a disposición de empresas privadas. Si no se observa cualquiera de estas dos disposiciones, el trabajo obligatorio impuesto en estas circunstancias a las personas condenadas está prohibido en virtud del *artículo 1, 1)*, del Convenio. La Comisión recuerda una vez más que ya ha considerado que el trabajo realizado por reclusos para empresas privadas puede considerarse compatible con el requisito del Convenio, como el trabajo realizado por reclusos en el marco de una «relación de trabajo libre», tal como indica el Gobierno. En tales circunstancias, los reclusos en cuestión se ofrecen *voluntariamente*, sin ser objeto de presión o de amenaza de ninguna sanción, dando su consentimiento libre, formal e informado para trabajar para empresas privadas. Además, al tratarse del indicador más fiable de la voluntariedad del trabajo realizado en el contexto penitenciario, deberán asegurarse unas condiciones de trabajo que se aproximen a una relación de trabajo libre, incluidos los niveles de los salarios (dejando margen para descuentos y cesiones), el alcance de la seguridad social, y la aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo (véanse los párrafos 278, 279 y 291 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales). ***Al tiempo que toma nota de que se brinda a algunos reclusos oportunidades para trabajar en el marco de una relación de trabajo libre, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto en la legislación como en la práctica, los reclusos puedan trabajar para empresas privadas dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias únicamente con su consentimiento libre, formal e informado, y que dicho consentimiento sea autenticado por unas condiciones de trabajo que se aproximen a una relación de trabajo libre. La Comisión pide asimismo al Gobierno que continúe suministrando información sobre el número de reclusos que trabajan en talleres de empresarios dentro o fuera de las instalaciones penitenciarias, y sobre los que trabajan en el marco de una relación de trabajo libre o por cuenta propia. Pide asimismo al Gobierno que siga proporcionando información sobre el nivel de remuneración concedido a estos reclusos y sobre sus condiciones de trabajo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argelia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1962)

Artículo 2, 1), del Convenio. Servicio civil. Desde hace algunos años la Comisión señala a la atención del Gobierno la falta de conformidad con el Convenio de los artículos 32, 33, 34 y 38 de la ley núm. 84-10, de 11 de febrero de 1984, relativa al servicio civil, modificada por las leyes de 1986 y 2006, que permiten imponer a las personas que hayan recibido una enseñanza o una formación de grado superior en los sectores o especializaciones profesionales que se consideren prioritarios para el desarrollo económico y social, un servicio de una duración de uno a cuatro años antes de que puedan ejercer una actividad profesional u obtener un empleo. La lista de las especializaciones profesionales en cuestión se limitó en un primer momento a las de medicina, farmacia y cirugía dental pero ahora no afecta más que a los médicos especialistas en salud pública a fin de responder a la necesidad de prestar la atención médica indispensable a la población de las regiones aisladas. El servicio civil también puede efectuarse en establecimientos del sector privado de la salud (artículo 2 de la ordenanza núm. 06-06 de 15 de julio de 2006). El Gobierno señaló anteriormente que el servicio civil constituye la aportación de las personas que están sujetas a la obligación de participar en el desarrollo económico, social, y cultural del país. Se trata de un deber nacional y moral de los especialistas en medicina respecto de las poblaciones instaladas en las regiones del gran sur, del sur y de las altas mesetas. Estas personas disfrutaban de un régimen de indemnizaciones atractivo que oscila entre el 100 y el 150 por ciento de la remuneración principal percibida, así como de otras ventajas en vista de las cuales muchos médicos especialistas se ofrecen como voluntarios para ejercer la profesión en estas regiones.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que los médicos especialistas velan por la protección de la salud de las poblaciones de estos enclaves, una misión que puede ser equiparable a situaciones de fuerza mayor. El Gobierno añadió que la cuestión del servicio civil fue examinada durante el foro nacional sobre salud que reunió, en junio de 2014, a los actores e interlocutores sociales en materia de sanidad pública. La Comisión observó que, en virtud de los artículos 32 y 38 de la ley núm. 84-10 de 11 de febrero de 1984, la negativa a cumplir la obligación de prestar servicio civil y la dimisión de la persona sujeta a esta obligación sin motivo válido entraña la prohibición de ejercer una actividad por cuenta propia, de establecerse como comerciante o artesano o de participar como promotor en una inversión económica de carácter privado, incurriéndose en una infracción que podrá ser sancionada con arreglo al artículo 243 del Código Penal. De igual modo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la ley, todo empleador privado está obligado, antes de proceder a una contratación, a asegurarse de que el candidato al trabajo no tiene pendiente el servicio civil o lo ha cumplido o que ha presentado los documentos que lo acrediten. Además, todo empleador privado que emplea a sabiendas a un ciudadano que haya eludido el servicio civil podrá ser sancionado con penas de reclusión o con una multa. Así, la Comisión ha observado que si bien las personas sujetas al servicio civil gozan de condiciones de trabajo

(remuneración, antigüedad, promoción, jubilación, etc.) equiparables a las de los trabajadores regulares del sector público, prestan este servicio bajo la amenaza de ser castigados, en caso de negarse a ello, con la imposibilidad de acceder a cualquier otra actividad profesional independiente y a cualquier otro empleo en el sector privado. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para derogar o enmendar la ley relativa al servicio civil.

En consecuencia, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. La Comisión recuerda que el Convenio define el «trabajo forzoso u obligatorio» como trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Remitiéndose a su Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, la Comisión señala que las actividades relacionadas con el servicio civil obligatorio y otras actividades no militares ejercidas en el marco del servicio nacional deberían limitarse a los casos de fuerza mayor o ser cumplidas únicamente por voluntarios. En cuanto al servicio obligatorio en relación con la formación recibida que se aplica en algunos casos a quienes se han graduado en una serie limitada de profesiones, especialmente a los jóvenes médicos, dentistas y farmacéuticos, a los que se puede pedir durante un período determinado que ejerzan su profesión en un puesto al que los destinan las autoridades, la Comisión señaló que, cuando la ejecución de estas obligaciones del servicio se asegure bajo la amenaza de una pena, puede tener una incidencia en la observancia de los Convenios relativos al trabajo forzoso (párrafos 94 y 95). De esta forma, el hecho de imponer a los médicos especialistas la obligación de ejercer su actividad durante un período de entre uno y cuatro años en regiones alejadas y sancionando toda negativa con una pena que consiste en la incapacidad para ejercer toda actividad independiente, las disposiciones de la ley núm. 84-10 de 11 de febrero de 1984, relativa al servicio civil es incompatible con el Convenio. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para derogar o enmendar la ley núm. 84-10 de 11 de febrero de 1984 relativa al servicio civil, a fin de garantizar su conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas para suprimir el carácter obligatorio del servicio civil y las sanciones conexas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1969)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como sanción por expresar opiniones políticas o manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Ley relativa a las asociaciones. Desde hace algunos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno las disposiciones de la ley núm. 12-06 relativa a las asociaciones (12 de enero de 2012). Asimismo, indicó que, en virtud del artículo 39 de dicha ley, la asociación puede ser objeto de una suspensión de actividades o de una disolución «en caso de injerencia en los asuntos internos del país o de vulneración de la soberanía nacional» y que, según el artículo 46, «todo afiliado a una asociación o dirigente de una asociación que aún no esté registrada o autorizada, o haya sido suspendida o disuelta, que continúe actuando en su nombre», puede ser castigado con una multa o una pena de prisión de entre tres y seis meses. La Comisión señaló que, con base en las disposiciones antes citadas de la ley núm. 12-06, pueden imponerse penas de prisión y, por lo tanto, también trabajo penitenciario a las personas que al expresar ciertas opiniones políticas o manifestar una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido no han respetado las limitaciones al derecho de asociación previstas por la ley.

La Comisión toma nota de las detalladas explicaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria sobre el procedimiento de disolución de asociaciones. Toma nota de que el Gobierno indica que en el artículo 46 de la ley núm. 12-06 se han previsto sanciones a título preventivo a fin de disuadir a toda persona que pudiera desear participar en asociaciones que no tengan existencia legal o que hayan sido objeto de suspensión o hayan sido disueltas. También señala que la denegación de la declaración constitutiva de una asociación cuyo expediente de creación no está en conformidad con la ley no priva a sus miembros fundadores de sus derechos incluido el derecho a realizar reuniones pacíficas, para lo cual tienen que realizar una simple declaración ante la autoridad administrativa competente. La Comisión toma nota además de que en su informe de 2017 «Recopilación sobre Argelia», el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) observó que después de la adopción de la ley relativa a las asociaciones núm. 12-06 (12 de enero de 2012) las organizaciones de la sociedad civil habían estado sometidas a importantes limitaciones. Esta ley da a las autoridades gran discrecionalidad a la hora de denegar el registro de una asociación (documento A/HRC/WG.6/27/DZA/2, párrafo 27). Remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que el Convenio prohíbe el uso de trabajo obligatorio como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Entre las diversas actividades que no deben ser objeto de una sanción que conlleve trabajo penitenciario obligatorio figuran los derechos de asociación y reunión mediante los cuales los ciudadanos intenten lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, las cuales también pueden verse afectadas por las medidas de coerción política (párrafo 302). ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los artículos 39 y 46 de la ley núm. 12-06, de 12 de enero de 2012, relativa a las asociaciones no puedan ser utilizados para sancionar a personas que, a través del ejercicio del derecho de asociación, expresan opiniones políticas o se oponen al orden político, social o económico establecido. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones antes mencionadas y que transmita copia de toda decisión judicial pertinente e indique la naturaleza de las infracciones detectadas y de las sanciones impuestas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) y de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), ambas de 1.º de septiembre de 2017, y de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), de 1.º y 6 de septiembre de 2017, así como de las respuestas del Gobierno.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La Comisión tomó nota con anterioridad de las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el marco jurídico e institucional de la lucha contra la trata de personas con fines de explotación en el trabajo y de explotación sexual e invitó al Gobierno a que insistiera en ese camino y a reforzar la coordinación entre los diferentes agentes que participan en la lucha contra la trata de personas, para asegurarse una mejor respuesta judicial y proteger mejor a las víctimas.

La Comisión toma nota de la indicación de la CTA Autónoma, según la cual, a pesar del fortalecimiento jurídico e institucional para combatir la trata de personas, en la práctica continúan las dificultades. Toma nota asimismo de que, según el informe de 2018 publicado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la mayor parte de las 563 denuncias de trata con fines de explotación laboral recibidas a través de la línea telefónica nacional de atención gratuita, en 2016 y 2017, se dirigieron a los sectores textil y agrícola (el 30 por ciento y el 28 por ciento de las denuncias recibidas, respectivamente).

a) *Explotación en el trabajo en el sector textil.* La Comisión toma nota de la indicación de la CTA Autónoma sobre la trata y la explotación laboral en talleres clandestinos, y más concretamente en un incendio de un taller clandestino que tuvo lugar en 2015 y que se saldó con la muerte de ocho trabajadores. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, el 30 de marzo de 2016, la Corte Penal condenó a las personas responsables del taller clandestino a trece años de prisión por trabajo esclavo. La Comisión toma nota asimismo, de que, según la CTA Autónoma, la Policía Federal fue informada de la existencia de más de 200 talleres clandestinos y, en 2015, se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires 1 153 inspecciones del trabajo, en edificios en los que se creía funcionaban talleres clandestinos. Se detectaron infracciones en 436 lugares habiéndose clausurado 286 sitios. Toma nota asimismo de un estudio sobre la situación de los talleres textiles clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, publicado en diciembre de 2016 por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, presentado por el Gobierno, según el cual, más del 70 por ciento de los costureros están involucrados en talleres clandestinos, y el 70 por ciento de las víctimas de informalidad, trata y explotación laboral en talleres textiles clandestinos son trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en su respuesta a las observaciones formuladas por la CTA Autónoma, según la cual se impartieron actividades de formación a los inspectores del trabajo para ayudarlos a mejorar la identificación de las posibles víctimas de trata en situaciones de trabajo forzoso y se elaboró un formulario específico que ha de anexarse a los informes de inspección, en base a los indicadores de la fuerza de trabajo de la OIT. El Gobierno añade que se realizaron varias actividades de sensibilización sobre los talleres clandestinos, en colaboración con la OIT, para los inspectores del trabajo entre 2014 y 2017, poniendo un foco específico en 2017, en los talleres textiles clandestinos, lo que dio lugar a inspecciones de 70 talleres clandestinos, siete de los cuales fueron clausurados.

b) *Explotación laboral en el sector agrícola.* La Comisión toma nota de la indicación de la CTA Autónoma, según la cual los trabajadores agrícolas están especialmente expuestos a la trata de personas, como consecuencia del elevado porcentaje de informalidad y de los numerosos casos de trabajo forzoso que se identificaron en este sector. La CTA Autónoma añade que, como resultado de la puesta en marcha del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) y las unidades móviles de registro, que ayudaron en el registro de los trabajadores agrícolas de las zonas alejadas, se identificó a más de 15 000 presuntas víctimas de trata. Sin embargo, la Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por la CTA Autónoma acerca de la disolución del RENATEA, en 2016, que fue reemplazada por el anterior Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), a partir del 1.º de enero de 2017. Según la CTA Autónoma, si bien se realizaron algunos progresos con el RENATEA, no hubo logros positivos en relación con las inspecciones del trabajo del sector agrícola en 2017.

Al tiempo que toma nota de ciertas medidas tomadas por el Gobierno, la Comisión le pide que intensifique sus esfuerzos para detectar efectivamente y combatir la trata de personas, especialmente en los sectores textil y agrícola, y que continúe comunicando información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto. También solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de víctimas de trata de personas que fueron detectadas en estos sectores, desglosado por género y nacionalidad.

Marco jurídico e institucional. La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción de la ley núm. 26842, de 2012, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que simplificó la definición de trata de personas contenida en el artículo 145 bis y ter del Código Penal, y que prevé la creación del Consejo federal para la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, así como de su Comité ejecutivo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Consejo federal, que se compone de representantes de las autoridades nacionales y provinciales, la Procuraduría general, la sociedad civil y el

comité ejecutivo establecido en 2013, se reunieron por primera vez el día 23 de junio de 2016, manteniendo con posterioridad reuniones regulares. Toma nota de que se establecieron, dentro del Consejo federal, cinco comisiones de trabajo, para afrontar específicamente la prevención; la investigación y las sanciones; la protección y la asistencia a las víctimas; el informe anual, y la supervisión de la unidad de bienes incautados y decomisados. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción del primer Programa nacional bianual para la lucha contra la trata y explotación de personas para 2018-2020, elaborado por el Comité ejecutivo del Consejo federal, en colaboración con la OIT, así como con otros agentes pertinentes, incluidas las autoridades judiciales y la PROTEX. Toma nota de que el Programa nacional bianual se centra en la prevención, en la asistencia a las víctimas, en los procesamientos y en la coordinación y el fortalecimiento del marco institucional. Toma nota, en particular, de que varias acciones se dirigen a promover las campañas de sensibilización y la capacitación de los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad federales, para identificar y prevenir la trata; mejorar el acceso de las víctimas a la reparación, y mejorar la compilación y la difusión de información estadística sobre la trata de personas a través de la elaboración de un registro nacional de datos. Toma nota de que, en abril de 2018, el Gobierno elaboró campañas de sensibilización pública sobre la trata de personas, en colaboración con la OIT. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las acciones emprendidas en el marco del Programa nacional para la lucha contra la trata y explotación de personas para 2018-2020, así como sobre toda evaluación realizada sobre su impacto en la eliminación de la trata de personas. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre las actividades emprendidas en el marco del consejo federal para la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, incluidas las cinco comisiones de trabajo y el Comité ejecutivo.**

a) *Acción del Ministerio Público.* La Comisión tomó nota con anterioridad del papel fundamental que desempeña el Ministerio Público Fiscal en la represión de la trata de personas, así como de la creación de su unidad especial PROTEX, en 2013. La Comisión toma nota de la indicación según la cual la PROTEX puso en marcha varias acciones para combatir la trata de personas. Recibe favorablemente la creación de un sistema sincronizado de denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas, dentro del Ministerio Público Fiscal, que prevé la ley núm. 26842, de 2012, así como la adopción de la resolución núm. 1280/2015, que aprueba un único protocolo para una mejor acción de coordinación (protocolo único de articulación) sobre el tratamiento de las denuncias relacionadas con la trata de personas. La Comisión toma nota de que, según el informe de 2018 de la PROTEX, se recibieron 4 296 denuncias, a través de la mencionada línea telefónica nacional gratuita, en 2016 y 2017, el 86,3 por ciento de las cuales se derivaron a las autoridades judiciales. Toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el 75 por ciento de las denuncias recibidas, se procesó dentro de las 48 horas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, si bien casi el 40 por ciento de las denuncias recibidas a través de la línea telefónica estaban relacionadas con la explotación sexual, sólo el 13 por ciento se refirió a la explotación laboral que podría resultar de la misma, en opinión de la PROTEX, de una falta de sensibilización sobre ambos indicadores de situaciones de trabajo forzoso y de la disponibilidad de la línea telefónica de atención gratuita para los trabajadores afectados por esas situaciones. La Comisión toma nota de que la CTA Autónoma también destaca que el bajo porcentaje de casos de trata para la explotación laboral, es una señal clara del aislamiento y de la dificultad práctica que afrontan esas víctimas en el momento de presentar las denuncias. **La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de investigaciones y de procesamientos iniciados en los casos de trata y explotación laboral, incluido por parte de la PROTEX, así como sobre toda medida adoptada en el marco del único protocolo para mejorar la acción de coordinación relativa al tratamiento de las denuncias relacionadas con la trata de personas. También solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada para detectar y combatir las causas profundas del bajo número de denuncias presentadas en los casos de trata para la explotación laboral.**

b) *Acción de las fuerzas policiales y alegatos de corrupción.* La Comisión instó anteriormente al Gobierno a que emprendiera investigaciones y garantizara las imposiciones de sanciones adecuadas y disuasorias en los casos de corrupción y de complicidad de los agentes de las fuerzas del orden en los delitos de trata de personas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, como consecuencia del carácter anónimo de la línea telefónica nacional de atención gratuita, establecida en 2012, se dio un elevado porcentaje de casos de corrupción y de complicidad de los agentes de las fuerzas del orden en los delitos de trata de personas. El Gobierno añade que el 10 por ciento de las denuncias recibidas por la PROTEX, se refieren a esos delitos y que, en algunos casos, se impusieron penas de prisión. La Comisión toma nota de que, según su informe de 2018, la PROTEX recibió 339 denuncias relacionadas con casos de complicidad de los agentes de las fuerzas del orden, en los delitos de trata de personas, entre 2016 y 2017. **La Comisión alienta al Gobierno a que siga garantizando que se investiguen debidamente los casos de corrupción y de complicidad de los agentes de las fuerzas del orden, y que se impongan sanciones adecuadas y disuasorias. Solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre el número de casos registrados y de procedimientos judiciales incoados, así como sobre las sanciones impuestas.**

c) *Acción de la inspección del trabajo.* La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que siguiera adoptando medidas para garantizar que la inspección del trabajo dispusiera del personal y de los recursos materiales adecuados para llevar a cabo sus acciones de manera eficaz en el conjunto del territorio. La Comisión toma debida nota de la adopción de la Ley núm. 26940, de 26 de mayo de 2014, de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que crea un registro público de empleadores (REPSAL), que procesa sanciones laborales en este sentido, incluso en los casos de trata de personas; y prevé la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar,

investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la UEFTI, que fue creada mediante la resolución núm. 470/2016, de 21 de julio de 2016, encomendó la vigilancia por vídeo de las inspecciones del trabajo, sobre todo en las zonas alejadas. Toma nota asimismo de la referencia del Gobierno a la adquisición de dos vehículos utilitarios adicionales para la inspección del trabajo, que se compone en la actualidad de cuatro unidades móviles de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, según la información estadística presentada por el Gobierno, de 2014 a 2017, se formó a 1 558 inspectores del trabajo y a otros agentes públicos sobre la detección de los casos de trata de personas en situaciones de trabajo forzoso. La Comisión toma nota de la indicación de la CTA Autónoma sobre la falta de recursos suficientes para los servicios de inspección del trabajo, para poder combatir efectivamente la trata de personas. ***Recordando que la inspección del trabajo es un elemento esencial en la lucha contra la trata de personas para la explotación laboral, la Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas para reforzar la capacidad de acción de los servicios de inspección del trabajo, en particular en sectores en los que es bien conocida la incidencia del trabajo forzoso, como los sectores textil y agrícola, y en las correspondientes zonas geográficas. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre el funcionamiento del REPSAL, así como sobre las actividades emprendidas por la UEFTI.***

Aplicación de sanciones penales eficaces. La Comisión constató anteriormente que el número total de condenas sigue siendo bastante bajo en comparación con el número de víctimas a las que se prestó asistencia y el número de personas detenidas y esperaba que la nueva definición de trata de personas contenida en la ley núm. 26842, contribuyera a mejorar la respuesta judicial a esos delitos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se pronunciaron 225 sentencias judiciales por delitos de trata de personas, 42 de las cuales se relacionaron con la explotación laboral (el 18,6 por ciento) y con la explotación sexual (el 81,4 por ciento). Toma nota de que el 87 por ciento de las sentencias judiciales fueron condenatorias, lo que representa un número de 439 culpables condenados y de 1 037 víctimas. ***La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia a las víctimas de trata y garantizar que todas las personas que participan en la trata de personas estén sujetas a acciones penales y que se apliquen en la práctica sanciones disuasorias. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de procedimientos judiciales incoados y de condenas, así como la naturaleza de las sanciones impuestas.***

Asistencia a las víctimas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata está compuesto de un equipo multidisciplinar que contribuye a la identificación de las víctimas y les presta asistencia psicológica, médica y jurídica. Toma nota de que, según la información estadística aportada por el Gobierno de 2008 a 2017, se prestó asistencia a 11 760 víctimas, como consecuencia del programa nacional. La Comisión toma nota asimismo de que el primer Plan de acción nacional en derechos humanos (2017-2020) establece, como objetivo explícito, garantizar la promoción y protección de derechos humanos a las víctimas de trata, a través de la puesta en funcionamiento de oficinas regionales del programa nacional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, si bien la ley núm. 26364, de 2008, prevé que las multas impuestas y el producto de los bienes confiscados, una vez constatada la comisión de los delitos previstos en ella, deben asignarse a los programas de asistencia de las víctimas, se ponen en marcha en la actualidad procedimientos de asignación para transferir los importes del dinero incautado. Toma nota de que la CTA Autónoma destaca la falta de programas de reinserción social y ocupacional adecuados a las víctimas de trata y la CGT-RA resalta los importantes déficits en la asistencia prestada a las víctimas, y solicita la elaboración de un protocolo dirigido a la restauración efectiva de los derechos de las víctimas. La Comisión toma nota asimismo de que en sus últimas observaciones finales el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación ante la falta de medidas de asistencia a medio y largo plazo a las víctimas de trata (documento E/C.12/ARG/CO/4, de 1.º de noviembre de 2018, párrafo 41). ***La Comisión solicita al Gobierno que siga reforzando los recursos disponibles al Programa nacional de asistencia y apoyo a las víctimas de trata de personas, y que comunique información sobre el establecimiento de cualquier oficina regional del programa nacional. Solicita también al Gobierno que comunique información sobre la puesta en funcionamiento de los procedimientos dirigidos a la asignación de las multas impuestas y los procedimientos de activos incautados como consecuencia de la identificación de los delitos de trata de personas a los programas de asistencia a las víctimas, y sobre la manera en que se utilizan estos fondos. Por último, solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de víctimas que fueron identificadas y se beneficiaron de esa asistencia.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1932)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. ***Privatización de las prisiones y trabajo penitenciario.*** Durante varios años, la Comisión ha estado señalando a la atención del Gobierno que la privatización del trabajo penitenciario va más allá de las condiciones expresamente previstas en el artículo 2, 2), c), del Convenio para excluir el trabajo penitenciario obligatorio de su ámbito. Tomó nota de que el Gobierno reiteraba que la legislación y la práctica se

encuentran en conformidad con el Convenio, habida cuenta de que los reclusos encarcelados en establecimientos de administración privada o que trabajan para empresas privadas están bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que el sector privado no tiene derecho a determinar por sí mismo las condiciones de trabajo de los reclusos puesto que son las autoridades públicas las que establecen estas condiciones.

1. *Trabajo penitenciario en prisiones privadas.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no existen prisiones administradas por empresas privadas en las jurisdicciones del *territorio septentrional* y el *territorio de la capital de Australia*. La Comisión también tomó nota de que en *Nueva Gales del Sur* el trabajo de los reclusos en los centros correccionales es de carácter voluntario.

En lo que respecta a *Queensland*, la Comisión observó que los reclusos están obligados a trabajar en virtud del artículo 66 de la Ley de Servicios Correccionales de 2006, que prevé que el director ejecutivo puede, a través de una orden escrita, trasladar a un prisionero de un establecimiento penitenciario a un campo de trabajo y que el recluso deberá realizar un servicio comunitario conforme a las instrucciones del director ejecutivo.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que, con arreglo a la Ley de Servicios Correccionales de 2006, en *Queensland* no se utiliza ni se puede utilizar ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio. Asimismo, toma nota de que el Gobierno ha declarado repetidamente que los reclusos no están obligados a participar en actividades de trabajo autorizadas. Según indica el Gobierno, las actividades laborales en las que participan los reclusos de los establecimientos penitenciarios forman parte de su proceso de rehabilitación y reintegración y, con frecuencia, éstos piden permiso para participar en dichas actividades. La Comisión también toma nota de que, según el informe anual de 2016-2017 del Departamento de Justicia y Fiscal General, el trabajo llevado a cabo por reclusos no se limita a los servicios comunitarios realizados en los campos de trabajo, que están regulados por los artículos 66 y 67 de la Ley de Servicios Correccionales de 2006, sino que también incluye el empleo en industrias comerciales en las que cobran una tarifa por el trabajo realizado y en empresas de servicios a fin de mantener la autosuficiencia del sistema penitenciario, así como otros trabajos no remunerados (págs. 24 y 122). El informe de los servicios gubernamentales de Australia, 2018, pone de relieve que, en 2016-2017, el 30 por ciento de los reclusos aptos trabajaba en industrias comerciales, mientras que el 38,3 por ciento trabajaba en empresas de servicios de *Queensland* (capítulo 8, cuadro 8A.11).

En lo que respecta a *Australia meridional*, la Comisión tomó nota de que, de conformidad con el artículo 29, 1), de la Ley de Servicios Correccionales de 1982, el trabajo penitenciario es obligatorio tanto dentro como fuera de las instituciones penitenciarias. Sin embargo, el Gobierno indicó que los reclusos de la prisión Mt Gambier (la única prisión privada de *Australia meridional*) solicitan por escrito participar en programas de trabajo y que los reclusos del centro de detención previo a la excarcelación de Adelaida solicitan voluntariamente trabajar fuera de las instalaciones penitenciarias para empresas privadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que no se ha modificado la legislación a este respecto.

En cuanto a *Victoria*, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que los reclusos que trabajan para centros penitenciarios públicos y privados disfrutan de los mismos derechos y prestaciones, y que en ambos casos los reclusos deben dar su consentimiento para trabajar. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la manera en que se proporciona dicho consentimiento. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información nueva a este respecto.

En lo que respecta a *Australia occidental*, la Comisión toma nota de que el trabajo penitenciario es obligatorio con arreglo al artículo 95, 4), de la Ley de Prisiones, lo cual ha sido confirmado por la Comisión de Relaciones Laborales de Australia occidental en el caso *Ireland v. Commissioner Corrective Services* (2009, WAIRC 00123, párrafo 62) y por la decisión del Tribunal de Apelación de Relaciones Laborales en el mismo caso (2009, WASCA 162), refiriéndose asimismo a la regla 43 del reglamento penitenciario y al artículo 69 de la Ley de Prisiones. El Gobierno indicó que esta disposición no se ha aplicado y que los reclusos no son forzados a participar en programas de trabajo, ni siquiera en las prisiones administradas por empresas privadas. El Gobierno también señaló que en *Australia occidental* hay seis campos de trabajo penitenciario en los cuales el trabajo es voluntario y que son los reclusos los que, a través de una solicitud por escrito, tramitan su participación en esos campos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que no se han realizado cambios en la legislación que regula las actividades laborales de los reclusos en *Australia occidental*. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que en junio de 2017 se promulgó el Procedimiento de prisiones 302 – campos de trabajo, con arreglo a cuyo artículo 6.5.3 los reclusos pueden solicitar participar en campos de trabajo, mientras que su artículo 7.1 prevé que el superintendente deberá garantizar que los reclusos que pueden ser aptos para el trabajo en los campos pero no han solicitado trabajar sean evaluados de forma adecuada para su inclusión.

A este respecto, la Comisión considera que el Convenio no sólo aborda las situaciones en las que los reclusos son «empleados» por empresas privadas o las situaciones en las que tienen que proporcionar servicios a una empresa privada sino también las situaciones en las que los reclusos son contratados por empresas privadas o puestos a disposición de éstas pero siguen estando sujetos a la autoridad y control de la administración penitenciaria. La Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno que el trabajo de los reclusos para empresas privadas sólo es compatible con el Convenio si no entraña trabajo obligatorio. Con este fin, se requiere el consentimiento formal, libre e informado de las personas interesadas, además de otras salvaguardias que cubran los elementos esenciales de una relación de trabajo, tales como los

salarios, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social. *En vista de las consideraciones expuestas, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica de Queensland, Australia meridional, Victoria y Australia occidental (donde no se prevé que el consentimiento para trabajar pueda exigirse) a fin de garantizar que se exija el consentimiento formal, libre e informado de los reclusos para trabajar en prisiones privadas y para realizar cualquier trabajo para empresas privadas, tanto dentro como fuera de las instituciones penitenciarias. La Comisión también pide al Gobierno que: i) transmita información sobre los procedimientos y condiciones de trabajo de los reclusos empleados en otras industrias penitenciarias de Queensland, incluidas tanto las industrias comerciales como las empresas de servicios, y proporcione copia de todas las disposiciones legislativas a este respecto; ii) enmiende el artículo 29, 1), de la Ley de Servicios Correccionales de 1982 de Australia meridional a fin de ponerlo de conformidad con los requisitos del Convenio y la práctica indicada; iii) indique la manera en que se obtiene en la práctica el consentimiento informado de los presos para trabajar para empresas privadas de Victoria y qué medidas se adoptan para garantizar que dicho consentimiento se otorga formal y libremente, y iv) aclare la manera en la que en Australia occidental se incluye a los reclusos en los campos de trabajo cuando no lo han solicitado expresamente.*

2. *Trabajo de los reclusos para empresas privadas. Tasmania.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en *Tasmania* no hay prisiones de gestión privada. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que, según el artículo 33 de la Ley Penitenciaria de *Tasmania* de 1997, un recluso puede ser enviado a trabajar dentro o fuera de las instalaciones penitenciarias. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, con arreglo al cuadro 1 (parte 2.26) de la ley, la negativa a cumplir con esta orden se considerará una infracción penitenciaria. A este respecto, el Gobierno señaló que en *Tasmania* los presos pueden trabajar para empresas privadas si así lo decide el director de prisiones y que se les consulta en relación con el tipo de trabajo que quieren realizar y deben dar su consentimiento libre para realizar dicho trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que en *Tasmania* los reclusos trabajan para empresas privadas de forma voluntaria como parte de su plan de gestión de la condena, lo cual tiene por objeto ayudarles a encontrar un empleo cuando sean liberados. Como salvaguardia adicional, el recluso debe pedir una licencia externa con arreglo a la Ley Penitenciaria de 1997 (artículos 41 y 42). El Gobierno indica que no se exige que los reclusos realicen ese trabajo y que no se imponen sanciones a los que no lo realizan. Además, los reclusos que trabajan para empresas privadas reciben el salario establecido pertinente y están sujetos a las mismas condiciones de trabajo que todos los otros empleados. *Si bien toma debida nota de que el Gobierno señala que en la práctica los presos no son forzados a trabajar para empresas privadas, la Comisión le pide que enmiende el artículo 33 y el cuadro 1 (parte 2.26) de la Ley Penitenciaria de 1997, a fin de ponerlos en conformidad con la práctica indicada.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belarús

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1956)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la detallada discusión que tuvo lugar en la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, celebrada en mayo y junio de 2018, sobre la aplicación del Convenio por Belarús. La Comisión toma nota de la observación del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), recibida el 31 de agosto de 2018, y de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. Trabajo obligatorio impuesto por la legislación nacional a determinadas categorías de trabajadores y de personas. 1. Sanciones económicas impuestas a desempleados. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la aprobación del decreto presidencial núm. 3, de 2 de abril de 2015, sobre la prevención de la dependencia de la ayuda social, por el que se exige que los ciudadanos de Belarús, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que residan de manera permanente en Belarús que no hayan trabajado al menos 183 días el año anterior, y que, por tanto, no hayan pagado los impuestos sobre el trabajo por el mismo período paguen una tasa especial para financiar los gastos del Gobierno. El impago o el pago parcial de tal contribución está sujeto a una sanción administrativa bajo la forma de una multa o de una detención administrativa, que incluye un servicio comunitario obligatorio (artículos 1, 4 y 14 del decreto). El Gobierno indicó que el decreto núm. 3 se suspendió siguiendo una instrucción presidencial, y que se está elaborando un nuevo marco conceptual para modificarlo, en virtud del cual se desplaza el centro de atención de las medidas fiscales al incentivo y la promoción del empleo y a la reducción del empleo ilegal. Se esperaba que para el 1.º de octubre de 2017 se hubiera finalizado un proyecto de texto legislativo al respecto. Asimismo, la Comisión constató que el Gobierno había ofrecido garantías a la misión consultiva técnica de la OIT a Belarús, que tuvo lugar en junio de 2017, de que durante el proceso de elaboración de la versión modificada del decreto presidencial núm. 3 se llevarían a cabo consultas públicas, incluyendo a los interlocutores sociales. Además, la Comisión

tomó nota de la observación del BKDP, según la cual el Gobierno, en la nueva versión propuesta, pretende aplicar de nuevo el principio según el cual «si alguien no trabaja tiene la obligación de pagar por los servicios».

La Comisión toma nota de que, en las conclusiones que adoptó en junio de 2018, la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que proporcionara a la Comisión de Expertos información en la que se confirmara la modificación del decreto presidencial núm. 3, de 2015, por el decreto presidencial núm. 1, de 2018, así como datos sobre la ejecución de este nuevo marco en la ley y la práctica.

La Comisión toma nota de que, según las observaciones del BKDP, el 25 de enero de 2018 se aprobó el decreto presidencial núm. 1, de 2018, que modifica el decreto presidencial núm. 3, de 2015. En consecuencia, se canceló el denominado «impuesto al parasitismo» y se introdujo un nuevo tipo de sanción económica. Con arreglo al párrafo 5 de la versión modificada del decreto, los ciudadanos que están en condiciones de trabajar y están inscritos en las listas de desempleo han de pagar por los servicios públicos a un precio que garantice el reembolso íntegro de los costos justificables desde el punto de vista económico de su prestación. Las comisiones permanentes (que se crearon para coordinar la aplicación del decreto núm. 3 en su versión modificada) elaboran la lista y las autoridades locales la aprueban. Este mecanismo tiene por objeto estimular a los ciudadanos desempleados aptos a encontrar un empleo legal. El BKDP afirma que se hace de los ciudadanos desempleados aptos una definición amplia para abarcar, por ejemplo, a las amas de casa que crían a uno o dos niños de más de 7 años. Los ciudadanos que trabajan en el extranjero también tienen que solicitar a la comisión permanente que les excluya de la lista aportando documentación que certifique que trabajan fuera del país. El BKDP hace hincapié en que las decisiones de las comisiones permanentes no se pueden recurrir.

La Comisión toma nota también de que, según las observaciones de la CSI, la versión revisada del decreto es similar a la versión anterior, que establece que todo ciudadano apto tendrá que pagar por una serie de servicios sociales y públicos que normalmente están muy subvencionados por el Estado. Según el Ministerio de Trabajo, el nuevo marco establecido por el decreto núm. 3, de 2015, en su versión modificada en 2018, afecta a unas 250 000 personas.

La Comisión toma nota de la información que proporciona el Gobierno en su memoria, según la cual el decreto presidencial núm. 1, de 2018, entró en vigor el 27 de enero de 2018 e introdujo cambios sustantivos en el decreto núm. 3, que de hecho se volvió a redactar con otro nombre, «decreto presidencial núm. 3, de 2 de abril de 2015, sobre la promoción del empleo». El decreto deroga disposiciones relativas al pago por parte de los ciudadanos desempleados que están en condiciones de trabajar del impuesto para financiar el gasto público y disposiciones que imponen una responsabilidad administrativa por el impago del impuesto. El principal objetivo del nuevo decreto es crear las condiciones óptimas para fomentar el empleo a escala local, entre otras medidas, reforzando el mercado de trabajo, apoyando la iniciativa empresarial, estimulando el empleo por cuenta propia, y trabajando de forma individualizada con los ciudadanos que están desempleados o participan en la economía sumergida, pero desean ganarse la vida por medios legales y están en condiciones de hacerlo. Con este fin, se crearán 146 comisiones permanentes, que dependerán de comités ejecutivos municipales o administraciones locales, para coordinar las iniciativas de fomento del empleo con arreglo al decreto núm. 3. Estas comisiones permanentes incluirán a miembros de los parlamentos, especialistas de las autoridades responsables en materia de protección social y empleo, del sector de la vivienda y de los servicios públicos, de órganos encargados de asuntos internos y de otras divisiones de la administración local, así como representantes de asociaciones de voluntariado. En el primer semestre de 2018, 94 100 personas recibieron asistencia en materia de empleo y 3 800 personas realizaron formaciones relacionadas con profesiones y oficios de los que hay una gran demanda.

Asimismo, el Gobierno indica que, de conformidad con el párrafo 5 del decreto, los ciudadanos desempleados que están en condiciones de trabajar tendrán que pagar por diversos servicios públicos a un precio más elevado que el que garantiza el reembolso íntegro de todos los costos asociados de forma razonable con su prestación. Con el fin de establecer procedimientos para otorgar la condición de «desempleado», la decisión del Consejo de Ministros núm. 239, de 31 de marzo de 2018, aprueba el reglamento para la clasificación de los ciudadanos en edad de trabajar y aptos como desempleados, y la creación y el uso de una base de datos sobre esas personas. Además, la decisión del Consejo de Ministros núm. 314, de 14 de abril de 2018, determina los tipos de servicio que se cobrarán a un precio más elevado, como el agua caliente (en vigor a partir del 1.º de enero de 2019), así como el suministro de gas y la calefacción (en vigor a partir del 1.º de octubre de 2019). El Gobierno indica que la decisión de si los ciudadanos tendrán que pagar por esos servicios sobre la base de recuperación de los costos o no recaerá en las comisiones permanentes, tras la realización de una tarea preliminar con esos individuos con vistas a ofrecerles asistencia en materia de empleo y determinar si están viviendo en condiciones difíciles. *Al tiempo que toma nota de que el decreto núm. 3, de 2015, se modificó en 2018 con el fin de fomentar el empleo legal, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación del decreto en la práctica se ciña al fomento del empleo, y que no se impongan sanciones excesivas a personas que ya viven en condiciones difíciles para obligarlas a trabajar. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación del decreto en la práctica, incluyendo las diferencias de precio de unos servicios públicos a otros, así como las categorías y el número de personas que figuran en la lista como desempleados aptos y que tienen que pagar por los servicios públicos un precio más elevado. Por último, la Comisión solicita que el Gobierno entregue un ejemplar de la reglamentación pertinente por la que se aplica el decreto núm. 3, de 2015, en su versión modificada en 2018.*

2. *Personas internadas en «centros médicos de trabajo».* La Comisión tomó nota con anterioridad de la aprobación de la ley núm. 104-3, de 4 de enero de 2010, sobre los procedimientos y modalidades del traslado de

ciudadanos a centros médicos de trabajo y las condiciones de su permanencia, que dispone que los ciudadanos que padecen alcoholismo crónico o toxicomanía o hacen un uso indebido de sustancias psicotrópicas y que se enfrentan a cargos administrativos por haber cometido faltas administrativas bajo la influencia de alcohol, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias tóxicas, pueden ser derivados a centros médicos de trabajo como consecuencia de una petición presentada ante un tribunal de justicia por el jefe de asuntos internos (artículos 4 a 7 de la ley). Esas personas son internadas en centros médicos de trabajo durante un período comprendido entre doce y dieciocho meses y tienen la obligación de trabajar. El Gobierno advirtió que no todos los que padecen esos problemas pueden ser internados en los centros, sino únicamente los que han alterado el orden público reiteradamente (tres o más veces en el curso de un año) y han sido encontrados en un estado de intoxicación causado por alcohol, narcóticos u otras sustancias tóxicas. Además, existe la condición adicional de que, tras cometer esas infracciones y haber recibido la advertencia de que se las internará en los centros antes mencionados en caso de reincidencia, esas personas cometan infracciones administrativas por violaciones similares dentro del año en que se formuló la mencionada advertencia. El Gobierno también indicó que las personas internadas en los centros médicos de trabajo deben someterse a un examen médico para determinar su nivel de adicción y posteriormente reciben servicios de readaptación médica y social, que incluyen tratamiento médico y psicológico, desarrollo personal y autoeducación, así como asistencia para restablecer y mantener sus relaciones familiares. Además, se considera que el empleo es una de las herramientas más importantes para lograr la reintegración social. A estos efectos, en los centros médicos de trabajo se proporciona orientación, formación y readaptación profesionales, así como formación para el desarrollo de las competencias profesionales. Asimismo, el Gobierno señaló que se coloca a las personas en cuestión en el empleo teniendo en consideración su edad, su capacidad para trabajar, su estado de salud, sus competencias y sus calificaciones. Además, reciben una remuneración, y se les otorga vacaciones anuales y otros tipos de licencia de conformidad con la legislación laboral. Los tipos de trabajo llevados a cabo por esas personas incluyen labores en la industria maderera, trabajo agrícola y limpieza pública.

La Comisión toma nota de que, en las conclusiones que adoptó la Comisión de la Conferencia en junio de 2018, ésta solicitó al Gobierno que siguiera proporcionando información sobre la aplicación de la ley núm. 104-3 en la práctica, y que incluyera el número de personas a las que se interna en centros médicos y el tipo de trabajo obligatorio que forma parte de su rehabilitación.

La Comisión toma nota de que, según las observaciones del BKDP, los centros de rehabilitación y terapia ocupacional (denominados «centros médicos de trabajo») no pueden considerarse centros médicos donde se prestan servicios de rehabilitación. Según el BKDP, los defensores de los derechos humanos consideran el sistema de los centros médicos de trabajo como centros de detención o encarcelamiento al margen del procedimiento judicial, sin conexión con la perpetración de un delito. Los cuidados médicos se ofrecen únicamente con carácter voluntario, mientras que el trabajo se impone como obligación. En ocasiones, como medida disciplinaria, se encierra a una persona que se haya negado a trabajar en una sala a tal efecto durante 10 días. Asimismo, la Comisión constata que, con arreglo a las observaciones de la CSI, la ley núm. 104-3 sigue aplicándose en la práctica, lo que se traduce en que hay entre 4 000 y 5 000 personas que sufren algún tipo de adicción y están expuestas al trabajo forzoso. En el artículo 16 de la ley núm. 104-3 se permite el uso de la fuerza para obligar a los internos a realizar una tarea. Además, tanto el BKDP como la CSI indican que las comisiones permanentes, que se crearon para coordinar la aplicación del decreto núm. 3, de 2015, en su versión modificada en 2018, tienen derecho a tomar decisiones sobre la necesidad de internar a ciudadanos cuyo comportamiento es antisocial en estos centros médicos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las personas que han alterado el orden público reiteradamente (en tres o más veces en el curso de un año) por estar ebrios o bajo la influencia de estupefacientes u otras sustancias tóxicas pueden ser internadas durante doce meses en centros médicos de trabajo por orden judicial. Asimismo, un tribunal puede decidir prolongar o acortar la estancia de una persona por un período de hasta seis meses. Además, se puede internar a las personas que tienen que reembolsar el gasto en que incurre el Estado por el mantenimiento de sus hijos bajo la tutela de éste, y a las personas que han incurrido en faltas disciplinarias en el trabajo dos veces en un mismo año por haber ingerido alcohol u otras sustancias tóxicas y a las que se ha advertido que se las podía internar en un centro médico de trabajo, a pesar de lo cual han cometido de nuevo una falta en el año en el que han recibido dicha advertencia. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en 2017 se internó a 6 273 personas en centros médicos de trabajo (frente a 8 081 en 2016). En 2017 el promedio mensual de personas a las que se asignó trabajo en centros médicos fue de 4 812. Además, 169 personas dejaron de trabajar en estos centros sin autorización y 13 personas se negaron a trabajar. El Gobierno también indica que, desde la entrada en vigor de la ley núm. 104-3, en 2010, se ha ofrecido la posibilidad de formarse, readaptarse y desarrollar sus competencias profesionales a 2 945 personas en los centros médicos de trabajo, y 876 personas se han beneficiado de programas de formación profesional continua y formación en el empleo. ***En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 104-3, incluyendo el número de personas a las que se interna en los centros médicos de trabajo por orden judicial tras una falta repetida de alteración del orden público. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre otras personas a las que se puede internar en esos centros, incluidas aquellas que tienen que reembolsar el gasto estatal por el cuidado de sus hijos y las que han cometido reiteradamente faltas disciplinarias en el trabajo, indicando si son internados en virtud de una sentencia judicial, así como el número de personas de que se trate.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belice

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 1, c) y d), del Convenio. Sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas. A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos, en virtud del cual puede imponerse una pena de reclusión (que implica, en virtud del artículo 66 del reglamento penitenciario, la obligación de trabajar) a toda persona empleada por el Gobierno, por una autoridad municipal o por un empleador a cargo del suministro de electricidad, agua, servicios ferroviarios, servicios de salud, sanitarios o médicos, o servicios de comunicaciones o cualquier otro servicio que pueda ser considerado servicio público por proclamación del Gobernador, en caso de que tal persona rescinda voluntaria y premeditadamente el contrato de trabajo, sabiendo o pudiendo suponer que la probable consecuencia sea ocasionar un daño, un peligro o un grave inconveniente para la comunidad. La Comisión también ha tomado nota de que en el artículo 2 de la ley núm. 92, sobre la solución de conflictos en los servicios esenciales, instrumento legal núm. 92, de 1981, se declara que son servicios esenciales el servicio nacional de lucha contra incendios, el servicio postal, los servicios monetarios y financieros (bancos, tesoro público, autoridad monetaria), los aeropuertos (aviación civil y servicios de seguridad en los aeropuertos) y la autoridad portuaria (pilotos y servicios de seguridad); y por el instrumento legal núm. 51, de 1988, se declara servicio esencial el régimen de la seguridad social administrado por el Servicio de Seguridad Social.

La Comisión ha recordado al respecto que la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas, es incompatible con el Convenio. Ha tomado nota de que el artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos, se refiere, no sólo al daño o al peligro, sino también, subsidiariamente, al grave inconveniente para la comunidad y se aplica no sólo a los servicios esenciales, sino también a otros servicios, como la mayoría de los empleos gubernamentales o de la autoridad municipal y la mayoría de los servicios bancarios, postales y de transportes.

El Gobierno indica en su memoria que una de las principales tareas de la recientemente restablecida Junta Consultiva del Trabajo es la revisión de la legislación nacional, y que la Junta ha reagrupado la legislación que se revisa en seis temas, incluidos los derechos sindicales. El Gobierno también declara que, si bien no se ha aún incluido la legislación sobre los sindicatos, la intención es revisarla, a efectos de ponerla de conformidad con los Convenios internacionales del trabajo, y que se tomará definitivamente en consideración la preocupación de la Comisión en torno al artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos. *Al tomar debida nota de esta información, la Comisión confía en que se complete en un futuro próximo el proceso de revisión de la Ley de Sindicatos, de modo de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por una participación pacífica en huelgas.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2005)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción de la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas (ley núm. 263 de 31 de julio de 2012) y del decreto de aplicación (decreto núm. 1486 de 6 de febrero de 2013), que tipifican la trata de personas y que prevén sanciones.

La Comisión toma nota de la adopción de la Política plurinacional contra la trata y tráfico de personas para 2013-2017 y del Plan nacional de acción para 2015-2019. La Comisión toma nota asimismo de la indicación general del Gobierno en su memoria, según la cual, en el marco del Plan multisectorial de lucha contra la trata y tráfico de personas para 2016-2020, se están implementando algunas acciones de prevención, control y sanción de la trata y tráfico de personas, al tiempo que se brinda apoyo y aliento a la reintegración de las víctimas. La Comisión toma nota de que, como destaca el plan nacional de acción, Bolivia es principalmente un país de origen para la explotación sexual y el trabajo forzoso en el país, sobre todo en las industrias de la caña de azúcar y de la recolección de castañas, en el trabajo doméstico, en la minería y en la mendicidad. Un número significativo de bolivianos también son objeto de trata para su explotación laboral en el extranjero, sobre todo en Argentina, Brasil y Chile, en talleres clandestinos, en la agricultura, en las fábricas textiles y en el trabajo doméstico. En ese sentido, la Comisión se refiere a su última observación relativa a la aplicación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), en la que tomó nota de que, según los estudios publicados por la Organización de Estados Americanos (OEA), muchas víctimas de trata son mujeres bolivianas trasladadas a otros países como trabajadoras domésticas y a veces se convierten en víctimas de explotación laboral. Toma nota de que, en septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo departamental de La Paz, indicó que, en los últimos años, el número de víctimas de trata aumentó en el 92,2 por ciento, con un 70 por ciento de niñas y mujeres jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 22 años. Según su informe global sobre trata de personas, de 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indicó que, entre 2012 y 2015, 1 038 personas fueron procesadas por trata, pero sólo 15 de éstas fueron condenadas. La Comisión toma nota de que, en sus últimos informes anuales, el Ministerio Público indicó que, en 2016, se registraron 701 casos de trata, y en 2017, 563 casos, pero que no se dispone de información sobre el número de personas condenadas o con resoluciones judiciales

dictadas al respecto. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus últimas observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por el elevado y creciente número de casos de trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños en las zonas fronterizas, así como de casos de trata interna de mujeres indígenas con fines de prostitución forzosa, especialmente en zonas en las que se están implementando importantes proyectos de desarrollo. La CEDAW recomendó que se realizara una evaluación de la situación de la trata en el Estado parte, que sirviera de referencia a las medidas orientadas a abordar la trata y a mejorar la compilación de los datos sobre la trata, desglosados por sexo, edad y etnia (documento CEDAW/C/BOL/5-6, 25 de julio de 2015, párrafos 20 y 21). La Comisión toma nota con **preocupación** del bajo número de condenas relativas a la trata de personas, a pesar del número significativo de casos que se llevaron a la justicia. **En consecuencia, insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que todas las personas que se dedican a la trata, sean objeto de procesamientos y que, en la práctica, se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. A este respecto, solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de procedimientos penales iniciados, de personas condenadas y de sanciones impuestas, en base a la Ley núm. 263 contra la Trata y Tráfico de Personas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para combatir de manera efectiva la trata de personas, incluso en lo que respecta a la sensibilización y a un mayor acceso a la justicia, en el marco del Plan nacional de acción para 2015-2020, y del plan multisectorial para 2016-2020. Por último, tomando nota de la declaración del Gobierno, según la cual se están implementando varias acciones para apoyar a las víctimas de trata, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para proteger a las víctimas de trata y para facilitar su acceso a una asistencia inmediata y a reparaciones, así como sobre el número de víctimas que fueron identificadas y se beneficiaron de esa asistencia.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Botswana

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1997)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota anteriormente de que pueden imponerse penas de prisión que conllevan trabajo penitenciario obligatorio de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Prisiones, cap. 21:03, de 1979, en virtud de los artículos 47 y 48 del Código Penal, a toda persona que imprima, elabore, importe, publique, venda, distribuya o reproduzca cualquier publicación prohibida por el Presidente «a su total criterio» por ser «contraria al interés público». Pueden imponerse condenas similares a tenor de lo dispuesto en el artículo 51, 1), c) y d), y 2), relativo a publicaciones sediciosas. También pueden imponerse penas de prisión en virtud de los artículos 66 a 68 del Código Penal a toda persona que dirija una sociedad ilegal, o que sea miembro de la misma o tome parte de cualquier manera en la actividad de aquélla, en particular una sociedad declarada ilegal por «atentar contra la paz y el orden». En este sentido, la Comisión observó que las disposiciones mencionadas anteriormente están redactadas en unos términos suficientemente generales como para prestarse a su aplicación como un medio de castigo por la expresión de opiniones y, en la medida en que su incumplimiento es penado con sanciones que conllevan trabajo forzoso, son incompatibles con el Convenio. Por lo tanto, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas adecuadas, con motivo de la revisión del Código Penal, para poner las disposiciones mencionadas anteriormente en conformidad con el Convenio.

La Comisión **lamenta** tomar nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual no se ha previsto ninguna enmienda al Código Penal. Recuerda una vez más que el *artículo 1, a)*, del Convenio prohíbe que se castigue con sanciones que conlleven trabajo forzoso, incluido trabajo penitenciario obligatorio, a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresen opiniones políticas o manifiesten oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. **La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten medidas apropiadas sin demora, tanto en la legislación como en la práctica, para asegurar que no puedan imponerse sanciones que conlleven trabajo forzoso por la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al régimen establecido, ya sea limitando el ámbito de aplicación de estas disposiciones a las situaciones de violencia, o revocando las sanciones que conlleven trabajo penitenciario obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 1, c). Castigo por infringir la disciplina del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 43, 1), a), de la Ley de Conflictos Laborales (núm. 15 de 2004) castigaba con pena de prisión que conllevaba trabajo penitenciario obligatorio cualquier incumplimiento deliberado de un contrato de trabajo por un trabajador que actúe por cuenta propia o en combinación con otros, si dicho incumplimiento afecta el funcionamiento de servicios esenciales. La Comisión observó que la lista de servicios esenciales especificada en el anexo a la Ley de Conflictos Laborales incluye servicios como el Banco de Botswana, los servicios ferroviarios, y los servicios de transporte y telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de todos estos servicios, que no parecían cumplir los criterios de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la lista de servicios esenciales será revisada por un grupo de trabajo que se ha establecido con este fin, en el marco del proceso en curso de revisión de la legislación laboral. La Comisión toma nota asimismo, remitiéndose a sus comentarios formulados en 2017 en relación con el Convenio sobre

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), de que la Ley de Conflictos Laborales se enmendó en 2016, en respuesta a la evolución de la situación y a las circunstancias específicas del país. Toma nota de que la lista de servicios esenciales se expandió así para incluir los servicios de enseñanza, los servicios veterinarios, y los servicios de selección, tallado y venta de diamantes. Remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 331), la Comisión señala que los servicios esenciales deberían entenderse en el sentido estricto del término, que son los servicios, cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad personal y la salud de toda o parte de la población, y observa que los servicios esenciales mencionados anteriormente no parecen cumplir los criterios esenciales en el sentido estricto del término. ***Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias, en el marco del proceso en curso de revisión de la legislación laboral, para asegurar que no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo de tal modo que afecte al funcionamiento de servicios esenciales que no cumplen los criterios de servicios esenciales en el sentido estricto del término. Pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados a este respecto.***

Burundi

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 30 de agosto de 2018.

Artículo 1, a), del Convenio. *Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como sanción por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la COSYBU en relación con los procedimientos judiciales entablados contra periodistas de radios privadas, las limitaciones de las manifestaciones libres e independientes y la detención de un defensor de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había mencionado la posibilidad de revisar el decreto ministerial núm. 100/325, de 15 de noviembre de 1963, por el que se organiza el servicio penitenciario, cuyo artículo 40 prevé la obligación de trabajar de los detenidos a los que se ha impuesto una condena, con objeto de excluir a los presos políticos de su campo de aplicación. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indicaba que dicho decreto fue derogado y reemplazado por la Ley núm. 1/026, de 22 de septiembre de 2003, sobre el Régimen Penitenciario. No obstante, la Comisión tomó nota de que según el artículo 25 de la ley núm. 1/026, el trabajo continúa siendo obligatorio para todos los reclusos. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para poner su legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que toma buena nota de todos estos comentarios pertinentes y se compromete a armonizar su legislación nacional con el Convenio. La Comisión toma nota de que el decreto ley núm. 1/6, de 8 de abril de 1981, por el que se reforma el Código Penal fue derogado por la ley núm. 1/05, de 22 de abril de 2009, por la que se revisa el Código Penal. La Comisión toma nota de que se pueden imponer penas de prisión (que conllevan trabajo penitenciario obligatorio) en circunstancias que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Convenio:

- artículo 600: será castigada por una pena de prisión de entre dos meses y tres años y con una multa de entre 50 000 y 100 000 francos, o sólo con una de esas dos sanciones, toda persona que, con fines de propaganda, distribuya, ponga en circulación o exponga a la vista del público panfletos, boletines o banderas de origen extranjero o que se inspiren en banderas extranjeras a fin de perjudicar el interés nacional. Será castigada con las mismas penas toda persona que guarde esos boletines o banderas con miras a su distribución, difusión o exposición con fines de propaganda;
- artículo 601: será castigado con una pena de prisión de entre uno y cinco años y con una multa de entre 50 000 y 200 000 francos, o sólo con una de esas dos sanciones, todo aquél que reciba, directa o indirectamente, de una persona u organización extranjera, en cualquier forma o a cualquier título, donativos, regalos, préstamos y otros beneficios destinados a empleados para, en su totalidad o en parte, realizar o costear en Burundi actividades o propaganda destinadas a perjudicar la integridad o la independencia del Estado o quebrar la fidelidad que los ciudadanos deben al Estado y a las instituciones de Burundi.

Además, la Comisión observa que en el informe de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (recopilación sobre Burundi), el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (el Relator) observó muchos casos en que defensores de los derechos humanos y periodistas habían sido asesinados, agredidos, obligados a exiliarse, arbitrariamente detenidos, privados de libertad, amenazados, acosados, estigmatizados o calumniados en los medios de comunicación. Asimismo, la Comisión observa que durante sus visitas a las 11 cárceles y las celdas de la policía en el país, la Oficina del ACNUDH comprobó el hacinamiento en ellas, resultado de las oleadas de detenciones de manifestantes opuestos a un nuevo mandato del Presidente, de miembros de la oposición y de la sociedad civil. Además, el Relator señaló que la Ley de Prensa, de 4 de junio de 2013, limitaba la libertad de expresión al establecer una amplia excepción al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes en casos relacionados con la seguridad nacional, el orden público, los secretos de defensa y la integridad física o mental de una o más personas. Según el Relator, la libertad de expresión seguía estando restringida, las

actividades de los medios de comunicación críticos con el Gobierno se habían suspendido y profesionales de los medios de comunicación independientes habían sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas (documento A/HRC/WG.6/BDI/2, párrafos 20, 32, 35 y 36).

La Comisión toma nota de esta información y expresa su **preocupación** por el hecho de que sigan en vigor disposiciones en la legislación (Código Penal y Ley de Prensa) que pueden utilizarse para limitar el ejercicio de la libertad de expresión de opiniones políticas o ideológicas (verbalmente, a través de la prensa o a través de otros medios de comunicación) y con arreglo a las cuales pueden imponerse sanciones que conllevan trabajo penitenciario obligatorio. A este respecto, la Comisión recuerda que el *artículo 1, a)*, del Convenio prohíbe castigar a las personas que, sin recurrir a la violencia, tienen o expresan determinadas opiniones políticas o manifiestan oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, imponiéndoles un trabajo, especialmente un trabajo penitenciario obligatorio. Señala que entre las diversas actividades que hay que proteger en virtud de esta disposición contra la imposición de sanciones que impliquen trabajo forzoso u obligatorio figuran las que se ejercen en el marco de la libertad de expresar opiniones políticas o ideológicas (libertad que puede ejercerse verbalmente y también por medio de la prensa y otros medios de comunicación) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). ***Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica, para garantizar que no puedan imponerse sanciones que conlleven trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden establecido, por ejemplo limitando claramente el campo de aplicación de estas disposiciones a las situaciones relacionadas con el recurso a la violencia o la incitación a la violencia, o suprimiendo las sanciones que conllevan trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camboya

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la observación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibida el 1.º de septiembre de 2018, y de la discusión detallada que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en mayo-junio de 2018, sobre la aplicación del Convenio por Camboya.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 68 de la Ley sobre Prisiones, de 2011, las sanciones de prisión conllevan una obligación de trabajar. La Comisión también tomó nota de que, con arreglo al artículo 42 de la Ley sobre Partidos Políticos, de 2017, varios delitos relacionados con la administración o la gestión de un partido político que ha sido disuelto, o cuyas actividades han sido suspendidas por un tribunal, o cuya inscripción en el registro ha sido denegada, se castigan con penas de prisión de hasta un año, que conllevan un trabajo forzoso. El Gobierno declaró que ningún partido político había sido disuelto por decisión de un tribunal.

La Comisión tomó nota asimismo de que, si bien los delitos de difamación pública e insultos (artículos 305-309), sólo se castigan con multas, en virtud del Código Penal de 2009, esas disposiciones han dado lugar en la práctica a la imposición de penas de prisión. Además, varios artículos del Código Penal de 2009, que prevén penas de prisión, pueden aún utilizarse en las situaciones comprendidas en el *artículo 1, a)*, del Convenio, incluidos: i) los artículos 494 y 495 sobre incitación a alterar la seguridad pública por medio de discursos, escritos, imágenes o cualquier comunicación audiovisual en público o para el público; ii) el artículo 522 sobre publicación de comentarios para presionar ilegalmente a las autoridades judiciales, y iii) el artículo 523 sobre la desacreditación de las decisiones judiciales. Además, se están redactando textos legislativos en materia de ciberdelincuencia.

Asimismo, la Comisión viene expresando, desde 2014, su profunda preocupación por las detenciones y los enjuiciamientos de miembros de los partidos de oposición, de representantes de ONG, afiliados sindicales y defensores de los derechos humanos, incluido el arresto y el enjuiciamiento de varios miembros destacados del Partido para el Rescate Nacional de Camboya (CNRP), en 2016 y 2017.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales la práctica de criminalizar la expresión de diferentes discursos y opiniones políticas e ideológicas está normalizada por el Gobierno, junto con una legislación que lo permite. En virtud del Código Penal, la aplicación de algunas disposiciones en la práctica puede situarse dentro del ámbito de aplicación del Convenio. Por ejemplo, el artículo 311 criminaliza la denuncia pública de hechos que se sabe son falsos, dirigidos a autoridades competentes, como jueces, oficiales de la policía judicial o un empleador; o una persona con poder para derivar la denuncia a la autoridad competente. Tal delito se castiga con una pena de prisión de entre un mes y un año, y con multas de 100 000 a 2 millones de ríeles camboyanos (KHR) (aproximadamente, de 24 dólares a 487 dólares de los Estados Unidos), en virtud del artículo 312. Además, el artículo 502 criminaliza el uso de palabras, gestos, escritos,

dibujos u objetos que menoscaben la dignidad de las personas. En particular, si el insulto se dirige a un funcionario público o a un titular de un puesto público elegido, el delito se castiga con una pena de prisión de uno a seis días y con multas de 1 000 a 100 000 KHR (aproximadamente, de 0,24 a 24 dólares de los Estados Unidos). Además, la enmienda a la Constitución, que se aprobó el 15 de febrero de 2018, socava más las libertades fundamentales en el país, junto con otros cambios en la legislación nacional, incluido el Código Penal. El nuevo delito de insulto al Rey, en virtud del artículo 445 del Código Penal enmendado, se castiga con hasta seis meses de prisión y con multas de hasta 10 millones de KHR (2 495 dólares de los Estados Unidos) por discursos, gestos, escritos, pinturas o reuniones públicas que afecten la dignidad del monarca. La CSI también indica que se detuvo a dos personas en virtud del artículo 445. El 14 de mayo de 2018, Khean Navy, el director de una escuela primaria de Kampong Thom, fue detenido por insultar al Rey, tras haber culpado al monarca de la disolución del CNRP, en 2017, y de la pérdida de la tierra de Khmer. El 21 de mayo de 2018, otra persona de Siem Reap fue acusada de compartir un post en Facebook que insultaba presuntamente al Rey.

La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2018, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara medidas, en la legislación y en la práctica, para garantizar que no pudieran imponerse sanciones que conllevaran un trabajo forzoso u obligatorio, en cumplimiento del Convenio, incluida la enmienda de la legislación vigente, que permite el trabajo forzoso. También instó al Gobierno a que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para abordar esta recomendación.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual la Ley sobre Prisiones, de 2011, fue adoptada de conformidad con una amplia gama de normas internacionales, y los presos deben realizar un trabajo con fines de educación, reforma, rehabilitación y reinserción en la sociedad. El Gobierno declara que el Convenio no puede interpretarse solo sin una referencia al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y que su aplicación no se llevará a cabo sin una agenda especial a favor de un grupo concreto. El Gobierno también indica que, en virtud de la legislación de Camboya, no existe ninguna sanción impuesta por la expresión pacífica de opiniones políticas, y no existen presos condenados por su expresión pacífica de opiniones políticas. En consecuencia, no se impone ningún castigo que conlleve un trabajo obligatorio, en las situaciones comprendidas en el *artículo 1* del Convenio. Con respecto a la incitación, el Gobierno indica asimismo que los artículos 494 y 495 del Código Penal sólo prevén sanciones de prisión (que conllevan un trabajo forzoso) por actos de incitación directa a la comisión de un delito o a la comisión de cualquier acto que perturbe gravemente la seguridad pública. El artículo 522 prevé penas de prisión por la publicación, antes de la decisión final del tribunal, de todo comentario dirigido a presionar al tribunal cuando se interponga una demanda, con el fin de ejercer una influencia en la decisión del tribunal. La finalidad de este artículo es garantizar la independencia judicial. De igual modo, el artículo 523 se dirige a proteger al país y sus instituciones del peligro ocasionado por actos de críticas, como se estipula en el mismo. Por último, el Gobierno, declara que se aportará a la Comisión una copia de la Ley sobre Delitos Informáticos, en cuanto se haya adoptado.

La Comisión toma nota de que, según un boletín informativo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 30 de abril de 2018, la principal oposición, el CNRP, fue disuelto en noviembre de 2017. El dirigente del CNRP disuelto, Kem Sokha, que fue detenido en septiembre de 2017, sigue en prisión acusado de traición, en relación con los comentarios que realizó en 2013 sobre su estrategia política básica para impugnar al Gobierno actual. Muchos otros afiliados y simpatizantes del CNRP también fueron encarcelados junto con exdirigentes de otros partidos políticos, incluidos el Nhek Bun Chhay del partido nacional unido Khmer y el Soun Sereyrotha del partido de poder Khmer.

La Comisión toma nota además de que el 11 de mayo de 2018, la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su decepción por la decisión del Tribunal de Apelaciones de Camboya, de 10 de mayo de 2018, de defender la condena de «insurrección» de 11 afiliados y simpatizantes del CNRP, que habían sido originariamente sentenciados el 21 de julio de 2015 a una pena de prisión de entre siete y veinte años, en relación con la violencia ocurrida durante una manifestación en el Parque de la Libertad de Phnom Penh, el 15 de julio de 2014. Declaró que no hubo pruebas, durante el juicio o la apelación, de vinculación de algunos de los 11 acusados con la violencia o con la acusación de «insurrección», definida en las leyes como «violencia colectiva que puede poner en peligro las instituciones del Reino o violar la integridad del territorio nacional». Ni los testimonios de las víctimas heridas ni las grabaciones de vídeo del incidente que se presentaron como pruebas, identificaron que algunos de los acusados hayan dado inicio, incitado u orientado actos de violencia. Además, la Comisión toma nota de que, el 20 de febrero de 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión manifestaron una gran preocupación por los cambios en la Constitución de Camboya, junto con otros cambios a la legislación nacional, que incluyen una disposición de lesa majestad en el Código Penal, que declara ilegales los insultos a la monarquía.

En este sentido, la Comisión considera que, si bien el Convenio se concibió para complementar el Convenio núm. 29, este último instrumento no incorpora, como cuestión de derecho, ninguna de las disposiciones del anterior. De este modo, la excepción respecto del trabajo penitenciario que prevé el artículo 2, 2), del Convenio núm. 29 «a los efectos del presente Convenio», no se aplica automáticamente al Convenio núm. 105. En consecuencia, con respecto a la excepción del trabajo penitenciario, si una persona tiene que realizar un trabajo penitenciario obligatorio por haber expresado opiniones políticas concretas, la situación está comprendida en el *artículo 1, a)*, del Convenio. En este sentido, la Comisión observa que, cuando se trata de exigir un trabajo penitenciario a delincuentes comunes condenados, por

ejemplo, por robo, secuestro, ataque con bomba o muchos otros delitos, el objetivo es su reeducación o reinserción social, y esa necesidad no se plantea cuando se trata de personas condenadas por sus opiniones (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 300).

En consecuencia, la Comisión *deplora* el encarcelamiento (que conlleva un trabajo penitenciario obligatorio) de dirigentes, afiliados y simpatizantes del CNRP, que se disolvió en noviembre de 2017, por sus opiniones políticas. También debe expresar su *profunda preocupación* por la adopción de enmiendas al Código Penal que criminalizan las críticas al Rey. La Comisión recuerda una vez más que la restricción a los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, guarda una relación con la aplicación del Convenio, si esas restricciones están reforzadas por sanciones que conlleven un trabajo penitenciario obligatorio. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las garantías jurídicas de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación y a la protección contra las detenciones arbitrarias constituyen una importante salvaguardia contra la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas, o como medio de coerción o de educación políticas (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 302). **En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que no puedan imponerse sanciones que conlleven un trabajo obligatorio, incluido un trabajo penitenciario obligatorio, por la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al sistema establecido, tanto en la legislación como en la práctica. En ese sentido, la Comisión solicita al Gobierno que garantice que se enmienden el artículo 42 de la Ley sobre Partidos Políticos, en su forma enmendada de 2017, y los artículos 494, 495, 522 y 523 del Código Penal de 2009, limitando claramente el campo de aplicación de estas disposiciones a situaciones vinculadas con el uso de la violencia o con la incitación a la violencia, o derogando las sanciones que conlleven un trabajo obligatorio. También solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código Penal no den lugar en la práctica a un castigo que conlleve un trabajo forzoso en las situaciones comprendidas en el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que transmita una copia de las enmiendas al Código Penal, de 2018, que criminalizan las críticas al Rey, y que comunique información sobre su aplicación en la práctica, incluido todo procesamiento, condena y sanción impuesta en este sentido. Por último, solicita al Gobierno que comunique información sobre todo proceso relativo a la adopción de la Ley sobre Ciberdelincuencia, y que transmita una copia en cuanto se haya adoptado. La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para armonizar plenamente su legislación y su práctica con el Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Trabajo de interés general impuesto en el marco del servicio militar obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación relativa al servicio militar obligatorio para ponerla en conformidad con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. La Comisión tomó nota de que de conformidad con el artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 que establece la reorganización de las fuerzas armadas, en el marco del servicio militar obligatorio, los llamados a filas que son aptos para el servicio se dividen en dos grupos: el primero, cuya importancia se fija cada año por decreto, se incorpora y se dedica al servicio activo; y, el segundo permanece a disposición de las autoridades militares durante dos años y pueden ser llamado a realizar trabajos de interés general por orden gubernamental. Ahora bien, para ser excluidos del campo de aplicación del Convenio y no ser considerados como trabajo forzoso, los trabajos o servicios que se exijan en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio deben tener un carácter puramente militar. El Gobierno indica en su memoria que adoptará las medidas necesarias para poner las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformidad con el Convenio. **La Comisión toma debida nota de esta información y espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza de 1991, que establece la reorganización de las fuerzas armadas, sean modificadas lo más rápidamente posible para garantizar que los trabajos impuestos en el marco del servicio militar obligatorio revistan un carácter puramente militar.**

Artículo 2, párrafo 2, c). Trabajo impuesto por una autoridad administrativa. Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14, de 13 de noviembre de 1959, por el que se autoriza al Gobierno a tomar medidas administrativas de alejamiento, internamiento o expulsión de las personas cuyos comportamientos son peligrosos para el orden y la seguridad públicos, y en virtud del cual las personas a las que se hubiese impuesto una condena penal que implique una prohibición de residencia podrán ser utilizadas para trabajos de interés público durante un tiempo cuya duración será fijada por decreto del Primer Ministro. Esta disposición permite a las autoridades administrativas imponer trabajo a las personas que son objeto de una medida de prohibición de residencia después de haber cumplido su condena. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que adoptará las medidas necesarias para modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14 de 1959 antes mencionada. **Teniendo en cuenta el hecho de que esta cuestión es objeto de los comentarios de la Comisión desde hace muchos años y que el Gobierno ya se ha referido en el pasado a un proyecto de derogación de ese texto, la Comisión confía en que en su próxima memoria indicará los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Colombia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 30 de agosto de 2017, de las observaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 31 de agosto de 2017, y de las observaciones conjuntas de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

La Comisión toma nota de la firma, en octubre de 2018, del Pacto por el Trabajo Decente en el cual el Gobierno, los empleadores y los trabajadores se comprometen, entre otras cosas, a contribuir con la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del compromiso de Colombia de luchar contra la trata de personas, en particular a través de la ley núm. 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la protección y asistencia de las víctimas de la misma; de la Estrategia nacional integral para la lucha contra la trata de personas, que cubre los aspectos de la prevención, la protección de las víctimas, la cooperación internacional y la investigación policial y judicial; de la acción del Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, y del establecimiento de unidades especializadas en la lucha contra la trata dentro de la policía nacional o del Ministerio del Interior. La Comisión alentó al Gobierno a continuar adoptando medidas para luchar contra el fenómeno complejo de la trata de personas, complejidad que se acentúa más aún por el hecho de que Colombia es un país tanto emisor, como de tránsito y de destino de la trata de personas, y de que muchas personas han sido desplazadas como consecuencia del conflicto armado interno.

La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para poner en práctica los cuatro componentes de la estrategia nacional. Toma nota a este respecto de que se ha adoptado una nueva estrategia, elaborada por el comité interinstitucional, para el período 2016-2018 (decreto núm. 1036 de 2016). Esta estrategia es el resultado de un proceso participativo en cuyo marco los diferentes actores implicados en la lucha contra la trata han podido realizar su contribución. La estrategia se organiza en torno a seis pilares transversales y a siete ejes de acción. El decreto núm. 1036 prevé asimismo la creación del Observatorio del delito de trata de personas, encargado de producir y recopilar datos fiables y actualizados sobre la trata que ayudarán a conocer el fenómeno de la trata de personas y a elaborar políticas más eficaces en este ámbito.

En lo que respecta en particular a la protección de las víctimas, la Comisión toma nota de la adopción del decreto núm. 1066 de 2015, uno de cuyos capítulos describe con detalle el tipo de protección y de asistencia que deben proporcionarse a las víctimas, y prevé los procedimientos y formalidades que deben establecer las autoridades a este respecto. Los programas de asistencia tienen dos etapas: la asistencia médica y psicológica inmediata y la asistencia a medio y largo plazo encaminada a ofrecer a las víctimas herramientas para su reinserción social. La asistencia se concede con independencia de que las víctimas hayan presentado una queja o no. En lo tocante a la investigación, el Gobierno describe la manera en que las diferentes unidades de la policía cooperan entre ellas y con la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con 26 fiscales y equipos especializados para llevar a cabo las investigaciones en materia de trata de personas. Además, el Gobierno suministra información sobre las diversas medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo para impedir y combatir las ofertas de trabajo fraudulentas que suelen constituir el motivo utilizado para que las víctimas caigan en la trata de personas con fines de explotación laboral (el funcionamiento de una línea telefónica que permita denunciar las violaciones, el análisis del *modus operandi* de los empleadores fraudulentos, la realización de campañas de sensibilización y de actividades de formación de los inspectores del trabajo). Además, la Comisión toma nota de que, en el marco de los ocho memorandos de entendimiento firmados entre Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú, se han organizado numerosas reuniones binacionales con miras a poner en práctica los memorandos de entendimiento, a elaborar planes de acción binacionales de lucha contra la trata, y a intercambiar buenas prácticas. La Comisión observa asimismo que Colombia figura entre los 13 países seleccionados para beneficiarse del programa establecido por la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT), el cual ayuda a los países a concebir y poner en práctica una respuesta integral nacional de lucha contra estos dos delitos.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGT indica que la red de inspectores del trabajo especializada en la trata de personas, que debía establecerse en julio de 2017, aún no se ha establecido. La CGT considera necesario contar con datos más completos sobre el fenómeno de la trata de personas, en particular en lo que respecta a las mujeres. En su comunicación conjunta, la CUT y la CTC observan que sólo se identificó oficialmente un número limitado de víctimas, y que su acceso a la justicia sigue siendo difícil. Los dos sindicatos exigen que el Gobierno adopte medidas más firmes, en particular a través de la creación de sistemas que permitan identificar mejor a las víctimas y a los autores de los delitos; del establecimiento de un programa especial para la protección de las víctimas y su seguimiento; de la creación de mecanismos que permitan identificar la posible complicidad entre los funcionarios públicos, y de la recopilación de datos más precisos sobre los casos pendientes y los casos resueltos.

La Comisión observa que, según los datos disponibles en el sitio web del Ministerio del Interior, entre 2013 y mayo de 2018, se registraron 422 casos de trata: el 84 por ciento hacía referencia a mujeres; el 60 por ciento a la modalidad de trata de las personas con fines de explotación sexual, y el 25 por ciento con fines de trabajo forzoso. En 2017, el Centro Operativo Antitrata de Personas prestó asistencia a unas 98 víctimas.

La Comisión toma nota de toda esta información y acoge con agrado los esfuerzos desplegados por el Gobierno para poner en práctica una política global y coordinada de lucha contra la trata de personas. ***La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando las medidas necesarias para poner en marcha los siete ejes de acción de la Estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas, y que suministre información detallada sobre este tema. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique las medidas adoptadas para velar por que se proporcionen efectivamente a las víctimas todas las medidas de protección y de asistencia previstas en el decreto núm. 1066 de 2015, y para asegurar una mejor identificación de las situaciones de trata de personas con fines tanto de explotación sexual como laboral. Por último, al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha suministrado información sobre las investigaciones en curso ni sobre las resoluciones judiciales pronunciadas, a pesar de haberse registrado 422 casos de trata desde 2013, la Comisión le pide que proporcione información sobre las investigaciones emprendidas, los procedimientos judiciales llevados a cabo y las resoluciones pronunciadas en los casos de trata, especificando las dificultades a las que se enfrentan las autoridades competentes en este ámbito. Pide igualmente que transmita copias de los informes o los datos publicados por el Observatorio del delito de trata de personas y por el Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas.***

Artículo 2, 2), a). Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco del servicio nacional obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar toda la legislación que reglamente el servicio militar obligatorio y la ponga en conformidad con el artículo 2, 2), a), del Convenio, conforme al cual, para no ser considerado trabajo forzoso, el trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio debe revestir un carácter puramente militar. La Comisión subrayó que el concepto de servicio militar obligatorio en Colombia, que puede realizarse según diferentes modalidades, es más amplio que la excepción autorizada por el Convenio. Así pues, en el caso de los soldados bachilleres, por ejemplo, se les puede asignar trabajos que no son de carácter puramente militar. La Comisión se remite a este respecto:

- a los artículos 11 y 13 de la ley núm. 48 de 1993, que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, según los cuales los soldados, en particular los soldados bachilleres, deberán ser instruidos y dedicarse a «la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente», y
- al artículo 50 de la ley núm. 65 de 1993 y al decreto núm. 537 de 1994 que reglamenta el servicio militar de los bachilleres en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, mediante los cuales los soldados bachilleres pueden realizar su servicio militar como auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, y su función es prestar asistencia al personal de los establecimientos penitenciarios con miras a asegurar la vigilancia, el control y la reinserción de los detenidos.

En su memoria, el Gobierno hace referencia a la adopción de la ley núm. 1861 de 2017, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, el control de reservas y la movilización. La Comisión toma nota de que esta ley deroga la ley núm. 65 de 1993. Según los artículos 4 y 11, el servicio militar es obligatorio y todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla 18 años. La ley prevé una serie de causas de exención de la obligación de servicio militar, incluida la objeción de conciencia. El servicio militar tiene una duración de dieciocho meses y comprende cuatro etapas: formación militar básica; formación laboral productiva; aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica, y descansos. Sin embargo, en lo que respecta a los bachilleres, la duración del servicio militar es de doce meses y estos últimos no pueden acceder a la formación laboral productiva. La Comisión toma nota asimismo de que, según el artículo 16 de la ley, un mínimo de 10 por ciento del personal incorporado por cada contingente prestará servicio «ambiental», es decir, actividades de apoyo destinadas a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Por último, la Comisión toma nota de que, si bien en sus observaciones, la CUT y la CTC acogen con agrado los cambios introducidos por la ley de 2017 en lo que respecta a la supresión de la obligación de definir su situación militar para ocupar un empleo en los sectores público o privado, la CGT indica que la información que recibe confirma que las actividades llevadas a cabo en el marco del servicio militar no son exclusivamente militares.

La Comisión toma nota de esta información y ***lamenta*** observar que la nueva legislación adoptada no responde a las preocupaciones expresadas anteriormente por la Comisión en lo tocante a las diversas actividades que pueden llevar a cabo los reclutas en el marco del servicio militar obligatorio. ***Expresa una vez más la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para revisar las diferentes modalidades del servicio militar de tal manera que sólo puedan imponerse a los reclutas trabajos que sean puramente de carácter militar (teniendo particularmente en cuenta la situación de los bachilleres que realizan su servicio militar dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y de los reclutas que realizan actividades de apoyo destinadas a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales en el marco del servicio «ambiental»). Por último, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre el componente «formación laboral productiva» del servicio militar obligatorio.***

Artículos 1, 1), y 2, 1). **Trabajadores en situación de vulnerabilidad en las minas de oro ilegales y riesgo de trabajo forzoso.** La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGT se refiere a las minas ilegales de oro y considera que el Estado no inspecciona suficientemente las condiciones de trabajo en este sector y no realiza suficientemente actividades de prevención. Apoyándose en un informe de la Contraloría General de la República, la CGT señala desplazamientos forzosos y violaciones de derechos humanos, y subraya que la ilegalidad de la actividad económica favorece la explotación de los trabajadores y la trata de personas, en particular de las mujeres con fines de explotación sexual. La CGT subraya que esta explotación minera ilegal tiene lugar en zonas aisladas y de difícil acceso. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las alegaciones de la CGT y que indique las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores de este sector, a fin de evitar que vuelvan a encontrarse en situaciones de trabajo forzoso.**

Congo

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) **(ratificación: 1960)**

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. 1. **Trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio.** Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad del artículo 1 de la Ley núm. 16, de 27 de agosto de 1981, sobre el Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio con el Convenio. En virtud de esta disposición, el servicio nacional es una institución destinada a permitir que todo ciudadano participe en la defensa y en la construcción de la nación, lo que conlleva dos aspectos: el servicio militar y el servicio cívico. La Comisión señaló en muchas ocasiones que los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del servicio nacional obligatorio, especialmente aquéllos que se refieren al desarrollo del país, no presentan un carácter puramente militar y están, por tanto, en contradicción con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. **La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para modificar o derogar la Ley relativa al Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio, con el fin de ponerla de conformidad con el Convenio. Sírvasse comunicar informaciones sobre todo progreso realizado a tal efecto.**

2. **Brigadas y campamentos de jóvenes.** En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló la indicación del Gobierno, según la cual desde 1991 cayó en desuso la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud. Esta ley establecía que el partido y las organizaciones de masas debían crear progresivamente todas las condiciones para la formación de brigadas de jóvenes y la organización de campamentos juveniles (la naturaleza de los trabajos realizados, el número de personas afectadas, la duración y las condiciones de su participación, etc.). La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. **La Comisión expresa la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para derogar formalmente la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud.**

Artículo 2, párrafo 2, d). **Movilización de personas para realizar trabajos de interés público que van más allá de los casos de fuerza mayor.** Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad de la ley núm. 24-60, de 11 de mayo de 1960, que permite movilizar a personas para realizar trabajos de interés público fuera de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio; a las personas movilizadas que se nieguen a trabajar podrá imponérseles una pena de reclusión de un mes a un año.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual esta ley cayó en desuso y puede considerarse como derogada, dado que el Código del Trabajo (artículo 4) y la Constitución (artículo 26), que prohíben el trabajo forzoso, derogan todas las disposiciones nacionales que estén en contradicción con los mismos. El Gobierno precisa que, para evitar toda ambigüedad jurídica, se publicará un texto que permita distinguir claramente los trabajos de interés público, que no han de confundirse con el trabajo forzoso prohibido por el Código del Trabajo y la Constitución. El Gobierno indica asimismo que ha dejado de existir la práctica que consiste en movilizar a las poblaciones para trabajos colectivos, en base a las disposiciones del artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo (PCT). Las tareas de desmalezado, saneamiento, etc., son realizadas por asociaciones, por agentes del Estado y por colectividades locales con carácter voluntario y, por consiguiente, no obligatorio. Por otra parte, el carácter voluntario de los trabajos de interés colectivo será establecido en la revisión del Código del Trabajo, de modo tal que se armonice claramente la legislación nacional con las disposiciones del Convenio. **La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que se adopten medidas adecuadas para clarificar la situación, tanto en el derecho como en la práctica, especialmente mediante la adopción de un texto que permita distinguir los trabajos de interés público del trabajo forzoso.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Dominica

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), a) y d), del Convenio. Obligaciones del servicio nacional. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que derogara o enmendara la Ley del Servicio Nacional de 1977, en virtud de la cual las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años están obligadas a cumplir el servicio nacional, que incluye la participación en proyectos de desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe mencionar el alojamiento, la construcción de escuelas, la construcción, la agricultura y la construcción de carreteras, siendo el no presentarse al servicio sancionable con multas o penas de prisión (artículo 35, 2)). La Comisión señaló que, contrariamente a la reiterada declaración del Gobierno de que el servicio nacional fue creado para hacer frente a las catástrofes nacionales, la ley no contiene ninguna referencia a las catástrofes naturales, sino que especifica los objetivos del servicio nacional, que consisten en «movilizar las energías del pueblo de Dominica para alcanzar el máximo nivel de eficacia, estructurar estas energías y orientarlas hacia la promoción del crecimiento y del desarrollo económico del Estado». La Comisión destacó que las mencionadas disposiciones no están de conformidad con el presente Convenio y con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe específicamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico».

El Gobierno indica en su memoria que el punto relativo a la enmienda a la legislación fue incluido en la Agenda del Trabajo Decente, y que se adoptarán las medidas necesarias para abordar las solicitudes en relación con el cumplimiento de los convenios, con la asistencia técnica de la OIT. *Habiendo tomado nota de las indicaciones del Gobierno en sus memorias anteriores, según las cuales la Ley del Servicio Nacional, de 1977, ha sido omitida de las leyes revisadas de Dominica, de 1990, y el artículo 35, 2), de la ley no se ha aplicado en la práctica, la Comisión confía en que se adopten, en un futuro cercano, las medidas adecuadas para derogar formalmente la mencionada ley, con el fin de armonizar la legislación con los Convenios núms. 29 y 105, en que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Egipto

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Desde 1964, la Comisión ha estado señalando a la atención del Gobierno ciertas disposiciones con arreglo a las cuales pueden imponerse sanciones penales que conllevan trabajo penitenciario obligatorio (en virtud de los artículos 16 y 10 del Código Penal), en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio, y, en particular:

- el artículo 178, 3), del Código Penal, en su tenor modificado por la ley núm. 536 de 12 de noviembre de 1953, y por la ley núm. 93, de 28 de mayo de 1995, sobre la producción o la posesión con miras a la distribución, venta, etc., de cualquier imagen que pueda perjudicar la reputación del país por ser contraria a la verdad, dando una descripción inexacta y destacando aspectos que no son adecuados;
- el artículo 80, d), del Código Penal, en su tenor modificado por la ley núm. 112, de 19 de mayo de 1957, en la medida en que se aplique a la difusión intencionada en el extranjero por un egipcio de rumores tendenciosos o de información relacionada con la situación interna del país con el fin de menoscabar la buena reputación o estima del Estado, o el ejercicio de cualquier actividad que pueda ocasionar un perjuicio al interés nacional;
- el artículo 98, a) *bis* y d), del Código Penal, en su tenor modificado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, que prohíbe lo siguiente: la apología, por cualquier medio que sea, de la oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado; el estímulo de la aversión a esos principios o su desprecio; la constitución o participación en cualquier asociación o grupo que persiga cualquiera de los objetivos mencionados o que reciba ayuda material para la prosecución de tales objetivos;
- los artículos 98, b) y b) *bis*, y 174 del Código Penal sobre la apología de ciertas doctrinas;
- el artículo 102 *bis* del Código Penal, en su tenor modificado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, sobre la difusión o posesión de medios para la propagación de noticias, informaciones o rumores falsos o tendenciosos, o de propaganda revolucionaria que pueda perjudicar la seguridad pública, sembrar el pánico entre la gente o causar un perjuicio al interés público;
- el artículo 188 del Código Penal sobre la difusión de noticias falsas, etc., que puedan perjudicar al interés público, y

- la ley núm. 10, de 1914, sobre reuniones y la ley núm. 107, de 2013, sobre el derecho a realizar reuniones públicas y asambleas pacíficas que confieren poderes generales para prohibir o disolver reuniones, incluso en lugares privados.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que el incumplimiento de las disposiciones que figuran a continuación puede ser castigado con penas de prisión de hasta un año de duración que pueden conllevar la obligación de trabajar:

- el artículo 11 de la ley núm. 84/2002, sobre las organizaciones no gubernamentales, prohíbe que las asociaciones realicen actividades que pongan en peligro la unidad nacional o alteren el orden público o insten a la discriminación entre ciudadanos basada en la raza, el origen, el color, el idioma, la religión o el credo, y
- los artículos 20 y 21 de la ley núm. 96/1996 sobre la reorganización de la prensa, prohíben los siguientes actos: atacar la religión de terceros; incitar a perjudicar o despreciar a cualquier grupo religioso de la sociedad, y atacar el trabajo de los funcionarios públicos.

La Comisión también tomó nota de que en una comunicación conjunta de 29 de julio de 2016, emitida por diversos organismos de las Naciones Unidas, se señaló que la ley núm. 107 de 2013, que limita gravemente el derecho de reunión y de asociación pacífica es invocado regularmente por las autoridades para tomar medidas contra los manifestantes utilizando una fuerza excesiva o innecesaria para dispersar las manifestaciones no autorizadas u otras reuniones públicas, lo cual con frecuencia da lugar a lesiones graves, detenciones, e incluso a veces a la muerte de manifestantes. Según el mismo documento alrededor de 60 000 personas fueron detenidas por motivos políticos entre julio de 2013 y julio de 2016.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que en su informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2017, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, reiteró su gran preocupación por los hechos graves que ocurrieron el año pasado en relación con la represión de la sociedad civil independiente, incluidos defensores de los derechos humanos, abogados, sindicalistas, periodistas, opositores políticos y manifestantes (documento A/HRC/35/28/Add.3, párrafo 548).

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que los siguientes artículos del Código Penal tienen por objeto proteger el interés público de la Nación de actos que pueden ser perjudiciales para el orden público o que exponen o ponen en peligro a los ciudadanos:

- artículo 178, 3) (producción o posesión con miras a la distribución, venta, etc., de imágenes que pueden perjudicar la reputación del país por ser contrarias a la verdad, dando una descripción inexacta o destacando aspectos que no son adecuados);
- artículo 80, d) (difusión intencionada en el extranjero por un egipcio de rumores tendenciosos o de información relacionada con la situación interna del país con el fin de menoscabar la buena reputación del Estado);
- artículo 98, a) *bis*, y d) (la apología, por cualquier medio que sea, de la oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado y la constitución o participación en cualquier asociación o grupo que persiga cualquiera de los objetivos mencionados); artículos 98, b) y b) *bis*, y 174 (apología de ciertas doctrinas);
- artículos 102 *bis* y 188 (difusión de noticias, informaciones o rumores falsos o tendenciosos o de propaganda revolucionaria que pueda perjudicar la seguridad pública), tienen por objetivo proteger el interés público de la nación frente a los actos que perjudican el interés público o dañan o exponen a peligros los intereses de los ciudadanos.

En lo que respecta a la Ley núm. 10, de 1914, sobre Reuniones y la Ley núm. 107, del 2013, sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, el Gobierno señala que con arreglo a esta legislación todos los ciudadanos tienen derecho a realizar reuniones públicas, desfiles y manifestaciones pacíficas. Estos derechos pueden ejercerse siempre que se respeten ciertas reglas a fin de evitar que los intereses de los ciudadanos resulten perjudicados, así como el vandalismo y la interrupción de las actividades económicas. En relación con la Ley núm. 96/1996, sobre la Reorganización de la Prensa, el Gobierno indica que en julio de 2018 el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la reorganización de la prensa y de los medios de comunicación que enmendará la ley de 1996 y despenalizará los delitos de prensa.

En relación con la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No Gubernamentales, el Gobierno indica que las penas de prisión previstas en caso de que se den las infracciones mencionadas en el artículo 11 de la ley son de menos de un año de prisión, y que estas penas no conllevan trabajo obligatorio en virtud del artículo 20 del Código Penal, que prevé que el juez deberá dictar una sentencia condenando a trabajos forzados (penas de prisión) siempre que el período de castigo exceda de un año. En todos los otros casos, se puede imponer una pena ligera de prisión o de trabajos forzados. A este respecto, la Comisión señala que si bien el artículo 20 del Código Penal se ocupa principalmente de la condena a trabajos forzados, el artículo 16 del Código Penal, así como las disposiciones de la Ley núm. 396, de 1956, sobre el Régimen Penitenciario, prevén que todos los condenados a los que se impongan penas de prisión están obligados a realizar trabajos fuera o dentro de la cárcel. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno que la aplicación del Convenio no se limita a las condenas a «trabajos forzados» u otras formas de trabajo especialmente duras, en contraposición al trabajo penitenciario ordinario. El Convenio no permite hacer uso de «ninguna forma» de trabajo penitenciario obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecidos.

Además, la Comisión observa que en un comunicado de prensa de 28 de septiembre de 2018, varios expertos de las Naciones Unidas (el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes, y otros) expresaron su preocupación por el largo período en el que están detenidos los defensores de los derechos humanos, como consecuencia de su ejercicio pacífico de los derechos humanos.

Por consiguiente, la Comisión recuerda de nuevo que, las limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, pueden guardar relación con la aplicación del Convenio si esas medidas se aplican mediante sanciones que conlleven trabajo penitenciario obligatorio. Remitiéndose a su Estudio General de 2012, sobre los convenios fundamentales (párrafo 302), la Comisión señala que, con arreglo al *artículo 1, a)*, del Convenio, entre las actividades que deben protegerse a fin de que no se impongan sanciones que conlleven trabajo forzoso u obligatorio figuran la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas (libertad que puede ejercerse verbalmente y también por medio de la prensa y otros medios de comunicación), así como otros derechos generalmente reconocidos, como los de asociación y reunión, ejercicio mediante el cual los ciudadanos intentan lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, las cuales también pueden verse afectadas por medidas de coerción política. Por último, la Comisión hace hincapié en que la protección ofrecida por el Convenio no se limita a las actividades en las que se expresen o manifiesten opiniones que difieran de los principios establecidos; incluso si ciertas actividades tienen por objetivo realizar cambios fundamentales en las instituciones estatales, estas actividades están cubiertas por el Convenio siempre que no se recurra a medios violentos para obtener esos fines o se pida que se utilicen dichos medios.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión *deplora* que a pesar de los comentarios que ha realizado durante varios años, la Ley núm. 10, de 1914, sobre Reuniones y la Ley núm. 107, de 2013, sobre el Derecho a Realizar reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, y la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No Gubernamentales, así como los artículos 80, 98, 102, 174 y 188 del Código Penal no se hayan enmendado a fin de ponerlos en conformidad con el Convenio. ***Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio a las personas, que sin recurrir a la violencia, expresen opiniones políticas o puntos de vista opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión pide al Gobierno que garantice que las disposiciones de la Ley núm. 10, de 1914, sobre Reuniones, la Ley núm. 107, de 2013, sobre el Derecho a Realizar reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No Gubernamentales y los artículos 80, 98, 102, 174 y 188 del Código Penal se enmiendan limitando claramente la aplicación de estas disposiciones a las situaciones en las que se utilice la violencia o se incite a la violencia, o suprimiendo las sanciones que conlleven trabajo obligatorio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación en la práctica de los textos legislativos antes mencionados no conduce a la imposición de castigos que conlleven trabajo obligatorio en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio. Por último, en relación con la enmienda de la Ley núm. 96/1996 sobre la Reorganización de la Prensa, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción de la nueva ley sobre la prensa y los medios de comunicación, y que proporcione una copia de esta ley una vez que se haya adoptado. A la espera de la adopción de estas medidas, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de esas disposiciones en la práctica, incluidas copias de las decisiones judiciales, y que indique las sanciones impuestas, el número de personas a las que se les imponen sanciones que conlleven trabajo penitenciario obligatorio, en virtud de los artículos 16 y 20 del Código Penal.***

La Comisión plantea otras cuestiones, en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eritrea

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2000)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión detallada que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia sobre Aplicación de Normas en mayo-junio de 2018, en relación con la aplicación por Eritrea del Convenio. Toma nota también de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2018. La Comisión toma nota además del informe de la misión consultiva técnica de la OIT a Eritrea, que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de julio de 2018.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Servicio nacional obligatorio. En el marco de sus exámenes anteriores sobre la aplicación del Convenio, tanto la Comisión de la Conferencia como la Comisión de Expertos instaron al Gobierno a enmendar o derogar la Proclamación sobre el servicio nacional (núm. 82 de 1995) y la declaración sobre «Campaña de desarrollo Warsai Yakaalo» a efectos de poner fin a la práctica generalizada y sistemática de imposición de trabajo obligatorio a la población en el marco de los programas vinculados con la obligación de servicio nacional.

La Comisión tomó nota de que, a nivel legislativo, la Constitución establece la obligación de los ciudadanos de cumplir con su deber de servicio nacional (artículo 25, 3)) y de que la Proclamación sobre el servicio nacional especifica que esta obligación concierne a todos los ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años (artículo 6). Esta obligación comprende el servicio nacional activo y el servicio en la reserva de las fuerzas armadas. El servicio nacional activo, que afecta a todos los ciudadanos de 18 a 40 años, comprende dos períodos: seis meses de servicio nacional activo en el Centro de entrenamiento de servicio nacional y doce meses de servicio militar activo y de tareas de perfeccionamiento en las fuerzas armadas (artículo 8). Los objetivos del servicio nacional comprenden la creación de una fuerza de defensa sólida integrada por la propia población con miras a garantizar una Eritrea libre y soberana. La Comisión tomó nota también de que, en la práctica, la conscripción de todos los ciudadanos de 18 a 40 años de edad para un período indeterminado fue una práctica institucionalizada a través de la «Campaña de desarrollo Warsai Yakaalo», que fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2002. En este sentido, el Gobierno confirmó que, en el marco de su servicio nacional, los reclutas pueden ser llamados a materializar otro tipo de tareas y que, en realidad, participaron en muchos programas, en particular en la construcción de carreteras y de puentes, la reforestación, la preservación del suelo y del agua, así como la reconstrucción y otras actividades encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria.

La Comisión recordó que, si bien el Convenio prevé un número limitado de casos en los cuales los Estados que lo han ratificado pueden imponer un trabajo obligatorio a sus ciudadanos — especialmente en el contexto de las obligaciones cívicas normales del servicio militar obligatorio o en situaciones de fuerza mayor —, las condiciones en las que se impone dicho trabajo obligatorio han de ser definidas rigurosamente de forma que el trabajo impuesto responda a exigencias precisas para que tal imposición no constituya un trabajo forzoso. La Comisión reafirmó que, a la vista de su duración, su magnitud, sus objetivos (reconstrucción, lucha contra la pobreza y fortalecimiento de la economía nacional) y la amplia gama de actividades que se realizan, el trabajo exigido a la población en el marco de la obligación de servicio nacional va más allá de las excepciones autorizadas por el Convenio núm. 29 y constituye trabajo forzoso.

La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2018, la Comisión de la Conferencia tomó nota de la declaración del Gobierno de que la «Campaña de desarrollo Warsai Yakaalo» ya no está en vigor, y que cierto número de conscriptos han sido desmovilizados y trabajan ahora en la administración pública con un salario adecuado. La Comisión instó al Gobierno a modificar o revocar la Proclamación sobre el servicio nacional, poner fin al trabajo forzoso, garantizar el cese de la utilización de conscriptos para imponerles un trabajo forzoso, de conformidad con el Convenio, y recurrir sin demora a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la OIE hace hincapié en la urgencia de poner fin al servicio nacional obligatorio con fines de desarrollo en Eritrea. La OIE insta también al Gobierno a que coopere con la OIT y le alienta a que recurra a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión toma nota de que, según el informe de la misión técnica consultiva de la OIT, diversas partes interesadas señalaron que la duración del servicio nacional se había prolongado por las incesantes amenazas y la situación del conflicto armado del país. A pesar de la amenaza de guerra, el Gobierno ha adoptado varias medidas para desmovilizar a los conscriptos y reinsertarlos en el servicio civil. No obstante, pese a que al proceso de desmovilización se inició con éxito, no ha podido concluirse debido a la situación de conflicto armado en Etiopía. El Gobierno reitera que la orden de movilizar a los trabajadores fue motivada por una auténtica situación de fuerza mayor y que no tuvo otra opción que adoptar medidas de autodefensa en proporción a la amenaza que pesaba sobre Eritrea.

La Comisión toma nota también de que, según el informe de la misión, los diversos interlocutores con los que se entrevistó la misión coincidieron en su mayoría en el hecho de que es importante comprender dentro del contexto en el cual se efectúa el servicio nacional para colaborar con el país. Dentro de este marco se incluye el hecho de que la obligación de todos los ciudadanos de realizar el servicio nacional ha de ser vista bajo el prisma de la situación de «ni guerra ni paz», que había sido devastadora para el país, y aun cuando nunca había estado en los planes del Gobierno que la duración del servicio nacional sea indefinida, hay que considerarlo como parte de la lucha de Eritrea por su liberación. Al tiempo que reconoce que muchos eritreos estaban dispuestos a formar parte del servicio nacional, si éste no era por un «tiempo indefinido» y que el servicio nacional es esencial no sólo para garantizar el desarrollo del país, sino también su misma existencia, la Comisión toma nota de que la misión consideró que el servicio nacional no podía verse como un caso de «fuerza mayor», y que las excepciones establecidas por el Convenio no pueden aplicarse al trabajo forzoso impuesto con fines de desarrollo económico por un período indefinido de tiempo.

La Comisión toma nota además de que una serie de partes interesadas señalaron a la misión que, a la luz del reciente tratado de paz entre Eritrea y Etiopía, ya no está justificado el carácter obligatorio del servicio nacional y que esperaban que se ordenara una desmovilización aun cuando no se había especificado una fecha concreta. En este contexto el informe de la misión subraya que la asistencia técnica de la OIT puede ser útil para cuestiones relativas al empleo, en la medida en que éstas pueden vincularse al proyecto de desmovilización. La colaboración en el futuro puede abarcar asuntos tales como la formación sobre la reforma del mercado del trabajo tras la desmovilización de la población, la creación de empleo, las actividades que generen ingresos, la formación en competencias especialmente dirigida a la población más joven, así como actividades de capacitación para la administración del trabajo y la inspección del trabajo. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno y los interlocutores sociales señalaron a los miembros de la misión que estaban interesados en recibir la asistencia técnica de la OIT, con miras a ratificar el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno en su memoria a la firma de una declaración de paz y amistad entre Eritrea y Etiopía, verificada el 9 de julio de 2018, en la que se ha plasmado la intención de ambas partes de poner fin a la situación de guerra, abrir una nueva época de paz y amistad, aplicar la decisión de la Comisión de Frontera sobre la zona en disputa y avanzar en los intereses vitales de ambos pueblos. El Gobierno señala que el acuerdo de paz ha limpiado las causas que originaron el conflicto y ha despejado las amenazas existenciales planteadas por la delegación de Eritrea a la Comisión de la Conferencia. En este contexto el Gobierno se compromete a seguir trabajando con la OIT en todas las cuestiones pendientes y saluda la asistencia técnica de esta Organización con el fin de potenciar la administración del trabajo y promover y proteger los derechos de los empleadores y los trabajadores por medio de medidas de integración, así como por medio de programas y políticas integradoras con el fin de cumplir plenamente con las normas de la OIT. Además, la Comisión toma nota de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas saluda la firma del Acuerdo sobre paz, amistad y cooperación integral, por el Presidente de Eritrea y el Primer Ministro de Etiopía el 16 de septiembre de 2018.

En vista de la información que antecede, la Comisión acoge con satisfacción el reciente Acuerdo de paz concertado entre Eritrea y Etiopía, así como el hecho de que se espere una pronta desmovilización del servicio nacional. La Comisión toma nota también de la voluntad política manifestada por el Gobierno de abordar las cuestiones planteadas por la Comisión y la Comisión de la Conferencia en el país, en particular con su aceptación de recibir una misión técnica consultiva de la OIT para examinar las cuestiones planteadas. ***En este sentido, tomando nota de que el Gobierno señala a los miembros de la misión técnica consultiva su voluntad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT, la Comisión insta al Gobierno a seguir colaborando con la OIT, recurriendo a la asistencia técnica de esta Organización, con miras a modificar o derogar la Proclamación sobre el servicio nacional núm. 82, de 1995, con el fin de: a) limitar el trabajo impuesto a la población en el marco del servicio nacional obligatorio con adiestramiento y trabajos de carácter puramente militar, y b) limitar la imposición de trabajo o de servicios obligatorios por parte de la población a los verdaderos casos de urgencia o de fuerza mayor, garantizando que la duración y la extensión de este trabajo o de estos servicios se limiten a lo estrictamente necesario que exija la situación. La Comisión alienta también al Gobierno a que colabore con la OIT de una forma más amplia sobre cuestiones vinculadas a la desmovilización del servicio nacional, tal como se recalca en el informe de la misión. Además, tomando nota de la intención del Gobierno de ratificar el Convenio núm. 182, la Comisión pide al Gobierno de que siga beneficiándose de la asistencia técnica de la OIT a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2018 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que impliquen un trabajo obligatorio a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresan opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota efectivamente de que hay varias disposiciones de la Proclamación sobre la Prensa núm. 90/1996 que prevén restricciones a la impresión y publicación (esto es, la impresión o reimpresión no autorizadas de un periódico o una publicación de Eritrea; la impresión o la difusión de un periódico o una publicación o un periódico del extranjero cuyo ingreso a Eritrea haya sido prohibido; la publicación de noticias inexactas o de una información que perturbe el orden público (artículo 15, 3), 4) y 10)) está sujeta a penas de prisión. Por otra parte, en virtud del artículo 110 del Código Penal transitorio de 1991, las personas condenadas a una pena privativa de libertad tienen la obligación de trabajar en prisión. La Comisión tomó nota a este respecto de que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea señaló, en su informe de mayo de 2014, que sigue sin disminuir el número de vulneraciones de algunos derechos como la libertad de expresión y de opinión, de reunión de asociación y de religión.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que es bien sabido que en Eritrea no constituye delito la expresión de opiniones políticas o creencias. Desde la independencia, no se han impuesto penas de prisión a ningún ciudadano por haber manifestado sus opiniones o por haber criticado al Gobierno. Las únicas restricciones que se admiten a la libertad de expresión son los límites impuestos por el respeto a los derechos ajenos, a la moralidad a la soberanía y a la seguridad nacional. El Gobierno menciona que la Constitución de 1997 no protege únicamente libertades fundamentales tales como las libertades de expresión, de opinión, de reunión, de asociación y de religión, sino que establece asimismo recursos administrativos y judiciales en casos de vulneración de derechos. En lo que respecta a la libertad religiosa el Gobierno remite a la Proclamación núm. 73/1995 relativa a las Instituciones y Actividades Religiosas, y señala que en virtud de esta disposición no se admite ninguna injerencia en el ejercicio de los ritos o prácticas religiosas en tanto en cuanto éstas no se utilicen con fines políticos o no atenten contra el orden público o la moral. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno considera que la situación descrita en el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea no se corresponde con la realidad y que varias de las denuncias que aparecen en el informe y a las que se refiere la Comisión son falsas.

La Comisión toma nota de que, en su última resolución adoptada en junio de 2017 sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó «profunda preocupación ante las graves restricciones impuestas al derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir e impartir información, la libertad de circulación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como ante la detención de periodistas, defensores de los derechos humanos, actores de la vida política y dirigentes y miembros de los grupos religiosos en Eritrea» (documento A/HRC/RES/35/35). La

Comisión toma nota asimismo de que, en el marco del Grupo de trabajo sobre el examen periódico universal, el Gobierno aceptó las recomendaciones de algunos países que lo alentaban especialmente a «reformular la legislación en el ámbito del derecho a la libertad de conciencia y de religión»; «velar por que se respeten los derechos de toda la población a la libertad de expresión, religión y reunión pacífica»; o «adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, los derechos políticos, los derechos de las personas privadas de libertad y el derecho a la libertad de expresión en el ámbito de la prensa y otros medios de comunicación» (documento A/HRC/26/13/Add.1).

La Comisión recuerda que el Convenio protege a las personas que tienen o expresan determinadas opiniones políticas o manifiestan su oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, con la prohibición de que se les impongan sanciones en virtud de las cuales tuvieran que trabajar o, en particular, penas de prisión que impliquen un trabajo forzoso u obligatorio. Las libertades de opinión, de creencia o de expresión se reflejan en el ejercicio de diversos derechos tales como el derecho de reunión, el derecho de asociación o la libertad de prensa. El ejercicio de estos derechos permite a los ciudadanos difundir sus opiniones o procurar la aceptación de las mismas o practicar su religión. Al tiempo que reconoce que estos derechos pueden ser objeto de algunas restricciones que son necesarias en aras del mantenimiento del orden público y la protección social, estas restricciones deben estar rigurosamente encuadradas en el marco de la ley. **A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión manifiesta su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para velar por que la legislación en vigor y cualquier otra legislación prevista relativa al ejercicio de los derechos y libertades mencionados no contenga ninguna disposición que permita sancionar la expresión de determinadas opiniones políticas, la manifestación de oposición ideológica al orden político, económico y social establecido, o la práctica de una religión, con una pena de prisión que implique un trabajo obligatorio (como es el caso de las penas de prisión en Eritrea). Entre tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las penas de prisión que se habrían impuesto por la infracción de las disposiciones de la Proclamación núm. 90/1996 sobre la Prensa, así como de las de la Proclamación núm. 73/1995 relativa a las Instituciones y Actividades Religiosas, precisando los hechos que hubieran motivado las condenas a dichas penas.**

Artículo 1, b). Servicio nacional obligatorio con fines de fomento económico. La Comisión remite a sus comentarios formulados en aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en lo que respecta al amplio abanico de actividades exigidas al conjunto de la población en el marco del cumplimiento de la obligación de prestar un servicio nacional, como el establecido por la Proclamación núm. 82/1995 sobre el Servicio Nacional y la declaración de 2002 relativa a la «Campaña de desarrollo Warsai Yakaalo». La Comisión manifiesta su **profunda preocupación** por la ausencia de progresos, tanto en la legislación como en la práctica, para que esta obligación de servicio se circunscriba a los límites autorizados en los dos convenios relativos al trabajo forzoso. La Comisión reitera que el principal objetivo de esta obligación de servicio nacional, a la que están sujetos todos los ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años durante un periodo indefinido, consiste en reconstruir el país, luchar contra la pobreza y fortalecer la economía nacional y, en consecuencia, contradice abiertamente el objetivo enunciado por el Convenio núm. 105, que en su **artículo 1, b)**, prohíbe hacer uso de ninguna forma de trabajo obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». **En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin demora, las medidas necesarias para eliminar, tanto en la ley como en la práctica, cualquier posibilidad de recurrir al trabajo obligatorio en el contexto del servicio nacional, como método de movilización de la mano de obra con fines de fomento económico.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Etiopía

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por la expresión de opiniones políticas o ideológicas. Durante varios años, la Comisión se ha estado refiriendo a los siguientes artículos del Código Penal que prevén penas de prisión que conllevan trabajo penitenciario obligatorio en virtud del artículo 111, 1), del Código, en las circunstancias previstas por el **artículo 1, a)**, del Convenio:

- artículos 482, 2), y 484, 2): castigo de los cabecillas, organizadores o encargados de sociedades, reuniones y asambleas prohibidas;
- artículo 486, a): alentar al público a través de rumores falsos, y
- artículo 487, a): realizar, proferir, difundir o proclamar consignas sediciosas o amenazantes o mostrar imágenes de naturaleza sediciosa o amenazante en cualquier lugar público o reunión pública (manifestaciones sediciosas).

Asimismo, la Comisión se refirió a la definición de terrorismo con arreglo a la proclama antiterrorista núm. 652/2009, en virtud de cuyo artículo 6 cualquier persona que «publique o haga publicar una declaración que pueda ser entendida por algunos o por todos sus destinatarios como una forma directa o indirecta de alentar o inducir a cometer, preparar o instigar un acto de terrorismo puede ser castigada con penas severas de prisión de entre diez a veinte años». A este respecto, la Comisión tomó nota de que, en 2010, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal (EPU) expresó preocupación acerca de la Proclama antiterrorista que, debido a su amplia definición de terrorismo, ha conducido a limitaciones abusivas de los derechos de la prensa. Asimismo, la Comisión tomó nota de que algunos periodistas y políticos de la oposición han sido condenados a penas de prisión que van de los once años a la cadena perpetua, en virtud de dicha ley, y que muchos acusados van a ser juzgados por cargos similares. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a tomar medidas para limitar el ámbito de aplicación de la proclama antiterrorista y de las disposiciones antes mencionadas del Código Penal a fin de velar por que no puedan imponerse sanciones que conlleven

trabajo obligatorio a personas que tienen o expresan opiniones políticas o ideológicas opuestas al orden político, social o económico establecido.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno reitera que la expresión pacífica de opiniones o la oposición al sistema político, social o económico es un derecho constitucionalmente reconocido y en consecuencia no se obliga a nadie a realizar trabajo forzoso u obligatorio. La Comisión también toma nota de que, en septiembre de 2016, una misión de la OIT visitó Etiopía en seguimiento de la misión de marzo de 2015 en relación con las lagunas en la aplicación de los convenios en materia de trabajo forzoso. Según el informe de la misión, se realizaron debates con las partes interesadas pertinentes en relación con ciertas disposiciones del Código Penal que prevén la imposición de trabajo penitenciario obligatorio, con miras a garantizar su conformidad con el Convenio.

La Comisión también toma nota de que, en un comunicado de prensa de 2016, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión Africana) observó con profunda preocupación el deterioro de la situación de los derechos humanos en Etiopía, y en particular los disturbios y violencia recientes en la región de Oromia. Además, la Comisión toma nota de que la Comisión Africana adoptó una resolución en la que expresó preocupación acerca del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para dispersar las protestas, que provocó la muerte de varios manifestantes y que otros resultaran heridos, así como sobre el arresto arbitrario y la detención de muchos otros manifestantes. Tras las protestas que se iniciaron en noviembre de 2015, la Comisión Africana también expresó su preocupación acerca de los alegatos en relación con el arresto y la detención arbitraria de miembros de los partidos de oposición y de defensores de los derechos humanos (documento ACHPR/Res.356(LIX) 2016). Además, la Comisión toma nota de la preocupación de la Comisión Africana por el hecho de que se hayan limitado los derechos de movimiento y reunión y de acceso a los medios de comunicación y a los servicios de Internet así como por la detención y el arresto arbitrarios de muchas personas tras la declaración del estado de emergencia.

La Comisión se ve obligada a expresar su **profunda preocupación** por la detención y el enjuiciamiento de miembros de los partidos de la oposición y defensores de los derechos humanos y recuerda que la limitación de los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, puede guardar relación con la aplicación del Convenio si esa limitación se impone mediante sanciones que conlleven trabajo obligatorio. A este respecto, remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión señala que, con arreglo al *artículo 1, a)*, del Convenio, entre las actividades que deben protegerse a fin de que no se impongan sanciones que conlleven trabajo obligatorio, figuran la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas (libertad que puede ejercerse verbalmente y también por medio de la prensa y otros medios de comunicación), así como otros derechos generalmente reconocidos, como los de asociación y reunión, ejercicio mediante el cual los ciudadanos intentan lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, las cuales también pueden verse afectadas por medidas de coerción política (párrafo 302). **Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se impongan sanciones que conlleven trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al sistema político, social o económico establecido, por ejemplo, restringiendo claramente la aplicación de la proclama antiterrorista, así como de los siguientes artículos del Código Penal: artículos 482, 2), 484, 2), 486, a) y 487, a), a situaciones relacionadas con el uso de violencia o la incitación a la violencia, o suprimiendo las sanciones que conlleven trabajo obligatorio. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto así como sobre la aplicación en la práctica de los artículos antes mencionados del Código Penal y de la proclama antiterrorista, y que transmita copias de decisiones judiciales, indicando las sanciones impuestas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1959)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Vagabundeo. La Comisión tomó nota en ocasiones anteriores de que, en virtud de los artículos 272 y 273 del Código Penal, de 1998, las personas a las que se ha declarado legalmente vagabundos, es decir «aquéllos que no tienen domicilio conocido ni medios de subsistencia y que no desempeñan habitualmente ninguna ocupación ni profesión», serán sancionadas por este mero hecho con penas de entre tres y seis meses de prisión. La Comisión consideró que estas disposiciones permitían imponer una pena de prisión que conllevaba la obligación de trabajar a personas que no habían perturbado el orden público en modo alguno, y que por lo tanto podían constituir una coacción directa o indirecta para trabajar, contraviniendo el Convenio. Pidió al Gobierno que modificase los artículos del Código Penal mencionados de modo que sólo pueda sancionarse a las personas que realicen actividades ilícitas y que perturben el orden público.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha indicado en su memoria que el Código Penal, de 1998, se ha sustituido por la ley núm. 2016/059/AN, de 26 de octubre de 2016, relativa al Código Penal. La Comisión toma nota con **satisfacción** de que se han suprimido los artículos 272 y 273 del Código Penal, de 1998, de manera que ya no se sancione con una pena de prisión que conlleve la obligación de trabajar, a personas que no han perturbado el orden público en modo alguno.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del decreto núm. 247/72/PREG, de 20 de septiembre de 1972, relativo a la creación y organización de la administración penitenciaria, y del decreto núm. 624/PRG/81, de 13 de noviembre de 1981, que complementa el decreto núm. 247/72/PREG, el trabajo es obligatorio para todos los delincuentes que cumplen condena, y facultativo para los acusados y los imputados. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación en la práctica de ciertas disposiciones de la Ley núm. 98/036, de 31 de diciembre de 1998, relativa al Código Penal, de la Ley núm. 91/02/CTRN sobre la Carta de los Partidos Políticos, y de la Ley núm. 91/05/CTRN sobre la Libertad de Prensa, de conformidad con las cuales ciertas actividades pueden ser castigadas con penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar, en circunstancias relacionadas con las disposiciones del Convenio.

La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales muchas disposiciones del Código Penal de 1998 que permiten imponer penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar se han mantenido en la Ley núm. 2016/059/AN, de 26 de octubre de 2016, sobre el nuevo Código Penal. El Gobierno comunica a este respecto información sobre su aplicación práctica. Las disposiciones en cuestión son las siguientes:

- Los artículos 629, 630 (párrafos 1 y 2), 632 (párrafo 1), 634, 636 (párrafos 1 y 2) y 637 del Código Penal de 2016, que han reemplazado los artículos 111 (párrafos 1 y 2), 113 (párrafo 1), 116, 109 (párrafos 1 y 2) y 121 del Código Penal de 1998, que prevén penas de prisión por la organización de una manifestación no declarada o prohibida o de una concentración no armada, o por la participación en las mismas; por la organización de una reunión en la vía pública, y por otras actividades pacíficas conexas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas disposiciones se han aplicado con frecuencia, con motivo del contencioso penal derivado de manifestaciones políticas públicas no autorizadas. Toma nota de que el Gobierno indica, en su memoria comunicada al Comité de Derechos Humanos en octubre de 2017, que el marco jurídico del derecho de reunión pacífica está definido por el Código Penal y la Ley núm. 2015/009/AN, de 4 de junio de 2015, relativa al Mantenimiento del Orden Público. El Gobierno reconoce a este respecto que ciertas reuniones pueden ser prohibidas o dispersadas por motivos vagos, que fácilmente pueden utilizarse indebidamente, por ejemplo, si la reunión «podría perturbar la paz pública» (documento CCPR/C/GIN/3, párrafo 216).
- El artículo 704 del Código Penal de 2016, que retoma el artículo 214 del Código Penal de 1998, relativo al charlatanismo, que castiga con una pena de prisión de uno a cinco años a quien «se dedique a prácticas de brujería, de magia o de charlatanismo que puedan alterar el orden público y atentar contra las personas o la propiedad». La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que este artículo se ha aplicado en varias ocasiones, y de que la definición de esta infracción no plantea ninguna dificultad particular.
- Los artículos 689 a 703 del Código Penal de 2016, que retoman los artículos 215 a 220 del antiguo Código Penal, relativos a las alteraciones del orden público provocadas por los ministros religiosos en el ejercicio de su ministerio, y que permiten en particular castigar con una pena de prisión de tres meses a dos años a los ministros religiosos que hayan pronunciado en una reunión pública «un discurso que incite o apele a perturbar la paz pública o a alterar el orden público». El Gobierno indica que no tiene conocimiento de la aplicación de estos artículos debido a la tolerancia religiosa del país.
- Los artículos 659, 662 a 665 y 739 (párrafo 1) del nuevo Código Penal, que ha reemplazado los artículos 232 y 234 a 238 del Código Penal de 1998, así como el artículo 658 del nuevo Código Penal, relativos al desacato a las autoridades y a las fuerzas del orden, que castigan en particular la ofensa infligida al Jefe de Estado con una pena de prisión de uno a tres años. El Gobierno señala que el artículo 659 se ha aplicado en varias ocasiones, debido a ofensas infligidas por ciudadanos al Jefe de Estado.
- Los artículos 363 a 366 del Código Penal de 2016, antiguamente 371 a 374, relativos a la difamación y a la injuria. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, estas disposiciones se utilizan con frecuencia debido a múltiples difamaciones e injurias que pueden dar lugar a la oposición de los ciudadanos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se ha suprimido del nuevo Código Penal el artículo 517, 17), del antiguo Código Penal, que preveía una pena de prisión de uno a quince días a quienes se opusieran, en particular con sus palabras o a través de la abstención voluntaria, al ejercicio de la autoridad legítima de un agente de las fuerzas del orden o de todo ciudadano encargado de un ministerio de la administración pública, amenazando así con alterar el orden público o el buen funcionamiento de los servicios administrativos o judiciales. La Comisión toma nota de que otras disposiciones del nuevo Código Penal de 2016 permiten imponer penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar en circunstancias relacionadas con las disposiciones del Convenio, en particular el artículo 660, que prevé una pena de prisión de 16 días a seis meses por ultrajar públicamente el himno nacional o la bandera nacional o extranjera.

La Comisión toma nota de la falta de información del Gobierno relativa a la aplicación práctica de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica núm. 91/02/CTRN, de 23 de diciembre de 1991, sobre la Carta de los Partidos Políticos, que prevé penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar el hecho de fundar, dirigir o administrar un partido político de tal manera que se violen las disposiciones de la ley, y de dirigir o administrar un partido político disuelto manteniéndolo o reconstituyéndolo.

La Comisión toma nota con *interés* de que la Ley Orgánica núm. L/2010/02/CNT, de 22 de junio de 2010, sobre la Libertad de Prensa, que reemplaza la ley orgánica núm. 91/05/CTRN, de 23 de diciembre de 1991, ya no prevé la pena de prisión por los delitos de prensa. Toma nota de que, en su informe presentado al Comité de Derechos Humanos en octubre de 2017, el Gobierno especifica que la prensa y la imprenta son libres, y que actualmente existen numerosos periódicos y 43 radios independientes en el país. El Gobierno reconoce además que se observan ocasionalmente casos aislados de violación de la libertad de opinión y de expresión, en particular con respecto al arresto de periodistas (documento CCPR/C/GIN/3, párrafos 202 y 203).

Remitiéndose a su Estudio General de 2012, sobre los convenios fundamentales (párrafos 302 y 303), la Comisión recuerda que, entre las actividades que no deben ser objeto de un castigo que conlleve trabajo obligatorio, de conformidad con el artículo 1, a), del Convenio, figuran las que se realizan en el marco de la libertad de expresar opiniones políticas o ideológicas (oralmente, o a través de la prensa o de otros medios de comunicación), y de otros derechos generalmente reconocidos, como el derecho de asociación y de reunión (por los cuales los ciudadanos expresan su opinión y aspiran a que ésta sea aceptada), que pueden verse afectados por medidas de coacción política. La Comisión subraya además que el Convenio no prohíbe aplicar sanciones que conlleven trabajo obligatorio a las personas que recurren a la violencia, incitan a la violencia o preparan actos de violencia. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que no se imponga ningún castigo que comporte la obligación de trabajar, en la legislación o en la práctica, a las personas que expresan pacíficamente una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. A este respecto, pide al Gobierno que modifique los artículos citados anteriormente del Código Penal, restringiendo claramente el ámbito de aplicación de estas disposiciones a situaciones en las cuales haya habido recurso o incitación a la violencia, o suprimiendo las sanciones que conllevan la obligación de trabajar. Insta al Gobierno a que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto. Además, le pide que vele por que en la práctica los delitos de prensa no sean sancionados con trabajo penitenciario obligatorio. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se aplican en la práctica los artículos 660 del Código Penal, y 30 y 31 de la Ley núm. 91/02/CTRN sobre la Carta de los Partidos Políticos, y que transmita una copia de la Ley núm. 2015/009/AN sobre el Mantenimiento del Orden Público.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1954)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. *Trabajo en servidumbre. Mecanismo de control y aplicación efectiva del marco legislativo.* La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Servidumbre (abolición), de 1976 (BLSA) establece sanciones por obligar a realizar trabajos en servidumbre, hacer valer una deuda para imponer un trabajo y obligar a cumplir cualquier costumbre, tradición, contrato, acuerdo u otro instrumento que exija la prestación de un servicio que implique un trabajo en servidumbre.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI de que la servidumbre por deudas ha llegado a un extremo endémico en el sector de la fabricación de ladrillos en la India, donde hay al menos 125 000 fábricas, y que afecta a una enorme cantidad de personas — incluidos niños — con una cifra estimada de ocupación entre 10 y 23 millones de trabajadores. El modelo de empleo, incluidos los sistemas de contratación y de pago en el sector de la fabricación del ladrillo sustenta un ciclo de trabajo forzoso en el que los trabajadores se ven atrapados en un régimen de trabajo en servidumbre año tras año. La CSI observa además que se sigue incumpliendo constantemente la aplicación de la BLSA y que los funcionarios de distrito y de la policía se niegan regularmente a reconocer los casos de trabajo en régimen de servidumbre y no adoptan las medidas adecuadas para liberar a los trabajadores y enjuiciar a los autores de este delito.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria de que entre 2006 y 2015, los comités de vigilancia llevaron a cabo 1 321 batidas de control en los estados implicados, que arrojaron la cifra de 3 704 casos de trabajo en régimen de servidumbre en toda la India. De todos ellos, 2 408 casos terminaron sin ninguna condena, en 267 casos se pronunciaron sentencias condenatorias, y 1 029 casos siguen aún pendientes de sentencia. La Comisión toma nota de las estadísticas recopiladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) de que la mayoría de los casos de trabajo en régimen de servidumbre se registraron en el distrito de Delhi (992), y en los estados de Maharashtra (796), Odisha (727), Tamil Nadu (366), Andhra Pradesh (284), Karnataka (260) y Uttar Pradesh (214). La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, en el estado de Gujarat, los comités de vigilancia de 26 distritos y 111 *prants* (provincias) celebraron

reuniones periódicas bajo la dirección del magistrado y responsable fiscal del distrito. En 2017, se verificaron 38 reuniones de este tipo. El Gobierno comunica además información sobre las diversas medidas adoptadas por el gobierno del estado de Tamil Nadu, incluidas: i) el rescate y la rehabilitación de 276 trabajadores en régimen de servidumbre entre abril de 2017 y marzo de 2018; ii) el desarrollo de un procedimiento regular operativo para la detección, liberación y rehabilitación de trabajadores en régimen de servidumbre, y iii) la realización de programas de sensibilización y formación para funcionarios del estado sobre trabajo forzoso. Por último, la Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el Programa patrocinado por la administración central para la rehabilitación de los trabajadores en régimen de servidumbre ha sido revisado y rebautizado en 2016 como Plan centralizado para la rehabilitación de los trabajadores en régimen de servidumbre. Según este plan, se ha aumentado la dotación financiera para rescatar a los trabajadores en régimen de servidumbre. Se ha previsto también la creación de un fondo de rehabilitación para los trabajadores en régimen de servidumbre a nivel de distrito por cada estado, que asigne ayuda con carácter inmediato a los trabajadores rescatados de la servidumbre. Además, la Comisión toma nota del informe presentado por el Gobierno en virtud del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) de que la aplicación de este plan ha rehabilitado un total de 292 355 trabajadores liberados de este tipo de trabajo en servidumbre. **La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para garantizar que se aplican con rigor y eficacia las disposiciones previstas en virtud de la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Servidumbre (abolición) y se imponen las sanciones adecuadas a las personas que implican a otros en trabajos en régimen de servidumbre, en particular en el sector de la fabricación de ladrillos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto así como el número de enjuiciamientos, condenas y sanciones penales impuestas a los perpetradores de delitos relativos al trabajo en régimen de servidumbre, también con respecto a los 1 029 casos aún pendientes de juicio. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre el número de trabajadores en servidumbre identificados, retirados y rehabilitados con inclusión de los que lo han sido a través del Plan centralizado para la rehabilitación de los trabajadores en régimen de servidumbre, 2016. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga comunicando información sobre el funcionamiento y la eficacia de los comités de vigilancia para la abolición del trabajo en régimen de servidumbre, especialmente en Delhi, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka y Uttar Pradesh.**

Magnitud del problema. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que ha concedido becas a los gobiernos de los estados para llevar a cabo encuestas a nivel de distrito sobre el trabajo en régimen de servidumbre, habiéndose efectuado ya un elevado número de éstas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria de que se ha potenciado la ayuda financiera a los estados para que lleven a cabo encuestas sobre el trabajo en régimen de servidumbre y que se han recibido propuestas al respecto de los estados de Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Sikkim. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se ponga a disposición la información estadística sobre la naturaleza y las tendencias del trabajo en régimen de servidumbre, recopilada a partir de todas las encuestas realizadas a nivel estatal. La Comisión confía en que el Gobierno suministre información sin demora sobre la magnitud del problema del trabajo en servidumbre en el país.**

2. **Tráfico de personas.** En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley del Código Penal (enmienda), núm. 13, de 2013, que tipifica como delito la trata de personas con fines de explotación sexual en virtud de los artículos 370 y 370A del Código Penal, estableciendo penas de prisión y una multa para estos delitos. La Comisión tomó nota también de que se están examinando las enmiendas a la Ley sobre la Prevención de la Trata Inmoral de Personas, de 1956 (ITPA). Además, tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la trata de personas, en particular el Plan Ujjawala para la prevención de la trata, el rescate, la rehabilitación y la reintegración de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores migrantes de estos delitos, en particular a las trabajadoras domésticas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley contra la trata de personas (prevención, protección y rehabilitación) se presentará en la próxima sesión del Parlamento para su aprobación. La Comisión toma nota de que este proyecto de ley establece la prevención, el rescate y la rehabilitación de las víctimas de trata e impone sanciones estrictas, incluida la confiscación, retención e incautación de las propiedades de las personas condenadas por delitos relativos a trata de personas. Con respecto a la aplicación del Plan Ujjawala, el Gobierno señala que con arreglo a este plan, hay 270 proyectos funcionando en el país, incluidas 148 casas destinadas a la rehabilitación de las víctimas, y que hay un total de 5 522 víctimas de trata que se benefician actualmente de este plan.

La Comisión toma nota además del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2017, de que se ha elaborado un procedimiento operativo normalizado para luchar contra la trata de personas. Este procedimiento establece una orientación paso a paso para los profesionales y otras partes interesadas en la lucha contra la trata que participan en la identificación, el rescate, la investigación, la rehabilitación y la reintegración de las víctimas, y el enjuiciamiento de los acusados. No obstante, la Comisión toma nota de que según el documento titulado «Proyecto de política sobre rehabilitación y lucha contra la trata de mujeres y niños del gobierno del territorio de la capital nacional, 2018», el problema de la trata de mujeres y niños con fines de explotación, presente a nivel local, interdistrito, interestatal y transfronterizo, ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años. Según la Oficina de Registro de Delitos Nacionales, la trata de niñas menores de edad se ha multiplicado por 14 a lo largo de la última década. **La Comisión insta, en consecuencia, al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, prestando**

atención especial a la situación de mujeres y niñas, y a que adopte medidas para asegurarse de que todas las personas involucradas en un delito de trata son objeto de investigación y enjuiciamiento y que se aplican en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas para proporcionar protección y asistencia adecuadas a las víctimas de trata, también a través del Plan Ujjawala. Por último, la Comisión manifiesta su firme esperanza de que el proyecto de ley contra la trata de personas (prevención, protección y rehabilitación), de 2018 será adoptado próximamente. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

3. *Prácticas culturalmente aceptadas que implican explotación sexual.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la prevalencia del sistema de *devadasi*, una práctica culturalmente aceptada en algunos estados de la India, con arreglo a la cual algunas niñas de castas inferiores son consagradas a las «deidades» locales u objetos de culto y una vez iniciadas como *devadasi* y a medida que crecen son objeto de explotación sexual por parte de los seguidores de las «deidades» en la comunidad local. La Comisión toma nota de que el sistema de *devadasi* constituye trabajo forzoso en el sentido del Convenio, por cuanto las niñas son consagradas como *devadasi* sin su consentimiento y posteriormente obligadas bajo coacción a proporcionar servicios sexuales a la comunidad. La Comisión tomó nota asimismo de que diversos textos legislativos tipifican como delito esta práctica, en particular los siguientes: la Ley Karnataka Devadasi (prohibición de la consagración) de 1982; la Ley de Prohibición de la Maharashtra Devadasi, de 2005, y el Reglamento de prohibición de la *devadasi*, de 2008; así como la Ley de Andhra Pradesh sobre las *Devadasi* (prohibición de la consagración), de 1988. Además, la ordenanza (enmendada) sobre las castas y tribus reconocidas (prevención de atrocidades), núm. 1, de 2014, considera que es constitutivo de delito que se imponga o fomente consagrar a una mujer, perteneciente a una casta o tribu reconocida, a una deidad, ídolo, objeto de culto, templo u otra institución religiosa como *devadasi* o que se imponga cualquier otra práctica similar. La Comisión tomó nota además de la información suministrada por el Gobierno sobre los diversos programas y medidas de rehabilitación aplicados en los estados de Karnataka, Maharashtra y Andhra Pradesh con el fin de ayudar a las mujeres que han estado sujetas a estas prácticas y a sus hijos. La Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para poner fin al sistema de *devadasi* en la práctica.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el gobierno estatal del estado de Maharashtra ha establecido comités de distrito para el control de la práctica de *devadasi* en 34 distritos del estado. Además, el Gobierno de dicho estado, a través del Departamento de Desarrollo de Mujeres y Niños ha venido organizando diversos programas y planes para alentar a las ONG a que impidan la práctica del sistema *devadasi*, así como a que apliquen varias medidas de sensibilización pública para la rehabilitación de las *devadasis* y de sus hijos.

No obstante, la Comisión toma nota de que, según un estudio realizado en colaboración con la OIT titulado «Violencia de género sobre las niñas de castas reconocidas: Una aprobación rápida de la práctica de devadasi en la India», de 2015, el sistema *devadasi* es prevalente principalmente en los estados de Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana y Maharashtra. Este informe se refiere también al informe de la Comisión integrada por una sola persona, de 2013, con arreglo al cual se estimó que hay alrededor de 450 000 *devadasis* repartidas por diversos estados de la India. La Comisión toma nota además de que según el comunicado de prensa de 25 de septiembre de 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India, se ha notificado legalmente a los gobiernos de Tamil Nadu y Andhra Pradesh los alegatos de que la práctica de *devadasi* sigue presente en esos estados. La Comisión toma nota una vez más con ***preocupación*** de la persistencia de esta práctica tradicional que incluye explotación sexual. ***Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para acabar con el sistema devadasi en la práctica, especialmente a través de la aplicación de la legislación adoptada por diferentes estados. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados en lo que se refiere al número de mujeres y niñas que han logrado ser retiradas de estas prácticas y rehabilitadas. Por último, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de investigaciones realizadas, de enjuiciamientos efectuados y de condenas impuestas en relación con la práctica de devadasi, incluyendo copias de las sentencias judiciales pertinentes.***

4. *Trabajo forzoso de los niños. Marco legislativo.* En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con ***interés*** de que el Gobierno ha promulgado la Ley de Enmienda sobre el Trabajo Infantil (Prohibición y Reglamentación), de 2016 (CLPRA 2016), que entró en vigor el 1.º de septiembre de 2016. La Comisión toma nota de que esta ley contiene disposiciones que prohíben admitir al empleo a los menores de 14 años, así como emplear a niños y adolescentes menores de 18 años en ocupaciones y tareas que entrañen peligro. La Comisión establece también sanciones estrictas para la infracción de estas disposiciones. En relación con la aplicación de la CLPRA 2016, la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual en 2017 se efectuaron 266 891 inspecciones, se detectaron 1 711 infracciones, se incoaron 1 227 enjuiciamientos y se pronunciaron 683 condenas. En 2018, se llevaron a cabo 125 429 inspecciones, se registraron 139 infracciones y se efectuaron 73 enjuiciamientos y 174 condenas. La Comisión toma nota asimismo de la información detallada que el Gobierno ha comunicado sobre las diversas medidas, en particular de carácter legislativo, de sensibilización pública, control, rescate y rehabilitación adoptadas por los gobiernos de Gujarat, Tamil Nadu y Maharashtra con miras a la eliminación del trabajo forzoso de los niños, en particular en la industria del algodón. Por último, la Comisión saluda la ratificación por el Gobierno de la India del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) en junio de 2017. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la Ley de Enmienda sobre el Trabajo***

Infantil (prohibición y reglamentación) en su primera memoria relativa al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Indonesia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1950)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. *Trata de personas.* a) *Prevención y aplicación de la ley.* La Comisión tomó nota de la adopción de la Ley núm. 21, de 2007, sobre la Trata de Personas y de la información sobre las decisiones judiciales dictadas con arreglo a esta ley según la cual tres personas condenadas por trata fueron sancionadas con penas de hasta cuatro años de prisión. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, en 2013, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Gobierno proporcionaron formación a funcionarios de la policía, de inmigración, del ejército, de la Fiscalía y de los gobiernos locales sobre cuestiones de trata de personas y de migraciones. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que, según el informe de 2013 del proyecto titulado «Protección y empoderamiento de las víctimas de trata en Indonesia» llevado a cabo en colaboración con el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, Indonesia sigue siendo un país de origen de mujeres, niños y hombres que están sometidos a trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y se estima que cada año el número de víctimas oscila entre 100 000 y 1 millón de personas.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que, en 2017, se iniciaron los procedimientos judiciales sobre 233 casos de trata de personas. Se resolvieron un total de 222 casos, mientras que 31 casos están en proceso de apelación. El Gobierno indica que se han adoptado medidas para reforzar las capacidades de los funcionarios encargados de luchar contra la trata de personas, incluidos los fiscales, los jueces, los inspectores del trabajo, los policías, los funcionarios de inmigración y los funcionarios del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. El Gobierno también señala que se estableció un grupo de trabajo especializado, a saber el Grupo de trabajo 115, para reforzar la aplicación de la legislación en materia de trata. Además, la Ley núm. 18, de 2017, sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios prevé el castigo de los funcionarios implicados en delitos de trata de personas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según las observaciones finales de 2007 del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de las Naciones Unidas, a pesar de que los índices de enjuiciamiento por trata de personas han aumentado en los últimos tiempos, siguen siendo bajos y los autores de los delitos no son debidamente castigados. Además, la corrupción y la complicidad relacionadas con la trata en todos los niveles de la administración pública siguen siendo algo muy común (documento CMW/C/IDN/CO/1, párrafo 56). ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar que todas las personas que participan en la trata y delitos relacionados son objeto de investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación de la ley núm. 21, de 2007, en la práctica, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas, así como sobre las sanciones específicas impuestas. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe adoptando medidas para reforzar las capacidades de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y que garantice que los funcionarios cómplices son debidamente castigados. A este respecto, pide al Gobierno que proporcione información sobre las actividades llevadas a cabo por el Grupo de trabajo 115 así como sobre la aplicación de la ley núm. 18, de 2017, en lo que atañe al castigo de los funcionarios implicados en delitos de trata.***

b) *Protección y reinserción de las víctimas.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que en 21 provincias y 72 distritos/ciudades se había establecido un grupo de trabajo contra la trata de personas, en virtud del artículo 4 del decreto presidencial núm. 69/2008. Las responsabilidades del grupo de trabajo contra la trata de personas incluyen identificar a las víctimas de trata y brindarles asistencia, por ejemplo asistencia médica y jurídica, así como la localización de las familias, la repatriación y la reinserción social. El Gobierno también indicó que el Ministerio de Asuntos Sociales había establecido 20 centros de protección y trauma, 25 centros de protección social para los niños y un centro de protección social para las mujeres, que prestan servicios de rehabilitación social a las víctimas de trata.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha establecido un grupo de trabajo contra la trata de personas en 31 de las 34 provincias y 191 de los 543 distritos/ciudades. También se proporcionan servicios a las víctimas en 123 centros de servicios integrados de los hospitales, 24 centros de servicios a la ciudadanía de las embajadas y consulados generales indonesios en el extranjero y un gran número de centros de salud comunitarios de todo el país. El Gobierno indica que, en 2017, se proporcionaron servicios de diversos tipos a 505 víctimas de trata, de las cuales 468 fueron colocadas en centros de protección y trauma, 31 en centros de protección para las mujeres y seis en centros de protección social para los niños. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según las observaciones finales de 2017 del CMW las víctimas de trata no están debidamente protegidas contra el enjuiciamiento, el encarcelamiento o el castigo por entrar o residir ilegalmente en Indonesia, o por las actividades en las que participaron como consecuencia directa de su condición de víctimas de trata (documento CMW/C/IDN/CO/1, párrafo 56). ***La Comisión pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para mejorar el funcionamiento del grupo de trabajo contra la trata de personas a fin de proporcionar protección y asistencia adecuadas a las víctimas de trata, incluidas las víctimas extranjeras que han sido objeto de trata en Indonesia.***

Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto. También pide al Gobierno que transmita información sobre el número de víctimas de trata que se benefician de los servicios del grupo de trabajo, así como de los centros de protección y los centros de servicios establecidos por otras entidades competentes.

2. *Situación de vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y riesgos de trabajo forzoso. Aplicación y supervisión.* La Comisión tomó nota de que según las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) se exige que los migrantes de Indonesia que buscan empleo en el extranjero en trabajos domésticos se postulen a través de agencias privadas de contratación aprobadas por el Gobierno, como se establece en el artículo 10 de la ley núm. 39, de 2004, relativa a la colocación y protección de los trabajadores indonesios en el extranjero. En sus observaciones, la CSI, junto con la Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBSI), expresó su enorme preocupación ante la elevada incidencia de la explotación y el trabajo forzoso en el proceso migratorio y por el hecho de que el Gobierno no regule, controle y sancione adecuadamente tanto a las agencias de contratación como a los intermediarios que trabajan por su cuenta e infringen las leyes núms. 39 de 2004 y 21 de 2007. La CSI alegó que el Gobierno no había adoptado medidas apropiadas para la aplicación efectiva de las disposiciones de la ley núm. 39, de 2004, y que había pocos indicios de que las autoridades indonesias investigaran a las agencias de contratación o les impusieran sanciones eficaces por no cumplir con sus responsabilidades en virtud de la legislación. A este respecto, la CSI indicó que los únicos datos disponibles respecto de las sanciones impuestas por infringir la ley núm. 39, de 2004, eran de 2011, y en ellos se indicaba que se revocaron las licencias de 28 agencias de contratación. La Comisión tomó nota de que según el Gobierno el nuevo reglamento núm. 3, de 2013, sobre la protección de los trabajadores migrantes en el extranjero establece un marco protector para los trabajadores migrantes durante los períodos de precolocación, colocación y postcolocación. El Gobierno también indicó que había impuesto sanciones administrativas por infracción de diversas disposiciones de la ley núm. 39, de 2004, en forma de advertencias por escrito, terminación temporal, total o parcial, de las actividades empresariales de los centros de colocación de los trabajadores migrantes, y revocación de permisos. En 2015, el Ministerio de Recursos Humanos anuló los permisos de funcionamiento de 18 agencias de colocación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que la Ley núm. 18, de 2017, sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes indonesios hace hincapié en las medidas de protección reforzando la función de los gobiernos de las aldeas y prevé sanciones más severas por el incumplimiento de los requisitos de procedimiento en materia de colocación de trabajadores migrantes indonesios. Además, el establecimiento de servicios integrados de ventanilla única simplifica los procedimientos para la colocación de los trabajadores migrantes en el extranjero, haciendo que el proceso de migración laboral sea más rápido, barato y seguro. El Gobierno también indica que ha establecido un sistema de supervisión del desempeño de las agencias privadas de colocación de trabajadores migrantes. La Agencia Nacional para la Protección y la Colocación de los Trabajadores Migrantes Indonesios y la Policía Nacional han llevado a cabo una serie de actividades de inspección en las agencias privadas de colocación. En 2016, se revocaron los permisos de funcionamiento de 44 agencias privadas de colocación, y se suspendieron las actividades empresariales de otras 202 agencias. En 2017, sólo se revocaron las licencias de seis agencias privadas de colocación, y se suspendieron las actividades de dos agencias. Actualmente están en funcionamiento 447 agencias privadas de colocación en el país. Entre las infracciones detectadas figuran la falta de formación, de sesiones informativas previas a la partida, de documentos de identidad electrónicos y de seguridad social para los trabajadores migrantes así como el incumplimiento de los requisitos en materia de condiciones de trabajo (tales como los salarios y las horas de trabajo) y la falsificación de la identidad de los trabajadores migrantes potenciales. También se han impuesto sanciones administrativas a agencias privadas que no han respetado la prohibición de poner a trabajar a migrantes indonesios con empleadores individuales que residen en países de Oriente Medio. El Gobierno también indica que, desde 2015, la autoridad competente ha impedido que 4 626 trabajadores hayan sido contratados en el extranjero a través de agencias privadas infringiendo los requisitos de procedimiento pertinentes.

Además, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 2017 el CMW indicó que los trabajadores domésticos migrantes indonesios suelen ser objeto de abuso, acoso y explotación en el lugar de trabajo, en particular de servidumbre, acoso sexual, maltrato físico y retención de sus remuneraciones (documento CMW/C/IDN/CO/1, párrafo 50). Asimismo, el CMW expresó su preocupación por los informes de que los migrantes indocumentados que trabajan en Indonesia son frecuentemente objeto de explotación laboral y sexual, incluido el trabajo forzoso, en particular en los sectores de la pesca, la construcción, la agricultura, la minería, la industria manufacturera, el turismo y el trabajo doméstico (párrafo 32). Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión recuerda de nuevo la importancia de adoptar medidas eficaces para garantizar que el sistema de contratación y empleo de los trabajadores migrantes no coloca a los trabajadores interesados en una situación de creciente vulnerabilidad, en particular cuando están sometidos a prácticas abusivas análogas al trabajo forzoso y tienen un acceso limitado a los recursos legales debido a su situación irregular. ***Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que los trabajadores migrantes estén plenamente protegidos frente a las prácticas y condiciones abusivas equivalentes a la imposición de trabajo forzoso, y le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la legislación pertinente, en particular la ley núm. 39, de 2004, el reglamento núm. 3, de 2013, y la ley núm. 18, de 2017, y que transmita información sobre el número de infracciones detectadas y de sanciones específicas impuestas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas que conllevan trabajo obligatorio para sancionar a las personas que expresan determinadas opiniones opuestas al orden político, social o económico establecido. 1. *Código Penal.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los artículos 154 y 155 del Código Penal castigan con penas de reclusión que entrañan la obligación de trabajar de hasta siete y cuatro años y medio, respectivamente, a las personas que expresan públicamente un sentimiento de hostilidad, odio o desacato contra el Gobierno (artículo 154) o a las personas que difunden esas ideas, las manifiestan abiertamente o fijan carteles con tales sentimientos con la intención de hacerlos públicos o de aumentar su publicidad (artículo 155). Además, tomó nota de que el Tribunal Constitucional, en su decisión relativa al caso núm. 6/PUU-V/2007, consideró que los artículos 154 y 155 del Código Penal están en contradicción con la Constitución de 1945. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, en su decisión núm. 013-022/PUU-IV/2006, el Tribunal Constitucional consideró que era inadecuado que el Código Penal conservara los artículos 134, 136 *bis* y 137 (que se refieren al insulto intencional al Presidente o al Vicepresidente) por cuanto esos artículos contravienen el principio de igualdad ante la ley y atentan contra la libertad de expresión y de opinión, la libertad de información y el principio de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional dictaminó que el proyecto de nuevo Código Penal no debería incluir disposiciones análogas a las mencionadas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que la modificación del Código Penal seguía en curso y que tras la decisión del Tribunal Constitucional los artículos 154 y 155 del Código Penal ya no tenían fuerza jurídica vinculante.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que la modificación del Código Penal sigue en curso. ***Tomando nota de que el Gobierno se ha estado refiriendo a la modificación del Código Penal desde 2005, la Comisión lo insta de nuevo a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Código Penal modificado se adopta en un futuro próximo, teniendo en cuenta las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia de las enmiendas una vez que se hayan adoptado.***

2. *Ley núm. 27 de 1999 sobre la Modificación del Código Penal.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 107, a), d) y e), de la Ley núm. 27 de 1999 sobre la Modificación del Código Penal (respecto de los delitos contra la seguridad del Estado) se pueden imponer penas de prisión a todas las personas que difundan o favorezcan la enseñanza del «comunismo/marxismo-leninismo» de manera verbal, por escrito o través de cualquier medio de comunicación, o creen organizaciones basadas en tales enseñanzas o establezcan relaciones con tales organizaciones, con miras a sustituir la *Pancasila* como fundamento del Estado. También tomó nota de que el Gobierno señalaba que la ley núm. 27 de 1999 no puede enmendarse debido al mandato de la ley núm. I/MPR/2003, sobre el estatus de las disposiciones legislativas. El artículo 2 de la ley núm. I/MPR/2003 establece que el decreto núm. XXV/MPRS/1966 (relativo a la disolución y a la prohibición del Partido Comunista de Indonesia así como a la prohibición de actividades de difusión y desarrollo de la ideología o doctrina del comunismo/marxismo-leninismo) seguirá siendo válido y se hará cumplir con equidad y observancia de la ley. Recordando que el artículo 1), a), del Convenio prohíbe recurrir a ninguna forma de trabajo forzoso, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner el artículo 107, a), d) y e), de la ley núm. 27 de 1999 de conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que se considera que el marxismo-comunismo es una ideología que va en contra de la *Pancasila*, y por lo tanto está prohibida su enseñanza y práctica y se puede castigar con arreglo a la ley. El Gobierno indica que no cambiará su postura sobre esta cuestión. Además, el Gobierno ha señalado repetidamente que los ciudadanos de Indonesia disfrutan de libertad de expresión, y que las penas de prisión se imponen sólo cuando esta expresión pone en peligro la estabilidad nacional. Asimismo, el Gobierno indica que el programa de formación para el empleo en prisión no es una forma de castigo sino una formación separada y un programa de creación de capacidades, que sólo pueden aspirar a realizar las personas que están a punto de finalizar su condena. La Comisión señala de nuevo que, con arreglo a los artículos 14 y 19, del Código Penal y los artículos 57, 1), y 59), 2), del reglamento de prisiones, las penas de prisión entrañan trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que a pesar de que plantea esta cuestión desde 2002, el Gobierno no tiene previsto adoptar medidas a este respecto. La Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que el Convenio no prohíbe que se impongan penas que conllevan trabajo obligatorio a las personas que recurren a la violencia, incitan a la violencia o participan en los preparativos para realizar actos de violencia, y que, en cambio, quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio las penas que entrañan trabajo obligatorio cuando éstas sancionan la prohibición de expresar opiniones o manifestar oposición al sistema político, social o económico establecido (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 303). ***Por consiguiente la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner el artículo 107, a), d) y e), de la ley núm. 27 de 1999 en conformidad con el Convenio, restringiendo claramente el alcance de esas disposiciones a las situaciones en las que se utilice la violencia, o se incite a la violencia, o suprimiendo las sanciones que entrañan trabajo obligatorio y garantizando de esta forma que las personas que expresan pacíficamente opiniones políticas o ideológicas opuestas al orden político, social o económico establecido no puedan ser condenadas a penas de prisión que conlleven la obligación de trabajar. Insta de nuevo al***

Gobierno a continuar examinando estas disposiciones en el marco de la revisión en curso del Código Penal y le pide que transmita información sobre todos los progresos alcanzados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Iraq

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1962)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley contra la Trata (ley núm. 28), de 2012, en la que se proporciona una definición detallada de los elementos constitutivos del delito de trata de personas, se tipifica la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y se establecen penas de prisión de hasta quince años. La Comisión constató que, según las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 2015, la trata de personas y el trabajo forzoso siguen siendo un problema considerable en el Iraq. El Comité de Derechos Humanos recomendó al Gobierno que garantizase que se llevasen a cabo investigaciones exhaustivas de todos los casos de trata de personas y de trabajo forzoso; que se condujese ante la justicia a los autores, y que las víctimas recibiesen un resarcimiento completo y medios de protección, incluyendo el acceso a refugios bien equipados. Además, debía adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se sancionase a las víctimas, en particular las de la trata con fines de explotación sexual, por las actividades realizadas como consecuencia de haber sido objeto de trata.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha indicado en su memoria que, en el artículo 6 del Código del Trabajo de 2015, se prohíbe el trabajo forzoso en todas sus formas, incluidas la trata de personas y la esclavitud. El Gobierno también ha hecho referencia a la ley núm. 28, de 2012, en virtud de la cual la explotación sexual y el trabajo forzoso son delitos que se pueden sancionar con hasta quince años de prisión. La Comisión constata la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas. Además, la Comisión toma nota de que, con arreglo a diversos informes de las Naciones Unidas, como el del Consejo de Derechos Humanos de junio de 2016 (documento A/HRC/32/CRP.2, párrafos 54 a 126), hay un índice elevado de trata de mujeres y niñas yazidíes para fines de explotación tanto sexual como laboral en el país. La Comisión constata asimismo que el Consejo de Seguridad, en su resolución núm. 2388, de 2017, reitera su condena de todos los actos de trata, en particular la venta o el comercio de personas llevados a cabo por el «Estado Islámico en el Iraq y el Levante» (EIIL, también conocido como Dáesh), incluidos la venta o el comercio de yazidíes y otras personas pertenecientes a minorías religiosas y étnicas (documento S/RES/2388, párrafo 10). ***Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación imperante en el terreno, la presencia de grupos armados y la existencia de un conflicto armado en el país, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prevenir, eliminar y combatir la trata de personas. A este respecto, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 28, de 2012 contra la trata, indicando el número de investigaciones y procedimientos judiciales que se han llevado a cabo, y las sanciones específicas que se han aplicado. Por último, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para proteger a las víctimas de trata.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jamaica

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, c) y d), del Convenio. Medidas disciplinarias aplicables a la gente de mar. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a las siguientes disposiciones de la Ley sobre la Marina Mercante de Jamaica, de 1998, en virtud de las cuales algunos delitos disciplinarios son punibles con penas de prisión (que entrañan una obligación de realizar un trabajo en virtud de la Ley de Prisiones):

- el artículo 178, 1), b), c) y e), que prevé penas de prisión, entre otras cosas, por desobediencia intencional o incumplimiento del deber o por asociación con algún miembro de la tripulación para impedir el curso del viaje; una excepción de esta responsabilidad se aplica sólo a la gente de mar que participa en una huelga legal, después de la llegada del buque y con la garantía de seguridad para satisfacción de un capitán de puerto y sólo en un puerto de Jamaica (artículo 178 2)), y
- el artículo 179, a) y b), que castiga con sanciones similares los delitos de desertión y de ausencia sin permiso.

Recordó, en relación con los párrafos 179-181, de su Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, que las disposiciones en virtud de las cuales pueden imponerse penas de prisión (que implican un trabajo obligatorio), por desertión, ausencia sin permiso o desobediencia, no están de conformidad con el Convenio. En ese sentido, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se realizarían enmiendas a la Ley sobre la Marina Mercante, de 1998, tras una revisión general y una actualización de la legislación.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual las enmiendas a la Ley sobre la Marina Mercante de 1998, se dirigen a armonizarla con el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), de ahí que no

abarque a las disposiciones anteriores. El Gobierno también indica que en la industria marítima de Jamaica y en el país en su conjunto, no se utiliza ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluso como medio de disciplina del trabajo. Además, el Gobierno declara que los procedimientos disciplinarios de la Asociación Marítima de Jamaica están limitados por el acuerdo de trabajo conjunto entre la empresa naviera y los sindicatos que representan a los trabajadores en la unidad de negociación, como el Sindicato Industrial Bustamente, el Congreso de Sindicatos y el Sindicato de Trabajadores Portuarios y Marineros Unidos. El Gobierno señala que durante el período de revisión, el Tribunal de Justicia u otros tribunales no adoptaron ninguna decisión en relación con las anteriores disposiciones de la Ley sobre la Marina Mercante.

La Comisión toma debida nota de la declaración del Gobierno y se refiere al párrafo 312 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, recordando que el *artículo 1, c)*, del Convenio prohíbe expresamente la utilización de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de disciplina del trabajo y el castigo de las infracciones a la disciplina del trabajo, con penas de prisión (que entrañan la obligación de trabajar), es incompatible con el Convenio. ***Observando que las disposiciones anteriores de la Ley sobre la Marina Mercante han venido siendo motivo de comentarios desde 2002, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para adoptar enmiendas a la Ley sobre la Marina Mercante de 1998, con el fin de armonizar la legislación con el Convenio y la práctica indicada. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Japón

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1932)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de los Trabajadores Migrantes (LUM), recibidas el 24 de octubre de 2016 y el 26 de septiembre de 2017. Toma nota asimismo de las observaciones conjuntas de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FCTU) y de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) recibidas el 1.º de septiembre de 2016 y el 4 de septiembre de 2018, así como de la respuesta del Gobierno recibida el 7 de noviembre de 2018. La Comisión toma nota además de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) comunicadas junto con la memoria del Gobierno. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de la Construcción de Buques – Región de Kanto, recibidas el 23 de noviembre de 2018.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. *Programa de formación de pasantes técnicos.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que se cometían violaciones de los derechos del trabajo en el Programa de formación de pasantes técnicos que constituían trabajo forzoso. El programa, supervisado por la Organización Japonesa para la Cooperación Técnica Internacional (JITCO), se estableció con objeto de fortalecer los recursos humanos e industriales de los países en desarrollo a fin de asegurar la transferencia de tecnología industrial, calificaciones y conocimientos. En el marco de este programa, los nacionales extranjeros podían entrar en el Japón como «pasantes» durante un año y prolongar su estancia otros dos años como «pasantes técnicos».

El programa se revisó en julio de 2010 para reforzar la protección de los pasantes y de los pasantes técnicos, en particular concediéndoles el estatuto de residentes en régimen de «formación para pasantes técnicos» por un período máximo de tres años, así como la protección prevista por la legislación vigente. Además, se prohibió tanto a las organizaciones de cesión de pasantes como a las organizaciones receptoras de pasantes que cobraran depósitos, y se recurrieron las multas y las sanciones aplicables a las organizaciones declaradas culpables de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la JTUC-RENGO indicó que el 15,9 por ciento de los pasantes que han regresado a su país señalaron que tuvieron que pagar un depósito a la agencia de empleo. El LUM mencionó que, a pesar de los cambios introducidos en 2010, las organizaciones de cesión continuaban cobrando pagos como pretexto por los gastos relacionados con la formación previa o los gastos de transporte, lo que daba lugar a que los pasantes incurrieran en deudas y les hacía vulnerables al despido o la expulsión, particularmente al no estarles permitido cambiar de empleador. El LUM indicó asimismo que el número de muertes entre los pasantes extranjeros era inusualmente elevado para ser jóvenes y tener un buen estado de salud. Además, según un estudio realizado por la Oficina de Evaluación de la Administración (AEB) del Ministerio del Interior y Comunicaciones, de las 846 entidades examinadas, en 157 los pasantes representaban la mitad de su personal y en 34 sólo empleaba a pasantes. En su respuesta, el Gobierno señaló que la oficina de inmigración del Ministerio de Justicia estaba desplegando grandes esfuerzos para supervisar a las empresas que recibían a pasantes. Toda violación indicada se notificaba a la empresa y, en caso necesario, el derecho a recibir nuevos pasantes podía suspenderse por un período de cinco años. Cuando se sospechaba la existencia de violaciones graves, la oficina de inmigración colaboraba con las oficinas de inspección de las normas del trabajo, y los casos más graves se remitían a la Fiscalía General. En 2013, se inspeccionaron 2 318 lugares de trabajo y se proporcionó orientación a los mismos. Se detectaron violaciones de la legislación laboral en 1 844 casos, y 12 casos de violaciones graves se remitieron a la Fiscalía General. El Gobierno señaló igualmente que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar había encomendado a la JITCO que llevara a cabo visitas de orientación y remitiera ciertos casos a las oficinas regionales de inspección de las normas del trabajo. Además, en marzo de 2015 se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre la formación y protección de los pasantes técnicos. Tomando nota de la información indicada anteriormente, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera adoptando medidas para fortalecer la protección de los pasantes técnicos extranjeros.

La Comisión toma nota de que, según las observaciones de la JTUC-RENGO, tanto en 2016 como en 2017, como muestran los resultados de las inspecciones llevadas a cabo por las oficinas de inspección de las normas del trabajo, se detectaron violaciones de disposiciones de la legislación laboral en el 70 por ciento de las organizaciones participantes en el Programa de formación de pasantes técnicos. Además, en virtud del artículo 14 de la Ley sobre la Formación Adecuada de Pasantes Técnicos y sobre la Protección de los Pasantes Técnicos (en lo sucesivo, «la Ley sobre la Formación de los Pasantes Técnicos»), que se adoptó en noviembre de 2016, las actividades de inspección *in situ* sólo se llevan a cabo una vez al año para las organizaciones supervisoras, y una vez cada tres años para las empresas de ejecución individuales. La JTUC-RENGO pone de relieve asimismo que los canales para la presentación de quejas y para la realización de consultas a título individual se limitan a llamadas telefónicas y a correos electrónicos, y que se establecen fechas y horas para las consultas telefónicas en función del idioma de que se trate, por lo que no se atienden las necesidades de algunos casos urgentes en los que se requiere protección inmediata. La JTUC-RENGO estima necesario establecer un servicio de ventanilla única para los pasantes en su idioma materno, incluidos centros de acogida seguros.

En sus observaciones, el LUM considera que, si bien la reforma legislativa ha resuelto algunos problemas, ha creado otros nuevos. La Ley sobre la Formación de los Pasantes Técnicos y sus ordenanzas de aplicación expanden el programa a gran escala, al permitir la oferta de un número considerable de trabajadores jóvenes que reciben unos salarios bajos y no tienen derecho a renunciar a un empleo. En el caso de las empresas avaladas por la autoridad competente como excelentes, el programa puede prolongarse de tres a cinco años. Sin embargo, los criterios para determinar si una empresa es excelente no tienen en cuenta problemas importantes, como la restricción de las horas extraordinarias. Además, el nuevo marco aumenta considerablemente el número máximo de pasantes que puede aceptar una organización o una empresa, lo que limita la capacidad de las entidades receptoras para impartir una verdadera formación a los pasantes. Asimismo, la nueva ley no contempla la amenaza de deportación ni la prohibición de cambiar de empleador, que es el factor que más aumenta el riesgo de trabajo forzoso. El LUM indica asimismo que la Organización para la Formación de los Pasantes Técnicos (OTIT), que supervisa y controla la puesta en práctica del programa en virtud de la nueva ley, cubre a aproximadamente 2 000 organizaciones supervisoras, a 35 000 empresas de ejecución y a 230 000 pasantes técnicos con tan sólo 330 trabajadores en plantilla. El LUM señala una vez más que los organismos de inspección de las normas del trabajo detectaron numerosas violaciones, mientras que sólo el 1 por ciento se remitió a la Fiscalía General. Las violaciones detectadas fueron, entre otras, las largas jornadas de trabajo (hasta 130 horas extraordinarias por mes), el impago o el pago parcial de los salarios, y las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Además, según la información estadística proporcionada por la oficina de inmigración, en 2016 se detectaron 380 casos de violaciones de derechos laborales cuyas víctimas fueron pasantes, incluidos 121 casos relacionados con el pago de los salarios, 94 casos relacionados con documentos de identidad falsificados o alterados, y 51 casos relacionados con «el préstamo de nombres entre entidades receptoras» (o la sustitución de contratos). En particular, los casos de «préstamo de nombres entre entidades receptoras» han aumentado considerablemente en los últimos años. El LUM señala asimismo que el número de accidentes del trabajo y de muertes en el lugar de trabajo ha aumentado entre los pasantes. En 2015, se registraron 30 muertes de pasantes, incluidas ocho causadas por patologías cerebrales o cardíacas, y dos por suicidio. En agosto de 2016, la oficina de inspección de las normas de trabajo de la región de Gifu determinó que la muerte de un pasante filipino de 27 años de edad había sido consecuencia de un accidente del trabajo debido a la extrema fatiga causada por unas jornadas de trabajo excesivamente largas.

La Comisión toma nota de que, según la información contenida en la memoria del Gobierno, la Ley sobre la Formación de los Pasantes Técnicos establece prohibiciones de las violaciones de los derechos humanos contra los pasantes, y prevé sanciones penales para ciertos tipos de violaciones. En virtud del artículo 49 de la ley, los pasantes pueden notificar a las autoridades competentes (el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) violaciones de la ley cometidas por las organizaciones supervisoras o las empresas de ejecución. La OTIT responde a las quejas de los pasantes por teléfono o por correo electrónico en idiomas importantes, como el vietnamita y el chino. El Gobierno indica asimismo que la OTIT empezó a funcionar en noviembre de 2017. El 31 de mayo de 2018, la información estadística sobre las inspecciones llevadas a cabo por la OTIT aún no estaba disponible. En 2016, las oficinas de inspección de las normas del trabajo efectuaron inspecciones en 5 672 lugares que impartían formación a los pasantes técnicos y proporcionaron orientación a dichos lugares. Se remitieron a la Fiscalía General 40 casos de violaciones graves contra pasantes. Sin embargo, no se dispone de información estadística sobre los casos penales en los que hay pasantes implicados como víctimas. Además, el Gobierno firmó memorandos de cooperación con nueve países emisores, a saber, Bangladesh, Camboya, Filipinas, India, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Myanmar, Sri Lanka y Viet Nam.

Al tiempo que toma debida nota de la adopción de la Ley sobre la Formación de los Pasantes Técnicos y de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa que las medidas de supervisión y protección proporcionadas por el nuevo marco jurídico no parecen ser suficientes, habida cuenta del elevado número de pasantes implicados y de su mayor vulnerabilidad debido al largo período de formación de hasta cinco años y a las restricciones que les impiden cambiar de lugar de formación. La Comisión toma nota con **preocupación** de las persistentes violaciones de los derechos laborales y de las continuas condiciones de trabajo abusivas de los pasantes técnicos en formación que podrían constituir trabajo forzoso, tales como la demora en el pago de los salarios, las largas jornadas de trabajo, la falsificación de los documentos de identidad y la sustitución de los contratos. **Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que se proteja plenamente a los pasantes técnicos extranjeros contra las prácticas y condiciones abusivas que constituyen trabajo forzoso, en particular a través de actividades eficaces de la inspección en**

las entidades receptoras, de vías accesibles para que los pasantes notifiquen las situaciones abusivas en las que se encuentran, y de medidas y respuestas rápidas a estas notificaciones. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre la Formación de los Pasantes Técnicos, y de sus ordenanzas de aplicación, y sobre el número de casos que han conducido a enjuiciamientos y condenas, indicando asimismo las situaciones que han conducido a dichas condenas.

2. «Mujeres de recreo». Recordando que desde 1995 examina las cuestiones de las «mujeres de recreo» durante la Segunda Guerra Mundial, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual seguía comprometido con la posición oficial sobre este tema y ya había expresado sus sinceras disculpas y arrepentimiento a las antiguas «mujeres de recreo». El pueblo y el Gobierno del Japón cooperaron para establecer el Fondo para las Mujeres Asiáticas (AWF) en 1995, a fin de extender la expiación del pueblo japonés a las antiguas «mujeres de recreo» y de asegurar que sus sinceras disculpas y arrepentimiento llegaran en la mayor medida posible a las antiguas «mujeres de recreo». El AWF proporcionó a 285 mujeres fondos provenientes de donaciones del sector privado por este concepto. El Gobierno también hizo referencia a las cartas de disculpas y arrepentimiento firmadas por el Primer Ministro, que se enviaron a las «mujeres de recreo» que recibieron dichos fondos. Tras la conclusión del último proyecto en Indonesia, el AWF se disolvió en marzo de 2007, pero el Gobierno había continuado realizando actividades de seguimiento. Como parte de este seguimiento, el Gobierno reiteró que había encomendado a las personas que estaban involucradas en el AWF que realizaran actividades de seguimiento y actividades de asesoramiento de grupo, las cuales tuvieron lugar en 2015. El Gobierno señaló asimismo que las antiguas «mujeres de recreo» que recibían o querían recibir fondos del AWF eran objeto de «acoso» por parte de ciertos grupos en la República de Corea. Lamentablemente, no todas las antiguas «mujeres de recreo» se beneficiaban de las actividades del AWF debido a estas circunstancias. El Gobierno añadió que, de conformidad con sus obligaciones contraídas en virtud del Tratado de Paz de San Francisco, había abordado sinceramente las cuestiones de las indemnizaciones, los bienes materiales y las reclamaciones relativas a la Segunda Guerra Mundial, incluidas las relacionadas con el tema de las «mujeres de recreo». Las cuestiones de las reclamaciones presentadas por particulares se habían solucionado por la vía legal con las partes en estos tratados, en particular el Acuerdo de 1965 sobre la solución de problemas relacionados con bienes materiales y reclamaciones y sobre la cooperación económica entre el Japón y la República de Corea. Al tiempo que observó la declaración del Gobierno en respuesta a su solicitud anterior de que el AWF llevara a cabo ciertas actividades de seguimiento para conocer personalmente a las «mujeres de recreo», la Comisión tomó nota de que no se han obtenido resultados concretos, y pidió al Gobierno que procurara lograr la reconciliación con las víctimas en respuesta a sus expectativas y reclamaciones.

La Comisión toma nota de que en las observaciones conjuntas de la FCTU y de la KCTU se hace referencia al Acuerdo alcanzado en 2015 entre la República de Corea y el Japón sobre la cuestión de las «mujeres de recreo» (en lo sucesivo, «el Acuerdo de 2015»), que declara que la cuestión se ha resuelto «de manera definitiva e irreversible». La FCTU y la KCTU indican que el acuerdo no refleja las reclamaciones de las víctimas. Según el acuerdo, no se consultó plenamente a las víctimas durante el proceso de la conclusión del Acuerdo de 2015. Además, el Gobierno del Japón insiste en que la cuestión ha sido resuelta jurídicamente a través del Acuerdo de 1965 con la República de Corea, y en que el fondo de 1 000 millones de yen (unos 9 millones de dólares de Estados Unidos) proporcionados en el marco del Acuerdo de 2015 no era una indemnización. La FCTU y la KCTU también se remiten a las declaraciones del Gobierno del Japón y de sus funcionarios en diversas ocasiones que niegan que las «mujeres de recreo» fueran esclavas sexuales. Indica además que, el 30 de agosto de 2016, 12 víctimas presentaron una demanda contra el Gobierno de la República de Corea, expresando su oposición al Acuerdo de 2015 en virtud del cual el Gobierno del Japón no reconocía ninguna responsabilidad legal.

La Comisión toma nota de la declaración reiterada del Gobierno en su memoria según la cual no tiene ninguna intención de denegar o trivializar la cuestión de las «mujeres de recreo». A este respecto, el Primer Ministro Abe se siente profundamente desolado al pensar en las «mujeres de recreo» que experimentaron un dolor y un sufrimiento incommensurables más allá de cualquier descripción, como ya expresaron Primeros Ministros anteriores. Como consecuencia de los esfuerzos diplomáticos, el Gobierno del Japón y el Gobierno de la República de Corea alcanzaron un acuerdo sobre esta cuestión en diciembre de 2015, que declara que la cuestión de las «mujeres de recreo» se ha resuelto «de manera definitiva e irreversible», y que los dos gobiernos se abstendrán de acusarse o criticarse mutuamente en lo que respecta a esta cuestión ante la comunidad internacional, en particular ante las Naciones Unidas. Además, de conformidad con el Acuerdo, el Gobierno de la República de Corea estableció la Fundación de Reconciliación y Curación a la que el Gobierno del Japón realizó una contribución de 1 000 millones de yen a cargo de su presupuesto estatal. En el marco de esta fundación, se han llevado a cabo varios proyectos para recuperar el honor y la dignidad de las antiguas «mujeres de recreo» y para curar sus heridas psicológicas. Hasta la fecha, de las 47 antiguas «mujeres de recreo» que vivían en el momento de la conclusión del Acuerdo de 2015, 36 estaban a favor de los proyectos y 34 han recibido asistencia médica y social a través de los proyectos. En su respuesta a las observaciones de la FCTU y la KCTU, el Gobierno indica asimismo que, desde principios del decenio de 1990 está realizando un estudio de investigación a gran escala sobre las «mujeres de recreo», y que en ninguno de los documentos que el Gobierno identificó en dicho estudio pudo confirmarse que las «mujeres de recreo» fueran llevadas por la fuerza por las autoridades militares y gubernamentales.

La Comisión toma nota de que, según el «Informe sobre la revisión del acuerdo Japón-Corea de 28 de diciembre de 2015 sobre la cuestión de «las mujeres de recreo víctimas», publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la

República de Corea, el enfoque centrado en las víctimas no se incorporó suficientemente en el proceso de consulta con las «mujeres de recreo», y mientras las víctimas no aceptaran una solución, como sucedió con el Acuerdo de 2015, la cuestión de las «mujeres de recreo» seguiría planteándose como una cuestión sin resolver, aun cuando los dos Gobiernos declaren que se ha resuelto «de manera definitiva e irreversible». Esta opinión es respaldada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, documento CEDAW/C/JPN/Q/7-8/Add.1, párrafo 51) en sus observaciones finales de 2016, y por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, documento CERD/C/JPN/CO/10-11, párrafo 27) en sus observaciones finales de 2018.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus conclusiones finales de 2016, el CEDAW lamentó que hubiera habido un incremento del número de declaraciones de funcionarios públicos y dirigentes en lo que respecta a la responsabilidad del Gobierno por las violaciones cometidas contra las «mujeres de recreo» que han tenido el efecto de volver a traumatizar a las víctimas. De manera análoga, en sus observaciones finales de 2018, el CERD expresó su preocupación por las declaraciones realizadas por algunos funcionarios, que minimizaban las responsabilidades del Gobierno con respecto a las «mujeres de recreo» y su posible impacto negativo en las supervivientes (documento CERD/C/JPN/CO/10-11, párrafo 27).

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para resolver la cuestión de las «mujeres de recreo», especialmente del reciente Acuerdo alcanzado con la República de Corea en 2015. La Comisión acoge con beneplácito los resultados concretos obtenidos a este respecto, tomando nota de que 34 de 47 víctimas que seguían vivas entonces han recibido asistencia médica y social a través de la aplicación del Acuerdo de 2015. Sin embargo, la Comisión observa que más de diez víctimas se han negado a aceptar las disposiciones del Acuerdo de 2015 y que ciertas declaraciones realizadas por algunos funcionarios gubernamentales no han conducido a que se logre una reconciliación. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que, dada la naturaleza de larga data del caso, el Gobierno no escatimará esfuerzos para lograr la reconciliación con las víctimas restantes que se han negado a aceptar el Acuerdo de 2015, y que se adoptarán medidas adecuadas, sin mayor dilación, para lograr que se solucionen sus reclamaciones.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kazajstán

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 19 de septiembre de 2018, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 18 de octubre de 2018.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso de los trabajadores migrantes. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 7 del Código del Trabajo de 2016, define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Además, el artículo 128 del Código Penal, de 2014, establece que la adquisición y la venta u otras transacciones realizadas respecto de una persona, así como su explotación o reclutamiento, transporte, traslado, acogida y recepción con fines de explotación será castigado con una pena de prisión de entre tres y quince años, junto con la confiscación de bienes. Además, la Comisión tomó nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Humanos expresó su preocupación por los informes de que existen casos de servidumbre doméstica, trabajo forzoso y en régimen de servidumbre, en particular de trabajadores migrantes en los sectores del tabaco, el algodón y la construcción, así como de abusos infligidos a los trabajadores migrantes con condiciones de trabajo precarias y peligrosas, demoras en el pago de sus salarios y confiscación de sus documentos de identidad.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, de que, en los últimos años, el crecimiento económico de Kazajstán ha convertido a este país de un lugar de origen de trabajadores migrantes a un territorio de destino. Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que entre 100 000 y 150 000 ciudadanos de Kirguistán se registraron para trabajar en el país a fines de 2017. Desde los primeros meses de 2017, los migrantes de Kirguistán han sido víctimas de operaciones represivas realizados por los servicios estatales kazajos, posibilitados con frecuencia por la falta de «una situación reglamentada» de los migrantes en el país. Los trabajadores migrantes de Kirguistán han sido presa de métodos de contratación engañosos o informales, en particular, fraudes relativos al lugar o la naturaleza del trabajo que debían realizar, la cuantía de los salarios y la situación jurídica de los trabajadores. En la mayoría de los casos, los empleadores retuvieron los documentos de identidad de los migrantes y no formalizaron la relación de trabajo con la firma de un contrato de empleo. Muchos trabajadores migrantes formularon quejas sobre la restricción de sus movimientos y la retención de sus salarios. La mayoría de los trabajadores migrantes denunciaron condiciones de trabajo peligrosas, incluido horarios de trabajo excesivos, falta de equipo de protección y de atención médica, así como condiciones de vida inadecuadas, como temperaturas excesivas e insuficiencia de servicios básicos. Los trabajadores migrantes no recibieron ninguna protección social y fueron objeto con frecuencia de intimidación y de amenazas.

La Comisión toma nota de que, en respuesta a las observaciones de la CSI, el Gobierno señala que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre Estatuto Legal de los Extranjeros, éstos pueden efectuar cualquier trabajo en el país de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación y los tratados internacionales firmados por Kazajstán. No

obstante, la legislación establece algunas restricciones a este respecto. Por ejemplo, los extranjeros no pueden ser nombrados para ocupar determinados puestos ni desempeñar determinados tipos de trabajo. El Código del Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación en el ámbito del trabajo en relación con los trabajadores extranjeros que se encuentran legalmente trabajando en Kazajstán.

En este sentido, la Comisión recuerda que los trabajadores migrantes deberán estar protegidos de prácticas de trabajo forzoso con independencia de su situación legal en el país. La Comisión recuerda asimismo la importancia de adoptar medidas efectivas que garanticen que el sistema de empleo de los trabajadores migrantes no los pone en situación de mayor vulnerabilidad ni los impide denunciar la explotación por parte de los empleadores ante las autoridades competentes, en particular cuando se ven sometidos a prácticas abusivas, como la confiscación de sus documentos de identidad, la restricción de sus movimientos, condiciones de trabajo peligrosas o demoras en el pago de los salarios, puesto que estas prácticas pueden llevar a que el empleo sea constitutivo de trabajo forzoso. ***La Comisión insta, en consecuencia, al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional que penaliza al trabajo forzoso se aplica efectivamente y que los trabajadores migrantes están plenamente protegidos de todos los abusos o la explotación que sea constitutiva de trabajo forzoso, y a que proporcione información sobre los resultados obtenidos a este respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre una copia de la ley núm. 421-V ZRK, de 24 de noviembre de 2015, que modifica y completa diversos actos jurídicos sobre cuestiones de migración y empleo de la población.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kuwait

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1968)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Libertad de los trabajadores domésticos para poner fin a su empleo. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la exclusión de los trabajadores domésticos migrantes de la protección del Código del Trabajo, y solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para adoptar un marco de protección de las relaciones de empleo, específicamente adaptado a las difíciles circunstancias que afrontaba esta categoría de trabajadores. En este sentido, la Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción de algunos decretos y decisiones ministeriales, incluida la decisión ministerial núm. 617/1992, que reglamenta las normas y los procedimientos dirigidos a la obtención de licencias para que las agencias de colocación privadas suministren trabajadores domésticos y trabajadores similares, así como la decisión ministerial núm. 1182/2010, que define los derechos y las obligaciones de cada parte en el contrato de trabajo (agencia, empleador y empleado). La Comisión tomó nota asimismo de que, en sus comunicaciones, la Confederación de Sindicatos para la Prosperidad de Indonesia (KSBSI) y el Sindicato de Trabajadores Migrantes de Indonesia (SBMI) alegan que trabajan en Kuwait más de 660 000 trabajadores domésticos extranjeros de Asia y África. También indicaron que las embajadas de los países que exportan mano de obra a Kuwait, recibieron varias quejas de los trabajadores domésticos acerca del impago de salarios, horas de trabajo excesivamente largas sin descanso, y abusos físicos, sexuales y psicológicos. Los trabajadores domésticos tienen pocas posibilidades visibles de reparación, dado que están excluidos de la legislación laboral, y las leyes de inmigración les prohíben abandonar o cambiar de trabajo sin el consentimiento de su empleador. En este sentido, la Comisión tomó nota de la adopción, en 2015, de la Ley núm. 68/2015 sobre el Empleo de los Trabajadores Domésticos, que prevé las respectivas obligaciones del empleador y del trabajador, especialmente respecto del contrato modelo (horas de trabajo, remuneración y tiempo de descanso, así como las vacaciones). La Comisión tomó nota de que la ley prohíbe expresamente la confiscación de pasaportes por parte del empleador (artículos 12 y 22). La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 68/2015. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el número de quejas presentadas por los empleadores al Departamento de Trabajo Doméstico, llegó a 346, en 2008 (en comparación con las 1 768 de 2017), al tiempo que los trabajadores domésticos migrantes presentaron 73 quejas (en comparación con las 388 de 2017). El Gobierno también añade que 108 casos fueron derivados al tribunal competente y que, en 2018, los trabajadores domésticos migrantes fueron compensados con 2 560 dinares de Kuwait (8 400 dólares de los Estados Unidos) como salarios atrasados y otros derechos. En relación con la terminación del empleo, la Comisión también toma nota de que el contrato entre el empleador y el trabajador doméstico se concluye para un período de dos años y puede renovarse por un período similar, salvo que una de las dos partes notifique a la otra, al menos dos meses antes de finalizar el contrato de dos años. Al finalizar el contrato entre el trabajador doméstico y el empleador, éste deberá pagar al trabajador doméstico todos sus derechos, como se establece en el contrato y se estipula en esta ley. El contrato puede ser renovado automáticamente si ninguna de las dos partes expresa su deseo de no renovar el contrato, al menos dos meses antes de la finalización del mismo. ***La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que se apliquen y se hagan cumplir de manera efectiva las disposiciones de la ley núm. 68/2015. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que siga comunicando información estadística sobre el número de trabajadores domésticos que han presentado quejas ante el Departamento de Trabajo Doméstico y sobre los resultados de esas quejas. Con respecto al derecho de los trabajadores domésticos para poner fin libremente a su empleo, la Comisión solicita también al Gobierno que transmita información sobre las***

modalidades y la duración del procedimiento por el cual los trabajadores domésticos migrantes cambian de empleador incluyendo información estadística sobre el número de traslados que se dieron recientemente.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25. 1. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley núm. 91, de 2013, sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes. Tomó nota de que la ley prevé sanciones para los delitos vinculados con la trata de personas y para explotación sexual y laboral (quince años y una multa). Con respecto a las sanciones penales impuestas por la exigencia de un trabajo forzoso, la Comisión tomó nota de que la esclavitud, la compra o la oferta de una persona, es pasible de una pena de cinco años de prisión y de una multa (artículo 185 del Código Penal). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación en la práctica de la Ley núm. 91, de 2013, sobre la Trata de Personas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, se estableció, en la Oficina del Fiscal General, una unidad especializada contra la trata, para agilizar los casos de trata de personas. El Gobierno también indica que la unidad contra la trata adoptó una serie de medidas sobre la protección de las víctimas de trata, incluida la coordinación con las instituciones pertinentes, a efectos de prestar una atención médica y psicológica, así como una asistencia jurídica, incluido la posibilidad de presentar formalmente quejas.

La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de 27 de noviembre de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) acogió con agrado las medidas legales e institucionales adoptadas por el Estado parte para combatir la trata de personas, incluidos los esfuerzos encaminados a investigar los casos y enjuiciar a los autores. Sin embargo, manifiesta su preocupación por el bajo número de enjuiciamientos, condenas y penas impuestas en virtud de la Ley núm. 91, de 2013, sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes (documento CEDAW/C/KWT/CO/5, párrafo 28). ***La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas por la unidad contra la trata en favor de las víctimas, así como sobre los resultados obtenidos, incluida la información sobre el número de personas víctimas de trata que se beneficiaron de los servicios de la unidad. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de investigaciones y de enjuiciamientos llevados a cabo, y sobre las sanciones aplicadas en los casos de trata de personas, con fines de explotación sexual y laboral.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan un trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el decreto legislativo núm. 65, de 1979, que impone algunas restricciones a la organización de reuniones y asambleas públicas y cuyo incumplimiento se sanciona con penas de reclusión (que entrañan un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 63 del Código Penal), fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2006. También tomó nota de que se preparó, en 2008, un proyecto de ley sobre reuniones y asambleas públicas. Sin embargo, tomó nota de que el ámbito de aplicación de algunas disposiciones del proyecto de ley (artículos 10 y 15) no se limita a los actos de violencia (o de incitación a la violencia), a la resistencia armada o a la revuelta popular, sino que parece permitir la imposición de un castigo que entraña la obligación de trabajar por la expresión pacífica de opiniones contrarias a la política del Gobierno y al orden político establecido. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se modificaran las disposiciones del proyecto de ley sobre reuniones y asambleas públicas, de 2008.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se dará la debida consideración a la enmienda de la Ley sobre Reuniones y Asambleas Públicas, de 2008, con el fin de armonizarla con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno expresa su compromiso de remitir una copia de la ley, en cuanto se haya adoptado. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte, sin retrasos, las medidas necesarias para armonizar la legislación nacional que regula las reuniones y las asambleas públicas con el Convenio, a efectos de garantizar que no se impongan penas de reclusión que entrañen un trabajo obligatorio a las personas que, sin haber recurrido a la violencia expresen opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la ley sobre reuniones y asambleas públicas, en cuanto se haya adoptado.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. *Situación vulnerable de los trabajadores domésticos migrantes a condiciones de trabajo forzoso.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación de 2013 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en la que se indicaba que existe un número estimado en 200 000 trabajadores domésticos migrantes empleados en el Líbano. Esos trabajadores están excluidos de la protección de la Ley del Trabajo, tienen un estatuto jurídico vinculado a un determinado empleador, con arreglo al sistema *kafala* (patrocinio), y un mecanismo de reparación legal al que no pueden acceder. Además, están sujetos a varias situaciones de explotación, que incluyen el pago retrasado de los salarios y los abusos verbales y sexuales. La Comisión también solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se adopten, en un futuro muy próximo, el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, así como el contrato tipo unificado, que regula su trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, se elaboró de conformidad con el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), habiéndose presentado el proyecto de ley al Consejo de Ministros para su discusión. El proyecto de ley otorgará algunas salvaguardias, como la cobertura de seguridad social, un alojamiento digno, el pago puntual de los salarios mediante transferencia bancaria, horas de trabajo (ocho horas al día), licencia por enfermedad y un día de descanso semanal. El Gobierno también indica que se estableció, en el Ministerio de Trabajo, un comité directivo para abordar las cuestiones relacionadas con los trabajadores domésticos migrantes, y que está compuesto por los departamentos ministeriales pertinentes, por representantes de las agencias de contratación privadas, ONG, algunas organizaciones internacionales y representantes de algunas embajadas. También participa en el comité directivo un representante del Equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente, en Beirut.

Además, el Gobierno indica que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo han adoptado una serie de medidas preventivas, que incluyen campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación, el establecimiento de un alojamiento «Beit al Aman» para los trabajadores domésticos migrantes que hacen frente a dificultades, en colaboración con Caritas, el nombramiento de asistentes sociales que examinan las condiciones laborales de los trabajadores domésticos migrantes en sus lugares de trabajo, la formación de inspectores del trabajo en condiciones laborales dignas y la conclusión de una serie de memorandos de entendimiento (MdE) con los países de origen, como Filipinas, Etiopía y Sri Lanka. La Comisión declara asimismo que el Ministerio de Trabajo estableció una oficina especializada para las quejas y una línea directa para brindar una asistencia jurídica a los trabajadores domésticos migrantes. Además, en virtud del decreto núm. 1/168, de 2015, sobre las agencias de contratación de los trabajadores domésticos migrantes, se prohíbe la imposición de comisiones de contratación a todos los trabajadores.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU, acogió con beneplácito las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes, que incluyen la expedición de contratos unificados, el requisito de los empleadores de suscribir una póliza de seguro, la regulación de las agencias de empleo, la adopción de una ley que penalice la trata de personas y la integración de esos trabajadores en la carta social, y la estrategia nacional para el desarrollo social. Sin embargo, el CEDAW expresó su preocupación ante las medidas que se revelaron insuficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos de esos trabajadores. El CEDAW manifiesta asimismo su preocupación por el rechazo, por parte del Ministerio de Trabajo, de la solicitud de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del establecimiento de un sindicato de trabajadores domésticos, por la ausencia de un mecanismo de aplicación para los contratos de trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes, por el acceso limitado de dichos trabajadores a la asistencia sanitaria y a la protección social, así como por la falta de ratificación del Convenio núm. 189. El CEDAW también manifestó su preocupación por la elevada incidencia de abusos contra las trabajadoras migrantes y la persistencia de prácticas como la retención de pasaportes por parte de los empleadores, el mantenimiento del sistema *kafala*, que pone a los trabajadores en una situación de riesgo de explotación y les dificulta abandonar a los empleadores abusivos. El CEDAW manifiesta su profunda **preocupación** ante los perturbadores informes documentados de los trabajadores domésticos migrantes que fallecen por causas no naturales, que incluyen suicidios y caídas de edificios altos, y ante el incumplimiento por el Estado parte de realizar investigaciones sobre esos fallecimientos (documento CEDAW/C/LBN/CO/4-5, párrafo 37).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa con **preocupación** que los trabajadores domésticos migrantes están sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador, como retención de pasaportes, impago de salarios, privación de la libertad y maltrato físico. Tales prácticas podrían ocasionar que su empleo se transforme en situaciones que constituyen un trabajo forzoso. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para otorgar a los trabajadores domésticos migrantes una adecuada protección legal, garantizando que se adopte en un futuro muy próximo el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, y que transmita una copia de la legislación en cuanto se haya adoptado. La Comisión también insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes estén plenamente protegidos de prácticas abusivas y de condiciones laborales que constituyan trabajo forzoso.***

Artículo 25. Sanciones penales por exigir un trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la información de la CSI, se encontró que la falta de unos mecanismos de queja accesibles, unos largos procedimientos judiciales y unas políticas restrictivas en materia de visados, disuaden a muchos trabajadores de presentar o proseguir las quejas contra sus empleadores. Aun cuando los trabajadores presenten quejas, las autoridades policiales y judiciales, por lo general, no tratan como delitos determinados abusos contra los trabajadores domésticos. La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 569 del Código Penal, que establece sanciones penales contra todo individuo que prive a otro de su libertad personal, se aplica a la exigencia de trabajo forzoso. Solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todo procedimiento legal que se haya instituido sobre la base del artículo 569 para juzgar los casos de trabajo forzoso y sobre las sanciones impuestas.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales de 2015, el CEDAW observó que los trabajadores domésticos migrantes tienen considerables dificultades para acceder a la justicia, incluidos el temor a ser expulsados y la incertidumbre acerca de las condiciones de residencia.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el trabajo de esta categoría de trabajadores está regulado por el contrato tipo unificado y la aplicación del artículo 569 del Código Penal es competencia del Poder Judicial, cuando se detecta una violación. La Comisión también toma nota de las copias de las decisiones judiciales aportadas por el Gobierno. Observa que los casos están relacionados con el impago de los salarios, con el acoso y con las condiciones laborales de los trabajadores domésticos migrantes. En todos los casos, los empleadores fueron condenados a pagar una sanción pecuniaria para indemnizar a los trabajadores.

Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que el artículo 25 del Convenio, dispone que la exigencia de un trabajo forzoso será objeto de sanciones penales. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los empleadores que contraten a trabajadores domésticos migrantes en situaciones que constituyan un trabajo forzoso serán objeto de sanciones realmente eficaces y estrictamente aplicadas. Solicita al Gobierno que comuniqué información acerca de las medidas adoptadas en ese sentido.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Libia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situaciones de trabajo forzoso derivadas del conflicto armado. Trata de trabajadores migrantes. La Comisión tomó nota anteriormente de los diversos informes realizados por varios órganos de las Naciones Unidas en relación con la grave crisis que atraviesa el país. La Comisión tomó nota, en particular, del informe sobre la investigación realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Libia, de 15 de febrero de 2016, en la que se indicaba que se habían detenido y privado de libertad de forma arbitraria a los migrantes, con frecuencia en condiciones inhumanas y sometidos a explotación económica y trabajos forzados. En este sentido, el Alto Comisionado recomendó al Gobierno que se ocupara con urgencia de la situación de los migrantes y adoptara medidas efectivas para combatir la trata de personas (documento A/HRC/31/47, párrafos 61 y 83, j)). La Comisión tomó nota también de la resolución núm. 2240, de octubre de 2015, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se condenan todos los actos de tráfico de migrantes y trata de personas hacia, desde y por el territorio libio y frente a las costas de Libia, que socavan aún más el proceso de estabilización del país y ponen en peligro la vida de miles de personas (documento S/RES/2240 (2015)). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el marco jurídico que garantiza el enjuiciamiento de los autores de los delitos de trata incluye el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Además, se está redactando un proyecto de ley sobre la lucha contra la trata de personas. El Gobierno hace referencia también a la constitución en el futuro de un comité contra la trata, que tendrá la misión de redactar un plan nacional de acción de lucha contra la trata.

La Comisión observa que, según el informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Libia es un país de destino y tránsito para migrantes. Muchos de ellos ven vulnerados sus derechos humanos y son objeto de abuso en el curso de sus viajes. Después de ser interceptados por hombres armados supuestamente de la guardia costera libia, los migrantes son llevados a centros de detención o a casas y granjas privadas donde son objeto de arresto arbitrario, explotación sexual y también sometidos a trabajos forzados. Además, son obligados a trabajar en granjas así como en la construcción y en el servicio doméstico, en el asfaltado de carreteras y en la recolección de basura («*Detained and Dehumanised*»: informe sobre los abusos en materia de derechos humanos contra migrantes en Libia, 13 de septiembre de 2016, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, págs. 1 y 18). Además, la Comisión toma nota de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución núm. 2388 de 2017, expresó su preocupación por el hecho de que la situación en Libia se vea agravada por el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas hacia, desde y por el territorio de Libia, lo que podría servir de apoyo a otras redes delictivas y redes terroristas en Libia (documento S/RES/2388). La Comisión se ve obligada a manifestar su ***profunda preocupación*** por la situación de los trabajadores migrantes en Libia, que están siendo objeto de prácticas de trabajos forzados, incluida la trata de personas. ***Al tiempo que reconoce la situación difícil que prevalece en el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y combatir la trata de personas. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores migrantes sometidos a trabajos forzados reciben protección plena frente a las prácticas abusivas. Asimismo, la Comisión recuerda la importancia de imponer sanciones penales apropiadas a los autores de estos delitos a fin de que el recurso a la trata o al trabajo forzoso no quede impune. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los autores de esos delitos sean procesados y se les impongan en la práctica sanciones penales lo suficientemente eficaces y disuasorias. Por último, la Comisión confía en que el proyecto de ley sobre la lucha contra la trata de personas será adoptado pronto y que el Gobierno proporcionará una copia cuando haya sido adoptado.***

La Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina con el fin de facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas o manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Desde hace varios años, la Comisión se ha estado refiriendo a las diversas disposiciones de la Ley de Publicaciones núm. 76, de 1972, en virtud de las cuales las personas que expresen determinadas opiniones políticas o manifiesten oposición ideológica al orden político,

social o económico establecido podrán ser sancionadas con penas de prisión (que entrañan, con arreglo al artículo 24, 1), del Código Penal, la obligación de realizar un trabajo). La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno señala que se modificaría la Ley de Publicaciones para tener en cuenta los comentarios de la Comisión. Además, tras el establecimiento del Consejo Revolucionario Transnacional, las leyes que no estaban en conformidad con los principios de libertad y democracia fueron suspendidas, incluida la Ley de Publicaciones. La Comisión tomó nota además de que, según el informe sobre la investigación realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Libia, los periodistas han sufrido graves acosos y amenazas de muerte; algunos han sido objeto de detención arbitraria y de secuestro. Algunos periodistas afrontan también juicios penales por difamación y calumnia por escribir sobre cuestiones políticas (documento 2016-A/HRC/31/47, párrafo 50).

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere a determinados artículos de la Ley de Publicaciones, indicando que esta ley es todavía objeto de estudio y modificaciones y se presentará a la autoridad legislativa en cuanto esté finalizada. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que el propósito del Convenio es asegurar que no se utilice ninguna forma de trabajo obligatorio incluido el trabajo penitenciario obligatorio en las circunstancias especificadas en el Convenio. No obstante, la Comisión ha observado que, en virtud de diversas disposiciones de la legislación mencionada anteriormente, pueden imponerse sanciones de prisión que conlleven trabajo obligatorio y, en consecuencia, no están en conformidad con el Convenio.

Además, la Comisión observa que según el informe del ACNUDH de 2018, los profesionales de los medios de comunicación, activistas y defensores de los derechos humanos han visto restringidos sus derechos a la libertad de expresión y de asociación y han sido víctimas de secuestros, detenciones y de detenciones arbitrarias (documento A/HRC/37/46, párrafo 47). Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a expresar su *profunda preocupación* por la situación actual en materia de derechos humanos en el país y reitera que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, inciden en la aplicación del Convenio, si estas medidas se aplican mediante sanciones que conlleven trabajo obligatorio. *Si bien reconoce la difícil situación que prevalece en el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que no pueda imponerse ninguna pena de prisión que conlleve trabajo obligatorio a las personas que, sin recurrir a la violencia, expresen opiniones o puntos de vista opuestos al sistema político, social o económico establecido. La Comisión confía en que se adoptarán las medidas necesarias para poner la Ley de Publicaciones núm. 76, de 1972, de conformidad con el Convenio, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.*

La Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina con el fin de facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Madagascar

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, b), del Convenio. Imposición del trabajo forzoso como método de movilización y de utilización de mano de obra con fines de desarrollo económico. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el servicio nacional, contemplado en la ordenanza núm. 78-002, de 16 de febrero de 1978, relativo a los principios generales del servicio no era compatible con el artículo 1, b), del Convenio. En efecto, según el artículo 2 de esta ordenanza, todos los malgaches tienen la obligación de cumplir con el servicio militar nacional, que se define como la participación obligatoria en la defensa nacional y el desarrollo económico y social del país. Las obligaciones derivadas del reclutamiento, que ponen al ciudadano al servicio efectivo de la defensa o del desarrollo, comprenden a los ciudadanos de ambos sexos por un período máximo de dos años y pueden efectuarse hasta la edad de 35 años. La Comisión solicitó al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner su legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de la observación del Gobierno según la cual, después de haber efectuado el censo y la revisión, los jóvenes llamados al servicio militar, deben cumplir con sus obligaciones de actividad debiendo escoger entre dos opciones: i) ser beneficiario de una prórroga por razones familiares, y según el caso, el llamado podrá ser anulado o aplazado por un año, y ii) o efectuar una formación profesional a través del Servicio Militar de Ayuda para el Desarrollo (SMAD). El SMAD tiene como objetivo facilitar la inserción en la vida activa de los jóvenes malgaches voluntarios para el servicio nacional. El SMAD se establece sobre la base de un voluntariado para los jóvenes; la duración de esta formación tiene un plazo de veinticuatro meses, al cabo de los cuales los voluntarios están liberados de dicha obligación. Estos jóvenes eligen entre la formación para oficios rurales o urbanos.

La Comisión recuerda nuevamente que los programas que implican la participación obligatoria de los jóvenes, en el marco del servicio militar o en su lugar, en actividades destinadas al desarrollo de su país, son incompatibles con el artículo 1, b), del Convenio que prohíbe la utilización del servicio nacional obligatorio como método de movilización de la mano de obra con fines de desarrollo económico. La Comisión también observa que la ordenanza de 1978 prevé que todos los malgaches están obligados a cumplir con el servicio nacional que se define como la participación obligatoria en la defensa nacional y en el desarrollo económico y social del país. *La Comisión pide firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner la ordenanza núm. 78-002, de 16 de febrero de 1978, en conformidad con el Convenio, y que garantice que el servicio nacional obligatorio no será utilizado como un método de movilización de la mano de obra con fines de desarrollo económico. A la espera de ello, la Comisión pide al Gobierno que precise la relación existente entre las obligaciones de actividad previstas en el*

marco del servicio nacional obligatorio, como se contempla en la ordenanza de 1978, y la participación en el SMAD. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique las modalidades prácticas de la aplicación del SMAD precisando si los jóvenes que han optado por el SMAD pueden renunciar por propia iniciativa. Finalmente, la Comisión pide al Gobierno que indique el número de abandonos registrados y las consecuencias que conllevan.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. *Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes respecto de la imposición de trabajo forzoso.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Departamento de Trabajo había adoptado diversas medidas para proteger a los trabajadores migrantes. Por ejemplo, se estableció un mecanismo de contratación de trabajadores extranjeros de gobierno a gobierno a fin de prevenir las prácticas de trabajo forzoso. El Gobierno señaló que el mecanismo de contratación de trabajadores migrantes de gobierno a gobierno no requiere agentes, terceras partes, intermediarios, agencias de empleo privadas u otros agentes de contratación de ambos países sino que debe llevarse a cabo a través de los departamentos designados a este fin por los dos países. Además, el Gobierno introdujo un contrato tipo de empleo bilingüe para todos los trabajadores migrantes así como un procedimiento operativo normalizado que requiere que los empleadores paguen sus salarios a los trabajadores a través de sus cuentas bancarias y consigan una cobertura de seguro para los trabajadores extranjeros. El Gobierno también indicó que el equipo especial encargado de hacer cumplir la ley realizó inspecciones rutinarias e investigó las quejas relacionadas con el trabajo forzoso. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 2015, los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, son contratados por agentes especializados utilizando prácticas engañosas acerca del tipo y las condiciones de empleo en Malasia y en los países de origen. En la mayor parte de los casos, los trabajadores son explotados a través de las prácticas siguientes: incumplimiento del contrato, pago de tasas de contratación e inmigración excesivas, reducción o impago del salario, jornadas laborales excesivamente largas, falta de días de descanso y condiciones análogas a la servidumbre por deudas. Además, se informa de que las prácticas de retención de pasaportes por parte de los empleadores son comunes. En este informe también se señala que los migrantes irregulares que quieren notificar abusos corren el riesgo real de ser acusados del delito «de entrada o estancia irregular» y ser detenidos y, en última instancia, deportados.

La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno informa de que entre 2016 y 2017 la Inspección del Trabajo detectó 132 casos relacionados con el trabajo forzoso e impuso multas por un total de 347 000 ringgit malayos (alrededor de 83 847 dólares de los Estados Unidos). Los principales indicadores de trabajo forzoso en los casos identificados fueron el impago de salarios y el abuso físico de los trabajadores. El Gobierno señala que, en el marco del mecanismo gobierno a gobierno, se han firmado memorandos de entendimiento con Bangladesh, Indonesia y Camboya, que se han aplicado. Además, el Gobierno aplica las directrices generales sobre la contratación, el empleo y la repatriación de trabajadores domésticos extranjeros. Asimismo, el Gobierno establece sistemas en línea gobierno a gobierno para la aplicación de las disposiciones relativas al empleo de los trabajadores extranjeros: el sistema de gestión de los trabajadores extranjeros (SPPA) para Bangladesh y el sistema integrado de gestión de los trabajadores extranjeros (ePPAx) para otros países, a fin de impedir la participación de terceras partes irresponsables.

La Comisión toma nota de que en el informe de 2017 titulado *Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia – Key findings in Malaysia* (Riesgos y recompensas: resultados de la migración con fines laborales en Asia sudoriental – Principales conclusiones en relación con Malasia), realizado conjuntamente por la OIT y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se señala que en Malasia el migrante promedio trabaja muchas horas (diez horas al día), casi todos los días (6,2 días a la semana) por un salario inferior al salario mínimo (286 dólares de los Estados Unidos). Además, los tipos más frecuentes de infracciones de los derechos laborales que sufren los trabajadores migrantes son las prácticas de empleo coercitivas tales como la retención de los documentos legales y el exceso de horas extraordinarias. La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes frente a estos abusos se ve intensificada por la falta de medios justos, eficaces y accesibles para resolver las quejas. Según el informe titulado *Protected or put in harm's way? Bans and restrictions on women's labour migration in ASEAN countries* (¿Protegida o en peligro? Prohibiciones y restricciones de la migración laboral de las mujeres en los países de la ASEAN), publicado conjuntamente por la OIT y ONU-Mujeres en 2017, debido a que continúa la gran demanda de trabajadores domésticos y a que un país de origen ha prohibido la contratación de sus nacionales a este fin, los trabajadores domésticos migrantes camboyanos que trabajan en Malasia informan de que los que los han contratado no les permiten volver a casa y los empleadores les obligan a firmar extensiones de contratos bajo la amenaza de no cobrar sus salarios. En el informe también se indica que estas amenazas tienen un impacto significativo sobre los trabajadores, habida cuenta de que la suma total de dos años de salarios a menudo se paga al final del contrato.

Si bien, toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los trabajadores migrantes, la Comisión también toma nota con *profunda preocupación* de que persisten las infracciones de los derechos laborales y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes continúan siendo abusivas y equivalen al trabajo forzoso. Los

empleadores confiscan los pasaportes de esos trabajadores, les pagan sus salarios con retraso y les obligan a trabajar muchas horas y a extender sus contratos. ***Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a reforzar las medidas para garantizar que los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, reciben plena protección frente a las prácticas abusivas y las condiciones equivalentes al trabajo forzoso. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluida información sobre la utilización de los mecanismos gobierno a gobierno para contratar trabajadores extranjeros así como sobre los acuerdos bilaterales firmados con los países de origen. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las actividades del equipo especial encargado de hacer cumplir la ley y otros organismos en materia de supervisión para combatir el trabajo forzoso y sobre los resultados alcanzados.***

2. *Trata de personas.* La Comisión tomó nota de que se había adoptado el Plan nacional de acción para combatir la trata de personas para el período 2016-2020 (NAP 2016-2020). El Gobierno firmó un memorando de entendimiento con Tailandia para combatir la trata de personas, que se centra especialmente en la protección de las víctimas de trata, la cooperación en materia de aplicación de la ley y el proceso de repatriación. Además, entre 2012 y 2015, 746 personas fueron arrestadas en relación con 550 casos relacionados con la trata de personas, con 1 138 víctimas. Asimismo, la Comisión tomó nota de que en el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas se señala que se estaban llevando a cabo campañas de sensibilización y formaciones a este respecto. También se promulgó una directiva para investigar todos los casos de trata que afectan a extranjeros con arreglo a la Ley contra la Trata de 2007 en su tenor enmendado en 2010 que pasó a denominarse Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley contra la Trata). Asimismo, en 2014 se adoptó una política gubernamental que permite a las víctimas de trata permanecer y trabajar legalmente en Malasia. Sin embargo, la Relatora Especial indicó que la investigación rápida y eficaz de los delitos con arreglo a la Ley contra la Trata se ve obstaculizada por una serie de factores tales como la limitada coordinación entre los organismos de aplicación de la ley y la falta de calificaciones para tratar casos de trata así como por la corrupción de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley. Además, los centros de acogida gestionados por el Ministerio de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Comunitario son equivalentes a centros de detención en los que las personas víctimas de trata son tratadas como delincuentes y no como víctimas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en 2015 se enmendó la Ley contra la Trata, que ahora tiene un enfoque más centrado en las víctimas en lo que respecta al permiso para moverse libremente, la autorización para trabajar, la prestación de ayudas y el pago de indemnizaciones. En consecuencia, en 2016 y 2017 se adoptaron diversos reglamentos de aplicación. Además, de la supervisión de la ley se ocupa el Consejo contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (MAPO), formado por organismos gubernamentales y ONG. El MAPO tiene cinco comités: el comité legislativo, el comité de aplicación, el comité de protección y rehabilitación, el comité especial para supervisar el tráfico de trabajadores y el comité sobre los medios de comunicación y la publicidad. En diciembre de 2016, el Comité de Alto Nivel del MAPO aprobó el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional a fin de reforzar la cooperación entre los organismos en materia de aplicación, en materia de investigación e intercambio de información. Asimismo, la Comisión toma nota de que en 2017 se dictaron 147 condenas por trata, en comparación con 100 en 2016, y 18 individuos (empleadores) fueron condenados por retención ilegal de pasaportes con arreglo a la Ley sobre los Pasaportes de 1966, que prevé penas de prisión de hasta cinco años o multas de 10 000 ringgit malayos o ambas sanciones. Además, en 2017 se identificaron 675 víctimas a las que se proporcionó la asistencia apropiada, de las cuales 134 recibieron permisos para moverse libremente, 11 recibieron permisos para trabajar y el resto fueron repatriadas a sus países de origen. La Comisión también toma nota de que el NAP 2016-2020 se elaboró gracias a un compromiso interinstitucional, centrándose en medidas a nivel regional e internacional.

La Comisión toma nota igualmente de que en sus observaciones finales de 2018 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló que Malasia sigue siendo un país de destino para la trata de mujeres y niñas, incluidas mujeres y niñas solicitantes de asilo y refugiadas, con fines de explotación sexual, mendicidad y trabajo forzoso. En particular, preocupa al Comité lo siguiente: i) la falta de un procedimiento formal y uniforme para identificar a las víctimas, lo cual puede dar lugar a que se penalice a mujeres y niñas objeto de trata por violar las leyes de inmigración; ii) la connivencia de los agentes del orden, algunos de los cuales al parecer aceptan sobornos para que personas indocumentadas crucen la frontera, y la impunidad de los responsables, entre ellos algunos funcionarios que estuvieron involucrados en los delitos que desembocaron en los campamentos para personas objeto de trata abandonados a lo largo de la frontera entre Malasia y Tailandia, descubiertos en mayo de 2015, y iii) la insuficiente asistencia que se proporciona a las víctimas de trata (documento CEDAW/C/MYS/CO/3-5, párrafo 25). ***Habida cuenta de la información antes señalada, la Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para prevenir, combatir y eliminar la trata de personas, y que tome las medidas necesarias para garantizar que todas las personas que cometen el delito de trata y delitos relacionados, incluidos los funcionarios encargados de la aplicación de la ley cómplices, son objeto de investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para reforzar las capacidades de los órganos de aplicación de la ley, a fin de garantizar que reciben la formación adecuada para mejorar la identificación de las víctimas de trata, así como medidas para garantizar una mayor coordinación entre esos organismos. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de víctimas de trata que han sido identificadas y que han recibido una protección adecuada, así como sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas a este respecto. Por último, la Comisión pide al***

Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para aplicar el Plan nacional de acción para combatir la trata de personas (2016-2020), y sobre los resultados alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) **(ratificación: 1999)**

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. 1. *Trabajo en régimen de servidumbre.* Durante algunos años, la Comisión ha venido planteando la cuestión del trabajo forzoso en las plantaciones de tabaco, en relación con las alegaciones de varias organizaciones de trabajadores, incluida la Confederación Sindical Internacional (CSI). El Gobierno declaró que prevé la abolición del sistema de tenencia de la tierra/aparcería y que se iniciarán pronto consultas a este respecto. El Gobierno también indicó que el sistema de tenencia de la tierra/aparcería constituye una grave violación de los derechos humanos, ya que fue concebido en una época en la que no se respetaban los derechos humanos. Por último, el Gobierno declaró que las partes interesadas y los interlocutores sociales consideran que se debe revisar la Ley de Empleo, para incluir la tenencia agrícola, y que mantendrá actualizada a la Comisión a ese respecto.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual, con el fin de abolir el sistema de tenencia de la tierra/aparcería, se celebraron consultas. Como consecuencia, se elaboró y presentó a las autoridades pertinentes el proyecto de ley de empleo (enmienda), para su adopción. El Gobierno indica que, una vez adoptada, se presentaría a la Comisión una copia de las disposiciones enmendadas. ***La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se adopte, sin demora, el proyecto de ley de empleo (enmienda), con el fin de asegurar la protección de los trabajadores que arriendan las tierras de cultivo frente a los mecanismos de endeudamiento que pueden generar servidumbre por deudas. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia del proyecto de ley en cuanto se haya adoptado.***

2. *Trata de personas.* La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción, en 2015, de la Ley sobre la Trata de Personas. La ley comprende, en su definición, el trabajo forzoso, así como la participación forzosa de personas en todas las formas de actividad sexual comercial (parte I). Una persona que someta a otra persona a la trata, comete un delito y podrá ser castigada con una pena de reclusión de 14 años, sin que tenga la opción de pagar una multa (artículo 14). En circunstancias agravantes, el traficante será sancionado con penas de reclusión de hasta 21 años. La Comisión también tomó nota de que la ley prevé el establecimiento de una Comisión Nacional de Coordinación contra la trata de personas. Además, la ley prevé varias medidas en relación con la protección de las víctimas de trata, incluido el establecimiento de refugios y un fondo de lucha contra la trata, con el fin de proporcionar cuidados, asistencia y apoyo a las víctimas de trata de personas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno acerca de la aplicación de la Ley sobre la Trata de Personas en la práctica. En 2017, 121 víctimas de trata fueron rescatadas, habiéndose arrestado a 42 sospechosos, al tiempo que, en 2016, se rescató a 168 víctimas de trata, habiéndose arrestado a 30 sospechosos. El Gobierno indica que se establecieron unidades de apoyo a las víctimas en varias comisarías de policías del país, que proporcionan un alojamiento temporal a las víctimas de trata, antes de las audiencias judiciales y durante las mismas. Una vez concluidos los casos, las víctimas fueron escoltadas de regreso a sus hogares por la policía, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil (CSO). Las CSO también prestan asistencia a las víctimas, incluido el alojamiento, el transporte y varios servicios de asesoramiento. El Gobierno indica asimismo las dificultades encontradas en relación con la trata transfronteriza, en particular en relación con la colaboración con otros países. ***La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas, y que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre la Trata de Personas, de 2015, incluido el número de investigaciones, de enjuiciamientos y de condenas, así como las sanciones específicas impuestas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre las actividades de la Comisión Nacional de Coordinación contra la trata de personas, así como sobre las medidas adoptadas para prestar asistencia a las víctimas de trata.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Marruecos

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) **(ratificación: 1957)**

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. *Trata de personas.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la ausencia de disposiciones legislativas que sancionaran expresamente la trata de personas y, por ese motivo, alentó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para aprobar una legislación completa de lucha contra la trata de personas.

La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la ley núm. 27-14 relativa a la lucha contra la trata de personas, promulgada por el *dahir* núm. 1-16-104, de 18 de julio de 2016. Toma nota de que la ley modifica las

disposiciones del Código Penal relativas a la trata de seres humanos y precisa que la explotación comprende, la explotación sexual y, particularmente, la explotación de la prostitución ajena, así como la explotación por medios pornográficos, incluidos medios de comunicación informática. La ley abarca también la explotación mediante trabajo forzoso, la servidumbre, la mendicidad, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud (artículo 448, 1) del Código Penal). La ley establece asimismo una pena de prisión de cinco a diez años y una multa por un delito relativo a la trata de personas (artículo 448, 2) del Código Penal).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que, en virtud de las disposiciones de la ley núm. 27-14, corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar, en la medida de los medios a su alcance, la protección, la atención médica y la asistencia psicológica y social a las víctimas de trata. Asimismo, es responsabilidad del Estado proporcionarles alojamiento a título provisional y la asistencia jurídica necesaria, así como facilitarles su reinserción a la vida social o la repatriación voluntaria hacia sus países de origen o de residencia (artículo 4). Además, en lo que se refiere a los procedimientos judiciales relativos a los casos de trata de personas, las víctimas están eximidas del pago de la tasa judicial relativa a la acción civil interpuesta para solicitar reparación por los perjuicios que les haya podido causar este delito. Las víctimas o sus derechohabientes se benefician asimismo de la asistencia judicial hasta el recurso de apelación incluido. Esta asistencia se extiende de pleno derecho a todos los actos de ejecución de decisiones judiciales (artículo 5). La Comisión toma nota además de que existe una comisión nacional encargada de la coordinación de las medidas contra la trata, cuya misión consiste especialmente en elaborar un plan de acción nacional para la lucha contra la trata de personas.

La Comisión toma nota asimismo de que la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, recomendó a Marruecos en su informe de 2017 que elaborara un plan de acción nacional en relación a la Ley de Lucha contra «la Trata de Personas» y estableciera indicadores claros para medir los progresos y los efectos de la acción policial; que formulara un mecanismo para reunir datos sobre los casos de trata; que redoblara los esfuerzos por procesar a los traficantes y que estableciera el marco jurídico y los procedimientos necesarios a los efectos de la protección de las víctimas y los testigos (documento A/HRC/WG.6/27/MAR/2, párrafo 46). ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 27-14 relativa a la lucha contra la trata de personas, señalando el número de investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo y condenas impuestas por trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como de explotación en el trabajo, así como las penas específicas impuestas a las personas condenadas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que señale las medidas adoptadas o previstas con miras a la adopción de un plan de acción nacional de lucha contra la trata, según se ha previsto en la ley núm. 27-14.***

Artículo 2, 2), d). Reclutamiento de personas. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificar o de derogar varios textos legislativos que autorizan el reclutamiento de personas y la requisita de bienes con miras a garantizar que satisfagan las necesidades del país (*dahirs* de 10 de agosto de 1915 y de 25 de marzo de 1918, retomados en el *dahir* de 13 de septiembre de 1938 y cuya vigencia se ha restituido por el decreto núm. 2-63-436, de 6 de noviembre de 1963). El Gobierno indicó que los *dahirs* de 25 de marzo de 1918 sobre los reclutamientos de civiles y de 11 de mayo de 1931 sobre los reclutamientos efectuados en aras del mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y la salud pública están orientados en el mismo sentido y sólo son aplicables en caso de fuerza mayor. La Comisión instó al Gobierno a que adoptase las medidas necesarias para garantizar la derogación o la modificación del *dahir* de 1938.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, pese a que el *dahir* de 13 de septiembre de 1938 sobre la organización general del país en tiempo de guerra pertenece a la categoría de textos jurídicos que datan de la época del Protectorado, su aplicación está íntimamente vinculada con el espíritu de la Constitución de 2011, que ha instaurado el principio de solidaridad para hacer frente a las cargas derivadas de los casos de fuerza mayor. La Comisión recuerda, no obstante, que los textos mencionados más arriba van más allá de lo que autoriza el *artículo 2, 2), d)*, del Convenio, en virtud del cual las facultades de reclutamiento y, por consiguiente de imponer trabajos, deberían limitarse a las circunstancias que pongan en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población; por otra parte, las disposiciones del *dahir* de 1938 se formulan en unos términos lo suficientemente amplios para que pudieran ser aplicados a un amplio abanico de circunstancias distintas de la fuerza mayor. ***En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar la derogación o la modificación del dahir de 1938 con miras a evitar cualquier tipo de ambigüedad jurídica y garantizar la conformidad de la legislación nacional con el Convenio y con la práctica indicada.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1966)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de determinadas opiniones políticas. Desde 2004, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno determinadas disposiciones del Código de la Prensa (artículos 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 y 53 del *dahir* (decreto) núm. 1-58-378, de 15 de noviembre de 1958, en su tenor modificado por la ley núm. 77-00, de 3 de octubre de 2002) que sancionan diversos delitos de prensa con una pena de prisión que entraña la obligación de trabajar en un establecimiento penitenciario en virtud de los artículos 24, 28 y 29 del Código Penal y del artículo 35 de la ley núm. 23-98

relativa a la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno señala que sigue en curso la revisión del Código de la Prensa, en la que se prevén disposiciones que modifican los artículos que no están en conformidad con el Convenio. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, a la mayor brevedad, para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la ley núm. 89-11 relativa al estatuto de los periodistas profesionales fue promulgada por el *dahir* núm. 1-6-51, de 27 de abril de 2010. Esta ley define la profesión del periodista, las diversas categorías de periodistas, las modalidades de expedición de la tarjeta para ejercer la profesión, la relación de trabajo en las empresas periodísticas, así como los diferentes casos de cese de la relación de trabajo. El Gobierno señala asimismo que se ha creado un Consejo Nacional de la Prensa (CNP) (ley núm. 90-13-*dahir* núm. 1-16-24, de 10 de marzo de 2016). El CNP se ocupa de velar por que se garantice y asegure el derecho de los ciudadanos a una información plural y se promueva la libertad de prensa y de edición. La Comisión toma nota con *satisfacción* de que desde ahora los artículos 71, 83 y 84 ya no prevén penas de prisión que impliquen la obligación de trabajar para los delitos de difamación, así como para la expresión de opiniones políticas en publicaciones periódicas que atenten contra la religión y el régimen monárquico.

Artículo 1, d). Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo por haber participado en huelgas. Desde hace varios años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno que el artículo 288 del Código Penal, según el cual toda persona que, mediante violencia, amenazas o maniobras fraudulentas, provoque o mantenga o intente provocar o mantener un cese concertado del trabajo con objeto de forzar el aumento y la reducción de los salarios o de ocasionar un perjuicio al libre ejercicio de la profesión o del trabajo, podrá ser condenada a una pena de prisión de un mes a dos años. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señaló que estaba en vías de adopción un proyecto de ley por el que se reglamenta el derecho de huelga y que, además, los tribunales nacionales no han tenido que recurrir a la aplicación de las disposiciones del artículo 288 del Código Penal.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha sometido al Parlamento, al término del período legislativo 2013-2016, un proyecto de ley orgánica sobre el ejercicio del derecho de huelga. Este proyecto que se encuentra en proceso de consultas continuas con los interlocutores económicos y sociales con miras a propiciar su aprobación concertada entre todos los participantes, forma parte del plan legislativo del Gobierno para el período 2017-2021. Conviene señalar asimismo que la cuestión de la revisión del artículo 288 del Código Penal se inscribe dentro de la reforma global del Código Penal en curso. ***La Comisión espera nuevamente que, en el marco de este proceso, los nuevos textos legislativos estarán en conformidad con el Convenio, y que no se podrá imponer una pena de prisión que entrañe trabajo obligatorio a los trabajadores que participen en una huelga de manera pacífica. La Comisión pide al Gobierno que comunique copia de los nuevos textos legislativos una vez que éstos hayan sido adoptados.***

Mozambique

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, a) y b), del Convenio. Trabajo obligatorio de personas calificadas de «improductivas» o «antisociales». Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de derogar la directiva ministerial de 15 de junio de 1985 sobre la evacuación de ciudades, que dispone que las personas calificadas de «improductivas» o «antisociales» pueden ser detenidas, enviadas a centros de reeducación o destinadas a sectores productivos. La Comisión había indicado que los centros de reeducación ya no existían y que la directiva de 1985 había caído en desuso y sería derogada en el marco de la revisión del Código Penal. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el nuevo Código Penal, adoptado en diciembre de 2014 (ley núm. 35/2014), no deroga esa directiva. La Comisión recuerda que, con arreglo a los *apartados a) y b) del artículo 1* del Convenio, los Estados se comprometen a no utilizar ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o de educación políticas o como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. ***La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para derogar formalmente la directiva ministerial de 15 de junio de 1985 sobre la evacuación de ciudades a fin de poner la legislación de conformidad con el Convenio y la práctica indicada y para garantizar la seguridad jurídica.***

Artículo 1, b) y c). Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar con fines de fomento económico y como medida de disciplina en el trabajo. Desde hace muchos años, la Comisión señala la necesidad de modificar o derogar determinadas disposiciones de la ley núm. 5/82, de 9 de junio de 1982, relativa a la defensa de la economía. Esta ley permite castigar aquellos comportamientos que, directa o indirectamente, comprometan el desarrollo económico, impidan la ejecución del plan estatal nacional y atenten contra el bienestar material y espiritual del pueblo. Los artículos 10, 12, 13, y 14 de la ley prevén penas de prisión (que comportan la obligación de trabajar) por faltar de diversas maneras a las obligaciones económicas enunciadas en las instrucciones, directivas, procedimientos, etc., que rigen, en particular, la preparación y la ejecución del plan estatal nacional. El artículo 7 de la ley penaliza aquellos comportamientos no intencionados (como la incuria, la falta de sentido de responsabilidad, etc.) que entrañan una violación de las normas de gestión y disciplina.

La Comisión había tomado nota de que, en 2007, el Consejo Constitucional declaró inconstitucional una ley adoptada por la Asamblea de la República que derogaba la ley núm. 5/82 y la ley núm. 9/86 que la había modificado, considerando que la derogación en bloque de estas leyes tendría por efecto dejar de incriminar y castigar determinadas conductas antieconómicas no sancionadas por otros textos, dejando así un vacío jurídico. La Comisión toma nota de que, si bien el Código Penal de 2014 deroga ciertas disposiciones de estas dos leyes, los artículos que fueran objeto de sus comentarios anteriores, a saber los artículos

7, 10, 12, 13 y 14, siguen en vigor. **La Comisión lamenta que el Gobierno no haya aprovechado la oportunidad que ofrece la adopción del nuevo Código Penal para poner su legislación de conformidad con el Convenio y espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para derogar las disposiciones de la ley núm. 583 relativa a la defensa de la economía, en su tenor modificado por la ley núm. 9/87, que son contrarias al Convenio.**

Artículo 1, d). Sanciones impuestas por haber participado en huelgas. La Comisión había tomado nota de que, en virtud del párrafo 3 del artículo 268 de la Ley del Trabajo (ley núm. 23/2007), los trabajadores en huelga que violan las disposiciones del apartado 1 del artículo 202 y del apartado 1 del artículo 209 (obligación de prestar un servicio mínimo) se exponen a sanciones disciplinarias y pueden incurrir en responsabilidad penal, de conformidad con la legislación general. La Comisión observa que el Gobierno no precisa la naturaleza de las penas a las que se exponen los trabajadores en huelga que incurrir en responsabilidad penal ni cuáles son las disposiciones de la legislación general aplicables al respecto. A este respecto, la Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 1, d), del Convenio, las personas que participen pacíficamente en una huelga no podrán ser objeto de sanción penal con pena de prisión por la que debieran realizar un trabajo obligatorio. **Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique la naturaleza de las penas a las que se exponen los trabajadores en huelga que incurrir en responsabilidad penal debido a la aplicación del párrafo 3, del artículo 268, de la Ley del Trabajo. Refiriéndose también a los comentarios de la Comisión sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que no se imponga ninguna pena de prisión que conlleve trabajo penitenciario obligatorio a los trabajadores que participen pacíficamente en una huelga.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Myanmar

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1955)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. 1. Compromiso de la OIT con la eliminación del trabajo forzoso. a) Antecedentes históricos. En marzo de 1997, se estableció una comisión de encuesta en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para abordar la situación del trabajo forzoso en Myanmar. Tal como se señaló al Consejo de Administración de la OIT, a lo largo de los años el trabajo forzoso ha adoptado diversas formas en el país, que incluyen el trabajo forzoso en zonas de conflicto así como para empresas públicas y privadas. En sus recomendaciones, la comisión de encuesta instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que: i) los textos legislativos pertinentes, en particular la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades, se ponían en conformidad con el Convenio; ii) en la práctica las autoridades, en particular los militares, no imponían más trabajo forzoso u obligatorio, y iii) se aplicaban estrictamente las sanciones que podían imponerse con arreglo al artículo 374 del Código Penal por exigir trabajo forzoso u obligatorio.

Desde entonces, y durante más de un decenio, la cuestión ha sido el eje de la cooperación entre el Gobierno y la OIT. En 2002, se estableció un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno y la OIT que permitió nombrar a un funcionario de enlace de la OIT. En 2007, se firmó un Protocolo de Entendimiento Complementario para, en particular, establecer un mecanismo de presentación de quejas con el objeto de «ofrecer oficialmente a las víctimas del trabajo forzoso la posibilidad de comunicar sus quejas a las autoridades competentes a través de los servicios del funcionario de enlace, a fin de obtener las reparaciones previstas en la legislación pertinente y de conformidad con el Convenio». Además, en 2012, la OIT firmó un Memorando de Entendimiento sobre una estrategia conjunta relativa a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar para 2015, que sentó las bases para siete planes de acción interrelacionados. La OIT también participó en el Equipo especial de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país respecto de los casos de reclutamiento de menores.

b) Acontecimientos recientes. El 22 de enero de 2018, el Gobierno y la OIT firmaron otro Memorando de Entendimiento, en el que se acordó un nuevo Plan de Acción para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso para el año 2018. El Plan de Acción se centra en cuatro prioridades, a saber: i) funcionamiento continuo del mecanismo de quejas; ii) formación y sensibilización sobre el trabajo forzoso, en particular para los funcionarios gubernamentales; iii) creación de capacidades para acabar con el trabajo forzoso a nivel regional y estatal, y iv) movilización de los interlocutores tripartitos para la prevención del trabajo forzoso en el sector privado. En particular, la prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario hasta el 31 de diciembre de 2018 permitirá que el mecanismo de quejas siga funcionando y una mayor cooperación sobre el trabajo forzoso durante el período de transición al Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), que recibió el dictamen positivo del Foro nacional de diálogo tripartito el 16 de enero de 2018. Durante su discusión más reciente del caso, en marzo de 2018, el Consejo de Administración concluyó que la prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario y el acuerdo sobre una nueva fase actualizada del Plan de Acción para la eliminación del trabajo forzoso, junto con el apoyo tripartito del primer PTDP para Myanmar son novedades que se acogen con gran satisfacción y que representan un importante progreso en el cumplimiento de las prioridades de los mandantes de la OIT (documento GB.332/INS/8, párrafo 17). En septiembre de 2018, el Gobierno de la Unión, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y la OIT acordaron el primer PTDP para Myanmar, que todas las partes consideran que es un paso importante para el progreso del país e indica que se está llevando a cabo un proceso de normalización del compromiso con la OIT y la comunidad internacional después de decenios de Gobierno autoritario y problemas relacionados con el trabajo forzoso.

2. *Aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con satisfacción de la adopción de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas, de 2012, que derogaba la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907 (artículo 37) y establecía que la utilización del trabajo forzoso por cualquier persona sería un delito penal que podía ser castigado con penas de prisión y multas (artículo 27A). No obstante, la Comisión tomó nota de que no se habían adoptado ni contemplado medidas para enmendar el artículo 359 de la Constitución (capítulo VIII – Ciudadanía, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos) que exime de la prohibición del trabajo forzoso a «las obligaciones asignadas por la República de Unión, de conformidad con la ley y en aras de los intereses del pueblo» y que podría interpretarse de modo tal que permita la imposición generalizada de trabajo forzoso a la población. El Gobierno señaló que la Constitución de 2008 se modificaría de acuerdo a lo solicitado. En relación con la aplicación práctica del Convenio, la Comisión acogió con agrado las diversas medidas adoptadas por el Gobierno en colaboración con la OIT a fin de erradicar el trabajo forzoso en la práctica. Estas medidas incluyen la realización de una amplia gama de actividades de sensibilización en todo el país, el apoyo a que se siga recurriendo al mecanismo de quejas en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario con el fin de que las víctimas del trabajo forzoso puedan obtener reparación así como medidas para que un considerable número de miembros del personal militar tenga que rendir cuentas por el recurso continuado al trabajo forzoso. Al tiempo que tomaba nota de los progresos realizados en aras de la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la Comisión observó que el trabajo forzoso se seguía utilizando en Myanmar.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que entre marzo de 2007 y junio de 2018 el mecanismo de quejas recibió un total de 754 casos, de los cuales 739 están relacionados con el reclutamiento de menores, 13 con el trabajo forzoso y dos con otras cuestiones. Se impusieron medidas disciplinarias militares por reclutamiento de menores a 377 miembros de las fuerzas armadas, a saber 64 oficiales y 313 soldados de otros rangos. Además, en el marco del Plan de Acción para la prevención del reclutamiento de menores, 448 miembros del personal de las fuerzas armadas fueron castigados con medidas disciplinarias militares. Sólo una persona fue castigada con arreglo al artículo 374 del Código Penal. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que se promulgaron directivas de aplicación de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas de 2012, para los administradores de distritos y aldeas y los departamentos administrativos generales a todos los niveles. Además, se realizaron 18 191 talleres de sensibilización sobre el trabajo forzoso en los que participaron 1 280 307 personas de todos los estados y regiones. También se proporcionó formación al personal militar para la prevención del reclutamiento de menores. Asimismo, el Gobierno señala que se ha asignado un presupuesto especial a las oficinas de administración de distritos y aldeas para prevenir la utilización de trabajo forzoso o no remunerado. También se han adoptado medidas para garantizar la aplicación de la legislación laboral, especialmente en el sector privado. La reforma de la legislación laboral sigue en curso con la asistencia técnica proporcionada por la OIT. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre los progresos realizados en lo que respecta a la enmienda del artículo 359 del capítulo VIII de la Constitución.

La Comisión toma nota de que, según el informe sobre la situación del PTDP (publicado en septiembre de 2018), la OIT ha colaborado con el Gobierno y los grupos armados étnicos para asegurar el compromiso a fin de acabar con el trabajo forzoso, lo que ha dado como resultado que al menos dos grupos armados no estatales se hayan comprometido a eliminar esta práctica. También es muy probable que los cambios que se producen en el marco del proceso de paz den resultados positivos en lo que respecta a la eliminación del trabajo forzoso, ya que el Acuerdo Nacional de alto el fuego de 2015 incluye compromisos para prevenir el trabajo forzoso de civiles y el reclutamiento de niños. La cuestión del trabajo forzoso también se destacó en la primera Conferencia de Paz que se celebró en agosto de 2016. Por consiguiente, se ha producido un descenso significativo del número de casos notificados de reclutamiento forzoso con fines militares tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los grupos armados. Asimismo, parece que como resultado del aumento de la sensibilización de las autoridades locales se está reduciendo el reclutamiento forzoso para realizar trabajos públicos. Sin embargo, resulta necesario intensificar más la formación del personal gubernamental sobre la aplicación efectiva de la ley y las campañas públicas de sensibilización. El Gobierno también ha indicado que quiere adoptar un enfoque más descentralizado en el que los gobiernos regionales y de los estados tengan más responsabilidades en la aplicación de los planes de acción y para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de eliminación del trabajo forzoso. También es necesario capacitar a la inspección del trabajo y a los interlocutores sociales para abordar la cuestión del trabajo forzoso en el sector privado.

No obstante, la Comisión toma nota de que según el informe sobre las conclusiones detalladas de la Misión Independiente de Investigación (*Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission*) que se llevó a cabo en Myanmar el 17 de septiembre de 2018 (documento A/HRC/39/CRP.2) persiste el uso del trabajo forzoso por las *Tatmadaw* (las fuerzas armadas de Myanmar), especialmente en los estados de Kachin y Shan, así como entre los grupos étnicos rakhine y rohingya. En muchos casos, las *Tatmadaw* llegan a una aldea y se llevan a los aldeanos directamente de sus casas o de las zonas aledañas a la aldea cuando están pescando, cultivando, haciendo recados o viajando. En algunos casos esto se hace de forma organizada, casa por casa, sobre la base de las cuotas de cada familia y utilizando una lista, o con la cooperación de los líderes de las aldeas. La duración del trabajo forzoso oscila entre algunos días o varios meses. A las personas obligadas a realizar trabajo forzoso se les encomiendan diversas tareas. Muchas tienen que trabajar como porteadores, transportando cargas pesadas que incluyen comida, ropa y en algunos casos armas. Otros tipos habituales de trabajo son escavar trincheras, limpiar, cocinar, recoger leña, cortar árboles y construir

carreteras o edificios en campamentos militares. Asimismo, algunas veces se exige a las víctimas que luchen o participen en las hostilidades. A menudo, no se proporciona comida suficiente a las víctimas, ésta es de mala calidad o no tienen nada para comer. No tienen acceso al agua y su alojamiento es inadecuado, e incluso duermen al aire libre sin camas y carecen de instalaciones sanitarias adecuadas. Si se resisten, trabajan lentamente o descansan las víctimas son tratadas con violencia. Las víctimas de sexo femenino, en particular, también son objeto de violencia sexual (párrafos 258-273, 412-424 y 614-615).

La Comisión toma nota de las medidas adoptadas y de los progresos realizados por el Gobierno en materia de eliminación del trabajo forzoso. No obstante, la Comisión se ve obligada a tomar nota con **profunda preocupación** de la persistencia del trabajo forzoso impuesto por las *Tatmadaw* en los estados de Kachin y Shan, así como entre los grupos étnicos rakhine y rohingya. Además, la Comisión observa que casi todo el personal militar que estaba involucrado en el trabajo forzoso ha sido objeto de sanciones disciplinarias, excepto una persona que fue castigada con arreglo al artículo 374 del Código Penal. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del *artículo 25* del Convenio, el hecho de imponer trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones *penales* y las sanciones impuestas por la ley deberán ser realmente eficaces y aplicarse estrictamente. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, tanto en la legislación como en la práctica, en particular el trabajo forzoso impuesto por las Tatmadaw. Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por la aplicación estricta de la legislación nacional, especialmente de las disposiciones de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas de 2012 y del Código Penal, a fin de que en todos los casos se impongan y apliquen penas de prisión lo suficientemente disuasorias a los autores de delitos. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación en la práctica de la legislación antes mencionada, y que incluya datos estadísticos sobre los casos de trabajo forzoso detectados y las sanciones específicas impuestas a los autores de este delito. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar que, en la práctica, las autoridades militares o civiles o las personas del sector privado ya no imponen trabajo forzoso, como por ejemplo actividades de sensibilización y creación de capacidades para los administradores locales, el personal militar, otras partes interesadas y el público en general. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en relación con la enmienda del artículo 359 de la Constitución. La Comisión reitera la firme esperanza de que se adopten sin demora todas las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento al Convenio a fin de garantizar que se elimina completamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio en Myanmar.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Nepal

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Trabajo en régimen de servidumbre. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de que el Ministerio de Reforma y Ordenación Territorial (MOLRM) estaba elaborando un proyecto de ley sobre el trabajo en régimen de servidumbre (prohibición, prevención y rehabilitación), que aboliría todos los tipos de sistemas de trabajo en condiciones de servidumbre y otras prácticas y costumbres abusivas, y derogaría la Ley de Prohibición del Trabajo Kamaiya, de 2002. También tomó nota de las diversas medidas de rehabilitación aplicadas para los trabajadores en régimen de servidumbre liberados en el marco del Programa de rehabilitación de las víctimas del *Kamaiya* y de desarrollo de sus medios de subsistencia; la concesión por el departamento de educación de becas, así como de alojamiento para las niñas *kamlari* liberadas (ofreciendo a niñas para el trabajo doméstico a las familias de los propietarios de latifundios), y el Plan de acción en materia de rehabilitación de los *haliya* liberados (trabajadores agrícolas en régimen de servidumbre). La Comisión pidió al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para asegurar la rehabilitación y la reintegración social de todos los trabajadores en condiciones de servidumbre liberados.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI acerca de que, si bien el Gobierno ha participado en un programa de rehabilitación destinado a los trabajadores en condiciones de servidumbre liberados, sigue habiendo un gran número de familias *haliya*, fundamentalmente en la región del extremo oeste geográficamente aislada, que no se benefician del programa y que corren el riesgo de retornar a una situación de trabajo en servidumbre para poder sobrevivir. En 2016, se estima que había 16 953 familias *haliya* trabajando en régimen de servidumbre. Sin embargo, se cree que su número más bien oscila entre 20 000 y 22 000. La CSI señala asimismo que la asistencia financiera prestada a los trabajadores en servidumbre liberados es inadecuada, y que las medidas de rehabilitación deberían incluir educación y formación para la adquisición de competencias profesionales, para que los trabajadores en servidumbre liberados puedan lograr el empoderamiento económico y acceder a oportunidades de trabajo decente.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, conforme a la cual de los 27 570 trabajadores en servidumbre liberados, 26 922 recibieron subvenciones para comprar tierras y construir casas. Toma nota asimismo de que el Gobierno indica que, en el marco del Plan de acción en materia de rehabilitación de los *haliya* liberados entre 2017 y 2018, se prestó apoyo a 37 familias para que compraran tierras, a 876 familias para que compraran madera, y a 1 005 familias para que construyeran casas. Además, se organizaron cinco cursos de formación para el desarrollo de competencias profesionales destinados a 80 *kamaiya* y *haliya*. También se ofrecieron 15 cursos de formación para el desarrollo de competencias profesionales orientados a los trabajadores en servidumbre liberados, y un total de 225 trabajadores se beneficiaron de dichos cursos.

La Comisión toma nota igualmente de que, según el informe sobre los progresos técnicos (TPR) de junio de 2018, elaborado en el marco del proyecto de la OIT titulado «Un puente para la acción global contra el trabajo forzoso 2015-2019» (proyecto «Bridge»), se han iniciado diversas sesiones de formación para la adquisición de competencias y para el fomento de la empleabilidad destinadas a los *haliya* liberados (600 participantes, incluidas 364 mujeres). A este respecto, se han concluido ocho sesiones de formación, otras seis están en curso, y se ha previsto iniciar próximamente diez más. Además, el proyecto «Bridge» está transmitiendo al Proyecto de la OIT sobre contratación equitativa una lista de 22 mujeres *haliya* liberadas, que actualmente figuran en una lista de espera para trabajar en el sector de la confección en Jordania. La Comisión toma nota asimismo de que, según el TPR, se han preparado y se difundirán próximamente instrumentos de promoción y sensibilización a través de los medios de comunicación, como un documental y un anuncio de interés público en la televisión y la radio, sobre el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, de la OIT. Además, se ha elaborado un proyecto final de ley sobre el trabajo en servidumbre, previa celebración de consultas con los miembros del grupo de promoción de la eliminación del trabajo forzoso, y con los Ministerios de Trabajo y Empleo y de Reforma y Ordenación Territorial. ***La Comisión alienta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para asegurar que se rehabilite y reintegre socialmente a todos los trabajadores en régimen de servidumbre liberados, en particular mediante la prestación de asistencia financiera adecuada, el desarrollo de competencias profesionales y otras actividades generadoras de ingresos. Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para cerciorarse de que los programas de rehabilitación lleguen asimismo a las familias haliya en la región del extremo oeste, y que siga suministrando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos. Por último, la Comisión expresa su firme esperanza de que el proyecto de ley sobre el trabajo en régimen de servidumbre (prohibición, prevención y rehabilitación) se adopte en breve, y pide al Gobierno que proporcione una copia, una vez adoptado.***

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25. 1. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la trata de personas, como la adopción del Plan de acción nacional contra la trata de personas 2011-2021; la creación del Comité nacional para el control de la trata de personas; el establecimiento de la Dirección de Servicios para Mujeres y Niños en la policía de Nepal, y de los centros de servicios para mujeres y niños en 39 distritos; el establecimiento de centros de vigilancia en las autopistas nacionales y en los puestos de control a lo largo de la frontera internacional, y la puesta en marcha de un sistema judicial de procedimiento acelerado que concede prioridad a los casos de trata de personas. Sin embargo, tomó nota de que, según el informe sobre la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2016, entre 2014 y 2015, el número de personas víctimas de trata osciló entre 8 000 y 8 500. En relación con esto, la Comisión tomó nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de 15 de abril de 2014 y de 12 de diciembre de 2014, respectivamente, expresaron su preocupación por la falta de aplicación efectiva de la Ley sobre Trata y Transporte de Seres Humanos (control), de 2007, y por la persistencia de la trata con fines de explotación sexual, trabajo forzoso, trabajo en condiciones de servidumbre, y servidumbre doméstica. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a que redoblara sus esfuerzos para prevenir, eliminar y combatir en la práctica la trata de personas, y para asegurar la aplicación efectiva de la Ley sobre Trata y Transporte de Seres Humanos (control), de 2007.

La Comisión toma nota de las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno, tal como se indica en su memoria:

- se ha establecido un mecanismo de coordinación entre los diversos ministerios y la Fiscalía General con miras a la aplicación efectiva de la Ley sobre Trata y Transporte de Seres Humanos (control), de 2007;
- con el fin de reducir el riesgo de que los adolescentes sean objeto de trata, se ha incorporado en los planes de estudio, de los cursos sexto a décimo, un tema sobre la trata de personas;
- se han iniciado diversos programas de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la trata de personas, también a través de los medios de comunicación, los diarios y la televisión nacional;
- se ha establecido en 20 distritos un centro de información sobre migración segura, y
- los centros de rehabilitación en diferentes distritos se han subcontratado a diversas ONG para asegurar su mejor funcionamiento.

La Comisión toma nota asimismo de la información suministrada por el Gobierno en su memoria sobre el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), relativa a los programas de formación proporcionados a diversas partes interesadas que luchan contra la trata de personas, incluida la policía de Nepal y los tribunales de distrito, así como a los programas de interacción llevados a cabo por los comités nacionales y de distrito para el control de la trata

de personas. La Comisión toma nota asimismo de que, según la memoria de Gobierno, entre 2016 y 2017, la policía de Nepal registró 227 casos de trata de personas en los que hubo 311 víctimas involucradas, de las cuales 308 eran mujeres. Además, según el informe de la Fiscalía General, durante ese mismo período, se presentaron a los tribunales 249 casos (incluidos casos nuevos y pendientes) relacionados con la trata de personas, y se impusieron condenas en 96 casos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe nacional sobre la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de junio de 2018, el número de casos de trata registrado por la policía de Nepal es relativamente bajo en comparación con el número real de víctimas de trata. ***Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para prevenir, eliminar y combatir la trata de personas, y a que tome las medidas necesarias para asegurar que todas las personas involucradas en la trata de personas y delitos conexos sean objeto de investigaciones exhaustivas y que se emprendan actuaciones judiciales contra ellas. A este respecto, pide al Gobierno que siga adoptando medidas para fortalecer las capacidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a fin de asegurar que se les imparta formación apropiada para mejorar la identificación de las víctimas de trata, y para asegurar una mayor coordinación entre dichos organismos. La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre las medidas concretas adoptadas en relación con esto y sobre los resultados obtenidos. Por último, pide al Gobierno que garantice la aplicación efectiva de la Ley sobre Trata y Transporte de Seres Humanos (control), de 2007, y que proporcione información sobre su aplicación en la práctica, en lo que respecta al número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones impuestas.***

2. *Situación de vulnerabilidad e imposición de trabajo forzoso.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno a fin de proteger a los trabajadores migrantes. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según el informe de 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la explotación y los abusos por parte de las agencias de contratación y los intermediarios en relación con el empleo en el extranjero estaban generalizados, en particular, el engaño (con respecto al salario, la naturaleza del trabajo y algunas veces incluso en el país de destino) y el fraude (como la expedición de informes médicos falsos, y de certificados de formación de orientación sin haber recibido realmente dicha formación, así como otras irregularidades, y de que cientos de hombres y mujeres eran víctimas de tales actividades fraudulentas y muchos de ellos acababan encontrándose en situaciones de trabajo forzoso o eran objeto de trata con fines de explotación laboral. El informe subrayó asimismo las formas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la migración laboral al extranjero, incluidas: la confiscación de los pasaportes por los empleadores/patrocinadores; la retención de los documentos de identidad y de viaje; la retención del salario; las amenazas de denuncia a las autoridades; las horas extraordinarias excesivas; los abusos físicos y sexuales, y el aislamiento. La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar que los trabajadores migrantes estén plenamente protegidos contra las prácticas y condiciones abusivas que equivalen a la imposición de trabajo forzoso, en particular a través de la aplicación efectiva de la Ley de Empleo en el Extranjero, a fin de luchar contra la práctica de explotación de las agencias de empleo privadas.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI en relación con la política del Gobierno de prohibir a las mujeres migrar para realizar trabajo doméstico ha aumentado su vulnerabilidad a los abusos y la explotación, y ha dado lugar a la preparación insuficiente previa a la partida, la regulación inadecuada de las agencias de contratación y la falta de representación diplomática en el Líbano, que es el principal país de destino de los trabajadores domésticos migrantes. La CSI indica que unos 13 000 trabajadores domésticos de Nepal trabajan en el Líbano.

La Comisión toma nota asimismo de que, según la información proporcionada por el Gobierno, se han adoptado las medidas siguientes para brindar protección a los trabajadores migrantes:

- está enmendándose la Ley de Empleo en el Extranjero, de 2007, y el reglamento, de 2008 con miras a incorporar nuevas disposiciones sobre la certificación de los acuerdos laborales a través de la Embajada de Nepal en el país de destino;
- se ha movilizado a los migrantes que regresan para que lleven a cabo campañas de sensibilización;
- el Gabinete ha aprobado una directiva para prestar asistencia jurídica a los trabajadores migrantes;
- se han descentralizado los servicios prestados por los diversos mecanismos institucionales relacionados con el empleo en el extranjero;
- se están supervisando e inspeccionando periódicamente las agencias de empleo privadas con miras a detectar prácticas de explotación, y
- se ha establecido un sistema de gestión de la información sobre el empleo en el extranjero en línea, que proporciona información detallada sobre las agencias de empleo privadas registradas y los procedimientos de contratación, así como una base de datos de otros organismos gubernamentales pertinentes y la función que desempeñan en el empleo en el extranjero.

La Comisión toma nota asimismo de que, en el marco del programa de asociación de la OIT y el Reino Unido titulado «Trabajar en Libertad» sobre la contratación equitativa y el trabajo decente para las trabajadoras migrantes en Asia Meridional y Oriente Medio: i) se empoderó a 18 833 trabajadores migrantes (14 317 de ellas mujeres) y a trabajadores en situación de riesgo, concienciándoles en mayor grado, proporcionándoles más información y desarrollando sus aptitudes; ii) aproximadamente 25 000 personas, incluidas 23 000 mujeres, se beneficiaron del programa de formación

de orientación previa a la partida sobre el empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento del trabajo, los servicios de orientación y los procesos de empleo en el extranjero, y iii) 450 trabajadores se adhirieron a un sindicato a través de la Federación Sindical de Nepal.

La Comisión señala además que, según el informe de 30 de abril de 2018 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, si bien Nepal ha realizado progresos considerables al asegurar la protección de los derechos de sus ciudadanos que migran al extranjero para trabajar, persisten importantes lagunas de la protección, y la aplicación, el cumplimiento y el control del cumplimiento siguen planteando dificultades. Toma nota de que, según este informe, el Gobierno de Nepal: i) ha introducido un curso de orientación de dos días obligatorio previo a la partida orientado a los trabajadores migrantes; ii) ha introducido la política de educación y formación técnica y profesional de 2012, que reconoce la necesidad de programas de formación para el desarrollo de las calificaciones; iii) ha establecido un fondo de bienestar para el rescate y la repatriación de trabajadores migrantes; iv) ha extendido los servicios de los centros de recursos para migrantes a 20 distritos; v) ha elaborado un proyecto que vincula a los migrantes que retornan con las instituciones de microfinanzas, y vi) ha respaldado las directrices para los trabajadores domésticos migrantes que exigen que las mujeres migrantes hayan alcanzado la edad de 24 años para poder trabajar en el extranjero, y la disposición que prevé que el Gobierno debe firmar acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento con los países a los que migran las mujeres para realizar trabajo doméstico. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe del Relator Especial:

- existen varios casos de violación de la Ley de Empleo en el Extranjero que hacen a los trabajadores migrantes más vulnerables a la explotación en el país de destino, por ejemplo, los casos en que: cambian las condiciones de trabajo, la remuneración, la empresa empleadora o el tipo de trabajo acordado en Nepal al llegar al país de destino; se sustituyen los contratos; los contratos no están disponibles en un idioma que los trabajadores migrantes comprendan; no se proporcionan copias de los contratos a los trabajadores, y no se paga a los trabajadores su salario o se efectúan deducciones del mismo;
- se cobra a los trabajadores migrantes unos costos de contratación que les hace más vulnerables a la trata y al trabajo forzoso, y
- la participación de la policía en la investigación de casos de contratación engañosa y de trabajo forzoso es limitada.

Por último, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la trata de personas en Nepal, entre 2016 y 2017, el número de trabajadores migrantes ascendió a 759 230, y el número total de migrantes que obtuvieron permisos de trabajo entre 2012 y 2013 y 2016 y 2017 alcanzó 2,23 millones, y muchos trabajadores migrantes se concentraron fundamentalmente en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En este informe se señala asimismo que, en lo que respecta al empleo en estos países, la Comisión Parlamentaria indicó: una alta prevalencia de trata y contrabando de personas organizado; el engaño y el fraude generalizados en la colocación de trabajadores en el extranjero; una alta prevalencia de explotación debido a un sistema dual de acuerdos laborales, y la prevalencia del sistema *kafala* (patrocinio). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los trabajadores migrantes, la Comisión toma nota con **preocupación** de las constantes prácticas y condiciones abusivas de los migrantes que equivalen a trabajo forzoso. ***Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar que se proteja plenamente a los trabajadores migrantes contra las prácticas y condiciones abusivas que constituyen trabajo forzoso, en particular a través de la aplicación efectiva de la Ley de Empleo en el Extranjero, con miras a combatir las prácticas de explotación que persisten en las empresas de colocación en el extranjero, en particular las agencias de contratación privadas. La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluida información sobre los esfuerzos de cooperación internacional realizados a fin de apoyar a los trabajadores migrantes en los países de destino, y las medidas adaptadas específicamente a las difíciles circunstancias a las que se enfrentan dichos trabajadores, con objeto de prevenir los casos de abuso y de responder a los mismos, y de garantizarles el acceso a la justicia, así como a otros mecanismos de presentación de quejas y de indemnización.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. 1. Marco jurídico y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente de la promulgación de la Ley de Ejecución y Administración con miras a la Prohibición de la Trata de Personas de 2015 (en adelante «Ley contra la Trata, de 2015»), que establece una lista detallada de delitos, como la trata de personas, el trabajo forzoso, la trata de esclavos o el comercio de esclavos, así como las sanciones aplicables para cada uno de esos delitos (artículos 15, 16, 22, 24 y 25). La Comisión tomó además de que la Ley contra la Trata prevé la creación del Organismo Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas (NAPTIP), en virtud del cual se crearon departamentos especiales tales como los departamentos de investigación y seguimiento, de asuntos legales, y de

enjuiciamientos (artículo 11). Desde su inicio, el NAPTIP ha arrestado a varios sospechosos de trata de personas, y ha logrado que los tribunales impongan condenas a 249 culpables de este delito.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual el NAPTIP sigue colaborando con la sociedad civil y toma medidas para garantizar una respuesta inmediata a las llamadas de auxilio. Además, dentro de las fuerzas de seguridad se ha creado una unidad contra la trata. La Comisión toma nota asimismo de que se han impuesto alrededor de 300 condenas, y que unos 100 casos siguen pendientes de resolución en los tribunales. Toma nota además de la información detallada que proporciona el Gobierno en relación con las condenas por delitos relativos a la trata de personas según la Ley contra la Trata, de 2015. En este sentido, de las condenas impuestas en 2017 y 2018, en ocho casos se impusieron penas de prisión a los culpables con la posibilidad de optar al pago de multas. No obstante, la Comisión observa que las disposiciones de la Ley contra la Trata de 2015 en esta materia establecen sanciones de prisión sin alternativa a acogerse al pago de multas, o además de las multas. Del mismo modo, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (CMW) de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre Nigeria de 2017, manifestó su preocupación por que los tribunales, en determinados casos continúan castigando a los traficantes con simples multas, a pesar de que la Ley contra la Trata de 2015 suprimió la capacidad de los jueces para imponer una multa en lugar de una pena de prisión por delitos de trata de personas (documento CMW/C/NGA/CO/1, párrafo 55). En relación al párrafo 319 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que, cuando las sanciones previstas consisten en una multa o una pena de prisión de corta duración, no pueden considerarse eficaces si se tiene en cuenta la gravedad de la violación y la necesidad de que las sanciones tengan carácter disuasorio. **La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la Ley contra la Trata, de 2015, se aplica de modo que se impongan y se ejecuten en todos los casos penas de prisión suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación en la práctica de la Ley contra la Trata, de 2015, señalando las actividades que realiza el NAPTIP, los datos estadísticos sobre los casos de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, así como la información sobre los resultados de los procedimientos legales que han sido instruidos y de las sanciones impuestas a los infractores.**

2. *Protección y asistencia para las víctimas de trata de personas.* La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno se había referido a diversas medidas adoptadas en relación a la protección y asistencia para las víctimas de trata, como las siguientes: i) la elaboración y la adopción de unas orientaciones prácticas sobre un mecanismo nacional de referencia; ii) la formación de funcionarios del Departamento de Asesoramiento y Rehabilitación con el fin de profesionalizar el trabajo social en el Organismo, y iii) la remodelación y mejora de los albergues de tránsito del NAPTIP a fin de proporcionar un servicio de calidad a las víctimas. A lo largo del año, se han rescatado y rehabilitado a un total de 9 738 víctimas. Además, la Comisión tomó nota de las disposiciones adoptadas en relación con las instalaciones de rehabilitación para las víctimas, la asistencia jurídica y médica, y los medios de formación previstos en virtud de la Ley contra la Trata, de 2015 (artículos 61-68). Tomó nota en particular de que, de conformidad con el artículo 67, se constituirá un fondo fiduciario para las víctimas de trata con el fin de restituir a las víctimas en sus derechos y de indemnizarlos por los daños y perjuicios causados.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se ha creado el Fondo Fiduciario. A las víctimas se les ofrecen varios servicios como formación profesional, asesoramiento y otras actividades de reinserción. Según la memoria del Gobierno de 2018, presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el número total de víctimas de trata que se han beneficiado del programa de rehabilitación del Gobierno entre 2015-2018 (junio) asciende a 2 731. La Comisión toma nota asimismo de las respuestas del Gobierno, de 2017, a la Lista de cuestiones y preguntas relativa a sus informes periódicos al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, según las cuales los ocho centros de acogida del NAPTIP ofrecen alojamiento provisional a las víctimas durante un máximo de seis semanas y que el NAPTIP colabora con otros centros de acogida privados a fin de garantizarles protección y asesoramiento y la rehabilitación, así como su posible inclusión en programas de protección de testigos (documento CEDAW/C/NGA/Q/7-8/Add.1, párrafos 53 y 60). La Comisión toma nota además de que, según las observaciones finales del CMW de 2017, falta información sobre los mecanismos para identificar a las víctimas, prestar apoyo y facilitar su rehabilitación, así como sobre la disponibilidad de estos mecanismos en todo el país (párrafo 55). **La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno que intensifique sus medidas para garantizar que se detecta a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral y se les ofrece la protección y la asistencia adecuadas. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de víctimas que han sido identificadas, que se han beneficiado de los servicios de protección y asistencia y que han recibido compensación del Fondo Fiduciario.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sierra Leona

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Trabajo agrícola obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 8, h), de la Ley sobre los Consejos de Tribu (capítulo 61), en virtud del cual se pueden imponer a los «indígenas» trabajos de cultivo obligatorio. En varias ocasiones, el Gobierno señaló que esta disposición sería enmendada. El Gobierno señaló también que el artículo 8, h), no es aplicable en la práctica y, puesto que contraviene el artículo 9 de la Constitución, seguiría siendo inaplicable.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, en el momento de la ratificación, los jefes con autoridad administrativa imponían a sus comunidades trabajo forzoso o comunitario, pero que se han adoptado medidas para erradicar esta práctica, incluyendo el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos en Sierra Leona. Sin embargo, el Gobierno afirma que, a pesar de la prohibición de trabajo forzoso u obligatorio, siguen cometiéndose infracciones de carácter menor. En este sentido, el Gobierno informa que se ha presentado un informe ante la Comisión de Derechos Humanos en relación con la realización de trabajos comunitarios por parte de un pueblo. ***Teniendo en cuenta que el Gobierno había anunciado anteriormente su intención de modificar esta ley, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para derogar el artículo 8, h), de la Ley sobre los Consejos de Tribu, a fin de ponerla de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. Solicita al Gobierno que siga suministrando información sobre la aplicación de esta ley en la práctica en relación con la imposición de trabajo obligatorio, incluyendo información sobre los informes presentados a este respecto ante la Comisión de Derechos Humanos.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Viet Nam

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2007)

Artículo 2, 2), a), del Convenio. Servicio militar obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que todos los nacionales tienen la obligación de participar en el servicio militar o las milicias o fuerzas de autodefensa, y que la participación en un servicio eximirá a la persona de la obligación de servir en otro. El artículo 8, 3), de la Ley sobre las Milicias y las Fuerzas de Autodefensa de 2009 prevé que las funciones de las milicias y las fuerzas de autodefensa incluyen, entre otras cosas, la protección de los bosques y la prevención de los incendios, la protección del medioambiente, y la construcción y el desarrollo socioeconómico de localidades y establecimientos. El Gobierno indicó que entre esos trabajos figuran el dragado de canales, la construcción de carreteras, el apoyo al desarrollo económico de los hogares, la plantación de árboles, y la contribución a la reducción y eliminación de la pobreza. Entre junio de 2010 y diciembre de 2012 estuvieron alistadas en las milicias y las fuerzas de autodefensa 163 124 personas que trabajaron un total de 2 508 812 días laborables.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que la participación de las milicias y las fuerzas de autodefensa en la construcción de proyectos de infraestructura y proyectos de bienestar a nivel local se lleva a cabo sobre la base de los debates y la autodeterminación, con arreglo a la ordenanza sobre la democracia en las comunas, los municipios y las aldeas núm. 34/2007/PL-LASC11. La Comisión también toma nota de que en virtud del artículo 9 de la Ley sobre las Milicias y las Fuerzas de Autodefensa de 2009, los nacionales de Viet Nam de entre 18 y 45 años (los hombres) y de entre 18 y 40 años (las mujeres) están obligados a servir en las milicias o las fuerzas de autodefensa. Su artículo 10 prevé que el servicio en las milicias y las fuerzas de autodefensa es de cuatro años. Además, teniendo en cuenta la situación concreta, la naturaleza de las tareas y los requisitos del trabajo, la duración del servicio puede prolongarse un máximo de dos años para las personas que sirven en las milicias o un período más largo para los miembros de las fuerzas de autodefensa y comandantes de las milicias o de las unidades de autodefensa hasta que alcancen los límites de edad. La decisión la adoptan los presidentes de los comités populares a nivel comunal y los jefes de las agencias u organizaciones.

La Comisión observa que, habida cuenta de la duración, el alcance y la amplia gama de trabajos que se exigen a la población en el marco del servicio obligatorio en las milicias o en las fuerzas de autodefensa, estos trabajos van más allá de las excepciones autorizadas por el artículo 2, 2), c), del Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno que el servicio militar obligatorio queda excluido del ámbito de aplicación del Convenio, siempre que se utilice para realizar «un trabajo de carácter puramente militar». Esta condición está destinada específicamente a impedir el enrolamiento de conscriptos con fines de obras públicas (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 274). ***Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en la legislación y en la práctica, para garantizar que las personas que trabajan en virtud de leyes que obligan a realizar el servicio militar, incluso en las milicias y las fuerzas de autodefensa, sólo realizan trabajos de naturaleza militar. También pide al Gobierno que transmita información sobre el número de personas que realizan el servicio obligatorio en las milicias o las fuerzas de autodefensa.***

Artículo 25. Sanciones penales y trabajo forzoso. La Comisión había tomado nota de que el artículo 8, 3), del Código del Trabajo de 2012 prohíbe la imposición de trabajo forzoso. Además, el artículo 239 de dicho Código señala que las personas que infringen sus disposiciones, dependiendo de la naturaleza y gravedad de estas infracciones, serán objeto de medidas disciplinarias y se les impondrán sanciones administrativas o serán enjuiciados por responsabilidad penal. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que el Ministerio de Justicia estaba realizando consultas sobre el contenido del Código Penal y pidió al Gobierno que incluyera el delito penal de trabajo forzoso en dicho Código.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el Código Penal (núm. 100/2015/QH13) se adoptó el 27 de noviembre de 2015 y que su artículo 297 prevé la responsabilidad penal por imposición de trabajo bajo coacción. Además, cualquier persona que utilice la violencia, la amenaza de violencia u otros métodos para obligar a alguien a trabajar contra su voluntad puede ser castigada con una multa de entre 50 millones y 200 millones de dong vietnamitas (aproximadamente entre 2 195 y 8 782 dólares de los Estados Unidos) o con una pena de prisión de entre seis meses y doce años. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación del artículo 297 del Código Penal de 2015 en la práctica, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones específicas impuestas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 29** (Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Bulgaria, Cabo Verde, Chad, Chile, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopía, Francia, Francia: Polinesia Francesa, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Hungría, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Islandia, Islas Salomón, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, República de Maldivas, Marruecos, Mauricio, República de Moldova, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Singapur, Timor-Leste, Viet Nam, Yemen); el **Convenio núm. 105** (Albania, Argelia, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Bulgaria, Burundi, Camboya, Chad, Chile, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Islas Salomón, Israel, Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Malawi, República de Maldivas, Malí, Mauricio, Mauritania, República de Moldova, Montenegro, Mozambique, Níger, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Yemen).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 29** (Vanuatu); el **Convenio núm. 105** (Armenia, Italia, Nepal, Vanuatu).

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

Albania

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno se adoptó la ley núm. 18/2017 sobre los derechos y la protección de los niños que prevé, entre otras cosas, el derecho de todos los niños a una educación gratuita y de calidad y su derecho a recibir protección contra la explotación económica. El artículo 34 de esta ley establece diversos mecanismos institucionales de asesoramiento y coordinación a nivel central y estatal sobre los derechos y la protección de los niños, entre los que figuran: el Consejo Nacional sobre los Derechos y la Protección de los Niños; el Grupo técnico intersectorial a nivel municipal o de la administración local; un ministerio para la coordinación de las cuestiones relacionadas con los derechos y la protección de los niños; el Organismo Estatal para la Protección de los Derechos del Niño y la Unidad de protección de los niños.

Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe sobre la aplicación del Plan de acción para los niños 2012-2015 (Informe sobre el Plan de acción) alrededor del 70 por ciento de las medidas previstas en el Plan de acción, incluidas las medidas en materia de protección social e inclusión y de protección frente a todas formas de violencia, abusos y explotación económica, y en relación con el derecho a una educación amplia y de calidad, ya se han aplicado mientras que las medidas a largo plazo siguen aplicándose. A este respecto, la Comisión toma nota de las siguientes medidas adoptadas en el ámbito de la protección social y de la inclusión: i) se han establecido estrategias de protección social para abordar cuestiones relacionadas con los pagos de la asistencia social, incluidas las ayudas económicas y otros servicios en materia de asistencia social; ii) a fin de reducir la pobreza y prevenir fenómenos sociales negativos que hacen aumentar la exclusión de los niños pobres, se aplicó un nuevo sistema con arreglo al programa de ayuda económica como proyecto piloto en tres zonas de Tirana, Durrës y Elbasan proporcionando 3 000 lek de Albania a niños de familias pobres durante el periodo en el que asistían a la escuela; iii) instituciones de asistencia social, servicios residenciales y servicios de hogares de guarda proporcionaron cuidados, alojamiento y otros servicios a niños necesitados y en situación difícil de todo el país, y iv) las unidades de protección del niño y las unidades de derechos del niño aprobaron las normas de funcionamiento del servicio que se utilizarán para medir y mejorar la calidad del servicio de protección de los niños. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe del Plan de acción en 2015 había 26 familias de acogida, nueve instituciones residenciales públicas y 15 instituciones no públicas que proporcionaban servicios a 309 niños, y había 202 unidades de protección del niño a nivel local y 12 unidades de derechos del niño a nivel regional para coordinar los servicios de protección del niño y gestionar los casos a nivel local. También toma nota de que, entre enero y marzo de 2015, las unidades de protección del niño se ocuparon de 849 casos de niños en riesgo. En lo que respecta al Plan de acción sobre la protección frente a todas las formas de violencia, abuso y explotación económica, las medidas más importantes son las relacionadas con la mejora de los marcos legales en este ámbito. A través de las enmiendas al Código Penal se han incrementado los castigos por delitos sexuales contra niños y se ha tipificado como un delito penal la explotación de niños en el trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el Informe del Plan de acción, una evaluación reciente del bienestar de los niños en Albania ha puesto de relieve que la proporción de niños que viven en la pobreza absoluta es del 17,4 por ciento, o sea que son 147 432 los niños que sufren esta situación. ***Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que redoble sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre las medidas tomadas por el Consejo Nacional sobre los Derechos y la Protección de los Niños; el Grupo técnico intersectorial; el Organismo Estatal para la Protección de los Derechos del Niño, y las unidades de protección del niño y las unidades de derechos del niño a fin de librar efectivamente a los niños del trabajo infantil, y además sobre los resultados alcanzados. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes desglosados por grupo de edad.***

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. Niños que trabajan por cuenta propia o niños que trabajan en el sector informal. La Comisión había tomado nota de que el artículo 3, 1), del Código del Trabajo parece excluir a los niños que trabajan fuera de un acuerdo de empleo, tales como los niños que trabajan por cuenta propia o los que trabajan en el sector informal, de la cobertura del Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de que el artículo 1, 2), del reglamento recientemente adoptado «sobre la protección de los niños en el trabajo, decisión núm. 108/2017» también excluye de su ámbito de aplicación a los niños que trabajan sin contrato de trabajo. La Comisión toma nota de que, en su memoria con arreglo al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Gobierno señala que ha adoptado medidas legislativas para reforzar el sistema de inspección del trabajo a fin de controlar efectivamente y aplicar la legislación laboral a nivel central y local. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 57/2017 «sobre algunas enmiendas y adenda a la Ley

núm. 9634/2006 sobre la Inspección del Trabajo». Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 12 de la ley núm. 57/2017 permite a los inspectores del trabajo imponer medidas con carácter de urgencia, incluso en caso de que detecte empleos informales. También toma nota de que el Gobierno informa de que, en 2016, la Inspección Estatal del Trabajo encontró a 226 niños de entre 15 y 18 años que trabajaban en empresas de manufactura, comercios, centros de llamadas y departamentos de transporte en violación de las disposiciones relacionadas con el empleo de los niños, por lo cual se impusieron sanciones administrativas a cuatro entidades. Sin embargo, en sus comentarios de 2017 con arreglo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (combinados), la Comisión tomó nota de que el número de inspecciones en el sector agrícola sigue siendo muy reducido y sólo constituye el 0,8 por ciento del total de inspecciones y de que el número de inspectores del trabajo empleados por la Inspección Estatal del Trabajo y los servicios sociales es reducido. Asimismo, tomó nota de que las oficinas regionales no tienen suficientes equipos de oficina ni suficientes vehículos y la falta de recursos financieros es preocupante. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar el funcionamiento de la Inspección del Trabajo proporcionando recursos humanos, financieros y materiales suficientes para permitirle controlar efectivamente a los niños que trabajan por cuenta propia y a los que trabajan en el sector agrícola y en otros ámbitos de la economía informal. También pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados y que presente toda la información estadística recopilada sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas relacionadas con los niños víctimas de trabajo infantil.***

Artículo 6. Aprendizaje y formación profesional. La Comisión había tomado nota de que el artículo 3 del decreto núm. 384, en su tenor enmendado por el decreto núm. 205, autoriza a los menores de 14 años a participar en el sistema de formación profesional siempre que se disponga de una autorización de la Inspección Estatal del Trabajo, lo cual contraviene el artículo 6 del Convenio que sólo autoriza el trabajo realizado por personas de al menos 14 años.

La Comisión toma nota con **satisfacción** de que se ha adoptado el artículo 98, 4), del nuevo Código del Trabajo núm. 136/2015, que prevé que los niños de entre 15 y 16 años puedan realizar una formación profesional según las reglas establecidas en una decisión del Consejo de Ministros.

Artículo 7, 3). **Determinación de los tipos de trabajos ligeros.** En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no se había promulgado ningún reglamento para determinar las actividades que constituyen trabajos ligeros o estipular el número de horas y las condiciones en las que puede realizarse dicho empleo o trabajo.

La Comisión toma nota con **satisfacción** de que según el artículo 99, 1), del Código del Trabajo núm. 136/2015, los adolescentes (a saber, los menores de entre 16 y 18 años) pueden ser contratados para realizar trabajos ligeros. Según este artículo los «trabajos ligeros» incluyen cualquier trabajo que, debido a la naturaleza indivisible de los deberes y las condiciones particulares en los que se realiza, no perjudique: i) la seguridad, la salud o el desarrollo del niño, y ii) la asistencia a la escuela, el seguimiento de programas de formación profesional, o la capacidad para aprovechar esta formación. La Comisión también toma nota de que, según el artículo 71, 1), b) y c), del Reglamento sobre la protección de los niños en el trabajo (decisión núm. 108/2017), un adolescente (entre 16 y 18 años) puede trabajar hasta dos horas al día los días en que asiste a la escuela y hasta 12 horas a la semana realizando un trabajo fuera de las horas escolares; y hasta seis horas al día y 30 horas a la semana durante las vacaciones escolares. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 98, 3), del Código del Trabajo y artículo 9 de la decisión núm. 108/2017 los niños de entre 15 y 16 años pueden trabajar sólo durante las vacaciones escolares realizando trabajos ligeros autorizados por la Inspección del Trabajo.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de 22 marzo de 2018 así como de la detallada discusión que tuvo lugar en la 104.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, celebrada en junio de 2015, en relación con la aplicación del Convenio por Albania.

Artículo 3, a), del Convenio. Venta y trata de niños para su explotación sexual comercial. La Comisión había tomado nota de las medidas legislativas y programáticas del Gobierno para proteger a los niños de la trata, incluida la adopción de la ley núm. 144, de 2013, que modificó el Código Penal, a fin de aumentar las sanciones por delitos contra los niños, incluidos los delitos relacionados con la trata, así como de las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia nacional contra la trata, incluido el establecimiento de procedimientos operativos estándar sobre la identificación y la derivación de las víctimas y las víctimas potenciales de trata. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó su grave preocupación por el hecho de que Albania continúa siendo un país de origen de niños que son objeto de trata con fines sexuales y tomó nota de la falta de datos disponibles sobre esos niños.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a: aplicar de forma efectiva la legislación de lucha contra la trata, adoptar medidas para su aplicación efectiva en la práctica y proporcionar a la Comisión de Expertos información sobre los progresos realizados a este respecto, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados, y de condenas y sanciones penales impuestas.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las investigaciones y enjuiciamientos realizados o las condenas impuestas en relación con los casos de trata de menores de 18 años. En cambio, se refiere a los datos estadísticos del Ministerio de Asuntos Internos que indican que en 2016 se encontraron 16 niñas que habían sido objeto de trata con fines sexuales. Sin embargo, la Comisión toma nota de la información que figura en el informe presentado por el Gobierno en junio de 2017 acerca de las medidas adoptadas para cumplir con la recomendación del Comité de las Partes sobre la aplicación de la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas (informe del Gobierno sobre la Convención del Consejo de Europa, 2017) según la cual en 2016 la policía de fronteras y migraciones identificó a 15 víctimas potenciales de trata, 11 de las cuales eran menores. Además, entre enero de 2016 y abril de 2017, se crearon 26 unidades sobre el terreno en el marco de un acuerdo de cooperación «sobre la identificación y protección de niños de la calle» firmado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Juventud (MoSAY), el Ministerio de Asuntos Internos y el Ministerio de Educación y Deportes, que han identificado a aproximadamente 580 niños de la calle, de los cuales dos se consideran víctimas de trata y cinco víctimas potenciales de trata. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe del Gobierno sobre la Convención del Consejo de Europa, 2017, para dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento entre el Coordinador Nacional contra la Trata, la policía estatal y el Fiscal General «para el establecimiento de un grupo de trabajo a fin de realizar un análisis integrado del caso no incoado y desestimado de trata de seres humanos», se ha establecido un grupo de trabajo. Además, el Gobierno indica que este grupo de trabajo está examinando una serie de casos de trata de seres humanos y que se preparará un informe junto con recomendaciones para mejorar la investigación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de julio de 2016, observó con preocupación que el Estado parte sigue siendo un lugar de origen y de destino para la trata de mujeres y niñas, en especial la trata vinculada al turismo en las zonas costeras, y lamentó la falta de información sobre el número de denuncias, enjuiciamientos y condenas en relación con los casos de trata de personas (documento CEDAW/C/ALB/CO/4, párrafo 24). **Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la trata de personas, la Comisión lo insta a adoptar las medidas necesarias para garantizar que en la práctica se realizan investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos de las personas que se dedican a la trata de niños y se les imponen sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias. A este respecto la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar las capacidades de los órganos encargados de la aplicación de la ley a fin de que puedan combatir la venta y la trata de menores de 18 años, en particular teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones del grupo de trabajo para mejorar la investigación. Además, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones penales impuestas en casos relacionados con la trata de niños.**

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. Niños de las comunidades romaní y egipcia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar las oportunidades de los niños romaníes de recibir una educación, incluidos el Plan de acción para los niños (2012-2015) y el Plan de acción para el decenio de la inclusión de los romaníes (2010-2015), que tienen por objetivo, entre otras cosas, registrar e incrementar la asistencia y la participación de los niños romaníes en la enseñanza preescolar y la enseñanza obligatoria. También tomó nota de las diversas reformas legislativas e institucionales que se han llevado a cabo en relación con la admisión y la asistencia a la escuela de los niños romaníes, así como de su programa de cooperación con el UNICEF con miras a brindar incentivos para que los niños romaníes asistan a la escuela. Sin embargo, también tomó nota de que, según el informe de evaluación de 2012 llevado a cabo por la Inspección de Enseñanza Preuniversitaria (IKAP), con la asistencia del UNICEF, sobre la aplicación del programa «La segunda oportunidad», a pesar de los programas del Gobierno para elevar la asistencia a la escuela aún sigue siendo muy bajo el número de niños romaníes que asisten a la escuela.

La Comisión toma nota de que el representante gubernamental indicó a la Comisión de la Conferencia que se ha formulado un plan de acción para proteger a los niños de todas las formas de abusos, centrándose principalmente en la formación y la sensibilización del público y de las organizaciones de la sociedad civil sobre el trabajo infantil. Además, bajo la coordinación del Organismo Estatal para la Protección de los Derechos del Niño se adoptó un plan de acción regional y se han llevado a cabo diversas actividades para incrementar la matriculación de los niños en las escuelas. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a continuar suprimiendo los obstáculos que se oponen a una mayor participación de los niños de las comunidades romaní y egipcia en el sistema educativo, incluido el acceso a la educación básica gratuita y a la educación en su propio idioma, y a continuar adoptando medidas para poner término a la trata y a la práctica de la mendicidad forzada en las calles.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, en el marco de la iniciativa «Escuela, un centro comunitario – una escuela accesible para todos», se han adoptado una serie de medidas para reducir el abandono escolar y mejorar la situación educativa de los niños pertenecientes a las comunidades romaní y egipcia y de otras categorías de niños vulnerables. Además, el Ministerio de Educación y Deportes ha apoyado proyectos para la educación de los niños romaníes y egipcios, entre otras cosas, facilitando su matriculación en escuelas aunque no tengan certificados de nacimiento, y proporcionando libros de texto gratuitos y becas a los niños de padres desempleados. Según la memoria del Gobierno, durante el año escolar 2015-2016, alrededor de 7 424 niños romaníes recibieron educación preuniversitaria y, en 2016-2017, alrededor de 350 alumnos romaníes y egipcios se beneficiaron de una parte de la cuota de becas y comidas gratuitas. Asimismo, la Comisión toma nota de que,

según el informe sobre la aplicación del Plan de acción para los niños (2012-2015), en el marco del Plan nacional de acción para el decenio de la inclusión de los romaní 2009-2015, durante el año 2014-2015, 5 766 niños romaní se matricularon en la escuela y, de éstos 4 437 lo hicieron en la educación primaria. Además, toma nota de que el Gobierno adoptó el Plan nacional de acción para la integración de las comunidades romaní y egipcia 2015-2020, a fin de facilitar el acceso de romaní y egipcios a los servicios públicos eliminando barreras y garantizando una educación inclusiva, el acceso al registro civil y el acceso a los servicios sanitarios y sociales, mejores empleos, y una mejora de la situación de la vivienda con miras a su integración en general. La Comisión toma nota de que, según el documento de este Plan nacional de acción, el 33,9 por ciento de la población romaní tiene menos de 14 años y, por lo tanto, debería asistir a la escuela. Sin embargo, muchos niños nunca se han matriculado y las tasas de abandono son elevadas. Además, se ha estimado que alrededor del 53 por ciento de los romaní y el 16 por ciento de los egipcios de más de 6 años de edad no finalizan el primer grado. ***Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo insta encarecidamente a intensificar sus esfuerzos, en particular a través de la aplicación efectiva del Plan nacional de acción para la integración de las comunidades romaní y egipcia 2015-2020, para facilitar el acceso a la educación de los niños de las comunidades romaní y egipcia a fin de impedir que sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los resultados logrados a través de estas medidas, especialmente en lo que respecta a incrementar la matriculación en la escuela y las tasas de finalización de la educación y reducir las tasas de abandono escolar de los niños de las comunidades romaní y egipcia.***

Apartado d). Identificar y llegar a los niños expuestos a riesgos especiales. Niños de la calle. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en el marco del acuerdo de Cooperación «sobre la identificación y protección de los niños de la calle», se proporcionan diversos servicios a las familias con niños de la calle, que incluyen: el registro de cada niño en el Registro Civil nacional; la matriculación en escuelas; el empleo de los padres, y la ubicación en instituciones de asistencia social, así como enviarlos a centros de día para niños a fin de que reciban asistencia. También toma nota de que el Gobierno indica que la aplicación de los planes de acción en el marco del acuerdo de cooperación ha llevado a identificar a 578 niños de la calle, y añade que 431 de estos casos fueron gestionados por las Unidades de Protección de la Infancia (CPU), y 234 niños fueron matriculados en escuelas. En la memoria del Gobierno también se señala que la iniciativa «Escuela, un centro comunitario – una escuela accesible para todos», que tiene por objetivo aumentar la cooperación y mejorar la alianza escuela-familia como unidad a fin de desarrollar todo el potencial de cada alumno perteneciente a las categorías vulnerables, se ha ampliado a 222 escuelas de todo el país. Asimismo, la Comisión toma nota de que con arreglo al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Gobierno indica que el 12 de abril de 2018 el Organismo Estatal para la Protección de los Derechos del Niño, en cooperación con el ayuntamiento de Tirana, organizó un programa de sensibilización sobre la protección de los niños de la calle.

La Comisión también toma nota de que según el informe sobre la aplicación por Albania de la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, elaborado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) y publicado en junio de 2016, se estableció un grupo de trabajo en Tirana del que forman parte representantes del Ministerio del Interior (MoI) y del MoSAY, así como de la oficina del Coordinador Nacional contra la Trata, del Organismo Estatal para la Protección de los Derechos del Niño, de la Dirección regional de policía de Tirana y de los servicios sociales para identificar y proteger a los niños de la calle. Además el MoI y el MoSAY establecieron una iniciativa titulada «Ayudar a las Familias y a los Niños de la Calle» con miras a proporcionar apoyo interdisciplinar a los niños de la calle (párrafo 61). ***La Comisión alienta al Gobierno a continuar adoptando medidas para proteger a los niños que viven y trabajan en la calle de las peores formas de trabajo infantil y prever su rehabilitación e integración social. Además, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados logrados.***

Argelia

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1962)

Artículo 3, 1), del Convenio. Período durante el cual se prohíbe el trabajo nocturno. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 27 de la ley núm. 90-11, de 21 de abril de 1990, relativa a las relaciones de trabajo, la expresión «trabajo nocturno» significa todo trabajo llevado a cabo entre las 21 horas y las 5 horas. Asimismo, había tomado nota de que el artículo 28 de dicha ley prohíbe ocupar a trabajadores de uno u otro sexo de menos de 19 años en «trabajo nocturno». La Comisión había observado que la ley relativa a las relaciones de trabajo retomaba las disposiciones de los artículos 13 y 14 de la ley núm. 91-03, de 21 de febrero de 1981, que desde hace muchos años son objeto de comentarios por el hecho de que la prohibición del trabajo nocturno de los menores no cubre un período de al menos once horas consecutivas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se va a reflexionar sobre los comentarios de la Comisión a este respecto y contemplar la posibilidad de insertar esa precisión en el proyecto de Código del Trabajo que se está elaborando. La Comisión observa que en el anteproyecto de ley del Código del Trabajo de la República Argelina Democrática y Popular se define, en el artículo 43, el trabajo nocturno como «todo período de trabajo que se realice entre las 21 horas y las 6 horas y que comprenda un intervalo de siete horas consecutivas con una pausa de una (1) hora». ***AI***

tiempo que recuerda que, en virtud del artículo 3, 1), del Convenio, el término «noche» significa un periodo de once horas consecutivas, por lo menos, que comprenda el intervalo que media entre las 22 horas y las 5 horas, y que el Gobierno lleva indicando desde 1990 que va a tener en cuenta los comentarios de la Comisión, ésta ruega encarecidamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias sin más dilación para dar pleno efecto a las disposiciones del artículo 3, 1), del Convenio. La Comisión le pide que comuniqué todo avance realizado en este sentido lo antes posible. Asimismo, la Comisión le solicita que aclare si, con arreglo al artículo 43 del anteproyecto de ley del Código del Trabajo, se considera trabajo nocturno el trabajo de menos de siete horas consecutivas llevado a cabo entre las 21 horas y las 6 horas.

Armenia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2006)

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión había observado anteriormente que, con arreglo a sus artículos 1, 1) y 13, el Código del Trabajo de 2004 y concretamente sus disposiciones sobre la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no se aplican al trabajo realizado fuera del marco de una relación de trabajo formal, como por ejemplo el trabajo por cuenta propia o el trabajo no remunerado. El Gobierno señaló que se tomarían las medidas necesarias a este respecto.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que, con arreglo al artículo 1 de la Ley sobre la Organización y la Realización de Inspecciones, se organizan y realizan inspecciones sobre las actividades de entidades comerciales y no comerciales, así como de empresarios individuales, en relación con su cumplimiento de la legislación pertinente. Sin embargo, en esta ley no se hace ninguna referencia específica al empleo de niños. La Comisión toma nota también de que, con la asistencia de la OIT, el Servicio Estadístico Nacional de Armenia llevó a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil y en 2016 publicó la *Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil en Armenia de 2015: Informe Analítico*. Según el informe, 39 300 niños (el 8,7 por ciento de los niños de entre 5 y 17 años) realizan trabajo infantil, y la gran mayoría de éstos (el 90,1 por ciento) trabajan en la agricultura. Además, sólo el 5 por ciento tiene un acuerdo verbal de empleo, el 25 por ciento trabaja por cuenta propia y el 70 por ciento son trabajadores familiares no remunerados (págs. 53-55). ***La Comisión toma nota de que hay muchos niños que trabajan en la economía informal e insta al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para garantizar que los niños que no están vinculados por una relación de empleo, por ejemplo los niños que realizan trabajos no remunerados, los que trabajan en el sector informal o los que trabajan por cuenta propia, disfruten de la protección prevista por el Convenio. A la espera de la adopción de estas medidas, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se aplica en la práctica la Ley sobre la Organización y la Realización de Inspecciones a fin de proteger a los niños que trabajan fuera del marco de una relación de trabajo formal.***

Artículo 8. Representaciones artísticas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que había elaborado un proyecto de ley para modificar y complementar el Código del Trabajo con el que pretendía regular la participación en representaciones artísticas de niños que no han alcanzado la edad mínima general.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el Código del Trabajo fue modificado por la ley núm. HO-96-N por la que se enmienda y complementa el Código del Trabajo, que se adoptó el 22 de junio de 2015 y entró en vigor el 22 de octubre de 2015. En su tenor enmendado, la parte 2.2 del artículo 17 del Código del Trabajo prevé que los niños de menos de 14 años pueden ser contratados por organizaciones cinematográficas, deportivas, teatrales o que organicen conciertos y en circos, trabajos creativos y/o producciones de televisión o radiofónicas con el consentimiento escrito de uno de sus padres biológicos o adoptivos, de sus tutores o de los órganos responsables de su tutela. Las actividades de estas organizaciones o producciones no deberían ser perjudiciales para su salud, seguridad o moralidad ni ir en detrimento de su educación. La Comisión también toma nota de que la parte 1 del artículo 140 prevé un tiempo de trabajo reducido para los niños de menos de 14 años, a saber: 1) para los niños de hasta 7 años de edad, hasta dos horas al día, pero no más de cuatro horas a la semana; 2) para los niños de entre 7 y 13 años, hasta tres horas al día pero no más de seis horas a la semana, y 3) para los niños de entre 12 y 14 años, hasta cuatro horas al día pero no más de doce horas a la semana.

A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 8 del Convenio permite excepciones a la prohibición del empleo o el trabajo de niños que no han alcanzado la edad mínima general, que según la legislación nacional es de 16 años. Además, con arreglo al artículo 8, 1) los niños podrán participar en representaciones artísticas siempre que la autoridad competente, y no los padres ni los representantes legales, otorguen permisos individuales para ello. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la parte 2.2 del artículo 17 del Código del Trabajo se enmienda para prever que los permisos individuales para la participación de menores de 16 años en representaciones artísticas se otorguen por la autoridad competente y no únicamente por los padres.***

Artículo 9, 1). Sanciones y aplicación de la ley. La Comisión había tomado nota de que, según el artículo 41 del Código de Delitos Administrativos, la infracción de lo dispuesto en legislación laboral u otros actos legislativos se sanciona con advertencias dirigidas al infractor. Estas infracciones, si se cometen hasta un año después de la advertencia,

pueden ser castigadas con una multa equivalente a 50 veces el salario mínimo. El Gobierno indicó que desde 2005 el órgano de inspección no ha recibido ninguna queja sobre explotación de niños ni ha detectado ninguna violación de la legislación pertinente.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que en las 115 inspecciones realizadas hasta julio de 2015 se detectaron cuatro casos de infracción de las disposiciones sobre el trabajo o el empleo de niños, incluidos dos casos de participación de niños en trabajos peligrosos y dos casos de exceso de horas de trabajo (36 horas a la semana) de menores de entre 16 y 18 años, de conformidad con la legislación pertinente. Las personas que infringieron las disposiciones antes mencionadas fueron objeto de una advertencia en materia de responsabilidad administrativa. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según la *Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil en Armenia de 2015: Informe analítico*, de los 52 000 niños que participaban en actividades económicas 39 300 (el 76 por ciento) realizaban trabajo infantil y 31 200 (el 60 por ciento) de ellos trabajos peligrosos (pág. 10).

A este respecto, la Comisión recuerda que en virtud del *artículo 9, 1)*, del Convenio la autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio. La Comisión también observa que el órgano de inspección sólo ha detectado un número reducido de infracciones de la legislación pertinente, mientras que en la encuesta se comprobó que hay muchos niños que realizan trabajo infantil y trabajos peligrosos. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar que las personas que infringen las disposiciones que dan efecto al Convenio son enjuiciadas y se les imponen sanciones adecuadas. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar los servicios de inspección a fin de mejorar su capacidad de detectar casos de trabajo infantil, por ejemplo asignando recursos suficientes o proporcionando formación adecuada a este respecto. Además, solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los tipos de infracciones detectadas por los órganos de inspección, el número de personas enjuiciadas y las sanciones impuestas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)

El Comité toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 4 de octubre de 2017.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Legislación provincial. Nueva Gales del Sur. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la división 15A de la Ley Penal que trata de los delitos relativos a la pornografía infantil se aplica sólo a los niños menores de 16 años. La Comisión también tomó nota de la formulación «material relacionado con abusos infligidos a niños» introducida por la ley de enmienda a la Ley Penal (pornografía infantil y material relacionado con abusos infligidos a niños) de 2010 que sustituye los términos «actuaciones pornográficas» y «pornografía infantil», tal como se utilizan en la división 15A de la Ley Penal. Con arreglo al artículo 91FB de la ley de enmienda a la Ley Penal, «material relacionado con abusos infligidos a niños» significa material que muestre o describa, de una manera que toda persona razonable consideraría, en toda circunstancia, ofensiva: *a)* un niño que es, parece ser o se insinúa que es, víctima de tortura, crueldad o abusos, y *b)* un niño que está, parece estar o se insinúa que está, realizando una pose sexual o una actividad sexual (tanto si se encuentra como si no se encuentra en presencia de otras personas). El Gobierno indicó que habida cuenta de que la edad de libre consentimiento sexual en Nueva Gales del Sur es de 16 años, elevar hasta los 18 años la edad para ser considerado niño a los efectos de la pornografía infantil tendría como consecuencia penalizar la representación de una conducta que de otro modo sería legal. Asimismo, el Gobierno indicó que aumentar la edad para autorizar la pornografía o las actuaciones pornográficas a 18 años generaría dificultades para que la acusación penal pueda probar con certeza la edad de la persona que aparece en las imágenes, dado que las diferencias físicas entre un joven de 17 años de edad y otro de 19 son menos evidentes que las que hay entre un adolescente de 14 años y otro de 16 años.

A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por el ACTU en relación a que Nueva Gales del Sur aún tiene que adoptar las disposiciones necesarias para extender la prohibición de la pornografía infantil hasta los 18 años de edad a fin de garantizar el cumplimiento del *artículo 3, b)*, del Convenio.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que el Gobierno de Nueva Gales del Sur se ha comprometido a proteger a todos los jóvenes para que no sean utilizados en la pornografía *sin su consentimiento*. Los menores de 18 años, así como los adultos, están protegidos de la explotación sexual comercial de la que pueden ser víctimas como consecuencia de amenazas o por la fuerza. El Gobierno indica que con arreglo al artículo 80D de la Ley Penal de 1900, constituye un delito hacer que una persona sea víctima, o siga siendo víctima, de servidumbre sexual, utilizando para ello la fuerza o amenazas. La servidumbre sexual se define como la utilización de una persona con fines comerciales para que muestre su cuerpo a fin de conseguir la excitación o gratificación sexual de otra persona. Este delito se puede sancionar con una pena de hasta quince años de prisión y si se comete contra un menor de 18 años se puede

imponer una pena máxima de veinte años de prisión. Además, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha introducido recientemente los nuevos delitos penales de tomar o registrar intencionalmente la imagen íntima de una persona *sin su consentimiento* y de compartir una imagen íntima de una persona *sin su consentimiento* (proyecto de ley de enmienda a la Ley Penal (imágenes íntimas), aprobado el 27 de junio de 2017).

Tomando nota de que la legislación de Nueva Gales del Sur prevé la protección de los niños menores de 16 años en lo que respecta a su participación en la producción de material sobre el abuso de niños y de los niños de más de 16 años si no dan su consentimiento, la Comisión hace de nuevo hincapié en la importancia de distinguir entre la edad de consentimiento sexual y la edad hasta la que se debe otorgar protección frente a la explotación sexual comercial. La Comisión considera que todos los menores de 18 años tienen derecho a estar absolutamente protegidos frente a la explotación sexual comercial, y que ni la edad de consentimiento ni la apariencia física afectan a la obligación de prohibir las peores formas de trabajo infantil. ***Por consiguiente, recordando que, en virtud del artículo 3, b), del Convenio la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas es considerada una de las peores formas de trabajo infantil y, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, esta práctica, considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, deberá prohibirse con carácter de urgencia, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para extender esta prohibición hasta los 18 años.***

Artículos 3, d), y 4, 1). Trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajos. Legislación provincial. Victoria. La Comisión tomó nota de que el artículo 12 de la Ley sobre el Empleo de los Niños de 2003 prohíbe el empleo de un niño (definido como una persona de menos de 15 años de edad) en la venta puerta a puerta, en barcos pesqueros, en edificios u obras de construcción o en cualquier otro trabajo prohibido y que la Ley de Minas de 1958 prohíbe el empleo de niños menores de 14 años en las minas y el de niños menores de 17 años en trabajos subterráneos en las minas. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para prohibir el empleo de menores de 18 años en trabajos que es probable que dañen su salud, seguridad o moralidad.

La Comisión toma nota de que la legislación de Victoria sobre este tema no se ha modificado. Asimismo, la Comisión señala que las medidas legislativas que figuran en la Ley sobre el Empleo de los Niños de 2003 se consideran adecuadas para los menores de 15 años, y que la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo contempla la obligación de los empleadores de garantizar que los niños que superen esta edad reciban protección para evitarles daños en los lugares de trabajo. Por consiguiente, la Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que en virtud del artículo 3, d), del Convenio, el trabajo que, por su naturaleza o las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe prohibirse para todos los menores de 18 años de edad. Asimismo, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 1, los Estados Miembros deberán adoptar las medidas necesarias para prohibir las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. ***La Comisión insta de nuevo al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que en Victoria se prohíba a los menores de 18 años desempeñar un trabajo que es probable que resulte perjudicial para su salud, seguridad o moralidad.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahamas

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

Artículo 2, 2) y 3), del Convenio. Elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión tomó nota de que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo especificada por Bahamas cuando ratificó el Convenio es de 14 años. También tomó nota de que el artículo 7, 2), de la Ley de Protección del Niño, de 2007, establece una edad mínima de 16 años para la admisión al empleo o al trabajo. Además, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 22, 3), de la Ley de Educación, la edad en que cesa la obligación escolar es de 16 años.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que se realizarán esfuerzos a través de un consejo tripartito para cambiar la situación y elevar la edad mínima a 16 años, tal como se establece en la legislación nacional. ***La Comisión saluda esta información y expresa la firme esperanza de que el Gobierno tome las medidas necesarias para elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que pasará de 14 años (la edad inicialmente especificada) a 16 años con arreglo a la Ley de Protección del Niño y se alineará con la edad en que cesa la obligación escolar de conformidad con la Ley de Educación. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que considere la posibilidad de transmitir una declaración en virtud del artículo 2, 2), del Convenio en la que se notifique al Director General de la OIT que se ha elevado la edad mínima que se había especificado previamente.***

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los interlocutores sociales tripartitos habían aprobado el proyecto de reglamento en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye disposiciones que determinan los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de reglamento en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aún no se ha finalizado y que este proyecto de reglamento se presentará de nuevo al Consejo Tripartito y se finalizará. **La Comisión expresa de nuevo la firme esperanza de que el Gobierno tome sin demora las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de reglamento sobre la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad se adopte en un futuro próximo. Pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto y una copia de la lista una vez que se haya adoptado.**

Artículo 7, 1) y 3). Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros y determinación de las actividades consideradas trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 7, 3), a), de la Ley de Protección del Niño dispone que un menor de 16 años de edad puede ser empleado por sus padres o tutores en trabajos ligeros domésticos, agrícolas u hortícolas. En diversas ocasiones, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas o previstas en lo que respecta a las disposiciones o reglamentos para determinar los trabajos ligeros que podrán realizar los jóvenes a partir de los 12 años de edad y las condiciones en las que tal empleo o trabajo podrá llevarse a cabo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los reglamentos que determinarán los trabajos ligeros se presentarán al Consejo Tripartito y se finalizarán. A este respecto, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno el artículo 7, 4), del Convenio que permite establecer una edad mínima más baja, a saber de 12 años para los trabajos ligeros; sólo si la edad mínima especificada en el artículo 2, 4) es de 14 años, mientras que en el artículo 7, 1) se establece la edad de 13 a 15 años como edad mínima para los trabajos ligeros, si la edad mínima declarada es de 13 años o más. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tenga en cuenta que en caso de que se realicen progresos en relación con elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14 a 16 años con arreglo al artículo 2, 2) y 3), del Convenio, la edad mínima de admisión a los trabajos ligeros debería modificarse en consecuencia. **La Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el Convenio determinando los trabajos ligeros que pueden realizar, a condición de que se eleve la edad mínima, los niños de 12 ó 13 años o más y las condiciones de esos trabajos. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Barbados

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota de la adopción de la Ley sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (prevención y control) de 2011, cuyo artículo 8 penaliza la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.

La Comisión toma debida nota de que en su memoria el Gobierno informa de que la Ley sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (prevención y control) de 2011 fue derogada y sustituida por la Ley sobre la Prevención de la Trata de Personas 2016-9, que contiene amplias disposiciones que abordan la cuestión de la trata. En virtud del artículo 4, la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual puede ser castigada con una multa de 2 millones de dólares de Barbados (BBD) (alrededor de 990 099 dólares de los Estados Unidos), cadena perpetua o ambas sanciones. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según las respuestas escritas del Gobierno a la lista de cuestiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 2017, desde 2015 no se han producido nuevas detenciones ni se han presentado nuevos cargos en relación con la trata (documento CEDAW/C/BRB/Q/5-8/Add.1, párrafo 52). En sus observaciones finales de 2017, el CEDAW expresó su preocupación por el hecho de que Barbados siga siendo un país de origen y destino de mujeres y niñas, también extranjeras, que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, como consecuencia de la elevada tasa de desempleo, el aumento de los niveles de pobreza y el escaso cumplimiento de la legislación contra la trata. El CEDAW también expresó su preocupación acerca de la falta de información sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas relacionados con la trata de mujeres y niñas (documento CEDAW/C/BRB/CO/5-8, párrafo 25). Además, en sus observaciones finales de 2017, el Comité de los Derechos del Niño también expresó su preocupación por la gran magnitud del fenómeno de la trata interna de niños, la falta de información sobre la situación en general y la falta de medidas eficaces para abordar y prevenir la venta y la trata de niños (documento CRC/C/7/BRB/CO/2, párrafo 58). **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la Ley sobre la Prevención de la Trata de Personas 2016-9, especialmente en lo que respecta a la trata de niños. También pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 4 de la ley, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las investigaciones y enjuiciamientos realizados, y las condenas y sanciones penales impuestas.**

Artículos 3, d), y 4, 1). Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que, si bien el artículo 8, 1), de la Ley de Empleo (disposiciones diversas) prohíbe el empleo de menores en cualquier trabajo que por su naturaleza o las circunstancias en las que se realiza puede perjudicar su salud, seguridad o moral, la legislación nacional no contiene ninguna determinación de estos tipos de trabajos, tal como se requiere con arreglo al artículo 4, 1), del

Convenio. El Gobierno indicó que se estaba considerando la posibilidad de elaborar una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo de 2005 entró en vigor en enero de 2013 y de que el proyecto de reglamento con arreglo a esta ley se había enviado a los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que realizaran comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha indicado repetidamente que los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años se abordan en textos legislativos específicos, incluidos la Ley de Fábricas, el reglamento sobre el control de los pesticidas, la Ley sobre la Protección de los Niños y la Ley de Empleo (disposiciones diversas). Sin embargo, la Comisión observa que en su conjunto estas disposiciones no constituyen una amplia determinación de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ninguno de los proyectos de reglamento con arreglo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aborda esta cuestión. Considerando que se ha estado refiriendo a esta cuestión desde 2004, la Comisión se ve obligada a expresar su **profunda preocupación** por el hecho de que no exista una amplia lista de los tipos de trabajos peligrosos que está prohibido que realicen los niños. La Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno el **artículo 4, 1)**, del Convenio, según el cual los tipos de trabajo a que se refiere el **artículo 3, d)**, deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular el párrafo 3 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190). **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la determinación de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años se incluye en la legislación nacional, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y le pide que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Benin

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) **(ratificación: 2001)**

Artículo 2, 1) y 3), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y edad en que cesa la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley núm. 2011-26, de 9 de enero de 2012, sobre la Prevención y la Represión de la Violencia Ejercida contra las Mujeres, dispone, en su artículo 4, que la escolarización será en adelante obligatoria para todos los niños, sin distinción de sexo, raza y religión, hasta la edad de 16 años. La Comisión observó asimismo, que la edad mínima de admisión al empleo de 14 años es en la actualidad inferior a la edad en la que cesa la escolaridad obligatoria de 16 años. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para elevar la edad mínima general de admisión al empleo o al trabajo, de modo de vincular la edad con el cese de la escolaridad obligatoria.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el nuevo proyecto de Código del Trabajo en examen en el Tribunal Supremo, elevó a 15 años la edad de admisión al trabajo y al aprendizaje. La Comisión toma nota de que, a pesar de este aumento, sigue establecido que la edad de cese de la escolaridad es superior a la requerida para la admisión al empleo. La Comisión toma nota no obstante de que el Gobierno está comprometido con la armonización de su legislación en el sentido de la corrección de estas disparidades. Al respecto, la Comisión toma nota de que la Ley núm. 2015-08, sobre el Código del Niño en la República de Benin, adoptada el 23 de enero de 2015, prevé, en su artículo 113, que la escolarización es obligatoria desde el preescolar hasta el final del ciclo primario. Según el informe final de la Encuesta agrupada de indicadores múltiples (MICS), de 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Análisis Económico (INSAE) en asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y publicada en enero de 2016, los niños inician en principio la escuela secundaria a partir de los 12 años de edad (pág. 249). Además, la Comisión observa que, según el artículo 409 del Código del Niño, se deroga toda disposición anterior. La Comisión recuerda nuevamente que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil y que, por consiguiente, es necesario vincular la edad de admisión al empleo y la edad en la que cesa la instrucción obligatoria. Subraya que el **artículo 2, 3)**, del Convenio, dispone que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. **En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar claramente la edad de cese de la escolaridad obligatoria y adoptar las medidas necesarias para elevar la edad mínima general de admisión al empleo o al trabajo, de modo de vincularla a la edad de cese de la escolaridad obligatoria. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre todo proceso realizado al respecto.**

Artículos 6 y 9, 1). *Aprendizaje y sanciones.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de los artículos 298 a 308 del Código del Trabajo, podrá imponerse una multa y una pena de reclusión por la violación de las disposiciones del Código del Trabajo o de los decretos relativos al empleo de los niños. Tomó nota asimismo de que, según los informes relativos a las visitas de inspección en los talleres, efectuados en 2013 y 2014, el Servicio departamental de formación continua y aprendizaje, ha observado casos de incumplimiento de la edad mínima requerida para el aprendizaje; se detectó a niños de 9 a 12 años trabajando en talleres como aprendices, en condiciones precarias y

sin remuneración. La Comisión también tomó nota, en las informaciones contenidas en los mencionados informes, de que los jefes de los artesanos siguen siendo reticentes a comunicar las informaciones solicitadas por los equipos de control y de que estos equipos raramente llegan a encontrarse con los propios jefes para sensibilizarlos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual está comprometido en la aplicación efectiva de sanciones eficaces y suficientemente disuasorias contra los maestros artesanos que admiten niños menores de 14 años de edad en los centros de aprendizaje. ***La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien intensificar sus esfuerzos para que se apliquen en la práctica sanciones eficaces y suficientemente disuasorias, en caso de infracción a las disposiciones relativas a la edad mínima de admisión de 14 años en el aprendizaje. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas y de las sanciones impuestas.***

Artículo 7, 1), 3) y 4). Admisión a los trabajos ligeros y determinación de estos tipos de trabajos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el decreto núm. 371, de 26 de agosto de 1987, sobre la excepción a la edad mínima de admisión al empleo de los niños, autoriza, con carácter excepcional, el empleo de niños de 12 a 14 años para los trabajos domésticos y los trabajos ligeros de carácter temporal o estacional. La Comisión observó que no se cumplieron las condiciones del artículo 7 del Convenio, a saber, que: i) los trabajos no sean susceptibles de perjudicar la salud o el desarrollo del niño; ii) los trabajos no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela y su participación en programas de orientación o formación profesional, y iii) determinados por la autoridad competente, ésta prescribirá la duración en horas y las condiciones de empleo.

La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual el Consejo Nacional del Trabajo validó un proyecto de decreto sobre la modificación del decreto núm. 371, con el fin de revisar al alza la edad mínima de admisión de los niños a los trabajos ligeros. Por otra parte, el Gobierno indicó que aún no se había modificado el decreto núm. 371, de 26 de agosto de 1987, dado que aún no se había determinado en Benin la lista de los trabajos ligeros. Se prevé proceder a la determinación de los trabajos ligeros en 2015. La Comisión solicitó al Gobierno que la tuviera informada de los progresos realizados al respecto.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto. ***La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que se adopte, en los más breves plazos, el proyecto de decreto sobre la modificación del decreto núm. 371, y de que se adopten sus disposiciones, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 7 del Convenio. Solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre los progresos realizados al respecto.***

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la ausencia de bases de datos estadísticos precisas respecto del número de niños trabajadores con edad inferior a la de admisión al empleo o al trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual cinco direcciones departamentales se beneficiaron de la instalación de la base de datos relativa al sistema de seguimiento del trabajo infantil (SSTEB). Sin embargo, aún no se hizo efectiva la puesta en práctica de esta base de datos, por haber surgido algunas dificultades. El Gobierno asegura a la Comisión que hará todo lo posible para que el sistema sea efectivamente operativo a partir de 2018. Además, en el marco de las reformas iniciadas por la Dirección General del Trabajo, se instituyó la célula de planificación y de estadística del trabajo. El objetivo previsto a través de la creación de este órgano, es el de hacer operativo, a partir de 2018, el sistema de estadística del trabajo en Benin. Por lo tanto, será más fácil disponer de datos estadísticos fiables sobre el fenómeno del trabajo infantil. La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe final de la MICS, de 2014, realizada por el INSAE, en asociación con el UNICEF, y publicado en enero de 2016, el 53 por ciento de los niños de edades comprendidas entre 5 y 17 años, están implicados en el trabajo infantil y el 40 por ciento trabaja en condiciones peligrosas (pág. 276).

La Comisión toma nota con ***preocupación*** del número elevado de niños que trabajan en Benin, incluso en condiciones peligrosas. ***Al respecto, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tenga a bien intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar de manera progresiva el trabajo infantil en el país, especialmente en las actividades peligrosas. Pide asimismo al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados en la implantación de la base de datos relativa al sistema de seguimiento del trabajo infantil (SSTEB). Solicita también al Gobierno que comunique informaciones estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones comprobadas por los inspectores del trabajo en el curso de sus visitas, que impliquen a niños menores de la edad mínima de admisión al empleo, incluidos aquellos que trabajan por cuenta propia o en el sector informal. En la medida de lo posible, estas informaciones deberían estar desglosadas por sexo y por edad.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3 del Convenio. Apartado a). Peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso. Niños vidomégons. La Comisión tomó nota con anterioridad de que Benin cuenta con un número importante de niños *vidomégons*, es decir, niños entregados a una tercera persona por sus padres o por un intermediario, con el fin de que puedan recibir una educación o para hacerles trabajar, y que son, en general, niños no escolarizados procedentes de zonas rurales. Tomó nota

de que este fenómeno, antes considerado como una forma de solidaridad tradicional entre padres y miembros de una familia, ha ido degenerando. Algunos niños implicados en este sistema son víctimas de malos tratos, que pueden llegar a la violencia física y psicológica.

La Comisión toma nota de la ausencia de información del Gobierno sobre este punto. La Comisión toma nota de que el Código del Niño (ley núm. 2015-08, de 8 de diciembre de 2015), prevé, en su artículo 219, la obligación de escolarizar al niño entregado y prohíbe la utilización de estos niños como trabajadores domésticos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de los Derechos del Niño tomó nota con preocupación de que la explotación sexual afecta a los niños entregados fuera de su familia, especialmente los *vidomégons*. El Comité de los Derechos del Niño expresó su inquietud respecto al hecho de que muchos niños menores de 14 años trabajen, y algunos estén sometidos a las peores formas de trabajo infantil y de que la práctica tradicional del *vidomégon* se asemeje al trabajo forzoso. Además, el Comité de los Derechos del Niño tomó nota con preocupación de la ausencia de informaciones sobre las medidas adoptadas para sancionar a las personas que explotan niños y añade que le es imposible saber si se aplican las decisiones formuladas por el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil y si éste tiene una dotación de recursos suficientes (documento CRC/C/BEN/CO/3-5, párrafos 38 y 62).

La Comisión señala asimismo que, en sus observaciones de 2015 sobre el informe periódico de Benin, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la persistencia de la deriva que ha tenido la entrega de niños *vidomégons*, que se ha convertido en una fuente de explotación económica y a veces sexual (documento CCPR/C/BEN/CO/2, párrafo 14).

La Comisión expresa su **preocupación** por la situación de los niños *vidomégons*, entregados a las familias de acogida, que están expuestos a diferentes formas de explotación. **En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para proteger a los niños *vidomégons* menores de 18 años de todas las formas de explotación mediante el trabajo forzoso o la explotación sexual. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que se apliquen sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los autores de estos actos. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto en la práctica.**

Artículos 3, a), y 7, 1). Peores formas de trabajo infantil y sanciones penales. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la ley núm. 2006-04, de 10 de abril de 2006, sobre las condiciones de desplazamiento de los menores y la represión de la trata de niños en la República de Benin, que prohíbe especialmente la venta y la trata de niños con fines de explotación económica y sexual. Sin embargo, la Comisión expresó su preocupación por la magnitud del fenómeno de la trata interna de niños con fines de explotación económica en Benin y por la disminución del número de condenas tras la adopción de la ley núm. 2006-04.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual en general está bien aplicada la ley núm. 2006-04, de 10 de abril de 2006, sobre las condiciones de desplazamiento de los menores y la represión de la trata de niños en la República de Benin. La Comisión toma nota asimismo de que el Código del Niño de 2015, contiene disposiciones relativas a la venta y a la trata de niños (artículos 200-203 y 212). El Gobierno también indica que aún no se encuentran disponibles las informaciones estadísticas relativas al número de condenas y de sanciones penales impuestas. Por otra parte, tampoco se dispone de las informaciones estadísticas solicitadas ante la Oficina Central de la Protección de Menores, de la familia y de la represión de la trata de seres humanos (OCPM) sobre los niños que fueron librados de la trata y repatriados.

Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por el número de niños que son víctimas de la trata nacional con fines de trabajo doméstico y de empleo en la agricultura de subsistencia y el comercio, o que están sometidos a la trata internacional con fines de explotación sexual y de trabajo doméstico en otros países, lo cual afecta especialmente a los adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño manifestó asimismo su inquietud respecto de que la tradición del *vidomégon* pudiera contribuir a alimentar la red de venta y de trata (documento CRC/C/BEN/CO/3-5, párrafo 66). Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones de 2015, sigue manifestando su preocupación de que Benin continúe siendo a la vez un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas, en particular mujeres y niños (documento CCPR/C/BEN/CO/2, párrafo 14). **Recordando que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva y el respeto de las disposiciones que dan efecto al Convenio, incluso mediante la imposición de sanciones penales suficientemente eficaces y disuasorias, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas eficaces para que se aplique efectivamente la ley núm. 2006-04, de 10 de abril de 2006, de modo que la prohibición de la venta y la trata de niños se extienda a todos los sectores de la economía. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones penales impuestas por la infracción a la trata de personas menores de 18 años.**

Artículo 7, 2). Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar la asistencia necesaria para librarlos de estas formas de trabajo. Niños que trabajan en minas y canteras. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación realizada por la CSA-Benin, según la cual en algunas localidades del país no es raro ver que los menores trabajan con sus padres, especialmente triturando piedras para venderlas. A tal efecto, la Comisión tomó nota de que se

había realizado un estudio, en el marco del proyecto de la OIT/IPEC ECOWAS II, en el que se detectó que 2 995 niños trabajan en 201 explotaciones mineras diferentes, representando el 88 por ciento los niños en edad escolar.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre este punto. La Comisión toma nota de que, tras la aplicación del proyecto OIT/IPEC ECOWAS II (de diciembre de 2010 a abril de 2014), se realizaron acciones específicas para impedir el trabajo infantil en las explotaciones mineras, como la sensibilización de los actores de las explotaciones mineras y su formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los explotadores de las canteras establecieron asimismo reglas de funcionamiento interno, que prevén sanciones contra los explotadores o los padres que empleen a menores en su explotación. Se instauraron también dispositivos de alerta, que permiten señalar al facilitador o a los responsables de las explotaciones la presencia de menores trabajadores. ***La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para adoptar medidas eficaces en un plazo determinado, a efectos de proteger a los niños de los trabajos peligrosos en el sector de las minas y las canteras. Solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de niños que habrán sido protegidos o liberados de este tipo de trabajo peligroso y luego rehabilitados e insertados socialmente tras la aplicación del proyecto OIT/IPEC ECOWAS II.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), recibidas el 31 de agosto de 2018, así como de la memoria del Gobierno y de los debates en profundidad que se realizaron en la Comisión de Aplicación de Normas durante la 107.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en mayo-junio de 2018, sobre la aplicación de este Convenio por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.^a reunión, mayo-junio de 2018)

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación con la adopción por el Gobierno del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio de 2014, en el que se añade el párrafo 129.II al artículo 129 del Código anterior a fin de reducir la edad mínima para trabajar de 14 a 10 años para actividades laborales por cuenta propia y a 12 años para quienes tengan una relación laboral por cuenta ajena, siempre que se den circunstancias excepcionales. La CSI señaló que esas excepciones a la edad mínima de 14 años son incompatibles con las previstas en el Convenio en lo que respecta a la edad mínima autorizada para realizar trabajos ligeros, en virtud del *artículo 7, párrafo 4*, que no autoriza el trabajo de los niños menores de 12 años. La Comisión también tomó nota de la declaración de la CSI según la cual permitir que los niños trabajen a partir de los 10 años de edad iría en menoscabo del período de escolaridad obligatoria de éstos, que en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una duración de doce años, es decir hasta por lo menos los 16 años de edad. La Comisión también tomó nota de las observaciones conjuntas de la OIE y la CEPB en las que se señalaba que la magnitud que ha alcanzado la economía informal en el país (70 por ciento) favorece el trabajo infantil, que no está sometido a la vigilancia de la inspección del trabajo, y que no existe trabajo infantil en el sector formal.

La Comisión deploró profundamente que el Gobierno reiterara que las modificaciones introducidas en el artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente permanecerían en vigor en tanto que disposiciones transitorias. El Gobierno indicó también que las nuevas excepciones a la edad mínima de 14 años, previstas en virtud del artículo 129 del Código, establecen y autorizan únicamente estas actividades a condición de que no atenten contra el derecho a la educación, la salud, la dignidad o el desarrollo integral del niño. Además, la Comisión señaló su profunda preocupación por la distinción establecida entre la edad mínima, fijada en 10 años, para los niños que realizan una actividad laboral por cuenta propia y la edad mínima, fijada en 12 años, para los niños que realizan una actividad por cuenta ajena. Por último, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se encarga de la aplicación del Convenio a través de las inspecciones móviles integradas e intersectoriales realizadas de oficio o a raíz de denuncias formuladas por las defensorías de la niñez y adolescencia para señalar los casos de trabajo de niños menores de 14 años.

Recordando que el objetivo del Convenio es eliminar el trabajo infantil y que alienta el aumento de la edad mínima pero no autoriza su reducción una vez que ha sido establecida (14 años en el momento de la ratificación del Convenio por el Estado Plurinacional de Bolivia), y tomando nota de los resultados positivos de las políticas económicas y sociales establecidas por el Gobierno, la Comisión instó al Gobierno a derogar las disposiciones de la legislación que fijan la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y a preparar inmediatamente, en consulta con los interlocutores sociales, una nueva ley que eleve la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en conformidad con el Convenio. Por último, la Comisión observó que el Gobierno disponía de 90 inspectores del trabajo (cuatro más que en 2012) y le pidió que dotara a

la inspección del trabajo de más recursos humanos y técnicos y garantizara la formación de los inspectores del trabajo para así dar un enfoque más eficaz y concreto a la aplicación del Convenio.

La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental señaló a la atención de la Comisión de la Conferencia la sentencia núm. 0025/2017 dictada por el Tribunal Constitucional el 21 de julio de 2017, en la que se declaran inconstitucionales el artículo 129.II del Código Niña, Niño y Adolescente y sus artículos conexos (artículos 130.III, 131.I, III y IV; 133.III y IV, y 138.I). La Comisión de la Conferencia tomó nota de que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia tomando como referencia y como fundamento jurídico los *artículos 1, 2, y 7* del Convenio. En sus conclusiones, instó al Gobierno a que, tras la derogación por el Tribunal Constitucional de las disposiciones del Código Niña, Niño y Adolescente, modifique la legislación nacional en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, de conformidad con el Convenio. La Comisión de la Conferencia también instó al Gobierno a poner a disposición de la inspección del trabajo más oportunidades de formación y recursos humanos, materiales y técnicos, especialmente en el sector informal, con miras a aplicar más eficazmente el Convenio en la legislación y en la práctica.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y la CEPB en las que se pide al Gobierno que colme el vacío jurídico que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional enmendando la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota con *interés* de que en su memoria el Gobierno indica que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la edad mínima de acceso al empleo o al trabajo prevista en el artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente, es de 14 años, en conformidad con el Convenio. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que al ser la sentencia del Tribunal Constitucional de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución, no es necesario revisar el Código Niña, Niño y Adolescente habida cuenta de que las disposiciones contrarias al Convenio ya no tienen fuerza de ley. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que desde 2017 hay 103 inspectores del trabajo y que en 2016 y 2017, a través de las oficinas móviles, la inspección del trabajo llevó a cabo 1 874 inspecciones relacionadas con el trabajo infantil y el trabajo forzoso, el 30 por ciento de las cuales se han transmitido a la justicia. ***Tomando nota de que el artículo 129.II, del Código Niña, Niño y Adolescente y sus artículos conexos han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, la Comisión toma nota también de la importancia en el plano jurídico, y en virtud de la Constitución de la OIT, de poner la legislación en conformidad con los convenios ratificados y pide, por consiguiente, al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adopte todas las medidas necesarias para modificar dicho Código a fin de que se fije los 14 años como edad mínima de acceso al empleo o al trabajo, en conformidad con el Convenio y la decisión del Tribunal Constitucional, a fin de evitar cualquier confusión y minimizar el riesgo de incumplimiento del Convenio. Le pide que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para reforzar las capacidades de los servicios de inspección del trabajo y que indique los métodos empleados para que la protección prevista por el Convenio también se garantice a los niños que trabajan en el sector informal.***

Artículo 6. Aprendizaje. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud de los artículos 28 y 58 de la Ley General del Trabajo, los niños menores de 14 años de edad pueden trabajar como aprendices, con o sin remuneración, y recordó al Gobierno que, en virtud del *artículo 6* del Convenio, éste no se aplica al trabajo efectuado en las empresas por personas de *por lo menos 14 años* cuando dicho trabajo se lleve a cabo en el marco de un programa de enseñanza, de formación o de orientación profesional. La Comisión también tomó nota de que, según el Gobierno, los inspectores del trabajo son responsables de la aplicación de las medidas para garantizar que los niños menores de 14 años no efectúen actividades de aprendizaje. La Comisión reconoció asimismo que las medidas para reforzar los servicios de la inspección del trabajo son esenciales para luchar contra el trabajo infantil, pero observó que los inspectores del trabajo deben poder basarse en disposiciones legislativas que no contravengan al Convenio, para que, de ese modo, puedan velar por la protección de los niños frente a condiciones de trabajo susceptibles de perjudicar su salud o su desarrollo. La Comisión tomó nota de que, pese a que el Gobierno se refirió a la Ley de Educación núm. 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez», de 20 de diciembre de 2010, en virtud de la cual se regula el sistema de formación y aprendizaje, la mencionada ley no establece una edad mínima para trabajar como aprendiz.

La Comisión toma nota con *preocupación* de que de nuevo la memoria del Gobierno no proporciona información alguna sobre las medidas adoptadas para prohibir que los niños de menos de 14 años efectúen un aprendizaje. De hecho, el Gobierno se limita a indicar que la lectura conjunta de los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General del Trabajo así como el artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente fija en 14 años la edad mínima para el aprendizaje. Sin embargo, la Comisión toma nota de que los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General del Trabajo no establecen una edad mínima para concluir un contrato de aprendizaje y no remiten al artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente. ***Recordando de nuevo que hace más de diez años que señala esta cuestión a la atención del Gobierno, la Comisión lo insta firmemente a adoptar las medidas necesarias para armonizar las disposiciones de la legislación nacional con el artículo 6 del Convenio a fin de establecer sin demora una edad mínima de admisión al aprendizaje que sea de al menos 14 años.***

Artículo 7, párrafos 1 y 4. Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota de los artículos 132 y 133 del Código Niña, Niño y Adolescente que permiten trabajar a los niños de 10 a 18 años, con la debida autorización de la autoridad competente, con sujeción a condiciones que limiten su horario laboral, no sean peligrosas para la vida, salud, integridad e imagen de la niña, niño o adolescente y no atenten contra su libertad de acceso a la educación. Recordó que en virtud del *artículo 7, párrafos 1 y 4*, del Convenio, se podrá autorizar el empleo o el trabajo de personas de más de 12 años, y no de

10 años, en trabajos ligeros, en determinadas condiciones, y por consiguiente instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para modificar los artículos 132 y 133 del Código Niña, Niño y Adolescente.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no considera necesario modificar la legislación ya que la sentencia núm. 0025/2017 del Tribunal Constitucional invalidó las disposiciones de los artículos 132 y 133 del Código Niña, Niño y Adolescente, que son contrarias al Convenio. ***La Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales interesados, adopte las medidas necesarias a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional para modificar el Código Niña, Niño y Adolescente a fin de fijar en 12 años la edad de admisión a los trabajos ligeros, en conformidad con lo que se dispone en el artículo 7, párrafos 1 y 4, del Convenio.***

Artículo 9, párrafo 3. Registro de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 138 del Código Niña, Niño y Adolescente, es necesario contar con registros de los niños y adolescentes trabajadores con el fin de obtener autorizaciones de trabajo. La Comisión observó que estos registros incluyen la autorización para trabajar de los niños de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Asimismo, tomó nota de la resolución núm. 434/2016 que prevé la inscripción en un registro de los menores de 14 años que realizan una actividad laboral así como de la resolución núm. 71/2016 que dispone la creación del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA) que registra y contiene información especializada sobre los derechos de la niña, niño y adolescente, incluidas las informaciones relativas a los niños que trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tras la sentencia núm. 0025/2017 del Tribunal Constitucional en la que se declara inconstitucional el artículo 138.I del Código Niña, Niño y Adolescente, el SINNA ha modificado su sistema para permitir el registro de los trabajadores adolescentes a partir de 14 años y ya no a partir de 10 años. ***La Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales interesados, adopte las medidas necesarias para modificar el Código Niña, Niño y Adolescente a fin de que, tras la inscripción en los registros, sólo se autorice a trabajar a los niños de 14 años, en conformidad con el Convenio y la práctica del SINNA.***

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de poner su legislación y su práctica en conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Botswana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 3, a), y 6 del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y programas de acción. Venta y trata de niños. La Comisión toma debida nota de la adopción de la Ley contra la Trata de Seres Humanos, de julio de 2014, que introduce un delito específico de trata de personas en la legislación nacional, así como el establecimiento de una comisión de trata de seres humanos (prohibición), en 2015. Toma nota de que los culpables del delito de trata con fines de trabajo forzoso o de explotación de la prostitución de otra persona podrán ser castigados con una pena de prisión de hasta treinta años y/o de una multa no superior a 1 millón de pulas (aproximadamente, 93 170 dólares de los Estados Unidos), en virtud del artículo 9 de la Ley contra la Trata de Seres Humanos. La ley prevé la creación de centros de niños víctimas de trata para garantizar la protección, la asistencia, el asesoramiento, la educación y la rehabilitación de niños (artículo 18). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se desarrolló un plan nacional de acción sobre la trata de seres humanos. Además, toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el plan estratégico de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) sobre la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, para el período 2009-2019, se está aplicando a través del Programa regional de cooperación política SADC. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que, junto a los Estados miembros de la SADC, incluida Botswana, la UNODC desarrolló un sistema de compilación de datos de las personas contra la trata, para garantizar la compilación de datos fiables sobre el delito de trata de personas.

La Comisión toma nota de las observaciones de la BFTU, en las que se informa de la continua existencia de prácticas de trata de niños a pesar de las leyes nacionales y de las medidas de control. La BFTU también declara que no se realiza de manera adecuada la enseñanza pública sobre trata y esclavitud. ***La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la efectiva aplicación de la Ley contra la Trata de Seres Humanos y le pide que comunique información en ese sentido, incluido el número de infracciones registradas, de investigaciones, procesamiento, condenas y sanciones impuestas por la venta y la trata de niños menores de 18 años de edad. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la adopción y la aplicación del Plan nacional de acción sobre la trata de seres humanos y su impacto en términos de eliminación de la trata de niños.***

Artículo 4, 1), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno, según la cual la junta consultiva tripartita del trabajo preparó un proyecto de lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los jóvenes, que estuvo circulando en los ministerios pertinentes para su

aprobación. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de la lista que determina los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad.

La Comisión toma nota con *interés* de la elaboración de la lista de los tipos de trabajo peligrosos por parte de los mandantes tripartitos, que incluye esos tipos de trabajo como: manipulación y pulverización de pesticidas y herbicidas, y exposición a sustancias químicas, polvos tóxicos, humos y gases; recogida de basuras; levantamiento de cargas pesadas; pesca y extracción de agua de los pozos sin una supervisión; elaboración de bebidas alcohólicas; trabajo subterráneo, nocturno y en altura, y trabajos de construcción de edificios. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la incorporación de la lista de los tipos de trabajo peligrosos en la Ley del Empleo se considerará durante el proceso de revisión de la legislación laboral en curso. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en un futuro muy próximo, el proyecto de lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. Solicita al Gobierno que transmita una copia de esta lista, en cuanto se haya adoptado.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños víctimas de explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación, en sus observaciones finales de 2010, de que las mujeres y las niñas entraran en la prostitución para mantenerse y mantener a sus familias como consecuencia de la pobreza. Tomó nota de que, dentro del Programa de Acción Nacional sobre la Erradicación del Trabajo Infantil (APEC), se impidió que 1 927 niños cayeran en la prostitución y se los retirara del trabajo infantil, incluso de la explotación sexual comercial. La Comisión también tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual los niños ocupados en la explotación sexual comercial, se identifican como niños con necesidad de protección, en virtud de la Ley de la Infancia, de 2009, y, según el artículo 54, el Ministro desarrollará programas y medidas de rehabilitación para reinsertar a los niños víctimas de abuso o de explotación.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual los niños que necesitan una protección pueden ser alojados en instituciones de bienestar infantil y recibir un apoyo psicosocial. El Gobierno indica que, teniendo en cuenta todas las formas de vulnerabilidad, son en la actualidad más de 450 los niños que residen en instituciones de bienestar infantil. El Gobierno también declara que se completó recientemente un estudio sobre la violencia contra los niños y que los resultados aportarán un indicio de la prevalencia de la violencia, en sus diferentes formas, en los niños. ***La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para librar a los niños víctimas de explotación sexual comercial y les preste la asistencia directa necesaria y adecuada, en virtud del artículo 54 de la Ley de la Infancia. Solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de niños víctimas de explotación sexual comercial que han sido efectivamente librados, rehabilitados y socialmente reinsertados como consecuencia de las medidas aplicadas, incluso aportando estadísticas compiladas, como resultado del estudio sobre la violencia contra los niños.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Brasil

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para eliminar el trabajo infantil, entre las que figuran un mecanismo específico de inspección y una estrategia intersectorial en el marco del Programa para la Eliminación del Trabajo Infantil (PETI), así como los sistemas de transferencia de ingresos, tales como el programa *Bolsa Família*. Entre los otros programas ejecutados figuran el Programa de Atención Integral a las Familias (PAIF) y el Programa social de protección básica. Además, el Gobierno elaboró y ejecutó el Plan para superar la extrema pobreza – Brasil sin miseria, que extendió el alcance de sus programas de transferencia de ingresos incluyendo a 1,3 millones de niños y adolescentes en el Programa de ayuda familiar de transferencia monetaria condicionada (*Brazil Carinhoso*) y amplió de tres a cinco por familia el número de niños que tienen derecho a recibir prestaciones adicionales. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información sobre las actividades realizadas y los resultados alcanzados en el marco de las actividades que la OIT/IPEC realiza en el Brasil, especialmente en relación con la eliminación del trabajo infantil a través de la educación. La Comisión acogió con agrado la información proporcionada por el Gobierno respecto a que los resultados de las encuestas nacionales de hogares de 1992 a 2012 ponen de relieve una considerable reducción del trabajo infantil, que pasó de 8,4 millones de niños (de entre 5 y 17 años) en 1992, a 3,3 millones de niños en 2014.

La Comisión toma nota de la información que figura en las observaciones de la CUT respecto a que, según las recientes encuestas nacionales de hogares, entre 2014 y 2015 se produjo un aumento significativo (12,3 por ciento) del número de niños de entre 5 y 9 años que realizan trabajo infantil. También indica que, según los datos de 2014, el 65,5 por ciento de los niños que realizaban trabajo infantil eran varones y niños afrobrasileños.

La Comisión toma nota de que, en relación con las iniciativas de transferencia de ingresos, el Gobierno indica en su memoria que, tras la adopción de la ordenanza núm. 318/2016 por el Ministerio de Desarrollo Social, las familias que tienen niños y adolescentes que realizan trabajo infantil se incluyen como beneficiarios en el Programa de ayuda familiar, que ha reemplazado al sistema de transferencia de ingresos a través del PETI. Los niños y adolescentes que realizan trabajo infantil reciben apoyo del Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos (SCFV) en más de 5 000 municipios. Los datos preliminares del registro mensual de ingresos sobre los Centros de Referencia de la Asistencia Social (CRAS) ponen de relieve que, en 2016, 188 000 familias con niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil fueron registradas en el Servicio de Protección y Atención Especializada a Familias e Individuos del Centro de Referencia Especializado de la Asistencia Social (PEAFI/CREAS). Además, según la encuesta nacional de hogares realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años que realizan trabajo infantil se redujo, pasando de 1 405 100 en 2014 a 1 064 117 en 2015. La última cifra mencionada incluye una estimación de 78 000 niños de entre 5 y 9 años, 333 000 niños de entre 10 y 13 años y 652 000 adolescentes de entre 14 y 15 años. El 69,7 por ciento de estos niños eran varones, el 51,9 por ciento vivían en zonas urbanas y el 53,6 por ciento realizaban trabajo no remunerado. Los niños que trabajaban lo hacían una media de 26,7 horas a la semana.

Asimismo, la Comisión toma nota de que, con el apoyo de la OIT/IPEC, el proyecto de plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores está siendo revisado por tercera vez y se espera que esté finalizado en julio de 2018. Además, la Comisión toma nota de que según el informe conjunto OIT-UNICEF-Banco Mundial titulado «Understanding Trends in Child Labour» (Entender las tendencias del trabajo infantil) de noviembre de 2017, en el Brasil, los cambios estructurales a largo plazo en las características de la población y la economía han contribuido sustancialmente a los cambios en materia de trabajo infantil y educación. La reducción de la pobreza y de la desigualdad han contribuido en conjunto a más del 14 por ciento de la reducción del trabajo infantil y a más del 12 por ciento del aumento de la asistencia a la escuela. *Bolsa Família*, independientemente de su impacto en la pobreza, ha contribuido en un 10 por ciento a la reducción del trabajo infantil y en un 17 por ciento al aumento de la asistencia a la escuela. Además, las inversiones para ampliar el acceso a los servicios públicos, que han ayudado a reducir la necesidad que tienen muchos padres de que sus hijos trabajen, han contribuido a un 9 por ciento de los progresos en la lucha contra el trabajo infantil y a un 8 por ciento de los progresos en lo que respecta a incrementar la asistencia a la escuela. ***La Comisión acoge con agrado las medidas concretas adoptadas por el Gobierno y los resultados alcanzados y le pide que continúe realizando esfuerzos para velar por la eliminación progresiva del trabajo infantil en el país, centrándose en los niños de menor edad, los varones y los niños afrobrasileños. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas en el marco del PETI reformado, el Programa de ayuda familiar y otras iniciativas, y que transmita información estadística sobre los resultados logrados a este respecto. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción del plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores, y que transmita una copia de este plan cuando haya sido adoptado.***

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 402 de la Ley Refundida del Trabajo excluye de su ámbito de aplicación el trabajo realizado por niños y adolescentes en empresas familiares, es decir, en las actividades económicas que se realizan a los fines de la subsistencia y mantenimiento de la familia. Asimismo, la Comisión tomó nota de que según el informe de la OIT de 2013 titulado *Perfil del trabajo decente en el Brasil – una perspectiva regional*, el 85,6 por ciento de los aproximadamente 910 000 niños menores de 14 años que trabajaban en establecimientos agrícolas lo hacían en la agricultura familiar. El Gobierno informó de que la lucha contra el trabajo infantil en el Brasil, por intermedio de inspecciones periódicas y de programas específicos para la erradicación de este trabajo, comprende los sectores formal e informal, incluidas las empresas familiares. A este respecto, la Comisión se remitió a su observación de 2013 relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la que señaló que una proporción significativa de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años que trabajan, desarrollan sus actividades en domicilios particulares y que esta situación limita la intervención de la inspección en razón del principio de inviolabilidad del domicilio, a lo que se suma el hecho de que la aplicación de instrumentos para el cumplimiento de la ley se circunscribe a las relaciones de empleo formales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que la inspección del trabajo recibe el apoyo de diversos organismos y entidades encargados de la protección de los niños y adolescentes con miras a detectar infracciones y realizar intervenciones en todos los sectores, independientemente de que exista o no una relación de trabajo formal. Asimismo, el Gobierno indica que a fin de planificar y supervisar mejor las actividades de lucha contra el trabajo infantil, así como para garantizar la transparencia de los informes de la Inspección del Trabajo, se estableció el Sistema de Información sobre los Focos de Trabajo Infantil (SITI) a través de la cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la OIT. El SITI se ocupa de detectar los focos de trabajo infantil en los sectores formal e informal así como los riesgos laborales y su impacto sobre la salud. Entre enero de 2014 y abril de 2017 se realizaron 25 815 inspecciones en relación con 24 213 niños y adolescentes. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según las observaciones del Sindicato Nacional de los Agentes de la Inspección del Trabajo (SINAIT) con arreglo al Convenio núm. 81, de 2017, la Inspección del Trabajo no puede garantizar su funcionamiento regular debido a la importante reducción presupuestaria (el 50 por ciento) que se realizó en 2017. Como resultado de ello, la realización de las actividades previstas sólo puede garantizarse hasta julio de 2017. Además, en sus observaciones con arreglo al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

(núm. 182), de 2017, indica que los inspectores del trabajo no disponen de medios de transporte para llevar a cabo una gran parte de las inspecciones sobre el trabajo infantil en zonas remotas o áreas rurales del interior. La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la elevada prevalencia del trabajo infantil en los sectores informal y agrícola, incluidos el trabajo no regulado, la venta ambulante, la recogida de basura y el trabajo forzoso en condiciones análogas a la esclavitud en explotaciones agrícolas (documento CRC/C/BRA/CO/2-4, párrafo 81). ***Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de los servicios de inspección del trabajo a fin de garantizar que se detectan los casos de trabajo infantil en la economía informal y que los niños menores de 16 años que trabajan por cuenta propia o en la agricultura familiar se benefician de la protección prevista por el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.***

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 7, 2), del Convenio. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a estos niños de las peores formas de trabajo infantil y para su rehabilitación e integración social. Trata y explotación sexual de niños con fines comerciales. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno informaba que el Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre había integrado en el marco del Plan nacional para combatir la violencia sexual contra los niños, de 2013, medidas preventivas y de protección de los niños víctimas de explotación sexual. Asimismo, el Gobierno indicó que la Comisión intersectorial para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes continuaba trabajando sistemáticamente en frentes simultáneos de protección, justicia y asistencia a niños y adolescentes.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la Comisión intersectorial para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes del Ministerio de Justicia lleva a cabo iniciativas en materia de rendición de cuentas a través de una red. El Departamento Nacional de Derechos de los Niños y Adolescentes, que depende del Ministerio de Derechos Humanos, también apoya diversas actividades de sensibilización a este respecto centrándose en importantes festivales públicos, eventos deportivos y grandes proyectos de desarrollo. Además, en 2008 se inició el programa *ViraVida*, patrocinado por el Servicio Social de la Industria que depende de la Confederación Nacional de la Industria, a través del que se sigue proporcionando formación profesional a jóvenes víctimas de violencia sexual de más de 16 años de edad. Actualmente, participan en el programa 5 000 jóvenes. El Gobierno también indica que, entre 2015 y 2017, los inspectores del trabajo realizaron 23 inspecciones y libraron a 24 adolescentes de la explotación sexual comercial. La Comisión toma nota de esta información y de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) expresó su grave preocupación por el número elevado y en aumento de niños que se prostituyen o son víctimas de trata con fines de prostitución así como por la implicación de las agencias de turismo, los hoteles y los taxistas en el turismo sexual pedófilo, en particular en las zonas en las que se están realizando grandes proyectos de construcción, a saber, en el norte y en el noreste del Estado parte, así como en el contexto de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Asimismo, el Comité tomó nota del enfoque a corto plazo utilizado para abordar el problema de prostitución infantil, que se pone de relieve a través de la expulsión de las zonas turísticas de los niños que se prostituyen, su ubicación temporal en centros de acogida durante la Copa Confederaciones de 2013 y por el hecho de que después de este evento de forma repentina se dejaron de financiar estos centros de acogida. Señaló que faltan centros de acogida para los niños víctimas de explotación sexual (documento CRC/C/BRA/CO/2-4, párrafo 41). ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar que se libra a los niños víctimas de explotación sexual comercial y trata de esas peores formas de trabajo infantil y se les rehabilita, en particular estableciendo centros de acogida para ofrecerles servicios de rehabilitación y reintegración social. También pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados alcanzados a este respecto. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas por los diversos organismos gubernamentales pertinentes y en el marco de diferentes programas antes mencionados incluida la inspección del trabajo para prevenir y combatir la explotación sexual comercial y la trata de niños con este fin, centrándose en los ámbitos en los que se han producido acontecimientos o se han llevado a cabo proyectos de desarrollo importantes.***

Apartado d). Identificar y llegar a los niños particularmente expuestos a riesgos. Niños trabajadores domésticos. La Comisión tomó nota de que en la lista de peores formas de trabajo infantil (decreto núm. 6481 de 12 de junio de 2008) figura el trabajo doméstico infantil como una de las peores formas de trabajo prohibida a todos los menores de 18 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de que en la publicación de la OIT/IPEC titulada «Erradicar el trabajo doméstico infantil y proteger a los jóvenes trabajadores de las condiciones de trabajo abusivas», de 2013, se indica que según la Encuesta de Hogares del Brasil, 2011, más de 250 000 niños realizan tareas domésticas en hogares de terceros, a saber 67 000 niños de entre 10 y 14 años y 190 000 niños de entre 15 y 17 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que, si bien resulta difícil acceder a los hogares, el número de niños trabajadores domésticos se ha reducido. Según la Encuesta nacional de muestreo de hogares transmitida por el Gobierno, en el Brasil, entre 2014 y 2015, el número de niños trabajadores domésticos de más de 15 años se redujo en un 2,5 por ciento. La Comisión observa que, en el Brasil, el número de niños que realizan trabajos domésticos prohibidos a

los menores de 18 años sigue siendo significativo. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar que los menores de 18 años no realizan trabajos domésticos, de conformidad con el decreto núm. 6481 de 2008. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que proporcione información concreta sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados, incluida información sobre el número de niños trabajadores domésticos identificados y de niños que han sido librados de estos tipos de trabajos y rehabilitados.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 30 de agosto de 2018, así como de la respuesta del Gobierno, recibida con fecha 22 de septiembre de 2018.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), el trabajo infantil constituye un grave problema en Burundi, en particular en la agricultura y en las actividades informales del medio urbano. Tomó nota de que, en virtud de los artículos 3 y 14 del Código del Trabajo, el trabajo de los menores de 16 años está prohibido en las empresas públicas y privadas, incluso en las explotaciones agrícolas, cuando este trabajo sea realizado por cuenta del empleador y bajo su dirección. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual la cuestión de extender la aplicación de la legislación del trabajo al sector informal, debería discutirse en un marco tripartito durante la revisión del Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de las observaciones de la COSYBU, según las cuales ésta recuerda al Gobierno la necesidad de armonizar los artículos 3 y 14 del Código del Trabajo con el Convenio, en el marco de la revisión del Código.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el trabajo infantil constituye un grave problema y que se combate a través de instrumentos nacionales e internacionales. Precisa que se estableció una comisión tripartita encargada de la revisión del Código y que uno de sus objetivos es extender el campo de aplicación del Convenio al sector informal, en el que parece observarse trabajo infantil. La Comisión observa que, según el estudio sobre el trabajo doméstico, especialmente infantil, en Burundi, realizado en 2013-2014 por la Dirección General del Trabajo, el 5,3 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años y más del 40 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años son trabajadores domésticos. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de octubre de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomienda al Gobierno medidas eficaces para prevenir y luchar contra la explotación económica de los niños, especialmente en la economía informal (documento E/C.12/BDI/CO/1, párrafo 38).

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que el sector informal sigue sin situarse dentro del marco de la legislación nacional del trabajo de Burundi, a pesar del hecho de que viene planteando esta cuestión desde 2015. Además, es importante el número de niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo de 16 años que trabajan. La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y cubre todas las formas de empleo y trabajo, incluido el sector de la economía informal. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para extender el campo de aplicación del Convenio a los trabajos realizados fuera de una relación formal de empleo, especialmente en el sector informal y en la agricultura. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones al respecto.***

Artículo 2, párrafo 3. Edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción de un Plan sectorial de desarrollo de la educación y de la formación (2012-2020) por el Gobierno, que recomienda la mejora de la educación preescolar, a través del apoyo a las comunidades y del desarrollo de la enseñanza profesional mediante el establecimiento de centros de enseñanza de oficios. Tomó nota asimismo de que, según el informe *PASEC2014 performances du système éducatif burundais*, en la enseñanza primaria se produjo un gran aumento de efectivos, pasando de 740 850 alumnos, en 2000, a 2 117 397, en 2014. Además, la ley núm. 1/19, de 10 de septiembre de 2013, sobre la organización de la enseñanza básica y secundaria, reforzó la enseñanza fundamental, que pasó de seis a nueve años de escolaridad, a partir de los 6 años de edad. En consecuencia, un niño que comienza a asistir a la escuela a la edad de 6 años completa su escolaridad a la edad de 15 años. Al respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar una educación gratuita y obligatoria a todos los niños hasta la edad mínima de acceso al empleo, a los 16 años.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la COSYBU solicita al Gobierno que fije la edad mínima de escolaridad obligatoria para permitir la progresiva abolición del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales se instauró, en 2005, una política dirigida a la gratuidad escolar, y se crearon comedores escolares y escuelas, movilizandolos comités con base en todas las colinas del país a los niños para que asistieran a la escuela. Además, se suprimieron los gastos escolares oficiales en la enseñanza primaria, quedando los alumnos más pobres exentos de los gastos en la enseñanza secundaria. En algunas

provincias se distribuyó material escolar a los alumnos de la enseñanza primaria. La Comisión toma nota de que el informe de ejecución del Programa de apoyo para la consolidación de la enseñanza fundamental de 2016-2017, precisa que se construyeron 45 aulas, se beneficiaron de material escolar 2,6 millones de alumnos gracias a la campaña «Back to school» y que están en curso, en zonas específicas, proyectos de sensibilización contra el abandono escolar. Se crearon módulos de formación del profesorado y se distribuyeron 36 000 materiales para los docentes. Por otra parte, la Comisión toma nota de que se dio inicio, en enero de 2017, a una campaña de compilación de datos sobre la educación para el año 2016/2017. La Comisión toma nota de los esfuerzos significativos del Gobierno para mejorar el acceso y la calidad del sistema educativo del país. Según el informe de ejecución del Programa de apoyo para la consolidación de la enseñanza fundamental de 2016-2017, el índice de paridad de 2015-2016 para la educación primaria fue de 1,01.

La Comisión toma nota de la ausencia de informaciones del Gobierno sobre las medidas adoptadas para elevar la edad de cese de la escolaridad obligatoria a los 16 años, de modo de vincular la edad de cese de la escolaridad obligatoria a la edad mínima de acceso al empleo o al trabajo. La Comisión recuerda que la escolaridad debería ser obligatoria y garantizarse efectivamente hasta una edad al menos igual a la edad de admisión al empleo especificada, de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del Convenio, para proteger a los niños de toda explotación económica. ***La Comisión solicita al Gobierno que se sirva adoptar sin retrasos las medidas necesarias para garantizar que la escolaridad sea obligatoria hasta la edad mínima de acceso al empleo de 16 años. Además, solicita al Gobierno que siga redoblando sus esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad del sistema educativo del país para los niños menores de 16 años de edad y que comunique informaciones y datos estadísticos sobre los progresos realizados al respecto.***

Artículo 9, párrafo 1. Sanciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de la insuficiencia de las sanciones previstas por el Código del Trabajo y la ordenanza núm. 630/1, de 5 de enero de 1981, relativa al trabajo infantil, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio. Además, tomó nota de que el Gobierno indicó que el Ministerio de Solidaridad, Derechos de la Persona Humana y de Género elaboró un código de derechos y deberes del niño que conlleva disposiciones sobre el trabajo infantil y sobre las sanciones aplicables, y que se comunicó al Ministerio de Justicia para su lectura.

La Comisión toma nota de que en sus observaciones, la COSYBU recomienda al Gobierno la adopción del código de derechos y deberes del niño.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual está en curso de elaboración el código de derechos y deberes del niño por parte del Ministerio de Solidaridad, Derechos de la Persona Humana y de Género y por el Ministerio de Justicia. Observa que, según las informaciones del Gobierno, el proyecto de código de derechos y deberes del niño está en curso de elaboración desde 2002. La Comisión señala que, en sus observaciones finales de octubre de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomienda al Gobierno que garantice que las personas que explotan económicamente a niños sean debidamente sancionadas (documento E/C.12/BDI/CO/1, párrafo 38). ***La Comisión insta al Gobierno que se sirva adoptar, en los más breves plazos, las medidas necesarias para garantizar que se apliquen sanciones adecuadas y eficaces en caso de violación de las disposiciones relativas al trabajo infantil. Pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la situación en que se encuentra la adopción del código de derechos y deberes del niño, y comunicar una copia del código en cuanto se haya adoptado.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones adecuadas. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción de la Ley núm. 1/28, de 29 de octubre de 2014, sobre Prevención y Represión de la Trata de Personas y Protección de las Víctimas (Ley contra la Trata), que prevé una pena de quince a veinte años de reclusión para las personas culpables de trata de niños. Tomó nota de que, según el informe del UNICEF, de marzo de 2017, titulado «Situación humanitaria en Burundi», no se aplicó plena y eficazmente en la práctica la Ley contra la Trata.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales mujeres y niños fueron víctimas de trata en 2017, con destino a Omán, Arabia Saudita y Kuwait. El Gobierno indica que, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, 312 niñas fueron trasladadas a, entre otros países, Omán y Arabia Saudita. La Comisión toma nota de que, entre las muchas dificultades para compilar estadísticas actualizadas sobre los niños víctimas de trata, el Gobierno menciona la falta de intercambios regulares e informaciones con las organizaciones de la sociedad civil de Burundi. Las infracciones registradas son infracciones de trata con fines de explotación económica y sexual. El Gobierno indica que, en virtud del artículo 10 de la Ley contra la Trata, la trata se castiga con cinco a diez años de prisión y con 100 000 a 500 000 francos de Burundi (aproximadamente 55 a 280 dólares de los Estados Unidos). Sin embargo, si bien se pronunciaron algunas sentencias por hechos de trata de niños, el Gobierno precisa que algunos casos escapan al control de la ley.

La Comisión toma nota de que, en su declaración sobre la situación de los derechos humanos, de 9 de febrero de 2018, el presidente de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos (CNIDH), manifestó su preocupación por el resurgimiento de casos de trata de seres humanos, especialmente en Makamba y en la alcaldía de Bujumbura, y solicitó al Gobierno que garantizara la aplicación efectiva de la Ley contra la Trata de 2014. Además, la Comisión toma

nota de que, en sus observaciones finales de noviembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, manifestó su preocupación por la ausencia de medidas coordinadas y eficaces para hacer frente al creciente número de niñas víctimas de trata transnacional con fines de servidumbre doméstica y de esclavitud sexual. La Comisión recomienda al Gobierno que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación de la Ley contra la Trata, de 2014 (documento CEDAW/C/BDI/CO/5-6, párrafo 28). ***La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para garantizar que se realicen hasta su finalización encuestas exhaustivas y diligencias judiciales eficaces de las personas que se dedican a la venta y a la trata de niños y que se apliquen en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre la aplicación en la práctica de la Ley núm. 1/28, de 29 de octubre de 2014, sobre Prevención y Represión de la Trata de Personas y Protección de las Víctimas, incluyendo informaciones estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, las investigaciones y las diligencias judiciales iniciadas contra los autores, y las sanciones penales impuestas a los autores. En la medida de lo posible, estas informaciones deberían desglosarse por edad y género de las víctimas.***

Artículo 3, b). *Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) y las conclusiones del 2010 de la Comisión de Aplicación de Normas, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, constituyen un problema en la práctica, aunque la legislación nacional prohíbe esta peor forma de trabajo infantil. Tomó nota asimismo de las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la ocupación de niños en la prostitución, incluidos: i) el establecimiento de una policía para la protección de los menores y de la moral pública; y ii) la gratuidad de la escolaridad en la enseñanza primaria y la instauración de comedores escolares. La Comisión expresó su preocupación por los resultados del estudio «Evaluación rápida sobre la explotación sexual y comercial infantil», de 2012, encargado por el Ministerio de la Administración Pública, del Trabajo y del Empleo, en colaboración con el UNICEF, que señaló que los niños de las zonas pesqueras, especialmente de Rumonge y de Makamba, se dedicaban a una prostitución dirigida por adultos, y que las zonas transfronterizas son lugares en los que estaba creciendo el turismo sexual que implicaba a niños.

La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno, según las cuales el Código Penal revisado de 2009, permitió al Gobierno la adopción, con carácter de urgencia, de medidas inmediatas y eficaces, con el fin de garantizar que las personas que utilizan, reclutan u ofrecen niños para la prostitución, sean procesadas y sancionadas eficazmente. ***La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, en los más breves plazos, informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que las personas que utilizan, reclutan u ofrecen niños menores de 18 años para la prostitución, sean procesadas efectivamente y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Además, solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas y de las sanciones penales impuestas.***

Artículo 7, párrafo 2. *Medidas efectivas que deben adoptarse en un plazo determinado. Apartado b).* *Librar a los niños de las peores formas de trabajo y garantizar su rehabilitación y su inserción social. Explotación sexual con fines comerciales.* La Comisión tomó nota anteriormente con profunda preocupación de que, según el Estudio de 2012 sobre Explotación Sexual de Niños con fines Comerciales (ESEC) en Burundi, los niños que pertenecen a todas las categorías específicas (niños en las cárceles y en situación de calle, niños trabajadores domésticos, niños en la escuela, niños desplazados o refugiados), son víctimas de explotación sexual de niños con fines comerciales. Por otra parte, las niñas huérfanas y aquellas separadas de sus familias que van a la ciudad para ser contratadas como trabajadoras domésticas son especialmente víctimas de ese tipo de explotación sexual o corren el riesgo de pasar a serlo. Según el estudio, el 30 por ciento de las personas interrogadas, declaró ser víctima de ese tipo de explotación sexual y el 70 por ciento afirmó ser testigo de ello. Las personas implicadas son en su mayoría personas que ofrecen una contrapartida económica o material, especialmente los comerciantes, los explotadores de minas, los extranjeros en tránsito y los militares.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales se adoptaron algunas medidas para la identificación, la protección y la orientación de los niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales, incluidos: i) la adopción de la Ley núm. 1/13, sobre la Prevención, Protección de las Víctimas y Represión de la Violencia Sexual basada en Motivos de Género, el 22 de septiembre de 2016, acompañada de una estrategia nacional de lucha contra la violencia basada en motivos de género; ii) el establecimiento de una política nacional de protección del niño; iii) la elaboración de un código de protección del niño que se adoptará próximamente, y iv) el establecimiento de la policía de menores y de protección de la moral pública. La Comisión observa que, en virtud del artículo 35 de la Ley núm. 1/13 sobre Prevención, Protección de las Víctimas y Represión de la Violencia Sexual basada en Motivos de Género, toda persona declarada culpable de explotación sexual de un menor, será castigada con una pena de prisión de quince a treinta años. ***La Comisión toma buena nota de las medidas adoptadas por el Gobierno relativas a la explotación sexual infantil y alienta al Gobierno a proseguir con sus esfuerzos para identificar y proteger a los niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales. Además, solicita al Gobierno que le comunique informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas de explotación sexual con fines comerciales sean orientadas y atendidas por los servicios correspondientes con miras a su rehabilitación y a su inserción en la sociedad. La Comisión pide también al Gobierno que suministre una copia del Código de Protección del Niño en cuanto haya sido adoptado.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Cabo Verde

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2011)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajos. La Comisión había tomado nota de que se iba a adoptar en breve un instrumento normativo en el que figuraba una lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños y los jóvenes.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la lista nacional de formas peligrosas de trabajo infantil se adoptó a través de la ley núm. 113/VIII/2016, de 10 de marzo de 2016. En esta lista se enumeran los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños en diferentes sectores (agricultura, pesca, minería, manufactura y construcción), incluidos los trabajos con productos químicos u otras sustancias peligrosas, los trabajos que conllevan el transporte de cargas pesadas, los trabajos en los que los niños se exponen a temperaturas extremas o a polvos u otros entornos insalubres, los trabajos que requieren grandes esfuerzos físicos, los horarios prolongados o los trabajos en naves o buques en general, entre otros. Sin embargo, la Comisión *lamenta* tomar nota de que, con arreglo a los artículos 2 y 5, 1), de la ley, la lista de estos trabajos sólo es aplicable a los niños menores de 16 años. La Comisión recuerda al Gobierno que, de conformidad con el artículo 3, 1), del Convenio la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a 18 años. La Comisión hace hincapié en que la autorización para realizar un trabajo peligroso desde la edad de 16 años es una excepción limitada a la regla general de la prohibición de la admisión de los menores de 18 años en trabajos peligrosos, que no constituye una autorización incondicional para realizarlos a partir de la edad de 16 años (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 379). **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que ningún menor de 18 años, excepto en los casos excepcionales permitidos por el Convenio, sea autorizado a realizar trabajos peligrosos, con arreglo al artículo 3, 1).**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3, b), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas. La Comisión había tomado nota de que el Código Penal prevé sanciones por alentar o facilitar la prostitución de menores de 16 años (artículo 148) y por la utilización de menores de 14 años en actuaciones pornográficas (artículo 150). La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner su legislación de conformidad con el artículo 3, b), del Convenio a fin de garantizar que se prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se indica que el Código Penal se modificó a través del decreto legislativo núm. 4/015, de 11 de noviembre de 2015. La Comisión toma nota con *satisfacción* de que la utilización de menores de 18 años en la prostitución está tipificada como delito y puede ser castigada con penas de prisión de entre dos y 12 años con arreglo al artículo 145A. Asimismo, se modificaron los artículos 148 y 150 y se complementaron con apartados en los que se tipifica como delito alentar o facilitar la prostitución de menores de entre 16 y 18 años y la utilización de menores de entre 14 y 18 años en la producción de pornografía y en actuaciones pornográficas. Además, el artículo 149 tipifica como delito alentar o facilitar la explotación sexual o la prostitución de menores de 18 años en un país extranjero y prevé la imposición de sanciones más importantes. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 145A, 148, 149 y 150 del Código Penal, incluyendo información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y condenas dictadas, así como de sanciones impuestas por la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados en el Chad, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafos 45 y 46), a pesar de los progresos realizados en la

aplicación del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011 sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, y, aunque el ejército nacional del Chad no reclutó a niños como cuestión de principio, el equipo de tareas en el país verificó 34 casos de reclutamiento de niños por el ejército durante el período sobre el que se informa. Los 34 niños parecían haber sido reclutados en el marco de la campaña que había tenido lugar a tal efecto en febrero y marzo de 2012 y en el curso de la cual el ejército había conseguido 8 000 nuevos reclutas. A este respecto, la Comisión toma nota de la nueva Hoja de ruta, de mayo de 2013, adoptada como consecuencia de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de acción sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, con objeto de conseguir que se respete íntegramente el plan de acción de 2011 por el Gobierno del Chad y el equipo de tareas de las Naciones Unidas. La Comisión observó que, en el marco de esta Hoja de ruta, una de las prioridades consiste en acelerar la adopción del anteproyecto del Código de Protección de la Infancia, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de personas menores de 18 años en las fuerzas nacionales de seguridad y prevé sanciones a estos efectos. Por otra parte, se han previsto para 2013 procedimientos de quejas transparentes, eficaces y accesibles en los casos de reclutamiento y utilización de niños, así como la adopción de medidas destinadas a investigar de forma inmediata e independiente todas las denuncias de reclutamiento y utilización de niños dignas de crédito, e iniciar acciones penales y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes.

La Comisión toma nota de las informaciones que figuran en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, publicado el 15 de mayo de 2014, sobre la suerte de los niños en época de conflicto armado (documento A/68/878-S/2014/339). Según este informe, el despliegue de efectivos chadianos en el marco de la Misión Internacional de Apoyo a Mali con Liderazgo Africano (AFISMA) imprimió una nueva dinámica a la aplicación acelerada del Plan de acción firmado en junio de 2011 para prevenir y eliminar el reclutamiento de menores en el ejército nacional del Chad, y las autoridades del país reafirmaron su compromiso de colaborar constructivamente con las Naciones Unidas para acelerar la aplicación del Plan de acción. El Gobierno del Chad, en colaboración con las Naciones Unidas y otros asociados, ha adoptado importantes medidas para cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, en octubre de 2013, se aprobó una directriz presidencial por la que se confirmó que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y de seguridad era de 18 años. Esta directriz establece asimismo procedimientos de verificación de la edad y prevé sanciones penales y disciplinarias contra quienes violen esas órdenes. La directriz se distribuyó a los jefes de las ocho «zonas de defensa y seguridad» entre otras cosas, en el contexto de varias misiones de capacitación y verificación. Además, el 4 de febrero de 2014 se tipificó por decreto presidencial, como delito, el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados.

No obstante, el Secretario General afirma que, si bien los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir todas las obligaciones en el marco del plan de acción se tradujeron en importantes avances, persisten sin embargo algunos problemas por resolver para asegurar la sostenibilidad y la prevención efectiva frente a las violaciones que atenten contra los derechos de los niños. El Chad debería llevar a cabo un proceso amplio y exhaustivo de inspección y capacitación de sus fuerzas armadas y de seguridad para seguir previniendo la presencia de niños en sus filas, en particular, teniendo en cuenta la participación creciente del país en operaciones de mantenimiento de la paz. Aunque las Naciones Unidas no documentaron ningún nuevo caso de reclutamiento de niños en 2013 ni se encontraron niños en las inspecciones llevadas a cabo de forma conjunta con las autoridades chadianas, en las entrevistas concertadas se confirmó que, en el pasado, soldados menores de 18 años procedentes de grupos armados se habían integrado en el ejército nacional del Chad. Según el Secretario General, las autoridades del país deben seguir dando prioridad al fortalecimiento de los procedimientos operativos, en particular, los que atañen a la verificación de la edad, de forma que los culpables de estos delitos respondan de sus actos. Por último, el Secretario General invitó a la Asamblea Nacional a proceder, en el plazo más breve posible, al examen y la aprobación del Código de Protección de la Infancia, que reforzará aún más la protección de los niños en el Chad. ***La Comisión pide al Gobierno, por tanto, que intensifique sus esfuerzos para eliminar, en la práctica, el reclutamiento forzoso de los menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados, y a que proceda a la desmovilización inmediata y completa de todos los niños. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que se inicien investigaciones y acciones judiciales contra los infractores y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias a las personas declaradas culpables de haber reclutado y utilizado a niños menores de 18 años en los conflictos armados. Por último, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción del Código de Protección de la Infancia, en el plazo más breve posible.***

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños reclutados y utilizados en un conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafo 49), se señaló que pese a ser alentadoras, las disposiciones adoptadas por el Gobierno para obtener la liberación de los niños movilizadas, prestarles atención de inmediato y reunirlos con sus padres o tutores no están aún en consonancia con los compromisos contraídos en el marco del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011, sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad. La Comisión tomó nota de que una de las prioridades que figuran en la Hoja de ruta de 2013 consiste en la liberación y el apoyo a la reinserción de los niños.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General, de 15 de mayo de 2014, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ocho «zonas de defensa y seguridad» se han establecido dependencias de protección de los niños para coordinar el seguimiento y la protección de los derechos de los niños y poner en práctica actividades de sensibilización. Entre agosto y octubre de 2013, el Gobierno y las Naciones Unidas llevaron a cabo actividades conjuntas de inspección y verificación de la edad de unos 3 800 efectivos del ejército nacional del Chad en las ocho zonas. Previamente, en un taller organizado por las Naciones Unidas en julio, se habían elaborado las normas de verificación de la edad. Además, entre agosto y septiembre de 2013, 346 miembros del ejército nacional del Chad asistieron a un programa de formación de instructores sobre protección de los niños. Desde julio de 2013, los efectivos del ejército nacional del Chad que se desplegarían en Mali comenzaron a recibir capacitación previa al despliegue sobre la protección de los niños y el derecho internacional humanitario, incluidos 864 efectivos de dicho ejército que asistieron, en diciembre, a un curso de capacitación sobre protección de los niños en el centro de capacitación de Loumia. ***La Comisión invita al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos y continúe colaborando con las Naciones Unidas para evitar el reclutamiento de los niños en los grupos armados y mejorar la situación de los niños víctimas de reclutamiento forzoso utilizados en los conflictos armados. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para que los niños soldados separados de las fuerzas y grupos armados se beneficien de la asistencia adecuada en materia de readaptación e integración social, incluida su reintegración en el sistema de enseñanza y, en su caso, en la formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que facilite, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Congo

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2008.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, en la que se indicaba la existencia de trata de niños entre Benin y Congo, para hacerlos trabajar en Pointe-Noire, en el comercio y en los trabajos domésticos. Según el Gobierno, esos niños son forzados a trabajar todo el día en condiciones penosas, y están sometidos a todo tipo de privaciones. La Comisión había tomado nota de que los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, prevén sanciones para las personas declaradas culpables de raptos o de corrupción de personas, entre las que se encontraban niños menores de 18 años. Había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar en qué medida se habían aplicado en la práctica los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal. *La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de la aplicación en la práctica de los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, comunicando, especialmente, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las encuestas realizadas, los procedimientos judiciales, las condenas y las sanciones penales aplicadas.*

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Venta y trata de niños. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de la información del Gobierno, en la que reconocía que la trata de niños entre Benin y el Congo, cuyo objetivo era el de hacerlos trabajar en Pointe-Noire en el comercio y en los trabajos domésticos, está en contradicción con los derechos humanos. Había tomado nota asimismo de que el Gobierno había adoptado algunas medidas para detener la trata de niños, entre las que se encontraba: a) la repatriación de niños por parte del Consulado de Benin, que son, ya sea reintegrados por la policía nacional, ya sea retirados de algunas familias; b) la exigencia en las fronteras (aeropuertos) de la autorización administrativa de salida del territorio de Benin exigible a los menores (edades inferiores a los 18 años). La Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas en cuanto a la rehabilitación y a la reinserción social de los niños, tras su retirada del trabajo. Había tomado nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. *La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas en un plazo determinado para librar a los niños menores de 18 años de esta peor forma de trabajo infantil y garantizar su rehabilitación e inserción social. Además, solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca del impacto de estas medidas.*

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que, según las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el informe inicial del Congo, de octubre de 2006 (documento CRC/C/COG/CO/1, párrafo 85), deberá realizarse en el país un estudio sobre las causas profundas y las repercusiones de la trata. *La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones acerca de los resultados de este estudio y transmitir una copia del mismo en cuanto se haya elaborado.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Côte d'Ivoire

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota, según el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el examen de las políticas comerciales de Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau y el Togo por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (2012), de que aproximadamente el 40 por ciento de los niños de 5 a 14 años trabajan, y de que casi una cuarta parte de los niños de Côte d'Ivoire combinan trabajo y escuela. Los niños de las zonas rurales trabajan en su mayoría en las explotaciones familiares, en las plantaciones, en pequeñas minas de oro, en el comercio o en el servicio doméstico. La Comisión tomó nota asimismo de la adopción del Plan de acción nacional 2012-2014 de lucha contra la trata, la explotación y el trabajo infantil (PAN).

La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria al Plan de Acción Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017). La Comisión toma nota de que el PAN-PFTE 2015-2017 se refiere al estudio más reciente sobre el trabajo infantil en Côte d'Ivoire (ENSETE 2014). Según este estudio, más de uno de cada cuatro niños de 5 a 17 años está ocupado económicamente, realizando en promedio 35 horas de trabajo a las que se suman 12 horas semanales de tareas domésticas. De estos niños, 1 424 996 están ocupados en un trabajo por abolir, es decir, uno de cada cinco niños de 5 a 17 años de edad (el 20,1 por ciento), y existen en total 1 082 929 niños de 5 a 13 años de edad. De estos niños, 539 177 son víctimas de trabajos peligrosos. El peligro está vinculado fundamentalmente con el volumen de horas de trabajo (el 77 por ciento), y el 22 por ciento de estos niños

realizan trabajo nocturno; el 18,9 por ciento también tiene una ocupación peligrosa, y el 3,6 por ciento se encuentra en una rama de actividad peligrosa. Este fenómeno afecta en mayor grado a las niñas, en las zonas tanto urbanas como rurales, y está relacionado con un marco esencialmente familiar (el 66,5 de estos niños son trabajadores familiares auxiliares y el 9 por ciento asalariados). Según este estudio, el trabajo infantil se observa principalmente en la agricultura (el 49,1 por ciento), a continuación en los servicios (el 38,5 por ciento) y por último en la industria (el 12,4 por ciento). La Comisión toma nota con *preocupación* de que muchos niños que trabajan no han alcanzado la edad mínima de admisión al empleo establecida en 14 años, en particular en condiciones peligrosas. ***La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos y tome las medidas necesarias para eliminar progresivamente el trabajo infantil, especialmente en las zonas rurales. Pide al Gobierno que suministre información sobre los resultados obtenidos en lo que respecta a la eliminación del trabajo infantil en el marco del PAN-PFTE 2015-2017. Por último, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, facilitando, por ejemplo, datos estadísticos relativos a la naturaleza, el alcance y la evolución del trabajo infantil y del trabajo realizado por adolescentes que no han alcanzado la edad mínima especificada por el Gobierno en el momento de la ratificación, así como extractos de informes de los servicios de inspección.***

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota, según el informe de la CSI, de que en Côte d'Ivoire la educación no es obligatoria ni gratuita. Tomó nota asimismo de que, según el Gobierno, se está elaborando un proyecto de texto para establecer la escolarización obligatoria hasta los 16 años.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. Toma nota, sin embargo, de que según el análisis más reciente de la «situación del niño en Côte d'Ivoire» (SITAN, 2014), en este país no están escolarizados casi 1,7 millones de niños en edad de educación primaria y del primer ciclo de educación secundaria. Además, las regiones del norte, noroeste y sudoeste del país registran el mayor número de niños de 6 a 11 años de edad que se encuentran fuera del sistema escolar, y al menos el 40 por ciento de los niños de esta edad no frecuentan la escuela primaria ni secundaria. La Comisión toma nota asimismo de que el PAN-PFTE 2015-2017 contempla como medida de prevención el fortalecimiento del marco legislativo de lucha contra las peores formas de trabajo infantil a través de la adopción de una ley sobre la escolaridad obligatoria para todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. La Comisión recuerda nuevamente que la escolaridad obligatoria es uno de las maneras más eficaces de luchar contra el trabajo infantil y que es necesario vincular la edad de admisión al empleo con la edad de cese de la escolarización obligatoria. ***Con este fin, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas inmediatas para asegurar que se adopte sin demora la legislación que establece la escolaridad obligatoria para los niños de 6 a 16 años, y que comuniqué una copia de la misma en su próxima memoria. Pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil, reforzando las medidas encaminadas a aumentar la tasa de escolarización, a nivel tanto de la educación primaria como de la educación secundaria.***

Artículos 6 y 7. Aprendizaje y trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 23.8 del Código del Trabajo, no puede emplearse a niños en una empresa, ni siquiera como aprendices, antes de la edad de 14 años, salvo excepción establecida por vía reglamentaria. Sin embargo, tomó nota de que, en virtud del artículo 3 del decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, relativo al trabajo nocturno, los niños menores de 14 años admitidos en un aprendizaje o en una formación preprofesional no pueden, en ningún caso, estar ocupados en un trabajo, sea el que fuere, durante el período de delimitación del trabajo nocturno y, de manera general, durante el intervalo de 15 horas consecutivas, entre las 17 y las 8 horas. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner de conformidad el Código del Trabajo y el decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, con el Convenio, y que estableciera la edad de acceso al aprendizaje en 14 años, en particular en el marco de la revisión del Código del Trabajo. La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el artículo 23.2 del nuevo Código del Trabajo (ley núm. 2015-532 de 2015) establece la edad de aprendizaje en 14 años. La Comisión toma nota asimismo de que, en lo que respecta a la armonización del artículo 3 del decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, relativo al trabajo nocturno con el artículo 6 del Convenio, el Gobierno indica que está en curso un proyecto de revisión de dicho decreto con este fin. La Comisión toma nota igualmente de la adopción, en junio de 2017, de la orden núm. 2017-016 que determina la lista de trabajos ligeros autorizados para los niños de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. ***La Comisión confía en que, en el marco de la revisión del decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, relativo al trabajo nocturno, el Gobierno adopte las medidas necesarias para poner dicho decreto en conformidad con el Convenio y establezca así en 14 años la edad de acceso al aprendizaje. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto.***

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, d), y 7, 2), a) y b), del Convenio. Trabajos peligrosos, impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de estas peores formas. Niños que trabajan en la agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que las últimas estadísticas de 2008 sobre el trabajo infantil pusieron de relieve que 1 570 103 niños son económicamente activos en el sector de la agricultura, en particular en las plantaciones de cacao. Asimismo, tomó nota de que si bien el trabajo infantil en las minas figura en la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, se constató que en minas concedidas a particulares se utilizaba trabajo infantil (decreto núm. 2250 de 14 de marzo de 2005, revisado en 2012).

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que el Plan de acción nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017) es multisectorial. Asimismo, toma nota de los datos estadísticos comunicados por el Gobierno sobre el trabajo infantil según la rama de actividad y el género recogidos por el sistema de observación y de seguimiento del trabajo infantil en Côte d'Ivoire (SOSTECI) en 2016. También toma nota de que, según estas estadísticas, un total de 1 559 menores de 18 años realizan trabajos peligrosos, incluso en el sector agrícola en el que el número de niños asciende a 1 148, de los cuales 748 son niños y 400 niñas. Sin embargo, la Comisión observa que el PAN-PFTE 2015-2017, que hace referencia al informe sobre la «situación del niño en Côte d'Ivoire» (SITAN 2014), indica que el número de niños que realizan trabajos peligrosos en el sector de la agricultura asciende a 189 427, con un total de 105 699 niños de entre 14 y 17 años. Además, en el marco de la ejecución del PAN-PFTE 2015-2017, la Comisión toma nota de la adopción, en junio de 2017, del decreto núm. 2017-017 en el que se establece la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años y se prohíben los trabajos peligrosos en diversas ramas de actividad en la agricultura. **Expresando su preocupación por el elevado número de niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para impedir que los menores de 18 años realicen trabajos peligrosos, en particular en la agricultura. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del decreto núm. 2017-017 sobre la lista de trabajos peligrosos. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para librar a los niños de los trabajos peligrosos y rehabilitarlos, especialmente garantizándoles el acceso a la educación básica gratuita y a la formación profesional.**

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Niños especialmente expuestos a riesgos. Niños huérfanos a causa del VIH y el sida. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el número de niños huérfanos y otros niños vulnerables a causa del VIH y el sida en el país ascendía a 380 000 y que, en este marco, el Gobierno había desarrollado un programa nacional para hacerse cargo de esos niños, en particular para garantizar su acceso a la educación básica gratuita.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno no transmite información alguna sobre este punto. También toma nota de que las estimaciones de 2016 publicadas por el ONUSIDA ponen de relieve que eran 320 000 los niños huérfanos y otros niños vulnerables a causa del VIH y el sida en el país, y que el Gobierno con el apoyo del ONUSIDA, ha establecido, en particular, el Plan estratégico nacional sobre el VIH y el sida 2016-2020 en materia de cuidados y apoyo a los niños huérfanos y otros niños vulnerables y sus familias. **Recordando que los niños huérfanos y otros niños vulnerables a causa del VIH y el sida están más expuestos al riesgo de ser víctimas de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos, en el marco del Plan estratégico nacional sobre el VIH y el sida 2016-2020, para velar por que se proteja a esos niños de las peores formas de trabajo infantil. Pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) **(ratificación: 2005)**

La Comisión **lamenta** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional destinada a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del Programa de Trabajo Decente por País de Djibouti 2008-2012 (PTDP) cuya prioridad era la mejora de las condiciones de trabajo para la promoción de las normas nacionales e internacionales del trabajo, haciendo especial hincapié en el trabajo infantil. Asimismo, la Comisión tomó nota de la adopción del Plan estratégico nacional para la infancia en Djibouti (PSNED) 2011-2015, para el establecimiento de un entorno protector que favorezca el respeto de los derechos fundamentales de los niños. La Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la ejecución del PTDP y el PSNED así como sobre los resultados obtenidos en materia de eliminación progresiva del trabajo infantil. Además, solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta a la elaboración de una política nacional específica de lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, según el UNICEF, en el período 2002-2012 en Djibouti el 7,7 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años realizaron actividades consideradas como trabajo. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que, habida cuenta de que los estudios realizados siguen siendo proyectos, no puede comunicar los resultados obtenidos a través del PSNED. Asimismo, el Gobierno indica que debido a una falta de entendimiento con los sindicatos el PTDP no se ha podido adoptar y que espera que, con la ayuda de la Oficina, se reanude el diálogo social para la adopción y la ejecución del PTDP en un futuro próximo. Además, la Comisión toma nota del *Anuario estadístico de Djibouti* anexo a la memoria del Gobierno y de que el Gobierno indica que la Dirección de Estadística y Estudios Demográficos (DISED) no ha efectuado ninguna encuesta en materia de trabajo infantil. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el diálogo social se reanude sin demora y pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la ejecución efectiva del PTDP y el PSNED. Le pide que transmita información sobre los resultados obtenidos en materia de eliminación progresiva del trabajo infantil y sobre los progresos realizados en lo que respecta a la elaboración de una política nacional específica de lucha contra el trabajo infantil. Por último, solicita de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que en un futuro próximo se realicen estudios sobre la extensión y la naturaleza del trabajo infantil en Djibouti y para que los resultados de esos estudios sean comunicados a la Oficina.**

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota de que en virtud del artículo 1 de la ley núm. 133/AN/05/5.^a por la que se establece el Código del Trabajo (en adelante «Código del Trabajo»), parece que el Código sólo se aplica a las relaciones de trabajo. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicó que el respeto del artículo sobre la edad mínima de acceso al trabajo es efectivo en la economía formal pero no lo es en los sectores de la economía informal. Además, la Comisión tomó nota de que, a pesar de que la nueva ley núm. 199/AN/13/6.^a que completa la ley núm. 212/AN/07/5.^a por la que se crea la Caja Nacional de Seguridad Social extiende las prestaciones del régimen de asistencia médica a todos los trabajadores independientes que trabajan en la economía informal, el Gobierno ha reconocido que la falta de estructuración de la economía informal le impide tener una visión clara de los problemas de los jóvenes trabajadores de este sector.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que espera presentar la cuestión del trabajo informal al Consejo Nacional del Trabajo inspirándose especialmente en la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica, formal o informal, y cubre todos los tipos de empleo o de trabajo, se efectúen o no sobre la base de una relación de trabajo subordinada, y sean o no remunerados. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar la protección prevista en el Convenio a los menores de 16 años que trabajan en la economía informal, especialmente adaptando y reforzando la inspección del trabajo a fin de mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo de identificar los casos de trabajo infantil. Pide al Gobierno que comunique información a este respecto así como sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 4 de la ley núm. 96/AN/00/4.^a, que establece la orientación del sistema educativo de Djibouti, el Estado garantiza la educación a los niños de 6 a 16 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, en 2006, la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria era del 66,2 por ciento y del 41 por ciento en la enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de que, a pesar de las mejoras que se han producido en materia de asistencia a la escuela, Djibouti sigue siendo un país con una baja tasa de escolarización de los niños y que el objetivo, inscrito en el PSNED, de alcanzar una tasa de escolarización del 100 por ciento para los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años en 2015 no se ha alcanzado. En efecto, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2014 la tasa de asistencia a la escuela primaria era del 67,39 por ciento y la tasa de asistencia a la escuela secundaria del 46,35 por ciento. **Recordando que la escolarización obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para adoptar medidas que permitan a los niños seguir la enseñanza básica obligatoria o introducirse en un sistema escolar informal. A este respecto, también le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas recientemente para aumentar la tasa de escolarización, tanto a nivel primario como secundario, a fin de impedir que los menores de 16 años trabajen. Sírvasse transmitir estadísticas recientes sobre las tasas de asistencia a la escuela primaria y secundaria en Djibouti.**

Artículo 3, párrafo 1. Edad de admisión a los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 112 del Código del Trabajo, las mujeres o los «jóvenes» de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años no pueden tener un empleo que, a solicitud de un inspector del trabajo, un médico acreditado haya considerado que es superior a sus fuerzas. Sin embargo, la Comisión observó que en la legislación nacional no parece existir disposición alguna que especifique una edad mínima de 18 años para la admisión a todo tipo de empleos o trabajos que por su naturaleza o las condiciones en que se realicen puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, tal como se exige en el artículo 3, 1), del Convenio. **Tomando nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto, la Comisión le pide que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que ningún menor de 18 años esté autorizado a ejercer un trabajo peligroso, con arreglo al artículo 3, 1). También solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los tipos de empleos o trabajos peligrosos. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 110 del Código del Trabajo, el trabajo de los jóvenes está formalmente prohibido en empleos domésticos y en hoteles, bares y cafeterías, a excepción de los empleos estrictamente relacionados con la restauración, y que un decreto propuesto por el Ministro del Trabajo y el Ministro de la Seguridad Social previa consulta con el Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (CONTESS), en aplicación del artículo 111 de dicho Código, establece la naturaleza de los trabajos y las categorías de empresas prohibidos a las mujeres en general, a las mujeres embarazadas y a los jóvenes, y la edad límite a la que se aplica esa prohibición. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara este decreto sobre los trabajos y empresas prohibidos a los jóvenes.

La Comisión toma nota de nuevo de que el Gobierno indica que el decreto en cuestión ha sido elaborado y que se compromete a someter su adopción al CONTESS. También señala que hasta la fecha la inspección del trabajo no ha llevado a cabo ningún control de los trabajos peligrosos realizados por jóvenes. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para que en un futuro próximo se adopte el decreto que establece la naturaleza de los trabajos y las categorías de empresas prohibidos a los jóvenes menores de 18 años en aplicación del artículo 111 del Código del Trabajo.**

Tomando nota de que el Gobierno ha señalado que está interesado en obtener la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión le invita a recurrir a esta asistencia a fin de facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)

La Comisión **lamenta** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 3, b), y 7, 2), del Convenio. Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución y medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño había expresado de nuevo su preocupación por el elevado número de niños, en particular niñas, que se prostituyen y por la falta de estructuras que proporcionen servicios a los niños víctimas de explotación sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no dispone de datos actualizados sobre la cuestión. **La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado para retirar a los niños de la prostitución y asegurar un seguimiento con miras a su readaptación e integración social. Además, pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículos 3, c), y 4, 1). **Trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajos. En lo que respecta a la prohibición de que los menores de 18 años realicen trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañen su salud, seguridad o moralidad, tal como se exige en el artículo 3, d), del Convenio, así como en relación con la adopción de una lista de trabajos peligrosos, la Comisión se remite a sus comentarios detallados sobre el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).**

Artículo 6. **Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil.** La Comisión había tomado nota de que en el marco de las actividades del Programa de Trabajo Decente por País de Djibouti (PTDP, 2008-2012), una de cuyas prioridades es la mejora de las condiciones de trabajo para la promoción de las normas nacionales e internacionales del trabajo, haciendo especial hincapié en el trabajo infantil, uno de los logros previstos era que los mandantes de la OIT y los interlocutores sociales actúen conjuntamente para eliminar y prevenir las peores formas de trabajo infantil. A este respecto, se había previsto elaborar y ejecutar un plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el PTDP no se ha adoptado debido a la falta de entendimiento entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, pero que espera que, con la ayuda de la Oficina, el diálogo social se reanude y el plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se adopte y ejecute. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el diálogo social se reanude lo antes posible. Pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que el plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se elabora, adopta y ejecuta a la mayor brevedad y que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto.**

Artículo 7, 2), d). **Identificación de los niños especialmente expuestos a riesgos.** 1. **Niños huérfanos a causa del VIH y el sida.** En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a los huérfanos y niños vulnerables, el número de huérfanos a causa del VIH y el sida está aumentado (y ha alcanzado la cifra de 8 800).

La Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información alguna sobre las medidas adoptadas para evitar que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que, según la publicación del UNICEF titulada *Estado mundial de la infancia 2016: Una oportunidad justa para cada niño*, en 2014, 6 000 niños quedaron huérfanos debido al VIH y el sida. Asimismo, toma nota de la elaboración por el Ministerio de Salud de un Plan nacional de desarrollo sanitario (2013-2017) en el que se indica que, en el marco de la Asociación del Cuerno de África para la lucha contra la vulnerabilidad al VIH y la migración transfronteriza, el Gobierno se ha comprometido de nuevo a intensificar y reforzar la colaboración interministerial a nivel nacional y subregional a fin de frenar la propagación del VIH y el sida e invertir la tendencia actual de esta lacra. **Recordando que los huérfanos a causa del VIH y el sida corren un riesgo mayor de estar ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que comunique información sobre el impacto de las medidas, las políticas y los planes ejecutados para evitar que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida sean ocupados en las peores formas de trabajo infantil y que transmita información sobre los resultados obtenidos.**

2. **Niños que viven en la calle.** La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual los niños que viven y trabajan en la calle, en general, son de origen extranjero y se dedican a la mendicidad o trabajan como limpiabotas. Asimismo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño seguía expresando su preocupación por el número muy elevado de niños que viven en la calle y por el hecho de que estos niños sigan siendo vulnerables a la prostitución, las infecciones sexualmente transmisibles, como por ejemplo el VIH y el sida, la explotación económica y sexual y la violencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información alguna a este respecto. Sin embargo, también toma nota de que en un documento titulado *Acción humanitaria para la infancia*, publicado por el UNICEF en 2016, se indica que 200 niños que viven en la calle han recibido ayuda social gracias a la acción humanitaria llevada a cabo por el UNICEF, con la colaboración del Gobierno. **Recordando que los niños de la calle están especialmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para protegerles de las peores formas de trabajo infantil y garantizar su readaptación y reintegración social, y le pide que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto.**

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño observó que las investigaciones realizadas en los ámbitos de la pobreza, la educación y la salud presentaban lagunas, y que los medios existentes que permitían centralizar y analizar los datos sobre la población eran insuficientes. La Comisión toma nota de que el Gobierno quiere recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para establecer estadísticas. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas a fin de garantizar que se dispone de estadísticas sobre la naturaleza, la amplitud y la evolución de las peores formas de trabajo infantil, desglosadas por edad y sexo, así como sobre el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio.**

Habida cuenta de que el Gobierno ha manifestado interés en la asistencia técnica, la Comisión le invita de nuevo a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Dominica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 2, 2), del Convenio. Elevar la edad inicialmente especificada para la admisión al empleo o al trabajo. Al tomar nota de que el Gobierno especificó inicialmente una edad mínima de 15 años, sujeta a ratificación, la Comisión observa que la Ley sobre la Educación de 1997 prevé una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años. *A este respecto, la Comisión aprovecha la oportunidad de señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio en la que se establece que todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó inicialmente. Esto permite que la edad especificada por la legislación nacional sea armonizada con la prevista en el plano internacional. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien considerar el envío a la Oficina de una declaración de esa naturaleza.*

Artículo 3, 1). Edad mínima de admisión al trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que, de conformidad con el artículo 7, 1), de la Ley sobre el Empleo de las Mujeres, los Jóvenes y los Niños, ningún joven (menor de 18 años) podrá tener un empleo o trabajo nocturno en cualquier empresa pública o privada, con la excepción de la empresa en que sólo trabajan los miembros de la misma familia. No obstante, la Comisión observa que no existe otra disposición que prohíba el empleo de los jóvenes en un trabajo que pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores. *A este respecto, la Comisión ruega al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se prohíba a todas las personas menores de 18 años de edad la realización de trabajos peligrosos.*

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que en 2009 se consultará a los interlocutores sociales para la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos. *Al recordar que, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o de trabajo peligrosos serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado en relación con la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos que han de prohibirse a las personas menores de 18 años.*

Artículo 7, 3). Determinación de los tipos de trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que mientras el artículo 46, 3), permite el empleo durante las vacaciones escolares de los niños a partir de los 14 años de edad (por ejemplo, en trabajos ligeros), observa que no parece existir una determinación de los tipos de trabajos ligeros autorizados para esos niños. A este respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades que se consideren trabajos ligeros y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. *En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada o prevista para determinar las horas y las condiciones en las que el trabajo ligero podrá ser realizado por niños a partir de los 14 años de edad durante las vacaciones escolares, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.*

Artículo 9, 3). Mantenimiento de registros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 8, 1), de la ordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños dispone el mantenimiento de registros o listas de jóvenes menores de 16 años de edad. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 9, 3), del Convenio requiere el mantenimiento de tales registros para incluir a todas las personas menores de 18 años de edad. *Al tomar nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los empleadores lleven y tengan a disposición el registro de todas las personas menores de 18 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada a este respecto.*

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria presentada en virtud del Convenio núm. 182 en 2009 que se adoptaran medidas para ampliar el mandato actual de la inspección nacional del trabajo a fin de abarcar los asuntos relativos al trabajo infantil, en consulta con los interlocutores sociales. *La Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos estadísticos sobre el empleo de niños y adolescentes, extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas que afectan a niños y adolescentes.*

La Comisión alienta al Gobierno a que tome en consideración sus comentarios relativos a las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT para poner esta legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ecuador

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 2, párrafo 2. Elevación a 15 años de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que contemplara la posibilidad de enviar una declaración al Director General de la OIT indicando que el Ecuador elevaba la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el Gobierno señala que la edad mínima de admisión al empleo se ha elevado a 15 años de conformidad con el artículo 2, párrafo 2, del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Trata de niños, actividades ilícitas y sanciones. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota con interés del nuevo Código Penal de 10 de febrero de 2014, que contiene disposiciones específicas y agrava las sanciones por delitos que conciernen a niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales y de trata para estos fines (artículos 91, 92, 100 y 102). La Comisión pidió al Gobierno que velara por que las

disposiciones de la nueva legislación, que prohíben y sancionan las peores formas de trabajo infantil, se apliquen de forma eficaz por medio de investigaciones en profundidad y enjuiciamientos rigurosos de las personas que someten a niños a las peores formas de trabajo infantil. A este respecto, pidió información sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del Código Penal en relación con las peores formas de trabajo infantil y la trata de niños, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas, así como acerca de la duración de las sanciones impuestas a este respecto.

La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, en 2016, el Ministerio de Trabajo participó activamente en la prevención de la lucha contra la trata de niños mediante programas de sensibilización y campañas dirigidas a las víctimas potenciales de trata de niños, a través del proyecto de erradicación del trabajo infantil, que forma parte del eje de prevención del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. El Ministerio participó en un taller binacional Ecuador-Colombia denominado: identificación y manejo del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el que participaron 50 funcionarios de ambos países.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el proyecto de erradicación del trabajo infantil se ha definido como la estrategia para habilitar el Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil (SURTI), en colaboración con la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, a fin de determinar los casos de infracción de la legislación, las sanciones y la restitución de sus derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. A este respecto, se prevé que la información introducida en el sistema de registro servirá como prueba para procesar a los autores de los delitos. Además, la Comisión toma nota del seguimiento de un caso de trata de niños con fines de trabajo forzoso en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, que ha sido objeto de una investigación y cuyos autores han sido sancionados. La Comisión toma nota de las inspecciones que ha realizado por el Gobierno en las zonas en las que se pueden producir las peores formas de trabajo infantil, tales como la prostitución, la mendicidad y el trabajo forzoso. El SURTI, establecido en 2016, sirvió ese mismo año para registrar 117 niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil, y en la memoria del Gobierno se señala que se alertó a las instituciones encargadas de la restitución de los derechos (educación, salud, protección social, trabajo) sobre esos 117 casos.

Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que en la memoria del Gobierno se indica que no se registran víctimas del delito de trata de niños debido a que la judicialización y el posterior juzgamiento de estos casos no son competencia del Ministerio del Trabajo.

La Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para que los diferentes ministerios y entidades encargados de controlar la aplicación de la ley puedan colaborar en los casos de trata de niños. Asimismo, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del Código Penal sobre la trata de niños, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas, y sobre la duración de las sanciones impuestas a este respecto.

Artículo 6. Programas de acción. Trata de niños. La Comisión observa que, en 2018, el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han presentado un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas que ha permitido reunir información y actualizar un plan nacional de acción para combatir la trata de personas. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para llevar a cabo el proceso de adopción de un nuevo plan nacional de acción para combatir la trata de personas y que proporcione información detallada sobre la trata de niños.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de esas peores formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que continuara adoptando medidas efectivas y en un plazo determinado a fin de impedir que los niños sean objeto de trata, ayudar a las víctimas y asegurar su rehabilitación e inserción social. Asimismo, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información actualizada sobre los casos de niños víctimas de trata registrados en el SURTI.

La Comisión toma buena nota de las medidas de sensibilización adoptadas por el Gobierno gracias a las cuales se ha concienciado a 20 775 personas sobre las cuestiones relativas al trabajo infantil, la trata de personas, la reglamentación sobre el trabajo infantil y la protección de los adolescentes que realizan trabajo forzoso. La Comisión toma nota de que se ha realizado un seguimiento nacional para identificar a los niños y adolescentes que realizan trabajo infantil y trabajo forzoso, según el Sistema de Gestión por Resultados (GPR) del Gobierno, y que 365 niños y adolescentes que realizaban trabajo forzoso han sido ubicados en los sistemas de protección del Gobierno.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que no se transmite información sobre el número de niños víctimas de trata. La Comisión observa que, según la información que aparece en el sitio web del Ministerio del Interior, en 2017 se adoptaron la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento de aplicación. En el capítulo VI de la ley se establece el marco de la prevención de la trata de personas así como de la protección, la atención y la reinserción de las víctimas, que debe ser aplicado por el Estado. Asimismo, la ley prevé la creación de un registro para identificar a las víctimas y para recopilar y analizar datos, que deberá permitir entender mejor el fenómeno de la trata de personas y formular la política pública en este ámbito.

La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para prevenir la trata de niños. Además, toma buena nota de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017 y pide al Gobierno que transmita información detallada sobre

las medidas adoptadas, en el marco de la aplicación de esta ley, a fin de proporcionar asistencia a los niños víctimas de trata y asegurar su rehabilitación e inserción social. Sírvase comunicar información sobre el número de niños que han sido librados de la trata, rehabilitados e integrados en la sociedad, desglosada por edad y género.

Artículo 8. Cooperación y asistencia internacional. Trata de niños. En su comentario anterior, pidió al Gobierno que transmitiera los resultados de las investigaciones que había realizado sobre la colaboración en las fronteras del Perú y Colombia y las estadísticas sobre el número de niños víctimas que han sido identificados y después repatriados a su país de origen.

La Comisión toma buena nota del acuerdo binacional entre el Perú y el Ecuador para la prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia y protección integral de sus víctimas. La Comisión observa que este acuerdo se ha podido alcanzar gracias a la colaboración de organizaciones de la sociedad civil. La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se señala que se encontraron 11 niños y adolescentes víctimas de trata de personas, que fueron repatriados a sus países de origen entre 2013 y 2016. ***La Comisión pide al Gobierno que indique si el intercambio de información con el Perú, efectuado en el marco del acuerdo firmado en 2016, ha permitido transmitir información sobre la identificación y las sanciones impuestas a las personas que se dedican a la trata de personas y actúan dentro de redes de trata. La Comisión pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para detectar e interceptar a los niños víctimas de trata en las fronteras y que en su próxima memoria transmita datos estadísticos sobre los resultados alcanzados, desglosados por género y edad.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de las personas que se dedican a la venta y la trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que garantizara que se adoptaba el proyecto de ley especial contra la trata de personas. Le pidió asimismo que comunicara información y estadísticas sobre las investigaciones y las condenas dictadas en relación con la venta y la trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual.

La Comisión toma nota de la información de la memoria del Gobierno, según la cual la trata de personas se ha convertido en el segundo delito más grave después del narcotráfico, que afecta sobre todo a los niños de 10 a 19 años, y que la lucha contra éste será una prioridad. La Comisión toma nota con **satisfacción** de la adopción de la Ley Especial contra la Trata de Personas (decreto núm. 824, de 16 de octubre de 2014) y de su reglamento de aplicación (decreto núm. 61, de 25 de octubre de 2016). La Comisión toma nota de que la nueva ley propone una definición ampliada del delito de trata de personas «el que entregue, capte, transporte, traslade, reciba o acoja a personas, dentro o fuera del territorio nacional, o facilite, promueva o favorezca, para ejecutar o permitir que otros realicen cualquier actividad de explotación humana», un delito para el que prevé una sanción con pena de diez a catorce años de reclusión. El artículo 55 de la ley establece que, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, el tiempo de duración de la condena será entre dieciséis y veinte años. La comisión de un delito contra una niña, un niño o un adolescente es una circunstancia agravante según la ley. Además, el artículo 55 tiene en cuenta delitos causados por personas directa o indirectamente responsables del cuidado de la niña, niño o adolescente que se encuentre bajo una medida de acogimiento en entidades públicas o privadas. La nueva ley menciona 69 artículos que penalizan la explotación sexual, el turismo sexual, el comercio de personas, el trabajo o los servicios forzosos, la esclavitud y la explotación por la mendicidad. La ley establece medidas concretas para la protección de las víctimas: i) la creación de unidades especiales en el departamento del Ministerio Público y de la policía nacional; ii) la creación de albergues y centros de atención especializada para las víctimas de trata de personas; iii) programas de reintegración social con medidas de asistencia prolongadas; iv) fondos de asistencia a las víctimas, y v) medidas de acceso a la justicia y a la confidencialidad. La ley establece además una evaluación cada tres años de la política nacional contra la trata de personas.

La Comisión toma nota de las informaciones detalladas que comunica el Gobierno en su memoria sobre los casos de trata y de venta de niños, así como de la naturaleza de las sanciones pronunciadas y de las condenas impuestas. El Gobierno señala que, en 2014, se arrestó a 55 personas por delito de trata de personas y se iniciaron 53 investigaciones de las cuales se derivaron siete enjuiciamientos y condenas por delito de trata de niños. Entre 2016 y 2017, se juzgó y condenó a seis personas por delitos de trata o de trata con fines de explotación laboral y sexual de menores. La Comisión toma nota de los datos proporcionados por el Gobierno sobre los casos de trata de personas en los lugares fronterizos: 87 víctimas de explotación sexual detectadas (76 mujeres y 11 hombres), de las cuales 68 eran niños y, entre ellos, tres niñas víctimas de trabajo forzoso. Diez de estas víctimas no tenían la nacionalidad salvadoreña.

La Comisión toma nota asimismo del desarrollo del proyecto de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas cuyo objetivo consiste en consolidar las capacidades de detección, investigación, procesamiento y

resolución de casos de trata de personas y de tráfico de migrantes. El proyecto de tres años es ejecutado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC-ROPAN) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de la Ley Especial contra la Trata de Personas, incluidas las investigaciones y enjuiciamientos efectuados y las condenas pronunciadas en el marco de la trata de niños menores de 18 años. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del proyecto de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas cuando haya sido adoptado.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas que siguen un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y liberarlos de ese trabajo. Explotación sexual comercial y trata de niños con esos fines. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública había puesto en marcha un plan destinado a erradicar la explotación sexual comercial, la trata de seres humanos, el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil en el marco del Plan Estratégico Institucional. No obstante, la Comisión tomó nota de que, si bien el plan nacional y el mandato del Consejo Nacional se centran en general en la trata de personas, no contemplan disposiciones específicas para los niños víctimas menores de 18 años de edad. La Comisión alentó vivamente al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas y efectivas en un plazo determinado para prevenir, liberar y rehabilitar a los niños víctimas, específicamente en el contexto del plan nacional.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, existe una política de justicia, seguridad pública y cohabitación, elaborada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como cinco líneas principales que articulan las estrategias y las acciones de esta política. La primera fase de la línea 4 da cuenta de los niños víctimas de delitos a través del examen de protocolos especiales de atención a las víctimas por las oficinas centrales administrativa y judicial y a través del acompañamiento a las víctimas que brinda el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

La Comisión toma nota en la memoria del Gobierno de las formaciones impartidas a los jueces, la policía y los procuradores en materia «de investigación sobre la trata de personas, asistencia a las víctimas de trata y medidas para garantizar a las víctimas su acceso a la justicia». La Comisión toma nota también de la formación sobre trata de personas impartida por los funcionarios de El Salvador a los funcionarios de Panamá y a los colaboradores funcionarios de Interpol, así como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Estados Unidos.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que, en 2014, en el albergue para niñas víctimas de explotación sexual, se prestó atención médica y psicológica a 13 niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. ***Recordando una vez más que los niños menores de 18 años de edad son especialmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual comercial, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que adopte medidas para prevenir los casos de trata, liberar a los niños de tales prácticas y prever su readaptación, en particular en el contexto del plan nacional. Al tiempo que toma nota de la ausencia de información sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, los resultados o las actividades realizadas en el marco del Plan Estratégico Institucional.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eritrea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su preocupación por la extensión del trabajo infantil en Eritrea y la falta de información y de medidas globales para garantizar la protección de los niños frente a la explotación económica. Asimismo, la Comisión recuerda las observaciones finales, de 2008, del Comité de los Derechos del Niño (CRC) (documento CRC/C/ERI/CO/3, párrafos 12 y 13), en las que se recomendó al Gobierno que adoptara un plan nacional de acción para la infancia y se le pidió que, con el apoyo de la OIT, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales, elaborara un amplio estudio de evaluación y un plan de acción para prevenir y combatir el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha compilado información con miras a formular una política nacional y está a la espera de un documento amplio de política nacional sobre los niños para fundamentar los esfuerzos a fin de proporcionar servicios sostenibles a los niños.

Sin embargo, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de que, a pesar de estas medidas preliminares y de la prevalencia del trabajo infantil en el país, la memoria del Gobierno describe pocas medidas concretas para combatirlo. A este respecto, la Comisión toma nota de los informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (documentos A/HRC/26/L.6 y A/HRC/26/45) de 2014, que continúan haciendo hincapié en el trabajo infantil en el país, incluido el reclutamiento militar obligatorio, así como el trabajo en actividades peligrosas tales como las cosechas y la construcción. Además, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de que, en su cuarto informe periódico al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 22), el Gobierno indica que, debido a que no se ha presentado ningún caso en materia de trabajo infantil a los tribunales de Eritrea, los esfuerzos del Gobierno para controlar el trabajo infantil deben haber sido eficaces. ***Tomando nota con profunda preocupación de que el trabajo infantil, con inclusión de las actividades peligrosas, continúa extendiéndose en Eritrea, la Comisión insta firmemente al***

Gobierno a redoblar sus esfuerzos para aplicar medidas concretas, por ejemplo adoptando un plan nacional de acción para eliminar el trabajo infantil de una vez por todas, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y a reforzar la capacidad del sistema de inspección del trabajo. Asimismo, la Comisión insta firmemente al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Artículo 2, 3) y 4). Edad de finalización de la educación obligatoria y edad mínima de admisión al empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la educación es obligatoria durante ocho años (cinco años de educación primaria y tres años de educación de ciclo medio), lo que implica que la educación obligatoria finalizará a los 14 años de edad. Sin embargo, la Comisión señaló su preocupación por las bajas tasas de matriculación en la escuela y el número significativo de niños que dejan la escuela antes de finalizar la educación primaria.

La Comisión toma nota de las medidas descritas en la memoria del Gobierno para proporcionar educación gratuita hasta el ciclo medio a todos los niños en edad escolar así como de la información sobre sus políticas, en particular la política educativa para poblaciones nómadas, destinadas a que la educación llegue a todos los niños. Además, el Gobierno indica que está haciendo esfuerzos para ampliar la educación de ciclo medio y conseguir que haya escuelas que impartan este tipo de educación más cerca de las zonas rurales. Asimismo, la Comisión toma nota del documento del UNICEF del Programa para el país para Eritrea 2013-2016 (documento E/ICEF/2013/P/L.1), en el que se hace hincapié en ciertas medidas que el Gobierno ha adoptado para mejorar la educación básica, con inclusión de la educación elemental gratuita y los proyectos para la educación de las poblaciones nómadas.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno así como de que, según la información estadística que contiene el proyecto de Acuerdo Marco de Asociación Estratégica (SPCF) para 2013-2016 entre el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas, la tasa neta de matriculación descendió de un 52,5 por ciento en 2005 a un 49,6 por ciento en 2010, con disparidad por lugar y género. Además, la Comisión toma nota de la información que contiene el cuarto informe periódico del Gobierno al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 301 y cuadro 28), según la cual, en 2009-2010, la tasa de matriculación en la escuela elemental descendió un 9 por ciento y la matriculación de niñas y jóvenes un 8 por ciento. **Tomando nota de que aumentar el acceso a la educación básica de calidad es una de las prioridades del SPCF 2013-2016, así como del Programa para el país para Eritrea del UNICEF, la Comisión solicita al Gobierno que continúe cooperando con los organismos de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y el acceso a él a fin de incrementar las tasas de matriculación en la escuela y reducir las tasas de abandono escolar, al menos hasta la edad de finalización de la educación obligatoria, en particular, en lo que se refiere a las niñas.**

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión recuerda que desde 2007 el Gobierno se ha estado refiriendo a que pronto se iba a adoptar una lista de actividades peligrosas prohibidas a los empleados jóvenes en virtud del artículo 69, 1), de la Proclamación del Trabajo. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno indica de nuevo que se adoptará esta lista, también señala que las disposiciones en virtud del actual artículo 69 de la Proclamación del Trabajo, que se han especificado, son suficientes porque incluyen una lista de actividades peligrosas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 69 simplemente autoriza, mediante reglamento, al ministro a promulgar dicha lista. Por consiguiente, en sus propios términos, no se dispone de un reglamento ministerial porque la lista que se menciona en el artículo 69 sigue siendo hipotética. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que, sin demora, finalice el reglamento ministerial para promulgar la lista de actividades peligrosas prohibidas a las personas de menos de 18 años de edad.**

Artículo 9, 3). Registros de los empleadores. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicó que la exigencia de que los empleadores lleven un registro de las personas empleadas que tienen menos de 18 años se abordaría a través de un nuevo reglamento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha señalado recientemente que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social aún está realizando estudios para elaborar este reglamento. **Tomando nota de que el Gobierno ha estado reiterando su intención de adoptar leyes de aplicación desde 2007, la Comisión le insta a que, sin mayor demora, tome las medidas necesarias para adoptar el reglamento en relación con los registros llevados por los empleadores y transmita una copia una vez que se haya finalizado.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Etiopía

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación y aplicación en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de que si bien el artículo 89, 2), de la proclamación de la Ley del Trabajo, núm. 42, de 1993, prohíbe el empleo de menores de 14 años de edad, las disposiciones de la Ley del Trabajo no cubren el trabajo desempeñado fuera de una relación de empleo.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que la Constitución establece el derecho de los niños etíopes, sin discriminación alguna, a estar protegidos frente a cualquier forma de explotación laboral tanto si están empleados como si trabajan por cuenta propia o si trabajan en el sector formal o en el sector informal. El Gobierno también indica que se ha preparado un manual sobre la inspección del trabajo en el idioma local de trabajo que incluye directrices para los inspectores sobre la manera de encontrar a los niños que realizan trabajo infantil y en general proteger a los niños de este tipo de trabajo, tanto en el sector formal como en el sector informal.

La Comisión toma nota de que, con la asistencia técnica de la OIT, en 2018 se publicó la encuesta sobre el trabajo infantil de 2015. Según los resultados de esta encuesta se estima que el número de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años que trabajan asciende a 13 139 991 (pág. 63). La Comisión también toma nota de que la mayor parte de los niños que trabajan (89,4 por ciento) lo hacen en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca, con una mayor participación de los niños más pequeños. El 93 por ciento de los niños que trabajan en este sector viven en zonas rurales.

mientras que el 39,6 por ciento viven en zonas urbanas. El comercio mayorista y minorista es el segundo sector en el que trabajan más niños. La mayor parte de los niños que realizan actividades económicas lo hacen como trabajadores familiares no remunerados (95,6 por ciento) (pág. xii). La Comisión toma nota con **preocupación** del elevado número de niños que trabajan en la economía informal. Recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y cubre todas las formas de empleo y trabajo se trate o no de una relación de empleo contractual, incluido el trabajo por cuenta propia. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños de menos de 14 años, en particular los niños que trabajan fuera de una relación de empleo, como por ejemplo los que trabajan por cuenta propia o en la economía informal, se benefician de la protección prevista por el Convenio. A este respecto, la Comisión insta al Gobierno a revisar las disposiciones pertinentes de la Ley del Trabajo a fin de abordar esas lagunas y a adoptar medidas para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo y ampliar su alcance a la economía informal con miras a asegurar dicha protección en este sector.**

Artículo 2, 3). Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en Etiopía la enseñanza primaria no es gratuita ni obligatoria y la tasa neta de matriculación en la escuela era aún muy baja. Asimismo, la Comisión tomó nota de que en las estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se indica que si bien la asistencia neta a la escuela primaria era del 64,3 por ciento para los niños y del 65,5 por ciento para las niñas, sólo era del 15,7 por ciento de los niños y del 15,6 por ciento de las niñas en la escuela secundaria. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proporcionar enseñanza obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, que es de 14 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha iniciado el proceso de elaboración de legislación a fin de convertir la educación primaria en obligatoria. Asimismo, la Comisión toma nota de que según la encuesta sobre el trabajo infantil, la tasa de asistencia a la escuela de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años es del 61,3 por ciento (pág. xi). Los niños que asisten a la escuela trabajan cerca de 28 horas a la semana, mientras que los que no van a la escuela realizan 37,6 horas de trabajo. Además, 2 830 842 niños de entre 5 y 17 años (el 7,6 por ciento del número total de niños del país) han abandonado la escuela. La Comisión toma nota de que la tasa de abandono escolar de los niños que trabajan es superior (10,9 por ciento) a la de los niños que no trabajan (4,1 por ciento). También es más probable que abandonen la escuela los niños que trabajan que las niñas que trabajan (el 11,6 por ciento frente al 9,8 por ciento) (págs. 86 y 88).

Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por una serie de cuestiones que incluyen: i) la falta de legislación nacional sobre la enseñanza gratuita y obligatoria; ii) la persistencia de las disparidades regionales en las tasas de matriculación y el elevado número de niños en edad escolar, y en particular de niñas, que siguen sin asistir a la escuela, así como por iii) el gran número de abandonos y la tasa notablemente baja de matriculación en la enseñanza preescolar y secundaria (documento CRC/C/ETH/CO/4-5, párrafo 61). **Considerando que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para prever la educación obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, que es de 14 años. También pide al Gobierno que, con miras a impedir que los niños de menos de 14 años trabajen, redoble sus esfuerzos para incrementar la tasa de matriculación en la escuela y reducir las tasas de abandono de la escuela primaria.**

Artículo 3. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de esos trabajos. Aplicación en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente del decreto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2 de septiembre de 1997, sobre la prohibición del trabajo de los jóvenes, que en el artículo 4, 1), contiene una lista detallada de trabajos peligrosos y una prohibición general de todos los demás tipos de trabajo que puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los jóvenes. La Comisión también tomó nota de que, en su memoria con arreglo al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Gobierno indicó que estaba revisando la lista de trabajos peligrosos.

La Comisión observa que, según la encuesta sobre el trabajo infantil, la tasa de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajos peligrosos es del 23,3 por ciento (el 28 por ciento de niños frente al 18,2 por ciento de niñas), siendo la tasa de las zonas urbanas del 9,2 por ciento en comparación con el 26,4 por ciento en las zonas rurales. Además, los niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajos peligrosos trabajan 41,4 horas semanales de media y el 50 por ciento de esos niños trabajan más de 42 horas semanales. Los niños más pequeños (entre 5 y 11 años) tienen, relativamente, horarios más prolongados que las otras categorías (53,3 por ciento). La Comisión toma nota también de que el 87,5 por ciento de los niños que realizan trabajos peligrosos trabajan en el sector agrícola y el 66,2 por ciento sufren otras condiciones de trabajo peligrosas, como por ejemplo el trabajo nocturno, el trabajo en entornos insalubres o la utilización de equipos que no son seguros (pág. xiii).

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que un gran número de menores de 18 años realizan trabajos peligrosos. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar que, en la práctica, los menores de 18 años no realizan trabajos peligrosos ni en las zonas urbanas ni en las zonas rurales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información a este respecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique si se ha adoptado una nueva lista de tipos de trabajos peligrosos y, de ser así, que proporcione una copia de dicha lista.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, a), y 7, 1) y 2), b), del Convenio. Venta y trata de niños, sanciones y rehabilitación. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere a la adopción de la proclama núm. 909 de 2015 sobre la prevención y la supresión de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Ley de Lucha contra la Trata) que ha reemplazado los artículos pertinentes del Código Penal relacionados con la trata de personas. La Comisión toma nota con **interés** de que el artículo 3, 2), de la Ley de Lucha contra la Trata establece que el hecho de que la víctima de cualquiera de los delitos en virtud de esta ley sea un niño es una circunstancia agravante y prevé penas de prisión de entre veinticinco años y cadena perpetua. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que se han tomado diversas medidas para combatir la trata de personas en general y de mujeres y niños en particular, que incluyen: i) la organización de campañas de sensibilización en las comunidades (hasta ahora más de 10 millones de miembros de comunidades han participado en formaciones sobre la prevención de la trata); ii) la realización de formaciones sobre los efectos de la trata de niños destinadas a personas que trabajan en los órganos de aplicación de la ley, y iii) el establecimiento de un mecanismo de control en los servicios de transporte con objeto de comprobar si los niños que utilizan el transporte público van con sus padres o tutores.

Sin embargo, la Comisión observa que en sus observaciones finales de 2015, el Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por la persistencia de la trata de niños para su empleo en el extranjero y dentro del país como servidumbre doméstica y para su explotación sexual con fines comerciales y en las peores formas de trabajo infantil. También preocupa gravemente al Comité la falta de centros de rehabilitación y reintegración para proporcionar una asistencia psicológica y médica adecuada y adaptada a la edad de los niños víctimas de trata y de explotación sexual con fines comerciales (documento CRC/C/ETH/CO/4-5, párrafo 69).

En lo que respecta al establecimiento de centros de rehabilitación para los niños víctimas de trata, la Comisión observa que, con arreglo al artículo 26 de la Ley de Lucha contra la Trata, el Gobierno deberá establecer los procedimientos necesarios para identificar, rescatar, repatriar y rehabilitar a las víctimas de trata. Con arreglo al artículo 39 se ha establecido un comité nacional de lucha contra la trata a fin de coordinar las actividades para proteger a las víctimas, así como un grupo de trabajo de lucha contra la trata para apoyar la rehabilitación de las víctimas de trata (artículo 40). **La Comisión alienta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por la aplicación efectiva de la proclama núm. 909 de 2015 sobre la prevención y la supresión de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos de las personas que se dedican a la venta y trata de niños y en la práctica se les imponen sanciones efectivas y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información al respecto, incluidas estadísticas sobre el número y la naturaleza de los delitos notificados, las investigaciones y enjuiciamientos realizados, y las condenas y sanciones penales impuestas en relación con la trata de menores de 18 años. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños víctimas de trata que han sido identificados y rehabilitados.**

Artículo 7, 2). Medidas eficaces y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños víctimas o huérfanos a causa del VIH y el sida y otros niños vulnerables. La Comisión tomó nota con anterioridad del programa gubernamental sobre los niños huérfanos y niños vulnerables en el que participan los órganos gubernamentales pertinentes, ONG y la comunidad, así como de la realización de actividades a pequeña escala para cuidar y apoyar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el país. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno se refirió al Plan nacional de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil (2013-2015) y pidió información a este respecto.

La Comisión toma nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en septiembre de 2016, una misión de la OIT visitó Etiopía en seguimiento de la misión de marzo de 2015 sobre lagunas en la aplicación de los convenios en materia de trabajo infantil. Según el informe de la misión, se está elaborando un nuevo plan nacional de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión también observa que, según las estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), hay alrededor de 710 000 adultos y niños que viven con el VIH y el sida en Etiopía, de los cuales 650 000 tienen 15 años o más (estimaciones de 2016). Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño seguía preocupado por el hecho de que el VIH y el sida continúe siendo un problema importante, en particular en las zonas urbanas y para los niños en situación vulnerable, como los huérfanos, los niños de la calle y los niños que viven en la pobreza y en hogares monoparentales o encabezados por niños (documento CRC/C/ETH/CO/4-5, párrafo 57).

La Comisión expresa su **preocupación** por el gran número de niños que han quedado huérfanos debido al VIH y el sida en el país. Asimismo, la Comisión recuerda que los otros niños vulnerables tienen un mayor riesgo de ser víctimas de las peores formas de trabajo infantil. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas y eficaces para velar por que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida y los otros niños vulnerables no sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre**

los resultados del Plan nacional de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil (2013-2015) en lo que respecta a proteger a los niños huérfanos a causa del VIH y el sida, indicando, por ejemplo, el número de otros niños vulnerables que se ha logrado que no sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil o han sido librados de estas peores formas. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique si se ha adoptado un nuevo plan nacional de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil y, de ser así, que indique sus principales resultados.

Apartado e). Situación especial de las niñas. Trabajo doméstico. La Comisión había tomado nota de que había aproximadamente entre 6 500 y 7 500 niñas trabajadoras domésticas en Addis Abeba, que eran objeto de una explotación extrema, trabajando muchas horas por un salario mínimo o por un poco de comida y alojamiento y que estas niñas son vulnerables frente a los abusos físicos y sexuales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está trabajando para sensibilizar a las familias y a las comunidades a fin de impedir que los niños sean explotados y que las familias pongan a sus hijos en manos de desconocidos o parientes que viven en zonas urbanas.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité de los Derechos del Niño señaló que está seriamente preocupado por la situación de los niños trabajadores domésticos, conocidos como *seratenyas*, así como por la de los huérfanos y los niños de la calle y la de las niñas que se trasladan a países extranjeros y son víctimas de explotación económica y de abusos (documento CRC/C/ETH/CO/4-5, párrafo 63). La Comisión recuerda que los niños que trabajan en el servicio doméstico están especialmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil. **A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas inmediatas y eficaces para proteger a los niños trabajadores domésticos, y a las niñas en particular, a fin de que no sean víctimas de explotación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas eficaces y en un plazo determinado adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 3, d), del Convenio. Trabajos peligrosos en las explotaciones de cacao. La Comisión tomó nota con anterioridad de las actividades del Gobierno, en el marco del Programa nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en la industria del cacao (NPECLC), y su Plan de Acción para 2010-2011. Acogió asimismo con beneplácito la elaboración del manual para los agentes de cambio en las comunidades de Ghana, que se preparó en 2014, con la asistencia de la OIT/IPEC, con el fin de, entre otras cosas, erradicar el trabajo infantil en los trabajos peligrosos, en las explotaciones de cacao de Ghana. Sin embargo, tomó nota de los datos estadísticos contenidos en el manual, según los cuales la mayoría de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que trabajan en el país, lo hacen en el sector agrícola, con un 23,3 por ciento de niños cubiertos (1 846 126) que realizan al menos una actividad peligrosa y con un 10 por ciento ocupados en actividades peligrosas en la industria del cacao. La Comisión toma nota con preocupación del número significativo de menores de 18 años que realizan trabajos en condiciones peligrosas en el sector agrícola, incluida la industria del cacao, y solicitó al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para erradicar esta peor forma de trabajo infantil.

La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este asunto. **En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para eliminar los trabajos peligrosos de los menores de 18 años de edad en las explotaciones de cacao, y solicita al Gobierno que comunique información sobre toda iniciativa tomada en ese sentido y sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 4, 3). Revisión de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual prevé la revisión y la actualización, cuando sea necesario, del artículo 91 de la Ley de los Niños, incluida la lista de los tipos de trabajos peligrosos, con el fin de dar cumplimiento al Convenio. La Comisión tomó nota de que se finalizó una nueva lista de trabajos peligrosos en el sector del cacao, en el marco del NPECLC. La Comisión también tomó nota de que el Plan de acción nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Ghana (NPA) (2009-2015), identificó la necesidad de ampliar la lista de actividades peligrosas, a efectos de identificar claramente las tareas o actividades peligrosas en virtud de la Ley de los Niños. Tomó nota asimismo de que «la evaluación *inter pares*» de las actividades de eliminación del trabajo infantil por parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) efectuada en abril de 2014 con la asistencia técnica de la OIT, describe el marco de actividades del trabajo infantil peligroso, que se elaboró en 2012 y que sería difundido en 2014. La Comisión tomó nota también de que, según la primera memoria del Gobierno presentada en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el comité directivo nacional de la Unidad de Trabajo Infantil (CLU) validó una lista de los tipos de trabajo peligrosos, con arreglo al marco de actividades del trabajo infantil peligroso, titulado «Lista del trabajo infantil peligroso en Ghana (GHAHCL)», si bien el Gobierno indica que aún no había pasado a ser una legislación nacional.

La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de información a este respecto. **Tomando nota de que la lista de los tipos de trabajo peligrosos, con arreglo al marco de actividades del trabajo infantil peligroso, se viene elaborando y validando desde 2012, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte en un futuro próximo. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en ese sentido.**

Artículo 7, 2). Medidas efectivas en un plazo determinado. Cláusulas a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Trata. La Comisión tomó nota anteriormente de

que la OIT/IPEC da su apoyo a un programa nacional que se centra, entre otras cosas, en las peores formas del trabajo infantil en la pesca tradicional. La Comisión también tomó nota del Estudio analítico sobre el trabajo infantil en la pesca en el Lago Volta de Ghana, que se llevó a cabo en 2013, con la asistencia de la OIT/IPEC, detectándose que hay niños que trabajan en actividades pesqueras peligrosas y en malas condiciones laborales. De los niños ocupados en actividades pesqueras, el 11 por ciento tiene entre 5 y 9 años de edad, y el 20 por ciento, entre 10 y 14 años. Además, según el estudio, el 47 por ciento de los niños ocupados en la pesca en el Lago Volta han sido víctimas de trata, el 3 por ciento, de servidumbre, el 45 por ciento de trabajo forzoso y el 3 por ciento de esclavitud sexual. La Comisión expresó su profunda preocupación ante la prevalencia de niños víctimas de trata o vendidos para las actividades pesqueras, o que están ocupados de otra manera en actividades pesqueras peligrosas en la región del Lago Volta.

La Comisión *lamenta* tomar nota de la ausencia de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, la Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a la lista de las cuestiones relativas al informe inicial sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 13 de junio de 2016, según las cuales el Gobierno aplica el pacto de protección infantil, dirigido a combatir la trata de niños, la esclavitud infantil y el trabajo infantil en las regiones de Gran Accra, Volta y Central. En la actualidad, se desarrollan procedimientos operativos estándar y la base de datos de la trata de personas, a efectos de identificar a las víctimas de trata y de hacer un seguimiento de las diversas intervenciones de asistencia (documento CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1, párrafo 74). La Comisión también toma nota de que existen dos albergues de propiedad estatal, en Osu y Madina en Accra, que se renovarán pronto (párrafo 75). La Comisión también toma nota de que se está aplicando, en Kpondo Torkor, el proyecto del Sindicato General de Trabajadores Agrícolas (GAWU) para eliminar la trata y el trabajo infantil en el sector pesquero (Lago de Volta). El proyecto se centra en las comunidades para proteger a los niños y enviarlos a la escuela. Además, se puso en marcha, en abril de 2015, una lancha rápida para asistir a los voluntarios en las actividades de control en el lago para detener a los responsables y rescatar a los niños en el lago (párrafo 76). *Al tiempo que toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que estos niños sean librados de las peores formas de trabajo infantil y para brindarles unos servicios de apoyo idóneos para su rehabilitación e inserción social. También solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en este sentido, incluido el número de niños víctimas de trata que fueron librados y rehabilitados, como consecuencia de las medidas adoptadas.*

2. *Sistema trokosi.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para librar a los niños del *trokosi* (un ritual en el que las adolescentes realizan un período de servicio en un templo local para expiar los pecados de otro miembro de la familia), la situación sigue siendo muy habitual en el país. La Comisión también tomó nota de que, con arreglo al NPA, el Gobierno se dirige a aplicar programas orientados a facilitar un cambio de actitud respecto de las prácticas tradicionales hacia los derechos de los niños.

La Comisión *lamenta* tomar nota de que la memoria del Gobierno no comunica ninguna nueva información sobre estas medidas programáticas para impedir y librar a los niños del sistema *trokosi*. También toma nota de que el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales, de 9 de agosto de 2016 (documento CCPR/C/GHA/CO/1, párrafo 17), manifiesta su preocupación ante la persistencia de algunas prácticas nocivas, a pesar de que la ley lo prohíbe, incluido el sistema *trokosi*. La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de la prevalencia de la práctica *trokosi* que afecta a los niños del país. *Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para impedir la ocupación de niños en la servidumbre ritual trokosi y para poner fin, con carácter de urgencia, a esta práctica tradicional. Pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas en este sentido y los resultados obtenidos teniendo en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de niños menores de 18 años de edad que son afectados por el trokosi en el país, y sobre el número de niños que son librados de este sistema y rehabilitados. En la medida de lo posible, esta información debería ser desglosada por edad y por género.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Grecia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), recibidas el 1.º de septiembre de 2016 y 2017.

Artículo 3, 3), del Convenio. Autorización para realizar trabajos peligrosos a partir de la edad de 16 años. La Comisión tomó nota anteriormente de que en el artículo 7, 5), del decreto presidencial núm. 62, de 1998, se dispone que, con la autorización de la inspección del trabajo competente y a solicitud del empleador, pueden otorgarse excepciones a la prohibición de empleo en un trabajo que sea susceptible de perjudicar la salud, la seguridad o el desarrollo de los jóvenes, cuando ese trabajo sea necesario para su formación profesional con la condición de que las tareas en cuestión se realicen bajo la supervisión de un técnico en seguridad y/o un técnico en asuntos laborales que garanticen su seguridad. También tomó nota de que, en virtud del artículo 2, c), del decreto presidencial núm. 62, de 1998, el término «adolescente» significa toda persona de al menos 15 años de edad pero menor de 18 años de edad que haya finalizado la enseñanza obligatoria. En consecuencia, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para armonizar su legislación nacional con el artículo 3, 3), del Convenio, disponiendo que no se autorice a persona alguna menor de 16 años de edad a realizar trabajos peligrosos en ninguna circunstancia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se ha puesto en marcha un procedimiento para propiciar una posible modificación de la legislación en este sentido. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, de conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio, la legislación nacional o la autoridad competente podrá autorizar el

empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. En este sentido, la Comisión debe destacar que deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar que los adolescentes menores de 16 años de edad ocupados en un programa de aprendizaje, no realicen trabajos peligrosos, y deberían adoptarse medidas para aumentar a 16 años la edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, aun cuando se hayan previsto debidamente las condiciones de protección (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 380 y 385). ***Por consiguiente, la Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adopte sin demora las medidas necesarias para que se realicen modificaciones con objeto de aumentar al menos a 16 años la edad mínima para las excepciones a la prohibición del empleo de adolescentes en trabajos peligrosos, como establece el artículo 7, 5), del decreto presidencial núm. 62/1998, a efectos de dar cumplimiento al artículo 3, 3), del Convenio. Pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.***

Aplicación del Convenio en la práctica y condiciones laborales de los jóvenes. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a raíz de sus comentarios anteriores, según la cual los departamentos regionales de la Inspección de las Relaciones de Trabajo aprobaron la publicación de 7 647 folletos sobre el trabajo dirigidos a menores. Asimismo, toma nota de que se multó a 12 empleadores por emplear ilegalmente a menores. Además, el Gobierno señala que se emplearon a 1 332 jóvenes de entre 15 y 17 años en 2017, incluidos 446 jóvenes en la agricultura, la silvicultura y la pesca; 79 jóvenes en la industria de la manufactura, la energía y la construcción; 181 jóvenes en el comercio mayorista y minorista, y 627 jóvenes en el sector servicios.

La Comisión toma nota de que la GSEE indica en sus observaciones que los jóvenes a los que se emplea están sujetos a un trato desigual en términos de salario y condiciones laborales. ***La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de trabajo de los menores de 18 años, en especial en cuanto al salario mínimo, sean satisfactorias. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la manera en que se aplica el Convenio, por ejemplo, aportando datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes, extractos de los informes de los servicios de inspección, e información acerca del número y la naturaleza de las infracciones registradas y las sanciones impuestas relacionadas con niños y jóvenes.***

Guatemala

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que las informaciones comunicadas por las inspecciones del trabajo carecían de precisión en cuanto a las rúbricas mencionadas a la naturaleza de las infracciones y a las sanciones señaladas y a las sanciones impuestas. La Comisión señaló que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones de 2014 (documento E/C.12/GTM/CO/3, párrafo 20), expresó su preocupación por la persistencia del trabajo infantil en Guatemala, especialmente en la agricultura y en el trabajo doméstico. Solicitó al Gobierno que siguiera adoptando medidas prácticas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo en sus acciones para prevenir y luchar contra el trabajo infantil. Solicitó al Gobierno que siguiera transmitiendo informaciones sobre la manera en la que se aplica el Convenio en la práctica, atendiendo especialmente a las estadísticas sobre el empleo de los niños menores de 14 años de edad, los extractos de los informes de los servicios de inspección y las informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas y las sanciones impuestas.

La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el apoyo del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) y del fondo para las reformas estructurales de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), imprimió y difundió el «protocolo único de procedimiento del sistema de inspección del trabajo» como una herramienta de fortalecimiento de la inspección general del trabajo.

La Comisión toma nota de las estadísticas del Ministerio del Trabajo, Seguridad Social e Inspección General del Trabajo, sobre los casos de trabajo infantil detectados por los servicios de inspección del trabajo: en 2015, de 85 casos de trabajo infantil detectados, 27 finalizaron con una conciliación entre las partes y 19 víctimas renunciaron o abandonaron su queja; en 2016, de 67 casos de trabajo infantil detectados, 16 finalizaron con una conciliación entre las partes y nueve víctimas renunciaron o abandonaron su queja; en 2017, de 26 casos de trabajo infantil detectados, seis finalizaron con una conciliación entre las partes y nueve víctimas renunciaron o abandonaron su queja. En 2015, los servicios de inspección del trabajo realizaron 6 686 inspecciones en los sectores en los que predominan los trabajos peligrosos, como las actividades vinculadas a los cultivos, a la cosecha, a la transferencia y al procesamiento de la caña de azúcar y a la exportación de azúcar, así como el sector de la palma africana, los hoteles, los restaurantes y finalmente el sector de la producción y distribución de juegos pirotécnicos. Durante estas inspecciones, fueron localizados 68 niños que trabajaban,

de edades menores de 18 años, 33 niños y 14 niñas de 14 a 17 años de edad y 17 niños y cuatro niñas menores de 13 años. En 2016, los servicios de inspección del trabajo realizaron 5 590 visitas en los mismos sectores, fueron localizados 97 niños que trabajaban con menos de 18 años de edad, 60 niños y 14 niñas de 14 a 17 años de edad y siete niños y cuatro niñas menores de 13 años de edad. En 2017, las inspecciones se dirigieron a los sectores en los que existen indicios de infracción vinculados al trabajo infantil, como tiendas de barrio, talleres y lugares de venta de tortillas. En total, la inspección del trabajo realizó 1 734 visitas, en las que se localizaron 37 niños menores de 18 años, 23 niños y 12 niñas de 14 a 17 años y un niño y una niña menores de 13 años.

La Comisión toma nota, según las observaciones conjuntas de la OIE y del CACIF, del cambio legislativo positivo que tuvo lugar en 2017, con la aprobación de la ley núm. 5198, que reforma el decreto núm. 1441, que modifica el Código del Trabajo y que permite que la Inspección General del Trabajo imponga directamente sanciones en caso de violación de los derechos laborales. Indican que la inspección del trabajo sólo puede recomendar una multa, al tiempo que este cambio fortalece de manera considerable sus posibilidades de acción, incluida la posibilidad de imponer sanciones. De igual modo, la Comisión toma nota de que la Inspección General del Trabajo puede participar asimismo en la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación contra el Trabajo Infantil (CONAPETI), que está estipulado en el acuerdo del Gobierno núm. 347-2002 y en el acuerdo gubernamental de reforma núm. 103-2015.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la «Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas: programación 2016-2020» fue reprogramada en 2017. Este programa se basa en la situación contextual del trabajo infantil en Guatemala, en el marco internacional y en las lecciones aprendidas de los resultados de las Hojas de rutas anteriores (2010-2012 y 2013-2015), con el fin de determinar los puntos fuertes y los desafíos de su aplicación. Su estrategia se basa también en la asociación de diferentes instituciones y entidades que componen la Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI y los Comités Departamentales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CODEPETIS), con el fin de que su programación tenga una expresión sectorial y territorial. Las dimensiones de la Hoja de ruta son las siguientes: i) lucha contra la pobreza; ii) política de salud; iii) política de educación; iv) marco normativo y de protección integral; v) sensibilización y participación ciudadana, y vi) generación de conocimiento y seguimiento.

La Comisión toma nota de los pormenores que el Gobierno comunica en el anexo 5 de su memoria, sobre las diversas acciones de la Hoja de ruta llevadas a cabo de 2015 a 2017, en las diferentes regiones del país, con miras a la progresiva erradicación del trabajo infantil y sobre la edad mínima de admisión al empleo: 15 acciones distribuidas en los diferentes departamentos de la región norte; 13 acciones en los departamentos de la región sur; 53 acciones en los departamentos de la región occidental; 41 acciones en los departamentos de la región oriental y 18 acciones en los departamentos de la región central del país. Las acciones llevadas a cabo fueron las siguientes: i) diálogos departamentales para niños y adolescentes sobre sus derechos; ii) conferencias dadas sobre los derechos de los niños; iii) formaciones sobre el derecho del trabajo y del trabajo infantil para el personal de las empresas, para los funcionarios y para los sindicatos; iv) formaciones para los empresarios sobre la legislación del trabajo respecto de las obligaciones de los empleadores; v) campañas de sensibilización sobre las sanciones y las consecuencias para el reclutamiento de menores; vi) diagnósticos sobre el trabajo infantil, y vii) reuniones con el representante legal de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala y con el representante legal de grupos sindicales, entre otras actividades.

Tomando buena nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que tenga a bien proseguir sus esfuerzos para garantizar la progresiva eliminación del trabajo infantil. Pide asimismo al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre los resultados obtenidos en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta, para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y de sus peores formas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas prácticas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo en su acción, a efectos de impedir y combatir el trabajo infantil, habida cuenta de su importante función en materia de control de la aplicación de la edad mínima de admisión al empleo. Teniendo en cuenta la reforma del Código del Trabajo de 2018 antes mencionada, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones detalladas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas y de las sanciones impuestas por los inspectores del trabajo durante sus inspecciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. *Venta y trata de niños con fines de explotación sexual y sanciones.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la persistencia del problema de la trata de niños menores de 18 años, con miras a su explotación sexual con fines comerciales, así como de los alegatos de complicidad de los agentes encargados de la aplicación de ley con las personas que se dedican a la trata de personas. La Comisión solicitó al Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos para velar por que se realizaran encuestas exhaustivas y procesos judiciales eficaces respecto

de los autores de trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual comercial y contra los funcionarios que son cómplices de estos actos.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y del CACIF, que indican que, según el último informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) sobre el trabajo infantil y sus peores formas, en 2016 Guatemala fue reconocido como uno de los 23 países, de los 135 países estudiados, que registraron avances significativos en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Además, las observaciones conjuntas de la OIE y del CACIF indican que el Gobierno restableció la Comisión interinstitucional contra la trata de personas y que se asoció al Centro nacional para niños desaparecidos y explotados, que colabora directamente con las empresas tecnológicas para obtener índices sobre la pornografía y la trata de niños.

La Comisión toma nota, según los anexos 1 y 2 de la memoria del Gobierno, de las informaciones estadísticas de 2015 a 2017, transmitidas por la Fiscalía contra la trata de personas. Entre 2015 y el primer semestre de 2017, se realizaron 434 investigaciones sobre el delito de trata de personas, en las que 314 eran adolescentes 283 niñas y 31 niños, y 110 eran niños, 46 de los cuales eran varones y 64 niñas. Según el Centro de información, desarrollo y estadística judicial, se registró un total de 682 procesos de trata de personas y otros delitos conexos en el sector judicial, entre 2015 y febrero de 2018. El Gobierno subraya que, con respecto al enjuiciamiento de funcionarios cómplices, estos delitos no se reflejan en estas estadísticas, por el hecho de que los registros institucionales aún trabajan en desagregar este tipo de variables, entre otras. De igual modo, la Fiscalía contra la trata de personas indicó que sólo un funcionario fue detenido y condenado a una pena de veintidós años de prisión. De 2017 a febrero de 2018, se dictaron 197 sentencias judiciales sobre el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, 69 de las cuales se referían a menores. Sin embargo, la Comisión toma nota de la ausencia de informaciones sobre las sanciones aplicadas como consecuencia de estas decisiones judiciales.

La Comisión toma nota asimismo de las acciones de la policía nacional en lo que respecta al registro de los casos de explotación sexual. De igual modo, el departamento especializado en la infancia y la adolescencia de la policía nacional civil dispone en la actualidad de tres protocolos de intervención de la policía en los procedimientos que implican a niños y adolescentes, con el fin de que actúe de manera adecuada durante los procedimientos con niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. ***La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien proseguir sus esfuerzos para velar por que se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos eficaces respecto de los autores de trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual comercial y que se impongan en la práctica sanciones eficaces y suficientemente disuasorias. Solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones precisas, desglosadas por edad y por género, sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de las personas que se dedican a la venta y a la trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual comercial, y la naturaleza de las sanciones impuestas.***

Artículos 3 y 5. Peores formas de trabajo infantil y mecanismos de vigilancia. Apartado d). Trabajos peligrosos. Producción o manipulación de materiales y productos explosivos y la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la disminución del número de casos de niños ocupados en la fabricación, preparación y manipulación de materiales o productos explosivos pirotécnicos. Sin embargo, la Comisión solicitó al Gobierno que siguiera adoptando las medidas necesarias para velar por que las personas menores de 18 años no sean ocupadas en este sector.

La Comisión toma nota de las estadísticas del Ministro de Trabajo para el período comprendido entre 2015 y 2017, en las que 20 858 adolescentes fueron atendidos por la Unidad de Protección al Adolescente Trabajador (UPAT) y fueron informados de sus derechos en materia de trabajo y sobre la edad mínima de admisión al empleo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante la Inspección General del Trabajo, realizó en 2015, 6 686 visitas en los sectores agrícola, de la palma africana, de hoteles y restaurantes, y de la producción y distribución de cohetes y juegos pirotécnicos. En estas inspecciones, se localizó a 68 trabajadores menores de 18 años, 47 de los cuales eran adolescentes de 14 a 17 años, y 21, niños de hasta 13 años.

La Comisión toma nota de las acciones puestas en marcha por la Inspección General del Trabajo para garantizar que las personas menores de 18 años no estén empleadas en el sector pirotécnico. En 2015, de 750 inspecciones, sólo se registró el caso de un adolescente en este sector. En 2016, de las 662 visitas de inspección del trabajo en el sector de la pirotecnia, dos casos de menores de 18 años procedían de ese sector y, en 2017, se realizaron 534 visitas en el sector de la pirotecnia, no identificándose ningún caso de trabajo infantil. La Comisión toma nota con ***interés*** de que el Gobierno indica en su memoria un descenso del número de personas menores de 18 años que ejercen ese tipo de actividad, especialmente gracias a las operaciones efectuadas anualmente por la inspección general.

La Comisión toma nota de las estadísticas del Gobierno sobre los procedimientos de quejas. En 2017, de 62 quejas, 39 llevaron a un procedimiento legal y, en 2018, de 25 quejas, 19 llevaron a un procedimiento legal. La Comisión toma nota de las indicaciones relativas a las sanciones impuestas como consecuencia de las inspecciones del trabajo. El Gobierno indica que, antes de 2016, no fue posible controlar estrictamente el número de sanciones que se hubiesen podido imponer para luchar contra el trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma buena nota del decreto núm. 7-2017, de junio de 2017, que modifica el Código del Trabajo y que confiere a la Inspección General del Trabajo la facultad de imponer las sanciones correspondientes en caso de violación de los derechos del trabajo. Están pendientes las decisiones administrativas en materia de sanciones, dado que está en curso un procedimiento ante la Contraloría General de Cuentas.

La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir adoptando las medidas necesarias para velar por que las personas menores de 18 años no estén ocupadas en este sector. Además, le solicita que se sirva indicar el número de inspecciones efectuadas en este sector, la naturaleza de las infracciones señaladas y las sanciones impuestas como consecuencia de estas inspecciones. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre los motivos por los que muchas quejas no han llevado a un procedimiento legal y sobre las medidas concretas adoptadas al respecto y los resultados obtenidos.

Artículo 6. Programas de acción. *Plan nacional de acción para luchar contra la explotación sexual de los niños con fines comerciales.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que estaba en curso de revisión el Plan nacional de acción para luchar contra la explotación sexual de los niños con fines comerciales, pero que la Secretaría de Bienestar Social no pudo dar cumplimiento al plan, en razón de la insuficiencia del presupuesto asignado. La Comisión tomó nota de que no se realizaron las actividades previstas por el plan de acción. Además, instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas y eficaces en un plazo determinado para luchar contra la explotación sexual con fines comerciales de las personas menores de 18 años.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia adoptó, el 8 de julio de 2015, la política relativa a la protección judicial de niñas, niños y adolescentes. La aprobación se concretó mediante la firma de una declaración entre el Poder Judicial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). La finalidad de este instrumento es contar con un documento político y de planificación, que permita fortalecer una cultura de «funcionarios judiciales garantes de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes». La Comisión toma nota asimismo de la implementación de un sistema informático llamado «Sistema de registro de medidas de niñas, niños y adolescentes», sobre la explotación sexual de niños con fines comerciales y unos procesos de capacitación dirigidos a los jueces de paz, a los jueces de instancia de niñez y adolescencia y a los magistrados.

La Comisión toma nota de que la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) implementó el protocolo de actuación interinstitucional para la respuesta inmediata frente a casos de explotación sexual de niños y adolescentes en el turismo. Asimismo, el Gobierno subraya la puesta en marcha de la campaña «NO PERMITO», en la que se ha sensibilizado al personal involucrado en el sector turístico, y de la campaña «Cuidado con el grooming, seducción en línea», así como la participación del Gobierno en la Alianza Mundial WePROTECT contra la Explotación Sexual Infantil en línea. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas inmediatas y eficaces en un plazo determinado para combatir la explotación sexual con fines comerciales de los niños menores de 18 años. Le solicita que siga comunicando informaciones a este respecto.***

Artículo 7, 2). *Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de estas peores formas de trabajo y garantizar su rehabilitación e inserción social. Explotación sexual con fines comerciales y trata con tales fines.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT) elaboró una política pública contra la trata de personas y la protección integral de las víctimas, 2014-2024, que fue adoptada por el acuerdo gubernativo núm. 306-2014. Solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas en el marco de la aplicación de la política pública dirigida a luchar contra la trata de personas y a garantizar la plena protección de las víctimas (2014-2024), del protocolo interinstitucional y de la Hoja de ruta.

La Comisión toma nota de las informaciones estadísticas del Gobierno, según las cuales, en 2016, los niños víctimas de trata procedían, en su mayoría, de la explotación en el trabajo (153 víctimas, en su mayoría de 3 a 17 años), de la explotación sexual (28 víctimas, en su mayoría de 12 a 17 años) y de la mendicidad forzada (19 víctimas, en su mayoría de 3 a 14 años). En 2017, hubo 99 niños víctimas que procedían, en su mayoría, de la explotación en el trabajo (54 víctimas, en su mayoría de 3 a 17 años) y de la explotación sexual (31 víctimas, en su mayoría de 12 a 17 años), mientras que disminuyeron los casos de los niños víctimas de mendicidad forzada. La Comisión toma nota asimismo de las quejas presentadas por la dirección de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia ante el Ministerio Público respecto de la trata de niños, en un número de 154 en 2016, y de 281 en 2017. Asimismo, la unidad operativa del sistema de alerta Alba-Keneth, de la Procuraduría General de la Nación, desde 2010, participa en la búsqueda y la localización de niños y adolescentes desaparecidos o secuestrados. Entre 2015 y 2017, el sistema de alerta registró 77 casos de niñas y diez casos de varones, teniendo la mayoría de los niños entre 12 y 17 años.

La Comisión toma nota, en la memoria del Gobierno, de las diferentes líneas de acción en la prevención de la trata de personas y en la protección del niño. El programa de atención infantil denominado «Hogares Comunitarios» de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), activo desde 1993, tiene el objetivo de facilitar el desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 7 años. En 2016, 11 879 niños y, en 2017, 2 889 niños se beneficiaron de estos servicios. Además, la SVET realizó gestiones para fortalecer la atención integral a las víctimas en sus tres albergues temporales, sobre todo el fortalecimiento de los programas de atención integral, que incluyen: asistencia médica, psicológica y social, acompañamiento para la construcción del proyecto de vida, capacitación técnica y laboral, formación académica, atención educativa, atención nutricional y abrigo o albergue. Estos albergues cuentan con equipos multidisciplinarios de profesionales que brindan los servicios que deben recibir las víctimas del delito de trata de personas. Entre 2015 y 2017, 1 079 niños se beneficiaron de estos servicios.

La Comisión toma nota de la reactivación y el fortalecimiento por la SOSEP, de redes departamentales contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, que están constituidas por gobiernos departamentales, municipios, sectores sociales e instituciones públicas. La Comisión toma nota de que la SVET creó herramientas, especialmente un directorio de asistencia social, un compendio de instrumentos en materia de trata de personas y una guía de identificación de las víctimas de trata de personas. Según las estadísticas de la SVET, el Gobierno llevó a cabo acciones para brindar atención y protección a 577 niños y adolescentes víctimas de trata de seres humanos, entre 2015 y 2017. ***Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le solicita que tenga a bien proseguir sus esfuerzos para prevenir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de las mismas, impidiendo especialmente que se conviertan en víctimas de explotación sexual con fines comerciales o de trata para tal fin. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que continúe previendo la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de estas peores formas de trabajo infantil. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre las medidas adoptadas en el marco de la aplicación de la política pública dirigida a luchar contra la trata de personas y a garantizar la plena protección de las víctimas (2014-2024), del protocolo interinstitucional y de la Hoja de ruta.***

Artículo 8. Cooperación internacional. Trata de niños con fines de explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (documento A/HRC/22/54/Add.1, párrafo 107), el Gobierno aplicó un programa de protección y de asistencia completo para la repatriación y la reinserción de los niños interceptados por los Estados Unidos y México. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para velar por la rehabilitación y la inserción social de los niños víctimas que fueron librados de la trata con fines de explotación sexual comercial en sus países de origen, especialmente en el mencionado programa, así como en el marco de la implementación del protocolo interinstitucional para la repatriación de las víctimas de trata y las actividades de la SVET. Por otra parte, la Comisión invitó al Gobierno a que recurriera a la asistencia técnica de la OIT, sobre todo para la puesta en marcha de las actividades de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación contra el Trabajo Infantil (CONAPETI) y de la SVET.

La Comisión toma nota de las diferentes instituciones, fuera de la SVET y de la Secretaría de Bienestar Social, que trabajan en colaboración con los casos de trata de personas, como la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Institución del mediador de los derechos humanos, la sección contra la trata de personas de la policía nacional civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En lo que respecta a los menores repatriados, la Comisión toma nota de que en 2016, eran 57 los menores repatriados, 37 varones y 20 niñas, de nacionalidades mexicana, salvadoreña, nicaragüense y hondureña. En 2017, se registraron 76 menores repatriados, 51 varones y 25 niñas de nacionalidad norteamericana, hondureña, mexicana y salvadoreña. El Gobierno subraya que los flujos migratorios disminuyeron de manera considerable en 2017.

La Comisión toma buena nota de la asistencia técnica que el Gobierno recibió de la OIT para la preparación de la Hoja de ruta, así como para la revisión, la diagramación y la publicación de la Hoja de ruta, para la preparación del informe sobre el trabajo infantil en Guatemala y para la Encuesta nacional de condiciones de vida, ENCOVI 2014, entre otras cosas. ***La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva indicar las medidas adoptadas para velar por la rehabilitación y la inserción social de los niños víctimas que fueron librados de la trata con fines de explotación sexual comercial en sus países de origen, en el marco de la implementación del protocolo interinstitucional para la repatriación de las víctimas de trata y las actividades de la SVET. Le solicita asimismo que tenga a bien indicar el número de niños víctimas de trata que fueron repatriados. La Comisión invita al Gobierno a que continúe beneficiándose de la asistencia técnica de la OIT, especialmente para la puesta en marcha de las actividades de la CONAPETI y de la SVET.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Gobierno indicó que había adoptado una política nacional de protección social y creado, en el ámbito de la Dirección Nacional del Empleo, una división encargada de la lucha contra el trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la ausencia de una política nacional dirigida a la abolición del trabajo infantil. Además, la Comisión observó que, según el informe «El doble desafío del trabajo infantil y de la marginación escolar en los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)», desarrollado por el programa «Comprender el trabajo infantil» (informe UCW 2014), el 35,2 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad trabajan, de los cuales el 33 por ciento son niños de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, y el 41,3 por ciento, de niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Este informe indicó asimismo que el 76,2 por ciento de los niños que trabajan, de entre 10 y 14 años de edad, se encuentran en el sector agrícola, uno de los sectores más peligrosos y donde están expuestos

a graves riesgos, incluida la utilización de equipos peligrosos, la exposición a pesticidas, cargas pesadas y esfuerzos físicos importantes.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la función de la División de Lucha contra el Trabajo Infantil, Diálogo y Protección Social consiste en participar en la elaboración de la legislación y de la reglamentación en materia de trabajo infantil, diálogo social y protección social, y en la elaboración de planes de acción encaminados a la eliminación del trabajo infantil y sus peores formas. El Gobierno destaca que la División de Lucha contra el Trabajo Infantil, Diálogo y Protección Social tiene necesidad de más medios materiales y económicos para ser plenamente eficaz. La Comisión toma nota de que, según el informe final de la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados (MICS), realizado en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística, y publicado en julio de 2017, el 40 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad trabajan, de los cuales el 33,8 por ciento tiene de 5 a 11 años de edad, el 46,3 por ciento, de 12 a 14 años de edad, y el 28 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad trabajan en condiciones peligrosas (pág. 257). Al tiempo que toma nota de algunas medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión expresa nuevamente su *profunda preocupación* por el número persistente de niños que trabajan por debajo de la edad mínima de admisión al trabajo, de 16 años, especialmente en condiciones peligrosas. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte, sin retrasos, las medidas necesarias para velar por la adopción de una política nacional encaminada a la eliminación progresiva del trabajo infantil, y que comuniqué informaciones sobre los progresos realizados al respecto. Pide asimismo al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre el impacto de las demás medidas adoptadas por el Gobierno para la abolición del trabajo infantil, especialmente en lo que respecta a la división encargada de la lucha contra el trabajo infantil.***

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión observó con anterioridad que, según la encuesta nacional sobre el trabajo infantil y la trata de niños (ENTE) en Guinea, de noviembre de 2011, el 6 por ciento de los niños de 5 a 17 años de edad ocupados económicamente en Guinea, es decir, aproximadamente 91 940 niños, eran trabajadores independientes. Tomó nota de que el Código del Niño prohíbe que un empleador permita que un niño menor de 16 años de edad realice un trabajo sin haber obtenido previamente el consentimiento del titular de la autoridad paterna (artículo 412), pero no parece imponer una edad mínima de admisión al empleo a los niños que trabajan por cuenta propia. El Gobierno indicó que se reforzarán los medios de que dispone la inspección del trabajo, para controlar con eficacia la situación de los niños ocupados por cuenta propia y los niños que realizan trabajos peligrosos. Indicó asimismo que adoptó medidas para la creación de capacidades de la inspección del trabajo, como la dotación de recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables para su funcionamiento normal, el establecimiento de un programa de formación dirigido a los nuevos inspectores del trabajo, y la elaboración de una guía metodológica de inspección con el apoyo de la OIT. En sus comentarios formulados en relación con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), la Comisión tomó nota de que el artículo 137.7 del Código del Trabajo de 2014 prevé sanciones penales contra los autores de violaciones de las disposiciones del capítulo relativo al trabajo infantil. Señala también, en estos mismos comentarios, que el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por el número elevado de niños que trabajan, especialmente en el sector informal, en la agricultura, en la industria de la pesca o como trabajadores domésticos.

La Comisión toma nota de la ausencia de informaciones del Gobierno relativas a la creación de capacidades de la inspección del trabajo. Toma nota de que las estadísticas anuales de 2016 y 2017 de la Oficina de protección de género, infancia y moral, sólo registraron siete y 11 casos, respectivamente, de trabajo infantil. ***La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que siga creando capacidades de la inspección del trabajo para que pueda garantizar un adecuado control y la detección de los niños ocupados en el trabajo infantil y, más concretamente, los niños que trabajan en el sector informal y por cuenta propia, y en los trabajos peligrosos. Solicita asimismo al Gobierno que transmita informaciones sobre la ejecución en la práctica de las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo en materia de control del trabajo infantil, comunicando informaciones sobre el número de violaciones registradas y extractos de los informes de los inspectores del trabajo.***

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual en Guinea la escolaridad obligatoria sólo se impone para la enseñanza primaria, es decir, hasta los 13 años de edad. Sin embargo, la Comisión observó que la edad mínima de admisión al trabajo, especificada por Guinea en el momento de la ratificación del Convenio, es de 16 años. La Comisión señaló que, a pesar de los importantes progresos realizados en materia de escolarización y de equidad en la esfera educativa, un número aún considerable de niños que no alcanzaban todavía la edad mínima de admisión al empleo, no asistían o dejaron de asistir a la escuela, y que, paralelamente, la proporción de niños económicamente activos aumentaba con la edad. Al respecto, la Comisión tomó nota de que, según el informe UCW 2014, la divergencia en las tasas de asistencia escolar entre los niños que trabajan y los que no trabajan, es especialmente pronunciada en Guinea (22 puntos porcentuales).

La Comisión toma nota de la ausencia de informaciones del Gobierno al respecto. Toma nota de que la ley núm. 2016/059/AN, adoptada el 26 de octubre de 2016, sobre el Código Penal de la República de Guinea, prevé una multa para los titulares de la autoridad paterna que no impongan al hijo la obligación de asistencia escolar, sin motivo legítimo (artículo 956). Toma nota de que la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, fijada en los 13 años, no se vincula con la edad mínima de admisión al trabajo de 16 años. En relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios

fundamentales (párrafo 371), la Comisión observa nuevamente que, si la escolaridad obligatoria finaliza antes de la edad en la que la ley autoriza trabajar a los jóvenes, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad a la explotación económica de los niños. ***Recordando que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para determinar que sea obligatoria la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir, a los 16 años. Además, solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar una copia de la legislación nacional aplicable en materia de educación.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, a), y 7, párrafo 1, del Convenio. Todas las peores formas de trabajo infantil o prácticas análogas y sanciones. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Código del Niño de 2008 prohíbe la trata de personas, incluidos los niños, con fines de explotación sexual o de trabajo, y de que todo autor o cómplice de trata de niños será castigado con tres a diez años de prisión y con una multa de 1 millón a 3,5 millones de francos guineanos (110 a 400 dólares de los Estados Unidos). Además, la Comisión tomó nota con preocupación de que, entre 2011 y 2015, no se dictó ninguna condena, especialmente en relación con los casos de trata de niños con fines de explotación sexual. Tomó nota de que, según el Gobierno, está en curso de elaboración un proyecto de ley que prohíbe el trabajo infantil y la trata de niños. El Gobierno indicó que la parte penal del mencionado proyecto fue confiada al Ministerio de Justicia, con el fin de introducirla en el nuevo Código Penal. Al respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que garantizara que se adoptara, en los más breves plazos, la ley que prohíbe el trabajo infantil y la trata de niños.

La Comisión toma nota con **interés** de la adopción, en 2016, de la Ley núm. 2016/059/AN, sobre el Código Penal, que prohíbe, en su artículo 323, la trata de personas con fines de explotación económica y sexual. Toma nota de que, con arreglo al artículo 324, la trata de un menor está castigada con cinco a diez años de prisión y con una multa de 100 millones de francos guineanos (cerca de 11 000 dólares de los Estados Unidos). Sin embargo, la Comisión toma nota de las estadísticas anuales de la Oficina de Protección de Género, la Infancia y las Costumbres (OPROGEM), comunicadas junto a la memoria del Gobierno, en las que se identificaron, en 2017, cuatro niños menores de 18 años víctimas de trata. Toma nota de que, según el Gobierno, la Oficina Central para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (OCLCO), que incluye una división encargada de la lucha contra la trata de personas, sólo registró un caso de trata de niños transnacional en el curso de los dos últimos años. La Comisión toma nota de que, en su informe dirigido al Comité de Derechos Humanos, en octubre de 2017, el Gobierno indica que a menudo se producen detenciones, pero en muy pocos casos la trata de niños ha sido objeto de condena en un tribunal (documento CCPR/C/GIN/3, párrafo 242). ***Recordando que la mejor legislación sólo adquiere valor si se aplica, la Comisión insta al Gobierno a que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la Ley núm. 2016/059/AN, sobre el Código Penal, indicando especialmente el número de niños víctimas de trata y el número y la naturaleza de las condenas y sanciones penales impuestas.***

Artículos 3, d), y 4, párrafos 1 y 3, del Convenio. Determinación y revisión de la lista de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual, en el marco del proyecto de ley que prohíbe el trabajo infantil y la trata de niños, la parte relativa a las peores formas de trabajo fue examinada, en abril de 2015, por la Comisión consultiva del trabajo y leyes sociales, y se elaboró la lista de trabajos peligrosos revisada.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales la ley que establece la lista de los trabajos peligrosos prohibidos a los niños todavía no ha sido adoptada. Toma nota de que el Código del Trabajo prevé la prohibición de trabajos peligrosos para los niños menores de 18 años (artículo 137) y de que el Código del Niño de 2008, prohíbe algunos tipos de trabajos a los niños menores de 18 años (capítulo V). La Comisión observa que, en su memoria formulada en relación con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) el Gobierno indica que la División de Lucha contra el Trabajo Infantil, Diálogo y Protección Social, va a relanzar el proceso de firma del proyecto de decreto relativo a la prohibición del trabajo peligroso infantil y determinará la lista de los trabajos peligrosos. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten, en los más breves plazos, la ley que prohíbe el trabajo infantil y la lista de los trabajos peligrosos debidamente revisada, y solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar una copia de estos textos en cuanto se adopten.***

Artículo 5 del Convenio. Mecanismos de vigilancia y aplicación del Convenio en la práctica. Trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según el Comité de los Derechos del Niño, son muchos los niños que trabajan en los sectores minero, agrícola y pesquero durante largas horas y en condiciones peligrosas. El Comité añade que niñas de tan sólo 5 años de edad realizan tareas domésticas y soportan pesadas cargas, a menudo sin remuneración y son objeto de violencia de orden psicológico, físico y sexual. La Comisión tomó nota de las informaciones publicadas por el Gobierno, según las cuales la OPROGEM tiene por misión elaborar, planificar y asegurar el seguimiento de todas las actividades, programas y otras medidas legales de la política nacional que se dirigen a proteger a los grupos vulnerables de la población y la moral. Solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre las actividades de la OPROGEM para luchar contra las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma de las informaciones del Gobierno, según las cuales la OCLCO, que incluye una división de lucha contra la trata de personas, tiene por misión investigar, identificar y llevar a juicio a los autores de las infracciones vinculadas con la delincuencia organizada. El Plan de acción de la OCLCO para el período 2019-2021, prevé, entre otras cosas, la creación de capacidades del personal, el establecimiento de unidades operativas en el terreno, y la identificación de zonas en las que se practican las peores formas de trabajo infantil, especialmente en las minas, las explotaciones agrícolas, las unidades industriales, los garajes mecánicos, los talleres de carpintería y las escuelas coránicas, con el objetivo de identificar y de perseguir a los autores relacionados con casos de peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de que el Gobierno precisa asimismo que la OPROGEM se encarga de recabar informaciones, de reunir las pruebas y de interpelar a los autores de infracciones en las que tiene competencia. Observa asimismo que, en su informe presentado al Comité de Derechos Humanos en octubre de 2017, el Gobierno indica la persistencia de la explotación de niños, a pesar de los progresos legislativos y reglamentarios (documento CCPR/C/GIN/3, párrafo 107). La Comisión toma nota de que, según el informe final de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) realizado en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística (INS) y publicado en julio de 2017, el 26,5 por ciento de los niños menores de 18 años, es decir, más de uno de cada cuatro niños, trabajan en condiciones peligrosas (pág. 257). **La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para crear las capacidades de la OCLCO y de la OPROGEM para controlar y combatir los trabajos peligrosos infantiles y comunicar informaciones al respecto. En particular, solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas, los procedimientos iniciados, las condenas dictadas y las sanciones impuestas en los casos de niños que realizan trabajos peligrosos.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartados a) y e). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y tener en cuenta la situación particular de las niñas. Asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual es insuficiente la capacidad del sistema educativo. Además, el Gobierno señaló otros desafíos que representan la disminución de la calidad de la enseñanza y las dificultades de su acceso, como las malas condiciones de salud en las escuelas, la insuficiencia de infraestructuras de acogida y de formación, la baja calidad de la enseñanza y la persistencia de algunos estereotipos y obstáculos socioculturales que frenan la escolarización universal, especialmente la de las niñas. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño señaló grandes disparidades de escolarización entre niñas y niños, y también disparidades geográficas. La Comisión tomó nota de que, en su informe, *Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO* (El doble desafío del trabajo infantil y de la marginación escolar en los países de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO)), elaborado por el programa «Comprender el trabajo infantil» (informe UCW 2014), al menos una tercera parte de los niños que trabajan no están escolarizados. La diferencia que existe en la asistencia escolar entre los niños que trabajan y los que no trabajan es especialmente elevada, es decir, del 32 por ciento. La UNESCO indicó que, en 2013, la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria era del 75,1 por ciento, y que, en 2012, la tasa bruta de escolarización en la enseñanza secundaria, era del 38,1 por ciento.

La Comisión toma nota de la ausencia de informaciones del Gobierno al respecto. Toma nota de que, en su informe dirigido al Comité de los Derechos del Niño, en agosto de 2017, el Gobierno indica que las estadísticas de la enseñanza primaria sólo han evolucionado ligeramente entre 2012 y 2013 y entre 2013 y 2014. Además, entre 1999 y 2014, no se produjo un aumento de las infraestructuras, y el número de alumnos por aula no varió apenas (documento CRC/C/GIN/3-6, párrafos 104 y 105). La UNESCO señala, en el *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018*, que el acceso al agua potable y a la electricidad es muy escaso en las escuelas primarias del país (pág. 226). La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe final de la MICS, de 2017, aproximadamente dos niños de cada cinco, es decir, el 39,7 por ciento, no están escolarizados. En 2016, la tasa de finalización de la enseñanza primaria era del 55,7 por ciento, en el caso de las niñas, y del 66,5 por ciento, en el caso de los niños (pág. 239). La tasa bruta de escolarización en la enseñanza secundaria era del 42,3 por ciento, para el mismo año, y el índice de paridad por sexo es del 0,68 por ciento en el mismo nivel de enseñanza (pág. 245). **Considerando que el acceso a la educación y la asistencia escolar son esenciales para prevenir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno que se sirva redoblar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país. Al respecto, le solicita que tenga a bien adoptar medidas dirigidas a elevar las tasas de escolarización, de asistencia y de finalización escolar, en los niveles primario y secundario, prestando una atención especial a la situación de las niñas. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, especialmente comunicando estadísticas sobre las tasas de escolarización, de asistencia y de finalización escolar.**

Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños talibés. La Comisión tomó nota con anterioridad de la práctica, según la cual las familias confían a sus hijos pequeños a un guía espiritual (*marabout*) para la enseñanza de la religión. A cambio, los niños están obligados a realizar diversas tareas, como la de mendigar. La Comisión tomó nota de que el Código del Niño de 2008 prohíbe el hecho de incitar o de obligar a un niño a la mendicidad, bajo pena de tres meses a un año de prisión y una multa de 50 000 a 200 000 francos guineanos (5.50-22 dólares de los Estados Unidos).

La Comisión toma buena nota de la adopción, en 2016, de la Ley núm. 2016/059/AN, sobre el Código Penal, que prevé una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de 1 millón a 5 millones de francos guineanos (de 550 a 1 100 dólares de los Estados Unidos) o sólo una de estas dos penas, en caso de explotación de la mendicidad de un menor. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno, en su informe presentado al Comité de Derechos Humanos, en octubre de 2017, indica que a pesar de los avances en materia legislativa y reglamentaria, la mendicidad de niños sigue siendo una preocupación esencial en la República de Guinea (documento CCPR/C/GIN/3, párrafo 107). Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño está profundamente preocupado por el escaso número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos relacionados con la mendicidad forzada (documento CRC/C/OPSC/GIN/CO/1, párrafo 32). **La Comisión insta encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias en un plazo determinado para retirar a los niños menores de 18 años de la mendicidad, tras el enjuiciamiento de los marabouts, en virtud de las disposiciones del Código Penal, y comunicar informaciones al respecto. Alienta nuevamente al Gobierno a que instaure un programa de duración determinada para garantizar que los niños mendigos menores de 18 años sean rehabilitados e insertados socialmente.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional para la eliminación del trabajo infantil y plan nacional de acción. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Gobierno reiteró su compromiso de adoptar una política nacional diseñada para garantizar la efectiva abolición del trabajo infantil en el país, desde 2001. La Comisión también tomó nota de que, si bien el Gobierno ha venido emprendiendo algunas medidas en materia de políticas dirigidas a abordar el trabajo infantil, a través de programas de educación, en particular con arreglo al proyecto de la OIT/IPEC, titulado «Combatir el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE), siguió indicando que se estaba desarrollando un Plan Nacional de Acción para los Niños (NPAC). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información a ese respecto. **En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para finalizar el NPAC y a que transmita una copia del mismo en un futuro muy próximo. Además, tomando nota de la indicación anterior del Gobierno, según la cual el Comité Directivo Nacional sobre el Trabajo Infantil — que dio inicio y redactó un plan nacional de acción para eliminar y prevenir el trabajo infantil —, ya no está funcionando, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada acerca de las medidas adoptadas o previstas para finalizar este proceso.**

Artículo 3, 3). Autorización de trabajar en empleos peligrosos a partir de la edad de 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el artículo 6, b), de la Ley núm. 9, de 1999, sobre el Empleo de Jóvenes y Niños (en adelante, ley núm. 9 de 1999), confiere al Ministro un poder discrecional para autorizar, a través de reglamentos, la contratación de jóvenes entre las edades de 16 y 18 años en trabajos peligrosos. La Comisión también observó que, si bien los artículos 41 y 46 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), de 1997, se dirige a impedir que los jóvenes realicen una actividad laboral que pudiese afectar su salud física o su desarrollo emocional, el Gobierno identificó dificultades en el control y el fortalecimiento de estas disposiciones. En consecuencia, el Gobierno indicó que la ley núm. 9, de 1999, sería enmendada para garantizar que las protecciones conferidas en virtud de la ley se extendieran a todos los jóvenes menores de 18 años de edad.

La Comisión tomó nota de que la memoria anterior del Gobierno no contenía ninguna nueva información y simplemente establecía que no se habían dictado reglamentos ministeriales, y que las disposiciones de la OSHA garantizan que los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años que están empleados en trabajos peligrosos, reciban una formación profesional específica adecuada. Sin embargo, la Comisión tomó nota de las medidas inadecuadas adoptadas para controlar y fortalecer las disposiciones de la OSHA y de que, no obstante el número significativo de niños implicados en trabajos peligrosos, sólo se notificaron tres de esos casos al mecanismo de presentación de informes del Gobierno.

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información sobre el proceso de enmienda de la ley núm. 9, de 1999, a pesar de su reiterado compromiso, a lo largo de los años, de llevarlo a cabo. Señala una vez más a la atención del Gobierno el párrafo 381 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, que destaca el cumplimiento del artículo 3, 3), del Convenio, que requiere que todo trabajo peligroso realizado por personas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, sólo sea autorizado con la condición de que se protejan plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes interesados y de que éstos hayan recibido, en la práctica, una formación profesional específica y adecuada. **En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para enmendar, en un futuro próximo, la ley núm. 9, de 1999, con el fin de garantizar la conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio, confiriendo una protección adecuada a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad, y a que comunique una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado. Además, recordando la indicación del Gobierno, según la cual están en curso esfuerzos con los interlocutores tripartitos para incluir áreas adicionales de trabajo en la lista de trabajos peligrosos, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de esta lista enmendada en cuanto se dispusiera de la misma.**

Artículo 9, 3). Llevar los registros. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el artículo 86, a), de la OSHA, capítulo 99:10, prevé la obligación de que los empleadores de establecimientos industriales registren, y lleven en un registro, los datos prescritos de todos los empleados menores de 18 años de edad. **La Comisión solicita al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones que establecen la misma obligación para el empleo de los jóvenes menores de 18 años de edad en empresas no industriales.**

Inspección del trabajo y aplicación práctica del Convenio. La Comisión tomó nota con anterioridad de los resultados de la Encuesta agrupada de indicadores múltiples, donde se identifica un elevado porcentaje de niños que trabajan en el país. La Comisión también tomó nota de la indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual los inspectores de

trabajo no dan cumplimiento efectivo a la legislación aplicable, siendo el trabajo infantil especialmente prevalente en la economía informal.

En su respuesta, el Gobierno se limita a indicar que sus inspectores del trabajo realizan, de manera rutinaria, inspecciones en los lugares de trabajo y que no existen pruebas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión tomó nota de un programa trienal destinado, entre otras cosas, a fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales en la formulación, la aplicación y la ejecución del marco legal del trabajo infantil y que incluiría un enfoque en el trabajo infantil en la economía informal. **Tomando nota de la ausencia de información a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil, incluso en la economía informal, y que comunique información acerca de los resultados obtenidos a este respecto. Además, recordando que el Gobierno está estableciendo una encuesta de referencia sobre el trabajo infantil, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los resultados de la encuesta.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017 y el 29 de agosto de 2018, relativas al funcionamiento deficiente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra la trata de niños y a la ausencia de medidas de rehabilitación y reintegración para los niños *restavèks* (trabajadores domésticos infantiles).

La Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la que informa a la Comisión de que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, solicitó la asistencia técnica de la Oficina, sobre todo con el fin de recabar ayuda para presentar las memorias debidas, reforzar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social para que prosigan las reformas sociales y tratar los demás puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indica asimismo que espera poder recibir esta asistencia antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que esta asistencia técnica pueda ser proporcionada sin retrasos.

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de que se ha adoptado la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la Lucha contra la Trata de Personas.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, en los últimos años se ha constatado una nueva tendencia por lo que se refiere a la cuestión de los niños empleados como trabajadores domésticos (denominados en lengua criolla *restavèks*), que consiste en que determinadas personas contratan a niños en zonas rurales para hacerlos trabajar como sirvientes en hogares de zonas urbanas, y en los mercados. Según la Relatora Especial, son muchas las personas que describen este fenómeno como trata ya que los padres confían a sus hijos a personas desconocidas mientras que antes los confiaban a parientes. La Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación a que la trata y el tráfico de niños persisten, en particular hacia la República Dominicana. La CSI ha recogido testimonios de graves abusos sexuales y violencia, incluso con resultado de homicidio, perpetrados contra mujeres jóvenes y niñas víctimas de trata, en particular por militares dominicanos. La CSI expresó su preocupación por el hecho de que no parezca existir ley alguna que ponga a los responsables de estos delitos en manos de la justicia y señaló que el Parlamento tenía que adoptar un proyecto de ley.

La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la Lucha contra la Trata de Personas. Esta ley establece que la trata de niños, que significa la facilitación, alistamiento, traslado, transporte, alojamiento o recepción de niños con fines de explotación, constituye una circunstancia agravante por la que se imponen penas de cadena perpetua (artículos 11 y 21). Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2014 (documento CCPR/C/HTI/CO/1, párrafo 14), el Comité de Derechos Humanos sigue expresando su preocupación por la persistente explotación de los niños *restavèks* y la ausencia de estadísticas y de resultados de las investigaciones sobre los responsables de la trata de seres humanos. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2015 del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití (documento A/HRC/28/82, párrafo 65, en relación con el documento A/HRC/25/71, párrafo 56), el fenómeno de los *restavèks* es consecuencia de la debilidad del Estado de derecho y a esos niños se les impone sistemáticamente trabajo forzoso, no se les paga y están expuestos a violencia física y/o verbal. En 2012, el UNICEF estimó que había 225 000 *restavèks*. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva de la ley núm. CL/2014-0010, y, en particular, para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos eficaces de las personas que cometen el delito de trata de menores de 18 años. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información estadística sobre la aplicación de la legislación en la práctica, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas, las investigaciones y los enjuiciamientos realizados y las condenas y sanciones penales impuestas.**

Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo doméstico de los niños. En sus observaciones anteriores, la Comisión destacó la situación de cientos de miles de niños *restavèks* que son a menudo objeto de explotación en condiciones semejantes al trabajo forzoso. Tomó nota de que, en la práctica, muchos de estos niños que no sobrepasan la edad de cuatro o cinco años son víctimas de explotación y se ven obligados a trabajar largas jornadas sin remuneración, sometidos a discriminación y a maltratos de todo tipo, mal alojados, mal alimentados y a menudo víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Además, muy pocos de ellos son escolarizados. La Comisión toma nota igualmente de la derogación del capítulo IX del título V del Código del Trabajo, relativo a niños en servicio, por parte de la Ley de 2003, relativa a la Prohibición y Erradicación de toda Forma de Abuso, Violencia, Malos Tratos o Vejaciones contra los Niños (ley de 2003).

Tomó nota de que la prohibición a la que se refiere el artículo 2, 1), de la ley de 2003 tiene por objeto la explotación de niños, incluida la servidumbre, el trabajo forzoso u obligatorio, los servicios forzosos así como los trabajos que por su naturaleza o las condiciones en las que se ejercen sean susceptibles de perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños, pero no establece ninguna sanción en caso de infracción de estas disposiciones. La Comisión tomó nota de que, entre las disposiciones derogadas, figura el artículo 341 del Código del Trabajo, que permite confiar un niño a partir de la edad de 12 años a una familia para realizar trabajos domésticos. La Comisión observó, no obstante, que el artículo 3 de la ley de 2003 establece que «podrá confiarse un niño a una familia de acogida en el marco de una relación de ayuda y solidaridad».

La Comisión tomó nota de que la Relatora Especial se manifiesta, en su informe, sumamente preocupada por la imprecisión de la noción de ayuda y solidaridad que figura en la ley de 2003 y estima que las disposiciones de ésta permiten la perpetuación de la práctica del *restavèk*. Según el informe de la Relatora Especial, el número de niños que trabajan como *restavèks* oscila entre 150 000 y 500 000 (párrafo 17), lo que representa alrededor de uno de cada diez niños haitianos (párrafo 23). Tras entrevistarse con los niños *restavèks*, la Relatora Especial confirma que todos ellos consideraban que sus familias de acogida les asignaban una pesada carga de trabajo, a menudo incompatible con su desarrollo y su salud física y mental (párrafo 25). Además, la Relatora Especial constató que estos niños suelen ser objeto de maltrato y víctimas de violencia física, psicológica y sexual (párrafo 35). Los representantes del Gobierno y de la sociedad civil han recordado que los casos de agresiones físicas y quemaduras se daban con frecuencia (párrafo 37). La Comisión tomó nota de que, en vista de estos hechos, la Relatora Especial calificó el sistema *restavèk* como una forma contemporánea de esclavitud.

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales el terremoto de 12 de enero de 2010 condujo a un brusco deterioro de las condiciones de vida de la población haitiana y a una creciente precarización de sus condiciones de trabajo. Según la CSI un número creciente de niños trabajan como *restavèks* y es muy probable que sus condiciones se han deteriorado más. Los numerosos testimonios recogidos por la CSI ponen de manifiesto que las condiciones de trabajo son sumamente penosas, y que la explotación se alía a menudo con condiciones de trabajo degradantes, jornadas muy largas, ausencia de vacaciones y explotación sexual y situaciones de extrema violencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el servicio doméstico de los niños *restavèks* se asimila al trabajo forzoso. Expresa nuevamente su **profunda preocupación** por la explotación del trabajo doméstico del que son objeto los niños menores de 18 años, ejercido en condiciones análogas a la esclavitud, o perjudiciales para su salud o seguridad. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 3, a) y d), del Convenio, el trabajo o empleo de niños menores de 18 años en condiciones análogas a la esclavitud o peligrosas constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe ser, en razón del artículo 1, eliminada con carácter de urgencia. **La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar, en la legislación y en la práctica, que los niños menores de 18 años no puedan trabajar como empleados domésticos en condiciones análogas a la esclavitud o en condiciones peligrosas teniendo en cuenta la situación particular de las niñas. A este respecto la Comisión insta con firmeza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para enmendar las disposiciones de la legislación nacional, en particular el artículo 3 de la ley de 2003, que permiten la perpetuación de la práctica del *restavèk*. Además, la Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos efectivos de las personas que hayan sometido a menores de 18 años a trabajos domésticos forzosos o a trabajos domésticos peligrosos, y que se les impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasivas en la práctica.**

Artículo 5. Mecanismos de control. Brigada de Protección de Menores. La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales en Haití existe una brigada de protección de menores que patrulla las zonas de frontera. Sin embargo, la CSI también señala que no se ha erradicado la corrupción de los funcionarios a ambos lados de la frontera y que las vías de trata de personas evitan las cuatro aduanas oficiales y se desplazan por lugares alejados, donde se producen probablemente las situaciones más graves de atentado contra la vida y la integridad de los migrantes.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales la brigada de protección de menores es una unidad especializada de la policía con la función de detener a los traficantes para ponerlos a disposición de la justicia. Sin embargo, el Gobierno señala que durante los procedimientos judiciales, son las cuestiones de procedimiento las que ofrecen a menudo una puerta de salida a las personas inculpadas. La Comisión debe expresar su **preocupación** ante la debilidad de los mecanismos de control para impedir el fenómeno de la trata de niños con fines de explotación. **La Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de la brigada de protección de menores para controlar y combatir la trata de menores de 18 años e inculpar a los culpables. Ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social. Venta y trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la trata de personas, de febrero de 2009, no existe ningún sistema para atender o prestar asistencia a las personas víctimas de la trata ni un centro de acogida alguno para alojar a las víctimas. La Comisión tomó nota también de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 de febrero de 2009, párrafo 26), observa con preocupación la falta de refugios para mujeres y niñas víctimas de trata.

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales existe un sistema público de atención y asistencia a las personas víctimas de trata. Los testimonios recogidos por la CSI relatan que las víctimas se dirigen a los funcionarios de policía, quienes los remiten al Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), para que los distribuya en los centros de acogida.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se había previsto un programa piloto de protección social, pero que el terremoto del 12 de enero de 2010 ha desbaratado la aplicación del mismo. **La Comisión insta con firmeza al Gobierno a adoptar medidas eficaces para prever ayuda directa necesaria y adecuada para liberar a los niños víctimas de la venta y de la trata, y asegurar su readaptación y reintegración social. A este respecto, ruega al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de menores de 18 años víctimas de trata que han podido ser colocados en centros de acogida con la ayuda de los miembros de la policía y del IBESR.**

Apartado d). Identificar los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños *restavèks*. En sus observaciones precedentes, la Comisión tomó nota de la existencia de programas de reinserción de niños *restavèks* que ha puesto en marcha el IBESR en acuerdo con distintos organismos internacionales y no gubernamentales. Tomó nota de que estos programas privilegian la reinserción en el marco familiar a fin de favorecer el desarrollo psicosocial de los niños que participan en ellos. Sin embargo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales, se declara

profundamente inquieto por la situación de los niños *restavèks* que trabajan en el servicio doméstico, y en particular, recomienda al Gobierno que se asegure con carácter de urgencia de que los *restavèks* disponen de servicios para su recuperación física y psicológica así como para su reintegración social (documento CRC/C/15/Add.202, 18 de marzo de 2003, párrafos 56 y 57).

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI por los que ha conocido las iniciativas de reinserción de niños *restavèks*, especialmente con el apoyo del UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones. La CSI, al tiempo que se congratula de estas iniciativas, pide al Gobierno que se sigan incluyendo en estos programas medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias de origen de estos niños.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el IBESR se ocupa de los casos de maltrato de niños menores en el servicio doméstico, y se encarga de colocarlos en familias para su readaptación física y psicológica. Sin embargo, el Gobierno reconoce que estos casos siguen siendo poco numerosos. ***La Comisión insta con firmeza al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños restavèks disponen de servicios para su readaptación física y psicológica, así como para su reintegración social, en el marco de los programas de reinserción de niños restavèks o por medio del IBESR.***

Artículo 8. Cooperación internacional. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo, en acuerdo con el Ministerio del Exterior, ha estudiado el problema de las personas explotadas en la República Dominicana en las plantaciones de caña de azúcar, así como de los niños sometidos a mendicidad, y tiene el propósito de iniciar discusiones bilaterales para dar solución a estos problemas. La Comisión observó igualmente que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus conclusiones finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 de febrero de 2009, párrafo 27), alentó al Gobierno «a investigar las causas profundas de la trata y a reforzar su cooperación bilateral y multilateral con los países vecinos, en especial con la República Dominicana, para prevenir la trata y poner a los responsables de estos delitos a disposición de la justicia».

La Comisión observa una vez más que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. ***Ruega nuevamente al Gobierno que comuniqué información sobre los progresos de las conversaciones directas con la República Dominicana encaminadas a la adopción de un acuerdo bilateral, y que tenga a bien hacerlo en su próxima memoria.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Honduras

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el 31 de agosto de 2018, respaldadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la información sobre la extensión del campo de acción de los inspectores del trabajo prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia revisado, y había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para adaptar y fortalecer las capacidades de los servicios de inspección del trabajo. Le había pedido asimismo que suministrara información sobre la nueva ley de inspección del trabajo que estaba en curso de elaboración.

La Comisión toma nota de las observaciones del COHEP, según las cuales el número de inspectores del trabajo no basta para atender las necesidades existentes, fundamentalmente de cara al sector informal, aunque el Gobierno indicase que se habían adoptado medidas para fortalecer la capacidad de los inspectores del trabajo. El COHEP señala que el reglamento de la nueva ley debería aprobarse de aquí a finales de 2018, y que se está elaborando a través de consultas tripartitas. El COHEP subraya que ha seguido el plan nacional en lo que respecta al trabajo infantil dentro de las empresas y que no hay niños en las empresas que son miembros del COHEP.

La Comisión toma nota, según lo indicado en la memoria del Gobierno y su respuesta a las observaciones del COHEP, de la aprobación de la nueva Ley de Inspección del Trabajo, decreto núm. 178-2016, por el Congreso Nacional de la República, que entró en vigor el 15 de marzo de 2017. La nueva ley garantiza igualmente la utilización de mano de obra joven en condiciones decentes y prohíbe la mano de obra infantil que no haya alcanzado la edad mínima legal de 14 años. Además, establece un nuevo procedimiento administrativo que prevé sanciones pecuniarias de 100 000 lempiras si la inspección del trabajo observa la presencia de niños que no han alcanzado la edad mínima legal de 14 años trabajando sin una autorización de trabajo. Además, los inspectores tienen el deber de retirar a los niños que desempeñan trabajos peligrosos para la salud y la seguridad del niño. Se ha elaborado un capítulo relativo a las inspecciones técnicas consultivas destinadas a los sectores más vulnerables, como el sector informal, en los que se encuentran la mayoría de los niños. Asimismo, en enero de 2018 se creó una aplicación electrónica de denuncia pública sobre el trabajo infantil. Las denuncias se transmiten a los inspectores del trabajo, con miras a que realicen un seguimiento mediante visitas de inspección.

La Comisión toma nota de que, desde la entrada en vigor de la nueva ley, el Gobierno ha efectuado 187 inspecciones del trabajo en 2017, y 76 de las 175 inspecciones programadas en 2018. Durante estas inspecciones, se ha entrevistado a un total de 185 niños y niñas, y los inspectores han evaluado los puestos de trabajo para los cuales los niños menores de edad solicitaron autorización de trabajo, con objeto de verificar que no representan un peligro para ellos.

La Comisión toma nota de que la Hoja de ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil fue aprobada por los decretos ejecutivos PCM-11-2011 y PCM-056-2011 como una política pública sobre el trabajo infantil, como anexo del informe, y de que un nuevo documento de planificación estratégica para el período 2016-2020, preparado con la participación de actores clave, está en curso de validación con los diferentes sectores. Este documento permite a cada una de las distintas instituciones y organizaciones planificar sus actividades anuales en función de seis dimensiones de la política pública. Se apoya igualmente en la Agenda 2030, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, y el Plan de alianza para la prosperidad, las normas internacionales y los reglamentos internacionales. Las medidas contra el trabajo infantil adoptadas en el marco de la planificación estratégica así como las etapas de su aplicación se registrarán en la plataforma de gestión en función de los resultados. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la manera en la que el Convenio se aplica en la práctica, apoyándose en particular en las estadísticas de empleo de los niños menores de 14 años, en extractos de informes de la inspección del trabajo y en la información sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas y sobre las sanciones impuestas. Al tiempo que toma nota de la planificación estratégica 2016-2020 de la Hoja de ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la puesta en práctica de la Hoja de ruta.***

Artículo 2, párrafos 1 y 4. Ámbito de aplicación y edad mínima de admisión. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 32, 2), del Código del Trabajo, las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de las personas menores de 14 años pueden autorizar a éstas el ejercicio de una actividad económica si consideran que ello resulta imprescindible para su subsistencia o la de sus padres o hermanos y hermanas, y en la medida en que no les impida proseguir su escolaridad obligatoria. Había tomado nota de que, en virtud del artículo 2, 1), del Código, las explotaciones agrícolas y ganaderas que no ocupaban de manera continua a más de diez trabajadores estaban excluidas del ámbito de aplicación de este Código. Tomó nota además de que, en virtud de los artículos 4 y 6 del Reglamento sobre trabajo infantil, de 2001, se aplica únicamente a las relaciones de trabajo contractuales. El Gobierno señaló a este respecto que se había elaborado un proyecto de revisión del Código del Trabajo que contenía disposiciones encaminadas a poner la legislación nacional en conformidad con los convenios internacionales ratificados por Honduras. La Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para poner el Código del Trabajo y el Reglamento sobre trabajo infantil, de 2001, en conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, de 1996. Le había pedido igualmente que suministrara información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones del COHEP, según las cuales no se le ha informado de que el Código del Trabajo está en espera de ser debatido, aprobado y publicado por el Congreso Nacional. Además, el sector empresarial ha expresado al Gobierno su interés en emprender una reforma integral del Código del Trabajo, pero no ha recibido una convocatoria hasta ahora. La Comisión toma nota de las indicaciones del COHEP, según las cuales no se ha discutido ninguna reforma dentro del Consejo Económico y Social tripartito.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones del COHEP, con arreglo a las cuales en 2014 comenzó una discusión con los interlocutores sociales, durante la cual las centrales sindicales expresaron sus reservas con respecto a las reformas del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales ha asumido su compromiso y ha presentado el debate sobre las reformas en curso al Consejo Económico y Social, y ha preparado asimismo una Hoja de ruta que permitirá continuar con la armonización del Código a fin de alcanzar un consenso. De esta manera, las reformas deben someterse al Consejo Nacional con la autorización previa de la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la reforma o la revisión del Código del Trabajo está en espera de ser debatida, aprobada y publicada por el Congreso Nacional y se discutirá durante la sesión plenaria. Además, la Comisión toma nota del nuevo decreto ejecutivo PCM-057-2015 adoptado por el Gobierno, que tiene por objeto adaptar la integración de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil a la estructura gubernamental, a través de un enfoque global que integre a otras organizaciones e instituciones que tengan las mismas funciones, con el objetivo de elaborar, evaluar y garantizar la puesta en práctica del plan nacional por medio de la política pública y la Hoja de ruta.

La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del *artículo 2, párrafo 1*, del Convenio, ninguna persona que no haya alcanzado la edad mínima especificada deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna, a reserva de las excepciones previstas en los *artículos 4 a 8* de este mismo instrumento. Recuerda asimismo al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y cubre todos los tipos de empleo o de trabajo, con independencia de que se desempeñen en el marco de una relación de trabajo o de un contrato de trabajo, o no, y de que el trabajo o empleo sea remunerado, o no. ***Al tiempo que observa que el Gobierno menciona la revisión del Código del Trabajo desde hace más de diez años, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para poner el Código del Trabajo y el Reglamento sobre trabajo infantil, de 2001, en conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, de 1996, con el fin de asegurar que no se autorice a trabajar a ningún niño menor de 14 años, incluidos los niños que trabajan en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no ocupan de manera continua a más de diez trabajadores, y los que trabajan por cuenta propia. Pide nuevamente al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el 31 de agosto de 2018, respaldadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones.

Artículos 3, a) y b), y 7, 1), del Convenio. Trata de niños con fines de explotación sexual comercial, utilización de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con preocupación del bajo número de condenas impuestas en los casos de trata y explotación sexual en relación con el número de investigaciones y de procesamiento judiciales. La Comisión había pedido al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para garantizar que la trata de personas menores de 18 años para su explotación sexual comercial o su utilización con fines de prostitución, producción de pornografía o actuaciones pornográficas diera lugar a investigaciones exhaustivas y a procesamiento judiciales efectivos, y para que se impusieran en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias.

La Comisión toma nota de las observaciones del COHEP, en las que éste subraya que desconoce la existencia de información detallada sobre el número de investigaciones emprendidas, de enjuiciamientos efectuados y de sentencias impuestas, y expresa su preocupación por el grado de compromiso del Gobierno con esta cuestión. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, destacando que la Comisión interinstitucional contra la explotación sexual comercial y trata de personas de honduras (CICESCT) rinde cuentas de los datos estadísticos sobre esta cuestión.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la CICESCT se encarga de adoptar medidas de prevención y de erradicación de los delitos de trata de personas y de explotación sexual comercial. Está compuesta por representantes de 31 instituciones del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Según estas estadísticas, en 2017 se recibieron en total 138 quejas, de todas las edades, 29 de ellas relativas a la explotación sexual comercial y 109 referentes a la trata de personas; se condenó a 17 personas a penas que oscilan entre 4 y 15 años de prisión, y se impusieron multas entre 75 y 225 veces el salario mínimo por delitos de trata de personas y de explotación sexual comercial, mientras que actualmente 90 personas están siendo objeto de un proceso penal con miras a su enjuiciamiento. La CICESCT indica que, de un total de 154 víctimas detectadas, los principales delitos de explotación son el proxenetismo (56 víctimas), la mendicidad (31 víctimas) y la explotación sexual (28 víctimas). En lo que respecta a los niños y adolescentes, 32 niñas y 25 niños han sido víctimas de trata de personas y de explotación sexual comercial. Al tiempo que toma nota de estos datos, la Comisión observa una vez más el bajo número de condenas, a saber, 17 condenas en relación con 138 quejas por trata de personas y explotación sexual comercial para 154 víctimas detectadas, sin perjuicio del número de casos no notificados.

La Comisión toma nota de que, según la información recibida, la CICESCT recibió en 2017 un presupuesto de 6 millones de lempiras (aproximadamente 24 700 dólares de los Estados Unidos) para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual comercial, y en 2018 este monto ha ascendido a 9 millones de lempiras (aproximadamente 370 500 dólares de los Estados Unidos). ***La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para asegurar que la trata de personas menores de 18 años de edad con miras a su explotación sexual comercial o su utilización para la prostitución, producción de pornografía o actuaciones pornográficas dé lugar a investigaciones exhaustivas y a procesamiento judiciales, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. Observando la ausencia de información desglosada por edad para permitir una evaluación real de la situación de los niños y adolescentes en la trata de personas y la explotación sexual comercial, la Comisión pide al Gobierno que suministre información desglosada por sexo y por edad de las víctimas, así como información detallada sobre el número de investigaciones emprendidas, de procesamiento judiciales llevados a cabo y de condenas impuestas en relación con las personas menores de 18 años de edad.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa necesaria para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social. Explotación sexual con fines comerciales y trata a tal efecto. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño había expresado su preocupación porque el Gobierno no dispone de un programa adecuado para la rehabilitación física y psicológica y la reinserción social de los niños víctimas de explotación sexual, que corre a cargo únicamente de las organizaciones de la sociedad civil. Recordando que la mencionada ley de 2012 contra la trata contiene disposiciones exhaustivas sobre la protección, la asistencia y la rehabilitación social de las víctimas de trata y de explotación sexual comercial, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara disposiciones inmediatas y efectivas para aplicar, en la práctica, medidas encaminadas a prestar una asistencia integral a los niños y adolescentes que hubieran sido víctimas de explotación sexual comercial y de trata organizada a tal efecto.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, en 2017, el equipo de respuesta rápida (ERI), órgano operativo especializado de la CICESCT, encargado de prestar asistencia a las víctimas de trata de personas y de explotación sexual, atendió a 105 víctimas de explotación sexual comercial. El departamento de lucha contra la trata de niños y adolescentes y la explotación sexual comercial prestó asistencia a 20 víctimas. Todos los casos de víctimas menores de 18 años fueron coordinados con la Dirección de niñez, adolescencia y familia (DINAF), además de los 42 niños a los que la DINAF prestó asistencia sin recurrir al ERI. El centro de paso de la DINAF y de otros centros

acreditados brindan protección a las víctimas menores de 18 años, ya que en estos centros se realizan exámenes médicos y psicológicos, así como un seguimiento social y jurídico, con el objetivo de evaluar cada caso a fin de adoptar las medidas correspondientes de protección adecuadas.

La Comisión toma nota del protocolo de acción del ERI orientado a las víctimas de trata de personas y de explotación sexual comercial, aprobado por el decreto núm. 488-2016. Dicho protocolo establece directivas para la identificación de las víctimas con miras a proporcionarles cuidados primarios en las primeras 72 horas, a realizar las remisiones correspondientes para que reciban cuidados integrales y a coordinar el proceso de reinserción. En lo que respecta al seguimiento, el ERI también ha prestado asistencia a 120 víctimas a través de visitas a domicilio, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y un apoyo de asistencia social de cara a su reinserción social. Además, la CICESCT y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa gubernamental «Vida Mejor» y del programa «Crédito Solidario» han suministrado a una serie de víctimas bolsas de alimentos y créditos para la apertura de pequeños comercios. El ERI colabora asimismo en sinergia con el Ministerio de Educación para la reinserción de las víctimas en el sistema educativo.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, no han podido garantizarse al 100 por ciento los servicios de calidad, ya que la cobertura y la calidad de los servicios en el país siguen constituyendo un desafío. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas encaminadas a prestar una asistencia completa a los niños y los adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual comercial y de la trata organizada a tal efecto. Le pide que proporcione información detallada sobre el número de niños a los que se ha librado de la trata y de la explotación sexual comercial y que se han beneficiado de medidas de readaptación, así como sobre los resultados obtenidos, en particular en el marco del Plan de acción nacional 2015-2020.***

Artículo 8. Cooperación internacional y regional. Explotación sexual comercial y trata organizada con este fin. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que Honduras formaba parte de la Coalición Regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y de la comisión regional para permitir y agilizar el intercambio de información sobre los casos registrados de los diferentes países. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre los resultados obtenidos en el marco de la puesta en práctica de los diversos acuerdos, y más concretamente sobre el número de niños repatriados a su país de origen.

La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue siendo miembro de dicha Coalición y que, actualmente, por designación de los países miembros, ejerce la presidencia de este foro regional durante el período comprendido entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, y tiene por tanto a su cargo la dirección de la Coalición. Ésta ha participado en la creación de un protocolo de repatriación de las víctimas de trata de personas, que se aplica en los países miembros de la Coalición. En 2017, la Coalición se centró en el diagnóstico regional, el nuevo protocolo, el sistema de vigilancia, la ayuda a los países que carecen de protocolo y la repatriación nacional. El Gobierno indica que ha participado en reuniones regionales y ha formado parte de un subcomité para la revisión del plan estratégico, operativo y de seguimiento de la Coalición.

La Comisión toma nota de los diversos respaldos con los que ha contado el Gobierno para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual, como el desarrollo de las capacidades de los funcionarios de los servicios de primera línea, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el fin prestar asistencia a las víctimas de trata y explotación sexual en sus primeros trámites. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha brindado apoyo al Gobierno para trasladar a las víctimas de trata que han regresado a Honduras; así, se ha repatriado a dos víctimas de Francia a Guatemala, que han vuelto con sus familias respectivas; otras seis víctimas han sido atendidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para asistirles en su regreso de Guatemala, México, Argentina y Belice, y todas han vuelto con sus familias.

La Comisión toma nota de que en 2017 se estableció una coordinación directa con las autoridades policiales de Belice para llevar a cabo investigaciones en Honduras con miras a reforzar los procesos judiciales en este país: de cuatro casos de trata con fines de explotación sexual, tres fueron objeto de acciones judiciales. En 2017, la policía de Belice detuvo a una persona responsable de la trata de cinco mujeres hondureñas. Ésta se encuentra en prisión preventiva, a raíz de la denuncia presentada contra ella por la fiscalía por delito de trata de personas en condiciones de trabajo forzoso y explotación sexual comercial (expediente núm. 136-2017). La Comisión toma nota de la participación del Gobierno en las actividades regionales siguientes: la Comisión de Jefes y Directores de Policías de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia; el Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) para la Prevención de la Explotación Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo, órgano intergubernamental que respalda las acciones de lucha contra la explotación sexual, y la adhesión de Honduras a la iniciativa «WePROTECT Global Alliance» para la protección de la infancia frente a la explotación sexual en línea. ***La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus iniciativas a escala internacional y regional con el fin de combatir la explotación sexual comercial y la trata organizada con este fin. Pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre los resultados obtenidos en el marco de la puesta en práctica de los acuerdos, y más concretamente sobre el número de niños repatriados a su país de origen, desglosada por edad, género y nacionalidad.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Indonesia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) **(ratificación: 1999)**

Artículo 1 del Convenio. Política nacional, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la Encuesta sobre el trabajo infantil en Indonesia, de 2009, según la cual son aproximadamente 1,76 millones los niños ocupados en un trabajo infantil en Indonesia. En su mayoría, trabajan en la agricultura, incluida la silvicultura, la casa y la pesca (el 57 por ciento de todos los niños que trabajan entre los 5 y los 17 años de edad). La Comisión también tomó nota de la información del Gobierno sobre varias medidas adoptadas para impedir que los niños menores de 15 años de edad estén ocupados en un trabajo infantil, como el Programa de Bienestar Social Infantil y la disposición de una ayuda para matriculación de los niños que fueron retirados, a través del Programa de Reducción del Trabajo Infantil, un programa de transferencias condicionadas de dinero para mejorar el acceso a la educación de los niños de familias pobres; y se adoptó, en 2014, una «Hoja de ruta hacia una Indonesia libre de trabajo infantil en 2022» (Hoja de ruta de 2022).

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria sobre sus continuos esfuerzos en la prevención del trabajo infantil. En ese sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno, a través de la aplicación de la reducción del trabajo infantil como parte del Programa de aspirantes a familias, retiró a 105 956 niños del trabajo infantil, de 2008 a 2018. También toma nota de que la Hoja de ruta de 2022 se amplió a 12 provincias, habiendo alcanzado la campaña Indonesia Libre de Trabajo Infantil a las partes interesadas de tres provincias. Además, se adoptaron medidas para reforzar las inspecciones del trabajo: i) exigiendo que los empleadores realizaran un informe laboral obligatorio; ii) llevando a cabo inspecciones preliminares y posteriormente inspecciones regulares en un período estipulado; iii) realizando inspecciones especiales basadas en denuncias públicas, en solicitudes de las empresas y/o en una orden del jefe de la inspección del trabajo, y iv) efectuando una nueva inspección basada en la evaluación del informe de inspección del jefe de la inspección del trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 19 de junio de 2014 y de 10 de julio de 2014, respectivamente, expresaron su preocupación por la elevada prevalencia de trabajo infantil en el país, incluidos los trabajos peligrosos (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 71). También toma nota de que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales manifestó su preocupación porque las medidas adoptadas en 2014, encaminadas a cubrir a 15 000 niños, no estaban de conformidad con la magnitud del problema, que afecta a millones de niños (documento E/C.12/IDN/CO/1, párrafo 23). ***Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo insta a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la eliminación del trabajo infantil. Solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, en particular sobre la expansión de las políticas de educación y medidas de sensibilización y sobre los resultados obtenidos. La Comisión también solicita al Gobierno que refuerce la inspección del trabajo en los ámbitos nacional y local, para ayudar a que se haga un seguimiento de la situación del trabajo infantil, en particular en el sector agrícola. Por último, solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que el Convenio se aplica en la práctica, incluida la información de la inspección del trabajo sobre el número y la naturaleza de las contravenciones notificadas, de las violaciones detectadas y de las sanciones impuestas.***

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. 1. Economía informal. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual el trabajo infantil está extendido en Indonesia, teniendo lugar, en su mayor parte, en las actividades informales y no reguladas, como la venta ambulante y los sectores agrícola y doméstico. La Comisión también tomó nota de que la ley núm.13, de 2003 (Ley sobre la Mano de Obra), excluyó de su aplicación a los niños que están ocupados en un empleo por cuenta propia o que trabajan sin una relación salarial clara. Tomó nota asimismo de la información contenida en el Informe de la Encuesta sobre el Trabajo Infantil en Indonesia, de 2009, según la cual, de todos los niños que trabajan entre los 5 y los 12 años de edad, el 12,7 por ciento trabaja por cuenta propia y el 82,5 por ciento son trabajadores familiares sin remuneración. La Comisión tomó nota de que se elaboró un proyecto de reglamentación gubernamental dirigido a proteger a los niños que trabajan en la economía informal, en virtud del artículo 75 de la Ley sobre la Mano de Obra, que está en discusión entre los ministerios y los sectores.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual la unidad para la supervisión de las peores formas de trabajo infantil (BPTA), establecida por el Ministerio de Recursos Humanos, supervisa y hace un seguimiento de la aplicación de las leyes relativas al Trabajo Infantil en la economía informal y a través de la reducción del trabajo infantil como parte del Programa de aspirantes a familias, retira a esos niños del trabajo infantil. La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información acerca de la adopción del proyecto de reglamentación que protege a los niños en la economía informal. ***Tomando nota una vez más de que la gran mayoría de niños que trabajan por debajo de la edad mínima no gozan de la protección de la Ley sobre la Mano de Obra, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que en un futuro muy próximo se finalice y adopte el proyecto de reglamentación que protege a los niños en la economía informal. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en este sentido. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de niños que trabajan en la economía informal y que han sido retirados a***

través de la reducción del trabajo infantil como parte del Programa de aspirantes a familias, así como sobre el número de niños que trabajan en la economía informal a los que la unidad para la supervisión de las peores formas de trabajo infantil identificó e impidió que trabajaran.

2. *Trabajo doméstico. Con respecto a la protección de los niños ocupados en el trabajo doméstico, la Comisión solicita al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados en relación con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).*

Artículo 9, 3). Llevar los registros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre la Mano de Obra no parecía contener ninguna disposición en la que se establezca que un empleador deberá llevar y tener un registro a disposición de la autoridad competente. Observó además la declaración del Gobierno de que el artículo 6 de la decisión núm. Kep 115/Men/VII/2004, que establece que un empleador que emplea a niños para desarrollar sus talentos e intereses deberá presentar un formulario de informe correspondiente, es únicamente aplicable a los empleadores que contraten a niños para representaciones artísticas o actividades afines.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información al respecto. La Comisión recuerda que la obligación del empleador prevista en el artículo 9, 3), del Convenio, que establece que éste ha de llevar y tener a disposición de la autoridad competente registros y otros documentos que contengan el nombre y los apellidos y la edad o fecha de nacimiento de todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen para él, es aplicable a los niños que trabajen en todas las actividades y sectores. ***En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, mediante la introducción de enmiendas en la legislación o el reglamento, para establecer la obligación de los empleadores de llevar registros de los niños empleados en todas las actividades económicas y no únicamente con fines de representación artística o actividades afines.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 5, del Convenio. Venta y trata de niños y mecanismos de vigilancia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley núm. 21, de 2007, sobre la Trata de Personas, tipifica como delito la venta, el reclutamiento y el transporte de personas, incluidos los menores de 18 años de edad con fines de explotación (artículos 1 a 6, y 17). También tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se estableció, en la policía nacional de la República de Indonesia, una unidad de servicio de mujeres y niños, para fortalecer a la policía en su empeño de combatir la trata de personas. Tomó nota de que muchos policías y fiscales seguían sin conocer bien la legislación contra la trata y eran reacios o no sabían cómo utilizar de manera efectiva esta legislación para castigar a los traficantes, siguiendo la corrupción obstaculizando los esfuerzos orientados contra la trata. Además, la información de la OIT/IPEC indicó que se había establecido, en 18 provincias, un grupo de trabajo nacional contra la trata de personas, a efectos de optimizar la gestión de los casos de trata. La Comisión tomó nota asimismo de la memoria del Gobierno, según la cual sólo tres autores de trata de niños fueron condenados a penas de prisión de cuatro a ocho años. La Comisión observó que, en las observaciones finales de 2014 (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 75), el Comité de los Derechos del Niño (CDN) expresó su preocupación ante la elevada prevalencia de la trata en el Estado parte y señaló que el Grupo de trabajo nacional contra la trata de personas (NAT-grupo de trabajo) no era suficientemente efectivo y que muchos distritos no estaban comprendidos en el grupo de trabajo.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), según la cual se estableció, en cada provincia, el grupo de trabajo NAT, y se estableció un grupo de trabajo 115 para controlar la aplicación de la ley anti-trata de personas. El Gobierno declara asimismo que se adoptaron medidas para reforzar la capacidad de los funcionarios implicados en combatir la trata de personas, incluidos fiscales, jueces, inspectores del trabajo, funcionarios policiales y funcionarios de inmigración. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando las medidas necesarias para reforzar la capacidad de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y del grupo de trabajo NAT, para combatir la trata de niños, incluso mediante la formación en legislación contra la trata y la identificación de las víctimas y la asistencia a éstas, así como la dotación de los recursos adecuados. Pide al Gobierno que siga comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluidas las medidas adoptadas por el grupo de trabajo 115, y los resultados obtenidos. Además, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos contra las personas que se dedican a la trata de niños, y que comunique información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas, así como las sanciones específicas impuestas a este respecto.***

Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual se formuló un anteproyecto de ley sobre la protección de los trabajadores domésticos que se incluyó en el Registro del programa nacional de legislación para 2010-2014. También tomó nota de que el artículo 4, b), del reglamento núm. 2 de 2015, sobre la protección de los trabajadores domésticos, prescribe que un trabajador doméstico no deberá tener menos de 18 años de edad. Sin embargo, la Comisión observó que, según un documento del proyecto OIT/IPEC, las organizaciones de trabajadores domésticos consideran que las disposiciones del reglamento se encuentran aún por debajo de los estándares del trabajo decente para un trabajador doméstico y solicitó la promulgación de un proyecto de ley integral. La Comisión tomó nota asimismo de que, según el

informe del programa de acción global de la OIT/IPEC, de 2015, 35 participantes de ministerios, policía, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, desarrollaron un plan de acción sectorial para eliminar el trabajo infantil en las labores domésticas en Indonesia, que está a la espera de su aprobación por el Gobierno. Por último, la Comisión tomó nota del estudio de 2013 de la OIT/IPEC, titulado *Child domestic workers in Indonesia: Case studies of Jakarta and Greater areas*, según el cual son aproximadamente 437 000 los niños trabajadores domésticos en Indonesia, de los cuales 49 por ciento tienen menos de 15 años y 51 por ciento entre 15 y 17 años, especialmente niñas (aproximadamente el 85 por ciento). En relación con las condiciones laborales, el número de horas de trabajo promedio oscilaba entre 9 y 16 horas, siete días a la semana, y en su mayoría trabajaban en condiciones de régimen interno.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual el proyecto de ley de protección de los trabajadores domésticos (proyecto de ley DWP) aún no se discutió en el Parlamento y no se incluyó en el Programa de legislación nacional para 2014-2019. La Comisión toma nota del informe de progreso técnico de la OIT/IPEC, de abril de 2018, del proyecto titulado *PROMOTE: Decent Work for Domestic Workers to end Child Domestic Work* (TPR 2018), según el cual se creó una red informal para apoyar y promover la aprobación del proyecto de ley DWP. También toma nota del TPR, 2018, según el cual se ha dado inicio, en la ciudad de Bandar Lampung, provincia de Sulawesi meridional y en el distrito de Malang, a tres reglamentos locales sobre protección de los trabajadores domésticos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el CDN, en sus observaciones finales de 10 de julio de 2014, expresó su preocupación por el elevado número de niños implicados en trabajos peligrosos, incluido el trabajo doméstico realizado por niños de 11 años de edad (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 71). **La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas concretas para abordar la situación de los niños que realizan trabajos domésticos, y a que comunique información sobre los resultados obtenidos, especialmente en cuanto a la prevención y a la retirada de los niños del trabajo doméstico. Solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que se adopte a la mayor brevedad el proyecto de ley DWP, con el fin de garantizar la protección integral de los niños menores de 18 años respecto del trabajo doméstico peligroso. También solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en relación con la adopción de los reglamentos locales sobre protección de los trabajadores domésticos, iniciada en la ciudad de Bandar Lampung, provincia de Sulawesi meridional, y en el distrito de Malang.**

Artículo 7, 2). *Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a los niños de estas peores formas.* 1. *Trata.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los esfuerzos para proteger a las víctimas de trata eran desiguales e inadecuados, en comparación con el alcance del problema de trata que afectaba al país. Tomó nota de la información del Gobierno, según la cual los hogares de protección social para los niños, situados en Yakarta y en otras 27 zonas de Indonesia, prestan servicio a los niños víctimas de trata. Además, se dotó de programas de rehabilitación para los niños víctimas de trata, que incluyen educación y formación, en uno de los 13 hogares de atención infantil/rehabilitación del Ministerio de Asuntos Sociales en todo el país.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se formuló un Plan nacional de acción para prevenir la trata de personas, 2015-2019. También toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual se estableció en 341 aldeas de 34 provincias, un movimiento comunitario integrado de protección de la infancia, que implica a la comunidad en la prevención y la detección temprana de la trata de niños. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas, en el marco del Plan nacional de acción para prevenir la trata de personas 2015-2019, para combatir la trata de niños, y sobre los resultados obtenidos en cuanto al número de niños librados de la trata y rehabilitados. Además, solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de niños víctimas de trata que fueron identificados, librados y rehabilitados por el movimiento comunitario integrado de protección de la infancia.**

2. *Explotación sexual comercial de niños.* La Comisión tomó nota con anterioridad de la información del UNICEF, según la cual aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución en Indonesia tienen menos de 18 años de edad, y entre 40 000 y 70 000 niños indonesios son víctimas de explotación sexual. Tomó nota de que el turismo sexual infantil está muy extendido en las zonas urbanas y en los destinos turísticos. La Comisión tomó nota de que, según un informe del Programa comprender el trabajo infantil, de 2015, en algunas zonas ha cambiado la naturaleza de la explotación sexual comercial y los niños, anteriormente alojados en prostíbulos, han pasado a vivir con familias y trabajan en hoteles y en otros sitios, a través de acuerdos facilitados por los medios sociales. Además, los niños indonesios también son objeto de trata interna para explotación sexual comercial en las explotaciones mineras en las provincias de Maluku, Papua y Jambi, en las zonas urbanas del distrito de Batam, Isla Riau y Papua occidental, así como para el turismo sexual en Bali (panel 4, pág. 21). La Comisión observó asimismo que el CDN, en sus observaciones finales de 2014 (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 75), manifestó su extrema preocupación por el gran número de trabajadores sexuales menores de edad.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en 2017, se impartió formación en prevención de la violencia sexual y la explotación de niños en aproximadamente 280 agentes turísticos, incluidos administradores de hoteles y de masajes, guías turísticos, oficiales en la industria turística y órganos encargados del cumplimiento de la ley, en siete distritos. Además, el Gobierno formuló una directriz titulada «Aldea turística en la que se respeta a los niños», que será aplicada como parte del programa comunitario integrado de protección de la infancia en los sitios turísticos. **Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo insta a que intensifique sus esfuerzos**

para proteger a los menores de 18 años de edad de la explotación sexual comercial, incluido el sector turístico. Solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre el número de niños que fueron librados de la explotación sexual comercial y rehabilitados. Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el impacto de la directriz Aldea turística en la que se respeta a los niños sobre la prevención de la explotación sexual comercial infantil.

3. *Niños ocupados en la venta, la producción y el tráfico de estupefacientes.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que aproximadamente 15 000 niños están implicados en la venta, la producción y el tráfico de drogas en Yakarta. También tomó nota de que se informaba que un 20 por ciento de las personas que consumían drogas estaban implicadas en la venta, la producción y el tráfico de drogas, lo que sugería que entre 100 000 y 240 000 jóvenes podrían estar implicados en el tráfico de drogas. Tomó nota asimismo de que el artículo 9 de la Ley sobre la Protección de los Niños, de 2002, prevé sanciones para las personas que implican a niños en la producción, la venta y el tráfico de drogas. Sin embargo, el Gobierno indicó que no se habían producido progresos significativos en el enjuiciamiento de las personas que emplean niños en varias de las peores formas de trabajo infantil, incluido el tráfico de drogas, y que algunos casos no llegaron a los tribunales. *Tomando nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos de las personas que implican a niños en la producción, la venta o el tráfico de drogas ilícitas, y que se impongan, en la práctica, sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y sanciones impuestas, en virtud del artículo 9 de la Ley sobre la Protección de los Niños, de 2002.*

Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y ponerse en contacto con ellos.

1. *Niños migrantes.* La Comisión toma nota de un informe del UNICEF, titulado *Palm Oil and Children in Indonesia- Exploring the sector's impact on children's Rights, 2016*, según el cual los niños que trabajan en plantaciones, en su mayoría migrantes internos o transnacionales, son especialmente vulnerables al tráfico de trabajo infantil. La Comisión también toma nota de que el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en sus observaciones finales de 19 de octubre de 2017, manifestó su preocupación por el gran número de niños migrantes que están expuestos a condiciones peligrosas de trabajo en las minas, en las plataformas pesqueras, en las obras de construcción y en las canteras, o como trabajadores domésticos o trabajadores del sexo y su vulnerabilidad a la trata y al trabajo forzoso (documento CMW/C/IDN/CO/1, párrafo 32). *Observando con preocupación que los niños migrantes tienen un riesgo cada vez mayor de estar ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a estos niños de las peores formas de trabajo infantil. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.*

2. *Niños en plataformas pesqueras.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que se estimó en más de 7 000 el número de niños que trabajaban en la pesca de altura en el norte de Sumatra. También tomó nota de que el Gobierno desplegó varios esfuerzos dirigidos a impedir la ocupación de niños en el trabajo en plataformas pesqueras, incluyéndose la sensibilización comunitaria, la cooperación con gobiernos regionales y la colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG). Además, en los distritos que tienen plataformas pesqueras, se establecieron comités de acción con arreglo al Plan de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno simplemente declara que intervino en un caso de trabajo infantil en el sector pesquero y libró a la víctima, impartándole una formación profesional. La Comisión toma nota del informe trimestral de la OIT, de julio-septiembre de 2017, del proyecto SEA Fisheries, según el cual Indonesia es uno de los principales países que aplican este proyecto. El proyecto se dirige a combatir la trata y la explotación laboral en la industria pesquera, fortaleciendo la coordinación y aumentando la eficacia y la eficiencia de las iniciativas existentes, en los ámbitos nacional y regional. *La Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos para librar a los niños de los trabajos peligrosos en la industria pesquera y que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar su liberación, rehabilitación e inserción social, incluso en el marco del proyecto SEA Fisheries.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Iraq

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Todas las formas de esclavitud y prácticas análogas. Reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos en conflictos armados, y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas en relación con los niños y los conflictos armados, de 5 junio de 2015, se reclutaron al menos 67 niños varones por parte del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (IEIIL) y un número desconocido de niños fue reclutado por las Fuerzas de Movilización Popular progubernamentales (FMP) en áreas de conflicto. Se reclutaron niños de tan sólo 10 años de edad, que fueron utilizados por el grupo de autodefensa que apoyan a las Fuerzas de Seguridad Iraquíes y se informó de que hay también niñas vinculadas a los grupos de autodefensas yazidíes. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que tiene la intención de promulgar una ley que prohíba la contratación

de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión instó firmemente al Gobierno a que adoptara medidas que garanticen la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y de poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años de edad en las fuerzas armadas y en los grupos armados.

La Comisión toma nota de una falta de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, de 16 de mayo de 2018 (documento A/72/865-S/2018/465), siguen verificándose casos de reclutamiento de niños para su utilización en conflictos armados. Las Naciones Unidas documentaron 523 casos de niños reclutados por las partes en conflictos, de las que se verificaron 109 casos (101 varones y ocho niñas). Al EIL se le atribuyó el reclutamiento de 59 niños, incluidas 8 niñas, que fueron utilizadas como terroristas suicidas y combatientes, con fines logísticos y para fabricar artefactos explosivos y, en el caso de las niñas, también como esposas de los combatientes (párrafo 75). La Comisión toma nota también de que el Secretario General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la organización de adiestramiento militar para varones de 15 años en delante por parte de las FMP y alentó al Gobierno a formular un plan de acción para detener y prevenir el presunto adiestramiento, reclutamiento y utilización de niños por parte de las FMP (párrafo 85). La Comisión ***lamenta profundamente*** una vez más la situación actual de los niños afectados por los conflictos armados en Iraq, especialmente porque entraña otras violaciones de los derechos de los niños, tales como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Recuerda que, según el *artículo 3, a)*, del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para su utilización en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del *artículo 1* del Convenio, los Estados Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. ***Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que predomina en el país y la presencia de grupos armados y de conflictos armados. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas con carácter de urgencia para garantizar la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y a que ponga fin al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años en los grupos y las fuerzas armadas. Además insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de todas las personas, incluidos los miembros de las fuerzas armadas regulares, que reclutan niños menores de 18 años para su utilización en conflictos armados, y a que se impongan, en la práctica, sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Por último, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción de la ley que prohíbe el reclutamiento de niños menores de 18 años para su utilización en conflictos armados, y expresa la firme esperanza de que esta nueva ley establecerá sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno de que había finalizado un proyecto con la UNESCO titulado «Enseñar a un niño», cuyo objetivo es proporcionar asistencia institucional y técnica destinada a mejorar la calidad y capacidad de la educación informal. Este proyecto tiene además el objetivo de suministrar educación alternativa a más de 180 000 niños que se encuentran fuera del sistema escolar, incluidos niñas y niños de zonas rurales, y a integrarlos en la educación formal a través de un procedimiento acelerado de enseñanza. En este sentido, la UNESCO, con la ayuda de los inspectores del trabajo, ha matriculado a una serie de niños, incluidos niños de la calle, para participar en este proyecto de educación acelerada. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de 2011, el 38 por ciento de los niños de 12 a 17 años no están escolarizados y las niñas se encuentran en una situación mucho peor que la de los varones. La Comisión tomó nota además de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales de marzo de 2015, expresó su preocupación por el hecho de que, en la práctica solamente la mitad de los niños en edad de asistir a la escuela secundaria pueden asistir debido a que las escuelas son objetos de ataques y los niños son secuestrados durante su trayecto a la escuela; y de que un número muy elevado de niños desplazados internamente y de refugiados no tienen acceso a la enseñanza.

La Comisión tomó nota de que falta información en la memoria del Gobierno sobre este punto. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de 2018, las Naciones Unidas han documentado 161 incidentes de ataques a escuelas y hospitales (párrafo 80). La Comisión observa que, según el UNICEF, se registró un aumento de las tasas de abandono escolar en el sistema educativo en general del 2 por ciento en el 2013-2014 al 2,6 por ciento en 2015-2016. El nivel de la enseñanza secundaria es notablemente inferior debido a que las tasas de abandono escolar son considerablemente más altas (3,6 por ciento para los varones y 4,7 por ciento en el caso de las niñas) que en otros niveles educativos.

Además, alrededor de 355 000 niños desplazados internamente siguen sin ser escolarizados en el país, lo que representa el 48,3 por ciento del total de niños desplazados internamente en edad escolar. En las provincias afectadas por conflictos armados, más del 90 por ciento de los niños de edad escolar están fuera del sistema educativo. La Comisión observa asimismo que, según el UNICEF, el presupuesto del Gobierno destinado a educación para el período de 2015-2016 fue únicamente del 5,7 por ciento y, por consiguiente, es preciso aumentar el gasto global en esta partida, un aumento que debería contribuir a paliar las necesidades educativas en construcción de escuelas, el acceso a la educación de las niñas y las familias con bajos ingresos, así como a mejorar la calidad de la educación (Informe sobre costos y

beneficios en el Iraq, 2017). La Comisión expresa una vez más su **profunda preocupación** por el elevado número de niños privados de educación debido al clima de inseguridad predominante en el país. **Reconociendo la difícil situación que predomina en el país, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para mejorar el acceso a la educación básica y gratuita de todos los niños, en particular de las niñas, los niños en las zonas rurales y en las regiones afectadas por la guerra. La Comisión alienta firmemente una vez más al Gobierno a que refuerce las medidas para acrecentar las tasas de matriculación, asistencia y terminación en la enseñanza primaria y secundaria, y a que reduzca las tasas de abandono escolar para impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil.**

Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social. 1. *Niños en conflictos armados.* La Comisión tomó nota de que, según el informe del Secretario General, al menos 391 niños, entre los cuales 16 niñas, retenidos en centro de detención fueron acusados o condenados por actos relacionados con el terrorismo debido de su presunta vinculación con grupos armados.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este punto. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de 2018, en 2017 seguían en centros de detención de menores al menos 1 036 niños (1 024 varones y 12 niñas), incluidos 345 en la región del Kurdistan, acusados de delitos relacionados con la seguridad nacional, principalmente por su supuesta vinculación con el EIIL (párrafo 76). La Comisión expresa una vez más su **profunda preocupación** por la práctica de la detención y condena de niños por su supuesta relación con grupos armados. En este sentido, la Comisión debe destacar que los niños menores de 18 años asociados con grupos armados deberían ser considerados como víctimas y no como infractores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 502). **En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños liberados de los grupos de fuerzas armadas sean considerados como víctimas y no infractores. Además, insta al Gobierno una vez más a que adopte medidas eficaces en un plazo determinado para retirar a los niños y grupos armados y garanticen su rehabilitación e inserción social. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en este sentido y sobre el número de niños retirados de las fuerzas armadas y reintegrados a la sociedad.**

2. *Esclavitud sexual.* La Comisión tomó nota de que, según el CRC, el EIIL ha creado «mercados» en los que se venden a las niñas secuestradas después de colgarles una etiqueta con el precio y que la esclavitud sexual de los niños detenidos se realizan en cárceles improvisadas del EIIL. La Comisión tomó nota además de que según el informe del Secretario General, al menos 1 297 niños fueron secuestrados, entre ellos niñas de tan sólo 12 años, que fueron vendidas en las zonas contraladas por el EIIL para utilizarlas en la esclavitud sexual. La Comisión toma nota de que la ausencia de información sobre este punto de la memoria del Gobierno. Toma nota además de que, según el informe del Secretario General de 2018, se verificaron nueve casos de violencia sexual, y las niñas que fueron víctimas de abusos sexuales fueron posteriormente obligadas a fabricar bombas (párrafo 79). **La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas efectivas en un plazo determinado para liberar a los niños menores de 18 años de edad víctimas de esclavitud sexual y garantice su rehabilitación e integración social. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto, así como sobre el número de niños que han sido liberados de la explotación sexual y rehabilitados.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Jamaica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en consulta con los interlocutores sociales, se había elaborado un proyecto de lista con los tipos de trabajos o empleos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad. La Comisión tomó nota de que este proyecto de lista contenía 45 tipos de trabajos prohibidos. Tomó nota asimismo de que la lista de trabajos peligrosos se incluiría en los reglamentos de la nueva ley sobre seguridad y salud en el trabajo (ley SST), cuando fuera adoptada.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en espera de la adopción de la nueva ley SST, se han introducido mejoras en la lista actual para hacerla más exhaustiva. El Gobierno señala que facilitará dicha lista en cuanto esté disponible. **Al tiempo que lamenta tomar nota de que el Gobierno ha estado elaborando esta lista desde 2006, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la lista de los trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad se adopte en un futuro próximo y a que la incluya en los reglamentos de la ley SST. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la lista final cuando haya sido adoptada.**

Artículo 7, 3). *Determinación de los trabajos peligrosos.* La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 34, 1) y 2), de la Ley de Atención y Protección del Niño autoriza el empleo de niños entre 13 y 15 años en las ocupaciones que figuran

en una lista de trabajos permitidos. En esta lista figuran trabajos ligeros que el Ministerio considera apropiados, y se especifica el número de horas durante las que estos niños pueden trabajar y las condiciones en las que pueden hacerlo. En este sentido, el Gobierno señaló que un grupo de trabajo constituido por inspectores en materia de seguridad, representantes de trabajadores y de empleadores ha examinado una lista provisional de trabajos ligeros y que ésta se incluirá en los reglamentos de la nueva ley SST. ***Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que presentará la lista en cuanto esté disponible, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopten en un futuro próximo la ley SST y su reglamento correspondiente con la lista de trabajos ligeros que se permiten a los niños.***

Artículo 9, 1). Sanciones y la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que las inspecciones del trabajo se limitan al sector formal de la economía y que los inspectores aún no han detectado casos de trabajo infantil en el curso de las mismas. En este sentido, la Comisión tomó nota de la información aportada por la OIT/IPEC respecto a que el sector informal es uno de los principales sectores en los que tiene lugar el trabajo infantil. No obstante, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley SST sustituirá a la Ley de Fábricas y ofrecerá un marco más adecuado para que los inspectores del trabajo controlen los casos de trabajo infantil en sectores en los cuales se les habían restringido sus competencias hasta el momento, incluido el sector informal. El Gobierno también señaló que el proyecto de ley SST autoriza a los inspectores del trabajo a imponer las sanciones adecuadas cuando se comete una infracción. La Comisión tomó nota, no obstante, de que las facultades en materia de inspección de los funcionarios del trabajo se limitan a los edificios comerciales y las fábricas, lo cual restringe mucho su capacidad de controlar los sectores informales de la economía.

La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno, según la cual, en el marco de la adopción de la nueva ley SST, se han realizado talleres de capacitación para los inspectores del trabajo con miras a la actualización de sus nuevas funciones y responsabilidades en virtud de la nueva ley. El Gobierno señala que es más probable que se aumente el número de inspectores atendiendo al aumento esperado de inspección en los lugares de trabajo. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice la adopción de las disposiciones del proyecto de ley SST que favorecerá a que los inspectores del trabajo impongan las sanciones adecuadas. La Comisión pide también al Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a quienes infrinjan las disposiciones que dan cumplimiento al Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga intensificando sus esfuerzos para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo, incluso a través de la asignación de recursos adicionales, para preparar la ampliación de las competencias de la inspección del trabajo y el seguimiento del trabajo infantil en la economía informal, en virtud del proyecto de ley SST.***

Artículo 9, 3). Registro de los empleados. La Comisión tomó nota anteriormente de que los textos legislativos disponibles no contienen disposiciones que requieran al empleador que lleve registro u otro documento de las personas empleadas o que trabajan para él o ella. No obstante, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que el marco jurídico sobre la cuestión estaba siendo examinado por el Ministerio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se está revisando la Ley sobre el Cuidado y la Protección de los Niños (CCPA), de 2003, de forma que incluya disposiciones que obliguen a los empleadores a llevar registros de los niños empleados en representaciones artísticas. La ley exige también que cualquier persona que emplee a un niño notifique a la Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y proporcione los detalles pertinentes para que le conceda la exención del permiso. La Comisión reitera que, en virtud del artículo 9, 3), del Convenio, las disposiciones legislativas deberán prescribir los registros que el empleador debe llevar y tener a disposición de la autoridad competente y que los registros deberán precisar el nombre y apellido y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, de todas las personas menores de 18 años que trabajen o estén empleadas por él o ella, en todos los sectores y actividades y no sólo en representaciones artísticas. ***La Comisión, en consecuencia, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en un futuro próximo para garantizar que se enmienda la CCPA con objeto de incluir en ella disposiciones que prescriban los registros que deben llevar los empleadores que contratan a niños menores de 18 años, de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio.***

Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, a finales de 2015 y principios de 2016 se pondrá en marcha la realización de una encuesta nacional sobre trabajo infantil. El Gobierno señala que, en diversas partes del país consideradas como «puntos calientes», se han realizado varias evaluaciones rápidas y sin aplicar criterios científicos (encuestas de sondeo), que han revelado inicialmente que la mayoría de los niños que trabajan están empleados en trabajo doméstico (93 por ciento), seguido de actividades agrícolas y en los mercados callejeros. La Comisión toma nota asimismo de que la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, realizada en 2011, el 16,7 por ciento de los niños y el 13,8 por ciento de las niñas, con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, están ocupados en trabajo infantil, así como el 11,6 por ciento de los niños y el 9,7 por ciento de las niñas con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil y que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para realizar una encuesta sobre el trabajo infantil a fin de garantizar que se dispone de suficiente información actualizada sobre la situación de los niños trabajadores en Jamaica, a saber, datos sobre el número de niños y jóvenes que participan en actividades económicas, así como estadísticas relativas a la naturaleza, el alcance y las tendencias del trabajo infantil.***

La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tendrá en cuenta las observaciones de la Comisión mientras concluye su proyecto de ley. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT para poner su legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley de Delitos Sexuales prohíbe el reclutamiento de toda persona para que se dedique a la prostitución (artículo 18, 1, b)), y también vivir de las ganancias de la prostitución (artículo 23, 1, a)). No obstante, la Comisión observó que la Ley de Delitos Sexuales no parece prohibir la *utilización* de menores de 18 años con fines de

prostitución, esto es, por un cliente. La Comisión tomó nota, asimismo, de que el Gobierno señala que dos proyectos de ley han sido objeto de debate en el Parlamento en relación con los delitos sexuales.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que está prohibido mantener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años y que mantener cualquier tipo de relación sexual con un niño es castigada con la pena máxima de reclusión a perpetuidad. El Gobierno señala también que, en 2014, se creó un registro de delincuentes sexuales dependiente del Departamento de Instituciones Penitenciarias. La Comisión recuerda al Gobierno que, según el artículo 2, del Convenio, el término «niño» designa a toda persona menor de 18 años, y que el artículo 3, b), prohíbe específicamente la utilización de un niño para fines de prostitución, esto es, por un cliente. **La Comisión pide, en consecuencia, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que su legislación contiene una prohibición de utilizar a niños menores de 18 años de edad con fines de prostitución, de conformidad con lo previsto en el Convenio.**

Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota anteriormente de que la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para realizar actividades ilícitas, en particular, la producción y el tráfico de estupefacientes, no parecen estar expresamente prohibidos por la legislación nacional pertinente. Tomó nota, asimismo, de que, en la práctica, en Jamaica se utilizan niños para el transporte y la venta de estupefacientes. No obstante, la Comisión tomó nota de que la lista provisional de trabajos peligrosos prohibidos a los niños se prohíbe hacer participar a los niños en actividades ilícitas y en la industria de los estupefacientes, e incluye disposiciones más específicas que prohíben a los niños el cultivo de marihuana y la vigilancia de los campos donde se cultiva. La Comisión tomó nota asimismo de la información de la Confederación Sindical Internacional de que en el país se utilizan niños para el transporte y la venta de estupefacientes.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que se incluirán disposiciones que prohíben la utilización de niños en actividades ilícitas en la revisión de la Ley sobre el Cuidado y la Protección de los Niños así como en el proyecto de ley sobre seguridad y riesgos en el trabajo (ley SST). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de las disposiciones que prohíben la participación de niños en actividades ilícitas y en la industria de los estupefacientes (tanto en la Ley sobre el Cuidado y la Protección de los Niños como en la ley SST). La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte medidas para garantizar que este delito puede ser castigado con sanciones suficientemente eficaces y disuasorias.**

Artículo 4, párrafo 1. Determinación de los trabajos peligrosos. **En lo que se refiere a la adopción de una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad, la Comisión pide al Gobierno que se remita a sus observaciones detalladas en relación con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). La Comisión llama también la atención del Gobierno sobre el artículo 4,1, del presente Convenio, con arreglo al cual los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d), deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular, el párrafo 3 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190).**

Artículos 5 y 7, 1). Mecanismos de control, sanciones y aplicación del Convenio en la práctica. Trata de niños y prostitución infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de que la trata de niños (en particular con fines de prostitución forzosa), y la explotación sexual comercial de niños (especialmente en áreas turísticas) constituyen un problema en Jamaica. La Comisión tomó nota de que el Grupo especial de trabajo contra la trata de personas (NATFATIP) se encarga de la aplicación del plan de acción. La Comisión observó finalmente que el número de casos de trata de niños denunciados parece ser considerablemente más elevado que el número total de casos de trata que son investigados.

La Comisión toma nota del Plan nacional de acción para combatir la trata de personas 2012-2015 que el Gobierno adjunta a su memoria. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno de que la Ley sobre la Trata de Personas, de 2009, fue modificada en 2013, y prescribe circunstancias agravantes y sanciones más estrictas cuando la víctima de la trata es un niño, en virtud del artículo 4A, 2), 1). El Gobierno denuncia además que se han puesto en marcha 35 investigaciones, cinco personas han sido arrestadas y dos han sido procesadas. La Comisión señala también que fiscales, investigadores, jueces, inspectores del trabajo, trabajadores sociales y funcionarios públicos recibieron formación sobre trata de personas. A su vez, se impartieron cursos de sensibilización a 76 oficiales adjuntos a la División de Investigación del Crimen Organizado (OCID), así como a varios operadores de telefonía de la Oficina del Registro de Niños. Además, el cuerpo de policía de Jamaica elaboró procedimientos normativos ordinarios para la trata de seres humanos y los servicios de inmigración, ciudadanía y pasaporte (PICA) han recibido formación en la toma de conciencia sobre la distinción en cuanto al trato para las víctimas de trata. La Comisión toma nota de las medidas de sensibilización adoptadas por el Gobierno para evitar la trata de personas. En este sentido, el Gobierno declara que el NATFATIP ha firmado un acuerdo con el servicio de información de Jamaica, la subdivisión de comunicaciones y medios de difusión del Gobierno, con el fin de ofrecer un abanico de contenidos educativos para los medios de comunicación pública. Al tiempo que toma debida nota de estas medidas, la Comisión observa que, según las observaciones finales de 2015 del Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/JAM/CO/3-4, párrafo 62), el Estado parte es un país de origen, tránsito y destino de adultos y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y observa con preocupación las denuncias de participación forzada de niños en el comercio sexual, incluido el turismo sexual en el Estado parte. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar en la práctica la protección de los niños frente a la trata y la explotación sexual con fines comerciales. La Comisión pide al Gobierno que garantice que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y procesamiento riguroso de quienes perpetran estos delitos y que se les imponen, en la práctica, sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a ese fin, incluso a través del Plan de acción para combatir la trata de personas por parte del NATFATIP, y sobre los resultados alcanzados, especialmente en lo que respecta al número de personas investigadas, condenadas y sentenciadas por casos de trata cuyas víctimas sean menores de 18 años.**

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Proporcionar la asistencia necesaria y apropiada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños víctimas de trata y de prostitución. En relación con sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota de que el Plan de acción para combatir la trata de personas prevé el establecimiento de mecanismos para la protección y la atención a las víctimas, haciendo hincapié en el rescate, la retirada y la reinserción de los niños. La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno de que, de conformidad con las directrices en materia de asistencia al alojamiento aprobadas por el Consejo de Ministros, se ha puesto en marcha ya un albergue para mujeres y niños víctimas de trata donde se les proporciona servicios en materia de salud, trabajo social, atención psicosocial y formación. El Gobierno señala que, de las ocho víctimas detectadas, una era un niño, que ha sido puesto a disposición de la Agencia para el Desarrollo de los Niños (CDA), y afirma que el albergue aloja actualmente a una de estas víctimas. **Tomando nota del reducido número de niños víctimas de trata a los que**

se ha prestado asistencia, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para medidas efectivas y dentro de un plazo determinado para garantizar que se ofrecen servicios apropiados, incluidos servicios jurídicos, psicológicos y médicos, a los niños víctimas de trata y de explotación sexual, incluido el turismo sexual, a fin de facilitar su rehabilitación y reintegración social. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluida información sobre el número de niños a los que han llegado estas iniciativas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Jordania

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio y aplicación del Convenio en la práctica. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción del Marco Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (NFCL) para 2011-2016, que es una política exhaustiva cuyo fin es combatir el trabajo infantil en todo el reino mediante una supervisión sistemática y acciones colectivas a cargo de las partes interesadas, con el apoyo de la OIT/IPEC. Asimismo, constató que el Gobierno ha puesto en práctica el proyecto de la OIT/IPEC titulado «Moving towards a child labour free Jordan» (Hacia una Jordania sin trabajo infantil), que tiene por objeto encarar el problema del trabajo infantil reforzando los marcos normativos y legislativos y desarrollando la capacidad de las partes interesadas de combatir el trabajo infantil. La Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus iniciativas destinadas a luchar contra el trabajo infantil y a proporcionar información sobre las medidas adoptadas como parte del NFCL, así como sobre sus resultados.

La Comisión toma nota de la información aportada por el Gobierno en su memoria, según la cual el Ministerio de Trabajo ha iniciado varios programas y políticas con vistas a reducir el trabajo infantil en colaboración con todos los órganos gubernamentales y no gubernamentales. Entre estas medidas, se encuentran: i) la realización de varios actos de sensibilización sobre el trabajo infantil a través de medios audiovisuales; ii) la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la participación de niños que trabajan, y iii) el aumento del presupuesto destinado al Centro de Apoyo Social, que se encarga de retirar a niños que trabajan y de rehabilitarlos a ellos y a sus familias, que pasará de 50 000 a 300 000 dinares jordanos.

La Comisión también constata que en el informe resumido del proyecto de la OIT/IPEC se indica que, en el marco del proyecto «Hacia una Jordania sin trabajo infantil»: el NFCL se ha ejecutado en las 12 gobernaciones; se han desarrollado herramientas eficaces para realizar inspecciones específicas en materia de trabajo infantil; se ha creado una base de datos centralizada sobre trabajo infantil; y se ha reforzado la capacidad de las unidades de trabajo infantil y los interlocutores sociales de abordar esta cuestión. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha indicado en su memoria en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) que se ha creado un comité técnico, que comprende a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil y organizaciones internacionales, para adaptar el NFCL de manera que aborde la protección frente al trabajo infantil de una manera más adecuada.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, con arreglo a las conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil de 2016, el número de niños que trabajan en Jordania prácticamente se ha duplicado desde 2007, hasta superar los 69 000 niños, con unos 44 000 niños empleados en trabajos peligrosos, de los cuales el 20 por ciento tienen entre 12 y 14 años y más del 71 por ciento tienen entre 15 y 17 años. Según esta Encuesta, los principales sectores en los que se emplea a niños son la agricultura, la silvicultura y la pesca, así como el comercio mayorista y minorista. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa que un número considerable de niños por debajo de la edad mínima realizan trabajo infantil y trabajos peligrosos en Jordania. ***Por consiguiente, la Comisión anima encarecidamente al Gobierno a reforzar sus iniciativas para garantizar la eliminación del trabajo infantil en todo tipo de actividades económicas y solicita al Gobierno que siga aportando información sobre las medidas que se adopten en este sentido y sus resultados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las modificaciones del NFCL y acerca de las medidas que se tomen en este marco para combatir el trabajo infantil.***

Artículo 9, 1). Sanciones e inspección del trabajo. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de julio de 2014, expresó su preocupación por el hecho de que miles de niños, principalmente varones, continuasen trabajando en el comercio mayorista y en el sector agrícola y de que hubiese niñas que trabajasen como empleadas domésticas (documento CRC/C/JOR/CO/4-5, párrafo 57). Además, la Comisión observó que en el informe de evaluación rápida de la OIT/IPEC de 2014 se indicaba que los 150 inspectores de los que se disponía en ese momento no podían realizar una cobertura efectiva en todos los sectores, habida cuenta de las dimensiones del país.

La Comisión constata que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo ha llevado a cabo, en colaboración con la OIT, varias sesiones de formación y talleres para finalizar un manual sobre la seguridad y salud en el trabajo y el trabajo infantil y con el fin de sensibilizar a los inspectores acerca de los efectos y peligros a los que están expuestos los niños por el hecho de trabajar. Además, el Ministerio de Trabajo ha reforzado la supervisión de todos los sectores y las instituciones que emplean a niños en sus visitas regulares de inspección y ha emprendido acciones judiciales contra los empleadores

que no cumplen las disposiciones de la Ley del Trabajo. De esta manera, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha señalado que, en 2016, se llevaron a cabo 8 621 inspecciones; se registraron 1 210 infracciones que afectaban a 1 479 niños que trabajaban; y se emitieron 852 amonestaciones. En 2017, se realizaron 4 145 inspecciones; se observaron 242 infracciones que afectaban a 270 niños que trabajaban; y se emitieron 204 amonestaciones. Además, de enero a julio de 2018, se realizaron 5 542 inspecciones; se constató que trabajaban 507 niños, principalmente en la reparación de vehículos, el comercio minorista y mayorista y la restauración; se emitieron 441 amonestaciones a empleadores; y se expidieron 430 avisos de cierre de establecimientos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según un estudio realizado por la OIT que se titula «Decent Work and the Agriculture Sector in Jordan: Evidence from Workers' and Employers' surveys 2018» (El trabajo decente y el sector agrícola en Jordania: datos procedentes de encuestas de trabajadores y de empleadores, 2018), el 50 por ciento de los agricultores sirios declararon que había niños de menos de 15 años trabajando con ellos en el campo; y el 78 por ciento de los agricultores sirios y el 75 por ciento de los empleadores encuestados indicaron que su lugar de trabajo nunca había sido objeto de una inspección. **Por consiguiente, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo y ampliar los servicios de inspección a todos los sectores, incluido el agrícola, de forma que se garantice que todos los niños estén amparados por la protección establecida por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre el número y la naturaleza de las infracciones relativas al empleo de niños y jóvenes observadas por la inspección del trabajo, el número de personas procesadas y las sanciones impuestas.**

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 7, 2), del Convenio. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños refugiados. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en el informe de evaluación rápida de la OIT/IPEC sobre el trabajo infantil en el sector informal urbano en tres gobernaciones de Jordania, 2014, se indicaba que uno de cada diez niños refugiados sirios realizaba trabajo infantil y que el acceso a la educación era un aspecto que indicaba la marcada vulnerabilidad de los refugiados sirios, entre los cuales se calculaba que el 60 por ciento de los niños en edad escolar no asistían a la escuela. Asimismo, constató que en el informe de la OIT titulado «ILO response to the Syrian Refugee crisis in Jordan and Lebanon» (Respuesta de la OIT a la crisis de los refugiados sirios en Jordania y el Líbano), de marzo de 2014, se señalaba que numerosos niños refugiados estaban trabajando en condiciones peligrosas en el sector agrícola y el sector informal urbano, vendiendo o mendigando en la calle, y que se calculaba que 300 000 niños trabajaban en Jordania y estaban expuestos a los abusos y la explotación. La Comisión instó al Gobierno a que tomase medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los niños refugiados sirios de las peores formas de trabajo infantil y ofrecerles la asistencia directa necesaria y apropiada para retirarlos, rehabilitarlos e integrarlos en la sociedad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la protección que se brinda a los niños jordanos se ofrece también a los niños que no lo son. En cuanto a las medidas para proteger a los niños, incluidos los niños refugiados sirios, de las peores formas de trabajo infantil, el Gobierno se remite a las medidas siguientes adoptadas por el Ministerio de Trabajo: i) aumentar las visitas de inspección a empresas y adoptar un enfoque más estricto al entablar acciones judiciales en los casos de infracción; ii) ofrecer asesoramiento y consejo a empleadores en lo relativo a las consecuencias de contratar a niños para que realicen trabajo infantil; iii) derivar y transferir a los niños a instituciones que prestan servicios de apoyo y de otro tipo a los niños que trabajan y sus familias, como el Centro de Apoyo Social, que ha recibido a un gran número de niños refugiados sirios, y iv) sensibilizar acerca de la importancia de la educación y sobre los riesgos laborales mediante sesiones de concienciación y la participación de niños refugiados sirios y sus familias en los actos del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

La Comisión toma nota de que, según la ficha informativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre Jordania, de junio de 2018, hay 751 275 refugiados en Jordania, de los cuales el 48 por ciento son niños. Asimismo, constata que el Gobierno ha ejecutado, en colaboración con la OIT/IPEC, un proyecto titulado «Tackling child labour among Syrian Refugees and their host communities in Jordan and Lebanon» («Combatir el trabajo infantil entre los refugiados sirios y sus comunidades de acogida en Jordania y el Líbano») con el fin de eliminar el trabajo infantil, especialmente sus peores formas entre los refugiados sirios y sus comunidades de acogida. Según la ficha informativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre educación en Jordania, el UNICEF está impartiendo educación, en colaboración con el Ministerio de Educación, a más de 165 000 niños refugiados sirios en campos y comunidades de acogida. Además, la Comisión toma nota con *interés* de los logros alcanzados tras la aplicación del «Plan Regional para los Refugiados y de Resiliencia (3RP) 2017-2018», en cuya creación participaron más de 270 actores (de las Naciones Unidas y ONG nacionales e internacionales) para hacer frente a la crisis de los refugiados sirios y que se ha aplicado bajo la dirección de las autoridades nacionales de Egipto, Jordania, Turquía e Iraq. Según el informe anual sobre el 3RP de 2017, se calcula que en Jordania 15 246 niñas y niños recibieron servicios multisectoriales y de atención individualizada especializados en protección a la infancia; se inscribió a 130 668 niños sirios en las escuelas de los campos; 6 421 niños participaron en programas certificados del Ministerio de Educación de refuerzo y prevención del abandono escolar; se inscribió a 118 107 niños y adolescentes en servicios de apoyo al aprendizaje; y se matriculó a 8 617 niños en enseñanza preescolar. Por último, toma nota de que, según las conclusiones del informe de la Encuesta

Nacional sobre Trabajo Infantil de 2016, la tasa de escolarización de los niños de otras nacionalidades era del 90,5 por ciento y del 72,5 por ciento en el caso de los niños sirios. Sin embargo, la Comisión constata que, con arreglo a la evaluación del UNICEF de febrero de 2018, el 85 por ciento de los niños sirios refugiados en Jordania viven en la pobreza, no tienen cubiertas las necesidades más básicas, como la educación, y están expuestos a la explotación. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno ha adoptado diversas medidas para identificar, contactar, retirar y reinserter a los niños refugiados sirios que están expuestos a las peores formas de trabajo infantil. ***Así, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que continúe tomando medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los niños refugiados sirios de las peores formas de trabajo infantil y que proporcione la asistencia directa necesaria y apropiada para retirarlos y rehabilitarlos e integrarlos en la sociedad. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en la materia, así como acerca de los resultados obtenidos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kazajstán

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 19 de septiembre de 2018, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 18 de octubre de 2018.

Artículo 3, a) y d), del Convenio. Trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Código Penal de 2014 aumenta la imposición de penas por delitos contra la salud de los niños, en particular, la trata de niños. La Comisión tomó nota asimismo de que, en 2014, se registraron e investigaron 300 casos relativos a trata de personas, de los cuales 23 implicaban a menores. No obstante, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 2015, expresó su preocupación sobre los informes de que existe un elevado número de niños que son objeto de trata desde el país al extranjero y viceversa y dentro del país, al tiempo que la mayoría de las víctimas siguen sin estar identificadas. El Comité de los Derechos del Niño manifestó también su preocupación por la información recibida sobre la complicidad persistente de la policía en los casos de trata.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales los trabajadores migrantes menores de edad suelen ser objeto de esclavitud o víctimas de abusos sexuales o de trabajos forzados, y están sometidos a condiciones penosas de trabajo, sin que se haya hecho un seguimiento adecuado de su situación. La CSI, señala que, por ejemplo, durante una misión realizada entre septiembre y noviembre de 2017 en Kirguistán y Kazajstán, la Federación Internacional de Derechos Humanos detectó una serie de casos de trabajos forzados, en particular de trata de personas y trabajo infantil en los que estaban especialmente implicados menores tayikos y kirguís. En su respuesta a las observaciones de la CSI, el Gobierno señala que el artículo 134 del Código Penal establece penas para el delito de implicación de menores en prostitución, al tiempo que el artículo 135 penaliza la trata de menores. Afirma que Kazajstán posee un marco jurídico sólido para luchar contra todos los tipos de violaciones de los derechos de los niños.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria de que, según la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código Penal, en 2017, el Ministerio de Asuntos Interiores inició causas judiciales en ocho casos en virtud del artículo 13 y 12 y en virtud del artículo 135 del Código Penal. La Comisión toma nota también de los ejemplos que el Gobierno proporciona en relación con las condenas de funcionarios de la policía y del Estado con su participación en casos de trata y explotación. ***La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que todos los perpetradores de delito de trata de niños, en particular, los funcionarios gubernamentales y funcionarios de la policía cómplices del mismo, sean objeto de investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos, y que se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones penales impuestas a este respecto.***

Artículo 3, d). Aplicación del Convenio en la práctica. Trabajos peligrosos en las plantaciones de tabaco y algodón. La Comisión tomó nota anteriormente de que los estudios sobre el trabajo infantil en Kazajstán han puesto de manifiesto que la mayor parte de niños empleados participan en el sector informal y agrícola, en particular, en las cosechas de tabaco y algodón. La Comisión tomó nota también de que en la lista revisada de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a niños menores de 18 años, que fue aprobada por la orden núm. 391 de mayo de 2015, se prohíbe la contratación de menores en las plantaciones de tabaco y algodón. El Gobierno afirmó que los cultivos de tabaco kazajo han sido excluidos de la lista de tipos de cultivos agrícolas en los que se recurra al trabajo infantil, elaborada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. No obstante, el informe de 2014 de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó que a pesar del compromiso y del apoyo de la industria del tabaco y de las medidas adoptadas para aumentar la protección de los trabajadores migrantes, persiste los casos de trabajo infantil peligrosos en algunas explotaciones agrícolas. La Comisión tomó nota asimismo de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 2015, manifestó su preocupación por la frecuencia con la que se utilizan niños en la recolección de algodón, lo que entraña el acarreo de pesados fardos, malas condiciones de trabajo y altos riesgos del uso de abonos y pesticidas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se ha elevado considerablemente el importe de la multa a un empleador que contrate a un menor para realizar un trabajo prohibido a trabajadores menores de 18 años (de 700 a 2 000 unidades de moneda nacional, alrededor de 12 200 dólares de los Estados Unidos). Este delito también es sancionable por una restricción de la libertad de hasta dos años o por una privación de la libertad por este mismo período (que lleva aparejada la pérdida del derecho a ocupar determinados puestos o emprender determinadas actividades durante tres años). La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), durante el período considerado, se incoaron dos enjuiciamientos penales por delitos cometidos en virtud del artículo 153 del Código Penal, que sanciona las infracciones graves de la legislación laboral en relación con los menores de edad. Además, 52 empresas fueron denunciadas a la Oficina del Fiscal, así como a las autoridades en materia de trabajo y protección social para acciones posteriores, el Gobierno afirma que, en el distrito de Martaaral de la provincia de Turkistán, los menores suelen ser con mucha frecuencia empleados en la recolección de algodón. No obstante, a raíz del trabajo efectuado por las autoridades provinciales de Turkistán, está disminuyendo cada año el número de niños empleados en la recolección de algodón. Además, la autoridad local de la región de Kazajtán del Sur y el centro Sana Sezim para iniciativas legislativas en relación con las mujeres han emprendido una serie de medidas para impedir la utilización de niños en la cosecha de algodón. Con la cooperación de las empresas, también se está ejerciendo presión económica sobre los productores agrícolas. Por ejemplo, una empresa puntera del sector del tabaco incluye una cláusula en todos sus contratos con pequeños productores de tabaco en la provincia de Almat por la que prohíbe la utilización de niños y de trabajo forzoso. ***La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para proteger a los niños del trabajo peligroso en la agricultura, en particular, en las plantaciones de algodón. En este sentido la Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre el número de inspecciones efectuadas por las autoridades competentes y el número de infracciones detectadas y de sanciones impuestas en relación con el trabajo peligroso realizado por los niños menores de 18 años. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre el número de niños que han sido detectados y retirados de los trabajos peligrosos en la agricultura, así como de los servicios directos que se ha proporcionado a los niños en riesgo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kenya

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información comunicada por el representante gubernamental de Kenya a la Comisión de la Conferencia, en junio de 2013, sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación del trabajo infantil, a través de reformas legislativas y constitucionales, de asistencia técnica y de proyectos y programas pertinentes, incluido el proyecto OIT/IPEC, «Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación» (TACKLE) y el apoyo al proyecto de plan nacional de acción (SNAP), aplicado con el apoyo de la OIT/IPEC. Sin embargo, tomó nota de que la Comisión de la Conferencia, en sus conclusiones de junio de 2013, al tiempo que tomaba nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el trabajo infantil, expresaba su profunda preocupación ante el elevado número de niños que no asistían a la escuela y que estaban implicados en el trabajo infantil, incluido el trabajo peligroso, en Kenya. Además, la Comisión tomó nota de que, según las conclusiones de la encuesta de mercado de trabajo de la OIT/IPEC, realizada en los distritos de Busia y Kitui, en 2012, son más de 28 692 los niños implicados en el trabajo infantil en el distrito de Busia, la mayoría de los cuales participa en trabajos agrícolas, trabajo doméstico, venta ambulante o tráfico de drogas. Del informe de la encuesta en el distrito de Kitui, se deduce que trabaja el 69,3 por ciento de los niños mayores de 5 años de edad, la mayoría con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. De éstos, el 27,7 por ciento realiza trabajos agrícolas, el 17 por ciento, trabajos domésticos, el 11,7 por ciento, recogida de áridos y el 8,5 por ciento se dedica a la trituración de piedras y a la fabricación de ladrillos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se establecieron varios programas de apoyo social, incluidos los programas de transferencia monetaria dirigidos a aportar una seguridad del ingreso a los grupos vulnerables de la sociedad cuando los niños pueden ser obligados a abandonar la escuela. También toma nota de que, según el informe del proyecto SNAP, de enero de 2014, se impidió y retiró del trabajo infantil a un total de 8 489 niños (4 687 niñas y 3 802 niños). La Comisión toma nota asimismo de que la OIT/IPEC, a través del Programa de acción global (GAP 11), apoyó varias iniciativas que incluyen la realización de un análisis de situación para los niños trabajadores domésticos de Kenya. En consecuencia, se adoptó una Hoja de ruta sobre el fortalecimiento del marco institucional y legislativo para la protección de los niños que realizan trabajos domésticos. Al tiempo que toma nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota del informe del proyecto SNAP, de 2014, según el cual el trabajo infantil sigue constituyendo un desafío para el desarrollo de Kenya, que se vincula con asuntos tales como su acceso a la educación, a la formación profesional y a servicios conexos, a la protección social y a la lucha contra la pobreza. ***Por consiguiente, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar la situación de los niños menores de 16 años de edad y a que garantice la progresiva eliminación del trabajo infantil, incluido el trabajo doméstico realizado por niños en el país. Solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas en este sentido, así como sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se disponga de información estadística actualizada sobre el empleo de niños y jóvenes en el país.***

Artículo 3, 2). Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno, según la cual la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad, que fue aprobada

por el Consejo Nacional del Trabajo, sería incorporada al reglamento sobre la Ley del Empleo, de 2013, y que se adoptaría pronto. Solicitó al Gobierno que garantizara la adopción, en un futuro próximo, del reglamento.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el cuarto apartado del reglamento sobre el empleo (general), adoptado en 2014, contiene una lista de 18 sectores que incluyen 45 tipos de trabajos prohibidos a los menores de 18 años de edad (artículo 12, 3), leído conjuntamente con el artículo 24, e)). Estos sectores incluyen: el trabajo doméstico; los transportes; los conflictos internos; la minería y la trituración de piedras; la recogida de áridos; el cultivo del mirá; el pastoreo de animales; la fabricación de ladrillos; la agricultura (trabajo con maquinaria, sustancias químicas, traslado y transporte de cargas pesadas); el trabajo de empresas industriales, almacenamiento; trabajos de construcción de edificios (cavar la tierra, trasladar piedras, mover arena con palas, cemento, trabajos con metales, soldadura, trabajos en altura, en espacios cerrados y con riesgo de derrumbamiento de estructuras); pesca en aguas profundas de lagos y mares; fabricación de cerillas y fuegos de artificio; tenerías; sector urbano informal y el trabajo en la calle (mendicidad); recolección manual de desperdicios; turismo; y trabajos en los servicios. La Comisión toma nota asimismo de que, según el artículo 16 del reglamento sobre el empleo (general), toda persona que contravenga cualquiera de las disposiciones relacionadas con el empleo de niños, incluida la prohibición de empleo de niños en los tipos de trabajo peligrosos que figuran en la lista del apartado cuarto, serán pasibles de una multa no superior a 100 000 chelines (aproximadamente, 982 dólares de los Estados Unidos) o de una pena de prisión por un lapso no superior a seis meses, o de ambas. ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 16 del reglamento sobre el empleo (general), de 2014, incluidas las estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones registradas y de las sanciones impuestas por las violaciones en virtud de los artículos 12, 3), y 24, e).***

Artículo 7, 3). Determinación de los trabajos ligeros. Tomando nota de la declaración del Gobierno, según la cual se desarrolló la reglamentación que prescribe los trabajos ligeros en los que un niño mayor de 13 años de edad puede ser empleado y las condiciones de ese empleo, en virtud del artículo 56, 3), de la Ley del Empleo, la Comisión expresó la firme esperanza de que este reglamento se adopte pronto.

La Comisión toma nota con *interés* de que, según el artículo 12, 4), del reglamento sobre el empleo (general), un menor de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, puede ser empleado en cualquier trabajo ligero contenido en el apartado quinto, que incluye: el trabajo realizado en la escuela como parte del plan de estudios; el trabajo agrícola u hortícola no superior a dos horas; la entrega de periódicos o materiales impresos; el trabajo en tiendas que incluyen el apilamiento de estantes; peluquerías en las casas, trabajos de oficina ligeros; lavado de coches a mano en entornos residenciales privados; y trabajos en cafeterías o restaurantes, siempre que la naturaleza del trabajo se limite a servir en las mesas. Además, el artículo 26 del reglamento sobre el empleo (general), prohíbe que los menores de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años estén empleados en trabajos que sean susceptibles de ser nocivos para la salud y el desarrollo del niño o que interfieran en la educación del niño.

Artículo 8. Representaciones artísticas. La Comisión tomó nota con anterioridad del artículo 17 de la Ley sobre los Niños, que dispone que éstos deben poder participar en actividades culturales y artísticas y disfrutar de éstas. También tomó nota de la información del Gobierno, según la cual se formuló un reglamento sobre el otorgamiento de permisos para representaciones artísticas, que se entregaron para su adopción en virtud del reglamento sobre la Ley del Empleo, de 2013.

La Comisión toma nota del informe del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Servicios (informe sobre el MoLSS) a la visita de la misión de contactos directos de la OIT, de agosto de 2014, según el cual las reglas y los reglamentos relativos a la participación de los menores de 18 años de edad en actividades publicitarias, artísticas y culturales, se presentarán a la Oficina del Fiscal General para su inclusión en el *Boletín Oficial*. Según este informe, esta reglamentación incluye disposiciones vinculadas con los contratos de empleo, la remuneración, las horas de trabajo, el área de protección y los delitos y procedimientos legales. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el reglamento relativo a la participación de niños en actuaciones artísticas. Pide al Gobierno que transmita una copia en cuanto se haya adoptado.***

Tomando nota del informe del MoLSS, según el cual tiene la intención de solicitar la asistencia técnica de la OIT en sus esfuerzos por combatir el trabajo infantil, la Comisión alienta al Gobierno a que considere la solicitud de asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículos 3, d), 4, 1), y 7, 2), a) y b), del Convenio. Trabajo peligroso y medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y liberarlos de las peores formas de trabajo infantil. Trabajo doméstico infantil. La Comisión toma nota de que el artículo 12, 3), leído conjuntamente con el artículo 24, e), del reglamento sobre el empleo (general), de 2014, prohíbe el empleo de niños menores de 18 años de edad en varios tipos de trabajos peligrosos que figuran en la lista del apartado cuarto del Reglamento, incluido el trabajo doméstico. La Comisión también toma nota de que la OIT/IPEC, a través del Programa de Acción Global (GAP 11), apoyó varias actividades, incluida la realización de un análisis de situación para los niños trabajadores domésticos de Kenya. Según el informe del GAP, de 2014, el análisis de situación reveló que los niños mayores de 16 años de edad, algunos de los cuales comenzaron a trabajar a los 12-13 años, están implicados en el trabajo doméstico en Kenya. Muchos están mal remunerados y el trabajo durante largas horas con un promedio de 15 horas al día, son objeto de abusos físicos y sexuales. Toma nota asimismo de que, según el informe titulado *Hoja de ruta para proteger a los niños trabajadores domésticos en Kenya: Fortaleciendo la respuesta institucional y legislativa (Road Map to Protecting Child Domestic Workers in Kenya: Strengthening the Institutional and Legislative Response)*, de abril de 2014, se estima entre 350 000 el número de niños trabajadores domésticos de Kenya, la mayoría de los cuales son niñas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. La Comisión toma nota con *preocupación* el gran número de niños menores de 18 años de edad que están implicados en el trabajo doméstico y son objeto de condiciones laborales peligrosas. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se aplique efectivamente su nueva reglamentación sobre trabajos peligrosos, con el fin de impedir que los trabajadores domésticos menores de 18 años de edad estén ocupados en trabajos peligrosos. También solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para suministrar la asistencia directa necesaria y adecuada, con el fin de librar a los niños ocupados en trabajos domésticos de condiciones laborales peligrosas y garantizar su***

rehabilitación e inserción social. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, en cuanto al número de niños trabajadores domésticos librados y rehabilitados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kirguistán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos de Kirguistán (KFTU) recibidas el 5 de septiembre de 2018 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según estimaciones de la Encuesta Nacional sobre el trabajo infantil (CLS), 2007, son económicamente activos 672 000 de 1 467 000 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años en Kirguistán (el 45,8 por ciento). La prevalencia del empleo entre los niños aumenta con la edad: del 32,7 por ciento de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años; al 55 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años; y el 62,3 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

La Comisión toma nota de que, en el marco del proyecto OIT/IPEC, titulado «Combatir el trabajo infantil en Asia Central: El compromiso traducido en acción» (PROACT CAR Fase III), que se dirige a contribuir a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil en Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, se realizó una amplia gama de acciones para combatir el trabajo infantil, incluidas sus peores formas, en Kirguistán. Estas incluyen la adopción del Código de los Niños, de 31 de mayo de 2012, cuyo artículo 14 prohíbe la utilización de trabajo infantil; la elaboración, en 2012, de la legislación y las políticas sobre trabajo infantil y empleo juvenil, en Kirguistán, cuyo objetivo es identificar el vínculo entre la eliminación del trabajo infantil y la promoción del empleo juvenil; la finalización de las directrices sobre la vigilancia del trabajo infantil en Kirguistán; así como un número de programas de acción encaminados a establecer zonas libres de trabajo infantil y a establecer sistemas de vigilancia del trabajo infantil en varias regiones del país. **La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos hacia la progresiva eliminación del trabajo infantil, en el marco del proyecto PROACT CAR Fase III, de la OIT/IPEC, y a que comunique información sobre los resultados obtenidos, en particular respecto de la reducción del número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima (16 años) y en trabajos peligrosos.**

Artículo 2, párrafo 1. Campo de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información del Gobierno, según la cual el Fiscal General de la República de Kirguistán y la Inspección del Trabajo del Estado son responsables de la aplicación y de la ejecución de la legislación del trabajo. Tomó nota de las disposiciones relativas a la edad mínima aplicadas al trabajo realizado en el hogar o en una empresa, el trabajo doméstico, el trabajo contratado, la agricultura comercial y la agricultura familiar y de subsistencia. Sin embargo, tomó nota de la declaración que figura en un informe de 2006 de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (en la actualidad, Confederación Sindical Internacional), según la cual muchos niños trabajan en empresas familiares, servicios domésticos, agricultura (tabaco, algodón, arroz), ganadería, venta de gasolina, lavado de coches, limpieza de zapatos, venta de productos al borde de la carretera y ventas al por menor de tabaco y alcohol. La Comisión también tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el trabajo infantil está extendido en establecimientos agrícolas, empresas privadas, actividades empresariales individuales y empleo por cuenta propia.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Código del Trabajo, en virtud de su artículo 18, se aplica a las partes implicadas en relaciones laborales contractuales, esto es, el trabajador y el empleador. Sin embargo, toma nota de que, según la CLS, una aplastante mayoría de los niños que trabajan (el 96 por ciento), lo hacen en la agricultura o en la producción doméstica, y en términos de estatuto laboral, la abrumadora mayoría (el 95 por ciento) son trabajadores familiares no remunerados. **La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños que trabajan por cuenta propia, los niños que están en la economía informal y los niños que trabajan en granjas familiares, gocen de la protección establecida en el Convenio. En este sentido, solicita una vez más al Gobierno que indique toda medida adoptada o prevista para fortalecer la inspección del trabajo, en particular en los mencionados sectores. Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita información sobre la manera en que la Inspección del Trabajo del Estado y el Fiscal General aplican las disposiciones legislativas específicas que dan efecto al Convenio.**

Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según el artículo 18 del Código del Trabajo, los alumnos que llegaron a la edad de 14 años pueden concluir un contrato de trabajo con el consentimiento por escrito de sus padres, tutor o curador para realizar un trabajo ligero fuera de las horas escolares, siempre que no dañe su salud y no interfiera en su educación. La Comisión tomó nota de que, según los artículos 91 y 95 del Código del Trabajo, las horas de trabajo para los trabajadores de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, no superarán las 24 horas a la semana, y las horas de trabajo diarias no superarán cinco horas. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara de qué manera se garantiza la asistencia a la escuela de los niños que trabajan cinco horas al día. También solicitó al Gobierno que indicara las actividades en las que puede permitirse un trabajo ligero a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años.

La Comisión toma nota de la información que figura en la CLS de 2007, según la cual, a pesar del elevado ratio de empleo en los niños, la asistencia escolar es también muy elevada, con el 98,9 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años y el 89,2 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, que asisten a la escuela. Sin embargo, también se observó que los niños que trabajan tienen unas tasas de asistencia escolar ligeramente más bajas que los niños que no trabajan. Entre los niños que no trabajan con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, la tasa de asistencia escolar se estima en el 97,4 por ciento, en comparación con el 94,5 por ciento de los niños que trabajan con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, una diferencia que se traduce principalmente en una asistencia escolar más baja en el caso de los niños con más edad que trabajaban. **La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños**

menores de 14 años de edad no estén ocupados en un trabajo o empleo. Con respecto a los niños mayores de 14 años de edad ocupados en trabajos ligeros, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se vea perjudicada su asistencia a la escuela. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que indique las actividades en las que pueden permitirse los trabajos ligeros a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. Si estas actividades aún no fueron determinadas por la ley, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para adoptar una lista de los tipos de actividades de trabajos ligeros que pueden permitirse a los niños mayores de 14 años de edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos de Kirguistán (KFTU) recibidas el 5 de septiembre de 2018 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 124, 1), del Código Penal prohíbe la trata de personas, y el artículo 124, 2), especifica que la trata de personas menores de 18 años de edad constituye un delito agravado. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno al Comité de Derechos del Niño (CRC), según la cual las víctimas de la trata de personas en Kirguistán no son sólo mujeres y niños utilizados para la explotación sexual en Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos sino también ciudadanos kirguisos vendidos en Kazajistán para trabajar en plantaciones de tabaco (mayo de 2006, documento CRC/C/OPSC/KGZ/1, pág. 10). La Comisión toma nota asimismo de que el Comité de Derechos del Niño, en sus observaciones finales, expresó que lamentaba la falta de datos estadísticos y la falta de investigación sobre la prevalencia de la trata nacional y a través de las fronteras y la venta de niños (2 de febrero de 2007, documento CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, párrafo 9).

La Comisión toma nota de la información de la OIT/IPEC, según la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores está desarrollando un Plan nacional de acción contra la trata de seres humanos para 2012-2015. La Comisión también toma nota de la información del informe del Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, de 28 de mayo de 2010, según el cual sigue constituyendo un problema en el país la trata de mujeres y niños para su explotación sexual y el trabajo forzoso (documento A/HRC/14/22/Add.2, párrafo 33).

La Comisión debe expresar nuevamente su **preocupación** por la falta de datos sobre la prevalencia de la trata de niños en Kirguistán, así como de informes sobre la prevalencia de este fenómeno en el país. *En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para adoptar el Plan nacional de acción contra la trata de seres humanos, y que comunique información sobre las medidas adoptadas en este marco para combatir la trata de personas menores de 18 años de edad, en cuanto se hayan adoptado. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se hagan disponibles datos suficientes sobre la venta y la trata de personas menores de 18 años de edad. En ese sentido, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de infracciones notificadas, investigaciones, procesamiento, condenas y sanciones penales aplicadas por violaciones del artículo 124 del Código Penal. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería estar desglosada por sexo y edad.*

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 157, 1), del Código Penal considera delito que una persona implique a un menor en la prostitución, mientras que, según los artículos 260 y 261 del Código Penal la inducción a la prostitución es un delito. La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual está aumentando el número de niños de la calle y de niños en grupos de riesgo a los que se obliga a dedicarse a la prostitución. Además, la Comisión tomó nota de que el CRC, en sus observaciones finales, expresó su preocupación de que en algunos casos de prostitución infantil, no se hayan iniciado investigaciones y procesamiento, y de que los niños víctimas puedan ser considerados responsables, juzgados y colocados en detención (documento CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, párrafos 17 y 21). La Comisión expresó su preocupación de que continúe la prostitución infantil, en parte debido a la falta de supervisión legal, y de que los niños que son víctimas de riesgo de explotación sexual comercial sean considerados delincuentes.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la prostitución es una de las formas de trabajo infantil a que apunta el Programa de Acción de los interlocutores sociales para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión también toma nota de la información contenida en el informe del Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, de 28 de mayo de 2010, según la cual las niñas adolescentes del país son especialmente vulnerables a la explotación sexual comercial en las zonas urbanas, procediendo la mayoría de las niñas implicadas de las zonas rurales (documento A/HRC/14/22/Add.2, párrafo 35). *Tomando nota de la ausencia de información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones del Código Penal relacionadas con la prostitución infantil, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique esta información, en particular las estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas, investigaciones, procesamiento, condenas y sanciones aplicadas. También solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños utilizados, reclutados u ofrecidos para su explotación sexual comercial, sean tratados como víctimas y no como delincuentes. Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si la legislación nacional contiene disposiciones que penalicen específicamente al cliente que utiliza niños menores de 18 años de edad con fines de prostitución.*

Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en la agricultura. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 294 del Código del Trabajo, prohíbe el empleo de personas menores de 18 años de edad en trabajos en condiciones perjudiciales y peligrosas (incluida la manufactura de tabaco), y de que se aprobó una lista detallada de las ocupaciones prohibidas a las personas menores de 18 años. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que está extendido el recurso al trabajo peligroso infantil en el sector de la agricultura, en particular en los campos de tabaco, arroz y algodón, y de que en las zonas rurales no se aplica estrictamente la reglamentación que prohíbe la ocupación de niños en esos trabajos. En ese sentido, la Comisión toma nota de la declaración contenida en un informe de 2006 de la Confederación Internacional de Organizaciones

Sindicales Libres (en la actualidad, la Confederación Sindical Internacional), titulado «Normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente en Kirguistán», según el cual algunas escuelas exigen que los niños participen en la cosecha del tabaco y que los ingresos derivados de la misma vayan directamente a las escuelas, y no a los niños o sus familias. Este informe también indicó que, en algunos casos, las clases se suspenden y los niños son enviados a los campos para recoger algodón. La Comisión toma nota asimismo de la información de la OIT/IPEC, según la cual muchos de los niños que trabajan en los campos de tabaco, arroz y algodón en las regiones de Osh y Jalalabat, hacen frente a riesgos relacionados con el trabajo, que incluyen lesiones derivadas del uso de equipos pesados, falta de agua potable en los campos, exposición a plaguicidas tóxicos, a picaduras de insectos y mordeduras de roedores, y a peligros relacionados con la producción de tabaco (irritación de la piel e intoxicación).

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el trabajo en los campos es una de las formas de trabajo infantil a que apunta el Programa de Acción de los interlocutores sociales para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el 19,7 por ciento de los niños que trabajan en el país están ocupados en el sector agrícola. Además, la Comisión toma nota de la continua aplicación de un proyecto dirigido a erradicar el trabajo infantil en la industria del tabaco, desarrollado por una organización no gubernamental y llevado a cabo por trabajadores sindicalizados del sector agroindustrial. El Gobierno declara que el objetivo del proyecto es idear e introducir un mecanismo para la eliminación del trabajo infantil en dos distritos piloto de la región meridional del país. A través de este proyecto, en 2011, se otorgó a 1 123 familias un microcrédito y se establecieron 131 grupos de asistencia mutua. El Gobierno declara que este proyecto permitió librar a 3 142 niños de los dos distritos del trabajo en la industria del tabaco. Además, la Comisión toma nota de la información de la OIT/IPEC, de julio de 2012, según la cual, a través del proyecto titulado «Combatir el trabajo infantil en Asia Central – Un compromiso en acción (PROACT CAR Fase III)», se adoptaron medidas para abordar el trabajo peligroso infantil en la agricultura. Por ejemplo, a través de un programa de acción para apoyar el establecimiento de una zona libre de trabajo infantil en la región de Chuy, aplicada por los Sindicatos de Trabajadores de Educación y Ciencia de Kirguistán (TUESWWK), durante el período comprendido entre junio de 2011 y agosto de 2012, 140 niños (75 niños y 65 niñas) fueron librados o impedidos de estar ocupados en un trabajo peligroso infantil en la agricultura y en el sector urbano informal. Además, 15 niños (seis niños y nueve niñas) fueron librados del trabajo peligroso infantil en la agricultura en los primeros seis meses de 2012, a través de un paquete de servicios escolar que incluye la educación no formal, la reintegración en la educación formal, suministros de útiles escolares, canastas de alimentos mensuales, actividades extracurriculares, sensibilización, actividades recreativas y asesoramiento familiar. *Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que las personas menores de 18 años de edad sean protegidas del trabajo agrícola peligroso, en particular en los sectores del algodón, del tabaco y del cultivo del arroz, y a que comunique información sobre los resultados obtenidos a través de las mencionadas iniciativas. También solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la reglamentación que prohíbe la participación de niños en trabajos agrícolas peligrosos, y que comunique, en su próxima memoria, información acerca de las medidas adoptadas a esta materia.*

Artículo 7, 2). *Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata de niños.* La Comisión tomó nota anteriormente de que existe una disparidad entre el número de víctimas de trata identificadas y el número de víctimas que reciben asistencia, y se solicitó al Gobierno que intensificara sus esfuerzos en ese sentido.

La Comisión toma nota de la información de la Organización Internacional para las Migraciones, según la cual está aplicando un proyecto titulado «Lucha contra la trata de personas en Asia Central: prevención, protección y desarrollo de capacidades» en el país, de 2009 a 2012, que incluye la sensibilización y la asistencia a las víctimas. La Comisión también toma nota de la aplicación en Kirguistán del Programa Conjunto para Combatir la Trata de Seres Humanos en Asia Central, de la OIT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con arreglo a la iniciativa global de la ONU de lucha contra la trata de seres humanos, que incluye el apoyo al desarrollo de mecanismos nacionales de remisión establecidos entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y las organizaciones de la sociedad civil. *La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas, incluso a través de estos proyectos, para prestar la asistencia necesaria y directa adecuada para librar a los niños víctimas de trata y para su rehabilitación e inserción social. También solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos, incluido el número de víctimas de trata menores de 18 años de edad que se hayan beneficiado de la repatriación y de la asistencia para la rehabilitación.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Democrática Popular Lao

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. *Edad mínima de admisión al empleo y determinación de los trabajos peligrosos.* La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 102 de la Ley de Enmienda de la Ley del Trabajo de 2013, la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad se especificará de manera separada. La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el decreto ministerial sobre la lista de trabajos peligrosos para los jóvenes se adoptó en 2016. Su artículo 3 contiene una lista exhaustiva de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, tales como los trabajos en los que se manejan sustancias químicas y venenosas, los trabajos en los que se corre el riesgo de infección de enfermedades transmisibles, los trabajos con útiles cortantes, los trabajos en la industria del tabaco y otros. Además, la Comisión toma nota de que, con arreglo a su artículo 6, los individuos o entidades jurídicas que infrinjan este decreto serán considerados responsables tanto en los procedimientos civiles como en los procedimientos penales, en función de la gravedad de la infracción. *La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del decreto ministerial sobre la lista de tipos de trabajos*

peligrosos para los jóvenes, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones relacionadas con jóvenes que realizan trabajos peligrosos, así como sobre las sanciones impuestas.

Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que, con arreglo al artículo 101 de la Ley de Enmienda de la Ley del Trabajo de 2013, los niños de entre 12 y 14 años de edad pueden ser empleados para realizar trabajos ligeros que no tengan un impacto negativo sobre su salud física y mental y no perjudiquen su asistencia a la escuela o su participación en programas de formación profesional. También tomó nota de que en un reglamento separado se establecería una lista de tipos de trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el decreto ministerial sobre la lista de los trabajos ligeros para los jóvenes se adoptó en 2016. Con arreglo a sus artículos 1 y 2, los niños de entre 12 y 14 años pueden realizar trabajos ligeros que no sean nocivos para su desarrollo físico, moral o mental, ni para su educación. En su artículo 3 figura una lista exhaustiva de los tipos de trabajos ligeros permitidos en los servicios, la industria, la artesanía y la agricultura. El artículo 4 establece que los niños no pueden trabajar más de dos horas al día durante los días escolares ni más de seis horas al día durante las vacaciones. Además, los niños no deberán realizar horas extraordinarias, trabajos entre las 18 y las 6 horas ni otros tipos de trabajos especificados en el artículo 5.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Trata y explotación sexual comercial. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual está adoptando medidas para aplicar la Ley contra la Trata de Seres Humanos, de 2015, a efectos de combatir la trata y la explotación sexual comercial infantil. La Comisión toma nota del tercero y el sexto informes periódicos combinados, presentados por la República Democrática Popular Lao, en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 25 de octubre de 2017 (informes periódicos combinados, con arreglo al CDN), según los cuales la Ley contra la Trata de Seres Humanos impone una sentencia de 15 a 20 años de reclusión y una multa de delitos por trata, cuando las víctimas son niños (documento CRC/C/LAO/3-6, párrafo 188). Este informe también indica que, desde 2013 a 2015, el Ministerio de Seguridad Pública recibió 78 denuncias que implicaban a 125 niños víctimas de trata (58 niñas) que redundaron en 35 condenas. La Comisión también toma nota del informe de la Comisión nacional para la promoción de la mujer y de las madres-hijos (NCAW-MC), sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC), de 5 de junio de 2018 (informe NCAW-MC, sobre el OPSC), según el cual, de conformidad con los registros del Tribunal Supremo Popular, son 269 los casos de implicados en la trata de niños, en 2016, habiéndose dado 264 de esos casos en 2017. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CDN), en sus observaciones finales sobre el informe de la República Democrática Popular Lao, en virtud del OPSC, de 3 de julio de 2015, expresó su preocupación por el gran número de casos de trata y de explotación de niños que no conducen a ninguna condena, debido a acuerdos extrajudiciales tradicionales en las aldeas y el incumplimiento de la aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales. El CDN también expresó su preocupación de que sea raro el enjuiciamiento de traficantes extranjeros y de que la impunidad siga siendo generalizada, sobre todo debido a la corrupción y a la presunta complicidad de los funcionarios encargados del orden público y de los funcionarios judiciales y de inmigración (documento CRC/C/OPSC/LAO/CO/1, párrafo 31). *La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que, en la práctica, se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos a las personas dedicadas a la trata de niños, incluidos los nacionales, extranjeros y los funcionarios del Estado sospechosos de complicidad, y a que se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones penales que se aplican al delito de trata de personas menores de 18 años de edad, de conformidad con las disposiciones de la Ley contra la Trata de Seres Humanos.*

Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. Explotación sexual comercial de niños. La Comisión toma nota de los informes periódicos combinados, con arreglo al CDN, según los cuales se introdujo, en la República Democrática Popular Lao, una iniciativa titulada «Proyecto Infancia», financiada por *Australian AID* para combatir la explotación sexual de niños, especialmente en el sector de viajes y turismo, en la región del Gran Mekong. Con arreglo a este proyecto, se desarrollaron algunos materiales educativos para el sector del turismo, los representantes de la comunidad, los padres y los tutores de niños y jóvenes. Además, se realizaron sesiones y talleres de formación con los grupos de interés pertinentes, incluida la policía comunitaria. La Comisión también toma nota del informe NCAW-MC sobre el OPSC, de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, incluido el desarrollo de reglamentaciones sobre la administración de hoteles y albergues, así como medidas dirigidas a supervisar el cumplimiento de esas reglamentaciones, a través de inspecciones, talleres de sensibilización sobre la prostitución infantil, y la distribución de cuadernillos, afiches y folletos para los hoteles y los centros de entretenimiento, de cara a la protección de mujeres y niños. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el CDN, en sus observaciones finales en virtud del OPSC, expresó su gran preocupación por que los niños fueran explotados sexualmente por pedófilos extranjeros y por la incapacidad del Gobierno para abordar con eficacia la cuestión (documento CRC/C/OPSC/LAO/CO/1, párrafo 27). *La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas efectivas en un plazo determinado para proteger a los niños de convertirse en víctimas de una explotación sexual*

comercial en el sector del turismo. A este respecto, solicita al Gobierno que sigan adoptando medidas con miras a una mayor sensibilización de los actores directamente relacionados con la industria del turismo, como las asociaciones de propietarios de hoteles, operadores turísticos, asociaciones de conductores de taxis, así como los propietarios de bares y restaurantes y sus empleados, sobre el asunto de la explotación sexual comercial. También solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas en este sentido y los resultados obtenidos, incluido el impacto de la iniciativa Proyecto Infancia en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Lesotho

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2015.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional elaborada para garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el proyecto de Plan de Acción para Eliminar el Trabajo Infantil (APEC) estaba en proceso de adopción.

La Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno ha adoptado el APEC 2013-2017. La Comisión toma nota de que el objetivo general del APEC es reducir la incidencia del trabajo infantil a menos del 1 por ciento para 2016, y establecer al mismo tiempo una sólida base institucional y de políticas para eliminar a largo plazo todas las demás formas de trabajo infantil. *La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas concretas adoptadas en el marco del APEC para la eliminación del trabajo infantil, así como sobre los resultados obtenidos.*

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. Empleo por cuenta propia y trabajo en la economía informal. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que las disposiciones del Código del Trabajo excluyen a los trabajadores por cuenta propia de su ámbito de aplicación.

La Comisión toma nota del documento del APEC de que el proyecto de enmienda del Código del Trabajo, actualmente en su fase final de adopción, aborda una serie de preocupaciones relativas al trabajo infantil, incluido el fortalecimiento de la protección de los niños que trabajan en la economía informal y la extensión de los servicios de la inspección del trabajo a este sector de la economía. La Comisión también toma nota de que el Ministerio de Trabajo y Empleo estableció una Unidad de Trabajo Infantil, cuyo cometido es prestar asistencia en la protección de los niños que trabajan en la economía informal. Además, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales, en febrero de 2015, los ministros competentes, junto con algunas ONG emprendieron la misión de retirar del trabajo a los niños que trabajan en el sector informal de la economía en el centro empresarial del distrito de Leribe. La mayoría de esos niños fueron matriculados en escuelas o se reunieron con sus familias. Sin embargo, la Comisión toma nota del informe de la recopilación de noviembre de 2014, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal, de que según señaló el equipo de las Naciones Unidas en el país, seguía empleándose a niños en el servicio doméstico, en la venta ambulante y en la agricultura (documento A/HRC/WG.6/21/LSO/2, párrafo 43). Además, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), en su lista de cuestiones de septiembre de 2014, expresó preocupación por el elevado número de niños que trabajaban en el pastoreo, la venta ambulante y el trabajo doméstico (documento CMW/C/LSO/QPR/1, párrafo 29). *En consecuencia, la Comisión alienta enérgicamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar que la protección garantizada por el Convenio se proporcione a los niños que realizan actividades laborales sin un contrato de trabajo, incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y en la economía informal. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Trabajo Infantil para prestar asistencia en la protección de los niños que trabajan en la economía informal y sobre los resultados obtenidos. Asimismo, pide al Gobierno que informe sobre todo progreso realizado respecto de la adopción del proyecto de enmienda del Código del Trabajo, que incluye disposiciones que protegen a los niños que trabajan en la economía informal y extiende los servicios de la inspección del trabajo a la economía informal.*

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud de la Ley sobre la Educación, de 2010, la edad de finalización de la enseñanza primaria en Lesotho es a los 13 años, dos años antes de que un niño pueda empezar a trabajar legalmente (15 años). Además, tomó nota de que el Gobierno preveía que la educación fuese obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir 15 años de edad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, está trabajando para que la educación sea gratuita y obligatoria en el nivel secundario. La Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). *Recordando una vez más que la educación es uno de los métodos más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la educación obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir a los 15 años de edad. Además, pide al Gobierno que facilite información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido, incluidas las medidas tomadas en el marco del APEC.*

Artículo 6. Edad mínima de admisión al aprendizaje. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según el Gobierno, no existe una edad mínima para la admisión al aprendizaje. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que había establecido un comité para abordar la cuestión del aprendizaje, formado por representantes del Departamento de Trabajo, el Ministerio de Género y Juventud y el Ministerio de Educación y Formación, e interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 6 del Convenio, la edad mínima de admisión al trabajo en empresas en el contexto de la formación profesional o de un programa de aprendizaje no puede ser inferior a los 14 años. *Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en el marco del comité establecido*

para abordar esta cuestión, para garantizar que ningún niño de menos de 14 años de edad pueda realizar un aprendizaje en una empresa. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Encuesta sobre el Trabajo Infantil prevista, que incluye un módulo relativo al trabajo infantil, se llevará a cabo y que la información relativa a ese tipo de trabajo estará disponible en 2017. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la Encuesta sobre el Trabajo Infantil tal como estaba previsto. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la encuesta en relación con la situación de los niños que trabajan en Lesotho, incluyendo, por ejemplo, información sobre el número de niños y jóvenes de edades inferiores a la edad mínima ocupados en actividades económicas, y estadísticas acerca de la naturaleza, alcance y tendencias del trabajo que éstos realizan.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefacientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los niños de la calle son utilizados por adultos para la realización de actividades ilegales tales como el penetrar en un domicilio por efracción y los pequeños hurtos. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la realización de actividades ilícitas.

La Comisión toma nota con *interés* de que en virtud del artículo 45, b), de la Ley sobre Protección y Bienestar de los Niños, de 2011, la persona que cause o permita que un niño (definido, según el artículo 3 de la misma ley como una persona menor de 18 años de edad) se encuentre en cualquier calle, local o lugar a efectos de dedicarse a la venta ambulante ilegal, juegos de dinero o de azar ilegales u otras actividades ilegales, podrá ser sancionada con una multa por una cuantía no superior a 10 000 maloti (aproximadamente 722 dólares de los Estados Unidos) o a una pena de reclusión por un período no mayor de diez meses o a ambas penas a la vez. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación del artículo 45, b), de la Ley sobre Protección y Bienestar de los Niños, incluyendo el número de infracciones observadas en relación con la utilización de menores de 18 años de edad para realizar actividades ilegales y las sanciones impuestas.**

Apartado d). Trabajos peligrosos. Trabajo doméstico infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de que las niñas que realizan trabajos domésticos tienen que hacer frente a abusos verbales, físicos y, en algunos casos sexuales de sus empleadores, y en general esas niñas no asisten a la escuela. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señaló que examinará la posibilidad de promulgar un reglamento sobre el trabajo doméstico a fin de prohibir que los niños menores de 18 años realicen trabajos peligrosos.

La Comisión tomó nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de la recopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destinada al Examen Periódico Universal de que el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que seguía empleándose a niños en el servicio doméstico (documento A/HRC/WG.6/21/LSO/2, párrafo 42). Además, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW), en su lista de cuestiones, de septiembre de 2014, expresó preocupación por el elevado número de niños ocupados en el trabajo doméstico (documento CMW/C/LSO/QPR/1, párrafo 29). **Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar la protección de los niños trabajadores domésticos de los trabajos peligrosos. A este respecto, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la elaboración y adopción de un reglamento que prohíba que todos los niños menores de 18 años de edad realicen trabajos domésticos peligrosos. La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de este reglamento una vez que haya sido adoptado.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños ocupados en el pastoreo de animales. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los niños ocupados en el pastoreo de animales trabajan a menudo en condiciones deficientes durante largas jornadas y durante la noche, sin alimentación ni vestimenta adecuadas, están expuestos a condiciones climáticas extremas en zonas aisladas, y no asisten a la escuela. La Comisión también tomó nota de que entre el 10 y el 14 por ciento de los niños en edad escolar ocupados en el pastoreo, cerca del 18 por ciento de ellos no están empleados por su propia familia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha adoptado directrices para el sector agrícola, con especial atención en los niños pastores. Con arreglo a las directrices, los niños menores de 13 años no deberían encargarse del pastoreo de rebaños, salvo bajo la supervisión de familiares, empleadores o de un adulto, y se prohíbe que los niños menores de 15 años estén ocupados en el pastoreo en zonas alejadas. Las directrices también requieren que se suministre a los niños pastores una vestimenta adecuada a las extremas condiciones climáticas, alimentación y asistencia médica adecuada, así como también alojamiento seguro y apropiado. Además, sus horas de trabajo no deberán superar las 21 horas durante la semana escolar, no deberán trabajar más de 30 horas durante las vacaciones escolares, y se prohíbe el trabajo nocturno. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas eficaces y en un plazo determinado para garantizar que los niños ocupados en trabajos peligrosos en el pastoreo de animales sean librados de ésta, una de las peores formas de trabajo infantil y se asegure su rehabilitación e inserción social. A este respecto, pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de las directrices para el sector agrícola y los resultados obtenidos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Líbano

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) **(ratificación: 2003)**

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo sólo se aplica al trabajo realizado con arreglo a una relación de empleo (en virtud de los artículos 1, 3 y 8 del Código). La Comisión recordó que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y comprende todos los tipos de empleo o de trabajo, se lleven o no a cabo en base a una relación de empleo y sean o no remunerados. La Comisión también tomó nota de que, en virtud del capítulo 2, artículo 15, de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, pareciera que el empleo o el trabajo de los jóvenes también incluiría las formas no tradicionales de relación de empleo. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de una ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este punto. ***Considerando que el Gobierno ha venido refiriéndose a los proyectos de enmienda al Código del Trabajo durante algunos años, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopten, en un futuro próximo, las enmiendas al Código del Trabajo relacionadas con los niños que trabajan por cuenta propia en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de las nuevas disposiciones, en cuanto se hayan adoptado.***

Artículo 2, 2). Elevación de la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el momento de la ratificación del Convenio, el Líbano declaró en 14 años la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo y que la ley núm. 536, de 24 de julio de 1996, que enmienda los artículos 21, 22 y 23 del Código del Trabajo, prohíbe el empleo de jóvenes antes de los 14 años. La Comisión también tomó nota de la intención del Gobierno de elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 15 años de edad y de que los proyectos de enmienda al Código del Trabajo incluirían una disposición en este sentido (artículo 19). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo sobre la edad mínima para el empleo o el trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se han tenido en cuenta los comentarios de la Comisión en los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. Los proyectos también se presentaron al Consejo de Ministros para su examen. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo respecto de la edad mínima para el empleo o el trabajo.***

Artículo 2, 3). Educación obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la edad límite para la educación obligatoria es de 12 años de edad (ley núm. 686/1998 relativa a la educación primaria gratuita y obligatoria). La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se remitió al Consejo de Ministros para su examen un proyecto de ley dirigido a elevar la edad mínima de la educación obligatoria a los 15 años. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara los progresos realizados en este sentido.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo tuvo en cuenta los comentarios de la Comisión insertados en los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifiesta su preocupación ante el número de niños, especialmente de niños refugiados, que no asisten a la escuela o que han abandonado la escuela, debido a la capacidad insuficiente de la infraestructura educativa, la falta de documentación, la presión para trabajar a efectos de ayudar a sus familias, entre otras razones (documento E/C.12/LBN/CO/2, párrafo 62).

A este respecto, la Comisión recuerda la necesidad de vincular la edad de admisión al empleo con la edad límite para la educación obligatoria. Si las dos edades no coinciden, pueden surgir varios problemas. Si la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo es inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria, es posible que los niños se vean animados a abandonar los estudios, ya que los menores obligados a asistir a la escuela también pueden trabajar legalmente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 370). Tomando nota de que la intención del Gobierno es elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a los 15 años, la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 2, 3), del Convenio, la edad mínima de admisión al empleo (en la actualidad, 14 años) no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. ***Por consiguiente, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 15 años, y a que prevea la educación obligatoria hasta esta edad mínima, en el marco de la adopción de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de las nuevas disposiciones, en cuanto se hayan adoptado.***

Artículo 6. Formación profesional y aprendizaje. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual los proyectos de enmienda al Código del Trabajo (artículo 16) fijan la edad mínima para recibir una formación profesional con arreglo a un contrato, en los 14 años. La Comisión expresó la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, una disposición con arreglo a los proyectos de enmienda.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se adoptará el artículo 16 junto con los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. El Gobierno también indica que el Centro Nacional para la Formación Profesional se ocupa de llevar a cabo la formación profesional y el aprendizaje. ***La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el artículo 16 de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, que fija una edad mínima de 14 años para el ingreso en el aprendizaje, de conformidad con el artículo 6 del Convenio.***

Artículo 7. Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 19 de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, el empleo o el trabajo de jóvenes en trabajos ligeros, puede autorizarse a partir de los 14 años de edad en determinadas condiciones (excepto en los diferentes tipos de trabajo industrial en los que no está autorizado el empleo o el trabajo de jóvenes menores de 15 años de edad). La Comisión también tomó nota de que las actividades laborales ligeras se determinarían mediante una orden del Ministerio de Trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todo progreso realizado en ese sentido.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual solicitó que se incluyeran los trabajos ligeros en el proyecto de la OIT/IPEC en curso, «*Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon*» (proyecto CLEAR), y se celebraron algunas reuniones al respecto. Una vez iniciado el proyecto CLEAR, el Gobierno indica que podrá preparar un texto legislativo sobre los trabajos ligeros, de conformidad con las normas internacionales pertinentes. **La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la formulación y la adopción de un estatuto que determine las actividades laborales ligeras, incluyéndose el número de horas durante las cuales pueden realizarse trabajos ligeros y en qué condiciones. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos logrados.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 3, 7, 1) y 2), b), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil, sanciones y asistencia directa para la rehabilitación e inserción social. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley contra la Trata núm. 164, de 2011. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación de la ley en la práctica.

La Comisión toma nota de la información estadística relacionada con la trata de niños aportada por el Gobierno en su memoria. Toma nota de que, en 2014, se identificó a cinco niños víctimas de trata para su explotación laboral (mendicidad callejera), y a un niño víctima de trata para su explotación sexual. Según la indicación del Gobierno, todos los niños víctimas identificados fueron derivados a centro sociales y de rehabilitación, como el centro de acogida «Beit al Aman» en colaboración con Cáritas. El Gobierno también indica que, en 2014, el Consejo Superior de la Infancia elaboró un proyecto de plan de acción sectorial sobre la trata de niños, que se encuentra aún en la fase de consulta con los grupos de interés pertinentes.

La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, recomendó al Gobierno que brindara a jueces, fiscales, policía de fronteras, autoridades de inmigración y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una capacitación obligatoria que tuviera en cuenta las cuestiones de género, a efectos de garantizar la estricta aplicación de la ley núm. 164 para combatir la trata, enjuiciando sin demora todos los casos de trata de mujeres y niñas (documento CEDAW/C/LBN/CO/4-5, párrafo 30, a)). **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de plan de acción sectorial sobre la trata de niños y que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 164, de 2011, incluyéndose la información estadística sobre el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas por el delito de trata de niños. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada para impedir la trata de niños, así como las medidas adoptadas para garantizar que se brinde a los niños víctimas de trata los servicios de rehabilitación y reinserción adecuados.**

Apartados b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 33, b) y 33, c), de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas y para actividades ilícitas está sancionado por el Código Penal, además de las sanciones impuestas por el Código del Trabajo. También tomó nota de que el artículo 3 del anexo núm. 1, del decreto núm. 8987, de 2012, sobre los trabajos peligrosos, prohíbe esas actividades ilícitas para los menores de 18 años de edad. La Comisión tomó nota de la información estadística, desglosada por género y edad, comunicada por el Gobierno sobre el número de niños dedicados a la prostitución, de 2010 a 2012.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Inspección del Trabajo es el organismo responsable de la supervisión de la aplicación del decreto núm. 8987. La Comisión toma nota con **preocupación** de que, según la indicación del Gobierno, no se detectó, hasta el momento, ningún caso relacionado con la aplicación del decreto. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar la aplicación en la práctica de las disposiciones del decreto núm. 8987, de 2012, que prohíben la ocupación de niños en la prostitución o con fines pornográficos o para actividades ilícitas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información estadística sobre los enjuiciamientos iniciados y condenas pronunciadas respecto de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.**

En cuanto a los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, sin demora, las medidas necesarias para garantizar la adopción de las disposiciones que prohíben la utilización, el reclutamiento o la oferta de personas menores de 18 años de edad para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas, y la utilización, el reclutamiento o la oferta de personas menores de 18 años de edad para actividades ilícitas, así como de la adopción de las disposiciones que establecen las sanciones correspondientes.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. 1. Niños refugiados. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas dentro del programa de trabajo de NAP-WFCL para los niños palestinos que trabajan, a efectos de protegerlos de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se adoptó ninguna nueva medida, debido a la situación política y de seguridad del país. La Comisión también toma nota de que, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de 2016, titulado *Missing out: Refugee Education in Crisis*, son más de 380 000 los niños refugiados de edades entre 5 y 17 años registrados en el Líbano. Se estima que menos del 50 por ciento de los niños de escolaridad primaria tienen acceso a escuelas primarias públicas y menos del 4 por ciento de los adolescentes tienen acceso a escuelas secundarias públicas. El informe destaca que, desde 2013, el Gobierno ha venido introduciendo un sistema de dos turnos en las escuelas públicas, para impulsar la inscripción de los niños refugiados. Aproximadamente, 150 000 niños entraron en este sistema. También toma nota del informe de la OIT titulado «*ILO response to the Syrian Refugee crisis in Jordan*

and Lebanon», de marzo de 2014, según el cual muchos niños refugiados trabajan en condiciones peligrosas en el sector agrícola y en el sector urbano informal, en la venta ambulante o en la mendicidad. ***Al tiempo que reconoce la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los niños refugiados (en particular, sirios y palestinos) de las peores formas de trabajo infantil y para brindar la asistencia directa necesaria y adecuada para librarlos y para su rehabilitación e inserción social. Solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de niños refugiados que se han beneficiado de algunas iniciativas tomadas en ese sentido, en lo posible, desglosado por edad, género y país de origen.***

2. *Niños en situación de calle.* La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Asuntos Sociales adoptó una serie de medidas para abordar la situación de los niños de la calle, que incluyen: i) actividades de sensibilización, a través de la educación, de los medios de comunicación y de campañas publicitarias; ii) formación de algunos actores/agentes de la protección social que trabajan en instituciones de protección de los niños; iii) actividades de rehabilitación para algunos niños de la calle y su reinserción en sus familias, y iv) en el marco de la Estrategia de reducción de la pobreza (2011-2013), se eligió a 36 575 familias para que se beneficiaran de los servicios básicos sociales gratuitos, como el acceso a la educación pública obligatoria y gratuita, y de los servicios médicos. El Gobierno también indica que aún no se aplicó el proyecto de 2010 «Strategy for Protection, Rehabilitation and Integration of Street Children», pero que se encuentra en el proceso de revisión.

La Comisión toma nota de que el estudio de 2015 «Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude» (OIT-UNICEF, Save the Children International) aporta información estadística detallada sobre el fenómeno de los niños en situación de calle en 18 distritos del Líbano. La Comisión también toma nota de que el informe comprende algunas recomendaciones, que incluyen: i) la aplicación de la legislación pertinente; ii) la reinserción de los niños en situación de calle en la educación y el suministro de servicios básicos, y iii) la intervención en el plano de los hogares para la realización de actividades de prevención. La Comisión observa asimismo que, a pesar de que el trabajo en la calle de los niños es una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, en virtud del decreto núm. 8987 sobre formas peligrosas de trabajo infantil, de 2012, sigue siendo aún prevalente, habiéndose detectado que 1 510 niños en total viven o trabajan en las calles. Además, La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, recomendó que el Gobierno aumentara los recursos, con el fin de suministrar los servicios preventivos y de rehabilitación necesarios para los niños de la calle y de aplicar la legislación vigente dirigida a combatir el trabajo infantil (documento E/C.12/LBN/CO/2, párrafo 45). ***Recordando que los niños de la calle son especialmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a estos niños, y a que prevea su rehabilitación y reinserción social. La Comisión insta asimismo al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para aplicar activamente el proyecto de estrategia de 2010 titulado «Strategy for Protection, Rehabilitation and Integration of Street Children», en cuanto se haya revisado, y a que informe sobre los resultados obtenidos. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de niños de la calle a quienes se han brindado oportunidades educativas y servicios de reinserción social.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Liberia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículo 4, 1), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su firme esperanza de que se adoptaría próximamente la Ley de Trabajo Decente que contiene una disposición que prohíbe la ocupación de niños menores de 18 años en tipos de trabajos peligrosos. Expresó asimismo su confianza en que se elaboraría una reglamentación que especifique los tipos y procesos de trabajo peligroso prohibidos a los menores de 18 años de edad tras realizar consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

La Comisión toma nota con *interés* de que se ha promulgado la Ley de Trabajo Decente de 2015. Toma nota de que el capítulo 21, artículo 21.4, a), de la Ley de Trabajo Decente prohíbe el empleo de niños menores de edad de 18 años en los tipos de trabajo peligroso enumerados en virtud del párrafo 2 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190). El artículo 21.4, b), establece además que el Ministro podrá, dentro del plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, dictar reglamentos en los que se especifiquen otros tipos de trabajos que puedan ser prohibidos a los niños y determine los procesos, las temperaturas, los niveles de ruido o de vibración que puedan perjudicar la salud de los niños. En este sentido, la Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual la comisión para la reforma de la legislación ha elaborado un proyecto de lista con los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños y que están en curso rondas de consultas con las partes interesadas para ultimar dicha lista. ***La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de lista de tipos de trabajo peligroso prohibidos a los niños menores de 18 años de edad será ultimada y adoptada a la mayor brevedad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión tomó nota anteriormente de la recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (documento A/HRC/WG.6/22/LBR/2, de 23 de febrero de 2015) con arreglo a la cual, según el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), en Liberia la brecha de género se manifiesta en la educación, y las tasas

de analfabetismo entre las mujeres y las niñas son especialmente altas con un 60 por ciento. Tomó nota asimismo de que en este informe de recopilación el Equipo de las Naciones Unidas en Liberia expuso que, debido al brote de la enfermedad por el virus del ébola, en junio de 2014 se había decretado la clausura de las escuelas y que alrededor de 1 400 000 alumnos se habían visto obligados a permanecer en el hogar. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema educativo y redoblara sus esfuerzos para que los niños volvieran a las escuelas, que se adoptaran medidas también para aumentar las tasas de matriculación y de finalización escolar en los niveles de la enseñanza primaria y secundaria, y proporcionara información a este respecto.

La Comisión toma nota de la aclaración del Gobierno de que, desde el último caso registrado de ébola en 2015, se han adoptado las medidas cautelares pertinentes, se han reabierto las escuelas y se ha alentado a los niños a volver a ellas. El Gobierno señala que se han puesto en marcha mecanismos más adecuados para mantener a los niños en las escuelas y lejos del trabajo infantil. En este sentido, la Comisión toma nota de la información que figura en la publicación titulada: *Education in Liberia-Global Partnership for Education (La educación en Liberia, por la Alianza Mundial para la Educación)*, según la cual con el fin de hacer frente a las dificultades que se presentan en el sector educativo en relación con la reconstrucción y recuperación de las consecuencias de la guerra civil, la retracción de las finanzas nacionales, infraestructuras deficientes y la epidemia del ébola, el Gobierno ha desarrollado una respuesta estratégica a través del plan sectorial «Mejorar la educación entre 2017 y 2021». Este plan consiste en nueve programas destinados a: i) mejorar la eficiencia y la gestión del sistema educativo; ii) mejorar el acceso a una educación infantil de calidad; iii) proporcionar educación alternativa de calidad a los niños de más edad y que han abandonado la escuela; iv) impulsar la formación en materia de género y de salud en las escuelas en todo el sector educativo, y v) mejorar la calidad y la pertinencia de la formación profesional y técnica. La Comisión toma nota, no obstante, de que según las estadísticas de la UNESCO, en 2016, se registró una tasa neta de matriculación escolar de un 36,75 por ciento en la enseñanza primaria y de un 10,37 por ciento en la enseñanza secundaria. Además, 572 439 niños y adolescentes abandonaron la escuela en 2016. La Comisión toma nota con *preocupación* de las bajas tasas de matriculación escolar en la enseñanza primaria y secundaria y el elevado número de niños que han abandonado la escuela. ***Teniendo en cuenta que la educación es esencial para impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y facilitar el acceso de todos los niños a una enseñanza básica gratuita, en particular a través del plan sectorial «Mejorar la educación entre 2017 y 2021». La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas que ha adoptado o tiene previsto adoptar en este sentido, destinadas en particular a aumentar la matriculación escolar y las tasas de asistencia en la enseñanza primaria y secundaria y reducir las tasas de abandono escolar, así como que proporcione informaciones de estadísticas actualizadas sobre los resultados obtenidos, desglosadas por género y edad.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Libia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota del minucioso debate que tuvo lugar en la 106.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, celebrada en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio por parte de Libia.

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Todas las formas de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para conflictos armados y sanciones penales. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del informe sobre la investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Libia (documentos A/HRC/31/47 y A/HRC/31/CRP.3, conclusiones detalladas), del 15 de febrero de 2016 (informe de investigación de la OACDH), según el cual se recibió información de que grupos armados leales al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) reclutaban forzosamente a niños y los utilizaban en las hostilidades. Se había sometido a estos niños a formación religiosa y militar (enseñándoles a usar y cargar armas, y a apuntar y disparar a objetivos con balas de verdad) y se les había obligado a mirar vídeos de decapitaciones y utilizado para detonar bombas, y además habían sido víctimas de abusos sexuales. En este informe, haciendo referencia a otro informe, se indica que el «Estado Islámico» en Sirte celebró la graduación de 85 varones menores de 16 años, describiéndolos como los «Cachorros del Khilapha», a los que se entrenó para perpetrar ataques suicidas.

La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE, según las cuales la situación de los niños afectados por el conflicto armado en el país era deplorable y que el reclutamiento de niños para usarlos en la guerra, sometiéndolos a formación religiosa y militar, era un desastre para ellos tanto en ese momento como en el futuro.

La Comisión toma nota de que el representante del Gobierno de Libia, durante la discusión en la reunión de la Comisión de la Conferencia, al tiempo que reconoció la grave crisis política y la escalada de violencia desde 2011, afirmó

que su Gobierno, representado por la Presidencia del Consejo del Gobierno de Acuerdo Nacional, detectó la posición del EIIL en Sirte el 6 de diciembre de 2016 y liberó oficialmente la ciudad, que había permanecido bajo el control del EIIL durante más de año y medio. De esa manera, se puso fin a las prácticas del EIIL contra los niños, en particular su reclutamiento forzoso para operaciones militares y la prohibición de asistir a la escuela.

Asimismo, la Comisión observa que, en la reunión de la Comisión de la Conferencia, los miembros trabajadores recordaron que Libia seguía sufriendo un conflicto armado y que la proliferación de grupos armados había llevado a graves infracciones y abusos, como el reclutamiento forzoso y el uso de niños por parte de diversos grupos armados leales al EIIL. La miembro trabajadora de Libia añadió que esos niños a los que reclutaban los grupos armados eran trasladados a campos en Turquía, cerca de la frontera con Siria, donde recibían entrenamiento para el combate con el respaldo financiero de los Estados que apoyan el terrorismo y lo exportan.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia se mostró consternada ante la situación de los niños sometidos a formación militar y religiosa por los grupos armados leales al EIIL que los reclutaban por la fuerza.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, tras la expulsión del EIIL de Sirte y sus afueras, se elaboró un plan de estabilización posterior al conflicto para esta ciudad bajo la supervisión del Consejo de la Presidencia. Además, los organismos de seguridad libios adoptaron, bajo los auspicios del Ministerio de Interior, medidas para evitar que se captara o entrenara a niños para participar en actividades delictivas y se impusieron sanciones graves a las personas involucradas en dichos actos. Asimismo, a principios de 2017, el UNICEF, en colaboración con autoridades municipales, lanzó una campaña nacional, «Juntos en pro de los niños», para garantizar que los niños no se vean envueltos en conflictos armados.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que en el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, del 16 de mayo de 2018 (A/72/865-S/2018/465) se señala que se siguen notificando casos de uso de niños por grupos armados. En octubre de 2017, fueron liberados 125 adolescentes que habían estado vinculados con grupos armados en el municipio de Zintan. La Comisión constata además que el Secretario General expresó su preocupación ante los casos de violencia sexual y otros abusos cometidos contra niños, como su uso en conflictos armados y la trata de la que son objeto. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su **profunda preocupación** por el uso y el reclutamiento reiterados de niños por grupos armados y la situación actual de los niños envueltos en el conflicto armado en Libia, en especial porque esto conlleva otras violaciones de los derechos de los niños, como secuestros, asesinatos y actos de violencia sexual. **Al tiempo que reconoce la difícil situación reinante en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome urgentemente las medidas necesarias para garantizar la desmovilización completa de todos los niños y poner fin, en la práctica, al reclutamiento por grupos armados de niños menores de 18 años. Asimismo, insta al Gobierno a que continúe adoptando medidas inmediatas y efectivas para asegurar que se lleven a cabo investigaciones minuciosas y se persiga a todas las personas que hayan reclutado a la fuerza a niños de menos de 18 años para usarlos en el conflicto armado, y que se impongan penas suficientemente eficaces y disuasorias. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas que se tomen a este respecto y acerca de los resultados que se obtengan.**

Artículo 7, 2). *Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita.* La Comisión tomó nota de que en el informe de investigación de la OACDH se indicó que el acceso a la educación se había reducido considerablemente a causa del conflicto armado, en particular en el este del país (por ejemplo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estimó, en septiembre de 2015, que no funcionaba el 73 por ciento de las escuelas de Bengasi). Las escuelas estaban o bien dañadas, destruidas, ocupadas por desplazados internos, convertidas en instalaciones militares o de detención, o el acceso a éstas era peligroso. Además, en muchas zonas en que las escuelas seguían abiertas, los padres se abstendían de enviar a sus hijos a la escuela por temor a que sufrieran lesiones durante los ataques, y en especial a que los grupos armados atacaran, acosaran o secuestraran a las niñas. Además, en las zonas controladas por grupos leales al EIIL, se denunció que no se permitía a las niñas asistir a la escuela o se les permitía únicamente si llevaban un velo que les cubriera todo el rostro. También se indicaba en el informe que los niños que residían en campamentos para desplazados internos hacían frente a dificultades especiales de acceso a la educación.

La Comisión toma nota de que los miembros trabajadores afirmaron en la reunión de la Comisión de la Conferencia que el acceso de los niños a la educación se había visto muy limitado y afectado por el conflicto en Libia.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia condenó la situación de los niños, y en especial de las niñas, que se veían privados de educación debido a la situación que atravesaba el país, donde a pesar de que la enseñanza fuera obligatoria y gratuita, muchas escuelas habían resultado dañadas o se usaban como instalaciones militares o de detención, lo cual impedía que los niños asistieran a clase.

En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, tras la expulsión del EIIL, ha habido un aumento del número de niños matriculados en la escuela. Asimismo, toma nota de que el Gobierno, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ocupó del mantenimiento de varias escuelas y todas las escuelas abrieron a tiempo para recibir a los alumnos al comienzo del año escolar 2017-2018. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe del UNICEF sobre la situación humanitaria de septiembre de 2018, hay alrededor de 300 000 niños que no reciben educación. **Así, la Comisión insta al Gobierno a que tome medidas efectivas y en un plazo determinado para**

mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país y facilitar el acceso a la enseñanza básica de todos los niños, en especial las niñas, los niños de zonas afectadas por el conflicto armado y los niños desplazados internos. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas tomadas a este respecto y los resultados obtenidos.

Apartado b). Prestar la asistencia necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. *Niños en conflictos armados.* La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en Sirte, hay trabajadores sociales del Estado que participan en un proyecto de rehabilitación de niños que han sido soldados, que comprende asistencia médica y psicológica, así como su matriculación en programas educativos y de formación. Además, la campaña nacional del UNICEF «Juntos en pro de los niños» cubre la creación de centros de rehabilitación para reintegrar a los niños, en particular a los que han sido soldados, en la escuela y en su comunidad. Sin embargo, la Comisión constata que en el Informe del Secretario General (párrafo 107) se indica que en el marco de la lucha entre el Ejército Nacional Libio (ENL) y la Guardia de las Instalaciones Petroleras (GIP), el ENL arrestó y detuvo a varones de apenas 10 años durante un período de hasta siete semanas por su supuesta vinculación con la GIP. La Comisión expresa su **profunda preocupación** por la práctica de arrestar y detener a niños por su supuesta vinculación con fuerzas o grupos armados. A este respecto, la Comisión hace hincapié en que debe tratarse a los niños menores de 18 años vinculados con grupos armados como a víctimas y no como a infractores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 502). **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que los niños a los que se retira de fuerzas o grupos armados sean tratados como víctimas y no como infractores. Asimismo, insta al Gobierno a que siga tomando medidas efectivas y en un plazo determinado para retirar a los niños de fuerzas o grupos armados y asegurar su rehabilitación e inserción social. Pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto y acerca del número de niños a los que se retira de fuerzas y grupos armados y se reintegra.**

Habida cuenta del interés manifestado por el representante del Gobierno en recibir asistencia técnica, la Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica que presta la Oficina para facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Madagascar

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), adjuntos a la memoria del Gobierno.

Artículo 2, 1), del Convenio. Examen médico para el trabajo subterráneo de menores de 21 años en las minas y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que el artículo 82 de la resolución núm. 58-AR, de 8 de mayo de 1958, sobre la fijación de las reglas de seguridad aplicables en las minas y canteras establece que ningún obrero podrá ser destinado a trabajos subterráneos sin haber sido declarado previamente apto en un examen médico. Asimismo, la Comisión tomó nota de que los artículos 7, 8 y 9 de la orden núm. 2806, de 8 de julio de 1968, relativa a la organización de la medicina de empresa establecen, en particular, que el empleador tendrá que hacer efectuar visitas sistemáticas para realizar exámenes médicos periódicos y que, antes de ser contratado o como muy tarde dentro del mes siguiente a la contratación, todo trabajador deberá someterse obligatoriamente a un examen médico que lleve aparejada una radiografía pulmonar. Además, la Comisión había tomado nota de que en virtud del artículo 8 del decreto núm. 2003-1162, de 17 de diciembre de 2003, que regula la salud en la empresa, todo trabajador, antes de su contratación o a más tardar durante el mes siguiente «deberá someterse obligatoriamente a un examen médico que conlleve al menos una radiografía pulmonar». En virtud de los artículos 7 y 9 del mismo decreto, son igualmente obligatorios los reconocimientos médicos periódicos, que incluyen la «realización de exámenes médicos especiales de los trabajadores expuestos a riesgos de enfermedad profesional». Sin embargo, la Comisión tomó nota de los alegatos de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (CGSTM), según los cuales, habida cuenta de la información que tiene a su disposición, en Madagascar ya no existen empresas mineras del sector formal que realicen trabajos subterráneos y empleen para ello a adolescentes, de conformidad con el Convenio. Sin embargo, el problema se plantea en relación con las explotaciones familiares e informales, por ejemplo en la extracción de zafiros en la región de Ilakaka, en las que adolescentes menores de edad descienden a las minas subterráneas hasta 50 metros, sin las medidas de seguridad adecuadas ni la suficiente ventilación. La CGSTM añade que, debido a que no existe una legislación adecuada, estos menores no son objeto de exámenes médicos previos de aptitud al empleo ni de exámenes médicos sistemáticos, y que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para resolver este problema.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que más del 90 por ciento de los empleos están en la economía informal y, en promedio, los servicios públicos desconocen la existencia del 89 por ciento de esos empleos. El Gobierno indica que es consciente de la necesidad de que los inspectores del trabajo intervengan en la economía informal. A este respecto, en el marco del proyecto OIT/PAMODEC, en colaboración con la Dirección del Trabajo y de la Promoción de los Derechos Fundamentales (DTPDF) del Ministerio de la Función Pública, el Trabajo y las Leyes

Sociales, se organizó los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 un taller nacional de intercambios y reflexión de los inspectores del trabajo sobre la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo a la economía informal. Además, el Gobierno indica que se convino que cuatro sectores de actividad seguirían prioritariamente un proceso de formalización, a saber, el turismo, el comercio, la agricultura y los trabajos públicos-edificación. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la SEKRIMA según las cuales la situación en las explotaciones subterráneas familiares e informales sigue siendo la misma dado que no se ha adoptado ninguna medida oficial para erradicar esta práctica y sobre todo teniendo en cuenta que estas explotaciones aparecen de forma espontánea e incontrolable. Además, en general no existen infraestructuras médicas en la región donde están esas explotaciones.

La Comisión recuerda que, en virtud del *artículo 2* del Convenio, para el empleo o trabajo subterráneo en las minas de personas menores de 21 años se deberá exigir un examen médico completo de aptitud y posteriormente exámenes periódicos a intervalos que no excedan de un año, tanto si el trabajo se realiza en la economía formal como en la economía informal e independientemente de que exista o no una relación de trabajo. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños y jóvenes de menos de 21 años se benefician de la protección prevista por el Convenio, en particular los que trabajan en minas y canteras familiares y que pertenecen a la economía informal. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular estadísticas sobre el número de jóvenes que trabajan que han sido objeto de los exámenes médicos previstos por el Convenio e información sobre el número y la naturaleza de todas las infracciones detectadas por los servicios de inspección del trabajo.***

Artículo 4, 4) y 5). *Registros de las personas que están empleadas menores de 21 años.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el empleador deberá llevar un registro que incluya las tres partes siguientes: información personal, datos característicos del trabajador de la empresa y un apartado reservado a las autorizaciones, observaciones y advertencias de la inspección del trabajo a la empresa. La Comisión observó que pese a que la copia de este registro, enviada por el Gobierno junto con su memoria, indica claramente la fecha de nacimiento del trabajador no constan en ella datos sobre la naturaleza de la ocupación ni ningún certificado que atestigüe la aptitud para el empleo. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 6 del decreto núm. 2007-563 relativo al trabajo infantil, el empleador deberá llevar un registro en el que figure la identidad completa, el tipo de trabajo, el salario, el número de horas de trabajo, el estado de salud, los datos sobre la escolaridad y la situación de los padres de cada empleado menor de 18 años. La Comisión tomó nota también de que, según el Gobierno, el decreto núm. 129-IGT, de 5 de agosto de 1957, por el que se fija el modelo de registro del empleador en aplicación del artículo 252 del Código del Trabajo, sigue estando en vigor y es necesario proceder a su revisión. La Comisión observó que, en lo que concierne a los trabajadores de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años que realizan trabajos subterráneos, parece que los registros de los empleadores siguen sin tener que incluir un certificado de aptitud para el empleo. Pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los empleadores cumplen con las obligaciones previstas en los *párrafos 4 y 5 del artículo 4* del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la revisión del decreto núm. 129-IGT, de 5 de agosto de 1957, por el que se fija el modelo de registro del empleador podrá llevarse a cabo una vez que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) recupere su funcionamiento normal y que se está trabajando a este respecto. Asimismo, el Gobierno señala que, en primer lugar, la DTPDF debe encargarse de estudiar si es factible revisar ese decreto considerando los puntos a incluir en el proyecto de texto siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos. En segundo lugar, como secretaria técnica del CNT, la DTPDF garantizará la comunicación del proyecto de texto al CNT a los fines solicitados. La Comisión también toma nota de que la SEKRIMA se refiere al decreto núm. 129-IGT, de 5 de agosto de 1957, indicando que sigue en vigor pero no se aplica en la práctica. Asimismo, la SEKRIMA considera que el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para que el CNT vuelva a estar operativo con miras a iniciar la revisión y armonización del Código del Trabajo y de la legislación ulterior en relación con los convenios ratificados. ***La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para revisar el decreto núm. 129-IGT, de 5 de agosto de 1957, por el que se fija el modelo de registro del empleador. Asimismo, le pide que adopte las medidas necesarias para que el nuevo decreto prevea claramente la obligación del empleador de llevar un registro, para cada persona de entre 18 y 21 años, en el que figuren, en particular, la fecha de nacimiento, la naturaleza del trabajo y un certificado de aptitud para el trabajo subterráneo, y de poner dicho registro a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten. Sírvase transmitir información sobre los progresos realizados a este respecto.***

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), recibidas el 17 de septiembre de 2013.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil (ENTE), más de uno de cada cuatro niños malgaches, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años (28 por ciento), es económicamente activo, es decir un total de 1 870 000 niños. La mayor parte de los niños económicamente activos trabajan, en general como asistentes familiares, con

familias que se dedican a la agricultura y la pesca. En lo que respecta a los niños de entre 5 y 14 años, un 22 por ciento trabajan y un 70 por ciento asisten a la escuela. Además, la Comisión había tomado nota de los alegatos de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (CGSTM), según los cuales muchos niños de zonas rurales son enviados por sus padres a las grandes ciudades para que trabajen en el sector doméstico en condiciones que muchas veces son peligrosas. Además, esos niños no siempre han finalizado la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de que el Plan Nacional de Acción contra el trabajo infantil en Madagascar (PNA) estaba ampliando sus efectivos y beneficiarios así como su cobertura (2010-2015). El Gobierno indicó que se había adoptado el plan de trabajo del Comité Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CNLTE) para los años 2012-2013. Por último, el Gobierno informó de algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto AMAV contra el trabajo doméstico de los niños y el plan de acción contra el trabajo infantil en las plantaciones de vainilla de la región de Sava, llevado a cabo en el marco del proyecto TACKLE de la OIT/IPEC.

La Comisión toma nota de las observaciones de la SEKRIMA, según las cuales el fenómeno del trabajo infantil persiste en Madagascar. Asimismo, SEKRIMA menciona la alta tasa de abandono escolar que se produce durante los cinco primeros años de escolarización.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el PNA se ha ejecutado en parte a través de acciones realizadas en el marco del proyecto AMAV, especialmente en la región Amoron'i Mania, como por ejemplo la colocación de cuatro carteles «tarjeta roja al trabajo infantil», la distribución de folletos sobre la lucha contra el trabajo doméstico y la sensibilización para la revisión del *dina* (convenio local) a fin de integrar en él la cuestión del trabajo doméstico infantil. Además, 125 niños de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años han sido librados del trabajo doméstico y se les ha proporcionado formación para que se presenten a los exámenes a fin de obtener un diploma. Por otra parte, el Gobierno indica que cada año celebra el día mundial contra el trabajo infantil como medio de sensibilización pública, y que a este fin continúa poniendo carteles en los barrios populares y realizando debates con los padres, las autoridades locales y los responsables sociales. Asimismo, menciona que existen actualmente 12 comités regionales de lucha contra el trabajo infantil (CRLTE). La Comisión también toma nota de que se han fortalecido las capacidades de diversos actores en materia de lucha contra el trabajo infantil, a saber, en particular, de 50 actores que producen vainilla en la región de Sava y 12 en la región de Antalaha, 91 miembros de organizaciones sindicales, 43 periodistas y tres técnicos del Instituto Nacional de Estadística. Por último, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil (CNLTE) refundió, en 2014, el decreto núm. 2007-263, de 27 de febrero de 2007, relativo al trabajo infantil y el decreto núm. 2005-523, de 9 de agosto de 2005, por el que se creó el CNLTE y se establecieron sus funciones y su composición. Tras la realización de un estudio sobre los trabajos peligrosos, en 2013 se validaron 19 tipos de trabajos peligrosos que se integraron en el proyecto de decreto en curso de adopción. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa que la Encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal de 2012 (ENEMPSI 2012) pone de manifiesto que un 27,8 por ciento de los niños, a saber 2 030 000 niños, trabajan. Además, la Encuesta pone de relieve que el 28,9 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años (83 000 niños) y el 50 por ciento de los que tienen entre 10 y 14 años (465 000 niños) no están escolarizados. Al saludar los esfuerzos desplegados por el Gobierno para mejorar la situación, **la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por la eliminación progresiva del trabajo infantil y le pide que comunique información sobre los resultados obtenidos gracias a la aplicación del PNA, así como sobre las actividades del CNLTE y los CRLTE. Por último, le pide que, una vez que se haya adoptado, transmita una copia de la versión revisada del decreto núm. 2007-263.**

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, según la UNESCO, la edad en la que cesa la obligación escolar sería inferior a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. En efecto, la Comisión señaló que la edad oficial de acceso a la enseñanza primaria es de 6 años y la duración de la escolaridad obligatoria es de cinco años; la edad en que cesa la obligación escolar sería, por lo tanto, de 11 años. La Comisión tomó nota del alegato de la CGSTM, según el cual el Gobierno aún no había hecho nada para resolver el problema que plantea la diferencia entre la edad de finalización de la escolaridad obligatoria (11 años) y la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo (15 años). La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, el Ministerio de Educación estaba realizando esfuerzos a fin de adoptar medidas para eliminar la diferencia entre la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la edad de finalización de la escolaridad obligatoria.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en 2014, el Ministerio de Educación Nacional organizó «la Convención nacional de la educación», que es un diálogo nacional en profundidad sobre una educación inclusiva, accesible y de calidad para todos. Sin embargo, **lamenta** que la cuestión de los años de escolarización, objeto de debate desde hace muchos años, aún no se ha solucionado. La Comisión recuerda al Gobierno que la escolaridad obligatoria constituye uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, y subraya la importancia de vincular la edad de admisión al empleo o al trabajo y a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, tal como se prevé en el párrafo 4 de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). La Comisión señala de nuevo que, con arreglo al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deje abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (párrafo 371). **Tomando nota de que el Gobierno debate esta cuestión desde hace diez años, la Comisión lo insta a adoptar, con carácter de urgencia, medidas para elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a fin de hacerla coincidir con la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en Madagascar. Pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.**

Artículo 6. Formación profesional y aprendizaje. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Empleo, Enseñanza Técnica y Formación Profesional ha elaborado un proyecto de ley relativo a la Política nacional del empleo y de la formación profesional (PNEFP) en colaboración con la OIT y en consulta con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que todavía se trata de un proyecto a la espera de ser validado antes de que se presente al Parlamento para su adopción. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para acelerar la adopción del proyecto de ley sobre el aprendizaje y la formación profesionales. También pide al Gobierno que transmita una copia de la ley una vez que se haya adoptado.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017, y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida el 25 de octubre de 2016, así como de la amplia discusión que tuvo lugar en la 105.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2016, relativa a la aplicación del Convenio por Madagascar.

Artículos 3, b), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Prostitución infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 13 del decreto núm. 2007-563, de 3 de julio de 2007, sobre el trabajo infantil prohíbe categóricamente el reclutamiento, la utilización, la oferta y empleo de niños de uno u otro sexo con fines de prostitución, y de que el artículo 261 del Código del Trabajo y los artículos 354 a 357 del Código Penal, a los que se refiere el decreto núm. 2007-563, prevén sanciones eficaces y disuasorias. La Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), según las cuales, el número de chicas jóvenes, a partir de los 12 años de edad que practica la prostitución está aumentando, sobre todo en las ciudades, el 50 por ciento de las prostitutas de la capital, Antananarivo, son menores y el 47 por ciento se prostituye debido a su situación precaria. Por temor a sufrir represalias, el 80 por ciento de esas jóvenes prefiere no acudir a las autoridades. Por otra parte, el Gobierno indica que se han reforzado las capacidades de 120 operadores turísticos de Nosy-be y 35 de Tulear sobre cuestiones relacionadas con la explotación sexual comercial. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la falta de información sobre el número de investigaciones realizadas, procesamiento incoados y condenas impuestas a los responsables de los casos de explotación sexual con fines comerciales. La Comisión también tomó nota de la progresión del turismo sexual que afecta a los niños, de las medidas insuficientes adoptadas por el Gobierno para combatir este fenómeno, así como del reducido número de enjuiciamientos y de condenas impuestas, lo cual favorece la impunidad.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno intensificar los esfuerzos de prevención del turismo sexual para asegurar la eliminación de la explotación sexual de los niños con fines comerciales y del turismo sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el Ministerio de Seguridad Interior, a través de la Policía de Moralidad y de Protección de Menores (PMPM) es uno de los organismos encargados de la aplicación de la legislación penal relativa a la explotación sexual de los niños con fines comerciales, entre ellas la prostitución. La PMPM centraliza las denuncias penales relativas a los niños y lleva a cabo investigaciones contra los presuntos autores. Además, el Gobierno indica que la PMPM realiza regularmente controles sorpresivos en los establecimientos de apertura nocturna para controlar la identidad y edad de las personas que lo frecuentan, aunque es difícil acusar a los menores detenidos de ejercicio de la prostitución. Por otra parte, la Comisión toma nota de que en 2013 se firmó un código de conducta dirigido a los agentes del sector turístico. El código de conducta tiene por objeto sensibilizar a todos los agentes del sector para poner fin al turismo sexual en el país. La Comisión también toma nota de las estadísticas facilitadas por el Gobierno sobre los casos examinados por los tribunales de primera instancia de las localidades de Betroka, Ambatolampy, Arivonimamo, Nosy-be, Taolagnaro, Vatomandry, Mampikony y Ankazobe. La Comisión toma nota de que en 2015, no se presentó ningún caso de explotación de menores o relativos al turismo de menores ante los mencionados tribunales. En consecuencia, la Comisión se ve obligada nuevamente a tomar nota con **profunda preocupación** de la ausencia de procesamiento y condenas de los autores, factores que hacen perdurar la situación de impunidad que parece persistir en el país. **Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se realicen investigaciones en profundidad y enjuiciamientos efectivos de las personas sospechosas de reclutamiento, utilización, oferta y empleo de niños con fines de prostitución y se impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información estadística sobre el número y naturaleza de las infracciones señaladas, las investigaciones realizadas, los enjuiciamientos llevados a cabo, y las condenas y las sanciones impuestas a este respecto. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los resultados obtenidos gracias a la difusión del código de conducta entre los diversos agentes del sector del turismo.**

Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en minas y canteras, y la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que hay niños que trabajan en las minas (Ilakaka) y en las canteras de piedra en condiciones precarias y a veces peligrosas, y que las peores formas de trabajo infantil se dan en el sector informal y en las zonas rurales que la administración del trabajo no alcanza a cubrir. La Comisión también tomó nota de que el trabajo efectuado por niños en el sector de las minas y canteras constituye una forma contemporánea de esclavitud, ya que recurre a la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso y la explotación económica de los interesados, en particular en los casos en que niños no acompañados trabajan en minas y canteras artesanales. La Comisión señaló que los niños trabajan de cinco a diez horas al día transportando bloques de piedra o agua y que ciertos niños cavan pozos de un metro de circunferencia y de 15 a 50 metros de profundidad, mientras que otros bajan a los pozos para sacar la tierra. Asimismo, hay niños de entre 3 y 7 años no escolarizados que a menudo trabajan junto con sus familiares, rompiendo piedras y transportando sobre la cabeza cestos cargados de piedras o de ladrillos, como media durante 47 horas a la semana. Además, las condiciones de trabajo son insalubres y la higiene es lamentable. Todos estos niños también están expuestos a la violencia física y sexual, así como a graves peligros para su salud debidos, entre otras cosas, a la contaminación de las aguas, los pozos inseguros y el derrumbe de galerías.

La Comisión pone de relieve que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que tomara medidas tendientes a mejorar la capacidad de la inspección del trabajo. Además, toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, en el marco del Plan Nacional de Acción contra el trabajo infantil (PNA), la Inspección del Trabajo ha previsto realizar controles para tomar medidas de prevención y de protección contra el trabajo infantil en las minas y canteras en las regiones de Diana, Ihorombe y Haute Matsiatra. La Comisión toma nota de que el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia indicó que la falta de medios es el principal obstáculo para la adopción de medidas rigurosas. Por ejemplo, los

inspectores del trabajo no disponen de medios de locomoción, mientras que en su memoria, el Gobierno indica que una de las principales dificultades en la realización de controles por los inspectores del trabajo obedece al hecho de que, frecuentemente, es difícil el acceso a los lugares de explotación, situados en la periferia de las grandes ciudades. La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de la situación de los niños que trabajan en el sector de las minas y canteras en condiciones particularmente peligrosas. **La Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a adoptar las medidas necesarias para garantizar que ningún menor de 18 años realice trabajos que puedan ser perjudiciales para su salud, su seguridad o su moralidad. Le pide que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto, especialmente en el marco del PNA, y sobre los resultados obtenidos para liberar a esos niños de estas peores formas de trabajo infantil. La Comisión también pide al Gobierno que adopte medidas para mejorar la capacidad de la inspección del trabajo, especialmente proporcionando los recursos necesarios, por ejemplo, vehículos, a fin de que los inspectores del trabajo puedan llegar a los sitios de difícil acceso.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. Niños de la calle. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Trabajo y Leyes Sociales (MTLS) continuaba su programa de escolarización y de formación de niños de la calle en el marco del Programa de inversión pública para acciones sociales (PIP). La Comisión tomó nota, no obstante, de que en los últimos años ha aumentado el número de niños de la calle y las medidas adoptadas por el Gobierno a este respecto siguen siendo mínimas. El Gobierno indicó que los programas financiados en el marco del PIP tienen por objetivo retirar de las peores formas de trabajo infantil a 40 niños al año, es decir 120 niños durante tres años. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que en la capital, Antananarivo, alrededor de 4 500 niños viven en la calle, la mayor parte de ellos son varones (el 63 por ciento) que ganan su subsistencia de la mendicidad y la búsqueda de objetos en la basura. Por lo que respecta a las niñas de la calle muy frecuentemente llegan a ser víctimas de explotación sexual para cubrir sus necesidades o por presión de terceros. Otras se dedican al servicio doméstico y engrosan las filas de los niños trabajadores víctimas de explotación.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, en sus conclusiones, instó al Gobierno a aumentar la financiación del PIP para rescatar a los niños de la calle de la situación en que se encuentran y llevar a cabo campañas de sensibilización.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Población, Protección Social y Promoción de la Mujer ha establecido un programa para el censo de los niños que viven y trabajan en la calle y de las familias sin hogar para el período 2015-2016. El objetivo del programa es realizar el censo de niños que viven y trabajan en la calle, identificar las necesidades de las familias sin hogar y elaborar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para hacerse cargo de ellos. La Comisión toma nota de que se realizaron encuestas, análisis e interpretación de datos y se prepararon centros que puedan agruparlos. Las próximas etapas serán la agrupación, la atención, la orientación, la educación, la escolarización, la reubicación y la repatriación de los beneficiarios. **La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas efectivas en un plazo determinado para garantizar la ejecución focalizada de los programas en el marco del PIP, y que redoble sus esfuerzos para proteger a los niños de la calle de las peores formas de trabajo infantil y lograr su rehabilitación e integración social. Además, pide al Gobierno que proporcione información sobre los datos compilados en el marco del programa para el censo de niños que viven y trabajan en la calle y las familias sin hogar, así como sobre los resultados obtenidos para liberarlos de esta situación y evitar que sean ocupados en las peores formas de trabajo infantil.**

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de que el 27,5 por ciento de los niños, a saber 2 030 000 niños, trabajan, y que el 30 por ciento de éstos viven en zonas rurales y el 18 por ciento en zonas urbanas. La Comisión también observó que el 81 por ciento de los niños entre los 5 y los 17 años de edad que trabajan, a saber 1 653 000 niños, realizan actividades peligrosas. La mayor parte de los niños (89 por ciento) trabajan en los sectores agrícola, ganadero y pesquero y más de seis de cada diez niños que trabajan declararon haber tenido problemas de salud causados por su trabajo durante los últimos doce meses. La Comisión también tomó nota de que el trabajo doméstico infantil a menudo se inscribe en el contexto de familias pobres de zonas rurales que envían a sus hijos a zonas urbanas para evadirse de su situación precaria. Los niños trabajadores domésticos pueden verse obligados a trabajar hasta quince horas al día, en general no reciben salario alguno, debido a que éste se paga directamente a sus padres, algunos llegan a dormir en el suelo y muchos son víctimas de violencia moral, física o sexual. La Comisión expresó su profunda preocupación por la situación y el número de menores de 18 años obligados a realizar trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que multiplica sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil a través del proyecto Manjary Soa. El Centro Manjary Soa, creado en 2001, ofrece a niños seleccionados ayuda escolar compensatoria, y, una vez reincorporados al sistema público de enseñanza, el centro se hace cargo de sus gastos de escolarización y les entrega los materiales educativos necesarios. La Comisión también toma nota del proyecto «Lucha contra el trabajo infantil en las regiones de Diana y Atsimo Andrefana» de 2014-2016 (LCTE DIAA). El Gobierno indica que el proyecto LCTE DIAA tiene el objetivo de reforzar las acciones de apoyo a la reinserción socioeconómica de 100 niños menores de 18 años retirados de la explotación sexual con fines comerciales en Nosy-be, Toliara y Mangily. **La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil, en particular los trabajos peligrosos, y que proporcione informaciones sobre todos los progresos realizados a este respecto y los resultados obtenidos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Departamento del Trabajo celebraría consultas con las autoridades pertinentes, como el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de determinar los tipos de

trabajos peligrosos que han de prohibirse a los menores de 18 años de edad, de conformidad con el artículo 2, 6), de la Ley sobre Niños y Jóvenes (Empleo), de 1966 (ley CYP), en su forma enmendada en 2010.

La Comisión toma nota con *interés* de la información del Gobierno en su memoria, según la cual el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo elaboró una lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los jóvenes menores de 18 años de edad, previas consultas con el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto de representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. También toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la lista incluye: los trabajos con máquinas; los trabajos expuestos a riesgos físicos, químicos y biológicos, y los trabajos de carácter peligroso, como la construcción, la industria maderera y las actividades en alta mar y relacionadas con el agua. El Gobierno indica asimismo que la lista se incorporará a la versión enmendada de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente en el debido proceso legal antes de su publicación oficial. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte sin retrasos, las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en un futuro próximo, la lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en este sentido y que transmita una copia, en cuanto se haya adoptado.***

Artículo 7, 1). Edad mínima en la admisión a los trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 2, 2), a), de la ley CYP, permite que los niños realicen trabajos ligeros que son adecuados a sus capacidades en cualquier empresa de la que se encargue su familia, pero observó que no se ha especificado una edad mínima para la admisión a los trabajos ligeros. Tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual la ley CYP está siendo revisada, con el fin de que se incorpore una edad mínima de 13 años para realizar trabajos ligeros.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual la ley CYP revisada, que contiene disposiciones que establecen una edad mínima de 13 años para las actividades relativa a los trabajos ligeros, está siguiendo el debido proceso legal y se espera que se presente en octubre de 2018. ***La Comisión expresa la firme esperanza que se adopte, en un futuro próximo, la ley CYP revisada, que establece una edad mínima de 13 años para las actividades relativas a los trabajos ligeros. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.***

Inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración de la Confederación Sindical Internacional (CSI) según la cual en Malasia el trabajo infantil se encuentra principalmente en la agricultura de las zonas rurales, donde a menudo los niños trabajan junto a sus padres, sin recibir salario alguno. En las zonas urbanas, los niños trabajan en restaurantes, tiendas y pequeñas unidades manufactureras que en general son propiedad de los miembros de la familia.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en Malasia, es frecuente que los niños acompañen a sus padres que trabajan, después de las horas escolares, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, sobre todo debido a la necesidad de proporcionar cuidados a los niños de que los padres sigan trabajando para obtener más ingresos. De ahí que el hecho de tener hijos en los lugares de trabajo de los padres no signifique necesariamente que los niños están sujetos a trabajo infantil.

La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual los inspectores del trabajo reciben una formación periódica sobre el control del trabajo infantil, e incluye la formación y una mayor comprensión de las disposiciones relacionadas con el trabajo infantil, en virtud de la Ley sobre Niños y Jóvenes, de 1966, en su forma enmendada (ley CYP) y otra legislación conexas, con el fin de permitirles identificar el trabajo infantil. También toma nota de que, según la memoria del Gobierno, los departamentos de trabajo de Sabah y Sarawak realizaron 7 905 y 6 154 inspecciones reglamentarias sobre el trabajo infantil, respectivamente, e identificó dos casos de incumplimiento del artículo 6 de la ley CYP (horas de trabajo de los jóvenes). Ambos casos fueron llevados a los tribunales y se impuso a los empleadores, en cada caso, una multa de 2 000 MYR. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga redoblando sus esfuerzos para intensificar la capacidad de la inspección del trabajo, y que continúe comunicando información sobre el número y la naturaleza de las violaciones relacionadas con el empleo de niños que detectó la inspección del trabajo. También solicita al Gobierno que siga adoptando las medidas necesarias para garantizar que se procese a las personas que violan la ley CYP y otra legislación conexas sobre el empleo de niños, y que se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. Por último, solicita al Gobierno que comunique información sobre la situación de los niños que trabajan, incluidos los datos relativos al número de niños y de jóvenes por debajo de la edad mínima de 15 años que están ocupados en el trabajo infantil, así como información sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de su trabajo. En la medida de lo posible, esa información debería estar desglosada por edad y género.***

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción pornográfica o actuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 31, 1), b), leído conjuntamente con el artículo 17, 2), c), i), de la Ley de la Infancia, de 2001, que prevé sanciones para los delitos relacionados con los abusos sexuales de niños, incluida la utilización de niños con fines de material pornográfico, obsceno o indecente, se aplica sólo a personas que cuidan niños, como un padre, una madre, un tutor o un miembro de la familia ampliada. También observó que el artículo 377E, del

Código Penal, que prohíbe que cualquier persona que incite a un niño a cualquier acto de indecencia soez, se amplíe sólo a los niños menores de 14 años de edad. La Comisión lamentó tomar nota de que, a pesar de venir planteando esta cuestión desde 2003, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida en este sentido.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el Gobierno promulgó la Ley sobre Delitos Sexuales contra Niños, núm. 792, de 2017, que prohíbe específicamente la utilización, el reclutamiento o la oferta de los menores de 18 años para la pornografía. De conformidad con el artículo 5 de esta ley, toda persona que realice, produzca, dirija la elaboración o la producción, o participe, se dedique, o se implique en la realización o la producción de cualquier tipo de pornografía infantil, será castigada con una pena de reclusión por un período no superior a treinta años. La Comisión también toma nota de que los artículos 6 a 10 de la Ley sobre Delitos Sexuales contra Niños, prevén sanciones para los delitos relacionados con la utilización de niños en la realización o la producción de pornografía, así como la divulgación, la publicación, la venta o el acceso a pornografía infantil. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 5 a 10 de la Ley sobre Delitos Sexuales contra Niños, de 2017, incluido el número y la naturaleza de las violaciones, las investigaciones, los enjuiciamientos, las condenas y las sanciones que se aplican.**

Artículo 4, 1). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. Con respecto a la adopción de la lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad, la Comisión solicita al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados en relación con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículos 5 y 7, 2), a) y d). Mecanismos de vigilancia y medidas efectivas y en un plazo determinado. Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación de los miembros trabajadores en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en la 98.^a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, de julio de 2009, según la cual la Comisión Nacional para la Protección de la Infancia (INCCP) de Indonesia, señaló que los casos de trabajo forzoso de los trabajadores migrantes y sus hijos en las plantaciones de Sabah, implicaban a un número estimado de 72 000 niños. También tomó nota de que decenas de miles de hijos de trabajadores migrantes también trabajaban en las plantaciones sin regulación de horario, lo que significaba que trabajaban todo el día. Otros sectores en los que se detectaron a menudo hijos de trabajadores migrantes son las empresas del sector alimentario familiar, los mercados nocturnos, las pequeñas industrias, la pesca, la agricultura y la restauración. Según la INCCP, los hijos de trabajadores migrantes nacidos en estas condiciones no han recibido certificados de nacimiento ni cualquier otro tipo de documento de identidad, negándoseles de este modo su derecho a la educación. La Comisión tomó nota asimismo de la información del Informe de Seguimiento en el Mundo de la UNESCO, de 2011, según la cual el número de migrantes indocumentados que viven en Malasia se estima en 1 millón, muchos de los cuales son niños. Tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, incluida la educación de los hijos de los migrantes indonesios en las plantaciones de palma aceitera por parte de Human Child Aid Society (HCAS). Sin embargo la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar del elevado número de niños migrantes implicados en trabajos peligrosos en el sector de las plantaciones, no se identificó ninguno de estos casos durante las inspecciones.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el cumplimiento de la certificación del Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) hacia la identificación de marca del aceite de palma de Malasia, producido de manera sostenible y segura, será obligatorio a finales de 2019. También toma nota de la información del Gobierno, según la cual desde febrero de 2018, 758 923 hectáreas de palma aceitera obtuvieron la certificación del MSPO que destaca el requisito de trabajo infantil cero. Además, el Gobierno indica que el estudio integral propuesto sobre la situación laboral en las plantaciones de palma-aceitera de Malasia que se prevé se realice en colaboración con la OIT le permitirá planificar nuevas acciones para eliminar el trabajo infantil en este sector. Por último la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en 2017, la HCAS impartió educación a un número estimado de 11 000 hijos de migrantes indonesios. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según un informe del UNICEF, titulado «El aceite de palma y los niños en Indonesia» de 2016, los hijos de trabajadores indonesios en las plantaciones de Malasia se enfrentan a desafíos concretos de acceso a la educación y se impide a los no nacionales el acceso a la educación pública. Este informe manifiesta asimismo que, si bien los centros de aprendizaje alternativos están financiados por las plantaciones y dirigidos por las ONG, la calidad de la educación impartida es variable y las oportunidades de estudiar más allá del nivel primario siguen siendo limitadas. **En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los hijos de los trabajadores migrantes en las plantaciones de palma aceitera, especialmente garantizando su acceso a una educación de calidad con el fin de impedirles su ocupación en las peores formas de trabajo infantil. También insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para fortalecer el sistema de inspección del trabajo para supervisar de manera efectiva la aplicación de la legislación del trabajo, con el fin de recibir, investigar y tratar las quejas relativas a las presuntas violaciones del trabajo infantil. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca de las conclusiones del estudio propuesto sobre la situación laboral en las plantaciones de palma-aceitera, especialmente en relación con los niños sometidos a trabajos peligrosos y los planes de acción desarrollados posteriormente para la eliminación del trabajo infantil peligroso en ese sector.**

Artículos 6 y 7, 1) y 2). Programas de acción, sanciones y medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de estas peores formas, y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota

de la información del Gobierno, según la cual se ha actualizado el Plan Nacional de Acción para combatir la trata de personas, 2016-2020 (NAP 2016-2020). Tomó nota del informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, de 15 de junio de 2015, según el cual existe una trata de niñas en la servidumbre doméstica por parte de agencias de empleo de su país o por parte de empleadores de Malasia, con la presunta complicidad de funcionarios del Estado. Además, es elevado el número de niñas y niños que son víctimas de trata en la industria del sexo, con un incremento de la prevalencia de la trata de niños para trabajar en la industria del sexo. El informe indica asimismo que existe una trata de niños con fines de mendicidad forzosa y tráfico de drogas.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, en el marco del NAP 2016-2020, se aplicaron varios programas de sensibilización sobre la trata de personas, que incluyen 9 006 anuncios en la radio y 1 605 anuncios en remolques de tráfico difundidos por televisión. Además, se dio inicio, en 2017, a una línea directa contra la trata, que es accesible las 24 horas del día. La memoria del Gobierno también indica que, de enero a octubre de 2017, se rescató a 92 niños víctimas de trata (44 niños y 48 niñas). La Comisión toma nota asimismo de su memoria presentada en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) según la cual un equipo de trabajo interinstitucional contra la trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes (equipo de trabajo ATIPSOM) se estableció en 2016 para fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de controlar el cumplimiento de la ley, especialmente respecto de la investigación y del intercambio de información. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de 14 de marzo de 2018, expresó su preocupación de que Malasia siguiese siendo un país de destino para la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual, mendicidad y trabajo forzoso. El CEDAW expresó también su preocupación por la complicidad existente entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dejando pasar personas indocumentadas por las fronteras entre Malasia y Tailandia, así como la impunidad de los responsables de delitos vinculados con la trata de personas, en la frontera entre Malasia y Tailandia (documento CEDAW/C/MYS/CO/3-5, párrafo 25). ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las personas culpables de trata de niños, incluidos los funcionarios cómplices y corruptos, estén sujetos a investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. En ese sentido, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas por el equipo de trabajo ATIPSOM, para impedir la trata de niños menores de 18 años de edad, así como el número de casos de trata de niños, desglosados por género, edad y nacionalidad que han sido identificados y tratados por éstos. Además, solicita al Gobierno que establezca sus medidas, en el marco del Plan Nacional de Acción para combatir la trata de personas, 2016-2020, a fin de impedir la trata de los menores de 18 años de edad, y que se ocupe de librarlos de esas situaciones y de su posterior rehabilitación e inserción social. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en este sentido y sobre los resultados obtenidos en cuanto al número de niños atendidos a través de esas medidas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en Malawi se está aplicando el Plan Nacional de Acción (NAP) sobre el trabajo infantil en Malawi (2016-2016), se está realizando una encuesta nacional sobre el trabajo infantil, y está en curso el Proyecto sobre reducción del trabajo infantil, a través del apoyo a la educación (ARISE).

La Comisión toma nota del examen anual ARISE, de 2017, según el cual aproximadamente 7 063 niños fueron retirados de las explotaciones agrícolas e ingresados en escuelas; se educó en temas de trabajo infantil a 10 028 miembros de la comunidad y maestros; se dotó a 1 569 hogares de mejores medios de subsistencia, y se registró a 1 550 niños en guarderías comunitarias. También toma nota de la información del informe de situación sobre la cooperación para el desarrollo, de la OIT/IPEC, según la cual, desde 2016, Malawi ha venido aplicando de manera activa el proyecto titulado «Fortalecimiento del diálogo social en países productores del trabajo seleccionados». Dentro de este proyecto, se desarrollaron programas de acción con la Asociación Nacional de Pequeños Productores Agrícolas de Malawi (NASFAM) y la Asociación Tabacalera de Malawi (TAMA), para abordar el trabajo infantil a través del diálogo social. En consecuencia, la NASFAM formó a más de 80 dirigentes de asociaciones y miembros del personal de la NASFAM, en el distrito de Kasungu, sobre cómo eliminar el trabajo infantil y garantizar explotaciones agrícolas libres de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según las conclusiones de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil (NCLS), el 38 por ciento (más de 2,1 millones) de niños en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años están afectados por el trabajo infantil. Aproximadamente el 55 por ciento de estos niños están ocupados en trabajos peligrosos. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su ***profunda preocupación*** por el número significativo de niños afectados por el trabajo infantil en Malawi, incluso en condiciones peligrosas. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la progresiva eliminación del trabajo***

infantil y a que comunique información sobre los resultados obtenidos. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del NAP, del proyecto ARISE y de los programas de acción desarrollados por la NASFAM y la TAMA, así como sobre su impacto en la eliminación del trabajo infantil.

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. Niños que trabajan por cuenta propia, niños que trabajan en la economía informal e inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley del Empleo sólo es aplicable cuando existe un contrato de trabajo o una relación laboral y no comprende el empleo independiente. También tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual se encuentra en proceso de promulgación el proyecto de ley sobre aparcería, que establece una edad mínima para el empleo en el sector del tabaco y prevé inspecciones frecuentes de las explotaciones agrícolas de tabaco.

La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información en este sentido. La Comisión toma nota de que, según las conclusiones de la NCLS de 2015, aproximadamente el 72 por ciento de los niños ocupados en el trabajo infantil están empleados en el sector agrícola, seguido del 23 por ciento en el trabajo doméstico. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños que trabajan por cuenta propia, o que trabajan en la economía informal, gocen de la protección del Convenio. En ese sentido, la Comisión solicita al Gobierno que fortalezca la capacidad y amplíe el alcance de los servicios de inspección del trabajo para permitir que se supervise el trabajo infantil en la economía informal, especialmente en el sector agrícola. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas al respecto, así como sobre los resultados obtenidos, incluyéndose el número y la naturaleza de las infracciones relativas al empleo de niños y jóvenes detectadas por la inspección del trabajo. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado respecto de la promulgación del proyecto de ley sobre aparcería y las medidas adoptadas para las inspecciones de las explotaciones de tabaco, tras su adopción.***

Artículo 3, 1). Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de una discrepancia entre el artículo 23 de la Constitución que prevé una protección respecto de los trabajos peligrosos a los niños menores de 16 años de edad, y el artículo 22, 1), de la Ley del Empleo, que, de conformidad con el Convenio, dispone una edad mínima de 18 años para un trabajo que sea susceptible de perjudicar su salud, seguridad, educación, moralidad o desarrollo, o que sea perjudicial para su asistencia a la escuela. Este asunto fue discutido en una reunión tripartita de 2005 en la que todos los interlocutores sociales acordaron que existe una necesidad de armonizar las disposiciones de las leyes nacionales. Posteriormente, este asunto se presentó a la Comisión Jurídica de Malawi para su consideración y dicha Comisión recomendó que la edad estipulada, en virtud del artículo 23 de la Constitución, se elevara a los 18 años de edad. La Comisión también tomó nota de que, según el NAP sobre trabajo infantil, sigue siendo un problema la incoherencia entre los diversos textos legislativos relacionados con los niños, incluida la Constitución.

La Comisión toma nota una vez más con ***preocupación*** de que el Gobierno no aporta ninguna información sobre este punto en su memoria. ***Observando que, desde 2005, se ha venido discutiendo sobre la discrepancia entre el artículo 22, 1), de la Ley del Empleo y el artículo 23 de la Constitución, la Comisión vuelve a instar vivamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en un futuro muy próximo, la enmienda recomendada al artículo 23 de la Constitución, de conformidad con el artículo núm. 3, 1), del Convenio, especialmente dado que la Ley del Empleo no comprende a los trabajadores independientes.***

Artículo 9, 3). Registros llevados por los empleadores. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 23 de la Ley del Empleo estipula que todo empleador tiene que llevar un registro de las personas menores de 18 años de edad que éste emplea o que trabajan para él. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de la indicación del Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU), según la cual algunos estados no tienen registros, especialmente en materia de agricultura comercial. La Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el proyecto de registro modelo se finalizaría a finales de 2010, y que este proyecto se presentaría al Consejo Consultivo Laboral Tripartito para su adopción. El Gobierno también indicó que el modelo de registro del empleo estaría de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio y que se presentaría a la Comisión en cuanto se hubiese finalizado. En ese sentido, la Comisión recordó al Gobierno que, en virtud del artículo 9, 3), del Convenio, los registros que llevan los empleadores — debidamente certificados, siempre que sea posible — contendrán los nombres y las edades o fechas de nacimiento de las personas a las que emplean o que trabajan para ellos, o que tienen menos de 18 años de edad.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre este asunto. ***Observando que el Gobierno ha venido refiriéndose al modelo de registro del empleo desde 2006, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar su elaboración y adopción sin retrasos. Solicita una vez más al Gobierno que comunique una copia del modelo de registro, en cuanto se haya adoptado.***

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 3 y 7 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 179, 1), de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) dispone que una persona que participa en una

transacción que implique la trata de niños puede ser condenada a cadena perpetua. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que según el artículo 2, d), de la misma ley, un «niño» significa una persona de menos de 16 años de edad. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, se requiere de los Estados Miembros que prohíban la venta y la trata de todos los niños menores de 18 años de edad.

La Comisión observa que el Gobierno indica que ha tomado nota de esta observación y que esta cuestión será examinada en la Comisión Jurídica de Malawi. El Gobierno indica también que facilitará información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) en memorias futuras, debido a que esta ley ha entrado en vigor recientemente. La Comisión también toma nota de que, según las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2012, al examinar los informes presentados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento CCPR/C/MWI/CO/1, párrafo 15), Malawi ha redactado un proyecto de ley contra la trata que debería ser examinado en breve por el Parlamento. **Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), sea enmendada para extender la prohibición de venta y trata a todos los niños menores de 18 años de edad, con carácter de urgencia, que asegure que el proyecto de ley contra la trata prohíba la venta y la trata de niños menores de 18 años, y que sea adoptado tan rápidamente como sea posible. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información acerca de la aplicación en la práctica de esta ley, así como del proyecto de ley contra la trata, una vez que éste sea adoptado, incluyendo, en particular, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones denunciadas, las investigaciones y enjuiciamientos realizados, y las condenas y sanciones penales impuestas.**

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su informe al Comité de los Derechos del Niño (CRC), de 17 de julio de 2008, de que, si bien no existen datos disponibles sobre el número de niños implicados en la explotación sexual, incluidas la prostitución y la pornografía, se trata de problemas reconocidos en el país (documento CRC/C/MWI/2, párrafo 323). A este respecto, tomó nota de que el artículo 87, 1), d), de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), dispone que el funcionario de bienestar social que tenga motivos razonables para creer que un niño está siendo utilizado para la prostitución o para prácticas inmorales, puede librarlo de esta situación y ubicarlo temporalmente en un lugar seguro. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 3, b), del Convenio, requiere de los Estados Miembros que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de los niños menores de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno se esfuerza en incluir la prohibición de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas en la revisión en curso de la legislación laboral. El Gobierno indica también que, el Consejo de Censura hace todo lo que está a su alcance para censurar la pornografía. Sin embargo, la Comisión debe expresar nuevamente su **profunda preocupación** por la continua falta de reglamentación destinada a prohibir la explotación sexual comercial de los niños, y señala de nuevo a la atención del Gobierno la obligación que le incumbe en virtud del artículo 1 de adoptar medidas inmediatas para prohibir las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. **En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para garantizar la adopción de la prohibición en la legislación nacional de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas menores de 18 años de edad para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, e incluya sanciones suficientemente eficaces y disuasorias en esta legislación. Ruega al Gobierno a que, en su próxima memoria, comunique información acerca de los progresos realizados al respecto.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a los niños de estos tipos de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños ocupados en trabajos peligrosos en la agricultura comercial, especialmente en fincas tabacaleras. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 27 de marzo de 2009, expresó su preocupación por que muchos niños de entre 15 y 17 años realicen trabajos considerados peligrosos, especialmente en las plantaciones de té y tabaco, que siguen siendo una fuente importante de trabajo infantil (documento CRC/C/MWI/CO/2, párrafo 66). La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó que se realizaron inspecciones de trabajo en el sector del tabaco, de que se retiraron niños que posteriormente fueron rehabilitados e incorporados al sistema educativo. Asimismo tomó nota de que, como se indica en el Plan nacional de acción (NAP) sobre el trabajo infantil se indica que el sector agrícola, incluidas las plantaciones de tabaco y las granjas familiares, constituye una de sus prioridades sectoriales, dado que representa el 53 por ciento del trabajo infantil en el país.

La Comisión toma nota de que, según encuestas llevadas a cabo en 2011 en Mzimba, Mulanje y Kasungu, el trabajo infantil sigue predominando en el sector agrícola. En Mzimba, el 36,6 por ciento de los niños entrevistados trabajan en la agricultura; y en Mulanje y Kasungu, el 23 y el 20,4 por ciento de los niños entrevistados, respectivamente, trabajaron en una plantación, granja o en jardinería. Las tres encuestas evidenciaron que estos niños a menudo trabajan en condiciones peligrosas, sin usar indumentaria de protección y con equipo peligroso, por ejemplo cuchillas, arados, sierras, hoces, pangas, cortadoras y pulverizadores. **Al expresar su preocupación por el número de niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a los niños de los trabajos peligrosos en este sector, en particular, en las plantaciones de tabaco, a través de medidas adoptadas en el marco del NAP en relación con el trabajo infantil. A este respecto, solicita una vez más al Gobierno que comunique información concreta sobre el número de niños a los que, de esta forma, se ha impedido que realicen este tipo de trabajo peligroso o han sido retirados del mismo para proceder a su rehabilitación e inserción social.**

Apartado e). Situación particular de las niñas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según la Encuesta de trabajo infantil de 2002 realizada en Malawi, todos los niños víctimas de explotación sexual comercial eran niñas. La mitad de esas niñas había perdido a sus padres, al tiempo que el 65 por ciento de éstas no asistía a la escuela después de su segundo año. La Comisión también tomó nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de 5 de febrero de 2010, expresó su preocupación por la magnitud de la medida en que mujeres y niñas están implicadas en la explotación sexual comercial, incluida la prostitución, y por los datos estadísticos limitados en relación con estos asuntos (documento CEDAW/C/MWI/CO/6, párrafo 24). Por consiguiente, solicitó al Gobierno que comunicara información acerca de las medidas adoptadas para proteger a las niñas menores de 18 años de la explotación sexual comercial.

La Comisión insta de nuevo al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para impedir que las niñas menores de 18 años de edad pasen a ser víctimas de explotación sexual comercial, y a que aparte y rehabilite a las víctimas de esta peor forma de trabajo infantil, en el marco del NAP sobre trabajo infantil o de otra manera. Solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en ese sentido, así como información acerca del impacto de esas medidas. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería estar desglosada por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malí

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según la encuesta nacional sobre el trabajo infantil, realizada en 2005, alrededor de 2,4 millones de niños de entre 5 y 14 años, a saber el 65,4 por ciento de los niños de esta franja de edad trabajaban. A estos efectos, la Comisión tomó nota de la adopción y la validación de un programa de acción para la elaboración y la conceptualización del Plan de Acción para la Eliminación del Trabajo Infantil en Malí, 2011-2020 (PANETEM), cuya primera fase (2011-2015) está centrada en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (el 60 por ciento de los niños destinatarios), y cuya segunda fase (2016-2020) se centra en la erradicación de todas las formas de trabajo infantil (el 40 por ciento de los niños destinatarios). Además, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el 40 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años realizan trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de la información que el Gobierno proporciona en su memoria, según la cual, en el marco del PANETEM, en 2016 y 2017 se llevaron a cabo actividades de formación y de sensibilización sobre los textos legislativos y reglamentarios dirigidas a 120 actores que participan en la lucha contra el trabajo infantil. Asimismo, toma nota de que según los documentos transmitidos por el Gobierno, con el apoyo financiero de la Unión Europea, se ha elaborado un proyecto a fin de erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de valor del sector de la confección. Además, la Célula Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CNLTE), ha elaborado una Hoja de ruta para la eliminación del trabajo infantil en la agricultura, y ha creado un comité nacional de seguimiento de la Hoja de ruta. La Comisión también toma nota de que el Gobierno ha participado en la elaboración de un proyecto titulado «Cotton with Decent Work», junto con la OIT y el Brasil, que tiene por objetivo eliminar el trabajo infantil en la producción de algodón, así como en la elaboración de un proyecto financiado por la multinacional INDITEX cuyo objetivo es conseguir que se respeten más los principios y derechos fundamentales en el trabajo en las comunidades en donde se produce algodón. La Comisión observa que según el informe final de la encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística (INSTAT) en colaboración con el UNICEF, que se publicó en noviembre de 2016, el 56,5 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años realizan trabajo infantil y el 42,5 por ciento de éstos trabajan en condiciones peligrosas. Además, en el informe se señala que las regiones de Sikasso, Kouliboro y Kayes, en las que predomina la agricultura, son las más afectadas por el trabajo infantil, especialmente por los trabajos peligrosos, que realizan más del 50 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y 17 años (pág. 248). Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa de nuevo su ***profunda preocupación*** por el gran número de niños que trabajan sin haber alcanzado la edad mínima para hacerlo, a menudo, en condiciones muy peligrosas. ***La Comisión insta de nuevo al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil. Le pide que comunique información sobre los resultados obtenidos en el marco del PANETEM y de los programas de lucha contra el trabajo infantil en la agricultura y en la producción de algodón.***

Artículo 2, 1). 1. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación de la CSI, según la cual la legislación no protege de manera adecuada a los niños contra el trabajo infantil porque no prevé una protección específica para los niños que trabajan en la economía informal, en particular en la agricultura y en el servicio doméstico. Además, la CSI indicó que en Malí hay un total de 54 inspectores del trabajo, ninguno de los cuales ha recibido formación especializada en materia de trabajo infantil. El Gobierno indicó que los inspectores del trabajo se encargan de velar por la aplicación de la legislación del trabajo en los sectores formal e informal, pero que deberían reforzarse las capacidades de los inspectores del trabajo en materia de técnicas de intervención en el sector informal y sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, en diciembre de 2017, se contrató a diez inspectores del trabajo. Además, en 2017 y 2018 se organizaron dos talleres de fortalecimiento de las capacidades de los inspectores del trabajo sobre el trabajo infantil. Sin embargo, el Gobierno indica que a pesar de la formación en materia de trabajo infantil aún no se ha adoptado ninguna medida a fin de que los inspectores del trabajo se centren en los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para adaptar y reforzar los servicios de inspección del trabajo a fin de garantizar que los niños que no están vinculados por una relación de trabajo, por ejemplo los que trabajan por cuenta propia o en la economía informal, disfrutan de la protección prevista por el Convenio. Le pide que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.***

2. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 20, b), del Código de Protección del Niño, todo niño tiene derecho al empleo *a partir de los 15 años* de conformidad con la edad mínima especificada en el momento de la ratificación del Convenio. Sin embargo, la

Comisión tomó nota también de que el Código del Trabajo establece que la edad mínima para que los niños puedan trabajar en empresas, incluso como aprendices, es de *14 años*, y que el decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, sobre la aplicación del Código del Trabajo prevé una lista de las cargas que los *niños de edades comprendidas entre los 14 y 17 años* no pueden llevar, arrastrar o empujar, según el tipo de medio de transporte, el peso de la carga y el sexo del niño. La Comisión tomó nota de que en 2013 el Gobierno adoptó un proyecto de ley de enmienda de la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, relativa al Código del Trabajo de Malí, que fija la edad de admisión al empleo en 15 años, y señaló que los textos de aplicación del Código también se revisarían en este sentido. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para finalizar esta revisión a la mayor brevedad.

La Comisión toma nota con *interés* de la adopción de la ley núm. 2017-021, de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, relativa al Código del Trabajo de Malí, que en su artículo L.187 establece la edad mínima para que los niños puedan trabajar en empresas, incluso como aprendices, en 15 años. Toma nota de que el Gobierno indica que se está revisando el decreto núm. 96-178/P-RM por el que se establecen las modalidades de aplicación de ciertas disposiciones del Código del Trabajo. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que las disposiciones pertinentes del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, se pondrán en conformidad con el Convenio a fin de prohibir el trabajo de los niños menores de 15 años, y pide al Gobierno que transmita una copia de estas modificaciones una vez que se hayan adoptado.***

Artículo 3, 3). *Admisión a los trabajos peligrosos a partir de los 16 años.* La Comisión tomó nota de que ciertas disposiciones del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, permiten emplear a niños en trabajos peligrosos a partir de los 16 años. También tomó nota de que, si bien el Gobierno indicó que el artículo D.189-33 del decreto núm. 96-178/P-RM establece la obligación de velar por que los adolescentes de entre 16 y 18 años ocupados en trabajos peligrosos reciban una instrucción específica y adecuada o formación profesional en la rama de actividad correspondiente, el artículo no lo menciona. Además, el Gobierno señaló que los proyectos de textos de aplicación del Código del Trabajo se revisarían tras la adopción del nuevo Código del Trabajo por la Asamblea Nacional. Esta revisión debía incorporar las condiciones previstas en el *artículo 3, 3)*, del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, relativa al Código del Trabajo ha sido modificada por la ley núm. 2017-021, de 12 de junio de 2017. Asimismo, toma nota de que los servicios del trabajo han elaborado el proyecto de modificación del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996 así como el decreto de aplicación del nuevo Código del Trabajo, que se han presentado a los interlocutores sociales para que formulen las observaciones que estimen pertinentes. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que los proyectos de textos de aplicación del Código del Trabajo se adopten a la mayor brevedad y que sus disposiciones relativas a la admisión a los trabajos peligrosos a partir de los 16 años estén en conformidad con las condiciones previstas en el artículo 3, 3), del Convenio. Pide al Gobierno que transmita copia de estos textos una vez que se hayan adoptado.***

Artículo 7. Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual se comprometía a modificar el artículo 189-35 del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, a fin de que la edad mínima para realizar trabajos domésticos o trabajos ligeros de carácter estacional sea de 13 años y no de 12. Asimismo, tomó nota de que se estaba elaborando un proyecto de decreto para determinar los trabajos ligeros y las condiciones para realizarlos. El Gobierno señaló que esto se haría en el marco de la relectura global de los textos de aplicación del Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los textos de aplicación del Código del Trabajo modificado por la ley núm. 2017-21, en particular el decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, están en curso de adopción. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que los proyectos de textos de aplicación del Código del Trabajo se pondrán en conformidad con el Convenio a fin de reglamentar el empleo de niños en trabajos ligeros a partir de los 13 años. Pide al Gobierno que transmita copia de estos textos una vez que se hayan adoptado.***

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas y sanciones. 1. Reclutamiento forzoso de niños en los conflictos armados. La Comisión tomó nota de la observación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual la intensificación del conflicto armado en Malí había producido un aumento del reclutamiento de niños como soldados por las diferentes partes rivales activas en el norte del país. La Comisión expresó anteriormente su profunda preocupación por el hecho de que esta práctica conduce a graves violaciones de los derechos de los niños, incluidos violencia sexual y daños a su seguridad y salud. Tomó nota asimismo de la firma de un acuerdo de paz con los grupos armados, el 15 de mayo y el 20 de junio de 2015, que condujo a un cese el fuego en el terreno, y cuyo anexo 2 prevé un proceso de desarme, desmovilización y reinserción. El Gobierno también indicó que las partes refrendaron el reglamento del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz y que un comité de seguimiento de la aplicación del acuerdo y de la comisión nacional de desarme, desmovilización y reinserción adoptará un programa nacional a este respecto inclusivo, coherente y aceptado por todos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información a este respecto. Asimismo, toma nota de que, en su informe anual de 2017, la Célula Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CNLTE) recomendó al Gobierno que evaluara la primera fase del Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en Malí (PANETEM)

(2011-2015), y que modificará este plan incluyendo, entre otros, a los niños que habían sido reclutados por las fuerzas y grupos armados (EAFGA). La Comisión observa que, en su informe de 2 de febrero de 2018, el Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí indicó que los grupos armados signatarios del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, siguen reclutando y utilizando niños en sus filas (documento A/HRC/37/78, párrafo 44). El Secretario General indica, en su informe sobre los niños y el conflicto armado en Malí al Consejo de Seguridad de 21 de febrero de 2018 (documento S/2018/136), que, entre el 1.º de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017, se pudieron verificar 284 casos de reclutamiento y utilización de niños de entre 13 y 17 años por las partes en el conflicto, de los cuales 16 correspondían a niñas. En 2015 y 2016, se verificaron 84 casos de reclutamiento y 79 casos de utilización de niños. Se pudo establecer que, en el primer semestre de 2017, 18 niños fueron reclutados por grupos armados. En el informe se indica que todas las partes en el conflicto, a saber los grupos armados y las fuerzas armadas de Malí, han cometido numerosas infracciones graves relacionadas con los derechos de los niños, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual. El Secretario General precisa que la recopilación de datos relativos a las violaciones graves de los derechos de los niños se ve dificultada por la situación actual del país.

La Comisión *deplora* el reclutamiento de niños y su utilización en el conflicto armado que tiene lugar en el norte del país, especialmente habida cuenta de que la persistencia de esta peor forma de trabajo infantil conlleva otras violaciones graves de los derechos de los niños, tales como la violencia sexual. ***Reconociendo la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en ciertas regiones en el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con carácter de urgencia para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de menores de 18 años por las partes en el conflicto. Asimismo, le pide que lleve a cabo el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de todos los niños reclutados por las fuerzas y grupos armados a fin de garantizar su readaptación e inserción social. Por último, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que las personas que reclutan forzosamente a menores de 18 años para utilizarlos en el conflicto armado sean procesadas y sancionadas, y que transmita información a este respecto.***

2. *Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la existencia de niños *talibés* originarios de los países fronterizos que los maestros coránicos (*marabouts*) llevan a la ciudad. Estos niños se encuentran en condiciones de servidumbre, y son obligados a mendigar cotidianamente. La Comisión tomó nota de que, si bien el Código Penal y la ley núm. 2012-023 relativa a la lucha contra la trata de personas y prácticas similares prevén multas y penas de prisión, respectivamente, para toda persona que incite a un menor a la mendicidad o por la explotación organizada de la mendicidad de otros, la utilización de niños *talibés con fines puramente económicos* sigue siendo preocupante en la práctica. El Gobierno indicó que había adoptado medidas para reforzar la capacidad de los agentes del orden, pero no transmitió información alguna sobre el procesamiento y la condena de las personas, entre las que figuran los *marabouts* que obligan a los niños a mendigar. Además, el Gobierno señaló que la aplicación de las disposiciones legales relativas a la mendicidad requiere mucha valentía política ya que la práctica de la mendicidad a menudo está relacionada con la religión.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en su memoria sobre el número de niños víctimas de mendicidad forzosa y el número de *marabouts* procesados. Por ejemplo, toma nota de que en 2016 y 2017, se identificaron 35 y 42 víctimas y se investigó a tres y cinco individuos, respectivamente. Sin embargo, toma nota con ***preocupación*** del escaso número de procesamiento de personas que obligan a los niños a mendigar y de que no se imponen sanciones a esas personas. Además, la Comisión toma nota de que, según la recopilación de noviembre de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Alta Comisionada expresó preocupación por el reclutamiento de niños *talibés*, explotados como mendigos por *marabouts*, que en contrapartida reciben una educación islámica por parte de dichos *marabouts* (documento A/HRC/WG.6/29/MLI/2, párrafo 86). La Comisión recuerda que, en virtud del *artículo 7, 1)*, del Convenio, el Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se da efecto al Convenio, incluida la aplicación de sanciones penales. ***Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos de los marabouts que utilizan a menores de 18 años con fines puramente económicos, y se les imponen sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. Pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados obtenidos a este respecto, en concreto, información sobre el número de condenas y sanciones penales impuestas, en particular en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones de la ley núm. 2012-023.***

Artículos 3, d), y 7, 2). Trabajos peligrosos y medidas efectivas y en un plazo determinado. Niños que trabajan en la minería del oro a pequeña escala tradicional. La Comisión tomó nota de la observación de la CSI de septiembre de 2014 según la cual la explotación de los yacimientos de oro emplea a entre 20 000 y 40 000 niños, algunos de los cuales no tienen siquiera 5 años de edad. Los niños extraen el mineral de galerías subterráneas y proceden a la amalgama del oro con el mercurio. En el marco de estas operaciones, los niños están expuestos a condiciones insalubres y peligrosas que tienen una grave incidencia en su salud y seguridad. La Comisión tomó nota con preocupación de que, si bien el programa de acción para la prevención, el retiro y la reinserción socioprofesional de los niños expuestos a riesgos o víctimas que trabajan en las pequeñas explotaciones mineras tradicionales de la región de Sikasso (proyecto OIT/IPEC/AECID) permitió impedir la ocupación de 2 655 niños, retirar a otros 1 946 del trabajo y proceder a la reinserción de 709, sigue

habiendo muchos niños que trabajan en condiciones peligrosas en la minería del oro a pequeña escala tradicional, algunos de los cuales no tienen siquiera 5 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información a este respecto. Asimismo, toma nota de que, según su informe de actividades de 2017, la CNLTE recomendó al Gobierno que modifique el PANETEM a fin de reforzar las acciones en el sector de la minería del oro a pequeña escala tradicional que ocupa a un número cada vez mayor de niños (pág. 17). ***La Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos y a adoptar medidas eficaces con carácter de urgencia, en el marco del Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en Malí (PANETEM) o de otra forma, a fin de librar a los niños de las peores formas de trabajo en la minería del oro a pequeña escala tradicional y rehabilitarlos e integrarlos socialmente. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos al respecto.***

Artículo 7, 2), a). Acceso a la educación básica gratuita. La Comisión tomó nota de que en Malí la edad de finalización de la escolaridad obligatoria es de 15 años. Asimismo, tomó buena nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de educación pero señaló que las tasas de escolarización en el primer ciclo siguen siendo bajas y el número de niños que abandonan la escuela después de la educación primaria es elevado. La Comisión toma nota de que la CSI indicó que sólo el 35,9 por ciento de los niños y el 25,2 por ciento de las niñas acceden a la enseñanza secundaria. El Gobierno indicó que el conflicto armado ha afectado mucho al sistema educativo de las regiones del norte del país pero que el hecho de que la administración funcione de nuevo y de que se haya reanudado la cooperación con los interlocutores en materia de educación ha permitido reabrir muchas escuelas en las regiones de Mopti, Tombouctou y Gao. Por último, el Gobierno indicó que se había adoptado un programa provisional para el período 2015-2016, antes de la adopción del PRODEC II (Programa decenal de desarrollo de la educación, después de la evaluación del PRODEC I). En 2012-2013, la tasa bruta de escolarización era del 69,70 por ciento en la enseñanza primaria y del 50 por ciento en la enseñanza secundaria, y la tasa de abandono escolar del 8,3 por ciento en la enseñanza primaria. La Comisión señaló que las tasas diferían mucho entre las regiones.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el programa provisional sigue estando en fase de evaluación y se ha prolongado hasta 2018. El PRODEC II sigue en curso de elaboración. La Comisión toma buena nota del informe final de la evaluación del PRODEC, de noviembre de 2015, comunicado por el Gobierno en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), en el que se señala que después de un período inicial de crecimiento rápido del número de niños escolarizados y de la tasa de finalización de la enseñanza básica el proceso se ha ralentizado y la mayor parte de los indicadores han evolucionado de forma desfavorable a partir de 2010. Si bien sigue habiendo aún mucha resistencia y discriminación en relación con la escolarización de las niñas, la reducción de las disparidades de género es un resultado importante del PRODEC I para que niñas y niños cursen y finalicen la enseñanza básica. La Comisión toma nota de que la evaluación del PRODEC I ha permitido formular recomendaciones para preparar el PRODEC II, que incluyen intensificar los esfuerzos en materia de escolarización en la enseñanza básica, continuar reduciendo las disparidades por zona de residencia y género, formar a los docentes de la educación básica y redinamizar la educación informal. Asimismo, la Comisión toma buena nota de las estadísticas, comunicadas por el Gobierno con arreglo al Convenio núm. 138, sobre la enseñanza básica en los años escolares 2013-2014, 2015-2016 y 2016-2017 y acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Gobierno en lo que respecta a las estadísticas comunicadas. Toma nota de que la tasa bruta de escolarización es del 72,1 por ciento en la enseñanza primaria y del 49,2 por ciento en el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Así, la Comisión señala que la tasa bruta de escolarización no ha mejorado de forma neta. Desde 2013, además, la Comisión observa que existen grandes disparidades regionales en el acceso a la educación. Las tasas de finalización de la educación primaria y del primer ciclo de la enseñanza secundaria han aumentado, pero siguen siendo bajas ya que la tasa de finalización de la enseñanza primaria es del 48,1 por ciento y la del primer ciclo de la enseñanza secundaria del 35,4 por ciento.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de julio de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló su preocupación por el bajísimo índice de finalización de las niñas en la enseñanza secundaria, la baja calidad de la educación y las disparidades entre las zonas rurales y las zonas urbanas. El Comité también observó con preocupación la existencia de un sistema de educación paralelo con escuelas coránicas que quedan fuera de la competencia del Ministerio de Educación (documento CEDAW/C/MLI/CO/6-7, párrafo 29). Asimismo, la Comisión observó que en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2018 se señala que al final del año escolar 2017-2018 seguían cerradas 735 escuelas con lo que se privaba a 332 400 niños de la escolaridad (documento S/2018/866, párrafo 63). La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y la ACNUDH también observaron la ocupación de escuelas por grupos armados en algunas zonas del norte de Malí (documento A/HRC/WG.6/29/MLI/2, párrafo 60). La Comisión expresa su ***preocupación*** por el gran número de niños privados de educación debido al conflicto armado que existe en el norte de Malí. ***Reconociendo la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y facilitar el acceso a la educación básica gratuita, en particular aumentando las tasas de escolarización tanto a nivel primario como secundario y reduciendo las tasas de abandono escolar en todas las regiones del país. A este respecto, pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos en el marco de la aplicación del programa provisional 2015-2016 y del PRODEC II.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Marruecos

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo y aplicación del Convenio en la práctica. 1. *Niños que trabajan en actividades artesanales informales y otros sectores.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), el trabajo infantil es habitual en las actividades artesanales informales. Asimismo, tomó nota de que, según el informe titulado *Comprender el trabajo infantil en Marruecos*, el porcentaje de niños de entre 7 y 14 años que trabajan es del 7 por ciento y este porcentaje se eleva al 18 por ciento para los niños de entre 12 y 14 años. En el informe también se indica que en las zonas rurales trabaja el 87 por ciento de los niños, en general en la agricultura. Además, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, los niños que trabajan en actividades artesanales informales o formales, en las que participan más de cinco empleados, no gozan de la protección del Código del Trabajo y, en consecuencia, de la aplicación de la edad mínima de 15 años para la admisión al empleo. También tomó nota de que, según el *Estudio sobre las actividades de los niños en las pequeñas explotaciones agrícolas de Marruecos* (2014), la edad media de los niños que trabajan en las pequeñas explotaciones agrícolas es de 14,3 años, representando los que tienen más de 15 años aproximadamente el 57 por ciento y los de menos de 12 años el 10 por ciento del total. Además, tomó nota de que la edad media en el momento del abandono escolar es de 13 años. La Comisión tomó nota con interés de que el Gobierno indicaba que el proyecto de ley relativo a las condiciones de trabajo y de empleo en los sectores de carácter puramente tradicional, que preveía la prohibición del trabajo de los niños menores de 15 años en este sector con arreglo a los artículos 143 y 153 del Código del Trabajo, fue examinado por el Consejo del Gobierno el 25 de diciembre de 2014.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el proyecto de ley relativo a las condiciones de trabajo y de empleo en los sectores de carácter puramente tradicional ha sido modificado para incluir nuevas disposiciones proteccionistas favorables a los trabajadores de estos sectores. También toma nota de que el Gobierno informa de que el proyecto de ley se transmitió a la Secretaría General del Gobierno (SGG) el 7 de junio de 2018. Además, la Comisión toma nota de que, según el Alto Comisionado del Plan, la encuesta trimestral sobre el empleo pone de relieve que en el tercer trimestre de 2017, 46 662 niños de menos de 15 años trabajan y más del 88 por ciento de éstos lo hacen en zonas rurales. Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de diciembre de 2016, el Comité de Derechos Humanos señaló su preocupación por la persistencia de la explotación económica de los niños, en particular como trabajadores agrícolas (documento CCPR/C/MAR/CO/6, párrafo 47). La Comisión recuerda que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y a todas las formas de empleo o de trabajo, incluidos el sector informal artesanal y agrícola. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que el proyecto de ley relativo a las condiciones de trabajo y de empleo en los sectores de carácter puramente tradicional se adoptará a la mayor brevedad y pide al Gobierno que transmita copia de esta ley una vez que se haya adoptado. Asimismo, solicita al Gobierno que siga realizando esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil, especialmente en los sectores artesanal y agrícola, y que comunique información sobre la implementación de todo proyecto pertinente a este respecto, así como sobre los resultados alcanzados.***

2. *Niños que trabajan en el servicio doméstico.* ***En lo que respecta a la cuestión del trabajo doméstico de los niños, la Comisión pide al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados con arreglo al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).***

Artículo 9, 1). Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 151 del Código del Trabajo, el empleo de niños menores de 15 años de edad, en violación del artículo 143 del Código, podrá ser sancionado con una multa de 25 000 a 30 000 dirhams (entre 3 000 y 3 600 dólares de los Estados Unidos) y, en caso de reincidencia, con una pena de prisión de seis días a tres meses y/o una multa de 50 000 a 60 000 dirhams (entre 6 000 y 7 200 dólares de los Estados Unidos). Sin embargo, también tomó nota de que, en virtud de los artículos 150 y 183 del Código del Trabajo, el empleo de menores de 18 años en trabajos peligrosos, y en canteras y minas, o en trabajos susceptibles de entorpecer su crecimiento, en violación de los artículos 147 y 179 del Código, puede ser castigado con multas de 300 a 500 dirhams (entre 36 y 60 dólares de los Estados Unidos). La Comisión lamentó tomar nota de la falta de información sobre posibles modificaciones legislativas en relación con las sanciones por no respetar la prohibición de emplear a menores de 18 años en trabajos peligrosos. Además, la Comisión tomó nota de que, antes de recurrir a las sanciones, el inspector del trabajo debe asesorar y proporcionar información a los empleadores sobre los peligros a los que se exponen los niños trabajadores. Los artículos 542 y 543 del Código del Trabajo prevén que el inspector del trabajo que detecte una infracción de las disposiciones legislativas o reglamentarias relativas a la higiene y la seguridad, que ponga en peligro inminente la seguridad o la salud de los asalariados, deberá obligar al empleador a aplicar de manera inmediata todas las medidas necesarias. Si el empleador se niega a cumplir el requerimiento, o lo pasa por alto, el inspector del trabajo remitirá el caso al presidente del Tribunal de Primera Instancia, que puede acordar un plazo para que el empleador adopte todas las medidas necesarias a fin de impedir el peligro inminente y ordenar el cierre del establecimiento, fijando, llegado el caso, la duración necesaria de este cierre. La Comisión señaló que, por regla general, desde el momento en que se pone fin al empleo delictivo no se procesa a las personas que han empleado a niños infringiendo de esta forma las disposiciones que dan cumplimiento al Convenio.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, en 2017 los inspectores del trabajo efectuaron, 684 visitas en las que realizaron 2 306 observaciones y 43 requerimientos. El Gobierno indica que de los 85 niños menores de 15 años que se comprobó que trabajaban, 70 fueron retirados del trabajo y, de los 542 niños de entre 15 y 18 años que realizaban trabajos peligrosos, 158 fueron retirados de estos tipos de trabajos. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no ha transmitido información alguna sobre el número de personas procesadas ni sobre las sanciones impuestas a las personas que han infringido las disposiciones que dan efecto al Convenio. Además, la Comisión toma nota con *preocupación* de que, a pesar de que plantea esta cuestión desde 2005, las sanciones por infringir la prohibición de emplear a menores de 18 años en trabajos peligrosos siguen sin ser lo suficientemente adecuadas y disuasorias para garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio en materia de trabajos peligrosos. ***La Comisión insta al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para garantizar que las personas que emplean a menores de 18 años en trabajos peligrosos son procesadas y sancionadas de forma suficientemente eficaz y disuasoria, con arreglo al artículo 9, 1), del Convenio, y en conformidad con las sanciones más severas previstas en el artículo 151 del Código del Trabajo. Además, pide al Gobierno que transmita información sobre la naturaleza de las infracciones del Convenio que ha detectado la Inspección del Trabajo, el número de personas procesadas por cada tipo de infracción y las sanciones impuestas, en particular en lo que respecta a las disposiciones que dan efecto al Convenio.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, a) y d), y 7, 1), del Convenio. Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso y sanciones. Trabajo doméstico infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) había indicado que el trabajo doméstico infantil, en condiciones de servidumbre, es una práctica corriente en el país, ya que hay padres que venden a sus hijos, que a veces sólo tienen 6 años de edad, para que trabajen como sirvientes. La Comisión tomó nota de que el artículo 10 del Código del Trabajo prohíbe el trabajo forzoso y de que en virtud del artículo 467-2 del Código Penal está prohibido el trabajo forzoso de los niños menores de 15 años. Asimismo, tomó nota de que se estaba llevando a cabo el proceso de adopción de un proyecto de ley sobre el trabajo doméstico, que fija en 16 años la edad mínima de admisión a este tipo de trabajo. El Gobierno indicó que se había elaborado una lista específica que establece los trabajos peligrosos prohibidos en el sector del trabajo doméstico cuyo proceso de aprobación se iniciaría después de la promulgación del proyecto de ley antes mencionado. Además, una primera encuesta sobre las niñas trabajadoras domésticas puso de relieve que alrededor de 23 000 niñas menores de 18 años trabajaban en el servicio doméstico en la región del Gran Casablanca, y que el 59,2 por ciento de éstas tenían menos de 15 años. Además, la encuesta puso de relieve que muchas de estas niñas eran víctimas de abusos. La Comisión tomó nota con preocupación de que, según el Comité de los Derechos del Niño, las autoridades no han adoptado suficientes medidas para retirar a las niñas, algunas de las cuales tienen apenas 8 años, de las casas en las que trabajan como sirvientes en condiciones muy precarias. Instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley sobre el trabajo doméstico y la lista que fija los trabajos domésticos peligrosos se adoptaran con carácter de urgencia.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de la adopción de la ley núm. 19-12 que establece las condiciones de trabajo y empleo de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. En su memoria el Gobierno indica que se han adoptado dos decretos de aplicación, a los que se hace referencia en los artículos 3 y 6 de la ley, que prevén respectivamente el modelo de contrato de trabajo de los trabajadores domésticos y la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los trabajadores domésticos de entre 16 y 18 años. Las actividades prohibidas a los menores de 18 años tienen relación, entre otras cosas, con la utilización de productos químicos y de herramientas o máquinas eléctricas cortantes que pueden representar un riesgo para la seguridad o la salud de los empleados domésticos, y con las tareas que pueden exponer a los trabajadores domésticos a riesgos sanitarios debido al contacto con personas que sufren enfermedades contagiosas.

La Comisión toma nota de que el artículo 6 de la ley núm. 19-12 fija en 18 años la edad mínima de admisión al empleo en el servicio doméstico. Este artículo prevé un período transitorio de cinco años durante el que los menores de entre 16 y 18 años pueden ser empleados como trabajadores domésticos, previa autorización escrita de sus tutores. El artículo 7 de la ley prohíbe el trabajo forzoso de los empleados domésticos. En virtud del artículo 23 de la ley, las personas que infrinjan las disposiciones de los artículos 6 y 7 pueden ser sancionadas con multas de 25 000 a 30 000 dirhams (entre 3 000 y 3 600 dólares de los Estados Unidos) y en caso de reincidencia con multas del doble y/o con penas de prisión de entre uno y tres meses. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de diciembre de 2016, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la persistencia de la explotación económica de niños, en particular como trabajadores domésticos (documento CCPR/C/MAR/CO/6, párrafo 47). Tomando nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para reglamentar el trabajo doméstico, la Comisión recuerda que en virtud del *artículo 3, a) y d)*, del Convenio, el trabajo realizado por adolescentes de menos de 18 años y en condiciones análogas a la esclavitud o en condiciones peligrosas constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe, en virtud del *artículo 1*, eliminarse con carácter de urgencia. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que siga realizando esfuerzos para luchar contra el trabajo doméstico infantil, en particular, velando por que la ley núm. 19-12 que establece las condiciones de trabajo y empleo de las trabajadoras y los trabajadores domésticos se aplique efectivamente, y por que se impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica a las personas que obligan a menores de 18 años a realizar trabajos domésticos en condiciones peligrosas o abusivas. Asimismo, solicita al Gobierno que transmita***

información sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, el número de personas enjuiciadas y las sanciones impuestas.

Artículo 3, a). Trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había señalado que no existía legislación nacional sobre la trata de niños. Tomó nota de que, según el Comité de los Derechos del Niño, Marruecos sigue siendo un país de origen, destino y tránsito para los niños que son sometidos a trabajos forzados, especialmente como empleados domésticos, y son víctimas de trata con fines de explotación sexual y mendicidad forzosa, siendo niños dos tercios de las víctimas de trata. La Comisión también tomó nota de que, el *Estudio sobre la trata de mujeres y de niños en Marruecos* (2015) realizado conjuntamente por ONU-Mujeres, Marruecos y la Confederación Suiza, pone de relieve la existencia de trabajo forzoso de niños varones en la artesanía y la agricultura así como la trata con fines de explotación sexual en la prostitución o la pornografía. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para que se adoptara una ley que prohíba la trata de niños.

La Comisión toma nota con *interés* de la adopción de la ley núm. 27-14 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, promulgada a través del Dahir núm. 1-16-104, de 18 de julio de 2016, en virtud de la cual la explotación incluye todas las formas de explotación sexual, y, en particular, la explotación de la prostitución de otras personas así como la explotación mediante la pornografía, incluso a través de medios de comunicación en general, e informática en particular, y también la explotación del trabajo forzoso, la servidumbre, la mendicidad y la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, así como la explotación en conflictos armados (artículo 448.1). La Comisión toma nota de que en virtud del artículo 448.4 de la ley el delito de trata de personas se castigará con penas de prisión de entre veinte y treinta años y con multas de 200 000 a 2 000 000 de dirhams (21 000-210 000 dólares de los Estados Unidos) cuando la víctima sea menor de 18 años. El Gobierno indica que la ley contiene disposiciones sobre las medidas institucionales y prevé la creación de una comisión consultiva nacional cuya misión será presentar propuestas relativas a las cuestiones en materia de lucha contra la trata de personas y velar por que se adopten las medidas necesarias para apoyar los proyectos de asociaciones de ayuda a las víctimas.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el Informe sobre los trabajos y recomendaciones de la jornada de estudio sobre el marco institucional relativo a la lucha contra la trata de seres humanos, de julio de 2017, Marruecos continúa siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata de niños con fines de explotación laboral, sexual y de servidumbre doméstica. En el informe se destaca que Marruecos se ha convertido en un país de tránsito de numerosos migrantes procedentes de África Subsahariana y Asia, que corren especialmente el riesgo de ser víctima de las redes de trata. ***Tomando nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para luchar contra la trata de personas, la Comisión le pide que transmita información sobre la aplicación de la ley núm. 27-14 relativa a la lucha contra la trata de personas en la práctica, indicando, entre otras cosas, el número de niños víctimas de trata desglosado por género y edad y el número y la naturaleza de las condenas y sanciones penales impuestas.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de esas peores formas, y asegurar su rehabilitación e inserción social. Prostitución infantil y turismo sexual. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su preocupación por la persistencia de la prostitución infantil y del turismo sexual que afecta a jóvenes marroquíes e inmigrantes, especialmente varones, a pesar de la modificación de 2003 del Código Penal que introdujo el delito del turismo sexual. Tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual la lacra de la explotación sexual infantil sigue siendo invisible y desconocida en Marruecos, razón por la cual el Gobierno no escatima esfuerzos. Además, en sus observaciones finales de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la expansión del turismo sexual en Marruecos. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, en la evaluación de mitad de período, realizada en 2011, del Plan Nacional de Acción para la Infancia 2006-2015 (PANE), el Gobierno indicó que el PANE había permitido que se registraran logros notables en materia de protección de los niños víctimas de explotación sexual, tales como la creación de nuevas estructuras públicas en materia de protección de los niños víctimas de violencia sexual, de unidades de atención en los tribunales y en los hospitales, de unidades de escucha en el ámbito de la Dirección General de Seguridad Nacional, de unidades de orientación y de escucha en los establecimientos escolares, así como del teléfono verde ONDE y los espacios de acogida a los niños en las comisarías. En este marco, la Comisión tomó nota de que entre 2007 y 2010 se establecieron cinco unidades de protección de la infancia (UPE) en Marrakech, Casablanca, Tánger, Meknes y Essaouira, para velar por que se proporcione una mejor atención de carácter médico, psicológico y jurídico a los niños víctimas de violencia o malos tratos, incluidos los niños víctimas de explotación sexual o económica, de la cual se han podido beneficiar cientos de niños. El Gobierno indicó que, en 2013, había elaborado una política pública integrada de protección de la infancia con el objetivo de, en particular, proteger a los niños frente a la explotación sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la política pública integrada de protección de la infancia en Marruecos, 2015-2025 (PPIPM), adoptada el 3 de junio de 2015, tiene cinco objetivos estratégicos, entre los que figuran: i) el reforzamiento del marco legal en materia de protección de los niños y de su eficacia; ii) el establecimiento de dispositivos territoriales integrados de protección de la infancia, y iii) el establecimiento de sistemas de información, de seguimiento-evaluación y de supervisión. El Gobierno indica que se ha establecido un programa de rehabilitación de las UPE, elaborado por el Ministerio de Familia, Solidaridad e Igualdad y Desarrollo Social (MFSEDS) en colaboración con la asistencia nacional y asociaciones que tienen experiencia en este ámbito, a fin de reforzar las estructuras de protección social de los niños y mejorar la calidad de la atención que reciben los niños en situación difícil. En 2016, se crearon tres

nuevas UPE en Salé, Taza y Agadir. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información sobre el número de niños que se ha evitado que sean víctimas de explotación sexual comercial o han sido retirados de ésta gracias a la intervención de las UPE. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para luchar contra la explotación sexual comercial de niños. Asimismo, solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la política pública integrada de protección de la infancia en lo que respecta a la explotación sexual así como información sobre el número de niños que se ha evitado que sean víctimas de explotación sexual comercial o han sido retirados de ésta a través de las UPE.***

Apartado d). Niños especialmente expuestos a riesgos. Trabajo doméstico infantil. La Comisión había tomado nota de la adopción del Programa Nacional de Lucha Contra el Trabajo Doméstico de las Niñas (INQAD) en el marco del PANE. Asimismo, tomó nota de los resultados obtenidos en el marco del proyecto OIT/IPEC/PAMODEC, en particular de la formación de 50 inspectores del trabajo infantil especializados en trabajo doméstico infantil, la realización de tres encuentros regionales de información y de concertación con los actores interesados con miras a establecer un proceso de elaboración de planes regionales de lucha contra el trabajo doméstico y de seis sesiones de formación sobre el trabajo doméstico infantil dirigidas a educadores y animadores sociales de ONG, la participación en la consulta sobre el proyecto de ley sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y la ejecución de dos programas de acción en materia de lucha contra el trabajo doméstico de las niñas en las regiones de Rabat/Salé y Marrakech/Safi en apoyo a las asociaciones AMESIP (Asociación marroquí de ayuda a los niños en situación precaria) y Al Karam.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en 2017, su ayuda financiera permitió que ciertas asociaciones desarrollaran proyectos a fin de, entre otras cosas, reducir el fenómeno del trabajo doméstico de las niñas muy pequeñas y al mismo tiempo luchar contra el abandono escolar. Si bien el Gobierno señala que, en 2016, 286 niños menores de 15 años fueron retirados del trabajo y 271 menores de entre 15 y 18 años fueron retirados de los trabajos peligrosos, incluidas niñas trabajadoras domésticas, la Comisión toma nota de la falta de información sobre el número de niñas retiradas del trabajo doméstico. ***La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos en materia de identificación, retirada y reinserción de niñas menores de 18 años que trabajan en el servicio doméstico y son víctimas de explotación económica o sexual, y le pide que comunique información sobre los resultados obtenidos en lo que respecta al trabajo doméstico de las niñas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) recibidas el 31 de agosto de 2018 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las indicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el Ministerio de Trabajo autoriza, sin excepción, el trabajo de los niños de 13 años de edad, tanto en el sector agrícola como en el sector no agrícola. La Comisión también tomó nota de que, según el estudio realizado por el Gobierno en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente 90 000 niños menores de 14 años trabajaban en el país.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CLTM, según las cuales, niños pequeños, incluyendo hijos de esclavos y antiguos esclavos, trabajan en condiciones peligrosas en los sectores de la agricultura, la pesca artesanal y en trabajos de construcción y de recolección de desperdicios. Además, la CLTM indica que esos niños trabajan sin descanso durante toda la jornada, sufriendo como consecuencia de ello múltiples problemas de salud. La Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno, según la cual el 14 de mayo de 2014 se adoptó un Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil 2015-2020 (PANETE-RIM). La Comisión toma nota de que PANETE-RIM se inscribe en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, cuya Recomendación núm. 17 preconiza tomar en cuenta la lucha contra el trabajo infantil al concertarse acuerdos entre el Estado y las empresas multinacionales. El Gobierno indica que ese Plan de acción se articula en torno a cinco ejes estratégicos, es decir, el refuerzo de los marcos jurídicos e institucionales, el refuerzo de las capacidades técnicas y operacionales de los actores, la sensibilización y la mejora de los conocimientos sobre el trabajo infantil, la ejecución de acciones directas de lucha contra el trabajo infantil en los ámbitos y sectores de utilización y de explotación, así como la colaboración, la coordinación y las alianzas de cooperación. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CGTM, según las cuales los interlocutores sociales fueron asociados a la elaboración y concepción del PANETE-RIM. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que el establecimiento de 30 sistemas comunales de protección de los niños en 10 wilaya ha permitido hacerse cargo de 10 782 niños víctimas de ese trabajo. No obstante, la Comisión observa que, según el informe MICS4 – Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, de 2011, finalizada por la Oficina Nacional de Estadísticas en 2014 y mencionada en el PANETE-RIM, el 22 por ciento de los niños de 5 a 14 años participan en el trabajo infantil. Al tiempo de tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión debe expresar su ***preocupación*** por la situación de los niños que trabajan, de edades inferiores a la edad mínima, frecuentemente en condiciones peligrosas. ***En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la abolición efectiva en el trabajo infantil y comunicar informaciones relativas a las actividades y los resultados obtenidos en el marco de la aplicación del Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil 2015-2020 (PANETE-RIM).***

Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno informó que uno de los métodos para garantizar la abolición del trabajo infantil, fue la adopción de la Ley núm. 2001-054, de 19 de julio de 2001, sobre la Obligación de la Enseñanza Fundamental para los niños de ambos sexos de 6 a 14 años cumplidos por una duración de al menos seis años de escolaridad. Sin embargo, la Comisión también había tomado nota de la escasa tasa de escolarización en la enseñanza primaria y la tasa muy baja de escolarización en la enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el Centro de Protección e Integración Social Infantil (CPISE) ha permitido la reinserción escolar de más de 1 000 niños no escolarizados. La Comisión también toma nota de que en el Ministerio de Educación se ha establecido una unidad encargada de la cuestión de los niños no escolarizados, según se indica en el informe anual del UNICEF 2013 (pág. 17). Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones de la CLTM según las cuales el Estado no hace esfuerzo alguno para crear condiciones propicias que garanticen la escolaridad de los niños y un nivel de vida aceptable, e indican que la mayor parte de las *adwabas* (aldeas de antiguos esclavos) carecen de escuela y de servicios básicos. La Comisión también toma nota de que, según el informe del UNICEF, la falta de escolarización sigue siendo un desafío importante en Mauritania. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el *Análisis de la situación del trabajo infantil en Mauritania* (informe sobre el trabajo infantil 2015) elaborado conjuntamente por el Gobierno y la OIT/IPEC, el abandono escolar constituye una de las causas principales de la presencia de numerosos niños en el mercado de trabajo de Nouakchott (pág. 20). Al tiempo de tomar debida nota de las medidas previstas por el PANETE-RIM, por ejemplo, las medidas de apoyo al programa ZEP (zonas de educación prioritaria) para disminuir el abandono escolar y mejorar la tasa de asistencia (objetivo 4.2), la Comisión toma nota con **preocupación** de la persistencia de escasas tasas de asistencia escolar, a tenor de las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de 2013, según las cuales la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria es del 73,1 por ciento, del 21,6 por ciento la enseñanza secundaria y del 64,1 por ciento la tasa de terminación de la escuela primaria. **Recordando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias, incluidas en el marco de la aplicación del PANETE-RIM, para suministrar una enseñanza obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, mediante el aumento de las tasas de escolarización de la enseñanza primaria y secundaria y la disminución de la tasa de abandono escolar. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre toda novedad a este respecto.**

Artículo 7, párrafo 3. Determinación de los trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 154 del Código del Trabajo que reglamenta el empleo de los niños de 12 a 14 años en trabajos ligeros, ningún niño de 12 años cumplidos y de menos de 14 años puede ser empleado sin autorización expresa del Ministro encargado del trabajo, y únicamente bajo determinadas condiciones que limitan las horas de este empleo. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 7, párrafo 3, dispone que, además del número de horas y de las condiciones de trabajo, la autoridad competente debe determinar las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de los niños de 12 a 14 años. La Comisión también había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cual se transmitirá a la Oficina, en cuanto se adopten, una copia de las disposiciones que determinen las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de los niños.

La Comisión toma nota de la ausencia de información a este respecto en la memoria del Gobierno. **Al observar que un número importante de niños de edades inferiores a la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo trabajan en Mauritania, la Comisión insta nuevamente con firmeza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, especialmente en el marco de aplicación del objetivo 1.2 del PANETE-RIM, para armonizar la legislación nacional con el Convenio y reglamentar el empleo de niños de 12 a 14 años en trabajos ligeros.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), recibidas el 31 de agosto de 2018, y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud o prácticas análogas. 1. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley núm. 025/2003, de 17 de julio de 2003, sobre la Represión de la Trata de Personas. La Comisión señaló que Mauritania sería un país de origen en lo que respecta a la trata de niños con fines de explotación de su trabajo.

La Comisión toma nota de la ausencia de información a ese respecto en la memoria del Gobierno. La Comisión observa que el Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 2015-2020 (PANETE-RIM) ha permitido identificar la presencia de niños víctimas de la trata en Mauritania, incluidos los niños víctimas de las secuelas de la esclavitud, los niños *talibés* y los niños extranjeros (párrafos 2.4). **La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para garantizar, en la práctica, la protección de los niños menores de 18 años contra la venta y la trata de niños con fines de explotación sexual o de su trabajo. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación de la Ley núm. 025/2003, de 17 de julio de 2003, sobre la Represión de la Trata de Personas en la práctica, comunicando especialmente estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las investigaciones realizadas, los procesamientos llevados a cabo, y las condenas y las sanciones penales aplicadas.**

2. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 42, apartado 1, de la ordenanza núm. 2005-015, sobre la protección penal del niño, dispone que el hecho de incitar o de emplear directamente a un niño en la mendicidad, está castigado con una pena de uno a seis meses de prisión y una multa de 100 000 ouguiyas. La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales los maestros de las escuelas religiosas obligan a los niños a ir a las calles a mendigar, exponiéndolos a la delincuencia y a riesgos peligrosos de daños a su integridad. Por último, la Comisión tomó nota de la información de la Relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud señalando que existe una unidad de policía especializada, formada para trabajar con niños, y que los servicios del Ministro del

Interior vigilan las *madrazas* para asegurarse de que los niños no sean alentados a mendigar en beneficio de sus maestros religiosos.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales un estudio realizado en Nouakchott en 2013 demuestra que la práctica de la mendicidad afecta al 3,57 por ciento de los niños de 3 a 5 años, el 5,95 por ciento de los niños de 6 a 7 años, el 14,29 por ciento de los niños de 9 a 10 años, el 27,38 por ciento de los niños de 12 a 14 años y el 9,25 por ciento de los niños de 15 años. Además, el estudio demuestra que el 90 por ciento de los niños mendigos son varones y que el 61 por ciento de los niños declaran que mendigan por instrucciones de su *marabout*. Según el PANETE-RIM, los niños *talibés* están expuestos a situaciones peligrosas, y pasan en la calle la mayor parte de su tiempo, sin, en algunos casos, poder regresar si no aportan algo a su maestro bajo pena de ser castigados físicamente (párrafo 2.4). La Comisión también observa que la situación particular de los niños *talibés* se tomará en cuenta en el marco de las acciones y las medidas de prevención previstas en el objetivo 4.2 del PANETE-RIM. Sin embargo, la Comisión toma nota de la ausencia de información en relación con las investigaciones y procesamientos iniciados contra los *marabouts*. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva y el respeto de las disposiciones que dan efecto al Convenio, incluso mediante el establecimiento y la aplicación de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. **En consecuencia, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven a término investigaciones exhaustivas y el procesamiento eficaz de los marabouts que utilizan niños menores de 18 años con fines puramente económicos, y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de niños talibés que han sido identificados por el servicio de policía especializada y por los servicios del Ministro del Interior. Por último, pide al Gobierno que comunique una copia del estudio sobre los niños talibés realizado en 2013.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. La Comisión tomó nota de la falta de información sobre las medidas adoptadas en Mauritania para identificar y proteger a los niños que viven o trabajan en la calle.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales, a través del sistema nacional de protección del niño establecido por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Infancia y la Familia, 5 084 niños trabajadores y mendigos no escolarizados han sido incorporados al sistema escolar en el ámbito de las *wilayas* (regiones) de Nouakchott, Dakhlet Nouadhibou y de Assaba. No obstante, la Comisión toma nota de la presencia persistente de niños que ejercen la mendicidad según se indica en el *Análisis de la situación del trabajo infantil en Mauritania* (Informe sobre el trabajo infantil 2015, párrafo 13, pág. 39) elaborado conjuntamente por el Gobierno y la OIT/IPEC. **La Comisión pide al Gobierno que continúe indicando el número de niños víctimas de la mendicidad retirados de la calle a los que se ha asegurado su rehabilitación e inserción social, especialmente en el centro de protección y de integración de los niños en situación difícil o por los servicios del Ministro del Interior. Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar todas las medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado para localizar a los niños talibés que son obligados a mendigar y librarlos de tales situaciones, al tiempo que se asegure su rehabilitación y su inserción social.**

Apartado e). Situación particular de las niñas. Trabajo doméstico. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual las niñas pequeñas que trabajan como empleadas de hogar tienen, la mayoría de las veces, una instrucción escolar limitada o ni siquiera están instruidas. La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales los trabajos domésticos en los hogares son trabajos cotidianos, pesados e intensos para los niños que, desde muy pequeños, están sometidos a vejaciones. Además, la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicaba que muchas niñas pequeñas son forzadas a un régimen de servidumbre doméstica no remunerada y son particularmente vulnerables a la explotación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto en su memoria. La Comisión toma nota, no obstante, de la información contenida en el PANETE-RIM, según la cual los niños empleados domésticos representan el 17,28 por ciento de los niños que figuran en la encuesta y trabajan más de 16 horas diarias. Además, el plan señala que en su mayoría, se trata de niñas no escolarizadas que trabajan de manera clandestina y, en particular están sujetas a malos tratos, violaciones, falta de pago de las remuneraciones, etc. (párrafo 2.4). La Comisión observa también que, según el *Estudio relativo al análisis legislativo e institucional sobre el trabajo infantil en Mauritania* (Estudio legislativo 2015) elaborado conjuntamente por el Gobierno y la OIT, el trabajo doméstico está reservado tradicionalmente a las hijas de antiguas esclavas que se ven obligadas a reproducir la situación de sus madres sujetas a la servidumbre. El estudio añade que las niñas que realizan trabajos domésticos están sistemáticamente en situación de pobreza y, en su mayor parte, están expuestas a malos tratos, la explotación y la violencia (pág. 8). La Comisión se ve obligada a expresar su **preocupación** ante la situación de las niñas que realizan trabajos domésticos. En efecto, la Comisión recuerda al Gobierno que las niñas pequeñas empleadas en trabajos domésticos, son a menudo víctimas de la explotación y que la naturaleza clandestina de ese trabajo hace difícil el control de sus condiciones de empleo. La Comisión recuerda también al Gobierno que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todo Estado Miembro deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. **En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas eficaces en un plazo determinado para garantizar que los niños víctimas de la explotación en el trabajo doméstico sean retirados de esta peor forma de trabajo y se asegure su rehabilitación e inserción social, especialmente en el marco de la aplicación del PANETE-RIM. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones a este respecto.**

Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión observa que, según el Informe sobre el trabajo infantil en 2015, los niños trabajan, en particular, en los sectores de la mecánica, la pesca, la agricultura, en pequeños comercios, en el trabajo doméstico, o empujando carretillas. Además, los niños trabajan en condiciones peligrosas susceptibles de perjudicar su salud, en su mayoría en la calle y durante largas jornadas. En efecto, la Comisión toma nota que los niños que empujan carretillas están particularmente expuestos a los accidentes de la circulación, los niños portadores transportan mercancías pesadas perjudiciales para su salud, la vida de los niños está expuesta a altos riesgos que suponen los motores en suspensión en los talleres mecánicos, los niños en las zonas rurales están expuestos al sol, las niñas que trabajan en hoteles y restaurantes son a veces víctimas de violaciones y los niños trabajan sin descanso durante todo el día (págs. 21 y 22). Además, según indica el PANETE-RIM, los niños pastores de menos de 10 años de edad que se ocupan del ganado menor inician su jornada muy temprano, se acuestan tarde y trabajan más de 16 horas por día, expuestos a los peligros inherentes a su actividad. La Comisión expresa su **preocupación** por la situación de los niños que son ocupados en las peores formas de trabajo, incluidos los trabajos peligrosos. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar en la práctica la protección de los niños de las peores formas de trabajo, especialmente a través del PANETE-RIM. Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones estadísticas sobre la naturaleza, alcance y tendencias de las**

peores formas de trabajo infantil, especialmente en el sector de la economía informal. En la medida de lo posible, todas esas informaciones deberían estar desglosadas por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Mozambique

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. 1. Niños que trabajan en la economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley del Trabajo núm. 23/2007, esta ley sólo se aplica en el contexto de una relación de trabajo. A ese respecto, la Comisión tomó nota de la declaración que el Gobierno realizó en su informe al Comité de los Derechos del Niño (CRC), según la cual el comercio informal es una de las formas más corrientes de trabajo en que participan los niños de Mozambique (documento CRC/C/MOZ/2, párrafo 356). También tomó nota de que, en sus observaciones finales, el CRC señaló que el trabajo infantil sigue siendo una práctica común en las granjas familiares, donde es habitual, por ejemplo, que los niños pastoreen rebaños o trabajen en las plantaciones comerciales de algodón, tabaco y té (documento CRC/C/MOZ/CO/2, párrafo 79). Además, según el informe de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), en las zonas rurales el 25 por ciento de los niños realizaban trabajo infantil en comparación con el 15 por ciento en las zonas urbanas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que aunque la Inspección General del Trabajo se ocupa de la economía formal, los niños que realizan actividades en la economía informal están protegidos a través de medidas que incluyen el acceso a la asistencia social básica y la educación gratuita. La Comisión toma nota de la información que figura en la publicación del UNICEF de 2016 titulada «Child and Social Protection-Current situation» en relación a que el 22 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años realizan trabajos principalmente en el sector agrícola y en el sector del trabajo doméstico. *La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar que la protección que prevé el Convenio se ofrece a los niños que trabajan en la economía informal, incluso a través de programas de asistencia social básica y educación gratuita. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de estas medidas en la prevención del trabajo infantil en la economía informal. Además, en relación con el párrafo 343 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, en el que se señala que el trabajo infantil que se realiza en la economía informal puede abordarse a través de mecanismos de supervisión, incluso a través de la inspección del trabajo, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de los servicios de inspección del trabajo a fin de controlar mejor a los niños que trabajan en las zonas rurales, especialmente en el sector agrícola y en el sector doméstico. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto así como los resultados alcanzados.*

2. Trabajo doméstico. La Comisión había tomado nota del artículo 4, 2), del reglamento sobre el trabajo doméstico (decreto núm. 40/2008) que prohíbe el trabajo doméstico de los niños menores de 15 años aunque permite que los niños de 12 años sean contratados para realizar trabajos domésticos con el permiso de su representante legal. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que ningún niño de menos de 15 años pueda realizar trabajos domésticos, excepto con arreglo a las condiciones específicas establecidas en el artículo 7 del Convenio para los trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que esta cuestión se examinará durante la revisión de la Ley del Trabajo. *La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la Ley del Trabajo se revise sin demora a fin de prever que los niños de menos de 15 años sólo puedan realizar trabajos domésticos como excepción basada en las condiciones específicas establecidas en el artículo 7 del Convenio para los trabajos ligeros. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.*

Artículo 2, 3). Edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión tomó nota de que la edad de finalización de la escolaridad obligatoria (13 años) estaba dos años por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo (15 años). En consecuencia, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a fin de que coincida con la edad mínima de 15 años para la admisión al empleo o al trabajo.

La Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno indica que la Ley revisada sobre el Sistema Nacional de Educación establece la escolaridad obligatoria hasta la finalización del noveno grado mientras que antes era hasta la finalización del séptimo grado. *La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de la Ley revisada sobre el Sistema Nacional de Educación que establece la escolaridad obligatoria hasta el noveno grado.*

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de empleo o de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó la firme esperanza de que el Gobierno tomara las medidas necesarias para elaborar y adoptar una lista

nacional de tipos de trabajo peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que se ha adoptado el decreto núm. 67 de 2017, por el que se establece la lista de los trabajos considerados peligrosos para los niños. Según el artículo 1 de este decreto, los menores de 18 años de edad no podrán estar empleados en tipos de trabajos y actividades prohibidos que, por su naturaleza, puedan ser nocivos para su desarrollo mental, físico, social y moral. La lista de tipos de trabajo peligrosos que figura en el anexo del decreto incluye: la agricultura, la acuicultura y la silvicultura; el sector pesquero; la minería y las actividades extractivas; la industria manufacturera; la producción y distribución de electricidad, gas y agua; la construcción; el comercio y el sector comercial; el transporte y el almacenamiento; los servicios sanitarios y sociales; el servicio doméstico; el trabajo en las calles; y otros tipos de trabajos que impliquen la exposición a cambios de temperaturas y sustancias ionizantes y radioactivas, y movimientos repetitivos, así como el trabajo en espacios cerrados. Asimismo, el artículo 3 prevé sanciones o multas que ascienden a entre cinco y diez salarios mínimos por infringir las disposiciones del decreto. ***La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 1 y 3 del decreto núm. 67 de 2017, incluidas estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas y de las sanciones impuestas.***

Artículo 7, 1) y 3). Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros y determinación de estos tipos de trabajos. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud del artículo 21, 1), de la Ley del Trabajo, un contrato de empleo celebrado directamente con un menor de edad de entre 12 y 15 años únicamente será válido con una autorización por escrito del representante legal del menor. Asimismo, tomó nota de que, en virtud del artículo 26, 2), de la Ley del Trabajo, el Consejo de Ministros emitirá una autorización legal en la que se establecerá la naturaleza y las condiciones de los trabajos que pueden realizar, en circunstancias excepcionales, los menores de edades comprendidas entre los 12 y 15 años. A este respecto, la Comisión recordó que, en virtud del artículo 7, 1), del Convenio, la legislación nacional tan sólo podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo y no sean de naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional, aprobados por la autoridad competente, o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. Asimismo, recordó al Gobierno que, en virtud del artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades que constituyen trabajo ligero y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. ***Tomando nota de que de nuevo la memoria del Gobierno no contiene información sobre estos puntos, la Comisión le pide una vez más que adopte las medidas necesarias para poner la Ley del Trabajo en conformidad con el artículo 7, 1), del Convenio, permitiendo que los niños sólo puedan realizar trabajos ligeros a partir de los 13 años. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reglamentar estos tipos de trabajos determinando los tipos de actividades consideradas trabajos ligeros que pueden realizar los niños de entre 13 y 15 años, incluidas las horas y las condiciones en las que pueden realizarse estos empleos o trabajos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la legislación nacional no prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas. La Comisión instó al Gobierno a que adoptara, con carácter de urgencia, las medidas necesarias para garantizar la adopción de una legislación que prohíba la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, de conformidad con el artículo 3, b), del Convenio.

La Comisión toma nota con *interés* de la información del Gobierno, según la cual, la utilización de niños menores de 18 años de edad para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, está prohibida de conformidad con el decreto núm. 67/2017 sobre la lista de los trabajos considerados peligrosos para los niños. Sin embargo, la Comisión toma nota de que las sanciones prescritas en virtud del artículo 3, 1) y 2), del decreto se refieren sólo a multas (lo que equivale a cinco o diez veces los salarios mínimos por esa actividad y a diez o 20 veces los salarios mínimos por los delitos relacionados con las peores formas de trabajo infantil). A ese respecto, la Comisión se refiere al párrafo 12 de la Recomendación núm. 190, que dispone que los Estados Miembros deberían prever que las peores formas de trabajo infantil, tales como la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, son actos delictivos. ***En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se establezcan las sanciones penales correspondientes que tengan un efecto disuasorio, en caso de los delitos relacionados con la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto.***

Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños en el trabajo doméstico. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 4, 2), del reglamento sobre el trabajo doméstico (núm. 40), de 2008, prohíbe que los empleadores ocupen a

una persona menor de 15 años de edad en el trabajo doméstico. Sin embargo, observó que este reglamento no aborda la cuestión relativa al trabajo doméstico peligroso realizado por niños. En ese sentido, la Comisión tomó nota de que los niños, especialmente las niñas ocupadas en trabajos domésticos, son a menudo víctimas de explotación, trabajan en situaciones peligrosas hasta 15 horas al día y son objeto de abusos físicos. Tomando nota con preocupación de la situación de los niños ocupados como trabajadores domésticos, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas y eficaces para proteger a esos niños de los tipos de trabajo peligrosos.

La Comisión toma nota con *satisfacción* de que el trabajo doméstico es uno de los tipos de actividades que figuran en la lista del decreto núm. 67/2017 sobre la lista de los trabajos considerados peligrosos para los niños y que están prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. El decreto enumera algunas actividades domésticas que son peligrosas para los niños menores de 18 años, como: largas jornadas de trabajo, trabajo nocturno, trabajos de jardinería con objetos punzantes, exposición a condiciones climáticas adversas, utilización de sustancias agrotóxicas, trabajos en posturas inapropiadas y trabajos en situación de aislamiento y fuera de la vista del público. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del decreto núm. 67/2017, incluido el número de violaciones, de investigaciones y de sanciones impuestas en relación con el empleo de niños menores de 18 años en trabajos domésticos peligrosos.***

Artículo 4, 1). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En relación con ese punto, la Comisión solicita al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados en relación con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos. Huérfanos y otros niños vulnerables. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno con miras a una mayor protección de los niños vulnerables, como: el Programa básico de asistencia social y la Estrategia nacional de seguridad social básica (ENSSB), que tienen el objetivo de proporcionar asistencia económica a los hogares cuyos miembros no son aptos para trabajar, o con niños huérfanos. También tomó nota del número significativo de niños que se estaban beneficiando de esos programas. Además, la Comisión tomó nota del Informe mundial de avances de la lucha contra el sida (informe GARP), según el cual, desde 2011 se sigue registrando un alto nivel de apoyo político a los huérfanos y otros niños vulnerables y un aumento en el número de intervenciones que producen resultados positivos en cuanto al apoyo y al acceso a la educación de los huérfanos y de otros niños vulnerables. Sin embargo, tomó nota de las estimaciones del ONUSIDA de 2014, según las cuales son 610 000 los niños menores de 17 años de edad que quedaron huérfanos debido al sida.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre las medidas adoptadas para proteger a los huérfanos y a otros niños vulnerables de las peores formas de trabajo infantil. Toma nota de que, según los últimos datos del ONUSIDA, en 2017 se estimó en 920 000 el número de niños menores de 17 años de edad de Mozambique que quedaron huérfanos debido al sida. ***Recordando una vez más que los huérfanos y otros niños vulnerables tienen un elevado riesgo de estar ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que esos niños estén protegidos de las peores formas de trabajo infantil. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado adoptadas a este respecto, y sobre los resultados obtenidos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Myanmar

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2013)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión tomó nota con anterioridad de que en la Ley de Servicios de Defensa de 1959 (modificada en 1974) y la directiva núm. 13/73 del Ministerio de Defensa, de 1974, se prohíbe que las personas menores de 18 años se alistén en las fuerzas armadas. Asimismo, constató que, según el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 5 de junio de 2015 (documento A/69/926-S/2015/409), se habían denunciado en total 357 casos de reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas (*Tatmadaw*), incluso de niños de tan sólo 14 años. Los grupos armados reclutaban niños, incluso mediante el secuestro y se reclutaban niños en las filas del *Tatmadaw*; se desplegaron en la vanguardia como combatientes y en funciones de apoyo, y también fueron utilizados como porteadores y exploradores. Además, en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados se indicaban las diversas medidas positivas que el Gobierno había adoptado, como la ejecución de un plan de acción conjunto suscrito con las Naciones Unidas en junio de 2012 para detener y evitar el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas armadas, la aprobación de un plan de trabajo para lograr la plena ejecución del plan de acción y la concesión a las Naciones Unidas del acceso a las instalaciones de las fuerzas armadas con fines de supervisión. La Comisión solicitó al Gobierno que reforzase sus iniciativas para poner fin, en la práctica, al reclutamiento de niños menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, tras la firma del plan de acción conjunto para la prevención del reclutamiento de menores, en junio de 2012, el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes en el país se reunió con el Gobierno de Myanmar en 48 ocasiones y visitó 16 comandos militares y 85 batallones y unidades de infantería a efectos de supervisión. Asimismo, tiene en cuenta la indicación del Gobierno de que el ejército tomó medidas disciplinarias contra 448 miembros del personal, incluidos 96 oficiales, por haber reclutado a niños menores en el *Tatmadaw*. Además, se entregó a 877 miembros del personal militar a los que se había reclutado antes de cumplir los 18 años a sus padres y tutores. La Comisión también toma nota de la información ofrecida por el Gobierno sobre los diversos cursos de formación, las actividades de sensibilización, en particular en prensa, televisión y radio, y la formación de carácter jurídico que se ofreció al personal militar en lo relativo a la aplicación del plan de acción conjunto para la prevención del reclutamiento de menores, así como la prohibición de los reclutamientos forzados. Asimismo, ha leído en la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), que entre 2007 y 2018, se denunciaron mediante el mecanismo de reclamación del Memorando de Entendimiento suplementario 754 casos, de los cuales, 738 eran casos de reclutamiento de menores y 325 fueron archivados por la OIT.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 16 de mayo de 2018 (documento A/72/865-S/2018/465), las Naciones Unidas verificaron, en 2017, 428 casos de reclutamiento y utilización de niños, en su mayor parte a manos del *Tatmadaw*, incluidos 166 casos de reclutamiento oficial de niños, algunos de apenas 13 años, y la utilización oficiosa y temporal de unos 200 niños, principalmente para labores de mantenimiento y limpieza. Por otra parte, las Naciones Unidas comprobaron 39 casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados (Ejército para la Independencia de Kachín y Ejército de Liberación Nacional Taang) y la utilización de 53 niños varones por parte de la policía de guardia de fronteras con fines de mantenimiento y construcción de campamentos y traslado de equipo. Por último, la Comisión constata que, de acuerdo con el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, de marzo de 2018, si bien los casos de utilización y reclutamiento de niños soldados por el *Tatmadaw* habían disminuido entre febrero de 2013 y junio de 2017, el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes en el país verificó 856 denuncias (documento A/HRC/37/70, párrafo 38). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su **profunda preocupación** por el hecho de que las fuerzas y los grupos armados sigan utilizando y reclutando a niños. **Así, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a que tome urgentemente las medidas necesarias para garantizar la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados. Asimismo, insta al Gobierno a que siga adoptando medidas inmediatas y eficaces para asegurar que se realicen investigaciones rigurosas y se entablen juicios contra todas aquellas personas, incluidos personal militar subalterno y oficiales, que hayan reclutado a la fuerza niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, y que les sean impuestas en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasivas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas que adopte y los resultados que obtenga a este respecto. Sírvese comunicar información sobre el número de víctimas identificadas, readaptadas e integradas, desglosada por edad y género.**

Venta y trata de niños. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 24 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2005 (Ley de Lucha contra la Trata), se debe condenar a prisión a las personas declaradas culpables de trata de niños (personas de menos de 16 años, artículo 3) y jóvenes (personas de entre 16 y 18 años) durante un período de entre diez años y cadena perpetua y a pagar una multa. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la aplicación práctica de estas disposiciones de la Ley de Lucha contra la Trata, en la que se incluyese el número de investigaciones, juicios y condenas que se realizasen o aplicasen con respecto a los delitos relacionados con la trata de niños y jóvenes.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual entre 2012 y 2016 se denunciaron 120 casos de trata de niños y se entablaron acciones legales contra 129 personas (54 hombres y 75 mujeres), de las cuales se condenó a 85 personas a penas de prisión de entre cinco y veinte años. Además, entre 2017 y junio de 2018, se denunciaron 59 casos de trata de niños, lo que llevó a 40 enjuiciamientos y 18 condenas, con penas de prisión que van de diez a veinte años. La Comisión constata que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de 25 de julio de 2016, expresó su preocupación por el hecho de que el Estado parte siga siendo país de origen de la trata de personas y de que continúe la trata de mujeres y niñas hacia países vecinos y otros países con fines de explotación sexual y laboral (documento CEDAW/C/MMR/CO/4-5, párrafo 28). Asimismo, observa que, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulado *Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand, 2017* (Trata de personas desde Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar hacia Tailandia), los menores son las víctimas más frecuentes de trata desde Myanmar hacia Tailandia con estos fines. Niñas de apenas 12 y 15 años son objeto de trata para su explotación sexual, y niños (niñas y varones) de 11 años o más son víctimas de trata para fines de explotación laboral. **Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que refuerce sus iniciativas destinadas a garantizar que se realicen investigaciones minuciosas y se entablen juicios contra las personas que participan en la trata de niños. Solicita al Gobierno también que siga proporcionando información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones que se llevan a cabo o se apliquen de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Lucha contra la Trata.**

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota anteriormente de que en el artículo 66, f), de la Ley del Niño núm. 9/93, se establecen sanciones para el delito consistente en utilizar a un niño (definido como una persona de menos de 16 años de edad (artículo 2) en películas, videos, o fotografías para televisión de carácter pornográfico. Asimismo, constató que, en virtud del artículo 27 de la Ley de Lucha contra la Trata, toda persona declarada culpable de utilizar a una víctima de trata para la producción de pornografía deberá ser condenada a una pena de reclusión de entre cinco y diez años y al pago de una multa. La Comisión solicitó al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar que la prohibición de la utilización de niños en actividades pornográficas abarcase a todos los niños hasta los 18 años de edad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha comunicado que se ha revisado la Ley del Niño, y que las disposiciones del artículo 66, f), de la Ley del Niño núm. 9/93 y el artículo 27 de la Ley de Lucha contra la Trata se han modificado de tal manera que garanticen la defensa de los intereses del niño y se han introducido en el proyecto de ley del Niño. Asimismo, el Gobierno indica que este proyecto de ley se encuentra ante el Parlamento. ***La Comisión formula la esperanza de que el proyecto de ley del niño contenga disposiciones que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de todo niño menor de 18 años para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas. Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar la aprobación del proyecto de ley del niño sin demora y que aporte información sobre todo progreso que se realice en la materia.***

Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. En comentarios anteriores, la Comisión observó que en el artículo 22, c), de la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1993, se tipifica como delito la utilización de niños menores de 16 años en actos relacionados con la producción, la distribución, el transporte, la importación y la exportación de un estupefaciente o una sustancia psicotrópica. Asimismo, tomó nota de que en el artículo 66, c), de la Ley del Niño se prevén sanciones por utilizar a niños de menos de 16 años para mendigar. En lo relativo a los artículos 3, c), y 2 del Convenio, la Comisión solicitó al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar que la prohibición de la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes o la mendicidad, cubra a todos los niños menores de 18 años.

La memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. ***Por tanto, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en particular aprovechando la revisión de la Ley del Niño, para asegurar que la prohibición de la utilización de niños para realizar actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes o la mendicidad, abarque a todos los niños hasta los 18 años. Solicita al Gobierno que comunique todo avance que se realice al respecto.***

Apartado d) y artículo 4, 1). Trabajo peligroso y determinación de los trabajos peligrosos. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 65, a), de la Ley del Niño y el artículo 75 del proyecto de ley que modifica la Ley de Fábricas, de 1951, en los que se prohíbe emplear a niños en todo trabajo que sea peligroso o dañino para su salud o su moralidad, sólo se aplican a personas menores de 16 años. Además, tomó nota de que el Gobierno había comunicado que el proyecto de ley de comercios y establecimientos contenía una disposición que prohibía el empleo de niños menores de 18 años en trabajos o lugares de trabajo peligrosos.

La Comisión observa con ***interés*** que en la Ley de Comercios y Establecimientos, que se promulgó en 2016, se prohíbe emplear a personas menores de 18 años en trabajos o lugares de trabajo peligrosos (artículo 14, d)). Además, la Comisión constata que, según el informe de progreso técnico de la OIT/IPEC de junio de 2018 acerca del Programa de Myanmar sobre la Eliminación del Trabajo Infantil (My-PEC), el Grupo de Trabajo técnico sobre trabajo infantil ha elaborado y dado por buena, tras amplias consultas tripartitas con las partes interesadas, una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años. ***La Comisión expresa su firme esperanza de que se apruebe en un futuro cercano el proyecto de lista en el que se determinan los tipos de trabajos peligrosos que están prohibidos para personas menores de 18 años. Ruega al Gobierno que informe de todo progreso realizado a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione una copia de dicha lista, una vez se haya aprobado.***

Inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha comunicado que se han modificado algunas de las leyes laborales vigentes en las que se hace referencia al trabajo infantil, como la Ley de Fábricas y la Ley de Comercios y Establecimientos para adaptarlas a las normas de la OIT. Además, se están adoptando medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar y los derechos de los niños que trabajan en fábricas, comercios y establecimientos, con arreglo a la legislación laboral. La Comisión también observa que en la memoria del Gobierno se indica que, en 2014, se creó un Grupo de Trabajo técnico sobre trabajo infantil, compuesto por 31 miembros de los ministerios pertinentes, así como representantes de la OIT, el UNICEF, organizaciones de empleadores y de trabajadores y ONG internacionales, para elaborar directrices prácticas y mandatos en consonancia con los convenios sobre trabajo infantil. El Gobierno indica que el Grupo de Trabajo técnico organizó 20 reuniones y 14 talleres sobre trabajo infantil, cinco actos en torno al Día Mundial contra el Trabajo Infantil y varias actividades de sensibilización con vistas a erradicar el trabajo infantil. Además, la autoridad competente en materia de ocupación de Dinamarca impartió varios cursos de formación destinada al desarrollo de capacidades y de formación de instructores dirigidos a inspectores del trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual desde 2010 hasta la fecha se ha juzgado a seis personas por recurrir al trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, con arreglo a la Encuesta de mano de obra de 2015, más de 600 000 niños, de los 1,12 millones de niños empleados en trabajo infantil, realizan trabajos peligrosos, de los cuales el 1,7 por ciento tiene entre 5 y 11 años, el 24,1 por ciento entre 12 y 14 años, y el 74,6 por ciento entre 15 y 17 años. Los sectores clave donde se suele dar el trabajo infantil son la agricultura, la silvicultura y la pesca; la industria manufacturera; el comercio mayorista y minorista, y la reparación de vehículos a motor, en los que los niños trabajan muchas horas, de noche y en condiciones peligrosas. Además, la Comisión constata que, según el documento de la OIT/IPEC de 2015 que contiene un resumen del examen jurídico de las leyes y los reglamentos nacionales en materia de trabajo infantil en Myanmar, la observancia de la legislación destinada a combatir el trabajo infantil es deficiente y sigue siendo problemática en Myanmar, debido a diversas razones como el predominio de la economía informal, el desconocimiento general de la ley entre los empleadores y los trabajadores, la falta de mecanismos de supervisión y la corrupción. Al tiempo que toma nota de las medidas que ha adoptado el Gobierno, la Comisión expresa su **preocupación** por el gran número de niños que realizan trabajos peligrosos en Myanmar. **Así, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus iniciativas para eliminar el trabajo infantil peligroso, por ejemplo, reforzando la capacidad y el radio de acción de los inspectores para detectarlo, en especial en la economía informal. Asimismo, solicita al Gobierno que informe acerca de la aplicación de toda medida adoptada a este respecto, y que comuniqué toda información estadística que se recabe sobre el número y la naturaleza de las infracciones que se observen y las sanciones impuestas en lo relativo a los niños ocupados en trabajos peligrosos, desglosada por edad, género y sector económico.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nepal

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe de la Encuesta Anual de Hogares de Nepal 2013-2014, el 29,4 por ciento de los niños de edades comprendidas entre 5 y 14 años eran económicamente activos, y que este porcentaje era más alto entre las niñas (33,9 por ciento) que entre los niños (25,3 por ciento). El 70 por ciento de los niños que trabajaban lo hacía veinte horas o menos por semana, mientras que el 5,5 por ciento trabajaban cuarenta horas o más. De los niños que trabajaban, el 76,5 por ciento realizaban trabajos agrícolas y el 19,3 por ciento otro tipo de trabajos. La Comisión tomó nota asimismo de que, según el informe nacional sobre la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de marzo de 2016, a pesar de los diversos programas puestos en marcha por el Gobierno para evitar que los niños estén ocupados en trabajo infantil y en sus peores formas, en Nepal cada año abandona la escuela un promedio de 500 000 estudiantes escolarizados del primer al décimo curso. La Comisión tomó nota asimismo de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en sus observaciones finales de 12 de diciembre de 2014, expresó su preocupación por el elevado número de niños que no han alcanzado la edad mínima para trabajar que están ocupados en la agricultura, la cantería y la minería, el servicio doméstico y la alfarería. El CESCR también expresó su inquietud por la laxa aplicación de la legislación por la que se prohíbe el trabajo infantil y por la falta de información sobre los efectos de las campañas de concienciación emprendidas por el Estado parte (documento E/C.12/NPL/CO/3, párrafo 21).

La Comisión toma nota de que, según la información contenida en la memoria del Gobierno, se ha aprobado el Plan director nacional para poner fin al trabajo infantil, que tiene por objeto eliminar todas las formas de trabajo infantil de aquí a 2026, y se están redactando planes de acción concretos para su aplicación efectiva. El Gobierno indica asimismo que la cobertura de los inspectores del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo se ha ampliado, y que se ha redactado un manual de formación para la inspección del trabajo que versa sobre el trabajo infantil. A este respecto, toma nota de que, según la información suministrada por el Gobierno, entre 2016 y 2017, el Departamento de Trabajo y de Seguridad en el Trabajo llevó a cabo inspecciones en 220 empresas con miras a detectar trabajo infantil. Además, el Gobierno indica que la Oficina Central de Estadística ha realizado una nueva Encuesta nacional sobre la fuerza de trabajo y que su informe se publicará a finales de 2018. La Comisión también toma nota de que en el Informe sobre los Progresos Técnicos del proyecto OIT-IPEC titulado «Hacia la eliminación de las peores formas de trabajo infantil como prioridad (ACHIEVE)» se indica que en el marco de este proyecto, 14 municipios en los cuatro distritos de Bhaktapur y Kavre fueron declarados libres de trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, tal como se señala en el documento de la OIT titulado «Child Labour in Nepal» («Trabajo infantil en Nepal», disponible en inglés), 1,6 millones de niños de edades comprendidas entre 5 y 17 años siguen ocupados en trabajo infantil en Nepal, incluidos 621 000 niños que realizan trabajos peligrosos. También toma nota de que, con arreglo al proyecto final del Plan director nacional para poner fin al trabajo infantil, aunque el trabajo infantil parece haber disminuido en algunas zonas, ha aumentado en la mayoría de las zonas, por lo que la situación general del trabajo infantil en el país no ha mejorado sustancialmente. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión se ve obligada a tener que expresar su **profunda preocupación** por el número considerable de niños que no han alcanzado la edad mínima que están ocupados en trabajo infantil y en trabajos peligrosos en Nepal. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar la**

eliminación del trabajo infantil, en particular a través de la adopción y aplicación de medidas efectivas en el marco del Plan director nacional. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos. La Comisión también insta al Gobierno a que continúe suministrando información sobre las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, y sobre el número y la naturaleza de las violaciones registradas relativas al empleo de niños y las sanciones impuestas. Por último, pide al Gobierno que facilite información sobre las conclusiones de la Encuesta nacional sobre la fuerza de trabajo referentes al trabajo infantil, desglosadas por género y edad.

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. Niños que trabajan en la economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre el Trabajo Infantil (Prohibición y Regulación), de 2000, que prohíbe el empleo de niños menores de 14 años como trabajadores (artículo 3, 1)), no define los términos «empleo» y «trabajador». El Gobierno indicó que la ley no cubre adecuadamente al sector informal y que es muy difícil aplicar las disposiciones del Convenio en la economía informal, debido a lo limitado de las infraestructuras y a la escasez de recursos financieros. La Comisión también tomó nota de que, según el informe presentado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio sobre las políticas comerciales, los acuerdos de empleo formales sólo representaron el 10 por ciento de todas las relaciones de trabajo, por lo que la Ley sobre el Trabajo Infantil no se aplica al 90 por ciento de las relaciones de trabajo. En el informe se especificó asimismo que los niños que trabajaban realizaban principalmente actividades económicas informales en minas y canteras, la servidumbre doméstica, la agricultura y el transporte de cargas. A este respecto, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno acerca de que la Ley del Trabajo de 1992, la Ley de la Infancia de 1992 y la Ley sobre el Trabajo Infantil estaban revisándose, y de que dichas leyes prevén que los inspectores del trabajo deberán inspeccionar todos los lugares de trabajo con miras a detectar trabajo infantil.

En este sentido, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual la nueva Ley del Trabajo de 2017 se ha adoptado y aplicado, mientras que la Ley de la Infancia y la Ley sobre el Trabajo Infantil siguen revisándose. Toma nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de que la Ley del Trabajo garantiza el derecho de los inspectores del trabajo a inspeccionar todos los lugares de trabajo, en particular en la economía informal. La Comisión toma nota de que el artículo 94, 1), g), de la Ley del Trabajo, que especifica las facultades, funciones y responsabilidades de los inspectores del trabajo, establece que el inspector del trabajo inspeccionará y determinará si los niños están ocupados o no y, si se determina que están ocupados, los rescatará inmediatamente y tomará medidas contra el empleador. El Gobierno señala asimismo que se organizó un programa de formación para instructores orientado a los inspectores del trabajo en colaboración con la Fiscalía General. Este programa ha conducido a una mejor coordinación entre los funcionarios en lo que respecta a los procedimientos legales que deben seguirse y a las sanciones que han de imponerse en caso de violación de la legislación laboral. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo, a fin de vigilar mejor el trabajo infantil, en particular en la economía informal. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en relación con esto y sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 3, 1) y 2). Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de los tipos de trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 2, a), y 3, 2), de la Ley sobre el Trabajo Infantil prohíben el empleo de personas menores de 16 años de edad en cualquier actividad o trabajo peligroso que figure en la lista del anexo, y que el artículo 43, 2), del reglamento sobre el trabajo, de 1993, prohíbe el empleo de personas menores de 16 años de edad en trabajos en los que se utilicen máquinas peligrosas y en operaciones que sean peligrosas para su salud. Asimismo, tomó nota de que la Ley sobre el Trabajo Infantil (Prohibición y Regulación), de 2000, enumeraba diferentes empleos, ocupaciones y entornos laborales que son peligrosos y en los que, por consiguiente, está prohibido que trabajen los niños menores de 16 años. La Comisión tomó nota asimismo de que, según el Gobierno, el proyecto de ley sobre el trabajo infantil contenía disposiciones que prohibían el empleo de niños menores de 18 años en trabajos peligrosos, y de que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, se había elaborado un proyecto de lista que contenía aproximadamente 29 ocupaciones y actividades prohibidas para los niños y menores.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha finalizado la lista de tipos de trabajo peligroso prohibidos para los niños menores de 18 años y que está a la espera de que se incorpore en la Ley sobre el Trabajo Infantil, antes de su adopción. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para cerciorarse de que la lista de trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años se adopte en un futuro cercano. Pide al Gobierno que suministre información sobre todo progreso realizado a este respecto.**

Artículo 3, 3). Admisión a los tipos de trabajo peligrosos a partir de los 16 años de edad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que algunas de las actividades contenidas en la lista propuesta de trabajos peligrosos parecían estar prohibidas para los niños menores de 16 años, por ejemplo, cualquier trabajo relacionado con el turismo de aventura y deportivo; el transporte de pasajeros y de mercancías pesadas; las prendas de vestir, los telares manuales, los telares mecánicos y los bordados, y las tareas domésticas o el trabajo doméstico.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que sólo se permita trabajar a las personas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años si se protegen plenamente su salud, seguridad y moralidad, y si han recibido una formación adecuada para la realización de esa actividad. **La Comisión**

expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para proteger a las personas de 16 a 18 años de edad que realizan tipos peligrosos de trabajo, tal como prevé el artículo 3, 3), del Convenio. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), y 7, 2), b), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y medidas con plazos definidos encaminadas a prestar asistencia directa para librar y rehabilitar a los niños y asegurar su inserción social. Trabajo infantil en régimen de servidumbre. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el sistema del *kamlari* (niñas vendidas para trabajar en régimen de servidumbre) está prohibido en virtud de la Ley de Prohibición del *Kamlari*, de 2013. Tomó nota asimismo de las diversas medidas adoptadas para eliminar el trabajo en condiciones de servidumbre de los niños y prever su rehabilitación, reinserción social y acceso a la educación. En relación con esto, tomó nota del establecimiento de las becas *kamlari*, que proporcionaban asistencia financiera a una serie de niñas *kamlari* liberadas, así como de la educación y la formación profesional que se impartían en el marco del Plan de acción nacional contra el trabajo infantil en régimen de servidumbre, de 2009. Sin embargo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en sus observaciones finales de 3 de junio de 2016 (documento CRC/C/NPL/CO/3-5, párrafo 68) y 15 de abril de 2014 (documento CCPR/C/NPL/CO/2, párrafo 18), respectivamente, expresaron su preocupación por la continuidad de las prácticas de trabajo en régimen de servidumbre como las de los *haliya* y los *kamaiya* (práctica de trabajo en condiciones de servidumbre en la agricultura), y los *kamlari* en algunas regiones del Estado Parte. La Comisión instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para asegurar la eliminación total del trabajo en condiciones de servidumbre de los niños menores de 18 años de edad, y a que no cesara en su empeño por garantizar la existencia de servicios apropiados para su rehabilitación y reinserción social, incluido el acceso a la educación.

La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, el Ministerio de Ordenación Territorial y Eliminación de la Pobreza ha estado poniendo en práctica el Programa de rehabilitación de los *kamaiya* y los *haliya* (trabajo en régimen de servidumbre) liberados, por medio del cual se conceden subvenciones para la adquisición de tierras, la construcción de casas y la adquisición de madera, así como programas de formación para el desarrollo de las calificaciones y programas de reasentamiento orientados a las víctimas de trabajo en régimen de servidumbre. Por consiguiente, entre 2017 y 2018, se prestó apoyo financiero a 37 familias para que compraran tierras; a 876 familias para que compraran madera, y a 1 005 familias para que construyeran sus casas. Asimismo, se organizaron cinco cursos de formación para el desarrollo de competencias profesionales destinados a 80 *kamaiya* y *haliya*. Además, durante el año fiscal 2016-2017, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología prestó asistencia financiera a 1 611 niñas *kamlari* liberadas, a través de las directivas de la becas *kamlari*, para que prosiguieran su educación hasta el duodécimo curso. **La Comisión alienta firmemente al Gobierno a que continúe desplegando esfuerzos para asegurar que los niños víctimas de trabajo en régimen de servidumbre reciban servicios apropiados para su rehabilitación y reinserción social, incluido el acceso a la educación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 3, b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y para la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota anteriormente de que la prohibición de la utilización o implicación de niños en una «profesión inmoral» en virtud de los artículos 2, a) y 16, 1), de la Ley de Menores, de 1992, sólo se aplica a los niños menores de 16 años. Tomó nota asimismo de que, de conformidad con los artículos 2, a) y 16, 4), de la Ley de Menores, se prohíbe a los niños menores de 16 años que se dediquen a la venta, la distribución o el tráfico de alcohol, narcóticos u otros estupefacientes. La Comisión también toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, el proyecto de ley de menores contenía disposiciones que prohibían la utilización, el reclutamiento o la oferta de todos los niños menores de 18 años para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas, así como para la producción y el tráfico de estupefacientes.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el nuevo proyecto de ley de menores ha sido aprobado por el Gabinete, y se ha sometido al Parlamento para su adopción. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el proyecto de ley de menores, que contiene disposiciones que prohíben la utilización, el reclutamiento o la oferta de todos los niños menores de 18 años para la producción de pornografía o para actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes, se adopte en un futuro muy cercano. Pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto y que proporcione una copia, una vez se haya adoptado.**

Artículos 5 y 7, 1). Mecanismos de vigilancia y sanciones. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, se estableció un comité nacional de control de la trata de personas, comités de distrito de control de la trata de personas en 75 distritos, y comités locales en 109 aldeas con miras a la aplicación efectiva de la Ley sobre Trata y Transporte de Seres Humanos (control), de 2007. Tomó nota asimismo de que la Dirección de Servicios para Mujeres y Niños, en la policía de Nepal, prestaba servicios a todos los centros de servicios para mujeres y niños al abordar los casos relativos a la trata de personas. Además, la policía de Nepal

y la Junta Central de Bienestar Infantil (CCWB) también participaban en el rescate de niños víctimas de trata. Sin embargo, la Comisión observó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el PIDCP, en sus observaciones finales de 2014, expresaron su preocupación por el elevado número de niños que eran víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual, así como de mendicidad y esclavitud, en particular en los países vecinos, y por la falta de información sobre las investigaciones, los enjuiciamientos, las condenas y las sanciones impuestas a los traficantes (documentos E/C.12/NPL/CO/3, párrafo 22, y CCPR/C/NPL/CO/2, párrafo 18). Por lo tanto, la Comisión instó firmemente al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para asegurar que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas de las personas dedicadas a la venta y trata de niños menores de 18 años de edad y se emprendieran acciones judiciales contra las mismas, y se impusieran asimismo sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica.

La Comisión toma nota de que, según la información del Gobierno, entre 2015 y 2016: i) se llevaron a cabo 6 939 programas de formación orientados a las partes interesadas que luchan contra la trata de personas, en los que participaron 37 632 personas; ii) los comités nacionales y de distrito de lucha contra la trata de personas pusieron en marcha programas de interacción con 167 partes interesadas, y iii) se ofrecieron programas de formación a 486 funcionarios de la policía de Nepal y de los tribunales de los distritos. Además, en el Ministerio de la Mujer, de la Infancia y de las Personas Mayores se crearon una línea telefónica directa y una unidad de trata de personas y de control.

La Comisión toma nota de que, según el informe nacional sobre la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de junio de 2017 (informe de la CNDH), el número de casos de trata registrado por la policía de Nepal es relativamente bajo en comparación con el número real de víctimas de trata. Este informe indica que, entre 2015 y 2016, se registró un total de 212 casos de trata de personas en los que estuvieron implicadas 352 víctimas, de las cuales cuatro de cada diez eran niños. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según el informe de la CNDH, a raíz de las intervenciones y de los esfuerzos de rescate de la División de Investigación de Delitos de Katmandú, la policía de Nepal y las embajadas extranjeras en Nepal, el número de víctimas entre 2015 y 2016 se estimó en 23 200, incluidas 13 600 víctimas potenciales de trata, de las cuales el 50 por ciento eran niños. En este informe se indica asimismo que, a finales de junio de 2016, se calculó que 44 131 niños considerados expuestos a un alto riesgo debido al terremoto de 2015 también eran vulnerables a la trata. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de junio de 2016, expresó su preocupación por el terremoto de 2015, que había exacerbado la vulnerabilidad de los huérfanos, los niños de los grupos indígenas, las minorías religiosas, la comunidad dalit y los trabajadores migrantes a la trata de seres humanos (documento CRC/C/NPL/CO/3-5, párrafo 66). ***Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para luchar contra la trata de niños, en particular mediante el fortalecimiento de las capacidades de los comités nacionales y de distrito de lucha contra la trata de personas, la unidad de trata de personas y de control y la policía de Nepal, a fin de asegurar la vigilancia efectiva y la identificación de los niños víctimas de trata. Pide asimismo al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas de las personas dedicadas a la venta y trata de niños menores de 18 años de edad, y se emprendan acciones judiciales contra las mismas, y se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. Pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.***

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y con plazos definidos. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el acceso de los niños a la educación básica, como la concesión de becas a los niños pertenecientes a grupos desfavorecidos y minoritarios y a las niñas; el programa «Comida del mediodía» y el programa «Bienvenido a la escuela», que ayuda a llegar a los niños desfavorecidos de las zonas rurales. La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe de 2013 sobre los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria alcanzó el 95,3 por ciento en 2013, la tasa neta de asistencia en la enseñanza primaria fue tan sólo del 68,8 por ciento, y al menos del 4,7 por ciento (más de 800 000 niños) de los niños en edad escolar primaria seguían sin asistir a la escuela. La Comisión alentó al Gobierno a que prosiguiera sus esfuerzos con miras a facilitar el acceso a la educación básica gratuita para todos los niños, centrándose en particular en los niños pertenecientes a minorías desfavorecidas y en otros grupos marginados.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene más información sobre las medidas adoptadas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en el informe nacional de la CNDH se indica que el Ministerio de Educación elaboró una guía sobre la educación básica obligatoria para 2014. Según este informe, el Ministerio de Educación concedía becas a más de 1,3 millones de niños, la mayoría de los cuales eran niñas y también niños dalit del primer al octavo curso. La Comisión toma nota asimismo de que, según las estadísticas de la UNESCO, en 2017 la tasa neta de escolarización (NER) en la enseñanza primaria ascendió al 94,7 por ciento (niñas: 93,25 y niños 96,08) y la tasa de transición a la enseñanza secundaria al 82,38 por ciento. Además, la NER en la educación secundaria alcanzó el 55,29 por ciento (niñas: 57,26 y niños 53,42). Sin embargo, las estadísticas de la UNESCO indican asimismo que, en 2017, 381 448 niños y adolescentes seguían sin asistir a la escuela. La Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de julio de 2016, expresó su preocupación por el elevado número de niños que no asisten a la escuela; la elevada tasa de abandono escolar de las niñas; la baja tasa

de escolarización y la elevada tasa de abandono escolar de los niños indígenas, y la importante brecha en la calidad de la educación entre las zonas rurales y urbanas (documento CRC/C/NPL/CO/3-5, párrafo 58). **Considerando que el acceso a la educación es una de las maneras más eficaces de impedir que los niños estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para facilitar el acceso a una educación de calidad básica gratuita para todos los niños, centrándose en particular en las niñas y en los niños indígenas. Pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, concretamente con respecto a la mejora del funcionamiento del sistema educativo, el aumento de las tasas de escolarización y finalización escolar así como la reducción de las tasas de abandono escolar.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nicaragua

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1981)

Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley de Educación, de 2006, precisa que la educación sólo es obligatoria hasta los 12 años. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para vincular la edad de finalización de la escolaridad obligatoria con la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que continuara sus esfuerzos para aumentar las tasas de asistencia escolar y reducir las de abandono escolar a fin de impedir que los niños de 14 años trabajen.

La Comisión **lamenta** tomar nota una vez más de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las medidas adoptadas para vincular la edad de finalización de la escolaridad obligatoria (que es de 12 años) con la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo (que es de 14 años).

La Comisión toma nota de que, aun cuando el artículo 121 de la Constitución de Nicaragua establece que la educación primaria es gratuita y obligatoria, el artículo 19 de la Ley de Educación, de 2006, precisa que la educación sólo es obligatoria hasta el sexto grado de primaria (a saber, hasta aproximadamente los 12 años). La Comisión recuerda que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deje abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). **Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la escolaridad obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en su próxima memoria, transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 7, 2), del Convenio. Medidas efectivas y en un plazo determinado. a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la tasa de asistencia escolar, sigue siendo reducido el porcentaje de niños matriculados en la enseñanza secundaria, aunque ha aumentado. La Comisión pidió al Gobierno que siguiera adoptando las medidas necesarias para mejorar la tasa de asistencia escolar y de finalización de la escolaridad obligatoria, concediendo una atención especial a las desigualdades en materia de acceso a la educación relacionada con el género y las disparidades regionales. La Comisión pidió también al Gobierno que proporcionara información sobre los resultados obtenidos, desglosados por edad y por género.

La Comisión toma buena nota de las informaciones estadísticas que figuran en la memoria del Gobierno, en las cuales se indica un aumento de la tasa de asistencia escolar en el año 2017. La Comisión toma nota también de que, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar las tasas de asistencia escolar y de finalización de la escolaridad, concediendo una atención especial a las desigualdades, el programa «Amor», ha permitido la integración escolar de 19 665 niñas, niños y adolescentes en 2017 y la promoción de 18 000 estudiantes al grado superior.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, en virtud de las cuales las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable o de desigualdad son acompañados en los centros educativos por un sistema de alerta precoz, que facilita su acompañamiento y la atención que se les presta. Asimismo, los centros ofrecen un servicio de prevención en situaciones de vulnerabilidad, como el embarazo precoz en la adolescencia, la discriminación de géneros u otras por el estilo.

La Comisión toma nota de las actividades de sensibilización que se describen en la memoria del Gobierno: i) la iniciativa de jornadas de «Promoción de valores» con la participación de 6 677 centros educativos y 777 047 integrantes de la comunidad educativa; ii) la constitución de 14 618 brigadas de seguridad escolar, con la participación de 147 520 estudiantes, padres y docentes, y iii) la organización de encuentros semanales bajo el lema «Creciendo en

valores», con la participación de 823 786 estudiantes y 34 648 docentes, realizados en 7 976 centros educativos del país. La Comisión toma nota asimismo de una actividad que, según el Gobierno, ha tenido un gran impacto en la comunidad educativa: «el buzón de preguntas y el tablón de mensajes». Esta actividad ha permitido la detección precoz de algunas situaciones difíciles que viven los estudiantes. La Comisión toma nota además de que el Gobierno ha potenciado la promoción de valores y la prevención de situación de riesgo en los niños con la creación de una aplicación de juego educativo denominado «Valopis», que, según el Gobierno, ha reforzado de manera lúdica la solidaridad entre los estudiantes. ***Al tiempo que toma nota debidamente de las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el sistema educativo, la Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para facilitar el acceso a la educación a todos los niños, dedicando una atención especial a las niñas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre los resultados obtenidos, desglosados por edad, género y regiones.***

b). *Asistencia directa necesaria para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trabajos peligrosos en la agricultura.* En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que suministrara información sobre los resultados concretos obtenidos en el marco de los diversos programas a fin de librar a los niños y adolescentes de los trabajos peligrosos en el sector agrícola y sobre las medidas adoptadas para garantizar su readaptación e integración social.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas con miras a la prevención del trabajo infantil en diversos sectores de la economía: la firma de 5 998 acuerdos de compromiso entre los empleadores y el Gobierno y la realización de 1 801 visitas especiales en centros de trabajo con miras de informar a 2 815 adolescentes sobre los abusos en el lugar de trabajo. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas concretas adoptadas en el sector agrícola. ***Al tiempo que toma nota de las medidas tomadas por el Gobierno, la Comisión lo alienta a continuar sus esfuerzos y le pide que transmita información sobre los resultados concretos obtenidos en el marco de los programas a fin de librar a los niños y a los adolescentes de los trabajos peligrosos en el sector agrícola y sobre las medidas adoptadas para garantizar su rehabilitación e inserción social.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Níger

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo del Níger (CNT), recibidas el 4 de abril de 2018.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que el trabajo infantil existe principalmente en el sector informal y que el nuevo Código del Trabajo no amplía su ámbito de aplicación al trabajo efectuado por cuenta propia ni al trabajo en la economía informal. La Comisión tomó nota además de que el Gobierno señaló que los inspectores del trabajo tropiezan con dificultades para detectar el trabajo infantil en este sector debido a la complejidad del fenómeno y a la debilidad de sus medios de acción. En este sentido, el ministerio responsable del trabajo ha adoptado medidas para reforzar las capacidades de los servicios de inspección del trabajo, como por ejemplo, la dotación de un vehículo a todos los departamentos de la Inspección del Trabajo, la contratación de nuevos inspectores del trabajo, el aumento de la dotación asignada a éstos y la creación de nuevas inspecciones del trabajo. La Comisión tomó nota de que, según la Encuesta Nacional sobre el Empleo y el Sector Informal (ENESI), de 2012, del Instituto Nacional de Estadística (INCSS), el 50,4 por ciento de los niños entre 5 y 17 años trabajan en el Níger (es decir alrededor de 1 922 637 niños), de los cuales 1 187 840 están ocupados en trabajos peligrosos. Además, la Comisión destacó que el 40 por ciento de los empleos se encuentran en el sector informal. La Comisión observó por último que, ateniéndose al *Análisis de la situación de los niños y las mujeres en el Níger según el enfoque basado en la equidad y los derechos humanos*, elaborado conjuntamente por el Gobierno y el UNICEF en 2013, en general, cerca de la mitad (48 por ciento) de los niños de 5 a 14 años ejercen una actividad laboral. Además, uno de cada dos niños de 5 a 11 años (50 por ciento) y el 77 por ciento de los niños de 12 a 14 años realizan trabajos en el ámbito agrícola y otras actividades en el trabajo doméstico.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CNT, según las cuales el Gobierno debería adoptar un programa para retirar a los niños de los trabajos peligrosos en el sector agrícola.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1979 (núm. 81), que prevé crear servicios de inspección del trabajo en los nuevos municipios. La Comisión señala que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones finales de junio de 2018, manifiesta su preocupación por la falta de recursos financieros y humanos en el sistema de inspección del trabajo y por el hecho de que no cubra el sector informal, a pesar de que este sector representa el 70 por ciento de los empleos (documento E/C.12/NER/CO/1, párrafo 40). Según el estudio publicado en 2014, titulado «El doble desafío del trabajo infantil y la marginación escolar en los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

(CEDEAO)» realizado por «Understanding Children's Work», conjuntamente con la OIT, el Banco Mundial y el UNICEF, el 90,2 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años que trabajan en el sector agrícola realizan un trabajo familiar no remunerado, y el 6,2 por ciento trabajan por cuenta propia. La Comisión señala también que únicamente el 2,7 por ciento de los niños entre 5 y 14 años que trabajan en el sector agrícola están protegidos por el Código del Trabajo. El estudio indica que el porcentaje de niños entre 5 y 14 años representa el 24 por ciento de la mano de obra total del sector agrícola. En el sector de la ganadería, los niños representan el 41 por ciento de los trabajadores. Además, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales precisa, en sus observaciones finales de 2018, que hay un número considerable de niños explotados con fines económicos en la agricultura, los mataderos y en los trabajos domésticos en particular realizados en condiciones peligrosas (documento E/C.12/NER/CO/1, párrafo 46). La Comisión declara nuevamente su **profunda preocupación** por el número de niños que trabajan, a menudo en condiciones peligrosas, sin haber alcanzado la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para eliminar el trabajo de los niños menores de 14 años, especialmente en el sector informal, incluido el que se realice en condiciones peligrosas. La Comisión también insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del Código del Trabajo al sector de la economía informal y a los niños que trabajan por cuenta propia. La Comisión le pide, por último, que insista en sus esfuerzos para reforzar las capacidades de la inspección del trabajo y su formación, de manera que mejore sus intervenciones directas en la economía informal, y proporcione información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a este respecto.**

Artículo 3, párrafo 3, del Convenio. Autorización para emplear niños en trabajos peligrosos a partir de los 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, para determinados tipos de trabajos peligrosos, el decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 de septiembre de 1967, autoriza el empleo de niños de más de 16 años. La Comisión tomó nota asimismo de que se crearon comités de salud y seguridad del trabajo (CSST) en las empresas con la responsabilidad de sensibilizar y formar en materia de seguridad. La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia, según la cual no se encuentran con frecuencia niños trabajadores porque no se han instaurado CSST en empresas con más de 50 asalariados. En contraposición, el Gobierno señaló que se ha creado una coordinación nacional, que ha emprendido numerosas actividades relativas en la formación de los miembros de los CSST. La Comisión de la Conferencia alentó firmemente al Gobierno a que vele por que estos comités de salud realicen actividades de sensibilización y de capacitación con objeto de que las condiciones de trabajo de los jóvenes no perjudiquen su salud, seguridad o bienestar.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CNT, según las cuales el Gobierno no ha restaurado los CSST en las empresas con miras a garantizar la salud y la seguridad de los jóvenes de 16 a 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno precisa que, en virtud del artículo 145 del Código del Trabajo, el inspector del trabajo puede pedir la creación de un CSST en los establecimientos con una plantilla inferior a 50 trabajadores cuando esta medida es necesaria, sobre todo en razón de los peligros que entrañan la actividad y la importancia de los riesgos detectados, la naturaleza de los trabajos, así como la gestión y el equipamiento de los locales. La Comisión señala que el decreto núm. 2017-682/PRN/MET/PS, de 10 de agosto de 2017, relativo al reglamento sobre el Código del Trabajo, establece en su artículo 374 que, en las empresas o establecimientos con menos de 50 trabajadores, éstos deberán elegir un delegado titular y un delegado suplente para lo relativo a la seguridad y la salud del trabajo. **La Comisión insta al Gobierno a proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los CSST y los delegados para la seguridad y la salud en el trabajo de las empresas velen por que las condiciones de empleo de los adolescentes de 16 a 18 años no suponga ningún riesgo para su salud y su seguridad, de conformidad con el artículo 3, párrafo 3, del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione formaciones sobre la puesta en práctica de los CSST y de los delegados de la seguridad y la salud en el trabajo.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo del Níger (CNT), recibidas el 4 de abril de 2018.

Artículos 3, a), y 6 del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas y programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, el fenómeno de la trata presenta problemas en el Níger y que, según las observaciones obtenidas por la Misión de Investigación de Alto Nivel creada en 2006, el Níger es ciertamente un país de tránsito, de origen y destino para la trata de seres humanos, incluidos los niños. La Comisión tomó nota de la adopción de la ordenanza núm. 2010-086, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la lucha contra la trata de personas en el Níger, por la que se prohíben todas las formas de venta y de trata y se prevén penas de prisión de diez a treinta años cuando la víctima del delito sea un niño. La Comisión destacó que la Comisión Nacional de Coordinación de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) y el Organismo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (ANLTP) fueron establecidos con el fin de concebir y poner en práctica programas, estrategias y planes nacionales de lucha contra la trata de personas. Con el decreto núm. 488/PRN/MJ, de 22 de julio de 2014, se aprobó un Plan de acción nacional de lucha contra la trata de

personas, de cuya aplicación se ocupa el ANLTP de 2014 a 2019. La Comisión tomó nota asimismo de que el ANLTP había organizado sesiones de formación y sensibilización en el marco de la lucha contra la trata de personas. La Comisión tomó nota con preocupación del escaso número de enjuiciamientos y sanciones impuestas a los responsables de trata de niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que, según las informaciones comunicadas por el ANLTP en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), se van a reforzar las capacidades de los inspectores del trabajo para que detecten mejor los casos de trata con fines de explotación de trabajo forzoso obligatorio y explotación sexual, y la cuarta jornada nacional de movilización contra la trata se dedicará a la trata de niños para la prostitución, la mendicidad y el trabajo forzoso. El ANLTP señala además que se han organizado actividades de formación y sensibilización dirigidas a actores de la jurisdicción penal y a otros participantes en el ámbito de la protección, la asistencia y la atención a las víctimas de trata. En el curso de una mesa redonda sobre el Plan de acción nacional de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el Ministro de Justicia precisó que el Plan de acción se había constituido en torno a seis ejes estratégicos, entre los cuales cabe destacar: i) el reforzamiento del dispositivo de prevención de la trata; ii) la atención a las víctimas, y iii) el reforzamiento de la cooperación.

La Comisión observa que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos sigue preocupada por la persistencia de la trata de niños (documento A/HRC/WG.6/24/NER/2, párrafo 27). El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (documento CEDAW/C/NER/CO/3-4, párrafo 24) y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (documento CMW/C/NER/CO/R.1, párrafo 52), están asimismo preocupados por la persistencia de la trata de personas en el Níger, en particular de los casos con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer manifiesta asimismo su preocupación por el bajo porcentaje de enjuiciamientos iniciados y de condenas pronunciadas en los casos de trata de mujeres y de niñas. La Comisión toma nota de los datos de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Justicia proporcionados por el Gobierno, y constata nuevamente el escaso número de personas enjuiciadas. En su segundo informe periódico dirigido al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 23 de marzo de 2018, el Gobierno señala que el Níger es un país de origen, tránsito y destino de la trata. Destaca además que la trata de mujeres y niños toma cada vez más impulso en el Níger y adopta diversas formas, entre ellas, la trata interna y hacia otros países con fines de explotación en el servicio doméstico y en la explotación sexual comercial (documento CCPR/C/NER/2, párrafo 98). En su informe dirigido al Comité de los Derechos del Niño en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 2018, sobre la venta y la prostitución de niños y su utilización con fines pornográficos, el Gobierno precisa que, según las estadísticas judiciales de 2015, el número registrado de víctimas de trata con fines de venta, prostitución, trabajo forzoso o pornografía es de 687, el 48,5 por ciento de los cuales son niñas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las 107 víctimas de trata que esta Organización atendió en el Níger, entre enero y septiembre de 2017, el 60 por ciento fueron niños, y más de la mitad de ellos han declarado haber sido obligados a ejercer la mendicidad y más del 30 por ciento han declarado haber sido explotados sexualmente. La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de la importancia del fenómeno de trata en el país, en particular de los niños, y del escaso número de personas enjuiciadas. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar la aplicación efectiva de la ordenanza núm. 2010-086 sobre la lucha contra la trata de personas en la práctica, comunicando en particular las estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, las investigaciones realizadas, los enjuiciamientos incoados, las condenas y las sanciones penales impuestas en el caso de niños víctimas de trata. Además, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Plan de acción nacional de lucha contra la trata de personas, en particular en lo relativo a la protección de los niños menores de 18 años. Por último, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre las actividades emprendidas por la CNLTP y el ANLTP, incluidas informaciones sobre las actividades de formación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Ministerio Público y los jueces.**

Artículos 3 y 7, párrafo 1, del Convenio. Sanciones. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Trabajo forzoso obligatorio. Mendicidad. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló que, en África Occidental y en particular en el Níger hay niños que son obligados a mendigar. Por motivos económicos y religiosos, muchas familias confían a sus niños a un guía espiritual (*marabout*) a partir de los 5 y 6 años de edad, con el que estos niños viven hasta los 15 ó 16 años (niños *talibés*). Durante este período, el *marabout* ejerce un control total sobre los niños, les enseña religión y, a cambio les obliga a efectuar diversas tareas, entre ellas, la de mendigar. La Comisión tomó nota de que el ANLTP ha puesto en práctica una serie de estrategias de lucha contra la mendicidad, entre otras, misiones de sensibilización de la población, las autoridades locales y tradicionales y los *marabouts*, así como seminarios de formación destinados a los medios de comunicación comunitarios, los jueces fiscales y los funcionarios de la policía judicial. El Gobierno señaló que había iniciado una operación consistente en devolver a los mendigos instalados en las vías públicas a sus lugares de origen, facilitándoles una tarjeta de identificación y su reinserción social y profesional. La Comisión tomó nota con preocupación de que, a pesar de que los artículos 179, 181 y 182 del Código Penal sancionan a quien invite a los menores de 18 años a mendigar o se aproveche deliberadamente de ello, el Gobierno no informa de ninguna condena de *marabouts* por la explotación de niños con fines puramente económicos.

La Comisión toma nota de que la CNT señala que el Gobierno no ha logrado que se apliquen los artículos 179, 181 y 182 del Código Penal relativos a la mendicidad. La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales, en diciembre de 2015 se celebró un Foro nacional sobre la mendicidad con el fin de luchar contra este fenómeno. El Gobierno señala asimismo que se han organizado varias sesiones de formación sobre los derechos del niño para reforzar la capacidad de las fuerzas del orden y de seguridad. No obstante, la Comisión toma nota nuevamente con **preocupación** de que las estadísticas suministradas por el Gobierno no revelan ninguna condena de *marabouts* por haber utilizado niños con fines puramente económicos. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las disposiciones por las que se dé efecto al Convenio, incluida la aplicación de sanciones penales. **En consecuencia, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que se lleven a término investigaciones exhaustivas, se incoen enjuiciamientos y se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias a los marabouts que utilizan a niños menores de 18 años con fines puramente económicos. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de los órganos encargados de la aplicación de la ley. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas eficaces en un plazo determinado para impedir que los niños menores de 18 años sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, por ejemplo, de la mendicidad, así como para identificar a los niños talibés obligados a mendigar, librarlos de tales situaciones y garantizar su rehabilitación e inserción social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.**

Apartado d), y artículo 4, párrafo 1. Trabajos peligrosos y determinación de los trabajos peligrosos. Niños que trabajan en minas y canteras. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que hay casos de niños que realizan trabajos peligrosos en lugares de trabajo de la economía informal, especialmente en minas y canteras, lugares donde los niños acompañan a sus padres y participan en la cadena de producción, ya sea en las minas de yeso o en las canteras de sal, a veces para realizar tareas menores destinadas a facilitar las labores de sus padres en estos emplazamientos, y otras veces para llevar a cabo tareas que entrañan riesgos para su integridad física, todos los días de la semana, durante más de ocho horas diarias, con los consiguientes riesgos de accidentes y enfermedades. La Comisión tomó nota de que el artículo 152 del decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 de septiembre de 1967, prohibía el empleo de niños en trabajos subterráneos en las minas, y que el Ministerio del Interior había prohibido, mediante una circular, emplear a niños en las minas y canteras de estas regiones, a saber, Tillabéry, Tahoua y Agadez. No obstante, la Comisión observó que no se ha dictado ninguna condena en esta materia. El Gobierno señaló que se está examinando la nueva parte reglamentaria del Código del Trabajo, y tomará en cuenta la cuestión de la revisión y modificación de la lista de trabajos peligrosos. La Comisión pidió al Gobierno que adopte la lista revisada de trabajos peligrosos, ampliando especialmente la protección del Convenio a los niños que trabajan en las minas del sector informal.

La Comisión toma nota con **satisfacción** de que el decreto núm. 2017-682-PRN/MET/PS, relativo a la parte reglamentaria del Código del Trabajo, adoptado el 18 de agosto de 2017, contiene una lista revisada de los trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, incluida la prohibición de emplear a niños menores de 18 años en la criba de oro y en otras explotaciones mineras artesanales. La Comisión constata que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones finales de 4 de junio de 2018, manifestó su preocupación por el número de niños explotados con fines económicos en las minas, en particular en condiciones que entrañan peligro (documento E/C.12/NER/CO/1, párrafo 46). **La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional sobre la protección de los niños contra el trabajo subterráneo en las minas y contra el trabajo en la criba de oro y la explotación minera artesanal, y a que proporcione informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 6. Programas de acción. Plan de acción para luchar contra la explotación sexual de los niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno debía adoptar un plan de acción nacional de lucha contra la explotación sexual de los niños. La Comisión observa nuevamente la falta de información al respecto por parte del Gobierno, pese a que el plan ya fue elaborado en 2007. Toma nota de que el Gobierno señala que varias asociaciones realizan actividades para luchar contra la explotación sexual de los niños con fines comerciales en Niamey y en las regiones de Tillabéry y Dosso. **La Comisión insta al Gobierno que redoble sus esfuerzos para luchar contra la explotación sexual de los niños, con miras a agilizar la adopción del plan de acción nacional de lucha contra la explotación sexual de los niños con carácter de urgencia. Pide al Gobierno que tenga a bien suministrar una copia de este plan de acción en cuanto haya sido adoptado.**

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. 1. Niños de la calle. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por el número de niños que mendigan en la calle. Tomó nota asimismo de que el Gobierno señala que, en 2013, se había adoptado un documento marco de protección del niño (DCPE) y que se habían creado servicios educativos judiciales y preventivos (SEJUP) para que, previa orden dictada por el juez de menores, los niños sean cuidados y recibidos por familias de acogida. No obstante, la Comisión manifestó que, según la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, el número de SEJUP parece insuficiente y poco ajustado a la cantidad de niños que hay en la calle, que podrían superar los 11 000.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el proyecto «Protección de los niños de la calle y en la calle», elaborado por los SEJUP en colaboración con el UNICEF y la ONG *Save the Children*, ha permitido hacerse cargo de más de 200 niños de la calle entre diciembre de 2011 y febrero de 2013. Así, en octubre de 2015, 236 niños fueron retirados de la calle, a algunos de los cuales se les ha prestado atención médica y psicológica y se les ha impartido cursos de alfabetización. El Gobierno ha realizado asimismo actividades de sensibilización sobre el fenómeno de los niños de la calle. Señala asimismo que los SEJUP han sido reemplazados por centros de prevención, promoción y protección de las personas, en particular, de mujeres y niños (CEPPP), pero que su puesta en práctica efectiva se ha visto comprometida por la falta de recursos humanos. El Gobierno precisa en su memoria formulada en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), que los CEPMP van a propiciar, entre otros fines, una protección y una asistencia directa de las personas, en particular de los niños y las mujeres afectados por la violencia o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, el Programa nacional de protección del niño, 2014-2019, elaborado en el marco del DCPE, prevé la asistencia, la rehabilitación y la reinserción de más de 250 000 niños vulnerables, entre los cuales se encuentran los niños que viven en la calle. **La Comisión recuerda que los niños de la calle son particularmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil y pide al Gobierno que siga adoptando medidas para protegerlos y para preparar su readaptación y su reinserción con actividades específicas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones concretas sobre los resultados obtenidos, en particular, en el marco del Programa nacional de protección del niño 2014-2019 y con la puesta en marcha de los CEPMP.**

2. *Niños en el trabajo doméstico.* La Comisión tomó nota anteriormente de que, según la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, el 58,2 por ciento de los niños económicamente activos están ocupados en el trabajo doméstico, de los cuales el 65, por ciento corresponde a niños con edades entre 5 y 11 años. Estos niños, que son principalmente niñas que se desplazan del campo a la ciudad para escapar de la pobreza se ven sometidos con frecuencia a violencia física, verbal y sexual, así como a la discriminación, están mal remunerados o no lo están en absoluto, cumplen largas jornadas de trabajo, pueden encontrarse psicológica y socialmente aislados y no tiene derecho ni a un descanso semanal ni a unas vacaciones.

La Comisión toma nota de que el ANLTP señala, en su informe adjunto a la memoria del Gobierno en virtud del Convenio núm. 29, que se han organizado actividades de sensibilización, en particular, sobre los trabajos domésticos efectuados por niños. La Comisión observa que las estadísticas suministradas por el Gobierno no informan de ningún niño que haya sido víctima de esclavitud doméstica. **Considerando que los niños que realizan trabajo doméstico se ven particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas efectivas en un plazo determinado para proteger a los niños empleados en trabajos domésticos de las peores formas de trabajo infantil, prever la asistencia directa y necesaria para retirarlos de estos trabajos y garantizar su readaptación y reintegración social. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota de la adopción de una política nacional sobre el trabajo infantil, 2013, seguida de un Plan nacional de acción (PNA) para la eliminación del trabajo infantil, 2013-2017, a fin de reducir la prevalencia del trabajo infantil para 2015 y erradicarlo totalmente en 2020. Asimismo, tomó nota de que según un informe titulado «El doble reto del trabajo infantil y la marginación educativa en la región de la CEDEAO», elaborado conjuntamente por el Banco Mundial, la OIT y el UNICEF en el marco del proyecto de cooperación e investigación «Understanding children's work» (Comprender el trabajo infantil), Nigeria es el Estado de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) que cuenta con un mayor número de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años ocupados en trabajo infantil: 10,5 millones de niños en esa categoría de trabajo. La Comisión también tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que había elaborado una plantilla nacional de presentación de informes sobre el trabajo infantil como mecanismo de supervisión y evaluación, armonizando así las actividades de las partes interesadas.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que el Ministerio Federal de Trabajo y Empleo realizó un taller sobre creación de capacidades para que el Comité Directivo Nacional pudiera validar la plantilla nacional de presentación de informes en seis zonas geopolíticas del país a fin de conseguir datos pertinentes y fiables sobre la eliminación del trabajo infantil. Además, esta plantilla ha sido transmitida a los 36 estados de la federación, al territorio de la capital federal, Abuja, y a las diversas partes interesadas a escala estatal y de gobierno local cuyas respuestas se están cotejando. Asimismo, el Gobierno indica que ha organizado un taller sobre creación de capacidades dirigido a los controladores estatales del trabajo y los funcionarios encargados de cuestiones laborales de 36 estados y del territorio de la capital federal así como a otras partes interesadas del Comité Directivo Nacional sobre trabajo infantil. El Gobierno también señala que cada año el país conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil a fin de sensibilizar y concienciar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil y la necesidad de su eliminación.

Asimismo, la Comisión toma nota de los datos proporcionados por el Gobierno sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones en materia de trabajo infantil. A este respecto, se detectaron 606 infracciones relacionadas con el trabajo infantil y en tres casos se llevaron a cabo enjuiciamientos y se aplicaron sanciones. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según el informe basado en la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados 2016-2017 realizada por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo del UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 50,8 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años realiza trabajo infantil en Nigeria, y el 39,1 por ciento de estos niños trabaja en condiciones peligrosas. Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su **profunda preocupación** por el elevado número de niños que realizan trabajo infantil en Nigeria. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para velar por la eliminación del trabajo infantil, tal como se prevé en la política nacional en materia de trabajo infantil. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre las respuestas y los datos recopilados respecto al empleo de niños y jóvenes a través de la plantilla nacional de presentación de informes. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, incluidos datos estadísticos actualizados sobre el empleo de niños y jóvenes, especialmente en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas y las sanciones impuestas. En la medida de lo posible esta información debería estar desglosada por edad y género.**

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. Empleo independiente y trabajo en la economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 2 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo de 2008 (proyecto de ley sobre las normas de trabajo), leído conjuntamente con la definición de «empleado» establecida en el artículo 60 de dicho proyecto de ley, no se aplica a los niños que trabajan sin una relación de trabajo formal, tales como los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. A este respecto, la Comisión también tomó nota de que según el documento relativo a la política nacional sobre el trabajo infantil, de 2013, el trabajo infantil está más extendido en el sector informal e incluye los oficios y los trabajos artesanales así como las actividades que en general se realizan en la calle, y también existe en el sector semiformal, por ejemplo en las plantaciones agrícolas de carácter comercial, el servicio doméstico, los servicios de hostelería, el transporte y la fabricación de prendas de vestir. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicó que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo se había retirado de la Asamblea Nacional y estaba siendo examinado por el comité técnico tripartito que realizaba las enmiendas necesarias a este respecto.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el artículo 60 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado aborda esta cuestión ampliando la definición de empleado para incluir «otras formas de empleo tanto en la economía formal como en la economía informal» garantizando de esta forma la protección de todos los niños que trabajan, incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y los que trabajan en la economía informal. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo garantice la protección de todos los niños que trabajan, incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y los que trabajan en la economía informal, tal como requiere el Convenio.**

Edad mínima de admisión al trabajo. La Comisión había tomado nota con preocupación de las diferentes edades mínimas, algunas de ellas demasiado bajas, establecidas por la legislación nacional. Tomó nota de que el artículo 8, 1), del proyecto de ley sobre las normas de trabajo prohíbe el empleo de niños (definidos como personas de menos de 15 años de edad (artículo 60)), en cualquier trabajo, excepto cuando son empleados por miembros de su familia en trabajos ligeros de carácter agrícola, hortícola o doméstico. La Comisión observó que el artículo 8, 1), que establece una edad mínima de 15 años para el empleo o el trabajo, tal como se especificó en el momento de la ratificación, está de conformidad con el artículo 2, 1), del Convenio. **Tomando nota de que el Gobierno informa de que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado está a la espera de la validación final por los interlocutores sociales y otras partes interesadas, la Comisión expresa su firme esperanza de que este proyecto establezca una edad mínima de 15 años para el empleo o el trabajo.**

Artículo 3, 2). Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que el Comité Directivo Nacional había elaborado y validado una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. También tomó nota de que según las actas del Comité de partes interesadas para la revisión de los proyectos de ley sobre las normas de trabajo, de 4 de mayo de 2017, el artículo 60 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo contendrá la lista de trabajos peligrosos elaborada por el Comité Directivo Nacional.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que la lista de tipos de trabajos peligrosos para los niños se ha finalizado y se ha introducido en el proyecto de ley sobre normas de trabajo revisado, concretamente en el anexo 2, parte A. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar que la lista de tipos de trabajos peligrosos para los niños se adopta y se aplica, y le pide que prohíba que los menores de 18 años realicen trabajos peligrosos. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 6. Aprendizaje. La Comisión tomó nota de que el artículo 49, 1), de la Ley del Trabajo permite que los jóvenes de entre 12 y 16 años puedan realizar un aprendizaje por un período máximo de cinco años, mientras que el artículo 52, a) y e), de la misma ley prevé la facultad del Ministro de elaborar reglamentos a fin de determinar los términos

y las condiciones del aprendizaje. Señaló que los artículos 46 y 47 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo de 2008 establecen las condiciones para celebrar un contrato de aprendizaje, pero no especifican la edad mínima de admisión al mismo. La Comisión tomó nota de que según el Gobierno el Comité de partes interesadas para la revisión de los proyectos de ley sobre las normas de trabajo había acordado fijar en *14 años* la edad mínima de admisión a los programas de aprendizaje y, por consiguiente, se había modificado el artículo 46 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 46, 1), A), del proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado fija una edad mínima de 14 años para la participación en programas de aprendizaje. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción del proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado que establece una edad mínima de 14 años para la participación en programas de aprendizaje, en conformidad con el artículo 6 del Convenio.***

Artículo 7, 1) y 3). *Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros y determinación de las actividades que constituyen trabajos ligeros.* La Comisión observó con anterioridad que la Ley del Trabajo no prevé una edad mínima de admisión a los trabajos ligeros. Asimismo, tomó nota de que si bien el artículo 8 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo autoriza el empleo de niños menores de 15 años en trabajos ligeros en la agricultura, la horticultura y el servicio doméstico, no señala la edad mínima a partir de la cual estos trabajos estarán permitidos. También observó que las condiciones en las que se pueden realizar trabajos ligeros y el número de horas durante las que se permiten estos trabajos no están claramente definidos en la Ley del Trabajo. Además, indicó que el número máximo de horas que está permitido trabajar, a saber ocho horas, con arreglo al artículo 59, 8), de la Ley del Trabajo perjudica necesariamente la asistencia a la escuela de los menores de 15 años o su participación en programas de orientación o formación profesional, en conformidad con el artículo 7, 1), b), del Convenio. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indicaba que el Comité de partes interesadas para la revisión de los proyectos de ley sobre las normas de trabajo había acordado abordar estas cuestiones.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el artículo 8, 1), A), del proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado fija una edad mínima de 13 años para la admisión a los trabajos ligeros. También toma nota de que el Gobierno señala que el artículo 8, 1), de dicho proyecto de ley contiene disposiciones que prevén las condiciones de trabajo de los niños de 13 años o más en los trabajos ligeros y las horas que pueden realizar. Asimismo, señala que la lista de actividades que constituyen trabajos ligeros figura en el anexo 2 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado. ***La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que en un futuro próximo se adopte el proyecto de ley sobre las normas de trabajo revisado, que fija una edad mínima de 13 años para la admisión a los trabajos ligeros, regula las horas y las condiciones en lo que respecta a dichos trabajos y establece una lista de trabajos ligeros permitidos a los niños a partir de los 13 años de edad. También solicita al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), y 7, 2), b), del Convenio. *Todas las formas de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud y medidas efectivas y en un plazo determinado. Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados y asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 5 de junio de 2015 (documento A/69/926-S/2015/409), según el cual un número creciente de niños y niñas fueron reclutados y utilizados por Boko Haram para que desempeñaran funciones de apoyo y combatieran. Se informa que se utilizan niños como escudos humanos y para realizar atentados suicidas, en particular niñas con sólo 13 años de edad. Son informes de niños que se sumaron al Equipo de Tareas Civil Conjunto (CJTF) y otros grupos parapoliciales, de forma voluntaria o por la fuerza, y que se utilizaban como guardias en los puestos de control, así como para obtener informaciones y participar en patrullas armadas. Se informó del secuestro de por lo menos 500 mujeres jóvenes y niñas sacadas de sus hogares y de las escuelas y sometidas a trabajo forzoso, a abusos físicos y psicológicos, y a matrimonios forzosos como combatientes de Boko Haram. En este informe, también se indica que se dio muerte y se mutiló a un gran número de niños en incursiones de Boko Haram en aldeas, en ataques selectivos realizados en lugares públicos y en escuelas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual adoptó medidas para vigilar el reclutamiento de niños menores de edad en grupos parapoliciales, introduciendo un registro obligatorio de los grupos parapoliciales y de los grupos armados, a través del Ministerio de Defensa, de las fuerzas policiales y del cuerpo de seguridad y defensa civil de Nigeria. También toma nota de la información del Gobierno, según la cual, tras las negociaciones con Boko Haram, fueron liberadas 104 de las 110 niñas secuestradas de la escuela de Daptchi y 104 niñas de la escuela de Chibok, de las 276 niñas que fueron secuestradas en 2014. La memoria del Gobierno indica que hay negociaciones en curso, a través de las partes mediadoras para la liberación de otras niñas.

La Comisión toma nota del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 16 de mayo de 2018 (documento A/72/865-S/2018/465) (informe del Secretario General), según el cual se suscribió un plan de acción entre el CJTF y las Naciones Unidas para poner fin y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños, y el CJTF dictó

un reglamento en este sentido. Según el informe del Secretario General, el número total de casos verificados de reclutamiento y utilización de niños para conflictos armados, descendió en casi el 50 por ciento, pasando de 2 122, en 2016, a 1 092, incluyendo 738 niños y 353 niñas, en 2017. Sin embargo, el informe del Secretario General indica que las graves violaciones y abusos cometidos por Boko Haram contra niños, sigue siendo sumamente perturbador, especialmente la utilización de niños como portadores de artefactos explosivos improvisados a cargo de suicidas, así como un gran número de secuestros. La Comisión toma nota del informe del Secretario General, según el cual las Naciones Unidas comprobaron el asesinato de 570 niños, la mutilación de 311 niños y 45 casos de violación y otras formas de violencia sexual que afectaron a 131 niños. Casi la mitad de las víctimas se debió a ataques suicidas perpetrados por Boko Haram. La Comisión toma nota asimismo de que se comprobó que 189 niños, incluyendo 107 niños y 79 niñas, fueron secuestrados por Boko Haram, entre julio y octubre de 2017, a los que se sumaron 1 456 niños en el noreste de Nigeria que también fueron secuestrados en los años anteriores. Además, se informó que 100 niñas fueron secuestradas en Dapchi, estado de Yobe, en 2018.

Al tiempo que toma nota de algunas medidas adoptadas por el Gobierno sobre la utilización de niños en conflictos armados, la Comisión debe **deplorar profundamente** una vez más la persistencia de esta práctica, especialmente habida cuenta de que entraña otras violaciones a los derechos del niño, como los secuestros, los asesinatos y la violencia sexual. **Reconociendo la complejidad de la situación en el terreno y la presencia de grupos armados en el noreste del país, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que adopte medidas, utilizando todos los medios disponibles, para garantizar la plena e inmediata desmovilización de todos los niños y poner término, en la práctica, a la utilización o al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años de edad en grupos armados. También insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos de todas las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años de edad para utilizarlos en conflictos armados, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para prever su rehabilitación e inserción social, y que comunique información sobre las medidas adoptadas en este sentido y sobre los resultados obtenidos.**

Artículo 7, 2), a). *Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas políticas y actividades de protección social aplicadas en Nigeria, con apoyo del UNICEF, para mejorar el acceso a la educación, como el Programa de alimentación escolar, los fondos para becas y ayudas a las familias indígenas que tienen niños en edad escolar, y el programa de transferencias monetarias condicionadas. Tomó nota también del informe de revisión de Educación para Todos (EFA) de Nigeria, de 2000-2014 según el cual se produjo un aumento de las tasas de matriculación en los niveles primario y secundario. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de las estimaciones del informe mundial de seguimiento de la UNESCO EFA, de 2013, según las cuales eran aproximadamente 10,5 millones los niños que se encontraban fuera del sistema escolar en Nigeria.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual éste desarrolló una política nacional sobre educación inclusiva, en 2017, que se está aplicando en la actualidad en Nigeria. También toma nota de que se estableció una comisión presidencial en el noreste y se dio inicio a la Iniciativa escuelas seguras, en 2014, mediante la cual más de 2 531 estudiantes que se vieron afectados por la insurgencia de Boko Haram, fueron trasladados a escuelas y colegios seguros. Además, el Gobierno indica que: i) se dio inicio, en 2015, a una campaña de matriculación, que sigue aún en curso, para alentar a los alumnos no escolarizados a que regresen a la escuela; ii) se desarrolló, en cada uno de los tres distritos senatoriales de los 36 estados y del territorio de la capital federal (FCT), el programa de tutoría, orientación y asesoramiento de los estudiantes, centrado en los padres y en los estudiantes, y iii) se estableció, en 13 estados y en el FCT, una asociación de madres para el perfeccionamiento de las aptitudes profesionales, con el fin de reducir el abandono escolar. La Comisión toma nota asimismo de la referencia del Gobierno a la información estadística de la Recopilación de estadísticas de educación de Nigeria y del Indicador de educación de Nigeria, de 2016, que viene a indicar un aumento de las tasas de matriculación en las escuelas primarias, de un 0,58 por ciento, de 2015 a 2016, así como un aumento del número de escuelas primarias y secundarias básicas. Sin embargo, los datos estadísticos indican un descenso del 1,28 por ciento de las tasas de matriculación en las escuelas secundarias básicas, que el Gobierno atribuye a la insurgencia en el noreste. Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual los esfuerzos en curso del Gobierno, como la revisión de los objetivos de la EFA, el aumento de los programas de educación básica universales, el combate de la insurgencia de Boko Haram y la rehabilitación de los niños desplazados internamente, darán lugar a una tendencia positiva en el sistema educativo de Nigeria. Sin embargo, la Comisión toma nota con **profunda preocupación** del informe del UNICEF sobre la educación en Nigeria, de 2018, según el cual, si bien la matriculación en las escuelas primarias aumentó en los últimos años, la asistencia neta sigue siendo baja, rondando el 70 por ciento. Nigeria cuenta aún con 10,5 millones de niños no escolarizados, que es el número más elevado a escala mundial, encontrándose el 60 por ciento en el norte de Nigeria, donde el conflicto ha privado a muchos niños del acceso a la educación. **Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y para facilitar el acceso de todos los niños a la educación básica gratuita, especialmente los niños del noreste de Nigeria. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para elevar las tasas de matriculación escolar y las tasas de asistencia en los niveles primario y secundario, y que disminuya las tasas de abandono escolar. Solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y que transmita información estadística actualizada sobre los**

resultados obtenidos, en particular en relación con la reducción del número de niños no escolarizados en los niveles primario y secundario.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nueva Zelanda

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de Business Nueva Zelanda y del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda (NZCTU), comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Artículos 3, d), y 4, 1), del Convenio. Trabajo peligroso. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que los menores de 18 años no pueden trabajar en las zonas de acceso limitado de los establecimientos autorizados para vender bebidas alcohólicas, como bares, restaurantes o discotecas. Sin embargo, también tomó nota de que, en virtud del artículo 54, d), del reglamento de salud y seguridad en el trabajo, de 1995 (reglamento SST), se prohíbe que los menores de 15 años realicen trabajos peligrosos. También tomó nota de que, según el Gobierno, si bien de conformidad con la legislación vigente las restricciones legales en relación con determinados tipos de trabajos sólo se aplican a los niños menores de 15 años, los niños de entre 6 y 18 años de edad están protegidos por las disposiciones generales de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que prevén la protección de todos los trabajadores independientemente de su edad. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el NZCTU se refirió a las conclusiones de la encuesta nacional sobre la salud y el bienestar de los jóvenes, de 2000, en las que se indicaban los accidentes y lesiones relacionados con el trabajo sufridos por los menores de 18 años, algunos de los cuales fueron mortales. Además, también tomó nota de los datos de 2013-2015 sobre las víctimas mortales en el lugar de trabajo proporcionados por WorkSafe Nueva Zelanda, en los que se señala que de los 119 fallecidos, 14 eran menores de 18 años y que la mayor parte de estos accidentes se habían producido en el sector agrícola. La Comisión recordó que el párrafo 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190) aborda la posibilidad de autorizar el empleo o el trabajo de los jóvenes en ciertos tipos de trabajos peligrosos a partir de los 16 años si respetan ciertas condiciones estrictas en relación con la protección de su seguridad y su salud y han recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. A este respecto, la Comisión, remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 380), hizo hincapié en que se deberían adoptar medidas para aumentar a 16 años la edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos, aun cuando se hayan previsto debidamente las condiciones de protección.

La Comisión toma nota de que Business Nueva Zelanda señala que las estadísticas sobre las lesiones y los accidentes mortales en el lugar de trabajo no contemplan necesariamente el empleo de niños y jóvenes y que en una serie de casos la persona lesionada no era un empleado sino alguien que estaba en el lugar de trabajo al que le ocurrió el accidente. También toma nota de que el NZCTU indica que mantiene los comentarios anteriores debido a que no se han producido cambios en el estado de la legislación.

La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se señala que se adoptó la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2015, que entró en vigor en abril de 2016 junto con nueve grupos de reglamentos complementarios en materia de seguridad y salud en sectores específicos. La Comisión observa que la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y algunos de sus reglamentos se aplican a los trabajadores en general y no contienen disposiciones específicas en lo que respecta a la seguridad y salud de los trabajadores jóvenes, mientras que otros prevén restricciones específicas para los niños menores de 15 ó 16 años en lo que respecta a ciertos tipos de trabajos. Por ejemplo, los artículos 43 a 48 del reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo (riesgos generales y gestión laboral), de 2016 (por el que se enmienda el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, de 1995) prevén que la persona que dirija un negocio o una empresa tiene que velar por que ningún menor de 15 años trabaje o esté presente en cualquier zona del lugar de trabajo en la que se fabriquen bienes o éstos se preparen para su comercialización o venta; en la que se lleven a cabo trabajos de construcción; se realicen trabajos relacionados con la tala de árboles; se fabriquen, utilicen o generen sustancias peligrosas. También establecen la prohibición del trabajo nocturno de los menores de 16 años. Además, no deberá pedirse a los trabajadores menores de 15 años que levanten grandes pesos o realicen otras tareas peligrosas ni que trabajen en máquinas o con máquinas. Asimismo, la Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por la Corporación para la Indemnización por Accidentes en la que se indica que en 2016 se registraron 5 985 reclamaciones en materia laboral en relación con personas de entre 15 y 18 años de edad y en 2017 se registraron 6 448 reclamaciones de este tipo.

La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que está iniciando un amplio programa de trabajo plurianual para reformar el sistema de seguridad y salud de Nueva Zelanda a fin de reducir en un 25 por ciento el número de lesiones y muertes en el lugar de trabajo para 2020, reconociendo que los jóvenes son más vulnerables frente a los riesgos para la seguridad y la salud. A este respecto, la Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno señala que en el marco de esta reforma está previsto revisar los marcos normativos que regulan las cuestiones relacionadas con los jóvenes y los trabajos peligrosos, al tiempo que se considera elevar la edad actual de admisión a los trabajos peligrosos de 15 a 16 años y se garantiza la seguridad de los menores de 18 años proporcionando formación y supervisión a los menores de 16 años que realizan trabajos de alto riesgo. *La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno siga*

adoptando, sin demora, las medidas necesarias para garantizar que en la revisión en curso de los marcos normativos en lo que respecta a los jóvenes se tengan en cuenta las normas internacionales pertinentes, en particular el párrafo 4 de la Recomendación núm. 190 en relación con la autorización del empleo o el trabajo a partir de los 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los niños afectados, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos logrados a este respecto.

Artículo 4, 1) y 3). Revisión periódica de los tipos de actividades peligrosas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en el informe del Departamento de Trabajo (DoL) titulado *School children in paid employment – A summary of research findings* (Escolares con un empleo remunerado: una reseña de los resultados de las investigaciones) se señaló que los sectores de la construcción, la agricultura y la hostelería eran los más peligrosos para los jóvenes, así como algunos otros tipos de empleos que son peligrosos debido a la carga de trabajo, como el trabajo en tiendas (incluidas las estaciones de servicios y los supermercados) y el trabajo en restaurantes, negocios de comida para llevar y otros comercios de ventas de comida. Asimismo, tomó nota de que el NZCTU, en referencia a un informe del Comité de examen de la mortalidad de niños y adolescentes de 2014, indicó que el trabajo peligroso en las explotaciones agrícolas, incluida la conducción y utilización de cuadriciclos y maquinaria agrícola, debe restringirse en interés de la seguridad y el bienestar de los niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que, como parte de la revisión del marco normativo en relación con los jóvenes, se evaluarán los tipos de trabajos peligrosos que realizan los jóvenes y se establecerá una lista revisada de esos trabajos, incluido el trabajo en fábricas y el trabajo con maquinaria y vehículos (incluidos tractores y cuadriciclos). El Gobierno también indica que la revisión se realizará en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y que está previsto que las consultas formales se inicien a mediados de 2018. ***La Comisión espera firmemente que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que la revisión del marco normativo en relación con los jóvenes conduzca a la adopción de una lista concreta de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los jóvenes, que incluya el trabajo en las fábricas y el trabajo con maquinaria y vehículos utilizados con fines agrícolas así como ciertos tipos de trabajos en los sectores agrícola, de la construcción y hotelero, tal como se indica en el informe del Departamento de Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.***

Artículo 5. Mecanismos de supervisión y aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que se investigan todos los fallecimientos relacionados con el trabajo con el objetivo de establecer los hechos clave en lo que respecta a la causa del fallecimiento, determinar las causas inmediatas y subyacentes de éste, y garantizar que los responsables en la materia toman medidas para evitar que se vuelvan a producir casos de este tipo, así como para determinar cualquier incumplimiento de la legislación pertinente. Asimismo, la Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se señala que, según las estadísticas de *WorkSafe* Nueva Zelanda, desde 2015 se han notificado nueve incidentes en los que han fallecido niños por causas relacionadas con el trabajo, que han afectado a niños de entre 3 y 17 años. Sin embargo, el Gobierno indica que esos casos no sólo afectan a niños que están trabajando sino también a niños que están en el lugar de trabajo en calidad de observadores en el momento en que se produce el incidente. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que está preparando la próxima encuesta sobre la salud y el bienestar de los jóvenes en relación con los tipos de trabajo, las horas de trabajo, las condiciones de empleo y la seguridad en el lugar de trabajo, que cubrirá a todos los niños y jóvenes. ***La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno realizará la encuesta sobre la seguridad y el bienestar de los jóvenes en un futuro próximo, y confía en que ésta cubra a todos los niños y jóvenes a fin de entender mejor sus condiciones de trabajo y los resultados en materia de seguridad y salud. Pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de la encuesta que, en la medida de lo posible, deberían desglosarse por edad y género.***

Países Bajos

Aruba

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que la propuesta de autorizar al director del Departamento de Trabajo a determinar los tipos de trabajo peligrosos se encontraba en el Departamento de Legislación para su evaluación y revisión técnicas. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, previa aprobación del Departamento de Legislación, el director del Departamento de Trabajo determinara lo antes posible los tipos de trabajo peligrosos.

La Comisión toma nota con **satisfacción** de que el Gobierno adoptó el decreto ministerial núm. 78 de 2013, que contiene una lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. Esta lista comprende: el trabajo relacionado con levantar o acarrear grandes pesos; trabajar de manera continua en la misma posición; trabajar teniendo contacto directo con sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas, así como con explosivos y sustancias irritantes y corrosivas; el trabajo con

animales salvajes, venenosos o peligrosos; el sacrificio de animales; el trabajo en establecimientos en los que suministra alcohol; el trabajo con o cerca de máquinas o equipos que supongan riesgo de incendio, explosiones, electrocución, asfixia, o en actividades de cosecha o tala; el trabajo submarino; el trabajo con instrumentos que emiten radiaciones electromagnéticas no ionizantes nocivas; el trabajo con gases comprimidos; el trabajo que expone a los niños al ruido y a las vibraciones; el trabajo en entornos que pueden colapsarse; el trabajo cerca de tendidos eléctricos, y el trabajo en hospitales. **La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del decreto ministerial núm. 78, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones relacionadas con jóvenes que realizan trabajos peligrosos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1 del Convenio. Plan nacional de acción y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de los comentarios formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) de que el trabajo infantil tiene lugar en zonas rurales, normalmente en la agricultura de subsistencia, y en zonas urbanas, en los sectores de la venta ambulante, el turismo y el ocio. Tomó nota de que Papua Nueva Guinea era uno de los 11 países que participaron en el *programa de duración determinada (PDD)* de la OIT/IPEC para 2008-2012, titulado «Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE) destinado a contribuir a la lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), de que, dentro del marco del proyecto TACKLE, se llevó a cabo una rápida evaluación en Port Moresby que tenía por objeto a los niños que trabajan en las calles y los que son víctimas de explotación sexual con fines comerciales. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby son alarmantes y de que se cree que en otras regiones del país la situación del trabajo infantil es similar. Las conclusiones de la evaluación rápida indican que niños de cinco y seis años de edad trabajan en las calles y que alrededor del 68 por ciento de ellos lo hacen en condiciones peligrosas. En torno al 47 por ciento de los niños de la calle de entre 12 y 14 años nunca han asistido a la escuela y otro 34 por ciento la han abandonado. La Comisión expresa su **profunda preocupación** por la situación de los niños menores de 16 años que se ven obligados a trabajar en Papua Nueva Guinea. **La Comisión insta, por consiguiente, al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar la situación de los niños menores de 16 años que trabajan y garantizar la erradicación efectiva del trabajo infantil. Tomando nota de que no existen datos concretos o dignos de confianza que reflejen la situación real de los niños en el resto del país, la Comisión insta al Gobierno a emprender una encuesta nacional sobre el trabajo infantil para garantizar la disponibilidad de suficientes datos actualizados sobre la situación de los niños trabajadores en Papua Nueva Guinea.**

Artículo 2, párrafo 1. Edad mínima de admisión al empleo. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, aunque el Gobierno de Papua Nueva Guinea había establecido los 16 años como la edad mínima de admisión al empleo dentro de su territorio, el artículo 103, 4) de la Ley del Empleo establece que podrá contratarse a un niño de 14 o 15 años durante el horario escolar si al empleador no le importa que el niño deje de asistir a la escuela. La Comisión tomó nota también de que, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo), de 1972, la edad mínima para trabajar a bordo de los buques es de 15 y 14 años de edad, respectivamente.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, por medio de su unidad de prestación de servicios y asesoramiento, en estrecha consulta con la OIT/IPEC y el Departamento del Trabajo de Relaciones Laborales ha emprendido una revisión de la Ley del Empleo y que, se ha puesto en marcha un proceso de enmienda. Toma nota asimismo de que el Gobierno señala que en este procedimiento se planteará también la cuestión relativa a la edad mínima estipulada en la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo), de 1972. **Tomando nota de que el Gobierno ha venido refiriéndose a la revisión de la Ley del Empleo y de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo) desde hace algunos años, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que garantice que, en un futuro próximo, se adoptarán las enmiendas propuestas. A este respecto, manifiesta su esperanza de que las disposiciones enmendadas serán conformes a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio.**

Artículo 2, párrafo 3. Edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la educación no es ni universal ni obligatoria en Papua Nueva Guinea y de que la ley no especifica una edad legal para iniciar los estudios ni una edad en que se permita a los niños abandonar la escuela. Tomó nota de que el Departamento de Educación ha elaborado un plan nacional de educación de diez años, entre 2005-2015 (NEP), a fin de permitir que se inscriban más niños en la escuela. No obstante, la Comisión observó que el NEP parecía tener el objetivo de que hubiera solamente tres años de educación obligatoria hasta la edad de 9 años. Además, la Comisión tomó nota de que, según la CSI, la tasa bruta de inscripción en la enseñanza primaria es de 55,2 por ciento, y que solamente el 68 por ciento de los niños matriculados permanece en la escuela hasta los diez años, y que menos del 20 por ciento de los niños del país reciben enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en virtud del Convenio núm. 182 de que el NEP subsiste gracias al apoyo de organismos donantes que aplican programas centrados en la educación formal y en la educación no formal, incluyendo ayudas al Banco Asiático de Desarrollo y a la Unión Europea con el fin de que la educación no formal llegue a los necesitados y a los desfavorecidos. La Comisión toma nota, no obstante, de que según las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby durante 2010-2011, aunque se han llevado a cabo reformas educativas, el 92,2 por ciento de los niños que ingresan en tercer grado abandonarán la escuela posteriormente. La Comisión expresa su **profunda preocupación** por el número considerable de niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo que no asiste a la escuela. En este sentido, la Comisión debe hacer hincapié en la conveniencia de asociar la edad de finalización de la educación obligatoria con la edad mínima de admisión al empleo, según establece el párrafo 4 de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). Si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la

posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrafo 371). **Por consiguiente, teniendo en cuenta que la educación obligatoria es uno de los medios más efectivos de combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en particular dentro del marco del NEP, para establecer la educación obligatoria de niños y niñas hasta la edad mínima de admisión al empleo de 16 años. La Comisión solicita al Gobierno que establezca información sobre los progresos realizados en este sentido.**

Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión al empleo y determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que aunque determinadas disposiciones de la legislación nacional prohíben el trabajo peligroso a los menores de 16 años, no existe ninguna para proteger a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad de este tipo de ocupaciones. La Comisión tomó nota asimismo de la ausencia de ningún tipo de lista de trabajos peligrosos prohibidos a niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que la revisión legislativa en marcha de la Ley del Empleo garantizará el cumplimiento de las disposiciones del Convenio relativas al trabajo peligroso. **La Comisión expresa su firme esperanza de que la revisión de la Ley del Empleo, que incluirá una prohibición de los trabajos peligrosos para menores de 18 años, así como una determinación de los tipos de ocupaciones peligrosas que se prohíben a estos jóvenes, se adoptará en el próximo futuro. Solicita al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.**

Artículo 3, párrafo 3. Admisión a los tipos de trabajos peligrosos a partir de la edad de 16 años. La Comisión había tomado nota anteriormente de que las condiciones de trabajo de los jóvenes se examinarían mediante la revisión en curso de la Ley del Empleo y que la legislación relativa a la seguridad y la salud en el trabajo va a garantizar que el trabajo peligroso no afecte negativamente a la salud y la seguridad de los trabajadores jóvenes. **La Comisión expresa una vez más su firme esperanza de que la revisión de la Ley del Empleo y de la legislación relativa a la seguridad y la salud en el trabajo concluirá tan pronto como sea posible. Espera, asimismo, que las enmiendas introducidas en la legislación incluirán disposiciones que exijan la instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que están autorizados a realizar tipos de trabajos peligrosos. Solicita al Gobierno que suministre información, en su próxima memoria, sobre los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 9, párrafo 3. Registros del empleo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley del Empleo no contiene ninguna disposición que exija al empleador llevar un registro y documentos de los menores de 18 años que trabajan para ellos. Tomó nota asimismo de que el artículo 5 de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo) establece la obligación de llevar y tener registros por parte de quienes tengan la responsabilidad o el mando de un buque, en los cuales deberán constar detalles tales como el nombre completo, la fecha de nacimiento y las cotizaciones de servicio de cada menor de 16 años de edad que trabaje a bordo del buque. La Comisión había solicitado al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Convenio, el cumplimiento de la obligación de los empleadores de llevar registros en los que se indique el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificado siempre que sea posible, de todas las personas menores de 18 años empleadas por ellos o que trabajen para ellos.

La Comisión toma nota una vez más de la información del Gobierno de que esta cuestión se abordará dentro del marco de la revisión de la Ley de Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo). **La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, sin demora, para garantizar que la obligación de todos los empleadores de llevar un registro se amplía a todos los menores de 18 años que trabajen para ello, y de que suministrará información con respecto a los progresos legislativos realizados para garantizar que la Ley del Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo) no contraviene el artículo 9, 3), del Convenio.**

La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que, durante su revisión de la Ley del Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo), se preste la debida atención a las observaciones detalladas de la Comisión sobre las discrepancias entre legislación nacional y el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información, en su próxima memoria, sobre los progresos realizados en la revisión de estas leyes, e invita al Gobierno a que estudie la posibilidad de recabar el asesoramiento técnico de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota anteriormente de que mujeres y niños son víctimas de trata dentro del país con fines de explotación sexual comercial y de servidumbre doméstica. Solicitó al Gobierno que adopte las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para adoptar la legislación que prohíbe la venta y la trata de niños y niñas menores de 18 años con fines de explotación laboral y sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está afrontando esta cuestión mediante la adopción de la Ley sobre Tráfico y Trata de Personas, que modificaría el Código Penal para incluir una disposición que prohíbe la trata de seres humanos, incluidos los jóvenes menores de 18 años con fines de explotación laboral y sexual. No obstante, la Comisión toma nota de que, según una encuesta realizada en 2012, en el marco del proyecto de lucha contra la trata de personas en Papua Nueva Guinea, aplicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el país hay un elevado índice de trata de personas con fines de trabajo forzoso, explotación sexual y servidumbre doméstica, incluyendo la trata de niños. Se señala que las niñas tienen el doble de vulnerabilidad que los niños a convertirse en víctimas de trata. La Comisión toma nota además de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales de 30 de julio de 2010, expresó su preocupación por el hecho de que no haya leyes específicas relativas a los problemas relacionados con la trata ni sobre la trata transfronteriza, que engloba tanto la explotación sexual con fines comerciales como la explotación laboral (documento CEDAW/C/PNG/CO/3, párrafo 31). **La Comisión insta en consecuencia al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción sin tardanza de la Ley contra la Trata y el Tráfico de Personas, garantizando que los responsables de trata de seres humanos son objeto de investigaciones rigurosas y de procedimientos judiciales firmes y que se les imponen**

sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que suministre una copia de la Ley contra la Trata y el Tráfico de Personas en cuanto haya sido adoptada.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado e). Tener en cuenta la situación especial de las niñas. 1. *Niños víctimas de prostitución.* La Comisión había tomado nota anteriormente de que el Gobierno señala que el número de niñas (algunas de incluso 13 años) dedicadas a la prostitución para sobrevivir representa un problema creciente tanto en áreas urbanas como en rurales. Además, la Comisión tomó nota también de que las leyes que prohíben la prostitución se aplican selectivamente o con escasa frecuencia, incluso en los casos en que las víctimas son niños.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas o previstas para luchar contra la explotación sexual con fines comerciales de niños. La Comisión toma nota de que, según las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby durante 2010-2011, hay un número creciente de niñas víctimas de explotación sexual con fines comerciales. La edad más frecuente en que estas niñas son víctimas de prostitución es 15 años (34 por ciento), mientras que en el caso de los niños, el 41 por ciento es antes de los 15 años. El informe sobre la encuesta señala además que niñas de tan sólo 10 años participan también en el comercio sexual. La Comisión manifiesta una vez más su **profunda preocupación** por la prevalencia de la explotación sexual con fines comerciales de niños en Papua Nueva Guinea. **La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proporcionar la necesaria y adecuada asistencia directa a fin de sustraer a los niños, en particular a las niñas menores de 18 años, de la prostitución, procurarles programas de rehabilitación e integración social.**

2. *Niños «adoptados».* La Comisión había tomado nota anteriormente de las observaciones de la CSI según las cuales las familias endeudadas saldan a veces sus deudas enviando a los niños — por lo general niñas — a trabajar al servicio de sus prestamistas en régimen de servidumbre doméstica. La CSI señaló que los niños «adoptados» suelen tener largas jornadas, carecen de libertad de movimiento o de atención médica y no asisten a la escuela. La Comisión tomó nota también de la información del Gobierno de que la práctica de «la adopción» es una tradición cultural en Papua Nueva Guinea. La Comisión observó que estas niñas «adoptadas» suelen caer como víctimas de la explotación, ya que es difícil controlar sus condiciones de trabajo, y solicitó al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas para protegerlas.

En este sentido, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno respecto a la Ley Lukautim Pikinini, de 2009, que establece la protección de los niños con necesidades especiales. De acuerdo con la Ley Lukautim Pikinini, una persona que tenga bajo su protección a un niño con necesidades especiales y no pueda proporcionarle los servicios necesarios para su educación podrá concertar un acuerdo en materia de necesidades especiales con el Servicio de Apoyo Familiar. En virtud de estos acuerdos, podrá proporcionarse asistencia económica. En virtud del artículo 41 de la Ley Lukautim Pikinini, la definición de «un niño con necesidades especiales» incluye niños que son huérfanos, desplazados o están traumatizados como consecuencia de desastres naturales, conflictos o separaciones, o bien han sido objeto de violencia, abusos, o explotación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha suministrado ninguna información adicional sobre esta cuestión. La Comisión expresa su **preocupación** por la situación de los niños «adoptados» menores de 18 años que se ven obligados a trabajar en condiciones equivalentes al régimen de servidumbre o en condiciones peligrosas. **La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar, en la legislación y en la práctica, que los niños «adoptados» menores de 18 años no son objeto de explotación en condiciones análogas al trabajo forzoso o en condiciones peligrosas, teniendo en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños «adoptados» que son objeto de explotación y trabajo peligroso y que se han visto beneficiados de los acuerdos sobre necesidades especiales.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Samoa

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2008)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la 107.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2018, relativa a la aplicación del Convenio por Samoa.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 82 de la Ley de Delitos de 2013, tipifica como delito la venta, entrega, exhibición, impresión, publicación, creación, producción o distribución de cualquier material indecente que represente a un niño ocupado en conductas sexuales explícitas. Sin embargo, observó que a los fines de este artículo, un niño es definido como una persona menor de 16 años de edad. Por lo tanto, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años para la producción de materiales indecentes también se prohíban efectivamente.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo (MCIL), con la asistencia técnica del Proyecto de Servicio Técnico de Samoa está llevando a cabo una revisión de la legislación nacional, incluida la Ley de Delitos, con el fin de armonizar la definición de niño con lo dispuesto en el Convenio. **La Comisión confía sinceramente en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, durante la revisión de la legislación nacional, a fin de asegurar que la definición de niño contenida en el artículo 82 de la Ley de Delitos haga referencia a las personas menores de 18 años de edad, de tal manera que la**

prohibición establecida en este artículo sobre la producción y distribución de material indecente que represente a niños incluya a los niños de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 4, 1). ***Determinación de los tipos de trabajos peligrosos.*** En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual se sometería al Foro Tripartito Nacional de Samoa, para su aprobación, un proyecto de lista en la que se determinan los tipos de trabajos peligrosos prohibidos para los niños. La Comisión expresó la firme esperanza de que la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años se finalizaría y adoptaría en un futuro cercano.

La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la Conferencia, los miembros empleadores expresaron su preocupación por la ausencia de una lista de tipos de trabajos peligrosos en los que está prohibido el empleo de jóvenes.

La Comisión toma nota con ***interés*** de la indicación del Gobierno, según la cual la lista de trabajos peligrosos, que enumera una lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años, fue aprobada por el Gabinete en mayo de 2018 y está incorporándose en el reglamento sobre las relaciones de trabajo y de empleo. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, esta lista fue revisada por el Equipo de Tareas Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y apoyada por el Foro Tripartito Nacional de Samoa. El Gobierno indica además que el MCIL ha incluido esta lista en su primer Marco nacional de seguridad y salud en el trabajo 2018, a fin de asegurar que todas las partes interesadas se responsabilicen de la supervisión y notificación de cualquier actividad que incumpla esta lista. ***La Comisión manifieste su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para asegurar que la lista de trabajos peligrosos se prescriba y ponga en práctica sin dilación. Pide al Gobierno que suministre información sobre todo progreso realizado en relación a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que facilite información sobre los casos de trabajos peligrosos realizados por niños menores de 18 años de edad que se han identificado y notificado a través del Marco nacional de seguridad y salud en el trabajo.***

Artículo 7, 2). ***Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d).*** ***Entrar en contacto con los niños que están especialmente expuestos a riesgos. Niños que trabajan como vendedores callejeros.*** En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 20, de la Ley de Educación de 2009, prohíbe de manera específica la ocupación de niños en edad de escolarización obligatoria en la venta ambulante en horas lectivas, y prevé el nombramiento de agentes de asistencia escolar, encargados de identificar a los niños que están fuera de la escuela durante las horas lectivas, y de hacer que regresen a la escuela. También tomó nota de que el Plan del sector comunitario de 2016-2021 (CSP) proporciona una plataforma para la elaboración de un plan de intervención encaminado a responder a las necesidades de los niños vulnerables y de sus familias. La Comisión tomó nota asimismo de que la Unidad de Participación Comunitaria, junto con el Ministerio de la Mujer, Cultura y Desarrollo (MWCSO), se encarga de la mayoría de los casos relativos a niños ocupados como vendedores callejeros, de tal manera que, tras llevar a cabo investigaciones, considera responsables a los padres de estos niños y ulteriormente los inculpa. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según un informe de la OIT titulado «Rapid Assessment Report on Children working on the streets in Apia» (Informe de evaluación rápida sobre los niños que trabajan en la calle en Apia, sólo disponible en inglés), de 2017, la mayoría de los 106 niños entrevistados empezaron a trabajar en la calle porque su familia necesitaba ingresos (pág. 36). Niños de apenas 7 años de edad vendían comida, zumos caseros y cuchillas de afeitar en entornos peligrosos, y trabajaban largas jornadas (entre cinco y doce horas al día), en unas condiciones climáticas extremas, para vender sus productos. La mayoría de los niños trabajan para su propia familia y no conocen los servicios de apoyo social que están a su disposición. Tomando nota con preocupación de que los niños seguían ocupados como vendedores callejeros, a menudo en condiciones peligrosas, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias con miras a identificar a los niños ocupados en la venta ambulante y a protegerlos contra las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la Conferencia, los miembros empleadores expresaron su preocupación por la prevalencia de niños menores de 15 años explotados como vendedores callejeros. Además, los miembros trabajadores indicaron que aproximadamente el 38 por ciento del trabajo infantil en Samoa era realizado por niños menores de 15 años, lo que ponía en tela de juicio la capacidad y el compromiso del Gobierno de luchar contra las peores formas de trabajo infantil.

En relación con esto, la Comisión toma nota de las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno, tal como se indica en su memoria: i) dentro del MWCSO se estableció un equipo de tareas sobre la venta realizada por niños (CVTF), integrado por representantes del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MESC), el Ministerio de Policía (MoP), el MCIL, la Fiscalía General y el Consejo de Iglesias, con el fin de abordar las cuestiones relativas a los niños ocupados como vendedores callejeros; ii) el MWCSO y el MoP aunaron esfuerzos con miras a vigilar la explotación de niños en la economía tanto formal como informal, en particular a través de inspecciones regulares en las calles de Apia y en las zonas rurales; iii) el MCIL llevó a cabo programas de sensibilización dirigidos a los empleadores de Upolu y Savaii acerca de la utilización de niños en la venta ambulante, con objeto de impedir que exploten a niños menores de 18 años de edad para la venta de bienes y productos en horas lectivas; iv) en marzo de 2016, el MWCSO emprendió la iniciativa «Apoyar a los niños» orientada a los niños vulnerables, con miras a velar por su seguridad a través del apoyo a la crianza positiva y de la prestación de asistencia a los padres para proyectos generadores de ingresos, y iv) se inició la incubadora de pequeñas empresas orientada a los jóvenes para fomentar el desarrollo económico, que tiene por objeto fomentar programas para las pequeñas empresas, así como proyectos generadores de ingresos destinados a los jóvenes, las mujeres y las familias

vulnerables. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los derechos del niño, en sus observaciones finales de 12 de julio de 2016, expresó preocupación porque los niños siguen trabajando como vendedores y porque el absentismo escolar sigue siendo un problema (documento CRC/C/WSM/CO/2-4, párrafo 52). *Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le alienta firmemente a que prosiga sus esfuerzos para identificar a los niños ocupados en la venta ambulante y para protegerles contra las peores formas de trabajo infantil. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como información sobre el número de niños ocupados como vendedores callejeros que han sido retirados de las peores formas de trabajo infantil, en particular por el CVTF y a través de los esfuerzos de colaboración del MWCS y del MoP, y a los que se ha prestado asistencia con miras a su inserción social.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 3, apartado d), y 4, párrafo 1, del Convenio. Trabajo peligroso. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la Ley de Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños (Ley EWYPC) no contenía ninguna prohibición general de empleo de niños menores de 18 años en trabajos peligrosos salvo la prohibición del trabajo nocturno en cualquier establecimiento industrial (artículo 3, 2)), así como tampoco ninguna determinación de los tipos de trabajo peligroso que se prohíben a los niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que pronto comenzará las consultas con las partes interesadas en relación a los tipos de trabajo peligrosos, y que se elaborará un proyecto de informe a finales de 2013. *La Comisión expresa su firme esperanza de que se celebrarán, en un próximo futuro, consultas con las partes interesadas, incluyendo los interlocutores sociales, y que se adoptará pronto legislación relativa a la prohibición sobre trabajos peligrosos a los niños menores de 18 años de edad, así como reglamentación para determinar los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre cualquier novedad legislativa a este respecto.*

Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de las sanciones establecidas en la Ley de Trata de 2011 por delitos relativos a la venta y trata de niños, así como por la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños con fines de prostitución y de pornografía infantil.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Viet Nam

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 9, 1), del Convenio. Sanciones, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que, a fin de disuadir la utilización de trabajo infantil en el país, el decreto núm. 91/2011/ND-CP, de 17 de octubre de 2011, prevé nuevas sanciones en forma de multas en diversos casos de trabajo infantil, como el trabajo en salas de masajes, en casinos, bares, pubs, o lugares que pongan a los niños en situación de riesgo y afecten de manera adversa su desarrollo o por emplear a niños en determinadas actividades ilícitas, como el transporte de mercancías ilegales. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las estadísticas relativas al empleo de niños y jóvenes, extraídas de los informes de los servicios de inspección del trabajo para 2006-2010. Según dichas estadísticas, durante ese período se encontraron un total de 1 715 menores que trabajaban sin haber alcanzado aún la edad mínima para poder hacerlo. Además, el Gobierno indicó que, si bien se estaba reduciendo el número de niños que realizaban trabajos pesados y trabajaban corriendo riesgos y en condiciones peligrosas, en 2005 había 68 000 niños que realizaban ese tipo de trabajos y en 2010 aún había 25 000. La Comisión también tomó nota de que según el informe conjunto de la OIT, el UNICEF y el Banco Mundial «Comprender el trabajo infantil», en Viet Nam, de abril de 2009, se estimaba que 1,3 millones de niños de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años realizaban trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, en 2013 se promulgaron dos decretos para reforzar las sanciones de las infracciones administrativas en materia de trabajo infantil y juvenil, incluidos los casos de abusos relacionados con el trabajo infantil y la utilización de niños para la realización de ciertas actividades ilícitas. Además, el artículo 296 del Código Penal de 2015 prevé la responsabilidad penal por infracciones a la ley sobre el empleo de trabajadores de menos de 16 años de edad, así como sanciones en forma de multas, servicios comunitarios y penas de prisión de hasta diez años.

La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que en 2012-2014, con el apoyo de la OIT, el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales (MOLISA) elaboró y distribuyó

1 000 conjuntos de materiales sobre el trabajo infantil y organizó dos cursos de formación sobre esos materiales en las provincias de Ninh Binh y Dong Nai. La Inspección del Trabajo también ha tomado medidas para incluir la cuestión del trabajo infantil en la formación profesional. El Gobierno indica que en 2015 la inspección del trabajo llevó a cabo inspecciones en 117 empresas en relación con 88 469 trabajadores sobre el cumplimiento de la normativa sobre los trabajadores menores. No se encontraron casos de trabajadores menores de 15 años. Se encontraron 86 trabajadores de entre 16 y 18 años que trabajaban principalmente en la fabricación de prendas de vestir y la transformación de los productos de la pesca, y 11 de estos casos no fueron registrados para la realización de exámenes de salud. No se detectaron otras infracciones en materia de trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe de la encuesta nacional sobre el trabajo infantil de 2012, alrededor de 1,15 millones de niños que trabajaban fueron incluidos en la categoría de «niños trabajadores», y de que éstos representaban el 9,6 por ciento de la población infantil nacional (5-17 años). De los niños afectados por el trabajo infantil, el 67 por ciento trabajaban en la agricultura, el 16,7 por ciento en los servicios y el 15,7 por ciento en la industria y la construcción. Un número significativo de niños trabajan en lugares de trabajo al aire libre que exigen una gran movilidad realizando actividades que les exponen a importantes riesgos de accidentes, temperaturas extremas y entornos tóxicos que pueden causarles lesiones y perjudicar su desarrollo físico. La Comisión también toma nota de que el Gobierno está preparando la segunda encuesta nacional sobre trabajo infantil.

La Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo que respecta a las medidas adoptadas, tanto en la legislación como en la práctica, para combatir el trabajo infantil. Sin embargo, también toma nota con **preocupación** de que en Viet Nam hay un número considerable de niños que realizan trabajo infantil, incluidos trabajos peligrosos y de que este número parece estar aumentando. Además, la Comisión observa que los resultados de las actividades de inspección del trabajo no reflejan la magnitud del problema del trabajo infantil en Viet Nam, tal como se indica en el informe de la encuesta nacional sobre trabajo infantil de 2012. **En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por la eliminación efectiva del trabajo infantil. También insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo en lo que respecta a las medidas para prevenir y combatir el trabajo infantil, en particular en la economía informal y a comunicar información al respecto. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la manera en que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo estadísticas de la encuesta nacional sobre trabajo infantil sobre el empleo de niños menores de 15 años, extractos de los informes de los servicios de inspección y decisiones judiciales, así como información sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas y de las sanciones impuestas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, b), y 7, 2), b), del Convenio. Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas; medidas efectivas y en un plazo determinado para prestar asistencia para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del Programa de Acción para Combatir la Prostitución (PACP) para el período 2011-2015. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC) expresó su preocupación acerca del aumento del número de niños que participan en actividades sexuales comerciales sobre todo por motivos relacionados con la pobreza. Además, el CRC expresó su preocupación respecto a que los niños que son explotados sexualmente probablemente sean tratados como delincuentes por la policía y a que faltan procedimientos de presentación de informes específicos adaptados a los niños. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos en el marco del PACP para luchar contra la prostitución infantil y a tomar medidas efectivas y en un plazo determinado para sacar a los menores de 18 años de la prostitución y proporcionarles la asistencia adecuada.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de la ejecución del PACP 2011-2015, incluida la adopción de diversos decretos y circulares en relación con la protección de las víctimas de trata, así como sobre las medidas adoptadas para reforzar el trabajo en materia de protección y cuidado de los niños. No obstante, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información concreta sobre medidas específicas centradas en la prostitución infantil. La Comisión también toma nota de que, con arreglo al artículo 147 del Código Penal de 2015, sólo constituye un delito persuadir, incitar o forzar a un menor de 16 años de edad para que participe en una actuación pornográfica, delito que puede ser castigado con una pena de prisión de hasta 12 años. La Comisión observa que no parece que las disposiciones del Código Penal de 2015 prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de entre 16 y 18 años para la producción de pornografía o la realización de actuaciones pornográficas. La Comisión recuerda al Gobierno que con arreglo al artículo 1 del Convenio se deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. **Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas, y le pide que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas para luchar contra la explotación**

sexual comercial de menores de 18 años así como sobre los resultados alcanzados. La Comisión también solicita al Gobierno que proporcione información concreta sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado adoptadas para librar a los niños de la explotación sexual comercial y proporcionarles asistencia adecuada para su inserción social a través de la educación, la formación profesional o el empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Yemen

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional destinada a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno en el cuarto informe periódico presentado al Comité de los Derechos del Niño (informe al CRC de 2012) respecto a que el Gobierno se ha centrado en proyectos en materia de educación, salud, asuntos sociales y juventud, haciendo hincapié en proyectos vitales para los niños, incluidas la Estrategia nacional de reducción de la pobreza (2003-2015) y la Estrategia nacional en favor de los niños y los jóvenes (2006-2015) (documento CRC/C/YEM/4, párrafo 23). Asimismo, tomó nota de que en su informe al CRC de 2012, el Gobierno señalaba que estaba elaborando un plan nacional de acción para combatir el trabajo infantil en cooperación con la OIT y el Centro de Estudios Libaneses.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere a que continúa el conflicto y la situación económica y social del país empeora, lo cual afecta a la educación y al futuro de los niños. También toma nota de que se informa de que el Gobierno, en cooperación con la OIT, los empleadores, los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil ha adoptado una serie de políticas, medidas y planes nacionales para combatir el trabajo infantil. En la memoria del Gobierno también se indica que se están llevando a cabo programas de sensibilización, dirigidos a los empleadores, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, sobre los riesgos de emplear a niños que no alcanzan la edad mínima para trabajar. Se colocan carteles y pancartas contra el trabajo infantil en lugares públicos, y se realizan inspecciones en los lugares en los que trabajan los niños, en particular en el sector informal. La Comisión toma nota de que, según la información obtenida en una encuesta de la OIT de 2012, más de 1,3 millones de niños de entre 5 y 17 años realizaban trabajo infantil. Asimismo, toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de febrero de 2014, expresó su grave preocupación respecto a que se estimaba que el 11 por ciento de todos los niños trabajadores tienen entre 5 y 11 años, mientras que el 28 por ciento tienen entre 12 y 14 años (documento CRC/C/YEM/CO/4, párrafo 79). La Comisión también toma nota de que, según el informe sobre la situación humanitaria del Yemen de marzo de 2017, más de 9,6 millones de niños están afectados por el conflicto armado del país y el número de niños desplazados dentro del Yemen asciende a 1,6 millones. Reconociendo la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión se ve obligada a expresar su **profunda preocupación** por el gran número de niños que trabajan sin haber alcanzado la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. **La Comisión reconoce la complejidad de la situación que atraviesa el país y la existencia de un conflicto armado e insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas y efectivas para mejorar la situación de los niños en el Yemen y para protegerlos e impedir que realicen trabajo infantil, incluso adoptando un plan nacional de acción para combatir el trabajo infantil. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, incluidos datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes.**

Artículo 2, 3). Escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de que en su informe al CRC de 2012 el Gobierno señalaba que había adoptado una serie de políticas y medidas a fin de ampliar la educación básica y mejorar su eficacia a través de la Estrategia Nacional para la Educación Básica (2013-2015), la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Educación Secundaria, la Estrategia para la Educación de las Niñas, y la Visión Estratégica del Yemen 2015. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que según las estadísticas de la UNESCO de 2011, la tasa neta de matriculación en la escuela primaria fue del 76 por ciento mientras que la tasa neta de matriculación en la escuela secundaria fue del 40 por ciento.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tiene la intención de ampliar la educación primaria y secundaria y de mejorar su calidad, así como de llegar a los grupos demográficos más pobres de la sociedad. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno, en cooperación con el UNICEF, está llevando a cabo un programa de cuatro años en el marco de la Alianza Mundial para la Educación que cubre 13 provincias que tienen bajas tasas de matriculación en la escuela, falta de infraestructuras y elevados niveles de pobreza. También toma nota de que el Gobierno señala que la educación general tiene que hacer frente a desafíos y dificultades, como la dispersión de la población, la elevada tasa de crecimiento de la población y la inadecuación de los recursos financieros, que impiden que se logren progresos en este ámbito. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe de la Alianza Mundial para la Educación sobre el Yemen, de 2017, a pesar de que continúa el conflicto se han llevado a cabo muchas actividades a través de diversos programas que reciben el apoyo de esta Alianza, las cuales han contribuido a lograr resultados tangibles, que incluyen: i) la rehabilitación de 89 escuelas; ii) el apoyo psicológico que han recibido 83 565 estudiantes; iii) la asignación de fondos para el desarrollo a 420 escuelas beneficiarias de 13 provincias para los años académicos

2015-2016 y 2016-2017, y iv) la formación que han recibido 8 059 maestros en materia de métodos de aprendizaje activos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según el informe del UNICEF titulado *Falling through Cracks, the Children of Yemen* (Caer en el olvido: los niños del Yemen) de marzo de 2017, el conflicto del Yemen ha destruido o dañado más de 1 600 escuelas, incrementando de esta forma el ya elevado número de niños que no asistían a la escuela antes del conflicto, para superar los 2 millones. Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su **profunda preocupación** por el elevado número de niños que no reciben educación debido al clima de inseguridad que prevalece en el país. **Considerando que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para incrementar las tasas de matriculación y asistencia a la escuela a nivel primario y secundario y reducir las tasas de abandono escolar. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.**

Artículo 6. Edad mínima de admisión al aprendizaje. La Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo y la ordenanza ministerial núm. 11 de 2013 (ordenanza ministerial núm. 11) no establecen una edad mínima para el aprendizaje. Pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para establecer disposiciones que fijen la edad mínima para el aprendizaje, en conformidad con el artículo 6 del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el proyecto de Código del Trabajo establece una edad mínima de 14 años para el aprendizaje y que la ordenanza ministerial núm. 11 se enmendará a fin de fijar la misma edad mínima. **La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que las disposiciones del proyecto de Código del Trabajo y de la ordenanza ministerial núm. 11, que establecen una edad mínima de 14 años para el aprendizaje, se adopten en un futuro próximo. Pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, a), del Convenio. *Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños en conflictos armados.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, el representante gubernamental del Yemen reconoció que en su país la situación de los niños es grave debido a su participación en el conflicto armado. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señaló que en 2014 había suscrito un Plan de acción con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados con objeto de prevenir el reclutamiento de niños por las fuerzas armadas y ponerle fin. Este Plan de acción establece medidas concretas para liberar a todos los niños vinculados con las fuerzas de seguridad del Gobierno, reintegrarlos a sus comunidades e impedir que vuelvan a ser reclutados. La Comisión tomó nota de que las medidas que se preveía adoptar en el marco de este Plan de acción incluían: i) armonizar la legislación nacional con las normas internacionales que prohíben el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados; ii) dictar y difundir órdenes militares en las que se prohíba el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años; iii) investigar los alegatos de reclutamiento y utilización de niños por parte de las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen y garantizar que se obliga a rendir cuentas de sus actos a las personas responsables, y iv) facilitar el acceso a las Naciones Unidas para que controlen los progresos y el cumplimiento del Plan de acción. La Comisión tomó nota de que la Comisión de la Conferencia, al tiempo que tomaba nota de la adopción de este Plan de acción, expresó su grave preocupación por la situación de los menores de 18 años que son reclutados y obligados a alistarse en los grupos armados o en las fuerzas gubernamentales.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que, según la memoria del Gobierno, el Jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas y el Primer Ministro reiteraron su compromiso de aplicar las medidas convenidas en el plan de acción a fin de poner término al reclutamiento ilegal de niños por parte de las fuerzas armadas. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, de mayo de 2014, las Naciones Unidas habían documentado el reclutamiento de 106 niños varones de entre 6 y 17 años de edad, el asesinato de 36 niños y la mutilación de 154 niños.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que en 2012 se adoptó un decreto presidencial por el que se prohíbe el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas. También toma nota de que el Gobierno señala que el Plan de acción para acabar con el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas armadas, que finalizó en 2014, se vio obstaculizado por el empeoramiento del conflicto armado a partir de 2015. La Comisión toma nota de que según el informe del UNICEF titulado *Falling through Cracks: the Children of Yemen* (Caer en el olvido: los niños del Yemen), de marzo de 2017, al menos 1 572 niños varones fueron reclutados y utilizados en el conflicto, 1 546 fueron asesinados y 2 458 resultaron mutilados. La Comisión también toma nota de la información que figura en el informe del Ministerio de Derechos Humanos, de 2018, sobre el aumento del número de niños reclutados por las milicias Houthi y sobre sus métodos de movilizar a estos niños para que luchen en los frentes. Según este informe, el porcentaje de niños reclutados por las milicias Houthi se ha multiplicado por diez desde 2016. El número de niños soldados de este grupo ha superado los 15 000. En el informe también se indica que los niños reclutados por este grupo son obligados a consumir sustancias psicotrópicas y drogas y utilizados para intentar penetrar en las fronteras de Arabia Saudita. También se les entrena para que utilicen armas pesadas, coloquen minas terrestres y explosivos, y se les utiliza como escudos humanos. La Comisión

toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre el informe presentado por el Yemen en virtud del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de febrero de 2014, expresó su profunda preocupación por la presencia de niños en las fuerzas armadas; por el reclutamiento de niños, incluidas niñas, por las milicias tribales progubernamentales, y en relación con el reclutamiento y utilización continuos de niños por grupos armados no gubernamentales (documento CRC/C/OPAC/YEM/CO/1, párrafos 22, 24 y 27).

La Comisión **lamenta profundamente** la utilización de niños en el conflicto armado del Yemen, en particular debido a que conlleva otras violaciones de los derechos de los niños, tales como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Recuerda que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso y obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados se considera como una de las peores formas de trabajo infantil y que, con arreglo al artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para eliminar las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. **Reconociendo la complejidad de la situación que reina en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta de nuevo encarecidamente al Gobierno a adoptar medidas, utilizando los medios disponibles, para garantizar la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de menores de 18 años en los grupos y las fuerzas armadas, incluso a través de la aplicación efectiva del plan nacional de acción para acabar con el reclutamiento y la utilización de niños en el conflicto armado, de 2014. También insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se realicen investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes de todas las personas que reclutan por la fuerza a menores de 18 años para utilizarlos en el conflicto armado, y que se impongan en la práctica sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias. Pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas dictadas en relación con estas personas.**

Artículo 7, 2). *Medidas efectivas y un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información presentada por el Gobierno en el cuarto informe periódico, al Comité de los Derechos del Niño, de 2012, sobre las políticas y las medidas en materia de implementación aplicadas para reducir la brecha de género en la matriculación en la escuela y sobre los resultados positivos alcanzados. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que según el Instituto de Estadística de la UNESCO la tasa neta de matriculación de los niños era baja, con un 76 por ciento (82 por ciento de niños y 69 por ciento de niñas) en la educación primaria y un 40 por ciento (48 por ciento de niños y 31 por ciento de niñas) en la educación secundaria. También tomó nota de que en el informe del UNICEF sobre la situación en el Yemen, de agosto de 2013, se indica que los resultados de la encuesta sobre los niños sin escolarizar realizada por el UNICEF en la provincia de Al Dhale pusieron de relieve que el 78 por ciento de los 4 553 niños que abandonaron la escuela eran niñas.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna a este respecto. Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, de febrero de 2014, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por las considerables disparidades en la tasa de escolarización de las niñas en la educación básica entre las diversas provincias del Estado parte y las diferencias entre las tasas de escolarización de niños y niñas; la persistencia de puntos de vista y creencias tradicionales según las cuales las niñas no deben recibir educación, en particular en las zonas rurales, así como por el matrimonio infantil y el escaso número de maestras, todo lo cual contribuye a las elevadas tasas de abandono escolar de las niñas (documento CRC/C/YEM/CO/4, párrafo 69). **Considerando que la educación es la llave para impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo del país y a facilitar el acceso de todos los niños, especialmente de las niñas, a la educación básica gratuita, incrementando las tasas de matriculación en la escuela primaria y secundaria y reduciendo las tasas de abandono escolar. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.**

Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de estos trabajos y garantizar su rehabilitación e integración social. Niños en conflictos armados y trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a facilitar el acceso a la enseñanza pública básica y gratuita de todos los niños, en particular de los niños retirados de conflictos armados y de los niños que realizan trabajos peligrosos, prestando especial atención a la situación de las niñas. A este respecto, la Comisión de la Conferencia exhortó a los Estados Miembros de la OIT a proporcionar asistencia al Gobierno del Yemen y alentó al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de alcanzar progresos tangibles en la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Ministerio de Derechos Humanos, de 2018, se están realizando talleres y campañas dirigidas a la sociedad civil sobre la rehabilitación de los niños soldados y se han abierto centros de rehabilitación para los niños retirados del conflicto armado. Cientos de niños soldados que habían sido reclutados por las milicias han sido liberados y han recibido asistencia médica. En este informe también se indica que el Gobierno del Yemen, en cooperación con la coalición árabe, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el UNICEF, liberó a 89 niños soldados que habían sido reclutados por la milicia Houthi y desplegados en las fronteras, de los cuales 39 fueron rehabilitados y devueltos a sus familias. **La Comisión insta al Gobierno a continuar adoptando medidas efectivas y en**

un plazo determinado para garantizar que los niños soldados que han sido retirados de los grupos y las fuerzas armadas y los niños que han sido retirados de los trabajos peligrosos reciban asistencia adecuada para su rehabilitación e integración social, incluida su reintegración en el sistema escolar o en la formación profesional, siempre que sea posible y apropiado. Solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zambia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1976)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la amplia discusión que tuvo lugar en la 106.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, que se celebró en junio de 2017, en relación con la aplicación del Convenio por Zambia.

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad de finalización de la educación obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley de Educación de 2011 no define la edad escolar ni la edad de finalización de la escolaridad obligatoria. También tomó nota de que según el artículo 34 de dicha ley, el Ministro puede reglamentar mediante un instrumento legal la edad escolar básica y la edad de asistencia obligatoria a la escuela.

La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el representante gubernamental indicó que se estaban realizando consultas para revisar la Ley de Educación de 2011 a fin de definir la edad escolar básica y vincularla a la edad mínima para el empleo en Zambia. Tomó nota de que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la Ley de Educación enmendada establezca la edad de finalización de la educación obligatoria en 15 años y se aplique efectivamente en la práctica sin demora.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que, en Zambia, la edad oficial de inicio del grado 1 es de 7 años y cuando finalizan el grado 7 los niños tienen 14 o 15 años de edad. El Gobierno también indica que la educación no es obligatoria, pero que una vez que un niño está matriculado en una escuela sus padres o tutores tienen el deber de garantizar que asiste regularmente a las clases con arreglo al artículo 6, 1), del reglamento sobre la escuela (asistencia obligatoria) (S.I.) núm. 118 de 1970. La Comisión toma nota de que según el Gobierno durante el último decenio se han producido progresos significativos en el ámbito de la educación gracias a la aplicación de diversas medidas para mejorar el acceso a la educación básica, como, por ejemplo: la política nacional de educación, «Educando para el futuro», de 1996, que tiene por objetivo ofrecer a todos los niños acceso a nueve años de educación básica para 2015; el programa de inversión en el subsector de la educación básica (BESSIP) de 1999; el plan de formación sobre educación técnica e iniciativa empresarial (TEVET), de 1996; el plan para el sector de la educación (2002-2007); el sexto plan nacional de desarrollo (2011-2015); el Programa de educación para todos, 2015, y la política en materia de educación básica gratuita, 2002. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, a pesar de quince años de acciones concertadas, el acceso a la escuela sigue representando un gran desafío para los niños de Zambia. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Educación sigue revisando la Ley de Educación, un proceso que se ha retrasado debido a algunos problemas técnicos. **Considerando que la educación obligatoria es uno de los medios más efectivos para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la educación obligatoria y gratuita para todos los niños hasta la edad mínima de admisión al empleo y al trabajo, que es de 15 años, incluso estableciendo legalmente los 15 años como edad de finalización de la escolaridad obligatoria durante la revisión de la Ley de Educación. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la nueva Ley de Educación, una vez que se haya adoptado.**

Artículo 7, 3), del Convenio. Determinación de los trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que el instrumento legislativo núm. 121 de 2013 define «trabajo ligero» (que se permite a los niños de entre 13 y 15 años con arreglo al artículo 4A, 2), de la Ley de Empleo de Jóvenes y Niños (enmienda) (Ley EYPC de 2004) como el trabajo que no debería: a) ser perjudicial para la salud o desarrollo de un niño o joven, y b) ir en detrimento de su asistencia a la escuela ni de su participación en una formación profesional o en un programa de formación aprobado por la autoridad competente. Asimismo, tomó nota de que el artículo 2 del instrumento legislativo limita a un máximo de tres horas al día la realización de trabajos ligeros. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en sus observaciones finales de 14 de marzo de 2016, el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por el hecho de que hay niños de entre 13 y 15 años que realizan trabajos que al parecer no son ligeros e interfieren en su educación (documento CRC/C/ZMB/CO/2-4, párrafo 57). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre este punto. **Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños de 13 a 15 años de edad sólo puedan realizar trabajos ligeros que no interfieran en su educación. A este respecto, la Comisión también pide al Gobierno que indique si los trabajos ligeros con arreglo al artículo 4A, 2), de la Ley EYPC de 2004 han sido determinados en conformidad con el artículo 7, 3), de Convenio.**

Inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que las inspecciones llevadas a cabo por inspectores del trabajo habían determinado la existencia de trabajo peligroso infantil en la minería a pequeña escala, la agricultura, el trabajo doméstico y el sector comercial, generalmente en la economía informal. Asimismo, tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación a que varias provincias tienen programas activos contra el trabajo infantil, que incluyen actividades llevadas a cabo por los Comités de Distrito sobre el Trabajo Infantil (DCLC) a fin de acabar con el trabajo infantil en las comunidades en las que se cultiva tabaco centrándose en la educación, así como de los resultados logrados gracias a la aplicación del proyecto para reducir el trabajo infantil con el apoyo de la educación (ARISE). La Comisión también tomó nota de que según los resultados del Informe sobre el trabajo infantil de 2012 se estima que 1 215 301 niños realizaban trabajo infantil, lo que representa un aumento de 825 246 niños en relación con 2005.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que: redoblara sus esfuerzos para velar por la eliminación del trabajo infantil en los sectores formal e informal de la economía, en particular los trabajos realizados en condiciones peligrosas, y reforzara la capacidad de los DCLC y de la Inspección del Trabajo, en particular en relación con la minería a pequeña escala, la agricultura, el trabajo doméstico y la economía informal.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que existen 24 DCLC distribuidos por todo el país a fin de controlar la aplicación de los programas en materia de trabajo infantil a nivel comunitario y de distrito. A este respecto, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno: i) el DCLC de Chipata en la provincia oriental, proporcionó formación a 25 miembros, entre los que figuran policías, funcionarios judiciales y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley, representantes del Ministerio de Educación general, y personal de los gobiernos locales y de organizaciones no gubernamentales sobre la identificación del trabajo infantil y los sistemas de control, especialmente en el sector agrícola, así como sobre la seguridad y salud en el trabajo y los derechos de los niños, y ii) el DCLC de Shiwangandu, en la provincia de Muchinga, llevó a cabo programas de sensibilización y concienciación en cinco escuelas locales que registran un absentismo del 60 por ciento de los alumnos. La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa de que el programa ARISE, que actualmente se está implementando en las provincias orientales y occidentales, da apoyo a 41 escuelas en 17 comunidades de las provincias occidentales de Kaoma y Nkeyema. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según el examen anual del ARISE de 2017, alrededor de 4 167 niños fueron librados del trabajo infantil y matriculados en escuelas; 8 166 miembros de comunidades y maestros recibieron formación sobre el trabajo infantil, 1 961 hogares disfrutaron de una mejora de sus medios de subsistencia, y 997 miembros del Comité Comunitario de Trabajo Infantil (CCLC) recibieron formación en materia de control de trabajo infantil, recopilación de datos y formulación de planes de trabajo.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) preside el Comité nacional permanente sobre trabajo infantil que elabora y controla las políticas en materia de trabajo infantil. El MLSS también aporta conocimientos especializados y coordina todas las actividades y programas para eliminar el trabajo infantil, incluidas las actividades de los DCLC. Además, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, para impulsar la inspección y mejorar la aplicación de las leyes en materia de trabajo infantil se ha ampliado el número de funcionarios en el ámbito laboral y se ha aumentado el número de vehículos para que los inspectores puedan llevar a cabo las inspecciones. Además, el Gobierno indica su intención de establecer más DCLC en otros distritos económicamente activos a fin de combatir el trabajo infantil y sus peores formas. Sin embargo, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que el MLSS sólo realiza inspecciones del trabajo en instituciones privadas registradas y no cubre el sector informal, que es donde abunda más el trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que debido a la falta de recursos financieros de los 24 DCLC que existen sólo están en funcionamiento los patrocinados con el arreglo al programa ARISE. ***Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo alienta encarecidamente a proseguir sus esfuerzos para garantizar que los niños de menos de 15 años no realizan trabajo infantil en Zambia. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar las actividades de los Comités de Distrito sobre el Trabajo Infantil y extenderlas a todas las provincias y para fortalecer las capacidades de la Inspección del Trabajo para que pueda controlar el trabajo infantil en todos los sectores, incluida la economía informal. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información específica sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre el empleo de niños y jóvenes, junto con extractos de los informes de la Inspección del Trabajo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 5 (Santa Lucía)**; el **Convenio núm. 6 (Madagascar)**; el **Convenio núm. 77 (Haití)**; el **Convenio núm. 78 (Haití)**; el **Convenio núm. 123 (Uganda)**; el **Convenio núm. 124 (Kirguistán, Uganda, Viet Nam)**; el **Convenio núm. 138 (Armenia, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Chad, República de Corea, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Indonesia, Iraq, Islas Salomón, Israel, Kazajistán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Libano, República de Maldivas, Marruecos,**

Mauritania, México, República de Moldova, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Viet Nam, Yemen, Zambia); el Convenio núm. 182 (Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Chad, Congo, República de Corea, Côte d'Ivoire, Croacia, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, República de Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, República de Moldova, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Somalia, Timor-Leste, Viet Nam, Yemen).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 59** (*Libano*); el **Convenio núm. 123** (*Rwanda*); el **Convenio núm. 138** (*Estonia, Georgia, Kuwait*); el **Convenio núm. 182** (*Estonia, Georgia, Grecia, Irlanda, Kuwait*).

Igualdad de oportunidades y de trato

Observación general

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

*Observación general sobre discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional*¹

Con ocasión del 60.º aniversario de la adopción del Convenio que, hasta la fecha, ha alcanzado casi la ratificación universal, y en la víspera del 100.º aniversario de la OIT, la Comisión desea recordar que ninguna sociedad está libre de la discriminación y se requieren esfuerzos continuos para luchar contra ésta. La eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, consagrados en el Convenio, se encuentran entre los principios fundamentales. La Declaración de Filadelfia de 1944 declara que «todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades». Los principios de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación están también consagrados en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. La Comisión resalta que la igualdad en el mundo del trabajo sólo puede alcanzarse plenamente dentro de un contexto general de igualdad. A tal respecto, la Comisión recuerda que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 dispone que «[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y toma nota de que la Declaración celebra su 70.º aniversario este año. La Comisión destaca que la aplicación efectiva de estos principios es crucial para la realización de la justicia social y la paz duradera, asegurándose de que nadie se quede atrás.

La Comisión recuerda que el *artículo 1, 1), a)*, del Convenio define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. El Convenio abarca igualmente todo otro motivo especificado por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados (*artículo 1, 1), b)*). Al tiempo que reconoce que la discriminación basada en todos los motivos cubiertos por el Convenio persiste en el mundo, la Comisión decidió dedicar esta observación a la discriminación por motivos de raza, color y ascendencia nacional.

La Comisión recuerda que en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales examinó la aplicación del Convenio en relación con todos los motivos de discriminación prohibidos y tomó nota de que se han realizado progresos en muchos países para dar efecto a sus disposiciones. No obstante, la Comisión también tomó nota de que, mientras que la discriminación basada en motivos de raza, color y ascendencia nacional, está prohibida en general en la legislación nacional de la mayoría de los países, son muchos menos los países que adoptaron medidas proactivas e integrales dirigidas a promover una igualdad sustantiva respecto de estos motivos. Esto se constata a pesar de la acción internacional de larga data contra la discriminación, incluida la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en 1965, complementada por la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), la proclamación en diciembre de 2014 del Decenio Internacional para los Afrodescendientes por la Asamblea General de Naciones Unidas (2015-2024) y, más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, la Comisión recuerda que la Agenda 2030, reconoce que «combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos», es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. La Comisión toma nota de que las desigualdades afectan, de manera desproporcionada, a determinados grupos y a los miembros de esos grupos, debido a la raza, al color o a la ascendencia nacional que se interrelacionan a menudo con otros motivos de discriminación prohibidos, en virtud del *artículo 1, 1), a)*, del Convenio, como el origen social y la religión, con unos efectos agravados en las mujeres y las niñas.

La Comisión recuerda que, en virtud del Convenio, el término «raza», incluye toda discriminación contra comunidades lingüísticas o grupos minoritarios cuya identidad se basa en características religiosas o culturales, o en el origen nacional o étnico. En el contexto del Convenio, la discriminación basada en motivos de raza, en general, se examina junto con la discriminación basada en motivos de «color», dado que «color» es una de las características étnicas que diferencia a los seres humanos. La Comisión recuerda también que la «ascendencia nacional», comprende las distinciones en función del lugar de nacimiento, la ascendencia o el origen extranjero de la persona. En su examen de las

¹ No es la primera vez que la Comisión formula una observación general sobre un motivo particular de discriminación cubierto por el Convenio. En 2002, la Comisión adoptó una observación general sobre un tema específico en el marco de la discriminación por motivo de sexo, a saber el acoso sexual (publicada en 2003). De la misma manera, la Comisión ha adoptado también dos observaciones generales en relación con el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100): la primera, en 1998, con miras a proporcionar orientación sobre el tipo de estadísticas, desglosadas por sexo, que la Comisión necesita para evaluar los avances logrados en la aplicación del Convenio, y la segunda, en 2006, con el fin de poner de relieve la importancia y aclarar el significado de «trabajo de igual valor».

memorias de los gobiernos presentadas en virtud del Convenio, la Comisión ha abordado, en consecuencia, la discriminación en el empleo y la ocupación de las minorías étnicas, de los pueblos indígenas y tribales, de los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, de los afrodescendientes, de las minorías nacionales y de la población romaní, entre otros, como un aspecto de discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional.

La Comisión ha tomado nota de que, dada la situación persistente de discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional, en la mayoría de los casos existe la necesidad de una legislación integral que contenga disposiciones explícitas que definan y prohíban la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación, con el fin de garantizar la plena aplicación del Convenio. Estas definiciones deberían incluir la discriminación directa e indirecta y el acoso con motivo de discriminación como una manifestación grave de discriminación, en particular el acoso racial. El acoso racial se produce cuando una persona es objeto de una conducta física, verbal o no verbal basado en la raza que afecta su dignidad o que causa un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el destinatario. Además, la intersección de factores tales como la raza, la religión, el género, o la discapacidad aumentan el riesgo de acoso, en particular respecto de las mujeres jóvenes pertenecientes a minorías raciales o étnicas.

La Comisión también ha tomado nota de que las causas subyacentes de la discriminación y las desigualdades *de facto* que se derivan de una discriminación profundamente arraigada y de la exclusión social de larga data, no pueden abordarse de manera efectiva sin medidas proactivas. La Comisión ha considerado que, en muchos casos, se requieren medidas especiales del tipo descrito en el artículo 5 del Convenio, para corregir los efectos de prácticas discriminatorias pasadas y presentes y promover la igualdad de oportunidades para todos. Tomando nota de que las formas de discriminación basadas en motivos de raza, color y ascendencia nacional a menudo interactúan con otros motivos prohibidos de discriminación, incluidos, por ejemplo, la religión, el origen social y el sexo, la Comisión ha señalado a la atención de los gobiernos la necesidad de tomar en consideración y abordar los efectos de las múltiples formas de discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión también ha recordado que la educación universal, obligatoria y gratuita al mismo nivel para todos, es uno de los puntos de partida básicos para una política nacional de igualdad, con arreglo a los artículos 2 y 3 del Convenio para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

La Comisión ha saludado la adopción, por un número creciente de países, de la legislación para abordar la discriminación pasada y presente. Esta legislación incluye el deber de prevenir y combatir la discriminación y de promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, por cuanto este tipo de legislación puede revelarse como el más efectivo para abordar la discriminación por motivos de raza, color y ascendencia nacional. La Comisión se ha complacido en tomar nota de los esfuerzos realizados en muchos países para hacer frente a la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de raza, color y ascendencia nacional, mediante varias medidas concretas, que incluyen: i) objetivos y cuotas en la educación, en la formación profesional y en el empleo; ii) programas especiales de promoción del empleo; iii) planes de acción centrados en grupos étnicos específicos, y iv) el establecimiento de organismos especializados con distintos mandatos, que van desde las funciones de sensibilización y de promoción, hasta el tratamiento de las quejas de discriminación y la formulación de recomendaciones en materia de políticas.

A pesar de todos esos esfuerzos, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el impacto de las medidas adoptadas sigue siendo incierto en la mayoría de los casos, especialmente en la ausencia de un seguimiento regular y de unas evaluaciones periódicas. Sólo en unos pocos casos se emprendieron estudios específicos, con miras a examinar la situación en el empleo y la ocupación de las personas pertenecientes a grupos étnicos específicos, y a establecer una base de referencia a partir de la cual gobiernos, interlocutores sociales y otras partes interesadas, se encuentren en condiciones de evaluar periódicamente el verdadero impacto de esas medidas. Esto se añade, en muchos países, a la falta de compilación y de publicación de estadísticas del empleo, desglosadas por origen étnico, debido, o a la falta de capacidad técnica o a la ausencia de una legislación y unos procedimientos que permitan tal compilación. La Comisión destaca que los datos y la investigación cualitativa sobre la naturaleza y la magnitud de las desigualdades laborales, incluidas sus causas subyacentes, son fundamentales para determinar la naturaleza, el alcance y las causas de la discriminación, para diseñar y aplicar una política nacional de igualdad pertinente y efectiva, en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, y hacer un seguimiento y evaluar sus resultados. La Comisión recuerda que el artículo 3, f), requiere que los gobiernos informen de las medidas adoptadas para llevar a cabo la política nacional de igualdad y los resultados obtenidos por esas medidas. En relación con esto, la Comisión ha venido solicitando sistemáticamente a los gobiernos que evaluaran regularmente el impacto de esa política, con el fin de examinar y ajustar las medidas y las estrategias vigentes de manera continuada. La Comisión también desea destacar la importancia de consultar con los interlocutores sociales y los grupos interesados en cuanto al diseño, el seguimiento, la aplicación y la evaluación de las medidas y los planes adoptados, con miras a garantizar su pertinencia, sensibilizar acerca de su existencia, promover su aceptación y apropiación más amplias y mejorar su eficacia.

La Comisión toma nota con **preocupación** de que las actitudes y los estereotipos discriminatorios basados en la raza, el color y la ascendencia nacional de los trabajadores y de las trabajadoras, siguen dificultando su participación en la educación y los programas de formación profesional, así como el acceso a una más amplia gama de oportunidades de empleo, lo que da lugar a una persistente segregación ocupacional y a unas remuneraciones más bajas por un trabajo de igual valor. Estos factores conducen con frecuencia a muchas personas de estos grupos a trabajos en la economía informal.

La Comisión también toma nota de que es frecuente que las cuotas de empleo, cuando existen, sigan vacantes, que, según se informa, se debe a menudo a una falta de personas capacitadas de los grupos designados o a unos esfuerzos insuficientes para contratar activamente a las personas a las que se dirigen. En consecuencia, la Comisión considera que es necesario adoptar un enfoque integral y coordinado para hacer frente a barreras y obstáculos con que se confrontan las personas en el empleo y la ocupación, en razón de su raza, color o ascendencia nacional, y promover la igualdad de oportunidades y de trato para todos. Tal enfoque debería incluir la adopción de medidas convergentes dirigidas a abordar las brechas en la educación, la formación y la capacitación, brindar una orientación vocacional imparcial, reconocer y validar las calificaciones obtenidas en el extranjero, y valorar y reconocer los conocimientos y las habilidades tradicionales que pueden ser pertinentes para el acceso y los progresos en el empleo y para ejercer una ocupación. La Comisión también recuerda que, para ser eficaces, se requiere que estas medidas incluyan acciones concretas, tales como leyes, políticas, programas, mecanismos, procesos participativos y medidas reparativas, concebidas para abordar los prejuicios y estereotipos y promover la comprensión y la tolerancia mutuas en todos los sectores de la población.

La Comisión destaca la importancia de garantizar una coordinación y una complementariedad entre las medidas convergentes y las estrategias adoptadas y entre los diversos organismos competentes, con miras a asegurar una coherencia y a mejorar el impacto, al tiempo que se evita la duplicación de esfuerzos y se promueve la utilización óptima de recursos. La Comisión también considera que es importante integrar la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación en las políticas nacionales pertinentes, como las políticas de educación y formación, las políticas de empleo, las estrategias de reducción de la pobreza, los programas de desarrollo rural o local, los programas de empoderamiento económico de las mujeres y las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.

La Comisión toma nota asimismo de que algunos trabajadores se encuentran con desafíos para poder dedicarse a la ocupación de su elección, debido a la discriminación, en la ley y en la práctica, basada, directa o indirectamente, en la raza, el color y la ascendencia nacional. Por ejemplo, una tenencia insegura de la tierra y unos enfoques sesgados hacia las ocupaciones tradicionales realizadas por determinados grupos étnicos, que son a menudo percibidos como superados, improductivos o perjudiciales para el medio ambiente, siguen planteando, para muchas personas, graves problemas para el disfrute de la igualdad de oportunidades y de trato respecto de la ocupación. Al respecto, la Comisión desea subrayar que debería ser parte de los objetivos de una política nacional sobre igualdad: promover y asegurar un acceso a los bienes materiales y a los servicios que se requieren para ejercer una ocupación, como asegurar el acceso a la tierra y el acceso al crédito y a los recursos, sin discriminación. Deberá derogarse, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, toda ley y práctica discriminatoria que afecte al acceso a una ocupación y su ejercicio, en contradicción con la política de igualdad.

La Comisión recuerda la importante función que desempeñan las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la promoción de la comprensión, la aceptación y la realización de los principios del Convenio, que establece amplios requisitos de cooperación activa con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con respecto a la aplicación efectiva de la política nacional de igualdad requerida en virtud del Convenio. La Comisión también resalta la importancia de los convenios colectivos en la aplicación de una política nacional de igualdad y en la promoción de igualdad de oportunidades y de trato para todos los trabajadores, sin distinción de raza, color o ascendencia nacional.

Además, la Comisión toma nota de que, en muchos países, siguen existiendo importantes obstáculos que impiden el acceso a la justicia a aquellos que son discriminados, entre otros motivos, por la raza, el color y la ascendencia nacional, incluidos los obstáculos físicos, económicos y lingüísticos. Por consiguiente, la Comisión invita a los gobiernos a que establezcan unos mecanismos de solución de conflictos accesibles, cuando éstos no existan aún, y a que aseguren que la carga y el nivel de la prueba aplicable no impidan el acceso de las víctimas a la justicia. A tal respecto, la Comisión recuerda que tomó nota con interés de que en ciertos países, una vez que las pruebas *prima facie* y elementales de discriminación son aportadas por el demandante, la carga de la prueba recae en el empleador. La Comisión alienta además a los gobiernos a que exploren las vías para ampliar la accesibilidad de los mecanismos vigentes, incluso modificando las normas sobre la capacidad procesal, para incluir a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos de igualdad, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y a otras instituciones representativas, y sensibilizar a la opinión pública de la legislación pertinente y de las reparaciones previstas. La Comisión también recuerda que las sanciones impuestas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, y que deberá garantizarse una protección efectiva contra las represalias a las víctimas de discriminación que presentan quejas o que llevan los casos a las autoridades competentes, y a los testigos. Además, la Comisión considera que abordar la discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional sólo a través de procedimientos penales no es normalmente suficiente — debido a la sensibilidad de la cuestión, el nivel de la prueba que es más difícil de cumplir, y el hecho de que la ley penal abarca el amplio espectro de conductas que constituye este tipo de discriminación — e invita a los gobiernos a que garanticen la disponibilidad de remedios en virtud de la ley civil.

A la luz de lo anterior, la Comisión alienta a los gobiernos a que, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y otros organismos interesados, intensifiquen sus esfuerzos en las siguientes áreas y a que comuniquen información, en las futuras memorias, sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto:

- i) evaluar la situación en el empleo y la ocupación de todos los grupos étnicos en sus países y la discriminación a que hacen frente, a través de encuestas y estudios específicos y/o la recopilación de datos desglosados, respetuosos de la confidencialidad, con el consentimiento informado y la autoidentificación voluntaria, con miras a contribuir a la

formulación y a la evaluación de medidas idóneas, teniendo en cuenta los efectos de las múltiples formas de discriminación;

- ii) consultar con los interlocutores sociales y siempre que sea posible, a los grupos interesados sobre el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las medidas y los planes adoptados con arreglo a la política nacional de igualdad;
- iii) adoptar medidas proactivas e integrales para promover la igualdad efectiva de todas las personas y tratar la discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional, incluso en sus formas múltiples;
- iv) garantizar que también se incluyan, en la política nacional de igualdad, las medidas adecuadas para promover la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de raza, color y ascendencia nacional, respecto del trabajo no asalariado, y que se tengan en cuenta los efectos agravados de la discriminación respecto de las mujeres, especialmente en cuanto al acceso a la tierra, al crédito y a otros recursos productivos;
- v) realizar un seguimiento y una evaluación regulares de los resultados obtenidos en el marco de la política nacional de igualdad, con miras a revisar y ajustar las medidas y las estrategias vigentes, y a identificar toda necesidad de una mayor coordinación entre las medidas y las estrategias y entre los organismos competentes, a efectos de racionalizar las intervenciones;
- vi) poner en marcha programas de sensibilización y de educación para combatir los prejuicios y los estereotipos basados en la raza, el color y la ascendencia nacional, incluido el desarrollo de programas específicos que han de utilizarse en las escuelas;
- vii) mejorar la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluidos los inspectores del trabajo, los tribunales y otros organismos competentes, así como las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las autoridades de migración, las entidades de colocación en el empleo y otros agentes pertinentes para identificar, prevenir y abordar los casos de discriminación, y
- viii) garantizar que la aplicación y los remedios disponibles para los casos de discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional en el empleo y la ocupación sean efectuados principalmente a través de la legislación civil en lugar de la penal.

Tomando nota de que varios países aún conservan disposiciones legales que no prohíben de manera específica la discriminación basada en motivos de raza, color o ascendencia nacional, la Comisión recuerda que ha indicado de manera reiterada que, cuando se adoptan disposiciones legales para dar efecto al principio del Convenio, éstas deben incluir al menos todos los motivos de discriminación especificados en el *artículo 1, 1), a)*, del Convenio, así como una definición clara de discriminación, por lo cual insta a los gobiernos de esos países a que adopten las medidas necesarias para enmendar su legislación, con miras a incluirlos.

Por último, la Comisión recuerda a los gobiernos que pueden solicitar la asistencia técnica de la OIT en relación con estas cuestiones.

Afganistán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) **(ratificación: 1969)**

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión tomó nota de que si bien algunas de las disposiciones de la Ley del Trabajo (a saber, los artículos 8, 9, 1), 59, 4), y 93) leídas conjuntamente proporcionan cierta protección frente a la discriminación en materia de remuneración basada en el sexo, no reflejan plenamente el principio del Convenio. Toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que el Comité Consultivo Tripartito sigue revisando la Ley del Trabajo con miras a garantizar una mayor conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión quiere señalar que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «el mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). **La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las actividades y recomendaciones del Comité Consultivo Tripartito en relación con la revisión de la Ley del Trabajo, y confía en que en un futuro próximo la legislación nacional dará plena expresión legislativa y efecto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor establecido en el Convenio.**

Brecha salarial por motivo de género. La Comisión saluda las estadísticas proporcionadas por el Gobierno y toma nota de que, según la Encuesta sobre las condiciones de vida en Afganistán de 2013-2014 (ALCS), los salarios mensuales medios de las mujeres eran más bajos que los de los hombres en todas las categorías laborales, excepto en el sector público. Los hombres ganaban en promedio un 30 por ciento más que las mujeres que realizan el mismo trabajo y hasta tres veces y media más que las mujeres que trabajan en el sector agrícola o forestal, en el que las mujeres representan dos tercios de toda la fuerza de trabajo. La Comisión toma nota de que, según la Encuesta sobre las condiciones de vida en

Afganistán de 2016-2017, la situación de las mujeres se ha deteriorado ya que su tasa de participación en la fuerza de trabajo se ha reducido pasando de un 29 por ciento en 2014 a un 26,8 por ciento en 2017, y sigue estando lejos de la participación en la fuerza de trabajo de los hombres (80,6 por ciento en 2017). Además, el número de mujeres en situación de empleo vulnerable era más elevado que el de los hombres en la misma situación (89,9 por ciento de las mujeres frente al 77,5 por ciento de los hombres). La Comisión *lamenta* que la encuesta sobre las condiciones de vida en Afganistán de 2016-2017 no contenga más información sobre la brecha salarial por motivo de género. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para reducir la brecha salarial por motivo de género identificando y abordando sus causas subyacentes, así como sobre los resultados alcanzados a este respecto. Recordando la importancia de la recopilación regular de estadísticas a fin de evaluar la naturaleza, la amplitud y la evolución de la brecha salarial por motivo de género, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los ingresos, tanto en el sector público como en el sector privado, de hombres y mujeres desglosada por actividad económica y ocupación así como todas las estadísticas o análisis disponibles sobre la brecha salarial por motivo de género.***

Artículo 3. Evaluación objetiva del empleo. Función pública. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la escala salarial adjunta a la Ley sobre Funcionarios Públicos, de 2008, según la cual los salarios se establecen en función de los grados y las escalas. Toma nota de que el artículo 8 de la ley se refiere a los criterios utilizados para determinar los grados del empleo teniendo en cuenta los diplomas, las calificaciones y la experiencia laboral. La Comisión toma nota de que, según los datos de la Organización Central de Estadísticas, en 2016 las mujeres representaban el 22,5 por ciento de todos los empleados del sector público, pero sólo el 7,5 por ciento de los ocupados en el tercer grado o una posición más elevada. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 8 de la Ley sobre Funcionarios Públicos, de 2008, incluida información sobre los métodos y factores utilizados para clasificar los empleos en diferentes grados a fin de garantizar que los trabajos principalmente realizados por mujeres no se infravaloren en comparación con los realizados tradicionalmente por hombres. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre la distribución de hombres y mujeres en las diversas categorías y posiciones de la función pública con sus niveles correspondientes de ingresos.***

Artículo 4. Actividades de sensibilización. Cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han continuado realizando campañas y actividades de información pública, algunas con la asistencia de la OIT, para sensibilizar acerca del principio del Convenio, en particular a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las actividades de sensibilización llevadas a cabo para promover el principio del Convenio, y que indique si se han realizado actividades de cooperación o conjuntas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. También pide al Gobierno que especifique si, como resultado de las actividades de sensibilización ya realizadas, los interlocutores sociales han abordado de forma efectiva el principio del Convenio en los acuerdos colectivos y, de ser así, que proporcione información a este respecto, incluidas copias de las disposiciones pertinentes.***

Aplicación. La Comisión toma nota de que, en la Política Laboral Nacional para 2017-2020, el Gobierno reconoce que ha habido laxitud en la aplicación de la legislación en materia laboral e indica que se realizarán inspecciones periódicas para evaluar el nivel de cumplimiento, así como las lagunas en materia de cumplimiento en relación con las cuales se adoptarán medidas apropiadas contra los empleadores que cometan infracciones. Asimismo, toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por el hecho de que las decisiones de los mecanismos de justicia informales discriminan a la mujer y socavan la aplicación de la legislación vigente y recomendó facilitar el acceso de las mujeres al sistema de justicia formal (documento CEDAW/C/AFG/CO/1-2, de 30 de julio de 2013, párrafos 14 y 15). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas para asegurar el estricto cumplimiento de la legislación laboral. En lo que respecta a la aplicación del Convenio, en particular, la Comisión pide información sobre el respeto de las obligaciones del Convenio, incluyendo el nivel de conformidad y la identificación de las lagunas a este respecto, así como sobre las medidas tomadas contra los empleadores que no cumplen con la legislación. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para mejorar el acceso de las mujeres al sistema formal de justicia, así como sobre todas las quejas relacionadas con el principio del Convenio que han sido vistas por los tribunales o cualquier otra autoridad competente, incluida información sobre las sanciones y reparaciones previstas.***

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. La Comisión había tomado nota de que la prohibición de la discriminación que figura en el artículo 9 de la Ley del Trabajo es muy general e instó al Gobierno a que aprovechara la oportunidad que ofrecía el proceso de reforma de dicha ley, en el contexto del Programa de Trabajo Decente por País y del Plan de acción nacional para las mujeres del Afganistán (NAPWA) 2007-2017, para prohibir explícitamente la discriminación directa e indirecta cubriendo todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio así como otros motivos determinados en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con arreglo al artículo 1, 1), b), del Convenio. La Comisión toma nota de que en sus memorias el Gobierno indica que el comité consultivo

tripartito sigue participando en el proceso de revisión de la Ley del Trabajo. En relación con sus comentarios anteriores sobre el artículo 10, 2), de la Ley sobre la Función Pública, 2008, que sólo prohíbe la discriminación en la contratación por motivos de sexo, etnia, religión, discapacidad y «deformidad física», la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las disposiciones de la Ley del Trabajo también son aplicables a los funcionarios públicos. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las actividades y recomendaciones del comité consultivo tripartito en relación con la revisión de la Ley del Trabajo, y confía que en un futuro próximo la legislación nacional prohíba explícitamente la discriminación directa e indirecta, tanto en el sector privado como en el sector público, y se cubran todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, así como otros motivos determinados en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores de conformidad con el artículo 1, 1), b), del Convenio, abarcando todos los aspectos del empleo y la ocupación. Mientras tanto, la Comisión pide al Gobierno que aclare la relación existente entre el artículo 9 de la Ley del Trabajo y el artículo 10, 2), de la Ley sobre la Función Pública y, de manera más general, que indique si todas las disposiciones de la Ley del Trabajo se aplican a los funcionarios públicos o sólo las disposiciones de la Ley del Trabajo a las que se hace referencia explícita en la Ley sobre la Función Pública.***

Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivo de sexo. Violencia relacionada con el trabajo y acoso sexual. La Comisión toma nota de la Ley sobre la Prohibición del Acoso contra Mujeres y Niños, adoptada en diciembre de 2016, y aprobada por el Presidente en abril de 2018, que define y criminaliza el acoso físico, verbal y no verbal, y establece que el acoso será castigado con una multa. Por otra parte, toma nota de que el artículo 30 de la Ley sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (EVAW), 2009, que prevé que el acoso será castigado con hasta seis meses de prisión, se incorporó por primera vez al Código Penal revisado en marzo de 2017 y después se eliminó por orden del Gobierno en agosto de 2017 como resultado de las presiones ejercidas por algunos miembros del Parlamento que dejaron el estatus de la Ley EVAW en un estado de incertidumbre. La Comisión también toma nota de que diversos órganos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la escalada de ataques selectivos, entre ellos asesinatos de mujeres destacadas, particularmente del sector público, así como por la prevalencia del acoso sexual contra las mujeres en el lugar de trabajo (informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos A/HRC/37/45, 21 de febrero de 2018, párrafo 55 e informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, A/HRC/29/27/Add.3, 12 de mayo de 2015, párrafos 21 y 26). Toma nota de que, según la encuesta realizada en 2015 por la Fundación para la Investigación Jurídica en materia de Mujeres, Niños y Niñas, basada en el Afganistán, el 87 por ciento de las mujeres entrevistadas sufren acoso en el lugar de trabajo. Asimismo, toma nota de que la Comisión independiente de derechos humanos del Afganistán indicó recientemente que las mujeres de la policía afgana se ven especialmente afectadas y que el Ministerio del Interior está ultimando su procedimiento interno de denuncias a este fin (informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, A/HRC/37/45, 21 de febrero de 2018, párrafo 53). La Comisión también toma nota de que, con arreglo al reglamento de 2015 sobre la eliminación del acoso contra las mujeres (11/07/1394), en diversas provincias se han establecido comisiones a fin de abordar las quejas, pero que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos destacó que los mecanismos para combatir el acoso sexual contra las mujeres en el lugar del trabajo en gran medida siguen siendo ineficaces debido al escaso número de casos que se denuncian principalmente por el estigma social asociado a la cuestión (informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, A/HRC/37/45, 21 de febrero de 2018, párrafo 54). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas concretas adoptadas por ejemplo a través de campañas dirigidas al público en general para promover las cuestiones de género y los programas específicos aprobados o previstos para combatir la violencia contra las mujeres (y en particular las mujeres prominentes), así como el acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, incluida cualquier estigmatización social relacionada con esta cuestión. También pide al Gobierno que proporcione información sobre el número, la naturaleza y el resultado de todas las quejas o casos de violencia relacionados con el trabajo o el acoso sexual en el lugar de trabajo tratados por las comisiones establecidas con arreglo al reglamento de 2015, la inspección del trabajo y los tribunales. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que aclare la relación que existe entre la Ley sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 2009, y la Ley sobre la Prohibición del Acoso contra Mujeres y Niños, 2016, así como el estatus actual de ambas leyes. Sírvase transmitir una copia de la Ley sobre la Prohibición del Acoso contra Mujeres y Niños, 2016, y del reglamento de 2015 sobre la eliminación del acoso contra las mujeres (11/07/1394).***

Artículo 2. Igualdad de acceso de hombres y mujeres a la formación profesional y la educación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las niñas representan el 45 por ciento de las matriculaciones en la escuela. En relación con la discusión que se realizó en la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión (mayo-junio de 2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la aplicación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), la Comisión toma nota, de que ciertos grupos no estatales limitaron deliberadamente el acceso de las niñas a la educación, incluso atacando y clausurando las escuelas de las niñas, y que, en 2015, 35 escuelas fueron utilizadas con fines militares. Asimismo, toma nota de la baja tasa de matriculación de las niñas, en particular en la escuela secundaria, su elevada tasa de abandono escolar, especialmente en las zonas rurales, debida a la falta de seguridad en el trayecto para ir y regresar de la escuela, y de las amenazas por escrito realizadas por grupos armados no estatales en las que se avisa a las niñas de que dejen de asistir a la escuela. La Comisión toma nota de que, en la encuesta sobre las condiciones de vida en el Afganistán de 2016-2017, la Organización Central de Estadísticas indica que, en 2016, el acceso

de las niñas a la educación primaria se estaba reduciendo y la tasa general de asistencia de las mujeres a la escuela (primaria, secundaria y enseñanza superior) representaba sólo el 0,71, el 0,51 y el 0,39 por ciento de las tasas correspondientes a los hombres, respectivamente. Además, se estima que sólo el 37 por ciento de las adolescentes saben leer, en comparación con el 66 por ciento de los adolescentes varones, y que sólo el 19 por ciento de las mujeres adultas saben leer en comparación con el 49 por ciento de los hombres adultos. *Si bien reconoce la difícil situación que prevalece en el país, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para promover el acceso de mujeres y niñas a la educación y para que éstas finalicen la educación en todos los niveles, así como para fomentar su participación en una amplia gama de programas de formación, incluidos los programas en los que tradicionalmente han predominado los hombres. Pide al Gobierno que proporcione estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo, sobre las tasas de participación en los diferentes niveles de la educación y finalización de éstos, así como en relación con diversos programas de formación profesional. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas como resultado de la política de acción afirmativa en la educación prevista por el Plan de acción nacional para las mujeres del Afganistán (NAPWA) 2007-2017.*

Artículo 5, 1). Medidas especiales de protección. Trabajo prohibido a las mujeres. La Comisión había tomado nota de que la lista de trabajos físicamente arduos o nocivos que se prohíben a las mujeres en virtud del artículo 120 de la Ley del Trabajo seguía en curso de elaboración. *Tomando nota de que el Gobierno no ha transmitido información actualizada a este respecto, la Comisión lo insta de nuevo a garantizar que, en el proceso de reforma de la Ley del Trabajo, todas las restricciones al trabajo que puedan realizar las mujeres se limitan estrictamente a la protección de la maternidad y no se basan en supuestos estereotipados en relación con su capacidad y rol en la sociedad, que serían contrarios al Convenio. Pide al Gobierno que proporcione una copia de la lista de trabajos prohibidos a las mujeres una vez que se haya adoptado.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Albania

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. Evolución legislativa. La Comisión tomó nota con interés de la adopción de la Ley núm. 136/2015, que entró en vigor en junio de 2016 y que introduce enmiendas al Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el artículo 9, 2) prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en base a un amplio número de motivos ya comprendidos en el artículo 1 de la Ley de Protección contra la Discriminación núm. 10221, de 2010, y añade los motivos de discapacidad, VIH y el sida o afiliación sindical. La prohibición de la discriminación abarca el acceso al empleo, el acceso a los cursos de formación y las condiciones de trabajo, incluidas la terminación del empleo y la remuneración (artículo 9, 5)). En caso de violación del artículo 9, la Comisión toma nota de que, en virtud de lo dispuesto en el nuevo artículo 9, 10), la carga de la prueba recae en el empleador una vez que el demandante presenta pruebas en base a las cuales el tribunal puede considerar que existe comportamiento discriminatorio. La Comisión toma nota también de que el nuevo artículo 32, 2 define y prohíbe tanto el acoso sexual de contrapartida *quid pro quo* como el derivado de un ambiente de trabajo hostil. *La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre la aplicación en la práctica del artículo 9 del Código del Trabajo, incluyendo todas aquellas actividades llevadas a cabo con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores, empleadores y sus organizaciones, así como a los inspectores del trabajo y jueces sobre las nuevas disposiciones del Código del Trabajo que protegen a los trabajadores contra la discriminación en el empleo y la ocupación.*

Discriminación por motivos políticos. La Comisión recuerda que, durante años, ha venido manifestando su preocupación en relación con el potencial efecto discriminatorio de las leyes de «lustración» (ley núm. 8043, de 30 de noviembre de 1995 y ley núm. 10034, de 22 de diciembre de 2008), que establecen la exclusión de las personas que ejercían determinadas funciones en el antiguo régimen de un gran número de funciones públicas. La Comisión recuerda asimismo que, de acuerdo con la opinión *amicus curiae* de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, se determinó que ciertos aspectos de la nueva ley núm. 10034, de 2008, constituyen una injerencia desproporcionada en el derecho a presentarse a las elecciones, el derecho al trabajo y el derecho al acceso a la administración pública. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno en su memoria señala que, a través de la decisión núm. 9, de fecha 2 de marzo de 2010, el Tribunal Constitucional de la República de Albania declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley de «lustración» núm. 10034, de 2008, y, en consecuencia, sin efecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Alemania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), de 5 de diciembre de 2016.

Artículo 2 del Convenio. Legislación. Transparencia en materia de remuneración. La Comisión toma nota con **interés** de la Ley de Transparencia de las Estructuras Salariales, de 30 de junio de 2017, que introduce un derecho individual para los trabajadores en los establecimientos de más de 200 trabajadores de obtener información sobre la mediana del salario bruto mensual de al menos seis trabajadores del otro sexo que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y sobre los criterios y el procedimiento utilizados para determinar la remuneración. Toma nota de que la expresión «igual valor» se define como una actividad idéntica o similar, y de que por «trabajo de igual valor» se entiende aquel que realizan hombres y mujeres si, teniendo en cuenta la totalidad de los factores, como el tipo de trabajo, los requisitos de formación y las condiciones de trabajo, puede considerarse que están en una situación comparable. Además, según la ley, los empleadores del sector privado que cuentan con más de 500 trabajadores informarán periódicamente sobre las medidas adoptadas para promover la igualdad de género y establecer la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en su empresa. Se alienta a dichos empleadores, si bien no se les obliga a ello, a utilizar procedimientos internos de evaluación de la empresa a fin de examinar regularmente sus sistemas de remuneración, así como la manera en que se aplican para determinar el cumplimiento de los requisitos de igualdad de remuneración. La Comisión toma nota también de que la DGB critica la introducción de ambos umbrales e insta a que se establezcan procedimientos internos obligatorios de evaluación de la empresa. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de la Ley de Transparencia de las Estructuras Salariales, incluidos datos sobre el nivel de cumplimiento del requisito legal de presentación de informes sobre la igualdad de género y la igualdad de remuneración a nivel de empresa, e información sobre las sanciones impuestas en caso de no cumplimiento, información sobre el ejercicio por parte de los trabajadores de su derecho de obtener información y sobre toda medida de seguimiento tomada sobre la base de la información obtenida, e información sobre toda medida adoptada para colmar las brechas salariales por motivo de género observadas, y el impacto de las mismas. Pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre el número de empresas en el país que cuentan con más de 200 trabajadores y con más de 500 trabajadores y sobre la proporción de mano de obra cubiertas por estas empresas.***

Evaluación de la brecha salarial por motivo de género. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual desde 2002 las diferencias salariales no ajustadas entre hombres y mujeres prácticamente no han cambiado, al situarse, como en 2017, en el 21 por ciento. Toma nota de que la brecha salarial fue del 23 por ciento en el sector privado, frente al 9 por ciento en el sector público, y de que las diferencias siguen siendo considerablemente mayores en la parte occidental de Alemania (el 23 por ciento frente al 7 por ciento en los nuevos *Länder*). En 2016, las diferencias salariales entre hombres y mujeres continúan siendo particularmente destacadas en las actividades científicas y técnicas (el 31 por ciento), los servicios financieros y de seguros (el 28 por ciento), la información y las comunicaciones (el 25 por ciento) y la manufactura (el 25 por ciento). La Comisión toma nota de la explicación del Gobierno de que se considera que las interrupciones de la trayectoria profesional por motivos familiares son una causa particular de la desigualdad salarial y de que, como consecuencia, se han adoptado medidas concretas a fin de equilibrar más las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, en particular a través de la expansión de los servicios de cuidado infantil, la introducción de nuevas prestaciones familiares (por ejemplo, «Prestación Familiar Más») y la puesta en práctica de varios programas, en colaboración con los interlocutores sociales, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres y los hombres a trabajar y promover unos entornos de trabajo favorables a la familia (por ejemplo, el programa «Perspectiva de retorno al trabajo» y el programa «Familia con factor de éxito»). El Gobierno indica asimismo que, con miras a luchar contra la segregación vertical, el 6 de marzo de 2015 se adoptó una nueva Ley sobre la Participación Igualitaria de Hombres y Mujeres en Puestos de Liderazgo en los Sectores Público y Privado, con el objetivo de aumentar considerablemente el porcentaje de mujeres en cargos directivos mediante la introducción de una cuota de género obligatoria del 30 por ciento, con miras a su implantación en 2016, para los consejos de supervisión de más de 100 empresas que cotizan en Bolsa y que están sujetas a la coestión basada en la paridad (es decir, la representación de los trabajadores en el consejo de supervisión). En 2018, el porcentaje de mujeres debe aumentar un 50 por ciento. Además, también se exige a unas 3 500 empresas medianas que establezcan, para junio de 2017, sus propias metas para incrementar el porcentaje de mujeres en cargos directivos, consejos ejecutivos y a niveles de alta dirección, lo que, a juicio de la DGB, está siendo menos exitoso. De conformidad con la nueva legislación, la Ley Federal sobre Igualdad de Género y la Ley Federal sobre la Designación de Órganos Federales se revisaron a fin de aumentar el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en el sector público. La Comisión toma nota asimismo de que, a fin de combatir la segregación ocupacional horizontal, el Gobierno continuó con los Días de Niñas y Niños, introducidos en 2011, a fin de concienciar sobre las opciones de carrera basadas en estereotipos de género, y de que en 2013 se creó un nuevo sitio web con miras a brindar a las niñas y los niños oportunidades para explorar asignaturas relacionadas con el género («mytestingground 2.0»). Sin embargo, la Comisión toma nota con **preocupación** de que, tal como subraya la DGB, la brecha salarial por motivo de género sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea, al superar considerablemente el promedio. Toma nota de que, según la encuesta sobre las estructuras de los ingresos más reciente, si bien tres cuartas partes de la brecha salarial no ajustada por motivo de género pueden atribuirse a diferencias estructurales, el cuarto restante no puede explicarse por las características pertinentes para el lugar de trabajo. El Gobierno indica que, en los casos en que las mujeres tienen las mismas calificaciones formales que los hombres y cualidades idénticas a los mismos, la brecha salarial sigue siendo del 7 por ciento, lo que indica claramente la discriminación latente contra las mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión señala asimismo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

expresaron su preocupación porque la persistente brecha salarial por motivo de género en los sectores público y privado sigue teniendo un impacto negativo en el desarrollo profesional y las prestaciones de jubilación de las mujeres debido a la ineficaz e insuficiente aplicación de la legislación sobre el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, así como por la persistente segregación profesional horizontal y vertical, la concentración de mujeres en los sectores de servicios peor remunerados y el empleo precario debido a su papel tradicional como cuidadoras, y por la subrepresentación de las mujeres en cargos directivos en las empresas (documento E/C.12/DEU/CO/6, de 12 de octubre de 2018, párrafo 38, y documento CEDAW/C/DEU/CO/7-8, de 9 de marzo de 2017, párrafo 35). ***Al tiempo que saluda las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la segregación profesional vertical y horizontal por motivo de género en el mercado de trabajo como una causa fundamental de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la Comisión confía en que el Gobierno intensifique sus esfuerzos para eliminar la considerable brecha salarial por motivo de género que se mantiene a un nivel alto desde hace más de quince años, con miras a dar plena aplicación al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, plasmado en su legislación nacional. La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre las medidas específicas adoptadas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en los sectores tanto público como privado, y a que encare sus causas profundas, en particular luchando contra la segregación profesional por motivo de género y contra los estereotipos relacionados con los papeles de las mujeres y los hombres. Pide asimismo al Gobierno que continúe suministrando información estadística sobre la distribución de los hombres y las mujeres en diferentes sectores de la economía y niveles profesionales, y sobre sus respectivos niveles de ingresos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), de 5 de diciembre de 2016.

Artículos 2 y 3 del Convenio. *Igualdad de oportunidades y de trato independientemente de la raza, el color o la ascendencia nacional.* La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual la situación de las personas de origen migratorio, que representaron el 20 por ciento de la población total en 2015, ha mejorado ligeramente, pero sigue siendo difícil. Toma nota de que, en 2015, la tasa promedio de desempleo fue del 14,6 por ciento para los extranjeros, frente al 5,6 por ciento para los nacionales alemanes. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que varios programas que se centran en las personas de origen migratorio están poniéndose en práctica en el marco del Plan Nacional de Acción para la Integración, que tiene por objeto: i) aumentar sus oportunidades de empleo, en particular en el sector público, así como sus calificaciones y competencias; ii) velar por que los asesores de las agencias de empleo, los centros de trabajo y otras personas involucradas en el mercado de trabajo tengan competencias interculturales y específicas para la migración, y iii) lograr una base de trabajadores calificados y mejorar su integración en el lugar de trabajo mediante la promoción de la diversidad a nivel de empresa. Remitiéndose a sus comentarios anteriores relativos a 113 proyectos patrocinados entre 2012 y 2014 en el marco del programa «XENOS-Integración y diversidad» encaminados a mejorar el acceso de los jóvenes de origen migratorio a la educación y el empleo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, además de prestar apoyo directo a los jóvenes, este programa contribuyó a introducir cambios sostenibles en la rutina operativa y administrativa de la política de recursos humanos. Toma nota de que los enfoques eficaces de XENOS están desarrollándose más aún como parte del proyecto del Fondo Social Europeo titulado «Directrices para la Integración Federal» para 2014-2020. La Comisión señala que, al tiempo que acoge con agrado los esfuerzos realizados por el Gobierno, la DGB considera que debería tenerse más en cuenta la perspectiva de género. Toma nota a este respecto de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) puso de relieve que las mujeres migrantes y pertenecientes a minorías siguen corriendo el riesgo de sufrir formas interrelacionadas de discriminación en el acceso a la educación y el empleo (documento CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 9 de marzo de 2017, párrafo 43). La Comisión toma nota asimismo de que varios organismos especializados de las Naciones Unidas han expresado recientemente su preocupación por el alto nivel de representación de las minorías, incluidos los sintí, los romaníes, los afrodescendientes y otras minorías víctimas de discriminaciones múltiples, como los musulmanes, en las escuelas de nivel más bajo y en las escuelas de las zonas marginadas, y recomienda que el Gobierno aumente el nivel de educación alcanzado por los niños pertenecientes a minorías étnicas, en particular impidiendo su marginación y haciendo frente de manera amplia a la segregación *de facto* de dichas minorías en la educación, teniendo en cuenta su estrecha relación con la discriminación en el ámbito del empleo (documento CERD/C/DEU/CO/19-22, 30 de junio de 2015, párrafo 13; documento A/HRC/36/60/Add.2, 15 de agosto de 2017, párrafos 85 y 89, y documento A/HRC/WG.6/30/DEU/2, 12 de marzo de 2018, párrafos 40, 55 y 56). También se expresó particular preocupación por la persistente discriminación a la que se enfrentan dichas minorías al acceder a oportunidades de trabajo o a puestos directivos (documento CERD/C/DEU/CO/19-22, 30 de junio de 2015, párrafos 14 y 17; documento A/HRC/36/60/Add.2, 15 de agosto de 2017, párrafo 42, y documento A/HRC/WG.6/30/DEU/2, 12 de marzo de 2018, párrafo 42). La Comisión toma nota de que, en el marco del Examen Periódico Universal, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas recomendó asimismo que el Gobierno redoblara sus esfuerzos para mejorar la integración de las minorías en el mercado de trabajo (documento A/HRC/39/9, 11 de julio 2018, párrafo 155). ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas específicas adoptadas para impedir la segregación y la discriminación en la educación y***

el empleo de las personas pertenecientes a minorías o de origen migratorio, incluidos los sinti, los romaníes, los afrodescendientes y que asegure a dichas personas un mejor acceso a oportunidades de educación y de empleo, en particular a través de medidas de acción positiva, así como el impacto de las mismas. Pide además al Gobierno que continúe suministrando información sobre la puesta en práctica de cualquier programa llevado a cabo a ese respecto, concretamente en el marco del Plan Nacional de Acción para la Integración y del proyecto del Fondo Social Europeo titulado «Directrices para la Integración Federal» 2014-2020, así como una copia de los resultados de cualesquiera estudios e informes pertinentes que evalúen su impacto.

Segregación ocupacional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se siguen aplicando varias políticas y programas para luchar contra la segregación ocupacional horizontal y de que en 2014, bajo la dirección general del Gobierno con la participación de la Agencia Federal de Empleo, se estableció un grupo de expertos con miras a lograr un entendimiento común de la noción de neutralidad de género en la elección de las ocupaciones y los estudios, identificando los medios apropiados para la implementación y el impacto del monitoreo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 2017, el CEDAW recomendó al Gobierno que abordara los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que podían disuadir a las niñas de progresar más allá de la educación secundaria y de matricularse en campos de estudio tradicionalmente dominados por los hombres, como las matemáticas, la tecnología de la información y las ciencias (documento CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 9 de marzo de 2017, párrafo 34). En relación con sus observaciones anteriores sobre la baja representación de las mujeres en puestos directivos en el sector privado, la Comisión toma nota con *interés* de la adopción de la Ley de Igualdad de Participación de Mujeres y Hombres en Puestos Directivos en los Sectores Público y Privado, de 6 de marzo de 2015, por la que se establece una cuota obligatoria de género del 30 por ciento que deberá alcanzarse para 2016, para los consejos de supervisión de más de 100 empresas sujetas a la codeterminación de la paridad (es decir, la representación de los empleados en su consejo de supervisión). A partir de 2018, la proporción de mujeres debe aumentar al 50 por ciento en las entidades en que los miembros son nombrados por el Gobierno Federal. Además, alrededor de 3 500 empresas medianas deben fijar, para junio de 2017, sus propios objetivos para aumentar la proporción de mujeres en los consejos de supervisión, los consejos de administración y en los niveles directivos más altos. De conformidad con la nueva ley, se revisaron la Ley Federal sobre la Igualdad de Género y la Ley Federal sobre el Nombramiento en los Órganos Federales para aumentar la proporción de mujeres en puestos directivos en el sector público. El Gobierno añade que se brinda apoyo a las empresas a este respecto y que cada año el Gobierno llevará a cabo un seguimiento exhaustivo para evaluar el impacto de la ley. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según el último informe de la Comisión Europea sobre la igualdad de género (2017, pág. 14), sólo el 46 por ciento de las empresas cumplen con la cuota legal de género para los consejos de supervisión. La Comisión toma nota de que la Oficina Federal de Estadística consideró, en 2017, que la proporción de mujeres que ocupaban puestos ejecutivos se mantuvo casi invariable en comparación con los dos años anteriores, que era del 29,2 por ciento, es decir, cinco puntos porcentuales inferiores a la media europea. La Comisión también toma nota de que en sus observaciones finales de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la escasa representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, en particular en el sector privado, y por la ineficacia de la Ley de Igualdad de Participación a este respecto. A la Comisión le preocupa en particular que: i) la cuota legal de género del 30 por ciento para los consejos de supervisión, prevista en la ley, sólo cubre a 108 empresas; ii) la mayoría de las empresas que están obligadas a fijar metas de cuotas de género en virtud de la ley no lo han hecho, y iii) las sanciones por incumplimiento no son efectivas (documento E/C.12/DEU/CO/6, 12 de octubre de 2018, párrafo 30). *La Comisión espera que el Gobierno intensifique sus esfuerzos para aumentar efectivamente la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, incluidos los consejos de supervisión, tanto en el sector público como en el privado, y mediante la aplicación efectiva de la Ley de Igualdad de Participación de Mujeres y Hombres en Puestos Directivos en los Sectores Público y Privado. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las dificultades detectadas en la aplicación de la ley y las sanciones impuestas, así como sobre cualquier otra medida adoptada para aumentar la representación de la mujer en los puestos directivos. La Comisión pide además al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para luchar contra los estereotipos de género relativos a las aspiraciones y capacidades profesionales de las mujeres que contribuyen a su insuficiente representación en campos de estudio tradicionalmente dominados por los hombres, en particular como resultado de las recomendaciones formuladas en 2014 por el grupo de expertos sobre la neutralidad de género en relación con la elección de la educación y el empleo, y sus efectos.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Angola

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1976)

Legislación. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores en los que pidió al Gobierno que aprovechara la oportunidad ofrecida por el proceso de revisión de la Ley General del Trabajo para abordar las cuestiones específicas que la Comisión ha estado planteando desde 2013, en particular en lo que respecta a: la definición y los motivos de discriminación, la prohibición del acoso sexual, las restricciones al acceso de las mujeres al trabajo y la cobertura de las

medidas para los trabajadores con responsabilidades familiares previstas en la ley. La Comisión *lamenta* tomar nota de que la nueva Ley General del Trabajo (ley núm. 7/015), de 21 de abril de 2015, no aborda ninguna de las cuestiones planteadas por la Comisión. ***Recordando la importancia de un marco legislativo amplio y claro para garantizar la aplicación efectiva del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para abordar las cuestiones que ha planteado con miras a poner la Ley General del Trabajo plenamente en conformidad con el Convenio y que transmita información sobre la evolución de la situación a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Antigua y Barbuda

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2003)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, a) y b), del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo E8, 1), del Código del Trabajo de 1975, que dispone que «ninguna mujer estará empleada, sólo por razón de su sexo, en unas condiciones de empleo menos favorables que las que gozan los trabajadores de sexo masculino empleados en la misma ocupación y por el mismo empleador», no dio plena expresión legislativa al principio del Convenio. La Comisión recuerda que el mero hecho de prohibir la discriminación salarial basada en el sexo, no dará normalmente suficiente efecto al Convenio, dado que no recoge el concepto de «trabajo de igual valor», establecido en el artículo 1, b), del Convenio (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676). La Comisión recuerda asimismo la importancia de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, especialmente dada la existencia de una segregación laboral por motivos de sexo, ya que mujeres y hombres trabajan a menudo en diferentes ocupaciones (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 673 y 697). En este sentido, la Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Junta Nacional del Trabajo revisó el Código del Trabajo y se presentó un informe a la autoridad pertinente para las acciones necesarias. ***La Comisión confía en que el texto revisado del Código del Trabajo establezca claramente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor — que no sólo debería prever una igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que trabajen en la misma ocupación, sino también la igualdad de remuneración por el trabajo realizado por hombres y mujeres que sea diferente en su naturaleza, pero, no obstante, de igual valor — y garantice que el principio del Convenio pueda aplicarse aun cuando no exista un grupo de comparación suficiente empleado por el empleador. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los progresos realizados.***

Remuneración. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos al uso y a las definiciones de los términos «salarios», «salarios brutos», «remuneración» y «condiciones de trabajo», a que se refieren los artículos A5, C3, C4, 1) y E8, 1), del Código del Trabajo. La Comisión tomó nota de que la definición de «salario bruto» parece estar de conformidad con la definición de remuneración establecida en el artículo 1, a), del Convenio, pero siguió sin aclararse si el artículo C4, 1), que prohíbe la discriminación por motivos de sexo respecto de los salarios, comprende el salario bruto. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los términos «salarios», «salarios brutos» y «remuneración», se utilizan indistintamente en la práctica, la Comisión tomó nota de que a menudo se entienden estos diversos términos con significados diferentes, con lo que potencialmente se da lugar a la confusión. ***Tomando nota de la revisión del Código del Trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que garantice que el texto revisado armonice las disposiciones del Código del Trabajo relacionadas con los salarios y la remuneración, y que incluya una clara definición de «remuneración», que comprende no sólo el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, sino también cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, de conformidad con el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los progresos realizados en este sentido.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos de discriminación. Ascendencia nacional y origen social. Durante varios años, la Comisión ha estado tomando nota de que ni la Constitución Nacional (artículo 14, 3)) ni el Código del Trabajo (artículo C4, 1)) contienen una prohibición explícita de la discriminación basada en la ascendencia nacional y el origen social. En su memoria de 2012, el Gobierno señaló que cuando se publique el nuevo Código del Trabajo, se incluirá la ascendencia nacional y el origen social, para dar plena aplicación al Convenio. La Comisión *lamenta* tomar nota de que la última memoria del Gobierno sigue sin incluir información sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar y promover en la legislación y en la práctica la protección de los trabajadores frente a la discriminación basada en esos motivos. La Comisión recuerda que si bien la importancia de cada uno de los motivos enumerados en el Convenio puede ser diferentes para cada país, a lo largo del tiempo pueden surgir nuevas formas de discriminación debido a los cambios en el mercado de trabajo y los cambios sociales, que tendrán que ser abordadas. Además cuando se adopten disposiciones legales para dar cumplimiento al principio del Convenio, éstas deberían incluir por lo menos todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 1, 1), a) (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 853). ***La Comisión pide al Gobierno que garantice que en la legislación y en la práctica los trabajadores reciben protección contra la discriminación directa e indirecta basada en ascendencia nacional y el origen social, en todos los aspectos del empleo y la ocupación, y que controle las nuevas formas de discriminación que pueden redundar en discriminación en el empleo y la ocupación por esos motivos. La Comisión también pide al Gobierno que informe detalladamente sobre los progresos realizados a ese respecto. Tomando nota de que el Gobierno indica que el Consejo***

Nacional del Trabajo ha examinado el Código del Trabajo y presentado un informe a la autoridad pertinente para que se adopten las medidas necesarias, la Comisión espera que el texto revisado del Código del Trabajo incluya disposiciones específicas en las que se defina y prohíba la discriminación directa e indirecta en todos los aspectos del empleo y la ocupación, que abarquen al menos todos los motivos de discriminación enumerados en el Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social, y le pide que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2. Igualdad entre hombres y mujeres. Acceso al empleo y a la formación y la educación profesionales. La Comisión toma nota de que el Gobierno continúa transmitiendo información muy general en relación con su política nacional para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres con respecto al acceso al empleo y a la educación y la formación profesionales. *Con miras a que la Comisión pueda evaluar de forma efectiva los progresos realizados en lo que respecta a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para compilar, analizar y transmitir información estadística desglosada por sexo sobre la participación de hombres y mujeres en todas las fases de la educación y en los diversos cursos de formación profesional que se ofrecen, así como estadísticas sobre el número de hombres y mujeres que han encontrado trabajo después de haber seguido dicha formación, incluso en lo que respecta a los trabajos que tradicionalmente realiza el otro sexo. La Comisión también insta al Gobierno a transmitir información detallada sobre las recientes iniciativas adoptadas o previstas para promover la participación de las mujeres en los cursos en los que normalmente se inscriben los hombres y en los trabajos que tradicionalmente realizan éstos, incluida información actualizada sobre los cursos que ofrecen el Departamento de Cuestiones de Género, el Ministerio de Educación y el Instituto de Formación Continua.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Argentina

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1968)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 31 de agosto de 2018, en las cuales la CGT RA: señala la necesidad de contar con una política pública a nivel nacional que abarque todos los criterios de discriminación previstos en el Convenio; se refiere a las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes que desempeñan actividades de servicio doméstico y en el sector textil; espera poder tener más información sobre los programas de empleo gestionados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) que permita hacer un seguimiento de los mismos con miras a asegurarse que no haya discriminación alguna contra, por ejemplo, población migrante y pueblos indígenas; y señala la oportunidad de mejorar la normativa vigente aplicable a los trabajadores migrantes en situación irregular.

La Comisión también toma nota de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, indicando que: i) si bien el derecho a no ser discriminado y a la igualdad de trato se encuentra tutelado en el orden jurídico interno, la práctica demuestra que ello no es suficiente, por lo que se necesitan medidas adecuadas de control y mecanismos que aseguren el cumplimiento efectivo de las normas y garanticen a las personas con discapacidad, a las mujeres y a los grupos más vulnerables, el derecho a la igualdad, en particular en lo que respecta al acceso a puestos de trabajo y puestos de mayor jerarquía, y en la percepción de igual remuneración; ii) la necesidad de adoptar medidas de acción positiva destinadas a garantizar el disfrute real de los derechos; iii) las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno han afectado directa e indirectamente a los trabajadores con discapacidad, el 90 por ciento de los cuales se encuentra sin empleo, y señala también la falta de capacitación laboral y apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan insertarse en el mercado del trabajo, y iv) no se ha logrado la igualdad de género en el seno de las empresas y que el modelo de equidad de género para el país debería abarcar áreas tales como selección del personal, ascenso y formación, desarrollo profesional, conciliación de la vida familiar y laboral, acoso sexual y clima laboral.

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), recibidas el 11 de septiembre de 2018.

La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las observaciones formuladas por los sindicatos.

Legislación. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno informa sobre el proyecto de ley de equidad de género (núm. INLEG-2018-10434057-APN-PTE), que ingresó al Congreso en marzo de 2018. La Comisión toma nota de que dicho proyecto está dirigido a modificar la Ley de Contrato de Trabajo, y más particularmente, sus artículos 172, 173, 175 y 176 en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades, disponiendo, entre otros, que: i) queda garantizada la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral (artículo 172), y ii) los trabajadores, sin distinción de género, podrán optar por ejecutar trabajos fuera del establecimiento, que le sean encargados por su empleador, así como realizar prestaciones a favor de éste a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo (artículo 175). La Comisión toma nota también de que el proyecto de ley prevé la elaboración de códigos de conducta por los empleadores o su adhesión a un Código de Conducta con miras a garantizar la igualdad de género en el interior de la empresa (artículo 2); que los sindicatos deberán adoptar normas estatutarias pertinentes para garantizar el respeto de la igualdad de género en el interior de sus organizaciones (artículo 3); y que las partes de

convenios colectivos de trabajo deberán adoptar las normas convencionales pertinentes para garantizar la igualdad de género en la aplicación de tales instrumentos (artículo 4). ***La Comisión saluda esta iniciativa legislativa y pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.***

Respecto de las disposiciones sobre igualdad de remuneración y conciliación del trabajo con la vida privada y familiar, la Comisión se remite a sus comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156).

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que continuara informando sobre la implementación en la práctica de las medidas adoptadas en el marco de la recomendación general núm. 6 de 2009 (promoción de la igualdad de trato en el acceso al empleo sin discriminación por edad, apariencia física, origen social, nacionalidad y la discapacidad) del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para promover la igualdad de trato en el acceso al empleo. La Comisión también pidió al Gobierno que: i) informara sobre la aplicación en la práctica del nuevo artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo — el cual, tras la adopción de la ley núm. 26911, de 13 de diciembre de 2013, prohíbe al empleador «al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador — y las eventuales denuncias presentadas en relación con la aplicación del Convenio, y ii) indicara cuáles son las medidas concretas adoptadas con miras a garantizar una adecuada protección contra la discriminación por todos los motivos previstos en el Convenio, tanto durante el acceso como durante la vigencia del contrato de trabajo y al momento de su terminación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el INADI prevé realizar un informe sobre discriminación en el acceso al empleo con el fin de actualizar la recomendación general núm. 6 de 2009 y continua realizando actividades de capacitación y sensibilización en favor de actores del sector empresario sindical y estatal. En cuanto a las denuncias presentadas en relación con el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo mencionado anteriormente, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se recibieron 207 y 153 denuncias sobre casos de discriminación por motivo de etnia, religión, orientación sexual y nacionalidad, entre otros, respectivamente en 2016 y 2017. El Gobierno informa asimismo que el INADI emitió varios dictámenes de carácter no vinculante, en las que se expresó opinión sobre la existencia o no de una conducta discriminatoria y, de considerarlo pertinente, se realizaron las recomendaciones necesarias, además de realizar también gestiones de buenos oficios o conciliaciones resolviendo 96 casos entre el 2016 y el 2017. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas concretas adoptadas con miras a garantizar una adecuada protección contra la discriminación por todos los motivos previstos en el Convenio y sobre las denuncias recibidas y el tratamiento dado a las mismas. La Comisión pide igualmente al Gobierno que informe sobre los resultados del estudio sobre discriminación en el acceso al empleo realizados por el INADI y toda acción de seguimiento tomada y sus resultados.***

Artículo 2. Política nacional de igualdad. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que: i) enviara información sobre la evolución en la adopción de una política nacional de igualdad que abarque por lo menos todos los criterios de discriminación previstos en el Convenio así como otros criterios ya previstos en la legislación nacional, tales como la discapacidad; ii) enviara información, en cumplimiento del artículo 3, f), del Convenio, sobre las medidas específicas adoptadas para la implementación del principio de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación; iii) continuara enviando información sobre el tratamiento dado por el INADI a las denuncias por discriminación en el empleo desglosada por motivo de discriminación, incluyendo sobre las eventuales sanciones impuestas y las reparaciones acordadas, y iv) proporcionara información sobre la implementación en la práctica de la resolución ministerial núm. 270/2015 que prohíbe la realización del test de VIH en el examen preocupacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el INADI está elaborando una publicación para concientizar a toda la población sobre las barreras que enfrentan las personas que viven con VIH en su acceso al mundo laboral y lleva adelante capacitaciones con redes de empresas respecto de la prohibición de realizar test de VIH en el examen preocupacional. La Comisión recuerda que incluso si la importancia relativa de los problemas relacionados con cada uno de los motivos de discriminación prohibidos por el Convenio puede variar de un país a otro, al examinar la situación y decidir las medidas que habrán de adoptarse, es esencial que se tengan en cuenta todos los motivos en la aplicación de la política nacional. ***La Comisión pide nuevamente al Gobierno que envíe información sobre toda evolución en la adopción de una política nacional de igualdad que abarque por lo menos todos los criterios de discriminación previstos en el Convenio, así como otros criterios ya previstos en la legislación nacional, tales como la discapacidad. La Comisión pide igualmente al Gobierno que evalúe los resultados logrados con la aplicación de la política nacional en materia de igualdad y proporcione información al respecto. Sírvese también continuar proporcionando información sobre la implementación en la práctica de la resolución ministerial núm. 270/2015 que prohíbe la realización del test de VIH en el examen preocupacional.***

Pueblos indígenas. La Comisión recuerda que en su observación anterior se refirió a la firma de un convenio marco de cooperación entre el MTEySS y el INADI el 19 de noviembre de 2013, cuyo objetivo es asegurar y promover el derecho de igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al trabajo y establecer mecanismos de cooperación para revertir las discriminaciones vigentes por diversos motivos, entre los que se considera de manera especial a los pueblos indígenas. La Comisión tomó nota igualmente de la adopción entre el INADI y la Secretaría de Empleo de la «línea de

articulación salvaguarda indígena», que tiene como objetivo sensibilizar a los agentes de las oficinas de empleo y de las instituciones de formación profesional sobre la no discriminación de los pueblos indígenas en el acceso al empleo y la formación. La Comisión pidió por lo tanto al Gobierno que: i) enviara información sobre los resultados obtenidos con estas medidas y que continuara tomando medidas para aumentar las oportunidades de formación y orientación vocacional de los pueblos indígenas, y para promover el acceso de los mismos al empleo y ocupación en igualdad de condiciones con los otros trabajadores, y ii) enviara información estadística relativa a la participación de los trabajadores indígenas en el mercado de trabajo, desglosada por sexo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el INADI participa en la Mesa Interministerial para Pueblos Indígenas (MIMPI) a través de la cual se proponen líneas de acciones para mejorar la inclusión de las mujeres y de los hombres indígenas en las políticas públicas del Estado. El Gobierno señala igualmente que se publicaron varios materiales informativos sobre derechos de pueblos indígenas a fin de sensibilizar y erradicar la discriminación estructural hacia los mismos. La Comisión toma nota además de que el Gobierno informa sobre denuncias relativas a la discriminación sufrida por mujeres y hombres indígenas y observa que en 2016 y 2017 se recibieron dos y diez denuncias respectivamente, presentadas por personas indígenas. La Comisión recuerda que el hecho de que el número de quejas o reclamaciones presentadas sea muy reducido puede indicar la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, la falta de confianza en los procedimientos, la falta de acceso efectivo a éstos, o el temor a represalias (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 870).

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas; y las dificultades que encuentran los miembros de los pueblos indígenas para acceder al sector formal del mercado de trabajo, y su concentración en trabajos sin acceso a derechos laborales fundamentales (documento CERD/C/ARG/CO/21-23, 11 de enero de 2017, párrafos 6 y 31). La Comisión toma nota igualmente de que, en sus observaciones finales, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó su preocupación por el hecho de que, por su origen étnico y condición social, las mujeres indígenas enfrentan formas entrecruzadas de discriminación en el país, además de odio racial, violencia, pobreza y marginación (documento CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 de noviembre de 2016, párrafo 40). ***La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas proactivas con miras a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de los hombres y mujeres indígenas, incluidas medidas destinadas a garantizar el acceso de los mismos a los bienes materiales y los servicios necesarios para el ejercicio de una ocupación en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población, y proporcione información sobre su impacto en la aplicación del Convenio y todo obstáculo encontrado. La Comisión pide asimismo al Gobierno que proporcione información estadística relativa a la participación de los trabajadores indígenas en el mercado de trabajo, desglosada por sexo. La Comisión pide además al Gobierno que informe sobre toda medida adoptada o prevista con miras a examinar si las disposiciones sustantivas y de procedimiento existentes permiten, en la práctica, a los pueblos indígenas y a sus miembros presentar quejas y darles curso y cuáles son los obstáculos y las dificultades encontradas, y le solicita que continúe proporcionando información sobre el número de denuncias por discriminación presentadas, su naturaleza, y el tratamiento dado a las mismas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahamas

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

En vista de la sucinta memoria enviada por el Gobierno, la Comisión toma nota con ***preocupación*** de que las cuestiones planteadas anteriormente sobre la fijación de las tasas de remuneración, la evaluación objetiva de los empleos, los convenios colectivos y la efectividad de los mecanismos de control del cumplimiento no se han abordado desde 2004. ***La Comisión reitera que, sin la información necesaria, no está en posición de evaluar la aplicación efectiva del Convenio, o los progresos realizados desde su ratificación, en 2001. Confía sinceramente en que la próxima memoria contenga información completa sobre los puntos descritos a continuación.***

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, había señalado que el artículo 6 de la Ley de Empleo de 2001, limita indebidamente el alcance de «trabajo de igual valor» al trabajo realizado en el mismo establecimiento que, básicamente, requiere las mismas calificaciones, esfuerzos y responsabilidades, y que es ejecutado en condiciones de trabajo similares, y hace referencia a «tasas de remuneración» que, de conformidad con el artículo 2, 1), de la ley, parece ser una expresión más restrictiva que el término «remuneración» indicado en el Convenio. La Comisión toma nota con ***profunda preocupación*** de que la Ley de Empleo fue enmendada en abril de 2017 por la Ley de Empleo (enmienda) (núm. 5 de 2017). Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no aprovechó esta oportunidad para enmendar el artículo 6 de la ley con miras a dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Toma nota asimismo de que, en su respuesta a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas en relación con el sexto informe periódico de las Bahamas, el Gobierno sigue remitiéndose al artículo 6 de la Ley de Empleo,

de 2001, a pesar de que el Comité viene planteando esta cuestión durante más de quince años (documento CEDAW/C/BHS/Q/6/Add.1, 9 de julio de 2018, párrafo 80). ***Una vez más, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas activas para enmendar el artículo 6 de la Ley de Empleo de 2001, con el fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que vele por que la legislación prevea la comparación, no sólo de trabajos en el mismo establecimiento y que básicamente requieran las mismas calificaciones, esfuerzos y responsabilidades, y se ejecuten en condiciones de trabajo similares, sino también de trabajos de naturaleza absolutamente diferente que, sin embargo, sean de igual valor, y prevé una definición amplia de «remuneración» como la establecida en el artículo 1, a), del Convenio.***

Artículo 2. Fijación de tasas de remuneración. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, conforme a la cual no está en condiciones de proporcionar tasas de remuneración ni de especificar cómo se fijan las tasas de remuneración en el servicio civil y en el sector público. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 670 y 671, la Comisión indica que los Estados Miembros vinculados por el Convenio no pueden ser pasivos en su enfoque de la aplicación del Convenio y que tienen la obligación de velar por la aplicación del principio del Convenio cuando el Estado es el empleador o tiene el control de las empresas, o cuando el Estado puede intervenir en el proceso de determinación de los salarios. El Gobierno debe adoptar medidas previsoras a fin de evaluar, promover y asegurar la aplicación del principio del Convenio. ***La Comisión confía en que el Gobierno esté en posición de suministrar información en su próxima memoria sobre la manera en que las tasas de remuneración se determinan en el servicio civil y en el sector público, incluidas copias de las escalas salariales e información sobre el método y los criterios utilizados para establecerlas.***

Artículo 3. Evaluación objetiva de los puestos de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que ha preparado un «Libro blanco» sobre la legislación para el establecimiento de un consejo nacional de productividad y que, dentro de unos años, tal vez sea posible proporcionar informes sobre la elaboración y utilización de sistemas de evaluación objetiva de los puestos de trabajo sobre la base del trabajo realizado en los sectores público y privado. Al tiempo que reconoce que la aplicación del Convenio tal vez lleve tiempo, la Comisión recuerda que, dado que el derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es un derecho fundamental, el período para la plena aplicación del Convenio debería ser lo más breve posible, y deberían establecerse plazos para la consecución de determinados objetivos (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 671). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados hacia la adopción de una legislación para el establecimiento de un consejo nacional de productividad y, entre tanto, sobre toda medida adoptada, o toda política o acuerdo adoptado que prevea la evaluación objetiva de los puestos de trabajo, incluyendo el calendario propuesto de su aplicación.***

Artículo 4. Cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Tomando nota de la indicación del Gobierno de que no tiene nada que señalar sobre este punto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para alentar a los interlocutores sociales a discutir el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que incluya disposiciones a tal efecto en sus acuerdos.

Control del cumplimiento. Dado que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión confía sinceramente en que el Gobierno adopte medidas para mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo para detectar y afrontar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y vele por que se informe a los trabajadores sobre su derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y sobre los mecanismos de solución de conflictos disponibles. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre toda actividad llevada a cabo a este respecto.***

Aplicación práctica y estadísticas. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para determinar las razones subyacentes de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que indicara las medidas adoptadas o previstas para afrontar tales diferencias en las diversas ocupaciones, en particular en la categoría profesional de nivel más elevado de los altos funcionarios y gerentes, donde la brecha es particularmente sorprendente. Toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado la información solicitada. Según las estadísticas de 2017 a las que el Gobierno hace referencia en su memoria, la brecha salarial semanal media de larga data entre hombres y mujeres en los sectores hotelero y de la restauración para Nueva Providencia (donde vive el 70 por ciento de la población), se eliminó en 2013 — año en que el salario semanal alcanzó el nivel más bajo en diez años —, pero resurgió a partir de 2014 y se ha incrementado desde entonces. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para determinar las razones subyacentes de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que indique las medidas adoptadas o previstas para afrontar las diferencias salariales en las diversas ocupaciones, en particular en la categoría profesional de nivel más elevado de los altos funcionarios y gerentes. Se pide asimismo al Gobierno que proporcione información estadística sobre los ingresos de los hombres y las mujeres en los diferentes sectores económicos y ocupaciones en los sectores público y privado.***

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos de discriminación. Legislación. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, había tomado nota de que el artículo 6, 1), de la Ley de Empleo de 2001 no se había enmendado para incluir el «color», la «ascendencia nacional» y el «origen social» como motivos prohibidos de discriminación, y pidió al Gobierno que indicara las medidas específicas adoptadas para asegurar la protección contra la discriminación en la práctica por los motivos mencionados anteriormente. La Ley de Empleo fue enmendada en abril de 2017 por la Ley de Empleo (enmienda) (núm. 5, de 2017). La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no aprovechó esta oportunidad para enmendar el artículo 6, c), de la ley. **Al tiempo que recuerda que en los casos en que se adoptan disposiciones legales para dar efecto al principio del Convenio, éstas deberían incluir por lo menos todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que enmiende la Ley de Empleo de 2001 en consecuencia. Entre tanto, pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas específicas adoptadas para brindar protección contra la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación, en la práctica, por motivos de color, ascendencia nacional y origen social, y que transmita una copia de toda resolución judicial a tal efecto.**

Artículos 2 y 3. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de la segregación profesional de hombres y mujeres, en particular en la categoría profesional de nivel más elevado de los altos funcionarios y gerentes. La memoria del Gobierno no menciona nada sobre este punto. Sin embargo, la Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), en su sexto informe periódico, según la cual sigue habiendo una segregación profesional notoria no sólo en el empleo, sino también en la educación. Según los datos del Departamento de Estadística, en 2015 las mujeres predominaban en sectores como la hotelería y la restauración, las finanzas, los seguros, la inmobiliaria y otros negocios, y los servicios comunitarios, sociales y personales, pero sólo representaron el 6 por ciento o menos de los trabajadores en los sectores de la construcción o la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca. En su informe al CEDAW, el Gobierno indicó que el porcentaje de mujeres que se graduó en 2015 de la Universidad de las Bahamas en los ámbitos de las ciencias (el 11,78 por ciento), el derecho (el 5,79 por ciento), la ingeniería (el 0,20 por ciento) o la agricultura (el 0 por ciento) era considerablemente bajo. De manera análoga, entre los graduados del Instituto Técnico y Profesional de las Bahamas (BTVI), las mujeres estaban excesivamente representadas en ciertos sectores (el 100 por ciento en cosmetología, producción de diseño de moda y estética, y el 83 por ciento entre los asistentes administrativos) y en absoluto en los sectores que conducen a ocupaciones mejor remuneradas como la tecnología de la construcción; la gestión o apoyo de tecnología de la información; la mecánica de automóviles; la electrónica y la instalación de cables; la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, o la fontanería (documento CEDAW/C/BHS/6, de 26 de mayo de 2017, párrafos 93, 94 y 101). La Comisión observa que la información indicada anteriormente confirma que, pese al incremento del número de mujeres que se gradúan, éstas siguen concentrándose en general en las denominadas ocupaciones típicamente femeninas. **La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que suministre información detallada sobre las medidas adoptadas para afrontar la segregación profesional de hombres y mujeres, y para promover la participación de las mujeres en cursos de formación más diversos, incluidos aquellos a los que tradicionalmente asisten los hombres. La Comisión pide al Gobierno asimismo que indique, en particular a través de estadísticas desglosadas por sexo, los resultados obtenidos de cualquier medida adoptada con miras a promover el acceso de las mujeres a una amplia diversidad de trabajos con mejores perspectivas profesionales en los sectores tanto público como privado.**

La Comisión toma nota con **preocupación** de que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta a algunos de sus comentarios anteriores. Espera que la próxima memoria proporcione información completa sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2010, en relación con los siguientes puntos:

Artículo 5. Medidas especiales. La Comisión recuerda que el artículo 26, 4), d), de la Constitución, al hacer referencia a las «circunstancias especiales» de las personas protegidas contra la discriminación, parecería prever la adopción de medidas positivas en favor de las personas cubiertas por el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que está comprometido a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Convenio en espera del examen ulterior que se realizará de la Ley de Empleo de 2001, aunque no profundiza en el significado de estas disposiciones constitucionales, tal como lo solicita la Comisión. **Por lo tanto, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique si ha pretendido, o pretende, apoyarse en el artículo 26, 4), d), de la Constitución a fin de adoptar medidas positivas encaminadas a promover el empleo de las mujeres o de ciertos grupos desfavorecidos.**

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno sigue sin contener ninguna información sobre las cuestiones planteadas en las partes III y IV del formulario de memoria, pero de que el Gobierno expresa su compromiso de proporcionar dicha información. **La Comisión pide al Gobierno que recopile y suministre información sobre las medidas concretas adoptadas por el Ministerio de Trabajo a fin de promover y asegurar la igualdad en materia de empleo y ocupación, incluida información sobre las actividades pertinentes llevadas a cabo por los servicios de inspección del trabajo y los servicios públicos de colocación de la mano de obra. Le pide asimismo que comunique cualquier resolución pertinente del Tribunal del Trabajo o de los tribunales en lo que respecta a la igualdad en materia de empleo y ocupación, con inclusión de las resoluciones relacionadas con el artículo 6 de la Ley de Empleo, y que indique el número de quejas que se han presentado en los últimos años en las que se alega discriminación en el empleo y la ocupación, y los resultados de dichas quejas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahrein

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota del informe de la misión de contactos directos, así como de las observaciones de la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas respectivamente el 30 de agosto y el 1.º de septiembre de 2018.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión celebrada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.ª reunión (mayo-junio de 2018), sobre la aplicación del Convenio y de las conclusiones adoptadas. Las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas pidieron al Gobierno de Bahrein: i) que comunique más información sobre las medidas adoptadas para cumplir los compromisos que figuran en los Acuerdos tripartitos de 2012 y 2014, firmados bajo los auspicios de la OIT, en relación con la solución de los casos en los que se impusieron suspensiones, despidos y varias formas de sanciones a los miembros y dirigentes de los sindicatos tras los eventos de 2011 y para asegurar que todos los casos pendientes en el marco de los Acuerdos tripartitos de readmisión de los trabajadores que fueron despedidos y de sus indemnizaciones y que ii) garantice que su marco legal se ajusta a los requisitos del Convenio, en particular, en cuanto a la definición y prohibición formal de discriminación directa e indirecta respecto de todos los motivos previstos en el Convenio y acoso sexual; iii) garantice que los trabajadores migrantes y los trabajadores domésticos estén cubiertos por la protección prevista en la legislación contra la discriminación, y iv) que derogue todas las disposiciones que suponen una traba para la contratación y el empleo de las mujeres.

La Comisión toma nota de que, durante la discusión mantenida en junio de 2018, el Gobierno aceptó la solicitud de la Comisión de la Conferencia (formulada en junio de 2017) de una misión de contactos directos, que tuvo lugar entre el 15 y el 19 de septiembre de 2018. La Comisión toma nota de que, tras la visita realizada por la misión de contactos directos, el Gobierno envió una comunicación a la OIT con la información actualizada en cuanto a la aplicación de los Acuerdos tripartitos de 2012 y 2014 y copias de los proyectos de enmiendas y reglamentos presentados al Gabinete, como solicitado por la misión de contactos directos.

I. Medidas adoptadas para cumplir los compromisos que figuran en los Acuerdos tripartitos de 2012 y 2014

Artículo 1 del Convenio. Discriminación por motivos de opinión política. La Comisión recuerda que en la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2011), algunos delegados trabajadores de la Conferencia presentaron una queja, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT relativa a la inobservancia por Bahrein del Convenio. Según la queja, en febrero de 2011, se impusieron suspensiones y sanciones de diversos tipos, incluidos despidos, a los miembros y dirigentes, como consecuencia de manifestaciones pacíficas en las que se exigían cambios económicos y sociales en apoyo a la democratización y la reforma en curso. En la queja se alegaba que estos despidos (aproximadamente 4 600) habían tenido lugar debido a las opiniones, las creencias de los trabajadores y su afiliación sindical. En su 319.ª reunión (octubre de 2013), el Consejo de Administración acogió con satisfacción un Acuerdo tripartito, concluido en marzo de 2012 por el Gobierno, la GFBTU y la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein (BCCI). En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración saludó la adopción de un Acuerdo tripartito complementario, concluido en marzo de 2014, sobre la solución final del caso de los trabajadores despedidos. En consecuencia, la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT fue archivada y el Consejo de Administración invitó a la Comisión a hacer un seguimiento de la aplicación de los Acuerdos tripartitos, en particular con respecto a los 165 casos de despido pendientes (según la lista adjunta al Acuerdo tripartito complementario de 2014) y a examinar la aplicación del Convenio por el Gobierno.

En su memoria de 2017, presentada en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, el Gobierno explicó que todos los casos de trabajadores despedidos a raíz de los hechos de febrero de 2011 habían sido resueltos satisfactoriamente gracias a la cooperación a nivel nacional entre los interlocutores sociales. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según las observaciones de la CSI, seguían pendientes de resolución 64 casos de despido relacionados con dichos acontecimientos. Al tiempo que tomaba nota de que la GFBTU, que es parte en los Acuerdos tripartitos, no había enviado su observación confirmando la plena aplicación del acuerdo arriba mencionado, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara pruebas de que los casos de 165 trabajadores despedidos mencionados por nombre en la lista adjunta al Acuerdo tripartito de marzo de 2014, habían sido resueltos satisfactoriamente para las partes.

En su última memoria, el Gobierno hace hincapié en los esfuerzos realizados por el comité tripartito con miras a solucionar los casos de los trabajadores despedidos a consecuencia de los eventos de 2011. El Gobierno señala que tan sólo nueve casos (de los 4 600 iniciales) siguen pendientes, pero que están a punto de ser resueltos. El Gobierno proporciona una explicación detallada de las medidas adoptadas en este sentido en cooperación con la GFBTU. La Comisión toma nota de que esta información fue comunicada también a la misión de contactos directos durante su reunión con los funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social (MLSD). En lo que se refiere al «certificado de rehabilitación», mencionado en el comentario anterior de la Comisión, el Gobierno señala que la obtención de dicho

certificado no es una condición previa para el empleo ni es necesaria para beneficiarse de los servicios del Gobierno en materia de formación y colocación, sino que es un documento expedido por los tribunales a los trabajadores — cuando éstos así lo solicitan — que han sido condenados por los tribunales, han cumplido su sentencia y expresan el deseo de solicitar una vez más un empleo en el sector público.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, tanto la GFBTU como la CSI alegan que hay más de los nueve casos pendientes mencionados por el Gobierno. Estas dos organizaciones sostienen que, de los 64 casos que estaban pendientes en 2017, en el momento de presentar sus observaciones y de reunirse con la misión de contactos directos (septiembre de 2018), sigue habiendo 55 casos pendientes. Ambas organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que, aparte de los 55 casos pendientes alegados, siguen pendientes de solución otras cuestiones en relación con la aplicación de los Acuerdos tripartitos en relación con: i) el hecho de que si bien en virtud de los Acuerdos tripartitos los trabajadores despedidos tienen derecho a ser readmitidos a sus empleos en sectores y descripciones similares a las que tenían antes de ser despedidos, en la práctica esta medida no siempre se respeta. Para ilustrar estos alegatos, la GFBTU y la CSI proporcionan ejemplos concretos, como el caso de un conductor de empresa que fue readmitido a un empleo en calidad de operador de carretilla elevadora; o el de un dirigente sindical que se había desempeñado anteriormente como ingeniero y que ahora trabajaba en el servicio de mantenimiento; ii) los casos que apenas podrían considerarse como una verdadera aplicación de los Acuerdos tripartitos: por ejemplo, algunos trabajadores que han sido presionados para aceptar su jubilación anticipada o para convertirse en trabajadores autónomos, y otros trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente poco después de ser readmitidos; iii) los casos en los que los trabajadores han sido despedidos porque pesan sobre ellos acusaciones de delitos penales (lo que va en contra de la legislación de Bahrein, según la cual únicamente un veredicto de culpabilidad tras un juicio penal puede justificar la terminación de la relación de trabajo) y que, tras haber sido absueltos, siguen esperando a ser readmitidos en sus empleos, y iv) la falta de una auténtica compensación por el lucro cesante que han dejado de percibir desde su despido y por el pago de sus cuotas a la seguridad social durante el período entre el despido y la incorporación a sus puestos o por la aceptación de la indemnización económica a cambio de su readmisión (con la excepción de los casos de la BCCI y de la Universidad de Bahrein en los que los trabajadores despedidos fueron plenamente indemnizados). Por último, ambas organizaciones señalan que, tras la firma del Acuerdo tripartito de 2014, se han producido 17 nuevos casos de despido, sobre la base de los mismos motivos que en 2011 (opinión política, creencia y afiliación sindical).

La Comisión toma nota de que, en el curso de su última reunión con la misión de contactos directos, la GFBTU se mostró dispuesto a reconocer que algunos de los 55 casos estaban a punto de ser resueltos. No obstante, la GFBTU destacó que sólo podría realizar una verdadera evaluación de algunos de estos casos una vez que hubiera transcurrido un período de tres meses desde la readmisión de los trabajadores a sus puestos y siempre y cuando éstos confirmen que están satisfechos con los acuerdos concluidos. En lo que se refiere a los nueve casos mencionados por el MLSD como únicos casos pendientes, la Comisión toma nota de la información relativa a las últimas iniciativas del MLSD para la resolución de cinco de estos casos. Toma nota además de que la GFBTU señaló su voluntad de seguir examinando con el MLSD la lista de 55 casos, siempre y cuando se haga lo posible para resolver los cuatro casos pendientes de los nueve reconocidos por el MLSD, teniendo presente que en estos cuatro casos se trata de antiguos funcionarios del Gobierno que no fueron condenados por ningún delito. Además, la GFBTU destacó que, en los casos que no han sido resueltos, las consecuencias para los trabajadores y sus familias han sido graves (puesto que éstos han dejado de percibir remuneración periódica alguna desde 2011 y, en algunos casos no tienen posibilidad de encontrar un nuevo empleo por haber sido incluidos en una «lista negra»). La GFBTU manifestó la esperanza de que los asuntos pendientes podrían resolverse eficazmente en enero de 2019. De la información que figura en el informe de la misión de contactos directos, la Comisión toma nota de que los mandantes tripartitos de Bahrein han hecho denodados esfuerzos por resolver los casos pendientes enumerados en los Acuerdos tripartitos de 2012 y 2014 y que, en consecuencia, hay muy pocos casos pendientes. No obstante, señala que el recuento de número de casos pendientes sigue siendo objeto de controversia entre el Gobierno (nueve) y la GFBTU (55), y que la misión de contactos directos reconoció que todos y cada uno de estos casos pendientes es importante por el impacto que ha tenido en los trabajadores afectados y en sus familias. La Comisión toma nota asimismo de que tanto el Gobierno como la GFBTU han manifestado su compromiso para llegar a un acuerdo sobre el número de casos pendientes y para resolverlos. ***Al tiempo que saluda este compromiso, la Comisión pide a ambas partes redoblar sus esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre el número de casos pendientes y resolverlos de conformidad con los Acuerdos tripartitos, en particular con respecto a la indemnización y el abono de las prestaciones de cobertura de la seguridad social por el período de servicio interrumpido. La Comisión insta firmemente al Gobierno y a la GFBTU a que pongan fin a los casos pendientes de un modo constructivo, pragmático y flexible sin demora a fin de avanzar y abordar otras cuestiones acuciantes para los mandantes tripartitos. Tomando nota de que en los Acuerdos tripartitos de 2012 y 2014 figura el compromiso de los mandantes tripartitos de «promover el diálogo social e institucional mediante el fortalecimiento de los mecanismos tripartitos vigentes de conformidad con la legislación nacional, así como con los principios y normas internacionales» con miras a «fortalecer las relaciones productivas y avanzar en el diálogo social», la Comisión tiene a bien señalar que los Acuerdos tripartitos ofrecen una oportunidad no sólo para resolver los casos individuales, sino también para profundizar en el diálogo social constructivo, que se ha visto impedido desde 2011.***

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara sus observaciones sobre los alegatos de la Internacional de la Educación (IE) y la Asociación de Maestros de Bahrein (BTA), según los cuales, tras despedir a diversos docentes que habían participado en las manifestaciones pacíficas durante los eventos de 2011, el

Ministerio de Educación (MoE) contrató a unos 9 000 docentes expatriados procedentes de los Estados árabes, a raíz de lo cual se han generado dos niveles para la fuerza de trabajo docente, en virtud de los cuales los docentes expatriados se benefician de mejores condiciones que los nacionales. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, esta información es errónea puesto que el MoE ha readmitido los pocos trabajadores despedidos. Además, el Gobierno señala que el MoE sigue publicando sus vacantes, lleva a cabo los exámenes y entrevistas necesarios y emplea a sus propios ciudadanos como una prioridad, en virtud de la política nacional de «indigenización» de la mano de obra en el sector público en general y del empleo en la enseñanza en particular (Perspectivas económicas para Bahrein en 2030). El empleo de docentes expatriados se limita a especializaciones de las que carecen los licenciados de origen nacional y cada año el Gobierno asigna una partida considerable de su presupuesto a formar a sus trabajadores nacionales para que reemplacen progresivamente a los docentes expatriados. Como consecuencia de ello, en los últimos años, todos los docentes que se han visto beneficiados por promociones y ascensos son ciudadanos del país; y, en consecuencia, un 100 por ciento de los cuadros superiores y medios, directores y funcionarios superiores del MoE son nacionales del país. Sobre este particular, el Gobierno llama también la atención de la Comisión sobre el hecho de que la BTA se disolvió en 2011 y pone en cuestión la credibilidad de cualquier información suministrada por esta asociación. Además, la Comisión toma nota de la información proporcionada a la misión de contactos directos durante su reunión con los funcionarios del MoE, según la cual de un total de 25 000 trabajadores (en el sector público), no fueron despedidos más de 70 docentes y, al día de hoy, todos ellos han sido readmitidos tras abonarles las indemnizaciones completas correspondientes (pagos atrasados y prestaciones de la seguridad social desde la fecha de su despido). Hay cuatro casos en los que no se ha readmitido a los docentes interesados debido a que tenían antecedentes penales y la responsabilidad correspondiente a su gestión corresponde a la Oficina de la Función Pública (CSB). Durante su reunión con la misión de contactos directos, la Oficina de la Función Pública confirmó que los 180 docentes que fueron despedidos en 2011 fueron readmitidos con todos sus derechos y prestaciones; los cuatro casos de despido pendientes no están vinculados con los acontecimientos registrados en 2011 sino con otros motivos (principalmente mala conducta), y remitió a la misión de contactos directos al artículo 25, 1), g), de la Ley de la Función Pública (motivos para la terminación de la relación de trabajo), en la que se establece lo siguiente: «Podrá ponerse fin a la relación de trabajo de un empleado público por los siguientes motivos: [...] Separación del servicio motivado por una medida disciplinaria o en aplicación de una sentencia judicial.». La Comisión toma nota de que, durante su reunión con la GFBTU, ésta comunicó a la misión de contactos directos que 15 docentes afiliados a la BTA fueron despedidos a raíz de los acontecimientos de 2011, y que cinco de ellos, incluido el vicepresidente, no han sido aún readmitidos ni tampoco informados sobre los progresos de sus casos y, en consecuencia, no han podido ejercer su empleo en escuelas privadas por no haber obtenido autorización del MoE. Además, informó a la misión de contactos directos que los profesores despedidos eran con frecuencia reemplazados por docentes que habían sido naturalizados recientemente como ciudadanos de Bahrein. ***La Comisión pide, en consecuencia, al Gobierno que comunique sus comentarios sobre estos alegatos, en particular si las trabas con las que tropiezan los trabajadores despedidos tienen algún tipo de relación con el hecho de que no se conceda el «certificado de rehabilitación».***

En relación con la discriminación basada en opiniones políticas, la Comisión toma nota de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el informe inicial de Bahrein sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las cuales el Comité expresa su preocupación por el hecho de que, pese a reconocer la necesidad del Estado parte de adoptar medidas para luchar contra los actos de terrorismo, la Ley sobre la Protección de la Sociedad contra Actos de Terrorismo (ley núm. 58/2006) establece una definición desmesuradamente amplia de terrorismo que es susceptible de ampliar la interpretación de este concepto, que puede dar lugar a violaciones del derecho de libertad de expresión y reunión. La Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por las denuncias de una aplicación extensiva de la ley al margen del ámbito de aplicación del concepto de terrorismo, en particular contra los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos (documento CCPR/C/BHR/CO/1, 26 de julio de 2018, párrafo 28). Tomando nota de que estas mismas preocupaciones fueron mencionadas por la GFBTU durante sus reuniones con la misión de contactos directos y de que la CSI señala en su observación que la Oficina de la Función Pública emitió recientemente una circular en la que se contemplan medidas disciplinarias, incluido el despido, para cualquier trabajador «que abuse de los medios de comunicación sociales», la Comisión desea recordar que la protección contra la discriminación basada en la opinión política en virtud del Convenio implica la protección en las actividades encaminadas a expresar o demostrar oposición a opiniones y principios políticos preestablecidos; también abarca la discriminación basada en la afiliación política. La protección de la opinión política se aplica a opiniones expresadas o demostradas, pero no en los casos en que se empleen métodos violentos (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 805). ***La Comisión pide al Gobierno que garantice que la aplicación en la práctica de la ley núm. 58/2006 no vulnera el derecho a ser protegido contra la discriminación basada en motivos de opinión política, y que la mantenga informada de cualquier evolución legislativa a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que especifique la naturaleza del delito de «abuso de los medios de comunicación sociales», mencionado por la CSI, con miras a velar por que la opinión política no entre dentro de la esfera de competencias de la nueva circular.***

II. Medidas para garantizar que el marco jurídico de Bahrein se ajusta a lo dispuesto en el Convenio

La Comisión recuerda que desde la ratificación del Convenio en 2000, viene solicitando al Gobierno que implemente reformas legislativas.

La Comisión también toma nota de que, tras la misión de contactos directos, el Gobierno envió al director de la misión de contactos directos y a la OIT los proyectos de enmiendas propuestas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio. Estas propuestas se examinan a continuación, en relación con los artículos correspondientes del Convenio.

Artículo 1, 1), a), y 3). Motivos de discriminación y aspectos del empleo y de la ocupación. Ley del Trabajo en el Sector Privado. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que la Ley del Trabajo en el Sector Privado, de 2012 (ley núm. 36/2012) no se aplica a «los trabajadores domésticos y personas consideradas como tales, incluyendo los trabajadores agrícolas, los guardias de seguridad, las niñeras, los chóferes y los cocineros» que trabajan para el empleador o los miembros de su familia (artículo 2, b)). La Comisión subrayó también que los artículos 39 (discriminación salarial) y 104 (terminación de la relación de trabajo considerada discriminatoria) de la Ley del Trabajo en el Sector Privado no incluyen la raza, el color (sólo mencionados en el artículo 39), la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social en la lista de motivos prohibidos de discriminación. En consecuencia, la Comisión reiteró su solicitud al Gobierno de que adopte las medidas necesarias para incluir en la Ley del Trabajo en el Sector Privado una definición de discriminación, así como una prohibición de la discriminación directa e indirecta que cubra a todos los trabajadores, sin distinción alguna, con respecto a todos los motivos previstos en el Convenio, incluido el color; en relación con todos los aspectos del empleo, incluido el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y ocupaciones particulares, y las condiciones de empleo, y de que proporcione información sobre cualquier evolución a este respecto. La Comisión toma nota igualmente de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas mencionadas anteriormente.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su declaración de que no se han presentado quejas sobre discriminación en el empleo y la ocupación contra nacionales o expatriados basadas en motivos de religión, origen étnico, color, creencia o afiliación, y que el marco jurídico vigente (Constitución, Ley del Trabajo en el Sector Privado, Ley de la Función Pública y Código Penal) ha establecido garantías constitucionales encaminadas a alcanzar la justicia, la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, en 2017, el Gobierno decidió tener a bien examinar las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de Aplicación de Normas y empezó una revisión de la legislación del trabajo y ha elaborado unas propuestas de enmiendas para presentarlas a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que, en virtud del enunciado de las enmiendas propuestas, si éstas fueran promulgadas, se incorporará un nuevo artículo — artículo 2 *bis* — en la Ley del Trabajo en el Sector Privado que dice lo siguiente: «Por el presente artículo se prohíbe la discriminación basada en motivos de sexo, origen étnico, lengua, religión o creencia contra los trabajadores a los que amparan las disposiciones de esta ley»; y se modificará ligeramente el actual artículo 185 para remitirlo al artículo 2 *bis* del modo siguiente: «Se sancionará con una multa mínima que oscila entre 200 dinares [aproximadamente 530 dólares de los Estados Unidos] y un máximo de 500 dinares [aproximadamente 1 326 dólares de los Estados Unidos] al empleador o su representante que vulnere cualquiera de las disposiciones especificadas en el artículo 2 *bis*». La Comisión toma nota de que estas dos nuevas disposiciones introducirán una protección explícita contra la discriminación en el empleo de los trabajadores domésticos y de otros similares. No obstante, la Comisión toma nota también de que estas enmiendas no son suficientes para las reformas legislativas que cabe esperar. Así, la Ley del Trabajo en el Sector Privado, en su versión enmendada, sigue sin contemplar: i) una definición integral de discriminación; ii) una prohibición de discriminación directa e indirecta; iii) una protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación sobre la base de los siete motivos establecidos en el Convenio (incluyendo raza, color, opinión política, ascendencia nacional y origen social), y iv) una protección que se amplíe a todos los aspectos del empleo y de la ocupación particular (incluido el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y ocupaciones particulares, los términos y las condiciones de empleo). La Comisión toma nota de que la nueva redacción del artículo 185 especifica las sanciones en las que incurre un empleador o su representante, por haber discriminado a un trabajador, pero no indica las sanciones previstas en el caso de que el trabajador sea víctima de discriminación de la parte de un colega, y el proyecto no se pronuncia sobre los recursos que tiene la víctima a su alcance.

Función pública. La Comisión reitera su comentario anterior respecto a que los trabajadores del sector público están cubiertos por una instrucción sobre la función pública núm. 16/2016, que prohíbe la discriminación únicamente por motivos de género, origen étnico, edad o religión, así como su petición al Gobierno de que adopte las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios públicos gocen de protección adecuada en la práctica contra la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación en relación con todos los motivos previstos en el Convenio. La Comisión toma nota con **preocupación** de que la memoria del Gobierno no se pronuncia sobre este punto y que las enmiendas propuestas comunicadas a la OIT, el 11 de octubre de 2018, se limitan a la Ley del Trabajo en el Sector Privado y no afectan a la instrucción sobre la función pública núm. 16/2016 que tampoco está conforme al Convenio. La Comisión desea reiterar una vez más que disponer de definiciones claras y detalladas de la discriminación en el empleo y la ocupación es crucial para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 743). La Comisión desea también subrayar que la ausencia de quejas no es un indicador de la ausencia de

discriminación en la práctica. Indica más bien la falta de un marco jurídico apropiado, la falta de consciencia sobre los derechos y de confianza en el acceso práctico a procedimientos jurídicos, la ausencia de los mismos o el miedo a represalias. En este sentido, la Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la misión de contactos directos estimó que en el país hay un escaso nivel de sensibilidad en cuanto al procedimiento para aplicar las prohibiciones en materia de discriminación y a las soluciones disponibles. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de Bahrein, de 26 de junio de 2018, lamentó que no exista en el país una legislación integral contra la discriminación que cubra todos los motivos prohibidos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y expresó su preocupación por la falta de información y de soluciones efectivas para las víctimas de discriminación (documento CCPR/C/BHR/CO/1, párrafo 14). **En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que modifique la Ley del Trabajo en el Sector Privado y la Ley de la Función Pública (instrucciones sobre la función pública núm. 16/2016 y decreto legislativo núm. 48 de 2010), a fin de incorporar una definición integral de discriminación sobre todas las formas de discriminación de conformidad con lo previsto en el Convenio y a que acepte todas las recomendaciones formuladas por la misión de contactos directos de que las reformas legales en curso velen por que ambas leyes: i) contengan una definición integral de discriminación que incluya la discriminación directa e indirecta y cubra los siete motivos enumerados en el Convenio; ii) cubran todas las categorías de trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, puesto que el Convenio no limita su ámbito de aplicación a ningún individuo ni sector de actividad; iii) protejan contra la discriminación en todas las formas de empleo y ocupación, incluido el acceso a la formación profesional, el empleo y a ocupaciones particulares, y las condiciones de empleo, y iv) especifiquen las soluciones disponibles para las víctimas de discriminación.**

Discriminación basada en motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que había hecho referencia a la necesidad de definir y prohibir expresamente el acoso sexual en el empleo y la ocupación a fin de que abarque ambas formas de acoso sexual: i) (*quid pro quo*) cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo, que afecta la dignidad de las mujeres y de los hombres, el cual es no deseado, irrazonable y ofensivo para el destinatario; el rechazo de una persona, o la sumisión a ella, siendo este comportamiento utilizado, explícita o implícitamente, como el fundamento de una decisión que afecta el trabajo de esa persona, o ii) (entorno de trabajo hostil) un comportamiento que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el destinatario. La Comisión toma nota de que en sus conclusiones de 2018, la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que garantice que el acoso sexual esté explícitamente prohibido en la legislación civil o laboral y que se den los pasos necesarios para establecer medidas preventivas. La Comisión toma nota de que, en un esfuerzo por garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones del Convenio en este sentido, el Gobierno pidió la asistencia técnica de la OIT, el 23 de julio de 2018, y que la Oficina proporcionó al MLSL dicha asistencia el 13 de agosto de 2018. La Comisión toma nota de que, una de las enmiendas presentadas a la OIT tras la misión de contactos directos, aborda la cuestión del acoso sexual en el trabajo. El artículo 192 *bis* afirma que: «Se impondrá una pena de prisión de un máximo de un año y una multa máxima de 100 dinares [aproximadamente 265 dólares de los Estados Unidos] a todo trabajador que, en el ámbito del empleo o por motivos vinculados a éste, acose sexualmente a un compañero o compañera mediante un gesto, una conducta verbal o física o por otros medios. Podrá imponerse una pena de prisión por un mínimo de seis meses y una multa que oscila entre un mínimo de 500 dinares [1 326 dólares de los Estados Unidos] y un máximo de 1 000 dinares [2 653 dólares de los Estados Unidos], cuando este delito sea cometido por un empleador o por su representante.». La Comisión toma nota de que aunque la nueva disposición prohíbe formalmente el acoso sexual en la legislación laboral (además de en el Código Penal), y establece las sanciones en caso de infracción grave, no incluye ninguna definición clara de acoso sexual y sólo se refiere a casos en los que el trabajador o la trabajadora sea objeto de acoso sexual por un compañero y no cuando el perpetrador es un representante del empleador o un cliente. Una vez más la Comisión destaca que, sin una definición clara de acoso sexual en el empleo, sigue siendo dudoso que la legislación aborde efectivamente todas las formas de acoso sexual, tanto el que se asimila al chantaje (*quid pro quo*) como el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 791). **Recordando una vez más que el acoso sexual es una grave manifestación de discriminación sexual y una violación de los derechos humanos, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para incorporar una definición de acoso sexual tanto en la Ley del Trabajo en el Sector Privado como en la Ley de la Función Pública, y a que proporcione acceso a soluciones efectivas. Con miras a evaluar la naturaleza disuasoria de las sanciones en la práctica, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la relación entre el monto de las multas impuestas y el salario promedio. Pide asimismo al Gobierno que adopte medidas prácticas para prevenir y combatir el acoso sexual en el empleo y la ocupación, como por ejemplo organizar campañas de sensibilización sobre la materia, alentar la formación de los cuadros directivos sobre prevención del acoso basado en motivos de sexo, o invitar a los empleadores a establecer políticas y procedimientos formales para abordar el acoso sexual, y a que comuniquen información detallada a este respecto.**

Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información detallada comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación y pidió al Gobierno que comunicara información sobre el impacto de cada una de estas medidas en el aumento del número de mujeres que ocupan cargos de liderazgo y sobre su situación en el mercado de trabajo, en particular en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, así como información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, desglosada por sector, categoría profesional y cargo tanto en el sector público como en el privado, y sobre el número de

hombres y de mujeres que reciben formación profesional. La Comisión toma nota de que la información suministrada por el Gobierno a este respecto no responde a su petición de información sobre el impacto práctico de las medidas tomadas, sino que se limita a repetir la información y las estadísticas comunicadas por el Gobierno en su memoria anterior. En este sentido, la Comisión toma nota de la información recopilada por la misión de contactos directos durante sus reuniones, en particular con el MoE y el Consejo Supremo de la Mujer, que evidenciaron el lugar que ocupa el sistema educativo de Bahrein en la clasificación mundial con la tasa de alfabetización femenina más elevada de toda la península arábiga (97 por ciento de las niñas están matriculadas en la escuela primaria y 91 por ciento asisten a escuelas de enseñanza secundaria) y con uno de los índices más elevados de paridad de género en la universidad de toda la región. La Comisión toma nota del resultado del Foro Económico Mundial, el Índice mundial de disparidad entre los géneros (que mide la disparidad relativa entre hombres y mujeres en cuatro áreas principales: salud, educación, economía y política), que indica que, en 2015, Bahrein era el país de toda la región de Oriente Medio y norte de África que más había mejorado atendiendo al subíndice de participación económica y oportunidades [de las mujeres]. La Comisión toma nota también de que en su informe de 2017, el Foro Económico Mundial clasificó a Bahrein como el país de la región con mejores resultados en este sentido (junto con Túnez y los Emiratos Árabes Unidos). La Comisión toma nota, además, del cuarto informe periódico del Gobierno (documento CEDAW/C/BHR/4) presentado por Bahrein, en marzo de 2018, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, y la explicación detallada de las medidas adoptadas por el país para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo de las mujeres. La Comisión toma nota de que, aunque las mujeres bahreíníes han hecho grandes progresos y están bien calificadas, sigue sin ser fácil para ellas acceder a puestos directivos en el sector privado. Las mujeres comprenden únicamente el 39 por ciento de la totalidad de la fuerza de trabajo y se concentran principalmente en puestos directivos bajos y medios. En este sentido, la Comisión toma nota de las preocupaciones que el Comité de Derechos Humanos se plantea sobre la persistencia de estereotipos patriarcales en relación con el papel de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad del país, y sobre el hecho de que las mujeres no estén suficientemente representadas en la vida política y pública, en particular en la toma de decisiones, a pesar de las medidas adoptadas para promover la igualdad de género (párrafo 20). ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas proactivas adoptadas o previstas para corregir las causas subyacentes y las desigualdades de hecho resultantes de la discriminación profundamente enraizada en los valores tradicionales y sociales. Eso debería incluir información sobre, por ejemplo los programas de formación y entrenamiento especial destinados a mujeres trabajadoras para que adquieran las competencias necesarias para acceder a puestos directivos, medidas destinadas a conciliar las responsabilidades laborales y familiares y evitar que se refuercen los estereotipos relativos al papel de las mujeres y los hombres en la sociedad y en la familia mediante la ampliación a los hombres de las medidas que actualmente sólo van destinadas a las mujeres (por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial, el permiso sin sueldo para cuidar de un niño o de un familiar dependiente, el permiso remunerado en caso de muerte del marido de una mujer trabajadora). Reiterando que la aplicación efectiva del Convenio es un proceso en marcha que exige un ciclo constante de evaluación, acción, supervisión y posterior evaluación y ajuste, en particular para abordar nuevas cuestiones y dificultades, la Comisión reitera su solicitud de información sobre el impacto de todas las medidas e iniciativas adoptadas con el fin de aumentar el número de mujeres en puestos directivos y su situación en el mercado de trabajo, en particular en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.***

Artículo 3, c). Trabajadores migrantes. La Comisión reitera que pidió al Gobierno que suministrara sus comentarios sobre los alegatos de la CSI en relación con el programa de trabajo «flexible» introducido recientemente y el sistema de patrocinio, al que se denomina *kafala*, y reiteró su solicitud previa al Gobierno para que transmitiera información sobre las medidas específicas adoptadas para asegurar la protección efectiva de todos los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos, contra la discriminación por todos los motivos especificados en el Convenio. La Comisión pidió además al Gobierno que velara por que todas las normas adoptadas para regular el derecho de los trabajadores migrantes a cambiar de empleador no impongan unas condiciones o limitaciones que puedan aumentar la dependencia de los trabajadores migrantes de sus empleadores, haciéndoles así más vulnerables a las prácticas abusivas y discriminatorias. Le pidió además que comunicara información sobre la naturaleza y el número de casos, desglosados por sexo, ocupación y país de origen, en los que el empleador o la Autoridad de Reglamentación del Mercado de Trabajo (LMRA) no autoricen el traslado a otro empleador, con qué motivos.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de que el marco jurídico establece una protección legal a todos los trabajadores migrantes con respecto a la reglamentación de las relaciones laborales y garantiza el derecho de todas las partes, incluida la protección contra la discriminación en el empleo y las ocupaciones. El Gobierno afirma que los órganos competentes realizan esfuerzos denodados por supervisar la aplicación efectiva de la ley y proporcionan servicios de apoyo específicamente destinados a proteger a los trabajadores migrantes, como: i) procedimientos para presentar quejas personalizadas al MLSD con el fin de llegar a un acuerdo amistoso; ii) creación de puntos de contacto directo con la LMRA para los trabajadores migrantes en varios idiomas; iii) la publicación, en cooperación con las embajadas, de material de sensibilización en 14 idiomas diferentes; iv) reconocimiento del derecho de un trabajador migrante al traslado de un empleador a otro sin el consentimiento del empleador actual (25 000 autorizaciones en 2017); v) introducción de sistemas de permiso de trabajo flexible (*flexi*) a partir de mediados de julio de 2017; vi) el acceso a un plan de seguro de desempleo; vii) el derecho de representación en los sindicatos y federaciones; viii) la distribución gratuita de tarjetas SIM para mantener a los trabajadores informados en su idioma de todas las novedades relativas a sus permisos de trabajo y situación jurídica; ix) introducción de un «sistema nacional de remisión de casos para las víctimas de trata de personas»;

x) creación de un lugar de acogida para apoyar y proteger a los trabajadores migrantes en situación difícil, y xi) reuniones periódicas con las embajadas del país de origen de los trabajadores migrantes, etc. En lo que se refiere a la sensibilización de los trabajadores migrantes sobre sus derechos, el Gobierno reitera que esta responsabilidad no es una competencia exclusivamente suya, sino que también deberían tomar parte en ello las embajadas de los países de origen, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en relación con las comunidades extranjeras, tales como centros culturales y sociales. En relación con la declaración de la CSI de que la LMRA sigue autorizando a los empleadores a incluir una cláusula en el contrato de empleo de los trabajadores que limita la autorización de traslado a otro empleador por un período determinado, el Gobierno afirma que al trabajador le ampara ya el derecho a la libertad de traslado a otro empleador y que la LMRA no tiene en cuenta ninguna condición establecida en un contrato de empleo que limite el ejercicio de dicho derecho por el trabajador. En cuanto a los casos en los que el trabajador migrante se ha visto sometido a prácticas abusivas por parte de su empleador, este trabajador podrá solicitar el traslado sin tener que cumplir las condiciones establecidas y los plazos legales. Además, el Gobierno señala que hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de este tipo ante la LMRA. En respuesta a la mención de la CSI al sistema de patrocinio o *kafala* y a la naturaleza de la relación contractual entre un trabajador migrante y un empleador, el Gobierno señala que la cuestión de vincular el permiso de trabajo con un empleador específico es una cuestión de orden reglamentario y una práctica en curso en numerosos países del mundo. El Gobierno considera que no guarda relación con la discriminación ni contraviene los principios consagrados en el Convenio. Además, solicitar al trabajador migrante que proporcione documentos que prueben su identidad personal, como un pasaporte o cualquier otro documento, es una medida procedimental necesaria. Cuando se da el caso de que un trabajador migrante no disponga de un pasaporte por la razón que sea, esta situación se resuelve gracias a la colaboración con la embajada de su país de origen. El Gobierno señala que los trabajadores migrantes están también autorizados a recibir formación teórica y práctica de acuerdo con las necesidades del empleador. En lo que se refiere a la solicitud de la Comisión de que el Gobierno proporcione información sobre la naturaleza y el número de casos en los que no se autoriza el traslado a otro empleador y sobre los motivos que justifican esta negativa, el Gobierno señala que el sistema electrónico, en el que se registran las solicitudes de traslado, no acepta el registro de solicitudes que no cumplan con las condiciones y normas establecidas en la ley. El Gobierno reitera que, además de los mecanismos formales para la presentación de quejas (la inspección del trabajo o los tribunales), los trabajadores migrantes pueden recurrir a sus embajadas, así como a los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil como, por ejemplo, el Comité Nacional de Derechos Humanos. El Gobierno afirma también que el MLSD presta una gran atención a la formación de los inspectores del trabajo y, en la actualidad, está examinando la posibilidad de crear una unidad especializada en discriminación. En lo que atañe a la introducción de un programa piloto que ponga en práctica un permiso de trabajo «flexi» con el que los trabajadores migrantes pueden trabajar sin un patrocinador (a condición de cubrir ciertos costos), el Comité toma nota de la justificación detallada proporcionada por el Director General de la LMRA a la misión de contactos directos, según la cual el permiso «flexi» tiene la finalidad de responder a los cambios económicos en el país (y en todo el mundo) y a la demanda cada vez mayor de trabajadores ocasionales, a tiempo parcial y estacionales. Este programa piloto es un intento de abandonar el sistema de patrocinio y las amnistías periódicas, que no han resuelto el problema de los trabajadores migrantes en situación irregular. Al introducir el permiso «flexi», la LMRA está tratando de afrontar de un modo distinto el problema de los trabajadores indocumentados. Según la LMRA, los trabajadores indocumentados trabajan a menudo por cuenta propia o de forma independiente y, así pues, compiten con los trabajadores en situación regular y con las pequeñas empresas, puesto que constituyen una mano de obra barata y flexible. El Gobierno señala que, en virtud de este nuevo plan, un trabajador migrante que disponga de un permiso de trabajo «flexi» puede ser empleado en el mercado de trabajo y está sujeto a todas las leyes que regulan la relación de trabajo entre un empleador y un trabajador, como la Ley del Trabajo en el sector privado. Este nuevo sistema autoriza a que un trabajador migrante que trabaja en condiciones injustas pueda hacer una solicitud a título independiente para un permiso que le permita a él o a ella trabajar sin estar ligado a un empleador en particular, con arreglo a la legislación, y evitar así la explotación. Un trabajador migrante goza de libertad para elegir si desea registrarse con un sistema de permiso de trabajo «flexi» o con un permiso de trabajo normal, al tiempo que se beneficia de la libertad de trasladarse a otro empleador.

La Comisión toma nota de las observaciones de la GFBTU y de la CSI en relación con la situación de los trabajadores migrantes en Bahrein, así como de la información suministrada por la Sociedad de Protección de los Trabajadores Migrantes (MWPS) a la misión de contactos directos. La CSI reitera que los trabajadores migrantes representan alrededor del 77 por ciento de la fuerza de trabajo en Bahrein y que, en su mayoría, realizan trabajos pocos calificados y mal remunerados en los sectores de la construcción, el comercio, la manufactura y en el trabajo doméstico. Están excluidos de una serie de disposiciones de las leyes laborales y de protección social y, en consecuencia, la GFBTU y la CSI alegan que: i) a los trabajadores migrantes se les niegan condiciones de trabajo decentes; ii) trabajan en un entorno insalubre; iii) tienen jornadas laborales excesivamente largas (hasta 19 horas al día con pausas mínimas y sin días de descanso); iv) reciben salarios extremadamente bajos (algunos empleadores pagan un salario promedio de 70 dinares (186 dólares de los Estados Unidos) al mes y, a menudo, alcanzan cifras tan bajas como 50 dinares (92 dólares de los Estados Unidos) al mes, que con frecuencia no se perciben, y v) están excluidos de las prestaciones de la seguridad social, y sólo tienen derecho a seguro por lesiones profesionales. La situación de los trabajadores domésticos y, en particular, de las trabajadoras migrantes se ve agravada por el hecho de que los servicios de la inspección del trabajo excluyen a las casas particulares. Según la CSI, desde abril hasta julio de 2018, aumentó de forma drástica el número de trabajadoras extranjeras en Bahrein que cometieron suicidio. En relación con el permiso de trabajo «flexi», la información suministrada

por la GFBTU, la CSI y la MWPS indican que aunque el plan se estableció inicialmente para ayudar a los trabajadores migrantes a regularizar su situación de residencia, en la práctica la mayoría de ellos están excluidos de dicho plan bien porque: i) los trabajadores calificados, o los que han escapado de empleadores abusivos, los trabajadores domésticos y agrícolas no reúnen las condiciones para el mismo; ii) su costo es prohibitivo (el costo total para un período de dos años alcanza los 1 169 dinares o 3 125 dólares de los Estados Unidos, cuando la mayoría de ellos ganan menos de 200 dinares o 535 dólares de los Estados Unidos al mes), o iii) una de las condiciones para acceder a él es disponer de un pasaporte válido, una condición que la mayoría de los trabajadores migrantes en situación irregular no pueden cumplir, puesto que sus pasaportes les han sido confiscados por su empleador. A la luz de todo lo anterior, la CSI afirma que el objetivo real del sistema de permisos de trabajo «flexi» es reducir el coste de contratación de los trabajadores migrantes y desviar el dinero del mercado negro libre del régimen de visados hacia el Gobierno más que regularizar a los trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular. La CSI hace hincapié asimismo en que, si bien el Gobierno afirma que un trabajador migrante empleado según este programa seguirá disfrutando de todas las prestaciones y derechos establecidos en la Ley del Trabajo en el Sector Privado, sigue sin estar claro qué ley contempla los contratos de trabajo de los trabajadores con permisos «flexi» ni de qué manera esto incide en las protecciones laborales a las que éstos pueden acogerse. La GFBTU agrega que el «Sistema de protección de mejoras salariales» (que exige a los empleadores que ingresen los salarios de los trabajadores en el banco) que el Gobierno puso en marcha para proteger a los trabajadores del sector privado puede beneficiar a los trabajadores de la construcción y otros trabajadores del sector privado, pero no resolverá el problema de la vulnerabilidad a la que se ven abocados los trabajadores domésticos, en particular las empleadas domésticas que no conocen el sistema bancario ni el de transferencias electrónicas, una afirmación que ha sido apoyada por la MWPS. En lo que se refiere a la adopción del «contrato tripartito para los trabajadores domésticos», que regula la relación entre la agencia de colocación, el empleador (dueño del hogar) y el trabajador doméstico migrante, cuya finalidad consiste en evitar la explotación de los trabajadores domésticos se espera que éste ayude a garantizar los derechos de los trabajadores domésticos migrantes. Los empleadores deben firmar por escrito y precisar, entre otros pormenores, la naturaleza del trabajo, las horas de trabajo y los días de descanso semanales y otras condiciones laborales (el alojamiento, la remuneración, el número de personas y edades de los miembros de las familias, etc.). La MWPS explicó a la misión de contactos directos que, sin embargo, en la práctica, este contrato es bipartito, entre la agencia de colocación y el empleador, dado que la mayoría de trabajadores migrantes (en particular los trabajadores domésticos) son analfabetos. En relación con el sistema de patrocinio o *kafala*, tanto la CSI como la GFBTU señalan que, aunque el Gobierno ha afirmado reiteradamente que los trabajadores migrantes en Bahrein no están sometidos al sistema de *kafala* y pueden cambiar de empleo sin autorización de su patrocinador, en la práctica la LMRA sigue autorizando a los empleadores a que incluyan una cláusula en el contrato de empleo por la que se limitan las circunstancias en las cuales la autorización de un traslado a otro empleador se otorga, en particular, al prohibir todo traslado durante los primeros doce meses de servicio con el mismo empleador.

La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar una protección mejor de los trabajadores migrantes en general, y en particular, de los trabajadores domésticos. No obstante, ***lamenta*** que la enmienda propuesta, comunicada por el Gobierno en octubre de 2018, destinada a ampliar explícitamente la plena protección del Convenio a los trabajadores migrantes, no cumpla suficientemente con las expectativas de la Comisión y de la Comisión de la Comisión de Aplicación de Normas, en tanto que la protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación prevista para los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes, no cubre todos los motivos prohibidos explícitamente por el Convenio. ***La Comisión insta firmemente en consecuencia al Gobierno a garantizar que el texto finalmente adoptado cubra todos los puntos enumerados en sus comentarios anteriores en virtud de los artículos 1, 1), a), y 3. La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.***

En relación con el sistema de *kafala*, la Comisión considera que ha de acogerse con satisfacción cualquier avance para desvincular a los trabajadores migrantes del control de un único patrocinador. No obstante, la información suministrada a la misión de contactos directos y a la Comisión sugiere que el plan de permiso flexible no está a la altura de las propias expectativas del Gobierno ni tampoco mejora significativamente la movilidad de los trabajadores migrantes en su conjunto. ***Al tiempo que toma nota de que el sistema de permiso flexible es un plan piloto que será examinado tras un determinado período, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que aborde estas cuestiones y contemple la posibilidad de reducir las tasas y relajar los criterios de admisibilidad para que más inmigrantes puedan acogerse al sistema de permiso flexible. En cuanto a los últimos residuos del sistema de kafala que limita la libertad de movimiento de los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que prohíba restricciones a la libertad del trabajador de cambiar de empleador incluso antes del vencimiento del período de doce meses desde el inicio del contrato y a que le transmita información de todos los avances a este respecto. Entretanto, la Comisión pide al Gobierno suministre información sobre la aplicación del sistema de permiso flexible y de su repercusión sobre la reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a la explotación. Al tiempo que toma nota de que la CSI y la GFBTU cuestionan la eficiencia del sistema de protección de mejoras salariales y el contrato tripartito para los trabajadores domésticos, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de estas dos medidas y que las evalúe periódicamente con el fin de hacer un seguimiento de su incidencia en la reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.***

Artículo 5. Medidas especiales de protección. La Comisión desea recordar que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres pueden clasificarse ampliamente en aquellas que tienen la finalidad de proteger la

maternidad en sentido estricto, que entra en el ámbito de aplicación del artículo 5, y las medidas destinadas a proteger a las mujeres en general por su sexo o género, basándose en percepciones estereotipadas de sus capacidades y del papel que les corresponde en la sociedad, lo que es contrario al Convenio y representa un obstáculo para la contratación y el empleo de las mujeres (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 839). La Comisión reitera que considera que las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener por objeto proteger la seguridad y la salud en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud. Así pues toda restricción al acceso de las mujeres al trabajo que se base en consideraciones vinculadas a su salud y seguridad, si las hubiere, han de estar justificadas y avaladas científicamente y, al aplicarlas, han de ser examinadas periódicamente a luz de los avances tecnológicos y del progreso científico, con miras a determinar si siguen siendo necesarias a efectos de protección. La Comisión destaca también la necesidad de adoptar medidas y llevar a la práctica mecanismos que permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares, en particular, mujeres que siguen soportando de forma desigual la carga de las responsabilidades familiares, que reconcilien sus responsabilidades laborales y familiares. Por consiguiente, en sus comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara medidas para asegurar que las medidas de protección aplicables a las mujeres se limiten a la protección de la maternidad en el sentido estricto, y a que derogue o revoque cualquier disposición que constituya un obstáculo para la contratación y el empleo de las mujeres, como la orden ministerial núm. 16 de 2013 (relativa a las ocupaciones y a las circunstancias en las que está prohibido emplear a mujeres de noche), y el artículo 1 de la orden ministerial núm. 32, de 2013 (que prohíbe el empleo de las mujeres en ciertos sectores y ocupaciones) y pidió al Gobierno que suministrara información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión saluda las enmiendas propuestas comunicadas por el Gobierno en respuesta a la solicitud de la Comisión. El proyecto de enmienda define los trabajos en los que no pueda emplearse a mujeres embarazadas y lactantes. Sin embargo, la Comisión considera que el proyecto de enmienda es demasiado general tanto para las áreas de trabajo como para los agentes a los que se ven expuestas (por ejemplo, en el artículo 1, el texto se refiere a un exceso de calor, sin definir precisamente «exceso»). El texto omite también algunas situaciones, por ejemplo, el ruido, las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ultravioletas, entre otros. En general, el proyecto de enmienda no tiene en cuenta los principios de prevención y protección previstos en los instrumentos de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. ***A la luz de lo anterior, al tiempo que saluda la decisión del Gobierno de proponer modificaciones a las órdenes ministeriales mencionadas más arriba, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT a este respecto antes de adoptar el proyecto de enmienda presentado a la Oficina ya que dicho proyecto es inadecuado. Entretanto, la Comisión pide al Gobierno que revise su enfoque en relación a la restricciones aplicables al empleo de las mujeres a la luz de los principios anteriores para garantizar que todas las medidas de protección adoptadas se limiten estrictamente a la protección de la maternidad en sentido estricto, o basadas en la seguridad laboral y en la evaluación de riesgos para la salud y no constituyan obstáculos a la empleabilidad de las mujeres, en particular a su acceso a puestos con perspectivas y responsabilidades profesionales. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier evolución a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Barbados

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1974)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no existe un marco legislativo que apoye el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Habiendo tomado nota de que los mecanismos existentes de negociación colectiva y los consejos salariales para la determinación de los salarios no parece que promuevan y garanticen efectivamente este derecho, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno relativa al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) el proyecto de política nacional de género, que incluye una sección sobre el empleo, está actualmente siendo revisado por los ministerios pertinentes pero aún no se ha adoptado el proyecto de ley sobre el empleo (prevención de la discriminación). La Comisión recuerda de nuevo la especial importancia de recoger en la legislación el concepto de «trabajo de igual valor» a fin de hacer frente a la segregación de hombres y mujeres en ciertos sectores y ocupaciones debido a los estereotipos de género. ***Habida cuenta de los cambios en curso en materia de legislación y políticas sobre igualdad de género y no discriminación, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se refleje plenamente en el proyecto de política nacional de género y en el proyecto de ley sobre el empleo (prevención de la discriminación), y que transmita una copia de la política y de la nueva ley tan pronto como se hayan adoptado.***

Brecha de ingresos por motivos de género y segregación ocupacional. La Comisión toma nota de que según las estadísticas comunicadas por el Servicio de Estadística de Barbados (encuesta sobre la fuerza de trabajo) de todas las mujeres empleadas en 2015, el 52,4 por ciento ganaban menos de 500 dólares de Barbados (BBD) a la semana en comparación con el 41,8 por ciento de los hombres empleados ese mismo año. Los hombres representaban casi el 56 por ciento de los que ganaban entre 500 BBD y 999 BBD a la semana, y las mujeres sólo el 44 por ciento. Las mujeres representaban el 46,6 por ciento de los

que ganaban entre 1 000 BBD y 1 300 BBD y los hombres el 53,1 por ciento. Los hombres también constituían un poco más de la mitad de los trabajadores (el 52,5 por ciento) del grupo mejor remunerado (más de 1 300 BBD). Asimismo, la Comisión toma nota de que, según la encuesta sobre la fuerza de trabajo de 2015, en la economía existe una persistente segregación ocupacional por motivos de género dado que las mujeres trabajan principalmente en los servicios y como secretarías mientras que los hombres trabajan principalmente como artesanos y en trabajos relacionados o como operadores de instalaciones y máquinas. En lo que respecta a los sectores económicos, las trabajadoras están muy representadas en los «servicios de acomodación y alimentarios» y su número muchas veces dobla con creces o triplica el número de trabajadores en las «finanzas y seguros», la «educación» y el «trabajo sanitario y social». Las mujeres también están sobrerrepresentadas como empleadas del hogar. En contraste, los hombres predominan en los sectores de «la construcción» y «el transporte y el almacenamiento». La Comisión también se refiere a sus comentarios sobre el Convenio núm. 111. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y para incrementar el número de mujeres que realizan trabajos que ofrecen oportunidades de carrera y salarios más elevados. Recordando que las desigualdades salariales pueden surgir debido a la segregación de hombres y mujeres en ciertos sectores y ocupaciones, la Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados alcanzados en lo que respecta a hacer frente a la segregación ocupacional por motivos de género e incrementar el empleo de mujeres y hombres en sectores y ocupaciones en los que están infrarrepresentados una vez que se adopten la política nacional sobre el empleo y la política nacional de género.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1974)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1 a 3 del Convenio. Protección legislativa contra la discriminación. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012, si bien protege a los trabajadores contra el despido improcedente basado en todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), y en algunos motivos adicionales en virtud del artículo 1, 1), b), del Convenio, no garantiza la plena protección legislativa contra la discriminación tanto directa como indirecta de todos los trabajadores, en todos los aspectos del empleo y la ocupación. La Comisión había previamente solicitado al Gobierno que abordara las lagunas que existen en materia de protección en la legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria se limita a repetir las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y la protección conferida por la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012. El Gobierno también mantiene que no existen en el país distinciones, exclusiones o preferencias basadas en los motivos prohibidos en el artículo 1, 1), a), o en cualquier motivo adicional determinado de conformidad con el artículo 1, 1), b), y que no se han registrado casos de discriminación. En relación con la presunta ausencia de discriminación, la Comisión considera que es esencial reconocer que ninguna sociedad está exenta de discriminación y que se requiere una acción continua para abordar la discriminación en el empleo y la ocupación, que es universal y evoluciona continuamente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 731 y 845). ***Tomando nota de que el proyecto de ley de empleo (prevención de la discriminación), de 2016, sigue siendo un proyecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin más dilaciones, medidas para abordar las lagunas de protección que existen en la legislación y para garantizar que la legislación contra la discriminación defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta en todos los aspectos del empleo y la ocupación, para todos los trabajadores, y con respecto a todos los motivos establecidos en el Convenio. La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que todos los trabajadores sean protegidos en la práctica contra la discriminación, no sólo con respecto al despido, sino también con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, basados en los motivos establecidos en el Convenio. Tales medidas pueden incluir la concienciación del público orientada a los trabajadores y a los empleadores y sus organizaciones o con la cooperación de éstos, o la elaboración de códigos de prácticas o directrices sobre igualdad de oportunidades en el empleo, a efectos de generar una comprensión más amplia de los principios consagrados en el Convenio. Lamentando tomar nota de que, durante varios años, el Gobierno no ha proporcionado información alguna sobre las acciones tomadas para promocionar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato respecto de la raza, del color y de la ascendencia nacional, así como para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación basadas en esos motivos, la Comisión insta firmemente al Gobierno a facilitar dicha información sin demora, incluyendo estadísticas o encuestas, sobre la situación del mercado de trabajo de los distintos grupos protegidos en virtud del Convenio.***

Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. La Comisión tomó nota anteriormente de la ausencia, en la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012, de disposiciones que protejan a los trabajadores contra el acoso sexual. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley sobre acoso sexual en el lugar de trabajo definirá y prohibirá tanto el chantaje sexual *quid pro quo* como el acoso sexual derivado de un ambiente hostil y prevé un tribunal para recibir denuncias y determinar los asuntos relativos al acoso sexual. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a tomar medidas para asegurar que se adopte rápidamente el proyecto de ley sobre acoso sexual en el lugar de trabajo que defina y prohíba el acoso sexual (tanto el acoso quid pro quo como el acoso derivado de un ambiente hostil), en todos los aspectos del empleo y la ocupación, y pide al Gobierno que comunique copia de la última versión del proyecto de ley o de la ley adoptada en su próxima memoria.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Burundi

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 30 de agosto de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 26 de noviembre de 2015.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación por motivos de sexo o de género. Violencia por motivo de género. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la ley núm. 1/13, de 22 de septiembre de 2016, sobre la prevención, la protección de las víctimas y la represión de la violencia basada en el género, que define y sanciona, entre otras cosas, la noción de violencia basada en el género, incluidos la violencia sexual, el acoso sexual y las prácticas tradicionales perjudiciales para el género y la violencia económica, que se definen como la denegación por uno de los cónyuges del acceso a recursos familiares o a ejercer un empleo. Señala asimismo que, en virtud del artículo 14, el empleado víctima de violencia por motivo de género dentro o fuera del lugar de trabajo, tiene el derecho, previa solicitud y después de la aprobación del médico, a una reducción temporal o a la reorganización de su tiempo de trabajo, a un traslado geográfico, a un nombramiento en otro establecimiento, a la suspensión de su contrato de trabajo (al final de la cual el empleado vuelve a su empleo) y a la dimisión sin preaviso. Al respecto, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno el hecho de que la dimisión, con o sin preaviso, no debe utilizarse en la práctica como único medio de cese de la violencia y de obtención de una reparación, sino más bien como un último recurso, puesto que ello equivaldría a sancionar a las víctimas que perdieran su empleo (doble sanción). La Comisión toma nota de que la ley núm. 1/13 prevé asimismo «que todo empleador que viole los derechos de una persona consagrados en el Código del Trabajo y en sus diferentes textos de aplicación, en razón de su sexo, será pasible de una multa de 500 000 a 1 millón de francos de Burundi». **La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los puntos siguientes:**

- i) **la puesta en aplicación y la aplicación práctica de la ley núm. 1/13, de 22 de septiembre de 2016, en materia de empleo y de ocupación, indicando el número y la naturaleza de los casos de violencia por motivos de género, tratados por la inspección del trabajo y los tribunales, así como las sanciones impuestas;**
- ii) **las medidas adoptadas o previstas para informar y sensibilizar a los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones, los inspectores del trabajo, los jueces y el público en general, de la lucha contra la violencia basada en motivos de género, especialmente las medidas adoptadas para dar a conocer mejor el contenido de la ley núm. 1/13, y**
- iii) **las actividades de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos (CNIDH) para luchar contra la violencia por motivos de género en el empleo.**

Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar si prevé proceder al inventario de las leyes discriminatorias respecto de las mujeres, con el fin de modificarlas de conformidad con la Constitución y con otros instrumentos internacionales ratificados, como recomendó la CNIDH.

Acoso sexual. La Comisión recuerda que el artículo 563 del Código Penal, en su tenor modificado en 2009, comprende una disposición que define el acoso sexual como «el hecho de utilizar contra otras personas, órdenes, amenazas o coacciones físicas o psicológicas, o presiones graves, con el objetivo de obtener favores de orden sexual, abusando de la autoridad que le confieren sus funciones», pero no abarca el acoso sexual resultante de un entorno laboral hostil, ni los actos cometidos por un colega de trabajo o una persona que haya tenido un vínculo con el empleo (cliente, proveedor, etc.). La Comisión toma nota de que la ley núm. 1/13 de 2016, define el acoso sexual como: «toda forma de comportamiento no deseado verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que haya tenido lugar entre iguales y en el marco de una jerarquía; el hecho de utilizar contra otras personas órdenes, amenazas o coacciones físicas o psicológicas, o presiones graves, con el objetivo de obtener favores de orden sexual, abusando de la autoridad que le confieren sus funciones». La Comisión resalta que esta definición permite una mayor comprensión de los comportamientos de acoso sexual y que abarca al acoso sexual ejercido por una persona que no haya tenido un vínculo jerárquico con la víctima. Sin embargo, señala que esta definición no refleja la noción de «entorno laboral hostil, ofensivo o humillante» generado por algunas conductas o palabras con connotación sexual. **Al tiempo que destaca los progresos realizados gracias a la adopción de la ley núm. 1/13, de 2016, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien examinar la posibilidad de completar la definición de acoso sexual, añadiendo a la misma la noción de entorno laboral hostil, ofensivo o humillante y le pide que, en ausencia de disposiciones específicas para tal fin en la ley de 2016, pormenorice el procedimiento que ha de seguirse y las sanciones aplicables en caso de acoso sexual. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas prácticas adoptadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en los sectores público y privado, especialmente las medidas dirigidas a sensibilizar a los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones respecto de la prevención y del tratamiento del acoso sexual.**

Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según el documento de Política Nacional del Empleo (PNE), de 2014, se realizaron progresos en materia de igualdad, pero persisten desigualdades profundas en materia de acceso al primer empleo y a puestos de responsabilidad, así como en materia de condiciones de trabajo. Estas desigualdades se deben a diversos tipos de discriminación y se vinculan con la distribución social del trabajo y con el papel exclusivo de las mujeres en el terreno de los cuidados de los niños y de las tareas domésticas. Al respecto, la Comisión toma nota de que la PNE prevé que será necesario alentar a las empresas para que instauren medidas dirigidas a una mayor conciliación de vida familiar y vida laboral y a un mejor acceso de las mujeres a los recursos productivos. Prevé asimismo la posibilidad de experimentar, en la administración pública y semipública, una cuota del 30 por ciento de mujeres en todos los niveles jerárquicos, así como la utilización del *currículum vitae* anónimo y la promoción de la formación profesional.

La Comisión toma nota asimismo de que la ley núm. 1/13, de 2016, prevé que el Gobierno debe formular y aplicar una política de género, presentar a la Asamblea Nacional un informe sobre su aplicación (artículos 3 y 4) y adoptar medidas de sensibilización para «modificar los esquemas y modelos de comportamiento sociocultural del hombre y de la mujer, con miras a lograr la eliminación de prácticas consuetudinarias o de cualquier otro tipo, que se basen en la idea de inferioridad o de superioridad de uno u otro sexo o de un papel estereotipado del hombre o de la mujer» (artículo 5). La ley prevé la obligación que

tienen los padres o cualquier otra persona a cargo de los niños de «reservar un trato igualitario a niños y niñas en todos los aspectos de la vida» y protegerlos contra toda violencia basada en motivos de género (artículo 8). Las autoridades públicas deben adoptar medidas para permitir que niños y niñas tengan igual acceso a la educación, debiendo los directores de escuela respetar el derecho a la educación de las madres solteras. Al respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Burundi para elevar la tasa de escolarización y de retención escolar de las niñas, especialmente la adopción de una política de reinserción escolar de las niñas después del embarazo (documento CEDAW/C/BDI/CO/5-6, de 25 de noviembre de 2016, párrafo 34). ***Acogiendo favorablemente todas estas disposiciones y medidas, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar información sobre su aplicación en la práctica y sobre los resultados obtenidos, especialmente en lo que atañe al aumento de las tasas de escolarización y de formación profesional de las niñas y al acceso de las mujeres a los recursos productivos y al empleo, incluidos los puestos de responsabilidad en los sectores público y privado. También pide al Gobierno que se sirva indicar si se ha formulado una nueva política nacional de género, sustituyendo a la que se adoptó en 2012, y comunicar los elementos de la misma relativos a la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.***

Pueblos indígenas. La Comisión recuerda que viene señalando a la atención del Gobierno, desde hace algunos años, la estigmatización y la discriminación a los que se enfrentan los Batwa y toma nota de que la memoria no contiene ninguna información al respecto. La Comisión toma nota de que, en sus respectivas observaciones finales, el CEDAW subraya que el acceso a la educación está sumamente limitado para las niñas batwa (documento CEDAW/C/BDI/CO/5-6, párrafo 34, b)), y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresa su inquietud en cuanto a la ausencia de medidas eficaces para luchar contra la discriminación de la que son objeto los batwa, en particular para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales (documento E/C.12/BDI/CO/1, de 16 de octubre de 2015, párrafo 15). ***La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de los Batwa a la educación, a la formación profesional y al empleo, incluso para permitirles el ejercicio de sus actividades tradicionales, así como medidas dirigidas a luchar contra los estereotipos y los prejuicios respecto de esta comunidad indígena, y promover la tolerancia entre todos los sectores de la población. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre el impacto de la ley núm. 1/07, de 15 de julio de 2016, sobre la revisión del Código forestal que prevé que la gestión racional y equilibrada de los bosques, se basa, sobre todo, en el principio de enfoque participativo de las comunidades de base, e informaciones sobre el ejercicio por los Batwa de sus actividades tradicionales en las tierras en las que viven.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Chad

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Motivos de discriminación. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el proyecto de nuevo Código del Trabajo ha sido refrendado por el Comité de Alto Nivel para el Trabajo y la Seguridad Social y será enviado próximamente al Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno indica que se han tenido en cuenta los comentarios de la Comisión y que el proyecto se ha modificado en consecuencia. ***La Comisión espera que el Gobierno pronto pueda dar cuenta de la adopción del nuevo Código del Trabajo y le pide que garantice que el mismo contendrá disposiciones que prohíban expresamente la discriminación directa o indirecta en todas las etapas del empleo y de la ocupación basada, como mínimo, en todos los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio, especialmente la ascendencia nacional y el origen social. La Comisión también pide al Gobierno que comunique copia del Código una vez que haya sido adoptado, así como de todo texto de aplicación en materia de no discriminación e igualdad en el empleo y la ocupación.***

Discriminación por motivo de sexo e igualdad de trato entre hombres y mujeres. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el artículo 9 de la ordenanza núm. 006/PR/84 de 1984 que otorga al marido el derecho a oponerse a las actividades de su esposa es totalmente obsoleto. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que adoptará medidas para derogar esta disposición que no corresponde con la realidad actual. En lo que respecta a la discriminación de las mujeres en la práctica, el Gobierno precisa que la segregación ocupacional entre hombres y mujeres se debe, entre otras cosas, a la importante tasa de analfabetismo y a factores culturales. ***La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para derogar formalmente el artículo 9 de la ordenanza de 1984 y combatir los estereotipos y prejuicios sobre las capacidades y aspiraciones profesionales de hombres y mujeres. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que lleve a cabo actividades de sensibilización de los padres y de toda la población en relación con la escolarización y el mantenimiento en la escuela de niños y niñas, y que promueva el acceso de las niñas y las mujeres a una gama más amplia de formaciones y ocupaciones, en particular a las que tradicionalmente realizan los hombres.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Chile

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), recibidas el 1.º de septiembre de 2018. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile), recibidas el 2 de septiembre de 2018, así como de las recibidas el 13 de septiembre de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.**

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. En su observación anterior, la Comisión observó que existían diversos proyectos legislativos en trámite ante el Senado y la Cámara de Diputados que prevén modificar el artículo 62 *bis* del Código del Trabajo — el cual establece que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo — para incorporar el principio del Convenio y garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, no sólo en situaciones en las que los hombres y las mujeres realicen «el mismo trabajo», sino también en situaciones en las que realicen un trabajo diferente, pero que, no obstante, es de igual valor, y pidió al Gobierno que enviara información sobre toda evolución al respecto. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa que un proyecto de modificación al Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneración de hombres y mujeres (*Boletín* núm. 9322-13) está actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. La Comisión toma nota de que con dicho proyecto se propone emendar el artículo 62 *bis* del Código del Trabajo de manera que éste disponga expresadamente que «El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor». **La Comisión confía en que el artículo 62 bis del Código del Trabajo será modificado próximamente y que el mismo dará plena aplicación al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor tal como está previsto en el Convenio y pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución al respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile), recibidas el 13 de septiembre 2018. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.**

Artículo 1 del Convenio. Motivos de discriminación. Legislación. La Comisión recuerda que en su observación anterior hizo referencia a la ley núm. 20609, de julio de 2012, que establece medidas contra la discriminación, la cual no incluye los motivos de color, ascendencia nacional y origen social entre los motivos de discriminación prohibidos, mientras que estos motivos sí figuran en el artículo 2 del Código del Trabajo. En la misma observación, la Comisión tomó nota de la información sobre jurisprudencia pertinente proporcionada por el Gobierno, incluido el fallo de Unificación Jurisprudencial de la Corte Suprema de 5 de agosto de 2015 en el que la Corte Suprema extiende los criterios de discriminación contemplados en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, a todas aquellas discriminaciones o diferencias arbitrarias, prohibidas por el artículo 19, núm. 16, de la Constitución Política (cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal) y por el Convenio; y señala que los criterios de discriminación no pueden tener pretensiones de exhaustividad, ya que implicaría limitar la protección otorgada por la norma constitucional. Al tiempo que tomó nota de esta información, la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 20609 y de la decisión de Unificación Jurisprudencial de la Corte Suprema de 5 de agosto de 2015. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno proporciona extensa información respecto de los pronunciamientos de los tribunales de justicia sobre casos de discriminación que hacen referencia al artículo 2 del Código del Trabajo, incluida la sentencia de la Corte Suprema de fecha 10 de julio de 2015, dictada en causa rol núm. 24386-2014, en la que la Corte reitera que el catálogo de los motivos de discriminación prohibidos en el artículo 2 del Código del Trabajo «no debe ser considerado como taxativo, sino sólo como uno que especifica criterios sospechosos cuya presencia en el caso concreto importa conculcar el mandato de no discriminación laboral contenido en el número 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental». La Comisión toma nota también de la ley núm. 20940 que moderniza el sistema de relaciones laborales, publicada el 8 de septiembre de 2016, la cual extiende la lista de motivos de discriminación contenida en el artículo 2 del Código del Trabajo y nota con *interés* que dicha ley agrega los motivos siguientes en relación con el artículo 1, l), b), del Convenio: situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. **Al tiempo que toma nota de estas informaciones, y recordando la importancia de garantizar que todas las personas tengan una base legal clara para afirmar su derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que: i) aclare cómo se articulan en la práctica el Código del Trabajo y la ley núm. 20609 en cuanto a los motivos establecidos y a las acciones disponibles a favor de las víctimas de discriminación en el empleo y la ocupación, y ii) envíe información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 20609.**

Discriminación por motivos de sexo. Legislación. La Comisión recuerda que desde hace años se refiere a la necesidad de modificar el artículo 349 del Código de Comercio a fin de otorgar iguales derechos a los cónyuges para

celebrar un contrato de sociedad y que la mujer que al momento de contraer matrimonio no haya elegido el régimen de separación de bienes, pueda celebrar un contrato de sociedad sin necesidad de autorización especial de su marido. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 5, 5), del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, prevé la modificación del artículo 349 del Código de Comercio y elimina la exigencia de la autorización del marido para que la mujer pueda celebrar un contrato de sociedad, y pidió al Gobierno que enviara información sobre toda evolución relativa a la aprobación de este proyecto de ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que la modifica del régimen de sociedad conyugal figura dentro de los elementos de la Agenda de Equidad de Género presentada por el Presidente el 23 de mayo de 2018 y que el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, mencionado anteriormente, se encuentra en tramitación. La Comisión observa que, según indica el sitio web de la Cámara de Diputados de Chile, el proyecto sigue en segundo trámite constitucional ante el Senado. ***La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la adopción del proyecto de ley y suministre una copia del mismo cuando sea promulgado.***

Orientación sexual. La Comisión también toma nota con *interés* de que la ley núm. 20940 de 2016 añade la «orientación sexual» y la «identidad de género» como motivos de discriminación prohibidos. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de estas disposiciones en la práctica.***

Artículo 2. Condiciones de trabajo y remuneraciones. En su observación anterior, la Comisión hizo referencia a las observaciones presentadas por la Federación de Sindicatos de Supervisores Rol A y Profesionales de CODELCO Chile (FESUC), la cuales se referían a que: i) los trabajadores contratados por la empresa después de 2010, en su mayoría mujeres, perciben menores remuneraciones y no gozan de las mismas condiciones de trabajo que los contratados con anterioridad, y ii) el código de conducta de la empresa desalienta las actividades políticas de los empleados aún fuera del horario de trabajo. La Comisión tomó nota de la respuesta del Gobierno, y le pidió que continuara enviando información al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que, según la empresa, su política de remuneraciones y beneficios se ajusta a criterios objetivos, en base a la realidad operacional de cada una de sus divisiones, su tamaño, productividad y las condiciones del mercado del cobre. La empresa señala que su Política Corporativa de Gestión de las Personas incluye entre sus pilares «sistemas de compensaciones, beneficios y reconocimientos asociados al mérito y sistemas de evaluación de cargos cautelando la igualdad de oportunidades, la equidad interna y la competitividad externa» (pilar 6); y la remuneraciones se encuentran «pactadas» entre los sindicatos base que conforman la FESUC y las distintas divisiones de la empresa. Respecto más particularmente a la situación de las trabajadoras, la empresa indica que ha establecido como política cerrar las persistentes brechas de género en el lugar de trabajo, realizando esfuerzos para aumentar la participación femenina en el mundo laboral y para promover el valor de la contribución de las mujeres a la productividad de las empresas; a raíz de estos esfuerzos, la empresa cuenta con cuatro centros de trabajo certificados con el Sello Iguala-Conciliación, entregado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. La empresa señala asimismo que existen dos instrumentos laborales en sus divisiones que están diseñados a resguardar el cumplimiento de las políticas de igualdad de trato entre hombres y mujeres al interior de la Corporación, es decir: i) reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, que establecen el derecho a la igualdad en las remuneraciones y prescriben procedimientos de resguardo si un trabajador/a sufre este tipo de menoscabo, y ii) un sistema interno en el cual los trabajadores/as o terceros, pueden presentar denuncias — individualizándose o en forma anónima —, en caso de infracciones a la normativa legal, las políticas, los procedimientos, el Código de Conducta o cualquier otra norma aplicable a la empresa, a sus trabajadores, a sus relaciones con contratistas y con terceros. La empresa informa que, a la fecha de emisión del informe, no se habían constatado infracciones por discriminación al interior de sus divisiones. En cuanto al código de conducta de la empresa, la empresa señala que no se han recibido denuncias en tema de actividades políticas. La Comisión toma nota de que según el Gobierno los argumentos expuestos avalarían que la empresa respeta los derechos laborales específicos e inespecíficos de sus trabajadores, aplicando el principio de igualdad de trato y respetando los derechos políticos de las personas que prestan servicios a la Corporación.

Pensiones. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo referencia a las observaciones presentadas por varios interlocutores sociales según las cuales el sistema de pensiones privado vigente, que se basa en un régimen de capitalización, es discriminatorio respecto de las mujeres debido a la utilización de tablas de mortalidad diferenciadas para hombres y para mujeres y tomó nota de la adopción, el 29 de abril de 2014, del decreto supremo núm. 718 en virtud del cual se crea la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. La Comisión observó que entre las propuestas recogidas en el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de septiembre de 2015, se encontraba la de eliminar el cálculo de tablas diferenciadas por sexo y reemplazarlas por tablas unisex con cálculo uniforme del riesgo de longevidad. La Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre: i) el impacto real de las tablas de mortalidad diferenciadas desde su implementación a la actualidad en los montos percibidos de manera concreta por las pensionadas, y ii) el seguimiento dado al informe final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones en relación con la eliminación del cálculo de tablas diferenciadas por sexo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo no pueden ser evaluadas en su impacto real ya que es una medida que no ha pasado de ser una propuesta. Por otro lado, el Gobierno informa que el 1.º de julio de 2016 las Superintendencias de Pensiones (SP) y de Valores y Seguros (SVS) publicaron las nuevas Tablas de Mortalidad, con la asesoría técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y tras consultas al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). La Comisión observa que las normas de carácter general SP núm. 162 y SVS núm. 398, de 20 de noviembre de 2015, de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguro, las cuales fijan las tablas de mortalidad publicadas en julio de 2016, establecen el uso de

cinco tablas de mortalidad diferenciadas por sexo. La Comisión toma nota, por otro lado, de que una propuesta de modificación de la legislación nacional en tema de pensiones se ha presentado al Congreso. La Comisión desea resaltar que factores tales como una tasa de participación laboral de las mujeres considerablemente más baja que la de los hombres, el uso de tablas de mortalidad diferenciada por sexo (en lugar de tablas de mortalidad mixtas) y la ausencia de disposiciones que prevean la posibilidad de contabilizar períodos de ejercicio de responsabilidades parentales para calcular la pensión, constituyen elementos que tienen un impacto negativo sobre el nivel de pensión de vejez de las mujeres, lo que se agrava aún más en el caso de sistemas de pensiones de capitalización en los que el monto de las prestaciones depende de las contribuciones efectuadas por los trabajadores y las trabajadoras durante su vida activa. **La Comisión alienta al Gobierno a que aproveche la oportunidad de la reforma legislativa en curso con miras a la adopción de tablas de mortalidad mixtas y garantizar el respeto del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de pensiones y le pide que proporcione información sobre toda evolución al respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1 y 2, a), del Convenio. Principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que desde el 2005 viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificar los artículos 80, 1), y 56, 7), del Código del Trabajo, que limitan la aplicación del principio de igualdad de remuneración a la existencia «de condiciones iguales de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento» (artículo 80, 1)) o a un «trabajo igual» (artículo 56, 7)), y que no reflejan el concepto de «trabajo de igual valor». La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma en su memoria que prevé modificar los artículos 80, 1), y 56, 7), del Código del Trabajo para que el concepto de «trabajo de igual valor» sea imperativo. **Tomando nota del compromiso del Gobierno, la Comisión le pide que, en el marco de la revisión del Código del Trabajo actualmente en curso, se incorpore en el Código del Trabajo el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1 a 3 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido subrayando las lagunas del Código del Trabajo y del Estatuto General de la Administración Pública en materia de protección de los trabajadores contra la discriminación, ya que no contemplan todos los motivos de discriminación, ni todos los aspectos del empleo y la ocupación enumerados en el Convenio. En efecto, la Comisión recuerda que el Código del Trabajo, en lo que respecta a la discriminación salarial, sólo cubre los motivos de «el origen», el sexo, la edad y el estatus (artículo 80), y en lo referente al despido los de la opinión, la actividad sindical y la pertenencia o no pertenencia a un grupo político, religioso o filosófico o a un sindicato determinado (artículo 42). El Estatuto General de la Administración Pública prohíbe cualquier distinción entre hombres y mujeres en lo que respecta a su aplicación general y toda discriminación basada en la situación familiar en materia de acceso al empleo (artículos 200 y 201). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el anteproyecto de ley que modifica y complementa ciertas disposiciones del Código del Trabajo tendrá en cuenta los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que, en el marco de la revisión del Código del Trabajo actualmente en curso, se prohíba expresamente la discriminación basada en todos los motivos especificados por el Convenio, así como la discriminación basada en cualquier otro motivo que estime oportuno incluir en dicho Código, en todas las etapas del empleo y la ocupación, incluida la contratación. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar las disposiciones del Estatuto General de la Administración Pública con el fin de asegurar la protección de los funcionarios contra la discriminación basada, como mínimo, en los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio núm. 111, que cubre todos los aspectos del empleo, incluidas la contratación y la promoción. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier cambio legislativo a este respecto.**

Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se declaró profundamente preocupado por la elevada prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el acoso sexual en la escuela y en el trabajo; la demora en la aprobación de una ley general para combatir todas las formas de violencia contra la mujer; así como la falta de concientización acerca de dicho fenómeno y el limitado número de casos de violencia de género denunciados (véase documento CEDAW/C/COG/CO/6, de 23 de marzo de 2012, párrafo 23). La Comisión nota que desde el 2011 el Gobierno está indicando que el anteproyecto de ley que modifica y complementa ciertas disposiciones del Código del Trabajo contiene disposiciones contra el acoso sexual. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que se asegure de que tanto las disposiciones relativas al acoso sexual que se asemejan al chantaje sexual (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente hostil, intimidante u ofensivo sean finalmente adoptadas y que prevean protección para las víctimas de acoso sexual y sanciones para sus autores. La Comisión también pide al Gobierno que tome, en colaboración con organizaciones de trabajadores y de empleadores, medidas destinadas a prevenir e impedir el acoso sexual, tales como medidas de concientización para los**

empleadores, los trabajadores, el personal docente, los inspectores del trabajo, los abogados y los jueces; y que establezca sistemas de información y procedimientos de denuncia que tomen en cuenta el carácter sensible de este asunto a efecto de poner término a dichas prácticas y permitir a las víctimas que hagan valer sus derechos sin perder su empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Corea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en motivos de opinión política y en las calificaciones exigidas para un empleo determinado. Docentes. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que manifestó su preocupación sobre la prohibición de que los profesores de enseñanza preescolar, primaria y secundaria participen en actividades políticas. Reitera además que, en junio de 2015, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo instó al Gobierno a que transmitiera información más detallada acerca de la cuestión de una posible discriminación sobre la base de la opinión política de los profesores, con el fin de poder llegar a una evaluación fundada del cumplimiento de la legislación y la práctica relacionadas con el Convenio.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno recuerda el requisito constitucional de neutralidad política de la educación y declara que todas las actividades de los docentes en la enseñanza primaria y secundaria, ya sea que se realicen o no en el trabajo y en el aula, forman potencialmente parte de la educación, puesto que los docentes ejercen una influencia importante en la formación del carácter y en los hábitos básicos de los estudiantes de primaria y de secundaria, los cuales son receptivos a los contenidos que aprenden. Para el Gobierno resulta por tanto inoportuno separar «las actividades que se realizan fuera del aula y de la escuela y las no relacionadas con la enseñanza de cualesquiera otras actividades realizadas por los docentes», y recuerda que esta posición fue confirmada por el Tribunal Constitucional de la República de Corea en su sentencia de 25 de marzo de 2004. El Gobierno concluye, en consecuencia, que la legislación actual no impone una restricción excesiva a los docentes, en la medida en que éstos están autorizados a: i) manifestar sus opiniones políticas, si éstas son «personales» y no expresan la voz de los sindicatos y de otros grupos a los que pertenezcan, y ii) participar en actividades que estén dentro de la esfera de sus actividades «personales», siempre y cuando no constituyan actividades prohibidas por la Ley de la Función Pública. En este sentido la Comisión observa que el artículo 65 de la Ley de la Función Pública no permite a los funcionarios públicos «participar en la organización de o unirse a todo partido político u otra organización política» o «participar en las siguientes actividades para apoyar u oponerse a un determinado partido político o a una determinada persona en una elección: solicitar a una persona que vote o que no vote; intentar, supervisar o solicitar una campaña de petición firmada; presentar o hacer que otra persona presente documentos o libros en instalaciones públicas, etc.; recaudar o hacer que otra persona recaude una contribución, o utilizar o hacer que otra persona utilice fondos públicos; solicitar a otra persona que se afilie o no a un partido político o a cualquier otra organización política». Además, «ningún funcionario público podrá exigir a otros funcionarios que realicen actividades contrarias a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 65, ni prometerle ninguna ventaja o desventaja como recompensa o represalia por cualquiera actividad política» (artículo 65, 3)).

La Comisión desea reiterar que la protección contra la discriminación basada en la opinión política implica la protección en las actividades encaminadas a expresar o demostrar oposición a opiniones y principios políticos preestablecidos. También cubre la discriminación basada en la afiliación política (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 805). La Comisión también recuerda que, aunque en algunos casos las restricciones respecto a la expresión de una opinión política pueden constituir una calificación de buena fe para determinados puestos («calificación exigida para un empleo determinado»), resulta esencial que estas restricciones no sobrepasen ciertos límites, ya que dichas prácticas pueden entrar en conflicto con las disposiciones del Convenio sobre la aplicación de una política destinada a eliminar la discriminación basada en la opinión política, en particular con respecto al empleo público (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 831). Por consiguiente, la disposición relativa a la calificación exigida para un empleo determinado debe interpretarse restrictivamente para evitar que se limite indebidamente la protección que el Convenio pretende ofrecer. En el caso en cuestión, la Comisión no puede sino reiterar que, en la medida en que las actividades políticas se lleven a cabo fuera del establecimiento escolar y no guarden relación con la docencia, la prohibición general de ejercer dichas actividades políticas no constituye una calificación exigida para el empleo en el sentido del artículo 1, 2), del Convenio. Así pues, las medidas disciplinarias adoptadas contra los docentes que participan en estas actividades constituyen discriminación basada en las opiniones políticas, contrariamente a lo dispuesto en el Convenio. *Por consiguiente, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que los profesores de educación infantil, enseñanza primaria y secundaria disfruten de protección contra la discriminación basada en las opiniones políticas, tal como está previsto en el Convenio, respecto de las actividades que realizan fuera del aula y de la escuela, y no relacionadas con la enseñanza, así como medidas para garantizar que los profesores no sean objeto de medidas disciplinarias por tales motivos.*

Artículo 1, 2). Calificaciones exigidas para un empleo determinado. Opinión política y funcionarios. La Comisión reitera que pidió al Gobierno que indicara el motivo por el que el hecho de prohibir a los funcionarios públicos que se afilien a un partido político y participen en actividades políticas (artículos 65, 1), de la Ley de la Función Pública) tenía relación con la calificación exigida para ejercer un empleo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual esta prohibición tiene la finalidad de garantizar la neutralidad de los funcionarios, protegiéndolos de una intervención injusta por parte de los poderes políticos y contribuir a mejorar el interés público en aras de la coherencia y la continuidad del ejercicio de la administración. Junto a los comentarios formulados en el párrafo anterior, la Comisión desea señalar que únicamente está justificado que se tenga en cuenta la opinión política como requisito previo para un puesto determinado cuando esta restricción se aplica a una serie reducida de empleos y no a la totalidad del sector público. Además, la Comisión reitera que el concepto de «un empleo determinado» se refiere a un puesto, función o tarea específica y determinada; y que cualquier restricción dentro del contexto de esta excepción debe estar justificada por las características del empleo determinado, y guardar proporción con las calificaciones exigidas para el mismo y ser interpretada restrictivamente. La Comisión considera que, en ningún caso, el mismo requisito relativo a uno o más de los motivos de discriminación debe aplicarse a todo un sector de actividad u ocupación, especialmente en la función pública (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 828). ***En consecuencia la Comisión pide al Gobierno que considere la posibilidad de limitar la prohibición de las actividades políticas a determinadas posiciones y que, por lo tanto, prevea la posibilidad de adoptar una lista de puestos de trabajo en el servicio público para los cuales la opinión política constituye una calificación exigida para el ejercicio de los mismos. Entre tanto, pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación práctica de los artículos 65, 1), de la Ley de la Función Pública, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, incluida cualquier medida disciplinaria adoptada al respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU) y la Federación de Empleadores de Corea (KEF), así como de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la FKTU, comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Política nacional. Evolución legislativa. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de una nueva Ley Marco sobre Igualdad de Género (ley núm. 12698), de 28 de mayo de 2014, en particular de su artículo 24, 3) y 4) (apoyo a las trabajadoras cuya carrera profesional puede verse o es interrumpida por motivos tales como el embarazo, el nacimiento de sus hijos o el cuidado de éstos), artículo 25 (garantía de los derechos relativos a la maternidad y la paternidad), artículo 26 (medidas para un equilibrio armonioso entre el trabajo y la vida familiar) y el artículo 35 (que propugna relaciones familiares democráticas y con igualdad de género); así como las enmiendas a la Ley sobre Igualdad en el Empleo y apoyo a la Conciliación entre el Trabajo y la Vida Familiar (ley núm. 8781, de 21 de diciembre de 2007, denominada anteriormente la «Ley sobre la Igualdad de Ambos Sexos en el Empleo» o «Ley sobre Igualdad en el Empleo»), en 2012, 2014, 2015 y 2016 en relación, entre otros aspectos, con la formulación, cada cinco años, de un plan básico que propicie la igualdad en el empleo para ambos géneros y la conciliación entre vida familiar y la vida laboral (artículo 6 *bis*); las prestaciones de licencia de maternidad (artículo 18); la licencia de paternidad (artículo 18 *bis*); la licencia para cuidar a un hijo (artículo 19); la reducción del tiempo de trabajo y otras medidas para apoyar al trabajador durante el período de cuidado de sus hijos (artículos 19 *bis* y 19 *quinquies*); apoyo de los empleadores a los trabajadores que se incorporan a sus puestos después de una licencia o de una reducción del tiempo de trabajo debido a sus responsabilidades familiares (artículo 19 *sixies*); apoyo a los trabajadores para cuidados familiares, en particular, la prohibición de despido o de discriminación de los trabajadores por motivos de licencia por cuidados familiares, e inclusión del período de licencia por cuidados familiares en el período de servicio continuo (artículo 22 *bis*); y disposiciones que prevén sanciones y multas administrativas (artículos 37 y 39).

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre la Promoción de las Actividades Económicas de las Mujeres que Interrumpen su Carrera (núm. 9101, de 2008) y la Ley sobre la Promoción de un Entorno Social Favorable a la Familia (núm. 8695, de 2007), así como del segundo Plan básico en favor de la salud familiar (2011-2015) y el segundo Plan básico sobre las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la sociedad (2011-2015), dentro del contexto de trabajadores con responsabilidades familiares; así como que comunique información sobre el proceso de promulgación del proyecto de ley para la promoción del trabajo inteligente. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que este último proyecto de ley no fue adoptado por la Asamblea Nacional y ha sido abandonado. La Comisión toma nota también de que, de conformidad con la ley núm. 9101, los planes básicos para promover las actividades económicas de las mujeres que ven interrumpida su carrera fueron establecidos y aplicados para los períodos 2010-2014 y 2015-2018, centrándose particularmente en la prevención de las interrupciones de la carrera profesional de las mujeres empleadas, la promoción de la reinserción laboral de las mujeres que han tenido que interrumpir su carrera profesional, el refuerzo de las infraestructuras para el cuidado de los hijos y el establecimiento de un entorno favorable al equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. La Comisión toma nota también de que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico de la República de Corea, saludó la adopción, entre otros, del segundo Plan básico de políticas para la igualdad de género para el período (2018-2022) (documento

CEDAW/C/KOR/CO/8, de 14 de marzo de 2018, párrafo 5, b)). La Comisión toma nota también de que el Ministro de Igualdad de Género y Familia (MOGEF) informó al CEDAW, durante la presentación del octavo informe periódico de Corea, el 22 de febrero de 2018, de la adopción del sexto Plan básico de igualdad de género en el empleo (2018-2022). La Comisión toma nota de que uno de los seis principales proyectos del segundo Plan básico de políticas para la igualdad de género consiste en la creación de una infraestructura social de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar a través del fortalecimiento de la responsabilidad social en materia de prestación de cuidados, garantizando los derechos de los padres y madres que trabajan y promoviendo una cultura favorable a la familia en el lugar de trabajo. El Gobierno subraya que ha creado 150 nuevos centros de empleo destinados a las mujeres (a partir de julio de 2016), que ofrecen servicios de apoyo al empleo específicamente para las mujeres cuyas carreras profesionales se han visto interrumpidas, tales como asesoramiento, educación profesional y formación, pasantías, colocación laboral y gestión del seguimiento. Añade que ha llevado a cabo dos encuestas sobre la situación actual de las actividades económicas de las mujeres que tienen que interrumpir su carrera profesional con miras a recopilar información estadística y normativa que pueda servir para formular nuevas políticas, incluido el apoyo a su reinserción laboral. Teniendo en cuenta el segundo Plan básico en favor de la salud familiar y del segundo Plan básico sobre las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la sociedad, el Gobierno seleccionó algunas políticas fundamentales, como los servicios de apoyo para el cuidado de los hijos (con el fin que lleguen a más hogares, estableciendo y ampliando las actividades cooperativas de prestación de cuidados a los hijos y los espacios y servicios de atención infantil tras la finalización del horario escolar), los servicios de apoyo a la creación de capacidades para diversos tipos de familias (incluidas madres no casadas), mediante la creación de un entorno favorable a la familia a través del desarrollo de mecanismos de trabajo flexible en las instituciones públicas y el fomento de las licencias por cuidado de los hijos (incluida la licencia por paternidad), y la introducción del incentivo del «Mes del padre», por el cual, si ambos padres se turnan en la solicitud de licencias para el cuidado del mismo hijo, las prestaciones para el padre o la madre que se acoge a ella a partir del segundo turno aumentan un 100 por cien del salario ordinario durante un período de tres meses (hasta un máximo de 1,5 millones de won surcoreanos). La Comisión toma nota además de la declaración del Gobierno de que ha proporcionado servicios gratuitos de cuidado a los hijos para todos los grupos que se acogen a ellos, fortaleciendo las responsabilidades sociales en materia de nacimiento y cuidado de hijos, en particular reduciendo la carga financiera derivada de la crianza de hijos en todos los hogares. Según el Gobierno, el número de niños cubiertos por subsidios que cubren sus costos de cuidado aumentaron de 680 000 en 2006 a 1,48 millones en 2014; y el número de niños cubiertos por los subsidios para la crianza de los hijos se elevó de 680 000 en 2009 a 1,01 millones en 2014. Según las estadísticas disponibles en el sitio del MOGEF, 63 546 familias han podido utilizar los servicios de prestación de cuidados a sus hijos en 2017, lo que supone un aumento del 3,8 por ciento comparado con 2016 (61 221 familias).

En relación con el sistema de concesión de certificados a empresas con entornos favorables a la familia en el marco de la ley núm. 8695, la Comisión saluda el aumento considerable del número de empresas que han obtenido este tipo de certificados, cuyo número ha pasado de 1 363 en diciembre de 2015, según la memoria del Gobierno, a 2 802 en 2017, según la estadísticas de MOGEF. El Gobierno señala que las empresas que poseen el certificado de entorno favorable a la familia son evaluadas con puntos adicionales en la calificación para la concesión de contratos públicos, así como para optar a otras ventajas en materia de inversiones y préstamos bancarios.

Al tiempo que saluda esta evolución positiva, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la Ley Marco sobre Igualdad de Género, 2014 (ley núm. 12698), en su versión enmendada, y de la Ley de Asistencia a la Igualdad de Oportunidades y a la Conciliación entre la Vida Laboral y la Vida Familiar, 2007 (ley núm. 8781), en su versión enmendada. Al tiempo que toma nota de la adopción de varios planes destinados a mejorar la igualdad de género en el empleo y apoyar a los trabajadores con responsabilidades familiares, la Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en aplicación de estos planes, las categorías y el número de trabajadores que se benefician de estas medidas y los resultados obtenidos con ellas. Se solicita asimismo al Gobierno que siga proporcionando información sobre el sistema de certificación de las empresas con entornos favorables a la familia, indicando los criterios que se tienen en cuenta y el proceso para la concesión de un certificado a una empresa.

Artículo 4. Derecho de licencias de cuidado de los hijos para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. La Comisión toma nota de que el Gobierno comunica una estadística sobre los receptores de licencias de paternidad por cuidado de los hijos. Al tiempo que saluda el aumento considerable del número de receptores de estas licencias entre 2011 y 2015 (más del 50,2 por ciento en general y más de 247,5 por ciento en el caso de los hombres), así como del porcentaje de la cuantía de las prestaciones concedidas (más de 124,3 por ciento en general y más de 376 por ciento en el caso de los hombres), la Comisión toma nota de que, en 2015, los hombres representaron tan sólo el 5,6 por ciento de los beneficiarios de las licencias de paternidad por cuidado de hijos (es decir, 4 872 hombres de los 87 339 beneficiarios en total; si bien el Gobierno señala que este porcentaje alcanzó el 7,4 por ciento en la primera mitad de 2016) y tan sólo el 4,4 por ciento de la cantidad total de prestaciones recibidas (en 2011, los hombres representaban respectivamente, el 2,4 por ciento de los beneficiarios y el 2,1 por ciento de las prestaciones recibidas). En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las causas subyacentes del número reducido de hombres que toman licencias para el cuidado de los hijos, y que adoptara medidas para promover la utilización de las licencias para el cuidado de los hijos, especialmente por parte de los hombres. La Comisión toma nota de la explicación del Gobierno de que esto se debe en general a la cultura social en materia de empleo, como la práctica arraigada de largos horarios de trabajo y el

temor a lo que podría pensar el supervisor o los compañeros de trabajo. Además, la mayoría de los hombres siguen siendo los principales — si no los únicos — proveedores de ingresos en la familia y algunos hogares pueden tener dificultades para mantener su nivel de vida si el padre toma una licencia para cuidado de los hijos. El Gobierno destaca que ha promovido intensivamente la necesidad de licencia de paternidad a través del Consejo para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, un organismo público-privado, y que el número de personas que se han sumado al sistema del «Mes del padre» (mencionado anteriormente), adoptado en 2014 y ampliado a tres meses en 2016, se ha multiplicado por 3,4 veces entre 2015 y 2016. La Comisión toma nota de que se han enmendado las siguientes disposiciones de la Ley de Oportunidades de Empleo y Asistencia para el Equilibrio entre la Vida Familiar y Laboral: artículo 18 *bis*, para establecer cinco días de licencia por paternidad (tres días remunerados); artículo 19, 1), para aumentar el límite de edad de los hijos, incluidos los hijos adoptados, a fin de determinar la idoneidad de un padre para solicitar la licencia hasta un máximo de ocho años; y el artículo 19 *quinquies*, que, según el Gobierno, protege el derecho de los trabajadores de duración determinada y los cedidos por agencias de empleo temporal a una licencia para cuidado de los hijos. En este sentido, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre las observaciones finales del CEDAW, que recomendó continuara llevando a cabo campañas de sensibilización y de ampliación de prestaciones, por ejemplo incrementando el nivel de las prestaciones por maternidad y paternidad a fin de mejorar los incentivos para compartir las responsabilidades de la crianza de los hijos entre los padres (documento CEDAW/C/KOR/CO/8, párrafo 39, c)). ***La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los derechos a licencias para el cuidado de los hijos en la práctica, incluida información estadística, desglosada por sexo, sobre el número de beneficiarios de estos derechos. La Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas proactivas para alentar a más hombres a ejercer su derecho a tomar licencias para el cuidado de los hijos, así como a indicar los resultados obtenidos con tales medidas.***

Organización del tiempo de trabajo. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre: i) la utilización del sistema de horario flexible y el sistema de ahorro de horas de trabajo, incluyendo información estadística, desglosada por sexo, sobre el número de beneficiarios de estos sistemas, así como sobre su impacto en el empleo de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, y ii) las enmiendas legislativas con miras a reconocer el derecho a una jornada de trabajo reducida durante los períodos de cuidado de los hijos. La Comisión toma nota de que las enmiendas de 2012, al artículo 19 *bis*, de la Ley de Asistencia a la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación entre la Vida Laboral y la Vida Familiar introdujeron el derecho a reducir las horas de trabajo durante el período de licencia para el cuidado de los hijos. La Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno de que hay enmiendas pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional encaminadas a ampliar el período durante el cual puede establecerse un sistema flexible de horas de trabajo (hasta seis meses a partir de 2024) e introducir un sistema que ahorra horas de trabajo. La Comisión toma nota con *interés* de la adopción, el 28 de febrero de 2018, de la introducción de enmiendas a la Ley sobre Normas del Trabajo (núm. 8372, de 2007) con el fin de reducir de 68 a 52 horas el límite máximo legal de horas trabajadas a la semana (es decir, cuarenta horas a la semana — especificando que legalmente el término «semana» incluye sábados y domingos — y hasta un máximo de doce horas extraordinarias, contando como tales el trabajo realizado en fiestas o fines de semana), cuya aplicación va a ser paulatina en función del número de trabajadores: desde el 1.º de julio de 2018 (para los lugares de trabajo con 300 trabajadores o más) y hasta el 1.º de julio de 2021 (para lugares de trabajo con entre cinco y 50 trabajadores, dando la posibilidad a los centros de trabajo con menos de 30 empleados a que sumen ocho horas adicionales extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 2022, si el empleador y el trabajador así lo acordaran). La Comisión recuerda que la duración de la jornada de trabajo y la ordenación del tiempo de trabajo representan asuntos de interés crucial para los trabajadores con responsabilidades familiares y que se ha considerado que la mejora de las condiciones de trabajo es, en la práctica, sumamente favorable para las políticas de promoción de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo. Las medidas adoptadas en este ámbito, como la reducción de las horas de trabajo, permiten a los trabajadores conciliar mejor sus trabajos con sus responsabilidades familiares e invitan a los hombres a participar más en los asuntos familiares. Además, recuerda que el párrafo 18, a), de la Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165) exhorta a una reducción progresiva de la duración de la jornada de trabajo y una reducción de las horas extraordinarias (véase Estudio General de 1993, Trabajadores con responsabilidades familiares, párrafos 131 y 133). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha incentivado a las empresas a reducir los horarios de trabajo mediante ofertas de apoyo de carácter financiero a las pequeñas y medianas empresas y la realización de inspecciones del trabajo en sectores donde son habituales las horas extraordinarias, además de sensibilizando a la opinión pública y creando un clima para acabar con el exceso innecesario de horas de trabajo y de trabajo nocturno. En este sentido, la Comisión toma nota de las observaciones de la FKTU de que los hombres hacen más horas extraordinarias que las mujeres, lo que a su vez tiene un impacto significativo en los salarios. La compensación de las horas extraordinarias afecta a la práctica de las largas jornadas laborales, lo que crea un entorno de desigualdad en el empleo, propicia la interrupción de la carrera profesional de las mujeres y la brecha salarial de género. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones de la FKTU, en las que ésta subraya que cabe atribuir la brecha de género en el tiempo de trabajo y la consiguiente brecha salarial a una cultura en la que las mujeres, por lo general, soportan más la carga del cuidado de los hijos que los hombres debido a las largas jornadas de trabajo; y que está solucionando el problema con iniciativas para ampliar la cultura empresarial favorable al equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. ***La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la situación jurídica de las enmiendas relativas al sistema flexible de horas de trabajo y al sistema de ahorro de horas de trabajo, así como información detallada sobre su utilización. La Comisión le pide asimismo que***

proporcione información sobre la aplicación de las enmiendas de 2018 a la Ley de Normas del Trabajo a fin de reducir la jornada laboral, las tendencias en el número de horas trabajadas por hombres y mujeres, y sobre todo las otras medidas adoptadas para corregir el exceso de horas extraordinarias y su impacto en el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

Trabajo a tiempo parcial. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que: i) indicara la manera en la que la Ley sobre la Protección de los Trabajadores a Tiempo Completo y los Trabajadores a Tiempo Parcial había facilitado el traslado de los trabajadores con responsabilidades familiares en un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, y viceversa, y que indicara el número de hombres y mujeres que utilizan esta opción y el número de mujeres que vuelven a trabajar a tiempo completo, y ii) indicara la manera en la que se aborda la cuestión de la concentración de mujeres en los trabajos a tiempo parcial, teniendo en cuenta el contexto de la conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado la información estadística exigida, sino que está promoviendo «empleo a tiempo parcial reversible», por el cual los trabajadores pueden escoger trabajar a tiempo parcial durante un determinado periodo de tiempo, siempre y cuando regresen al tiempo completo al término del periodo. El Gobierno está ofreciendo a los empleadores que ofertan empleos a tiempo parcial reversibles subsidios para cubrir sus gastos, así como «consultorías a medida». Además, el Gobierno subraya que el derecho a la reducción de las horas de trabajo se aplica igualmente a hombres y mujeres, y alienta a padres y madres a colaborar juntos para lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. La Comisión toma nota de las indicaciones de la FKTU de que, si bien las mujeres representan en 2015 el 35,4 por ciento de los trabajadores regulares y el 53,8 por ciento de los trabajadores no regulares constituían el 69,2 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial; y que la mayoría de los empleos a tiempo parcial no son escogidos voluntariamente y no están bien remunerados en proporción a las horas trabajadas. La FKTU añade que la considerable segregación en el empleo por motivos de género en los trabajos a tiempo parcial podría incidir negativamente en las medidas contra la discriminación basada en el género, los niveles salariales y el desarrollo profesional. El Gobierno, en su respuesta, señala que la tasa de empleo femenino (mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años) ha experimentado una tendencia al alza desde hace varios años, alcanzando el 56,8 por ciento en julio de 2016. El Gobierno afirma que, en la encuesta efectuada entre abril y junio de 2016, los datos muestran que el cuidado de los hijos es la principal razón para elegir un empleo a tiempo parcial y que, durante el periodo de nacimiento de un hijo y de cuidado de los hijos, las mujeres prefieren trabajos a tiempo parcial para poder conciliarlos con sus responsabilidades familiares. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la KEF, de que, sobre la base de las estadísticas recopiladas en 2015, hay que destacar que el porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial entre las mujeres asalariadas en el país es relativamente reducido si se compara con los datos a nivel internacional (15,9 por ciento, cuando el promedio en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) fue un 25,9 por ciento en 2015) y que el porcentaje de trabajadoras en relación al conjunto de trabajadores a tiempo parcial alcanzó el 62,6 por ciento (en contraposición al 68,7 por ciento para la OCDE). No obstante, la Comisión toma nota de que, según la estadística publicada en el sitio web del MOGEF, la «tasa de empleo a tiempo parcial de las mujeres respecto al número total de mujeres que trabajan», ha sido de un 41,2 por ciento en agosto de 2017, y que el porcentaje de mujeres en el empleo a tiempo parcial representó el 55,2 por ciento. Al tiempo que recuerda una vez más que va en contra del Convenio asumir que la principal responsable del cuidado de la familia y del hogar es la mujer ya que se refuerzan los estereotipos en relación con las funciones de hombres y mujeres y la actual desigualdad por motivos de género, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre su solicitud directa en virtud del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que señale: i) el número de hombres y mujeres que recurren a la posibilidad de pasar de un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial, y viceversa y el número de mujeres que vuelven a trabajar a tiempo completo, y ii) las medidas adoptadas para evitar que las mujeres se concentren en los trabajos a tiempo parcial, teniendo en cuenta el contexto de la conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares.***

Artículo 11. Organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre el «Consejo para la Promoción de la Conciliación entre la Vida Privada y Pública, y la Vida Laboral y Familiar», que funciona tanto a nivel nacional como regional. A nivel nacional, el Consejo está compuesto, desde mayo de 2016, por representantes del Ministerio de Empleo y Trabajo y otros ministerios competentes como el MOGEF, el Ministerio de Bienestar y Salud y el Ministerio de Estrategia y Finanzas, así como por representantes de la KEF, la Federación de Industrias Coreanas, la Cámara de Comercio e Industria de Corea, la Asociación de Comercio Internacional de Corea y la Asociación de Empresarias Coreanas, así como por representantes de la FKTU. El Consejo se reúne una vez al trimestre y su objetivo es controlar el modo en que se logra la aplicación del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, compartir las mejores prácticas, llevar a cabo campañas de sensibilización públicas y privadas, comprender la demanda de mejores sistemas y determinar y debatir las áreas de cooperación. A nivel regional, el Consejo está compuesto, a título voluntario, por los directores de los organismos regionales citados, las instituciones municipales, los representantes de los trabajadores y la dirección de las empresas, agencias pertinentes (como los nuevos centros de empleo) y por los expertos. Se reúne una vez al mes. ***La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las actividades del Consejo para la Promoción de la Conciliación entre la Vida Privada y Pública, y la Vida Laboral y la Vida Familiar, así como sobre sus recomendaciones relativas específicamente a los trabajadores con responsabilidades familiares y a que proporcione una copia de su informe anual cuando esté disponible.***

Cumplimiento de la ley. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no dispone de información sobre las decisiones judiciales o administrativas pertinentes en relación con la discriminación por motivos de responsabilidades familiares o de cuidado de los hijos. **La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las autoridades de control y los mecanismos de ejecución, incluidos la Inspección del Trabajo y la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, que dan cumplimiento a las disposiciones del Convenio, así como sobre todas las decisiones administrativas o judiciales relativas a la aplicación del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información, incluidos datos estadísticos desglosados por género, estudios, encuestas o informes que permitan a la Comisión evaluar cómo se aplican en la práctica los principios del Convenio y qué progresos se han hecho para acabar con las desigualdades existentes entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares y entre los trabajadores y las trabajadoras sin estas responsabilidades.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Definición de remuneración. Legislación. Desde hace más de veinte años, la Comisión pide al Gobierno que modifique el Código del Trabajo, en particular su artículo 86 que limita la igualdad salarial a «condiciones iguales de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento» a fin de incluir el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y garantizar que ese principio se aplique a todos los elementos de la remuneración tal como se define en el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha aprovechado la ocasión que ofrecía la revisión del Código del Trabajo de 2016 para ponerlo de conformidad con el principio establecido en el Convenio. La Comisión quiere recordar que para aplicar plenamente el Convenio es necesario examinar la cuestión de la igualdad a dos niveles: i) en principio, a nivel de empleo planteándose si el trabajo a realizar tiene el mismo valor, y ii) después, a nivel de remuneración determinando si la remuneración percibida por las mujeres y los hombres es igual. La noción de «trabajo de igual valor» es crucial para permitir un amplio abanico de comparación entre diferentes empleos o trabajos. Permite, en efecto, tener en cuenta no sólo los mismos trabajos o trabajos similares sino también las situaciones en las que hombres y mujeres realizan trabajos de naturaleza completamente diferente, como ocurre con frecuencia, pero que tienen en conjunto el mismo valor. Eso también permite tener en cuenta, en la práctica, que ciertos empleos o ciertas profesiones son generalmente ejercidos por mujeres y otros por hombres. Si se quiere eliminar la discriminación, que se instala de forma inevitable si no se reconoce el valor del trabajo realizado por hombres y mujeres sin ningún prejuicio sexista, resulta esencial poder comparar el valor del trabajo en profesiones en las que ese trabajo puede exigir competencias diferentes y también implicar responsabilidades y condiciones de trabajo diferentes. Por ejemplo, el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se ha utilizado en ciertos países para comparar las remuneraciones percibidas por hombres y mujeres que ejercen profesiones diferentes, para lo cual se han comparado, por ejemplo, el trabajo de supervisor en una residencia de ancianos (trabajo que realizan principalmente las mujeres) con el de agente de seguridad de locales de oficinas (que realizan principalmente los hombres), o el trabajo de supervisor de cantina (en el que predominan las mujeres) con el de vigilante de parques y jardines (que realizan principalmente los hombres).

En lo que respecta a la definición del término «remuneración» prevista en el artículo 1, a), del Convenio, la Comisión recuerda que la artículo 7.8 del Código del Trabajo, revisado en 2016, sigue excluyendo de su ámbito de aplicación la atención sanitaria, el alojamiento y los subsidios de alojamiento, las asignaciones de transporte, las asignaciones familiares legales, los gastos de viaje y las «prestaciones acordadas exclusivamente con miras a facilitar al trabajador el cumplimiento de sus funciones». La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la exclusión de estos elementos de la definición de «remuneración» tiene por objeto que no sean imponderables y, en consecuencia, que esta exclusión beneficie a los trabajadores. La Comisión recuerda que con miras a aplicar el principio del Convenio se necesita una definición tan amplia como sea posible de «remuneración» para evitar que no se tengan en cuenta gran parte de las prestaciones percibidas debido al empleo a las que se puede asignar un valor monetario al realizarse la comparación sólo sobre la base del salario básico. Esos complementos, que a menudo tienen una importancia considerable y constituyen una parte en constante aumento de los ingresos, pueden estar en la base de desigualdades de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión considera que el hecho de que las prestaciones mencionadas en el artículo 7.8 no sean imponderables no es incompatible con que, con miras a aplicar el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, se defina «remuneración» como el «salario o sueldo ordinario básico o mínimo y todas las demás prestaciones, que paga directamente o indirectamente, en efectivo o en especie, el empleador al trabajador debido al empleo de este último». **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el Código del Trabajo, con miras a incluir expresamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y para que este principio se aplique a todos los elementos de la remuneración tal como se define en el artículo 1, a), del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

Artículos 1 y 2 de Convenio. Protección de los trabajadores contra la discriminación basada en todos los motivos previstos por el Convenio en todos los aspectos del empleo y de la profesión. Legislación. Sectores público y privado. En lo que respecta a la función pública, la Comisión toma nota con **interés** de la introducción en la ley núm. 16/013 de 15 de julio de 2016, por la que se establece el estatuto de los funcionarios de carrera de los servicios públicos del Estado y se deroga el estatuto anterior (ley núm. 81/003 de 17 de julio de 1981), de disposiciones generales relativas a la discriminación según las cuales «el funcionario puede ejercer el empleo al que ha sido destinado [...] sin discriminación alguna» (artículo 19) y «no podrá haber discriminación entre candidatos por motivos que no sean los previstos o autorizados por las leyes» (artículo 87). Sin embargo, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha aprovechado la ocasión que ofrecía la adopción de la ley núm. 16/010 de 15 de julio de 2016, por la que se modifica y completa la ley núm. 015-2002 sobre el Código del Trabajo para introducir disposiciones que definan y prohíban toda forma de discriminación basada como mínimo en todos los motivos enumerados en el Convenio y que cubran todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluida la contratación. A este respecto toma nota de que el Gobierno indica que aunque por el momento no se prevé realizar ninguna nueva revisión del Código del Trabajo, ha decidido incluir en la legislación nacional la definición de discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación de conformidad con el Convenio. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que en un futuro próximo adopte las medidas necesarias para que toda discriminación directa o indirecta, basada como mínimo en todos los motivos enumerados en el Convenio y que cubra todos los aspectos del empleo y la ocupación, se defina y prohíba expresamente en el Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todo procedimiento establecido para abordar los casos de discriminación de funcionarios públicos o candidatos a un puesto en la función pública así como sobre todos los casos de discriminación notificados y abordados.**

Artículo 1, 1), a), Discriminación basada en el sexo. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para luchar contra la posición de inferioridad que las mujeres ocupan en la sociedad. En lo que respecta a la legislación, la Comisión señaló el carácter discriminatorio contra las mujeres de los artículos 448 y 497 de la ley núm. 87/010 de 1.º de agosto de 1987 sobre el Código de la Familia, y del artículo 8, 8), de la ley núm. 81/003 de 17 de julio de 1981 relativa al estatuto profesional del personal de la administración pública, según los cuales una mujer casada debe obtener la autorización de su marido para trabajar. La Comisión toma nota con **satisfacción** de que: i) tras la adopción de la ley núm. 008 de 15 de julio de 2016 de enmienda al Código de Familia, se ha modificado el artículo 448 que ahora prevé que «los esposos deben ponerse de acuerdo sobre todos los actos jurídicos a través de los que se obligan a cumplir los compromisos adquiridos», y en virtud del artículo 449 (nuevo) «en caso de desacuerdo persistente, el cónyuge perjudicado podrá recurrir al Tribunal de Paz»; además se ha derogado el artículo 497 relativo a los bienes adquiridos por la mujer en el ejercicio de una profesión, y ii) tras la adopción de la ley núm. 16/013 de 15 de julio de 2016 relativa al estatuto profesional del personal de la función pública, se ha derogado el artículo 8, 8), del estatuto anterior y, en consecuencia, la autorización del marido ya no es una de las condiciones previas a la contratación (artículo 5 del nuevo estatuto).

Además, la Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la ley núm. 15/013 de 1.º de agosto de 2015 sobre las modalidades de aplicación de los derechos de la mujer y la paridad, que tiene por objeto, entre otras cosas, la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer así como la protección y la promoción de sus derechos en todos los ámbitos, *inter alia* en los ámbitos social, económico, político, administrativo, cultural, judicial y de la seguridad. Esta ley establece el marco jurídico general que permite la adopción de medidas concretas para luchar contra la discriminación de la mujer y promover la igualdad de género. En lo que respecta a la discriminación, la Comisión señala que la ley contiene una definición de «discriminación» que refleja la del artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. La ley también prevé expresamente que está «prohibido discriminar a los trabajadores debido a su sexo, basándose particularmente en su estado civil o su situación familiar o, en lo que respecta a las mujeres, en el hecho de que estén o no embarazadas» (artículo 20). La Comisión toma nota de que «[...] la prohibición de toda discriminación se aplica a toda práctica negativa ligada especialmente a la contratación, la atribución de tareas, las condiciones de trabajo y la remuneración y otras prestaciones sociales, así como a la promoción y al hecho de dar por terminado el contrato de trabajo» (artículo 21). Según la ley, el Estado debe adoptar «medidas para eliminar toda práctica perjudicial para los derechos de la mujer en lo que respecta al acceso a la propiedad y a la gestión, la administración, el disfrute y la disposición de los bienes» (artículo 9). También prevé que el Estado debe adoptar «medidas adecuadas para modificar los patrones y modelos de comportamiento sociocultural de la mujer y del hombre a través de la educación pública con miras a eliminar todas las prácticas culturales negativas y las prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de uno u otro sexo y en los roles estereotipados de la mujer y del hombre» (artículo 24). Adicionalmente, la ley prohíbe todos los estereotipos y clichés sexistas a todos los niveles de la enseñanza, especialmente en la orientación escolar y la elección de carrera (artículo 11). Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus recientes observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, habiendo señalado la persistencia de estereotipos sexistas, pidió al Gobierno que adoptara medidas a fin de «reforzar las actividades educativas y de sensibilización de la población, incluidos los jefes tradicionales, en la lucha contra las prácticas discriminatorias tradicionales y perjudiciales para la mujer y luchar contra los estereotipos de género».

referentes a la subordinación de la mujer al hombre y a sus funciones y responsabilidades respectivas en la familia y la sociedad» (documento CCPR/C/COD/CO/4, 30 de noviembre de 2017, párrafos 15 y 16). **Considerando que estas disposiciones legislativas constituyen un progreso importante en la lucha contra la discriminación de las mujeres en la educación, la formación y la orientación profesional, así como en el empleo y la ocupación, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas en aplicación de la ley núm. 15/013 de 1.º de agosto de 2015 sobre las modalidades de aplicación de los derechos de la mujer y la paridad para eliminar toda forma de discriminación, en particular medidas para eliminar toda práctica basada en la idea de la inferioridad o superioridad de uno u otro sexo o en los roles estereotipados de la mujer y del hombre, así como los estereotipos sexistas en materia de educación y orientación escolar. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas previstas para eliminar toda práctica perjudicial para los derechos de la mujer en lo que respecta al acceso a la propiedad y a la gestión, la administración, el disfrute y la disposición de bienes, tal como se prevé en la ley de 2015.**

Discriminación basada en el sexo. Licencias en la función pública. La Comisión **lamenta** que el Gobierno no haya aprovechado la ocasión que ofrecía la adopción de la ley núm. 16/013 de 15 de julio de 2016 relativa al estatuto profesional del personal de la función pública, que derogó el estatuto anterior (ley núm. 81/003 de 17 de julio de 1981), para modificar el artículo 25, 2), según el cual el funcionario de sexo femenino que ha disfrutado de una licencia de maternidad no puede, durante el mismo año, utilizar su derecho a la licencia de reconstitución (vacaciones anuales pagadas). Observa, en efecto, que el artículo 30 del nuevo estatuto reproduce de forma idéntica el artículo 25, 2), del estatuto anterior. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 30 de la ley núm. 16/013 de 15 de julio de 2016 a fin de suprimir toda discriminación basada en el sexo en materia de licencias en la función pública.**

Discriminación basada en la raza y en el origen étnico. Pueblos indígenas. Desde hace muchos años, la Comisión destaca la marginación y la discriminación de la que son objeto los pueblos indígenas «pigmeos» en lo que respecta al ejercicio de sus derechos económicos sociales y culturales, en particular, en materia de acceso a la educación, la salud y el mercado de trabajo, e insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas en el empleo y la ocupación. En particular, la Comisión hizo referencia a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD). La Comisión **lamenta** que el Gobierno indique de nuevo que las personas que pertenecen a pueblos indígenas se benefician de todos los derechos garantizados por la Constitución y que se refiera al Código Forestal de 29 de abril de 2002 (artículos 36 a 44) que, a su juicio, garantiza a los pueblos indígenas y a las comunidades locales el derecho a disfrutar plenamente de sus recursos forestales y a beneficiarse de las infraestructuras socioeconómicas que puedan establecerse gracias a un posible contrato de concesión forestal entre el Estado y un operador forestal. Además, la Comisión observa que el Gobierno ya no menciona el proyecto de ley para garantizar la protección de los pueblos indígenas que, según indicó en su memoria anterior, estaba siendo examinado por el Parlamento. Asimismo, toma nota de que, en sus recientes observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló su preocupación por: «a) la situación general de precariedad y de vulnerabilidad de las poblaciones pigmeas; b) la información sobre la discriminación de las que estas últimas son objeto, en particular en los sectores de la salud y de la educación, y c) la posición del Estado parte que asimila los pueblos indígenas a las ‘comunidades locales’ en la legislación, y en particular en el Código Forestal». Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló su preocupación por el retraso en la adopción de la ley de derechos de los pueblos indígenas y lamentó las violaciones de los derechos humanos y los desplazamientos forzados de que son víctimas las poblaciones pigmeas en la provincia de Tanganika (documento CCPR/C/COD/C/4, 30 de noviembre de 2017, párrafos 49 y 50). En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión alienta con firmeza a los países a que evalúen la situación de empleo y de ocupación de todos los grupos étnicos que habitan dentro de sus fronteras, en particular los pueblos indígenas y tribales, así como, el grado de discriminación al que están sujetos, y que faciliten dicha información en sus memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución (párrafo 772). Recuerda asimismo que una verdadera política en materia de igualdad también debe incluir medidas a fin de corregir las desigualdades de hecho de las que son víctimas ciertas partes de la población y a tener en cuenta sus necesidades especiales. **Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar sin demora medidas (incluyendo medidas legislativas) para: i) luchar contra los prejuicios y los estereotipos de los que son víctimas los pueblos indígenas y sensibilizar a otras partes de la población sobre su cultura y su modo de vida a fin de favorecer la igualdad de trato y la tolerancia mutua; ii) permitir que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan acceder, en pie de igualdad con los otros miembros de la población, a todos los niveles de enseñanza y de formación profesional y al empleo, así como a los recursos, en particular a tierras, que les permitan ejercer sus actividades tradicionales y de subsistencia, y iii) garantizar que, en términos de condiciones de empleo, incluida la remuneración, las personas pertenecientes a pueblos indígenas que trabajan en el sector agrícola reciban el mismo trato que el resto de la población. La Comisión pide al Gobierno que indique si sigue estando previsto adoptar una ley a fin de proteger a los pueblos indígenas y que, si procede, transmita información precisa sobre el avance de los trabajos legislativos y el contenido del proyecto de texto.**

Artículo 1, b). Legislación. Protección contra la discriminación. Despido. Recordando que el artículo 62 del Código del Trabajo prohíbe cualquier despido por motivos de raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, parto y período postnatal, religión, opiniones políticas, ascendencia nacional, origen social o grupo étnico, la Comisión toma nota con **interés** de la incorporación del «estatus de VIH y el sida real o percibido» en la lista de motivos

prohibidos, tras la adopción de la ley núm. 016/010, de 15 de julio de 2016, por la que se modifica y complementa la ley núm. 015-2002, que establece el Código del Trabajo. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier caso de despido basado en los motivos antes mencionados que haya sido tratado por la Inspección del Trabajo o los tribunales.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eslovaquia

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 2002)

Aplicación práctica. Falta de información estadística. La Comisión toma nota de la reiterada indicación del Gobierno en su memoria, según la cual no está en condiciones de comunicar la información estadística solicitada por la Comisión, dado que no se dispone de esa información. La Comisión señala a la atención del Gobierno la importancia de compilar y analizar la información estadística suficientemente detallada, con el fin de determinar y evaluar la actual situación de los trabajadores con responsabilidades familiares, diseñar respuestas adecuadas y supervisar y evaluar el impacto de las medidas que se están aplicando. **Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual está en la actualidad en desarrollo un nuevo sistema de estadística central, con una nueva metodología para el acopio de datos estadísticos, la Comisión confía en que el Gobierno intensificará sus esfuerzos para compilar datos completos y suficientemente detallados sobre las cuestiones comprendidas en el Convenio. Mientras tanto, solicita al Gobierno que comunique toda la información disponible, incluidos los datos estadísticos desglosados por sexo, estudios, encuestas o informes que puedan permitir a la Comisión una evaluación completa de la manera en que se aplican las disposiciones del Convenio en la práctica, y su evaluación de qué manera se realizan progresos para abordar las desigualdades existentes entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y entre estos trabajadores y los trabajadores sin esas responsabilidades.**

Artículos 4, a), y 7 del Convenio. Medidas para promover la libre elección de empleo y la reintegración en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de la reiterada indicación del Gobierno, según la cual varias disposiciones del Código del Trabajo y la Ley núm. 5/2004 Coll. sobre los Servicios del Empleo, se dirigen a permitir que los trabajadores con responsabilidades familiares ejerzan su derecho de libre elección de empleo y reincorporarse al mercado de trabajo después de la maternidad o de la licencia parental. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, como consecuencia del proyecto «Trabajo y familia», se crearán nuevos puestos de trabajo para los cuales sólo se podrá contratar a las personas con hijos menores de seis años de edad. El Gobierno indica que cubrirá hasta el 90 por ciento de los gastos reales de los empleadores en tal caso, y hasta el 50 por ciento de los gastos reales de los empleadores que empleen a personas con hijos de edades comprendidas entre los seis y los diez años. Con respecto al número de hombres y de mujeres con responsabilidades familiares que participan en el Programa nacional de educación y preparación para el mercado de trabajo, y el número de aquellos que entraron posteriormente en el mercado laboral, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual no se dispone de esta información. Sin embargo, la Comisión toma nota con **preocupación** de que, en el marco de la Estrategia nacional de empleo hasta 2020, el Gobierno reconoce que la presencia de hijos menores de seis años de edad en la familia, reduce de manera significativa la tasa de empleo de las mujeres (menos de 40 por ciento), mientras que el empleo de los hombres más bien aumenta (más del 83 por ciento). Toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por los estereotipos profundamente arraigados en relación con las mujeres y los hombres en la familia, donde las mujeres siguen soportando una parte desproporcionada de las responsabilidades familiares y por la falta de medidas eficaces para promover la conciliación del trabajo y la vida familiar, lo que constituye un obstáculo para el acceso de las mujeres al empleo, especialmente para las madres con hijos pequeños (documento CEDAW/C/SVK/CO/5-6, 25 de noviembre de 2015, párrafos 18 y 28). **En relación con sus últimos comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) en los que destacó el desequilibrio en la participación en las responsabilidades familiares y en el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para superar los persistentes obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores con responsabilidades familiares, y más concretamente las madres con hijos pequeños, en el ejercicio de su derecho a la libre elección de empleo y a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y participar en la formación profesional. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas a tal fin, incluso en el marco del proyecto «Trabajo y familia», y sobre los resultados obtenidos al respecto, al tiempo que especifique el número de mujeres y de hombres con hijos menores de 6 años de edad y con hijos con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años que recibieron empleo u otros beneficios en virtud de estas medidas. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita una copia de todo convenio colectivo que contenga disposiciones específicas a favor de los trabajadores con responsabilidades familiares.**

Artículo 6. Programas educativos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, como consecuencia del proyecto «Trabajo y familia», se pusieron en marcha varias campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar sobre los objetivos del proyecto. También toma nota del concurso anual a escala nacional, «Empleador favorable a las familias», organizado por el Gobierno, y que se dirige a sensibilizar al público acerca de las

buenas prácticas para una mejor conciliación del trabajo y de la vida familiar. El Gobierno añade que, en un nivel más local, los municipios y las regiones autónomas ponen en marcha medidas encaminadas a ayudar a los empleadores en la introducción de medidas adicionales para apoyar la conciliación del trabajo y la vida familiar. Sin bien saluda esas iniciativas, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el CEDAW expresó su preocupación por la existencia de campañas enérgicas por parte de agentes no estatales, incluyéndose las organizaciones religiosas y cívicas, los medios de comunicación y los políticos, en defensa de los valores familiares tradicionales, haciendo excesivo hincapié en el papel de la mujer como madre y cuidadora, y critican la igualdad de género, tachándola de «ideología de género» (documento CEDAW/C/SVK/CO/5-6, párrafo 18). ***La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para adoptar medidas efectivas y proactivas, como campañas de sensibilización e iniciativas educativas, para promover una participación más equitativa de hombres y de mujeres en las responsabilidades familiares, así como una comprensión más amplia del público de los diversos aspectos del empleo de los trabajadores con responsabilidades familiares. Solicita el Gobierno que siga comunicando información sobre toda encuesta, estudio o programa que se haya emprendido a tal fin, así como información específica sobre el impacto de esas iniciativas y todo seguimiento de las medidas aplicadas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

España

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), recibidas el 11 de agosto de 2017, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 17 de agosto de 2017, ambas transmitidas también por el Gobierno, así como de las respuestas del Gobierno. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que apoya y hace suyas las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) transmitidas por el Gobierno, así como de la correspondiente respuesta del Gobierno.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial por motivo de género. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas concretas para dar tratamiento adecuado a la brecha salarial por motivo de género y, también, que tomara medidas en el ámbito de la educación y la formación profesional, para dar tratamiento a la marcada segregación ocupacional y permitir un mayor acceso de las mujeres a carreras no tradicionales y puestos de responsabilidad, y enviara información al respecto. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa sobre las varias medidas adoptadas para promover el principio del Convenio en las empresas, incluyendo información sobre la implementación del distintivo «Igualdad en la Empresa», las subvenciones para la elaboración e implementación de planes de igualdad en las empresas, y el servicio de asesoramiento, sensibilización, formación e información ciudadana para la elaboración de planes de igualdad gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades el cual, entre otras cosas, pone a disposición de las empresas herramientas de autodiagnóstico de brecha salarial de género y de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. La Comisión también toma nota del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la vigilancia permanente en las empresas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de los resultados de las campañas en materia de discriminación salarial por motivo de género. Respecto de la segregación ocupacional vertical, la Comisión toma nota de la extensa información proporcionada por el Gobierno acerca de los varios programas realizados en colaboración con las empresas con miras a fomentar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones, incluidos el Programa Más Mujeres, Mejores Empresas, el Proyecto Promociona, el Programa de Desarrollo para Mujeres Directivas y el Proyecto de Emprendimiento y Fomento del Liderazgo de las Mujeres en los Órganos de Decisión de las Sociedades del Sector Agroalimentario. En lo concerniente a la segregación horizontal, el Gobierno informa que en los últimos años se han producido importantes avances en materia de igualdad en educación y formación, pero quedan importantes retos por abordar especialmente en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A fin de eliminar la «brecha científica», el Gobierno indica que cuenta con la Agenda digital para España de 2013 y el Plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad de la información 2014-2017, en el marco de los cuales se han realizado campañas de sensibilización y de formación para promover las habilidades de las mujeres en las tecnologías de la información y comunicación, y acciones de fomento y apoyo al emprendimiento femenino a través de estas tecnologías.

Por otro lado, la Comisión toma nota de la Encuesta anual de estructura salarial publicada en 2018, la cual indica que: i) el salario anual femenino en 2016 representó el 77,7 por ciento del masculino; ii) las actividades económicas que presentaron el mayor salario anual fueron suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, actividades financieras y de seguros, e información y comunicaciones, mientras que hostelería y otros servicios tuvieron los menores salarios medios anuales, y iii) en lo que respecta a los salarios por ocupación, las ocupaciones menos remuneradas fueron las referidas a trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes), trabajadores de los servicios de restauración y comercio, y trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas, las cuales tuvieron todos unos salarios medios inferiores al promedio nacional. A este respecto, la Comisión también toma nota del informe «La situación de las

mujeres en el mercado del trabajo 2017», disponible en el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según el cual casi el 89 por ciento de las mujeres con empleo desarrollan su actividad en el sector de servicios.

La Comisión toma nota de que, según la UGT, las medidas adoptadas por el Gobierno son ineficaces e insuficientes para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La UGT señala que ha manifestado al Gobierno la necesidad de elaborar y aprobar una ley de igualdad salarial de género para poder avanzar en la materia. También agrega que, en el contexto actual de precarización del mercado del trabajo, los planes de igualdad a nivel de las empresas no están siendo eficaces para lograr la igualdad retributiva entre trabajadores y trabajadoras; son muy pocos los planes realmente negociados con los representantes de los trabajadores y prácticamente ningún plan contempla medidas para la consecución de la igualdad salarial. La Comisión toma nota asimismo de que la CCOO señala que las medidas a las que se refiere el Gobierno, tales como Más Mujeres, Mejores Empresas, Proyecto Promociona, Programa de Desarrollo para Mujeres Directivas, están destinadas a mujeres que ocupen puestos directivos o formen parte de comités de dirección, y es necesario tomar medidas que se dirijan también a las mujeres en los niveles salariales más bajos. A este respecto, la CCOO indica que las mujeres representan el 70 por ciento de la población asalariada con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La Comisión también toma nota de las observaciones de la CEOE que actualizan la memoria del Gobierno respecto de varios puntos, y particularmente sobre la implementación del Proyecto Promociona.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la UGT y la CCOO, en la cual el Gobierno, entre otras cosas: i) señala, que las causas subyacentes de la brecha salarial de género son numerosas y complejas; ii) informa que se está estudiando el diseño de nuevas medidas para afrontar la desigualdad salarial a partir de unos proyectos realizados durante los años 2014 y 2015 en colaboración con universidades, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales; iii) recuerda que las empresas con más de 250 trabajadores están obligadas por ley a negociar e implementar un plan de igualdad y las empresas que implementan voluntariamente planes de igualdad tienen que asegurar la participación de la representación legal de la plantilla en las fases de elaboración e implantación; iv) subraya que en las convocatorias de subvenciones para planes de igualdad mencionadas anteriormente se establece que los planes a financiar deberán impulsar medidas concretas en una serie de áreas, incluidas el acceso al empleo y condiciones de trabajo, que están orientadas a combatir la segregación horizontal y vertical de género y alcanzar la igualdad remunerativa, y recuerda la herramienta de diagnóstico de brecha salarial y otros que se ponen a disposición de las empresas; v) reitera que la legislación laboral española ya declara y garantiza la igualdad en el empleo, incluso en materia de remuneración reconociendo plenamente el principio del Convenio; vi) agrega que la Ley núm. 3 de 2012 sobre Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado laboral suprimió las categorías profesionales en el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, por considerarse que en muchas ocasiones las categorías eran responsables de discriminaciones salariales para las mujeres por vía indirecta, y dispuso que la definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación directa e indirecta entre hombres y mujeres (artículo 22, 3), y vii) reconoce que la brecha salarial sigue siendo un grave problema que requiere la adopción de medidas adicionales que permitan su reducción y resalta la importancia de la negociación colectiva a este propósito. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para reducir la brecha salarial de género, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y empleadores, y monitoree el impacto de las medidas adoptadas con miras a identificar e implementar los ajustes que se revelen necesarios. La Comisión también pide al Gobierno que: i) continúe enviando información sobre las medidas adoptadas o previstas, incluida toda medida de promoción y capacitación sobre el principio del Convenio y sobre la herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género y de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género puestas a disposición de las empresas por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y ii) incluya información sobre toda medida adoptada para dar tratamiento a las causas subyacentes de la brecha salarial. Sírvasse también enviar información estadística desglosada por sexo sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado del trabajo (indicando los sectores de ocupación y nivel de ingresos), en la educación y en la formación profesional.***

Inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que continuara enviando información sobre las medidas adoptadas y las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo, en particular sobre las actuaciones en virtud de la instrucción núm. 3/2011 sobre la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre los resultados de las campañas específicas realizadas por la Inspección del Trabajo en materia de discriminación salarial de género en 2014, 2015 y 2016, las cuales concernieron, respectivamente, a 446, 414 y 408 empresas en todo el país. La Comisión toma nota de que en 2014 se detectó la existencia de cuatro empresas en las que existía discriminación salarial por motivo de sexo; un igual número de empresas en 2015, y dos empresas en 2016. Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según la CCOO, la acción de la inspección del trabajo es insuficiente y, aunque la herramienta para detectar la existencia de brecha salarial es un avance, no hay constancia del número de empresas que la han utilizado y si, en caso de detectar brecha, la han corregido. La Comisión toma nota de que, en su respuesta a las observaciones de la CCOO, el Gobierno señala que las actuaciones de la Inspección del Trabajo relativas a la aplicación del principio del Convenio constituyen una parte central de la actividad de la inspección más allá del desarrollo de la campaña específica y que dicha campaña complementa y no totaliza el conjunto de la actividad desarrollada por el sistema de inspección del trabajo en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. El Gobierno agrega datos de las actuaciones de la Inspección del Trabajo realizadas en materia de igualdad de género. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre las medidas adoptadas y las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo en materia de igualdad de remuneración***

entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Recordando la persistencia de una brecha salarial importante y el hecho de que el 89 por ciento de las mujeres con empleo desarrollan su actividad en el sector de servicios con salarios bajos, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas específicas tomadas o previstas por la Inspección del Trabajo con miras a fortalecer la aplicación de las leyes vinculadas al Convenio.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), recibidas el 11 de agosto de 2017, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 17 de agosto de 2017, ambas transmitidas también por el Gobierno, así como de las respuestas correspondientes del Gobierno. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que apoya y hace suyas las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) transmitidas por el Gobierno, así como de la correspondiente respuesta del Gobierno. La Comisión toma nota de que en sus observaciones la CEOE hace comentarios fundamentalmente de orden lingüístico y terminológico que fueron incorporados por el Gobierno a su memoria.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación por motivo de raza, color, religión y ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que garantizara que las acciones y medidas previstas en el marco del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2011-2014, y en particular en el marco de la estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, cuenten con el presupuesto adecuado para su realización. Le pidió también que: i) evaluara el impacto de dichas acciones y medidas en el tratamiento de la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional de los hombres y las mujeres, en particular con respecto a la situación de los trabajadores migrantes y de los romaníes, y ii) informara sobre la elaboración del mapa de la discriminación en España — el cual implicaba la realización de encuestas de percepción y la recopilación sistemática de datos empíricos y oficiales sobre denuncias, infracciones, sanciones, faltas y delitos de contenido discriminatorio — y las medidas adoptadas como consecuencia del mismo, los obstáculos y las dificultades encontrados. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa que en el marco del proyecto «Mapa de la discriminación en España» se realizó por primera vez una encuesta integral sobre percepción de la discriminación en el país en 2013 que fue replicada en 2016. El Gobierno indica que se han puesto en marcha varias medidas sobre la base de las conclusiones de estas encuestas y se avanza en la recopilación sistemática de datos empíricos y oficiales sobre denuncias, infracciones, sanciones, faltas y delitos con contenido discriminatorio. La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa sobre la publicación de guías sobre «cómo actuar ante casos de discriminación y delitos de odio e intolerancia» dirigidas a la ciudadanía en general y al personal técnico de las entidades sociales y las organizaciones no gubernamentales, y de varios programas de formación sobre igualdad y no discriminación destinados a empleados públicos y abogados.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la UGT indica que no existe una dotación presupuestaria específica para el PECI y el presupuesto dedicado a la integración de la población extranjera ha ido disminuyendo desde 2012. La UGT también señala que, si bien el PECI preveía una evaluación intermedia, una evaluación externa en su última etapa de aplicación y una evaluación final, estas evaluaciones no se realizaron. La UGT agrega además que el Gobierno no ha manifestado ninguna intención de acometer la elaboración de una tercera fase del PECI.

La Comisión toma asimismo conocimiento del informe elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia sobre la «integración de los hijos de inmigrantes en el mercado laboral», el cual relata, por un lado, que los niveles educativos alcanzados por los autóctonos son significativamente superiores a los alcanzados por los hijos de inmigrantes (61 por ciento frente al 37 por ciento tienen formación profesional superior o estudios universitarios), y, por otro, que las diferencias existentes en los niveles educativos no llegan a explicar suficientemente las diferencias en los tipos de trabajos que obtienen unos y otros, lo que parecería apuntar a la existencia de un cierto nivel de discriminación por parte de las empresas a la hora de seleccionar y de contratar jóvenes de origen extranjera para los distintos puestos de trabajo. El informe sugiere algunas posibles actuaciones al respecto, entre las cuales figuran la oferta a los jóvenes de servicios permanentes de orientación y apoyo para dirigir su carrera profesional y las acciones de sensibilización dirigidas a las empresas sobre discriminación con miras a inducirlos a poner en práctica mecanismos que prevengan el riesgo de introducir juicios de índole racista o xenófoba en los procesos de selección de personal.

Por otro lado, la Comisión toma conocimiento del informe «Evolución de la discriminación en España», de 24 de agosto de 2018, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que analiza la discriminación en el país partiendo de las encuestas realizadas en 2013 y 2016, mencionadas anteriormente, y evidencia, entre otros, los aspectos siguientes: i) en términos de discriminación percibida, en el ámbito laboral se percibe una mayor discriminación en 2016 en la selección para un puesto de trabajo y, particularmente, a la hora de acceder a puestos de responsabilidad; ii) es la población de etnia gitana la que sigue percibiéndose como la más perjudicada en el acceso al empleo, y iii) en general, la discriminación por origen étnico o racial continúa siendo la más percibida.

La Comisión también toma nota del Plan operativo 2018-2020 de la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012-2020, disponible en el sitio web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la cual prevé, entre sus objetivos, mejorar el acceso al empleo y reducir la precariedad laboral entre la población gitana, y mejorar

su cualificación profesional. La Comisión toma nota de que, según se indica en el Plan Operativo, las actuaciones a impulsar durante los próximos años estarán dirigidas a: i) fomentar una mayor participación de la población gitana joven y adulta en los programas de empleo y de mejora de la empleabilidad; ii) complementar los programas de empleo y de mejora de la empleabilidad dirigidos al conjunto de la población con programas específicos en coordinación con las entidades del movimiento asociativo gitano, y iii) avanzar hacia una mejor coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo. ***La Comisión alienta al Gobierno a que continúe monitoreando la evolución de la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional en el país, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y empleadores. Le pide que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas como resultado de los diagnósticos realizados, en particular en atención a los hijos de inmigrantes, los trabajadores migrantes, incluso los trabajadores migrantes del hogar, y los romaníes, así como sobre las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012-2020, y sus resultados. La Comisión también pide al Gobierno que evalúe el impacto de dichas acciones y medidas en el tratamiento de la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional, y proporcione información al respecto.***

Artículo 2. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que continuara tomando medidas proactivas con miras a incrementar el número de empresas que adoptan planes de igualdad, indicando si dichos planes son el resultado de negociaciones colectivas. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que enviara información sobre las medidas adoptadas en el marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014-2016 y del Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial 2014-2016, sobre el modo en que dichas medidas se adaptan a la actual situación de crisis y el impacto de tales medidas en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Le solicitó también información sobre el resultado de la evaluación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (núm. 3/2007) de 22 de marzo de 2007. La Comisión toma nota de que el Gobierno proporciona información respecto de las convocatorias de subvenciones para la elaboración de planes de igualdad, con las cuales se financiaron 273 proyectos en el período 2014-2016, así como sobre el servicio de asesoramiento, sensibilización, formación e información ciudadana para la elaboración de planes de igualdad en las empresas, gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). En cuanto a la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de dichos planes, el Gobierno recuerda que en virtud del artículo 45, apartado 5, de la ley orgánica núm. 3/2007 «la elaboración e implantación de planes de igualdad es voluntaria [para las empresas con menos de 250 trabajadores], previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras». En el caso de empresas con más de 250 trabajadores, dichos planes deben ser objeto de negociación. El Gobierno también indica que informará sobre los resultados de la evaluación del PEIO 2014-2016, en cuanto estén disponibles. La Comisión toma nota además de que el Gobierno indica que el Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial 2014-2016 no pudo ser aprobado. En lo que respecta a la evaluación de la ley orgánica núm. 3/2007, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se elaboró un informe periódico 2012-2013 y un informe sobre las principales actuaciones 2014-2015, los cuales evidencian que la situación socio-laboral de las mujeres va mejorando lentamente y se van alcanzando mayores cotas de igualdad en casi todos los ámbitos, pero sigue habiendo obstáculos y resistencias a estos cambios.

Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según la CCOO, a pesar de que en estos últimos años se han negociado y firmado un número importante de planes de igualdad, son aún muchas las empresas en que este proceso no se ha iniciado. La CCOO señala que es difícil conocer con precisión el número de planes de igualdad firmados hasta la fecha o en proceso de negociación. También manifiesta que hay resistencia por parte de las empresas a la hora de aportar datos, en particular datos salariales, para realizar un diagnóstico de situación previo a la elaboración de un plan de igualdad. La Comisión toma nota también de que, según las observaciones de la CCOO, son muy pocos los convenios que establecen medidas de acción positiva en lo que concierne a la contratación y promoción del personal. La CCOO señala la práctica encontrada en algunos convenios de determinar que «a igualdad de méritos y capacidad se elegirá a la persona con mayor antigüedad en la empresa», lo que beneficia a la promoción de los hombres, ya que las mujeres suelen incorporarse al mercado laboral más tarde, además de tener interrupciones de carrera debido a las tareas de cuidados. En cuanto al PEIO 2014-2016, la CCOO indica que las medidas previstas eran genéricas e imprecisas y no consta información sobre la preparación de un nuevo plan. La CCOO también recuerda que la quinta disposición final de la ley orgánica núm. 3/2007 dispone que «el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, en función de la evolución habida, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes» y señala que se encargó un informe del impacto de la ley a la universidad, lo que no puede considerarse como sustitutorio de la evaluación mandatada por la ley en la disposición mencionada. La Comisión toma nota de que en su respuesta a las observaciones de la CCOO el Gobierno informa que: i) el PEIO se ha desarrollado a través de planes específicos, a saber el Plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad de la información, aprobado en 2014, y el Plan para la promoción de las mujeres del medio rural, aprobado en 2015, y ii) el IMIO está preparando líneas básicas de un nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades. En relación con las cuestiones de la segregación ocupacional y la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, la Comisión se remite a sus comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). La Comisión recuerda el papel importante de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la elaboración de las políticas y planes nacionales, la promoción de su aceptación y observancia y la

evaluación de su impacto. Los procesos de cooperación y consulta previstos en el Convenio contribuyen a asegurar que las medidas sean objeto de amplio apoyo y que las políticas se lleven efectivamente a la práctica (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 858). ***La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas proactivas, en colaboración con los interlocutores sociales, con miras a incrementar el número de empresas que adoptan planes de igualdad. La Comisión pide igualmente al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la evaluación del PEIO 2014-2016 así como sobre toda medida prevista o tomada a raíz de la misma con miras a promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en los sectores privados y públicos. Sírvasse también informar sobre la aplicación e impacto del nuevo Plan estratégico de igualdad de oportunidades.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Evolución legislativa. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, 2012. De conformidad con su artículo 2, esta ley tiene la finalidad de establecer igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en diversos ámbitos, entre otros, económico, social y educativo, tanto en el sector público como en el privado. Los artículos 7 y 8 prevén la adopción de medidas especiales con carácter provisional para superar la desigualdad estructural de género existente, en particular mediante medidas positivas y promocionales en este sentido. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para la aplicación general de esta ley y sus repercusiones sobre el alcance de la igualdad de género tanto en el sector público como en el privado. La Comisión también pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas especiales adoptadas en virtud de los artículos 7 y 8 con objeto de alcanzar la igualdad en el empleo y la ocupación, así como cualesquiera otras medidas especiales de protección en favor de determinadas categorías de personas.***

Acoso sexual. La Comisión toma nota con **interés** de que el artículo 3, 3), de la nueva ley prohíbe expresamente el acoso sexual en los sectores público y privado, y que el acoso sexual está definido en el artículo 4, 7), como todo tipo de comportamiento de naturaleza sexual no deseado, que cree un ambiente de trabajo intimidante u hostil. ***La Comisión pide al Gobierno que confirme que la ley mencionada cubre tanto el acoso sexual que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como el derivado de un ambiente de trabajo hostil. Asimismo pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas prácticas tomadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre casos de acoso sexual que fueron tratados por las autoridades administrativas o judiciales pertinentes, indicando las sanciones impuestas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Fiji

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 78 de la Promulgación de Relaciones de Empleo (ERP), de 2007, no da plena expresión legislativa al principio del Convenio puesto que limita la comparación de las remuneraciones percibidas por hombres y mujeres a aquellos con las «mismas calificaciones o calificaciones esencialmente similares» empleados en las «mismas circunstancias o en circunstancias esencialmente similares». La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha trasladado el proyecto de ley para enmendar la ERP ante la Comisión Parlamentaria Permanente sobre Derecho, Justicia y Derechos Humanos. No obstante, la Comisión **lamenta** tomar nota de que las enmiendas propuestas al artículo 78 siguen restringiendo la misma remuneración por un trabajo igual a «las personas que tengan las mismas calificaciones o calificaciones esencialmente similares y que trabajen en las mismas circunstancias o en circunstancias esencialmente similares». La Comisión reitera que la legislación sobre la igualdad de remuneración no debería prever únicamente la misma remuneración por un trabajo «igual», «el mismo» o «similar», sino que también debería abordar situaciones en las que hombres y mujeres realizan trabajos distintos que requieren calificaciones diferentes e implican circunstancias distintas, pero que sin embargo, constituyen un trabajo del mismo valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga en cuenta estos comentarios y realice los cambios necesarios en el artículo 78 de la ERP para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y a que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2002)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que la memoria del Gobierno no responde a las cuestiones planteadas en la observación anterior de la Comisión. En consecuencia debe reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, mayo-junio de 2011)

En su observación anterior y a falta de una memoria, la Comisión recordó que una discusión había tenido lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2011. En las conclusiones finales, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que garantizara que los principios consagrados en la Carta del Pueblo para el Cambio, la Paz y el Progreso, adoptada en 2008, se tradujeran en medidas concretas, y a que: i) modifique o derogue las leyes y reglamentos discriminatorios desde el punto de vista racial, entre otros, el reglamento de la educación (establecimiento y registro de escuelas), de 1996; ii) ponga fin efectivamente a las prácticas discriminatorias, y iii) garantice la igualdad en el empleo, la formación y la educación para todas las personas y grupos étnicos. La Comisión de la Conferencia también se ocupó de los derechos de los funcionarios públicos a un trato no discriminatorio y a la igualdad en el empleo, así como de la escasa participación de las trabajadoras, y pidió que se adoptaran medidas al respecto. La Comisión de la Conferencia tomó nota también de las preocupaciones relativas a la dificultad para ejercer el derecho a la libertad sindical en el país, e instó al Gobierno a establecer las condiciones necesarias para un auténtico diálogo tripartito con miras a abordar las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio. **La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a este último punto y le pide que transmita información específica y detallada al respecto.**

Artículo 1, 1), del Convenio. Protección contra la discriminación. Función pública. Legislación. La Comisión recuerda que, en relación con la adopción del decreto sobre relaciones del empleo (enmienda), de 2011 (decreto núm. 21, de 2011), de 13 de mayo de 2011, los empleados del Gobierno, incluidos los maestros, están excluidos del ámbito de aplicación de la promulgación de relaciones de empleo, de 2007 (ERP) y, por consiguiente, de sus disposiciones sobre no discriminación. En lo que atañe a los empleados excluidos y en general a las personas empleadas en la administración pública, la Comisión recibe con beneplácito la adopción del decreto sobre la administración pública (enmienda), de 2011 (decreto núm. 36 de 2011), de 29 de julio de 2011, que inserta, en la Ley de la Administración Pública de 1999, las nuevas partes 2A y 2B, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y sobre oportunidades de igualdad en el empleo, respectivamente. La Comisión toma nota de que el artículo 10B, 2), prohíbe, en todos los aspectos del empleo, la discriminación basada en razones de origen étnico, color, género, religión, ascendencia nacional y origen social, pero omite la opinión política. La Comisión toma nota de que el artículo 10, c), sobre motivos prohibidos de discriminación, ya sea directa o indirecta, se refiere a todos los motivos de discriminación especificados en el *artículo 1, 1), a)*, del Convenio, salvo la opinión política. La Comisión recuerda que, cuando se adoptan disposiciones legales para dar efecto al principio del Convenio, éstas deberían incluir al menos todos los motivos de discriminación especificados en el *artículo 1, 1), a)*, del Convenio. **La Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas necesarias para incluir la opinión política entre los motivos prohibidos de discriminación que figuran en la Ley de la Administración Pública de 1999. La Comisión pide asimismo al Gobierno que señale cómo se protege, en la práctica, a los funcionarios públicos y a los solicitantes de empleo en la administración pública frente a la discriminación basada en motivos de opinión política.**

La Comisión recuerda que la Comisión de la Conferencia tomó nota de que en virtud del artículo 3 del decreto núm. 21 de 2011, se prohíbe toda acción, procedimiento, reclamación o queja «que constituya o pretenda constituir un desafío contra el Gobierno... contra cualquier ministro o comisión de la administración pública... presentada en virtud o al amparo de ésta [Ley de Relaciones de Empleo]», y que había instado al Gobierno a que garantizara que los funcionarios públicos tienen acceso a los órganos judiciales competentes para reivindicar sus derechos y encontrar las medidas de reparación adecuadas. **Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que el Tribunal Supremo tiene competencia para resolver todo recurso judicial presentado ante una decisión de la Comisión de la Administración Pública relativa a la extinción del empleo de funcionarios públicos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el procedimiento, los medios de rescacimiento que tienen los trabajadores excluidos del ámbito de la ERP, y que aleguen discriminación en el empleo u ocupación que constituya un desafío para las autoridades públicas o implique a éstas. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre el número de quejas presentadas, los argumentos alegados, los recursos concedidos y las sanciones impuestas.**

Artículo 1. Igualdad en el acceso a la educación y la formación profesional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el sistema educativo iba a ser sometido a una amplia reforma y pidió al Gobierno que señalara si estaba todavía en vigor el reglamento sobre la educación (establecimiento y registro de escuela), de 1966, según el cual, en el proceso de admisión, puede darse preferencia a los alumnos de una determinada raza o credo. Según la memoria del Gobierno, se está elaborando un proyecto de decreto educativo que derogará la actual Ley de Educación y toda la legislación derivada de ella, incluido el reglamento de 1966. La Comisión recuerda, en este sentido, que el acceso a la educación y a una gran variedad de cursos de formación profesional reviste gran importancia para lograr la igualdad en el mercado de trabajo (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 750). **La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de niños y niñas, hombres y mujeres, de todos los grupos étnicos a la educación y a la formación profesional, y pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para aplicar la reforma del sistema educativo, incluyendo la adopción del nuevo decreto sobre la educación, así como los resultados obtenidos. La Comisión pide al Gobierno que clarifique si, en virtud del artículo 26, 3), del proyecto de decreto sobre la educación, aún pueden alegarse motivos de raza, edad, discapacidad o religión, posiblemente en combinación con otros motivos, como una de las razones para denegar la admisión a la educación escolar, y a que especifique, en el caso de que existan, motivos sobre los cuales puede denegarse la admisión a la escuela. La Comisión reitera su solicitud anterior de que el Gobierno comunique información estadística sobre el número de escuelas que aplican la raza o el credo como requisito de admisión, así como del número de alumnos matriculados en esas escuelas.**

Artículo 2. Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato con independencia de la raza, el color y la ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Consejo Nacional para la Construcción de un Fiji Mejor (NCBBF) adoptó, el 15 de diciembre de 2008, la Carta del Pueblo para el Cambio la Paz y el Progreso, que tiene por objeto construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en la paz para todos los

ciudadanos de Fiji. La Comisión tomó nota además de que dicha Carta contiene también medidas específicas relativas a los pueblos indígenas y sus instituciones y que el NCBBF formuló una serie de recomendaciones, como la necesidad de promulgar una legislación que prohíba la discriminación basada en motivos de raza, religión y orientación sexual, así como una legislación que proteja los derechos de los grupos étnicos minoritarios (indios, isleños del Pacífico, chinos, europeos y nacionales de Fiji sin tierras), especialmente con miras a una mejora en el acceso a las tierras. En lo que respecta a la implementación, la Comisión toma nota de que, según el informe del Gobierno, se ha procedido a suprimir toda clasificación o categorización impropia por motivos raciales de los archivos del Gobierno, se está reformando el sistema educativo y va a utilizarse la denominación «fijiano» para todos los ciudadanos de Fiji, mientras que el gentilicio «i-Taukei» se utilizará para designar a los fijianos autóctonos que representan en torno al 60 por ciento de la población de Fiji. **La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas concretas adoptadas para aplicar la Carta del Pueblo para el Cambio, la Paz y el Progreso con miras a prohibir y eliminar la discriminación, en particular, la discriminación racial, y a promover la igualdad de oportunidades para todos, incluidos los grupos minoritarios, en relación con el acceso a la educación, la formación profesional, el empleo y diversas ocupaciones. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda medida o programa emprendido por el Ministerio de Asuntos i-Taukei para promover la igualdad en el empleo y la ocupación, incluyendo campañas de sensibilización para promover la tolerancia entre todos los integrantes de la población.**

Medidas de acción positiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha decidido sustituir el antiguo plan de medidas de acción positiva para los pueblos indígenas por un nuevo «plan de acción transversal para todas las etnias basado en la verificación de los recursos», como parte de la reforma emprendida para elaborar y aplicar políticas integradoras basadas en la no discriminación y no diferencia entre razas en aras de lograr el objetivo de una ciudadanía común. Toma nota asimismo de que los programas de becas que solían basarse en motivos de raza han sido suspendidos. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el nuevo plan de acción previsto y su aplicación en los ámbitos de la educación, la formación profesional, el empleo y la ocupación, indicando cómo pretende solucionar las desigualdades de hecho, corregir los efectos de las prácticas discriminatorias anteriores y promover la igualdad de oportunidades para todos. Sírvase especificar si el nuevo plan establece mecanismos de seguimiento y asesoramiento.**

Igualdad de género. La Comisión toma nota de las estadísticas relativas a los porcentajes de participación de las mujeres en una serie de órganos, como son la Junta Consultiva de Relaciones Laborales (29 por ciento), la Junta Consultiva sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (13 por ciento) y los Consejos Salariales (20 por ciento). El Gobierno afirma que pretende alcanzar una tasa de participación del 30 por ciento de las mujeres en los órganos que se ocupan del empleo y de las relaciones laborales. La Comisión toma nota asimismo de que las estadísticas sobre la fuerza de trabajo suministradas por el Gobierno no están desglosadas por sexo y, por consiguiente, no ofrecen información suficiente sobre la participación de las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al tiempo que expresa su agrado por el Plan de Acción para la Mujer (2010-2019), expresa una vez más su preocupación por la persistencia de prácticas y tradiciones, así como de arraigadas actitudes y estereotipos patriarcales en relación con los papeles, las responsabilidades y las identidades de las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida. Estas prácticas y costumbres perpetúan la discriminación contra las mujeres y las jóvenes, y pueden constituir obstáculos para su educación. La Comisión toma nota de las preocupaciones del CEDAW sobre la insuficiencia de los recursos humanos y financieros asignados a los mecanismos del país para el avance de la mujer, así como sobre el elevado número de mujeres que trabajan en la economía informal, donde carecen de seguridad social y otras prestaciones, así como la desigualdad de hecho de la situación de las mujeres en zonas rurales en términos de acceso a la tierra y créditos (documento CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 de julio de 2010, párrafos 6, 16, 17, 20, 21, 28 y 30). **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para promover eficazmente la igualdad de género en el empleo y la ocupación, en el marco del nuevo plan de acción para la mujer, o en cualquier otro, incluyendo las medidas adoptadas para combatir los estereotipos de género y mejorar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres, mediante la educación y la formación, así como medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y a la obtención de créditos para ello. La Comisión pide al Gobierno que señale las medidas adoptadas para mejorar la participación de las mujeres en el empleo y en los órganos de relaciones laborales, así como los resultados obtenidos.**

Artículo 3, d). *Promover la igualdad en el empleo bajo el control directo de una autoridad nacional.* La Comisión toma nota de que, en la mayoría de sus últimas conclusiones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló a la atención del Gobierno la insuficiente representación de las minorías en la administración pública y sobre la necesidad de evaluar las razones de este fenómeno y tratarlo con eficacia (documento CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 de agosto de 2012, párrafo 12). **Al tiempo que toma nota de la declaración general del Gobierno de que todos los ministerios están aplicando la política de igualdad de oportunidades en el empleo, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres de todos los grupos étnicos con respecto al empleo en la administración pública. Sírvase también proporcionar estadísticas actualizadas sobre la representación de hombres y mujeres, de todos los grupos étnicos en sus distintas categorías, niveles y grados en la administración pública.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Finlandia

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK), de la Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación Superior (AKAVA), de la Confederación Finlandesa de Profesionales (STTK) y de la Confederación de Industrias de Finlandia (EK), integradas en la memoria del Gobierno. Con respecto a los comentarios de la EK, según los cuales el Convenio no requiere una igual distribución de licencia familiar entre hombres y mujeres, ni unas soluciones de tiempo de trabajo o de modalidades de

trabajo flexibles, la Comisión destaca que el Convenio se dirige a la creación de una igualdad efectiva de oportunidades y de trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y que la Comisión examina la aplicación de las disposiciones del Convenio, tanto en la ley como en la práctica. Al hacerlo, la Comisión evalúa hasta qué punto las medidas adoptadas son eficientes en garantizar que las personas con responsabilidades familiares que tienen un contrato de trabajo o que desean tener un contrato de trabajo, puedan ejercer su derecho a hacerlo sin estar sujetas a una discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflictos entre su empleo y sus responsabilidades familiares.

Evolución legislativa. Prohibición de la discriminación basada en motivos de responsabilidades familiares. La Comisión recuerda su último comentario relacionado con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en el que tomó nota de la entrada en vigor de una nueva Ley contra la Discriminación (núm. 1325/2014), de 1.º de enero de 2015. La Comisión toma nota con *interés* de que, en esta nueva ley, se extiende el alcance de la prohibición de la discriminación, incluyendo en la actualidad, entre otras cosas, el motivo de «situación familiar» (artículo 8, 1)). ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 8, 1), de la Ley contra la Discriminación (núm. 1325/2014), incluida toda resolución judicial que se dicte o todo caso de discriminación presentado por el Defensor del Pueblo.***

Artículos 3 y 4, b), del Convenio. Política nacional y derechos de licencia. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las enmiendas legislativas sobre la licencia de paternidad, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2012, amplió la duración de esa licencia a nueve semanas y el período durante el cual puede tomarse la licencia a dos años después del parto o ubicación en caso de adopción. El Gobierno indica asimismo que, según la institución nacional del seguro social, se produjo un aumento del 11 por ciento en el número de padres que percibieron una asignación parental, entre 2014 y 2015, pero las madres siguen siendo las principales usuarias de la licencia parental, a pesar de una mayor utilización de la licencia parental general permitida por parte de los padres, que pasó del 8,3 al 9,7 por ciento, en 2015 (fue del 7,1 por ciento en 2010). Añade que, desde el 13 de diciembre de 2013, puede pagarse una nueva asignación por cuidados de los hijos flexible a los padres que participan en los cuidados de un hijo menor de tres años de edad y que trabajan no más de una media de treinta horas a la semana. Desde el 18 de marzo de 2016, las madres ya no ganan días de licencia por todo el período de licencia parental, sino sólo por seis meses durante este período. El Gobierno explica que ello se debe a la promoción de una mejor distribución de la licencia parental entre madres y padres, alentando a los padres a tomar con más frecuencia una parte de la licencia parental, permitiendo que las madres regresen antes al trabajo. En sus comentarios, la SAK, la AKAVA y la STTK lamentan, sin embargo, que el Gobierno haya bajado la asignación parental basada en los ingresos y haya limitado la acumulación de licencias anuales durante la licencia parental. Consideran que éstas y otras medidas afectarán, en la práctica, a la situación de la mujer en el mercado laboral, puesto que las mujeres aún perciben el 90 por ciento de todas las asignaciones de licencia familiar. La Comisión toma nota de que el Gobierno indicó en el informe de país de mayo de 2014 sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y a los resultados de la 23.ª sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), que, desde enero de 2014, el subsidio de cuidados se pagó también a los padres que trabajan a tiempo parcial, con el objetivo de alentar a las mujeres con hijos pequeños a regresar antes al trabajo y de instar a ambos padres a que compartan los cuidados de los hijos. El Gobierno indicó que una de las cuestiones más difíciles es la mejora del reparto equitativo de la licencia familiar entre madres y padres. En ese sentido, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lamentó que siga siendo bajo el porcentaje de hombres que toman una licencia parental y que la licencia familiar de que disponen hombres y familias monoparentales siga siendo considerablemente bajo. Recomendó al Gobierno, entre otras cosas, «proseguir los esfuerzos por conseguir la conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales y por fomentar el reparto equitativo de las tareas domésticas y familiares entre la mujer y el hombre, por ejemplo, aumentando los incentivos para que los hombres hagan uso de su derecho a la licencia de paternidad» (documento CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 de marzo de 2014, párrafos 26 y 27, d)). La Comisión toma nota asimismo de que el plan de acción para la igualdad de género, 2016-2019, fija unos objetivos de largo y medio plazo, y prevé un conjunto de medidas que han de adoptarse, como: i) una suma global de 2 500 euros para los empleadores, con el fin de compensar los gastos contraídos, debido a la licencia familiar; ii) introducir una mayor flexibilidad en la fecha de inicio del período de asignación de maternidad; iii) fomentar prácticas favorables a las familias en el lugar de trabajo, y iv) mejorar las posibilidades de que los trabajadores cuiden de sus familiares. ***La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre toda enmienda legislativa o cualquier medida respecto del sistema de licencia parental (incluida la aplicación del plan de acción del Gobierno para la igualdad de género, 2016-2019), así como información estadística sobre la utilización de la licencia parental por parte de hombres y mujeres. Para asegurar una mejor aplicación del Convenio la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información más detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas, especialmente del descenso de la asignación parental basada en los ingresos y de la limitación de la acumulación de la licencia anual durante la licencia parental a que se refieren la SAK, la AKAVA y la STTK, y su efecto en la situación de las mujeres y con qué frecuencia los hombres hacen uso de la licencia.***

Artículos 7 y 8. Regreso al trabajo, tras la licencia familiar y protección contra el despido. En respuesta a la solicitud de la Comisión de que comunicara información sobre la aplicación práctica y los efectos de las disposiciones relativas a las posibilidades reales de que los trabajadores que regresan de una licencia familiar, se reintegren a la fuerza de trabajo, el Gobierno cita la Ley sobre Contratos de Trabajo (núm. 55/2001), capítulo 4, artículo 9, según la cual, cuando finaliza una licencia familiar, los empleados tienen derecho a regresar a sus funciones anteriores. Si esto no es posible, se

ofrecerá a los empleados un trabajo equivalente, con arreglo a su contrato de trabajo; y si tampoco esto es posible, otro trabajo que esté de conformidad con su contrato de trabajo. El Gobierno añade que, si no es posible ofrecer a un empleado que regresa de una licencia familiar un trabajo que corresponda al contrato de trabajo, las disposiciones generales de la ley sobre rescisión de contratos de trabajo y despidos, así como las disposiciones relativas a las obligaciones de formación y de reubicación afines, se utilizan cuando se evalúa el derecho del empleador de rescindir el contrato o de despedir al empleado. También se refiere al capítulo 7, artículo 9, de la ley, que, no sólo prohíbe expresamente la rescisión de un contrato de trabajo por motivos de embarazo o de utilización de una licencia familiar, sino que también invierte la carga de la prueba, que recae en el empleador, en caso de despido. La Comisión toma nota asimismo de que, en su informe de país antes mencionado, de mayo de 2014, el Gobierno indicó que, según los estudios, las mujeres hacen frente a una discriminación en el lugar de trabajo por motivos de embarazo y de responsabilidades familiares. En este sentido, la Comisión recuerda que, en sus observaciones finales, el CEDAW reiteró su preocupación respecto del despido ilegal de las mujeres debido a la licencia de embarazo, parto y maternidad, y recomendó al Gobierno «modificar la legislación para prohibir de forma específica a los empleadores la no renovación de los contratos de trabajo de duración determinada por hacer uso del derecho a la licencia familiar y la limitación de su duración basándose en dicho criterio» (documento CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 de marzo de 2014, párrafos 26 y 27, c)). La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las resoluciones judiciales relativas a los principios comprendidos en el Convenio. ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada: i) para examinar la pertinencia de la aplicación de medidas de sensibilización que generen una mayor comprensión por parte de empleadores, trabajadores y público en general, de los problemas que encuentran los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares, y ii) para prohibir la no renovación o la limitación de la duración de los contratos de duración determinada por el simple hecho de las responsabilidades familiares del trabajador. Pide al Gobierno que siga comunicando información sobre toda resolución judicial pertinente.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Francia

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1989)

Artículo 4 del Convenio. Licencias. La Comisión toma nota con *interés* de que la Ley núm. 2015-1776, de 28 de diciembre de 2015, sobre Adaptación de la Sociedad al Envejecimiento de la Población, reemplazó el derecho de licencia de «apoyo a la familia» por el derecho de licencia del «cuidador», ya que no se requiere más el parentesco directo. La Comisión toma nota de que la Ley núm. 2014-873, de 4 de agosto de 2014, sobre Igualdad Real entre Hombres y Mujeres, creó el beneficio compartido de guardería (PrePareE) en sustitución del suplemento de libre selección de actividad (CLCA) a partir de 1.º de julio de 2015, con miras a alentar el involucramiento de los padres y hacer que el impacto del cuidado de los niños sobre la vida laboral sea menos desproporcionado entre madres y padres. No obstante, la Comisión toma nota de que, según indica el informe de 2017 del Observatorio Nacional de Primera Infancia, a finales de 2016 sólo el 4,4 por ciento de los beneficiarios del suplemento de actividad eran padres y el beneficio compartido de guardería, en la práctica, no se compartió porque la disminución de los desembolsos vinculado a este beneficio son particularmente importantes después de veinticuatro meses, es decir cuando el beneficio debería compartirse entre las madres y los padres.

La Comisión toma nota además con *interés* de que la ley de 4 de agosto de 2014 mencionada arriba extendió a los padres la protección contra el despido tras el nacimiento de un hijo que antes sólo se aplicaba a las madres, y de que la ley núm. 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, extendió este período de protección desde cuatro a diez semanas. La Comisión toma nota del estudio publicado en marzo de 2016 por la Dirección de Investigaciones, Estudios, Evaluaciones y Estadísticas (Dress), según el cual 68 por ciento de los padres, con por lo menos un hijo menor de edad inferior a 3 años, que tenían derecho a licencia de paternidad, la utilizaron. Finalmente, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Código del Trabajo establece varios tipos de licencias para permitir a los empleados, tanto mujeres como hombres, asumir sus responsabilidades familiares al tiempo que siguen trabajando. Las licencias previstas en favor de los empleados incluye las licencias para realizar exámenes médicos durante el embarazo y después del nacimiento de un hijo; en caso de maternidad; en caso de paternidad; en caso de adopción; para educar a su niño; para cuidar a un niño enfermo; para acompañar a un niño gravemente enfermo, con discapacidad o que ha sido víctima de un accidente; en caso de eventos familiares (bodas, muertes, nacimiento); para cuidar a un pariente que sufre de una patología o una condición grave; y para cuidar a un pariente con discapacidad o con pérdida considerable de autonomía. Las leyes núms. 2014-459, de 9 de mayo de 2014, 2014-873, de 4 de agosto de 2014, y 2016-41, de 26 de enero de 2016, permiten, respectivamente, a los empleados de donar días de vacaciones a un colega cuyo hijo esté gravemente enfermo; extender la licencia de la mujer para los controles de embarazo a su cónyuge, a su pareja en unión civil, o a su conviviente; y autorizar una licencia nueva para los empleados que utilicen sistemas de procreación medicamente asistida. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de hombres y mujeres que benefician de la prestación diaria de presencia parental y licencia de cuidado, y el número de trabajadores padres que han solicitado y utilizado la licencia parental (trabajadores del sector público y privado y trabajadores por cuenta propia). La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evaluación del desembolso de los beneficios compartidos de guardería y su***

impacto sobre las familias, así como sobre toda nueva medida adoptada para tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nueva Caledonia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

La Comisión recuerda que solicitó al Gobierno que respondiera de manera completa a sus comentarios. *Lamenta* tomar nota de que la breve memoria del Gobierno sólo contiene informaciones generales sobre la igualdad de remuneración y de que es idéntica a la memoria recibida en 2017, con excepción de las informaciones relativas a la organización, en abril de 2018, en Nueva Caledonia, de una conferencia sobre la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, en 2015, el salario medio de los hombres era superior en un 3,2 por ciento al de las mujeres. La memoria indica asimismo que, cuanto más calificado es el puesto, más importante es la brecha salarial; los hombres en puestos directivos perciben un salario promedio del 17,8 por ciento superior al de las mujeres en puestos directivos. La Comisión toma nota asimismo de que, según una publicación de la Misión a la condición femenina, bajo el título de «El trabajo femenino», y publicada en 2016, en el sector público las mujeres perciben una media del 15 por ciento menos que los hombres. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando datos recientes sobre la remuneración de hombres y mujeres y sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, en los sectores público y privado, en lo posible según los sectores de actividad y el nivel jerárquico de los puestos ocupados.***

Artículo 2. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Medidas para luchar contra las desigualdades salariales entre hombre y mujeres. La Comisión observa que la memoria del Gobierno se limita a reiterar el marco normativo aplicable a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (artículo Lp. 141 del Código del Trabajo de Nueva Caledonia, en adelante CTNC) e indica nuevamente que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Además, la Comisión recuerda que, en su solicitud directa relativa a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), señaló la persistencia de la precariedad de las mujeres y su impacto negativo en materia de educación, de formación y de inserción profesional, así como la insuficiencia de las acciones específicas a favor de las mujeres indígenas, y de iniciativas en materia de información, de educación y de comunicación, con miras a alentar los cambios de comportamiento respecto de las mujeres y de las niñas. ***Recordando la conveniencia de abordar, de manera proactiva, las brechas de remuneración entre hombres y mujeres para obtener resultados en la materia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas concretas para favorecer la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, especialmente medidas en los terrenos de la orientación y de la formación profesional, para luchar contra la segregación laboral según el sexo, medidas de sensibilización y de formación, con miras a combatir los estereotipos sociales, según los cuales algunas profesiones o actividades serían más convenientes para los hombres que para las mujeres, y medidas dirigidas a establecer dispositivos que permitan que, tanto mujeres como hombres, concilien mejor vida familiar y vida laboral.***

Artículo 2, 2), c). Convenios colectivos. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el artículo Lp. 334-26 del CTNC mencionado en la memoria, se refiere a las disposiciones de los convenios colectivos relativas a las «modalidades de aplicación del principio «a un trabajo igual, un salario igual» y no al principio de igualdad de remuneración por «un trabajo de igual valor», como prevé el artículo Lp. 141-1 del CTNC y el Convenio. ***La Comisión solicita al Gobierno que revise el artículo Lp. 334-26, del mencionado Código, con el fin de insertar en el mismo el principio de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor».***

Artículo 4. Colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que el artículo Lp. 333-2, 2), del CTNC prevé que «la negociación sobre los salarios es una buena ocasión para que las partes examinen, al menos una vez al año, a nivel de rama [...], la evolución de los salarios efectivos medios, por categoría laboral y por sexo, respecto de los salarios mínimos jerárquicos, cuando proceda». ***La Comisión solicita al Gobierno que indique sí, y de qué manera, se aborda la cuestión relativa a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en las negociaciones salariales, y que precise, de modo más general, de qué manera colabora con los interlocutores sociales, con miras a dar efecto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, que establece el Convenio.***

Medidas de sensibilización al principio del Convenio. La Comisión acoge favorablemente la celebración, en abril de 2018, de una conferencia sobre la igualdad laboral entre hombres y mujeres, en la provincia Sur, que abordó, entre otras cosas, el tema de la igualdad salarial, especialmente en relación con el presente Convenio. ***Con miras a permitir una lucha más eficaz contra las causas profundas de las desigualdades de remuneración, como los prejuicios y los estereotipos respecto de las mujeres o incluso la segregación ocupacional, y a una mejor aplicación del principio del Convenio en la práctica, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus acciones de sensibilización, centrándose más en la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y***

multiplicándolas entre los trabajadores, los empleadores, sus respectivas organizaciones y los funcionarios encargados de la aplicación del derecho del trabajo, así como el público en general.

Control de la aplicación. Inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que la memoria indica las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del principio de «a un trabajo igual, un salario igual», pero no contiene ninguna información sobre las actividades efectivamente realizadas por los inspectores del trabajo en este terreno. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que se trata de hacer respetar el principio de igualdad de remuneración por «un trabajo de igual valor», como establece el Convenio y no únicamente por «un trabajo igual». ***La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para permitir que los inspectores del trabajo cumplan con sus funciones en materia de control de la aplicación de la legislación del trabajo relativa a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (artículo Lp. 141-1, leído conjuntamente con el artículo Lp. 711-1 del Código del Trabajo de Nueva Caledonia) y comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas a tal fin, especialmente en materia de formación de los inspectores en las cuestiones vinculadas con la igualdad de remuneración y de planificación temática de las actividades de control (igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de remuneración).***

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

Artículo 1, 1), a), y 3), del Convenio. Motivos de discriminación prohibidos y ámbito de aplicación. Legislación. La Comisión recuerda que destacó en comentarios anteriores que la prohibición de la discriminación que se prevé en el artículo Lp. 112-1 del Código del Trabajo de Nueva Caledonia (CTNC) no abarca ni el color de piel ni el origen social y pidió aclaraciones sobre el ámbito de aplicación de dicho artículo. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha confirmado en su memoria que la prohibición de la discriminación abarca todas las etapas del empleo, incluido el despido. En cuanto a los motivos de discriminación que se considera que no están cubiertos, el Gobierno ha indicado que los términos «raza» y «origen» que se explicitan en el artículo Lp. 112-1 del CTNC pueden ser interpretados de forma amplia por el Tribunal del Trabajo de Numea con el fin de proteger a los trabajadores contra las discriminaciones relacionadas con su «color» u «origen social». El Gobierno ha añadido que los trabajadores víctimas de discriminación por alguno de estos dos motivos pueden hacer valer sus derechos en virtud del artículo L.225-1 del Código Penal, que abarca la «apariencia física» y la «especial vulnerabilidad derivada de la situación económica del trabajador, sea ésta evidente o conocida por el autor de la discriminación» y que tiene efecto en Nueva Caledonia. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las acciones penales no son forzosamente apropiadas para luchar de forma eficaz contra la discriminación y ponerle fin en el ámbito específico del empleo y la ocupación, en especial dado el carácter delicado de estas cuestiones y las características del procedimiento penal, por ejemplo, en términos de carga de la prueba y plazos. La Comisión recuerda también que cuando se adoptan disposiciones legislativas para dar efecto al Convenio, éstas deben abarcar, como mínimo, todos los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. ***Con el fin de permitir a los trabajadores ejercer su derecho a la no discriminación sobre la base, de por lo menos, todos los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio en los ámbitos del empleo y la ocupación y evitar la incertidumbre jurídica que conlleva dar margen a una eventual interpretación de las disposiciones legislativas por los tribunales, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se incluyan el «color» y el «origen social» en la lista de motivos de discriminación prohibidos en virtud del artículo Lp. 112-1 del Código del Trabajo de Nueva Caledonia. A falta de disposiciones al respecto en la legislación laboral, la Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información sobre todo procedimiento que se entable sobre la base del artículo L.225-1 del Código Penal en el ámbito del empleo y la ocupación.***

Artículo 1, 1), b). Motivos de discriminación adicionales. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de la inserción en el artículo Lp. 112-1 del CTNC de la prohibición de toda discriminación basada en «el ejercicio de una responsabilidad consuetudinaria», a raíz de la aprobación de la ley local núm. 2018-3, de 28 de mayo de 2018, por la que se instituye una licencia para responsabilidades consuetudinarias. Sin embargo, la Comisión recuerda que, en comentarios anteriores, destacó que la lista de motivos de discriminación prohibidos en Francia metropolitana en virtud del Código del Trabajo (artículo L. 1132.1) es más extensa que la que consta en el CTNC (artículo Lp. 112-1) y pidió al Gobierno que indicase las razones de esa diferencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha señalado que el derecho del trabajo en Nueva Caledonia, competencia exclusiva de ese territorio de ultramar, evoluciona en función de las reivindicaciones de los interlocutores sociales, pero que no hay nada que se oponga a que Nueva Caledonia añada a la lista de motivos de discriminación previstos en el artículo Lp. 112-1 los demás motivos que abarca el Código del Trabajo que se aplica en la metrópolis. ***Al tiempo que toma nota de que la aplicación de la ley local núm. 2018-3, de 28 de mayo de 2018, por la que se instituye una licencia para responsabilidades consuetudinarias será objeto de un informe de evaluación al cabo de un año, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el balance que se realice, en particular en lo relativo a toda discriminación o barrera al empleo a la que los trabajadores puedan verse confrontados por ejercer una responsabilidad consuetudinaria. Por otra parte, habida cuenta de lo anterior, la Comisión solicita al Gobierno que contemple, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la posibilidad de ampliar la lista de motivos de discriminación prohibidos en Nueva Caledonia en virtud del CTNC, con el fin de ajustarla a la de los motivos de discriminación prohibidos en Francia metropolitana en virtud***

del Código del Trabajo, de modo que todos los trabajadores gocen de la misma protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación.

Artículo 2. No discriminación e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión recuerda las preocupaciones que expresó en sus comentarios anteriores sobre las disparidades y discriminaciones de las que son objeto las mujeres, en particular en el empleo y la ocupación. En este sentido, observa que, según la encuesta titulada «Les forces de travail en Nouvelle-Calédonie – Résultats 2017» (La fuerza de trabajo en Nueva Caledonia: resultados de 2017), la tasa de empleo de las mujeres presenta un diferencia de 12 puntos respecto de la de los hombres y, sobre todo, la mitad de las mujeres que desean trabajar no acuden al mercado de trabajo, en especial al principio de su vida familiar. Asimismo, estos datos revelan que, si bien las mujeres *kanak* están presentes en el mercado de trabajo con una tasa de empleo del 57 por ciento (frente al 60,8 por ciento en el caso de la totalidad de las mujeres), su tasa de desempleo sigue siendo elevada, ascendiendo al 21,3 por ciento, frente al 13,4 por ciento entre la totalidad de las mujeres. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales, ante las desigualdades persistentes *de facto* entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, la Dirección de Trabajo y Empleo (DTE) está llevando a cabo, en colaboración con el Observatorio de la Mujer (OCF), un proyecto de reforma relativo a la igualdad profesional, y se está reflexionando sobre las medidas que es preciso adoptar para luchar contra los estereotipos de género y mejorar el acceso de las mujeres a las diversas ocupaciones, en particular en las zonas rurales. Además, la Comisión celebra que la DTE haya organizado en abril de 2018, junto con el OCF, una conferencia sobre la igualdad profesional entre hombres y mujeres, en la que se abordaron los temas de la igualdad y la prohibición de la discriminación contra las mujeres, el acoso sexual y moral, la igualdad salarial y la protección de la paternidad (trabajadores con responsabilidades familiares) en la Provincia del Sur. El Gobierno ha indicado también que se está ejecutando un plan plurianual (2014-2019) basado en siete grandes ejes, entre ellos, la lucha contra todas las formas de discriminación de la mujer en la Provincia del Norte. **Al tiempo que constata que esta información demuestra una voluntad de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, la Comisión espera que la reflexión sobre el tema y el proyecto de reforma sobre la igualdad profesional se traduzcan lo antes posible en medidas concretas, y ruega al Gobierno que refuerce sus iniciativas destinadas a sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas acerca de las cuestiones de la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación, en especial en el marco del plan plurianual. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias, en particular en las zonas rurales, para: i) alentar a las niñas y mujeres a orientarse hacia ramas de formación que ofrezcan oportunidades de empleo diversificadas, por ejemplo en sectores y empleos en los que tradicionalmente trabajan los hombres; ii) dar a conocer mejor a las mujeres sus derechos y los dispositivos a su alcance para fomentar su acceso al empleo y las diversas ocupaciones, en todos los niveles de responsabilidad; iii) luchar contra los estereotipos de género relativos a sus aspiraciones, preferencias y habilidades profesionales, por ejemplo mediante campañas informativas y de sensibilización, y iv) desarrollar y poner en práctica dispositivos que permitan a los trabajadores y las trabajadoras conciliar mejor sus responsabilidades familiares y profesionales. Se pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto y acerca de las actividades en materia de empleo de la Misión a favor de la Mujer de la Provincia del Sur y del OCF, y que siga proporcionando datos estadísticos, desglosados por sexo, relativos al empleo.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Polinesia Francesa

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota con **satisfacción** de la adopción de la Ley del país núm. 2013-6, de 21 de enero de 2013, relativa a la Discriminación y al Acoso, que modifica la ley del país núm. 2011-15 (Código del Trabajo de la Polinesia Francesa) y de la ley del país núm. 2013-17, de 10 de mayo de 2013, que modifica la deliberación núm. 95-215 AT, de 14 de diciembre de 1995, modificada, sobre el Estatuto General de la Administración Pública de la Polinesia Francesa y relativa a la discriminación, al acoso y a la protección funcional. Toma nota de que estas nuevas leyes refuerzan, de manera significativa, la protección de los trabajadores contra la discriminación e instauran un dispositivo de prevención y de sanción del acoso sexual y del acoso moral.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. Sector privado. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota de que la ley del país núm. 2013-6, inserta, en la lista de los motivos de discriminación prohibidos, los nuevos motivos siguientes: las costumbres, la orientación o la identidad sexual, la edad, las características genéticas, la pertenencia o la no pertenencia, verdadera o supuesta, a una nación o a una raza, las actividades mutualistas, la apariencia física, el apellido, el estado de salud y la discapacidad (artículo Lp. 1121-1, del Código del Trabajo de la Polinesia Francesa). A este respecto, la Comisión toma nota de que los motivos de discriminación prohibidos comprendidos en el artículo Lp. 1121-1 son los mismos que los previstos en el artículo L. 1132-1, del Código del Trabajo aplicable en Francia metropolitana, con excepción del «lugar de residencia» y de la «particular vulnerabilidad resultante de la situación económica [de la persona], aparente o conocida del autor», motivos de discriminación introducidos en el Código en febrero de 2014 y en junio de 2016, respectivamente. La Comisión toma nota asimismo de que el motivo de «color» mencionado en el artículo 1, 1), a), del Convenio, está cubierto por el motivo de «la apariencia física» y señala que el Gobierno confirma que el término «origen» mencionado en el artículo Lp. 1121-1 del Código del Trabajo de la Polinesia Francesa, se refiere a «la ascendencia nacional», en el sentido del Convenio. La Comisión toma nota de que, a pesar de los recientes avances legislativos, el «origen social» mencionado en el artículo 1, 1), a), del

Convenio no figura en la lista de motivos de discriminación prohibidos por el artículo Lp. 1121-1 del Código del Trabajo de la Polinesia Francesa.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo Lp. 1121-2 ha insertado en el Código del Trabajo de la Polinesia Francesa una lista no exhaustiva de aspectos del empleo, a saber, despido, remuneración, incentivos o distribución de acciones, formación, reclasificación, destino, cualificaciones, clasificación, promoción profesional, traslado y renovación de contrato así como el acceso a un período de prácticas o un curso de formación en la empresa. La Comisión toma nota asimismo de que este mismo artículo se referirá en adelante, expresamente, a las medidas discriminatorias directas e indirectas. **La Comisión pide al Gobierno que envíe informaciones sobre toda medida adoptada con miras a añadir el «origen social» en la lista de motivos de discriminación prohibidos por el Código del Trabajo de la Polinesia Francesa (artículo Lp. 1121-1) a fin de dar plena aplicación al artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los trabajadores contra la discriminación por dicho motivo en la práctica. Con el fin de extender la protección de los trabajadores contra la discriminación y de armonizarla con las disposiciones contra la discriminación, aplicables en Francia metropolitana, la Comisión invita al Gobierno a examinar la posibilidad de añadir «el lugar de residencia» y la «particular vulnerabilidad resultante de la situación económica [de la persona], aparente o conocida del autor» a la lista de los motivos de discriminación prohibidos por el Código del Trabajo de la Polinesia Francesa y le solicita que comunique informaciones sobre toda medida adoptada en este sentido.**

Sector público. La Comisión toma nota de que la ley del país núm. 2013-17, de 10 de mayo de 2013, inserta, en la lista de los motivos de discriminación prohibidos en la administración pública, los nuevos motivos siguientes: el origen, la orientación o la identidad sexual, la edad, el apellido, la apariencia física y la pertenencia o la no pertenencia, verdadera o supuesta, a una raza (artículo 5). La Comisión toma nota de que los motivos de discriminación prohibidos comprendidos en el artículo 5 son los mismos que los previstos en el artículo 6 de la ley núm. 83-634, de 13 de julio de 1983, sobre los derechos y las obligaciones de los funcionarios, aplicables en Francia metropolitana, con excepción de «la situación de familia». La Comisión observa, sin embargo, que a pesar de los avances legislativos recientes, el motivo de «origen social» no figura en la lista de motivos de discriminación prohibidos por el artículo 5 del Estatuto General de la Administración Pública de la Polinesia Francesa. La Comisión toma nota además de que el artículo 5 prohibirá en adelante, expresamente, toda distinción directa o indirecta entre los funcionarios. **Con miras a dar plena aplicación al artículo 1, 1), a), del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda medida adoptada a fin de añadir el «origen social» en la lista de motivos de discriminación prohibidos por el artículo 5 del Estatuto General de la Administración Pública. La Comisión pide también al Gobierno que indique cuáles han sido las medidas adoptadas para garantizar la protección contra la discriminación por estos motivos en la práctica. La Comisión invita igualmente al Gobierno a examinar la posibilidad de introducir «la situación de familia» en la lista de los motivos de discriminación prohibidos por este artículo y le solicita que comunique informaciones sobre toda medida adoptada en este sentido. Además, solicita al Gobierno que indique las razones por las cuales, en la Polinesia Francesa, la lista de los motivos de discriminación prohibidos en la administración pública (artículo 5 del Estatuto General) es más restringida que la lista aplicable en el sector privado (artículo Lp. 1121-1 del Código del Trabajo de la Polinesia Francesa) y lo invita a armonizar la protección de los funcionarios y de los trabajadores del sector privado contra la discriminación en el empleo y la ocupación.**

Acoso sexual y acoso moral. Sectores privado y público. La Comisión toma nota de la introducción, en el Código del Trabajo de la Polinesia Francesa (artículos Lp. 1141-1 a Lp. 1141-12) y en el Estatuto General de la Administración Pública de la Polinesia Francesa, de disposiciones relativas al acoso sexual y al acoso moral. Estas disposiciones definen y prohíben el acoso sexual que se asemeje a un chantaje, con miras a obtener favores sexuales, y el acoso sexual debido a la creación de un entorno laboral hostil, y prevén la protección de las víctimas y de los testigos contra todo acto de represalias (sanciones, despido, medidas discriminatorias directas o indirectas), así como sanciones disciplinarias para los autores de actos de acoso. Estas disposiciones prevén asimismo, a cargo del empleador, medidas de prevención y de tratamiento del acoso sexual o moral, que comprenden especialmente el establecimiento, en el marco del reglamento interior, de un procedimiento en caso de denuncia de acoso, y acciones de sensibilización. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación en la práctica de los artículos Lp. 1141-1 a Lp. 1141-12 del Código del Trabajo de la Polinesia Francesa y de las disposiciones del Estatuto General de la Administración Pública de la Polinesia Francesa sobre el acoso sexual y el acoso moral, especialmente sobre el papel de los servicios de inspección del trabajo, así como sobre todo procedimiento, y sus resultados, iniciado acerca del fundamento de estas disposiciones.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Gambia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación. La Comisión destacó que las disposiciones de la Constitución sobre discriminación no incluyen ninguna referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación, y sólo se refieren al tratamiento discriminatorio ejercido por funcionarios públicos (artículo 33, 3)). Asimismo, tomó nota de que la Ley del Trabajo de 2007 no define ni prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en base a cualquiera de los motivos enumerados en el Convenio, excepto en caso de despido y de adopción de medidas disciplinarias (artículo 83, 2)). La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona respuesta alguna a su solicitud en relación con la necesidad de enmendar la legislación. La Comisión recuerda de nuevo que, si bien las disposiciones constitucionales generales sobre igualdad son importantes, no son en general suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación, y se requiere una legislación integral contra la discriminación para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, en base, como mínimo, a todos los motivos de discriminación que figuran en el artículo 1, 1), a), y en todos los ámbitos del empleo y la ocupación. **La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas a fin**

de incluir la protección legislativa contra la discriminación directa e indirecta en todas las fases del empleo y la ocupación en base, como mínimo, a todos los motivos que figuran en el Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya en la legislación disposiciones que prevean sanciones disuasorias y reparaciones apropiadas en los casos de discriminación. Sírvase transmitir información específica sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Georgia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas **(Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)**

La Comisión toma nota de la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en la 107.ª reunión (junio de 2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo y de las conclusiones adoptadas, en las que se pide al Gobierno de Georgia que:

- i) vele por que la legislación nacional, en particular el Código del Trabajo (2006), la Ley sobre Igualdad de Género (2010), la Ley sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (2014) y/o la Ley sobre la Administración Pública (2015), incorpore expresamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en consulta con los interlocutores sociales;
- ii) ponga en práctica mecanismos efectivos de control del cumplimiento y de detección, a fin de velar por que el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se aplique en la práctica;
- iii) adopte medidas para sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas acerca de las leyes y procedimientos existentes, con objeto de que puedan ejercer sus derechos;
- iv) continúe proporcionando información sobre las decisiones de la autoridad judicial, y sobre los casos gestionados por la Oficina del Defensor Público;
- v) continúe proporcionando datos desglosados por sexo sobre la participación en el mercado de trabajo y la remuneración;
- vi) envíe a la Comisión de Expertos información en relación con el Plan de acción nacional sobre la igualdad de género 2018-2020, adoptado en mayo de 2018, y sobre su posible impacto en el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en la legislación y en la práctica, y
- vii) recurra a la asistencia técnica de la OIT para aplicar estas recomendaciones.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. Desde hace muchos años, la Comisión viene planteando su preocupación en relación con la falta de legislación en la que se ponga plenamente de manifiesto el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En particular, la Comisión recuerda que el artículo 2, 3), del Código del Trabajo de 2006 contiene únicamente una prohibición general de la discriminación en las relaciones laborales; y que la Ley sobre Igualdad de Género, de 2010, prohíbe la discriminación (artículo 6) y establece que «la igualdad en la evaluación de la calidad del trabajo realizado por hombres y mujeres deberá guardarse sin discriminación» (artículo 4, 2), i)). Además, la Ley sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, adoptada el 2 de mayo de 2014, incluye una prohibición general de la discriminación basada en el sexo, si bien no hace referencia al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor; y el artículo 57, 1), de la Ley sobre el Servicio Público establece que el sistema de remuneración de los funcionarios públicos se basa en «los principios de transparencia y equidad, lo que significa la aplicación del principio de igualdad de salario por trabajo igual», una formulación más restrictiva que la que recoge el principio consagrado en el Convenio.

La Comisión saluda que el Gobierno señale en su memoria que el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales esté trabajando, en cooperación con los interlocutores sociales, con miras a la modificación de la legislación laboral relevante para aplicar la Directiva de la Unión Europea 2006/54/EC, de 5 de julio de 2006, que establece que, para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye el mismo valor, se eliminará la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el segundo objetivo del Plan de acción del Consejo sobre Igualdad de Género 2018-2020 consiste en eliminar las lagunas legislativas y mejorar el marco legislativo sobre igualdad de género. *Reiterando que el Convenio fue ratificado en 1993, la Comisión confía en que el Gobierno dedicará sus esfuerzos, en cooperación con los interlocutores sociales y el Consejo de Igualdad de Género, a que se modifique la legislación laboral para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, con miras a garantizar la aplicación plena y efectiva del Convenio. También insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 57, 1), de la Ley sobre el Servicio Público, de 2015, a fin de*

que contemple el concepto de «trabajo de igual valor» para asegurar que los funcionarios públicos cubiertos por la ley tengan derecho no sólo a la igualdad de remuneración por un trabajo igual sino también por un trabajo que sea de naturaleza absolutamente diferente, aunque no obstante, con el mismo valor. Le pide que se sirva también proporcionar información sobre los progresos alcanzados a este respecto y que transmita una copia de las nuevas disposiciones pertinentes cuando hayan sido adoptadas.

Artículo 2. Medidas para corregir la brecha de remuneración entre hombres y mujeres y promover la igualdad de remuneración. La Comisión tomó nota anteriormente de que, sobre la base de las estadísticas suministradas por el Gobierno, existen diferencias significativas a favor de los hombres en el promedio de los salarios nominales mensuales de hombres y mujeres en todos los sectores del mercado de trabajo (36,9 por ciento en 2014), incluyendo los sectores donde predominan las mujeres como la educación y la sanidad; y que esa desigualdad en la distribución media de los salarios entre hombres y mujeres se verifica incluso en los mismos niveles de educación. En relación con las medidas adoptadas para corregir esta brecha salarial por motivos de género, la Comisión tomó nota de la creación de la Comisión interministerial sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en septiembre de 2015. Al tiempo que toma nota de toda esta información, la Comisión instó al Gobierno a que adopte medidas para detectar y corregir las causas subyacentes de las desigualdades en la remuneración y suministre información sobre todas las actividades de sensibilización para promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

La Comisión toma nota de los datos actualizados transmitidos por el Gobierno sobre el promedio de ganancias mensuales de trabajadores y trabajadoras desglosados por sexo y por actividad económica desde el 2010 hasta el primer semestre de 2018. A partir de esta información, la Comisión toma nota de que la brecha salarial de género sigue siendo elevada en casi todos los sectores de actividad. En particular toma nota de que, en 2017, en los sectores de la intermediación financiera, la salud y el trabajo social, los hombres cobraron de promedio un salario considerablemente superior al de las mujeres (en la intermediación financiera, un hombre cobra un salario promedio de 2 943 laris, mientras que una mujer cobra 1 381 laris; en la sanidad y el trabajo social, un hombre cobra de promedio 1 247 laris mientras que una mujer cobra 866 laris). La Comisión toma nota del quinto objetivo del Plan de acción del Consejo de Igualdad de Género 2018-2020, cuyo objetivo consiste en promover la conciencia sobre la igualdad de género a través de, entre otros medios, la organización de reuniones públicas temáticas en las diversas regiones del país, las actividades de fomento de la sensibilización sobre la participación política de las mujeres, y el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación con las redes y las organizaciones internacionales que trabajan sobre igualdad de género y de derechos de las mujeres. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala además que, en 2017, se estableció un grupo de trabajo sobre derechos laborales e igualdad de género en el Consejo de Igualdad de Género, y que éste presentó una lista de recomendaciones para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo, entre otras, recomendaciones relativas a la igualdad salarial. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Consejo de Igualdad de Género está a punto de aprobar un modelo estatal sobre igualdad de género, un gran documento de principios rectores sobre igualdad de género, en el que se reflejarán fórmulas tales como «igualdad de salario por un trabajo de igual valor». Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la brecha salarial de género no está condicionada principalmente por la legislación sino por las normas y actitudes tradicionales hacia las mujeres, que las obligan a combinar sus tareas en el hogar con el desarrollo de su carrera profesional. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas en el marco del modelo estatal sobre igualdad de género y del Plan de acción del Consejo de Igualdad de Género 2018-2020, concebido directamente para reducir la brecha salarial de género. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, los programas de sensibilización y las actividades de concienciación para superar los estereotipos tradicionales sobre el papel de las mujeres en la sociedad o las medidas sobre la licencia parental compartida y la disponibilidad de unos servicios asequibles de cuidados. La Comisión alienta también al Gobierno a que siga tratando de determinar y corregir las causas subyacentes de las desigualdades en materia de remuneración, como la discriminación de género, los estereotipos de género y la segregación ocupacional; y a que promueva el acceso de las mujeres a un abanico más amplio de oportunidades de empleo a todos los niveles, incluidos los puestos de dirección ejecutiva y los puestos con remuneración más elevada. La Comisión pide además al Gobierno que comunique información más detallada sobre las actividades de sensibilización emprendidas específicamente en el marco del Plan de acción del Consejo de Igualdad de Género 2018-2020, a fin de promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, también en relación con las bonificaciones, las primas y otras asignaciones salariales suplementarias. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística sobre los salarios mensuales, la remuneración por horas y las asignaciones suplementarias de hombres y mujeres por sector económico, así como datos relativos al número de hombres y mujeres empleados en esos sectores.**

Aplicación. La Comisión tomó nota con preocupación de que el Gobierno señalaba que, después de la eliminación del servicio de inspección del trabajo en 2006, no existe ya ningún órgano de control en materia laboral. En su respuesta, el Gobierno señaló que, mediante ordenanza núm. 38, de 5 de febrero de 2015, se aprobó el Programa nacional de monitoreo de las condiciones de trabajo, y en virtud de la ordenanza núm. 81, de 2 de marzo de 2015, se había establecido el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales. La Comisión tomó nota asimismo de que la Oficina del Defensor Público había indicado que debería enmendarse el Código del Trabajo a fin de abordar el carácter no vinculante de las recomendaciones realizadas por los servicios de inspección. En consecuencia, la Comisión hizo de nuevo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de aplicación adecuados

y eficaces para garantizar la aplicación en la práctica del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, así como para garantizar que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia manifestó su preocupación por la eliminación de los servicios de inspección del trabajo y por la ausencia de una instancia equivalente que los substituya para asegurar la aplicación de los derechos y principios protegidos por el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que se ha comprometido con el restablecimiento de unos verdaderos servicios de inspección del trabajo para 2019. El Gobierno afirma además que los nuevos servicios de inspección del trabajo tendrán la autoridad de llevar a cabo inspecciones sin aviso previo en todas las empresas, aplicar toda la legislación laboral e imponer sanciones a los infractores que sean suficientemente disuasorias a fin de evitar otras en el futuro. La Comisión toma nota también de la información del Gobierno según la cual los tribunales han informado de que no existen casos relativos a diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. En este sentido la Comisión recuerda que el hecho de que no se hayan presentado quejas o reclamaciones indica posiblemente la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, una falta de confianza en los procedimientos o el temor a represalias (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 870). **La Comisión pide en consecuencia una vez más al Gobierno que potencie la capacidad de las autoridades competentes, incluidos los jueces, los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, para detectar y corregir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que realizan un trabajo de igual valor, y también a que examine si las disposiciones sustantivas y de procedimiento permiten, en la práctica, presentar quejas ante los tribunales y darles curso. Además, al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que pretende reforzar las facultades de la inspección del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en la que garantiza la aplicación efectiva del principio del Convenio en la práctica, por ejemplo incluyendo información sobre todas las actividades llevadas a cabo por el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo incluida la formación de los inspectores del trabajo, vinculadas al principio del Convenio y sobre toda infracción detectada. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre las decisiones adoptadas por los tribunales y otros órganos competentes en relación con esta cuestión, así como los casos relativos a la desigualdad de remuneración tramitados por la Oficina del Defensor Público, facultado para examinar quejas en materia de discriminación entre hombres y mujeres y formular recomendaciones.**

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT en lo que se refiere a estas recomendaciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1968)

La Comisión **lamenta** tomar nota de que nuevamente la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre algunos de sus comentarios anteriores. La Comisión desea reiterar que, sin la información necesaria, no se encuentra en condiciones de evaluar la efectiva aplicación del Convenio, incluidos los progresos realizados desde su ratificación. **La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información completa sobre las cuestiones planteadas a continuación.**

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que desde la adopción de la Ley del Trabajo, en 2003, ha planteado su preocupación en relación con los artículos 10, b), y 68 de dicha ley, que se han redactado en términos más restrictivos que el principio establecido en el Convenio y que contemplan la igualdad de remuneración por un «trabajo igual». La Comisión constata con **preocupación** que el Gobierno se limita a insistir en que «la igualdad de salario por un trabajo igual sin ningún tipo de distinción» que se prevé en los artículos 10, b), y 68 de la Ley del Trabajo es equivalente al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, pero no proporciona información para apoyar esta afirmación ni indica que los trabajos de una naturaleza completamente diferente puedan compararse en virtud de la ley. La Comisión hace hincapié una vez más en que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres (como las profesiones relacionadas con el cuidado) y otros por hombres (como la construcción). Con frecuencia, los trabajos considerados «femeninos» están infravalorados en comparación con los trabajos de igual valor desempeñados por los hombres cuando se determinan las tasas salariales. El concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos los países, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672 a 679). **Por lo tanto, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 10, b), y 68 de la Ley del Trabajo, de 2003, con objeto de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de**

igual valor, consagrado en el Convenio, y que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en la administración pública. La Comisión recuerda que se adoptó una política salarial en la administración pública que establece una estructuración de los salarios sobre la base de una sola columna, y que para finales de 2012 todos los trabajadores de la administración pública entrarían en el marco de esta estructura. Asimismo, la Comisión recuerda que la evaluación de los empleos se realizó sobre la base de cuatro factores principales (conocimientos y capacidades, responsabilidad, condiciones de trabajo, y esfuerzo) que se desglosaron en 13 subfactores. La Comisión toma nota de la documentación aportada por el Gobierno en su memoria, que contiene una tabla titulada «Estructuración de los salarios sobre la base de una sola columna», un memorando de entendimiento entre la Comisión de Salarios Justos y los interlocutores sociales, y un libro blanco acerca de la política salarial sobre la base de una sola columna. Sin embargo, constata que en la tabla «Estructuración de los salarios sobre la base de una sola columna» no consta información sobre los tipos de empleos que entran en cada uno de los niveles de la estructura salarial y, por consiguiente, la Comisión no puede determinar si el método de evaluación de los empleos que se ha seguido está exento de prejuicios de género. ***Así, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que ha clasificado los empleos dentro de la estructura salarial sobre la base de una sola columna con el fin de evaluar los factores que se han tenido en cuenta para comparar los empleos y asegurarse de que no encierran prejuicios de género. Al tiempo que toma nota de la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a fin de que la estructuración de los salarios sobre la base de una sola columna cubra a todos los trabajadores de la administración pública, y que señale de qué manera esto ha repercutido en el salario relativo de los hombres y las mujeres. Asimismo, solicita otra vez información concreta sobre el número de hombres y mujeres que se encuentra en cada uno de los niveles de la estructura salarial. Por último, pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de la estructuración de los salarios sobre la base de una sola columna, incluyendo información sobre las cuestiones de las que se ocupa la Comisión de Salarios Justos y las medidas adoptadas por ésta para garantizar la plena aplicación en la administración pública del principio recogido en el Convenio.***

Artículo 2, párrafo 2, c). Convenios colectivos. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido formulando comentarios sobre los convenios colectivos que contienen disposiciones discriminatorias contra las mujeres, en particular sobre la asignación de algunas prestaciones adicionales. La Comisión toma nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene ninguna información específica en respuesta a la solicitud de la Comisión en este sentido. ***En consecuencia, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para garantizar que las disposiciones de los convenios colectivos no discriminen en base a motivos de sexo. La Comisión pide al Gobierno de comunicar información sobre toda medida adoptada o prevista, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para promover el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, incluidos los métodos objetivos de evaluación de los empleos, a través de los convenios colectivos. También pide al Gobierno de comunicar ejemplos de los convenios colectivos que reflejan el principio consagrado en el Convenio.***

Artículo 3. Métodos de evaluación objetiva de los empleos en el sector privado. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para promover métodos de evaluación objetivos de los empleos en el sector privado para eliminar la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno guarda silencio en este punto. Sin embargo, toma nota de la sexta ronda de la encuesta sobre los niveles de vida de Ghana, publicada en 2014, según la cual, los ingresos por hora de los hombres en los diversos grupos ocupacionales siguen siendo más elevados que los de las mujeres, excepto en el caso del personal de apoyo administrativo. La Comisión recuerda que el concepto de «igual valor» requiere un método de medición y comparación del valor relativo de los distintos empleos. Se debe proceder a un examen de las respectivas tareas cumplidas, que se llevará a cabo sobre la base de criterios absolutamente objetivos y no discriminatorios para evitar que la evaluación se vea condicionada por los prejuicios de género. Si bien en el Convenio no se establece ningún método específico para ese examen, en el artículo 3, se presupone el uso de técnicas adecuadas para la evaluación objetiva del empleo, con miras a determinar su valor, mediante la comparación de factores tales como las calificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 695 a 703). ***En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte medidas para promover los métodos de evaluación objetiva del empleo en el sector privado, para eliminar la desigualdad de remuneración, y que comunique información sobre los progresos realizados en ese sentido. Una vez más, solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre la brecha de remuneración por motivos de género en el sector privado, incluyéndose la información estadística basada en los resultados de la reciente encuesta sobre los niveles de vida de Ghana.***

Artículo 4. Cooperación tripartita. Tomando nota de la falta de nueva información comunicada a este respecto, la Comisión recuerda una vez más el importante papel que desempeñan las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la promoción del principio del Convenio. ***Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas concretas adoptadas y las acciones emprendidas para promover el principio del Convenio, y sobre los resultados de esas iniciativas. La Comisión también solicita al Gobierno que indique si se***

discutió, de manera específica, en el Comité tripartito nacional y de qué manera se tomó en consideración el principio en el establecimiento de la edad mínima.

Control y aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Comisión Nacional del Trabajo y la Comisión de Sueldos y Salarios Justos, tratan estas cuestiones relativas a las reclamaciones de los trabajadores, en particular aquellas vinculadas con la igualdad de remuneración, y que un centro de solución de conflictos alternativo, en virtud de la Ley de Resolución de Conflictos Alternativos, de 2010, sirve como foro adicional para abordar las quejas relativas a la remuneración. La Comisión toma nota de la reiterada indicación del Gobierno, según la cual no se han presentado casos sobre la cuestión relativa a la igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor. En ese sentido, la Comisión recuerda que, cuando no se presenten casos de quejas o su número sea muy reducido, ello permite indicar la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, la falta de confianza en los procedimientos, falta de acceso efectivo a éstos o el temor a represalias (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 870). **En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para sensibilizar acerca de la legislación pertinente, para reforzar la capacidad de las autoridades competentes, incluidos los jueces, los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, para identificar y abordar los casos de discriminación y de desigualdad de remuneración, y también para examinar si las disposiciones sustantivas y de procedimiento aplicables en la práctica permiten presentar quejas y darles curso. Además, le pide comunicar información sobre toda decisión de los tribunales, la Comisión Nacional del Trabajo, la Comisión de Sueldos y Salarios Justos y el Centro de Solución de Conflictos Alternativos, o cualquier otro organismo competente, así como sobre toda violación detectada por los inspectores del trabajo o notificada a éstos, en relación con la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.**

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

La Comisión constata con **preocupación** que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información en respuesta a varios de sus comentarios anteriores. La Comisión desea reiterar que, sin la información necesaria, no puede evaluar si se aplica efectivamente el Convenio, y en particular si se lograron avances desde su ratificación. **La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información completa sobre los asuntos que se plantean a continuación.**

Artículo 1 del Convenio. Motivos de discriminación prohibidos. La Comisión ya recordó en otra ocasión que las expresiones «nivel social», «política» y «condición política» establecidas en los artículos 14 y 63 de la Ley del Trabajo, de 2003, como motivos de discriminación prohibidos tienen un significado más restringido que las expresiones «origen social» y «opinión política», que figuran en el Convenio. Recordó que la prohibición de la discriminación por motivos relacionados con la opinión política, que consta en el Convenio, debe abarcar las actividades de un trabajador que exprese o demuestre sus opiniones políticas y que esta protección no debe limitarse exclusivamente a las actividades o el cargo de un individuo en el seno de un partido político. Por otra parte, la discriminación basada en el origen social surge cuando la pertenencia de un individuo a una clase, una categoría socioprofesional o una casta determina su futuro profesional, sea porque se le deniega el acceso a un determinado tipo de empleo o actividad o, por el contrario, porque se le asignan ciertos puestos de trabajo. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se limita a volver a declarar que ha transmitido sus preocupaciones a los organismos competentes para que adopten las medidas necesarias. Por consiguiente, la Comisión hace hincapié una vez más en que, cuando se adopten disposiciones legales para dar cumplimiento al principio consagrado en el Convenio, éstas deberían incluir, por lo menos, todos los motivos de discriminación especificados en su *artículo 1, 1), a)* (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 853). **La Comisión insta al Gobierno a que tome medidas concretas para modificar la Ley del Trabajo, de 2003, de manera que incluya, por lo menos, todos los motivos de discriminación que se especifican en el artículo 1, 1), a), del Convenio, y a que informe sobre todo avance que se logre al respecto.**

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en el sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que en comentarios anteriores indicó que el artículo 175 de la Ley del Trabajo, en el que se define el acoso sexual, parece cubrir sólo el acoso de intercambio (*quid pro quo*), y no el acoso sexual ambiental. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha reiterado que se han tomado medidas con vistas a prevenir y combatir el acoso sexual en el trabajo mediante inspecciones laborales y programas de educación y formación para las organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero que no se han presentado quejas o notificaciones de casos de acoso sexual en el trabajo ante las autoridades competentes en virtud de la Ley del Trabajo, incluida la Comisión Nacional del Trabajo. Una vez más, la Comisión recuerda que la ausencia de quejas relativas al acoso sexual no significa necesariamente que esta forma de discriminación sexual no exista; más bien podría reflejar la falta de un marco legal apropiado y una falta de conciencia, comprensión o reconocimiento por parte de los responsables gubernamentales, los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones en cuanto a esta forma de discriminación sexual, así como la falta de acceso a los mecanismos y medios de reparación, o su carácter inadecuado, o bien el miedo a represalias (véase el Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 790). **La Comisión insta al Gobierno a que amplíe la definición de acoso sexual para que abarque explícitamente el acoso sexual ambiental. Asimismo, la Comisión exige al Gobierno que adopte medidas concretas (por ejemplo, organizando seminarios o cursos de formación, elaborando guías, etc.) destinadas a que los inspectores del trabajo, los jueces y otros funcionarios públicos con competencias en la materia, así como los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, cobren conciencia de**

la existencia del acoso sexual y de los medios para prevenirlo y combatirlo, y amplíen sus conocimientos al respecto. Solicita también al Gobierno que informe sobre los logros alcanzados.

Igualdad en el empleo sin distinción de raza, color, religión o ascendencia nacional. La Comisión **lamenta** tomar nota de que la memoria del Gobierno vuelve a guardar silencio sobre la cuestión de la discriminación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional. La Comisión recuerda que, si bien la importancia relativa a los problemas relacionados con cada uno de los motivos puede variar de un país a otro, al examinar la situación y decidir las medidas que habrán de adoptarse, es esencial que se tengan en cuenta todos los motivos en la aplicación de la política nacional (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 848 y 849). **Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación con miras a eliminar toda discriminación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional. La Comisión también pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre todo caso de discriminación en el empleo basado en estos motivos que haya sido identificado por las autoridades competentes o que se haya denunciado a las mismas, y sobre la forma en que fueron tratados. Sírvese proporcionar información sobre actividades de sensibilización, tales como cursos de formación o seminarios, sobre la discriminación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional, destinados a inspectores del trabajo, jueces y otros funcionarios públicos competentes, así como a empleadores, trabajadores y sus organizaciones.**

Artículo 5. Medidas especiales. Personas con discapacidad. La Comisión recuerda la indicación anterior del Gobierno de que el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad estaba en el proceso de recopilar datos sobre las personas con discapacidad y sobre la implementación del programa de incentivos especiales para emplear personas con discapacidad. **Lamentando tomar nota de que el Gobierno una vez más no proporciona nueva información a este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique dichos datos.**

Aplicación. Habida cuenta de que el Gobierno evita una vez más tratar este tema en su memoria, la Comisión recuerda que el seguimiento y la aplicación de las leyes y políticas a favor de la igualdad y en contra de la discriminación son importantes para determinar si efectivamente se aplica el Convenio (véase el Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 868). **Por lo tanto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para reforzar la capacidad de los funcionarios responsables del cumplimiento de la legislación para detectar y combatir la discriminación en el empleo y la ocupación. Una vez más, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información sobre toda decisión de los tribunales, la Comisión Nacional del Trabajo, la Comisión sobre Derechos Humanos y Justicia Administrativa, o cualquier otro órgano competente, así como acerca de toda infracción registrada por los inspectores del trabajo, o comunicada a éstos, y la manera en que se haya dado seguimiento a esos casos de discriminación. Por último, la Comisión pide otra vez al Gobierno que adopte medidas concretas para revisar el formulario que utiliza la inspección del trabajo de modo que incluya una referencia específica a la discriminación basada en todos los motivos enumerados en el Convenio, incluido el acoso sexual.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)

Artículo 1, 1), a) y b), del Convenio. Legislación en materia de lucha contra la discriminación. Función pública. La Comisión recuerda que la ley núm. L/2014/072/CNT por la que se establece el Código del Trabajo de 2014 excluye de su campo de aplicación a los funcionarios (artículo 2). Asimismo, recuerda que el artículo 11 de la ley núm. L/2001/028/AN, de 31 de diciembre de 2001, sobre el estatuto general de los funcionarios sólo prohíbe que se hagan distinciones entre los funcionarios debido a sus opiniones políticas, sindicales, filosóficas o religiosas, su sexo o su origen étnico. La Comisión señala, desde 1990, que la protección jurídica de los funcionarios frente a la discriminación resulta insuficiente habida cuenta de que no cubre todos los aspectos de la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional y el origen social y que los candidatos a un puesto de funcionario no están cubiertos por el artículo 11 del estatuto general de los funcionarios. **Tomando nota de que en su memoria el Gobierno indica que la solicitud de la Comisión de que se modifiquen las disposiciones legislativas relativas a la discriminación se transmitirá a las autoridades del Ministerio de la Función Pública, la Comisión confía en que, en un futuro próximo, el Gobierno adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 11 de la ley núm. L/2001/028/AN sobre el estatuto general de los funcionarios a fin de garantizar a los funcionarios y a los candidatos a un empleo en la función pública una protección contra toda discriminación directa o indirecta basada, como mínimo, en los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. Pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido así como sobre todo mecanismo de reclamación que permita a los candidatos a un empleo en la función pública presentar un recurso si estiman que han sido objeto de discriminación durante la contratación.**

Discriminación basada en el sexo. Acoso sexual. En su memoria el Gobierno indica que, a pesar de las sanciones previstas por la ley, las personas víctimas de acoso sexual casi nunca inician procedimientos por acoso sexual. **Tomando nota de que el Gobierno reconoce la existencia de víctimas de acoso sexual, la Comisión le pide que adopte medidas a fin de prevenir el acoso sexual en el empleo y la ocupación, por ejemplo mediante campañas de sensibilización (a**

través de la radio u otros medios de comunicación, etc.) o reforzando las actividades de prevención de la Inspección del Trabajo en este ámbito, así como medidas a fin de informar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas sobre sus derechos y deberes en la materia. Asimismo, pide al Gobierno que examine si los mecanismos de queja y medios de recurso establecidos a nivel nacional, pero también a nivel de empresa, son lo suficientemente accesibles y permiten sancionar el acoso y acabar con él.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1995)

Artículo 3 y 6 del Convenio. Política Nacional. Información y educación. La Comisión recuerda que, según el artículo 3 del Convenio, «con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñan o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales». Esas medidas se inscriben, por lo tanto, en el contexto más amplio de la igualdad entre hombres y mujeres. Es esencial que esta política se conciba no sólo para eliminar toda discriminación, en la ley y en la práctica, contra los trabajadores con responsabilidades familiares, sino también para que se adopten medidas eficaces para promover el principio de igualdad de oportunidades y de trato para esos trabajadores, en todos los ámbitos del empleo y la ocupación (véase el Estudio General de 1993, Trabajadores con responsabilidades familiares, párrafos 54-59). Desde hace cerca de veinte años, la Comisión viene destacando que las «responsabilidades familiares» no forman parte de los motivos de discriminación expresamente prohibidos por el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en su memoria que adoptará disposiciones para permitir que hombres y mujeres con responsabilidades familiares gocen de sus derechos. **Recordando que, sigue sin existir una política nacional sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga a bien adoptar las medidas necesarias, en el derecho y en la práctica, para garantizar que los trabajadores — hombres y mujeres — con responsabilidades familiares que lo deseen, puedan acceder a un empleo u ocuparlo sin ninguna discriminación y, en lo posible, sin conflictos entre sus responsabilidades profesionales y familiares, especialmente: i) prohibiendo expresamente en el Código del Trabajo toda discriminación basada en las responsabilidades familiares en todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluso a nivel de la contratación; ii) permitiendo que los trabajadores con responsabilidades familiares sean informados de sus derechos y de ejercerlos, y iii) adoptando un conjunto de medidas de apoyo y de medidas de sensibilización y de información del público en relación con los problemas a los que se enfrentan los trabajadores con responsabilidades familiares, así como medidas encaminadas a promover en la población el respeto mutuo y la tolerancia.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2008.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no aprovechó la ocasión que le ofrecía la promulgación de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, el 16 de febrero de 2012, y de la Ley núm. 10/2012 sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo, el 24 de diciembre de 2012, para abordar las cuestiones planteadas por la Comisión.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. La Comisión toma nota de que el artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012 (anteriormente artículo 15 de la Ley Fundamental de 1995) prevé: «Cualquier acto de parcialidad o de discriminación debidamente constatado por motivos tribales, étnicos, sexo, religiosos, sociales, políticos u otros análogos es punible o castigado por la ley». Además, el artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012 (anteriormente artículo 1, 4), de la Ley General del Trabajo de 1990) prevé que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, y que nadie podrá ser objeto de discriminación, es decir, de distinción, exclusión o preferencia por motivos de raza, color, sexo, opinión política, ascendencia nacional, origen social o afiliación sindical. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012 sigue sin hacer referencia a la religión entre los motivos de discriminación prohibidos y añade que, sin embargo, dicho criterio está incluido en el artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012. La Comisión recuerda que cuando se adopten disposiciones legales para dar cumplimiento al principio del Convenio, éstas deberían incluir por lo menos todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 1, 1), a) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 853). **La Comisión por lo tanto insta firmemente al Gobierno a tomar medidas, en cuanto tenga la ocasión, para añadir el motivo de «religión» a la lista de motivos prohibidos de discriminación. La Comisión le pide al Gobierno una vez más que proporcione informaciones sobre la aplicación práctica del artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012 y sobre el artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012, e indique si se han dictado decisiones judiciales y administrativas en relación con esas disposiciones, y, en caso afirmativo, que proporcione información detallada sobre su contenido.**

Artículos 1, 1), b), y 5. Otros criterios. Medidas especiales. La Comisión nota que el artículo 1, 4), de la Ley General del Trabajo de 1990 (ahora artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012) prevé que se facilite la contratación de los trabajadores de edad avanzada y de aquellos con capacidad disminuida. La Comisión había

solicitado anteriormente copia de la ley núm. 6/1999, de 6 de diciembre de 1999, por la que se modifican determinados artículos de la Ley núm. 6/1992 Reguladora de la Política Nacional de Empleo, de 3 enero de 1992. La Comisión toma nota de que el artículo 62 de Ley Reguladora de la Política Nacional de Empleo, en su tenor modificado por la ley núm. 6/1999, de 6 de diciembre de 1999, prevé que el Gobierno adoptará programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores con dificultades de reinserción en el mercado de trabajo, especialmente los jóvenes demandantes de primer empleo, mujeres, hombres mayores de 45 años y las personas con discapacidad. ***Se le pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación en la práctica de las referidas disposiciones en lo atinente a los trabajadores de mayor edad, los jóvenes demandantes de primer empleo y las personas con discapacidad.***

Artículos 2 y 3. Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda que la discriminación en el empleo y la ocupación es un fenómeno universal en constante evolución y que algunas de las manifestaciones de la discriminación han tomado formas más sutiles y menos visibles. En este sentido, es esencial reconocer que ninguna sociedad está libre de discriminación y que se requiere de una acción continua para tratarla. Asimismo, deben evaluarse periódicamente los resultados alcanzados en la aplicación de la política y los programas nacionales en materia de igualdad a fin de que los mismos se ajusten a las necesidades de la población, en particular las de aquellos grupos más vulnerables a la discriminación (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 731 y 847). ***La Comisión pide al Gobierno que indique si se ha formulado la política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y que describa cómo está siendo aplicada (procedimientos jurídicos, medidas prácticas, etc.) en cada uno de los campos siguientes: i) acceso a la formación profesional; ii) acceso a los empleos y a las diferentes ocupaciones, y iii) condiciones de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas con miras a evaluar los resultados de la implementación de la política nacional de igualdad y que envíe información sobre el impacto de los mismos en los diversos sectores de la población, y facilite datos estadísticos desglosados por sexo, raza, etnia y religión sobre el empleo y la formación profesional, así como cualquier otra información que pueda permitir a la Comisión evaluar de manera más completa la forma en que se aplica el Convenio en la práctica.***

Artículo 4. Medidas respecto a los individuos sospechosos de actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 4 del Convenio, así como información específica sobre los procedimientos que establecen el derecho de apelación ante un órgano competente e independiente.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Iraq

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1963)

Artículos 1, a) y b), y 2 del Convenio. Definición de remuneración. ***Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación.*** En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 4, 2), del Código del Trabajo de 1987, que limita la igualdad de remuneración a un trabajo de la misma naturaleza y del mismo volumen realizado en condiciones idénticas, es más restrictivo que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor establecido en el Convenio. La Comisión toma nota con ***satisfacción*** de que el artículo 53, 5), de la Ley del Trabajo núm. 37/2015, que entró en vigor en febrero de 2016, prevé la «igualdad salarial entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor». La Comisión también toma nota de que el término «salario» se define como «cualquier suma o prestación que corresponda al trabajador por el trabajo realizado, incluidas todas las prestaciones y remuneraciones debidas por las horas extraordinarias» (artículo 1, 14)), de conformidad con el artículo 1, a), del Convenio. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 53, 5), de la nueva Ley del Trabajo. Asimismo, solicita al Gobierno que tome medidas para sensibilizar sobre el concepto de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor» a los trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el público en general.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)

Artículo 1 del Convenio. Cambios legislativos. La Comisión toma nota con ***interés*** de las disposiciones en materia de igualdad y discriminación que figuran en la Ley del Trabajo núm. 37/2015, que entró en vigor en febrero de 2016. En particular, la Comisión toma nota de que el artículo 8 prohíbe tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta en todas las cuestiones relacionadas con la formación profesional, la contratación y las condiciones de empleo. En el artículo 1 de la nueva Ley del Trabajo la discriminación directa se define como «cualquier distinción o preferencia basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la comunidad religiosa, las opiniones o ideas políticas, el origen y la ascendencia nacional» y la discriminación indirecta como «cualquier exclusión, distinción o preferencia basada en la nacionalidad, la edad o el estado de salud, la condición económica o social, la afiliación a un sindicato y las actividades sindicales que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato en el empleo y la ocupación». El artículo 10 prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el sexo y parece cubrir tanto el acoso sexual con contrapartida, *quid pro quo*, como el acoso sexual en un entorno hostil. Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 11, 2), de la Ley del Trabajo prevé sanciones (penas de prisión por un periodo que no exceda los seis meses y/o una multa que no supere el 1 millón de dinares iraquíes (IQD)), en casos de discriminación y acoso sexual. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 8***

y 10 de la Ley del Trabajo núm. 37/2015. Pide al Gobierno que provee informaciones detalladas acerca de todas las quejas sobre discriminación o acosos sexuales presentados ante el Tribunal del Trabajo o cualquier otro mecanismo de queja, así como sobre las sanciones impuestas. La Comisión también pide al Gobierno que tome medidas para sensibilizar, sobre las disposiciones relativas a la lucha contra la discriminación de la nueva Ley del Trabajo, a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, así como a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y al público en general.

Artículo 2. Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. En lo que respecta a la formulación y aplicación de una política nacional en materia de igualdad, la Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se refiere a la adopción de la Ley del Trabajo núm. 37/2015. La Comisión reconoce que la adopción de disposiciones legales que prohíben la discriminación en el empleo y la ocupación basada en una serie de motivos constituye un paso importante para abordar las cuestiones cubiertas por el Convenio. Sin embargo, quiere señalar a la atención del Gobierno que la formulación y aplicación de una política nacional en materia de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas concretas que a menudo consisten en una combinación de medidas legislativas y administrativas, acuerdos colectivos, políticas públicas, medidas positivas, mecanismos de solución de conflictos y de aplicación, órganos especializados, programas prácticos y sensibilización. Para hacer frente a la discriminación de forma eficaz y promover la igualdad es necesario adoptar medidas concretas. **La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen social y ascendencia nacional, y cualquier otro motivo prohibido de discriminación. En particular, pide al Gobierno que tome medidas para ofrecer las mismas oportunidades a hombres y mujeres, incluidos los hombres y mujeres pertenecientes a grupos étnicos o religiosos, en el mercado de trabajo de los sectores público y privado, y que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte medidas concretas para promover la tolerancia y la coexistencia entre grupos étnicos y religiosos y sensibilizar sobre la legislación existente que prohíbe la discriminación.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Irlanda

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Artículos 1, 1), a), y 2 del Convenio. Discriminación en materia de género e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la convención constitucional encargada de formular recomendaciones sobre la reforma constitucional recomendó que el artículo 41.2 de la Constitución, que establece que «las madres no están obligadas por necesidad económica a realizar trabajos que les hagan desentender sus deberes del hogar», sea modificado con el fin de reemplazar el término «madres», por «cuidadores». La Comisión tomó nota de que esta propuesta de enmienda, a pesar de tener la finalidad de reconocer el papel de los cuidadores en la sociedad, puede dirigirse principalmente a las mujeres, lo que puede continuar dificultando la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, o limitar su capacidad de reincorporar el mercado laboral. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que garantizara que la Constitución no alienta directa o indirectamente el trato estereotipado de las mujeres en el marco del empleo y la ocupación. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual el Programa para Alianza Gubernamental, publicado en mayo de 2016, había propuesto celebrar un referéndum sobre el artículo 41.2 de la Constitución y que este referéndum no tendría lugar antes de 2018. La Comisión toma nota además de que la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda ha formulado una declaración de políticas sobre el artículo 41.2 de la Constitución (junio de 2018), en la que considera que dicho artículo perpetúa los estereotipos en materia de género y que debería modificarse con el fin de: i) que el uso del lenguaje no sea sexista; ii) se mencione «la vida familiar» en su formulación, y que se entienda que este término comprende un amplio abanico de relaciones familiares y que incluye situaciones donde los miembros de la familia no viven en la misma casa, y iii) reconozca y apoye el trabajo de los cuidados, en particular el de los padres y otras personas que prestan cuidados en la familia. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda. Además, insta firmemente al Gobierno a que aproveche la oportunidad que brinda el actual proceso de revisión constitucional para asegurar que la formulación actual del artículo 41.2 de la Constitución no aliente directa o indirectamente el trato estereotipado de las mujeres en el contexto del empleo y la profesión, y a que provea información sobre las medidas específicas tomadas al respecto.**

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en motivos de opinión política o de origen social. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, al tomar nota de que los motivos de discriminación prohibidos en virtud de la Ley sobre Igualdad en el Empleo no cubren la opinión política ni el origen social, pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar la protección legislativa contra la discriminación en el empleo y la ocupación basada en la opinión política y el origen social, y a que transmitiera la información sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar en la práctica la protección contra la discriminación sobre la base de estos dos motivos. La Comisión toma nota con **preocupación** de la reiterada declaración del Gobierno de que no tiene planes a corto plazo

para modificar la legislación en materia de igualdad con objeto de incluir la opinión política y el origen social como motivos prohibidos de discriminación. ***La Comisión recuerda que, al tiempo que ha señalado sistemáticamente que cuando se adopten disposiciones jurídicas para dar cumplimiento al principio del Convenio éstas deberían incluir como mínimo todos los motivos de discriminación establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para garantizar la protección legislativa contra la discriminación en el empleo y la ocupación basada en la opinión política y el origen social, y a que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión reitera también su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar en la práctica la protección contra la discriminación basada en la opinión política y el origen social.***

Artículo 1, 2). Calificaciones exigidas para un empleo. La Comisión instó anteriormente al Gobierno a que, con el fin de garantizar que cualquier excepción al principio de no discriminación consagrado en el Convenio se limita a las calificaciones exigidas para un determinado empleo, adoptara medidas para modificar las partes correspondientes del artículo 2 de la Ley sobre Igualdad en el Empleo, que excluye del ámbito de aplicación de la ley a «las personas empleadas en el domicilio de un tercero para proporcionar servicios personales cuando estos servicios afectan a la vida privada o familiar de dicha personas». Por consiguiente, el artículo 2 permite a los empleadores de los trabajos domésticos tomar decisiones de contratación en base a motivos discriminatorios. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que la excepción del artículo 2 se aplica al proceso de contratación, pero que, una vez empleados, se prohíbe la discriminación contra estos trabajadores. El Gobierno señala asimismo, que se alienta a los empleadores a que apliquen prácticas antidiscriminatorias mediante un código de conducta voluntario para la protección de las personas empleadas en los hogares de otras. No obstante, la Comisión toma nota de que este repertorio de prácticas protege únicamente a los trabajadores domésticos de la discriminación cuando ya estén empleados y no en su acceso al empleo. En este sentido, la Comisión recuerda que hay muy pocos casos en los que los motivos de discriminación mencionados en el Convenio constituyen realmente requisitos inherentes al empleo. Por ejemplo, pueden autorizarse distinciones basadas en el sexo para algunos empleos, tales como las artes escénicas o los empleos relacionados con la intimidad física. Ahora bien, esas distinciones deberían determinarse sobre una base objetiva y tener en cuenta las capacidades individuales. Unas excepciones demasiado amplias en la legislación en materia de igualdad, que excluyan a los trabajadores domésticos de la protección contra la discriminación en lo que respecta al acceso al empleo, pueden conducir a prácticas discriminatorias por parte de los empleadores contra esos trabajadores, lo que es contrario al Convenio. La Comisión considera que el derecho a respetar la vida privada y familiar de las personas no debería interpretarse en el sentido de que se protege una conducta que infringe el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, incluida la conducta que consiste en dar un trato diferente a los candidatos a un empleo basándose en cualquiera de los motivos de discriminación mencionados en el *artículo 1* del Convenio, cuando esto no esté justificado por los requisitos inherentes a un empleo en particular (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 830). En este sentido la Comisión desea llamar la atención sobre el hecho de que: i) el Convenio no contiene ninguna disposición que limite su ámbito de aplicación en relación a ningún individuo o sector de actividad, y ii) la protección prevista en el Convenio incluye todos los aspectos relativos al empleo y la ocupación, incluidos el acceso al empleo y a una ocupación determinada. Celebra la reciente ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) por parte de Irlanda, la Comisión remite al Gobierno a sus observaciones adoptadas en 2017 en virtud de dicho instrumento. ***La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para modificar las partes pertinentes del artículo 2 de la Ley sobre Igualdad en el Empleo, a fin de garantizar que las restricciones al derecho a la no discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación se limitan a los requisitos inherentes a un determinado empleo, definidos estrictamente.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Israel

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en motivos de sexo, raza, color o ascendencia nacional. Cuidadores extranjeros. En su observación anterior, la Comisión recordó la decisión del Tribunal Superior de Justicia, en el caso *Yolanda Gloten c. el Tribunal Nacional del Trabajo* (documento HCJ 1678/07), de 29 de noviembre de 2009, que excluye la aplicación de la Ley sobre Horas de Trabajo y de Descanso, de 1951 (incluidas las disposiciones relativas a la remuneración de las horas extraordinarias) a las trabajadoras extranjeras que prestan cuidados en régimen interno. En relación con esto, tomó nota de la información comunicada por el Gobierno respecto de un conjunto de recomendaciones presentadas por la Comisión del personal gubernamental al Ministro de Economía, que incluyen las siguientes: i) debería enmendarse la Ley sobre Horas de Trabajo y de Descanso y su reglamento relativo a la remuneración de las horas extraordinarias, a efectos de clarificar que los cuidadores en régimen interno no están excluidos del campo de aplicación de la ley, destacando la dificultad de supervisar sus horas de trabajo; ii) en lugar de la remuneración de las horas extraordinarias, estos cuidadores en régimen interno deberían tener derecho a un salario integral que incluiría el pago de unas horas extraordinarias no inferiores al 120 por ciento del salario mínimo mensual; iii) el descanso semanal no debería

ser inferior a 25 horas; iv) se debería enmendar la Ley de Protección del Salario, de 1958, a efectos de limitar la tasa del salario que el empleador puede pagar en alimentos y bebidas a no más de 732 shekels de Israel (ILS) al mes, y v) la reglamentación que autoriza al empleador a deducir la mitad de la suma en concepto de alojamiento, debería abolirse respecto de los cuidadores en régimen interno y las deducciones por gastos varios no deberían superar los 409 ILS sólo en este sector. La Comisión solicitó al Gobierno que garantizara que no se discriminara a las trabajadoras extranjeras, directa o indirectamente, en base a motivos de sexo, raza, color o ascendencia nacional, y que comunicara información sobre todo impacto diferencial entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros respecto de las medidas de protección o de los requisitos que se aplican al sector de los cuidados. También solicitó al Gobierno que comunicara información: i) sobre las medidas adoptadas para dar afecto a las recomendaciones formuladas por la Comisión del personal gubernamental y sobre toda dificultad en este sentido, y ii) toda queja presentada por las cuidadoras extranjeras y nacionales ante las autoridades, indicando la naturaleza de la queja y el resultado de la misma. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno declara su intención de adoptar un enfoque gradual hacia la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Economía para mejorar la situación de los cuidadores. La Comisión recuerda que el Convenio se aplica a todos los trabajadores, tanto nacionales como no nacionales, en todos los sectores de actividad, en los ámbitos público y privado, y en la economía formal e informal. En consecuencia, cuando determinadas categorías de trabajadores son excluidas de la legislación laboral general, es necesario determinar si hay leyes o reglamentos especiales que se apliquen a esos grupos, y si proporcionan el mismo grado de derechos y de protección que las disposiciones generales (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 742). La Comisión recuerda que todos los trabajadores que prestan cuidados, incluidos los cuidadores extranjeros, deben estar efectivamente protegidos de la discriminación en el empleo y la ocupación, basada en los motivos establecidos en el Convenio, incluso respecto de sus condiciones de trabajo. En estas cuestiones, la Comisión también se refiere a sus observaciones en relación con el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y con el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97). ***Recordando la gran dependencia del sector de los cuidados en el trabajo de los cuidadores extranjeros en régimen interno, como señaló en sus comentarios relativos al Convenio núm. 97, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas o previstas, en el marco del enfoque gradual para la aplicación de las recomendaciones formuladas al Ministerio de Economía, con miras a garantizar que las trabajadoras extranjeras estén efectivamente protegidas de la discriminación directa e indirecta basada en motivos de sexo, raza, color o ascendencia nacional, de conformidad con el Convenio. También reitera su solicitud de información sobre toda queja presentada por las cuidadoras extranjeras y nacionales ante las diferentes autoridades, indicando la naturaleza de la queja y el resultado de la misma, así como sobre todo impacto diferencial entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros respecto de las medidas de protección o de los requisitos que se aplican al sector de los cuidados.***

Artículos 1 y 2. Igualdad de oportunidades y de trato cualquiera que sea la raza, la ascendencia nacional o la religión. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que continuara proporcionando información sobre las diversas medidas y programas implementados para promover la igualdad de acceso al empleo de los árabes israelíes, drusos y circasianos, y su impacto. Se le pidió también al Gobierno que proporcionara información actualizada, desagregada por sexo y sector de población sobre la participación de la fuerza de trabajo, y las tasas de desempleo y empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria acerca de las diversas medidas implementadas en 13 localidades en el marco de la resolución gubernamental núm. 1539 de 2010 (plan de cinco años para el desarrollo económico) bajo la coordinación de la Autoridad para el Desarrollo Económico de los Sectores Árabes, Drusos y Circasianos (AEDA). Tales medidas incluyen microcréditos dirigidos especialmente a las mujeres árabes y programas de emprendimiento para la población beduina y el establecimiento de un nuevo centro de empleo «one-stop». La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el plan finalizó en 2014. Por otro lado, el Comité toma nota de la resolución gubernamental núm. 922 de 30 de diciembre de 2015 por la que se aprueba el plan de cinco años de desarrollo económico de la población árabe para el período 2016-2020, que destina fondos para acciones dirigidas a reducir las diferencias entre la población judía y árabe en una variedad de ámbitos, incluyendo la educación y el empleo. La Comisión toma nota también de la información estadística proporcionada por el Gobierno sobre la tasa de empleo de la población, según la cual, entre 2012 y 2014, hubo un incremento de 1,3 y 3,9 puntos porcentuales en la tasa de empleo de los hombres y mujeres árabes, respectivamente. La Comisión toma nota asimismo de que la Ley Fundamental del Estado-Nación, adoptada por el Knesset el 18 de julio de 2018, la cual reconoce, entre otras, el hebreo como lengua oficial de Israel (artículo 4, a)), y confiere a la lengua árabe un «estatus especial» que será regulado por ley (artículo 4, b)), y prevé sin embargo que dicha cláusula no cambia el estatus otorgado a la lengua árabe con anterioridad a la adopción de la Ley Fundamental (artículo 4, c)). La Comisión toma nota además de que el artículo 10 de la Ley Fundamental del Estado-Nación reconoce: i) el sábado y los festivos judíos como días oficiales de descanso en el país, y ii) el derecho de aquellos que no son judíos a disfrutar de sus días de descanso y sus festivos, el ejercicio de los cuales se encuentra regulado por ley. A este respecto, la Comisión recuerda que el principio de igualdad de oportunidades y de trato bajo el Convenio se aplica a todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluidos los términos y condiciones del empleo, tales como horas de trabajo, períodos de descanso y vacaciones anuales pagadas. La Comisión toma nota igualmente de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) expresó su preocupación por la discriminación sistémica que experimentan las minorías nacionales, en particular las mujeres y las niñas pertenecientes a las comunidades árabe y beduina (documento

CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 de noviembre de 2017, párrafo 10). ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y en la ocupación de la población árabe, drusa y circasiana así como su impacto, incluyendo información sobre cualquier evaluación realizada de los resultados del plan de cinco años y sus acciones de seguimiento previstas o implementadas. La Comisión pide también al Gobierno que supervise el impacto de la Ley Fundamental del Estado-Nación en el empleo de hombres y mujeres pertenecientes a la población árabe, drusa y circasiana en los sectores público y privado para abordar cualquier discriminación directa o indirecta por los motivos establecidos en el Convenio, incluyendo en relación con los requisitos de la lengua para obtener o mantener un trabajo y para tener oportunidades de progresar en la carrera profesional, así como que proporcione información a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que continúe comunicando información estadística, desagregada por sexo y grupo de población, sobre las tasas de empleo y de participación en varios sectores y ocupaciones.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jordania

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)

Marco legislativo. La Comisión recuerda que, en su observación anterior, acogió con beneplácito las conclusiones y las recomendaciones del examen jurídico sobre igualdad de remuneración, realizado por la Comisión Directiva Nacional para la Igualdad de Remuneración (NSCPE), con apoyo de la OIT, y solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones derivadas del examen jurídico en relación con el Convenio, en particular respecto de las enmiendas propuestas a los artículos 4 y 29A, 6), de la Ley del Trabajo, con miras a, respectivamente: i) definir y prohibir, de manera explícita, la discriminación directa e indirecta basada en al menos todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, en todas las áreas del empleo y la ocupación, que abarca a todos los trabajadores, y ii) brindar una protección y una reparación claras con respecto al acoso sexual *quid pro quo* y al acoso sexual en un entorno hostil. La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica información en su memoria sobre ninguna de estas cuestiones. Sin embargo, toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), expresó su preocupación acerca de las penosas condiciones y el alto riesgo de abuso físico y sexual que afrontan muchas niñas ocupadas como trabajadoras domésticas (documento CEDAW/C/JOR/CO/6, de 9 de marzo de 2017, párrafo 43, h)). En ese sentido, la Comisión desea destacar la importancia de la adopción de medidas efectivas para impedir y prohibir el acoso sexual en el empleo y la ocupación y se refiere a la orientación específica que aporta su observación general de 2002 sobre el tema. También recuerda que las definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación son determinantes para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). ***En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del examen jurídico de la NSCPE sobre igualdad de remuneración, con miras a definir y prohibir de manera explícita la discriminación directa e indirecta basada en al menos todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, en todas las áreas del empleo y la ocupación, y abarcando a todos los trabajadores, así como brindar una protección y una reparación claras respecto al acoso sexual «quid pro quo» y al acoso sexual en un entorno hostil. La Comisión también pide al Gobierno comunicar información sobre las medidas adoptadas en la práctica para una mayor sensibilización, de cara a la prevención y la protección contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y sobre todo caso relacionado con el acoso sexual abordado por los tribunales o detectado por la Inspección del Trabajo, y sus resultados.***

Artículo 5. Medidas especiales de protección. Restricciones al empleo de las mujeres. En su observación anterior, la Comisión se refirió al artículo 69 del Código del Trabajo, en virtud del cual el Ministro especificará las industrias y las ocupaciones en las que se prohíbe el empleo de las mujeres, y el tiempo durante el cual no trabajarán las mujeres, y solicitó al Gobierno que hiciera propicia la ocasión del proceso de examen legislativo en curso para enmendar el artículo 69 del Código del Trabajo y la correspondiente ordenanza núm. 6828, de 1.º de diciembre de 2010, para garantizar que toda restricción al empleo de la mujer se limite a la maternidad en sentido estricto, y que comunique información sobre toda medida adoptada al respecto. Señalando que la memoria del Gobierno no se pronuncia sobre esta cuestión concreta, la Comisión recuerda que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres que estén basadas en estereotipos con respecto a sus capacidades profesionales y su papel en la sociedad, violan el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. También desea subrayar que las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles, deberían dirigirse a la protección de la salud y la seguridad de hombres y mujeres en el trabajo, al tiempo que se tienen en cuenta las diferencias de género respecto de los riesgos específicos para su salud (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 840). Tales restricciones tienen que ser justificadas (basadas en pruebas científicas) y examinadas periódicamente a la luz de la evolución y los progresos científicos para determinar si aún se necesitan y siguen siendo efectivas. ***Ante la ausencia de información del Gobierno, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que haga propicia la ocasión***

del proceso de examen legislativo en curso para enmendar el artículo 69 del Código del Trabajo y la correspondiente ordenanza, a efectos de garantizar que toda restricción al empleo de la mujer se limite a la maternidad en sentido estricto, y que comunique información sobre toda medida adoptada a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kuwait

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)

Artículo 1 del Convenio. Protección de los trabajadores contra la discriminación en el empleo y en la ocupación. Legislación y práctica. En su comentario anterior, la Comisión recordó que aunque las disposiciones constitucionales son importantes, por lo general no han demostrado ser suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación y que, en todo caso, el artículo 29 de la Constitución no cubre todos los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio ni todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación. Asimismo, insto firmemente al Gobierno a adoptar medidas concretas para prohibir explícitamente la discriminación directa o indirecta basada en la raza, el sexo, la religión, opinión política, ascendencia nacional y el origen social, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, y que abarque a todos los trabajadores. Recordando que tratar el acoso sexual mediante procedimientos penales normalmente no es suficiente, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara disposiciones legales específicas que definan y prohíban tanto el chantaje (*quid pro quo*) como el acoso sexual en un ambiente hostil en el empleo y la ocupación, y disposiciones estableciendo sanciones y reparaciones. La Comisión toma nota de que en su respuesta, el Gobierno se remite nuevamente al artículo 29 de la Constitución que prevé la igualdad de derechos sin ninguna distinción basada en motivos de sexo, origen, idioma o religión, así como al artículo 7 que establece que la justicia, libertad e igualdad son los pilares de la sociedad y que existe un vínculo fuerte de cooperación y de mutuo respeto entre los ciudadanos. El Gobierno también señala una vez más que el Código Penal penaliza el acoso sexual en todas sus formas. La Comisión toma nota de que el Gobierno, refiriéndose al artículo 70 de la Constitución destaca el hecho de que los tratados internacionales y los convenios tienen fuerza de ley una vez que han sido firmados, ratificados y publicados en el *Diario Oficial*. Por consiguiente, son parte integrante de la legislación doméstica: todos los órganos gubernamentales, las instituciones y todas las personas están obligadas a respetar sus disposiciones y los tribunales deben garantizar su respeto y protección. A este respecto, la Comisión recuerda que si bien las cláusulas constitucionales que prevén explícitamente que los acuerdos internacionales y los tratados prevalecen sobre la legislación nacional son importantes, no eximen a los Estados de adoptar una legislación nacional para aplicar los principios consagrados en el Convenio. Las disposiciones del Convenio, incluso cuando prevalezcan sobre la legislación nacional, tal vez no sean suficientes para proporcionar una protección jurídica efectiva contra la discriminación a los distintos trabajadores (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 851). **La Comisión nuevamente: i) insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas concretas para prohibir explícitamente la discriminación directa e indirecta basada en la raza, sexo, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, con respecto a todos los aspectos del empleo y ocupación, incluso en lo que respecta a la contratación, y que cubra a todos los trabajadores; ii) pide al Gobierno que adopte disposiciones legales específicas que definan y prohíban el acoso sexual, tanto el chantaje (*quid pro quo*) como el acoso derivado de un ambiente hostil en el empleo y la ocupación, y disposiciones estableciendo las sanciones y reparaciones, y iii) al mismo tiempo, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores estén protegidos en la práctica contra todas las formas de discriminación, incluido el acoso sexual, en el empleo y la ocupación y que proporcione información completa al respecto.**

Trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos. La Comisión toma nota de que el sistema de patrocinio de Kuwait (*kafala*) — en virtud del cual el estatuto legal de los trabajadores migrantes está ligado a sus empleadores que actúan como sus patrocinadores para la obtención de una visa — todavía no ha sido abolido. Este sistema deniega a los trabajadores la posibilidad de obtener un empleo alternativo, expone al abuso a los trabajadores migrantes y socava la posibilidad de recurrir a medios de reparación. La Comisión toma nota de que, el 31 de marzo de 2016, la Autoridad Pública de Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo publicó el decreto núm. 378/2016 que permite a los trabajadores migrantes en el sector privado transferir su patrocinio a un nuevo empleador sin el consentimiento del empleador actual después de tres años desde la fecha de emisión de su permiso de trabajo y siempre que den un preaviso de noventa días a su empleador actual. La Comisión entiende, no obstante que esta enmienda al sistema de patrocinio no se aplica a los trabajadores domésticos. Asimismo, recuerda que todos los trabajadores migrantes deben estar protegidos contra la discriminación basada, como mínimo en la raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, como lo indica el artículo 1, 1) a), del Convenio.

La Comisión toma nota con *interés* de la adopción de la Ley de Trabajadores Domésticos (ley núm. 68, de 2015) que entre otras cosas: i) prohíbe a las agencias de contratación que cobren honorarios, en forma directa o indirecta, a los trabajadores domésticos (artículo 4); ii) prohíbe a las agencias de contratación anunciar, promover o clasificar a los trabajadores domésticos en condiciones humanamente degradantes (incluyendo los motivos de credo, género, color o de costo) (artículo 5), iii) especifica los datos que debe contener el contrato de trabajo (establecido tanto en árabe como en inglés) (artículo 18), y iv) otorga a los trabajadores domésticos el derecho de ser pagados mensualmente (artículos 7 y 20),

el derecho a un día libre a la semana, a vacaciones anuales pagadas, una jornada laboral de doce horas con descanso (artículo 22) y una prestación de un mes por año por cese en el servicio al final de su contrato (artículo 23). También prohíbe al empleador retener el documento de identidad del personal doméstico (a menos que el trabajador doméstico lo acepte) (artículos 12 y 22, 4)) y asignar al trabajador doméstico un trabajo peligroso y humillante (artículo 10). Exige al empleador que proporcione a los trabajadores domésticos comida, vestuario, medicinas y tratamiento médico así como una vivienda apropiada que garantice condiciones de vida decentes (artículos 9 y 11). La Comisión toma nota de que si bien la protección de que gozan los trabajadores domésticos conforme a la ley núm. 68 todavía no está en línea con la legislación laboral general, es un paso para resolver la discriminación contra los trabajadores domésticos. La Comisión toma nota asimismo de que en virtud de la ley, los trabajadores domésticos no están autorizados a cambiar de empleador sin el consentimiento de su empleador actual; de que la protección en contra de la discriminación y el abuso, incluido el acoso sexual, de los empleadores es débil (si se prevén sanciones específicas contra las agencias de contratación que contravengan las disposiciones de la ley, no es el caso para los empleadores); y que el Ministerio del Interior deba deportar a los trabajadores domésticos que se «fugaron» de su empleador, incluso si lo hicieron por abuso de su parte (artículo 51). Asimismo, la Comisión toma nota de que en noviembre de 2017, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación sobre las lagunas jurídicas en la Ley sobre los Trabajadores Domésticos relativas a la protección efectiva de estos trabajadores del abuso, la explotación y la violencia, incluidos: la falta de mecanismos de inspección del trabajo; las sanciones leves impuestas a las agencias de contratación de mano de obra por prácticas abusivas; la vinculación del estatuto migratorio de los trabajadores domésticos a un empleador o patrocinador, y la obligación del Ministerio del Interior de deportar un trabajador «prófugo»; la ausencia de sanciones aplicadas a los empleadores por la retención de los pasaportes de los trabajadores domésticos o no poder proporcionar una adecuada vivienda, comida, gastos médicos, descansos diarios o días de descanso semanal; la ausencia de la obligación para los empleadores de estar presentes en la solución de conflictos entre los empleadores y los trabajadores domésticos, así como la ausencia de mecanismos de denuncia. El CEDAW recomendó, entre otras cosas, que el Gobierno prosiga sus esfuerzos para abolir completamente el sistema de *kafala* (patrocinio) (documento CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 de noviembre de 2017, párrafos 36, e) y 37, f)). La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno de que la ley núm. 69 de 2015 relativa al establecimiento de una sociedad anónima cerrada para la contratación y el empleo de los trabajadores domésticos fue promulgada y que se ha creado la Kuwait Home Helper Operating Company con el objetivo de evitar los aspectos negativos de las agencias de contratación para los trabajadores domésticos. Observa asimismo la indicación del Gobierno de que el Departamento de Trabajadores Domésticos (DWD) junto con el Ministerio del Interior, que es responsable de examinar las quejas presentadas por los trabajadores domésticos ha recibido numerosas quejas resueltas en forma amistosa. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre los Trabajadores Domésticos, núm. 68, de 2015, incluidas las lagunas relativas a la protección efectiva de los trabajadores domésticos del abuso, la explotación y la violencia subrayada por la Comisión, así como por el CEDAW. Pide al Gobierno que indique si la Kuwait Home Helper Operating Company ha sustituido completamente a las agencias de contratación ya existentes y que proporcione información sobre su funcionamiento y, si está disponible, una copia de su informe anual de actividades. Solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para revisar el sistema de patrocinio y garantizar la plena aplicación del Convenio respecto de todos los trabajadores migrantes, así como la información, incluidas estadísticas sobre los resultados del examen de las quejas por el Departamento de los Trabajadores Domésticos.***

Personas apátridas o personas sin nacionalidad (los bidún). La Comisión toma nota de que el Gobierno adjunta a su memoria un folleto informativo procedente de la Agencia Central, en el que indica que el número estimado de personas apátridas o personas sin nacionalidad (*los bidún*) — a las que el Gobierno se refiere como «residentes ilegales» — era aproximadamente de 100 000 en 2014. La Comisión recuerda que el Consejo de Ministros, a través de la resolución núm. 1612 de 2010, adoptó una Hoja de ruta para hacer frente a dicha situación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Agencia Central, en cooperación con la Comisión del Servicio de la Administración Pública, la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait y el Sindicato de Sociedades Cooperativas está haciendo todo lo posible para permitir a las personas apátridas encontrar un empleo en los sectores público y privado así como empleos por cuenta propia. Según el Gobierno, hay 2 571 empleados del sector público o del sector de las cooperativas que pertenecen a este grupo de personas. El Gobierno enfatiza que la decisión de establecer la Agencia Central muestra su disposición a encontrar una solución radical a este asunto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), en sus observaciones finales, seguía profundamente preocupado por la situación de los *bidún*, muchos de los cuales llevan viviendo en Kuwait durante generaciones, pero son considerados «residentes ilegales» por las autoridades y recomendó al Gobierno que encontrara una solución duradera a los problemas a los que se enfrentan los *bidún*, en particular estudiando la posibilidad de naturalizar a los que hayan vivido en Kuwait durante largos períodos y tengan un vínculo genuino y real con el Estado (documento CERD/C/KWT/CO/21-24, 19 de septiembre de 2017, párrafo 27). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de la implementación de la Hoja de ruta adoptada por el Consejo de Ministros (resolución núm. 1612/2010) y que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar que todas aquellas personas apátridas o residentes sin nacionalidad (los bidún) son protegidos contra la discriminación en el empleo y la ocupación por los motivos establecidos en el Convenio, incluyendo el acceso al empleo y la ocupación. La***

Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de bidún que viven en el país y la situación concerniente a su empleo.

Artículo 2. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se firmó un proyecto de cooperación técnica con la Oficina Internacional del Trabajo en noviembre de 2014 enunciando un número de actividades relativas a cuestiones de igualdad y que, mediante la ejecución de estas actividades, habrían discusiones sobre la formulación de una política nacional. La Comisión está informada de que tuvo lugar un seminario sobre cuestiones de igualdad y no discriminación en noviembre/diciembre de 2016. Sin embargo, la revisión de la legislación laboral que se había previsto en los documentos del programa no se ha llevado a cabo. **Recordando que la obligación principal de los Estados ratificadores es formular y llevar a cabo una política nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en cuanto al empleo y la ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados para la formulación y la aplicación de una política nacional integral para la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación respecto de todos los motivos establecidos en el Convenio, incluidas las medidas dirigidas a una mayor sensibilización en los asuntos relativos a la igualdad y a la no discriminación.**

Artículo 5. Medidas especiales de protección o asistencia. Trabajo prohibido para las mujeres. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los artículos 22 y 23 de la Ley del Trabajo en el Sector Privado (ley núm. núm. 6, de 2010) — que prohíbe el empleo nocturno de las mujeres (con algunas excepciones) y trabajo peligroso, arduo o nocivo para la salud o en contra de la moral pública — con el objetivo de proteger a la mujer en general, incluidas las mujeres embarazadas. A este respecto, la Comisión recuerda que con el tiempo se ha producido un cambio importante pues se ha pasado de un enfoque puramente de protección con respecto al empleo de las mujeres, a un enfoque basado en la promoción de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres y en la eliminación de la legislación y las prácticas discriminatorias. Señala a la atención del Gobierno la distinción que debe hacerse entre las medidas especiales de protección de la maternidad, en la forma prevista en el artículo 5 del Convenio, y las medidas basadas en las percepciones estereotipadas sobre la capacidad de las mujeres y su rol en la sociedad, que son contrarias al principio de igualdad de oportunidades y de trato y que constituyen obstáculos a la contratación y empleo de las mujeres. Las disposiciones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores deberían prever un entorno seguro y saludable, tanto para los trabajadores como para las trabajadoras, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias entre los hombres y las mujeres que hacen que cada uno de ellos esté expuesto a riesgos específicos en materia de salud. Además, dado que el objetivo es revocar las medidas de protección discriminatorias aplicables al empleo de las mujeres, habría que examinar qué otras medidas, tales como mejor protección de la salud de los hombres y las mujeres, seguridad y transportes adecuados, o servicios sociales, serían necesarios para que las mujeres pudieran tener las mismas oportunidades que los hombres para acceder a este tipo de empleos (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 838-840). **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que asegure que las medidas especiales de protección de las mujeres se limiten a lo estrictamente necesario para proteger la maternidad, y que estas disposiciones no impidan el acceso de las mujeres al empleo y a la ocupación. La Comisión también invita al Gobierno a que considere la posibilidad de examinar las cuestiones de seguridad y salud con el objeto de mejorar la protección de la salud tanto para los hombres como para las mujeres y que adopte las medidas de acompañamiento con respecto a la seguridad y aumentar la oferta de transporte adecuado y de servicios sociales para que las mujeres puedan acceder a todo tipo de empleo en igualdad de condiciones con los hombres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las disposiciones adoptadas a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática Popular Lao

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2008)

Legislación. Ámbito de aplicación. La Comisión tomó nota anteriormente de que la nueva Ley del Trabajo (2014) excluye de su ámbito de aplicación, entre otros, a los funcionarios públicos. Tomó nota asimismo de que no está claro si el artículo 6 de esta ley excluye a los trabajadores domésticos puesto que establece que éstos deben «atenerse al contrato de trabajo». Recordando que el principio del Convenio se aplica a todos los trabajadores, la Comisión pidió al Gobierno que señalara de qué forma se protege a los funcionarios públicos y a los trabajadores domésticos contra la discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la Ley sobre los Funcionarios Gubernamentales, núm. 74/NA, de 2015, prohíbe la discriminación contra los funcionarios del Gobierno. El Gobierno señala también que protege los intereses de los trabajadores domésticos al fomentar que suscriban contratos de trabajo. La Comisión recuerda que ninguna disposición del Convenio limita su ámbito de aplicación en función de individuos ni sectores de actividad y, en consecuencia, todos los trabajadores, incluidos los del servicio doméstico, deberían disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos relacionados con el empleo, y que se necesitan medidas jurídicas y prácticas para garantizar una protección efectiva de estos trabajadores contra la discriminación (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 795). **La Comisión pide, en consecuencia, al Gobierno que transmita más información específica sobre el modo en el que se garantiza la**

protección de los trabajadores domésticos contra la discriminación basada en los motivos establecidos en el Convenio. Pide, además, al Gobierno que comunique una copia de la Ley sobre los Funcionarios Gubernamentales, núm. 74/NA, de 2015, en uno de los idiomas oficiales de la OIT y que determine las disposiciones que protegen a los funcionarios públicos contra la discriminación en el empleo y la ocupación basada en los motivos contemplados en el Convenio.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Prohibición de la discriminación. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que la nueva Ley del Trabajo (2014) define la discriminación en el lugar de trabajo como «toda acción del empleador que obstaculice, socave o restrinja las oportunidades de promoción y de confianza para el trabajador» (artículo 3, 28)). Y prohíbe «la discriminación directa o indirecta de los empleadores contra los empleados en la unidad de trabajo» (artículo 141, 9)). Si bien hay disposiciones que prohíben la discriminación de género, la Comisión tomó nota de que la Ley del Trabajo (2014) ha dejado de prohibir explícitamente la discriminación basada en motivos de raza, religión y creencias, como había contemplado anteriormente el artículo 3, 2), de la Ley del Trabajo (2007), así como tampoco prohíbe la discriminación basada en motivos de color, opinión política, ascendencia nacional u origen social. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que señalara la lista completa respecto de los motivos de discriminación prohibidos en el empleo y la ocupación que se establecen en virtud de los artículos 3, 28), y 141, 9), de la nueva Ley del Trabajo (2014). La Comisión pidió también al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se protege a los trabajadores en la práctica contra la discriminación directa e indirecta y sobre las medidas adoptadas para promover el conocimiento de los trabajadores y de los empleadores sobre los motivos de discriminación prohibidos. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no dice nada sobre esta cuestión y, por lo tanto, recuerda una vez más la importancia de disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye la discriminación en el empleo y la ocupación para poder identificar y combatir las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 743-745). La Comisión toma nota también de que la Ley del Trabajo (2014) parece prohibir únicamente la discriminación de un empleador hacia sus empleados, y recuerda que el Convenio cubre un amplio espectro de situaciones, en particular, la discriminación de un empleado hacia otro empleado. Por último, la Comisión destaca que, cuando se adopten disposiciones para dar cumplimiento al Convenio, éstas deberían incluir como mínimo todos los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), a saber, motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. ***Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que determine la lista completa de motivos de discriminación que están prohibidos en virtud de los artículos 3, 28), y 141, 9), de la Ley del Trabajo (2014) y a que clarifique si la prohibición de la discriminación afecta tanto al empleo como la ocupación y se aplica igualmente a empleadores y empleados. La Comisión le pide asimismo que tenga a bien comunicar información sobre todas las decisiones administrativas o judiciales que apliquen e interpreten estas disposiciones. La Comisión pide una vez más al Gobierno que señale de qué forma se protege en la práctica a los trabajadores contra la discriminación directa e indirecta sobre la base de todos los motivos contemplados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión reitera, asimismo, su solicitud al Gobierno para que transmita información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para elaborar orientaciones adicionales para los trabajadores y los empleadores, así como para las autoridades encargadas de aplicar la ley, sobre la definición de discriminación directa e indirecta y los motivos de discriminación prohibidos en la Ley del Trabajo (2014).***

Discriminación basada en motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 83, 4), de la Ley del Trabajo (2014), autoriza que un trabajador pueda poner fin a un contrato de empleo en caso de acoso sexual por parte del empleador, o cuando un empleador haga caso omiso de ello, y que el artículo 141, 4), prohíbe a los empleadores vulnerar los derechos de los empleados, especialmente de sus empleadas, por medio de la palabra, la vista, el texto, el tacto o el contacto corporal directo en áreas impropias. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el acoso sexual no se define explícitamente ni se prohíbe en la Ley del Trabajo (2014), y que no está claro de qué forma las disposiciones mencionadas protegen a los trabajadores contra *todas* las formas de acoso sexual en el empleo y establecen reparaciones y sanciones adecuadas. Recordando la importancia de adoptar medidas efectivas para prevenir y prohibir tanto el acoso sexual como contrapartida (*quid pro quo*) como en razón de entornos de trabajo hostiles, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para definir, impedir y prohibir el acoso sexual en el trabajo, así como sobre la aplicación práctica de los artículos 83, 4), y 141, 4), de la Ley del Trabajo (2014). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los artículos 128 y 129 de la Ley Penal (2005) prohíben la violación y que, con la cooperación de los mandantes tripartitos, no se ha detectado ningún caso de abuso sexual en el empleo. Como la Comisión destacó en el párrafo 792 del Estudio General de 2012, tratar el acoso sexual sólo a través de procedimientos penales no es suficiente, debido a la sensibilidad de esta cuestión, la dificultad que entraña la carga de la prueba (en particular si no hay testigos) y el hecho de que la Ley Penal se focaliza generalmente en el ataque sexual o en «actos inmorales» y no en el amplio espectro de conductas que constituyen acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión considera igualmente que aquellas legislaciones que sólo ofrecen a las víctimas de acoso sexual la posibilidad de renunciar al empleo como forma de reparación, no brindan una protección suficiente ya que, en los hechos, sancionan a las víctimas y podrán disuadirlas de buscar una reparación. ***La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de los artículos 83, 4), y 141, 4), de la Ley del Trabajo (2014), incluidos con respecto a los casos de acoso sexual. La Comisión pide también al Gobierno que tome medidas para definir, impedir y prohibir el acoso sexual en el empleo y la ocupación, tanto en caso de quid pro quo como de entorno hostil, que proporcione sanciones y reparaciones adecuadas, y que comunique información a este respecto. Con miras a sensibilizar sobre esta cuestión, la Comisión alienta una vez más al Gobierno a que, en cooperación con las***

organizaciones de empleadores y de trabajadores, formule y aplique medidas prácticas encaminadas a impedir el acoso sexual y erradicarlo en el empleo y la ocupación, tales como manuales, cursos de formación, seminarios u otras actividades de sensibilización y a que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 1, 1), b). Otros motivos. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 87, 1), 100 y 141, 2), de la Ley del Trabajo (2014) proporcionan protección contra la discriminación basada en motivos de embarazo, estado civil, estado serológico respecto del VIH en la contratación y la terminación de la relación de trabajo, pero ha dejado de prohibir la discriminación sobre la base de motivos de nacionalidad, edad o situación socioeconómica, que la Ley del Trabajo (2007) contemplaba anteriormente. La Comisión, en consecuencia, pidió al Gobierno que determine las medidas adoptadas para garantizar el mismo nivel de protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación, en particular, basada en la situación socioeconómica. *Al tiempo que toma nota de que no se ha suministrado información, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno para que determine las medidas adoptadas, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con miras a mantener el mismo nivel de protección contra la discriminación sobre los motivos adicionales que figuraban anteriormente en la Ley del Trabajo (2007), en relación con todos los aspectos del empleo.*

Artículo 4. Actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. Desde hace varios años, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica del artículo 65 de la Ley Penal (2005), que establece una amplia prohibición sobre las actividades consideradas perjudiciales para la seguridad del Estado, en particular, llevar a cabo «actividades de propaganda», y a que precise en qué modo esta disposición no se traduce en la práctica en una discriminación basada en motivos de opinión política en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al artículo 44 de la Constitución en relación con la libertad sindical y al artículo 11 de la Ley de Sindicatos (2007), sobre convenios colectivos. No obstante, *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no proporciona información alguna con respecto a la aplicación práctica del artículo 65 de la Ley Penal (2005). *Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información detallada sobre la aplicación del artículo 65 de la Ley Penal (2005) en la práctica y, en particular, que señale las medidas adoptadas con el fin de garantizar que esta disposición no resulta discriminatoria en el empleo y la ocupación en la práctica por motivos de opinión política, por ejemplo, facilitando información sobre todas las quejas presentadas por los empleados o extractos de todas las decisiones pronunciadas por los tribunales al respecto.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1977)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brechas de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión recuerda su comentario anterior, según el cual, las estadísticas publicadas en octubre de 2011 por la Administración Central de Estadísticas, la brecha de remuneración entre hombres y mujeres se estimó, para 2007, en el 6,2 por ciento, en los servicios; el 10,8 por ciento, en el comercio; el 21 por ciento, en la agricultura; el 23,8 por ciento, en la industria manufacturera, y el 38 por ciento, en los transportes y las comunicaciones. *Ante la ausencia de informaciones más recientes sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión le solicita nuevamente que adopte las medidas necesarias para compilar y analizar los datos relativos a la remuneración de hombres y mujeres, y las brechas de remuneración en los diferentes sectores de actividad económica, incluido el sector público, y para las diferentes categorías profesionales, y comunicarlos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte medidas concretas para poner fin a las brechas de remuneración entre hombres y mujeres, incluidas las medidas de sensibilización respecto del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor entre los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, y que comunique informaciones sobre toda acción emprendida en este sentido y sobre los eventuales obstáculos encontrados.*

Artículo 2. Legislación. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Desde hace más de cuarenta años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que garantice que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se incorpore plenamente en la legislación. La Comisión *lamenta* tomar nota de que la memoria del Gobierno se limita a indicar que sigue en curso de examen el nuevo proyecto de Código del Trabajo. *En consecuencia, la Comisión se ve en la obligación de instar firmemente al Gobierno a que se sirva garantizar que el proyecto de Código del Trabajo refleje expresamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, con el fin de permitir un amplio campo de comparación entre los diferentes empleos, no solamente respecto de los trabajos iguales o similares, sino también de los trabajos de índole completamente diferente, pero globalmente de igual valor. Esperando firmemente que el Gobierno pueda informar, en un futuro próximo, de progresos en ese sentido, le solicita que tenga a bien comunicar una copia de las disposiciones pertinentes, en cuanto se hayan adoptado.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1977)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección de los trabajadores contra la discriminación, incluido el acoso sexual. Legislación y práctica. Desde hace más de veinte años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que introduzca en el Código del Trabajo, que se está revisando actualmente, una definición y una prohibición general de la discriminación directa e indirecta basada en los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación. La Comisión recuerda que en el Código del Trabajo actualmente en vigor (Código del Trabajo de 1946, en su versión modificada) no se contempla más que la discriminación entre hombres y mujeres en determinados aspectos del empleo (artículo 26) y no ofrece ninguna protección eficaz contra las diversas formas de acoso sexual, como el acoso que conlleva un chantaje sexual (*quid pro quo*) y la creación de un ambiente de trabajo hostil. En efecto, el único artículo del Código que podría aplicarse en caso de acoso sexual es una disposición por la que se autoriza al trabajador a dejar su trabajo sin preaviso cuando «el empleador o su representante comete un delito de ultraje a la moral contra su persona» (artículo 75, 3)). A este respecto, la Comisión recuerda que aquellas legislaciones que sólo ofrecen a las víctimas de acoso sexual la posibilidad de renunciar al empleo para obtener reparación, no brindan una protección suficiente ya que, en los hechos, sancionan a las víctimas y podrían disuadirlas de buscar una reparación (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 792). La Comisión **lamenta** tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre los avances ni sobre el contenido de la reforma del Código del Trabajo en curso. Sin embargo, constata que, según el tercer informe anual (2015) sobre la puesta en práctica del Plan estratégico nacional a favor de las mujeres en el Líbano (2011-2021), el Ministerio de Trabajo ha elaborado un proyecto de ley en el que se tipifica el acoso sexual en el lugar de trabajo. **Así, la Comisión pide encarecidamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el futuro Código del Trabajo contenga disposiciones que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta basada, al menos, en el conjunto de los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, que se definen en el artículo 1, 3), así como el acoso sexual en todas sus formas (el acoso *quid pro quo* o de intercambio y la creación de un ambiente de trabajo hostil). Se solicita de nuevo al Gobierno que proporcione información detallada sobre todo avance hacia la adopción del proyecto de Código del Trabajo. A falta de una protección legislativa completa frente a la discriminación, la Comisión pide asimismo de nuevo al Gobierno que adopte medidas concretas para garantizar, en la práctica, la protección de los trabajadores contra la discriminación basada en motivos de raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social, así como contra el acoso sexual en el empleo y la ocupación, y en particular las medidas destinadas a sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas sobre estas cuestiones, con el fin de mejorar la prevención en este ámbito.**

Trabajadores domésticos extranjeros. Discriminación múltiple. Desde hace más de diez años, la Comisión ha venido siguiendo las medidas adoptadas por el Gobierno para poner remedio a la falta de protección jurídica de los trabajadores domésticos, muchos de los cuales son mujeres extranjeras, que se ven excluidos del campo de aplicación del Código del Trabajo y están particularmente expuestos a la discriminación basada en el sexo, incluido el acoso, así como en otros motivos como la raza, el color de piel o el origen étnico. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) ha constatado con preocupación que, «a pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte, prosig[ue]n el abuso y la explotación de los trabajadores domésticos migrantes». Asimismo, se ha mostrado preocupado por el hecho de que «con frecuencia, las víctimas no puedan obtener asistencia cuando se las confina por la fuerza en la residencia de sus empleadores o cuando se retienen sus pasaportes». Además, el CERD ha recomendado en particular al Estado parte que: «[d]erogue las condiciones que causan la vulnerabilidad de los trabajadores domésticos migrantes al abuso y la explotación, como el sistema de patrocinio y el de residencia en el lugar de trabajo»; «[h]aga extensivas al trabajo doméstico las disposiciones del Código del Trabajo, garantizando con ello a los trabajadores domésticos las mismas condiciones de trabajo y los mismos derechos laborales que los demás trabajadores, incluido el derecho a cambiar de ocupación, y sometiendo el trabajo doméstico a inspecciones laborales»; «[v]ele por que toda legislación específica sobre el trabajo doméstico tenga por objeto hacer frente a la mayor vulnerabilidad de los trabajadores domésticos migrantes al abuso y la explotación»; y «[l]leve a cabo campañas para modificar las actitudes de la población hacia los trabajadores domésticos migrantes y sensibilizarla acerca de sus derechos» (documento CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 de octubre de 2016, párrafos 41 y 42). El Gobierno señala que el trabajo doméstico se rige por el Código de Obligaciones y Contratos y hace referencia de nuevo al contrato tipo y al proyecto de ley relativo al empleo de los trabajadores domésticos. Asimismo, indica que se ha presentado ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley elaborado con miras a ratificar el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y que el comité directivo nacional del Ministerio de Trabajo, que se encarga de examinar las relaciones entre los empleadores y los trabajadores domésticos, está elaborando en la actualidad medidas trascendentes para garantizar el respeto del contrato y la abolición del sistema de patrocinio. Sin embargo, el Gobierno indica que este proceso llevará su tiempo. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ni el Ministerio de Trabajo ni los organismos oficiales han establecido restricciones al cambio de empleador y que ésta es una cuestión que sólo atañe al trabajador y al empleador. **Remitiéndose a comentarios anteriores y lamentando tomar nota de que no se ha avanzado desde entonces, la Comisión insta al Gobierno a que adopte, en colaboración con los interlocutores sociales, las medidas necesarias para que se garantice a los trabajadores domésticos migrantes una verdadera protección, en la ley y en la práctica, frente a la discriminación directa e indirecta basada en el conjunto de los motivos**

enumerados en el Convenio, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, así como contra el acoso sexual en todos los aspectos del empleo, sea mediante la adopción del proyecto de ley relativo al empleo de los trabajadores domésticos, sea en el marco más general de la legislación laboral. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los progresos realizados a este respecto, así como acerca de todo cambio legislativo que tenga por objeto abolir el sistema del patrocinio. Pide al Gobierno en particular que vele en concreto por que toda nueva regla destinada a reglamentar el derecho de los trabajadores migrantes a cambiar de empleador no imponga condiciones ni restricciones que puedan aumentar la dependencia de estos trabajadores respecto de su empleador y acrecentar así su vulnerabilidad a los abusos y las prácticas discriminatorias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Libia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) **(ratificación: 1962)**

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno indica que en virtud del artículo 21 de la Ley sobre Relaciones Laborales (LRA 2010) no puede haberse discriminación respecto de la remuneración por un trabajo de igual valor por motivos de raza, color, sexo o religión. El Gobierno indica asimismo que el artículo 24 de la LRA 2010 prohíbe toda discriminación entre hombres y mujeres respecto de la remuneración por un trabajo de igual valor. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo caso judicial pertinente relativo a la aplicación de los artículo 21 y 24 de la LRA 2010.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículo 1 del Convenio. Definición y motivos de discriminación. Legislación. La Comisión toma nota de la Declaración Constitucional de agosto de 2011, la cual establece una base para el ejercicio del poder en el período de transición hasta la adopción de una Constitución permanente. La Comisión observa que el artículo 6 de la Declaración Constitucional dispone que los libios son iguales ante la ley, y que gozan de iguales derechos civiles y políticos y de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, sin distinción alguna por motivos de religión, creencias, idioma, riqueza, género, parentesco, opinión política, estatus social, pertenencia a una tribu, región o familia. La Comisión toma nota de que el principio de igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades en el artículo 6 de la Declaración Constitucional no incluye ninguna referencia a los motivos de raza, color y ascendencia nacional, y que el término «estatus social» puede ser más restrictivo que el término «origen social» contenido en el Convenio. La Comisión también toma nota del proyecto de Constitución de Libia, a la espera de su adopción por referéndum, en cuyo artículo 7 se establece que los ciudadanos, mujeres y hombres, son iguales ante la ley y que cualquier discriminación entre ellos por motivos de origen étnico, color, idioma, sexo, nacimiento, opinión política, discapacidad, origen o afiliación geográfica está prohibida. La Comisión observa, sin embargo, que los motivos de raza, ascendencia nacional y origen social no están incluidos en la prohibición de la discriminación contenida en el proyecto de Constitución y que dicho proyecto sólo cubre a los ciudadanos.

La Comisión toma nota del informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Libia, de la adopción en 2015 del Acuerdo Político Libio (LPA 2015) por el que se establece una autoridad ejecutiva temporal, el Gobierno del Acuerdo Nacional, que permanecerá en funciones hasta la adopción y aplicación de la Constitución de Libia (documento A/HRC/34/42, párrafo 4). La Comisión observa que el principio rector 8 de la LPA 2015 afirma el principio de igualdad entre libios al establecer, entre otras cosas, «la igualdad de oportunidades y el rechazo de cualquier discriminación entre ellos por cualquier razón». La Comisión toma nota de la declaración general del Gobierno, que figura en su memoria, de que la legislación nacional prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión y ascendencia nacional. A este respecto, el Gobierno se refiere al artículo 3 de la ley núm. 12, de 2010, por la que se promulga la Ley de Relaciones Laborales (LRA 2010). Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 3 de la LRA 2010 prohíbe la discriminación únicamente por motivos de «afiliación sindical, origen social o cualquier otro motivo de discriminación», y que no se mencionan explícitamente los motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política y ascendencia nacional. La Comisión además observa que la LRA 2010 no parece contener una definición de la discriminación. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre el párrafo 743 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, en el cual la Comisión recordó que las definiciones claras y exhaustivas de la discriminación en el empleo y la ocupación son fundamentales para identificar y abordar las múltiples manifestaciones en que puede ocurrir. El *artículo 1, l), a)*, del Convenio define la discriminación como «cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en [ciertos motivos], que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación». A través de esta amplia definición, el Convenio cubre toda la discriminación que pueda afectar la igualdad de oportunidades y de trato. Cualquier discriminación — en la ley o en la práctica, directa o indirecta — cae dentro del alcance del Convenio. La Comisión también recuerda que cuando se adoptan disposiciones legales, éstas deben incluir al menos todos los motivos

de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que:**

- i) **considere modificar el artículo 7 del proyecto de Constitución para garantizar que los motivos de raza, ascendencia nacional y origen social se incluyan como motivos prohibidos de discriminación;**
- ii) **incluya una definición del término «discriminación» contenido en el artículo 3 de la Ley de Relaciones Laborales (2010);**
- iii) **confirme que los motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política y ascendencia nacional se incluyen en los términos «cualquier otra base discriminatoria» del artículo 3 de la Ley de Relaciones Laborales (2010) y que revise el artículo 3 para hacer eso aparente;**
- iv) **proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar la prohibición, tanto en la legislación como en la práctica, de la discriminación directa e indirecta por todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio.**

Artículos 1 y 2. Discriminación basada en motivos de raza, color o ascendencia nacional. Trabajadores migrantes subsaharianos. En comentarios anteriores, la Comisión observó que el Gobierno no ha adoptado medida alguna para abordar la discriminación contra trabajadores migrantes, en especial los procedentes del África Subsahariana, basada en motivos de raza, color o ascendencia nacional en el empleo y la ocupación, ni ha proporcionado información sobre las medidas que ha adoptado para prevenir y eliminar los actos de discriminación étnica o racial en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno evita tratar este tema en su memoria. La Comisión constata que, según el informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos (ACNUDH) en Libia, los subsaharianos son especialmente vulnerables a los abusos debido a la discriminación racial (documento A/HRC/34/42, párrafo 45). Asimismo, la Comisión toma nota de las declaraciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) en su 94.ª reunión, celebrada en 2017, en el marco de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, y ella **deplora profundamente** que se está vendiendo a personas negras procedentes de países subsaharianos en los mercados de esclavos en Libia, y que éstos son objeto de discriminación racial por motivo de color. Con respecto a las prácticas relativas al trabajo forzoso que afectan a trabajadores migrantes procedentes de Libia, la Comisión hace referencia a los detallados comentarios que ha presentado en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). **La Comisión insta al Gobierno a que tome medidas inmediatas para resolver la situación de discriminación racial y étnica contra los trabajadores migrantes procedentes del África Subsahariana (incluidas las trabajadoras migrantes), y en particular para poner fin a las prácticas de trabajo forzoso. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todas las medidas que esté tomando para prevenir y eliminar en la ley y la práctica los actos de discriminación étnica o racial en todos los aspectos del empleo y la ocupación. Además, pide al Gobierno que provea informaciones detalladas sobre las medidas que está tomando para fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto entre los ciudadanos libios y los trabajadores procedentes de otros países africanos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Lituania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1994)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. XII-2462, de 21 de junio de 2016, que establece y aplica el nuevo Código del Trabajo, que entró en vigor el 1.º de julio de 2017. Toma nota de que el artículo 26, 2), 4, del nuevo Código del Trabajo, dispone que un empleador garantizará la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, y el artículo 140, 5), dispone que hombres y mujeres recibirán una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo equivalente. «El mismo trabajo» significará realizar una actividad laboral que, en base a criterios objetivos, es la misma o similar a otra actividad laboral, en la medida en que ambos empleados pueden ser intercambiados sin costo significativo para el empleador. «Trabajo equivalente» significará que, en base a criterios objetivos, el trabajo no exige unas calificaciones más bajas, y no será menos significativo para los objetivos del empleador que otro trabajo comparable. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual está, en la actualidad, en consideración un proyecto de ley para establecer una remuneración uniforme para los trabajadores del sector público, en el caso de los trabajadores que realizan un trabajo de la misma complejidad y que requieren las mismas calificaciones. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, aun cuando los términos «trabajo de igual valor» se prevén en la legislación, su ámbito de aplicación puede ser más estrecho que el principio consagrado en el Convenio, como consecuencia de fórmulas demasiado restrictivas que exigen igual nivel de complejidad, responsabilidad y dificultad o que requieren las mismas calificaciones (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 677). **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de los artículos 26, 3), y 140, 5),**

del nuevo Código del Trabajo, incluyendo ejemplos sobre la manera en que se interpretaron en la práctica los términos «trabajo de igual valor» y «trabajo equivalente». También confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley, dirigido a la uniformización de la remuneración de los trabajadores del sector público, dé su plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, consagrado en el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la situación de la adopción del proyecto de ley, así como una copia de la nueva legislación en cuanto se haya adoptado.

Brecha salarial por motivos de género. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la diferencia en los ingresos brutos medios por hora de hombres y mujeres siguió disminuyendo del 21,6 por ciento, en 2008, al 11,9 por ciento, en 2011. La Comisión toma nota con **preocupación**, de Eurostat y *Statistics Lithuania*, que, desde 2011, la brecha salarial por motivos de género (ingresos brutos medios por hora) aumentó nuevamente al 15,6 por ciento en 2015. En 2015, los ingresos de los hombres superaron a los ingresos de las mujeres en todas las actividades económicas, salvo el transporte y el almacenamiento, en los que los ingresos de las mujeres eran el 9,5 por ciento más elevados que los de los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres era aún especialmente amplia en las actividades financieras y de seguros (38,5 por ciento), información y comunicación (29,5 por ciento), salud humana y actividades laborales sociales (26,3 por ciento) y sector manufacturero (25,6 por ciento). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Programa nacional de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 2012-2014, identificó actitudes discriminatorias persistentes entre las funciones de hombres y mujeres en el trabajo, con lo cual la reducción de la segregación por género en el mercado laboral y de la brecha salarial por motivos de género, son aún parte de los objetivos prioritarios del nuevo Programa nacional de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 2015-2021, y su correspondiente plan de acción para 2015-2017. El Gobierno declara que, a tal fin, tuvo lugar una formación específica sobre la mejora de la igualdad de género en la remuneración, para los empleados de los sectores público y privado y se proyectaron actos educativos sobre igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, en 2016-2017, para los interlocutores sociales y las empresas. La Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó recientemente su preocupación por la persistencia de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y recomendó al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para eliminar esta desigualdad, acabando con las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (documento CCPR/C/LTU/CO/4, de 26 de julio de 2018, párrafos 15 y 16). **La Comisión confía en que el Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para poner fin al aumento de la brecha salarial por motivos de género y abordarla, al igual que sus causas subyacentes, sin retrasos, y solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a tal fin, incluso en el contexto del Programa nacional de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 2015-2021, así como sobre los resultados obtenidos. Tomando nota de que el artículo 23, 2), del nuevo Código del Trabajo dispone que un empleador con una media de más de 20 empleados, deberá presentar al consejo del trabajo y al sindicato, al menos una vez al año, información actualizada, desglosada por sexo y ocupación, sobre la remuneración media de los empleados (salvo en el caso de los puestos directivos), la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información estadística sobre la distribución de hombres y mujeres en los diferentes sectores de la economía y los niveles ocupacionales y sus respectivos niveles de ingresos.**

Artículos 3 y 4. Evaluación objetiva del empleo. Cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, entre 2006 y 2009, se organizaron talleres para introducir la metodología para la evaluación de empleos y puestos de trabajo que aprobó el consejo tripartito en 2005, a los representantes de los sindicatos y a los directores de finanzas y recursos humanos de las empresas privadas, existiendo proyectos para llevar a cabo una encuesta sobre la aplicación de esta metodología. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se realizó, en julio de 2015, una encuesta sobre el cumplimiento de la metodología y, como consecuencia, el consejo tripartito sugirió una actualización de la metodología de 2005 en una nueva reunión. La Comisión toma nota de que el artículo 26, 2), 3, del nuevo Código del Trabajo, dispone que un empleador utilizará criterios uniformes para la evaluación laboral, y que el artículo 140, 3), dispone que los sistemas de remuneración están determinados por convenios colectivos o que, en ausencia de tales convenios (en los lugares de trabajo con un número medio de al menos 20 empleados) el empleador deberá aprobar dicho sistema, previa información y procedimientos de consulta, debiendo ser accesible a todos los empleados. La Comisión toma nota de que esos sistemas de remuneración deben situar en una lista las categorías de empleados por puesto de trabajo y calificaciones, las formas de remuneración, las tasas de remuneración más altas y más bajas para cada categoría de trabajadores, los motivos y los procedimientos para otorgar remuneraciones adicionales y el procedimiento de indexación de las remuneraciones. Toma nota asimismo de que, según el artículo 140, 5), del nuevo Código del Trabajo, el sistema de remuneración debe ser concebido de tal manera que evite toda discriminación por motivos de género o toda discriminación basada en otros motivos. La Comisión toma nota de que, según Eurostat, en 2013, la cobertura de la negociación colectiva salarial de los empleados de todos los niveles, fue sólo del 19 por ciento. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la situación del proceso de revisión de la metodología de 2005 para la evaluación de empleos y puestos de trabajo que llevó a cabo el consejo tripartito, y que transmita una copia de la nueva metodología, en cuanto se haya adoptado. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica del artículo 26, 2), 3, y del artículo 140, 3) y 5), del nuevo Código del Trabajo, incluyendo indicaciones sobre la manera en que se garantiza que los sistemas de remuneración se basen en métodos de evaluación laboral objetivos, libres de sesgo de género. Tomando nota de la adopción del Plan nacional de acción para el fortalecimiento del diálogo social, 2016-2020, la Comisión solicita al**

Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas, en cooperación con los interlocutores sociales, para promover el principio del Convenio en las negociaciones por rama, territorio y empresa y que garantice que no se infravaloren las ocupaciones y los sectores en los que predominan las mujeres. Sírvese comunicar información sobre todo convenio colectivo que contenga disposiciones que reflejen el principio del Convenio, así como el impacto del Plan nacional de acción para el fortalecimiento del diálogo social en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1994)

Artículo 2 del Convenio. Política nacional de igualdad. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual, en el marco de la aplicación del Plan de acción interinstitucional 2012-2014 sobre la promoción de la no discriminación, se organizaron varias formaciones y actos públicos. Toma nota de que se adoptó un nuevo Plan de acción interinstitucional 2015-2020 sobre la promoción de la no discriminación. No obstante, observa que la Unión Europea señaló recientemente una falta regular de financiación de los programas contra la discriminación y estimó aproximadamente que se otorgó sólo el 35 por ciento del presupuesto inicial a las medidas contra la discriminación proyectadas para 2016 (Unión Europea, informe de país sobre la no discriminación, 2017, pág. 105). ***La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en el contexto del Plan de acción interinstitucional 2015-2020 sobre la promoción de la no discriminación o de otro modo, para promover efectivamente la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, con respecto a todos los motivos comprendidos en el Convenio, y para abordar las prácticas discriminatorias y que proporcione información sobre el impacto de tales acciones. También solicita al Gobierno que comunique información sobre el número, la naturaleza y los resultados de los casos de discriminación en el empleo y la ocupación, incluso respecto de las sanciones impuestas y de las reparaciones acordadas.***

Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Programa nacional sobre igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para 2012-2014, identificó unas actitudes discriminatorias persistentes sobre las funciones de hombres y mujeres en el trabajo. El Gobierno indica también que, la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo para mujeres y hombres y la reducción de la segregación sectorial y profesional del mercado laboral, son aún parte de las metas prioritarias del nuevo Programa nacional sobre igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para 2015-2021, y su correspondiente Plan de acción para 2015-2017, que está encaminado a crear mayores oportunidades para las mujeres, especialmente en las zonas rurales, así como al empleo por cuenta propia. A tal fin, en 2015 y 2016 se organizaron algunas actividades para promover el empoderamiento económico de la mujer. En ese sentido, la Comisión toma nota de que el Defensor de la Igualdad de Oportunidades realizó varias encuestas, formación y campañas de información pública, especialmente para luchar contra la discriminación de género en el proceso de contratación. Del informe del Defensor de la Igualdad de Oportunidades toma nota de que, en 2017, se presentaron 321 casos de discriminación basada en motivos de género, lo que representa casi un 44 por ciento de todas las quejas, la mitad de las cuales se relacionan con la discriminación en las relaciones laborales. Sin embargo, observa que, en 146 casos, el Defensor de la Igualdad de Oportunidades denegó el examen de la queja, dado que consideró que no era competente para ello. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas, en el contexto del Programa nacional sobre igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 2015-2021 y su correspondiente Plan de acción para 2015-2017 o de otro modo, para reducir eficazmente la segregación de género en el mercado laboral y promover la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, incluso en la contratación, así como sobre los resultados obtenidos. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información estadística sobre la distribución de hombres y mujeres en el empleo, desglosada por sector económico y ocupación.***

Igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de raza, color y ascendencia nacional. En relación con sus comentarios anteriores sobre la comunidad romaní, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en 2015, 389 romaníes participaron en sesiones de asesoramiento; 359 se beneficiaron de los servicios de información, y 55 participaron en medidas de política de mercado laboral activa. El Gobierno añade que, con el fin de abordar los estereotipos relativos a la comunidad romaní en el trabajo, se prevén medidas que los ayudarán a insertarse en el mercado de trabajo, dentro del Plan de acción interinstitucional 2015-2020, sobre la promoción de la no discriminación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en su informe de 2016, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) indicó que, a pesar de ciertos progresos en algunos ámbitos, la marginación social de la población romaní es aún evidente, por ejemplo, en las áreas de la enseñanza y del empleo. De hecho, los romaníes tienen unas tasas especialmente elevadas de desempleo y, según algunas fuentes, el número de romaníes que se desempeñan en trabajos regulares de la economía formal, se sitúa en menos del 10 por ciento. La Comisión toma nota asimismo de que la ECRI indicó que, tras unos logros insatisfactorios de los programas anteriores, las autoridades desarrollaron el nuevo Plan de acción para la integración de los romaníes en la sociedad lituana 2015-2020, que incluye, entre otras cosas, medidas en las áreas preescolares, escolares y de la educación para adultos, así como en el empleo. Sin embargo, existe aún una incertidumbre respecto de la financiación de las medidas que prevé el plan de acción. La ECRI recomendó que el Gobierno debería ampliar el apoyo de las actividades educativas de los romaníes y adoptar medidas más específicas para apoyar la integración de la población romaní en el mercado laboral, como la expansión de las actividades de formación profesional

y la facilitación y la promoción de su registro en la bolsa de trabajo como así también la expansión de los cursos de educación para adultos orientados a la población romaní más allá de Vilna (documento CRI(2016)20, pág. 9 y párrafos 61, 67, 70 y 72). La Comisión toma nota asimismo de que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también expresó su preocupación por los informes de que la comunidad romaní sigue sufriendo una extendida discriminación, especialmente en las áreas del empleo y la educación y manifiesta especialmente su preocupación por la persistencia de las bajas tasas de alfabetización de los romaníes; el bajo porcentaje de la población romaní con una educación general; el descenso de la población romaní en la enseñanza secundaria y superior; y la baja tasa de empleo en los romaníes, especialmente en las mujeres (documento CCPR/C/LTU/CO/4, 26 de julio de 2018, párrafo 7). De manera más general, la Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD) también expresó su preocupación por que muchas personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas indicaron que habían sufrido estereotipos y discriminación raciales que habían afectado de manera negativa su acceso al mercado laboral (documento CERD/C/LTU/CO/6-8, 6 de enero de 2016, párrafo 24). **La Comisión pide al Gobierno intensificar sus esfuerzos, en colaboración con los trabajadores y los empleadores o sus organizaciones, para combatir los estereotipos y prejuicios contra las minorías nacionales y étnicas, incluida la comunidad romaní, en la educación, el empleo y la ocupación, y garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades y de trato para estas minorías, de conformidad con el Convenio. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas adoptadas, en el marco del Plan de acción para la integración de los romaníes en la sociedad lituana 2015-2020 o de otro modo, para promover la igualdad de oportunidades en la educación y el empleo para los miembros de la comunidad romaní y el impacto de las mismas. Solicita asimismo al Gobierno que transmita información sobre el número de casos en los que las personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas, incluida la comunidad romaní, han hecho frente a estereotipos y que discriminación raciales en la educación, el empleo y la ocupación y que se notificaron al Defensor del Pueblo sobre igualdad de oportunidades o a los tribunales, así como sobre las reparaciones acordadas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1, a) y b), y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. Durante varios años la Comisión ha venido señalando que la legislación nacional no incorpora plenamente el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que la definición de salario en la Ley de Empleo de 1955 y en la Ley sobre el Consejo Nacional de Salarios, de 2011, no comprende las prestaciones en especie y excluye determinados elementos de la remuneración, tal como se definen en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la procedencia de incorporar el principio del Convenio a la legislación nacional se examinará en el marco de la revisión en curso de la legislación laboral, y más especialmente, de la Ley de Empleo. **Considerando que dar pleno efecto legislativo al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es de especial importancia para garantizar la aplicación efectiva del Convenio, la Comisión confía en que, durante la revisión de su legislación laboral, el Gobierno adopte medidas específicas, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con el fin de incorporar expresamente a su legislación nacional el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que garantice que su legislación nacional permita la comparación no sólo de los mismos trabajos, sino también de los trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero, sin embargo, de igual valor, teniendo en cuenta que la igualdad debe extenderse a todos los elementos de la remuneración tal como se precisan en el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre todo progreso en relación con estas cuestiones. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT y le pide que transmita una copia del proyecto de legislación a la Oficina para su examen.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Marruecos

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)

Artículo 2 del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Administración pública. La Comisión acoge favorablemente las indicaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria, según las cuales, en el marco del Plan gubernamental para la igualdad (Icram 2012-2016), se estableció el Observatorio nacional de enfoque de género en la administración pública. Al respecto, el Gobierno indica que el 35 por ciento de los trabajadores en la administración pública y el 19 por ciento de los directivos, son mujeres. La Comisión toma nota del estudio sobre «El lugar de las funcionarias en puestos de responsabilidad en la administración pública de

Marruecos», publicado por el Observatorio en 2012. El estudio identifica obstáculos para el acceso de las mujeres a estos puestos, que se vinculan, entre otras cosas, con la segregación laboral, con la persistencia de estereotipos de género y con la problemática de la conciliación trabajo-familia, con el funcionamiento y las normas de comportamiento dentro de la administración pública (clientelismo y redes, cuestiones sensibles de acoso sexual y de discriminación) o que son de orden económico y de capacidad de atracción de los puestos de responsabilidad, o que se vinculan incluso con la movilidad y la distancia. El estudio contiene asimismo algunas recomendaciones, como el fortalecimiento de la política nacional a favor de la igualdad de hombres y mujeres, la reforma de las normas y prácticas en materia de nombramiento y de gestión del personal, el fortalecimiento de las capacidades de las funcionarias, el establecimiento de medidas positivas y la instauración de un entorno favorable que permita conciliar vida familiar y vida laboral. Al respecto, la Comisión acoge con beneplácito la adopción de la «ley orgánica núm. 02-12, relativa al nombramiento, para las funciones superiores, en aplicación de las disposiciones de los artículos 49 y 92 de la Constitución», que se promulgó el 17 de julio de 2012, y que se refiere a las funciones de los responsables en las empresas y los establecimientos públicos y las administraciones públicas, y que establece como principios para el nombramiento: la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en cualquiera de sus formas, en la elección de los candidatos y candidatas a las funciones superiores, incluso por razones de afiliación política o sindical, de idioma, de religión, de sexo, de discapacidad o por cualquier otro motivo incompatible con los principios de los derechos humanos y las disposiciones de la Constitución, así como la paridad entre hombres y mujeres. Además, la Comisión toma nota de la realización de un estudio sobre «Conciliación, trabajo-familia de las mujeres y los hombres funcionarios en Marruecos», que preconiza especialmente el fortalecimiento del dispositivo estadístico vigente, la promoción de la adopción de medidas legislativas y reglamentarias para favorecer la conciliación trabajo-familia, incluida una licencia parental, el desarrollo de servicios personales de apoyo a las familias (cuidados de la primera infancia), un entorno laboral más favorable para la igualdad entre hombres y mujeres y para los trabajadores que tienen responsabilidades familiares, la valoración del trabajo remunerado de las mujeres y la lucha contra los estereotipos de las funciones de género (elaboración de una carta de la igualdad, medidas de información y de sensibilización). ***Tomando nota de esas informaciones que demuestran el compromiso del Gobierno de promover una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en la administración pública, abordando las causas profundas de las desigualdades y los numerosos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre todas las medidas adoptadas al respecto, en particular sobre el curso dado a las recomendaciones de los dos estudios mencionados. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación de la ley orgánica núm. 02-12 y su impacto en el nombramiento de las mujeres en las funciones superiores, en las empresas y los establecimientos públicos y las administraciones públicas.***

Igualdad de género. Sector privado. En cuanto a la aplicación del Plan gubernamental para la igualdad (Icram 2012-2016), la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que se adoptaron medidas concretas para reforzar el control de la aplicación de las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas al trabajo de las mujeres. Además, toma nota de que, según un informe gubernamental de evaluación del mencionado plan, de las 156 medidas previstas, 117 alcanzaron una tasa de ejecución del 100 por ciento, 134 llegaron a una tasa de ejecución del 80 por ciento, y las medidas que no pudieron ejecutarse lo serán en el marco de un segundo plan. En efecto, la Comisión toma nota de la adopción por el Gobierno, el 3 de agosto de 2017, del plan Icram 2, para el período 2017-2021, que trata especialmente del fortalecimiento de las oportunidades de empleo para las mujeres, la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación y los estereotipos. Por otra parte, la Comisión acoge favorablemente las indicaciones del Gobierno, según las cuales éste aporta un apoyo financiero a las asociaciones que actúan de cara a la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres, habiendo organizado, en 2016, la primera edición del Trofeo del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales (MEAS) en materia de igualdad laboral, destinado a las empresas que hubiesen realizado progresos en materia de consideración de la igualdad en la cultura de la empresa y la gestión de los recursos humanos, al igual que la paternidad en el marco laboral. La Comisión toma nota de que esta edición permitió que, de las 34 empresas participantes, 19 respondieran a los criterios de selección de ser recompensadas con un certificado del MEAS, habiéndose atribuido el trofeo a las tres primeras. ***La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre toda medida adoptada para aumentar las oportunidades de las mujeres de acceder a la formación profesional y al empleo, diversificar las oportunidades de empleo y luchar contra la discriminación y los estereotipos de género. Se solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones precisas sobre los resultados obtenidos en el marco de los planes Icram e Icram 2, especialmente en lo que se refiere a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en las zonas urbanas y en las zonas rurales.***

Organismo encargado de promover la igualdad y de luchar contra la discriminación. A la Comisión le complace constatar la adopción, en segunda lectura, del proyecto de ley relativo a la Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación (APALD), por la cámara de consejeros, el 9 de agosto de 2017. ***La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre las competencias, el funcionamiento y la composición de la APALD, así como sobre el establecimiento efectivo de esta institución y sus actividades concretas en materia de lucha contra la discriminación y de promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) recibidas el 31 de agosto de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), de 28 de agosto de 2015 y de 30 de agosto de 2016, en las que se subraya la existencia en la práctica de discriminaciones significativas entre las remuneraciones que perciben los hombres y las mujeres por un trabajo de igual valor. La organización señala asimismo que los empleadores no permiten a las mujeres acceder a algunos puestos que requieren calificaciones elevadas y precisa que, en el caso de que accedan a ellos, no reciben el mismo trato, sus ingresos salariales son un 30 por ciento inferiores al de los hombres, y no gozan de las mismas oportunidades asociadas al puesto que ocupan. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en su comunicación de 7 de octubre de 2015, rechaza los alegatos de la CGTM y afirma que no existe ninguna discriminación entre hombres y mujeres en materia de remuneración.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación del principio. Legislación y convenios colectivos. En junio de 2009, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a modificar el Código del Trabajo y la ley núm. 93-09, de 18 de enero de 1993, que establece el Estatuto general de los funcionarios y agentes contractuales del Estado, a fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en los sectores privado y público. El artículo 191 del Código del Trabajo establece, en efecto, que «en condiciones iguales de trabajo, de calificación profesional y de rendimiento, los sueldos son iguales para todos los trabajadores independientemente de su origen, sexo, edad y condición», términos más restrictivos que los enunciados en los artículos del presente Convenio. El Convenio colectivo general del trabajo (CCGT), de 1974, se refiere a «condiciones iguales de trabajo y de rendimiento» (artículo 37) y la ley núm. 93-09 no contiene ninguna disposición en materia de igualdad de remuneración. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre los párrafos 672 a 681 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, en los cuales explica la importancia y el alcance de la noción de «trabajo de igual valor», que permite comparar empleos diferentes toda vez que, con frecuencia, debido a actitudes históricas y estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres y de los hombres, éstos no realizan los mismos empleos. La Comisión recuerda que, para determinar el valor del trabajo cuando se comparan dos empleos, resulta pertinente aplicar criterios como las condiciones de trabajo y de calificación profesional, pero no es necesario que se cumpla la igualdad en cada criterio porque el valor determinante es el valor global del empleo, es decir, cuando todos los criterios se tienen en cuenta en su conjunto. Además, la experiencia ha demostrado que la insistencia en factores tales como «condiciones iguales de trabajo, de calificación profesional y de rendimiento», podría servir de pretexto para remunerar a las mujeres con salarios más bajos que a los hombres. La Comisión recuerda que en caso de que los convenios colectivos contengan disposiciones discriminatorias, los gobiernos deberían tomar las medidas necesarias, en cooperación con los interlocutores sociales, para garantizar que lo dispuesto en los convenios colectivos respete el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual de valor (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 694). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que ha consultado a los interlocutores sociales para recabar su opinión sobre la próxima revisión del Código del Trabajo y del CCGT, a fin de ajustar su contenido a lo establecido en las normas internacionales del trabajo. **Al tiempo que subraya nuevamente la importancia de la noción de «trabajo de igual valor» y, teniendo en cuenta la brecha salarial persistente, la Comisión confía en que, en el marco de la reforma anunciada del Código del Trabajo y del CCGT, el Gobierno adoptará próximamente las medidas necesarias para modificar las disposiciones del artículo 191 del Código del Trabajo y el artículo 37 del CCGT, así como la ley núm. 93-09, de 18 de enero de 1993, de manera que estas leyes reflejen el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.**

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión recuerda que es esencial contar con datos estadísticos apropiados para determinar la naturaleza, el alcance y las causas de la remuneración desigual entre hombres y mujeres, definir las prioridades y elaborar medidas apropiadas para supervisar el efecto de estas medidas y proceder a cualquier ajuste necesario (Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 887-891). **Remitiéndose a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, de junio de 2009, y constatando que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para recopilar y analizar datos estadísticos sobre los salarios de los hombres y las mujeres, y lo invita a que examine las causas de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres a fin de adoptar las medidas necesarias para reducirla.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Mozambique

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1977)

Artículo 1 del Convenio. Legislación. Desde 2009, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para modificar el artículo 108 de la Ley núm. 23/2007 sobre el Trabajo, que prevé el derecho a la igualdad de salario por un trabajo igual, con miras a garantizar que refleja plenamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un «trabajo de igual valor». Tomando nota de que el Gobierno indica que el principio del Convenio está cubierto por esta disposición, la Comisión recuerda de nuevo que el concepto de «trabajo de igual valor» engloba la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», por un «mismo» trabajo o por un trabajo «similar», pero al

mismo tiempo va más allá al englobar la noción de un trabajo que sea de naturaleza completamente distinta pero no obstante de igual valor. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para modificar el artículo 108 de la Ley núm. 23/2007 sobre el Trabajo a fin de ponerlo en plena conformidad con el Convenio. Asimismo, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Namibia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

Artículo 1, 1), b), del Convenio. Motivos adicionales. Legislación. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que aunque la disposición general sobre no discriminación de la Ley del Trabajo (artículo 5) incluye el VIH y el sida, el grado de discapacidad mental y las responsabilidades familiares, estos motivos no se contemplan el artículo 33 de la ley, que prohíbe el despido injustificado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se estableció un grupo de trabajo del que forman parte representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Gobierno, que está revisando la Ley del Trabajo artículo por artículo. El Gobierno añade que la solicitud de la Comisión de que se examine la posibilidad de incluir disposiciones específicas que prohíban el despido basado en el VIH y el sida, el grado de discapacidad mental y las responsabilidades familiares con miras a garantizar la coherencia entre los artículos 5 y 33 de la Ley del Trabajo, se tendrá en cuenta durante este proceso. **La Comisión espera en que como resultado de este proceso de revisión el Gobierno enmiende la Ley del Trabajo a fin de ampliar la prohibición del despido con miras a garantizar que todo despido por estado serológico en relación con el VIH y el sida, el grado de discapacidad mental y las responsabilidades familiares esté prohibido y, de esta forma, garantice la coherencia entre los artículos 5 y 33 de la Ley del Trabajo. Recordando que el artículo 6.2, 2), iii), de la política nacional de 2007 sobre el VIH y el sida prohíbe la terminación de la relación de trabajo simplemente debido al estado serológico en relación con el VIH o las responsabilidades familiares relacionadas con el VIH y el sida, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los casos de infracción de esta política abordados por los inspectores del trabajo y los tribunales del trabajo.**

Artículos 2 y 5. Aplicación de una política nacional y de medidas de acción afirmativa. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos (NHRAP) 2015-2019, que establece como uno de los principales ámbitos de intervención «el derecho a la no discriminación», en particular en relación con ciertos grupos como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las personas LGBTI. Asimismo, la Comisión toma nota de que se han previsto las siguientes medidas: i) realizar un amplio examen del marco normativo a fin de evaluar el cumplimiento en materia de no discriminación; ii) elaborar un libro blanco sobre los derechos de los pueblos indígenas; iii) buscar instrumentos jurídicos comparables que prevean la protección de los derechos de las personas con discapacidad y definir puntos de referencia (a saber, desarrollar normas tipo); iv) examinar y revisar las leyes y políticas a fin de identificar y modificar las disposiciones que discriminan a los «grupos vulnerables» (a saber, las mujeres, los niños, las personas mayores, las minorías sexuales, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas); v) revisar la Ley de Acción Afirmativa (empleo) (ley núm. 29 de 1998) con miras a reafirmar la pertinencia de la raza como parte de los criterios de acción afirmativa, y vi) revisar la actual Ley sobre la Discriminación Racial (ley núm. 26 de 1991) con miras a promulgar nueva legislación contra la discriminación. A este respecto, la Comisión acoge con agrado la publicación por la Oficina del Ombudsman del informe especial sobre el racismo y la discriminación en el que se proporciona un panorama completo de la situación en el país, incluso en la educación y el empleo, y se realizan recomendaciones específicas y detalladas al Gobierno y a las organizaciones de empleadores a fin de que se aborden todas las formas de discriminación en el país. Estas recomendaciones incluyen: i) para el Gobierno: sensibilizar a los empleadores y a los trabajadores sobre la prohibición de la discriminación en el empleo y la reparación para las víctimas; elaborar y difundir programas y estrategias para eliminar la discriminación en el empleo, apoyar a las víctimas y resolver de forma expeditiva los conflictos relacionados con la discriminación, y ii) para las organizaciones de empleadores: garantizar que los procedimientos de contratación, incluidos los anuncios de empleo, no sean sesgados; revisar los requisitos de calificaciones y experiencia para garantizar su pertinencia en lo que respecta al empleo; formar a los directivos superiores y de grado medio para que detecten las manifestaciones de discriminación en el lugar de trabajo; cooperar con las organizaciones y los representantes de los trabajadores para desarrollar procedimientos a fin de abordar la discriminación racial y otras formas de discriminación, incluido el acoso sexual, y tomar medidas para ampliar el número de candidatas a los empleos que pertenezcan a los «grupos que habían sido desfavorecidos». **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación del NHRAP (2015-2019) en lo que respecta a las cuestiones de igualdad y no discriminación, en particular acerca de todos los cambios legislativos y la adopción de medidas prácticas tales como la realización de campañas de sensibilización para la tolerancia y el respeto mutuo y de cursos de formación adecuados, y que transmita copia de todos los informes de aplicación o evaluación disponibles. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para aplicar las recomendaciones realizadas en el informe del Ombudsman en materia de educación, formación y empleo, así como**

información, cuando esté disponible, sobre todas las medidas adoptadas por las organizaciones de empleadores a este respecto.

En lo que respecta a la aplicación de la Ley de Acción Afirmativa (empleo) (ley núm. 29 de 1998) para abordar la representación insuficiente de personas pertenecientes a «determinados grupos» (es decir «personas desfavorecidas» a causa de consideraciones raciales, mujeres, personas con discapacidad), la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, que contiene datos sobre los periodos 2013-2014 y 2014-2015, y el informe anual 2015-2016 de la Comisión de Equidad en el Empleo (EEC), el número de informes sobre 2015-2016 recibidos de los empleadores pertinentes (a saber, los empleadores que tienen más de 25 trabajadores) aumentaron un 10 por ciento y llegaron a 763, y el número de los trabajadores cubiertos por los informes de acción afirmativa también aumentó en un 18 por ciento (199 126 trabajadores en todos los sectores industriales para 2015-2016). La Comisión toma nota de que, según el informe de la EEC para 2015-2016, si bien, los trabajadores previamente desfavorecidos debido a su raza constituían el 93 por ciento del número total de trabajadores cubiertos por los informes de los empleadores, sólo el 28 por ciento de éstos ocupaban puestos a nivel de director ejecutivo (en comparación con el 58 por ciento de puestos ocupados por «blancos»). Sin embargo, según el mismo informe de la EEC mejoraron su representación a nivel directivo pasando de un 56 por ciento en 2014-2015 a un 66 por ciento 2015-2016. El informe de la EEC añade que en 2015-2016 las mujeres representaban sólo el 44 por ciento de los empleados en puestos directivos (en comparación con el 39 por ciento en 2014-2015), y las personas con discapacidad representaban el 0,4 por ciento de la fuerza de trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la EEC presentó cargos contra una serie de empleadores que no cumplieran el Plan de acción afirmativa y 53 de éstos fueron condenados en 2014 y 2015. A este respecto, la Comisión acoge con agrado la indicación del Gobierno de que el hecho de haber designado a un oficial de policía a la EEC ha tenido un impacto positivo sobre el procesamiento rápido y efectivo de los infractores. La Comisión toma nota del proyecto de ley sobre el nuevo marco de empoderamiento económico equitativo de 2015, que tiene por objetivo promover el logro del derecho constitucional a la igualdad a través de una transformación socioeconómica que permita potenciar la igualdad, la justicia social y el empoderamiento de la mayoría previamente desfavorecida, y lograr una mayor tasa de crecimiento económico, un aumento del empleo y una distribución de los ingresos más equitativa. **Tomando nota de la conclusión del informe de la EEC respecto a que «la velocidad de los progresos hacia el logro de una representación equitativa [de las personas pertenecientes a determinados grupos] es lamentablemente lenta», en particular, a los niveles más altos de la dirección y, por lo tanto, a los niveles más elevados de remuneración, y tomando nota también de la subrepresentación de personas con discapacidad en todos los niveles ocupacionales, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para promover el acceso a la formación y a las oportunidades de empleo, en particular a nivel de dirección y superior, de los determinados grupos y que continúe examinando regularmente las medidas de acción afirmativa a fin de evaluar su pertinencia e impacto. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre todos los cambios legislativos en relación con el proyecto de ley sobre el nuevo marco de empoderamiento económico equitativo de 2015.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. Legislación. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la protección jurídica contra la discriminación atendiendo a los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, la Comisión saluda la indicación del Gobierno, en su memoria, de que el artículo 8 del borrador final de la Ley de Relaciones Laborales prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de raza, color, sexo, religión, embarazo, opiniones políticas, origen étnico, ascendencia nacional u origen social contra un trabajador o solicitante de empleo o en cualquier política o práctica en materia de empleo. El Gobierno añade que se celebraron otras consultas entre el Consejo Consultivo Tripartito Nacional (CCTN) y la Oficina del Abogado del Estado con el fin de introducir las últimas enmiendas en el proyecto, cuya promulgación se preveía para 2015. La Comisión toma nota de que el Gobierno no suministra información sobre los progresos realizados en relación con el examen de la Ley de Empleo de 1978, incluida la revisión de los artículos 97 a 100, que prohíben solamente la discriminación por razón de sexo contra las mujeres. La Comisión toma nota de que el Programa de Trabajo Decente por País para 2013-2015, que ha sido ampliado hasta 2017, ha establecido como prioridad la conclusión del proyecto de ley sobre relaciones laborales, y las revisiones de la Ley de Empleo mediante la redacción de una nueva ley de relaciones de empleo. **Al tiempo que toma nota de que ninguno de estos proyectos de ley ha sido promulgado hasta el momento, la Comisión confía en que la Ley de Relaciones Laborales será adoptada próximamente, y pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en este sentido. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en relación con el examen de la Ley de Empleo de 1978 y, en particular, sobre sus artículos 97 a 100, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, con miras a ajustar las disposiciones sobre discriminación a la Ley de Relaciones Laborales y ponerlas en conformidad con el Convenio.**

Discriminación por motivos de sexo. Función pública. La Comisión se ha venido refiriendo, a lo largo de más de quince años, al efecto discriminatorio del artículo 36, 2), c), iv), de la Ley de Servicios Públicos (administración), de 1995, que permite que las convocatorias de candidaturas especifiquen que «tan sólo podrán nombrarse, promoverse o transferirse unos determinados porcentajes de hombres y mujeres»; así como del artículo 20.64 del decreto general núm. 20 y del artículo 137 de la Ley de

Servicios Docentes, de 1988, que establecen que una funcionaria o una profesora sólo tiene derecho a determinados subsidios para su marido y sus hijos si ella es el sostén del hogar. Una funcionaria o una profesora son consideradas como el sostén de la familia si están solteras o divorciadas o si su esposo está enfermo, es estudiante o está desempleado. La Comisión **lamenta profundamente** tomar nota de que a pesar de la adopción de una nueva Ley de Servicios Públicos (administración) en 2014, por la que se deroga la ley de 1995, se ha mantenido el citado artículo 36, 2), c), iv). No obstante, la Comisión toma nota de que la Política Nacional de Servicios Públicos sobre Igualdad de Género e Inserción Social (GESI), adoptada en 2013, y su plan de acción establecieron como medida prioritaria la revisión de las condiciones de empleo con el fin de garantizar la igualdad en el acceso y en las condiciones de empleo para todas las personas con independencia de su género. **Recordando el efecto discriminatorio del artículo 36, 2), c), iv), de la Ley de Servicios Públicos (administración) de 2014, el artículo 20.64 de la orden general núm. 20 y el artículo 137 de la Ley de Servicios Docentes, de 1988, la Comisión insta al Gobierno a adoptar sin demora medidas para examinar y modificar estas leyes con el fin de ponerla de conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre cualquier medida adoptada como resultado de las normas y el plan de acción de la Política Nacional de Servicios Públicos sobre Igualdad de Género e Inserción Social y sobre los progresos realizados para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en los servicios públicos.**

Discriminación contra algunos grupos étnicos. En relación con sus comentarios anteriores, relativos a los alegatos formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el aumento de la violencia contra los trabajadores y empresarios de origen asiático, a quienes se culpa por «acaparar las oportunidades de empleo», la Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite ninguna información a este respecto. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que investigue los alegatos de discriminación contra trabajadores y empresarios de origen asiático, incluido los incidentes violentos, y a que tenga a bien suministrar información sobre los resultados de dicha investigación. La Comisión pide también al Gobierno que transmita información sobre las medidas prácticas adoptadas para garantizar la protección en el marco del empleo y la ocupación contra actos de discriminación por motivos de raza, color o ascendencia nacional, así como sobre cualquier otra medida adoptada o prevista para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación entre los miembros de distintos grupos étnicos.**

Artículo 2. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue todavía sin proporcionar información sobre una política nacional que aborde específicamente la discriminación por todos los motivos enumerados en el Convenio. En relación con la discriminación por motivo de sexo, la Comisión toma nota de que algunos artículos de la GESI, de 2013, y de la Política Nacional para las Mujeres y la Igualdad de Género para 2011-2015 parecen abordar la cuestión de la igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda que, incluso si la importancia relativa de los problemas relacionados con cada uno de los motivos de discriminación puede variar de un país a otro, al examinar la situación y decidir las medidas que habrán de adoptarse, es esencial que se tengan en cuenta todos los motivos de discriminación previstos en el Convenio en la aplicación de la política nacional, que presuponen una combinación de medidas legislativas y administrativas, convenios colectivos, políticas públicas, medidas de discriminación positiva, mecanismos de resolución de conflictos y de control, órganos especializados, programas prácticos y actividades de sensibilización (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 848 y 849). **La Comisión insta una vez más al Gobierno a que transmita información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o previstas, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para aplicar una política nacional destinada a garantizar y promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación en lo que atañe a todos los motivos establecidos en el Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Perú

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú, recibidas el 28 de septiembre de 2017, y de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), junto con numerosas organizaciones sindicales, recibidas el 2 de septiembre de 2017, así como de las correspondientes respuestas del Gobierno. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno relativa a las observaciones de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de 16 de septiembre de 2014, mencionadas en su observación anterior.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para identificar y dar tratamiento a las causas subyacentes de la brecha salarial existente y que enviara información sobre toda evolución al respecto, así como sobre las medidas de sensibilización al principio del Convenio tomadas. También le pidió que comunicara datos estadísticos desagregados por sexo sobre la distribución de hombres y mujeres en el mercado del trabajo y su remuneración. La Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual el ingreso promedio mensual de las mujeres en 2015 y en 2016 representaba, respectivamente, el 71,4 y 70,8 por ciento del ingreso de los hombres. La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa que, según consta en el informe «La Mujer en el Servicio Civil Peruano», de marzo de 2017, elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), las diferencias salariales entre hombres y mujeres se han reducido de 24 por ciento a 16 por ciento, entre 2008 y 2015, debido, entre otras cosas, al aumento de participación de las mujeres en ocupaciones con mayores remuneraciones promedio. La Comisión también toma conocimiento del informe «La Mujer en el Servicio Civil Peruano», publicado en marzo de 2018, según el cual entre los años 2015 y 2016 la brecha salarial se incrementó de 16 a 18 por ciento. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno se refiere al informe «Brechas de Género 2017: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres» del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La Comisión toma nota de que, según dicho informe: 1) la mayoría de las mujeres trabajadoras

independientes (35,7 por ciento) o son trabajadoras familiares no remuneradas (17 por ciento); 2) por tipo de ocupación, la menor brecha salarial se encuentra entre las/os profesionales y técnicos, y la más alta entre las/los que se dedican a actividades agropecuarias, donde las mujeres ganan la mitad del ingreso de los hombres; 3) uno de los motivos principales por las brechas existentes reside en el hecho de que las mujeres trabajan menos horas por dedicarse a sus familias, y 4) la adquisición de un mayor nivel de escolaridad por parte de las mujeres no reduce necesariamente la diferencia de ingresos del trabajo entre ellas y los hombres. Por otro lado, la Comisión toma nota de las observaciones de la CATP y de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú según las cuales, de acuerdo al tipo de contrato, los asalariados tienen una remuneración diferente y, por ende, el tipo de contrato es una variable importante en la reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres. La Comisión también toma nota de que en sus observaciones la CGTP se refiere al impacto de los diferentes regímenes laborales establecidos en la legislación nacional sobre la rebaja de los ingresos en sectores con amplia participación femenina, con repercusiones sobre la brecha salarial existente. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estas observaciones de la CGTP señalando que: 1) la políticas nacionales de empleo comprenden estrategias que buscan implementar mecanismos de acción afirmativa en favor de las mujeres para disminuir la segregación ocupacional por género, y 2) la incorporación del enfoque de género en dichas políticas es un proceso de largo aliento.

Respecto de las medidas adoptadas para dar tratamiento a las causas subyacentes de la brecha salarial existente, el Gobierno informa en particular que el 24 de junio de 2017 se publicó el decreto supremo núm. 068-2017-PCM mediante el cual se dispone que las entidades del Poder Ejecutivo (ministerios y organismos públicos) elaboren un diagnóstico interno de la brecha salarial entre hombres y mujeres y sus causas, con miras a formular acciones para el cierre de la desigualdad salarial por género. A este respecto, la CATP y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú observan que los asalariados del sector público sólo representan el 8,9 por ciento de los hombres ocupados y el 9,5 por ciento de las mujeres ocupadas. Por otro lado, la Comisión toma nota también de que, en respuesta a las observaciones de la CATP, a las que la Comisión hizo referencia en su observación anterior, el Gobierno indica que: 1) el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) abordaba las cuestiones relacionadas con la brecha salarial en el marco de su objetivo estratégico 5 («garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres»); 2) el Plan de derechos humanos 2014-2016 incorporaba, entre sus objetivos, el de «reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres»; 3) el Plan de acción intersectorial para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres está encaminado, entre otros, a reducir las brechas de acceso al empleo y de ingresos entre hombres y mujeres, y 4) se está elaborando una «Estrategia sectorial para lograr la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación» que se propone, entre otros, elaborar un diagnóstico de brechas salariales y discriminación de género en el sector privado. A tal respecto, la Comisión toma nota de la resolución ministerial núm. 061-2018-TR, de 23 de febrero de 2018, que aprueba el Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación (2018-2021). La Comisión también toma nota de que el Gobierno facilita información sobre el Programa nacional Cuna Más y el reconocimiento de licencias por paternidad y maternidad, que se examinan en sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión toma nota además de que, según surge de la información disponible en el sitio web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a finales de 2017 se amplió la vigencia del PLANIG para permitir el diseño de un nuevo plan para la fase sucesiva. Respecto de estos puntos, la Comisión toma nota de que en sus observaciones de septiembre de 2017, la CATP y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú subrayan, en particular, que: 1) el PLANIG está enfocado sobre todo en el sector público y no se cuenta con información que indique como los resultados del PLANIG han contribuido a la reducción de la brecha salarial entre hombre y mujeres; 2) respecto del Plan de derechos humanos 2014-2016, no se han presentado diagnóstico, resultados ni metodología sobre las brechas salariales en los sectores públicos y privados, y 3) la centrales sindicales no han sido convocadas en relación con la estrategia sectorial mencionada por el Gobierno. La CATP y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú se refieren además a la falta de consistencia de las políticas públicas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los logros obtenidos en la implementación de las varias medidas mencionadas han contribuido a disminuir o erradicar los factores que influyen en la brecha salarial de género. ***Al tiempo que toma buena nota de todas estas informaciones y con el fin de estar en condiciones de evaluar los resultados obtenidos con las diversas medidas adoptadas para promover el principio del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que:***

- i) evalúe, de manera sistemática, y en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, los planes y programas adoptados con miras a promover el principio del Convenio y envíe información específica sobre los resultados obtenidos en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector privado así como sobre toda acción de seguimiento tomada, incluida la definición de metas e indicadores destinados a monitorear la implementación de dichas acciones;***
- ii) informe sobre los resultados de los diagnósticos de brechas salariales de género en los sectores públicos y privados, y las acciones de seguimiento tomadas en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y***
- iii) continúe informando sobre las medidas concretas adoptadas o previstas para dar tratamiento a las causas subyacentes de la brecha salarial existente, incluyendo información sobre toda medida pertinente adoptada en el***

marco de las estrategias sectoriales sobre igualdad y no discriminación y sobre empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, y su impacto en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En cuanto a las medidas de sensibilización tomadas, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de las actividades de sensibilización llevadas a cabo en 2015 y 2016 sobre el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y de la iniciativa Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer. También toma nota de las observaciones de la CATP y de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú según las cuales sería oportuno contar con una evaluación de impacto de las mismas. **La Comisión pide al Gobierno que:**

- i) **continúe adoptando medidas encaminadas a fomentar una mejor comprensión de la opinión pública del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y proporcione información al respecto, indicando también los beneficiarios de dichas medidas, y**
- ii) **siga enviando datos estadísticos desagregados por sexo sobre la distribución de hombres y mujeres en el mercado del trabajo y sobre las remuneraciones percibidas por hombres y mujeres por sector de actividad económica.**

Artículos 1 y 3. Trabajo de igual valor y evaluación objetiva del empleo. La Comisión recuerda que en su observación anterior instó al Gobierno a que tomara las medidas necesarias con miras a adoptar sin demora un sistema de evaluación objetiva de los empleos. También le pidió que enviara información sobre la «Guía para la aplicación del principio de igual remuneración entre hombres y mujeres» que se preveía elaborar. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el proceso de elaboración de la referida guía no pudo concretarse por motivos coyunturales, y 2) el Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación (2018-2021) incluye, entre sus acciones estratégicas, la elaboración de una metodología específica de evaluación de puestos de trabajo sin sesgo de género a fin de garantizar la igualdad salarial. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno se refiere a la Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres, núm. 30709, de 26 de diciembre de 2017. La Comisión toma nota de que el objetivo de dicha ley es prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución «del principio de igual remuneración por igual trabajo» (artículo 1). Al tiempo que toma nota de que la ley no refleja plenamente el principio del Convenio, el cual también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de «igual valor», la Comisión toma nota de que su reglamento, adoptado mediante decreto supremo núm. 002-2018-TR, de 8 de marzo de 2018, dispone, entre otras cosas, que: 1) el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones aplicando criterios objetivos, en base a las tareas que entrañan, a las aptitudes necesarias para realizarlas y al perfil del puesto (artículo 3.1), y 2), en caso de que se alegue discriminación directa o indirecta en las remuneraciones por motivo de sexo, el empleador debe acreditar que los puestos de trabajo implicados «no son iguales y/o no tienen el mismo valor» (artículo 5.2). En este contexto, la Comisión recuerda que, si bien el Convenio no establece ningún método específico para la evaluación objetiva del empleo, el artículo 3 del Convenio presupone el uso de técnicas adecuadas con miras a determinar su valor, mediante la comparación de factores tales como las calificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 695). Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según observan la CATP y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú, sería oportuno brindar cambios a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya que actualmente las funciones de una relación laboral y la remuneración correspondiente son determinadas en cada contrato conforme al resultado de la negociación entre el empleador y el trabajador o la trabajadora, lo que dejaría al empleador una cierta discrecionalidad en definir funciones y niveles de remuneraciones con repercusiones sobre la aplicación del Convenio. **En consideración de todo lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que:**

- i) **informe sobre la metodología de evaluación de los empleos elaborada en el marco del Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación (2018-2021);**
- ii) **proporcione información concreta sobre la aplicación de la ley núm. 30709 y su reglamento, así como sobre su impacto en la promoción del principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y**
- iii) **indique cómo la aplicación de la ley núm. 30709 se garantiza frente a la situación observada por la CATP y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú en relación con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.**

Recordando la importancia de garantizar que hombres y mujeres tengan una base legal clara para afirmar su derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor frente a sus empleadores y ante las autoridades competentes y tomando nota de que la ley núm. 30709 se refiere al principio de igual remuneración por «igual trabajo» — lo que es más restringido que el principio del Convenio — mientras que su reglamento abarca además de los trabajos iguales, también los trabajos de «igual valor», la Comisión pide al Gobierno que armonice su legislación de manera a incorporar plenamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, tal como consagrado en el Convenio, e informe sobre toda evolución al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación por motivo de sexo, color y raza. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que evaluara el impacto, sobre el acceso y las condiciones de empleo de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras indígenas, de las disposiciones legales que establecen regímenes especiales de trabajo, tales como: el decreto legislativo núm. 1057, de 28 de junio de 2007, que establece el contrato administrativo de servicios (CAS); la ley núm. 28015, de 2 de julio de 2003, y el decreto legislativo núm. 1086, de 27 de junio de 2008, que establecen el régimen de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y el acceso al empleo decente; la ley núm. 27360, de 30 de octubre de 2000, que aprueba las normas sobre el sector agrario; y la Ley núm. 27986 sobre Trabajadores del Hogar, de 2 de junio de 2003, y que enviara información al respecto. También pidió al Gobierno que: i) enviara información estadística, desglosada por sexo, sobre el número de trabajadores contratados en el sector público bajo las diversas modalidades de contrato, y en el sector privado en virtud de las leyes núms. 28015, 27360 y 27986, mencionadas anteriormente, indicando, si fuera posible, la proporción de trabajadores indígenas, y ii) informara sobre las medidas adoptadas para la aplicación eficaz de la legislación que prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo por motivo de raza, color y sexo.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa que: i) por la ley núm. 29849, de 5 de abril de 2012, se incrementaron los derechos reconocidos a los/as servidores/as que corresponden al régimen del CAS (entre otros, las licencias con goce de haber por maternidad y paternidad); ii) el CAS va siendo progresivamente sustituido por el régimen regulado por la Ley del Servicio Civil, núm. 30057, de 3 de julio de 2013, que tiene como objetivo establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas, y iii) en 2017 los servidores CAS representaban el 22 por ciento del empleo público sujeto a un régimen laboral particular, siendo el 48 por ciento de las posiciones bajo el régimen CAS ocupadas por mujeres. El Gobierno también proporciona información sobre las varias normas adoptadas entre el 2011 y el 2017 vinculadas con las cuestiones de la igualdad y no discriminación, las cuales se aplican a diversos regímenes del servicio público (entre otras las incluidas en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, aprobado por decreto supremo núm. 040-2014-PCM, de 11 de junio de 2014, y en la ley núm. 30483, Ley de la Carrera Fiscal, de 27 de mayo de 2016), y sobre las medidas especiales adoptadas en atención a las mujeres, en particular la ley núm. 30367, de 24 de noviembre de 2015, que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario (estableciendo que se declara nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce durante la gestación o dentro de los noventa días posteriores al nacimiento), y prolonga su período de descanso de 90 a 98 días.

Respecto del acceso al empleo de los hombres y de las mujeres indígenas, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) cuenta con un Plan de acción para la implementación transversal del enfoque intercultural en sus procesos priorizados para el período 2016-2019 y viene elaborando un estudio sobre el nivel y tipo de acceso de personas indígenas al servicio civil, específicamente a los gobiernos locales (municipalidades). La Comisión toma nota de que, según surge de la información disponible en el sitio web de SERVIR, en 2016, SERVIR publicó un estudio sobre «personas en gobiernos locales que hablan lenguas indígenas u originarias» el cual concluye que «no se ha encontrado una incidencia significativa de personas que hablan alguna lengua indígena u originaria y prestan servicios en los gobiernos locales estudiados», tratándose del 4,8 por ciento, de los cuales el 72 por ciento son hombres y el 28 por ciento mujeres. La Comisión también toma nota de que el Gobierno se refiere a la elaboración de una Estrategia sectorial para lograr la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación, 2017-2021, cuyo objetivo es garantizar a las mujeres y a los grupos de especial protección — en los que se incluyen a las personas indígenas — la igualdad de condiciones para el ejercicio efectivo de sus derechos en el acceso, permanencia y salida del mercado laboral y el desarrollo de su potencial productivo. A tal respecto, la Comisión toma nota de la resolución ministerial núm. 061-2018-TR, de 23 de febrero de 2018, que aprueba el Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación (2018-2021). En cuanto a las medidas adoptadas para aplicar la legislación que prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo, el Gobierno informa que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó la «Guía de buenas prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación», a través de la resolución ministerial núm. 159-2013-TR de 10 de setiembre de 2013. ***Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la transición al régimen único del servicio civil y sobre la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores y las trabajadoras, sin discriminación por motivos de sexo, color y raza, en lo que respecta al acceso al empleo y la formación profesional, y las condiciones de trabajo.***

La Comisión recuerda que excluir a ciertas categorías o sectores del ámbito de aplicación de la legislación laboral general puede tener consecuencias negativas, principalmente para los trabajadores de un determinado sexo u origen étnico, y podría constituir una discriminación indirecta en el marco del Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 739). ***La Comisión también pide nuevamente al Gobierno que evalúe el impacto de las leyes núms. 28015, 27360 y 27986 sobre el acceso y las condiciones de empleo de las mujeres y de los trabajadores y trabajadoras indígenas y proporcione información al respecto. Sírvasse también suministrar información específica sobre las medidas concretas adoptadas en el marco del Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el***

empleo y la ocupación (2018-2021) para combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación y su impacto.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar que la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) trate de manera eficaz los problemas de discriminación existentes y promueva la igualdad de mujeres y hombres en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo y, más particularmente, que tomara medidas concretas para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres embarazadas en el empleo, en la formación y en la educación, y enviara información al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre: i) la instalación de la mesa de trabajo bipartita entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) con el objetivo de tratar sobre las principales dificultades y desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral y proponer acciones para impulsar y promover los derechos de las mujeres trabajadoras; ii) la elaboración del estudio «Una apuesta por la igualdad de género y la corresponsabilidad de los cuidados: Propuestas para expandir la cobertura del cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años de edad en el Perú, 2016-2026»; iii) la publicación de la «Guía de buenas prácticas en materia de conciliación del trabajo y la vida familiar y personal», y iv) las medidas especiales adoptadas en atención a las mujeres mencionadas anteriormente. La Comisión toma nota igualmente del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) «Brechas de Género 2017», según el cual, a pesar de la mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en las últimas décadas, éstas todavía no gozan de igualdad de oportunidades de empleo y, con frecuencia, se concentran en los sectores considerados «feminizados», más precarios e informales. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según indica el informe «La Mujer en el Servicio Civil Peruano», elaborado por SERVIR y disponible en el sitio web de dicha autoridad, el 47 por ciento de los servidores públicos son mujeres y éstas últimas se encuentran principalmente en las carreras especiales (55 por ciento), por la fuerte presencia de enfermeras en el sector salud y de profesoras de educación inicial y primaria en el sector educación. El mismo informe también presenta los resultados preliminares sobre las posibles causas de las brechas de acceso a puestos de dirección, según los cuales se perciben como causas principales la existencia de prejuicios hacia las mujeres, la falta de experiencia y de especialización necesaria para el puesto, y la falta de disposición para laborar jornadas extensas, entre otros. La Comisión toma nota además del Plan nacional de derechos humanos (2018-2021), aprobado con decreto supremo núm. 002-2018-JUS, de 31 de enero de 2018, que incluye entre sus objetivos estratégicos: garantizar un país libre de discriminación y violencia; y garantizar la generación de ingresos propios para las mujeres. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó su preocupación por las importantes limitaciones que experimentan las mujeres rurales, como la ausencia de una política de desarrollo rural que tenga en cuenta las cuestiones de género (documento CEDAW/C/PER/CO/7-8, de 24 de julio de 2014, párrafo 37). En relación con las cuestiones de la corresponsabilidad de los cuidados y de la segregación en la ocupación y la igualdad de remuneración, la Comisión se remite igualmente a sus comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). ***La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas concretas adoptadas por la mesa de trabajo bipartita entre el MTPE y la CGTP así como sobre las medidas adoptadas en el marco del Plan nacional de derechos humanos (2018-2021) y el Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación (2018-2021) con miras a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, incluidas las medidas destinadas a garantizar y promover el acceso y la permanencia de las mujeres embarazadas en el empleo, la formación y la educación, y las encaminadas a promover y garantizar el acceso de las mujeres rurales a los bienes materiales y a los servicios necesarios para desempeñar una ocupación, en pie de igualdad con los hombres. La Comisión nuevamente alienta al Gobierno a continuar de manera sistemática evaluando los planes y programas de igualdad adoptados y a suministrar información sobre sus impactos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Qatar

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1976)

La Comisión recuerda que, en su 324.^a reunión (junio de 2015), el Consejo de Administración adoptó las recomendaciones de su comité tripartito establecido para examinar una reclamación presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, en la que se alegaba el incumplimiento por parte de Qatar del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La reclamación concierne a las quejas por discriminación directa e indirecta contra las mujeres empleadas por la compañía aérea estatal Qatar Airways (documento GB.324/INS/7/9). De este modo, el Consejo de Administración encomendó a la Comisión de Expertos el seguimiento de las cuestiones planteadas en la reclamación. Éstas se examinarán a continuación.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

La Comisión recuerda asimismo las conclusiones y la discusión que tuvo lugar a continuación en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2016, en relación con la aplicación del Convenio en lo que respecta a: i) el cumplimiento de las conclusiones del Consejo de Administración; ii) las medidas para definir y prohibir la discriminación directa e indirecta en la legislación y en la práctica; iii) la protección de los trabajadores domésticos contra la discriminación; iv) la promoción del empleo de las mujeres; v) las medidas para hacer frente al acoso sexual, y vi) la enmienda de la ley núm. 21, de 2015, que regula la entrada y salida de los expatriados y su residencia. Estas cuestiones se examinarán en relación con los artículos pertinentes del Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, recibidas el 31 de agosto de 2016, sobre la discusión, así como de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Aplicación de Normas relativas a la situación de los trabajadores migrantes con respecto al cambio de empleador y a los permisos de salida (sistema *kafala*).

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Al tiempo que acoge con agrado la información detallada proporcionada por el Gobierno en su memoria, la Comisión toma nota con *interés* de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración, en particular lo siguiente:

- i) La discriminación por motivo de embarazo (párrafo 32 del informe del comité tripartito) y el ofrecimiento de un empleo alternativo adecuado a las empleadas embarazadas que están temporalmente incapacitadas para volar (párrafo 35): la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la compañía ya no emplea a ningún tripulante de cabina en virtud del contrato de trabajo anterior, y de que se enmendó el nuevo contrato para eliminar cualquier cláusula que permitiera la terminación automática de la relación de trabajo en caso de embarazo, y para añadir disposiciones sobre la maternidad tal como se establece en la política de la compañía. Por último, la Comisión toma nota de que la compañía subraya que se compromete a no escatimar esfuerzos para hallar un empleo alternativo adecuado a las tripulantes de cabina embarazadas que no perjudique su salud. La compañía subraya asimismo que, durante el embarazo, brinda a las mujeres embarazadas la oportunidad de trabajar en servicios en tierra, como la formación, el bienestar del personal, la gestión del alojamiento, las normas y procedimientos, y las divisiones adyacentes de los clientes. El Gobierno afirma que, a través de su seguimiento con la compañía, ha determinado que, en diciembre de 2014, ninguna de las tripulantes de cabina de la compañía aérea que se había quedado embarazada había dejado la compañía, salvo que hubiera sido *motu proprio* (entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2017, hubo 72 embarazos entre las tripulantes de cabina: 26 fueron trasladadas de manera temporal o permanente a servicios en tierra; 14 presentaron su dimisión tras la licencia de maternidad; nueve seguían estando en licencia de maternidad, y 23 han retomado el trabajo según la programación de vuelos).
- ii) La prohibición en el código de prácticas de Qatar Airways de que las mujeres empleadas por la compañía sean acompañadas, al llegar o al partir de las instalaciones de la compañía, por un hombre que no sea su padre, su hermano o su marido (párrafo 36): la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la prohibición concierne tanto a las mujeres como a los hombres empleados por la compañía, sólo se aplica al llegar o al partir de las instalaciones de la compañía y que no se aplica al alojamiento de los empleados. El Gobierno indica que esta cuestión se abordó de manera efectiva, y casi permanentemente, a través de la emisión de advertencias informales que recordaron a la persona en cuestión la necesidad de respetar las tradiciones locales. Añade que la compañía garantiza a los empleados de ambos sexos plena libertad en su vida social, sin injerencia por parte de la compañía y sin que ello tenga ningún impacto en la relación de trabajo, y que los empleados tienen derecho a recibir invitados libremente en sus alojamientos proporcionados por la compañía.
- iii) La necesidad de contar con la autorización de Qatar Airways para contraer matrimonio (párrafo 40): la Comisión toma nota de que, según la compañía, las tripulantes de cabina son libres de contraer matrimonio y de cambiar de condición social en general, sin necesidad de obtener una previa autorización de la compañía, y pueden permanecer en servicio y cambiar de condición social a fin de obtener prestaciones para su cónyuge.
- iv) Las reglas relativas a los períodos de descanso (párrafo 42): la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno de que la compañía afirma que las reglas relativas a los períodos de descanso se aplican sin discriminación por motivo de sexo, y que esta cuestión se seguirá vigilando estrechamente.
- v) La necesidad de garantizar que la aplicación de las reglas y políticas no contribuya a un ambiente de trabajo intimidatorio (párrafo 46): la Comisión toma nota de que la compañía introdujo determinados cambios en sus políticas de vivienda, como la facilitación de viviendas familiares, la posibilidad de cambiar de alojamiento cada seis meses, la posibilidad de recibir invitados, etc. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que la compañía está comprometida a mejorar la calidad de vida de la tripulación de cabina, incluida la licencia adicional para la mayoría de los tripulantes de cabina.
- vi) La eficacia de los mecanismos de aplicación y de reparación en caso de discriminación (párrafo 48): la Comisión saluda las medidas desplegadas por el Gobierno para aumentar el número de inspectoras del trabajo de 16 a 57, así como su participación en las visitas de inspección periódicas de la compañía, en particular las que se centran

específicamente en el alojamiento de las empleadas. La Comisión toma nota además de que, en septiembre de 2016, se organizó un curso especializado para los inspectores del trabajo en cooperación con la ITF con miras a desarrollar sus competencias y su capacidad a través de programas de inspección especializados en el ámbito de la aviación. La Comisión toma nota igualmente de que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales (MADLSA) no ha recibido ninguna queja de discriminación.

Al tiempo que toma nota de los avances positivos detallados anteriormente, en respuesta a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración en 2015, la Comisión pide al Gobierno que continúe realizando un seguimiento con la compañía de la aplicación de estas recomendaciones, y que supervise su prácticas, a fin de asegurar que no exista discriminación hacia las tripulantes de cabina embarazadas y que se tomen medidas para proporcionarles un trabajo alternativo adecuado durante el embarazo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que continúe fortaleciendo los mecanismos de aplicación, incluida su capacidad para detectar y afrontar las prácticas discriminatorias. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda queja por discriminación presentada y sus resultados, así como sobre toda práctica discriminatoria detectada por los inspectores del trabajo.

Evolución legislativa. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción de las siguientes leyes desde sus últimos comentarios: la ley núm. 15 de 2017, relativa a los trabajadores domésticos; la ley núm. 13 de 16 de agosto de 2017, que enmienda varias disposiciones de la Ley del Trabajo núm. 14 de 2004; la ley núm. 13 de 1990, que promulga la Ley de Procedimiento Civil y Comercial, y la ley núm. 13 de 2018, que enmienda las disposiciones de la ley núm. 21 de 2015, que regula la entrada y salida de los expatriados y su residencia. La Comisión toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 15 de 2016, que promulga la Ley de Recursos Humanos Civiles, la cual deroga la Ley de Gestión de Recursos Humanos núm. 8 de 2009. Cuando proceda, la Comisión examinará las disposiciones de estas leyes en relación con los artículos pertinentes del Convenio.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. La Comisión recuerda una vez más que el marco constitucional y legislativo no prevé un marco jurídico integral que defina y aborde la discriminación basada en al menos todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. En particular, dista mucho de prohibir efectivamente la discriminación por motivo de opinión política, ascendencia nacional y origen social, y sólo brinda protección contra la discriminación en ciertos aspectos del empleo. La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se describe una vez más el marco legal establecido en virtud de los artículos 34 y 35 de la Constitución, que disponen que «los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones públicos» y que «las personas son iguales ante la ley. No habrá discriminación contra ellas por motivos de sexo, raza, lengua o religión». El Gobierno indica además que la Ley del Trabajo prevé la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (artículo 93) y que existen disposiciones que establecen prestaciones específicamente para las mujeres que trabajan: licencia remunerada para las mujeres que tienen hijos con discapacidades; licencia de maternidad remunerada; pausas para la lactancia; restricciones relativas a su empleo (horas de trabajo y trabajos peligrosos y difíciles), etc. La Comisión recuerda que las disposiciones constitucionales que prevén la igualdad de oportunidades y de trato, aunque son importantes, normalmente no han demostrado ser suficientes para hacer frente a los casos de discriminación en materia de empleo y ocupación. También se requiere un marco legislativo más detallado. La Comisión no puede sino reiterar sus comentarios anteriores de que, dados los persistentes patrones de discriminación por los motivos especificados en el Convenio, se precisa una legislación integral que contenga disposiciones explícitas que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta por al menos todos los motivos señalados en el Convenio, y en todos los aspectos del empleo y la ocupación, a fin de asegurar la plena aplicación del Convenio. La Comisión ha observado que varias características de la legislación contribuyen a luchar contra la discriminación y a promover la igualdad y, en particular, acoge con agrado la legislación que contempla lo siguiente: la cobertura de todos los trabajadores; la facilitación de una definición clara de no discriminación directa e indirecta, así como de acoso sexual; la prohibición de todas las etapas del proceso de desarrollo; la asignación explícita de responsabilidades de supervisión a las autoridades nacionales competentes; el establecimiento de mecanismos accesibles de solución de conflictos; el desplazamiento o la inversión de la carga de la prueba; la facilitación de protección contra las represalias; las medidas de acción positiva, y la adopción y aplicación previstas de políticas o planes de igualdad en el lugar de trabajo, así como la recopilación de datos pertinentes a diferentes niveles (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 850-855). ***Al tiempo que recuerda la ausencia de un marco legislativo claro e integral que brinde protección contra la discriminación en materia de empleo y ocupación a través de una definición y una prohibición claras de la discriminación directa e indirecta, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno una vez más a que adopte las medidas necesarias para asegurar que todos los trabajadores, sin distinción alguna, estén protegidos en la legislación y en la práctica contra la discriminación por lo menos con respecto a todos los motivos contemplados en el Convenio, incluida la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social, y en todos los aspectos del empleo, entre ellos la contratación y las condiciones de trabajo, en los sectores tanto público como privado.***

Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que, desde 2006, se ha estado refiriendo a la insuficiencia del marco legislativo para asegurar la prohibición del acoso sexual en el empleo y la ocupación, así como la protección efectiva contra el mismo, en particular, para las trabajadoras domésticas que son especialmente vulnerables a este tipo de discriminación sexual. Por lo tanto, ha venido pidiendo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para la adopción de disposiciones legales que definan y prohíban expresamente tanto el acoso que

se asemeja a un chantaje (*quid pro quo*) como el acoso sexual en un ambiente hostil contra los trabajadores y trabajadoras de los sectores tanto público como privado, y que prevean mecanismos efectivos de reparación, vías de recurso y sanciones. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que «el acoso sexual es un asunto muy complejo porque el autor lo comete clandestinamente, tomando todas las medidas necesarias, medios y precauciones para no exponer su conducta delictiva». El Gobierno se remite una vez más en su memoria a las siguientes disposiciones legales: artículos 279 a 289 del Código Penal, que castigan los «crímenes de honor»; el artículo 291, que prevé sanciones contra toda persona que «ofenda la modestia de una mujer»; y el artículo 38 de la Ley sobre Procedimientos Penales, que especifica que los funcionarios encargados de la administración de la justicia tienen la obligación de aceptar las quejas de delitos cometidos, incluido el acoso sexual, y de remitirlas inmediatamente al Fiscal General. El Gobierno señala asimismo que no es necesario incluir una disposición en la Ley del Trabajo, porque tanto el Código Penal como la Ley de Procedimiento Penal tienen un mayor efecto disuasorio. Sin embargo, la Comisión subraya una vez más que, en general, luchar contra el acoso sexual únicamente a través de procedimientos penales no es suficiente, debido a lo delicado de la cuestión, al temor a represalias (el temor a perder el propio trabajo), a la complejidad del procedimiento y a la mayor carga de la prueba en la legislación penal. Asimismo, en lo que respecta a los trabajadores domésticos migrantes, la Comisión observa que los párrafos 2 y 3 del artículo 7 de la ley núm. 15 de 2017, relativos a los trabajadores domésticos prevén, respectivamente, que el empleador será responsable de «tratar bien a los trabajadores domésticos, de tal manera que se protejan su dignidad y bienestar» y de «evitar exponer la salud o la vida de un trabajador doméstico a un peligro, o perjudicarle física o moralmente de cualquier manera». La Comisión señala que las disposiciones de la ley núm. 15 se limitan al comportamiento del empleador y no a cualquier otro posible autor, y que las disposiciones tanto del Código Penal como de la ley núm. 15 de 2017 no reflejan todos los diversos comportamientos que constituyen acoso sexual en el ámbito específico del empleo y la ocupación que pueden manifestarse verbalmente, físicamente, visualmente, psicológicamente o electrónicamente. En su observación general de 2002, la Comisión proporcionó una definición de acoso sexual que contiene los siguientes elementos: i) *quid pro quo* (cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo, que afecta la dignidad de las mujeres y de los hombres, el cual es no deseado, irrazonable y ofensivo para el destinatario, y el rechazo por parte de la persona, o su sumisión a este comportamiento, es utilizado, explícita o implícitamente, como fundamento de una decisión que afecta el trabajo de esa persona), o ii) entorno de trabajo hostil (cualquier comportamiento que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el destinatario) (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 789). **Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir y definir explícitamente en la Ley del Trabajo núm. 14 de 2004, la ley núm. 5 de 2017, relativa a los trabajadores domésticos, y la ley núm. 15 de 2016 que promulga la Ley de Recursos Humanos Civiles, todas las formas de acoso sexual en el empleo y la ocupación cometido, no sólo por el empleador, sino también por un compañero de trabajo, un cliente o un proveedor (o un miembro de la familia del empleador o un amigo del empleador en el caso de los trabajadores domésticos), contra todos los trabajadores y trabajadoras en los sectores tanto público como privado. Se pide asimismo al Gobierno que incluya disposiciones específicas que prevean mecanismos eficaces de recursos, reparaciones y sanciones. La Comisión pide asimismo al Gobierno que prevea la concepción y aplicación de una serie de medidas prácticas para hacer frente al acoso sexual, como líneas telefónicas de ayuda, campañas de sensibilización, asistencia jurídica o unidades de apoyo para ayudar a las víctimas de acoso sexual y formación específica orientada a los inspectores del trabajo. Por último, la Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre el número de quejas de acoso sexual remitidas a las autoridades competentes, incluidas causas penales.**

Artículos 1 y 2. No discriminación de los trabajadores migrantes. La Comisión recuerda que la gran mayoría de los trabajadores económicamente activos en Qatar son trabajadores migrantes. La Comisión recuerda asimismo que se viene refiriendo desde 2009 a las limitaciones existentes a la posibilidad de que los trabajadores migrantes cambien de empleador en el marco del sistema de patrocinio (*kafala*), a raíz de lo cual los trabajadores migrantes son más vulnerables a los abusos y la discriminación, en particular, por los motivos enumerados en el Convenio, tales, como la raza, el color, la religión, la ascendencia nacional y el sexo. A este respecto, la Comisión saluda que la sustitución del sistema *kafala* por un «sistema de contratos de trabajo» sea uno de los cinco pilares del programa de cooperación técnica acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT, que se puso en marcha formalmente en noviembre de 2017 (véase el documento GB.334/INS/8, de 24 de octubre de 2018, párrafos 4 y 13-15).

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CSI subraya que la ley núm. 21 de 2015, que regula la entrada y salida de los expatriados y su residencia, dista mucho de abordar las cuestiones planteadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia relativas a la abolición de los permisos de salida. A este respecto, la Comisión toma nota con *interés* de que, a raíz de la adopción de la ley núm. 13, de 4 de septiembre de 2018, que enmienda las disposiciones de la ley núm. 21 de 2015 (que entró en vigor el 13 de diciembre de 2016), los trabajadores migrantes cubiertos por la Ley del Trabajo podrán salir del país temporalmente, o de manera definitiva durante la validez del contrato de trabajo, sin necesidad de obtener un visado de salida. La ley especifica que los empleadores podrán someter a la aprobación del MADLSA una lista de trabajadores respecto de los cuales sigue exigiéndose un visado de salida, con una justificación basada en la naturaleza de su trabajo. El número de trabajadores de este tipo por empresa no deberá exceder del 5 por ciento de su fuerza de trabajo (nuevo artículo 7). Sin embargo, la Comisión toma nota de que las disposiciones mencionadas anteriormente no se aplican a los trabajadores migrantes domésticos — ya que no están cubiertos por la Ley del Trabajo — e indica que las disposiciones que restringen el cambio de empleador siguen sin modificarse: o sea, sólo i) con la autorización del empleador, la autoridad

competente y el MADLSA antes de finalizar el contrato; ii) con la autorización de la autoridad competente y del MADLSA después de finalizar el contrato de duración limitada o después de cinco años de trabajo para el empleador en el marco de un contrato de duración indefinida (artículo 21), y iii) tras la aceptación del Ministro o de su representante, si existen pruebas de abuso por el empleador o en interés público, o sobre una base temporal si existen litigios pendientes entre el trabajador y el empleador (artículo 22). A este respecto, la Comisión toma nota de que la CSI señala que: i) en virtud del artículo 21 de la ley núm. 21 de 2015, sigue sin ser posible cambiar de empleador durante un contrato sin la autorización del empleador, y ii) en virtud del artículo 22, no están claros los fundamentos en que se puede apoyar el Ministerio para denegar el traslado de otro empleador, ni se establece el «abuso», y tampoco cuándo un traslado redundaría «en interés público». La CSI concluye que el empleador y el Gobierno siguen manteniendo un control considerable sobre el trabajador y tienen amplia discreción para determinar si éste puede, o no, cambiar de trabajo. Además, la CSI observa que no existen condiciones específicas relativas al traslado temporal a otro empleador (hasta un máximo de un año) que puedan estar autorizadas en virtud del artículo 23, en lo que respecta al contenido del nuevo empleo y a las condiciones de trabajo del mismo. Según la CSI, la prohibición de que los trabajadores entren durante cuatro años en el país, tras haber sido despedidos por motivos disciplinarios habiéndose cuestionado la decisión (artículo 26) parece especialmente severa, ya que se enfrentan a obstáculos considerables para acceder al sistema judicial, dado que presentar una queja a un tribunal competente resulta bastante difícil en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el MADLSA presta asistencia jurídica y apoyo a los trabajadores que son objeto de abusos, incluida la discriminación, a fin de hacer valer sus derechos en virtud de la Ley del Trabajo y de que puedan cambiar inmediatamente de empleador si lo desean. La Comisión toma nota asimismo de que, según la memoria del Gobierno, el MADLSA continúa llevando a cabo campañas de sensibilización acerca de los derechos de los trabajadores migrantes, a través de los diarios, la televisión y las redes sociales. Toma nota además de que el Ministerio debe aprobar los contratos de trabajo, y de que existe un sistema electrónico de contratos en línea en diez idiomas, a fin de que los trabajadores puedan leer el contrato en su propio idioma. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno al Consejo de Administración, se han adoptado medidas para mejorar el acceso de los trabajadores migrantes a la justicia, y también para luchar contra la violencia y crear alianzas de cooperación a nivel regional con miras a fortalecer los derechos de los trabajadores migrantes, en particular con la asistencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (véase el documento GB.331/INS/13 (Rev.), de 31 de octubre de 2017, anexo I, párrafo 17). La Comisión toma nota asimismo de que, en octubre de 2017, se celebraron 12 talleres para informar tanto a los trabajadores migrantes como a los empleadores de sus respectivos derechos y obligaciones de conformidad con la ley (véase el documento GB.331/INS/13 (Rev.), anexo 1, párrafo 9). ***Al tiempo que toma nota de que las considerables medidas adoptadas por el Gobierno con la supresión de los visados de salida para los trabajadores migrantes cubiertos por la Ley del Trabajo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que elimine las restricciones y obstáculos que les impiden cambiar de trabajo, dando un preaviso razonable; que reexamine la ley núm. 21 de 2015, a la luz de los comentarios anteriores, y que proporcione un marco jurídico claro para las condiciones de traslado a otro empleador, en particular sobre una base temporal, con la asistencia del programa de cooperación técnica de la OIT. Entretanto, la Comisión pide al Gobierno que otorgue asistencia a los trabajadores migrantes, en particular los trabajadores domésticos, con respecto al cambio de empleador cuando sean objeto de discriminación por los motivos enumerados en el Convenio. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación de la ley núm. 21 de 2015, en la práctica (número de solicitudes para cambiar de empleador y sus resultados).***

Protección de los trabajadores migrantes contra la discriminación. Evolución legislativa y medidas prácticas. Recordando que se excluye a los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo núm. 4 de 2014, la Comisión toma nota con **interés** de la adopción de la ley núm. 15, de 22 de agosto de 2017, relativa a los trabajadores domésticos, que es un paso importante al proporcionar protección a los trabajadores domésticos, en particular con respeto a los derechos y obligaciones de ambas partes, en lo que respecta a las horas de trabajo, los periodos de descanso, el pago de salarios, etc. La Comisión toma nota de que la ley no define ni prohíbe la discriminación contra los trabajadores domésticos sobre la base de los motivos enumerados en el Convenio (es decir, la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social). La Comisión también toma nota de que el artículo 17 de la ley núm. 15 de 2017, permite a un trabajador poner término a la relación de trabajo en los casos de «grave peligro que suponga una amenaza para la seguridad y salud, a condición de que el empleador fuera consciente del peligro pero no haya tratado de eliminarlo», sin que ello suponga la pérdida de una bonificación para el trabajador. La Comisión considera que tanto estas disposiciones como las disposiciones del artículo 7, 2) y 3) mencionadas anteriormente pueden estar concebidas para abordar las cuestiones de la violencia y el acoso, incluido el acoso sexual. Sin embargo, observa una vez más que siguen siendo demasiado generales y no definen explícitamente ni cubren todos los comportamientos que constituyen acoso, incluido el acoso sexual, en el empleo y la ocupación. Además, no prevén un procedimiento adecuado para poner fin a tales comportamientos, yendo más allá de la posibilidad de que el trabajador ponga fin a su contrato, y para investigar dichos comportamientos, ni tampoco prevén vías de recurso. La Comisión saluda, no obstante, la posibilidad de que los trabajadores domésticos y sus empleadores remitan sus conflictos relativos a la ley núm. 15 de 2017, o el contrato de trabajo al mecanismo de solución de conflictos recientemente establecido en el capítulo 11 *bis* de la Ley del Trabajo, enmendada por la ley núm. 13, de 16 de agosto de 2017, de conformidad con el artículo 18 de la ley núm. 15 de 2017. La Comisión toma nota, sin embargo, de que la ley núm. 15 de 2017, no contiene ninguna disposición relativa a la posibilidad de que los trabajadores domésticos cambien de empleador, y recuerda que esta posibilidad está regulada por los artículos 21 y 23 de la ley núm. 21 de 2015, que se aplican a los trabajadores migrantes, con la salvedad

de los trabajadores domésticos. La Comisión recuerda asimismo que la supresión del requisito de visado de salida en virtud de la ley núm. 13 de 2018, que enmienda la ley núm. 21 de 2015, no se aplica a los trabajadores domésticos, y que las reglas y procedimientos relativos a su salida del país se determinarán por decisión ministerial (nuevo artículo 7 de la ley núm. 21). La Comisión observa que, según la información estadística proporcionada por el Gobierno al Consejo de Administración en octubre de 2018 relativa a los «delitos cometidos contra las trabajadoras domésticas» para 2015-2016 (entre otros, 72 «agresiones físicas o verbales», nueve violaciones, 20 casos de acoso sexual y seis casos de «explotación sexual de la trabajadora»), estos delitos podrían no notificarse suficientemente.

A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar la ley núm. 15 de 2017, a fin de incluir disposiciones que definan y prohíban: i) la discriminación basada en por lo menos todos los motivos establecidos en el Convenio y en todos los aspectos del empleo, incluida la remuneración, y ii) todas las formas de acoso, en particular, tanto el acoso que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual en un ambiente hostil. Pide asimismo al Gobierno que vele por que los trabajadores domésticos conozcan los mecanismos de solución de conflictos y puedan acceder a ellos fácilmente, y que continúe adoptando medidas tales como campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación o de otra manera, a fin de promover los derechos de los trabajadores domésticos y de combatir las opiniones estereotipadas sobre los trabajadores domésticos y la infravaloración de su trabajo. La Comisión pide además al Gobierno que proporcione información sobre la posibilidad de que los trabajadores domésticos cambien de empleador en la práctica. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que suprima el requisito de los visados de salida en condiciones de igualdad con los trabajadores cubiertos por la Ley del Trabajo.

Artículo 2. Igualdad entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno, según indica en su memoria, ha elaborado planes estratégicos en su empeño por invertir de manera óptima en las capacidades de hombres y mujeres, y de que, a pesar de las tradiciones culturales y sociales que hacen esta tarea difícil, se han realizado progresos en lo que respecta a la participación de las mujeres en la educación, la formación y el mercado de trabajo. El Gobierno añade que también ha habido una evolución hacia una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo (un incremento del 58,7 por ciento en 2015). El porcentaje de mujeres que trabajan en relación con todas las mujeres en edad activa aumentó del 34,6 por ciento en 2012 al 36,1 por ciento en 2015, y el número de mujeres que recibieron formación se incrementó de 29 000 en 2012 a 69 000 en 2015, en particular en los ámbitos de la administración, la tecnología de la información, el petróleo y el gas, la minería, la seguridad, la protección y la artesanía. Sin embargo, el Gobierno indica que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se concentró en ámbitos tales como la educación, la ingeniería y la medicina. La Comisión recuerda que uno de los objetivos de Visión Qatar Nacional 2030 es aumentar y diversificar la participación de los qataríes en la fuerza de trabajo brindando más oportunidades y apoyo profesional a las mujeres qataríes, y que esta estrategia nacional afirma que «las mujeres asumirán una función importante en todas las esferas de la vida, especialmente mediante su participación en la toma de decisiones económicas y políticas». *Al tiempo que saluda el énfasis puesto en la educación y la formación de las mujeres en Visión Qatar Nacional 2030, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas proactivas y elimine los obstáculos, con miras a facilitar y aumentar la participación de las mujeres — qataríes y no qataríes — en el empleo y la ocupación, en particular medidas encaminadas a:*

- i) promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación, concretamente a través de la promoción de procesos de contratación neutros y de eliminación de obstáculos para acceder al equipo y a los recursos productivos, y*
- ii) luchar contra las opiniones estereotipadas sobre las aspiraciones y capacidades de las mujeres, su idoneidad para ciertos empleos o su interés o disponibilidad para los trabajos a tiempo completo.*

Con el fin de concebir medidas adecuadas, la Comisión invita al Gobierno a que contemple la posibilidad de llevar a cabo una evaluación y un análisis de la situación, bajo su control directo, en lo que respecta a la igualdad de género en materia de empleo, y a que fomente dicha evaluación y de dicho análisis en el sector privado. Pide asimismo al Gobierno que continúe proporcionando estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo, relativas a la participación de los hombres y las mujeres en las diversas ramas de actividad económica, tanto en el sector público como en el sector privado, así como estadísticas sobre la participación de las mujeres tanto qataríes como no qataríes en la educación y la formación profesional.

Aplicación y sensibilización. La Comisión acoge con agrado la información detallada suministrada por el Gobierno en su memoria sobre las actividades llevadas a cabo por los inspectores del trabajo. Toma nota asimismo de que uno de los cinco pilares del programa de cooperación técnica de la OIT hace referencia a la inspección del trabajo, y acoge con agrado la firma de un protocolo entre el MADLSA y la OIT, encaminado a prestar asistencia a los trabajadores que deseen presentar quejas, así como la organización (en octubre de 2018) por el MADLSA y la OIT de un taller orientado a los inspectores del trabajo y otros funcionarios gubernamentales encargados de las cuestiones de la igualdad y la no discriminación en materia de empleo y ocupación, incluida una sesión dedicada a la presentación de los requisitos del Convenio (véase el documento GB.334/INS/8, 24 de octubre de 2018, párrafo 21). *Al tiempo que pone de relieve la importante función que desempeñan los inspectores del trabajo en la lucha contra la discriminación, la Comisión pide al Gobierno que siga fortaleciendo las capacidades de los inspectores del trabajo y de otras autoridades responsables de hacer cumplir la ley para prevenir, identificar y afrontar los casos de discriminación, y para poner fin a las prácticas*

discriminatorias en materia de empleo y ocupación, y que organice campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación o de otra manera, acerca de la discriminación y la igualdad. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número y la naturaleza de las violaciones detectadas por los inspectores del trabajo, sobre las quejas examinadas por los tribunales relativas a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y sobre cualquier obstáculo al que se enfrentan los trabajadores al presentar quejas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Reino Unido

Gibraltar

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluar y abordar la brecha de remuneración por motivos de género. La Comisión toma nota de que, según el informe de la encuesta de empleo publicado en 2017 por el Departamento de Estadística, la brecha salarial por motivos de género continúa reduciéndose, pero sigue siendo significativa. Tomando como base los ingresos medios mensuales de los empleados a tiempo completo, la brecha salarial por razones de género se redujo, pasando de un 26 por ciento en 2013 a un 22,5 por ciento en 2017, y era mayor en el sector público que en el sector privado (28,9 por ciento y 25,1 por ciento, respectivamente, excepción hecha del Ministerio de Defensa). En cuanto a los ingresos medios semanales de los empleados a tiempo completo, la brecha también se redujo, pasando de un 32 por ciento en 2013 a un 29,5 por ciento en 2017. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el porcentaje de mujeres cuyos ingresos anuales se sitúan en los tres tramos más bajos (menos de 10 000 libras esterlinas) es de más del doble que el de hombres y, a la inversa, el porcentaje de hombres cuyos ingresos anuales se encuentran en los tres tramos más altos (más de 40 000 libras esterlinas) es de casi el doble que el de mujeres. Además, constata la persistente segregación profesional vertical y horizontal por motivos de género, ya que, según el informe de la encuesta de empleo, las mujeres siguen representando el 69 por ciento de la fuerza de trabajo administrativa y de secretaría, mientras que sólo ocupan el 29 por ciento de los puestos directivos y de funcionarios superiores a tiempo completo, en los que la brecha salarial por motivos de género es especialmente marcada (29,8 por ciento). La Comisión toma nota de que los ingresos mensuales de los hombres son más elevados que los de las mujeres en todas las categorías profesionales, excepto en las de operario de procesamiento, fabricación y maquinaria, en las que se emplea sólo a un 0,2 por ciento del número total de mujeres del territorio. Además, la Comisión toma nota de que los ingresos medios mensuales de los hombres son más elevados que los de las mujeres en casi todos los sectores (a excepción de dos sectores, que emplean a un número muy bajo de mujeres), y que la brecha salarial es particularmente grande en los sectores en los que más mujeres se emplea, como la intermediación financiera, donde la brecha de remuneración era del 45,3 por ciento en 2017, y la sanidad y la asistencia social, donde era del 33,3 por ciento. La Comisión constata que en marzo de 2017 se creó un grupo de trabajo para examinar la brecha salarial por motivos de género en el seno del Ministerio de Igualdad, a consecuencia de lo cual el Gobierno ha reconocido recientemente la existencia de una brecha. La Comisión toma nota de que, en septiembre y octubre de 2018, se organizó una sesión de formación dirigida a empleadores del sector privado acerca de «La diversidad y la inclusión de género» con el fin de analizar y estudiar las repercusiones de la parcialidad inconsciente en el lugar de trabajo y su impacto en las mujeres, y que el Gobierno inició un «Programa de tutorías para mujeres» para fomentar una mayor presencia de las mujeres en puestos directivos. **Teniendo en cuenta la considerable brecha salarial y la persistente segregación profesional vertical y horizontal por motivos de género, la Comisión espera que el Gobierno prosiga sus iniciativas para tomar medidas más proactivas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de sensibilizar, evaluar, promover y hacer efectiva la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Pide al Gobierno que comunique las medidas concretas que adopte para dar tratamiento a la brecha salarial por motivos de género, tanto en el sector privado como en el público, descubriendo y abordando las causas subyacentes de las diferencias de ingresos y promoviendo el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos en los que haya posibilidades de hacer carrera y la remuneración sea más elevada, en particular en el marco del Programa de tutorías para mujeres y de otras actividades que se realicen para estudiar la repercusión de la parcialidad inconsciente en el lugar de trabajo. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información estadística detallada sobre las remuneraciones de hombres y mujeres y acerca de la brecha de remuneración por motivos de género, en todos los sectores de la economía. Finalmente, la Comisión pide al Gobierno que evalúe regularmente la eficacia de las medidas tomadas para dar tratamiento a la brecha salarial de género.**

Legislación. La Comisión tomó nota con anterioridad de que en el artículo 31 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2006, se permite que hombres y mujeres presenten quejas sobre igualdad de remuneración a sus empleadores basándose en parámetros de referencia aplicados por el mismo empleador o por cualquier «empleador asociado» en Gibraltar, y recordó que la aplicación del principio consagrado en el Convenio permite una comparación mucho más amplia entre los empleos desempeñados por hombres y mujeres en distintos lugares o empresas, o entre distintos empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se compromete a examinar la posibilidad de realizar toda modificación necesaria del artículo 31 de la Ley de Igualdad de Oportunidades con estos fines.

Al tiempo que recuerda que es esencial ofrecer un amplio espectro de comparación para que se aplique el principio de igualdad de remuneración dada la persistencia de la segregación laboral por motivos de sexo en el territorio, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre toda revisión del artículo 31 de la Ley de Igualdad de Oportunidades que se inicie para asegurar que el ejercicio del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor no se limite al mismo empleador o a un empleador asociado. Mientras tanto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información concreta sobre la aplicación en la práctica del artículo 31 de dicha ley, incluyendo todas las decisiones administrativas o judiciales en materia de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Artículos 2 y 3. Aplicación del principio en el sector público. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se ha realizado una evaluación específica de los empleos en la administración pública en lo relativo al principio recogido en el Convenio. El Gobierno reitera que en el sector público las escalas salariales y las descripciones de los puestos de trabajo son específicas y se aplican independientemente del género y que, por consiguiente, respetan el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Al tiempo que constata que la brecha de remuneración por motivos de género más elevada se ha registrado en la administración pública (28,9 por ciento en 2017), la Comisión recuerda una vez más que, a pesar de la existencia de escalas salariales aplicables a todos los funcionarios públicos, sin discriminación por motivos de sexo, la discriminación salarial en el sector público puede surgir de los criterios que se siguen al clasificar los puestos de trabajo y de la infravaloración de las tareas realizadas sobre todo por mujeres, o de desigualdades en algunas prestaciones salariales complementarias (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 700-703). *Al tiempo que recuerda la obligación del Gobierno de garantizar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se aplique plenamente a sus propios empleados, la Comisión pide al Gobierno que comunique los criterios que se siguen para determinar la clasificación de los empleos y las escalas salariales que se aplican en la administración pública, y que explique de qué manera se garantiza que esos criterios no encierran prejuicios de género y que los hombres y las mujeres que trabajan en el sector público tienen acceso a todos los pagos adicionales en igualdad de condiciones. Habida cuenta de la notable brecha salarial por razones de género detectada en la administración pública, la Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre la distribución de hombres y mujeres en los diversos puestos y ocupaciones de la administración pública, para determinar dónde hay brechas salariales y tomar las medidas necesarias para eliminarlas. Asimismo, solicita al Gobierno que informe sobre toda medida adoptada para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de mayor rango y mejor pagados dentro de la administración pública, y sobre sus resultados.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rumania

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1973)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación basada en la religión. Acceso a la educación, la formación y el empleo. La Comisión toma nota de que, según se indica en el sitio web de la Comisión Europea, el 2 de diciembre de 2017, se presentó un proyecto de ley para enmendar la Ley de Educación rumana y, el 9 de enero de 2018, dicho proyecto recibió un dictamen positivo del Consejo Económico y Social. El proyecto de ley propone las siguientes adiciones al artículo 7 de la Ley de Educación: «con el fin de facilitar la identificación de las personas en las unidades educativas, en las instituciones y todos los espacios utilizados para la educación y la formación profesional, está prohibido cubrirse el rostro con cualquier material que dificulte el reconocimiento de la cara, salvo por razones médicas. La violación de estas disposiciones constituye un motivo para denegar el acceso al perímetro de las unidades educativas, las instituciones y los espacios de educación y formación profesional». La sanción, que se introduce con una enmienda al párrafo 1 del artículo 360 de la Ley de Educación, sería una multa que oscilaría entre 5 000 y 50 000 ron (aproximadamente entre 1 100 y 11 000 euros). La Comisión toma nota de que, de aprobarse, esta nueva disposición podría ser discriminatoria para las mujeres y niñas musulmanas que llevan un velo integral en lo que concierne a su acceso a las instituciones educativas o de formación y, por lo tanto, podría limitar sus posibilidades de encontrar y ejercer un empleo en el futuro por razones relacionadas con sus convicciones religiosas, lo que es contrario al Convenio. *Tomando nota de que esta disposición del proyecto de ley podría tener un efecto discriminatorio para las mujeres musulmanas que llevan un velo integral en cuanto a sus posibilidades de encontrar y ejercer un empleo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre: i) cómo se garantiza que esta disposición del proyecto de ley no tendrá como efecto reducir las oportunidades de las niñas y las mujeres de acceder a la educación y encontrar empleo en el futuro; ii) todo progreso del proyecto de ley en el trámite legislativo, y iii) le pide que suministre información sobre el número de niñas y mujeres que podrían verse afectadas por la aplicación de esta nueva disposición.*

Artículos 1, 2), y 4. Discriminación basada en motivos de opinión política. Requisitos inherentes del trabajo. Actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. Durante algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la limitación establecida en el artículo 54, j), de la ley núm. 188/1999, que dispone que «para ocupar cargos públicos, una persona deberá reunir las siguientes condiciones: [...] j) no deberá haber realizado

una actividad en la policía política, como define la ley», podría constituir un acto de discriminación basada en motivos de opinión política, debido a que se aplica en general a toda la administración pública, y no a funciones, tareas o trabajos específicos. En su memoria anterior, el Gobierno explicó que, con el fin de clarificar la normativa legal y eliminar toda posible discrepancia con el Convenio, propuso una enmienda al texto actual del artículo 54, j), de la ley núm. 188/1999, de la manera siguiente: «[...] no era un trabajador de la securitate, ni un colaborador de la misma, como dispone la legislación específica». Según el Gobierno la «legislación específica», se refiere al artículo 2 de la ordenanza núm. 24/2008, que define «empleado de la securitate» y «colaborador de la securitate». Si bien comprende la preocupación del Gobierno sobre el requisito de que todos los miembros de la unidad gubernamental sean leales al Estado, la Comisión señaló a la atención el hecho de que, para que tales medidas no se consideren discriminatorias, en virtud del artículo 4 del Convenio, en relación con las actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, deben afectar a un individuo en razón de las actividades que se sospecha o se ha demostrado con razón que se han llevado a cabo. Esas medidas pasan a ser discriminatorias cuando se adoptan simplemente por ser miembro de una comunidad o grupo concreto. Tienen que referirse a actividades que sean objetivamente perjudiciales para la seguridad del Estado, y el individuo de que se trata tendrá el derecho de recurrir a un tribunal competente, conforme a la práctica nacional (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 832-835). En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que especificara y definiera las funciones respecto de las cuales se aplicaría el artículo 54, j), de la ley núm. 188/1999, y que comunicara información sobre su aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información al respecto. Sin embargo, toma nota de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (*Naidin v. Rumania*, núm. 38162/07) sostuvo que la prohibición a un excolaborador de la policía política de un empleo en la administración pública, se justifica por la lealtad que se espera de todos los funcionarios públicos hacia el régimen democrático. En ese sentido, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 1, 2), del Convenio, la opinión política debe ser tenida en cuenta como requisito inherente de un puesto determinado que implique responsabilidades especiales, en relación con el desarrollo de una política gubernamental, que no es el caso del artículo 54, j), dado que éste se aplica a cualquier puesto de la administración pública estatal, cualquier sea el nivel de responsabilidad. Además, la Comisión recuerda que debe aplicarse el principio de proporcionalidad y que debería interpretarse de manera estricta a la excepción en virtud del artículo 4. **La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 54, j), de la ley núm. 188/1999 o que adopte cualquier otra medida para estipular y definir con claridad las funciones a las que se aplica este artículo. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del artículo 54, j), de la ley núm. 188/1999 en la práctica, incluyendo información sobre el número de personas despedidas o cuya solicitud haya sido rechazada con arreglo a este artículo, las razones de estas decisiones y las funciones correspondientes, así como información sobre el procedimiento de recurso de que disponen las personas afectadas y todo recurso presentado y sus resultados.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Federación de Rusia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajo de Rusia (KTR), recibidas el 31 de octubre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Definición de la discriminación. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la ley federal núm. 162-FZ, que enmienda el artículo 3 del Código del Trabajo (prohibición de la discriminación por motivos enumerados) a fin de eliminar el adjetivo «político» antes de la palabra «convicciones» (creencias), y añadiendo «pertenencia a otros grupos sociales». Asimismo, pidió al Gobierno que aclarara si el término general «convicciones» abarca también la «opinión política» a que se refiere el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no dice nada al respecto. Además, toma nota de que el artículo 3 del Código del Trabajo sólo prohíbe la discriminación directa, mientras que los artículos 64 y 132 prohíben la discriminación directa o indirecta en relación con la conclusión de acuerdos laborales y la fijación de salarios, respectivamente. A este respecto, la Comisión recuerda que el concepto de discriminación *indirecta* es indispensable para identificar y resolver situaciones en las que se conceda determinado trato a todos por igual, pero que ello produzca resultados discriminatorios para un grupo particular protegido en virtud del Convenio. Tal discriminación es más sutil y menos visible, por lo que resulta aún más importante garantizar que exista un sistema claro para combatirla y exige medidas proactivas para eliminarlas. Además, la Comisión subraya que la intención de discriminar no es un elemento de la definición del Convenio, el cual abarca toda forma de discriminación, independientemente de la intención de quien cometa el acto discriminatorio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 744-747). **Tomando nota de que, ante la ausencia de información sobre el impacto de las enmiendas al artículo 3 del Código del Trabajo, continua sin estar claro si el término «convicciones» abarca la «opinión política», la Comisión solicita una vez más al Gobierno que aclare si el término «convicciones» (creencias) también abarca la «opinión política» como figura en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información específica sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección contra la discriminación directa e indirecta. En**

caso de que no se disponga de información sobre las decisiones judiciales pertinentes, la Comisión pide al Gobierno que considere la posibilidad de enmendar la legislación para prohibir explícitamente la discriminación indirecta e incluir disposiciones encaminadas a eliminarla. Asimismo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre el acceso a recursos efectivos y que refuerce o establezca mecanismos para la promoción, el análisis y la supervisión de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación para todos los grupos abarcados por el Convenio.

Artículo 1, párrafo 1, a). Discriminación basada en motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que tomó nota de que el artículo 133 del Código Penal sobre «obligación de realizar acciones sexuales», no comprende el amplio espectro de conductas que constituye el acoso sexual en el empleo y la ocupación, especialmente la creación de un entorno laboral hostil. Tomando nota una vez más de que la memoria del Gobierno guarda silencio en este punto, la Comisión recuerda que la legislación penal no basta para abordar efectivamente el acoso sexual en el empleo y la ocupación. Como destacaba la Comisión, en el párrafo 792 de su Estudio General de 2012, tratar el acoso sexual sólo a través de procedimientos penales no es suficiente, debido a la sensibilidad de la cuestión, la dificultad de la prueba, en particular si no hay testigos, y el hecho de que la ley penal se focaliza generalmente en la violación o en los «actos inmorales», y no en el amplio espectro de conductas que constituyen acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión considera igualmente que la legislación que sólo ofrece a las víctimas de acoso sexual la posibilidad de renunciar a su empleo como forma de reparación, al tiempo que se mantiene el derecho de indemnización, no brindan una protección suficiente a las víctimas de acoso sexual, ya que, en los hechos, sancionan a las víctimas y podrían disuadirlas de buscar una reparación. La Comisión recuerda, asimismo, su observación general de 2002, en la que resaltaba la importancia de la adopción de medidas efectivas para impedir y prohibir, tanto el acoso sexual *quid pro quo* (toda conducta física, verbal o no verbal, de naturaleza sexual y otras conductas basadas en motivos de sexo que afectan a la dignidad de las mujeres y de los hombres, y que son indeseables, irracionales y ofensivas para el destinatario; y el rechazo o la sumisión de una persona cuando esa conducta se utiliza, de manera explícita o implícita, como base para una decisión que afecta a la de esa persona) como el entorno de trabajo hostil (conducta que genera un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el destinatario). ***En consecuencia, recordando que el acoso sexual menoscaba la igualdad en el trabajo, al atentar contra la integridad, la dignidad y el bienestar de los trabajadores, y con el fin de garantizar una protección efectiva de los trabajadores contra el acoso sexual, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte medidas para incluir, en su legislación civil o laboral, una clara definición y prohibición, tanto del acoso sexual «quid pro quo», como del acoso sexual resultante de un entorno de trabajo hostil en el empleo y la ocupación. También solicita una vez más al Gobierno que adopte medidas activas para prevenir y abordar en la práctica el acoso sexual en el empleo y la ocupación, y para sensibilizar a los empleadores, trabajadores y sus organizaciones sobre esta cuestión. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.***

Prohibición de la discriminación en los anuncios de vacantes. La Comisión recuerda que la ley federal núm. 162-FZ, de 2 de julio de 2013, enmienda la Ley Federal núm. 1032-I sobre el Empleo y otros Actos Legislativos, modificando el artículo 25 para prohibir de manera explícita, la difusión de anuncios de vacantes que contengan restricciones o que establezcan preferencias basadas en motivos de sexo, raza, color, nacionalidad, idioma, origen, propiedad, familia, situación social y laboral, edad, lugar de residencia, actitud hacia la religión, convicciones, afiliación o no afiliación a asociaciones voluntarias o grupos sociales, así como cualquier otro factor no relacionado con las calificaciones de los trabajadores, excepto en los casos en los que leyes específicas establezcan estas restricciones o preferencias. El Código de Delitos Administrativos también fue enmendado en consecuencia para introducir una definición de discriminación y para contemplar multas, en caso de vacantes laborales discriminatorias. La Comisión toma nota de las observaciones de la KTR, en las que alega que, a pesar de la adopción de la ley federal núm. 162-FZ, de 2 de julio de 2013, siguen publicándose anuncios de vacantes que contienen motivos discriminatorios de selección, y que, en la práctica, muchos empleadores y agencias de contratación que dejaron de publicar puestos de trabajos discriminatorios, aún aplican criterios discriminatorios en la fase de contratación. ***Tomando nota de que el Gobierno no comunicó información ni formuló comentarios sobre este punto, la Comisión solicita al Gobierno que transmita su respuesta a las observaciones de la KTR. Además, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que especifique las disposiciones legales a que se refiere el artículo 25 de la Ley sobre Empleo, en su forma enmendada, y que transmita las decisiones administrativas o judiciales pertinentes para aclarar los casos en los que no se aplica la prohibición de discriminación en la contratación, y los motivos conexos.***

Artículos 1 y 5. Discriminación basada en motivos de sexo. Medidas especiales de protección. Desde 2002, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que revisara el artículo 253 del Código del Trabajo (prohibición del trabajo de las mujeres en labores arduas y que se realicen en condiciones perjudiciales o peligrosas) y la resolución núm. 162, de 25 de febrero de 2000, que excluye a las mujeres de un empleo en 456 ocupaciones y 38 ramas de industria. Recuerda que el Código del Trabajo (artículos 99, 113, 259, 298, etc.), contiene disposiciones específicas respecto de las mujeres que tienen hijos menores de 3 años de edad (o 1 año y medio) especialmente respecto del tiempo de trabajo (horas extraordinarias, trabajo nocturno, trabajo por turnos, etc.). En 2014, el Gobierno indicó que decidió enmendar la resolución núm. 162 y que están en curso trabajos para introducir un sistema general de gestión de riesgos laborales, en colaboración con los interlocutores sociales en cada lugar de trabajo. La Comisión toma nota de las observaciones de la KTR, según las cuales, en 2017, tras la recomendación del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Tribunal Supremo sostuvo que el caso de una mujer a la que se había denegado un trabajo como oficial de navegación, debería ser reexaminado a nivel de distrito. Sin embargo, la KTR observa que la cuestión sigue sin resolverse, dado que está aún en vigor la lista de las ocupaciones e industrias prohibidas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual considerará la posibilidad de enmendar el artículo 298 del Código del Trabajo, para permitir que las mujeres con hijos menores de 3 años de edad trabajen en turnos rotatorios, supeditado a su consentimiento por escrito. Sin embargo, la Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno reitera su declaración anterior de que no considera que las demás disposiciones mencionadas equivalgan a la discriminación, puesto que simplemente reflejan la especial preocupación del Estado por las personas que necesitan una mayor protección social y legal. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones finales, de 16 de octubre de 2017, del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), según las cuales hay una discusión en curso para revisar la lista contenida en la resolución núm. 162, de 25 de febrero de 2000 (documento E/C.12/RUS/CO/6, párrafo 28). En ese sentido, la Comisión recuerda que con el tiempo se ha producido un cambio importante de un enfoque puramente protector sobre el empleo de las mujeres a otro basado en la promoción de una genuina igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de leyes y prácticas discriminatorias. La Comisión recuerda que en su Estudio General de 2012 (párrafos 838 a 840), destaca la distinción que ha de hacerse entre las medidas especiales de protección de la maternidad (en sentido estricto), que entran en el ámbito de aplicación del artículo 5 del Convenio, y las medidas basadas en percepciones estereotipadas de las capacidades de las mujeres y del papel que les corresponde en la sociedad, lo que es contrario al principio de igualdad de oportunidades y de trato. Las disposiciones vinculadas con la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían dirigirse a la protección de la salud y la seguridad, tanto de hombres como de mujeres, en el trabajo, al tiempo que se tienen en cuenta las diferencias de género respecto de los riesgos específicos para su salud. Además, con miras a derogar las medidas de protección discriminatorias aplicables al empleo de las mujeres, tal vez sea necesario examinar qué otras medidas, como por ejemplo una protección de la salud mejorada, tanto para los hombres como para las mujeres, una seguridad y un transporte adecuados, así como servicios sociales, serían necesarios para garantizar que las mujeres puedan acceder a ese tipo de empleos en pie de igualdad con los hombres. **En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para revisar la resolución núm. 162 y el Código del Trabajo, especialmente el artículo 253, para garantizar que las restricciones que se aplican a las mujeres se limiten estrictamente a aquellas cuyo objetivo es la protección de la maternidad, en sentido estricto, y aquellas que brindan condiciones especiales a las embarazadas y a las madres en periodos de lactancia y que no obstaculicen el acceso de las mujeres al empleo y a su remuneración en base a estereotipos de género. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información completa sobre todo progreso realizado en este sentido, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.**

Control y aplicación. La Comisión con anterioridad acogió con beneplácito los crecientes esfuerzos realizados por la inspección del trabajo para fortalecer la supervisión y el control del cumplimiento de la legislación laboral relacionada con la protección de las mujeres (embarazadas, mujeres con hijos pequeños y mujeres de las zonas rurales) y de las personas con responsabilidades familiares. Sin embargo, recordando que las denuncias de discriminación sólo son tratadas por los tribunales y no por la inspección del trabajo, también tomó nota de la insuficiente información existente sobre las denuncias de discriminación, o relacionadas con la discriminación, en el empleo y la ocupación que se presentaron a los tribunales. Por consiguiente, solicitó al Gobierno que comunicara información sobre el número y el contenido de los casos relativos a la discriminación.

La Comisión toma nota de los alegatos de la KTR, según los cuales la prohibición de discriminación contenida en la legislación no es efectiva, debido a que la inspección del trabajo no tiene el derecho de emprender ninguna acción contra el empleador y la presentación de una denuncia ante los tribunales no da lugar a ninguna protección o restauración efectiva de los derechos de un trabajador. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la inspección del trabajo brinda asesoramiento y asistencia a los trabajadores que apelan a los tribunales para cuestiones de discriminación. También acoge con beneplácito la adopción de la ley federal núm. 272-FZ, que enmienda algunas disposiciones legislativas de la Federación de Rusia, de cara a una mayor responsabilidad de los empleadores por infracciones a la legislación. La Comisión acoge con beneplácito la indicación del Gobierno de que la ley federal núm. 272-FZ, enmienda el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, para permitir que los ciudadanos instituyan procedimientos legales para la restauración de sus derechos laborales en los tribunales más cercanos del lugar de residencia del demandante. Sin embargo, la Comisión **lamenta** tomar nota de la continua falta de información proporcionada por el Gobierno en relación con el número y de los resultados de los casos tramitados en los tribunales, dificultando la evaluación de si los mecanismos de denuncia vigentes son accesibles en la práctica y permite que los trabajadores hagan valer de manera efectiva su derecho a la no discriminación y a la igualdad, en virtud del Código del Trabajo. Recuerda que el hecho de que no se hayan presentado quejas o reclamaciones o que su número sea muy reducido, permite indicar la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, la falta de confianza en los procedimientos, falta de acceso efectivo a éstos, o el temor a represalias. El hecho de que no haya quejas también puede indicar que el sistema de registro de violaciones es deficiente. Además, la Comisión subraya que la tramitación judicial de las quejas individuales presentadas ante los tribunales ordinarios, incluidas las decisiones sobre las reparaciones y las sanciones apropiadas, sigue siendo una de las características comunes en la aplicación de todas las disposiciones relativas a la no discriminación y a la igualdad de remuneración. Es importante la función que incumbe a los tribunales de sentar jurisprudencia, promoviendo el principio del Convenio, y estableciendo recursos que incluyan órdenes para la

indemnización y el reintegro (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 870 y 883). **En consecuencia, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que comunique información sobre el número y el contenido de los casos relativos a la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación que se presentan ante los tribunales, en virtud del Código del Trabajo, y sobre los resultados de esos casos, así como el impacto que tiene limitar los recursos que pueden presentarse para obtener una reparación exclusivamente ante los tribunales. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte medidas para fortalecer o establecer mecanismos que analicen y supervisen la igualdad de oportunidades y de trato (o de no discriminación) para todos los grupos comprendidos en el Convenio, y que comunique información a este respecto. Además, se pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier actividad emprendida para: i) sensibilizar sobre la legislación pertinente en materia de no discriminación, aumentar la capacidad de las autoridades competentes, incluidos los jueces, los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, para identificar y abordar los casos de discriminación, y ii) promover la comprensión pública de la legislación pertinente, por ejemplo mediante campañas en los medios de comunicación o cursos de formación impartidos a los interlocutores sociales.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rwanda

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso del Trabajo y de la Fraternidad de Rwanda (COTRAF-RWANDA) recibidas el 24 de junio de 2018. **La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.**

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1, b), y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que la definición de la expresión «trabajo de igual valor» que figura en el artículo 1.9 de la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo sólo se refiere a los «trabajos similares» y que, por lo tanto, es demasiado restrictiva para dar plena aplicación al principio establecido en el Convenio. Asimismo, indicó que esta ley no contiene ninguna disposición sustantiva que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que la Constitución sólo se refiere al «derecho a recibir el mismo salario por un trabajo igual». La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue repitiendo que, en la práctica, no existe discriminación alguna entre hombres y mujeres con respecto a la remuneración, y que se dará plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en el proceso de revisión en curso de la ley núm. 13/2009. El Gobierno también indica que esta revisión abarcará las diferencias lingüísticas entre las versiones del artículo 12 en inglés y en kinyarwanda. La Comisión se refiere una vez más a los párrafos 672 a 679 del Estudio General sobre los convenios fundamentales de 2012, en los que se explica el significado del concepto de «trabajo de igual valor», que cubre no sólo las nociones de trabajo «igual», «idéntico» o «similar», sino que también contempla las situaciones en que hombres y mujeres realizan trabajos diferentes pero que, sin embargo, son de igual valor. **Al tiempo que constata que desde hace un cierto número de años no se han realizado progresos a este respecto, la Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo incluyendo los artículos 1.9 y 12 de la ley a fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión **lamenta** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno señala que no ha habido avances en la modificación del artículo 3, párrafo 1, de la Ley de 1994 sobre Igualdad de Remuneración que establece que a igual trabajo igual salario, lo cual no está en conformidad con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para modificar sin demora el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre Igualdad de Remuneración para que la legislación establezca la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como exige el Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre los avances en la materia.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santa Lucía

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión recuerda que la Ley sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Empleo y la Ocupación, de 2000, no contiene una definición del término «remuneración». La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 6, de 2011, de enmienda del Código del Trabajo, que modifica el artículo 95 del Código del Trabajo, de 2006, a fin de incluir la definición de «remuneración total» por la que se entienden «todos los salarios básicos pagados al trabajador o que éste tiene derecho a recibir por parte de su empleador o empleadora por trabajos realizados o servicios prestados al empleador durante el período de su empleo». La Comisión toma nota de que el artículo 2 del Código del Trabajo, continúa excluyendo de la definición de salarios el pago de horas extraordinarias, comisiones, gastos de servicios, alojamiento, vacaciones pagadas y otras asignaciones. La Comisión recuerda que el Convenio establece una definición muy amplia del término «remuneración» en el *artículo 1, a)*, que comprende no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de éste último» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 686). **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 95 del Código del Trabajo, para garantizar que al menos a los efectos de la aplicación del principio del Convenio, el concepto de remuneración comprenda no solamente el sueldo básico sino también cualquier prestación o asignación adicional derivadas del empleo del trabajador.**

Salarios y prestaciones diferentes para hombres y mujeres. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de lo previamente anunciado por el Gobierno a este respecto, la ley núm. 6, de 2011, de enmienda al Código del Trabajo, no deroga las leyes y reglamentos vigentes que establecen tasas salariales diferentes para hombres y mujeres ni revoca la Ley sobre Contratos de Trabajo, que prevé diferentes edades para hombres y mujeres respecto al derecho de indemnización por despido. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas sin demora para garantizar que todas las leyes y reglamentos que establecen salarios diferentes para hombres y mujeres, así como también la Ley sobre Contratos de Trabajo que prevé edades diferentes para hombres y mujeres respecto del derecho a indemnización por cese, sean derogadas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolución a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Senegal

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)

Artículo 1 del Convenio. Legislación. Protección de los trabajadores contra la discriminación. En su comentario anterior, la Comisión destacaba que la Constitución (artículo 25) y el Código del Trabajo (artículos L.1 y L.29) no abarcan el conjunto de motivos de discriminación prohibidos por el Convenio, puesto que omiten la ascendencia nacional y el color, que no se refieren expresamente al origen social y que no permiten garantizar una protección contra la discriminación en todas las etapas del empleo y la ocupación. Pidió al Gobierno que se asegurase de que en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo se defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta basada, al menos, en los motivos enumerados en el *artículo 1, 1), a)*, del Convenio, y que estén comprendidas todas las etapas del empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que en el nuevo proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo se indica claramente que «por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o preferencia basada, entre otros motivos, en la raza, el color, el sexo, la participación en actividades sindicales, la pertenencia a una religión, hermandad o secta, la opinión política, la ascendencia nacional, la etnia, el origen social, la discapacidad, el embarazo, la situación familiar, el estado de salud, el estado serológico o la apariencia física, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. La discriminación, sea directa o indirecta, es una práctica que está prohibida en todas sus formas». Asimismo, el Gobierno señala que han concluido las fases de tramitación y de consulta con los interlocutores sociales y que ahora le corresponde a la autoridad legislativa aprobar este proyecto de ley. **Al tiempo que saluda esta información, la Comisión espera que el proyecto de ley que modifica las disposiciones del Código del Trabajo relativas a la discriminación se apruebe en un futuro cercano y pide al Gobierno que aporte información sobre el progreso de la labor legislativa a este respecto.**

Artículos 1, 1), a), y 2. Discriminación basada en el sexo e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno confirma su voluntad de proseguir sus esfuerzos por mejorar la situación de las mujeres en el empleo y la ocupación, pero constata que la memoria no contiene información al respecto. La Comisión observa que, según la Encuesta nacional sobre el empleo en el Senegal (segundo trimestre de 2017), realizada por la Agencia Nacional de Estadística y Demografía, el 39,7 por ciento de la población en activo tenía un empleo remunerado (no obstante, mientras un 46,6 por ciento de los hombres que trabajan tenían un empleo remunerado, sólo un 30,5 por ciento de las mujeres que trabajan tenían un empleo remunerado), y el desempleo afectaba a más mujeres (17,8 por ciento) que a hombres (8,1 por ciento). Al tiempo que recuerda que las mujeres son mayoría en los trabajos con salarios bajos, que el hecho de disponer de un sistema nacional uniforme de salarios mínimos contribuye a aumentar los

ingresos de los trabajadores peor remunerados, y que éste repercute en la relación entre los salarios de los hombres y los de las mujeres, así como en la reducción de la brecha de remuneración por motivos de género, la Comisión saluda que el 1.º de junio de 2018 se aumentase el salario mínimo en un 44,8 por ciento, a raíz de un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Además, la Comisión toma nota de que se ha adoptado una nueva Estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género para 2016-2026. Dicha estrategia tiene por objeto: mejorar el entorno sociocultural, político y económico cambiando las perspectivas sobre las relaciones de género; dar efecto a las disposiciones legislativas y reglamentarias favorables a la igualdad y la equidad mediante la revisión y la armonización de las leyes en línea con los convenios internacionales, y a través de la adopción de medidas jurídicas complementarias para que desaparezcan las prácticas discriminatorias; y garantizar que los hombres y las mujeres se beneficien de las mismas condiciones y oportunidades económicas gracias, en particular, al acceso de las mujeres a los factores de producción y los recursos financieros, al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las mujeres, y a la reducción de la carga de labores domésticas de las mujeres. La Comisión toma nota de que, en el plano institucional, la secretaría general que se ha creado en los ministerios por decreto núm. 2017-313, de 15 de febrero de 2017, comprende en particular órganos y estructuras responsables del género y la equidad, y que los ministerios deben establecer una «célula de género», en el marco de la Estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas encargado de la cuestión de la discriminación contra las mujeres, en la legislación y en la práctica, sobre su misión en el Senegal (adición: comentarios del Estado relativos a la visita del Grupo de Trabajo al Senegal, que tuvo lugar del 7 al 17 de abril de 2015), el Gobierno indica que se creó un comité técnico de revisión de las disposiciones legislativas y reglamentarias discriminatorias para las mujeres, bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, en virtud de la orden núm. 00936, de 27 de enero de 2016 (documento A/HRC/32/44/Add.3, de 13 junio de 2016, párrafos 18 a 22). ***Al tiempo que saluda toda esta información, que demuestra la firme voluntad de combatir la discriminación contra las mujeres y de promover una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, en particular en lo relativo al acceso y la permanencia en la escuela, la Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre las medidas concretas adoptadas para poner en práctica la Estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género y sobre sus resultados, especialmente en materia de desarrollo de la orientación y la formación profesionales de las mujeres en oficios y ámbitos que tradicionalmente están reservados a los hombres, con el fin de reducir la segregación profesional, luchar contra los estereotipos de género y mejorar el acceso de las mujeres a la tierra, los créditos y los equipamientos. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las recomendaciones formuladas por el comité técnico con vistas a modificar las disposiciones legislativas y reglamentarias discriminatorias para las mujeres, y sobre toda labor legislativa o reglamentaria que se emprenda en este sentido.***

Organismo especializado. La Comisión toma nota de que, según el informe del Grupo de Trabajo mencionado, el Ministerio de Trabajo ha elaborado un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y que llevaría a la creación en el seno de dicho Ministerio de un observatorio de la discriminación encargado de promover y coordinar las políticas y los programas de lucha contra la discriminación en el trabajo, así como un anteproyecto de decreto que fija las reglas de organización y funcionamiento de este observatorio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se ha concluido la elaboración del proyecto de decreto y que los interlocutores sociales lo han dado por bueno, en el marco del Consejo consultivo nacional del trabajo. Constata que este texto aún no se ha aprobado y que su adopción deberá someterse a la modificación prevista en el Código del Trabajo a este respecto. ***La Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y por el que se crea el observatorio nacional encargado de promover y coordinar las políticas y los programas de lucha contra la discriminación en el trabajo, así como del proyecto de decreto que fija las reglas de organización y funcionamiento de este organismo. Se solicita al Gobierno que transmita una copia de ambos textos.***

Sri Lanka

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión expresó anteriormente su preocupación por la ausencia de legislación que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y por las limitaciones a las que se ve sujeto el principio de igualdad de remuneración por el «mismo» o «sustancialmente el mismo» trabajo, que se derivan de las ordenanzas y de los convenios colectivos sobre los salarios. La Comisión toma nota de la declaración reiterada del Gobierno en su memoria de que, a pesar de que no existe ninguna disposición legislativa que prohíba explícitamente la discriminación en el empleo, las ordenanzas y los convenios colectivos sobre salarios no contienen disposiciones discriminatorias para la determinación de los salarios. Al tiempo de que toma nota de que el marco normativo y Plan nacional de acción para acabar con la violencia sexual o de género para 2016-2020, elaborados con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenían el objetivo de garantizar la igualdad de remuneración por «un trabajo similar», la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre el hecho de que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor que va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza

absolutamente diferente y, sin embargo, de igual valor. La Comisión reitera que cuando los convenios colectivos o las ordenanzas salariales no establezcan explícitamente tasas de remuneración distintas para hombres y mujeres o cuando sólo prohíban en general la discriminación salarial por motivos de sexo, esto no suele ser suficiente para dar cumplimiento al Convenio, habida cuenta de que no refleja el concepto de «trabajo de igual valor» establecido en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 676). ***Lamentando que a diferencia del anterior Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos, el nuevo Plan de acción de los derechos humanos para 2017-2021 ya no incluye como objetivo explícito «un salario igual por un trabajo de igual valor», la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y a que suministre información sobre todas las medidas concretas adoptadas a este respecto.***

Artículos 1 y 2. Evaluación de la brecha salarial por motivos de género. Constatando que el Gobierno menciona únicamente la información estadística presentada, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que la información suministrada no permite a la Comisión evaluar la aplicación del principio del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que, en 2017, las mujeres representaban únicamente el 37,3 por ciento de la población económicamente activa (en contraposición a un 62,7 por ciento en el caso de los hombres) y de que, a pesar del ritmo sostenido de crecimiento económico, la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo baja con un 36 por ciento en 2017 (frente a un 41 por ciento en 2010), con más de un tercio de las trabajadoras ocupadas en la economía informal, caracterizada por salarios bajos. La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que, según la «Encuesta sobre horas verificadas de trabajo y promedios salariales», publicada por la División de Estadística del Departamento de Trabajo en 2016, los ingresos promedio de las mujeres son inferiores a los de los hombres en casi todos los sectores económicos, incluso cuando los trabajadores y las trabajadoras pertenecen a la misma categoría profesional. La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones finales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que la participación de las mujeres en el mercado laboral sea reducida y las mujeres suelen estar empleadas en puestos con baja remuneración en plantaciones de té y en el sector textil. El Comité recomendó al Gobierno que luche de forma eficaz contra las barreras socioculturales que menoscaban las oportunidades laborales de las mujeres, en particular en los sectores con salarios elevados (documento E/C.12/LKA/CO/5, 4 de agosto de 2017, párrafos 25 y 26). La Comisión toma nota también de que, en sus conclusiones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por la gran desigualdad salarial por razones de género, el escaso nivel de aplicación y vigilancia del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y la concentración de mujeres en el sector del empleo informal (documento CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 de marzo de 2017, párrafo 32). ***Teniendo en cuenta la gran disparidad salarial por razón de género y la persistente segregación de las mujeres en el mercado de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para adoptar medidas más proactivas, incluidas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a fin de sensibilizar, realizar evaluaciones, promover y hacer cumplir la aplicación del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en los términos consagrados en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas específicas adoptadas para poner fin a la brecha de remuneración por motivos de género, determinando y abordando las causas subyacentes de las diferencias salariales como la segregación vertical y horizontal en el empleo y los estereotipos de género, que engloban tanto la economía formal como la informal, y promoviendo el acceso de las mujeres a una amplia gama de puestos de trabajo con perspectivas profesionales y salarios más elevados. Reiterando que la recopilación, análisis y difusión de información es importante para detectar y combatir la desigualdad en la remuneración, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre el nivel promedio de ingresos de hombres y mujeres, desglosado por actividad económica y ocupación, tanto en el sector público como en el privado, y en la economía informal.***

Artículo 2. Salarios mínimos. Juntas salariales. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, según la declaración del Gobierno, ha dejado de utilizarse una terminología específica para cada sexo en las decisiones relativas a las juntas salariales. En relación con la petición anterior del Gobierno de recabar la asistencia técnica de la OIT para la simplificación del sistema de juntas salariales, la Comisión toma nota de que esta solicitud ha dejado de ser pertinente en vista de la adopción futura de la ley sobre el empleo único, que reemplazará a la ordenanza sobre juntas salariales, la Ley de Empleados de Comercios y Oficinas, la Ley de Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños y a la Ordenanza sobre Prestaciones por Maternidad, sin perjuicio de los derechos laborales garantizados por la legislación laboral vigente. La Comisión saluda la adopción de la Ley Nacional sobre el Salario Mínimo núm. 3 de 2016, que establece un salario mínimo nacional, pero toma nota de que, en sus observaciones finales, el CESCR manifestó su preocupación por el hecho de que la ley no cubre a los trabajadores de la economía informal, a los que no están afiliados a ningún sindicato y a los que perciben un salario diario (por ejemplo, los trabajadores de las plantaciones y los trabajadores domésticos) (documento E/C.12/LKA/CO/5, de 4 de agosto de 2017, párrafo 31). ***Reiterando que la fijación de salarios mínimos puede representar una contribución decisiva para la aplicación del principio del Convenio, destinado a todos los trabajadores y a todos los sectores, tanto de la economía formal como de la informal, y observando que según el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos 2017-2021, el Gobierno considerará la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), la Comisión pide al Gobierno que señale cómo se garantiza la observancia del principio de igualdad de remuneración entre hombres y***

mujeres por un trabajo de igual valor a los trabajadores que no están cubiertos por la Ley Nacional sobre el Salario Mínimo, en particular a los trabajadores de la economía informal, a los que no están afiliados a ningún sindicato, a los que perciben un salario diario por su trabajo en las plantaciones, así como a los trabajadores domésticos, sectores todos ellos caracterizados por un elevado porcentaje de mujeres y especialmente de salarios bajos. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados para simplificar el sistema de juntas salariales y sobre las medidas adoptadas para garantizar que los salarios fijados por las juntas salariales se basan en criterios objetivos exentos de sesgo de género (como las calificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo) con el fin de que el trabajo predominantemente realizado por mujeres, así como las competencias consideradas «femeninas» (tales como por ejemplo la destreza manual y las que se requieren para ejercer profesiones relativas a los cuidados) no se minusvaloren ni siquiera sean pasadas por alto, en comparación con el trabajo realizado predominantemente por hombres ni con las competencias consideradas tradicionalmente como «masculinas» (como levantar cargas pesadas).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Protección legislativa contra la discriminación. Desde hace varios años, la Comisión ha venido instando al Gobierno a introducir en su legislación nacional disposiciones para asegurar que todos los hombres y las mujeres sean protegidos contra la discriminación que abarquen todos los aspectos del empleo y la ocupación y con todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión llamó anteriormente la atención del Gobierno sobre el hecho de que los artículos 12, 14 y 17 de la Constitución, que tratan sobre la discriminación, sólo parezcan cubrir a los ciudadanos del país y no prohíban la discriminación basada en motivos de color o de ascendencia nacional. La Comisión saluda la declaración del Gobierno en su memoria, de que debatirá sobre esta cuestión con todas las partes interesadas a fin de explorar la posibilidad de modificar la legislación laboral vigente o de adoptar una nueva legislación para acabar con la discriminación en el empleo. La Comisión toma nota de que el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021 establece, entre sus objetivos explícitos, la promulgación de leyes que garanticen el derecho a la protección contra la discriminación sobre la base de cualquiera de los motivos prohibidos, incluidos el sexo, la raza, el origen étnico, la religión, la casta, el lugar de origen, la identidad de género, la discapacidad o cualquier otra condición civil en todos los lugares de trabajo, incluido en el sector privado. No obstante, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que el plan de acción no se refiere a los motivos de «color», «opinión política», «ascendencia nacional» y «origen social», enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, varios órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) manifestaron también su preocupación por el hecho de que la legislación nacional no prohíba la discriminación sobre la base de motivos de color u origen nacional, y no prohíba específicamente las formas directas ni indirectas de discriminación (documentos E/C.12/LKA/CO/5, de 4 de agosto de 2017, párrafo 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, de 3 de marzo de 2017, párrafo 10; CMW/C/LKA/CO/2, de 11 de octubre de 2016, párrafo 26; y CERD/C/LKA/CO/10-17, de 6 de octubre de 2016, párrafo 8). La Comisión reitera, a este respecto, que disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que ésta puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). **La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para introducir en su legislación nacional, disposiciones contra la discriminación directa e indirecta, a efectos de garantizar que todos los hombres y mujeres, ciudadanos y no ciudadanos, estén efectivamente protegidos de la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación sobre la base de todos los motivos comprendidos en el Convenio, incluidos el color y la ascendencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de los casos de discriminación en el empleo sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Supremo en virtud de los artículos 12, 1), y 17 de la Constitución, así como sobre sus resultados, y que envíe copias de todas las decisiones judiciales relevantes al respecto.**

Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. Al tiempo que saludó el Código de Conducta y Directrices para impedir y contrarrestar el acoso sexual en los lugares de trabajo, elaborado en 2013 por la Federación de Empleadores de Ceilán, en colaboración con la OIT, la Comisión planteó preocupaciones en sus comentarios anteriores relativas a la ausencia de protección efectiva de los trabajadores contra el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los artículos 11 y 12 de la Constitución sobre protección contra la tortura y derecho a la igualdad, respectivamente, pueden servir como fundamento jurídico para amparar a las víctimas de acoso sexual y que los tribunales han considerado las peticiones de favores sexuales para promoción laboral como «soborno», un delito que puede ser castigado en virtud de la Ley contra el Soborno, 1980. Al tiempo que toma nota de que estas disposiciones generales no mencionan explícitamente «el acoso sexual», la Comisión toma nota de que el Gobierno vuelve a referirse al artículo 345 del Código Penal en relación con el acoso sexual, sin

proporcionar la información solicitada con el fin de aclarar el ámbito de aplicación de dicho artículo en relación con la interpretación de la expresión «por una persona autorizada». La Comisión saluda la inclusión en el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021 de una propuesta de ley que trata específicamente del acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. La Comisión también saluda la inclusión de las medidas adoptadas con el fin de garantizar que los empleadores tanto en el sector público como en el privado introducen directrices obligatorias y nombrarán comités para hacer frente al acoso sexual en consulta con los sindicatos y las organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de que el marco de políticas y el Plan nacional de acción para poner fin a la violencia de carácter sexual y basada en el género para 2016-2020, desarrollada con la asistencia del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que destaca que las mujeres que trabajan en las zonas francas de exportación (ZFE) se ven particularmente expuestas a acoso sexual, establece también un modelo de promoción de la política para poner fin al acoso sexual en el lugar de trabajo y aplicar mecanismos para acabar con este problema en el sector privado. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el CEDAW manifestó su preocupación por el elevado nivel de casos de violencia contra las mujeres por motivos de género, de los cuales muy pocos habían sido denunciados debido a la falta de legislación adecuada, al limitado acceso de las mujeres a la justicia por motivos entre los que cabe citar el miedo a represalias, una confianza limitada en la policía y el sistema judicial, rechazos extremos en la investigación y la adjudicación de estos casos, resultados arbitrarios y tasas de condena muy reducidas. El CEDAW expresó también su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y sobre las medidas adoptadas para corregir estos casos (documento CEDAW/C/LKA/CO8, de 3 de marzo de 2017, párrafos 22 y 32). ***En lo que se refiere al Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021, la Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incluir las disposiciones legislativas específicas en las que se determinan y prohíben claramente todos los tipos de acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto los que se basan en contraprestaciones (quid pro quo) como en un entorno hostil, y pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que señale si el artículo 345 del Código Penal se aplica únicamente al acoso sexual cometido por una persona con autoridad o también por un compañero de trabajo o un cliente o un proveedor de la empresa. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todas las medidas adoptadas para garantizar que los empleadores de los sectores público y privado introduzcan directrices obligatorias y nombren comités para hacer frente al acoso sexual, en consulta con los sindicatos y las organizaciones de empleadores, incluidos en el marco del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021 y el Plan nacional de acción para poner fin a la violencia de carácter sexual y basada en el género para 2016-2020. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para promover el acceso de las mujeres a la justicia, incluso velando por que conozcan mejor sus derechos y los procedimientos jurídicos a su alcance, así como el número de quejas presentadas en materia de acoso sexual, las sanciones impuestas y las compensaciones otorgadas, en particular en el contexto de un despido injustificado.***

Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de ley sobre los derechos de las mujeres fue rebautizado con el nombre de proyecto de ley de la comisión de las mujeres, que la redacción del texto se elaboró en 2017 y que se está esperando el refrendo del Fiscal General sobre su constitucionalidad. La Comisión toma nota de la Ley sobre las Elecciones de las Autoridades Locales (enmienda) núm. 1, de 2016, que prevé una cuota de un 25 por ciento para las mujeres en los organismos públicos municipales, pero observa que, en sus observaciones finales, el CESCRL señaló que, no obstante, esta nueva legislación, la participación de las mujeres en la vida política y pública y en la toma de decisiones sigue siendo muy escasa (documento E/C.12/LKA/CO/5, de 4 de agosto de 2017, párrafo 23). La Comisión toma nota de que, en 2017, las mujeres representaban solamente el 37,3 por ciento de la población económicamente activa del país (en contraposición a un 62,7 por ciento de los hombres) y que, a pesar del crecimiento económico constante, la tasa de empleo de las mujeres sigue estando a un reducido porcentaje del 36 por ciento (mientras que en 2010 fue del 41 por ciento). La Comisión toma nota de que, según la encuesta anual de empleo de 2016, al mismo tiempo existe segregación profesional vertical y horizontal puesto que las mujeres se concentran en la agricultura, la manufactura y la educación, así como en ocupaciones básicas (28,5 por ciento) y tareas de secretaría (13 por ciento), mientras que sólo unas pocas mujeres ocupan puestos como directoras o funcionarias superiores (3,3 por ciento) o en profesiones técnicas y afines (4,5 por ciento). La Comisión toma nota, en particular, de que en sus observaciones finales el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas (CMW) destacó que las mujeres en Sri Lanka siguen viéndose obligadas a convertirse en trabajadoras domésticas migratorias ya que no tienen igual acceso al empleo (documento CMW/C/LKA/CO/2, de 11 de octubre de 2016, párrafo 52). La Comisión saluda las medidas incluidas en el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021, que tiene la finalidad de aumentar la participación de las mujeres en el empleo tanto en los sectores público como el privado, incluida la formación de las mujeres en profesiones que requieren competencias más elevadas en sectores de la economía formal y no tradicional, así como de cerrar la brecha salarial de género en el empleo formal mediante instalaciones dedicadas a los cuidados, el fomento de mecanismos laborales flexibles y la promoción de las funciones y responsabilidades que atañen a los hombres en el cuidado de los niños y las responsabilidades familiares. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todas las normas y medidas que se adopten en el marco del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los***

derechos humanos en 2017-2021 o de cualquier otra manera, para impulsar el acceso de las mujeres al empleo y a una gama más amplia de trabajos y puestos de mayor nivel, en particular mediante medidas destinadas a combatir los estereotipos en relación con las capacidades de las mujeres y sus funciones en la sociedad, y para conciliar mejor el empleo y las responsabilidades familiares. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la situación en que se encuentra la adopción del proyecto de ley sobre la comisión de las mujeres, así como una copia de la nueva legislación cuando haya sido adoptada. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la participación de hombres y mujeres en la educación, la formación y el empleo, tanto en el sector público como en el privado, incluida la economía informal, desglosados por categorías y puestos profesionales, así como el número de mujeres en Sri Lanka empleadas como trabajadoras domésticas migrantes (incluyendo trabajadoras domésticas migrantes).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tayikistán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que la memoria del Gobierno una vez más no contiene información en respuesta a algunos de sus comentarios anteriores. La Comisión desea reiterar que, sin la información necesaria, no se encuentra en condiciones de evaluar la efectiva aplicación del Convenio, incluido todo progreso realizado desde su ratificación. ***La Comisión espera que la próxima memoria contenga información completa sobre las cuestiones descritas a continuación.***

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial de género. Sector privado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la persistencia, tanto de la brecha salarial de género como de la segregación ocupacional por motivos de género. También tomó nota de que aún se paga a los trabajadores agrícolas el salario más bajo de la economía (367,59 somoni de Tayikistán (TJS) para los hombres y 211,34 TJS para las mujeres, aproximadamente 39 y 22 dólares de los Estados Unidos, respectivamente) y que las mujeres se concentran en la economía informal y en los trabajos de baja remuneración. En consecuencia, la Comisión solicitó que el Gobierno redoblara sus esfuerzos para abordar la brecha salarial de género, en particular en el sector agrícola, y que comunicara información sobre las medidas adoptadas a este respecto. También solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres a una amplia gama de oportunidades de trabajo en todos los niveles, para abordar la segregación ocupacional por motivos de género. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual se adoptó una estrategia nacional para reforzar el papel de las mujeres y las niñas, 2011-2020, y un programa estatal sobre educación, selección y nombramiento de puestos directivos en la República de Tayikistán, de entre las mujeres y las niñas capacitadas 2007-2016. Con respecto al hecho de que los trabajadores que ocupan los puestos con más baja remuneración se encuentran en el sector agrícola, el Gobierno indica que los sindicatos tienen la intención de formular propuestas para enmendar el acuerdo general para el periodo 2018-2020. El Gobierno también indica, en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) que, como consecuencia del programa estatal, en 2017, se proporcionó un empleo a 1 002 mujeres con necesidad de una protección social especial, y recibieron asistencia económica 528 iniciativas empresariales de mujeres. Además, la Comisión toma nota, del sexto informe periódico del Gobierno presentado en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), del establecimiento de subvenciones presidenciales para apoyar y desarrollar las actividades empresariales de las mujeres, en 2016-2020, del Plan de acción de la estrategia nacional sobre la promoción del papel de las mujeres, 2015-2020, y de la Estrategia de desarrollo nacional de la República de Tayikistán, para el periodo que va hasta 2030, que incluye una sección especial que aborda los problemas existentes de desigualdad y de discriminación, en particular en el caso de las mujeres de las zonas rurales, y las maneras de resolverlos (documento CEDAW/C/TJK/6, 2 de noviembre de 2017, párrafo 136). ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas en el marco de las mencionadas políticas para mejorar el acceso de las mujeres, especialmente de las zonas rurales, a las oportunidades de empleo en todos los niveles, incluso como directores de explotaciones agrícolas, y sobre el impacto de esas medidas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para abordar la brecha salarial de género, especialmente en el sector agrícola, y que comunique información sobre las medidas adoptadas en este sentido y sobre los resultados obtenidos en cuanto al logro de la igualdad de remuneración. Por último, tomando nota de la ausencia de información comunicada en este sentido, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique estadísticas detalladas y actualizadas sobre los salarios de mujeres y hombres, incluyendo datos desagregados por sexo, por industria y por categoría ocupacional.***

Administración pública. En ausencia de toda información comunicada en este sentido, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique de qué manera garantiza en la práctica la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en la administración pública, y que transmita información estadística desagregada por sexo, en cuanto a la distribución de hombres y mujeres en las diversas ocupaciones y grados de la administración pública, y sus correspondientes ingresos.

Artículo 2. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que aclarara si el artículo 102 del Código del Trabajo y el artículo 13 de la ley marco sobre las garantías estatales en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres e igualdad de oportunidades en el ejercicio de dichos derechos, núm. 89, de 1.º de marzo de 2005, prevén la igualdad de remuneración por un «trabajo de igual valor» o un «trabajo igual». La Comisión toma debida nota de que la redacción del artículo 140 del nuevo Código del Trabajo, de 2017, y del artículo 13 de la ley marco de 2005, garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Sin embargo, tomando nota de que una vez más la memoria no dice nada respecto de la aplicación de estas disposiciones en la práctica, la Comisión destaca que la continua persistencia de diferencias salariales por motivos de género requiere que los gobiernos, junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adopten medidas para sensibilizar, evaluar, promover y hacer efectiva la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 669). **En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre la aplicación práctica del artículo 140 del Código del Trabajo de 2017, y del artículo 13 de la ley marco núm. 89, de 1.º de marzo de 2005.**

Artículo 3. Determinación de los salarios. La Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción del decreto gubernamental núm. 98, de 5 de marzo de 2008, para aprobar el concepto de las reformas salariales en la República de Tayikistán, que dispone, entre otras cosas, los mecanismos de regulación estatal de la determinación salarial. En este contexto, solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para garantizar que se tuviera en cuenta el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunicó ninguna información en este sentido. **Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que se esté teniendo en cuenta el principio de igualdad de remuneración entre hombre y mujeres por un trabajo de igual valor, en el contexto de la regulación estatal de la determinación salarial.**

Artículo 4. Convenios colectivos. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que transmitiera ejemplos de convenios colectivos que comprendieran a los diferentes sectores, para indicar de qué manera estos convenios promueven el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, y que indicara el porcentaje de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual existen 20 comités sindicales sectoriales que abarcan a todos los sectores del empleo. El Gobierno también indica que los comités sindicales trabajan con los empleadores en relación con los acuerdos salariales básicos y con los convenios colectivos. Al tiempo que toma debida nota de la información comunicada, la Comisión señala que el Gobierno no indica de qué manera los convenios colectivos promueven el principio del Convenio. **Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita ejemplos de convenios colectivos que abarquen a diferentes sectores y que indique de qué manera esos convenios promueven el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. También pide al Gobierno de indicar el porcentaje de los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos, desagregado por sexo.**

Control y aplicación. La Comisión tomó nota con anterioridad de que se estableció, en el Ministerio de Trabajo y Protección Social y en la Inspección del Trabajo del Estado, un Consejo de Coordinación sobre Cuestiones de Género, para controlar la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral, y solicitó al Gobierno que comunicara información sobre sus actividades relativas a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión también solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los casos de violaciones del principio de igualdad de remuneración tratados por la inspección del trabajo o los tribunales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se registraron quejas en cuanto a la remuneración. **La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre las actividades del Consejo de Coordinación sobre Cuestiones de Género para controlar la discriminación basada en motivos de sexo en cuanto a la remuneración. Con respecto a la falta de quejas, la Comisión remite al Gobierno a sus comentarios en relación con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los tribunales y la inspección del trabajo apliquen el principio del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre el número de violaciones del artículo 140 del Código del Trabajo que tratan el Ministerio de Trabajo y Protección Social y la Inspección del Trabajo del Estado, y que indique si los tribunales trataron algunos casos relativos al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.**

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

Artículo 2 del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Cambios legislativos. Tras tomar nota de que la Ley sobre las Garantías Estatales en materia de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres e Igualdad de Oportunidades en el Ejercicio de dichos Derechos (Ley Marco núm. 89, de 1.º de marzo de 2005, sobre las Garantías, de 2005) contiene varias disposiciones en las que se prohíbe la discriminación por motivos de género en cualquier esfera, también en el empleo, y se fomenta el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiese información sobre su aplicación práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que quedó aprobado, por el decreto gubernamental núm. 608, de diciembre de 2006, el reglamento al Comité estatal para asuntos de la mujer y la familia (CWFA), que es la autoridad central responsable de la

aplicación de la política estatal que establece y protege los derechos e intereses de las mujeres y las familias. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no aporta información sobre las actividades de dicho comité con vistas a aplicar la Ley sobre las Garantías, de 2005. Además, toma nota de que el Gobierno tampoco proporciona información sobre la manera en que se está respondiendo a las infracciones a dicha ley. En este sentido, la Comisión destaca que las medidas legislativas para dar cumplimiento a los principios recogidos en el Convenio son importantes, pero no bastan para lograr el objetivo de éste y que, para afrontar de forma eficaz los complejos contextos y las múltiples formas en que se produce la discriminación, es necesario adoptar medidas diferenciadas, como las medidas proactivas para abordar las causas subyacentes de la discriminación y las desigualdades *de facto* que se derivan de prácticas discriminatorias profundamente ancladas en la tradición y los valores sociales (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 856). **Por lo tanto, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que aporte información sobre la aplicación práctica de la Ley sobre las Garantías, de 2005 (por ejemplo, la elaboración de repertorios de recomendaciones, herramientas y guías o la adopción de medidas en forma de acciones positivas), incluyendo información sobre la forma en que el comité estatal para asuntos de la mujer y la familia, la inspección del trabajo o los tribunales abordan las violaciones de sus disposiciones.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluar y abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, con arreglo a las estadísticas proporcionadas por el Gobierno sobre los ingresos mensuales medios según el sexo y el grupo profesional, en 2012 la brecha de remuneración entre hombres y mujeres era de entre un 10 por ciento (para los técnicos y los profesionales de nivel medio) y un 41,8 por ciento (para los trabajadores de los servicios y los vendedores). Las estadísticas sobre los ingresos mensuales medios según el sexo y el sector también ponen de relieve la brecha salarial a favor de los hombres que oscilaba (excepto en la construcción) entre un 1,7 por ciento en el transporte, el almacenamiento y la industria de la comunicación y un 50 por ciento en la industria azucarera en 2010. La Comisión acoge con agrado el aumento del salario mínimo nacional que se produjo en enero de 2011, y recuerda que generalmente las mujeres predominan en los empleos de bajos salarios y de que un sistema de salarios mínimos nacional uniforme contribuye a aumentar los ingresos de los peor remunerados, éste influirá en la relación salarial entre hombres y mujeres y en la disminución de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 682-685). **Tomando nota de que en su memoria el Gobierno se compromete a abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres y la segregación ocupacional por motivo de género, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas que se han tomado y sobre los progresos realizados a este respecto. Sírvase continuar transmitiendo información estadística detallada sobre la remuneración de hombres y mujeres según los grupos profesionales y sectores, así como información sobre el salario mínimo.**

Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que la Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2000, no contiene disposiciones específicas sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Gobierno indica que, al dar efecto a la ley, los tribunales tratarán la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor como discriminación basada en el sexo. Asimismo, indica que la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades reconoce que el concepto de «trabajo de igual valor» es un elemento esencial del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad. Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno, la Comisión quiere recordar que prohibir únicamente la discriminación salarial basada en el sexo normalmente no resulta suficiente para aplicar de manera efectiva el principio del Convenio, ya que no se tiene en cuenta el concepto de «trabajo de igual valor». **La Comisión insta de nuevo al Gobierno a tomar medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y le pide que transmita información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.**

Convenios colectivos. Desde 2000, la Comisión ha pedido al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados para suprimir las cláusulas discriminatorias en materia de género de los convenios colectivos. La Comisión toma nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Sin embargo, la Comisión *lamenta* tomar nota de que en el nuevo convenio colectivo para 2011-2013 sobre salarios y condiciones de servicio de los empleados de la Corporación de Puerto España cuyas tasas salariales son horarias, diarias o semanales sigue utilizándose una terminología específica para cada sexo para las categorías de trabajadores que no son neutras en materia de género (por ejemplo, engrasador (*greaseman*), conductor de carretilla (*batteryman*), vigilante (*watchman*), encargado de mantenimiento (*handyman*), limpiadora (*charwoman*), recolectora de desechos (*female scavenger*), obrera (*labourer female*), obrero (*labourer male*), etc.). La Comisión quiere recordar que, al definir las diversas profesiones y empleos a efectos de la determinación de los salarios mínimos, se debería utilizar una terminología sin connotaciones de género para evitar los estereotipos relativos al desempeño por hombres o por mujeres de determinados trabajos (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafo 683). **La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se garantiza que, al determinar las tasas salariales en los convenios colectivos, los interlocutores sociales tienen efectivamente en cuenta y aplican el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que el trabajo de las mujeres no se infravalora en comparación con el de los hombres que aunque sea diferente y requiera otras capacidades globalmente tiene el mismo valor. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en cuanto a eliminar las cláusulas discriminatorias en materia de género de los convenios colectivos, y que adopte medidas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para promover el uso de una terminología sin connotaciones de género al mencionar los diversos trabajos y profesiones en los convenios colectivos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Durante casi veinte años la Comisión ha expresado su preocupación acerca del carácter discriminatorio de diversas disposiciones que prevén que se pueda poner fin al contrato de una funcionaria casada si sus obligaciones familiares afectan al desempeño eficaz de sus funciones. A este respecto, la Comisión acoge con agrado el hecho de que el Gobierno indique que la regla 57 del Reglamento de la Comisión de la Administración Pública fue revocada en 1998 y la regla 58 del Reglamento de la Comisión del Servicio Estatutario de las Autoridades fue revocada en 2006. Asimismo, el Gobierno indica que la regla 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía, que establece que designación de las mujeres policías casadas puede darse por terminada aduciendo que sus obligaciones familiares están afectando al desempeño eficaz de sus funciones, se presentará a la Comisión del Servicio de Policía para su examen. La Comisión también recuerda el impacto potencialmente discriminatorio del artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública, que requiere que una funcionaria que contraiga matrimonio lo notifique a la Comisión de la Función Pública. *La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revocar la regla 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía a fin de eliminar esta disposición discriminatoria de larga data, y que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública a fin de eliminar todo impacto potencialmente discriminatorio, por ejemplo al exigir la notificación del cambio de nombre de los hombres y las mujeres.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ucrania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial entre hombres y mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la brecha salarial entre hombres y mujeres no había disminuido desde 2009, y de que en ciertos sectores de la economía existía una diferencia considerable en los salarios mensuales de las mujeres y los hombres. El Gobierno explicó que las diferencias salariales obedecían en gran medida al sistema de división del trabajo en función del género, y que las mujeres se concentraban en sectores en los que los requisitos educativos eran relativamente elevados, pero los salarios más bajos, fundamentalmente en el sector público. El Gobierno indicó asimismo que el Programa estatal para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres, 2013-2016, incluía actividades encaminadas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la Comisión pidió al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y que proporcionara información sobre las actividades realizadas a este respecto en el marco del Programa estatal para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres, 2013-2016. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 25,4 por ciento en 2016, y del 21,6 por ciento en el primer trimestre de 2017. Toma nota además de que, según la información proporcionada por el Gobierno, esta brecha sigue siendo particularmente destacada en ciertos sectores de la economía, como el deporte, el esparcimiento y el ocio (el 35, 8 por ciento), los servicios postales y de mensajería (el 39,4 por ciento) y los servicios financieros y de seguros (el 39,2 por ciento). El Gobierno señala que las diferencias salariales obedecen al porcentaje más elevado de hombres en cargos directivos mejor remunerados, así como en el trabajo nocturno y en los empleos en los que las condiciones de trabajo son arduas y peligrosas, que ofrecen unos salarios más altos y que están prohibidos para las mujeres por ley. En lo tocante a la prohibición de los trabajos peligrosos para las mujeres, la Comisión se remite a sus comentarios detallados en virtud del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y en lo referente a la prohibición de ciertos tipos de trabajo para las mujeres con hijos, se remite a sus comentarios detallados en virtud del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión toma nota además de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre el impacto de las actividades realizadas en el marco del Programa estatal para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres, 2013-2016. Sin embargo, toma nota de la adopción de un nuevo Programa para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres de aquí a 2021. *Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para reducir las disparidades salariales entre hombres y mujeres, en particular determinando y afrontando sus causas subyacentes, y que suministre información sobre cualquier actividad realizada en el marco del Programa para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres de aquí a 2021 y los resultados logrados. Le pide asimismo que siga proporcionando datos estadísticos sobre los sueldos y los niveles salariales de hombres y mujeres, por sector de empleo y ocupación, y en los diversos grados y niveles del servicio civil, así como por grupo profesional.*

Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Legislación. Durante varios años, la Comisión ha realizado comentarios sobre el artículo 17 de la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres (2006), que requiere que el empleador garantice la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo que conlleve igualdad de calificaciones y de condiciones de trabajo, que es más restrictivo que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor establecido en el Convenio. Además, al vincular el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres con dos factores de comparación específicos (las calificaciones y las condiciones de trabajo), la Comisión recordó que el artículo 17 puede tener el efecto de desalentar o incluso de excluir la evaluación objetiva de los puestos de trabajo sobre la base de un conjunto más amplio de criterios, que son fundamentales para eliminar efectivamente la infravaloración discriminatoria de los empleos tradicionalmente desempeñados por mujeres. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no indica nada sobre este punto. Sin embargo, recuerda la reforma de la legislación laboral en curso y toma nota de la versión más reciente del proyecto de código del trabajo, disponible en el sitio web del Parlamento y de fecha 24 de julio de 2017. Toma nota de que el artículo 2, 1), del proyecto de código del trabajo prevé que uno de los principales principios de la regulación jurídica de las relaciones de trabajo es «garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor». Señala asimismo que el artículo 20, 1), del proyecto de código del trabajo establece, como uno de los principales derechos de los trabajadores, «la remuneración por un trabajo de igual valor». ***Al tiempo que saluda la introducción del concepto de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en el proyecto de código del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a fin de enmendar el artículo 17 de la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres, con miras a dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y señale todo progreso realizado a este respecto. Le pide asimismo que suministre información sobre la adopción del proyecto de código del trabajo, y a que comunique una copia de la ley una vez adoptada. Al tiempo que toma nota de que la memoria del Gobierno no menciona nada sobre el tema, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación y el cumplimiento del artículo 17 actual de la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres, en particular sobre el número de casos pertinentes presentados ante las autoridades competentes y sobre los resultados de dichos casos.***

Artículo 3. Evaluación objetiva de los puestos de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que seguía sin estar claro si los métodos utilizados para evaluar el trabajo realizado en los diferentes empleos y ocupaciones eran apropiados para determinar las tasas de remuneración sin sesgo de género. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en virtud del artículo 8 de la Ley de Salarios (1995), enmendada en 2014, el Gabinete de Ministros determina las condiciones y los niveles de remuneración de los trabajadores de las instituciones y organizaciones financiadas por el Estado. El Gobierno señala asimismo que el artículo 15 de la Ley de Remuneración prevé que, en el sector privado, las empresas pueden establecer de manera independiente las condiciones y niveles de remuneración de sus trabajadores, pero deben cumplir las disposiciones legales y regirse por los convenios colectivos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la Ley de Salarios no indica la manera en que el Gabinete de Ministros o las empresas del sector privado evalúan el trabajo realizado, ni si los mecanismos de determinación de los salarios se basan en criterios objetivos sin sesgo de género. La Comisión se siente obligada a recordar, una vez más, que si bien el Convenio no prescribe un método específico para medir y comparar el valor relativo de diferentes puestos de trabajo, con independencia de los métodos utilizados, debe actuarse con particular cautela para que no se apoyen en prejuicios de género. La Comisión se remite a los párrafos 695-703 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, para más orientación sobre la evaluación objetiva de los puestos de trabajo. ***A la luz de la persistente brecha salarial y de la segregación horizontal y vertical de los trabajadores por motivo de género reconocida por el Gobierno, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas específicas para promover la utilización de métodos de evaluación objetiva de los puestos de trabajo sin prejuicios de género en los sectores público y privado, con miras a asegurar el establecimiento de escalas salariales y de remuneración con arreglo al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y a que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión alienta al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT en relación con esto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uruguay

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1989)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Brecha salarial y legislación. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, hizo referencia, una vez más, a la ausencia en la legislación nacional de una definición de los términos «remuneración» y «trabajo de igual valor», al tiempo que tomó nota de la persistente brecha salarial por motivos de género, así como de la segregación ocupacional existente entre hombres y mujeres. La Comisión subrayó que dar plena eficacia legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es de particular importancia para lograr la aplicación del Convenio y, por lo tanto, pidió al Gobierno que tomara medidas concretas con miras a dar plena expresión legislativa al principio del Convenio y definir el término «remuneración» en la

legislación a fin de reflejar la definición del Convenio. También pidió al Gobierno que tomara medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, incluso abordando la cuestión de la segregación ocupacional entre hombres y mujeres y la promoción de las mujeres en mejores empleos, en el marco de los planes de igualdad de oportunidades que se adoptaran. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el ordenamiento jurídico carece de definiciones esenciales, tales como la de «remuneración», a raíz del hecho de que no existe un cuerpo sistemático de normas laborales. Sin embargo, el Gobierno señala que no se ha manifestado, hasta el momento, la necesidad de que existan tales definiciones. La Comisión toma nota también de que el Gobierno se refiere al estudio «Desigualdades persistentes: Mercado de trabajo, calificación y género», realizado en 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual, ni la mayor participación laboral de las mujeres ni su mayor calificación han logrado reducir las brechas salariales. El estudio indica que los factores que contribuyen a la brecha salarial entre los trabajadores y las trabajadoras incluyen la segregación horizontal en la educación, que retroalimentaría la gama de sectores y actividades en que se ubican las trabajadoras; las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a los puestos de trabajo de mayor jerarquía, y las responsabilidades de cuidado, que hacen que durante su ciclo de vida las mujeres destinen menos horas que los hombres al trabajo remunerado. La Comisión toma nota de que, según se desprende del estudio, la mayor brecha salarial se encuentra entre los asalariados con nivel terciario, que presentan una proporción significativamente mayor de mujeres que de hombres (63,4 por ciento). Entre los auxiliares contables y financieros, por ejemplo, la brecha salarial es del 30 por ciento; entre los médicos profesionales y afines es del 20 por ciento, y entre los especialistas en ciencias sociales y humanas es del 32 por ciento. El estudio también señala que en las dos primeras ocupaciones femeninas, es decir la enseñanza primaria y preescolar, y el trabajo en las oficinas, la brecha salarial es casi del 13 por ciento. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que, con el fin de eliminar las brechas salariales de género, se continúan realizando campañas de sensibilización encaminadas a transformar los patrones culturales vigentes. Asimismo, se impulsó el desarrollo del sistema integral de cuidados, respecto del cual la Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión toma nota además de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 que incluye, entre las varias acciones previstas hacia 2030: i) promover la aplicación del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; ii) eliminar la segregación educativa y promover el acceso de las mujeres a áreas vinculadas a las ciencias, y iii) disminuir la segregación ocupacional horizontal y vertical en los sectores públicos y privados. La Comisión toma nota igualmente con *interés* de que la Ley núm. 19580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, de 22 de diciembre de 2017, al reconocer la «disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer» como una forma de violencia laboral hacia las mujeres (artículo 6), prevé que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y todo otro órgano y organismo vinculado a las políticas laborales y de seguridad social, deberá promover medidas que garanticen el ejercicio del «derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor», sin discriminación (artículo 23). Sin embargo, la ley no define el concepto de «trabajo de igual valor», ni el de «remuneración». La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» incluye, pero va más allá de, la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor, y subraya la importancia de un marco legislativo claro para asegurar la aplicación del Convenio en la práctica. ***En estas condiciones, recordando la importancia de garantizar que hombres y mujeres tengan una base legal para afirmar su derecho a la igualdad de remuneración frente a sus empleadores y ante las autoridades competentes, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que considere dar plena eficacia legislativa al principio del Convenio e incorporar en la legislación una definición del término «remuneración», de acuerdo al artículo 1, a), del Convenio, y que informe sobre toda evolución al respecto. La Comisión pide también al Gobierno que continúe proporcionando información sobre toda medida adoptada con miras a reducir las brechas salariales entre trabajadoras y trabajadores, incluyendo las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 y de la Ley núm. 19580 sobre Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, incluida toda medida adoptada con el fin de abordar la segregación educativa y ocupacional entre hombres y mujeres, y los resultados logrados. Tomando nota de que el Gobierno indica que la mayor brecha salarial se encuentra entre los asalariados con nivel terciario, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las razones por las cuales la brecha salarial es mayor en los trabajos de nivel alto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uzbekistán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, sobre el supuesto incumplimiento por el Gobierno del principio del Convenio. ***La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.***

Artículo 1 del Convenio. Marco legislativo. La Comisión recuerda que durante varios años se ha estado refiriendo a la necesidad de enmendar el Código del Trabajo, de 21 de diciembre de 1995, que prohíbe la discriminación basada en el

sexo en lo que respecta a la remuneración pero no refleja plenamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, según lo dispuesto en el Convenio. Había tomado nota de que el Gobierno estaba adoptando medidas para mejorar el proyecto de ley sobre «garantías de derechos y oportunidades iguales para hombres y mujeres» a fin de prevenir la discriminación contra las mujeres. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la Cámara de Comercio e Industria examinó y propuso enmiendas al proyecto de ley sobre igualdad de derechos y oportunidades (hombres y mujeres). Sin embargo, también toma nota de que, según las observaciones de la UITA, aunque el proyecto de ley se presentó por primera vez al Parlamento en 2004 aún no ha sido adoptado. Además, la Comisión *lamenta* tomar nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información sobre sus planes de poner el Código del Trabajo en conformidad con el Convenio. La Comisión hace de nuevo hincapié en que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad. Este concepto permite un amplio ámbito de comparación que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «mismo» o «similar» y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que, sin embargo, son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). ***Recordando que las disposiciones más restrictivas que el principio establecido en el Convenio obstaculizan el progreso hacia la erradicación de la discriminación en materia de remuneración por motivos de género, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, asegurando que la disposición incluya no sólo el trabajo igual y el trabajo realizado en condiciones de igualdad sino también el trabajo de naturaleza absolutamente distinta y, no obstante, de igual valor, y le pide que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, alegando que el Gobierno incumple el Convenio. ***La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.***

La Comisión *lamenta* tomar nota de que, una vez más, el informe del Gobierno no contiene información en respuesta a varias de sus solicitudes anteriores. La Comisión subraya que, sin la información necesaria, no puede evaluar la aplicación efectiva del Convenio, incluidos todo progreso realizado desde su ratificación. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que vele por que el próximo informe contenga información completa sobre los aspectos planteados a continuación.***

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación por motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión toma nota de que una vez más el Gobierno no proporcionó información en respuesta a su solicitud de información sobre las actividades de sensibilización y sobre las medidas adoptadas para prohibir el acoso sexual en la legislación pertinente. La Comisión recuerda que el acoso sexual es una grave manifestación de discriminación por motivo de sexo y una violación de los derechos humanos, y que debe abordarse en el contexto del Convenio. Dada la gravedad y las graves repercusiones del acoso sexual, la Comisión desea destacar la importancia de adoptar medidas eficaces para prevenir y prohibir el acoso sexual en el empleo y la ocupación. Tales medidas deben abordar tanto el acoso sexual *quid pro quo* como en un entorno de trabajo hostil. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas para incluir en la legislación disposiciones que definan y prohíban tanto el acoso sexual en un entorno hostil como el quid pro quo. Recordando que ha venido planteando esta cuestión desde 2005, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que identifique toda medida práctica que haya adoptado para sensibilizar y abordar la cuestión del acoso sexual en el empleo y la ocupación y cualquier colaboración relacionada con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.***

Trabajadores con responsabilidades familiares. Desde hace varios años, la Comisión ha pedido al Gobierno que modifique los artículos del capítulo IV del Código del Trabajo que contienen medidas aplicables a las personas con responsabilidades familiares y que sólo están disponibles para las trabajadoras (artículos 228, 228, 1), 229, 232), y para los padres sólo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, la muerte o la hospitalización prolongada de la madre (artículo 238). La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado ninguna información al respecto. Asimismo, toma nota de que, según la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), que de acuerdo con el ejemplo del convenio colectivo proporcionado, numerosas disposiciones brindan protección y beneficios especiales a las mujeres con hijos o «personas que crían niños sin su madre». Por lo tanto, la Comisión subraya una vez más que cuando la legislación refleja el supuesto de que la principal responsabilidad del cuidado de la familia recae en las mujeres o excluye a los hombres de determinados derechos y beneficios relacionados con la familia, refuerza los estereotipos sobre los roles de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. La Comisión considera que, a fin de lograr el objetivo del Convenio, las medidas para ayudar a los trabajadores con responsabilidades familiares deberían estar disponibles para los hombres y las mujeres en pie de igualdad (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 786). ***La Comisión pide al Gobierno que identifique las medidas adoptadas, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para enmendar las partes pertinentes del capítulo IV del Código del Trabajo a la luz del principio de igualdad de trato, que vele por que los***

hombres y las mujeres con responsabilidades familiares dispongan de medidas destinadas a conciliar el trabajo y la familia en pie de igualdad, y que facilite información específica al respecto.

Discriminación por motivos de religión. La Comisión toma nota de las observaciones de la UITA según las cuales las mujeres musulmanas que usan el hijab son discriminadas, incluso, en la educación, cuando solicitan empleo y en el empleo. La UITA cita, por ejemplo, casos en los que las mujeres musulmanas se vieron obligadas a renunciar a sus trabajos, se les prohibió dirigir sus propios negocios, fueron intimidadas y expulsadas de la educación superior. La Comisión toma nota además de que en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias sobre su misión en Uzbekistán, se aprobó una estrategia de acción 2017-2021 para el desarrollo de cinco áreas prioritarias, y que el área V abarca la tolerancia religiosa y la armonía interétnica (documento A/HRC/37/49/Add.2, párrafo 2). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas para luchar contra la discriminación por motivos de religión en el empleo o en las ocupaciones, incluso en el marco de la Estrategia de acción 2017-2021, y sobre los resultados obtenidos, así como también, proporcionar una copia de la Estrategia de acción 2017-2021.***

Artículo 5. Medidas especiales de protección. La Comisión recuerda que, desde 2005, ha estado pidiendo al Gobierno que le proporcione una copia de la lista de trabajos que se llevan a cabo en condiciones de trabajo peligrosas y en que las mujeres no pueden trabajar, mencionada en el artículo 225 del Código del Trabajo. Asimismo, la Comisión ***lamenta*** tomar nota de que el Gobierno no ha transmitido dicha lista y se limita a señalar que las distinciones en el empleo no se consideran discriminatorias si se basan en las características del trabajo o se realizan porque el Estado se preocupa especialmente por las personas que requieren una mayor protección social. La Comisión toma nota de que, según sus observaciones, la UITA considera que la inclusión de las mujeres en la categoría de personas que requieren una mayor protección social abre la vía a la discriminación directa contra las mujeres. La Comisión recuerda que las medidas de protección de las mujeres abarcan en general las medidas que tienen por objetivo proteger la maternidad en el sentido estricto, que entran en el ámbito de aplicación del artículo 5, y las medidas destinadas a proteger a las mujeres en general debido a su sexo o género, basándose en percepciones estereotipadas de sus capacidades y del papel que les corresponde en la sociedad, lo que es contrario al Convenio y representa un obstáculo para la contratación y el empleo de las mujeres (véase Estudio General de 2012, *op. cit.*, párrafos 838 a 840). ***Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir una copia de la lista de trabajos que se llevan a cabo en condiciones de trabajo peligrosos que las mujeres no pueden realizar, mencionada en el artículo 225 del Código del Trabajo, a fin de que pueda evaluar si dicha lista de trabajos prohibidos constituye una medida especial que entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 5.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zambia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1972)

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Legislación. La Comisión tomó nota anteriormente de que en el proyecto de ley sobre el empleo (proyecto de enmienda) se había incluido una definición de «salario igual por un trabajo de igual valor», pero llamó la atención del Gobierno sobre el hecho de que esta definición era más restrictiva que el concepto establecido en el artículo 1, b), del Convenio. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley de Enmienda al Empleo, en 2015, pero observa que no contiene ninguna disposición a este respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria, que se está redactando actualmente un Código del Trabajo y que tendría en cuenta las preocupaciones registradas anteriormente por la Comisión. La Comisión toma nota con ***interés*** de que el artículo 31, 1), e), de la Ley sobre Equidad e Igualdad de Género, adoptada el 23 de diciembre de 2015, establece que una mujer tiene, en igualdad de condiciones que un hombre, «el mismo derecho a la igualdad de remuneración, prestaciones y trato respecto a un trabajo de igual valor». Toma nota de que «el trabajo de igual valor» se define como «un trabajo que es igual en términos de los requisitos que plantea con respecto a cuestiones tales como competencias, cometido, esfuerzo físico y material, responsabilidad, condiciones de trabajo y remuneración». La Comisión observa que la definición del término «remuneración» se ajusta a la definición que establece el artículo 1, a). La Comisión toma nota además de que el artículo 31, 2), e), establece que «un empleador no deberá discriminar a una mujer en cuanto a la determinación de su remuneración, prestaciones, jubilación y seguridad social», y que según el artículo 31, 4), c) y d) «ninguna persona, organismo público o privado deberá dejar de respetar el principio de igualdad de salario por un trabajo igual; ni perpetuar una diferencia desproporcionada en los ingresos derivada de una discriminación del pasado»; y que el incumplimiento de esta disposición será tipificado como infracción y sancionado con una multa (artículo 31, 6)). Al tiempo que toma nota de que el artículo 31, 2), e), se refiere a la igualdad de salario por «un trabajo igual», la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que el concepto «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo», o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que, sin embargo, son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). ***La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los métodos y criterios actuales utilizados para evaluar los «requisitos» específicos de un trabajo***

determinado, con el fin de garantizar que la definición y la expresión «trabajo de igual valor» establecida en el artículo 31 de la Ley sobre Equidad e Igualdad de Género, de 2015, permite un amplio abanico de comparaciones en la práctica, que incluye pero más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo igual, según lo dispuesto en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones sobre las nuevas disposiciones en materia de igualdad de remuneración, así como sobre la existencia de sanciones por su incumplimiento. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y la ejecución en la práctica del artículo 31 de la Ley sobre Equidad e Igualdad de Género, en particular sobre el número de infracciones denunciadas a los inspectores del trabajo, los tribunales y la Comisión sobre Equidad e Igualdad de Género, y sobre las sanciones impuestas. A la luz de la evolución legislativa en curso, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la situación de elaboración del proyecto de Código del Trabajo y confía en que éste reflejará plenamente el principio consagrado en el Convenio.

Diferencias salariales entre hombres y mujeres. La Comisión tomó nota anteriormente de la constante segregación vertical y horizontal de hombres y mujeres en algunos sectores y ocupaciones, así como de la considerable brecha salarial por motivos de género. La Comisión toma nota de que los indicadores disponibles sobre el mercado del trabajo en 2017, de la Oficina Central de Estadística, demuestran que el 33,1 por ciento de la población activa se encuentra en el sector formal y que el 24,8 por ciento de los trabajadores están formalmente contratados, de los cuales el 26,3 por ciento son mujeres. La Comisión toma nota de que, en 2018, la Oficina Central de Estadística publicó un informe titulado «Estadísticas de género sobre la representación de mujeres en el gobierno local», en el que señalaba que Zambia es uno de los países de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) con menor participación de las mujeres en el gobierno local (9 por ciento en 2016), y destacó la necesidad de fortalecer la recopilación y presentación de estadísticas de calidad en materia de género con el fin de garantizar que se disponga de información adecuada y accesible para emprender un análisis de género con intervenciones más específicas y participación efectiva de las mujeres a todos los niveles. Al tiempo que toma nota de la ausencia de formación sobre los salarios de hombres y mujeres en los diversos sectores y ocupaciones, la Comisión toma nota con **preocupación**, de la declaración del Gobierno de que no existe ninguna brecha salarial de género en el país, sino simplemente sectores dominados por hombres o por mujeres. La Comisión toma nota de que la política nacional sobre igualdad de género, en su revisión en 2014, destaca que la presencia de mujeres se concentra en los sectores menos remunerados y en el empleo no técnico, debido al nivel inferior de educación de éstas, y reconoce que la discriminación contra las mujeres en el país se plasma en normas y prácticas tradicionales que dan lugar a restricciones duraderas sobre el empoderamiento y el progreso socioeconómico de las mujeres. Tomando nota de que la Ley sobre Equidad e Igualdad de Género, de 2015, ha definido la eliminación del sesgo de género como uno de sus objetivos la Comisión llama la atención sobre el hecho de que, debido a las actitudes históricas sobre el papel de la mujer en la sociedad junto con las opiniones estereotipadas sobre sus aspiraciones, preferencias y capacidades para ejercer determinadas tareas y su idoneidad para éstas, algunos trabajos sean realizados de forma predominante o exclusiva por mujeres (como las profesiones en relación con los cuidados) mientras que otros (como en la construcción) sean realizados por hombres. Con frecuencia, a la hora de determinar los salarios, los «trabajos femeninos» están infravalorados en comparación con trabajos de igual valor realizados por hombres. Comparar el valor relativo del trabajo realizado en ocupaciones que pueden requerir diversos tipos de calificaciones, responsabilidades o condiciones de trabajo, pero que, sin embargo, representan en general un trabajo del mismo valor, es esencial para eliminar la discriminación resultante del hecho de que el valor del trabajo realizado por hombres y mujeres esté condicionado por los prejuicios de género. La Comisión recuerda que el principio se ha aplicado para comparar la remuneración percibida por hombres y mujeres que trabajan en distintas ocupaciones tales como cuidadores en instituciones para personas de edad (predominantemente mujeres) y los guardias de seguridad en oficinas (predominantemente hombres) o cuidadores durante las comidas en las escuelas (predominantemente mujeres) y guardianes de parques y jardines (predominantemente hombres) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 675). **La Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para adoptar medidas más proactivas, incluidas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a fin de sensibilizar, evaluar, promover y aplicar el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas para corregir la brecha salarial en materia de género detectando y poniendo freno a las causas subyacentes de las diferencias salariales como la segregación laboral vertical y horizontal y los estereotipos de género tanto en la economía formal como en la informal, y promoviendo el acceso de las mujeres a una mayor variedad de empleos con perspectivas profesionales y mejor remunerados, en particular en el contexto de la Política Nacional sobre Igualdad de Género y de la Ley sobre Equidad e Igualdad de Género, de 2015. Recordando que la recopilación, el análisis y la difusión de información es importante para detectar y corregir la desigualdad en la remuneración, la Comisión pide al Gobierno que comunique información estadística actualizada sobre los ingresos de hombres y mujeres en todos los sectores y ocupaciones de la economía. La Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina sobre esta cuestión.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1979)

Artículo 1 del Convenio. Definición de discriminación. La Comisión tomó nota anteriormente de que la definición de discriminación que figura en el proyecto de ley sobre el empleo (enmendada), no parece incluir los motivos de ascendencia nacional y color, y que el motivo de «estatus social» puede entenderse en un sentido más restrictivo que el motivo de «origen social» establecido en el Convenio. La Comisión toma nota de que, a raíz de la adopción de la Ley sobre el Empleo (enmendada), en 2015, el nuevo artículo 36, 3), de esta ley establece que «la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, la opinión política o la afiliación, el origen étnico, la filiación tribal o la estatus social del trabajador» no pueden constituir motivos válidos para la terminación de su contrato. La Comisión toma nota de que, además de la adopción de la Ley de la Constitución de Zambia (enmendada), de 2016, que establece el principio de igualdad y no discriminación como parte de los valores y principios nacionales, y define «la discriminación» con el significado siguiente: «dar de forma directa o indirecta un trato diferente a una persona con motivo de su nacimiento, raza, sexo, origen, color, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, lengua, filiación tribal, embarazo, salud o de su estado civil, su origen étnico, o su situación social o económica» (artículos 8 y 266). Al tiempo que saluda la inclusión del motivo de «color» en ambas nuevas leyes, la Comisión toma nota de que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, las nuevas disposiciones no hacen referencia a los motivos de «ascendencia nacional» ni «origen social» establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión toma nota además de que, si bien es cierto que el Gobierno había señalado anteriormente que la nueva Ley sobre el Empleo incluiría una definición global de discriminación, el texto de la ley se refiere únicamente a la discriminación en caso de terminación del empleo. La Comisión desea recalcar que el principio de igualdad de oportunidades y de trato debería aplicarse a todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluido el acceso a la formación profesional, al empleo y a determinadas ocupaciones, y a las condiciones de empleo, según se establecen en el artículo 1, 3), del Convenio. Reitera que disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para poder identificar y abordar las muy distintas formas en la que puede determinarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). **La Comisión pide al Gobierno que comunique información actualizada sobre la aplicación práctica del artículo 36, 3), de la Ley sobre el Empleo, incluyendo una copia de cualquier decisión judicial sobre casos en los que el despido se haya basado en motivos prohibidos por el Convenio, en particular en razón de la «estatus social», con el fin de que el Comité pueda evaluar su significado en la práctica y las soluciones que se dieron a cada caso. A la luz de la evolución legislativa a la que se refieren sus comentarios en virtud del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), en relación con la actual elaboración del Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para dar plena expresión legislativa al principio del Convenio, definiendo y previniendo la discriminación directa e indirecta en todos los aspectos del empleo y la ocupación con respecto a todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio y a que se suministre información sobre todos los progresos realizados a este respecto.**

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión tomó nota anteriormente de que el acoso sexual se trata únicamente en el Código Penal y que estaba previsto que la enmienda al artículo 137A, 1), incorporara las disposiciones de la Ley contra la Violencia de Género, 2011, de forma que se amplíe el delito de acoso sexual contra los niños en el lugar de trabajo a un delito de acoso sexual «contra una persona», y el establecimiento de un tribunal de vía rápida para solventar las demoras en el enjuiciamiento de casos de violencia de género en el ordenamiento judicial. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que sigue en curso un procedimiento de revisión del artículo 137A, 1), del Código Penal. La Comisión toma nota con **interés** de la adopción, el 23 de diciembre de 2015, de la Ley de Igualdad de Género e Igualdad, la cual prohíbe tanto en casos de acoso sexual en el que se ofrecen compensaciones (*quid pro quo*) como en un entorno de trabajo hostil, y prevé que la Comisión de equidad e igualdad de género puede mandar remedios o compensaciones (artículo 42, 5)). La Comisión toma nota además de que el artículo 40 de esta ley establece que el Gobierno elaborará y aplicará las políticas y procedimientos adecuados para que las víctimas de acoso sexual tengan derecho a recurrir a procedimientos de carácter disciplinario y de queja, y que los empleadores tengan la obligación de aplicar y comunicar a todas las personas, incluidos los trabajadores, la existencia de estos procedimientos. No obstante, la Comisión toma nota de que, en el marco del examen periódico universal, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló recientemente que, si bien se había procesado a autores de actos de acoso sexual tanto en el sector público como en el privado, no se había exigido a los empleadores que rindieran cuentas por no proteger a sus empleadas en aquellos casos (documento A/HRC/WG.6/28/ZMB/2, 28 de agosto de 2017, párrafo 36). **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de los artículos 39 y 40 de la Ley de Equidad y de Igualdad de Género, de 2015, en particular sobre la normativa pertinente y los procedimientos efectivos de queja, así como sobre las medidas de sensibilización aplicadas para poner freno a todas las formas de acoso sexual en el empleo y la ocupación, y a que comunique también información sobre el número de quejas presentadas y de reparaciones otorgadas. La Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre una copia de los artículos pertinentes del Código Disciplinario de la Función Pública que definen el acoso sexual y la discriminación.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zimbabwe

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1989)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) del 31 de agosto de 2017, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 2 de noviembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión lleva una serie de años refiriéndose al artículo 5, 2, a), de la Ley del Trabajo, en el que se contempla la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, pero se define el «trabajo de igual valor» como «el trabajo que implica competencias, obligaciones, responsabilidades y condiciones similares o sustancialmente similares», lo que puede restringir de forma indebida el alcance de la comparación entre los trabajos realizados por los hombres y por las mujeres. La Comisión constata que el Gobierno indica en su memoria que se ha alcanzado un acuerdo con los interlocutores sociales para modificar la definición de «trabajo de igual valor» y que se está elaborando un proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Trabajo, entre otras cosas, para garantizar que el «trabajo de igual valor» tenga un alcance más amplio, como se dispone en el Convenio. Al tiempo que recuerda comentarios anteriores acerca del artículo 65, 6), de la Constitución, que sólo prevé la igualdad de remuneración para un «trabajo similar» y, por lo tanto, no refleja plenamente el concepto de «trabajo de igual valor», la Comisión toma nota de que el ZCTU señala que en el proyecto de ley se dispone que «la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin basarse en el género», lo que en opinión del ZCTU no da respuesta a las preocupaciones suscitadas con anterioridad por la Comisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno alienta al ZCTU a llevar esta cuestión ante el Foro de Negociación Tripartito (TNF), ya que el proyecto de ley tendrá en cuenta todas las preocupaciones formuladas por los interlocutores sociales. Al tiempo que constata que la disposición del proyecto de ley no parece definir lo que debe considerarse como «trabajo de igual valor», la Comisión vuelve a señalar a la atención del Gobierno el hecho de que el concepto de «trabajo de igual valor», que se contempla en el Convenio, es esencial para abordar la segregación de género en el mercado de trabajo, dado que amplía el alcance de la comparación, que así no sólo abarca la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «el mismo» o «similar», sino que también engloba trabajos de naturaleza completamente diferente, que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672 a 675). ***Habida cuenta de los cambios legislativos que están en curso, la Comisión confía en que el Gobierno aprovechará esta ocasión para modificar la Ley del Trabajo de manera que se tengan en cuenta debidamente las preocupaciones suscitadas por la Comisión durante varios años, con el fin de asegurar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor quede plenamente reflejado en la legislación nacional, y que el texto final de la Ley del Trabajo permita establecer una comparación no sólo entre trabajos que implican calificaciones y capacitaciones, grados de esfuerzo, responsabilidades y condiciones similares, sino también entre trabajos de naturaleza completamente diferente, que sin embargo son de igual valor. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.***

Artículo 2. Medidas para abordar la brecha salarial de género. En ocasiones anteriores, la Comisión ha tomado nota de la permanente segregación profesional vertical y horizontal, así como de la persistente brecha salarial de género, dado que las mujeres predominan en los trabajos escasamente remunerados, principalmente en la agricultura y el trabajo doméstico. En referencia a sus comentarios anteriores sobre la política nacional de igualdad de género (2013-2017), que contempla una estrategia para fomentar la igualdad en cuanto al empleo formal y la remuneración, y mecanismos que aumentan las oportunidades de empleo para las mujeres, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Función Pública, Trabajo y Bienestar Social está trabajando en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. No obstante, la Comisión toma nota de las declaraciones del ZCTU, según las cuales no hay un progreso tangible con respecto a la brecha salarial de género, y el Gobierno debe tomar medidas más amplias para atajar las causas reales del problema. Constata que el ZCTU señala que, según los datos disponibles de 2016 procedentes de la Agencia Estadística de Zimbabwe (Zimstat), sólo el 14 por ciento de las mujeres económicamente activas desempeñaban un trabajo remunerado (frente al 30 por ciento, en el caso de los hombres), ya que la mayor parte de las mujeres estaban desempleadas, subempleadas o empleadas en la economía formal. La Comisión toma nota de que, según la última encuesta de fuerza de trabajo, publicada en marzo de 2015 por Zimstat, el porcentaje de empleo informal dentro del empleo total aumentó del 84,2 por ciento en 2011 al 94,5 por ciento en 2014, y se calculaba que las mujeres representaban el 52,4 por ciento dentro de la economía informal. Asimismo, observa que en el estudio «Situational analysis of women in the informal economy in Zimbabwe» (Análisis de la situación de las mujeres en la economía informal en Zimbabwe), publicado por la OIT en 2017, se destacaba que las mujeres empleadas en la economía informal solamente recibían salarios bajos e irregulares, de hecho, se calculaba que el 61,3 por ciento de las mujeres ganaba menos de 100 dólares de los Estados Unidos al mes (págs. 11 y 12). ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre toda medida adoptada en el marco de la política nacional de igualdad de género (2013-2017) o en general, para fomentar la igualdad de remuneración y atajar las causas estructurales de la brecha salarial de género, incluidas la segregación profesional de género existente en el mercado de trabajo y las tasas de remuneración bajas por trabajos que realizan sobre todo las mujeres. Al tiempo que toma nota de que la citada política contempla un marco de supervisión y evaluación, la Comisión solicita al Gobierno que transmita un ejemplar de todo***

informe en el que se evalúe la repercusión de esta política, y que informe sobre toda medida de seguimiento que se prevea.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), recibidas el 31 de agosto de 2017, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 2 de noviembre de 2017.

Artículo 1, 1), a) y b), del Convenio. Motivos de discriminación. Legislación. La Comisión tomó nota anteriormente de que, si bien la Ley del Trabajo no prohíbe la discriminación basada en motivos de ascendencia nacional y origen social, que figuran en el artículo 1, 1), a), del Convenio, el artículo 56 de la Constitución de 2013 abarca el «origen social», pero sólo se refiere a los motivos de «nacionalidad» y «lugar de nacimiento», sin referirse expresamente al motivo de «ascendencia nacional». La Comisión observa que el Gobierno indica en su memoria que los motivos de «lugar de nacimiento» y «origen étnico», enumerados en el artículo 56 de la Constitución, cubren el de «ascendencia nacional», y que va a modificarse el artículo 5, 1) de la Ley del Trabajo para introducir todos los motivos enumerados en la Constitución. La Comisión toma nota de que el ZCTU formula la esperanza de que el Gobierno, en su instrucción a la Fiscalía General, se asegure de que la «ascendencia nacional» y el «origen social» sean incluidos en el proyecto de enmienda a la ley del trabajo, como se acordó con los interlocutores sociales en el marco del Foro de Negociación Tripartita (TNF). **La Comisión confía en que el Gobierno, con ocasión de la revisión de la Ley del Trabajo, tome las medidas necesarias para asegurar que dicha ley prohíba la discriminación directa e indirecta al menos por todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, incluidos la «ascendencia nacional» y el «origen social», contra todo trabajador y respecto de todos los aspectos del empleo, y solicita al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso que se realice al respecto. Además, pide al Gobierno que aporte información sobre la aplicación y la interpretación que realice la inspección del trabajo de las expresiones de «nacionalidad», «origen étnico» y «lugar de nacimiento», enumerados en el artículo 56 de la Constitución y de su aplicación en la práctica.**

Artículos 2 y 3. Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de la versión revisada de la Política nacional de género para 2013-2017, transmitida por el Gobierno, que incluye ámbitos prioritarios nuevos: «el género y la discapacidad», por una parte, y «el género, la cultura y la religión», por otra. Sin embargo, constata que no ha habido cambios en las estrategias que estaban previstas previamente para fomentar la igualdad y la equidad en el acceso a las oportunidades económicas de hombres y mujeres, con el fin de garantizar el acceso a las oportunidades de formación tanto a los hombres como a los mujeres para mejorar su participación equitativa en el lugar de trabajo, el mercado laboral y la administración pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en sus declaraciones generales, afirma que se ha avanzado en lo relativo al fomento de la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, gracias a la aplicación de la Política nacional de género. El Gobierno añade que, mediante dicha política revisada, se está finalizando un marco de control y evaluación dirigido específicamente a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer para permitir que los mecanismos nacionales dedicados al género supervisen y evalúen la ejecución de los compromisos nacionales, regionales e internacionales que se contraen en este ámbito. No obstante, la Comisión toma nota de que, en opinión del ZCTU, no ha habido mejoras en lo relativo a la igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que, según la última Encuesta Demográfica y de Salud de Zimbabwe (ZDHS) — encuesta por muestreo que llevó a cabo el Gobierno en 2015 — la tasa de empleo de las mujeres aumentó del 37 por ciento en 2010-2011 al 41 por ciento en 2015 (frente al 65 por ciento en el caso de los hombres), con una mayor concentración de mujeres en los sectores de la venta y los servicios (el 49 por ciento, frente al 36 por ciento en 2010-2011), seguidos del sector agrícola (el 18 por ciento, frente al 21 por ciento en 2010-2011). No obstante, en cuanto a sus comentarios en virtud del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión toma nota de que el ZCTU señala que, según los datos de 2016 de la agencia estadística de Zimbabwe (Zimstat), sólo el 14 por ciento de las mujeres activas económicamente tenían un empleo remunerado (frente al 30 por ciento de los hombres), ya que la mayor parte de las mujeres estaban desempleadas, subempleadas o empleadas en la economía informal. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas que se adopten gracias a la aplicación de la Política nacional de género en los ámbitos del empleo, la educación y la formación, así como sobre toda revisión que se emprenda para evaluar la ejecución de la Política, en particular como resultado del marco de supervisión y evaluación que se está finalizando y que se centra específicamente en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Además, pide al Gobierno que proporcione información sobre toda medida constructiva adoptada para superar la tradicional discriminación de género y reforzar el empoderamiento económico de la mujer y su acceso a los puestos en los que se toman decisiones, y acerca de su repercusión a la hora de mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión solicita al Gobierno que aporte datos estadísticos actualizados acerca de la participación de hombres y mujeres en la educación, la formación, el empleo y la ocupación, desglosados por categorías y puestos profesionales.**

Comisión de Género. En lo relativo a comentarios anteriores sobre el artículo 245 de la Constitución de 2013, en la que se dispone la creación de la Comisión de Género, la Comisión toma nota con *interés* de la aprobación de la Ley de la Comisión de Género [capítulo 10:31], que se promulgó en 2016, por la que se pone en funcionamiento la Comisión y se

prevé que, entre otras cosas, ésta reciba y tramite quejas públicas por discriminación basada en el género y recomiende medios de reparación adecuados. También puede investigar toda barrera sistémica que impida la igualdad de género e informe al Parlamento sobre su naturaleza, alcance y repercusión, indicando toda reforma legislativa, administrativa o de otro tipo que se realice en la práctica para resolver esa situación (artículos 4 a 7). Además, la Comisión señala que dicha Comisión deberá organizar un foro anual sobre cuestiones de género para debatir los temas relacionados con sus funciones (artículo 8). La Comisión toma nota de que, en 2017, actividades de formación sobre las normas internacionales del trabajo y la igualdad de género fueron realizadas por la Oficina Internacional del Trabajo dentro de la Comisión de Género para que pueda promover mejor la igualdad de género y la no discriminación en el país. Ella toma nota de que el Gobierno indica que esa Comisión ha realizado varias actividades de sensibilización y creación de capacidad, tanto a escala nacional como comunitaria, sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer, en especial en los puestos en los que se toman decisiones. Asimismo, constata que la Comisión en cuestión ha elaborado un manual sobre la tramitación de investigaciones y quejas para orientar sus funciones de investigación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el ZCTU, al tiempo que saluda la creación de la Comisión de Género, destaca que ésta no ha llevado a cabo actividades efectivas en los ámbitos del empleo y la ocupación. *Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno de que la Comisión de Género aún no ha tratado ningún caso, la Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para su plena puesta en marcha. También solicita al Gobierno que proporcione información sobre el número, la naturaleza y los resultados de los casos de discriminación en el empleo y la ocupación que se presenten ante esa Comisión, y que transmita un ejemplar del manual de tramitación de investigaciones y quejas. Además, pide al Gobierno que aporte información sobre toda barrera sistémica a la igualdad de género, que se investigue y comuniqué al Parlamento a este respecto, en particular, en los ámbitos del empleo y la ocupación. Solicita al Gobierno que siga informando acerca de las actividades de la Comisión de Género, incluidas las actividades de sensibilización específicas en materia de discriminación en el empleo y la ocupación, dirigidas a los funcionarios públicos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones respectivas, en el marco de los foros anuales sobre cuestiones de género o en otros contextos.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 100** (Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Chad, Chile, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Fiji, Francia: Polinesia Francesa, Gambia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Irlanda, Kirguistán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Reino Unido: Gibraltar, Rumania, Rwanda, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudán del Sur, Trinidad y Tabago, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zambia, Zimbabwe); el **Convenio núm. 111** (Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Burundi, Chad, Chile, Comoras, Congo, República de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kirguistán, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, Mozambique, Namibia, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, Rumania, Federación de Rusia, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán del Sur, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zambia, Zimbabwe); el **Convenio núm. 156** (Argentina, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Bulgaria, República de Corea, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Guinea, Lituania, Paraguay, Perú, Federación de Rusia, San Marino, Ucrania, Uruguay).

Consultas tripartitas

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2002)

Artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En su memoria el Gobierno indica que el Consejo Nacional del Trabajo está revisando el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno tiene previsto establecer un subcomité compuesto de miembros del Consejo Nacional del Trabajo y representantes de los empleadores y de los trabajadores para examinar las normas internacionales del trabajo, realizar consultas públicas cuando sea necesario y presentar recomendaciones al Ministro sobre las medidas que se tendrían que adoptar. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información acerca de las consultas tripartitas sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. *Recordando sus comentarios formulados desde 2008 en relación con las actividades del Consejo Nacional del Trabajo y tomando nota de que el artículo B7 del Código del Trabajo, que establece los procedimientos del Consejo, no incluye las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información detallada acerca de las actividades del Consejo Nacional del Trabajo sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que indique cuál es el órgano (o los órganos) que tiene el mandato de realizar las consultas tripartitas para dar efecto al Convenio. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información precisa y detallada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, a)-e), del Convenio, en particular las relacionadas con los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, a)); las memorias que hayan de comunicarse sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, d)), y las propuestas para la denuncia de convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, e)).*

Artículo 5, párrafo 1, b). Sumisión al Parlamento. El Gobierno reitera la información que proporcionó en abril de 2014, en la que indicaba que 20 instrumentos adoptados por la Conferencia entre sus 83.^a y 101.^a reuniones (1996-2012) se sometieron de nuevo al Parlamento el 11 de marzo de 2014. Añade que antes del 15 de noviembre de 2017 se presentará una solicitud al Ministro a través del Comisionado del Trabajo y Secretario Permanente en relación con la sumisión de los instrumentos al Parlamento. *La Comisión se remite a sus observaciones de larga data sobre la obligación de sumisión y pide de nuevo al Gobierno que indique si se celebraron consultas efectivas que resultaron en conclusiones o modificaciones acerca de las propuestas realizadas al Parlamento de Antigua y Barbuda en relación con la sumisión de los instrumentos antes mencionados, y que proporcione información sobre la fecha o fechas en que los instrumentos se sometieron al Parlamento. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el contenido (orden del día, discusiones y resoluciones) y sobre el resultado de las consultas tripartitas celebradas en relación con la sumisión de instrumentos adoptados por la Conferencia a partir de 2014, el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados para la Conferencia en su 103.^a reunión, así como la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.^a reunión.*

Artículo 5, párrafo 1, c). Examen de los convenios y recomendaciones no ratificados. El Gobierno informa de que los convenios no ratificados que señala en su memoria se sometieron al Consejo Nacional del Trabajo el 11 de noviembre de 2017 para que se examinaran de nuevo junto con los interlocutores sociales. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el resultado del nuevo examen de los convenios no ratificados, en particular: i) el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) que es considerado un convenio de gobernanza; ii) el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) (que revisa el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)) y el Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) en los cuales Antigua y Barbuda es un Estado parte, y iii) el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) (que revisa el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108), que también ha sido ratificado por Antigua y Barbuda).*

Botswana

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)

Artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que se celebraron consultas con la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU), la Federación del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Botswana (BOFEPUSU) y las Empresas de Botswana (BB) sobre cuestiones que han de discutirse en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Añade que el Ministro de Empleo, Productividad Laboral y Desarrollo de Competencias es responsable de la presentación de los

convenios y de las recomendaciones a la Asamblea Nacional para una discusión sobre su posible ratificación. El Gobierno especifica que se preparan, en consulta con los interlocutores sociales, las memorias presentadas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, el 24 de mayo de 2018, el Gobierno y los interlocutores sociales discutieron el orden del día de la 107.^a reunión de la CIT. El Gobierno también indica que un experto de la OIT realizó un análisis de las deficiencias en relación con la posible ratificación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), que se presentó a la autoridad competente para su consideración. La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica ninguna información sobre las consultas tripartitas efectivas realizadas sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia (*artículo 5, párrafo 1, b)*) o la posible denuncia de los convenios ratificados (*artículo 5, párrafo 1, e)*). La Comisión también acoge con agrado la información comunicada en la memoria del Gobierno sobre la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones respecto de la aplicación del Convenio. En particular, toma nota del fallo del Tribunal, que invalidó el instrumento legislativo núm. 57, de 2011, debido a una falta de consultas previas con los interlocutores sociales. ***La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información detallada actualizada sobre el contenido y los resultados de las discusiones tripartitas efectivas que tuvieron lugar en el seno de la Junta Consultiva del Trabajo y del Comité Consultivo de Alto Nivel (Sub-HLCC), indicando la frecuencia de esas consultas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo, dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, párrafo 1, del Convenio, especialmente en relación con la posible ratificación de los Convenios núms. 81 y 129. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la jurisprudencia relativa a la aplicación de las disposiciones del Convenio.***

Chad

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Asistencia técnica. En sus conclusiones de junio de 2013, la Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento eficaz de los procedimientos que exige este convenio de gobernanza. El Gobierno señala, en su memoria recibida en noviembre de 2014, que propugna siempre el diálogo social con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno envió las memorias sobre los convenios ratificados a los interlocutores sociales para que éstos formularan las observaciones correspondientes, tal como habían acordado durante un taller sobre las obligaciones constitucionales celebrado en Dakar, en julio de 2014. La Comisión toma también nota de que, en septiembre de 2014, se celebró en N'Djamena un taller de fortalecimiento de capacidades sobre normas internacionales del trabajo y diálogo social. Con el apoyo de la OIT y en el marco del seguimiento solicitado por la Comisión de la Conferencia tras una discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2013, los participantes formularon diversas propuestas para reforzar los mecanismos de consulta que requiere el Convenio, entre las cuales se encuentra la celebración de un taller tripartito con los departamentos y unidades concernidos para abordar las informaciones requeridas en los comentarios de la Comisión de Expertos, así como un taller tripartito encaminado a la validación de las memorias antes de presentarlas a la OIT. ***La Comisión invita al Gobierno a presentar otras informaciones sobre los progresos realizados tras la asistencia recibida de la OIT sobre las cuestiones relativas a las consultas tripartitas y al diálogo social.***

Artículos 2 y 5 del Convenio. Mecanismos de consulta y consultas tripartitas efectivas. El Gobierno señala que, en 2013, el Comité de Alto Nivel para el Trabajo y la Seguridad Social se reunió para incorporar los comentarios técnicos formulados sobre el proyecto de Código del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que dicho Comité de Alto Nivel ha estado inactivo en 2014. ***La Comisión invita al Gobierno a comunicar información detallada sobre las consultas que hayan tenido lugar sobre cada una de las cuestiones de las que trata el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.***

Artículo 4, párrafo 2. Formación. El Gobierno confirma que es necesario que los participantes en los procedimientos de consulta cuenten con formación, pero que con frecuencia esto plantea algún problema de financiación. La Comisión toma nota de la posibilidad de que el Gobierno intervenga directamente o por medio de los interlocutores para el desarrollo a fin de hacer posible dicha formación. ***La Comisión invita al Gobierno a describir las medidas adoptadas para la financiación de la formación necesaria de los participantes en los procedimientos de consulta.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Côte d'Ivoire

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1987)

Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que está en curso de examen por los mandantes tripartitos un proyecto de decreto relativo a la creación de un comité consultivo tripartito sobre las normas internacionales del trabajo, con miras a su adopción y designación de sus miembros. Añade que el Ministerio de Trabajo sigue aún dando inicio a reuniones para el examen de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo comprendidas en el *artículo 5* del Convenio, y también a todas las cuestiones relacionadas con el ámbito laboral en particular y con el ámbito social en general. A modo de ejemplo, el Gobierno menciona la importante implicación de las organizaciones sindicales durante la celebración de la

fiesta del trabajo y la convocatoria regular de la Comisión consultiva del trabajo. Indica que, desde la creación del Comité consultivo tripartito sobre las normas internacionales del trabajo, que debería concluir en el curso de 2018, se presentan al Comité, antes de su transmisión al Gobierno y luego a la Asamblea Nacional, los instrumentos que han de someterse a la autoridad competente. El Gobierno precisa que tal vez estime oportuno el apoyo técnico de la OIT para la puesta en marcha del mencionado Comité. La Comisión toma nota de que los interlocutores sociales son informados mediante correo oficial, con el fin de que se pronuncien sobre los comentarios y los cuestionarios de la Comisión, así como sobre el proyecto de memoria definitivo. Sin embargo, el Gobierno precisa que los asuntos remitidos no siempre van seguidos de una devolución. En su Estudio General de 2000, *Consulta tripartita relativa a las normas internacionales del trabajo*, párrafo 71, la Comisión toma nota de que, en virtud del párrafo 2, 3), de la *Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo)*, 1976 (núm. 152), las consultas sólo podrían realizarse por medio de comunicaciones escritas «cuando los que participen en los procedimientos de consultas estimen que tales comunicaciones son apropiadas y suficientes». ***Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si el procedimiento de consulta por escrito fue objeto de un consenso previo con los interlocutores sociales. Habida cuenta de la intención afirmada por el Gobierno de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para que el Comité sea operativo, espera que esta asistencia pueda ser comunicada en un futuro próximo. La Comisión expresa la firme esperanza de que el mencionado proyecto de decreto se adopte lo antes posible y solicita al Gobierno que se sirva tenerla informada de toda evolución al respecto. En consecuencia, solicita nuevamente al Gobierno que comunique informaciones precisas sobre el contenido, la frecuencia y el resultado de las consultas tripartitas realizadas sobre cada una de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo comprendidas en el Convenio, especialmente en lo que respecta a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, a)), las propuestas que han de presentarse sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional (artículo 5, párrafo 1, b)), el reexamen a intervalos apropiados de los convenios no ratificados y de las recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto (artículo 5, párrafo 1, c)), las memorias que han de presentarse sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, d)), así como las propuestas relativas a la denuncia de los convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, e)). La Comisión solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien indicar el resultado de las reuniones iniciadas por el Ministerio de Trabajo sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo.***

República Democrática del Congo

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2013. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que las elecciones sindicales, organizadas entre octubre de 2008 y julio de 2009, permitieron identificar las 12 organizaciones profesionales de trabajadores más representativas cuyo mandato continúa hasta la convocatoria de las próximas elecciones, previstas en diciembre de 2013. Estas organizaciones profesionales de empleadores tienen su condición de más representativas debido al número de empresas afiliadas. Además, el Gobierno señala que el Ministro de Empleo, de Trabajo y de Previsión Social convoca la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) mediante una orden ministerial que transmite a los interlocutores sociales miembros del CNT, solicitándoles que comuniquen los nombres de los representantes titulares y suplentes de sus respectivas organizaciones (*artículo 3 del Convenio*). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna otra información sobre el funcionamiento de los procedimientos consultivos requeridos por el Convenio. ***La Comisión remite al Gobierno a su previa observación en relación con la falta grave de cumplimiento de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que suministre informaciones sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales en relación con las propuestas presentadas al Parlamento con ocasión de la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio). La Comisión solicita también al Gobierno que haga llegar informaciones detalladas sobre el contenido de las consultas y de las recomendaciones formuladas por los interlocutores sociales sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

El Salvador

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2018, en relación con la aplicación del Convenio, en la que observó, con preocupación, el incumplimiento del mismo y que el diálogo social funciona de forma deficiente en el país. En consecuencia, la Comisión de la Conferencia

instó al Gobierno a que: i) se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de empleadores y facilite, de conformidad con la ley, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores, emitiendo las credenciales correspondientes; ii) elabore normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes en consulta con los interlocutores sociales para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo (CST); iii) reactive nuevamente y sin demora el CST por medio de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y a través del diálogo social, y garantice el pleno funcionamiento de dicho órgano; iv) designe sin dilación a representantes de las organizaciones patronales más representativas en el CST en los casos en que dichos nombramientos no se hayan realizado, y v) recurra a la asistencia técnica de la OIT. Asimismo, recomendó al Gobierno que presentase una memoria detallada a la siguiente reunión de la Comisión de Expertos.

La Comisión toma nota también de las observaciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de la Organización Internacional de los Empleadores (OIE), recibidas el 11 de septiembre de 2018, en las que alegan el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno.

Artículos 2 y 3, párrafo 1, del Convenio. Procedimientos adecuados. Elección de los representantes de los interlocutores sociales en el CST. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se refiere al discurso de una representante gubernamental en la 107.^a reunión de la Comisión de la Conferencia en junio de 2018. La representante gubernamental expresó su opinión de que las acciones impulsadas por el Gobierno para reactivar el CST habían sido reconocidas por la Comisión de Expertos como un caso de progreso. En lo que respecta a los alegatos de injerencia del Gobierno en la designación de representantes trabajadores en el seno del CST y del Consejo Nacional del Salario Mínimo formulados por la ANEP, la representante gubernamental negó los mismos y se refirió a actos de injerencia por parte de la ANEP, sosteniendo que dicha organización empresarial no debería inmiscuirse en la designación del sector trabajador. Asimismo, indicó que otras instancias tripartitas, en las que participa la ANEP de forma permanente y sin interferencia, funcionan con normalidad. A este respecto, se refirió a diversas medidas adoptadas de manera tripartita en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la OIE y la ANEP en las que denuncian que el Gobierno continúa sin entablar un verdadero diálogo y sin celebrar consultas tripartitas, incumpliendo con ello las recomendaciones y resoluciones emanadas de los órganos de control de la OIT. Sostienen que desde el intento fallido de convocatoria que tuvo lugar en julio de 2017, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida con miras a reactivar el CST, ni se ha llevado a cabo la elección, sin interferencias gubernamentales y de manera libre y autónoma, de representantes legítimos de los interlocutores sociales en dicha entidad tripartita. En relación con las indicaciones del Gobierno de que la ANEP se negó a participar en la sesión del CST de 6 julio de 2017, las organizaciones empresariales alegan que la señalada convocatoria fue ilegal ya que, contrariamente a lo establecido en el artículo 3 del reglamento del CST, el presidente del CST (la Ministra de Trabajo) convocó dicha reunión de manera unilateral, sin el acuerdo del vicepresidente nombrado por el sector de los trabajadores o del vicepresidente nombrado por el sector empresarial. Respecto a la afirmación del Gobierno de que el proceso de designación de los representantes de los trabajadores en el seno del CST se realizó públicamente con los representantes de los trabajadores y de los empleadores, las organizaciones de empleadores denuncian que dicha elección fue realizada directamente por el Gobierno empleando criterios en la elección que las propias organizaciones de trabajadores manifestaron desconocer durante la celebración en el país de la Misión de Contactos Directos de julio de 2017. La Comisión toma nota igualmente de que las organizaciones de empleadores alegan que no se celebraron sesiones del CST durante diciembre de 2016 hasta julio de 2017, sino que fue el Consejo nacional superior del salario mínimo, el órgano tripartito, que celebró sesiones en dicho período. A este respecto, destacan que la elección de los representantes en el Consejo nacional superior del salario mínimo fue realizada utilizando un instructivo emitido por la Ministra de Trabajo, quien, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico salvadoreño, no tiene facultades para emitir el mismo. Las organizaciones de empleadores indican que han recurrido dicho instructivo ante la Corte Suprema de Justicia para que sea anulado. Además, se refieren a la afirmación del Gobierno de que los distintos entes tripartitos con los que cuenta el país se encuentran en pleno funcionamiento. A este respecto, defienden que dichos entes se encuentran en pleno funcionamiento, debido a que ha sido el propio Gobierno quien a través de reformas legales, introducidas en 19 de dichas entidades, en agosto de 2012, ha nombrado a los representantes de los empleadores en las juntas directivas de tales entidades. Estas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2016. En particular, se refieren a injerencias del Gobierno en, entre otros entes, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ente regulador de la electricidad y las telecomunicaciones en el país. Alegan que el Gobierno interfirió en el nombramiento por parte de las organizaciones de empleadores de un director propietario y un director suplente en la SIGET, a través de la creación en un breve período de tiempo de 60 asociaciones de empleadores ficticias quienes participaron en dichas elecciones. Informan de que estos hechos han sido denunciados ante la Sala de lo Constitucional, quien ha dictado medidas cautelares, y ante la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones penales correspondientes. La Comisión toma nota además de que las organizaciones de empleadores señalan otros casos que ponen de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno en la promoción del diálogo social, tales como la elaboración entre julio y agosto de 2017, de una política de trabajo decente, sin la participación de los interlocutores sociales y la presentación en mayo de 2018 del Pacto Nacional de Empleo, para cuya revisión por parte de la ANEP se otorgó únicamente dos horas hábiles. La Comisión observa además que las organizaciones de empleadores denuncian ataques contra las oficinas de la ANEP el 30 de agosto de 2018. ***La Comisión espera firmemente que el***

Gobierno adoptará las medidas necesarias para promover y reforzar el tripartismo y el diálogo social con miras a asegurar el funcionamiento del Consejo superior del trabajo. La Comisión urge una vez más al Gobierno que establezca sin demora, y en consultación previa con los interlocutores sociales, reglas claras y transparentes para la designación del sector trabajador en el CST que respeten el criterio de representatividad. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios así como información en respuesta a los alegatos de injerencia y ataques contra las oficinas de la ANEP. Asimismo, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para investigar y resolver los mismos. La Comisión solicita al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 5, párrafo 1. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que le mantuviese informada sobre los resultados de las consultas tripartitas celebradas en relación con propuestas que se presentasen a la Asamblea Legislativa respecto a la sumisión de los 58 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1976 y 2015. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, con el apoyo de la cooperación brindada por la OIT en el marco del Proyecto de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, se adoptó un borrador de «Protocolo con lineamientos sobre el procedimiento de sumisión». El Gobierno informa de que el 2 de mayo de 2018, dicho borrador fue enviado a las entidades competentes para su consulta. Las entidades han requerido consultas jurídicas con la finalidad de identificar los compromisos e implicación del proceso de sumisión. El Gobierno añade que una vez sea adoptada la propuesta final de protocolo, ésta será enviada también a los interlocutores sociales para su consulta. La Comisión toma nota asimismo de que la ANEP sostiene que no ha recibido las memorias sobre convenios ratificados que debe enviar el Gobierno en virtud del artículo 23 de la Constitución. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre los resultados de las consultas tripartitas celebradas en relación con el Protocolo con lineamientos sobre el procedimiento de sumisión, y que envíe una copia del mismo una vez éste sea adoptado. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, a) a e).**

Asistencia técnica. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, en el marco de la asistencia técnica de la OIT, en junio y julio de 2018 se realizaron diversos talleres de manera separada con representantes del Gobierno, organizaciones de trabajadores y organizaciones empresariales con miras a identificar puntos de consenso en relación con la reforma o propuesta de nuevo reglamento del CST y de esta forma acabar con la inactividad de dicho ente tripartito. Asimismo, el Gobierno indica que, en cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Misión de Contactos Directos, realizada en julio de 2017, se ha solicitado también el acompañamiento en las consultas a celebrar con el sector laboral y las gremiales empresariales en la formulación de propuestas de reformas legislativas para la ampliación de los derechos de libertad sindical y en la realización de acciones formativas y de fomento del diálogo social. En este sentido, el Gobierno informa de la realización de una primera ronda de consultas con el sector laboral con el objetivo de iniciar una propuesta de reforma del Código del Trabajo. Por último, el Gobierno indica que se continuará con las acciones programadas en el marco de seguimiento a las recomendaciones de la Misión de Contactos Directos en los próximos meses. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas en el marco de la asistencia técnica de la OIT, así como sobre el resultado de las mismas.**

Granada

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, solicitó al Gobierno que comunicara información detallada acerca de cada una de las consultas tripartitas celebradas sobre los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. El Gobierno indica en su memoria que el tripartismo está funcionando bien en el país, en la medida en que ha avanzado hacia el establecimiento en un comité de interlocutores sociales. El mencionado comité incluye organizaciones de la sociedad civil y la conferencia de iglesias, y es responsable de la supervisión del Programa de ajustes estructural del FMI, 2014-2016, en Granada, incluidas las reformas laborales. Además, el Gobierno especificó que, durante el período 2014-2015, se realizó una revisión general del Código del Trabajo. Asimismo, el Gobierno recuerda que, en virtud del artículo 21, 2), de la Ley de Empleo, las funciones del Consejo Consultivo del Trabajo reflejan las disposiciones del artículo 5, párrafo 1, del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada acerca de las actividades del Consejo Consultivo del Trabajo sobre las consultas tripartitas relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio, incluida información completa sobre las consultas celebradas sobre cada uno de los asuntos enumerados en la lista del artículo 5, párrafo 1, del Convenio. También se le pide al Gobierno que indique a qué intervalos se llevan a cabo las consultas, así como la naturaleza de la participación de los interlocutores sociales en las mismas.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guatemala

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1989)

Artículos 2 a 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con la celebración de consultas tripartitas entre 2015 y agosto de 2018 en el seno de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo sobre cada una de las materias relativas a las normas internacionales de trabajo requeridas por el Convenio. Entre las materias abordadas durante las señaladas consultas, se encontraba el examen de la posible ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y del Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175). A este respecto, la Comisión toma nota con *interés* de que la ratificación del Convenio núm. 175 fue registrada el 28 de febrero de 2017. Asimismo, el Gobierno informa de la celebración de consultas tripartitas sobre: las actividades de cooperación técnica celebradas con la OIT, resoluciones y conclusiones de los órganos de control de la OIT, y la promoción de un mejor conocimiento de las actividades de la OIT, siguiendo lo dispuesto en el párrafo 6 de la Recomendación núm. 152. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la creación de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical en virtud del acuerdo ministerial núm. 45-2018 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de los requerimientos formulados por los órganos de control de la OIT en el marco del examen de la queja presentada en 2012 por incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre las consultas celebradas respecto a cada una de las materias relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, a) a e). La Comisión solicita también al Gobierno que le mantenga informada de toda evolución relativa a la posible ratificación del Convenio núm. 189.**

Irlanda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que su respuesta al Estudio General 2019, Pisos de Protección Social, fue transmitida a la Confederación de Empresas y Empleadores de Irlanda (IBEC) y al Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), a los que se invitó a enviar sus comentarios al respecto al Gobierno o directamente a la OIT. La Comisión toma nota de la creación de un grupo interdepartamental de la OIT, en 2017, que incluye a los interlocutores sociales y trata de cuestiones relativas a la OIT como la perspectiva de ratificar los convenios no ratificados. El Gobierno añade que el grupo interdepartamental de la OIT mantuvo seis reuniones desde marzo de 2017 a septiembre de 2018. En lo que se refiere a las propuestas formuladas a la autoridad competente, el Gobierno señala que el Departamento de Iniciativa Empresarial e Innovación (DBEI) está consultando actualmente con la IBEC y el ICTU, a través de reuniones y discusiones celebradas en el marco del grupo interdepartamental de la OIT, sobre la ratificación propuesta del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. El Gobierno añade que se están examinando también, con la participación de los interlocutores sociales, los convenios y recomendaciones correspondientes al final de la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo, con miras a la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019. El Gobierno señala que se están examinando también a intervalos regulares los convenios y recomendaciones no ratificados. Añade que aun cuando no se han formulado propuestas de denuncias de los convenios ratificados desde su última memoria, cualquier denuncia de un convenio ratificado supondría realizar consultas con los interlocutores sociales. En relación con las memorias que han de presentarse en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, el Gobierno señala que el DBEI ha transmitido copias de todas las memorias a la IBEC y al ICTU, a los que se ha invitado a formular sus comentarios ya sea al DBEI o directamente a la OIT. **La Comisión acoge con beneplácito la información comunicada por el Gobierno y le pide que proporcione información actualizada sobre las actividades del grupo interdepartamental de la OIT, y que señale la manera, frecuencia, resultados de las consultas tripartitas correspondientes al Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre el contenido de los resultados de las consultas mantenidas sobre algunas de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo enumeradas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Más en concreto, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de las consultas celebradas sobre la ratificación propuesta del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.**

Jamaica

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas eficaces. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, además del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Comité Consultivo del Trabajo (LAC) está examinando el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). Asimismo, toma nota de que el LAC se reunió una vez al año entre 2012 y 2014, y desde el inicio de 2015 se ha reunido en tres ocasiones. El Gobierno reitera que las cuestiones relacionadas con el artículo 5 del Convenio en general no se abordan por separado en las reuniones del LAC y señala que, de vez en cuando, diferentes miembros del LAC abordan cuestiones concretas en materia de normas internacionales del trabajo, aunque esto no se hace en el marco del Comité. **La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada acerca del contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas por el Comité Consultivo del Trabajo sobre cada una de las cuestiones enumeradas en el artículo 5, 1), del Convenio, en particular: las respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia; las propuestas que hayan de presentarse al Parlamento en relación con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia, y, las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse sobre la aplicación de los convenios ratificados en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Madagascar

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información detallada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1. El Gobierno señala que está realizando esfuerzos para respetar las obligaciones que se derivan de los convenios que ha ratificado, incluido el Convenio núm. 144, y reconoce que las consultas tripartitas relativas a las normas internacionales del trabajo no se llevaban a cabo de forma efectiva. Sin embargo, tras la realización de un taller de fortalecimiento de las capacidades en materia de normas internacionales del trabajo y elaboración de memorias, organizado por la Oficina Internacional del Trabajo el 22 y 23 de octubre de 2016, se han conseguido mejoras importantes. En 2016, el Gobierno respondió a los comentarios de la Comisión relativos a los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111 y 182. Añade que, aunque se consultó a los interlocutores sociales antes de enviar definitivamente las respuestas, éstos no transmitieron ninguna observación a este respecto. En 2017, el Gobierno respondió a los comentarios de la Comisión en relación con los Convenios núms. 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 y 173. Tras la realización de consultas tripartitas, se han incluido las observaciones de los sindicatos de trabajadores más representativos en las respuestas definitivas. En lo que respecta al reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones a las que todavía no se ha dado efecto, el Gobierno indica que ha realizado consultas tripartitas sobre 11 instrumentos relativos al tiempo de trabajo (los Convenios núms. 1, 30, 47, 106 y 175 y las Recomendaciones núms. 13, 98, 103, 116, 178 y 182). El Gobierno precisa que ha enviado sus respuestas a los sindicatos más representativos de empleadores y de trabajadores, pero que la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE) ha sido la única que ha comunicado comentarios a este respecto. Añade que, del 28 de febrero al 1.º de marzo de 2017 el Ministerio de Trabajo organizó, con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo, un taller tripartito de validación en lo que respecta al Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). Los representantes de las tres partes presentes validaron por unanimidad el estado de las cosas en lo que respecta al Convenio. Además, se ha establecido un comité de orientación en materia de promoción del Convenio núm. 151 a fin de dar seguimiento al proceso de ratificación e intentar convencer a las autoridades competentes, tales como, el Gobierno y el Parlamento, sobre los efectos positivos de la ratificación. Asimismo, el Gobierno indica que respondió a la derogación de los Convenios núms. 21, 50, 64, 65, 86 y 104 y al retiro de las Recomendaciones núms. 7, 61 y 62, puntos que estaban inscritos en el orden del día de la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en 2008. Precisa que sus respuestas se comunicaron a los interlocutores sociales más representativos, pero que éstos no han realizado observaciones al respecto. En el párrafo 71 de su Estudio General de 2000, Consulta tripartita, la Comisión recuerda que el párrafo 2, 3), de la Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152) prevé que, las consultas no deberían efectuarse por escrito salvo «cuando los que participen en los procedimientos de consultas estimen que tales comunicaciones son apropiadas y suficientes». La Comisión toma nota con **interés** de que, con el apoyo de la Oficina, el Gobierno organizó los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2017 un taller de validación del estudio comparativo entre los textos en vigor y las disposiciones del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) y del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) con miras a su ratificación. Añade que las dos Hojas de ruta sobre la ratificación del MLC, 2006, y del Convenio núm. 188 fueron validadas por unanimidad por los actores tripartitos que asistieron al taller.

La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información actualizada sobre la forma en que garantiza que se llevan a cabo consultas tripartitas eficaces, así como sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas realizadas sobre cada una de las cuestiones contempladas en el párrafo 1 del artículo 5. Asimismo, solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan en lo que respecta a la ratificación de los Convenios núms. 151, 188 y MLC, 2006.

Artículo 3. Elección de los representantes de los empleadores y de los trabajadores por sus respectivas organizaciones. La Comisión toma nota de que la aplicación del decreto núm. 2011-490 sobre las organizaciones sindicales y la representatividad implica que los interlocutores tripartitos han de tomar diversas medidas, que incluyen la realización por el Ministerio de Trabajo de elecciones de delegados del personal a nivel de empresas situadas en el territorio de Madagascar, convocar a los interlocutores sociales para comparar los resultados provisionales y reunir por decreto ministerial los resultados definitivos de las elecciones a escala nacional y regional. En relación con este proceso, el Gobierno indica que en 2014 se realizaron elecciones de delegados del personal en todo Madagascar. Además, añade que se adoptó el decreto núm. 34-2015 sobre la determinación de la representatividad sindical para los años 2014 y 2015, que se publicó en febrero de 2014. Sin embargo, ciertos sindicatos de trabajadores, como la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE y el Sindicato Revolucionario malgache (SEREMA), se opusieron a este decreto alegando que el resultado del escrutinio que situaba a la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA) como el primero de los sindicatos más representativos a nivel nacional, era incorrecto. En marzo de 2015, esos sindicatos presentaron un recurso para que se anularan los resultados. El Gobierno explica que, habida cuenta de que el recurso tenía efecto suspensivo, la aplicación del decreto se suspendió hasta la deliberación realizada en 2017 por el Consejo de Estado en la que se desestimó el recurso. Además, habida cuenta de que la representatividad condiciona el funcionamiento de los diferentes organismos laborales con representación tripartita, como por ejemplo los consejos de gestión de los servicios médicos interempresas o el Consejo de Administración de la Caja Nacional de Previsión Social (CNAPS), los interlocutores tripartitos interesados acordaron adoptar una solución alternativa. En este contexto, el Gobierno indica que se ha procedido a una prolongación tácita de todos los representantes de las organizaciones sindicales que participan en las diversas estructuras de diálogo social existentes así como en los organismos en materia de trabajo antes mencionados. ***La Comisión pide al Gobierno que haga los esfuerzos necesarios, en consulta con los interlocutores sociales, para velar por que el tripartismo y el diálogo social se promuevan a fin de facilitar los procedimientos para garantizar que se realizan consultas tripartitas eficaces (artículos 2 y 3). A este respecto, pide al Gobierno que comunique información actualizada sobre todos los cambios que se produzcan en relación con la elección de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, así como las fechas de su elección, a los fines de los procedimientos previstos en el Convenio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que junto con su próxima memoria comunique copia del decreto en vigor.***

Malawi

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita al Gobierno a presentar una memoria que contenga información detallada sobre las consultas tripartitas realizadas sobre cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya información sobre la naturaleza de los informes o recomendaciones realizados como resultado de dichas consultas.

Artículo 5, 1), c) y e), del Convenio. Perspectivas de ratificación de los convenios y propuestas de denuncia de convenios ratificados. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que realizará consultas con los interlocutores sociales en relación con la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la OIT recomendó la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107 en relación con los trabajadores indígenas y la ratificación del instrumento más actualizado, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). En la solicitud directa que se formuló en 2010 sobre el Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45), la Comisión tomó nota de que el Consejo Consultivo Laboral Tripartito había aprobado la denuncia del Convenio núm. 45 y que el Gobierno estaba realizando consultas con los interlocutores sociales sobre la posible ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). ***La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta al reexamen de convenios no ratificados — tales como los Convenios núms. 169 y 176 — a fin de promover, cuando proceda, su aplicación o ratificación y a denunciar los convenios obsoletos.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Nigeria

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

Artículo 1 del Convenio. Consultas con las organizaciones representativas. Desde 2012, la Comisión ha solicitado reiteradamente al Gobierno que informe sobre los resultados de la reforma legislativa y sobre su impacto en la mejora de las consultas con las organizaciones representativas que disfrutan de libertad sindical y de asociación, en conformidad con el Convenio. En este contexto, la Comisión también ha recordado sistemáticamente al Gobierno que es importante que las organizaciones de trabajadores y de empleadores disfruten de libertad sindical y de asociación, sin la cual no puede existir un sistema eficaz de consulta tripartita. En su respuesta, el Gobierno se refiere al Consejo Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC), que es la instancia tripartita institucional establecida con arreglo a las disposiciones y requisitos del Convenio. Añade que se están realizando consultas con los interlocutores sociales a fin de hacer avanzar la revisión de la legislación nacional del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, el 18 de abril de 2018, se realizó una reunión de partes interesadas bajo los auspicios de la Oficina de la OIT en Abuja. El Gobierno añade que, el 23 de abril de 2018, las partes interesadas también participaron en una audiencia pública ante la Asamblea Nacional. **La Comisión expresa la firme esperanza de que la reforma legislativa pendiente se finalizará sin más demora. Pide de nuevo al Gobierno que informe sobre los resultados de la reforma y su impacto en la mejora de las consultas con las organizaciones representativas que disfrutan de libertad sindical y de asociación, en conformidad con el Convenio. Asimismo, solicita al Gobierno que indique los resultados de las reuniones sobre la reforma que se celebraron en abril de 2018 con las partes interesadas, y que transmita copia de la legislación pertinente una vez que se haya adoptado.**

Artículo 5, párrafo 1. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. El Gobierno indica que las consultas tripartitas se utilizan para responder a los cuestionarios relativos a los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La Comisión toma nota de que el 14 y 15 de mayo de 2018 se realizó una sesión interactiva para la delegación tripartita de Nigeria en la 107.^a reunión de la CIT para examinar las cuestiones que figuraban en el orden del día de la CIT. El Gobierno añade que los días 26 y 27 de junio de 2018 se celebró un taller práctico tripartito sobre la presentación de memorias a fin de ayudar a Nigeria a cumplir con sus obligaciones de presentación de memorias con arreglo al artículo 22 de la Constitución de la OIT. Asimismo, el Gobierno indica que se seguirán realizando consultas tripartitas efectivas sobre las propuestas realizadas a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se realizaron consultas con las organizaciones representativas en relación con la sesión marítima especial del NLAC para la ratificación del MLC, 2006, celebrada en febrero de 2013, que condujo a la ratificación de dicho Convenio en junio de 2013. Además, un comité técnico tripartito sobre la gente de mar integrado por las partes interesadas celebró una reunión el 26 de febrero de 2014 para examinar una propuesta conjunta sobre la enmienda del Código en relación con las reglas 2.5 y 4.2 del MLC, 2006. Las decisiones que se tomaron en esta reunión condujeron al Gobierno a convocar una reunión de expertos técnicos del NLAC sobre la enmienda del Código del MLC, 2006, a fin de articular la posición tripartita de Nigeria en apoyo a la enmienda. **La Comisión acoge con beneplácito la información proporcionada y solicita al Gobierno que transmita información completa y detallada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio, incluidas las consultas en relación con los cuestionarios sobre: los puntos incluidos en el orden día de la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, a)); las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en relación con la sumisión de convenios y recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT (artículo 5, párrafo 1, b)); el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto (artículo 5, párrafo 1, c)); las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la OIT sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, d)), y las propuestas sobre la posible denuncia de convenios ratificados (artículos 5, párrafo 1, e)).**

Artículo 6. Funcionamiento de los procedimientos consultivos. El Gobierno indica que las organizaciones representativas han sido consultadas en conformidad con el artículo 6. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique si, con arreglo al artículo 6, se ha consultado a las organizaciones representativas para preparar un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos de consulta previstos por el Convenio y, de ser así, que indique el resultado de esas consultas.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Serbia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2005)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión recuerda que la Comisión de la Conferencia, en su reunión de mayo-junio de 2018, recomendó a las autoridades nacionales que adoptaran las medidas necesarias y adecuadas para velar por que se realicen consultas efectivas y eficientes con los interlocutores sociales nacionales en aplicación del Convenio núm. 144. Asimismo, recomendó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para que se celebren consultas significativas, efectivas y oportunas sobre cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, en particular dentro del marco del Consejo Económico y Social de la República de Serbia. La Comisión de la Conferencia también solicitó al Gobierno que proporcionara información a la Comisión de Expertos, antes de su reunión de noviembre de 2018, sobre las cuestiones discutidas y la frecuencia de las consultas tripartitas. Invitó al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT en la relación con las conclusiones.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Sin embargo, la Comisión entiende que el Gobierno ha solicitado asistencia técnica en relación con la aplicación del Convenio. A este respecto, la OIT está proporcionando asistencia técnica con miras a la realización de un taller en enero de 2019. **La Comisión pide al Gobierno que informe sobre los resultados del taller tripartito contemplado. Asimismo, insta firmemente a que continúe realizando esfuerzos para adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado para garantizar que se realizan consultas tripartitas eficaces de conformidad con las disposiciones del Convenio, y que informe sobre la naturaleza, el contenido y la frecuencia de las consultas en relación con las cuestiones que entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, párrafo 1, a) a e), del Convenio.**

Sierra Leona

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1985)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2004.

Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, transmitida en junio de 2004, en la que indica su compromiso para promover la consulta tripartita en todo el país, así como el apoyo a la delegación tripartita en la Conferencia Internacional del Trabajo. **La Comisión espera que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen de qué manera se aplica el Convenio y que la próxima memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre toda medida adoptada para que se realicen consultas tripartitas efectivas en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).**

La Comisión recuerda que la Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y para apoyar las actividades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las consultas requeridas por el Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 28 de mayo y el 29 de agosto de 2018. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

La Comisión recuerda que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración declaró admisible una queja alegando el incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de los Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) presentada por un grupo de delegados empleadores en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2015), en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT y en su 332.ª reunión (marzo de 2018), el Consejo de Administración decidió que se constituyera una comisión de encuesta. En estas circunstancias, y de acuerdo con la práctica usual que separa el funcionamiento del sistema de control durante el periodo de funcionamiento de la comisión de encuesta, la Comisión retomará su control de la aplicación del Convenio en la República Bolivariana de Venezuela una vez que dicha comisión de encuesta haya terminado con su misión.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 144** (*Belice, República de Corea, Dominica, ex República Yugoslava de Macedonia, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría, Indonesia, Iraq, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Liberia, Lituania, Malasia, Malí, Marruecos, Mauricio, México, República de Moldova, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Pakistán, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Trinidad y Tabago, Túnez, Ucrania, Viet Nam, Yemen, Zambia*).

Administración e inspección del trabajo

Albania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

(ratificación: 2004)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129.

Artículos 3, 1), a) y b), y 2), y 14 del Convenio núm. 81 y artículos 6, 1), a) y b), y 3), y 19 del Convenio núm. 129. Actividades de inspección del trabajo en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en la agricultura. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior, de que el número de inspecciones en el sector agrícola se ha mantenido en el 0,8 por ciento del total de las inspecciones. La Comisión toma nota a este respecto de que, según lo indicado en el Plan de acción y en la política nacional de seguridad y salud en el trabajo (2016-2020), casi la mitad de la fuerza de trabajo en Albania está empleada en el sector agrícola. La Comisión toma nota también de la indicación del Gobierno de que no se ha impartido ninguna formación a los inspectores sobre temas relacionados con la agricultura. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la legislación en la agricultura, también con respecto a la SST, y que siga comunicando información sobre el número de inspecciones realizadas en ese sector. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la formación de los inspectores del trabajo sobre temas relacionados con la agricultura, especificando los temas, la duración, la participación y los resultados.**

Artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129. Condiciones de servicio. La Comisión tomó nota anteriormente de la información contenida en el informe de auditoría de la OIT, de 2009, sobre los servicios de inspección del trabajo, acerca de que la remuneración de los inspectores del trabajo no era atractiva y de que no había una estrategia real de recursos humanos para la contratación y el desarrollo profesional. La Comisión toma nota de la copia de la decisión núm. 726, de 21 de diciembre de 2000, sobre los salarios de los trabajadores de las instituciones presupuestarias, proporcionada junto con la memoria del Gobierno, en la que se desglosan los salarios mensuales de los funcionarios públicos. **La Comisión pide al Gobierno que indique si se ha adoptado alguna medida desde el informe de auditoría de la OIT, de 2009, para mejorar la escala de remuneraciones y las perspectivas profesionales de los inspectores del trabajo en relación con otras categorías comparables de funcionarios públicos, y pide al Gobierno que proporcione información sobre la escala real de remuneraciones y las perspectivas profesionales de los inspectores del trabajo en relación con otras categorías comparables de trabajadores estatales que ejercen funciones similares, tales como los inspectores fiscales o los policías.**

Artículos 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129. Personal y recursos materiales de los servicios de inspección laboral. Ámbito de las inspecciones realizadas. La Comisión tomó nota anteriormente de la indicación del Gobierno de que 167 inspectores del trabajo no eran suficientes para desempeñar plenamente las tareas de inspección exigidas por la ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el número de inspectores del trabajo empleados actualmente por el Organismo Estatal de Inspección del Trabajo y Servicios Sociales (SLISS) es de 155 empleados, 37 de ellos a nivel central y 118 empleados a nivel regional. La Comisión toma nota además de que el Gobierno informa que las oficinas regionales todavía no disponen de un equipo de oficina suficiente, que el SLISS sólo tiene ocho vehículos (para 12 regiones) y que los fondos son insuficientes para reembolsar a los inspectores del trabajo que desempeñan sus funciones. Toma nota a este respecto de la indicación del Gobierno en su memoria presentada en relación con el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) de que el principal problema para la inspección del trabajo es la falta de recursos financieros, lo que limita las posibilidades de que los inspectores viajen a entidades que deberían ser inspeccionadas. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que el presupuesto asignado a las inspecciones del trabajo sea suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las obligaciones de la inspección, en vista de la disminución del personal de inspección del trabajo y de la insuficiencia continua de equipos y vehículos. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre la dotación de personal y los recursos materiales del SLISS al realizar visitas de inspección en la agricultura, incluido el transporte y las oficinas locales.**

Artículo 12, 1), del Convenio núm. 81 y artículo 16, 1), del Convenio núm. 129. Derecho de los inspectores a entrar libremente en los establecimientos de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el 90 por ciento de las inspecciones se realizan conformemente a un plan predeterminado elaborado en cooperación con los inspectores del trabajo utilizando el portal electrónico de la inspección del trabajo, con la aprobación de la Dirección regional de inspección. Si bien el 10 por ciento de las inspecciones no están programadas y/o son inspecciones de emergencia, que pueden realizarse sin autorización o notificación, el Gobierno informa que el funcionario responsable de la concesión de las autorizaciones deberá expedir una autorización en un plazo de veinticuatro horas. El Gobierno señala que los inspectores del trabajo disponen de tarjetas para identificarse cuando entran en establecimientos de trabajo y efectúan inspecciones. La Comisión observa que, en los casos en que sólo el 10 por ciento de todas las inspecciones no están programadas y/o responden a situaciones de emergencia, ello podría socavar la efectividad de las inspecciones programadas preestablecidas y de que los problemas podrían ocultarse y no detectarse las consecuencias. **La Comisión pide al Gobierno que indique el procedimiento mediante el cual el funcionario responsable de la concesión de autorizaciones deberá otorgar una autorización, y las consecuencias para la inspección si dicha autorización no se otorga dentro del plazo legal previsto de veinticuatro horas. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique con qué frecuencia tienen lugar el 10 por ciento de las inspecciones no programadas y/o de emergencia dentro de las veinticuatro horas, con qué frecuencia tienen lugar sin una notificación previa y con qué frecuencia concluyen en la existencia de infracciones o condiciones inseguras.**

Artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81 y artículos 12, 1), 22 y 24 del Convenio núm. 129. Procedimientos y sanciones. La Comisión tomó nota, en su comentario anterior, de que el número de multas impuestas era relativamente bajo

(381 multas en 2011 en relación con más de 14 000 inspecciones). A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Ley núm. 10279, de 2010, sobre Infracciones Administrativas, se utiliza conjuntamente con el artículo 48 de la Ley sobre la Inspección núm. 10433 para imponer sanciones administrativas apropiadas cuando se detecta una infracción durante el proceso de inspección. El Gobierno señala que la ley tiene por objeto garantizar un trato justo y equitativo y que los inspectores apliquen reglas no discriminatorias. El Gobierno hace hincapié en que la finalidad principal de la política llevada a cabo por el SLISS es reducir el número de multas de forma racional, centrándose en la prevención y la sensibilización acerca de la SST, en lugar de sanciones. Además, habiendo señalado en 2013 que la Inspección del Trabajo no requería el pago adelantado por la ejecución de penas de multa emitidas, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el SLISS efectuó el reembolso de la cuantía de las sanciones por un total de 11 487 713 de lek de Albania (ALL) (aproximadamente 101 780 dólares de los Estados Unidos) en 2014 y 4 070 255 de ALL (aproximadamente 46 060 dólares de los Estados Unidos) de enero a mayo de 2015. **Tomando nota de que la finalidad principal de la política llevada a cabo por el SLISS es reducir el número de multas de forma racional, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las multas impuestas en virtud de las inspecciones del trabajo, el número de órdenes de ejecución judicial, así como el número de accidentes denunciados y las violaciones detectadas durante el periodo cubierto en su memoria. La Comisión pide además información relativa al reembolso del monto de las sanciones por parte del SLISS, indicando las condiciones de dicho reembolso y el monto total del pago adelantado y no reembolsado a la Inspección.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 3, 2), 10 y 16 del Convenio. Funciones y número de inspectores del trabajo y frecuencia de las visitas de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, según una descripción de puestos de trabajo de 2009 comunicada por el Gobierno, los inspectores del trabajo tenían la obligación de desempeñar, además de sus funciones principales, otras funciones en el Ministerio del Trabajo así como las funciones que les asignaran su supervisor directo, el Comisario del Trabajo y el Comisario del Trabajo Adjunto. Había tomado nota asimismo de que, entre 1997 y 2010, el número de inspecciones del trabajo había fluctuado enormemente, y de que, entre 2009 y 2010, éstas últimas se habían reducido prácticamente a la mitad (pasando de 248 a 128). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria actual de que la descripción de puestos de trabajo de 2009 de los inspectores del trabajo sigue siendo válida, y de que las fluctuaciones y reducciones mencionadas del número de inspecciones del trabajo obedecen a problemas imprevistos. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre el número actual de inspectores del trabajo (incluido el número de inspectores del trabajo especializados en seguridad y salud en el trabajo (SST)), y que indique si este número es suficiente para asegurar el desempeño de las funciones de la inspección. Solicita asimismo que el Gobierno proporcione información sobre cualquier función adicional que se confíe a los inspectores del trabajo (tales como la mediación y la conciliación de los conflictos laborales), y sobre las medidas adoptadas para asegurar que ninguna otra función que se asigne a los inspectores del trabajo interfiera en el ejercicio efectivo de sus funciones principales.**

Artículo 5, a) y b). Cooperación entre los servicios de inspección del trabajo y otros servicios gubernamentales o instituciones públicas, y colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión lamenta tomar nota nuevamente de que el Gobierno no ha proporcionado la información solicitada sobre el contenido y las modalidades de cualquier cooperación existente entre la inspección del trabajo y el Ministerio de Salud (o información sobre cualquier dificultad que impida dicha cooperación en la práctica). La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno no ha proporcionado una vez más la información solicitada sobre los detalles de la colaboración entre la inspección del trabajo y los interlocutores sociales. **Por lo tanto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que suministre información detallada sobre las medidas adoptadas con miras a desarrollar la cooperación entre la inspección del trabajo y el Ministerio de Salud (tales como el intercambio regular de información y de datos, seminarios de formación comunes o conferencias). También solicita, una vez más, que el Gobierno proporcione detalles sobre el contenido y las modalidades de cualquier cooperación existente (como la organización de conferencias o de comités conjuntos, u órganos similares, con el fin de examinar las cuestiones relativas al cumplimiento de la legislación nacional, y a la seguridad y la salud de los trabajadores), y que indique si la inspección del trabajo está representada en el Consejo Nacional del Trabajo.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Arabia Saudita

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1978)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Funciones de la inspección del trabajo relativas a los trabajadores extranjeros. Ley de Inmigración. La Comisión recuerda la discusión celebrada en la 100.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2011) sobre la aplicación de este Convenio y el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo, en particular en lo que respecta a la protección de los trabajadores extranjeros. En relación con esto, la Comisión tomó nota anteriormente de las conclusiones alcanzadas en una

evaluación de la OIT llevada a cabo en diciembre de 2011, conforme a las cuales la mayoría de las visitas de inspección del trabajo tenían por objeto verificar la legalidad de la situación de empleo de los trabajadores extranjeros. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria, en respuesta a la solicitud de la Comisión, a una campaña de regularización relativa a los trabajadores extranjeros indocumentados que están en el país desde 2013, que permitió a estos trabajadores regular su situación con respecto a la residencia sin ser sancionados de conformidad con la Ley de Inmigración. Toma nota asimismo de que, durante el período de la campaña de regularización, la ejecución de las órdenes de expulsión no conllevó ningún costo para los trabajadores extranjeros en cuestión (es decir, sanciones por violaciones de la Ley de Inmigración o tasas por el permiso de residencia o de trabajo). Por lo referente a la imposición de sanciones a los trabajadores detectados por trabajar sin ser titular de un permiso de trabajo válido, la Comisión observó en su Estudio General de 2017, Instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo, párrafo 452, que los trabajadores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad tal vez sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen que las actividades de inspección entrañen consecuencias negativas para ellos, como la pérdida de su empleo o su expulsión del país. **Recordando que con arreglo al Convenio, la principal función de los inspectores del trabajo es brindar protección a los trabajadores y no aplicar la Ley de Inmigración, la Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre las violaciones de las normas del trabajo detectadas en relación con los trabajadores extranjeros que se encuentran en situación irregular, y sobre todas las sanciones impuestas, clasificadas según las disposiciones legales con las que están relacionadas. Dado que el Gobierno no ha proporcionado una respuesta a este respecto, la Comisión también pide una vez más al Gobierno que facilite información detallada sobre el tiempo y los recursos de la inspección del trabajo dedicados a las actividades en el ámbito de la verificación de la legalidad del empleo en comparación con las actividades destinadas a asegurar la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores (en relación con el tiempo de trabajo, el salario, la seguridad y salud, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, etc.).**

Protección de los derechos de los trabajadores extranjeros, en particular, en lo tocante al pago de los salarios. La Comisión recuerda sus comentarios en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), publicados en 2017, en los que tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) referentes a la situación generalizada de los atrasos salariales de los trabajadores extranjeros en el país, que a menudo se encontraban en una situación muy difícil en la que se confiscaba su pasaporte. Recuerda asimismo sus comentarios en relación con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), publicados en 2017, en los que señaló que si bien el sistema de patrocinio se había abolido formalmente, parecía que este sistema seguía aplicándose en la práctica y que los trabajadores migrantes que experimentaban abusos y trato discriminatorio tal vez siguieran siendo reacios a presentar quejas por temor a las represalias del empleador o por la incertidumbre acerca de si esto conduciría, entre otros resultados, a su deportación. En respuesta a la solicitud de información formulada por la Comisión en relación con el presente Convenio sobre el funcionamiento del sistema de protección de los salarios, el Gobierno hace referencia a la implantación gradual del sistema electrónico de supervisión de la protección de los salarios que tiene por objeto registrar a 3 489 empresas y a su utilización obligatoria de este sistema. El Gobierno indica asimismo que, en 2015, se detectaron violaciones del derecho de los trabajadores al pago puntual de su salario en relación con 4 493 trabajadores empleados por 365 empresas, que 459 casos se remitieron a los organismos judiciales y que ese año se impusieron 596 sanciones.

Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno subraya, en respuesta a su solicitud, que el pago de las prestaciones pendientes, incluidos los salarios y la indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de los trabajadores extranjeros que se encuentran en situación irregular se garantiza antes de que retornen a su país de origen. **Saludando la información sobre la garantía del pago de prestaciones pendientes a los trabajadores extranjeros antes de que retornen a su país de origen, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione estadísticas pertinentes a este respecto. Remitiéndose a su solicitud formulada en relación con el Convenio núm. 29, la Comisión pide al Gobierno que indique el modo en que los inspectores del trabajo ayudan a los trabajadores extranjeros en caso de violación de sus derechos, en particular con respecto a cuestiones relacionadas con los abusos, la discriminación, la confiscación de pasaportes y la sustitución de contratos. La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre todo avance en relación con la supervisión de los atrasos salariales en el país, y que siga facilitando información estadística sobre el número de violaciones detectadas y las sanciones impuestas a este respecto.**

Artículos 10, 11 y 16. Número de inspectores del trabajo y de visitas de inspección. Medios materiales disponibles para los servicios de inspección del trabajo. La Comisión recuerda el compromiso suscrito por el Gobierno durante las discusiones mantenidas en la Comisión de Aplicación de Normas en 2010 de crear 1 000 puestos adicionales de inspección del trabajo. Toma nota de que el número de inspectores del trabajo aumentó de 210 en 2010 a 606 en 2015, y de que el número de visitas de inspección del trabajo en el mismo período se incrementó de 90 048 a 148 312. La Comisión toma nota además de que en el informe de la inspección del trabajo de 2015 se indica que el número insuficiente de inspectores del trabajo en relación con el número de lugares de trabajo sujetos a inspección plantea un desafío. Según la información estadística contenida en el informe anual de la inspección del trabajo de 2017, transmitida por el Gobierno, en 2017 había 548 inspectores del trabajo y se realizaron 76 107 inspecciones del trabajo. **Tomando nota de la disminución del número de inspectores del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para asegurar la existencia de un número adecuado de inspectores del trabajo en relación con los lugares de trabajo sujetos a inspección, tal como se prevé en su compromiso suscrito en la Comisión de Aplicación de Normas, y que siga proporcionando información sobre el número de inspectores del trabajo, en particular sobre el número de inspectoras**

dentro de los servicios de inspección del trabajo, así como sobre el número de inspecciones del trabajo realizadas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre los motivos de la disminución del número de inspecciones efectuadas.

Artículos 17 y 18. Aplicación de sanciones. La Comisión toma nota de que, según la evaluación realizada por la OIT en 2011, la mayoría de los informes de infracción que imponían sanciones fueron rechazados por los tribunales debido al sistema existente, que requiere la firma de los empleadores o de sus representantes. La Comisión toma nota de que los informes de inspección del trabajo enviados por el Gobierno contienen estadísticas sobre el número de advertencias orales y escritas y el número de informes de infracción, pero no información sobre la naturaleza de las infracciones detectadas (en relación, por ejemplo, con el tiempo de trabajo, los retrasos salariales, la seguridad y salud en el trabajo, etc.) ni sobre las sanciones impuestas (como la cuantía de las multas). ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el número de violaciones detectadas, la naturaleza de las violaciones y sus resultados, incluidos los informes de infracción, la remisión a las autoridades judiciales y la naturaleza de las sanciones impuestas (multas o penas de prisión). La Comisión pide asimismo que facilite información sobre toda dificultad que haya surgido al aplicar sanciones por violaciones detectadas (como el rechazo de las sanciones por los tribunales debido a cuestiones de procedimiento), y sobre toda medida adoptada para mejorar el sistema de aplicación de sanciones por violaciones de la legislación laboral.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 2, 4 y 23 del Convenio. Inspección del trabajo en las zonas francas de exportación (ZFE) y en las zonas económicas especiales (ZEE). La Comisión recuerda sus reiteradas solicitudes para que las ZFE y las ZEE se situaran en el ámbito de competencia de la inspección del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el proyecto de ley sobre el trabajo en las ZFE (que también se aplicará a las ZEE) se ha reexaminado con el fin de incluir disposiciones sobre la inspección del trabajo por el servicio nacional de inspección del trabajo, junto con la supervisión existente llevada a cabo por la Autoridad de las Zonas Francas de Exportación de Bangladesh (BEPZA). La Comisión toma nota asimismo de que la CSI critica que el nuevo proyecto de ley sobre el trabajo en las ZFE siga encomendando a la BEPZA la supervisión de las normas del trabajo en las ZFE. El sindicato añade que la BEPZA es una entidad fundamentalmente interesada en proteger la inversión y no en hacer frente a las violaciones de la legislación laboral cometidas por los trabajadores. La CSI indica a este respecto que no debería haber discriminación entre los trabajadores dentro y fuera de las zonas con respecto a sus derechos. ***Tomando nota con preocupación de que ya han transcurrido más de cuatro años desde que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia formulara una solicitud sobre el tema, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno a que finalice su proyecto revisado de Ley del Trabajo en las ZFE en un futuro cercano con miras a situar las ZFE y las ZEE en el ámbito de competencia de la inspección del trabajo.***

Artículo 6. Situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que planteaba problemas retener a los inspectores del trabajo dentro de los servicios de inspección del trabajo, y de que una serie de inspectores del trabajo contratados recientemente habían abandonado el departamento de inspección de fábricas y establecimientos (DIFE), después de haber sido formados, para trabajar en otros servicios gubernamentales. Tomó nota asimismo de que los servicios de inspección del trabajo ofrecían unas perspectivas profesionales menos favorables que otros servicios gubernamentales, y pidió al Gobierno que revisara los perfiles profesionales y grados de los inspectores del trabajo con miras a asegurar que reflejaran las perspectivas profesionales de los funcionarios públicos que desempeñaban funciones similares en otros servicios gubernamentales, como los inspectores fiscales o la policía.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en una tabla en respuesta a la solicitud de la Comisión, que muestra que el salario de los inspectores del trabajo (regulares) y de los inspectores fiscales son iguales, pero que los policías reciben el mismo salario que el inspector general adjunto (que es uno de los grados profesionales más altos en el servicio de inspección del trabajo). La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que un estudio sobre los motivos de la elevada tasa de abandono, recomendaba, entre otras cosas, el desarrollo de las competencias del personal de la inspección del trabajo y la creación de puestos de categoría superior. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información adicional sobre la estructura salarial y de prestaciones aplicable a los inspectores del trabajo y a los funcionarios públicos que ejercen funciones similares dentro de otros servicios gubernamentales (como los inspectores fiscales o la policía) en las categorías profesionales superiores de dichos servicios, así como información sobre toda medida adoptada o prevista para armonizar las condiciones de servicio con las de los funcionarios públicos que desempeñan funciones similares. Pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre las medidas concretas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones formuladas en el***

estudio sobre los motivos de la elevada tasa de abandono, en relación con la creación de puestos de categoría superior dentro de los servicios de inspección del trabajo.

Artículos 7, 10, 11 y 16. Recursos humanos y recursos materiales de la inspección del trabajo. Frecuencia y esmero de las inspecciones del trabajo. En sus últimos comentarios, la Comisión saludó el incremento continuo del número de inspectores del trabajo desde la tragedia del Rana Plaza en 2013. Sin embargo, **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha proporcionado ninguna información nueva sobre los progresos realizados en cuanto a la contratación de inspectores del trabajo para cubrir los 575 puestos de inspección del trabajo aprobados en 2014. Asimismo, toma nota con **preocupación** que además de que el número de inspectores del trabajo ha disminuido de 345 a 320 entre 2017 y 2018. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la CSI acerca de que la legislación laboral sigue sin aplicarse efectivamente a causa de la debilidad del sistema de inspección del trabajo, y de que la frecuencia y la calidad de las inspecciones del trabajo continúan siendo insuficientes. El sindicato añade que la incidencia de accidentes del trabajo mortales sigue siendo alta en la industria textil, de desguace de buques y de trituración de piedras. **La Comisión insta al Gobierno a que siga sin escatimar esfuerzos para contratar a un número adecuado de inspectores del trabajo calificados, y para cubrir los 575 puestos de inspección del trabajo que ya se aprobaron en 2014. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número actual de inspectores del trabajo que desempeñan sus funciones en el DIFE, y sobre el número de visitas de inspección del trabajo efectuadas, incluida información específica sobre aquellas industrias que registran altas tasas de accidentes del trabajo. Tomando nota de la información proporcionada por el Gobierno a este respecto, la Comisión pide asimismo a este último que siga facilitando información sobre el presupuesto, el equipo y los medios de transporte de los que dispone el DIFE, y sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo.**

Artículos 12, 1), 15, c), y 16. Inspecciones sin previo aviso. Deber de confidencialidad en relación con las quejas. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que, en 2014, sólo el 2,5 por ciento de todas las inspecciones eran aleatorias o como consecuencia de una queja y se realizaban sin previo aviso. Puso de relieve que, en vista de estas cifras extremadamente bajas, se ponía en peligro tanto la obligación de los inspectores del trabajo de mantener la confidencialidad acerca de que una inspección se efectuaba como consecuencia de una queja, como la eficiencia de las inspecciones. La Comisión tomó nota ulteriormente de la indicación del Gobierno de que, entre 2016 y 2017, el porcentaje de las inspecciones no anunciadas (es decir, aleatorias o como consecuencia de una queja, realizadas sin previo aviso) había aumentado al 20 por ciento de todas las inspecciones, y de que la codificación de la obligación de mantener confidencial la existencia o fuente de una queja podría considerarse en el contexto de la revisión propuesta de la Ley del Trabajo de Bangladesh (BLA). La Comisión toma nota de que el Gobierno proporciona información sobre el número total de inspecciones y sus resultados, pero no la información requerida sobre los resultados de las visitas de inspección sin previo aviso. La Comisión toma nota además de que el Gobierno no ha suministrado la información requerida sobre ninguna medida adoptada para codificar la obligación de confidencialidad en la legislación nacional. **La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que considere la codificación de la obligación de confidencialidad, ya sea en el contexto de la revisión propuesta de la BLA o en otros reglamentos o directrices relativos a la inspección del trabajo, a efectos de certeza jurídica. Pide asimismo al Gobierno que proporcione información sobre el número de visitas de inspección que se realizaron sin previo aviso, y le pide una vez más que suministre información sobre los resultados de las inspecciones sin previo aviso que cubren las investigaciones de accidentes o que atienden las quejas, incluida la naturaleza de las resoluciones alcanzadas, las violaciones detectadas y las sanciones impuestas.**

Artículos 17 y 18. Procedimientos judiciales, aplicación efectiva y sanciones suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a la solicitud de estadísticas de la Comisión, sobre el número de inspecciones efectuadas y de violaciones detectadas en el año fiscal 2017-2018 (en total, 39 710 inspecciones y 257 904 violaciones). Toma nota de que, en el mismo período, 1 689 casos se presentaron ante los tribunales del trabajo, de los cuales se resolvieron 781. La Comisión toma nota con **preocupación** de que hasta mayo de 2018, el número de sanciones impuestas ascendieron a 2,85 millones de takas bengalís (aproximadamente 3 401 dólares de los Estados Unidos), cantidad que con base en el número de inspecciones resueltas, parece bastante baja (aproximadamente un promedio de 5 dólares de los Estados Unidos por resolución). La Comisión toma nota asimismo de que, según la información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su solicitud, existe un funcionario letrado en el DIFE encargado del seguimiento de las violaciones de la legislación laboral detectadas por los inspectores del trabajo, de que una empresa de asesoría jurídica está afiliada al DIFE, y de que se ha previsto establecer una unidad jurídica en el DIFE. Sin embargo, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no proporciona una respuesta en relación con la solicitud de la Comisión de información sobre toda medida adoptada o prevista para asegurar que las sanciones impuestas por violaciones de la legislación laboral sean suficientemente disuasorias, en el contexto de la reforma legislativa propuesta de la BLA. En relación con esto, la Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la CSI relativas a la necesidad de fortalecer las sanciones para los empleadores que incumplen las disposiciones legales. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre toda medida adoptada o prevista, en el contexto de la reforma legislativa propuesta, a fin de asegurar que las sanciones por las violaciones de la legislación laboral sean suficientemente disuasorias y, según proceda, de mejorar los procedimientos para la aplicación efectiva de las disposiciones legales. En relación con esto, también pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el establecimiento de una unidad jurídica en el DIFE, en particular sobre el número de miembros del personal y sus funciones, una vez que se haya establecido. Por último, pide una vez más al Gobierno que suministre información**

sobre el resultado concreto de los casos remitidos a los tribunales del trabajo (como la imposición de multas o penas de prisión y las disposiciones legales con las que están relacionadas).

La Comisión recuerda asimismo que había indicado anteriormente que el Departamento de Trabajo (DOL) se ocupaba de los casos de libertad sindical (incluidos los casos de discriminación antisindical). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión, de que el DOL se encarga de los casos de libertad sindical porque este departamento también es responsable del registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y de sus actividades. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno de que los funcionarios del trabajo del DOL se ocupan de los casos de presuntas violaciones de la libertad sindical a través de la conciliación. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más sus indicaciones de que los casos de discriminación antisindical no suelen ser apropiados para la conciliación o mediación y, en cualquier caso no deben socavar la aplicación estricta de las leyes de que se trate. *Remitiéndose a sus comentarios en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para asegurar la aplicación de las disposiciones legales relativas a la libertad sindical.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Centroafricana

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1964)

Artículo 3, 2), del Convenio. Funciones de los inspectores del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que una tercera parte de los inspectores del trabajo tenía funciones de supervisión y que, según el Código del Trabajo, los inspectores del trabajo eran responsables de la conciliación en materia de disputas laborales individuales y colectivas. Pidió al Gobierno que indicara un estimado del tiempo tomado en las funciones principales como dispuesto en el *artículo 3, 1), del Convenio*, en comparación con otras funciones de la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión observa que, de acuerdo con el memorándum técnico en la Estrategia nacional de desarrollo y modernización del sistema de administración laboral de la República Centroafricana, preparado en 2017 con el apoyo de la OIT y adjunto al informe anual del Gobierno, la conciliación en materia de disputas individuales y colectivas del trabajo constituye una gran parte del trabajo de los inspectores. La Comisión también toma nota de que, según el Código del Trabajo, a los inspectores se les asignan otras funciones relacionadas al ejercicio de negociación colectiva y libertad sindical (como registrar sindicatos profesionales, supervisar elecciones de los representantes del personal, facilitar la conclusión de convenios colectivos del trabajo y recibir notificación previa de huelgas y cierres patronales). **La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas tomadas o previstas para asegurar que cualquier función adicional asignada a los inspectores del trabajo no entorpezca el ejercicio de sus funciones principales. Además, pide al Gobierno que transmita información de los avances al respecto y del tiempo y recursos dedicados por los inspectores laborales en sus diversas funciones.**

Artículos 11 y 16. Recursos materiales y medios de transporte puestos a disposición de los inspectores del trabajo y reembolso de los gastos necesarios. Frecuencia de las visitas de inspección y eficacia del sistema. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de: a) la persistente falta de recursos materiales puestos a disposición de los servicios de inspección del trabajo, inclusive para las instalaciones y los medios de transporte, así como para el reembolso de los gastos necesarios, y b) la baja frecuencia de las visitas de inspección. La Comisión toma nota a este respecto de la información contenida en la memoria del Gobierno sobre los esfuerzos realizados por este último en 2017 a fin de proporcionar una moto a cada Dirección Regional del Trabajo. El Gobierno indica en particular que los servicios prefecturales algunas veces dependen de los empleadores para que les proporcionen transporte, y que los servicios prefecturales creados recientemente no disponen de locales propios. La Comisión toma nota asimismo de la información contenida en el informe parcial de actividades de 2013 del Ministerio del Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Seguridad Social, según la cual dificultades de diversa índole han obstaculizado el logro efectivo de los objetivos perseguidos por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, tales como los problemas de seguridad y el saqueo de la Dirección General del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno según la cual las dificultades de orden político-militar que surgieron en 2012 siguen teniendo un impacto negativo en varios proyectos de reforma en curso. **Tomando debidamente nota de la difícil situación que prevalece en el país, la Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para encarar las dificultades detectadas y para garantizar la eficacia del sistema, adoptando asimismo las medidas necesarias con miras a proporcionar a los inspectores del trabajo los medios necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones. Recordando que el hecho de que los empleadores proporcionen medios de transporte puede plantear dificultades vinculadas con los principios de imparcialidad e independencia de los inspectores del trabajo, la Comisión pide asimismo al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para poner a disposición de los inspectores del trabajo los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 11, b), del Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Ausencia de información práctica que permita evaluar el funcionamiento de la inspección del trabajo en lo que respecta a las disposiciones del Convenio y las disposiciones legales nacionales pertinentes. La Comisión toma nota de la información actualizada en relación con el número y la distribución geográfica y por categoría del personal de la inspección del trabajo. Destaca, en comparación con los datos que figuran en su memoria recibida en 2008, una disminución significativa del personal de la inspección del trabajo, en particular de los inspectores de trabajo (de 75 a 55) y de los controladores principales (de 96 a 72). La Comisión recuerda que, según el *artículo 10 del Convenio*, para que las funciones del servicio de la inspección del trabajo sean eficaces, se deberá fijar el número de inspectores del trabajo, teniendo en cuenta, entre otros criterios: el número, la naturaleza, la importancia y la situación de los establecimientos sometidos al control de la inspección; el número y la complejidad de las disposiciones legales cuya aplicación debe garantizarse; los medios materiales de ejecución disponibles para los inspectores y las condiciones prácticas en las que deberán efectuarse las visitas de inspección.

Si las disposiciones legales relativas a la inspección del trabajo, a sus atribuciones y a sus cargos están disponibles, cabe constatar, sin embargo, la ausencia de información cifrada sobre los demás criterios establecidos en el *artículo 10* y, según la propia opinión del Gobierno, no existen medidas particulares para dar efecto a las disposiciones del *artículo 11* sobre las condiciones materiales de trabajo de los inspectores del trabajo. Estos últimos no gozan de los medios de transporte necesarios para el ejercicio de sus funciones. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, a partir de ahora, los gastos de viaje y los gastos accesorios serán reembolsados por la autoridad competente previa presentación de los justificativos necesarios, lo que no siempre había sido el caso, según la memoria del Gobierno recibida en 2008.

La Comisión solicita una vez más al Gobierno, que en su próxima memoria, proporcione toda la información disponible a fin de evaluar el nivel de aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la práctica. Estas informaciones deberán centrarse, en particular, en: i) *la distribución geográfica actualizada del personal que desempeña funciones de inspección previstas en el párrafo 1 del artículo 3 del Convenio; ii) la distribución geográfica de los establecimientos sujetos a inspección o, por lo menos, de aquellos respecto de los cuales el Gobierno estima que las condiciones de trabajo requieren una protección especial de parte de la inspección del trabajo; iii) la frecuencia, el contenido y el número de participantes en las formaciones impartidas a los inspectores del trabajo en el curso de sus carreras; iv) el nivel de remuneración y las condiciones de avance en la carrera de estos últimos con respecto a otros funcionarios públicos que asumen responsabilidades similares; v) la parte del presupuesto nacional asignado a las funciones de inspección del trabajo; vi) la descripción de los casos en los cuales los inspectores realizan visitas a las empresas, del procedimiento a seguir y de los medios de transporte que utilizan a tal efecto, de las actividades que ejercen y del resultado de éstas; vii) la parte de las actividades de control de la legislación realizadas por los inspectores con respecto a la de sus actividades de conciliación.*

Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique copias de todos los informes de actividad de inspección realizados por las direcciones regionales, incluyendo los informes mencionados en sus memorias recibidas por la OIT en 2008 y 2011; copia del proyecto o del texto definitivo del estatuto particular de los inspectores del trabajo; copias de los proyectos de texto de enmiendas del Código del Trabajo, así como el memorándum cuyo envío a la OIT anuncia el Gobierno, con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la inspección del trabajo.

Para establecer un sistema de inspección del trabajo que responda a los objetivos socioeconómicos propuestos por el Convenio, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que despliegue todos los esfuerzos posibles para adoptar las medidas necesarias para la implementación de las medidas descritas en las observaciones generales formuladas en 2007 (sobre la necesidad de una cooperación eficaz entre los servicios de inspección del trabajo y los órganos judiciales), en 2009 (sobre la necesidad de disponer de datos estadísticos relativos a los establecimientos industriales y comerciales sujetos a la inspección del trabajo y al número de trabajadores incluidos, así como informaciones básicas que permitan evaluar la aplicación del Convenio en la práctica), y en 2010 (sobre la publicación y el contenido de un informe anual sobre el funcionamiento de los servicios de inspección del trabajo). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT y de solicitar, en el marco de la cooperación financiera internacional, un apoyo financiero con el fin de dar el estímulo necesario para el establecimiento y el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique información relativa a cualquier progreso alcanzado o sobre cualquier dificultad encontrada.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Croacia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1991)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1991)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar el Convenio núm. 81 (inspección del trabajo) y el Convenio núm. 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (UATUC) y de los Sindicatos Independientes de Croacia (NHS) sobre el Convenio núm. 81, recibidas en 2016.

Artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a su solicitud anterior en relación con el papel que desempeña la inspección del trabajo y el sistema judicial en la aplicación de la Ley sobre los Extranjeros (FA), así como tampoco sobre las actividades conjuntas de lucha contra el trabajo no declarado en las que participa la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, con arreglo al artículo 3, 2), de la Ley de Inspección del Trabajo, los inspectores del trabajo llevan a cabo inspecciones relativas a la aplicación de otras leyes cuando éstas así lo establecen específicamente. La Comisión toma nota de que el informe anual de 2017 de la Inspección del Trabajo, al que se refiere el Gobierno, contiene información sobre la labor de los inspectores del trabajo en la aplicación de las disposiciones de la FA, incluidas medidas relativas al trabajo de los nacionales extranjeros que no disponen de un permiso de trabajo o de un certificado de admisión al trabajo (artículo 208 de la FA). La Comisión reitera una vez más sus comentarios anteriores de que el Convenio no contiene ninguna disposición que sugiera que algún trabajador debe ser excluido de la protección otorgada por la inspección del trabajo a causa de su situación de empleo irregular, y que la función primordial de los inspectores del trabajo consiste en asegurar la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores, y no aplicar la Ley de Inmigración. La Comisión recuerda además que, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 3), del Convenio núm. 129, el resto de obligaciones que puedan encomendarse a los inspectores del trabajo no podrán interferir con el cumplimiento efectivo de sus obligaciones principales. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que las funciones designadas a los inspectores del trabajo no interfieran con el principal objetivo de su labor de garantizar la protección de los trabajadores de conformidad con las obligaciones principales de los inspectores del trabajo según se establecen en el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información detallada en relación con el papel que desempeñan los inspectores del trabajo en la aplicación de las disposiciones de la FA, así como con las actividades conjuntas que la inspección del trabajo lleva a cabo con otros organismos del Estado con miras a luchar contra el trabajo no declarado, en particular, el ámbito de aplicación de estas actividades, el porcentaje de actividades y recursos de la inspección del trabajo destinados a la aplicación de la FA o a la lucha contra el trabajo no declarado, y el impacto de estas actividades sobre la labor de la inspección del trabajo en la aplicación de las disposiciones que se refieren a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.***

Artículos 3, 2), 10, y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 6, 3), 14 y 21 del Convenio núm. 129. Número de inspectores del trabajo suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección y funciones adicionales. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la UATUC y la NHS en relación a que el número de inspectores del trabajo es insuficiente y que el personal actual de los servicios de inspección está sobrecargado por la cantidad de trabajo derivado de las reclamaciones de los trabajadores en casos de bancarrota del empleador, lo que les impide cumplir de forma efectiva con sus funciones principales en el ámbito de las relaciones de empleo y de seguridad y salud en el trabajo. La UATUC y la NHS toman nota además de la jubilación probablemente inminente de muchos inspectores del trabajo y de que la falta de inspectores incide significativamente en la regularidad y calidad de las inspecciones en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y de las relaciones laborales. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, el 31 de diciembre de 2016, la Inspección del Trabajo disponía de un total de 226 inspectores del trabajo y a otros diez funcionarios para ocupar puestos relativos a tecnologías de la información con el fin de mejorar el trabajo efectuado por los servicios de inspección y que, a fecha de 31 de diciembre de 2017, el número de inspectores del trabajo había aumentado a 229. No obstante, el Gobierno señala también que la insuficiencia de inspectores del trabajo es una de las dificultades para la aplicación del Convenio. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre información adicional en relación con las medidas adoptadas o previstas para garantizar que se nombre un número suficiente de inspectores del trabajo, de conformidad con el artículo 10 del Convenio núm. 81 y el artículo 14 del Convenio núm. 129, y que las actuales obligaciones adicionales de los inspectores del trabajo no interfieran en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones principales.***

Artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81 y artículos 12, 22, 1), y 24 del Convenio núm. 129. Institución de los procedimientos legales y aplicación de las sanciones adecuadas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de un descenso en la tasa de casos en los que los procedimientos legales iniciados por los inspectores del trabajo no fueron admitidos por los juzgados de faltas debido a la expiración del plazo de prescripción (del 58 al 36,5 por ciento), en razón sobre todo de la adopción de la Ley de Faltas por la que se modificaba el plazo de prescripción. La Comisión toma nota de que falta información en respuesta a su solicitud anterior en relación con las medidas adicionales para dar cumplimiento a los artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81. ***Reiterando la importancia de la cooperación entre el sistema de la inspección del trabajo y el sistema judicial, la Comisión pide al Gobierno que comunique información relativa a todas las medidas adoptadas o previstas para acelerar el examen de las causas remitidas por los inspectores del trabajo a los tribunales y garantizar la aplicación efectiva de sanciones adecuadas y suficientemente disuasorias, incluidas información detallada sobre los progresos logrados o las dificultades suscitadas, así como información estadística sobre el número de procedimientos legales incoados por los inspectores del trabajo que no fueron admitidos a trámite y las principales razones para no admitirlos.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Dominica

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 3, 6, 7, 10 y 16 del Convenio. Número, condiciones de servicio y funciones de los inspectores del trabajo. Número de visitas de inspección. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que el Departamento de Trabajo no puede incrementar su personal y que los inspectores cumplen funciones en todos los sectores de la administración del trabajo. El Gobierno también señala que se realizan todos los esfuerzos para asegurar que los inspectores actúan profesionalmente. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique los criterios y procedimientos para la contratación de los inspectores del trabajo y que indique específicamente las actividades de formación que se les imparte al ingresar en el servicio y durante el empleo. Sirvase también indicar de qué modo se asegura que las condiciones relativas a la remodelación y al desarrollo profesional de los inspectores del trabajo reflejan la importancia y características específicas de sus obligaciones, y tienen en cuenta el mérito personal.**

La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el tiempo y recursos que insumen las actividades de mediación/conciliación de los conflictos laborales en relación con las funciones principales de la inspección establecidas en virtud de este Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, de manera alguna el cumplimiento efectivo de estas últimas. Además pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar que todos los lugares de trabajo se inspeccionen con la frecuencia y el esmero necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio.

Artículo 15. Obligación de confidencialidad. En relación con los comentarios anteriores sobre esta cuestión, la Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno que no se ha registrado ninguna modificación a la legislación para dar efecto a este artículo del Convenio y que la cuestión debe ser tratada por la Comisión Consultiva de Relaciones Laborales. El Gobierno informa además que el Departamento y la Inspección del Trabajo siempre han mantenido una estricta confidencialidad. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para complementar la legislación, de manera de dar pleno efecto al artículo 15 del Convenio, mantener a la Oficina informada de todo progreso realizado a este respecto y comunicar copia de todo proyecto pertinente de ley o de un texto definitivo que se haya adoptado.**

Artículos 5, a), 17, 18, 20 y 21. Cooperación con la administración de justicia y cumplimiento efectivo de sanciones adecuadas. Publicación y contenido del informe anual. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que se adoptarán medidas para mejorar la calidad del informe anual sobre los servicios de inspección. **La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para asegurar que se elabore y publique un informe anual sobre la labor de los servicios de la inspección del trabajo, que contenga información sobre todas las cuestiones enumeradas en el artículo 21 del Convenio, especialmente, estadísticas de las visitas de inspección, infracciones y sanciones impuestas, así como sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional.** La Comisión señala a la atención del Gobierno a este respecto la orientación prevista en el párrafo 9 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) en relación con el tipo de información que debería incluirse en los informes anuales de la inspección del trabajo.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Eslovaquia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2009)

Con el fin de aportar una visión global de los asuntos relacionados con la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera conveniente examinar conjuntamente el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129).

Artículo 3, 2), del Convenio núm. 81, y artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que, según el informe sobre la protección de la situación laboral de 2017, el sistema de inspección del trabajo dedicó más tiempo realizando inspecciones para controlar el empleo ilegal que en realizar inspecciones vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo (SST). Al respecto, la Comisión toma nota de que el informe de 2017 indica que el sistema de inspección del trabajo colabora con unidades especializadas de las fuerzas policiales (como la oficina de policía de fronteras y la oficina de policía de extranjería; la unidad de vehículos de motor de emergencia; los funcionarios de la policía y de la policía criminal; la dirección general del cuerpo de policía; la división de análisis y coordinación de riesgos; el departamento de análisis y estadísticas de riesgos; la unidad de trata de seres humanos; el centro de lucha contra la trata de seres humanos y prevención de delitos; la unidad nacional de lucha contra la inmigración ilegal, y la policía local y nacional) para supervisar el cumplimiento de la prohibición del empleo ilegal y la trata de nacionales de terceros países. La Comisión también toma nota de la información contenida en el informe de 2017, según la cual, en 2017, el sistema de inspección del trabajo llevó a cabo

19 467 inspecciones sobre empleo ilegal y 14 885 inspecciones del trabajo sobre las disposiciones legales en virtud del Código del Trabajo, en relación con los salarios, las horas de trabajo, los contratos de empleo y las relaciones laborales.

La Comisión recuerda que, en virtud del *artículo 3, 1) y 2)*, del Convenio núm. 81, y del *artículo 6* del Convenio núm. 129, las funciones del sistema de inspección del trabajo serán velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, y ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales. La Comisión también recuerda que toda función de control de la legalidad del empleo debe tener por corolario el restablecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores para ser compatible con el objetivo de la inspección del trabajo, que es proteger los derechos y los intereses de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales (véase Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 78). En relación con el párrafo 452 del Estudio General de 2017, Instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo, la Comisión recuerda al Gobierno que los trabajadores que se encuentran en una situación vulnerable pueden no estar dispuestos a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen consecuencias negativas como resultado de las actividades de inspección, como la pérdida de su trabajo o la expulsión del país. ***La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas específicas para garantizar que las funciones asignadas a los inspectores del trabajo no entorpezcan el principal objetivo de los inspectores del trabajo de garantizar la protección de los trabajadores, de conformidad con las funciones principales de los inspectores del trabajo, como prevé el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81, y el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. También solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre las acciones emprendidas por la Inspección Nacional del Trabajo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de los derechos legales de los trabajadores en los que se detectó que éstos se encuentran en situación irregular. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre el número de casos en los que se otorgaron a los trabajadores que se encuentran en una situación irregular, sus derechos debidos, como el pago de los salarios pendientes o las prestaciones de seguridad social.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eslovenia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1992)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los principales convenios ratificados de gobernanza sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Legislación. La Comisión tomó nota en ocasiones anteriores de la existencia de disposiciones redundantes en la Ley sobre la Inspección del Trabajo (LIA) y la Ley sobre la Inspección (IA) (que se aplica a todos los órganos de vigilancia, no sólo a la inspección del trabajo). Constató que el artículo 3 de la IA dispone que, en caso de disposiciones contradictorias, las disposiciones de las otras leyes priman sobre las de la IA. Sin embargo, tomó nota de que sigue dándose una inseguridad jurídica en relación con una serie de cuestiones relevantes que cubre el Convenio núm. 81, y solicitó al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas que se adoptaran con el fin de garantizar una mayor certeza jurídica respecto de las disposiciones aplicables a la inspección del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que se han realizado en los últimos años varias enmiendas de la legislación laboral que reformulan el mandato y las funciones del servicio de inspección del trabajo, entre otras, enmiendas adicionales a la LIA en 2017, las modificaciones de 2016 de la Ley de Relaciones de Empleo (ERA), así como la aprobación de la Ley de Empleo, Trabajo por Cuenta Propia y Trabajo de los Trabajadores Extranjeros (ESWLA) y de la Ley de Prevención del Trabajo y el Empleo No Declarados (PUWEA). Constata con ***preocupación*** que, a pesar de las reformas legislativas de estos años, sigue habiendo una incertidumbre jurídica debido a las disposiciones contradictorias o redundantes de la LIA y la IA, respecto de, entre otros aspectos, las medidas preventivas que pueden adoptar los inspectores, las calificaciones de éstos, el requisito de que los empleadores sujetos a inspección cubran los costos de la inspección, el libre acceso de los inspectores a los establecimientos sin previa notificación con algunas excepciones, los procedimientos de inspección y sus costos. Además, la Comisión constata que el servicio de inspección del trabajo propone varias enmiendas a la nueva LIA, que figuran descritas en detalle en el informe anual de inspección del trabajo para 2017 («informe anual de 2017»), disponible en el sitio web del servicio de inspección del trabajo, y algunas de las cuales se comunicaron al Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades a finales de 2017. ***La Comisión solicita al Gobierno que especifique en qué medida los inspectores del trabajo están vinculados por los principios generales establecidos en virtud de la IA, así como de qué manera las disposiciones redundantes o contradictorias de la IA y la LIA se aplican en la práctica a la labor diaria de los inspectores del trabajo. A este respecto, pide al Gobierno que identifique claramente las disposiciones de la IA que no se aplican a la inspección del trabajo, a la luz de las excepciones establecidas en el artículo 3 de dicha ley, y que comunique toda decisión judicial o directiva oficial que se emita en la materia.***

Artículos 6, 10 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 8, 14 y 21 del Convenio núm. 129. Número de inspectores del trabajo y sus condiciones de servicio. Estabilidad e independencia de los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de un descenso del número de inspectores del trabajo (de 88 en 2011 a 81 en 2013). Toma nota **preocupación** de que, según el informe anual de 2017, este número ha seguido reduciéndose, de 77 en 2017 (41 inspectores del trabajo para condiciones de trabajo generales y relaciones de empleo, 31 para SST y cinco para protección social y seguridad). En el informe anual de 2017 se indica que este descenso ha tenido lugar a pesar de que el número de empresas registradas ha aumentado en 40 000 empresas desde 2008 y que la nueva LIA asigna funciones adicionales a los inspectores del trabajo. En 2017 los inspectores del trabajo realizaron un total de 14 541 inspecciones (7 649 en el ámbito de las condiciones de trabajo y las relaciones de empleo; 6 659 en SST y 233 en protección social), en las que se observó un total de 29 513 infracciones. Asimismo, la Comisión toma nota con **preocupación** de que en el informe anual de 2017 se señala que los inspectores del trabajo están desbordados con la cantidad de casos que se les asigna, y se enfrentan a una gran presión externa tanto por parte de los demandantes como de los empleadores, que se manifiesta mediante insultos, conducta indebida y agresividad en lo relativo a asuntos que no son de su competencia. **Al tiempo que toma nota del descenso continuo del número de inspectores del trabajo y su enorme carga de trabajo, como refleja el informe anual de 2017, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias con el fin de garantizar que el número de inspectores del trabajo sea suficiente para el desempeño eficaz de las funciones del servicio de inspección. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas que se tomen al respecto, así como acerca de las medidas adoptadas o previstas para resolver los problemas que se plantean en el informe anual de 2017 relacionados con la presión a la que están sometidos los inspectores del trabajo, con vistas a asegurar su independencia de cualquier influencia exterior indebida.**

Artículo 12, 1), b), del Convenio núm. 81 y artículo 16, 1), b), del Convenio núm. 129. Acceso a los establecimientos sujetos a inspección. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 21 de la IA, los propietarios o poseedores de locales comerciales, instalaciones de producción u otras instalaciones o tierras pueden denegar la entrada a los establecimientos en determinadas condiciones. No obstante, también constató que el Gobierno indica que, en la práctica, no se han dado casos en que se haya denegado la entrada a establecimientos en virtud del artículo 21. **La Comisión insta al Gobierno a que tome medidas para ajustar la legislación nacional al artículo 12 del Convenio núm. 81 y al artículo 16 del Convenio núm. 129 con objeto de garantizar que se permita a los inspectores del trabajo entrar de día en cualquier lugar, cuando tengan un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1991)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1991)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 3, 1), a), y 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 1) y 3), del Convenio núm. 129. Actividades del servicio de inspección del trabajo en lo relativo a los trabajadores extranjeros y la protección de los trabajadores extranjeros en situación irregular. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a comentarios anteriores, indica que los inspectores del trabajo supervisan la aplicación de la Ley de Empleo de Trabajadores Extranjeros (LEFN) en sus inspecciones periódicas en el ámbito de las relaciones laborales. La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 18, 2) de la ley, el servicio estatal de inspección del trabajo (SLI) debe encargarse de supervisar la aplicación de dicha ley y que, con arreglo al artículo 18, 3), las inspecciones del trabajo relativas a los permisos de trabajo y al empleo ilegal de trabajadores extranjeros pueden llevarse a cabo de oficio o a petición de la Agencia de Servicios de Empleo (ESA). Por lo tanto, el SLI tiene la obligación de presentar informes cada seis meses a la ESA en lo relativo a los procedimientos instituidos y las sanciones impuestas en caso de falta, de conformidad con el artículo 18, 4) de la LEFN. Se pueden imponer multas no sólo a un empleador o a todo aquél que facilite el empleo ilegal, sino también a un trabajador extranjero si no presenta el permiso de trabajo cuando se lo solicita el SLI (artículo 27). La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio núm. 81 y del artículo 6 del Convenio núm. 129, las funciones del sistema de inspección del trabajo serán velar por la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. Además, en su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 78, la Comisión indicaba que la función de control de la legalidad del empleo debe tener por corolario el restablecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores interesados para ser compatible con el objetivo de la inspección del trabajo, que consiste en proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. Remitiéndose al párrafo 452 del Estudio General de 2017 relativo a algunos

instrumentos de seguridad y salud en el trabajo, la Comisión recuerda al Gobierno que es posible que los trabajadores que se encuentren en una situación vulnerable sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen que las actividades de inspección puedan entrañar consecuencias negativas para ellos, como la pérdida de su empleo o la expulsión del país. ***La Comisión solicita al Gobierno que tome medidas específicas para garantizar que las funciones que se encomienden a los inspectores del trabajo no interfieran con el objetivo principal de éstos de asegurar la protección de los trabajadores, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las acciones llevadas a cabo por el servicio de inspección para asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores extranjeros que se encuentren en situación irregular. Además, pide al Gobierno que aporte información sobre el número de casos en que se haya garantizado a trabajadores extranjeros en situación irregular sus derechos, como el pago de sueldos atrasados, o las prestaciones de seguridad social.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1959)

Artículos 10, 11 y 16 del Convenio. Recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo y cobertura de los establecimientos. La Comisión tomó nota anteriormente de la referencia del Gobierno a la escasez de recursos humanos y de medios materiales, incluidos vehículos, así como de su compromiso de adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria de que la inspección del trabajo cuenta con 171 empleados. Indica nuevamente que tiene planeado contratar más personal para fortalecer el sistema de inspección laboral, lo que permitirá al Departamento de Trabajo realizar un mayor número de inspecciones y mejorar la cobertura de los establecimientos. La Comisión toma nota también de que, según los informes estadísticos del Ministerio de Empleo y Relaciones Laborales para los años 2014, 2015 y 2016, publicados en el sitio web del Ministerio, el número de inspecciones laborales llevadas a cabo por el Departamento de Trabajo fue de 243 en 2014, 357 en 2015 y 305 en 2016. El número de inspecciones efectuadas por el departamento de inspección de fábricas en materia de seguridad y salud en los establecimientos registrados se redujo de 2 405 en 2014, a 1 974 en 2015 y 1 715 en 2016, con disminuciones en casi todos los sectores. La Comisión toma nota de que de acuerdo al informe estadístico de 2016, había 57 925 establecimientos registrados en 2016. El Gobierno indica que el número insuficiente de inspectores y de vehículos representa un obstáculo a la realización de inspecciones eficaces en los lugares de trabajo. Toma nota asimismo de la declaración en la Política Nacional de Empleo de Ghana, publicada en 2015, de que a pesar de los esfuerzos para reformar el sistema de administración del trabajo, los problemas persisten, incluyendo la ineficiencia de la inspección del trabajo, del personal de las instituciones de administración del trabajo y una logística inadecuada para la realización de inspección y la aplicación de la ley. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas para hacer frente a los problemas identificados para garantizar que los servicios de la inspección del trabajo tienen a su disposición un número adecuado de inspectores del trabajo y los recursos materiales necesarios que les permitan llevar a cabo sus funciones eficazmente, incluyendo garantizar la asignación de los recursos financieros necesarios. Pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de inspecciones efectuadas por el Departamento de Trabajo y el Departamento de Inspección de Fábricas, así como el número de inspectores en cada departamento. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las razones de la disminución en el número de inspecciones efectuadas por el Departamento de Inspección de Fábricas entre 2014 y 2016, y las medidas adoptadas para asegurar que los lugares de trabajo sean inspeccionados con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes.***

Artículos 17, 18 y 21, e). *Aplicación efectiva de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores.* La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación de sanciones, así como sobre la revisión de las sanciones por violación de las disposiciones laborales. La Comisión toma nota, a este respecto, de que el Gobierno nuevamente se refiere a su compromiso con el diálogo, la persuasión y la diplomacia pero también indica que las disposiciones de la Ley del Trabajo son plenamente aplicables con el fin de sancionar a cualquier empleador que vulnere sus disposiciones. La Comisión también observa que las sanciones previstas en la Ley del Trabajo están definidas en términos de «unidades penales» definidas en conformidad con la Ley de Multas (Unidades Penales) de 2000. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione, en su próxima memoria, información estadística relativa al número de infracciones detectadas y el número y monto de las multas impuestas de conformidad con la Ley del Trabajo. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier revisión de las «unidades penales» con el fin de garantizar de que existen sanciones adecuadas en caso de violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Granada

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1979)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 20 y 21 del Convenio. Establecimiento, publicación y comunicación a la OIT de los informes anuales de los servicios de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de sus reiterados comentarios sobre este asunto, no se había transmitido a la OIT ningún informe anual de los servicios de la inspección del trabajo desde 1995. La Comisión toma nota de que el Gobierno subraya la importancia de establecer, publicar y transmitir anualmente estos informes, pero añade que los informes anuales que se están elaborando actualmente no contienen todos los asuntos exigidos en virtud del artículo 21. **La Comisión insta al Gobierno a que señale las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los informes anuales de inspección se publiquen y transmitan a la OIT de conformidad con los requisitos exigidos en los artículos 20 y 21 del presente Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno, una vez más, que puede procurarse la asistencia técnica de la OIT a estos efectos.**

La Comisión pide al Gobierno que, en cualquier caso, comunique información estadística, lo más detallada posible, sobre las actividades de los servicios de la inspección del trabajo (instalaciones industriales y comerciales sujetas a inspección, número de inspecciones realizadas, infracciones detectadas y disposiciones legales infringidas, sanciones aplicadas, número de accidentes, y enfermedades profesionales, etc.) a fin de que la Comisión pueda llevar a cabo una evaluación informada sobre la aplicación del Convenio en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea-Bissau

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 3, párrafo 1, 7, párrafo 3, 10, 11, 14 y 16 del Convenio. Funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que la aplicación del Convenio encuentra importantes y persistentes dificultades de orden económico y material. Señala asimismo que el número de inspectores es insuficiente y que la inspección general del trabajo y de la seguridad social atraviesa una carencia de medios de transporte. La Comisión cree asimismo comprender que el Gobierno no se encuentra en condiciones de garantizar una formación apropiada para el ejercicio de sus funciones a los inspectores del trabajo, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Convenio. Sin embargo, toma nota de la indicación, según la cual los inspectores se beneficiaron de algunas actividades de formación en el marco de la cooperación técnica de las estructuras de inspección del trabajo de la subregión y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). El Gobierno da cuenta también de las dificultades vinculadas con la compilación de datos estadísticos fiables sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, en razón de la subdeclaración de parte de los propios trabajadores. El Gobierno señala asimismo que trabaja para reunir las condiciones que permitan comunicar, de manera periódica, las informaciones disponibles sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 21 y en la forma prescrita por el artículo 20, aunque encuentra dificultades de índole diferente y necesita, por ello, la asistencia técnica de la OIT para tal fin. **En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que dirija una solicitud formal de asistencia técnica a la OIT a los fines de la elaboración y de la publicación de un informe anual de inspección, como prescriben los artículos 20 y 21 del Convenio, así como a considerar la extensión de esta solicitud a la compilación y al registro de las informaciones estadísticas sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, y al establecimiento de una evaluación del sistema de inspección, dirigido a la determinación de los medios que han de ponerse en práctica para mejorar su eficacia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, junto a su próxima memoria, informaciones sobre toda evolución a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017 y el 29 de agosto de 2018. La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Al tiempo que se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012, la Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la que informa a la Comisión que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, solicitó la asistencia técnica de la Oficina, sobre todo con el fin de recabar ayuda para presentar las memorias debidas, reforzar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social para

que prosigan las reformas sociales y tratar los demás puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indica asimismo que espera poder recibir esta asistencia antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. ***La Comisión espera que esta asistencia técnica pueda ser proporcionada sin demora y que dé lugar a la entrega oportuna de todas las memorias pendientes. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a las observaciones de la CTSP de 2016, 2017 y 2018.***

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 31 de agosto de 2016.

La Comisión toma nota de que, según la CTSP, si bien se beneficia del apoyo de la OIT para reforzar la inspección del trabajo, el Gobierno demuestra una falta de voluntad para hacer que la inspección del trabajo sea funcional. La CTSP reitera sus observaciones anteriores en relación con: i) la falta de inspecciones en sectores que no sean el sector textil, tales como la hostelería, la restauración, las estaciones de servicio y la construcción; ii) la precariedad de los medios materiales que están a disposición de los inspectores del trabajo, especialmente de los medios de transporte necesarios para el ejercicio de sus funciones; iii) la contratación de inspectores del trabajo sobre la base del «clientelismo»; iv) la insuficiencia del nivel académico de los inspectores del trabajo, y v) su escasa remuneración, que a menudo se paga con retraso, lo que lleva a que los inspectores sean vulnerables a la corrupción. La CTSP añade que no se ha adoptado ninguna medida con miras a establecer una base de datos que contenga estadísticas en materia de trabajo, las cuales permiten elaborar políticas y tomar medidas. Asimismo, el sindicato indica que los inspectores pueden ser transferidos, expulsados y sancionados si adoptan decisiones que van en contra de los intereses de ciertos empleadores. ***La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.***

Artículos 3, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 del Convenio. Ejercicio de las funciones principales de la inspección del trabajo. En relación con el artículo 411 del Código del Trabajo, que prevé que los inspectores del trabajo comuniquen informaciones y brinden asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores «si es necesario», la Comisión toma nota de que el Gobierno se propone modificar la expresión «si es necesario» del artículo 411, cuando se realice la refundición del Código del Trabajo, que se prevé efectuar con el apoyo técnico de la OIT, con miras a armonizar el mencionado Código con los convenios internacionales del trabajo ratificados por Haití. Además, el Gobierno subraya que, a pesar de la redacción del artículo 411 del Código del Trabajo, se efectúa regularmente el trabajo de inspección en Puerto Príncipe y en algunos departamentos del país, desde hace tres años.

La Comisión recuerda que la función de la inspección del trabajo no debe limitarse a reaccionar a las demandas de los trabajadores o de los empleadores, y que deberían inspeccionarse los establecimientos, anunciándose o no, con la frecuencia y el esmero necesarios en todo el país (*artículo 16*), con el fin de permitir que la inspección del trabajo cumpla con sus funciones principales, como las previstas en el *artículo 3, párrafo 1*. La Comisión toma nota de que la eficacia del sistema de inspección y la credibilidad de los inspectores ante los empleadores y los trabajadores, dependen en gran medida de la manera en que éstos últimos ejercen sus prerrogativas (derecho de entrada en los establecimientos, poder de ordenar lo que haya lugar de manera directa o indirecta, establecimiento de atestados, inicio de acciones judiciales, etc.) y respetan sus obligaciones (sobre todo, la probidad y la confidencialidad), como establecen los *artículos 3, 12, 13, 15, 17 y 18* del Convenio.

La Comisión pide al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en lo que atañe a la revisión del artículo 411 del Código del Trabajo, de modo que se reconozca la transmisión de informaciones y de asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores como una función permanente de la inspección del trabajo, de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, b).

Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas, acompañadas de datos estadísticos sobre la planificación y la puesta en práctica de visitas sistemáticas de inspección, en todo el país, incluso en las zonas francas, así como sobre sus resultados (comprobaciones de infracción o de irregularidad, asesoramiento técnico e información, observaciones, órdenes, requerimientos, acciones legales iniciadas o recomendadas, sanciones impuestas y efectivamente aplicadas) y que indique todo obstáculo a la plena aplicación en la práctica de las prerrogativas y las obligaciones de los inspectores del trabajo.

Artículos 6, 8, 10 y 11. Personal y medios materiales a disposición de la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas o previstas, incluido el recurso a la ayuda financiera internacional, para obtener los fondos necesarios al fortalecimiento de las capacidades del sistema de inspección del trabajo, especialmente a través del aumento del número de inspectores del trabajo y de los medios materiales y logísticos a disposición de la inspección del trabajo.

Además, en relación con el párrafo 209 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión, al tiempo que es plenamente consciente de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno, debe, no obstante, señalar la importancia que reviste ofrecer a los inspectores del trabajo un trato correspondiente a la relevancia y a las características de sus funciones y permitirle progresar en su trabajo gracias a sus méritos personales. ***La Comisión pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas para mejorar la situación y las condiciones de servicio de los inspectores, de manera que correspondan a las condiciones de los funcionarios públicos que ejercen tareas comparables como, por ejemplo, los inspectores de impuestos.***

Artículos 5, a), y 21, e). Cooperación efectiva con otros servicios. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre esta cooperación y sobre su impacto en la eficacia de la acción de la inspección del trabajo, con miras a la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

La Comisión pide al Gobierno que comunique datos estadísticos sobre el curso dado a las actas remitidas por la inspección del trabajo a las instancias judiciales y que indique si se han adoptado o han previsto medidas para fortalecer la cooperación entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, por ejemplo, mediante la creación de un sistema de registro de las decisiones judiciales, accesible a la inspección del trabajo, con el fin de permitir que la autoridad central utilice esas informaciones para alcanzar sus objetivos, e incluirlas en el informe anual, en aplicación del artículo 21, e), del Convenio.

Además, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para reforzar la colaboración entre la inspección del trabajo y las organizaciones de empleadores y de trabajadores (artículo 5, b)), incluso en el sector de la construcción que, en opinión del Gobierno, constituye una prioridad para la reactivación del país. La Comisión recuerda las orientaciones aportadas en los párrafos 4 a 7 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) respecto de la colaboración entre empleadores y trabajadores en lo que concierne a la salud y la seguridad.

Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para desarrollar una estrategia de formación, y comunicar informaciones sobre la frecuencia,

el contenido y la duración de las formaciones impartidas a los inspectores del trabajo, así como sobre el número de participantes y el impacto de estas formaciones en el ejercicio eficaz de las funciones de la inspección del trabajo.

Artículo 14. Notificación y registro de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional. La Comisión pide al Gobierno que describa detalladamente el sistema de notificación de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional, y que indique las medidas adoptadas o previstas tras el terremoto, con el fin de compilar y transmitir datos estadísticos al respecto, incluso en el sector de la construcción.

La Comisión insta firmemente al Gobierno que se sirva efectuar, como etapa preliminar a la preparación de un informe anual de inspección, y con el fin de evaluar la situación de los servicios de inspección del trabajo respecto de las necesidades, el censo y el registro de los establecimientos industriales y comerciales sujetos al control de la inspección del trabajo (número, actividad, tamaño y situación geográfica) y de los trabajadores empleados en los mismos (número y categorías), y tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en este terreno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Hungría

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
(ratificación: 1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1994)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 1) y 3), del Convenio núm. 129. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la lucha contra el empleo ilegal era una prioridad para la inspección del trabajo, y de que los servicios de inspección del trabajo se asociaban regularmente en inspecciones conjuntas a fin de erradicar la migración ilegal, entre otras cosas, en cooperación con la policía y con las autoridades aduaneras. A este respecto, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a la Ley de la Inspección del Trabajo, que encomienda a los inspectores del trabajo, entre otras funciones, el control de los permisos de residencia y de trabajo de los trabajadores extranjeros, y la notificación a la policía de inmigración de cualquier decisión relativa al incumplimiento de las disposiciones sobre el empleo de trabajadores extranjeros (artículos 3, 1), i), y 7/A, 7), de la Ley de la Inspección del Trabajo).

La Comisión toma nota una vez más de que el Gobierno no ha suministrado la información solicitada sobre la función que desempeñan los inspectores del trabajo al otorgar a los trabajadores extranjeros en situación irregular sus derechos debidos derivados de su relación de empleo. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 3, 1) y 2), del Convenio núm. 81 y el artículo 6, del Convenio núm. 129, las funciones del sistema de inspección del trabajo serán velar por la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, y que ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales. En relación con esto, la Comisión señaló en su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 78, que la función de control de la legalidad del empleo debe tener por corolario el restablecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores interesados para ser compatible con el objetivo de protección de la inspección del trabajo, que es proteger los derechos y los intereses de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. A este respecto, la Comisión recuerda asimismo que, en su Estudio General de 2017, Instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo, indicó que los trabajadores que se encuentren en una situación vulnerable tal vez sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen que las actividades de inspección entrañan consecuencias negativas para ellos, como la pérdida de su empleo o la expulsión del país (párrafo 452), o que sus quejas no se mantendrán confidenciales. **La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para cerciorarse de que las funciones encomendadas a los inspectores del trabajo no interfieran con el objetivo primordial de asegurar la protección de los trabajadores de conformidad con las principales funciones previstas en el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Pide asimismo al Gobierno que indique la manera en que la inspección del trabajo desempeña sus principales funciones al velar por el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en lo tocante a cualquier derecho legal que los trabajadores en situación irregular puedan tener durante el período de su relación de trabajo efectiva. Insta firmemente al Gobierno que proporcione información sobre el número de casos en que se han conferido sus derechos debidos a los trabajadores encontrados en situación irregular, como el pago de los salarios o de las prestaciones de seguridad social pendientes. Adicionalmente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la forma en la que asegura que los inspectores del trabajo tratan como absolutamente confidencial la procedencia de cualquier queja en la que se les notifica cualquier defecto o incumplimiento de disposiciones legales.**

Artículos 10 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 15 y 21 del Convenio núm. 129. Número de inspectores del trabajo y eficacia del sistema de inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de una disminución considerable del número de inspectores del trabajo, que entre 2008 y 2013 pasaron de 696 a 401. A este respecto, la

Comisión tomó nota de que los comentarios de los representantes de los trabajadores del Consejo Nacional Tripartito para la OIT (incluidos en las memorias del Gobierno) habían indicado que dicha disminución había comprometido la eficiencia de las inspecciones, como evidenciaba el aumento del número de accidentes del trabajo y de violaciones detectadas en los últimos años. Por otra parte, la Comisión tomó nota de la respuesta del Gobierno a estos comentarios, en la que indicaba que el incremento del número de violaciones detectadas era de hecho una consecuencia de la mayor eficiencia de las inspecciones debido al establecimiento de prioridades en los planes de inspección del trabajo, determinadas por los planes anuales de inspección (centrados en sectores de alto riesgo).

La Comisión toma nota con **preocupación** de las estadísticas proporcionadas en la memoria del Gobierno de que el número de inspectores del trabajo ha seguido disminuyendo, cifrándose en 393 (en mayo de 2017), y de que el número de accidentes del trabajo aumentó de 19 948 a 23 027 al año entre 2010 y 2016. La Comisión recuerda de su Estudio General de 2017, Instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo, concretamente su párrafo 441, que las inspecciones centradas en los lugares de trabajo más peligrosos no deben disminuir su compromiso general en materia de recursos para la inspección del trabajo. **Tomando nota de la considerable disminución del número de inspectores desde 2008, y del aumento del número de accidentes del trabajo notificados, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que el número de inspecciones del trabajo sea adecuado para garantizar la protección efectiva de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística sobre el número de inspectores del trabajo, las visitas de inspección, las violaciones detectadas y las sanciones impuestas. Pide al Gobierno asimismo que siga suministrando información sobre el número de accidentes del trabajo, y que facilite una explicación en lo que respecta al incremento de los mismos en los últimos años.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1949)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Sindicatos Indios (CITU), recibidas el 14 de marzo de 2018.

Artículos 2, 4 y 23 del Convenio. *La inspección del trabajo en las zonas económicas especiales (ZEE).* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que se habían efectuado muy pocas inspecciones en las ZEE. La Comisión también constató que los comisionados para el desarrollo, que se encargan de atraer inversiones, seguían teniendo facultades de inspección en las ZEE. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la CITU ante la Comisión de Aplicación de Normas en 2017 y nuevamente en marzo de 2018, según las cuales el sistema de inspección en las ZEE es prácticamente inexistente. El sindicato añade que, a pesar del bajo número de infracciones registradas, en las ZEE se infringen todas las leyes laborales básicas, y que la situación no ha mejorado desde la discusión en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017.

La Comisión toma nota de las explicaciones que proporciona el Gobierno en su memoria en respuesta a la solicitud de la Comisión relativa a las autoridades responsables de las inspecciones, indicando que hay siete ZEE. El Gobierno señala que en algunos casos las ZEE cubren varios estados y que la situación relativa a las inspecciones puede variar dentro de una misma ZEE, en función del estado en que la empresa esté ubicada físicamente. El Gobierno añade que los comisionados para asuntos de desarrollo asumen las facultades de inspección en dos ZEE, en concreto Visakhapatnam y Mumbai Seepz (excepto en lo relativo a la supervisión de la Ley de Fábricas, incluidas las disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo (SST)). En cinco ZEE (Noida, Cochin, Madras, Falta y Kandla), las facultades de inspección no se han delegado en los comisionados para asuntos de desarrollo (a excepción de uno de los diez estados en los que las actividades de la ZEE Noida tienen lugar). La Comisión toma nota de que el Gobierno comunica que, en lo relativo a las leyes que competen al Gobierno central, estas facultades no se delegaron en ninguna de las zonas. Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre cinco de las siete ZEE (excepto Cochin y Falta), que incluye datos sobre el número de empresas y trabajadores de cada zona. Si bien la Comisión constata que estos datos estadísticos son más detallados que los que ha proporcionado el Gobierno en los últimos años, aún no permiten que la Comisión se forme una idea documentada acerca de la protección de los trabajadores en estas zonas. Además, la Comisión constata que no se dispone de información sobre la mayor parte de las ZEE (o no se han impuesto sanciones en esas zonas) para las que se aportan datos estadísticos (en Kandla se entablaron dos procedimientos judiciales y se impusieron penas de prisión). **La Comisión pide una vez más al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas, que vele por que se realicen inspecciones del trabajo eficaces en todas las ZEE. Además, solicita de nuevo al Gobierno que comunique información estadística detallada sobre las inspecciones del trabajo en todas las ZEE, con inclusión del número de empresas y de trabajadores de cada zona, el número de visitas rutinarias y de visitas sin previo aviso, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, el número de sanciones impuestas, los montos de las multas impuestas y recaudadas, e información sobre los procesamiento penales, si procede.**

Artículos 10 y 11 del Convenio. *Recursos materiales y humanos a nivel central y de los estados.* La Comisión recuerda las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas en lo relativo a la necesidad de aumentar los

recursos a disposición de los servicios de inspección del trabajo del Gobierno central y de los gobiernos de los estados. La Comisión toma nota de los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno en su memoria sobre el número de inspectores del trabajo del Gobierno central y de los gobiernos de los estados, que en el caso de los estados es el mismo que el que comunicó el Gobierno en 2017 ante la Comisión de Aplicación de Normas y no refleja ninguna contratación adicional. En cuanto a la situación jurídica de los inspectores del trabajo, la Comisión toma nota de las aclaraciones del Gobierno en respuesta a la pregunta de la Comisión, en las que se indica que la posibilidad de contratar a personal de forma temporal como inspectores del trabajo sólo se refiere al recurso a funcionarios públicos de otros servicios gubernamentales. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que aumente los recursos a disposición de los servicios de inspección del trabajo del Gobierno central y de los gobiernos de los estados, y que siga proporcionando información sobre el número de inspectores del trabajo del Gobierno central y de todos los estados. Dado que el Gobierno sólo ha comunicado información general a este respecto, la Comisión le pide de nuevo que aporte información más detallada sobre los recursos materiales y los medios de transporte (por ejemplo, el número de vehículos) de los que disponen los servicios de inspección a nivel central y en los estados.***

Artículos 12 y 17. Libre iniciativa de los inspectores del trabajo para ingresar en los establecimientos sin aviso previo, y discrecionalidad para iniciar un procedimiento judicial sin aviso previo. Proyecto de código de salarios y proyecto de ley sobre las condiciones de trabajo y la SST, y reforma legislativa en curso. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el proyecto de código de salarios, de 2017, no se refiere explícitamente a los principios contenidos en el artículo 12, 1), a) y b), pero establece que los gobiernos de los estados pueden elaborar separadamente regímenes de inspección (incluida la creación de un programa de inspecciones basado en Internet). Además, constató que el proyecto de ley denomina a los inspectores del trabajo «facilitadores» y requiere que los inspectores den aviso previo y otorguen un plazo adicional para rectificar la violación antes de que se puedan iniciar procedimientos penales. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en respuesta a la solicitud de la Comisión, que se celebraron varias reuniones tripartitas durante el proceso de redacción del proyecto. Asimismo, el Gobierno resalta que el proyecto de código de salarios no restringe las facultades de inspección si es necesario realizar inspecciones, y que en caso de que se formulen quejas o haya indicios de la existencia de infracciones de la legislación laboral, los inspectores del trabajo seguirán teniendo la potestad de llevar a cabo inspecciones sin previo aviso y entablar los procedimientos necesarios. El Gobierno indica que el proyecto se ha presentado ante el Comité Parlamentario Permanente.

Además, la Comisión toma nota de que en el proyecto de ley sobre las condiciones de trabajo y la SST, publicado en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Empleo en marzo de 2018, también se denomina a los inspectores del trabajo «facilitadores» (artículo 34, 1)), y se prevé que realicen inspecciones, incluso inspecciones basadas en Internet (como prescriben los gobiernos de los estados (artículo 34, 2)). La Comisión también constata que los facilitadores tienen la facultad de llevar, realizar o defender ante un tribunal toda queja u otro procedimiento amparados por el Código de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por las reglas y reglamentos elaborados en virtud de éste (artículo 35, xii)), y de ejercer esa facultad como se determine (artículo 35, xiii)). Sin embargo, el proyecto no hace referencia a las facultades de los inspectores del trabajo de iniciar procedimientos judiciales contra personas que violen las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo, o aquéllas que muestren negligencia en la observancia de las mismas. Además, el proyecto de ley sobre las condiciones de trabajo y la SST exige que los inspectores avisen al menos tres días antes de realizar una inspección en las minas, excepto en situaciones peligrosas (artículo 39). Refiriéndose al Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 263, la Comisión recuerda que las visitas sin previa notificación tienen la ventaja de permitir al inspector entrar en el lugar de control sin notificarlo previamente al empleador o a su representante, especialmente si se teme la práctica de maniobras que puedan disimular una infracción, modificar con esta intención las condiciones habituales de trabajo, alejar a un testigo o hacer imposible el control. Asimismo, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 17, las personas que violen las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo, o aquéllas que muestren negligencia en la observancia de las mismas, deberán ser sometidas inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial o administrativo, y que la posibilidad de dar aviso previo, a fin de remediar la situación o tomar disposiciones preventivas, debe preverse en la legislación nacional o en los reglamentos como excepción. ***Al tiempo que recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que toda legislación que se elabore se ajuste al Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el código sobre salarios y la ley sobre las condiciones de trabajo y la SST permitan a los inspectores del trabajo entrar sin aviso previo en los establecimientos por iniciativa propia, sin que esto se limite a las situaciones en las que se hayan formulado quejas o haya indicios de que se ha contravenido la legislación laboral, de conformidad con el artículo 12, 1), a) y b), del Convenio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que se asegure de que el código sobre salarios y la ley sobre las condiciones de trabajo y la SST otorguen a los inspectores del trabajo la facultad discrecional de entablar inmediatamente procedimientos judiciales o administrativos sin aviso previo, o de ordenar medidas correctivas o dar avisos en lugar de entablar o recomendar procedimientos, cuando la situación lo requiera (artículo 17 del Convenio).***

Curso dado en la práctica a los principios mencionados. Datos estadísticos sobre las inspecciones del trabajo sin aviso previo, y el inicio de procedimientos judiciales sin aviso previo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a su solicitud, sobre el número de violaciones observadas y las acciones judiciales correspondientes iniciadas a nivel central y en los 36 estados o territorios de la unión. Sin embargo, la Comisión también constata que el Gobierno no ha aportado la información solicitada sobre los casos en que se dio un aviso previo

antes de entablar acciones judiciales y en los que se aplicaron medidas inmediatas de control de cumplimiento. ***Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique no sólo sobre el número total de infracciones registradas y el número de procedimientos judiciales entablados por los inspectores del trabajo, sino que desglose estos datos en casos en que se dio un aviso previo y casos en que se aplicaron medidas inmediatas de control del cumplimiento. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número total de inspecciones llevadas a cabo, estableciendo la distinción entre las inspecciones que se realizaron con o sin aviso previo.***

Artículos 4, 20 y 21. *Disponibilidad de información estadística sobre las actividades de los servicios de inspección del trabajo a nivel central y de los estados. Disponibilidad de estadísticas en sectores específicos.* La Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha transmitido a la Oficina informe alguno sobre la labor de los servicios de inspección, aunque constata que el Gobierno hace referencia a los informes publicados por la Oficina del Trabajo (un departamento del Ministerio de Trabajo y Empleo) en 2013 y 2014. La Comisión toma buena nota de la información facilitada por el Gobierno en lo relativo al número de inspecciones realizadas, infracciones observadas y procedimientos judiciales entablados. Consta que aún no se disponen de datos estadísticos sobre la aplicación de la legislación laboral en los sectores de la tecnología de la información y de los servicios informáticos. La Comisión recuerda que el Gobierno comunicó a la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2017 que, dadas la estructura federal del país y la soberanía de los estados, no hay un mecanismo estatutario para que los estados presenten datos al Gobierno central, y que los estados proporcionan la información pertinente de forma voluntaria.

La Comisión toma nota de las repetidas referencias del Gobierno a un proyecto destinado a reforzar y modernizar la recogida de datos estadísticos por la Oficina del Trabajo. Está previsto que este proyecto incluya un sistema de presentación de datos en línea para permitir la recogida y compilación de datos estadísticos, incluidos los procedentes de los estados. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala, en respuesta a la solicitud de ésta, que las empresas deben mantener registros y proporcionar información sobre sus actividades, y que se está velando por unificar los formularios para la presentación de datos y los registros. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona la información solicitada sobre el mantenimiento de registros de establecimientos a nivel central y de los estados. ***La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la autoridad a nivel central o las autoridades a nivel de los estados publiquen y envíen a la OIT informes anuales sobre las actividades de inspección que contengan toda la información requerida por el artículo 21. La Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para la creación de registros de establecimientos a nivel central y de los estados, y la informatización y modernización del sistema de compilación de datos, y que proporcione información detallada sobre todo progreso realizado a este respecto. En este sentido, la Comisión solicita también una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre los avances que se realicen a la hora de adoptar medidas para mejorar el sistema de compilación de datos que permita el registro de datos de todos los sectores.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Indonesia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2004)

Artículos 1, 4, 10 y 11 del Convenio. *Repercusión de la descentralización en el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo. Número de inspectores del trabajo y medios materiales a su disposición.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que uno de los efectos de la descentralización del sistema de inspección del trabajo era la asignación desigual de recursos financieros entre los servicios locales de inspección del trabajo. La Comisión constata que el Gobierno indica en su memoria que, dada la falta de personal, se puede ofrecer a funcionarios públicos locales una formación básica sobre inspección del trabajo para asignarlos después al área pertinente. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por la Oficina de País de la OIT de Yakarta, en 2018 se ha nombrado a 108 inspectores del trabajo de entre los demás funcionarios públicos. El Gobierno señala también que el Ministerio de Recursos Humanos ofrece asistencia a los funcionarios gubernamentales locales, por ejemplo, probando equipos destinados a inspecciones en materia de SST. La Comisión toma nota de que, si bien en la memoria del Gobierno presentada en 2017 se indicaba que había 1 987 inspectores, la Dirección General de Inspección del Trabajo y Desarrollo de la SST, en su informe titulado «Strategy for Strengthening Labour Inspection in Indonesia» (Estrategia para fortalecer la inspección del trabajo en Indonesia), señala que el número de inspectores del trabajo ha descendido durante los cuatro últimos años, de 1 927 en 2016 a 1 574 en 2018, y que la asignación presupuestaria para la inspección del trabajo se reduce año tras año. En este informe también se reconoce la necesidad de más locales e infraestructuras para los inspectores del trabajo, incluidos nuevos medios de transporte y oficinas bien equipadas. ***Al tiempo que recuerda que debe designarse a un número suficiente de inspectores del trabajo para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se nombre a suficientes inspectores del trabajo en todos los niveles (nacional, provincial y por distrito o ciudad), de acuerdo con el artículo 10 del Convenio. Solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número total y la distribución geográfica de los inspectores del trabajo designados (desglosados por género), especificando el número de***

inspectores contratados de entre los demás funcionarios públicos, y la asignación de recursos a las oficinas de inspección del trabajo por los gobiernos provinciales y de distrito o ciudad. La Comisión también solicita al Gobierno que tome medidas para mejorar las condiciones materiales de trabajo de los inspectores en términos de oficinas, equipo y medios de transporte, de acuerdo con el artículo 11 del Convenio, y que aporte información adicional en lo relativo a las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Artículo 6. Condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que en el informe sobre la estrategia para fortalecer la inspección del trabajo en Indonesia, mencionado anteriormente, se indica que, además de las escasas oportunidades de formación y desarrollo profesional, los bajos salarios no favorecen el establecimiento de un servicio profesional de inspección. **La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el personal de inspección esté compuesto de funcionarios públicos cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo, de conformidad con el artículo 6 del Convenio. Pide al Gobierno que proporcione información a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kirguistán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2000)

Artículos 12, 16, 17 y 18 del Convenio. Limitaciones y restricciones de la inspección del trabajo. Aplicación efectiva de las sanciones en caso de violación de disposiciones de la legislación laboral. La Comisión toma nota de que los servicios de inspección del trabajo, al igual que otros servicios públicos de inspección, se rigen por la ley núm. 72, de 2007 (en su versión modificada) en lo que respecta a la realización de inspecciones en las empresas. La Comisión constata con **preocupación** que la ley contempla varias limitaciones de las facultades de la inspección del trabajo y de la realización de inspecciones, incluidas las restricciones relacionadas con: i) la facultad de llevar a cabo inspecciones sin previa notificación (las visitas de inspección programadas deben notificarse al menos diez días antes de la inspección (artículo 6, 6)); ii) la libre iniciativa de los inspectores del trabajo (los inspectores del trabajo necesitan una autorización formal, que se les concede en coordinación con el órgano para el desarrollo de la iniciativa empresarial (artículo 12, 3)); iii) la frecuencia de las inspecciones del trabajo (por ejemplo, no pueden llevarse a cabo inspecciones programadas más de una vez al año en establecimientos considerados de alto riesgo, y no más de una vez cada tres años en establecimientos de riesgo promedio (artículo 6, 3)), y en las empresas de nueva creación no pueden llevarse a cabo inspecciones en los tres primeros años de actividad (artículo 6, 8)), y iv) el alcance de las inspecciones, en especial en términos de las cuestiones que pueden examinarse en el curso de las visitas (véanse artículos 6, 5), y 7, 4)). Además, la Comisión toma nota de que los inspectores del trabajo corren el riesgo de que se les destituya de sus funciones, con arreglo al artículo 20 de la ley núm. 72, si un tribunal no confirma la existencia de la infracción que un inspector ha observado y si el tribunal considera que ésta es el resultado de una falta cometida por el inspector. La Comisión recuerda que en el **artículo 12** del Convenio se contempla que debe autorizarse a los inspectores del trabajo a entrar libremente y sin previa notificación en todo establecimiento sujeto a inspección, y a proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente, y que en el artículo 16 se prevé que las inspecciones se realicen con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes.

En lo relativo a la aplicación de las sanciones en los casos de violación de la legislación laboral, la Comisión toma nota de que en el artículo 11 de la ley núm. 72 se contempla que las inspecciones programadas y no programadas no tienen por objeto imponer sanciones pecuniarias o de otro tipo a las empresas y que, en caso de que se observe una violación de la legislación en el curso de una inspección programada, los inspectores del trabajo deben dirigir una advertencia por escrito a la empresa, solicitando que remedie la infracción en un plazo de treinta días (tres días, si la violación tiene un efecto en la seguridad o la salud), y transcurrido ese período, pueden tomar medidas para ejercer influencia en la empresa, como establece la legislación. En este sentido, la Comisión recuerda que el **artículo 17** del Convenio prevé que, con algunas excepciones, la violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo deberá dar lugar inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial, y que los inspectores del trabajo tendrán la facultad discrecional de advertir y de aconsejar, en vez de iniciar o recomendar un procedimiento. **La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para asegurar que se autoriza a los inspectores del trabajo a visitar los establecimientos sujetos a inspección sin previa notificación, de conformidad con el artículo 12, 1), a), del Convenio, y a llevar a cabo inspecciones con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales, con arreglo al artículo 16 del Convenio. Asimismo, insta encarecidamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los inspectores del trabajo puedan iniciar o recomendar inmediatamente un procedimiento judicial sin previa notificación, cuando sea necesario, en virtud del artículo 17 del Convenio.**

Artículos 20 y 21. Informes anuales. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno nunca ha presentado un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo, y que los últimos datos estadísticos sobre las actividades de la inspección del trabajo se proporcionaron en la memoria del Gobierno de 2004. **La Comisión solicita una**

vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas por la autoridad central responsable de la inspección del trabajo con vistas a publicar y transmitir a la Oficina un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección que están bajo su vigilancia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión se refiere a sus comentarios en relación con los artículos 4, 6, 7, 10 y 11 del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la medida en que conciernen a la aplicación de los artículos correspondientes del presente Convenio (artículos 7, 8, 9, 14 y 15). Además, la Comisión quiere plantear los puntos que figuran a continuación.

Artículos 26 y 27 del Convenio. Informe anual sobre la inspección del trabajo (agricultura). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tiene previsto publicar un informe anual sobre las labores de la inspección del trabajo en la agricultura como parte de su informe general anual. **La Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para publicar un informe anual de inspección del trabajo sobre las labores de los servicios de inspección en la agricultura y a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el informe contenga información sobre las cuestiones previstas en el artículo 27, como, por ejemplo, estadísticas sobre las empresas agrícolas sujetas a inspección, el número de inspecciones que se realizan en ellas, las infracciones detectadas y las disposiciones legales a las que se refieren.**

Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que según el Programa de Trabajo Decente por País de Malawi (PTDP) 2011-2016, el sector agrícola es el puntal de la economía, ya que proporciona medios de subsistencia al 80 por ciento de la población. También toma nota de que una de las estrategias en el marco del PTDP es mejorar la aplicación del presente Convenio, así como del Convenio núm. 81. **Tomando nota de la importante proporción de trabajadores del sector agrícola, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas en el marco del PTDP 2011-2016 para mejorar la aplicación del Convenio en la práctica.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Moldova

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1996)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1997)

Con el fin de proporcionar una visión completa de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión estima oportuno examinar conjuntamente los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura).

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2018, así como de las observaciones realizadas por la Confederación Nacional de Sindicatos de Moldova (CNSM) en sus comunicaciones recibidas el 4 de enero y el 4 de septiembre de 2018. En sus observaciones de 4 de septiembre, la CNSM indica que no ha recibido la memoria del Gobierno. La CNSM señala que es lamentable que no se hayan adoptado medidas efectivas hasta la fecha para poner la legislación nacional en conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129, o que no se hayan tenido debidamente en cuenta las recomendaciones del informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por la República de Moldova del Convenio núm. 81, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2015 (documento GB.323/INS/11/6). **La Comisión pide al Gobierno que formule comentarios en respuesta a las observaciones de la CNSM.**

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión señala que, en junio de 2018, la Comisión de Aplicación de Normas recomendó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias y realizara las reformas apropiadas para poner los servicios de inspección del trabajo en conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129 tanto en la legislación como en la práctica y, en particular, que velara por que los inspectores puedan efectuar visitas a los lugares de trabajo sujetos a inspección sin previo aviso, con miras a garantizar una supervisión adecuada y efectiva; que garantizara que las inspecciones se ajusten a la finalidad perseguida y sea posible efectuarlas tan a menudo como sea necesario, y que proporcionara a esta Comisión información detallada y precisa por escrito sobre una serie de disposiciones y requisitos previstos en los dos Convenios.

Artículo 4 del Convenio núm. 81 y artículo 7 del Convenio núm. 129. Vigilancia y control de una autoridad central. Seguridad y salud en el trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley núm. 131 de 2012 sobre

el Control Estatal de las Actividades Empresariales retira a la Inspección Estatal del Estado (SLI) las funciones de vigilancia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST) y las transfiere a otros diez organismos. El Gobierno indicó que se designaría a inspectores de SST en los respectivos organismos que rinden cuentas tanto a sus respectivos organismos sectoriales como a la SLI.

La Comisión toma nota de que, en 2018, la Comisión de Aplicación de Normas recordó que se situaría a la inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI en las que se expresa preocupación por la fragmentación y el debilitamiento de la inspección del trabajo debido a la introducción de la ley núm. 131, incluida la transferencia de competencias en el ámbito de la SST a diez organismos sectoriales diferentes. La CSI señala que las limitaciones introducidas en la ley núm. 131 han debilitado las inspecciones del trabajo, contrariamente a lo dispuesto en los Convenios núms. 81 y 129, y han dado lugar a que se produzcan accidentes del trabajo, incluidos accidentes mortales. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el objetivo de la reforma es asegurar que diferentes órganos de control no inspeccionen una única empresa para el mismo tipo de actividad o proceso de producción, evitando así la duplicación de inspecciones. El Gobierno indica que la metodología sobre el control estatal de las actividades empresariales, basada en el análisis de riesgos, está finalizándose, lo que asegurará la aplicación de las normas ordinarias al planificar y llevar a cabo inspecciones de SST para los diez organismos sectoriales. Esta metodología será supervisada y coordinada por la SLI. El Gobierno hace referencia asimismo a las consultas independientes celebradas con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional en relación con el establecimiento de un marco normativo relativo a la SST. Señala que en 2019 se elaborará un sistema de formación y de aprendizaje electrónico a fin de impartir formación al personal en el ámbito de la SST, pero que dicho sistema sigue requiriendo medios financieros. El Gobierno indica además que, hasta el 23 de mayo de 2019, la responsabilidad de la investigación de accidentes del trabajo graves y mortales seguirá recayendo en la SLI (en virtud de la ley núm. 79/2018). Asimismo, señala que la mayoría de los organismos sectoriales, aunque no todos, tienen oficinas territoriales, y que se concederá la condición jurídica de funcionarios a los inspectores con responsabilidades en materia de SST dentro de los organismos. Además, el Gobierno añade que se ha proporcionado a los diez organismos sectoriales formularios para la presentación de informes mensuales, y que el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social ha pedido que los organismos suministren información semanalmente sobre la base de las actividades de SST realizadas. La Comisión observa, a este respecto, que el informe anual de la inspección del trabajo de 2017, presentado por el Gobierno, parece reflejar únicamente las actividades de la SLI, y no las actividades de SST de los organismos sectoriales.

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a la misión de la OIT que visitó el país en diciembre de 2017, así como del informe de la misión transmitido posteriormente al Gobierno. La Comisión toma nota de que, según el informe de la misión de la OIT, la reforma en el ámbito de la SST ha tenido un impacto negativo en la retención del personal y en las condiciones de servicio de los inspectores. El personal de algunos de los organismos sectoriales no tiene la condición jurídica de funcionarios, y el traslado de 36 inspectores del trabajo de la SLI a los organismos se tradujo en la dimisión de la mitad de los inspectores trasladados. En el informe se indicó asimismo que aún no se habían establecido todos los organismos sectoriales con responsabilidades en materia de SST, y que no todos ellos tenían unidades territoriales o locales, por lo que ciertos sectores y trabajadores corrían el riesgo de no estar cubiertos, o que las partes interesadas no podían acceder fácilmente a las oficinas. ***Recordando la importancia de asegurar que los cambios institucionales tengan lugar de conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129, incluidos los artículos 4, 6, 9, 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y los artículos 7, 8, 11, 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias a este respecto. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que suministre información específica sobre las medidas concretas adoptadas para asegurar la coordinación entre los diversos organismos sectoriales, así como entre estos organismos y la SLI, en particular sobre las medidas ulteriores adoptadas para asegurar la vigilancia por la SLI de las visitas de inspección en materia de SST efectuadas. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre: 1) el número de inspectores nombrados en los organismos sectoriales, así como el número de inspecciones llevadas a cabo por ellos (artículos 10 y 16 del Convenio núm. 81, y artículos 14 y 21 del Convenio núm. 129); 2) la manera en que se garantiza la independencia e imparcialidad de los inspectores designados en los organismos sectoriales a la luz de su rendición de cuentas a la dirección de los organismos sectoriales, y los progresos realizados en cuanto a la concesión de la condición jurídica de funcionario a todos los inspectores (artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129); 3) las medidas ulteriores adoptadas para asegurar que se imparta la formación adecuada a los inspectores, incluido el establecimiento de un sistema de aprendizaje electrónico; 4) la manera en que los expertos y especialistas técnicos en seguridad y salud en el trabajo colaboran en el trabajo de inspección (artículo 9 del Convenio núm. 81 y artículo 11 del Convenio núm. 129), y 5) las medidas adoptadas para proporcionar a dichos inspectores oficinas locales debidamente equipadas (en particular en los sectores cubiertos por los organismos que actualmente no disponen de oficinas locales), así como los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones (artículo 11 del Convenio núm. 81 y artículo 15 del Convenio núm. 129). Pide asimismo al Gobierno que indique si ya se han establecido todos los organismos sectoriales a los que se han asignado funciones de inspección, y que proporcione información sobre la vigilancia de las empresas no cubiertas por los respectivos organismos sectoriales. Por último, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que las actividades de los inspectores de SST en los***

organismos sectoriales se reflejen por separado en el informe anual de la inspección del trabajo, con respecto a todos los temas cubiertos en el artículo 21 del Convenio núm. 81 y en el artículo 27 del Convenio núm. 129.

Artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81, y artículos 12, 1), 23 y 24 del Convenio núm. 129. *Cooperación con el sistema judicial y sanciones adecuadas para los casos de violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo.* La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión relativa a la considerable reducción, entre 2012 y 2016, del número de informes de incumplimiento presentados a los tribunales (que pasaron de 891 a 165), a la disminución de las entidades sujetas a visitas de inspección desde la adopción de la ley núm. 131 de 2012. El Gobierno también se refiere a la moratoria de seis meses en relación con las inspecciones estatales que tuvieron lugar en 2016. El Gobierno indica que, en 2017, el Código de Contravenciones se enmendó para introducir un artículo sobre las violaciones de las disposiciones relativas a la SST cometidas por el empleador y que, por lo tanto, espera que el número de informes de incumplimiento producidos por los inspectores aumente en el futuro. A este respecto, la Comisión toma nota de la información contenida en el informe anual de la inspección del trabajo de 2017, según la cual ha habido un ligero incremento del número de informes presentados a los tribunales por los inspectores, que pasaron de 165 en 2016 a 197 en 2017. **La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de informes de incumplimiento presentados ante los tribunales, indicando el número de informes de este tipo sometidos por los inspectores de la SLI y, por separado, por los inspectores de la SST en los organismos sectoriales. Además, y tomando nota de la ausencia de información en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre el resultado específico de los informes de incumplimiento presentados ante los tribunales, indicando la decisión adoptada y si se ha impuesto cualquier multa u otra sanción.**

Artículo 5, b), del Convenio núm. 81 y artículo 13 del Convenio núm. 129. *Colaboración de los servicios de inspección del trabajo con los empleadores y los trabajadores o sus representantes.* La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el funcionamiento del sistema de SST fue objeto de discusiones en la Comisión Nacional de Consultas y Negociaciones Colectivas. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración de la CNSM, según la cual, en abril de 2018, la Comisión Nacional de Consultas y Negociaciones Colectivas solicitó que el Ministerio de Economía e Infraestructura creara un grupo de trabajo con la participación de las instituciones competentes en el ámbito de la SST y de los representantes de los empleadores y de los sindicatos, con miras a identificar soluciones para las cuestiones existentes relativas al funcionamiento de las autoridades en el ámbito de la SST. La CNSM indica que, ulteriormente, no se creó ningún grupo de trabajo. **La Comisión pide al Gobierno que suministre más información sobre las medidas adoptadas para promover el diálogo efectivo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las cuestiones de la inspección del trabajo, en particular el diálogo sobre las preocupaciones relativas a la SST. Pide asimismo al Gobierno que facilite información sobre las consultas llevadas a cabo a este respecto en la Comisión Nacional de Consultas y Negociaciones Colectivas, y sobre las medidas adoptadas tras la celebración de dichas consultas.**

Artículo 12 del Convenio núm. 81 y artículo 16 del Convenio núm. 129. *Visitas de inspección sin previa notificación.* La Comisión tomó nota anteriormente de la aplicación de la ley núm. 131 a la SLI (de conformidad con el párrafo 27 de su anexo), y de que el artículo 18, 1), de la ley prevé que deberá enviarse a una empresa una notificación de una decisión de efectuar un control al menos cinco días hábiles antes de que éste tenga lugar. El artículo 18, 2), dispone que este preaviso no se proporciona en el caso de un control no notificado previamente, y el artículo 19 indica las circunstancias limitadas específicas bajo las cuales puede realizarse un control no notificado independientemente del calendario de control establecido. En relación con esto, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, conforme a la cual existe una contradicción entre las reglas generales para iniciar una inspección (artículos 14 y 20-23 de la ley núm. 131) y el artículo 12 del Convenio núm. 81, que se eliminaría como parte de un conjunto de medidas legislativas propuestas.

La Comisión tomó nota de que la Comisión de Aplicación de Normas recomendó que el Gobierno pusiera la legislación y la práctica nacionales de conformidad con los Convenios núms. 81 y 129 para que los inspectores del trabajo pudieran realizar visitas a los lugares de trabajo sujetos a inspección sin previa notificación, a fin de garantizar una vigilancia adecuada y efectiva. La Comisión toma nota con *interés* de que, en virtud de la ley núm. 185 de 2017, artículo LXXXV, se enmendó el artículo 1, 6), de la ley núm. 131 con el fin de excluir específicamente la aplicación del artículo 18 de la ley a las inspecciones efectuadas en el ámbito de las relaciones de trabajo y de la SST. Toma nota además de que el artículo LXVII de la ley núm. 185 enmienda el artículo 23⁷ de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (núm. 186/2008) con objeto de prever que los inspectores del trabajo en el ámbito de la SST tendrán la facultad para entrar libremente en los lugares de trabajo a cualquier hora del día o de la noche, sin previa notificación del empleador. **La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre el impacto de estas enmiendas en la realización de inspecciones sin previa notificación en la práctica, incluida información sobre el número de inspecciones del trabajo llevadas a cabo con o sin previa notificación por los inspectores identificadas por separado para la SLI y para los organismos sectoriales, así como sobre las violaciones detectadas y las sanciones impuestas en relación con las inspecciones tanto notificadas previamente como no notificadas previamente, una vez más por separado para la SLI y para los organismos sectoriales.**

Artículos 15, c), y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 20, c), y 21 del Convenio núm. 129. *Confidencialidad relativa al hecho de que una visita de inspección se efectuara en respuesta a una queja.* La Comisión tomó nota anteriormente de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual las inspecciones no programadas (que

habían sido las únicas inspecciones efectuadas sin previa notificación, en virtud de la ley núm. 131), sólo se llevaban a cabo como consecuencia de una queja o para efectuar una investigación con posterioridad a un accidente.

La Comisión toma nota de que el informe anual de la inspección del trabajo de 2017 hace referencia una vez más a las inspecciones no programadas, como aquellas relativas a quejas recibidas o con posterioridad a un accidente. Sin embargo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (núm. 186/2008) se enmendó en 2017 con objeto de prever la obligación de los inspectores del trabajo de mantener la confidencialidad de cualquier queja recibida relativa a la SST, y de no revelar al empleador que una inspección se efectuó a raíz de una queja. **Tomando nota de la supresión del requisito de proporcionar una previa notificación para las inspecciones ordinarias y remitiéndose a sus comentarios en relación con el artículo 12, la Comisión pide al Gobierno que suministre más información sobre toda medida adicional adoptada para garantizar que se efectúe un número suficiente de inspecciones sin previa notificación, a fin de asegurar que, cuando se lleven a cabo inspecciones como consecuencia de una queja, el hecho de la queja, así como la identidad del/de los demandante(s) se mantengan confidenciales. Pide al Gobierno que indique el número de inspecciones efectuadas sin previa notificación que no se llevaron a cabo como consecuencia de una queja o tras producirse un accidente.**

Artículo 16 del Convenio núm. 81 y artículo 21 del Convenio núm. 129. Efectuar inspecciones con la frecuencia que sea necesaria para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes. La Comisión tomó nota anteriormente de que ciertas disposiciones de la ley núm. 131 no eran compatibles con el artículo 16 del Convenio núm. 81 y con el artículo 21 del Convenio núm. 129 sobre la realización de inspecciones con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes. El artículo 3, g), de la ley núm. 131 dispone que las inspecciones sólo pueden realizarse cuando se hayan agotado otros medios para verificar el cumplimiento de la legislación. A tenor de lo dispuesto en el artículo 14, los órganos de control no tienen derecho a efectuar un control de la misma entidad más de una vez en un año civil, con la salvedad de las inspecciones sin previa notificación. De conformidad con los artículos 7 y 19, la ley núm. 131 sólo permite que se efectúen inspecciones no programadas en determinadas condiciones: están sujetas a la delegación de control firmada por la máxima autoridad a la que se han asignado funciones de control; no pueden llevarse a cabo sobre la base de información no verificada y de información recibida de fuentes anónimas, y no pueden efectuarse cuando haya cualquier otra forma directa o indirecta de obtener la información necesaria.

La Comisión recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno, en junio de 2018, que se cerciorara de que las inspecciones son proporcionales al objetivo legítimo perseguido y son posibles con la frecuencia que es necesaria.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales la ley núm. 131 reduce considerablemente la capacidad de las inspecciones del trabajo limitando la frecuencia de las inspecciones en las diferentes empresas. La Comisión toma nota asimismo con **preocupación** de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual tras la adopción de la ley núm. 131, el número de entidades sujetas a visitas de inspección había disminuido anualmente. La Comisión toma nota asimismo de la información contenida en el informe anual de la inspección del trabajo, conforme al cual en 2017 se realizaron 545 inspecciones no programadas (basadas en quejas con posterioridad a un accidente), lo que indica una mayor disminución respecto de las 1 317 inspecciones no programadas que tuvieron lugar en 2015 y las 610 inspecciones de este tipo efectuadas en 2016. En 2017, sólo se llevaron a cabo diez inspecciones de seguimiento en comparación con las 117 efectuadas en 2015 y las 42 realizadas en 2016. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se enmiende la legislación nacional en un futuro cercano, a fin de prever que las inspecciones del trabajo se realicen con la frecuencia y el esmero necesarios para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes, de conformidad con el artículo 16 del Convenio núm. 81 y con el artículo 21 del Convenio núm. 129.**

Artículo 17 del Convenio núm. 81 y artículo 22 del Convenio núm. 129. Procedimientos legales o administrativos inmediatos. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 4, 1), de la ley núm. 131 prevé que las inspecciones efectuadas durante los tres primeros años de funcionamiento de una empresa/empleador serán de carácter consultivo. El artículo 5, 4), establece que, en este contexto y en caso de infracciones menores, no se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Delitos Administrativos o en otras leyes, y el artículo 5, 5), dispone que no pueden aplicarse «medidas restrictivas» en caso de violaciones graves.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales la ley núm. 131 introduce una «carta blanca» para las empresas en los tres primeros años de su funcionamiento, al estipular que no pueden aplicarse sanciones en el caso de delitos menores durante este período. La Comisión recuerda una vez más que el artículo 17 de Convenio núm. 81 y el artículo 22 del Convenio núm. 129 disponen que, con algunas salvedades dirigidas a nuevas operaciones, las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo deberán estar sujetas a procedimientos legales inmediatos sin previa notificación, y que debe dejarse al criterio de los inspectores del trabajo emitir una advertencia o proporcionar asesoramiento en lugar de instituir o recomendar procedimientos. **Lamentando tomar nota de la ausencia de una respuesta a su solicitud anterior, la Comisión insta al Gobierno a que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los inspectores del trabajo puedan iniciar o recomendar procedimientos judiciales inmediatos. Pide una vez más al Gobierno que facilite información sobre el significado de «medidas restrictivas» cuya imposición se prohíbe en virtud de la ley núm. 131, sobre el número y la naturaleza de las**

violaciones graves detectadas por los inspectores, sobre las sanciones propuestas por los inspectores y sobre las sanciones que se han aplicado finalmente.

Cuestiones relativas específicamente a la inspección del trabajo en la agricultura

Artículo 9, 3), del Convenio núm. 129. Formación adecuada para los inspectores del trabajo en la agricultura. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, según la cual la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria se encarga de las inspecciones de la SST en la agricultura. El Gobierno indica que los inspectores del trabajo de la Agencia efectuarán inspecciones en cooperación con otros inspectores en el terreno de la Agencia. La Comisión toma nota asimismo de la información facilitada por el Gobierno sobre las medidas previstas para impartir formación en materia de SST a los inspectores de los organismos sectoriales. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo que está relacionada específicamente con sus funciones en el sector agrícola, incluido el número de programas de formación organizados para los inspectores de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria con funciones en materia de SST, los temas cubiertos en estos programas y el número de inspectores que participaron en dichos programas.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Pakistán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1953)

Artículos 4, 2), 5, a), 10 y 16 del Convenio. Vigilancia y control por las autoridades centrales de inspección del trabajo a nivel provincial. Número de inspectores del trabajo y de inspecciones del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según el perfil nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST), de 2016, publicado por el Ministerio de Pakistani Residentes en el Extranjero y de Desarrollo de Recursos Humanos, seguía habiendo una grave escasez de inspectores del trabajo en relación con el número de lugares de trabajo sujetos a inspección. Una de las recomendaciones en dicho perfil hacía referencia a la creación de autoridades de inspección del trabajo independientes (separadas de los departamentos del trabajo provinciales que actualmente hacen las veces de autoridades centrales) a nivel provincial, dotadas de suficientes recursos humanos y financieros. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno en su memoria, en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, según la cual no existen hoy por hoy recursos para establecer entidades de inspección del trabajo independientes a nivel provincial, pero se propone incrementar el número de inspectores del trabajo en todas las provincias. El Gobierno indica que: i) en Khyber Pakhtunkhwa, se propone contratar a 41 nuevos inspectores (además de los 108 existentes); ii) en Punjab, se recomienda aumentar el número actual de inspectores del trabajo de 71 a 95; iii) en Balochistan, se realizan esfuerzos constantes para aumentar el número de inspectores del trabajo cada año, y iv) en Sindh, se propone mejorar el sistema de inspección del trabajo e incrementar el número de visitas de inspección del trabajo en el ámbito de la SST. ***La Comisión insta una vez más al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para incrementar el número de inspectores del trabajo, y a que proporcione información sobre los recursos comprometidos, y las medidas concretas adoptadas a este respecto y a que proporcione información detallada sobre el número de inspectores del trabajo en cada provincia. Al tiempo que recuerda que el sistema de inspección del trabajo se someterá a la vigilancia y control de una autoridad central, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier medida adoptada o prevista para fortalecer la autoridad central, incluidas medidas para poner en práctica las recomendaciones contenidas en el perfil nacional de SST a fin de crear autoridades de inspección del trabajo independientes.***

Cobertura de los lugares de trabajo por las inspecciones del trabajo. Empresas privadas de auditoría. La Comisión tomó nota anteriormente de que, durante la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2014, algunos oradores expresaron su preocupación en lo que respecta a la realización de inspecciones de terceros por empresas privadas de auditoría, y ulteriormente tomó nota de la declaración del Gobierno de que la externalización de responsabilidades a dichas empresas debía cambiar. En relación con su solicitud anterior sobre el funcionamiento de las empresas privadas de auditoría, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en Sindh, la legislación aplicable no permite que las empresas privadas de auditoría efectúen inspecciones. La Comisión toma nota asimismo de que, según la declaración del Gobierno, las empresas privadas y públicas de auditoría (acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación del Pakistán (PNAC)) podrían ser una manera útil de fortalecer el sistema de inspección del trabajo, y de que el PNAC realiza con regularidad una labor de vigilancia para cerciorarse de que estas empresas tengan la capacidad necesaria. A este respecto, la Comisión subraya una vez más que si bien las auditorías privadas pueden contribuir a cerrar la brecha de cumplimiento, dichas iniciativas sólo pueden complementar, pero no sustituir, la inspección pública del trabajo. ***Dado que el Gobierno no ha proporcionado una respuesta en relación con esto, la Comisión le pide nuevamente que suministre información sobre si las empresas que han sido objeto de evaluaciones del cumplimiento por empresas privadas de auditoría siguen estando sujetas a la inspección del trabajo en la legislación y en la práctica. Pide al Gobierno que proporcione más información detallada sobre las medidas de vigilancia adoptadas por el PNCA con miras a garantizar unas evaluaciones independientes del cumplimiento por estas***

empresas. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que suministre información sobre si el Gobierno promueve la cooperación entre los servicios de inspección del trabajo y las empresas privadas de auditoría.

Artículo 12, 1). Libre acceso de los inspectores del trabajo a los lugares de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente con preocupación de la indicación del Gobierno de que, desde 2001, en virtud de una orden administrativa, el Inspector Jefe de Fábricas (Director del Trabajo) envía una carta a una fábrica antes de una inspección en la provincia de Sindh, que indica la fecha y la hora de la visita. También tomó nota de las observaciones formuladas por la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF), según las cuales las inspecciones del trabajo se habían interrumpido prácticamente en la provincia de Sindh, y 2,3 millones de trabajadores en dicha provincia sufrían accidentes del trabajo cada año. La Comisión señaló además que, al parecer, según el perfil de la SST de 2016, las restricciones en forma de notificación previa parecían un problema en algunas zonas de Punjab. En relación con esto, la Comisión toma nota con **preocupación** de que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sindh, de 2017, no da efecto al **artículo 12** del Convenio en la medida en que el artículo 19 de dicha ley no autoriza a los inspectores del trabajo a entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en un lugar de trabajo sujeto a inspección, y limita la realización de visitas de inspección a «cualquier momento razonable» (y sólo permite la entrada «en cualquier momento» en situaciones que sean, o puedan ser, peligrosas). La Comisión toma nota igualmente de la declaración del Gobierno, conforme a la cual la notificación previa para la inspección no entra en absoluto en conflicto con el libre acceso. El Gobierno señala que no existe ninguna obligación en la legislación de emitir notificaciones previas antes de las inspecciones; sin embargo, indica que dichas notificaciones son una manera útil de asegurar que no se «acose indebidamente» a los empleadores y que se ponga freno así a la «prepotencia» de los inspectores del trabajo. La Comisión recuerda que, según su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 263, las visitas sin previa notificación permiten al inspector entrar en el lugar de control sin notificarlo previamente al empleador o a su representante, en particular en los casos en los que se prevé que el empleador tratará de ocultar una violación cambiando las condiciones habituales de trabajo, impidiendo a un testigo estar presente o haciendo imposible que tenga lugar la inspección. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 12, 1), a) y b), a fin de autorizar a los inspectores del trabajo a entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día y de la noche, en todo establecimiento sujeto a inspección, y a que permita la realización de un número suficiente de visitas de inspección sin previa notificación en la práctica en la provincia de Sindh. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado la información solicitada, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se autorice a los inspectores del trabajo en la provincia de Punjab a entrar libremente en cualquier lugar de trabajo sujeto a inspección sin previa notificación, a cualquier hora del día y de la noche. Además, tomando nota de que el Gobierno no ha suministrado las estadísticas solicitadas, la Comisión pide también una vez más al Gobierno que proporcione información sobre el número de inspecciones efectuadas sin previa notificación en las provincias de Sindh y Punjab (en comparación con las efectuadas con previa notificación), incluidas cualesquiera violaciones detectadas, sanciones impuestas, y medidas correctivas adoptadas como consecuencia de dichas inspecciones conducidas sin notificación previa.**

Artículos 17 y 18. Control del cumplimiento efectivo. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones formuladas por la PWF, según las cuales las actividades de control del cumplimiento de la inspección del trabajo eran triviales. También tomó nota de la referencia del sindicato a las estadísticas que muestran que, en Sindh, en 2014, sólo se impusieron 12 sanciones, aunque había 8 572 fábricas registradas en dicha provincia. La Comisión toma nota de que el Gobierno proporciona la información estadística solicitada, en respuesta a la solicitud de la Comisión, en relación con la provincia de Punjab (durante el período 2017-2018), sobre el número de violaciones detectadas, el número de violaciones que condujeron a acciones judiciales y el valor de las multas impuestas (10 515 inspecciones se tradujeron en 16 139 acciones judiciales y en 1 814 530 rupias pakistaníes en multas (aproximadamente 13 571 dólares de los Estados Unidos). Sin embargo, la Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no facilita la información estadística solicitada en relación con las demás provincias. **La Comisión insta al Gobierno a suministrar información en relación con cada una de las provincias sobre el número de violaciones detectadas, el número correspondiente de violaciones que se tradujeron en acciones judiciales, y condenas posteriores y el número y el porcentaje promedio de las multas impuestas.**

Sanciones suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la solicitud de información de la Comisión sobre los progresos realizados en lo referente a la adopción del proyecto de ley que prevé el incremento de las sanciones en Balochistan, se remite a dos proyectos de ley presentados al nuevo gabinete en dicha provincia para su aprobación. La Comisión toma nota asimismo de que, según la información suministrada por el Gobierno, no ha habido cambios en las sanciones previstas en las Leyes de Minas, de 1923, en las provincias. Sin embargo, la Comisión toma nota de que una de las recomendaciones formuladas durante una reunión de los inspectores jefes de minas en junio de 2018 en el marco del proyecto de la OIT sobre el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo en el Pakistán, hacía referencia a la actualización del marco legislativo que regula el sector minero. **La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los progresos realizados con respecto al incremento del nivel de las multas y otras sanciones previstas en la legislación de la provincia de Balochistan, y que suministre información sobre cualquier cambio introducido en las sanciones por violaciones de la legislación laboral previstas en las leyes de minas de cada una de las provincias.**

Artículo 18. Sanciones por obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas

en 2014, varios oradores indicaron que las sanciones impuestas por obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones eran insuficientes. A este respecto, el Gobierno tomó nota anteriormente de que tres provincias (Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y Sindh) habían revisado sus leyes de fábricas respectivas para aumentar las multas por obstrucción a la labor de los inspectores, y de que también se propuso aumentar las sanciones pertinentes en la Ley de Fábricas de Balochistan.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su solicitud, según la cual el incremento de las multas por obstrucción en Punjab (20 000 PkR aproximadamente 149 dólares de los Estados Unidos) ya había conducido a menos casos de obstrucción a los inspectores del trabajo, y de que algunos casos de obstrucción se castigaron con multas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no es posible proporcionar información desglosada sobre la obstrucción a los inspectores del trabajo en Khyber Pakhtunkhwa, y la Comisión observa que el Gobierno no ha suministrado información pertinente en relación con las provincias de Sindh y Balochistan. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas para cerciorarse de que la legislación en la provincia de Balochistan prevea sanciones suficientemente disuasorias por obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información detallada sobre las sanciones aplicables previstas en las leyes de minas en las provincias en relación con casos de obstrucción. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno ha proporcionado información general con respecto a una provincia, y ninguna en lo tocante a otras provincias, la Comisión pide una vez más al Gobierno que no escatime esfuerzos para suministrar información sobre los casos relativos a la obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones en la práctica, en relación con cada una de las provincias, incluidos el número específico de casos de obstrucción, el número de acciones judiciales emprendidas, sus resultados y las sanciones específicas impuestas (incluida la cuantía de las multas impuestas).***

Artículos 20 y 21. Publicación de un informe de inspección anual. La Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha comunicado a la Oficina ningún informe anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo. Toma nota de la indicación del Gobierno de que el Ministerio de Pakistanies Residentes en el Extranjero y de Desarrollo de Recursos Humanos está trabajando en la compilación del informe anual de inspección del trabajo en coordinación con las provincias, y de que el informe se presentará una vez se disponga de toda la información. ***La Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para asegurar que la autoridad central de inspección del trabajo en cada provincia publique un informe anual de inspección del trabajo, en virtud del artículo 20, y que estos informes se comuniquen a la OIT, ya sea por separado o de manera compilada, de conformidad con el artículo 20, 3). Alienta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que el/los informe(s) anuales contenga(n) información completa sobre los temas indicados en el artículo 21.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Polonia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1995)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1995)

A efectos de aportar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar el Convenio núm. 81 (inspección del trabajo) y el Convenio núm. 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 1) y 3), del Convenio núm. 129. Actividades de la inspección del trabajo para la protección de los trabajadores extranjeros y en situación irregular y funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en respuesta a su solicitud anterior, según la cual, la Guardia de Fronteras (BG) está asumiendo gradualmente el control en el terreno de la legalidad del empleo de extranjeros. El Gobierno indica que, tras la adopción, en 2014, de la política de migraciones de Polonia, el foco de la cooperación entre la Inspección Nacional del Trabajo (NLI) y la BG está pasando del control conjunto del empleo ilegal al intercambio de experiencias, a las buenas prácticas y a la interpretación de los reglamentos. El Gobierno declara que esto permitirá que la NLI se centre más en las cuestiones directamente relacionadas con la protección de los derechos de los trabajadores. Según las estadísticas contenidas en la memoria del Gobierno y en el informe de inspección anual de 2015, presentado en 2016, este cambio redundó en que las inspecciones del trabajo se centraran más en el control de la legalidad del empleo de los ciudadanos polacos: aproximadamente 23 000, de un total de 90 000 inspecciones realizadas por la NLI en 2015, se centraron en la legalidad del empleo y en otro trabajo remunerado de los ciudadanos polacos. Esto dio lugar a la detección de empleo ilegal de aproximadamente 21 000 trabajadores, incluidos más de 13 000 supuestos contratistas independientes. La Comisión saluda la indicación de que más de 8 000 de esos trabajadores obtuvieron contratos de trabajo a través de las intervenciones de la inspección del trabajo.

Sin embargo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los controles de la inspección del trabajo se llevan a cabo en relación con los nacionales extranjeros que residen ilegalmente en el territorio, en cooperación con la

BG, o los resultados de las inspecciones se notifican a la BG, que posteriormente impone sanciones. El Gobierno indica que la NLI se centra en el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de los derechos legales de todo trabajador polaco que se encuentre en una situación irregular con poco control sobre los trabajadores extranjeros en situación similar, como consecuencia de la nueva distribución de funciones entre la BG y la NLI. El informe anual de inspección del trabajo de 2015 indica que, en 2015, 3 000 inspecciones del trabajo se centraron en la legalidad del empleo relacionado con los extranjeros, detectándose violaciones en una tercera parte de éstas. El Gobierno declara que la NLI detectó un número relativamente bajo de casos que afectan a los trabajadores extranjeros que residen ilegalmente en Polonia; sólo se detectaron, en 2015, 30 extranjeros en nueve empresas. Para los años 2013-2015, la detección de extranjeros sin permisos de trabajo dio lugar a dos remisiones de mociones de castigo en el tribunal, a cuatro multas penales y a 11 medidas educativas. El Gobierno indica que la NLI no tiene conocimiento de casos en los que se otorgue a los trabajadores extranjeros que residen ilegalmente en Polonia derechos legales de empleo, como salarios y prestaciones de seguridad social. La Comisión recuerda que, en su Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, párrafo 77, indicó que, ni el Convenio núm. 81, ni el Convenio núm. 129 contienen la menor disposición que sugiera la exclusión de trabajador alguno de la protección de la inspección del trabajo a causa del carácter irregular de su relación laboral. La Comisión recuerda asimismo su observación relativa a la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en la que solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para permitir que los trabajadores migrantes se acercaran a las autoridades competentes y buscaran una reparación en caso de violación de sus derechos o abusos, sin temor a represalias. **Tomando nota de los esfuerzos del Gobierno para aliviar a la inspección de la tarea de control del empleo ilegal de los trabajadores extranjeros, transfiriendo ésta a la BG, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que los servicios de inspección del trabajo garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de los derechos legales de los trabajadores extranjeros, incluidos aquéllos que se encuentran en situación irregular, como consecuencia de su trabajo actual y pasado (como los salarios y las prestaciones de seguridad social).**

Artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81 y artículos 12, 22 y 23 del Convenio núm. 129. Sanciones y cumplimiento efectivo. Cooperación entre los servicios de inspección y el Poder Judicial. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, en relación con sus comentarios anteriores sobre el número de notificaciones de un presunto delito realizadas por los inspectores del trabajo al Ministerio Público (PO). Sin embargo, toma nota de que casi el 75 por ciento de las notificaciones al PO sobre sospechas de delitos penales, no se tradujo en procedimientos. El Gobierno indica que los inspectores del trabajo pueden presentar denuncias o solicitudes de justificación de la negativa del PO a iniciar procedimientos, y que los inspectores presentaron 131 denuncias en 2015. **Tomando nota de que la mayoría de los casos transmitidos al PO no dan lugar a procedimientos, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mayor cooperación efectiva entre los servicios de inspección del trabajo y el sistema judicial. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que transmita información sobre las razones por las que el PO declinó llevar a cabo procedimientos, suspender o discontinuar los casos, y si el PO comunica estas preocupaciones o recaba información adicional de los inspectores antes de sus decisiones finales de realizar procedimientos. También solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que los inspectores del trabajo reciban una adecuada formación en preparación de notificaciones al PO y que se les informe sistemáticamente acerca de los resultados de los casos notificados.**

Artículos 2, 1), 5, a), 12, 1), y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 4, 12, 16, 1), y 21 del Convenio núm. 129. Cobertura de los establecimientos por las inspecciones del trabajo. Restricciones a la colaboración entre los funcionarios de la inspección del trabajo y otras instituciones públicas y a los inspectores de entrar libremente en los establecimientos. La Comisión tomó nota con anterioridad de las indicaciones del Gobierno sobre las restricciones establecidas en el capítulo 5 de la Ley sobre Libertad de la Actividad Económica (AFEA), que dispone que las inspecciones requieren una autorización que indique el tema del control y que el alcance de éste no puede superarse durante las inspecciones. La Comisión toma debida nota de que la AFEA fue enmendada en 2015 para disponer que algunas restricciones no se aplicarían si los acuerdos internacionales ratificados establecieran lo contrario. Sin embargo, toma nota con **preocupación** de la indicación del Gobierno, según la cual la aplicación de las disposiciones de la AFEA a la NLI plantea varias dificultades en la práctica.

La Comisión toma debida nota del requisito contenido en el artículo 79-2, 1), de la AFEA, de que la notificación previa para realizar inspecciones no se aplica en la inspección del trabajo, a la luz de las obligaciones en virtud de los Convenios núms. 81 y 129. No obstante, toma nota de que el artículo 79, a), exige que los inspectores del trabajo obtengan y presenten una autorización de la inspección del trabajo al empresario o a su representante, salvo en los casos graves en los que puede presentarse una autorización dentro de los tres días posteriores al inicio de la inspección. El Gobierno declara que la obtención de esta autorización puede significar que se alarguen las actividades, que ya exigen mucho tiempo, antes de iniciar una inspección y limita la movilidad de los inspectores del trabajo. Plantea dificultades prácticas en la inspección de un establecimiento completo con más de dos empresarios o subcontratistas, y a menudo dificulta la realización de controles sin un acuerdo del empresario. El Gobierno también indica que la AFEA impide que los inspectores del trabajo realicen inspecciones conjuntas con otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de las condiciones laborales (como la Inspección Estatal Sanitaria y la Inspección de Transporte por Carreteras). El Gobierno también indica que la AFEA requiere que se realicen inspecciones en la sede de la empresa o en el lugar de la actividad

comercial, lo que limita seriamente la posibilidad de control de los empresarios que se dedican a actividades económicas utilizando la dirección de su casa. La Comisión también toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno sobre varias resoluciones del tribunal administrativo sobre la aplicación de la AFEA a la NLI y toma nota de la indicación del Gobierno de que existe un riesgo de que las pruebas recogidas como resultado de las inspecciones puedan ser consideradas una violación de la AFEA. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para abordar las limitaciones a la labor de la inspección del trabajo, en relación con la autorización previa, la inspección de los establecimientos con múltiples empleadores y la realización de inspecciones conjuntas, de conformidad con los artículos 12 y 16 del Convenio núm. 81 y con los artículos 16 y 21 del Convenio núm. 129. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y que siga transmitiendo información sobre el impacto de la AFEA en las actividades de la inspección del trabajo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Qatar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)

Cooperación técnica. En cuanto a sus comentarios anteriores, la Comisión celebra la información que proporciona el Gobierno en su memoria en lo relativo a las medidas previstas en el marco del programa de cooperación técnica entre el Gobierno y la OIT, en especial en el segundo pilar, que se refiere a la mejora del sistema de inspección del trabajo y el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno señala que la OIT ha llevado a cabo una evaluación del sistema de inspección del trabajo para definir sus necesidades técnicas; dicha evaluación llegará a su fin a finales de 2018. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas a raíz de la evaluación, cuando haya finalizado, con vistas a mejorar la aplicación del Convenio.***

Artículos 3, 8, 10 y 16 del Convenio. Número suficiente de inspectores del trabajo y cobertura de los establecimientos. La Comisión tomó nota anteriormente de que el programa de cooperación técnica suscrito por el Gobierno y la OIT incluye la puesta en práctica de una política y estrategia de inspección del trabajo, aumentando el número de intérpretes que acompañan a los inspectores con el fin de permitir la interacción con los trabajadores durante las visitas de inspección, y aplicando medidas encaminadas a asegurar que las inspecciones cubran todas las empresas y los establecimientos previstos por la Ley del Trabajo.

La Comisión acoge con satisfacción la indicación del Gobierno, según la cual se ha formulado una política nacional de inspección del trabajo, que se está desarrollando en estos momentos y que se ha creado una unidad estratégica en el Departamento de Inspección del Trabajo encargada de supervisar la puesta en práctica de los planes modernos y estratégicos de inspección. Asimismo, el Gobierno indica que en 2018 se ha elaborado un plan de inspección con miras a cubrir todos los establecimientos del país. La Comisión saluda que el Gobierno señale además que se cuenta ahora con 12 intérpretes en el Departamento de Inspección del Trabajo (lo cual representa un aumento con respecto a los cuatro intérpretes de los que había tomado nota la Comisión), que saben hablar las lenguas más comunes entre los trabajadores migrantes, y que el número de inspectores que hablan tanto árabe como inglés ha aumentado a 100 (con respecto a los 96 que había antes). Actualmente, hay 255 inspectores del trabajo, diez supervisores administrativos y cinco supervisores técnicos. La Comisión toma nota de que esto representa un descenso respecto del número de inspectores del trabajo que la Comisión había registrado anteriormente, y constata que el Gobierno indica que esto se debe a un cambio en la estructura ministerial, que tuvo lugar en marzo de 2016, al traslado de algunos inspectores a la División de Protección de los Salarios, así como a un interés del Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales por mejorar la calidad de la labor de los inspectores en lugar de dar importancia al número de inspectores.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en los ocho primeros meses de 2018, se llevaron a cabo 27 771 inspecciones (13 855 inspecciones del trabajo y 13 916 inspecciones en materia de SST), que dieron lugar a 3 475 advertencias para reparar una infracción y 1 235 actas de infracción. En alrededor del 70 por ciento de las inspecciones, no se observaron infracciones, y en un 10 por ciento sólo se ofreció orientación y asesoramiento. El Gobierno señala que la mayoría de las inspecciones fueron proactivas y sin aviso previo (22 410), y que se llevaron a cabo 2 119 inspecciones de seguimiento. ***La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus iniciativas para elaborar y poner en práctica una política nacional de inspección del trabajo clara y coherente, que garantice la protección de los trabajadores. Al tiempo que toma nota de que no se observaron infracciones en la mayoría de las inspecciones, la Comisión insta al Gobierno a que continúe su labor en lo relativo a la programación estratégica y el desarrollo de planes modernos y estratégicos de inspección, y que proporcione más información sobre la manera en que define las prioridades y los objetivos de la inspección. Asimismo, pide al Gobierno que siga aportando información sobre las medidas adoptadas para garantizar que se contrate a inspectores del trabajo e intérpretes que hablen las lenguas de los trabajadores migrantes, y sobre el número de inspectores del trabajo, desglosado por género. Por último, pide al Gobierno que siga tomando medidas para aumentar la cobertura de las visitas de inspección, por ejemplo, visitando establecimientos en los que se emplea a trabajadores migrantes vulnerables, y que continúe aportando información***

sobre el número total de inspecciones realizadas, desglosándolas en inspecciones con o sin aviso previo, rutinarias, motivadas por quejas, motivadas por accidentes y de seguimiento.

Artículos 5, a), 17, 18 y 21, e). *Cooperación efectiva entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, procedimientos jurídicos y aplicación efectiva de las sanciones adecuadas.* La Comisión tomó nota anteriormente de que en un informe encomendado por el Gobierno se recomendaba atribuir más competencias a los inspectores del trabajo, los cuales, tras detectar infracciones, sólo estaban facultados para redactar actas de infracción. Estas actas se remitían a continuación a los tribunales para que adoptaran medidas ulteriores en relación con cualquier sanción que hubiera de imponerse. La Comisión tomó nota además de que el resultado de la mayoría de las inspecciones no conducía a medidas ulteriores, y acogió con agrado, a este respecto, la indicación del Gobierno de que estaba dispuesto a considerar el otorgamiento de otras facultades a los inspectores del trabajo con miras a hacer cumplir la ley. Asimismo, la Comisión constató una vez más que no se había proporcionado información sobre las sanciones específicas impuestas en los casos en que las decisiones habían sido tomadas por tribunales.

La Comisión toma nota de la información aportada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior, en lo relativo al aumento del número de actas de infracción remitidas a los tribunales, que ascendía a 676 en 2015, 1 142 en 2016, 657 en el primer semestre de 2017 y 1 235 en los ocho primeros meses de 2018. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que transmitirá datos estadísticos sobre el resultado de los casos remitidos al Poder Judicial por el Departamento de Inspección del Trabajo, pero **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre el resultado de estos casos, pese a las reiteradas solicitudes de la Comisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en el marco de la cooperación entre el Gobierno y la OIT, se va a llevar a cabo un examen de la legislación pertinente con vistas a reforzar la facultad de los inspectores del trabajo de hacer cumplir la ley y su colaboración con el sistema judicial con arreglo a las recomendaciones de la Comisión. **La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas, en el contexto de la cooperación técnica en curso, con miras a fortalecer la efectividad de los mecanismos de cumplimiento, incluidas las medidas para otorgar mayores facultades a los inspectores del trabajo para hacer cumplir la ley, y más medidas encaminadas a promover la colaboración efectiva con el sistema judicial (también con respecto al intercambio de información sobre el resultado de los casos remitidos a los tribunales). En relación con esto, insta una vez más al Gobierno a que proporcione la información solicitada sobre el resultado de los casos remitidos al Poder Judicial por los inspectores del trabajo a través de actas de infracción, incluidas las sanciones impuestas en virtud de la Ley del Trabajo (sentencias absolutorias, multas — incluyendo las sumas — o penas de prisión, según proceda) y las disposiciones legales con las cuales están relacionadas, distinguiendo estos casos de los llevados ante los tribunales por los propios trabajadores. Pide asimismo al Gobierno que siga proporcionando estadísticas exhaustivas sobre las demás actividades de la inspección del trabajo encaminadas a hacer cumplir la ley.**

Artículos 5, a), 9 y 13. *Inspección del trabajo en el ámbito de la SST. Inspecciones en materia de SST y actividades preventivas de la inspección del trabajo.* La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior, acerca de que, en los ocho primeros meses de 2018, se efectuaron 13 916 inspecciones en materia de SST en 4 715 empresas. Las inspecciones efectuadas condujeron a 2 778 advertencias para reparar infracciones, a 2 657 informes de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la SST y a 54 actas de infracción. Asimismo, la Comisión constata con **preocupación** que el Gobierno indica que la tasa de trabajadores fallecidos en accidentes del trabajo ha aumentado notablemente, alcanzando los 117 fallecimientos en 2017 (con respecto a 35 fallecimientos en 2016, 24 en 2015 y 19 en 2014) y que los datos estadísticos proporcionados sobre accidentes mortales no están desglosados por ocupación o sector. El número de trabajadores lesionados (con lesiones de gravedad moderada o alta) como consecuencia de accidentes del trabajo en el primer semestre de 2018 ascendió a 238 (en comparación con los 245 registrados en el mismo período de 2017). El Gobierno indica que está tomando una serie de medidas para reducir la tasa de lesiones y accidentes del trabajo. Entre éstas, en el contexto del programa de cooperación técnica, se encuentran las medidas para reforzar el sistema de SST, la aplicación de una política en materia de SST, el fortalecimiento de la formación de inspectores especializados en SST y la realización de pruebas de competencia para esos inspectores, así como campañas de sensibilización sobre los medios de prevención de los accidentes del trabajo. El Gobierno indica que estas medidas son necesarias habida cuenta de la importancia de reforzar la capacidad del Departamento de Inspección del Trabajo en materia de SST en todos los sectores, incluido el de la construcción. El Gobierno señala además que la cooperación técnica abarcará un análisis de las lagunas con respecto al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), con vistas a ratificar ese instrumento. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, con arreglo al artículo 100 de la Ley del Trabajo, los inspectores tienen la facultad de elaborar un informe urgente, que remitirán al ministro, si detectan un peligro inminente en el establecimiento y, a raíz de estos informes, el ministro emitirá una decisión de cierre parcial o total hasta que se elimine la fuente de peligro, al tiempo que exigirá que los empleadores autores de la infracción paguen los salarios de los trabajadores durante el período de cierre. **La Comisión insta al Gobierno a que tome medidas inmediatas para abordar el incremento del número de accidentes del trabajo mortales, incluidas las medidas destinadas a fortalecer la capacidad de los inspectores del trabajo con respecto a la supervisión de la SST. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando el número de accidentes del trabajo, incluidos los accidentes mortales, y que indique, para los accidentes del trabajo mortales, la ocupación o el sector en cuestión (como la construcción, la energía o la hostelería). Solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las actividades de prevención de los servicios de inspección y el número y tipo de visitas de inspección en materia de SST realizadas (indicando si son con o sin aviso previo, rutinarias,**

en respuesta a una queja o a un accidente, o de seguimiento), el número de infracciones observadas, el número de actas de infracción levantadas y, en particular, la información solicitada previamente en lo relativo al seguimiento dado por las autoridades judiciales a estas actas de infracción. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que aporte información sobre la aplicación en la práctica por parte de los inspectores del trabajo de la facultad de ordenar la adopción de medidas de aplicación inmediata, en caso de peligro inminente para la salud o seguridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 13, indicando el número de informes urgentes y de decisiones de cierre que se emitan en virtud del artículo 100 de la Ley del Trabajo.

La SST en el sector de la construcción. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Comité Supremo de Organización y Legado y el Ministerio de Desarrollo Administrativo y de Trabajo y Asuntos Sociales habían concluido un Memorando de Entendimiento con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) con miras a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en los proyectos de la Copa Mundial de 2022, y que en 2017 se comenzaron a organizar visitas conjuntas al terreno con la ICM.

La Comisión toma nota de los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno sobre las visitas de inspección realizadas a las instalaciones del proyecto de la Copa Mundial de 2022. La Comisión también constata que el Gobierno indica que la colaboración con la ICM sigue en curso con el fin de examinar y evaluar los sistemas de formación en materia de seguridad y salud, pero observa que en la respuesta a la solicitud previa de la Comisión no consta información sobre alguna otra inspección conjunta que se haya realizado. Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aproximadamente el 50 por ciento de los accidentes del trabajo del primer semestre de 2018 (118 de 238 accidentes) fueron caídas, lo cual representa un ligero aumento con respecto al mismo periodo de 2017 (110 accidentes, que representaban el 45 por ciento). *La Comisión insta al Gobierno a que siga fortaleciendo la capacidad de la inspección del trabajo con respecto a la SST en el sector de la construcción, y a que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluido el desarrollo de la capacidad de los inspectores especializados en SST en lo concerniente a las medidas de prevención destinadas a proteger de las caídas desde una altura. Le pide asimismo una vez más que facilite datos estadísticos detallados sobre el número de inspecciones conjuntas efectuadas en el marco del Memorando de Entendimiento con la ICM y sobre su resultado.*

Artículo 7. Contratación y formación de inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las formaciones ofrecidas a los inspectores del trabajo en el primer semestre de 2018, que incluye el número de participantes y el tipo de formación. Además, observa que el Gobierno indica que la formación es uno de los elementos principales de la cooperación técnica entre el Gobierno y la OIT, y que ésta comprende un análisis de las necesidades de formación de los inspectores y la elaboración de programas de formación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, para lograr el cumplimiento de la Ley del Trabajo y su observancia es preciso desarrollar la capacidad de los inspectores del trabajo. La Comisión toma buena nota de que se han programado varias visitas de estudio para que los inspectores del trabajo aprendan otros sistemas de inspección, así como del Memorando de Entendimiento firmado con la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad del Reino Unido con respecto a algunas necesidades de desarrollo y creación de capacidad de los inspectores. *La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus iniciativas para garantizar que los inspectores reciben una formación adecuada al desempeño de sus funciones (tomando nota de que el número total de participantes en formación durante el primer semestre de 2018 fue de menos de la mitad del número total de inspectores). Pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la formación impartida, en particular en el marco del programa de cooperación técnica, especificando el número de inspectores del trabajo que reciben formación, la duración de ésta y los temas que abarca. Además, pide al Gobierno que aporte más información sobre el proceso de contratación de inspectores del trabajo, indicando las calificaciones que se requieren y la formación inicial que se imparte a los inspectores noveles.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rumania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1973)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1975)

A fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio núm. 81, y artículo 6, 1) y 3), del Convenio núm. 129. Control del trabajo no declarado y protección de los trabajadores extranjeros en situación irregular. La Comisión toma nota de que, de conformidad con la nueva ordenanza gubernamental núm. 488/2017 sobre la organización y el funcionamiento de la inspección del trabajo, se encomienda a los inspectores detectar el trabajo no declarado de los trabajadores extranjeros o desplazados (artículo 12) y llevar a cabo inspecciones por separado, así como en colaboración con la Inspección General de Inmigración. La ordenanza gubernamental núm. 488/2017 prevé que los empleadores asuman responsabilidad, incluida

responsabilidad conjunta y responsabilidad de diversa índole, con respecto a los subcontratistas principales e intermedios por el pago atrasado de los salarios de los trabajadores extranjeros ocupados en trabajo no declarado, incluidos quienes están en situación irregular. El informe anual de 2017 indica que, en 2017, se llevaron a cabo un total de 1 210 controles relacionados con el trabajo no declarado de los trabajadores extranjeros, y se impusieron 37 sanciones (incluidas advertencias) y 111 medidas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el informe del Gobierno no indica si dichas órdenes incluyen las que exigen el establecimiento de contratos de trabajo o garantizan otros derechos legales conferidos a los nacionales extranjeros ocupados en trabajo no declarado, como el pago de los salarios pendientes y otras prestaciones derivadas de su trabajo. La Comisión recuerda que las funciones del sistema de inspección del trabajo aseguran la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el desempeño de su actividad profesional, y que cualquier otra función que se asigne a los inspectores del trabajo no deberá interferir con el desempeño efectivo de sus principales funciones. En su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 78, la Comisión indicó que toda función de control de la legalidad del empleo debe tener por corolario el establecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores para ser compatible con el objetivo de protección de la inspección del trabajo, que es proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores y garantizar sus condiciones de trabajo. Refiriéndose al párrafo 452 del Estudio General de 2017 sobre determinados instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la Comisión recuerda que es posible que los trabajadores que se encuentran en una situación vulnerable sean reacios a colaborar con los servicios de inspección del trabajo si temen que las actividades de inspección entrañen consecuencias negativas para ellos, como la pérdida de su empleo o la expulsión del país. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas específicas para asegurar que las funciones que se asignen a los inspectores del trabajo no interfieran con el objetivo principal de los inspectores del trabajo de velar por la protección de los trabajadores de conformidad con las principales funciones de los inspectores del trabajo, como dispuesto por el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. Pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas por la inspección para asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores extranjeros en situación irregular. Pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre el número de casos en los que se ha conferido a los trabajadores que se encuentran en situación irregular los derechos que les corresponden, como el pago de los salarios pendientes o prestaciones de seguridad social, u órdenes para el establecimiento de un contrato de trabajo.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Federación de Rusia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1998)

Artículos 3, 1), 10 y 16 del Convenio. Número de inspectores del trabajo y cobertura de los lugares de trabajo por las visitas de inspección del trabajo. En su comentario anterior, la Comisión observó que el número de inspectores del trabajo había disminuido continuamente durante varios años. Tomó nota de la indicación del Gobierno de que el reducido número de miembros del personal en 2010 había afectado considerablemente los resultados y la calidad de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas en el informe de 2016 del Servicio Federal de Trabajo y Empleo (Rostrud) que el número de inspectores del trabajo se redujo entre 2012 y 2016, al pasar de 2 680 a 2 102. También toma nota de la misma fuente de que el número de inspectores del trabajo se considera insuficiente para lograr una cobertura adecuada de los lugares de trabajo por las visitas de inspección del trabajo, lo que a menudo se traduce en la verificación y el control de documentos de las oficinas del Rostrud, en lugar de en la realización de visitas de inspección del trabajo reales en los lugares de trabajo. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar la contratación de un número adecuado de inspectores del trabajo, a fin de que los lugares de trabajo se inspeccionen con la frecuencia y el esmero necesarios para permitir la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. Pide al Gobierno que siga suministrando información sobre el número de inspectores del trabajo.***

Artículos 12 y 16. Facultades y prerrogativas de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión de dar pleno efecto al artículo 12, de que las facultades de los inspectores del trabajo de interrogar a los trabajadores y empleadores previstas en el artículo 357 del Código del Trabajo no están restringidas por la Ley Federal núm. 294-FZ de 2008 (en su versión enmendada en 2014) sobre la protección de las entidades jurídicas y los empresarios individuales en el control (supervisión) estatal y el control municipal. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 357 sólo autoriza a los inspectores del trabajo a entrevistar a los empleadores (y no a los trabajadores), y de que la ley núm. 294-FZ, el Código del Trabajo (en su versión enmendada) y el reglamento núm. 875 de 2012 (sobre la supervisión estatal de la observancia de la legislación laboral y de otros textos jurídicos normativos que contienen disposiciones previstas en la legislación laboral) prevén numerosas restricciones a las facultades de los inspectores del trabajo, incluida la libre iniciativa de los inspectores del trabajo de efectuar inspecciones sin previa notificación (artículos 9, 12), y 10, 16), de la ley núm. 294-FZ), y el libre acceso de los inspectores del trabajo a los lugares de trabajo (sin una orden de una autoridad superior) a cualquier hora del día o de la noche (artículos 10, 5), y 18, 4), de la ley núm. 294-FZ). Además, estas leyes y reglamentos prevén restricciones a la realización de inspecciones del trabajo con la frecuencia y el esmero que sean necesarios, incluidas limitaciones con

respecto a los motivos por los que las visitas de inspección no programadas pueden realizarse (artículo 360 del Código del Trabajo; artículo 10, 2), de la ley núm. 294-FZ y artículo 10 del reglamento núm. 875 de 2012). La Comisión toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 19, 6), 1) y 2), del Código de Delitos Administrativos, los inspectores del trabajo pueden incurrir en responsabilidad administrativa en el caso de que no observen algunas de estas restricciones, por ejemplo, cuando efectúen inspecciones del trabajo por motivos distintos de los permitidos por la legislación. ***Recordando la importancia que reviste autorizar plenamente a los inspectores del trabajo para que realicen visitas sin previa notificación a fin de garantizar una supervisión efectiva, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con los artículos 12 y 16 del Convenio. En particular, insta al Gobierno a que se cerciore de que se autoriza plenamente a los inspectores de trabajo a: i) efectuar visitas sin previa notificación, en consonancia con el artículo 12, 1), a), y b), del Convenio; ii) a interrogar a los empleadores y al personal, de acuerdo con el artículo 12, 1), c), i), y iii) a que prevea la realización de visitas de inspección con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para asegurar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes, de conformidad con el artículo 16.***

Artículos 7, 17 y 18. Aplicación de la ley en caso de violación de las disposiciones de la legislación laboral. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, relativa a las causas de la discrepancia entre el número de casos notificados por la inspección del trabajo, el número de investigaciones iniciadas y el número de condenas. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que uno de los principales motivos por los que no se incoaban las causas penales era la incapacidad de establecer la intención delictiva (sólo se habían incoado causas penales en uno de los 14 casos notificados). El Gobierno señala asimismo que una de las razones por las que no se incoaban los casos administrativos era que las actas levantadas por la inspección del trabajo estaban incompletas o no contenían los documentos requeridos. Además, las decisiones sobre el cierre de los casos administrativos a menudo se comunicaban demasiado tarde para que la inspección del trabajo presentara recursos en el plazo establecido. Sin embargo, en relación con el pago de los salarios, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de 2017 sobre la aplicación del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), de que el número de investigaciones iniciadas y el número de condenas pronunciadas en casos notificados relativos al impago de los salarios han aumentado.

En relación con la información solicitada sobre el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los derechos fundamentales en el trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la inspección del trabajo no pudo obtener pruebas de ninguna violación de los derechos de libertad sindical. En este contexto, la Comisión recuerda asimismo su observación publicada en 2017 con arreglo al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en la que tomó nota de las observaciones de la Confederación de Trabajo de Rusia (KTR) relativas a una serie de deficiencias en el cumplimiento de las disposiciones relativas a actos de discriminación antisindical, incluida la falta de formación del personal encargado de hacer cumplir la ley sobre las pruebas necesarias para establecer violaciones en virtud del Código Penal. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento efectivo velen los inspectores del trabajo, y que aborde las deficiencias detectadas a este respecto. Pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas concretas adoptadas al respecto (como la formación dirigida a los inspectores del trabajo sobre el levantamiento y finalización de actas incluso la recopilación de las pruebas necesarias, o actividades de mejora de comunicación y coordinación con el Poder Judicial sobre las pruebas requeridas para establecer y perseguir penalmente las violaciones de la legislación laboral y sobre la necesidad de comunicar de manera oportuna el resultado de los casos a la inspección del trabajo). La Comisión pide al Gobierno que proporcione estadísticas detalladas sobre los casos administrativos y penales notificados por la inspección del trabajo, incluidas las disposiciones legales pertinentes, las investigaciones y procedimientos judiciales iniciados, y las sanciones impuestas en consecuencia.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

San Marino

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota con ***profunda preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Legislación. La Comisión pide al Gobierno que indique todas las nuevas disposiciones legales en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio y las normas internacionales usadas al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas requeridas por este Convenio.

Artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de las últimas normas internacionales del trabajo y que especifique, para cada artículo del Convenio en relación con el cual se aceptaron las obligaciones (a saber, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), qué normas y directivas se utilizan.

Artículo 7. La Comisión solicita al Gobierno que indique los conceptos, definiciones y metodología utilizados para realizar estimaciones oficiales sobre la mano de obra, el empleo y el desempleo en San Marino.

Artículo 8. *La Comisión insta al Gobierno a transmitir a la OIT información metodológica sobre los conceptos y definiciones en relación con las estadísticas sobre la mano de obra basadas en registros, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio.*

Artículo 9, 1). *Tomando nota de que las estadísticas anuales sobre las ganancias medias y las horas medias de trabajo realmente efectuadas aún no se desglosan por sexo, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a este fin y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.*

Artículo 9, 2). *La Comisión solicita al Gobierno que garantice que las estadísticas cubiertas por estas disposiciones se transmiten de forma regular a la OIT.*

Artículo 10. *La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a esta disposición y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en este ámbito.*

Artículo 11. *La Comisión toma nota de que no se dispone de información sobre la estructura de la remuneración de los empleados por componentes principales. Por consiguiente, pregunta al Gobierno si es posible compilar estas estadísticas en relación con más de cuatro grupos de la industria manufacturera, y le pide que comunique estas estadísticas a la OIT tan pronto como sea posible, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.*

Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para elaborar, publicar y comunicar a la OIT información metodológica concreta sobre los conceptos, definiciones y métodos adoptados para compilar estadísticas sobre la remuneración de los empleados, con arreglo al artículo 6.

Artículo 12. *La Comisión insta al Gobierno a transmitir información metodológica sobre los nuevos índices de los precios al consumo (base diciembre 2002 = 100) con arreglo al artículo 6 de este Convenio.*

Artículo 13. *La Comisión toma nota de que en una publicación anual titulada Encuesta sobre el consumo y el estilo de vida de las familias de San Marino, la Oficina de Planificación Económica, Procesamiento de Datos y Estadísticas publica regularmente estadísticas detalladas sobre los gastos de los hogares. Sin embargo, esta publicación no contiene información sobre las fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio y la compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares. La Comisión insta al Gobierno a:*

- i) indicar si las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores fueron consultadas para la elaboración de los conceptos, definiciones y metodología utilizados (con arreglo al artículo 3), y*
- ii) comunicar una descripción detallada de las fuentes, conceptos, definición y metodología utilizados en el acopio y compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares, tal como se requiere en virtud del artículo 6.*

Artículo 14. *La Comisión solicita al Gobierno que transmita información más amplia sobre el sistema estadístico, haciendo especial referencia a los conceptos y definiciones utilizados para realizar estadísticas sobre lesiones profesionales.*

Artículo 15. *Habida cuenta de que no se han proporcionado datos sobre las huelgas y cierres patronales (tasa de días no trabajados, por actividad económica), la Comisión invita al Gobierno a comunicar información con arreglo al artículo 5 de este Convenio.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Legislación. La Comisión toma nota con interés que, en colaboración con la OIT, se ha elaborado un proyecto de ley sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), que aborda algunas de las cuestiones anteriormente planteadas por la Comisión (por ejemplo, las facultades de los inspectores del trabajo previstas en el artículo 13, la notificación a la inspección del trabajo de los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional dispuesta en el artículo 14, etc.), y de que actualmente están en curso consultas nacionales pertinentes con diversas partes interesadas, incluidos los representantes de los empleadores y de los trabajadores. *La Comisión solicita al Gobierno que siga manteniendo a la OIT informada de todo progreso realizado en la adopción de este proyecto de ley y que comunique una copia del texto de la ley sobre SST, una vez que ésta sea adoptada. La Comisión expresa la esperanza de que esta ley dará pleno efecto al Convenio.*

Artículos 20 y 21 del Convenio. *Informe anual sobre la labor de los servicios de la inspección del trabajo.* La Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha remitido a la Oficina ningún informe sobre la inspección del trabajo, ni el Gobierno ha comunicado informaciones estadísticas pertinentes. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está en curso la asistencia técnica suministrada por la Oficina para la aplicación del Sistema de Información sobre el Mercado de Trabajo (SIMT) un sistema que, según observó anteriormente la Comisión, contiene estadísticas sobre la inspección del trabajo y tiene la finalidad de registrar y generar informes sobre las inspecciones de trabajo. La Comisión también toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, a partir de 2014, se espera publicar por separado informes integrales sobre estadísticas de la inspección del trabajo, a condición que la información relativa a la inspección se introduzca debida y periódicamente a la base de datos del SIMT. *La Comisión solicita al Gobierno que realice todos los esfuerzos posibles, incluida la formación del personal en el uso y funcionamiento del SIMT, con objeto de que la autoridad central de la inspección del trabajo publique y remita a la OIT, junto con su próxima memoria que debe presentar en 2016, un informe anual de la inspección del trabajo que incluya información completa como se requiere en virtud del artículo 21, a) a g), del Convenio.* La Comisión recuerda también que el Gobierno puede recurrir a la orientación prevista en el párrafo 9 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en relación con el tipo de información que debería incluirse en el informe anual de la inspección del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Senegal

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1962)

Artículo 3, 2), del Convenio. Funciones suplementarias que se encomiendan a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que, según el informe de 2015 sobre las estadísticas del trabajo, que menciona el Gobierno en su memoria y que está disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo, Diálogo Social, Organizaciones Profesionales y Relaciones institucionales, los servicios de inspección del trabajo han tenido que atender este año un número notable de conflictos laborales individuales y colectivos. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales. En su Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, la Comisión recordó la importancia de evitar sobrecargar los servicios de inspección del trabajo con tareas que, por su naturaleza, pueden considerarse en algunos países como incompatibles con sus funciones principales de aplicación de las disposiciones legales (párrafo 72). **La Comisión pide al Gobierno que aporte información sobre el tiempo y los recursos que los inspectores del trabajo dedican a funciones suplementarias de conciliación y mediación en comparación con los que consagran a sus funciones principales (previstas en el artículo 3, 1), del Convenio).**

Artículos 10, 11 y 16. Recursos humanos y materiales del sistema y las visitas de inspección. La Comisión tomó nota de que en 2013 el personal de la inspección del trabajo se componía de 60 inspectores y 59 supervisores (inspectores auxiliares). A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno insiste en la necesidad de aumentar los medios de los servicios de inspección del trabajo, y que el refuerzo de los medios financieros y logísticos y de los recursos humanos de la administración del trabajo es uno de los objetivos del pacto nacional para la estabilidad social y desarrollo económico firmado con los interlocutores sociales en 2014. La Comisión constata asimismo que, según el informe de 2016 sobre las estadísticas del trabajo (al que se refiere el Gobierno en su memoria y que está disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo, Diálogo Social, Organizaciones Profesionales y Relaciones Institucionales), el personal de la inspección del trabajo se había reducido considerablemente en 2016, a 30 inspectores y 34 supervisores. Sin embargo, la Comisión observa que en los últimos informes sobre estadísticas laborales se registra un aumento considerable del número de establecimientos que han sido objeto de inspección, pasando de 1 587 en 2014 a 1 931 en 2015 y 2 607 en 2016. **Al tiempo que toma nota del aumento del número de inspecciones del trabajo, a pesar de la reducción del número de inspectores, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas con el fin de velar por que los establecimientos se inspeccionen con el esmero que sea necesario para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes, e insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias de modo que se asegure de que haya un número suficiente de inspectores del trabajo para que puedan desempeñar sus funciones de forma eficaz. A este respecto, pide al Gobierno que proporcione información sobre toda mejora relativa a los recursos humanos y los medios materiales de los servicios de inspección del trabajo. Además, solicita al Gobierno que informe sobre el número de empleados de la inspección del trabajo y los recursos financieros y humanos de los que disponen los servicios de inspección del trabajo, así como el número de inspecciones realizadas desde 2017.**

Artículo 13, 2), b). Medidas de aplicación inmediata en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el decreto núm. 2006-1255, de 15 de noviembre de 2006, limita la ejecución de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud y la seguridad a situaciones que se derivan del incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la seguridad y salud en el trabajo (artículo 18), excepto en el sector de la construcción (en el que no es necesario que se haya incumplido la legislación para dar la orden de cesar la actividad) (artículos 19 y 20). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que estas restricciones se están examinando actualmente en el marco de la reflexión relativa al refuerzo de las facultades jurídicas de los inspectores del trabajo. **Remitiéndose a sus comentarios precedentes, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias en la ley y la práctica para velar por que, de conformidad con el artículo 13, 2), b), los inspectores del trabajo puedan ordenar medidas de aplicación inmediata siempre que haya un peligro inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, sin que haya obligación de determinar la existencia o no de incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias en todo establecimiento industrial y comercial, y no sólo en el sector de la construcción. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas adoptadas o previstas en el marco de la reflexión relativa al refuerzo de las facultades jurídicas de los inspectores del trabajo.**

Artículos 17 y 18. Aplicación efectiva de las sanciones adecuadas en caso de violación de las disposiciones legales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en respuesta a una solicitud anterior de la Comisión, que no ha habido avances en lo relativo a la revisión propuesta con respecto a la cuantía de las sanciones por infracción de la legislación laboral. La Comisión constata, a partir de la información estadística proporcionada en la memoria de 2015, que se realizaron 1 931 visitas de inspección aquel año, y que los inspectores del trabajo exigieron a los empleadores que repararan las infracciones observadas, pero que no se levantó ninguna acta de infracción. Señala que esto representa un descenso notable con respecto a 2014, año en que se levantaron 58 actas de infracción, y observa que en 2016 sólo se levantaron dos actas. El Gobierno insiste en que es preciso reforzar las competencias jurídicas de los inspectores del trabajo e indica que el Ministro de Trabajo ha entablado discusiones con el Ministro de Justicia a este respecto. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione estadísticas detalladas sobre las infracciones observadas en las visitas**

de inspección y las sanciones que se han impuesto, y que exponga las razones que explican el descenso notable del número de actas de infracción levantadas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe aportando información sobre toda medida que se tome para reforzar las competencias de los inspectores del trabajo. Una vez más, solicita al Gobierno que informe sobre todo progreso que se realice en la revisión de la cuantía de las sanciones por infracción de la legislación laboral.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Serbia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
(ratificación: 2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2000)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión estima oportuno examinar conjuntamente los Convenios núms. 81 (inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) en un solo comentario.

Artículo 12, 1), a), del Convenio núm. 81 y artículo 16, 1), a), del Convenio núm. 129. Entrada libre de los inspectores del trabajo a los establecimientos sin previa notificación. La Comisión toma nota con **preocupación** de que la nueva Ley de Supervisión de la Inspección núm. 36/15, de abril de 2015, se aplica a la inspección del trabajo y prevé una serie de restricciones a las facultades de los inspectores. Entre ellas figura la restricción a la libre iniciativa de los inspectores del trabajo para efectuar inspecciones sin previa notificación prevista en el *artículo 12, 1), a), del Convenio núm. 81*, y en el *artículo 16, 1), a), del Convenio núm. 129*: los artículos 16 y 17 de la ley, que exigen una notificación previa de tres días para la mayoría de las inspecciones y una orden de inspección por escrito (salvo en situaciones de emergencia) especifican, entre otras cosas, el objetivo de la inspección y su duración. El artículo 16 prevé asimismo que si, durante el curso de la inspección, un inspector descubre un caso de incumplimiento que sobrepasa la orden de inspección, el inspector deberá solicitar una adenda a la orden. La Comisión toma nota asimismo de que la ley prevé que los inspectores serán responsables personalmente de las medidas adoptadas en el ejercicio de sus funciones (artículo 49) y que se les podrá imponer una multa que oscilará entre 50 000 y 150 000 dinares serbios (RSD) (aproximadamente entre 500 y 1 500 dólares de los Estados Unidos), por ejemplo, si efectúan inspecciones sin previa notificación (artículo 60). **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se supriman rápidamente las restricciones y limitaciones impuestas a los inspectores del trabajo en la Ley de Supervisión de la Inspección núm. 36/15, a fin de garantizar que se autorice plenamente a los inspectores del trabajo a entrar libremente y sin previa notificación, en todo establecimiento sujeto a inspección, de conformidad con el artículo 12, 1), a), del Convenio núm. 81, y con el artículo 16, 1), a), del Convenio núm. 129, y que se informe a la Comisión de los avances al respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sierra Leona

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
(ratificación: 1961)

Artículos 6 y 7 del Convenio. Contratación y formación de inspectores del trabajo e independencia de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual no se han proporcionado oportunidades de formación a los inspectores del trabajo en áreas técnicas o especializadas, aunque se les ofrecen cursos de formación inicial en diversos departamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que, en lo que se refiere a las calificaciones del personal de la inspección del trabajo, uno de los factores que se tienen en cuenta en la contratación es la afiliación política. La Comisión recuerda que, de conformidad con el *artículo 6* del Convenio, el personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en el empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida; y, de conformidad con el *artículo 7*, serán contratados tomándose únicamente en cuenta las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los inspectores del trabajo son contratados, tomando únicamente en cuenta sus aptitudes para el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 7 del Convenio. Tomando debida nota de las restricciones en materia de recursos, la Comisión manifiesta su confianza en que el Gobierno estará en condiciones de adoptar las medidas necesarias para aplicar un programa de formación permanente para los inspectores del trabajo, y solicita al Gobierno que suministre información sobre cualquier novedad al respecto.**

Artículo 12, 1), a). Visitas sin previo aviso y libre acceso a los establecimientos sujetos a inspección. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que las visitas formales de inspección se notifican a los propietarios de los establecimientos. En este sentido, la Comisión recuerda que, en virtud del *artículo 12* del Convenio, los

inspectores del trabajo, provistos de la debida acreditación, podrán entrar libremente y sin previa notificación en cualquier establecimiento sujeto a inspección. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en particular en el contexto del proceso de reforma de la legislación laboral en curso, de modo que los inspectores del trabajo estén facultados, en la legislación y en la práctica, para entrar libremente y sin previa notificación en todo establecimiento sujeto a inspección.***

Artículo 18. Sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la Ley de Fábricas, 1974, en relación con las sanciones o multas aplicables, y observa a este respecto que la cuantía de las multas impuestas es bastante reducida. ***La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en el contexto de la reforma de la legislación laboral en curso, para garantizar que los inspectores del trabajo imponen las sanciones adecuadas en virtud de las disposiciones aplicables.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Singapur

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 3, 2), del Convenio. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, las inspecciones del trabajo se llevan a cabo sin prejuicios relativos a la nacionalidad, y se requiere que los empleadores que contratan trabajadores en virtud de la Ley de Empleo, den cumplimiento a su obligación de respetar los derechos de los trabajadores extranjeros. El Gobierno también indica que los trabajadores extranjeros «no son cómplices» con su empleo ilegal, pueden presentar un recurso judicial para obtener el pago de los salarios atrasados o el cumplimiento de toda otra prestación. La Comisión recuerda al Gobierno que, de conformidad con el ***artículo 3, 2)***, ninguna otra función que puede encomendarse a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores. Además, la Comisión se refiere a los párrafos 75 a 78 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, en los que se destacó, en relación con la asignación a los inspectores del trabajo de la función de control de la legalidad del empleo y el de perseguir las infracciones que se cometan, incluidos los trabajadores migrantes en situación irregular, que la tarea principal de los inspectores del trabajo es asegurar la aplicación de las disposiciones legales relacionadas con las condiciones de trabajo y la protección de todos los trabajadores, y no aplicar la Ley de Inmigración, y que el Convenio no contiene ninguna disposición que sugiera que la exclusión de trabajador alguno de la protección de la inspección del trabajo a causa del carácter irregular de su relación laboral. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que la función de verificación de la legalidad del empleo debería tener como corolario el restablecimiento de los derechos que la legislación garantiza a todos los trabajadores, para ser compatible con el objetivo de la Inspección del Trabajo, que es proteger los derechos y los intereses de todos los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que vela por el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de los derechos que la legislación garantiza a los trabajadores extranjeros empleados ilegalmente, independientemente de si tienen o no conocimiento de su situación en el empleo, como el pago de los salarios y cualquier otra prestación adeudada por el trabajo realizado en el marco de su relación de empleo, incluso cuando los trabajadores en consideración están sujetos a la expulsión o después de haber dejado el país.***

Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el tiempo y los recursos que la inspección del trabajo dedica a las actividades en la esfera del trabajo irregular, en relación con las actividades encaminadas a garantizar la aplicación de las disposiciones legales vinculadas con otros aspectos (como las disposiciones relativas a las horas de trabajo, salarios, seguridad y salud, trabajo infantil, etc.) y que siga comunicando la información pertinente sobre el número de inspecciones, violaciones detectadas y sanciones impuestas, clasificadas con arreglo a las disposiciones legales con las que se relacionan.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sudán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1970)

Proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo. La Comisión solicitó anteriormente información sobre la situación del proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo, que se elaboró sobre la base de las discusiones celebradas en 2014 en el Taller nacional tripartito sobre la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo se ha transmitido a los comités conjuntos con los interlocutores sociales para que formulen recomendaciones. Sin embargo, toma nota con ***preocupación*** del retraso al adoptar la estrategia, cuyo objetivo es permitir el establecimiento y el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo. ***Al tiempo que toma nota de la transmisión del proyecto de estrategia de inspección del trabajo para su consulta con los interlocutores sociales, la Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos con miras a adoptar***

su estrategia sobre la inspección del trabajo en un futuro muy cercano, y a que transmita una copia de la misma una vez adoptada.

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. *Funciones de la inspección del trabajo y labores adicionales asignadas a los inspectores del trabajo.* La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas en la memoria del Gobierno, en respuesta a sus comentarios anteriores, que indican que, en 2016, la inspección del trabajo gestionó un total de 1 744 conflictos laborales individuales y colectivos, pero sólo llevó a cabo 226 inspecciones del trabajo y de SST. La Comisión toma nota con **preocupación** de que se trata de una disminución de más del 80 por ciento en relación con el año anterior (en 2015 se efectuaron 1 356 inspecciones). La inspección del trabajo proporcionó asimismo 564 consultas en 2016, lo que representa una pequeña reducción en relación con las 609 registradas en 2015. Los inspectores del trabajo participan además en la resolución de conflictos durante las inspecciones. Asimismo, en la memoria del Gobierno se indica que las visitas de la inspección del trabajo pueden conllevar igualmente preguntas sobre el recorte de personal por motivos económicos o técnicos a solicitud del empleador y, en caso necesario, preguntas sobre la terminación de la relación de trabajo, de conformidad con la legislación. En 2016 se llevaron a cabo 44 visitas de inspección con este objetivo. Además, según la memoria del Gobierno, las visitas de inspección también pueden realizarse con el fin de ayudar a las autoridades públicas a poner en práctica una orden relativa al interés público basada en una directiva de la autoridad competente. La Comisión recuerda que la principal función de los sistemas de inspección del trabajo es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que una parte importante de las actividades de los inspectores del trabajo está orientada a la resolución de conflictos laborales, a pesar de la indicación del Gobierno de que la falta de recursos dificulta la aplicación práctica de la legislación laboral. **Al tiempo que toma nota de los limitados recursos disponibles y del tiempo considerable dedicado a la resolución de conflictos, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que cualquier otra labor asignada a los inspectores del trabajo no interfiera con el desempeño efectivo de su función principal, a saber, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información específica sobre la función que desempeña la inspección del trabajo en la reducción de la fuerza de trabajo y la terminación de la relación de trabajo, así como información sobre las órdenes emitidas anteriormente relativas al interés público que requirieron la realización de visitas de inspección. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite asimismo información sobre las medidas adoptadas y contempladas para afrontar la reducción del 80 por ciento del número de inspecciones del trabajo.**

Artículo 4, 1) y 2). *Organización y funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central.* La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior de un organigrama del departamento de inspección del trabajo y de relaciones laborales (IR), relativa a la organización de los departamentos de inspección del trabajo y de relaciones laborales en el estado de Khartoum. Sin embargo, toma nota de la ausencia de información sobre la organización del sistema central de inspección del trabajo o de otras oficinas regionales. Recuerda que el **artículo 4** del Convenio prevé el establecimiento del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y control de una autoridad central siempre que sea compatible con la práctica administrativa del Miembro. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y control de una autoridad central. También pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre la organización y el funcionamiento del departamento de inspección del trabajo y de relaciones laborales, incluido su organigrama, así como una lista actualizada de las estructuras de inspección y oficinas del trabajo en cada uno de los estados.**

Artículos 20 y 21. *Publicación y comunicación a la OIT de un informe anual.* La Comisión toma nota con **preocupación** de que durante más de 25 años no se han preparado o comunicado a la OIT informes anuales de inspección. Sin embargo, saluda la información proporcionada por el Gobierno en su memoria relativa al número de inspecciones del trabajo y de visitas de inspección de la seguridad y salud en el trabajo. Toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual se estaban adoptando medidas para la preparación de informes anuales, incluida la identificación de las necesidades de formación e iniciativas para facilitar la preparación de informes periódicos por las oficinas del trabajo estatales. **La Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas posibles para velar por que se preparen, publiquen y transmitan a la OIT informes anuales de inspección del trabajo, de conformidad con los artículos 20 y 21 del Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tayikistán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2009)

Artículos 3, 4, 5, b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 y 18 del Convenio. *Funcionamiento del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central y dualidad de las funciones de inspección asumidas por los inspectores del trabajo estatales y por los inspectores del trabajo sindicales en este sistema.* La Comisión tomó nota con anterioridad de que la responsabilidad dentro de la inspección del trabajo recae en el Servicio de Inspección Estatal de Trabajo, Migración y Empleo (SILME) del Ministerio de Trabajo, Migración y Empleo, así como en el servicio de

inspección creado por la Federación de Sindicatos Independientes (habida cuenta del escaso número de inspectores del SILME). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en respuesta a su solicitud, que a finales de 2016 había 58 inspectores del trabajo públicos y 36 inspectores del trabajo sindicales. A este respecto, la Comisión toma nota también de que, con arreglo al artículo 353 del Código del Trabajo, los empleadores aportan fondos para financiar la labor del servicio de inspección sindical. *Una vez más, la Comisión solicita al Gobierno que indique si el SILME se encarga de la vigilancia y el control del sistema de inspección en su totalidad (incluidas las actividades de los inspectores sindicales), o si el SILME y el servicio de inspección dirigido por la Federación de Sindicatos Independientes actúan de forma independiente, excepto cuando realizan inspecciones conjuntas. Dado que el Gobierno no ha proporcionado información a este respecto, la Comisión le pide una vez más que especifique la situación jurídica y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo del SILME, en lo relativo a las condiciones que se aplican a categorías similares de funcionarios públicos y a los inspectores sindicales (en particular, en lo que concierne a la estabilidad en el empleo, los salarios y las prestaciones). Por último, la Comisión solicita al Gobierno que indique si el servicio de inspección de la Federación de Sindicatos Independientes funciona íntegramente con cargo al presupuesto procedente de las contribuciones de los empleadores, y en caso negativo, que señale cuáles son las demás fuentes de financiación y sus cantidades proporcionales.*

Artículos 12 y 16. Facultades de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que en los artículos 357 y 358 del Código del Trabajo se prevén determinadas facultades de los inspectores del trabajo públicos y sindicales, por ejemplo, la potestad de llevar a cabo inspecciones del trabajo y solicitar información sobre el cumplimiento de las disposiciones legales. Además, toma nota de que en los artículos 19 y 348 del Código del Trabajo se exige a los empleadores que garanticen el libre acceso de los inspectores públicos a los establecimientos. Sin embargo, la Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que, en virtud de la ley núm. 1505, de 21 de febrero de 2018, por la que se establece una moratoria en las inspecciones de los establecimientos industriales, las disposiciones del Código relativas a las inspecciones del trabajo quedan suspendidas durante el período de aplicación de la ley núm. 1505, lo que según la información que figura en el sitio web del Presidente del país, tendrá efecto durante dos años, a partir de la publicación de un decreto gubernamental al respecto. Asimismo, la Comisión constata con *preocupación* que la Ley sobre Inspecciones a Entidades Económicas, aprobada por la decisión gubernamental núm. 518, de 2007, que se aplica a los servicios de inspección del trabajo (entre otros órganos de inspección) y a todos los sectores (no sólo a la industria), prevé algunas limitaciones de las inspecciones. Además, la Comisión toma nota con *preocupación* de que en la ley se contemplan restricciones en lo relativo a la frecuencia y la duración de las inspecciones del trabajo (por ejemplo, el artículo 10 de la ley prevé que un órgano de inspección no está autorizado a inspeccionar una entidad económica más de una vez cada dos años, o excepcionalmente, en caso de tratarse de una entidad de alto riesgo, no más de una vez cada seis meses, y que las entidades nuevas no pueden ser objeto de inspección hasta que finalice un plazo de tres años desde su registro), la necesidad de notificar previamente las visitas (por ejemplo, los artículos 11 y 13 de la ley contemplan que las visitas deben notificarse a las entidades económicas tres días antes del inicio de las inspecciones, excepto en casos de emergencia o problemas sanitarios agravados (artículo 15)), así como también las limitaciones del ámbito de las inspecciones, en especial en cuanto a las cuestiones objeto de inspección (artículo 13). *La Comisión subraya en que toda moratoria impuesta en el servicio de inspección constituye una infracción grave del Convenio, e insta firmemente al Gobierno a que garantice que se adopten las medidas legislativas necesarias con vistas a poner fin a la moratoria sobre la inspección del trabajo en el sector de la industria. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para asegurar que se otorgue a los inspectores del trabajo la facultad de realizar visitas sin previa notificación, y de llevar a cabo inspecciones con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales, de conformidad con los artículos 12 y 16 del Convenio.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ucrania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2004)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida por la Oficina el 14 de agosto de 2018, así como de la información adicional recibida del Gobierno el 27 de noviembre de 2018. La última comunicación será examinada por la Comisión en su próxima reunión, ya que fue recibida demasiado tarde para ser examinada en el curso de la presente reunión.

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de 2018 sobre la aplicación de los Convenios núms. 81 y 129 por Ucrania, en las que se pidió al Gobierno que: i) tome las medidas necesarias y realice las reformas apropiadas para poner los servicios de inspección del trabajo en conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129; ii) suministre información detallada respecto a las restricciones de las competencias de los inspectores del trabajo que figuran en la ley núm. 877 y en el decreto ministerial núm. 295, y acerca de la legislación promulgada recientemente sobre el sistema de inspección del trabajo; iii) promueva el diálogo efectivo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre cuestiones relativas a la inspección del trabajo; iv) vele por que la situación jurídica y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo garanticen su independencia, la transparencia de sus actos, su imparcialidad y la rendición de cuentas, de conformidad con los Convenios; v) garantice que las responsabilidades en materia de inspección de las autoridades locales estén bajo la supervisión y el control del Servicio Estatal del Trabajo, y vi) asegure que otras funciones encomendadas a los inspectores del trabajo no interfieran con sus responsabilidades principales ni menoscabe la calidad de las inspecciones del trabajo.

Artículos 12, 1), a) y b), 16 y 17 del Convenio núm. 81 y artículos 16, 1), a) y b), 21 y 22 del Convenio núm. 129. Restricciones y limitaciones a la inspección del trabajo. 1. *Moratoria sobre la inspección del trabajo.* La Comisión tomó nota anteriormente de la imposición, entre enero y junio de 2015 de una moratoria sobre las inspecciones del trabajo. La Comisión observa una vez más con **profunda preocupación** que se ha introducido una moratoria adicional sobre los servicios de la inspección del trabajo entre el 1.º de enero de 2018 y el 22 de febrero de 2018. ***Recordando que la imposición de una moratoria sobre la inspección del trabajo es una grave violación de las disposiciones de estos Convenios, la Comisión insta firmemente al Gobierno a garantizar que no se adoptarán en el futuro excepciones adicionales de esta naturaleza sobre la inspección del trabajo.***

2. *Otras restricciones.* En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que la Ley núm. 877 (en su versión enmendada en 2017), sobre los Principios Fundamentales de la Supervisión y Control Estatal de la Actividad Económica, y el decreto ministerial núm. 295, de 26 de abril de 2017, sobre el procedimiento estatal de control y supervisión del cumplimiento de la legislación laboral, establecen varias restricciones sobre las facultades de los inspectores del trabajo, en particular, en relación con la libre iniciativa de los inspectores del trabajo de realizar inspecciones sin previo aviso (artículo 5 del decreto núm. 295 y artículo 5, 4), de la ley núm. 877), la frecuencia de las inspecciones del trabajo (artículo 5, 1), de la ley núm. 877), y las facultades discrecionales de los inspectores del trabajo para iniciar procedimientos legales rápidos sin previo aviso (artículos 27 y 28 del decreto núm. 295). La Comisión instó firmemente al Gobierno a que adopte medidas para poner la legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha formulado ninguna respuesta a la solicitud de la Comisión para que comunique las medidas adoptadas para poner de conformidad la ley núm. 877 y el decreto ministerial núm. 295 con los *artículos 12, 1), a) y b), 16 y 17 del Convenio núm. 81 y los artículos 16, 1), a) y b), 21 y 22 del Convenio núm. 129*. La Comisión toma nota además de que el Gobierno no ha transmitido ninguna información adicional sobre el proyecto de ley núm. 6489 (sobre las enmiendas a algunas leyes encaminadas a prevenir la presión excesiva que soportan las empresas a causa de la supervisión del Estado del cumplimiento de la legislación sobre trabajo y empleo) cuya primera lectura fue aprobada por el Parlamento en julio de 2017, y que convierte la realización de visitas de inspección no programadas en un delito administrativo. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de 2018 de la Comisión de Aplicación de Normas, a que adopte las medidas necesarias y las reformas pertinentes para poner los servicios de inspección del trabajo en conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129. En este sentido, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner de conformidad la ley núm. 877 y el decreto ministerial núm. 295 de conformidad con los artículos 12, 1), a) y b), 16 y 17 del Convenio núm. 81 y los artículos 16, 1), a) y b), 21 y 22 del Convenio núm. 129, y a que garantice que no se adoptarán restricciones adicionales.***

Artículos 4, 6, 7 y 11 del Convenio núm. 81 y artículos 7, 8, 9 y 15 del Convenio núm. 129. Organización del sistema de inspección del trabajo bajo la supervisión y el control de una autoridad central. Descentralización parcial de las funciones de la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud del decreto núm. 295, de 27 de abril de 2017, en aplicación del artículo 259 del Código del Trabajo y del artículo 34 de la Ley de Organismos Autónomos, las funciones de la inspección del trabajo son también asumidas por las autoridades locales, además de por el Servicio Estatal del Trabajo. En este sentido, la Comisión recordó la importancia de garantizar que los cambios organizacionales se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones de los Convenios.

La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión para poner a la inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central, reiteró que se está haciendo todo lo posible para evitar duplicaciones, en particular a través de: i) el establecimiento de un registro central sobre inspecciones efectuadas por el Servicio Estatal del Trabajo y las autoridades locales, a través de un sistema electrónico; ii) la concesión de certificados de «funcionarios autorizados» por parte del Servicio Estatal del Trabajo (constituido actualmente por 399 personas, según el Gobierno); y la posibilidad de que éste revoque su acreditación si incumplen sistemáticamente el ejercicio de sus facultades de supervisión, y iii) la posibilidad de que el Servicio Estatal del Trabajo revoque todas las instrucciones y órdenes dictadas por los organismos gubernamentales locales en un plazo de diez días. El Gobierno señala

además que los «funcionarios autorizados» que trabajan bajo la supervisión de las autoridades locales tienen libre iniciativa para efectuar inspecciones a cualquier hora del día o de la noche sin previo aviso.

La Comisión toma nota también de que el Gobierno reitera que las autoridades locales reciben orientación, información y formación del Servicio Estatal del Trabajo. En este sentido, menciona diversas actividades que se están realizando, en particular: la organización de aproximadamente 3 310 seminarios, reuniones y mesas redondas sobre la forma de realizar las inspecciones; el envío de 5 861 cartas en torno al procedimiento para efectuar las inspecciones, la prestación de cursos de formación a distancia y seis formaciones conjuntas, con la participación de 234 personas nombradas por los organismos locales para llevar a cabo inspecciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha suministrado la información solicitada sobre la situación jurídica y las condiciones de servicio de los «funcionarios autorizados». ***La Comisión pide al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de Comisión de Aplicación de Normas de 2018, que garantice que las responsabilidades en materia de inspección de las autoridades locales estén bajo la supervisión y el control del Servicio Estatal del Trabajo. En tanto en cuanto el Gobierno no ha suministrado ninguna respuesta a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que señale cómo se garantiza que los «funcionarios autorizados» de las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones de inspección tienen la situación jurídica y las condiciones de servicio que les garanticen la independencia de cualquier influencia exterior indebida (artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129). En este sentido, pide al Gobierno que señale las disposiciones legales por las que se rigen las condiciones de servicio de estos funcionarios. Pide también al Gobierno que suministre información más detallada por cómo se asegura que los «funcionarios autorizados» que trabajan como inspectores del trabajo tengan unas calificaciones y una formación adecuadas para el desempeño de sus funciones (artículo 7 del Convenio núm. 81 y artículo 9 del Convenio núm. 129). En este sentido, pide al Gobierno que transmita información sobre los procedimientos de contratación de estos funcionarios, en particular las calificaciones exigidas y si éstas incluyen la convocatoria de concursos periódicos al igual que para los inspectores del Servicio Estatal del Trabajo.***

Artículos 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129. ***Recursos materiales y humanos para que la inspección del trabajo pueda cubrir de manera adecuada a los lugares de trabajo.*** La Comisión tomó nota anteriormente de que, según la evaluación de las necesidades realizadas por la OIT en 2015, resulta fundamental incrementar el número de inspectores del trabajo y los recursos materiales (incluidos los medios de transporte, los registros y los programas informáticos apropiados) a fin de aumentar el número de inspecciones y mejorar su calidad. La Comisión saluda que el Gobierno mencione en su memoria que, en julio de 2018, los servicios de inspección del trabajo contaban con 615 inspectores (una cifra superior a los 542 registrados en 2017) y 904 puestos establecidos (lo que supone un aumento de los 765 del año anterior). El Gobierno se refiere también a los concursos periódicos de contratación para cubrir los puestos vacantes. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala, en respuesta a la solicitud de la Comisión, que en la Ley de Presupuesto Estatal de 2018 se asignaron 585,2 millones de jrivnias (aproximadamente 671,7 millones de dólares de los Estados Unidos) a los servicios de la inspección del trabajo, pero que esta ley no se llevó a efecto. ***Al tiempo que toma nota de que casi un tercio de los puestos siguen sin cubrirse, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la ocupación de los puestos vacantes, con miras a garantizar que el número de inspectores sea suficiente para el desempeño efectivo de sus funciones. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación presupuestaria del Servicio Estatal del Trabajo, en particular los recursos materiales a nivel central y local. Además, la Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita información sobre los recursos materiales (oficinas, equipos y material de las oficinas, medios de transporte y reembolso de los gastos de viaje), a nivel central y local del Servicio Estatal del Trabajo.***

Artículo 3, 2), del Convenio núm. 81, y artículo 6, 3), del Convenio núm. 129. ***Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo.*** La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de que el Gobierno garantice que las demás funciones encomendadas a los inspectores del trabajo no interfieran con sus responsabilidades principales. ***La Comisión insta firmemente al Gobierno a que enumere todas las demás funciones encomendadas a los inspectores del Servicio Estatal del Trabajo o a los «funcionarios autorizados» de las autoridades locales, y a que explique cómo se restringen estas funciones para impedir que interfieran con el cumplimiento de sus obligaciones como inspectores para velar por la aplicación de la legislación laboral y la protección de los trabajadores.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1963)

Artículo 4 del Convenio. ***Vigilancia y control de una autoridad central.*** En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos para situar de nuevo el sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y control de una autoridad central, tras su descentralización en 1995. A este respecto, la Comisión recuerda la reiterada discusión del caso por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (en 2001, 2003 y 2008) y las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en las que

se subraya la necesidad de que el sistema de inspección esté bajo la responsabilidad de una autoridad central. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social (MGLSD) desempeña una función de vigilancia, aunque el sistema de inspección del trabajo esté descentralizado. El Gobierno indica que el MGLSD ha iniciado un proceso para enmendar la legislación y situar el sistema de inspección del trabajo bajo la responsabilidad de una autoridad central. ***La Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para situar el sistema de inspección del trabajo bajo la responsabilidad de una autoridad central a fin de asegurar la coherencia en el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo, y a que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluida una copia de cualquier legislación adoptada.***

Artículos 10, 11 y 16. Recursos del sistema de inspección del trabajo y visitas de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos para garantizar que se asignaran recursos humanos y financieros a la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el MGLSD ha seguido velando por que se asignen recursos humanos y materiales a la inspección del trabajo, y que se han proporcionado vehículos adicionales al Departamento de Trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la financiación inadecuada sigue representando un desafío. Además, la Comisión toma nota del informe de 2016 sobre la auditoría efectuada por el auditor general del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del MGLSD sobre las actividades de aplicación de la SST. El informe concluye que: *a) entre 2013 y 2015, sólo se inspeccionaron 476 de aproximadamente 1 millón de lugares de trabajo en el país (212 en 2012-2013, 125 en 2013-2014, y 139 en 2014-2015, sobre la base de los informes departamentales sobre el desempeño anual); b) el MGLSD proporcionó equipo de laboratorio analítico y clínico, pero el departamento de SST no ha impartido formación completa a los inspectores sobre el uso del equipo, y c) el cumplimiento de la legislación sobre la SST no ha sido efectivo debido a la escasez de personal y a limitaciones logísticas. En lo tocante a las cuestiones de personal, la Comisión toma nota de que en la memoria se indica que de 48 puestos aprobados, sólo hay 22 cubiertos actualmente. La Comisión toma nota con preocupación de los limitados recursos humanos y materiales asignados a la inspección del trabajo, e insta al Gobierno a que adopte medidas para asegurar la existencia de un número suficiente de inspectores del trabajo dotados de recursos adecuados, cubriendo asimismo los puestos vacantes, de conformidad con los artículos 10 y 11 del Convenio, con miras a asegurar que los lugares de trabajo se inspeccionen con la frecuencia que sea necesaria para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes, tal como exige el artículo 16 del Convenio.*

Artículos 20 y 21. Publicación y comunicación de un informe anual de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del compromiso del Gobierno de publicar y presentar a la OIT un informe de inspección anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley sobre el Empleo de 2006. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha elaborado un proyecto de informe anual. Sin embargo, toma nota con ***preocupación*** de que no se ha publicado, ni sometido a la OIT, ningún informe. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se publiquen y comuniquen regularmente a la OIT informes anuales de la inspección del trabajo en los plazos previstos en el artículo 20, y que éstos contengan la información exigida por el artículo 21, a) a g).***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 63** (Myanmar); el **Convenio núm. 81** (Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, República Centroafricana, Chad, Croacia, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia: Polinesia Francesa, Ghana, Granada, Guinea-Bissau, Hungría, India, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Luxemburgo, Malawi, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Polonia, Qatar, Rumania, Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suiza, Suriname, República Unida de Tanzania: Tanganyika, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Ucrania, Uganda, Uruguay); el **Convenio núm. 129** (Albania, Estado Plurinacional de Bolivia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia: Polinesia Francesa, Hungría, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Serbia, Ucrania, Uruguay); el **Convenio núm. 150** (Belice, República Democrática del Congo, Dominica, ex República Yugoslava de Macedonia, Kirguistán, Malawi, Níger, Federación de Rusia, Serbia, Suriname, Trinidad y Tabago); el **Convenio núm. 160** (Kirguistán).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 150** (Luxemburgo).

Política y promoción del empleo

Albania

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 2009)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Tendencias del empleo. La Comisión toma nota con **interés** de los esfuerzos sostenidos realizados por el Gobierno para mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, reducir la pobreza y mejorar el sistema de educación y formación técnica, situando un foco en los jóvenes y en los grupos específicos vulnerables a los déficits de trabajo decente. En este contexto, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la organización del Servicio Nacional del Empleo (NES), incrementando sus capacidades administrativas y de formación. La reforma del NES se centró en la aplicación y en la evaluación de las políticas activas de mercado laboral (ALMP). Como consecuencia las oficinas de empleo introdujeron un nuevo modelo de servicio centrado en la reorganización de los entornos laborales, la introducción de solicitantes de empleo y de empleadores, ofreciendo servicios, de conformidad con las normas relativas a los servicios de empleo público de la Unión Europea, revisando las ALMP vigentes y adaptando el respectivo marco regulatorio. La reforma del NES dio lugar a una transformación de las oficinas de empleo público, lo que entraña la modernización de la infraestructura y una reconceptualización e informatización de los servicios. La Comisión toma nota asimismo de que la reforma prevé la reducción de las brechas de las competencias profesionales de género, para elevar la empleabilidad de las mujeres, así como para abordar las necesidades de grupos específicos, como los romaníes y otras minorías étnicas, las personas con discapacidad y las personas que residen en zonas rurales o lejanas, para garantizar su inclusión en el mercado de trabajo. Además, se establecieron, en los ámbitos regional y local, 21 nuevas oficinas de empleo. La Comisión también toma nota de que la Estrategia nacional de empleo y competencias profesionales 2014-2020 y su Plan de acción, desarrollados con la asistencia de la OIT, se dirige a aportar un marco integral en materia de políticas, para mejores puestos de trabajo y mayores competencias profesionales. Según el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), 2017-2021, para Albania, el desarrollo económico del país en la última década, se acompañó de cambios positivos en el empleo en general y de una reducción de las tasas de pobreza. La Comisión toma nota de que, si bien este crecimiento se vio reflejado en unas tasas reducidas de desempleo en general, según el PTDP, el crecimiento en la economía de Albania no siempre condujo a la creación de más puestos de trabajo, especialmente para mujeres y jóvenes. Las elevadas tasas de desempleo juvenil siguen representando una preocupación para el Gobierno, especialmente debido a que cerca del 42 por ciento de la población tiene menos de 30 años de edad. En ese sentido, la Comisión toma nota de que, en el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo de las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años (el 24,5 por ciento), fue casi dos veces superior a la tasa del desempleo general de las personas mayores de 15 años de edad (el 12,5 por ciento). La tasa de desempleo descendió para ambos grupos de edad, desde el primer trimestre de 2016, del 30,4 por ciento, en el caso de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, y del 16,6 por ciento, en el caso de los mayores de 15 años de edad. Durante el mismo período, la tasa de empleo ascendió, pasando del 47,5 por ciento al 51,9 por ciento, en el caso de las personas mayores de 15 años, y del 32,1 por ciento al 35,9 por ciento, en el caso de aquellos de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En el primer trimestre de 2018, las tasas de participación en la fuerza del trabajo se situaron en el 59,3 por ciento (67,4 por ciento, en el caso de los hombres, y 51,3 por ciento, en el caso de las mujeres), para los mayores de 15 años de edad, y en el 47,5 por ciento, para las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años (el 54,9 por ciento, en los hombres, y el 39,7 por ciento, en las mujeres). **La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los progresos realizados respecto de la formulación y la adopción de una política activa de empleo, en consulta con los interlocutores sociales, así como el impacto de las medidas de mercado laboral aplicadas para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Solicita asimismo al Gobierno que comuniqué, en su próxima memoria, información actualizada sobre las tendencias del empleo, incluyendo el empleo, el desempleo y el subempleo, aportando también información estadística desglosada por sector, edad y sexo. Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación del empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los trabajadores rurales, los trabajadores pertenecientes a la población romaní y a otras minorías étnicas, y aquellos que se encuentran en la economía informal. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o contempladas para mejorar la creación de empleo y aumentar la participación en el mercado laboral, especialmente de los jóvenes.**

Educación y formación profesionales. La Comisión toma nota de que, según el PTDP, las encuestas del NES llevadas a cabo en Albania, en 2008, 2010 y 2012, arrojaron el resultado de que existen brechas en las competencias profesionales de todos los sectores de la economía. Además, la educación y la formación técnicas profesionales (TVET), impartidas en las 53 escuelas existentes, están casi todas situadas en zonas urbanas. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 15/2017 sobre Educación y Formación Profesional, de 16 de febrero de 2017, que apunta a mejorar el desarrollo de las competencias profesionales, a efectos de abordar la brecha de las competencias profesionales. También toma nota de la adopción de la decisión núm. 64 sobre el programa de promoción del empleo de los jóvenes que adquirieron la condición de huérfanos, de 27 de enero de 2016, así como el apoyo recibido de 2010 a 2017 del Ministerio

Federal Alemán de Cooperación Económica, como parte del «Programa de educación y formación profesional (VET)». La Comisión también toma nota de la información comunicada sobre el actual proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (PNUD), aplicado en colaboración con el Ministerio de Bienestar Social y Juventud, que se dirige a mejorar las oportunidades de empleo juvenil en las regiones de Lezha, Kukes y Shkodra, que tienen elevadas tasas de desempleo. En particular, la Comisión acoge con agrado el enfoque del proyecto en los jóvenes con discapacidad, con el objetivo de creación de oportunidades de empleo para promover su inclusión sostenible en el mercado de trabajo. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el terreno de la TVET y sobre su relación con las posibles oportunidades de empleo. También solicita al Gobierno que indique de qué manera se consulta a los interlocutores sociales y a otras partes interesadas respecto del desarrollo de los programas de la TVET.***

Artículo 3. Consulta con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado información sobre este punto. ***En consecuencia, reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información sobre las actividades del Consejo Administrativo Tripartito y del Consejo Nacional del Trabajo respecto de la formulación y de la aplicación de las medidas activas de mercado de trabajo. También solicita al Gobierno que indique la naturaleza y los resultados de las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas o previstas.***

Argelia

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a las observaciones formuladas el 31 de mayo de 2015 por la Confederación General y Autónoma de Trabajadores de Argelia (CGATA) sobre las disposiciones del proyecto de Código del Trabajo, a las que se hace referencia en los comentarios anteriores de la Comisión. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.***

Artículos 1, párrafo 1, a) y b); 2, párrafo 4, y 3 del Convenio. Agencias de empleo privadas. Exclusiones. Condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo privadas. El Gobierno informa que, desde mayo de 2017, son 29 las agencias de empleo privadas (AEP) certificadas que funcionan en el país. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud de las leyes y los reglamentos en vigor en la actualidad (ley núm. 04-19, de 25 de diciembre de 2004, relativa a la colocación de los trabajadores y al control del empleo, y decreto núm. 07-123, de 24 de abril de 2007), las AEP no están autorizadas a mediar con los demandantes de empleo nacionales en el extranjero, a colocar mano de obra extranjera en Argelia o poner mano de obra a disposición de una tercera parte (física o jurídica). El Gobierno declara que, en la actualidad, las AEP sólo están autorizadas a prestar servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, como contempla el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Toma nota de que el proyecto de Código del Trabajo, en base al cual el Gobierno consulta a los interlocutores sociales, ampliará el alcance de las actividades en las que pueden participar las AEP certificadas, para incluir los servicios que han de brindar las empresas de trabajo temporal (ETT), en el sentido del artículo 1, párrafo 1, b), del Convenio, con miras a facilitar el empleo de los trabajadores a tiempo parcial y de los desempleados, y a permitir que la empresa usuaria atienda las solicitudes temporales de trabajo. El Gobierno añade que el proyecto de Código del Trabajo también comprenderá las actividades de subcontratación, con miras a combatir el trabajo informal y las actividades de subcontratación ilícitas. ***La Comisión solicita al Gobierno que indique si las agencias privadas de empleo que operan en el país efectúan actividades de colocación. Tomando nota de que el Gobierno ha proseguido el desarrollo del proyecto de Código del Trabajo durante algunos años, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en relación con el desarrollo y la adopción del proyecto de Código, y que transmita copias del Código y su reglamento de aplicación, en cuanto se hayan adoptado. En ese sentido, la Comisión recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre las disposiciones del proyecto de Código del Trabajo mencionadas en su memoria, sobre la certificación de las actividades de las ETT, las circunstancias en las que puede recurrirse a sus servicios, la situación y los derechos de sus empleados, y la naturaleza del contrato entre la ETT y sus empleados.***

Artículo 5, párrafo 1. No discriminación. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre medidas concretas adoptadas para garantizar que las AEP no sometan a los trabajadores a ninguno de los tipos de discriminación comprendidos en el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). ***Recordando que ha venido formulando comentarios a lo largo de algunos años en relación con la necesidad de la adopción de medidas dirigidas a garantizar que las AEP no participen en la discriminación, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar que las AEP traten a los trabajadores sin discriminación alguna basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación prohibida en virtud de la ley y la práctica nacionales.***

Artículo 5, párrafo 2. Servicios especiales y programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el acuerdo de cooperación, de 25 de

enero de 2012, entre la Agencia Nacional de Empleo (ANEM) y las AEP certificadas, se centra especialmente en la colocación de los jóvenes y de los desempleados de larga duración. El acuerdo estipula que la ANEM aportará apoyo técnico a estas AEP, en relación con las actividades de colocación laboral, así como formación en orientación profesional y estadística. **La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre de qué manera y en qué medida participan las AEP en la aplicación práctica de servicios especiales o programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo (artículo 5, párrafo 2).**

Artículo 8. Protección de los trabajadores en un contexto transfronterizo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las AEP no están autorizadas a colocar mano de obra extranjeros en Argelia. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para otorgar una protección adecuada a los trabajadores migrantes y prevenir los abusos de éstos, que son contratados o colocados en su territorio por AEP, así como sobre las sanciones previstas en virtud de las leyes o los reglamentos nacionales en caso de fraude o de abuso. La Comisión solicitó asimismo al Gobierno que comunicara información sobre las consultas celebradas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a este respecto, como exige el artículo 8, párrafo 1, del Convenio.**

Artículo 9. Medidas para impedir el trabajo infantil. El Gobierno informa que se espera que el proyecto de Código del Trabajo contenga disposiciones que prohíban la utilización del trabajo infantil en las ETT y en las empresas usuarias. **Recordando los comentarios que ha venido formulando a lo largo de algunos años en relación con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin retrasos, medidas apropiadas para garantizar la toma de decisiones en materia de protección que garanticen que las AEP no utilizan o suministran trabajo infantil.**

Artículos 10 y 14. Inspecciones y mecanismos y procedimientos apropiados de quejas. El Gobierno informa que el servicio de inspección del trabajo y la administración del empleo tienen competencias en la supervisión de las actividades de las AEP, añadiendo que el proyecto de Código del Trabajo, una vez adoptado, fortalecerá más los controles y la capacidad de la inspección del trabajo. **Tomando nota de los tipos de abusos y actividades fraudulentas en los que participaron algunas AEP, como describe la memoria del Gobierno, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique una información que ilustre de qué manera los procedimientos actualmente en vigor garantizan un examen efectivo de presuntos abusos y prácticas fraudulentas en relación con las actividades de las AEP, que indique la naturaleza y el número de las quejas recibidas y la manera en que se resolvieron (artículo 10). La Comisión solicitó asimismo al Gobierno que especificara las medidas de corrección, con inclusión de sanciones, si hubiese lugar, impuestas en casos de violaciones del Convenio (artículo 14).**

Artículos 11 y 12. Garantizar una adecuada protección de los trabajadores. Asignación de responsabilidades de las AEP y de las empresas usuarias. El Gobierno indica que el proyecto de Código del Trabajo, una vez adoptado, regulará la situación y los derechos de los empleados de las ETT y establecerá las modalidades del contrato entre las ETT y la empresa usuaria, en base a las cuales un trabajador puede ser puesto a disposición de la empresa usuaria. **La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera la legislación actual garantiza una adecuada protección de los derechos de los trabajadores empleados por las AEP, en relación con todos los derechos establecidos en el artículo 11, a)-j), del Convenio, así como la manera en la que se prevé que el proyecto de Código del Trabajo u otras medidas garanticen una protección equivalente o aumentada. Solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para determinar y asignar las responsabilidades de las ETT y de las empresas usuarias, en relación con cada uno de los asuntos expuestos en el artículo 12, a)-i), del Convenio.**

Artículo 13. Cooperación efectiva entre el servicio público del empleo y las AEP. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, en relación con el acuerdo de cooperación, de 25 de enero de 2012, entre la ANEM y las AEP certificadas, el Gobierno indica que la naturaleza de la información que deben comunicar las AEP a la ANEM y su frecuencia, está regulada por decreto ejecutivo. **La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno transmita ejemplos de la información comunicada a la Agencia Nacional de Empleo, por las agencias de empleo privadas (artículo 13, párrafo 2), así como una copia del mencionado decreto ejecutivo a la Oficina y que especifique la naturaleza y la frecuencia con la que se pone esta información a disposición del público (artículo 13, párrafo 3).**

Armenia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1994)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) y la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. **Se solicita al Gobierno que presente sus comentarios al respecto.**

Artículo 1 del Convenio. Tendencias del empleo y aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno comunica que en 2016, para reducir el riesgo de corrupción, valorar el nivel de satisfacción de los beneficiarios y mejorar la aplicación efectiva de los programas llevados a cabo en el marco de la estrategia de empleo 2013-2018, evaluó 14 programas en diversas regiones, pidiendo a los empleadores su opinión. Además de introducir medios electrónicos para el intercambio de información y la prestación de asistencia, la evaluación llevó a personalizar más los servicios que se prestan a los solicitantes de empleo. El Gobierno indica que, a finales de 2016, había 95 800 solicitantes de empleo

registrados (62 200 de los cuales eran mujeres y 22 300 jóvenes); entre los solicitantes, 85 500 personas (el 84 por ciento) estaban desempleadas. En 2016, 9 546 personas encontraron empleo, 6 912 de las cuales no estaban registradas en los programas de empleo estatales; entre las que encontraron empleo, el 66 por ciento eran mujeres y el 30,9 por ciento jóvenes. La Comisión constata las disparidades regionales a este respecto; las proporciones más elevadas se registraron en Ereván (2 391 mujeres y 716 jóvenes) y las más bajas en Vayots Dzor (156 mujeres y 109 jóvenes). El mismo año, gracias a programas de asistencia ideados para la economía rural en forma de empleo estacional y participación en obras públicas, 13 006 solicitantes de empleo (el 13,6 por ciento) se beneficiaron de medidas activas del mercado de trabajo, de los cuales 3 768 eran mujeres (el 74 por ciento) y 1 878 eran jóvenes (el 36,8 por ciento). **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada, que incluya datos estadísticos desglosados por año, sector, sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en especial acerca del empleo, el desempleo y el subempleo. Asimismo, pide al Gobierno que aporte información sobre las repercusiones de las medidas activas del mercado de trabajo aplicadas en las diversas regiones del país.**

Grupos vulnerables ante los déficits de trabajo decente. En sus observaciones, el sindicato sostiene que las iniciativas del Gobierno para reducir el desempleo y la pobreza, que se describen detenidamente en la memoria, son insuficientes. Exige que se ejecuten proyectos dirigidos a las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información detallada que proporciona el Gobierno sobre la situación de las mujeres y los jóvenes. El Gobierno indica que es consciente de la alta tasa de desempleo de las mujeres: el 66 por ciento. La tasa de desempleo de los jóvenes era del 23,7 por ciento. En este sentido, la Comisión toma nota de los diversos programas e iniciativas dirigidas principalmente a los jóvenes de zonas tanto urbanas como rurales; en particular, en lo relativo a la orientación profesional, cuyo objeto es dar a conocer las necesidades del mercado de trabajo y aumentar la empleabilidad. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de las medidas y los programas puestos en práctica para fomentar el empleo de los grupos vulnerables ante los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. En cuanto a las medidas activas del mercado de trabajo dirigidas a los jóvenes, se pide al Gobierno que aporte información sobre la repercusión de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesionales y acerca de sus efectos a la hora de aumentar la empleabilidad de los jóvenes.**

Artículo 2. Aplicación de medidas activas del mercado de trabajo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que, si bien sigue habiendo obstáculos a la cooperación entre las agencias de empleo privadas y la Agencia Estatal de Empleo de Armenia, se realizan pagos a agencias de empleo privadas que contratan a personas que tienen dificultad para entrar en el mercado de trabajo. **La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para reforzar la cooperación entre los servicios de empleo públicos y las agencias de empleo privadas. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información acerca del número de personas recrutadas, los criterios empleados para identificar a las personas que tienen dificultad para entrar en el mercado de trabajo, así como los resultados obtenidos por las agencias privadas de empleo en relación con la colocación de tales personas.**

Trabajo no declarado. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno comunica que en 2017, había 2 241 trabajadores no declarados. El Gobierno hace referencia al Código Tributario de la República de Armenia, que entró en vigor el 1.º de enero de 2018, y contempla el registro electrónico de todos los trabajadores antes de comenzar su empleo. **La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.**

Artículo 3. Consultas a los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, en virtud del nuevo contrato colectivo, el Gobierno y los interlocutores sociales normalmente definen y ponen en práctica las medidas activas del mercado de trabajo en el Comité republicano tripartito, que se reúne al menos una vez por trimestre. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre las actividades del Comité republicano tripartito y otros comités tripartitos a escala regional y nacional, en lo relativo a la definición y puesta en práctica de medidas y programas activos del mercado de trabajo.**

Bosnia y Herzegovina

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina (SSSBiH) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.**

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política de empleo activa. En sus observaciones, las organizaciones de trabajadores alegan que el Gobierno no declaró, ni persiguió, como principal objetivo, una política activa concebida para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Destacan que la situación del empleo, tanto en la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) como en la República Srpska (RS) es grave, con tasas sumamente elevadas de desempleo, con una tasa de desempleo general del 28 por ciento y unas tasas de desempleo juvenil que

superan el 60 por ciento. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud de la Ley sobre la Intermediación del Empleo y la Seguridad Social de los Desempleados de la FBiH, las autoridades pertinentes de ésta o de los cantones, tienen competencia en el establecimiento de medidas orientadas a aumentar la tasa de empleo y a mejorar la situación de las personas empleadas. La FBiH añade que el plan de trabajo del Instituto de Empleo de la FBiH prevé diversas formas de apoyo a la promoción del empleo, del empleo por cuenta propia, de la preparación para entrar en el mercado laboral, y el desarrollo y la formación profesionales. Estas medidas apuntan a integrar a los desempleados en el mercado de trabajo, especialmente en relación con las personas que pertenecen a las categorías de desempleados con dificultades para encontrar empleo. La Comisión toma nota de que el artículo 23 de la ley da prioridad a las personas con discapacidad en el empleo. Con respecto al distrito Brčko de BiH, la Comisión toma nota de que la Ley sobre Empleo y Derechos durante el Desempleo y la legislación laboral del distrito de Brčko prevén la formación profesional, la preparación para el empleo y protecciones especiales para las mujeres, los menores y las personas no aptas para trabajar. En relación con la RS, la Comisión toma nota de que la Estrategia de empleo de la RS 2011-2015, estableció un sistema para el registro de los desempleados con la Oficina de Empleo de la RS (RSEB). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la RSEB puso en marcha tres proyectos que brindan apoyo al empleo en la RS de 2013 a 2015, a través de los cuales se empleó a 4 522 personas. En octubre de 2016, la Asamblea Nacional de la RS adoptó la Estrategia de empleo de la RS 2016-2020, que apunta a aumentar el empleo y a estimular la actividad económica en la RS, a través del cumplimiento de 13 objetivos operativos y 50 medidas específicas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, con arreglo a los registros de la RSEB, la aplicación de estas medidas dio lugar al empleo de 34 593 personas en 2015. El Gobierno añade que las medidas establecidas en el Plan de acción para el empleo para 2017 de la RS apuntan, entre otras cosas, a reformar estructuralmente la función de la RSEB, centrando su actividad en la intermediación laboral. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada y actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sexo, edad y entidad administrativa, sobre el impacto de las políticas y las medidas aplicadas para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, incluidas las actividades de promoción del empleo llevadas a cabo con arreglo a la Estrategia de empleo de la República Srpska 2016-2020.**

Tendencias del empleo. La FBiH informa que en 2016 se produjeron algunos cambios positivos en el mercado de trabajo. La RS indica que en 2013 se dio inicio a una gradual estabilización del mercado laboral, añadiendo que muchas medidas adoptadas por la RS y otras partes interesadas abordaron la creciente tasa de desempleo. La Comisión toma nota de que, según los datos del Instituto de Estadística de la FBiH, en 2016, estuvieron empleados en la FBiH, 457 974 personas. Toma nota asimismo de que los datos de la encuesta de la fuerza de trabajo indican que la tasa de empleo en la FBiH se situó, en 2016, en el 30,5 por ciento, al tiempo que la tasa media de desempleo se situó en el 25,6 por ciento, una reducción del 3,31 por ciento, en comparación con el promedio de 2015. La Comisión toma nota de la elevada tasa de desempleo en los jóvenes de 15 a 24 años de edad, que descendió del 64,9 por ciento, en 2015, al 55,1 por ciento, en 2016. La Comisión toma nota asimismo de que, según la base de datos de ILOSTAT, la tasa de desempleo general de los jóvenes fue del 45,8 por ciento, en 2017. A finales de 2016, el mayor porcentaje de los registrados como desempleados en la FBiH (44,24 por ciento) se dio en el grupo de edad de 30 a 49 años, seguido por las personas menores de 30 años (32,50 por ciento) y las personas mayores de 50 años (25,26 por ciento). En 2016, 133 037 personas fueron eliminadas del registro de los servicios de empleo cantonales, 115 379 personas fueron registradas como desempleadas, y 92 263 personas fueron colocadas en el empleo. Esto representa un aumento de 15 671, en comparación con 2015. Según la base de datos ILOSTAT, en 2017, la tasa de desempleo general fue del 20,5 por ciento, mientras que la tasa de desempleo de hombres y mujeres fue del 18,9 por ciento y del 23,1 por ciento, respectivamente. **La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando datos estadísticos desglosados por sexo y edad sobre la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, incluida la magnitud de la economía informal y las tendencias en el empleo, en relación con el empleo, el desempleo y el subempleo visible.**

Trabajo no declarado. En sus observaciones, las organizaciones de trabajadores indican que está muy extendida la economía informal, sosteniendo que el Gobierno no realizó verdaderos esfuerzos en abordar este asunto de manera eficaz. Destacan que casi una tercera parte de las personas que están empleadas, trabajan en la economía informal, atrapados allí principalmente debido a la falta de acceso al mercado laboral, a la lenta creación de puestos de trabajo en la economía formal y a la falta de cualificaciones que respondan a las exigencias del mercado laboral. Añaden que los trabajadores de las zonas rurales hacen frente a una mayor probabilidad de permanecer en el empleo informal, en comparación con los trabajadores de otros sectores. La Comisión toma nota de que, según la Estrategia de empleo de la RS 2016-2020, la informalidad está presente en su mayoría en la agricultura, lo que representa aproximadamente las dos terceras partes del empleo informal, con un empleo informal concentrado en la población rural. **En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para facilitar la transición de los trabajadores no declarados en la economía informal al empleo en la economía formal, con especial atención al sector agrícola y a las comunidades rurales.**

Trabajadores vulnerables a los déficits de trabajo decente. La FBiH indica que algunos programas que tienen en cuenta las cuestiones de género y que puso en marcha el Instituto de Empleo de la FBiH, se centran en grupos específicos de trabajadores vulnerables a los déficits de trabajo decente: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad romaní, personas mayores de 40 años y los desempleados de larga duración. La RS informa que fueron 2 859 las personas empleadas a través de redes de protección social y del proyecto de apoyo al empleo. Además, en 2015, fueron 543 las personas empleadas a través de un proyecto de apoyo al empleo de las personas mayores

de 45 años y 135 las personas empleadas a través de un proyecto de apoyo al empleo centrado en la minoría romaní, de 2011 a 2015. Añade que el Plan de acción para el empleo para 2017 de la RS establece algunas medidas dirigidas a aumentar la empleabilidad de las personas menores de 30 años, de las personas mayores de 50 años y de las personas que pertenecen a la comunidad romaní. En sus observaciones, las organizaciones de trabajadores alegan que la Agenda de la reforma 2015-2018, no aborda los intereses de las mujeres, de los trabajadores en la economía informal y de los trabajadores con discapacidad. Además, las organizaciones de trabajadores observan que las mujeres tienen unos niveles bajos de participación en los asuntos políticos y públicos, señalando que la brecha de remuneración por razones de género en la FBiH es mayor que el promedio de la Unión Europea. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada y actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por edad y sexo en las tres entidades administrativas, sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido y el empleo sostenido para las personas vulnerables a déficits de trabajo decente, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas mayores de 50 años, los trabajadores informales, los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad y los miembros de la comunidad romaní. Además, tomando nota de la brecha salarial por motivos de género y de las tasas más elevadas de desempleo de las mujeres, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas para promover el empleo de las mujeres en todos los niveles y en todos los sectores, incluidos los puestos clave en la adopción de decisiones.***

Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que, según la base de datos ILOSTAT, la tasa de desempleo juvenil en el país se situaba, en 2017, en el 45,8 por ciento. La Comisión toma nota de que, tanto la FBiH como la RS, adoptaron medidas para promover el empleo de los jóvenes. En ese sentido, la RSEB, puso en marcha cinco proyectos, de 2011 a 2014, para apoyar a los jóvenes en la obtención de experiencia laboral, a través de la cual se empleó a 3 650 personas como aprendices. Además, el Plan de acción para el empleo para 2017 de la RS, contempla la promoción de un empleo de utilidad social para los jóvenes, para lo cual se asignaron 50 000 marcos bosnioherzegovinos (BAM). En sus observaciones, las organizaciones de trabajadores expresan su preocupación en relación con la elevada tasa de desempleo juvenil y la probabilidad de que permanezcan en el desempleo de larga duración y el éxodo masivo de los jóvenes instruidos del país, buscando trabajo en otras partes. ***La Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada y actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados sobre el impacto de las medidas adoptadas por las tres entidades administrativas del país para promover el pleno empleo, productivo, libremente elegido y duradero para los trabajadores jóvenes.***

Enseñanza y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Instituto de Empleo de la FBiH y los servicios de empleo cantonales, tienen la competencia de aplicar el Programa de preparación para el empleo: de la formación al empleo, que proporciona una cofinanciación para la formación de los desempleados, permitiéndoles adquirir una capacitación adaptada a las necesidades de los empleadores. Con respecto a la RS, la Comisión toma nota del establecimiento de 11 clubes de empleo y seis centros de información, asesoramiento y formación, que aportaron, de 2011 a 2015, una asistencia a la búsqueda de trabajo a más de 34 376 beneficiarios, lo que dio lugar al empleo de 9 172 personas. Además, el Plan de acción para el empleo para 2017 de la RS, contempla el desarrollo, la financiación y la realización de actividades de formación, dirigidas a mejorar la empleabilidad de quienes buscan empleo activamente, para lo cual se asignaron 500 000 BAM. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para mejorar la enseñanza y la formación profesionales y sobre su impacto en la empleabilidad y la competitividad de la fuerza del trabajo nacional.***

Artículo 3. Consulta con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Consejo Económico y Social Tripartito de la FBiH discute todas las medidas relacionadas con la política económica y social antes de su adopción formal, y que se adoptó, previa consulta con los interlocutores sociales, el Plan de acción para el empleo para 2017 de la RS. En sus observaciones, las organizaciones de trabajadores alegan que los interlocutores sociales no pudieron participar en el desarrollo y la aplicación de la Agenda de la reforma 2015-2018 y que esta falta de participación y de transparencia continúa en relación con las leyes y las políticas adoptadas por los gobiernos regionales en 2016. Alegan asimismo que la legislación laboral de 2015 socava la posición estratégica de los sindicatos y los convenios colectivos. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre la naturaleza y la medida en que se implican los interlocutores sociales en el desarrollo, la aplicación, el control y la revisión de las medidas y los programas de política de empleo en las diferentes entidades administrativas.***

Brasil

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Médicos de Pernambuco (SIMEPE) y del Consejo Federal de Medicina (CFM) de 21 de enero de 2015, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas, de fecha 5 de noviembre de 2015. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibidas el 1.º de septiembre de 2017, así como de las observaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA) recibidas el 1.º de junio de 2018. ***La Comisión pide al Gobierno que presente sus comentarios sobre las observaciones formuladas por la CUT y la ANAMATRA.***

Avances legislativos. En sus observaciones, la CUT alega que las reformas laborales («Reforma Trabalhista») introducidas por la ley núm. 13467 de 13 de julio de 2017, que modificaron la Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943, cambian considerablemente la política de empleo del Brasil. La CUT observa que, desde la perspectiva de los trabajadores, las reformas laborales tendrán efectos sumamente negativos en la creación de trabajos decentes y, por consiguiente, contravendrán los objetivos del Convenio. En particular, la CUT recuerda que el *artículo 1 del Convenio* requiere que la política nacional de empleo se conciba con el objetivo de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Añade que los puestos de trabajo que deben crearse por conducto de las políticas públicas deberían ser productivos y elegidos libremente, y que los trabajadores no deberían estar sujetos a unas condiciones socioeconómicas que les obliguen a aceptar cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. En este contexto, la CUT se remite al artículo 442-B de la ley núm. 13467, que establece la categoría del «autónomo exclusivo», que puede que trabaje de manera exclusiva y continua para un empleador, pero no sea considerado como empleado en virtud de la Consolidación de las Leyes del Trabajo. La CUT sostiene que el artículo 442-B acaba con el concepto mismo de empleo, empleador y empleado, por lo que afecta directamente a la política de empleo. Además, la CUT alega que las reformas laborales se adoptaron en contravención del *artículo 3 del Convenio*, ya que se aprobaron sin la celebración de consultas con las organizaciones de trabajadores o con las personas interesadas. ***Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha presentado aún sus comentarios en respuesta a las observaciones de la CUT y de la ANAMATRA, la Comisión pide, no obstante, al Gobierno que suministre información detallada sobre la manera en que la ley núm. 13467 — en particular el artículo 442-B — se ha aplicado, y que comuniqué copias de cualquier decisión judicial relativa a la aplicación de las disposiciones de esta ley.***

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Tendencias del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que continuara proporcionando información detallada sobre las políticas puestas en práctica y las medidas adoptadas con miras a lograr los objetivos del Convenio, y sobre el impacto del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del plan «Brasil Maior» (Brasil Mejor) en la promoción del empleo productivo. El Gobierno señala que su estrategia encaminada a crear puestos de trabajo y generar ingresos se centra en la estimulación de la innovación y de la actividad productiva a través de la concesión de créditos, lo que considera una manera sostenible de integrar a las personas en la economía productiva. Añade que el objetivo de su Programa para la Creación de Empleo y la Generación de Ingresos (FAT-PROGER) es estimular la generación de ingresos proporcionando líneas de crédito y tipos de interés subvencionados, a fin de aumentar la producción y, por ende, la demanda de trabajo. El Gobierno indica que FAT-PROGER realiza inversiones a largo plazo en pequeñas empresas, cooperativas y asociaciones productivas, y está presente en 3 600 municipios. Señala que, en 2016, FAT-PROGER concedió 5 000 millones de reales brasileños en líneas de crédito destinadas a las empresas. El Gobierno pone de relieve asimismo el programa INOVACRED, que forma parte del plan «Brasil Maior», con el objetivo de apoyar el crecimiento económico mediante la inversión en innovación. De 2014 a 2017, INOVACRED puso 533 millones de reales brasileños a disposición de las empresas con este fin. Además, el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado (PNMPO) extiende los microcréditos a los pequeños empresarios a través de una red de instituciones especializadas que proporcionan asimismo la orientación necesaria para la realización sostenida de estas actividades. En 2016, el PNMPO puso 11 180 millones de reales brasileños a disposición de 3,7 millones de beneficiarios. El Gobierno indica que las mujeres representan el 60 por ciento de los clientes del PNMPO, y que el 90 por ciento de todos los clientes son operadores por cuenta propia. La Comisión toma nota asimismo del aumento del desempleo, el cual, según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ascendió al 13,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, cayendo en el segundo trimestre al 12,4 por ciento. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad sobre las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible observadas en las zonas urbanas y rurales y en las diferentes regiones. Además, pide al Gobierno que siga suministrando información exhaustiva sobre las medidas adoptadas o previstas para lograr los objetivos del Convenio, y sobre el impacto de tales medidas.***

Educación y formación profesional. Grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera proporcionando información sobre las medidas adoptadas para aumentar la participación en el mercado de trabajo de grupos específicos, como los jóvenes, los trabajadores de edad, las mujeres solicitantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidades. El Gobierno indica que el Plan Nacional de Calificación (PNQ) se reestructuró en abril de 2017 y se conoce actualmente como el Programa brasileño de calificación social y profesional («Qualifica Brasil»). Su objetivo es promover la calificación y la certificación profesional en el marco del seguro de desempleo dentro del Sistema Nacional de Empleo (SINE). «Qualifica Brasil» concede prioridad a determinados grupos, incluidas las personas desempleadas, quienes desempeñan empleos que se han visto afectados por los cambios tecnológicos, los jóvenes y otros. Ofrece cursos de calificación, incluidos cursos de aprendizaje a distancia y gratuitos en las instituciones participantes, y una certificación profesional que reconoce los conocimientos, competencias y experiencia profesional adquiridos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), más de 40 millones de personas — casi la mitad de los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años — están interesadas en cursos profesionales, pero sólo el 2,2 por ciento disponen de los medios para acceder a ellos. Con respecto al empleo juvenil, el Gobierno señala que el programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» del Ministerio de Trabajo y

Empleo se está reestructurando. El programa, que se propone preparar para el mercado de trabajo a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, benefició a 1 331 948 jóvenes entre 2008 y 2013. El Gobierno hace referencia asimismo al programa «Pronatec» creado en 2011 a fin de ampliar los cursos de educación técnica y profesional, indicando que en el segundo semestre de 2017, los Ministerios de Trabajo y Educación llevarán a cabo un estudio en el que se analizará la colocación en el mercado de trabajo de los jóvenes calificados. Además, el Gobierno hace referencia al programa de aprendizaje brasileño, que tiene por objeto promover la calificación profesional y la integración en el mercado del trabajo de los jóvenes de 14 a 24 años. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, de 2005 a 2017, un total de 3 051 942 jóvenes participaron en el programa de aprendizaje. ***La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre las medidas adoptadas para aumentar la participación en el mercado de trabajo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, tales como los jóvenes, las personas de edad, las mujeres solicitantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidades.***

Programa «Mais Médicos». En sus observaciones, el SIMEPE y el CFM indican la inobservancia de una serie de convenios de la OIT, incluido el Convenio núm. 122, en relación con el programa «Mais Médicos» (Más Médicos). Ponen de relieve que, al crear el programa, el Gobierno contrató los servicios de médicos cubanos que trabajaban para el Ministerio de Salud de Cuba como mano de obra de bajo costo, pagándoles menos que a los médicos brasileños, en condiciones en las que no pudieron elegir libremente su empleo. Además, el SIMEPE y el CFM alegan que se enviaron a los médicos cubanos al Brasil como estudiantes médicos de intercambio, para que perfeccionaran sus calificaciones, y se les impidió que practicasen la medicina, cuando en realidad trabajaron prestando servicios de atención de salud en las zonas rurales para el sistema público de salud (Sistema Único de Salud (SUS)). En su respuesta de 2015, el Gobierno indica que el proyecto se estableció con miras a hacer frente a la escasez de médicos en el país, en particular en las zonas rurales, y selecciona a graduados tanto brasileños como no brasileños para que presten servicios de atención primaria de salud en zonas insuficientemente atendidas. El Gobierno indica que el proyecto es un programa internacional de intercambio médico, y no una relación de trabajo en el sentido estricto, remitiéndose a la ley núm. 12871/2013, que creó el programa, y cuyo artículo 17 prevé que «las actividades realizadas en el marco del programa ‘Mais Médicos’ no establecen ninguna relación». El Gobierno añade que las actividades llevadas a cabo no son con ánimo de lucro, pero que los médicos que participan reciben becas y otras prestaciones para sus viajes y gastos de instalación, y que después del primer año consiguió atraer a participantes de más de 40 nacionalidades diferentes, además de a médicos cubanos empleados por el Ministerio de Salud de Cuba. El Gobierno indica que el programa combinó un conjunto de incentivos — educativos, monetarios, normativos y apoyo clínico — para atraer a los médicos a las zonas menos atendidas. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la situación actual del programa «Mais Médicos», incluida información estadística desglosada por nacionalidad, sobre el número de participantes, así como información sobre las condiciones que ofrece el programa, en particular las sumas recibidas en forma de remuneración, prestaciones, etc.***

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. Tomando nota de las observaciones de la CUT relativas a la adopción de las reformas laborales, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales y las personas interesadas con respecto a la elaboración y aplicación de una política de empleo y de medidas activas del mercado de trabajo, incluidas aquéllas destinadas a los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente.

Canadá

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), recibidas el 31 de agosto de 2017 y transmitidas después a la vez que la memoria del Gobierno junto con las observaciones del Consejo Patronal de Quebec (CPQ).

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. En comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase de qué manera, con arreglo al artículo 2 del Convenio, revisaba regularmente las medidas que se adoptan con arreglo a los resultados obtenidos en la prosecución de los objetivos del Convenio, especificados en el artículo 1. La Comisión toma nota de la información detallada que ha proporcionado el Gobierno en lo relativo a las medidas del mercado laboral adoptadas y previstas a escala federal y provincial. El Gobierno indica que se invierten más de 2 000 millones de dólares canadienses al año en los acuerdos para el desarrollo del mercado de trabajo (LMDA) en colaboración con las provincias y los territorios para ofrecer orientación y formación profesionales a los desempleados. En virtud de estos acuerdos, las prestaciones laborales permiten a los beneficiarios de seguros de desempleo antiguos y actuales adquirir competencias y experiencia laboral mediante una combinación de intervenciones, como la formación y los subsidios salariales. El Gobierno añade que en 2016 y 2017 se modificó la Ley de Seguro de Desempleo con vistas a eliminar los estrictos requisitos para acceder al seguro, que restringían el acceso de aquellos que llegan o se reincorporan al mercado de trabajo, ampliando la definición de «antiguo beneficiario» de tres a cinco años, y ampliando la admisibilidad para permitir a grupos infrarrepresentados que accedan a la formación y la ayuda financiadas con cargo al seguro de desempleo, en virtud de los LMDA. Sin embargo, el CLC señala que el Gobierno no invirtió en un acceso notablemente más amplio a las prestaciones regulares del seguro de desempleo, por lo que los trabajadores pueden

ver que se les concede formación con cargo al seguro, sin que puedan optar a las prestaciones regulares proporcionadas por el seguro de desempleo. Por otra parte, a partir de los resultados de las consultas celebradas en 2016 con las provincias, los territorios y otras partes interesadas, el Gobierno anunció reformas de los LMDA en el presupuesto de 2017, para introducir los nuevos acuerdos para el desarrollo de la fuerza de trabajo (WDA), que complementan a los LMDA y consolidan los acuerdos para la financiación del empleo en el Canadá, los acuerdos del mercado de trabajo para personas con discapacidad y la iniciativa dirigida específicamente a trabajadores de edad avanzada. En virtud de los WDA, se ofrece financiación adicional para el desarrollo y la prestación de programas y servicios que ayudan a los canadienses a formarse, desarrollar sus competencias y adquirir experiencia laboral. Los WDA ofrecen flexibilidad para responder a las diversas necesidades en materia de empleo y formación profesional de los canadienses, sin olvidar a las personas con discapacidad, las personas especialmente alejadas del mercado de trabajo y los empleadores. La Comisión toma nota asimismo de que el CPQ, en sus observaciones, acoge con satisfacción el plan de innovación y competencias incluido en el presupuesto de 2017 con el fin de crear un número mayor de trabajos de calidad y bien pagados y de que aumente la clase media. Además, las medidas del presupuesto de 2018 están dirigidas a ampliar el acceso a las deducciones impositivas a los ingresos fruto del trabajo (WITB), que son créditos fiscales reembolsables que complementan los salarios de los trabajadores de bajos ingresos. Al permitir que estos trabajadores lleven a casa más dinero mientras están trabajando, esta prestación anima a más gente a ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo. Por último, la Comisión toma nota de las preocupaciones suscitadas por el CLC sobre la falta de una política activa que fomente el pleno empleo, productivo y libremente elegido, y que esté articulada e integrada en un proceso de toma de decisiones socioeconómicas coordinado, tal y como se establece en el *artículo 1* del Convenio. El CLC indica que es difícil llevar a cabo de forma coherente los objetivos definidos en el *artículo 2* a través de metas mensurables que permitan la evaluación de los programas. Con respecto a las tendencias del empleo, con arreglo a las estadísticas de la fuerza del trabajo del Canadá, el empleo ajustado estacionalmente aumentó de 17 991 100 trabajadores en junio de 2016 a 18 628 000 trabajadores en junio de 2018, y la tasa de desempleo descendió del 6,8 por ciento al 6 por ciento en el mismo período. Sin embargo, el CLC señala que la calidad del empleo ha disminuido y el empleo a tiempo parcial sigue representando un porcentaje considerable y creciente del mercado de trabajo. El CLC añade que los jóvenes, las mujeres, las personas indígenas, los recién llegados al Canadá y los trabajadores con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar en empleos de bajos ingresos con horarios impredecibles, sin prestaciones ni permisos por enfermedad, y poca seguridad laboral. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para lograr los objetivos del Convenio, y en particular acerca de la manera en que éstas contribuyen a que los beneficiarios obtengan un empleo pleno, productivo y sostenible. Habida cuenta de las preocupaciones formuladas por el CLC, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique el modo en que revisa regularmente las medidas activas del mercado de trabajo en el marco de una política económica y social general coordinada. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información actualizada, y que incluya datos estadísticos desglosados por sexo, edad y sector económico, sobre la situación actual y las tendencias en materia de población activa, empleo, desempleo y subempleo.***

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y ejecución de las políticas. En respuesta al comentario de la Comisión de 2014, el Gobierno indica que, a través del Foro de Ministros del Mercado de Trabajo (FLMM), se celebraron en 2016 amplias consultas sobre los acuerdos de transferencia en el mercado de trabajo con expertos, empleadores, trabajadores y proveedores de servicios. La Comisión toma nota de que el presupuesto de 2018 prevé consultas con los trabajadores, los empleadores y otras partes interesadas sobre diversas medidas laborales. No obstante, la Comisión constata que el CLC destaca que hay deficiencias en la aplicación de este artículo del Convenio en lo que respecta a las consultas con las organizaciones de los trabajadores. Añade que, a pesar de que se informe a estas organizaciones acerca de las políticas de empleo, no se tienen en cuenta sus opiniones. El CLC lamenta la falta de un proceso institucionalizado para tomar en consideración los puntos de vista de los interlocutores sociales respecto de la elaboración y ejecución de las políticas de empleo. ***Dadas las preocupaciones suscitadas por el CLC, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre la frecuencia, el contenido y el resultado de las consultas que celebre con los interlocutores sociales sobre los asuntos que abarca el Convenio.***

Chile

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1968)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con los numerosos programas adoptados para aumentar la participación, fundamentalmente de mujeres y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, en el mercado de trabajo. El Gobierno se refiere, entre otros, al Programa más Capaz, que tiene como objetivo apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que pertenecen, según clasificación socioeconómica, al 60 por ciento más desfavorecido de la población, y que cuentan con nula o escasa participación laboral, es decir, que tienen un porcentaje de cotizaciones igual o menor al 50 por ciento en los últimos doce meses. El citado programa incluye tres líneas de actuación: la Línea regular (2015-2018), la Línea mujer emprendedora y la Línea discapacidad. Asimismo, el Gobierno indica que ProEmpleo

administra cinco programas de la Subsecretaría del Trabajo orientados a la generación de empleo e inserción laboral de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y ex prisioneros. El objetivo común de los mismos es promover el empleo y la empleabilidad a través del diseño, articulación y supervisión de políticas y programas de empleo, con el fin de facilitar la inserción laboral de las personas en situaciones más vulnerables y otorgar una fuente laboral en aquellos lugares donde se ha experimentado una contracción de la demanda de mano de obra como consecuencia de alguna emergencia. Estos programas se dividen en: «Programas de empleos de emergencia», que incluyen el Programa inversión en la comunidad y los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); y los denominados «Programas de fomento de la empleabilidad», que incluyen, entre otros, el Programa de apoyo al empleo «sistema Chile solidario» y el Programa de desarrollo de competencias laborales para mujeres «Chile solidario». El Gobierno informa también del otorgamiento de incentivos a las empresas (Programa impulsa personas y Programa de formación en el puesto de trabajo) y de beneficios a los trabajadores (Subsidio al empleo joven y Bono al trabajo de la mujer) con miras a fomentar el empleo y capacitación de jóvenes y mujeres. En lo que respecta a las tendencias del mercado de trabajo, la Comisión toma nota de que, con base en la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre julio y septiembre de 2018, la tasa de desocupación general era del 7,4 por ciento entre las mujeres y del 6,8 por ciento entre los hombres; la tasa de participación era del 48,5 por ciento entre las mujeres y del 70,2 por ciento entre los hombres; y la tasa de ocupación era del 44,9 por ciento entre las mujeres y del 65,4 por ciento entre los hombres. La Comisión observa que las tasas de desempleo son más elevadas en determinadas regiones, tales como Tarapacá (9,2 por ciento entre los hombres y 7,5 entre las mujeres), Atacama (7,7 por ciento entre los hombres y 9 por ciento entre las mujeres) y Antofagasta (6,9 por ciento entre los hombres y 10,8 por ciento entre las mujeres). Por último, la Comisión toma nota de la elaboración de reportes de ejecución de los programas de empleo con miras a realizar un seguimiento cuantitativo del cumplimiento de programas de empleo con apoyo fiscal; y del establecimiento del Comité de seguimiento de empleos para llevar a cabo la coordinación de los mismos. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para alcanzar los objetivos del Convenio, incluidas aquellas adoptadas en regiones con altas tasas de desempleo, y en especial, sobre la manera en que éstas propiciaron que las personas beneficiadas (en particular mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) obtuvieran empleo pleno, productivo y duradero. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe una copia de los reportes de ejecución de tales medidas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo y desempleo, desglosadas por sexo, edad y región.***

Coordinación de las medidas de enseñanza y formación técnica y profesional con la política de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara información sobre la coordinación de las políticas y programas de educación y de formación profesional con la política de empleo. Al respecto, el Gobierno recuerda en su memoria que el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (*ChileValora*) está conformado por Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL) de composición tripartita que convocan a los sectores más representativos de la economía a participar en el desarrollo de proyectos de competencias. El Gobierno señala que dependiendo de las características del sector productivo y su conformación, hay OSCL que incorporan representantes del sector rural y la economía informal (agricultura familiar campesina, recicladores y trabajadores domésticos). Con base en el trabajo de los OSCL, elaboró el Catálogo de competencias laborales, que contiene todos los perfiles ocupacionales vigentes, organizados en sectores y subsectores de la economía, y en virtud del cual las personas son evaluadas y certificadas. El Catálogo de competencias laborales se pone a disposición del sistema de capacitación y de las instituciones educacionales a fin de incorporar las competencias al diseño de los planes de capacitación, permitir el cierre de brechas entre la oferta y la demanda de mano de obra, relacionar las competencias con los diferentes programas de estudio y niveles de educación, y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas en los procesos formales de educación. El Gobierno indica también que, como fruto del diálogo tripartito sectorial, a partir de 2015 se ha ido avanzando paulatinamente en la elaboración de rutas formativo-laborales que respondan a la realidad y necesidades de los distintos sectores productivos. Por otro lado, el Gobierno indica que el Observatorio Nacional de Empleo, que forma parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tiene por misión identificar las brechas existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo y anticipar las posibles brechas futuras. En particular, el objetivo del observatorio es mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la productividad del país, a través de la difusión de información que apoye la pertinencia de la formación y el vínculo entre vacantes y solicitantes de empleo. El observatorio nacional está conformado por una oficina central y una red de 15 observatorios regionales, que cuentan cada uno de ellos con un consejo asesor formado por representantes del Gobierno, de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y de académicos. El Gobierno se refiere además al Programa formación en oficios que otorga capacitación a personas en situaciones de vulnerabilidad y les concede un subsidio por cada día asistido a la capacitación; y al Programa formación en el puesto de trabajo que ofrece incentivos a las empresas que contratan a personas desocupadas, desempleadas o que buscan un trabajo por primera vez con miras a que desarrollen competencias en un oficio gracias a la formación en el puesto de trabajo y a un bono de capacitación. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con los interlocutores sociales y los representantes de los diferentes sectores, incluyendo representantes del sector rural y de la economía informal, para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo, y sobre los resultados de la aplicación de dichas medidas.***

Microempresas y pequeñas empresas (MYPE). La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la implementación del Bono empresa y negocio que tiene como objetivo elevar la competitividad y productividad de las MYPE. El programa otorga un certificado a los dueños o gestores de MYPE para que puedan acceder a un curso de formación con miras a mejorar su capacitación en áreas que promuevan su competitividad y productividad. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las iniciativas adoptadas o previstas en apoyo a las microempresas y pequeñas empresas así como sobre su aplicación en la práctica.**

Artículo 3. Consulta con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con **interés** de la constitución el 8 de mayo de 2017 del Consejo Superior Laboral, órgano de carácter tripartito y consultivo. Entre sus funciones permanentes se encuentran: i) elaborar, analizar y discutir propuestas y recomendaciones de política pública en materia de relaciones laborales y mercado de trabajo; ii) proponer iniciativas destinadas a incentivar la creación de empleos, aumentar la productividad y elevar la participación laboral de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y otros grupos de trabajadores en situación de vulnerabilidad, mejorando su empleabilidad, y iii) efectuar, por sí mismo o a través de terceros, estudios o investigaciones de diagnóstico sobre el estado de las relaciones laborales y el funcionamiento del mercado de trabajo en el país. La Comisión toma nota igualmente de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el contenido de las diversas reuniones del consejo que han tenido lugar hasta la fecha. El Gobierno indica, por ejemplo, que en su segunda sesión, los miembros del consejo analizaron la información disponible sobre la implementación de la reforma laboral, particularmente los indicadores del mercado laboral definidos a partir de los datos que se registran en la Dirección del Trabajo. El Gobierno se refiere además a la implementación del Programa mesas de diálogo social en el marco de la unidad de diálogo social del Ministerio de Trabajo. Este programa tiene como finalidad el establecimiento de mesas de diálogo social con miras a promover la generación de espacios de diálogo social a nivel nacional y regional en materias que son de alta prioridad, tales como las políticas de empleo. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la manera en que los interlocutores sociales participan en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas de empleo en el seno del Consejo Superior Laboral y de las mesas de diálogo social constituidas en materia de políticas de empleo.**

Chipre

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Tendencias laborales. En su comentario anterior, la Comisión constató el alarmante deterioro de la situación del empleo en Chipre y pidió al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para encarar la situación. La Comisión toma nota de las medidas que el Gobierno ha aplicado en materia de empleo desde 2014 para abordar el desempleo, incluidos los programas de empleo subvencionado destinados a crear nuevos puestos de trabajo, y los programas para adquirir formación y experiencia laboral dirigidos a fomentar la conservación del empleo y mejorar la empleabilidad. El Gobierno ha indicado que las políticas y medidas a favor del empleo, así como las reformas del mercado de trabajo, que se diseñan y se revisan periódicamente, tienen en cuenta los objetivos del Gobierno y el programa de reforma nacional, que constituye el canal básico por el que se rige la aplicación de la Estrategia «Europa 2020» en el país. El Gobierno ha añadido que se ha encargado a expertos externos que lleven a cabo evaluaciones de la eficacia de algunas de las medidas adoptadas. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo, tras un aumento considerable entre 2011 y 2014, empezó a descender en 2015, cuando comenzaron a atenuarse los efectos de la crisis económica mundial. Según los datos disponibles de la encuesta de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo se redujo, pasando del 16,1 por ciento en 2014 al 13 por ciento en 2016. Con arreglo a los datos más recientes de ILOSTAT, la tasa de desempleo siguió descendiendo, alcanzando el 11,1 por ciento en 2017. La tasa de empleo aumentó durante el mismo período, del 67,6 por ciento en 2014 al 68,8 por ciento en 2016. Además, conforme al informe de la Comisión Europea sobre Chipre 2018, el índice de empleo continuó aumentando, alcanzando el 71 por ciento en 2017. **La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre la forma en que define y examina regularmente las medidas y políticas activas relativas al mercado de trabajo, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr el objetivo del pleno empleo, productivo y libremente elegido. Además, pide al Gobierno que incluya información sobre las medidas adoptadas o previstas para mejorar la situación del empleo en el país. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, relativa a las tendencias del mercado de trabajo, en concreto, el empleo, el desempleo y el desempleo visible.**

Categorías específicas de trabajadores. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo relativo a las medidas en materia de empleo dirigidas específicamente a grupos concretos de personas expuestas a déficits de trabajo decente. A este respecto, el Gobierno está aplicando una serie de programas que ofrecen incentivos para alentar a las empresas del sector privado a emplear a miembros de estos grupos específicos, incluidos los desempleados de larga duración, los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, los que padecen enfermedades crónicas y las personas con discapacidades. La Comisión constata que el 60 por ciento de las personas que participaron en el «programa de incentivos para contratar a individuos desfavorecidos» seguían empleadas seis meses después de que hubiese finalizado el programa. **La Comisión solicita al Gobierno que siga aportando información detallada y actualizada, e incluyendo datos**

estadísticos desglosados por edad y sexo, sobre la naturaleza y las repercusiones de las medidas proactivas relativas al mercado de trabajo aplicadas para mejorar la empleabilidad y fomentar el empleo de categorías específicas de trabajadores desfavorecidos, como por ejemplo los desempleados de larga duración, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las que padecen enfermedades crónicas y las personas con discapacidades, en términos de creación de oportunidades de empleo provechosas y duraderas.

Empleo de las mujeres. La Comisión toma nota de que la tasa de empleo en el caso de las mujeres es notablemente más baja que la de los hombres. Además, los índices de desempleo femeninos siguen siendo ligeramente más elevados que los de los hombres. Por ejemplo, en 2016 la tasa de empleo se situó en un 64,1 por ciento en el caso de las mujeres, frente a un 73,9 por ciento en el de los hombres. Según ILOSTAT, la tasa de desempleo de las mujeres alcanzó en 2017 el 11,3 por ciento, frente al 10,9 por ciento en el caso de los hombres. En cuanto a las medidas adoptadas para aumentar el empleo entre las mujeres, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha indicado que en las evaluaciones realizadas por expertos exteriores se registró que el 97 por ciento de las mujeres que participaron en un programa de mejora de la empleabilidad de mujeres económicamente inactivas permanecían en el mercado de trabajo seis meses después de haber participado en dicho programa. Al tiempo que toma nota de las medidas que ha tomado el Gobierno para fomentar el empleo de categorías específicas de trabajadores, la Comisión recuerda que en su Estudio General de 1998, Readaptación profesional y empleo de personas inválidas, destacaba los obstáculos que dificultan el empleo de las mujeres discapacitadas. Al tiempo que se refiere al Informe global de la OIT de 2003, «La hora de la igualdad en el trabajo», en el que se señala que «[l]a interacción entre [...] identidades puede entrañar formas de exclusión y desventajas singulares para quienes reúnen múltiples identidades», la Comisión constata que las mujeres que pertenecen a grupos desfavorecidos se enfrentan a una doble discriminación. **La Comisión solicita al Gobierno que aporte información sobre la naturaleza y las repercusiones de las medidas adoptadas con vistas a fomentar el empleo de las mujeres, incluyendo aquellas mujeres económicamente inactivas, especialmente de las que pertenecen a grupos desfavorecidos, promoviendo su acceso al empleo decente y estable en todos los niveles y todos los sectores de la economía.**

Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que el índice de desempleo de los jóvenes descendió, pasando del 36 por ciento en 2014 al 29,1 por ciento en 2016, y que según ILOSTAT siguió bajando, hasta alcanzar el 24,7 por ciento en 2017. Al mismo tiempo, el índice de empleo de los jóvenes aumentó del 25,8 por ciento en 2014 al 26,1 por ciento en 2016. El Gobierno se ha referido a una serie de programas que ofrecen incentivos para alentar a las empresas del sector privado a emplear a jóvenes. La Comisión constata la existencia de programas de subvención a la formación dirigidos a colocar a jóvenes desempleados que han finalizado su educación secundaria o superior para permitirles adquirir experiencia profesional, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitarles la incorporación al mercado de trabajo. Según las evaluaciones citadas en la memoria del Gobierno, estos programas de colocación mejoraron notablemente la empleabilidad de los jóvenes, dado que se contrató a la mayor parte de los participantes una vez finalizado el programa y que siguieron trabajando en la misma empresa u organización que los había empleado durante éste. **La Comisión pide al Gobierno que aporte información actualizada sobre las medidas adoptadas para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes y las repercusiones de dichas medidas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga aportando información estadística sobre las tendencias del empleo de los jóvenes, desglosada por sexo y edad.**

Políticas y programas educativos y de formación. La Comisión observa que desde 2014 se han aplicado medidas de formación, como programas de formación acelerada, programas de subvención para la formación profesional vinculada al empleo, así como planes de formación para desempleados de larga duración, jóvenes y personas con discapacidades. Asimismo, la Comisión constata la existencia de programas de subvención para la colocación y la formación de personas desempleadas con objeto de prestar cuidados a las personas que perciben unos ingresos mínimos garantizados y a las personas con paraplejía y tetraplejía. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la naturaleza y las repercusiones de las medidas adoptadas para ofrecer y promover la educación y la formación, incluidos los sistemas de colocación para graduados, y acerca de la relación entre éstas y las posibles oportunidades de empleo.**

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno ha indicado que las consultas con los interlocutores sociales y otras partes interesadas acerca de la formulación y la aplicación de medidas a favor del empleo tienen lugar en órganos de diálogo social tripartito que funcionan bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Junta Consultiva del Trabajo es el principal órgano tripartito; sin embargo, la Comisión toma nota de que hay cuestiones del ámbito de las políticas de empleo que se debaten en órganos de diálogo social tripartito y que hay cuestiones específicas que también se debaten en comités técnicos tripartitos *ad hoc*. **La Comisión solicita al Gobierno que ofrezca información más detallada sobre la manera en que se tienen en cuenta la experiencia y las opiniones de los interlocutores sociales al formular y aplicar las medidas a favor del empleo. También se pide al Gobierno que indique si se han celebrado consultas con representantes de las personas afectadas por las medidas, como los jóvenes, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidades, en cuanto a la formulación y aplicación de políticas y programas activos de fomento del empleo, como contempla el Convenio.**

Costa Rica

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) recibidas el 31 de agosto de 2017. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), recibidas el 1.º de septiembre y el 23 de septiembre de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las respuestas del Gobierno a las observaciones de la CCTD, incluidas en su memoria. **La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones respecto a las observaciones formuladas por la CTRN y la OIE.**

Artículo 1 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los progresos realizados por la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) para alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión toma nota de la detallada información incluida en el resumen del informe técnico anual del proyecto de apoyo a la ENDEP, proporcionado por el Gobierno. Según el citado informe, durante 2016 se introdujeron mejoras con respecto a: i) la capacidad institucional y de gestión para ejecutar eficientemente la señalada estrategia a través de, entre otras medidas, la ampliación del Directorio Nacional de Organizaciones de Economía Social Solidaria y la generación de espacios de coordinación y seguimiento con las instituciones vinculadas a la ejecución de la ENDEP; ii) el fortalecimiento del diálogo social, incluyendo el establecimiento del marco preparatorio para la creación de un espacio de diálogo tripartito nacional para el tránsito de la economía informal; iii) el diseño y la implementación de políticas específicas para mejorar los programas de formación profesional y de inserción laboral de la ENDEP; iv) el asesoramiento técnico al Consejo Económico Presidencial en relación con la definición de la política nacional de transformación productiva y el desarrollo de una agenda de investigación sobre el nexo entre la política macroeconómica y el empleo, y v) las condiciones de inserción de grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres y trabajadoras domésticas) con la finalidad de salvaguardar sus derechos laborales. La Comisión toma nota también de que, en sus observaciones, la CTRN sostiene que los derechos laborales de los trabajadores no se encuentran garantizados en la práctica, en particular el pago del salario mínimo, el aguinaldo y las horas extras. La CTRN destaca que la desigualdad social y la informalidad han aumentado en las últimas décadas. Asimismo, la CTRN se refiere a la elaboración de un proyecto de ley de reforma fiscal, en el marco del cual se prevé la desregulación y flexibilización de los derechos laborales de los trabajadores públicos. **La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio, incluidas aquellas adoptadas en el marco de la ENDEP. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la adopción del proyecto de ley de reforma fiscal, y que proporcione una copia de la misma una vez ésta sea adoptada.**

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales, en particular con quienes trabajan en el sector rural y en la economía informal, para obtener el apoyo necesario para la implementación de la política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la convocatoria en 2017 de una mesa tripartita para la adopción de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), la cual contó con la participación de las principales organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como de instituciones públicas. El Gobierno añade que, en el marco de la mesa de diálogo, se logró alcanzar consenso respecto a la necesidad de definir acciones con miras a, entre otros objetivos, la simplificación tributaria y la mejora en el acceso a la formación técnica y a la protección social. En este contexto, se conformaron mesas técnicas tripartitas encargadas de establecer las medidas específicas a adoptar para alcanzar los señalados objetivos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la celebración de consultas con los interlocutores sociales, incluidos aquellos que trabajan en el sector rural y la economía informal, en relación con la implementación de la política de empleo. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada acerca de las consultas realizadas con los representantes de los interlocutores sociales sobre las materias comprendidas por el Convenio, incluyendo a representantes del sector rural y de la economía informal.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)

La Comisión **lamenta** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. Asistencia técnica de la OIT. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que, si bien la estrategia para la elaboración de una política nacional de empleo se inició en abril de 2003 y que se crearon nuevas estructuras, aún no se ha concretado la formulación de un documento de política nacional de empleo. La Comisión toma nota de que el Foro nacional sobre el empleo celebrado en el

2010 puso de manifiesto la necesidad de definir una nueva política de empleo adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y que estará dirigida prioritariamente a la reforma del sistema de formación profesional y la mejora de los servicios de ayuda al empleo. El Gobierno señala que según estimaciones recientes, de una población de 818 159 habitantes en edad de trabajar, la tasa de desempleo es del 48,4 por ciento. El Gobierno indica también que, tras la misión de evaluación de la cooperación técnica realizada por la OIT, en marzo de 2011, reiteró su compromiso de elaborar el Programa de Trabajo Decente de Djibouti. El Gobierno añade que espera recibir la asistencia de la Oficina a esos efectos. ***La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, un elemento clave de la reducción de la pobreza, sea un factor esencial de las políticas macroeconómicas y sociales, así como sobre los progresos realizados en la adopción de una política nacional encaminada a lograr el pleno empleo en el sentido del Convenio.***

Empleo juvenil. El Gobierno indica que en 2012, a pesar de observarse una relativa disminución, el desempleo afectaba muy especialmente a los jóvenes titulados de la enseñanza superior. Además, aunque el país no dispone actualmente de una estrategia establecida para favorecer el empleo juvenil, se pusieron en marcha diversas iniciativas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, promover el espíritu empresarial y proporcionar formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. ***La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre la manera en que las medidas adoptadas han resultado en la creación de oportunidades de empleo productivo y duradero para los jóvenes, así como sobre la colaboración de los interlocutores sociales en su aplicación.***

Artículo 2. Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno comunicó en marzo de 2014 un breve resumen sobre la situación del empleo preparado por el Observatorio Nacional del Empleo y las Calificaciones. Se indica en ese resumen que está aumentando el número de empleos (creación de 30 118 empleos en 2007, 35 393 empleos en 2008 y 37 837 empleos en 2010). ***La Comisión invita al Gobierno a que indique cuáles son las medidas adoptadas para mejorar el sistema de información relativa al mercado de trabajo y a consolidar los mecanismos que permitan vincular dicho sistema con la adopción de decisiones en materia de política de empleo. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique datos estadísticos actualizados y desglosados por edad y sexo así como todo otro dato pertinente en relación con la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y el alcance del desempleo y el subempleo y las tendencias en la materia.***

Artículo 3. Colaboración de los interlocutores sociales. ***La Comisión recuerda la importancia de las consultas requeridas por el Convenio y solicita nuevamente al Gobierno que comunique indicaciones relativas a las medidas adoptadas o previstas para consultar a los representantes de las personas interesadas en relación con las políticas del empleo.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

España

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), recibidas el 27 de julio, y el 11 de agosto de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que apoya las observaciones formuladas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La Comisión también toma nota de las respuestas del Gobierno a las mismas.

Artículo 13 del Convenio. Cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicase la manera en que se revisa el funcionamiento de la cooperación entre el servicio público de empleo y de las agencias privadas de colocación, previa consulta con los interlocutores sociales, en el contexto del «acuerdo marco con agencias de colocación para la colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el marco laboral de personas empleadas», celebrado por los Servicios Públicos de Empleo (SPE) con las agencias de colocación en 2014. La UGT reitera sus observaciones anteriores, indicando que los interlocutores sociales no han participado ni en el diseño, la implementación o el seguimiento del acuerdo marco, ya que su participación en la Comisión de seguimiento del acuerdo marco no está especificada. La UGT denuncia que no se han fijado políticas de empleo relativas a las agencias privadas de colocación previa consulta con los interlocutores sociales, lo que les ha dificultado el ejercicio de las funciones propias de los órganos en que participan: el Sistema Nacional de Empleo (SNE) y el Servicio Público de Empleo (SPE). Sostiene que los interlocutores sociales tampoco han intervenido en el diseño o elaboración de las convocatorias de las agencias privadas de empleo (APE), ni en su seguimiento y evaluación. Asimismo, la UGT afirma que tampoco han participado en la determinación de la partida destinada a la colaboración público-privada en los presupuestos anuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La UGT indica que finalmente, tras repetidas solicitudes, recibió información por parte de la Comisión Ejecutiva Central del SEPE en relación con la formulación del acuerdo marco, su adopción, implementación y prorrogación hasta junio de 2018. En sus observaciones, la CCOO alega el incumplimiento del artículo 13 del Convenio por parte del Gobierno, y reitera sus comentarios anteriores en los que denunció la sistemática falta de diálogo social. En su respuesta a las observaciones de las organizaciones de trabajadores, el Gobierno indica que se informó del acuerdo marco en la reunión del Consejo General del SNE de 24 de julio de 2013. En lo que respecta a las observaciones de la CCOO, el Gobierno añade que, desde 2012, la Unión Europea ha venido formulando recomendaciones a España en el marco de los semestres europeos sobre la necesidad de reforzar la colaboración público-privada de los SPE con las APE para mejorar la atención ofrecida a los demandantes de empleo. El Gobierno indica que con miras a alcanzar dicho objetivo, se ha venido impulsando la actividad de las APE como complemento a las actuaciones de los SPE. Indica además que el Real decreto núm. 1796/2010, de 30 de diciembre, regula las APE como entidades colaboradoras de los SPE, de los que pueden recibir financiación. El Gobierno agrega que, en el seno de la Comisión Ejecutiva Central, se mantuvo informados a los

interlocutores sociales sobre el procedimiento de licitación para la selección de las 80 agencias de colocación, así como sobre otros aspectos del acuerdo marco. La UGT indica que se ha comunicado información escasa a los interlocutores sociales, y que quedan muchas dudas por resolver, tales como el contenido de los contratos privados que firman las APE y las Comunidades Autónomas, los cuales abarcan cuestiones que no se contemplaron en el acuerdo marco ni quedan especificadas en el pliego de condiciones. La UGT señala que los interlocutores sociales desconocen también los objetivos de inserción que deben cumplir las APE, los pagos a las APE, los criterios de selección de las personas desempleadas cuya inserción gestionará las APE, la posibilidad de que las personas desempleadas elijan entre el SPE o las APE, la consideración del tiempo de inserción y si se trata de contratos temporales o a tiempo parcial, la obligación de aceptar empleos considerados como subempleo y las consecuencias de ello sobre la persona desempleada. Por su parte, en sus observaciones, la CEOE y la OIE sostienen que con la actual tasa de desempleo, la ayuda del sector privado es determinante y urgente. Estiman que la puesta en marcha del modelo de colaboración público-privada en la intermediación laboral se ve obstaculizada por trabas administrativas, al percibir en el ámbito público a las APE como competidores en la intermediación. Por ello, se les exige a las APE que inserten a los desempleados mediante un contrato de trabajo de al menos seis meses a tiempo completo en un período de ocho meses. En su respuesta, el Gobierno indica que las APE pueden actuar de forma autónoma pero coordinada con los SPE, y/o como entidades colaboradoras de los mismos, mediante la suscripción de un convenio de colaboración. El Gobierno precisa que a partir de la modificación introducida por el Real decreto-ley núm. 8/2014, de 4 de julio, las APE no necesitan autorización de los SPE, sino que es suficiente la presentación de una declaración responsable al SPE competente con carácter previo a su actuación. Las APE también deben desarrollar sus actividades con arreglo a lo establecido en el convenio de colaboración, suministrando la información que se exige en el mismo y garantizando a los trabajadores y empleadores la gratuidad de sus servicios, los cuales son financiados por los SPE. La Comisión recuerda que el *artículo 13* del Convenio requiere que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, se lleven a cabo consultas previas «con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores», para establecer y revisar periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas. **La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique la manera en que, previa consulta con los interlocutores sociales, se revisa el funcionamiento de la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación en el acuerdo marco de 2014. También solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el estado del acuerdo marco, su contenido, el número de agencias privadas de empleo suscritas, y las condiciones en que éstas desempeñan sus labores al nivel de las Comunidades Autónomas.**

Evolución legislativa. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria sobre los cambios legislativos introducidos en relación con las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal, resultantes de la adopción de la Ley núm. 18/2014, de 15 de octubre, de Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia; y del Real decreto núm. 4/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de las empresas de trabajo temporal. **La Comisión pide al Gobierno que, tomando en cuenta las disposiciones pertinentes de la legislación vigente (ley núm. 18/2014 y el Real decreto núm. 4/2015), proporcione información detallada sobre el impacto de las modificaciones legislativas sobre la actividad de las agencias de empleo privadas en la práctica, particularmente sobre las empresas de trabajo temporal. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre la manera en que se asegura que las agencias privadas de empleo, incluyendo las empresas de trabajo temporal, aplican el principio de no discriminación y brindan servicios a sus clientes que faciliten su acceso a empleos decentes, evitando instancias de subempleo y discrepancias entre la remuneración recibida por trabajadores temporales y la recibida por empleados de la empresa usuaria.**

Decisiones judiciales. La Comisión toma nota con *interés* de la jurisprudencia proporcionada por el Gobierno relativa a las actividades de las agencias privadas de empleo y a los derechos laborales de los trabajadores temporales. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando copias de decisiones judiciales pertinentes a la aplicación de principios relacionados con el Convenio.**

Francia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación General del Trabajo – Fuerza Obrera (CGT-FO), que se recibieron el 20 de octubre de 2017. **Pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.**

Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, en su memoria, el Gobierno indica que a fin de favorecer la creación de empleo se han adoptado y aplicado diversas medidas para reducir los costos laborales. En este contexto, precisa que, desde 2015, la desgravación fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) se ha completado con exenciones de las cotizaciones sociales patronales aplicadas en el marco del Pacto de responsabilidad y solidaridad. De esta manera, la primera parte del pacto instaurado en 2015 reduce las cotizaciones sociales de los empleadores para los salarios inferiores a 1,6 veces el salario mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC) y las cotizaciones sociales de los trabajadores independientes. El Gobierno añade que, en 2016, las pequeñas y medianas empresas (pymes) empezaron a recibir una ayuda a la contratación

de personas poco calificadas a través de «embauche PME (contratación en las pymes)» que consiste en una prima de 500 euros por trimestre por toda nueva contratación de un asalariado a través de un contrato de duración determinada de más de seis meses o un contrato de duración indeterminada remunerado hasta el 1,3 por ciento del SMIC. Señala que este dispositivo, que dejó de aplicarse en 2017, tenía por objetivo dinamizar la contratación. Asimismo, el Gobierno indica que, desde 2015, la creación de empleo en el sector comercial es dinámica y desde el primer trimestre de 2015 se han creado 290 000 empleos. Añade que la prima de contratación para contratos de duración determinada de seis meses como mínimo o para contratos de duración indeterminada podría beneficiar a casi 2 millones de contrataciones, con una creación de 30 000 empleos en 2016 y 45 000 empleos en 2017. La Comisión toma nota de que la lucha contra el desempleo y el trabajo precario ha sido una de las prioridades constantes del Gobierno, que está reforzando la capacidad de las empresas para adaptarse a su entorno y facilitando los contratos de duración indeterminada gracias a una formación de calidad que permite adecuar las competencias de los trabajadores a las necesidades de las empresas, así como a la mejora del sistema de seguro de desempleo. El Gobierno también precisa que, a fin de no penalizar el empleo de las personas con pocas calificaciones, una política de revalorización del salario mínimo completa estas medidas. Indica que en 2015 la tasa de desempleo se redujo en un 0,3 por ciento y en 2016 en un 0,2 por ciento. De esta forma, en el cuarto trimestre de 2016 el desempleo afectaba al 10 por ciento de los trabajadores, con la excepción de Mayotte. Sin embargo, el Gobierno observa que las diferencias entre los individuos que tienen un empleo estable y los que tienen un empleo precario o no tienen empleo están teniendo repercusiones negativas en la economía. La Comisión toma nota de las observaciones de la CGT-FO en las que se indica que se ha producido un deterioro de la situación general del empleo. Añade que, entre 2014 y 2017, el desempleo aumentó un 1,6 por ciento, pasando de 6 284 920 personas desempleadas en diciembre de 2014 a 6 653 790 personas en diciembre de 2016. La CGT-FO precisa que, sumando el desempleo que ponen de relieve las estadísticas y el desempleo más difícil de calcular, en 2015, el 11,5 por ciento de las personas de edades comprendidas entre 16 y 64 años no realizaban actividad alguna y buscaban empleo en el conjunto del territorio. Señala que se ha producido una profunda degradación de la calidad del empleo, caracterizada por un desempleo de larga duración que progresa desde 2008. Así, el 42,6 por ciento de las personas sin empleo declaran que sufren esta situación desde hace un año o más. Asimismo, la CGT-FO observa un fuerte aumento de los solicitantes de empleo a tiempo parcial, con más de 2 105 000 personas en agosto de 2017, mientras que el 89,3 por ciento de los desempleados que se han visto privados de empleo de forma involuntaria buscan un trabajo a tiempo completo. También indica que se ha producido un aumento desmesurado de los contratos de muy corta duración, que desde principios de 2000 han pasado de 1,6 millones a más de 4 millones. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la política activa del mercado del trabajo que se aplica y sobre su impacto. Asimismo, le pide que continúe evaluando las medidas aplicadas, precisando su impacto en la creación de empleo productivo y en la lucha contra el desempleo y el subempleo, y que indique si se ha previsto otro dispositivo a fin de reemplazar la «prima de contratación en las pymes». La Comisión solicita al Gobierno que comunique estadísticas desglosadas por sexo y edad sobre las tendencias en materia de empleo.***

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión indica que la Ley de 5 de marzo de 2014 de Reforma de la Formación Profesional sirve para renovar las normas nacionales y regionales de gobernanza del sistema de formación profesional y permite que el Estado, los interlocutores sociales y los consejos regionales se doten de nuevas herramientas de concertación. De esta forma, a nivel nacional, el consejo nacional del empleo y la formación y la orientación profesional (CNEFOP) ha reemplazado al consejo nacional del empleo y al consejo nacional de la formación profesional durante toda la vida. El Gobierno añade que ese consejo está constituido por el Estado, representado por 12 ministerios, entre los que figuran el Ministerio de Empleo y Formación Profesional y el Ministerio de Educación Nacional, las regiones, los interlocutores sociales representativos a nivel nacional e interprofesional y multiprofesional u otras partes interesadas, así como las cámaras de comercio y los principales operadores. Indica que dicho consejo es una instancia consultiva sobre todos los textos legales y reglamentarios en este ámbito y una instancia de concertación, seguimiento, coordinación y evaluación de las políticas en materia de empleo y de formación profesional inicial y continua y orientación durante toda la vida. Asimismo, el Gobierno señala que a nivel regional es el consejo regional del empleo y la formación y la orientación profesional (CREFOP) el que garantiza la coordinación entre los actores en materia de políticas de orientación y formación profesional y empleo y la coherencia de los programas de formación. Indica que el consejo reúne a representantes del Estado, de las regiones, de los interlocutores sociales y del servicio público del empleo. El Gobierno añade que el consejo favorece la definición y la aplicación de una estrategia regional concertada en materia de orientación profesional, desarrollo de las prácticas remuneradas y formación profesional de los asalariados así como de los solicitantes de empleo, cuyas acciones evalúa. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo otros ejemplos de la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de una política activa destinada a promover el pleno empleo productivo y libremente elegido. Asimismo, pide al Gobierno que indique la manera en que las consultas con los interlocutores sociales realizadas en el marco del CNEFOP y del CREFOP han contribuido a la formulación de políticas de empleo y que informe cómo ha tenido plenamente en cuenta su experiencia y sus opiniones para formular esas políticas.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Grecia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017. **La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios a ese respecto.**

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas sobre políticas de empleo y mercado de trabajo aplicadas en el marco del programa de ajuste. Tendencias del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los altos niveles de desempleo que persisten hoy en Grecia y pidió al Gobierno que informara de las medidas adoptadas para frenar esta situación. La Comisión toma nota de que la GSEE ha venido reiterando su preocupación desde 2010 respecto al hecho de que la imposición de las medidas de austeridad del Gobierno como parte de la aplicación de los programas de ajuste ha conducido a una desreglamentación extensiva y arbitraria del mercado de trabajo en Grecia, lo que ha provocado la vulneración de las disposiciones del Convenio. La GSEE hace hincapié en que no puede realizarse ningún progreso en relación a la aplicación del Convenio, puesto que las disposiciones legislativas que considera que son incompatibles con el Convenio no han sido modificadas o derogadas. Toma nota además de los elevados niveles de desempleo, así como del deterioro de las condiciones de vida de la población griega debido a la recesión económica. La GSEE mantiene que el aumento extraordinario de los índices de desempleo en el país se debe a tres factores: i) el dismantelamiento de la legislación sobre empleo temporal que ha tenido el efecto de disuadir la contratación temporal; ii) la quiebra de empresas y los despidos, y iii) la nueva legislación que ha facilitado los despidos. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la tasa general de desempleo disminuyó desde el 26,5 por ciento en 2014 al 24,9 por ciento en 2015. Según la base de datos de ILOSTAT, la tasa de desempleo general era de 21,5 por ciento en 2017. La Comisión toma nota de que, a pesar de este descenso constante, la tasa de desempleo sigue siendo elevada. Toma nota además de que la tasa de desempleo aumentó durante el mismo período del 49,6 por ciento en 2014 hasta el 51,3 por ciento en 2015. La GSEE observa que Grecia sigue teniendo la tasa de empleo más baja de todos los países de la Unión Europea (UE), teniendo en cuenta que, en 2016, la tasa de empleo se situaba en un 56,2 por ciento, mientras que el promedio en la UE es del 71,1 por ciento. La GSEE mantiene que el Gobierno no ha presentado ningún ejemplo concreto de políticas de creación de empleo y empleo activo, así como tampoco de iniciativas para fomentar que los parados regresen al trabajo. Por otro lado, el Gobierno informa de una serie de novedades legislativas y reformas del mercado de trabajo, en el marco del tercer programa de ajuste económico de Grecia, que empezó el 19 de agosto de 2015 y finalizó el 20 de agosto de 2018. En este sentido, el Gobierno se remite a las recomendaciones formuladas en el Memorando de Entendimiento actualizado sobre condiciones específicas de política económica (mayo de 2013), según el cual durante el período 2014-2020 se ha hecho preciso adoptar medidas para impedir que el desempleo se cronifique, como centrarse en la integración de los desempleados de larga duración, las personas desfavorecidas y quienes tienen mayor necesidad de apoyo a sus ingresos, así como en paliar los desajustes del mercado de trabajo y facilitar la movilidad de los trabajadores en todas las ocupaciones y sectores y el fortalecimiento de la economía social. La Comisión toma nota de que las políticas de empleo activo de las que ha informado el Gobierno consisten principalmente en programas de fomento del empleo aplicados por la Organización Griega de Empleo de Mano de Obra (OAED). La Comisión toma nota de que, para el Ministerio de Trabajo, los programas para la creación de nuevos puestos de trabajo y la adquisición de experiencia laboral constituyen una prioridad fundamental en relación con las políticas de activación de empleo, especialmente a través de los programas de trabajo comunitario centrados en los parados de larga duración, los subsidios a las empresas para fomentar que contraten desempleados, los programas de educación y formación en sectores críticos de la economía griega y los programas de subsidios a los nuevos profesionales independientes. Según el EUROSTAT, la tasa de empleo a tiempo parcial en Grecia registra una tendencia al alza desde 2012, alcanzando el 9,4 por ciento en 2015. Este porcentaje es considerablemente más elevado entre los jóvenes que en la población en general (23,1 por ciento en 2015). La Comisión toma nota de que, en 2015, el riesgo de pobreza para los trabajadores con empleos a tiempo completo era de un 11,6 por ciento, mientras que en el caso de los trabajadores con empleos a tiempo parcial el riesgo se elevaba al 28,2 por ciento. La Comisión toma nota también de que la tasa de desempleo de larga duración sigue siendo elevada, alcanzando el 73,2 por ciento en 2015. Con respecto a las medidas adoptadas para la recopilación de estadísticas y otros datos relativos a la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, la Comisión toma nota con *interés* del establecimiento en 2016 de un mecanismo para determinar las necesidades del mercado de trabajo. **Teniendo en cuenta los elevados niveles de desempleo que persisten en Grecia, la Comisión pide al Gobierno que comunique información más detallada sobre cómo, con arreglo al artículo 2 del Convenio, alcanzar los objetivos de empleo pleno, productivo y libremente elegido, en consulta con los interlocutores sociales. Además, la Comisión pide al Gobierno que incluya información sobre las medidas adoptadas o previstas para abordar la situación de empleo en el país y a que comunique información, incluida información estadística desglosada por sexo y edad, sobre el impacto de las iniciativas de empleo adoptadas dentro de la aplicación de una política de empleo activa, incluido el impacto sobre las medidas adoptadas para promover la integración del desempleo de larga duración en el mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando datos estadísticos desglosados por sexo y edad en relación con la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, incluidas las dimensiones de la economía informal y las tendencias de empleo en relación con el empleo, el desempleo y el subempleo visible.**

Trabajadores vulnerables a las deficiencias en materia de trabajo decente. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en relación con las medidas específicas de empleo destinadas a grupos de personas vulnerables a las deficiencias en materia de trabajo decente. En este sentido, el Gobierno está aplicando programas de subsidio para fomentar la contratación y la conservación de los puestos de trabajo de las personas desempleadas con discapacidades, antiguos drogodependientes, antiguos reclusos, personas en situación desfavorecida y en situación muy desfavorecida. La Comisión toma nota de que el Gobierno define a las personas en situación desfavorecida como aquellas que durante los últimos seis meses no han estado empleadas durante más de un mes en un trabajo a tiempo completo remunerado con regularidad, los graduados de la enseñanza obligatoria que aún no han concluido sus estudios de secundaria o que no han asistido a ningún programa de formación profesional, las personas de más de 50 años, y el/la cabeza de familia de familias monoparentales; por otra parte las personas en situación muy desfavorecida se definen como los poseedores de una tarjeta válida de desempleo durante un periodo de al menos veinticuatro meses, los jóvenes delincuentes o los jóvenes en situación de riesgo social. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para promover empleo pleno, productivo, libremente escogido y sostenible para personas vulnerables a las deficiencias en materia de trabajo decente.***

Empleo joven. La Comisión toma nota de que las tasas de desempleo joven han disminuido progresivamente, pero siguen siendo sumamente elevadas. Según los datos de la Autoridad Estadística de Grecia (ELSTAT), la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años descendió del 51,9 por ciento en 2015 al 50,9 por ciento en 2016. Según la base de datos de ILOSTAT, la tasa de desempleo juvenil era de 43,6 por ciento en 2017. El Gobierno señala que una de sus prioridades consiste en facilitar el acceso al empleo de los jóvenes hasta 29 años de edad. La Comisión toma nota de que la información comunicada por el Gobierno en relación a una serie de programas de activación de empleo que se han aplicado en el marco de un plan de garantía de empleo juvenil, y que tienen la finalidad de aumentar la empleabilidad de los jóvenes, potenciar su competitividad y facilitar su reintegración al mercado de trabajo. En este sentido, la Comisión toma nota, entre otros, de los programas de formación profesional con vales para la entrada en el mercado de trabajo destinados a los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. La Comisión toma nota asimismo de los programas de subsidios para la adquisición de experiencia laboral y de integración en el empleo de los jóvenes y los programas de formación y acreditación, aplicados en virtud de la Iniciativa de empleo juvenil, establecida en el marco del Plan de garantías de empleo juvenil. El Gobierno señala que el fenómeno de la «fuga de cerebros» se ha convertido en un asunto que suscita cada día más preocupación dado que, según los datos del Banco de Grecia, desde 2008 a 2013, casi 223 000 jóvenes entre 25 y 39 años abandonaron el país de forma permanente en busca de empleos mejor remunerados y de mejores perspectivas sociales y económicas en los mercados de trabajo de otros países. A pesar de que la memoria del Gobierno proporciona información detallada en relación a los problemas señalados y a las acciones previstas, la Comisión toma nota de que, no contiene ninguna información en relación con los resultados de los programas específicos. ***Al tiempo que toma nota de los elevados niveles de desempleo juvenil que persisten en el país, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre los resultados de las medidas adoptadas para subsanar el desempleo juvenil, así como de los problemas con los que ha tropezado. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información estadística sobre las tendencias en el empleo juvenil, desglosadas por género y edad. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a revertir el fenómeno de «fuga de cerebros».***

Los trabajadores de edad. La Comisión toma nota de que los trabajadores de edad se encuentran en situación desfavorecida en comparación con otras categorías de trabajadores, puesto que la tasa de participación en el mercado de trabajo de las personas incluidas en el grupo de edad entre 55 y 64 años es considerablemente más reducida que la tasa de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años. El Gobierno señala que la tasa de desempleo de los trabajadores de edad alcanzó el 34,3 por ciento en 2015. El grupo de mujeres entre 55 y 64 años registra tasas de desempleo aún más elevadas (29,6 por ciento en 2015). El Gobierno se refiere a una serie de medidas adoptadas para promover el empleo de las personas de edad, incluida la disposición del apoyo financiero a los empleadores con el fin de alentarlos a emplear a los trabajadores de edad. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre otras medidas adoptadas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de edad y promover su incorporación en el mercado de trabajo y la conservación de sus puestos, así como el impacto de las mismas.***

Empleo de las mujeres. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo más elevada que la de los hombres. Según la base de datos de ILOSTAT, en 2017, se registró una tasa de desempleo de las mujeres de un 26,1 por ciento, mientras que en el caso de los hombres fue de un 17,8 por ciento; y la tasa de desempleo de mujeres jóvenes alcanzó un 48,2 por ciento mientras que la de los hombres jóvenes fue de un 39,3 por ciento. La Comisión toma nota además de que el empleo a tiempo parcial está más generalizado entre las mujeres (13,1 por ciento en 2015 en comparación con un 6,7 por ciento en el caso de los hombres). El Gobierno hace hincapié en que fortalecer el empleo femenino constituye un eje prioritario de su nuevo Plan nacional de acción para la igualdad de género para 2016-2020. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en relación al proyecto «Apoyo del empleo femenino mediante el fomento de la iniciativa empresarial», con el que se pretenden ofrecer múltiples oportunidades de empleo para las mujeres y ayudarlas a crear sus propias empresas. La Comisión toma nota también del programa de subsidios en apoyo de los nuevos profesionales independientes, especialmente de las mujeres. Recordando que en el informe global de la OIT, de 2003, titulado «La hora de la igualdad en el trabajo», se señala que «la interacción

entre estas identidades puede entrañar formas de exclusión y desventajas singulares para quienes reúnen múltiples identidades», la Comisión observa que las mujeres que pertenecen también a grupos de personas en situación desfavorecida afrontan una doble discriminación. **Tomando nota de las elevadas tasas de desempleo femenino, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la naturaleza y la repercusión de las medidas adoptadas con miras a promover el empleo de las mujeres, en particular de las mujeres que pertenecen a grupos de personas en situación desfavorecida o trabajadoras de edad, como se ha mencionado anteriormente, con el fin de que puedan acceder a un empleo decente y duradero a todos los niveles y en todos los sectores económicos.**

Políticas y programas educativos y de formación. El Gobierno señala que una de sus prioridades fundamentales consiste en el perfeccionamiento y la ampliación de la enseñanza profesional y la formación. La Comisión toma nota de que ha concluido el «Marco nacional estratégico para la actualización de la educación, la formación y el aprendizaje profesionales». El Gobierno menciona que la OAED ha adoptado una serie de medidas en el contexto de la formación profesional, en particular, el establecimiento de 51 escuelas de enseñanza secundaria destinadas a la formación profesional que ofrecen cursos de aprendizaje, cheques de formación para mejorar la pertinencia de la educación terciaria en el mercado de trabajo para las personas desempleadas, cheques de formación y cupones de acceso al mercado de trabajo y de reincorporación al mismo para las personas desempleadas, especialmente los jóvenes. La Comisión toma nota también de que los programas de empleo aplicados en el contexto del programa operativo «Desarrollo de recursos humanos educación y aprendizaje permanente 2014-2020» se centran en la concepción y la aplicación de programas para mejorar el conocimiento y las competencias en materia de recursos humanos especialmente para las personas con escasas calificaciones que desean entrar o reincorporarse al mercado de trabajo. El Gobierno señala que el mecanismo para determinar las necesidades del mercado de trabajo pretende mejorar la articulación entre la educación y la formación y las necesidades del mercado de trabajo. Proporciona información a los organismos responsables de diseñar y aplicar los programas de empleo y formación para que eliminen los desajustes en materia de competencias. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el número de personas que participan en los programas de educación y formación y el impacto de éstos en oportunidades de empleo productivas y duraderas para los jóvenes. La Comisión pide también al Gobierno que suministre información sobre la repercusión del mecanismo para determinar las necesidades del mercado de trabajo sobre la concepción de políticas sobre educación y formación profesional y el desarrollo de recursos humanos.**

Promoción de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Iniciativas empresariales. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las medidas para promover las pymes en el contexto del programa operativo «Competitividad e iniciativas empresariales del marco nacional estratégico de referencia 2007-2013». El Gobierno se refiere a la creación de programas de iniciativa empresarial social y de economía social, la creación de un organismo de coordinación de políticas para el desarrollo de la economía social, así como al establecimiento de un fondo de empresariado y al mecanismo central de apoyo para el desarrollo y la promoción de empresas sociales. El Gobierno señala que el marco necesario para la promoción de la economía social se culminará durante el periodo de programación 2014-2020 y de conformidad con el «Plan estratégico para el desarrollo de la iniciativa empresarial social». **La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para mejorar el entorno empresarial con miras a apoyar el desarrollo de las pymes y crear oportunidades de empleo para las personas desempleadas. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre el marco para la promoción de la economía social cuando este haya sido ultimado. En relación con la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para promover el empleo productivo a través de las cooperativas.**

Modernización de las instituciones del mercado de trabajo. El Gobierno señala que, durante el periodo 2007-2013, la OAED empezó a definir su modelo operativo, con miras a una reforma general del Servicio Público de Empleo. La Comisión toma nota de dicha reforma, entre otros logros, además del funcionamiento de los primeros centros de promoción acelerada del empleo, así como de la creación de los primeros consorcios con los agentes sociales, las empresas de contratación y las grandes empresas para la formación de los solicitantes de empleo. El Gobierno señala que, durante el periodo 2014-2020, está previsto financiar iniciativas relativas a la reorganización de la OAED sobre la base del Plan de acción consensuado con la Unión Europea. El Gobierno añade que, en su próxima memoria, proporcionará más información detallada en relación con la efectividad de la reorganización de las instituciones del mercado de trabajo. **En relación a su solicitud directa de 2016 sobre el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), la Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre la eficacia de la reorganización de sus instituciones del mercado de trabajo.**

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno señala que el mecanismo para determinar las necesidades del mercado de trabajo funciona en consulta constante con los representantes de los organismos de producción y las organizaciones públicas. En este sentido, la Comisión toma nota de que cinco de las instituciones firmantes del Convenio colectivo de trabajo general nacional participan en la comisión de coordinación y en la red operativa de organismos para el mecanismo de determinación de las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que, en el contexto de este mecanismo, los interlocutores sociales llevaron a cabo una encuesta entre empleadores y trabajadores de todo el país con el fin de evaluar los puestos vacantes y la idoneidad de las competencias de la fuerza de trabajo, con miras a determinar los desajustes entre la oferta de competencias y los puestos

disponibles. La GSEE sostiene que los procesos de diálogo tripartito siguen siendo superficiales y no se han restaurado en la práctica y añade que se han emprendido sucesivas intervenciones legislativas sin tener en cuenta el diálogo social. La Comisión toma nota también de que, en noviembre de 2015, todos los interlocutores sociales del país acordaron un documento de política conjunta sobre «Fortalecimiento de la eficacia del diálogo social tripartito», que fue enviado junto con los documentos de política conjunta en materia de «Diálogo social, enseñanza profesional y cuestiones de formación» y el de «Diálogo social y discriminación en el lugar de trabajo» al Ministerio de Trabajo, pero que nunca se tuvieron en cuenta. La GSEE expresa también su preocupación en relación con su exclusión del comité nacional de enseñanza y formación profesional, que fue creado en 2017. La GSEE destaca que los procesos relativos a los programas de asistencia técnica patrocinados por la OIT, especialmente el Programa de trabajo no declarado, donde la presencia de los funcionarios de la OIT y el seguimiento coherente del procedimiento garantizaba la participación de los interlocutores sociales en procedimientos de diálogo social tripartito. ***La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno continúe transmitiendo información sobre la forma en la que tienen lugar las consultas a las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores y a otras partes interesadas en relación con la formulación y la aplicación de las políticas activas de empleo, así como la forma en la que se garantiza su apoyo en el desarrollo y la aplicación de estas políticas.***

Libia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión recuerda la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas, con ocasión de la 107.ª reunión de la Conferencia, celebrada en mayo y junio de 2018, en lo relativo a la aplicación del Convenio. Al tiempo que reconoció la complejidad de la situación reinante en el país y la existencia de un conflicto armado, la Comisión de Aplicación de Normas destacó la repercusión y las consecuencias de los conflictos en la pobreza y el desarrollo, el trabajo decente y las empresas sostenibles, y valoró la importancia del empleo y el trabajo decente para fomentar la paz, permitir la recuperación y potenciar la resiliencia. Tras la presentación que realizó el Gobierno y la discusión, la Comisión solicitó a éste que proporcionase datos estadísticos sobre el mercado de trabajo, desglosados por sexo y edad; información sobre la estrategia del mercado de trabajo y la manera en que se prevé alcanzar los objetivos relativos al empleo; información sobre los avances realizados al compilar y analizar datos sobre el mercado de trabajo, e información acerca de las medidas para fomentar la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como medidas destinadas a aumentar la participación en el mercado de trabajo de personas en situación de vulnerabilidad. La Comisión de Aplicación de Normas instó al Gobierno a presentar una memoria detallada a la Comisión de Expertos en su reunión de noviembre de 2018. Asimismo, solicitó encarecidamente al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para adoptar y ejecutar sin demora una política activa dirigida a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión de Aplicación de Normas exhortó a la OIT, la comunidad internacional y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a que contribuyeran a reforzar la administración del trabajo en Libia de modo que el pleno empleo, productivo y libremente elegido se hiciera realidad lo antes posible.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión acoge con beneplácito la información proporcionada en la memoria del Gobierno. En cuanto a la estrategia nacional del mercado de trabajo y los medios para lograr los objetivos del Convenio, el Gobierno indica que la Estrategia nacional de Libia para el desarrollo humano y el empoderamiento para 2013-2014 (la Estrategia) se centra en: impartir formación transformadora a los licenciados cuyas calificaciones no cumplen los requisitos del mercado de trabajo; fomentar el empleo por cuenta propia a través de la creación de pymes, y establecer una base de datos completa sobre recursos humanos y empleo con el fin de determinar los requisitos en materia de recursos humanos. En la Estrategia también se especifican seis objetivos estratégicos principales en relación con la formación y la fuerza de trabajo, a saber: aumentar la tasa de empleo pleno y decente para todos los que pueden trabajar; afrontar los problemas del desempleo estacional y el subempleo, y asegurar el cumplimiento de la Ley sobre la Seguridad Social para evitar el comportamiento delictivo que puede derivarse de una interrupción de los ingresos; reforzar la orientación profesional para quienes se incorporan al mercado de trabajo, y aumentar la participación del sector privado en los ámbitos de la formación profesional y técnica; incrementar el número de seminarios y estudios que abordan los recursos humanos y permiten la participación en ellos tanto en el país como en el extranjero, y revisar las políticas, actividades y procedimientos de contratación, así como elaborar una legislación para responder a la globalización; fomentar el empoderamiento y la creación de capacidad de las mujeres; cambiar los estereotipos relativos al trabajo de las mujeres; reestructurar el mercado de trabajo para responder a los requisitos de la era de la globalización y la tecnología de la información, y establecer métodos y mecanismos de formación y de readaptación profesional y técnica que respondan a la introducción de métodos avanzados en este ámbito, entre otras modalidades, en la formación continua a distancia y la formación transformadora. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los avances realizados en la aplicación de la***

Estrategia nacional de Libia para el desarrollo humano y el empoderamiento para 2013-2014 y acerca de su repercusión en el fomento de oportunidades de pleno empleo, productivo, libremente elegido y duradero, como se contempla en el artículo 1 del Convenio.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información del mercado de trabajo. El Gobierno señala que el centro de documentación e información del Ministerio de Trabajo y Readaptación instauró un sistema para recabar datos sobre la fuerza de trabajo en los sectores público y privado, así como sobre solicitantes de empleo. Según la memoria, el número total de personas empleadas tanto en el sector público como en el privado es de 1 827 692, de las cuales 738 608 son mujeres y 1 089 084 son hombres. Los datos también indican que 170 643 personas de entre la población activa pertenecen a la franja de edad de los 18 a los 25 años y 1 657 049 tienen más de 25 años. Asimismo, se señala que, según los datos ajustados, el número de personas que buscaban trabajo en 2017 alcanzó un total de 205 000. No obstante, la Comisión constata que el Gobierno no proporciona información alguna relativa al año al que corresponde esta información. El Gobierno indica que los centros del Ministerio y las instituciones afiliadas a éste (como el Instituto Libio-Coreano afiliado al Ministerio de Trabajo) imparten formación a solicitantes de empleo registrados y licenciados en diversos ámbitos. Añade que, gracias a esta formación, varios alumnos han encontrado empleo en la *National Oil Corporation* o en otras empresas del sector privado. Además, el Gobierno indica que se ha puesto en práctica el proyecto de encuesta polivalente de Libia para 2017-2018 y que sus resultados servirán para orientar la elaboración de una política del empleo, en colaboración con los interlocutores sociales. Añade que a mediados de agosto de 2018, un delegación técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó Libia para debatir con el Ministro de Trabajo la creación de una oficina de representación de la OIT en Trípoli, lo cual reforzaría la cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la OIT en la consecución de los objetivos comunes, en especial en lo relativo a: la reestructuración; el Gobierno digital; los archivos y el desarrollo del sector público; la migración ilegal, y los programas de readaptación y formación. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre la repercusión de las medidas adoptadas para mejorar el sistema de información sobre el mercado de trabajo. Asimismo, pide al Gobierno que indique la manera en que se usa la información sobre el mercado de trabajo, en colaboración con los interlocutores sociales, para la formulación, aplicación, evaluación y modificación de las medidas activas del mercado de trabajo. Además, la Comisión solicita al Gobierno que aporte datos estadísticos, desglosados por sexo y edad, relativos al tamaño y la distribución de la fuerza de trabajo, así como al tipo y el alcance del empleo, el desempleo y el subempleo.**

Promoción de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno indica que se instauró el Programa nacional de pequeñas y medianas empresas con vistas a fomentar una cultura de la innovación y crear un entorno propicio para las pymes. En octubre de 2017, el Gobierno de reconciliación nacional inició un programa piloto para financiar las pymes, con el fin de ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes y reducir el desempleo. En el marco del programa, se conceden préstamos financieros a los emprendedores por medio de bancos comerciales con garantías del Fondo de garantías para préstamos. Por otro lado, se han de establecer viveros de empresas en todo el país para apoyar los proyectos, impartir formación a los encargados de los mismos y ayudarlos a preparar los planes de trabajo. Los bancos comerciales se comprometerán a financiar hasta el 60 por ciento del costo del proyecto, a condición de que los fondos de apoyo cubran el 30 por ciento de su valor total y el beneficiario del proyecto pague el 10 por ciento del costo restante. La Comisión toma nota de que se han establecido diez viveros de empresas en universidades libias con vistas a ofrecer asistencia para que los licenciados, en cooperación con la *Libyan Oil Corporation*, abran centros en los yacimientos, como Jallow y Uppari, para formar a jóvenes y ayudarlos a financiar sus propios proyectos. Además, constata que, en colaboración con organizaciones internacionales como *Expertise France*, se organizaron varios campamentos de formación en la ciudad de Túnez para formar a jóvenes emprendedores y asistirlos a la hora de llevar a la práctica sus proyectos. **La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información detallada y actualizada sobre la repercusión de las medidas adoptadas para crear empleo mediante la promoción de pequeñas y medianas empresas y de las oportunidades empresariales.**

Empleo de las mujeres. El Gobierno indica que el Consejo Presidencial del Gobierno de reconciliación nacional ha otorgado especial importancia al derecho de las mujeres y las personas con necesidades especiales a trabajar, sin olvidar los derechos a la educación, la salud y el desarrollo personal, así como otros derechos relativos al respeto de la identidad religiosa y cultural de la población libia. A este respecto, el Consejo dictó la resolución núm. 210, de 2016, por la que se establece una unidad de apoyo y empoderamiento de las mujeres empleadas en instituciones estatales. Asimismo, la Comisión toma nota de que la ley núm. 2, de 2018, promulgada por el Consejo Presidencial, prevé la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se ratificó el 16 de mayo de 1989. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, y que incluya datos estadísticos desglosados por edad, sexo y sector económico u ocupación, sobre la repercusión de las medidas del mercado de trabajo adoptadas para aumentar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y en particular en puestos directivos y en los que se toman decisiones en todos los sectores de la economía.**

Personas con discapacidad. El Gobierno indica que se ha creado un programa especial para personas con discapacidad, incluidos los jóvenes con discapacidad a causa del conflicto. La Comisión toma nota de que en 2009 el número de personas con discapacidad en Libia era de 70 721, de las cuales 3 879 tenían diplomas de posgrado o universitarios, mientras que 14 525 eran analfabetos y 13 159 eran incapaces de aprender. En este sentido, el Gobierno indica que la Autoridad general de las familias de los mártires, las víctimas de amputaciones y las personas desaparecidas,

en colaboración con el Programa nacional de pequeñas y medianas empresas, ha establecido un programa especial para los emprendedores, denominado «Ademeni» (Apóyame). El programa tiene por objeto mejorar la capacidad de trabajar de las personas con discapacidad y prepararlas para el empleo. Entre otras cosas, el programa se centra en la educación y la formación, por ejemplo, en tecnologías de la información, evaluación de las necesidades, creación de capacidad, apoyo y formación a las organizaciones no gubernamentales y los servicios de empleo, sensibilización de las empresas acerca de las ventajas de emplear a personas con discapacidad, y fomento de la iniciativa empresarial entre las personas con discapacidad que desean crear una empresa privada. La Comisión toma nota de que el Consejo Presidencial ha lanzado la publicación núm. 2, de 2018, para aplicar las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que Libia ratificó el 13 de febrero de 2018. La función del Consejo Presidencial, en este sentido, consiste en fomentar el acceso de las personas con discapacidad a las oportunidades de empleo previstas para ellas en la legislación. En este contexto, el Gobierno indica que los ministerios, las instituciones públicas, las entidades y las empresas están obligados a cumplir la legislación en vigor. Así, la Comisión constata que la ley núm. 3, de 1981, y la ley núm. 5, de 1987 (sobre personas con discapacidad), establecen que debe ofrecerse a las personas con discapacidad «un empleo adecuado» y que las unidades administrativas, las empresas y los establecimientos públicos deben contratar una cierta proporción de personas con discapacidad. El 3 de mayo de 2012, el Ministro de Trabajo y Creación de Capacidad introdujo una cuota del 5 por ciento de personas con discapacidad en los empleos administrativos públicos. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre la repercusión de las medidas activas de empleo adoptadas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad tanto mental como física. Además, pide al Gobierno que aporte datos estadísticos actualizados, desglosados por edad y sexo, en los que se indique el número de personas con discapacidad empleadas en los sectores público y privado.***

Trabajadores migrantes. El Gobierno comunica que los migrantes que se encuentran en una situación irregular son muy reacios a regularizar su situación mediante el registro, por temor a la repatriación y porque desean migrar a Europa atravesando el país, que es uno de los Estados de tránsito del sur del Mediterráneo. La Comisión toma nota de que, en cooperación con los países vecinos, los países de origen y las organizaciones internacionales pertinentes, el Gobierno ha conseguido reducir notablemente la migración irregular, instando a los migrantes a que legalicen su situación en el país para que disfruten de los derechos, garantizados por ley, de optar a un empleo voluntario o a la repatriación voluntaria. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas en lo relativo a los trabajadores migrantes.***

Nigeria

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota con ***interés*** de la adopción de la Política Nacional de Empleo (NEP) revisada el 19 de julio de 2017, que prevé una serie de mejoras al sistema de servicio del empleo. En particular, la Comisión acoge con beneplácito la sección 4.7.6 de la NEP, en el que el Gobierno se compromete a mejorar la compilación, el procesamiento y el análisis de las estadísticas del empleo y otra información relativa al mercado laboral con fines, entre otras cosas, de mejora de la planificación del empleo y del desarrollo social, y con el objetivo de establecer y mantener una información funcional y oportuna sobre las ofertas de empleo, los cambios sectoriales, los desequilibrios geográficos y otras tendencias laborales y de ingresos. La Comisión toma nota asimismo de que, en virtud de la sección 4.7.7 de la NEP, el Gobierno, a través del Ministerio Federal de Trabajo y Empleo (FMLE), va a establecer un mínimo de dos centros de empleo comunitarios (CEC) en las 744 áreas de gobierno del país. Los CEC van a suministrar una amplia gama de servicios de empleo a los solicitantes de empleo en las comunidades rurales y urbanas del país, incluyéndose la formación, las remisiones, la orientación profesional y la información relativa a las ofertas de empleo. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para aplicar las disposiciones de la NEP y su matriz de empleo acompañante, en relación con la estructura y el funcionamiento del servicio del empleo. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información actualizada, incluida la información estadística desglosada por edad y sexo, sobre el número y la ubicación de las oficinas de empleo públicas, incluidos los CEC establecidos en las diferentes zonas del país, el número del nuevo personal contratado, el número de demandas de empleo recibidas, el número de vacantes notificadas y el número de personas colocadas en el empleo por esas oficinas. Se solicita al Gobierno que indique de qué manera el servicio del empleo, en colaboración con otros organismos públicos y privados interesados, garantiza la mejor organización posible del mercado laboral, con miras a alcanzar y mantener el pleno empleo, productivo y libremente elegido.***

Artículos 4 y 5. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los interlocutores sociales, junto con otros grupos de interés, participaron en el examen y la validación de la NEP revisada y su matriz de aplicación acompañante, antes de su adopción por el Consejo Ejecutivo Federal, en julio de 2017. ***La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a las disposiciones del artículo 4, que requiere que se deberán celebrar acuerdos, a través de una o más comisiones***

consultivas nacionales — y, cuando proceda, comisiones regionales y locales —, para la cooperación de los interlocutores sociales en la organización y el funcionamiento del servicio del empleo y el desarrollo de una política relacionada. En este contexto, y refiriéndose una vez más a sus comentarios anteriores, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información sobre las consultas celebradas en la Junta Consultiva Nacional del Trabajo sobre la organización y el funcionamiento de las agencias de colocación, los registros profesionales y ejecutivos, así como sobre el desarrollo y la aplicación de las políticas y los programas de servicio del empleo.

Artículo 6. Organización del servicio del empleo. El Gobierno informa que algunas de las agencias de colocación y los registros profesionales y ejecutivos de Nigeria fueron mejorados inspirándose en las oficinas de empleo. Añade que se mejoraron los servicios prestados por las agencias de colocación y se informatizaron sus servicios, permitiéndoles sustituir el registro manual de los solicitantes de empleo por una plataforma electrónica vinculada con la Agencia Nacional de Colocaciones Informatizada (NELEX), permitiendo que los solicitantes de empleo y los empleadores cumplieran con los servicios en línea y con los servicios de acceso al empleo. *La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada actualizada, incluyendo información estadística sobre el impacto de la reorganización y la reestructuración de los servicios del empleo, con arreglo a la NEP revisada. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información actualizada sobre el funcionamiento de las oficinas de empleo y su contribución a la satisfacción de las necesidades de empleadores y trabajadores, en particular en las regiones del país con altos niveles de desempleo. También se solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información actualizada sobre los progresos realizados en el establecimiento de CEC en las 744 áreas gubernamentales locales del país, como se pide en virtud de la NEP, así como sobre otras medidas adoptadas o previstas para responder a las necesidades de empleadores y trabajadores de todas las regiones geográficas del país.*

Artículo 7. Categorías especiales de solicitantes de empleo. La Comisión acoge con agrado las disposiciones de las secciones 4.7.3 y 4.7.4, de la NEP revisada, en las que el Gobierno se compromete a desarrollar y aplicar una serie de medidas orientadas a garantizar una mayor participación de la mujer en la fuerza del trabajo y la plena empleabilidad de las personas con discapacidad, respectivamente. En relación con el empleo de las mujeres, la Comisión toma nota de que los gobiernos federal y estatal van a desarrollar programas de promoción de empleo por cuenta propia para las mujeres, especialmente en las comunidades rurales, y el Ministerio Federal de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social, junto con ministerios estatales afines y consejos gubernamentales locales, establecerán programas de tutoría y de orientación profesional específicos de género, en las 744 áreas gubernamentales locales (NEP, sección 4.7.3). En relación con el empleo de las personas con discapacidad, la sección 4.7.4 de la NEP dispone, entre otras cosas, que el Gobierno facilitará la aprobación de un proyecto de ley sobre las personas con discapacidad, y establecerá centros de rehabilitación profesional para desarrollar y mejorar las competencias y el potencial de las personas con discapacidad. *La Comisión solicita al Gobierno que comunique información integral actualizada sobre las medidas adoptadas para promover el empleo de las mujeres, especialmente en las comunidades rurales, incluyendo información sobre los servicios de tutoría y de orientación profesional específicos de género que se brindan en las áreas gubernamentales locales, especificando la implicación del servicio del empleo a este respecto. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para dar pleno efecto a las disposiciones de la sección 7.7.4 de la NEP, incluyendo una copia de la ley sobre las personas con discapacidad, en cuanto se haya adoptado. La Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica respecto del alcance de estos objetivos.*

Artículo 8. Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota del enfoque de la sección 4.7.1 de la NEP sobre creación de empleo para los jóvenes, especialmente en el sector agrícola. En particular, el Gobierno contempla proporcionar un empleo temporal para 500 000 graduados anualmente, en las áreas de educación, agricultura, salud y tributación. *Nuevamente en relación con sus comentarios anteriores, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas por el servicio del empleo para ayudar a los jóvenes a asegurarse un empleo conveniente, así como información sobre el impacto de las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Empleo y el Programa Nacional de Erradicación de la Pobreza a este respecto. Se solicita también al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas para aplicar las disposiciones de la NEP a la iniciativa empresarial de los jóvenes — incluyendo la formación y la facilitación de acceso al crédito, al seguro y a otros servicios financieros — y a la adquisición de competencias para los jóvenes desempleados. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre los servicios específicos y las actividades ofrecidas por el servicio del empleo, en relación con el logro de los objetivos establecidos en la sección 4.7.1, de la NEP, de generación de oportunidades de empleo y de promoción de la adquisición de competencias para los jóvenes.*

Artículo 10. Medidas para estimular la utilización máxima del servicio del empleo. El Gobierno indica que se estimula a las agencias de empleo privadas para que anuncien todas las ofertas de empleo en la plataforma NELEX. Además, prevé la adopción de medidas dirigidas a una mayor sensibilización pública de las actividades de las agencias de colocación y de la plataforma NELEX. *La Comisión reitera su solicitud anterior de que el Gobierno comunique información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas por los servicios del empleo, con la cooperación de los interlocutores sociales, para estimular la utilización máxima del servicio del empleo. Se solicita al Gobierno que transmita ejemplos específicos de las actividades realizadas para llegar a la fuerza del trabajo local en varias regiones geográficas del país.*

Artículo 11. Cooperación entre las agencias de colocación públicas y privadas sin fines lucrativos. La Comisión toma nota de las disposiciones de la NEP sobre reglamentación de las actividades de las agencias de empleo privadas (AEP) que funcionan en el país. En particular, el Gobierno, a través del FMLE, se compromete a garantizar una adecuada protección a los trabajadores colocados a través de esas agencias. El Gobierno informa que los talleres anuales de desarrollo de las capacidades llevados a cabo por las AEP, fortalecieron la cooperación existente entre el servicio del empleo y las AEP. Añade que los talleres dieron lugar a un mayor cumplimiento de las AEP de las disposiciones reglamentarias, sensibilizando respecto de los principios del trabajo decente. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar una efectiva cooperación entre el servicio público del empleo y las AEP sin fines de lucro, incluyendo información sobre el contenido y los resultados de los talleres anuales de desarrollo de las capacidades por parte de esas agencias.***

Panamá

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), que fueron recibidas el 31 de agosto de 2018. ***La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.***

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con ***interés*** del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en colaboración con los interlocutores sociales con miras a alcanzar los objetivos establecidos en el Convenio. El Gobierno informa de la aprobación, el 30 de marzo de 2017, del Plan estratégico nacional con visión de Estado «Panamá 2030» gracias a la participación activa de, entre otros actores, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEPC). Dicho plan alinea los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) con el Plan estratégico de gobierno 2015-2019 y las prioridades de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CND). Entre sus objetivos se encuentran el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos así como la promoción de una educación inclusiva y equitativa de calidad. Asimismo, en diciembre de 2016, se firmó un Convenio de Cooperación y asistencia técnica entre la OIT y el Ministerio de Trabajo con el objetivo de implementar las recomendaciones de la alta comisión para el empleo, en particular, fortalecer el sistema de formación técnica en Panamá y garantizar una inserción laboral de calidad y mejor informada, creándose de esta forma un empleo cualificado y sostenible. En este marco, se elaboró el Plan de acción en educación técnica y formación profesional denominado «Programa Prepárate Panamá», con miras a acelerar la ejecución de las acciones necesarias para atacar las causas que explican la creciente brecha de competencias en el mercado laboral del país. El programa está basado en dos ejes de acción (empleo y formación) vinculados entre sí, en los que participan organizaciones de empleadores y de trabajadores. El plan de acción de dicho programa incluye entre sus prioridades el fomento de la articulación de la educación y la formación profesional, el establecimiento de un marco nacional de cualificaciones, así como la generación y divulgación de las tendencias y demandas de competencias del mercado laboral. En este sentido, el Gobierno informa de la creación, con la participación de los interlocutores sociales, de la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral (UNIMEL), con la finalidad de proporcionar información actualizada, oportuna y pertinente acerca de la situación del mercado laboral panameño con miras a contribuir al seguimiento, diseño y mejora de las políticas de empleo. En lo que respecta a las tendencias del mercado laboral, la Comisión observa que, según la encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto de 2016 y de 2017, el número de personas ocupadas de 15 años o más edad aumentó de 1 770 711 a 1 785 849; mientras que la tasa de desocupación aumentó del 5,5 por ciento a 6,1 por ciento. Por su parte, la CONUSI sostiene que la información estadística sobre el mercado de trabajo se encuentra dispersa y no permite evaluar correctamente el impacto de las medidas adoptadas con miras a promocionar el empleo. Al respecto, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información estadística actualizada sobre la situación del empleo en la economía informal. Por último, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en materia de empleo y formación técnica. ***La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio, incluidas aquellas adoptadas en el marco del Plan estratégico nacional con visión de Estado «Panamá 2030» y del Plan de acción en educación técnica y formación profesional denominado «Programa Prepárate Panamá». La Comisión solicita también al Gobierno que continúe proporcionando información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo, tanto en la economía formal como en la informal, desglosadas por sexo y edad. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con las materias cubiertas por el Convenio.***

Perú

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 2 de septiembre de 2018. La Comisión toma nota asimismo de las respuestas del Gobierno a las observaciones del CATP de 2017 y de 2018, recibidas el 9 de febrero y el 30 de octubre de 2018, respectivamente.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación de las políticas de readaptación profesional y empleo para las personas con discapacidad. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la elaboración de la «política nacional de promoción de oportunidades de empleo para la persona con discapacidad» por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), cuya aprobación se prevé, una vez se hayan incorporado a la misma los comentarios y aportaciones formulados por las personas interesadas. Asimismo, se prevé la formulación de una política nacional general en materia de discapacidad que abarque distintos ámbitos, tales como la salud, la educación y el trabajo. La Comisión toma nota también de la implementación del «Programa conjunto sobre empleo y discapacidad con enfoque de género» en el que participan de una parte, la OIT, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), y de otra parte, el MTPE y la Comisión nacional para la integración de personas con discapacidad (CONADIS), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Dicho programa tiene como objetivo mejorar el acceso de personas con discapacidad a oportunidades de empleo decente y sensibilizar sobre las habilidades y el potencial de esta población para contribuir a la vida productiva y el desarrollo de sus comunidades y el país. El programa conjunto contribuirá a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo, fortaleciendo la gestión pública a nivel local y poniendo énfasis en la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. En relación con la adopción de medidas adoptadas con miras a fomentar el cumplimiento de la cuota del 5 por ciento de contratación de personas con discapacidad en el sector público, el Gobierno informa de que se han presentado diversas propuestas de modificaciones del reglamento de la ley núm. 29973 para facilitar el cumplimiento de dicha cuota, pero que éstas aún no han sido aprobadas. Entre las propuestas se encuentra el establecimiento de un procedimiento específico a seguir en el caso del incumplimiento de la cuota de contratación por las autoridades públicas. El Gobierno indica que, según el informe titulado «El reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad en el servicio civil peruano», publicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en octubre 2015, el escaso nivel de educación de la mayoría de las personas con discapacidad (sólo el 12 por ciento completaron estudios de educación superior) les impide cumplir con los perfiles del empleo público ofertados. A este respecto, el Gobierno indica que, en 2017, se creó un grupo de trabajo conformado por SERVIR y CONADIS con la finalidad de articular propuestas de cambio de la política pública para garantizar una real inclusión de las personas con discapacidad e incentivar a las instituciones públicas a buscar en dicha población una oferta profesional y competente. Además, en el marco del «Plan nacional de derechos humanos 2017-2021» se prevé fortalecer la formación, sensibilización y concientización en el enfoque social de derechos de las personas con discapacidad de los servidores civiles. Se prevé también la elaboración de un estudio sobre la implementación de ajustes razonables con el objetivo de promover el acceso de las personas con discapacidad en entidades del gobierno nacional, mediante el cual se busca generar información adecuada y mecanismos concretos para evaluar a los postulantes con discapacidad sin discriminación y respetando el principio de igualdad de oportunidades. Por último, el Gobierno indica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 3 de la ley núm. 29973, la fiscalización del cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad en el sector público le corresponde a SERVIR, en coordinación con CONADIS. En lo que respecta a las empresas del sector privado que cuenten con 50 trabajadores o más, el Gobierno indica que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es el órgano competente de fiscalizar las normas que regulan el cumplimiento de la cuota de contratación del 3 por ciento establecida para el sector privado. El Gobierno informa de que el incumplimiento de la cuota laboral por parte de los empleados privados después de dos años de la entrada en vigencia de la citada ley, da lugar al establecimiento de las sanciones contempladas en la ley núm. 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. El Gobierno indica que, con la finalidad de fomentar el cumplimiento de dicha cuota, la SUNAFIL ha desarrollado una herramienta mediante la cual los empleadores pueden identificar si se encuentran o no entre aquellas empresas que deben cumplir con la cuota. La Comisión toma nota además de la información estadística comunicada por el Gobierno en relación con las inspecciones efectuadas en el sector privado en materia de cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad y el resultado de las mismas. Según el Sistema informático de inspección del trabajo (SIIT), en 2017 se finalizaron 488 órdenes de inspección al respecto. La Comisión toma nota igualmente de la promulgación del decreto núm. 1417 por el que se modifica, entre otras disposiciones, el artículo 50 de la ley núm. 29973. En virtud del citado artículo, se establece la obligación de los empleadores del sector público y privado de realizar ajustes razonables, salvo cuando demuestren que éstos suponen una carga desproporcionada o indebida, de conformidad con los criterios establecidos por el MTPE. Tales ajustes deberán realizarse tanto en el proceso de selección como en el lugar de empleo de las personas con discapacidad. Además, dispone que se prestarán asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota igualmente de la información comunicada por el Gobierno sobre la participación de personas con discapacidad en los diversos programas de empleo implementados, tales como «Jóvenes Productivos», «Impulsa Perú» y «Perú Responsable»,

así como sobre los servicios de intermediación laboral prestados a personas con discapacidad por el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

En sus observaciones, la CATP sostiene que las medidas adoptadas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad son insuficientes debido a la falta de presupuesto de las mismas y de acciones de fiscalización y verificación de la legislación vigente en materia de empleo de personas con discapacidad. Destaca que tan sólo dos de cada tres personas con discapacidad cuentan con nivel educativo o han accedido a la educación primaria, lo que hace aún más difícil su inserción laboral. Por consiguiente, la CATP afirma que es necesaria la implementación de acciones conjuntas con el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar las capacidades de las personas con discapacidad. La CATP indica que mientras que la tasa de actividad general de la población en edad de trabajar es del 74 por ciento, en el caso de las personas con discapacidad ésta es tan sólo del 22 por ciento. Señala que aquellas personas con discapacidad que trabajan, lo hacen en su mayoría en la economía informal, en empleos temporales, con alta rotatividad, precarios y de baja remuneración. Reitera que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad (12,1 por ciento) es cuatro veces más alta que la del total de la población (3,7 por ciento). La CATP sostiene que es necesario analizar los distintos tipos de discapacidad y su impacto en la empleabilidad y simplificar los procesos administrativos requeridos para que las personas con discapacidad puedan acreditar su condición y beneficiarse de las medidas destinadas a promover su empleabilidad y acceso al mercado de trabajo. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información actualizada sobre el estado en el que se encuentra la adopción de propuestas de modificación de la ley núm. 29973 con miras a fomentar el empleo de las personas con discapacidad y el cumplimiento de la cuota de contratación de las mismas establecida para el sector público. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad mental o intelectual, en el mercado abierto de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Asimismo, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione resúmenes de estudios o de evaluaciones sobre las políticas y los programas de rehabilitación y de empleo destinados a las personas con discapacidad, así como otros indicadores actualizados de los resultados alcanzados por las medidas legislativas y las políticas adoptadas a favor de las personas con discapacidad.***

Artículo 5. Consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley núm. 29973, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad son consultadas previamente a la adopción de normas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a discapacidad con la finalidad de que formulen sus observaciones y presenten sus aportaciones. El Gobierno agrega que dicha consulta incluye: el diseño, la formulación, la elaboración y el seguimiento de toda política pública relativa a los derechos de las personas con discapacidad. A título ejemplificativo, el Gobierno se refiere a la participación activa de organizaciones de y para personas con discapacidad en la formulación del «Plan nacional de accesibilidad». El Gobierno informa de que, entre 2016 y 2017, se celebraron consultas y reuniones técnicas con las organizaciones de personas con discapacidad, gremios de empleadores e instituciones públicas y privadas con miras a formular la propuesta de «Política nacional de promoción de oportunidad para el empleo para la persona con discapacidad». Igualmente, en su respuesta a las observaciones de la CATP, el Gobierno informa de que, entre febrero y mayo de 2016, se celebraron consultas tripartitas en el marco de la formulación de políticas públicas de teletrabajo vinculadas a las personas con discapacidad y su acceso al empleo. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre la manera en que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, así como las organizaciones representativas de personas con discapacidad son consultadas sobre la aplicación y revisión periódica de la política nacional para la readaptación profesional de las personas con discapacidad.***

Polonia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ), recibidas el 31 de agosto de 2018, así como de las del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc», recibidas junto con la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a tales observaciones, recibida el 22 de octubre de 2018.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa del empleo y medidas relativas al mercado de trabajo. El Gobierno hace referencia en su memoria a una serie de reformas legislativas, en particular varias enmiendas a la Ley sobre Promoción del Empleo y las Instituciones del Mercado Laboral, de 2004 («ley de 2004»). La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en un esfuerzo permanente por mejorar la situación del mercado de trabajo, que incluyen medidas para promover el empleo por grupos específicos, como los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada y los desempleados de larga duración. La Comisión toma nota de las medidas tomadas de cara a la adopción de la ley de 22 de junio de 2017, por la que se modifican algunas leyes en el marco del programa «A favor de la vida», destinado a facilitar el acceso al empleo de las personas que cuidan de personas con discapacidad. Sin embargo, observa que no consta información acerca de las medidas adoptadas o previstas para fomentar el acceso a la rehabilitación profesional y el

empleo en el mercado regular de trabajo de las propias personas con discapacidad. El Gobierno se refiere también a las mejoras de la base de datos central de ofertas de trabajo realizadas por el Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social. En sus observaciones, si bien Solidarnosc reconoce que se ha progresado en la aplicación de la política destinada a fomentar el empleo pleno y productivo, destaca la necesidad de agilizar y perfeccionar la actuación legislativa. Solidarnosc también sostiene que deberían asignarse más recursos financieros del Fondo de Trabajo a la reactivación profesional de desempleados de larga duración. En su respuesta, el Gobierno comunica que en 2018 se han atribuido 67 997,200 zlotys polacos con cargo al Fondo de Trabajo a la ejecución de programas de reactivación para los desempleados de larga duración. Solidarnosc también se refiere a los abusos relativos al empleo por cuenta propia, los contratos regidos por el derecho civil y los contratos de duración determinada. En su respuesta, el Gobierno indica que el porcentaje de vacantes que debían cubrirse con contratos que se rigen por el derecho civil en 2015-2017 permaneció estable, oscilando entre el 29 y el 34 por ciento del número total de vacantes. Añade que en 2017 se registró un descenso del 3 por ciento en este tipo de contratos. La Comisión toma nota de que los contratos que se rigen por el derecho civil, los cuales no proporcionan ciertos beneficios laborales y ofrecen menos protección en materia de ocupación y salud en el trabajo que los contratos que se rigen por el derecho laboral, pueden constituir una práctica abusiva. Además, Solidarnosc señala que el Parlamento está elaborando una nueva ley sobre el mercado de trabajo para sustituir a la ley de 2004. Expresa su preocupación porque en el proyecto de ley se propone suprimir una serie de medidas de reactivación profesional, en particular la asistencia para establecer el perfil de cada persona desempleada, los «vales» de trabajo, así como el Programa de Reactivación e Integración (PAI), que se dirige a las personas más desfavorecidas del mercado de trabajo. El Gobierno, en su respuesta, indica que estas soluciones se desecharon porque resultaron infructuosas o poco flexibles en la práctica, y que por consiguiente se proponen nuevas medidas de apoyo y creación de empleo en el proyecto de ley sobre el mercado de trabajo. El Gobierno se remite al Fondo Nacional de Formación (NTF), que se creó en 2014, en el marco de la Estrategia «Europa 2020», para respaldar la inversión en recursos humanos. Añade que en 2017 el Servicio Público de Empleo (PES) usó recursos del NTF para ayudar a 5 000 empleadores y 100 000 trabajadores. Solidarnosc reconoce que se ha ampliado el tipo de actividades que cubre el NTF y éste permite ahora una mayor participación de los interlocutores sociales. En respuesta a la solicitud de la Comisión de información relativa a las medidas adoptadas para facilitar la transición del empleo temporal al empleo permanente, el Gobierno indica que la ley de 7 de abril de 2017, por la que se modifica la Ley sobre la Contratación de Trabajadores Temporeros y otras leyes, introdujo modificaciones con el fin de respaldar la transición al empleo permanente imponiendo limitaciones a las modalidades de trabajo temporal, así como sanciones a las agencias de trabajo temporal y las empresas usuarias que no respetan dichos límites. Por otra parte, Solidarnosc expresa su preocupación porque las políticas actuales fomentan la actividad de las agencias de empleo, incluidas las de trabajo temporal, lo cual lleva a menudo a situaciones en las que esas entidades no cuentan con el nivel de organización ni las competencias adecuadas. Por lo tanto, Solidarnosc resalta la importancia de llevar a cabo cambios legislativos para fomentar una regulación, una supervisión y un control estrictos de la actividad de dichas agencias. En su respuesta, el Gobierno señala que la Inspección Nacional del Trabajo supervisa la actividad de las agencias de empleo privadas con arreglo a las condiciones establecidas en la ley de 2004, en la que además se describen dos tipos de certificación que permiten a dichas agencias prestar: a) servicios de colocación y asesoramiento, y b) servicios de trabajo temporal. Asimismo, indica que la protección de los derechos de los trabajadores de las agencias de empleo temporal está contemplada en la ley de 2004 y la Ley sobre las Quejas de los Trabajadores. La Comisión toma nota de que, en el segundo trimestre de 2018, se retiró a tres agencias de trabajo temporal del registro de agencias de empleo por atrasos en el pago de sus primas de seguro social. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre la repercusión de su política nacional de empleo, y en particular de las medidas para fomentar la integración de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo. Con respecto a sus comentarios de 2012, la Comisión pidió también al Gobierno que aportase información sobre la naturaleza y el efecto de las medidas adoptadas o previstas para promover el empleo de las personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos, incluidos los trabajadores de zonas rurales y los de la economía sumergida. Remitiéndose a sus comentarios de 2016 acerca del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), en especial sobre el uso de contratos que se rigen por el derecho civil en lugar de contratos que se rigen por el derecho laboral, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas para regular y supervisar la actividad de las agencias de empleo y evitar que se abuse de los trabajadores en este sentido (artículo 1, 1), b), del Convenio núm. 181). Asimismo, solicita al Gobierno que transmita una copia de la nueva ley sobre el mercado de trabajo una vez que se haya aprobado. Además, en cuanto a la propuesta de suprimir una serie de medidas de reactivación profesional, la Comisión pide al Gobierno que presente información sobre los motivos de dicha supresión y acerca de otras alternativas de reactivación profesional que se adopten o prevean.**

Artículo 2. Tendencias del empleo. El Gobierno comunica que la situación del mercado de trabajo siguió mejorando durante el período en cuestión, lo que atribuye a una situación económica favorable y a la labor de la Oficina de Empleo. La Comisión observa que la tasa de empleo de las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años aumentó del 62,9 por ciento en 2015 al 66,1 por ciento en 2017, mientras que la tasa de desempleo descendió del 7,6 por ciento en 2015 al 5 por ciento en 2017. La tasa de desempleo registrado se redujo, pasando del 9,7 por ciento en 2015 al 6,6 por ciento en 2017. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe aportando información detallada, en especial estadísticas actualizadas, desglosadas por género y edad, sobre la situación y las tendencias del mercado de trabajo en el país, que comprendan datos sobre el empleo, el desempleo y el subempleo visible.**

Trabajadores de edad avanzada. El Gobierno comunica que el porcentaje de personas de más de 45 años entre la población desempleada registrada aumentó del 3 por ciento en 2013 al 36 por ciento en 2017. El Gobierno hace referencia al número de medidas aplicadas por el PES para fomentar el empleo de las personas de edad avanzada, incluida la prestación de apoyo financiero, y alentar a los empleadores a contratar a trabajadores de edad avanzada. Además, la Comisión constata que se ha respaldado a este grupo de trabajadores mediante cursos de formación y prácticas. El Gobierno indica que en 2017 se destinaron 458 752,5 zlotys polacos del Fondo de Trabajo a apoyar la reactivación de personas de más de 50 años, y que las personas de más de 45 años constituían el grupo más numeroso en el que tanto empleadores como trabajadores se beneficiaron de las actividades financiadas con cargo al NTF. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el efecto de las medidas adoptadas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada y promover su integración y permanencia en el mercado de trabajo.***

Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota con *interés* de que la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo ha mejorado. Observa que el índice de desempleo de las personas de entre 15 y 24 años descendió del 20,8 por ciento en 2015 al 14,8 por ciento en 2017, alcanzando un mínimo del 11 por ciento a finales de abril de 2018. Del mismo modo, el índice de empleo de los jóvenes aumentó del 29,1 por ciento en 2017 al 31 por ciento en 2018. El Gobierno se refiere a una serie de medidas de empleo proactivas que se aplicaron para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo, como medidas destinadas a reducir la inadecuación de las capacidades permitiendo a los jóvenes adquirir las calificaciones o la experiencia profesional que se exigen en el mercado de trabajo, por ejemplo, mediante cursos de formación y prácticas. La Comisión toma nota de que con la revisión de la ley de 2004 se introdujeron varias medidas dirigidas a los jóvenes de hasta 30 años, como los «vales» de alojamiento, trabajo, colocación y formación, así como la asistencia financiera a los empleadores que contratan a trabajadores jóvenes, gracias al Fondo de Trabajo y el programa «Trabajo para los jóvenes». En respuesta a una pregunta previa de la Comisión relativa a la relación entre las medidas para aumentar los puestos de trabajo para los jóvenes y las que se centran en mantener a los trabajadores de edad avanzada en el mercado de trabajo, el Gobierno indica que en la ley de 2004 se incluye a ambos grupos en la categoría de desempleados en situación especial en el mercado de trabajo. Por lo tanto, se les concede la prioridad en términos de servicios de empleo y prestaciones. Si bien el Gobierno señala que no se han realizado estudios concretos sobre la medida en que la aplicación de la Garantía Juvenil ha contribuido a mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, indica en su memoria el notable descenso de los índices de desempleo entre los jóvenes. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, que incluya estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre las iniciativas para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, los resultados obtenidos y los obstáculos que impiden cumplir los objetivos de la política del empleo de los jóvenes. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que siga aportando información sobre la medida en que la aplicación de la Garantía Juvenil ha contribuido a mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo.***

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno comunica que el Consejo del Mercado Laboral tripartito, creado en virtud de la ley de 2004, permite a los interlocutores sociales participar en la definición de prioridades en las que gastar los recursos procedentes de las reservas del NTF y, así, decidir que se asignen fondos a la formación de grupos de trabajadores, empresas/sectores o regiones más necesitados. Añade que los interlocutores sociales participaron de forma activa en la evaluación llevada a cabo para mejorar el funcionamiento del NTF y que el proyecto de ley sobre el mercado de trabajo comprende disposiciones cuyo fin es mejorar el NTF y aumentar la participación de los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la asignación de los recursos de dicho Fondo. En sus observaciones, la OPZZ expresa su preocupación por la falta de consultas en el ámbito de la política de migración. Indica que en marzo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un documento titulado «Prioridades socioeconómicas en materia de política de migración», en el que se dispone que la nueva política nacional de migración debe ajustarse a las nuevas prioridades del mercado de trabajo y centrarse en aumentar los recursos laborales con personas de fuera de Polonia en profesiones en las que hay déficits de competencias. La OPZZ indica que no se consultó a los interlocutores sociales en lo relativo a esta política. En su respuesta a las observaciones, el Gobierno señala que el documento contiene sólo los elementos básicos de la política y que aún no se ha concluido el plan de acción, ya que los ministerios encargados de la elaboración del documento aún están examinándolo. ***La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información concreta sobre el modo en que se consulta a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de las otras partes interesadas en relación con las políticas de empleo activas, y se obtiene su apoyo en la labor de formular y ejecutar las citadas políticas. Además, solicita al Gobierno que informe sobre todo avance en lo relativo a la política de migración, y que transmita ejemplares de los textos que se aprueben en la materia.***

Rumania

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1973)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y políticas activas del mercado de trabajo. El Gobierno indica en su memoria que, teniendo en cuenta el hecho de que el número de empleos creados por la economía rumana permanece bajo

debido a la crisis económica y las medidas de ajuste, las categorías de la población más afectadas son las situadas en los extremos del mercado de trabajo, es decir, los jóvenes y los trabajadores de edad. La Comisión toma nota de que la Estrategia Nacional para el Empleo 2014-2020 incluye objetivos específicos y orientaciones sobre las medidas que deberían tomarse, tales como incrementar el empleo de los jóvenes y extender la vida laboral de los trabajadores de edad, mediante la reducción del desempleo de los jóvenes y del número de jóvenes que no están ni empleados, ni en educación o en formación (NINI), y el incremento de la participación de los trabajadores de edad en el mercado de trabajo. Con una tasa de desempleo de los trabajadores de edad del 43,1 por ciento en 2014 (Rumania se sitúa por debajo del promedio de los 28 países de la Unión Europea), la inclusión de esta categoría se ve dificultada por una serie de obstáculos tanto desde la perspectiva de los trabajadores (aptitudes que no corresponden a los requerimientos actuales), como desde la perspectiva de los empleadores (baja productividad de la fuerza de trabajo, resistencia al cambio, adaptabilidad reducida). El Gobierno señala que, sin la participación de los trabajadores de edad, se producirá un déficit de recursos humanos y profesionales. Además, ante la perspectiva de la disminución de la población europea en edad de trabajar, el Gobierno considera que incrementar la tasa de empleo de las mujeres parece ser esencial para el logro del objetivo nacional para el empleo establecido en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Por lo que respecta a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que presenta en 2014 una tasa de empleo de 16,7 puntos porcentuales inferior a la tasa de participación de los hombres, el Gobierno indica que las mujeres se encuentran en una posición vulnerable en el mercado de trabajo de Rumania. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto y la eficacia de las medidas de política del empleo respecto de la creación de empleo productivo, en particular para los trabajadores más vulnerables.**

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que, según cifras de EUROSTAT, la tasa de desempleo juvenil fue del 23,7 por ciento en 2013 y del 24 por ciento en 2014. El Gobierno indica que, en 2012, el Ministerio de Trabajo elaboró el Plan nacional para estimular el empleo juvenil. Las medidas previstas en el plan están centradas en la ejecución de programas de garantía de empleo juvenil, la mejora de la cultura empresarial de los jóvenes y la creación de pequeñas y medianas empresas, así como la adaptación de la educación y la formación profesional a las exigencias del mercado de trabajo. En relación con la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, el Gobierno indica que el presupuesto consolidado del Estado financia programas para mejorar el emprendedurismo de los jóvenes y el establecimiento de microempresas por parte de jóvenes empresarios. En este sentido, se crearon 8 000 nuevos puestos de trabajo y jóvenes empresarios establecieron 464 empresas emergentes. A principios de 2014, el Ministerio de Trabajo, Familia, Protección Social y Personas de Edad inició la aplicación del Plan de garantía para los jóvenes 2014-2015, un documento marco de políticas elaborado por el Ministerio de Trabajo en cooperación con otras partes interesadas. **La Comisión pide al Gobierno que facilite información actualizada sobre el impacto de las medidas tomadas para facilitar la creación de oportunidades de empleo duradero para los jóvenes.**

La minoría romaní. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la población romaní enfrenta problemas específicos generados por el bajo nivel de educación, la escasa participación en el mercado de trabajo, la vasta categoría de personas no ocupadas en actividades económicas, que incluyen personas que se ocupan de las tareas del hogar, jubilados, personas discapacitadas para trabajar, beneficiarios de las prestaciones de asistencia social y desempleados. De conformidad con las recomendaciones de la UE, a principios de 2013 se inició la revisión de la Estrategia gubernamental para la inclusión de los ciudadanos rumanos pertenecientes a la minoría romaní para el período 2012-2020. La Comisión toma nota de los resultados de las medidas aplicadas, destinadas a la minoría romaní de 2012 a 2014. A este respecto, 5 302 personas de la minoría romaní que buscaban trabajo obtuvieron empleo a través de las medidas activas del empleo en 2014 (3 023 contratos de trabajo de duración indeterminada y 2 279 contratos de tiempo determinado). **La Comisión pide al Gobierno que continúe suministrando información acerca de las repercusiones de las medidas adoptadas para promover la inclusión social y aumentar las oportunidades de empleo de la minoría romaní.**

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y la ejecución de políticas. El Gobierno indica que, en el contexto de la reforma de la legislación relativa al diálogo social, se adoptó, en marzo de 2013, la Ley de Organización del Consejo Económico y Social. **La Comisión pide al Gobierno que suministre ejemplos concretos sobre la manera en que los interlocutores sociales son efectivamente consultados y participan en las decisiones sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Sirvase también incluir información sobre las medidas tomadas o previstas para asegurar que esas consultas incluyan a representantes de otros sectores de la población activa especialmente los representantes de la minoría romaní y de las personas que trabajan en el sector rural y en la economía informal.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2004.

Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Asistencia técnica de la OIT. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno contenida en una memoria recibida en junio de 2004 en la que se afirma que la legislación sobre servicios de empleo se encontraba para su discusión en la agenda de la Comisión Consultiva Conjunta. El Gobierno tenía el propósito de dar un nuevo mandato a los servicios de empleo para que se transformaran en dinámicos centros de información sobre el mercado de trabajo. Los nuevos servicios de empleo debían cubrir no sólo los centros urbanos sino también las áreas rurales y asegurar la información, planificación y aplicación de las políticas de empleo en todo el país. El Gobierno también declaró que para alcanzar sus propósitos se requería la asistencia técnica de la OIT. La Comisión acogió con beneplácito que el Gobierno se propusiera también reforzar los servicios de empleo. Además, la Comisión recordó que la Oficina apoyó programas para generar oportunidades de empleo reforzando los servicios de empleo para los jóvenes. **La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de describir en su próxima memoria la manera en que las reformas del servicio del empleo han contribuido a asegurar su función esencial que es la de «lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema de empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1 del Convenio), en cooperación con los interlocutores sociales**

(artículos 4 y 5 del Convenio). En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que facilite las informaciones estadísticas que hayan podido recabarse acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sudán

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión recuerda que, en su reunión de junio de 2017, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, habida cuenta de la persistencia de una elevada tasa de desempleo y subempleo en el país, que afecta principalmente a las personas más vulnerables, mujeres y jóvenes, pidió al Gobierno del Sudán que elaborara una estrategia coherente, en el marco de la política nacional, para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido con la participación de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Asimismo, pidió al Gobierno que continuara recurriendo a la asistencia técnica de la OIT a fin de reforzar las capacidades de los representantes de los empleadores y de los trabajadores.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Formulación de una política de empleo y coordinación con las actividades encaminadas a reducir la pobreza. Consulta con los interlocutores sociales. La Comisión acoge con agrado la información que se proporciona en la memoria del Gobierno sobre los esfuerzos realizados para aplicar las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. El Gobierno indica que, con ese objetivo, se elaboró una hoja de ruta para la aplicación de la política nacional de empleo y, el Gobierno, la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron un acuerdo. Además, la formulación de la política se encomendó a un grupo de trabajo, compuesto por 35 miembros, del Alto Comité Consultivo tripartito para la política nacional del empleo, con arreglo a la decisión núm. 33, de 28 de agosto de 2014, del Ministerio de Trabajo y Reforma Administrativa. El Alto Comité Consultivo realizó su labor a través de comités especializados y grupos de trabajo apoyados por expertos internacionales. El Gobierno añade que, el 15 de noviembre de 2017, el Ato Comité Consultivo aprobó la versión final de la política, que después se presentó al Ministro de Trabajo y Reforma Administrativa que la aprobó el 13 de diciembre de 2017. Posteriormente la política se presentó al Consejo de Ministros y en enero de 2018 fue examinada en una reunión conjunta de los comités técnicos. El 25 de septiembre de 2018, la política se presentó al departamento competente del Consejo de Ministros y después de que dicho departamento realice una revisión final se someterá de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación. La Comisión toma nota de que el proyecto de política tiene por objetivo promover el trabajo productivo y libremente elegido en el que el trabajador pueda utilizar sus capacidades sin discriminación alguna. El Gobierno indica que la visión del futuro del Sudán se basa en su estrategia nacional 2007-2031 y en los planes nacionales quinquenales que se derivan de esta estrategia. Añade que la política también se basa en objetivos de desarrollo sostenible y en estrategias existentes en materia de reducción de la pobreza. El proyecto de política prevé estrategias operativas para: promover un crecimiento que fomente el empleo; mejorar el rendimiento del mercado laboral, y mejorar cualitativa y cuantitativamente el sistema de formación profesional. Asimismo, el Gobierno hace hincapié en que la protección social es prioritaria. *La Comisión acoge con agrado los esfuerzos realizados por el Gobierno para elaborar y aplicar una política nacional de empleo de conformidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Conferencia y lo invita a continuar proporcionando información actualizada y detallada a este respecto, y a transmitir una copia de la política una vez que se haya adoptado. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales en relación con la formulación y aplicación de una política activa del empleo, y que proporcione información sobre las consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas que se adoptarán, tales como las mujeres, los jóvenes, y las personas que trabajan en las zonas rurales y en la economía informal.*

Artículo 2. Recopilación y utilización de datos sobre el mercado de trabajo. Tendencias del empleo. En respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, el Gobierno comunica de nuevo datos de la encuesta sobre la fuerza de trabajo de 2011. *Tomando nota de que el Gobierno indica que la próxima encuesta sobre la fuerza de trabajo finalizará en 2019, una vez más la Comisión le pide que proporcione datos estadísticos actualizados y, en la medida de lo posible, desglosados sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible en la economía formal y la economía informal.*

Uganda

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre los resultados alcanzados y las dificultades encontradas en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la política del empleo establecidos en su Política Nacional del Empleo (NEP). La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la evaluación de la aplicación de la NEP llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico. Según las conclusiones de la evaluación, la agenda general para el desarrollo aborda los retos más acuciantes para el empleo, aunque no se trasladan efectivamente en una estrategia coherente de aplicación debido a una coordinación inadecuada en todos los sectores gubernamentales, la información insuficiente acerca del mercado de trabajo, objetivos políticos divergentes y un enfoque más favorable en las prioridades a corto plazo en detrimento de un progreso sostenible a largo plazo. Además, el Consejo Nacional del Empleo, órgano gubernamental responsable de la coordinación, orientación, racionalización y seguimiento de los esfuerzos destinados a la aplicación de la NEP, aún no se ha establecido. La Comisión toma nota de que en los últimos años se ha registrado un aumento modesto del empleo total y una expansión de las actividades de escasa productividad, tales como la agricultura de subsistencia y el comercio de menor cuantía. En este sentido, la Comisión observa que el porcentaje de trabajadores del sector formal e informal ocupado en actividades agrícolas de baja productividad cifrado en un 69 por ciento en 2009 se incrementó a un 72 por ciento en 2012-2013. Además, según la Oficina de Estadísticas de Uganda (UBOS), la tasa de desempleo con arreglo a la definición recientemente revisada (que incluye a los agricultores de subsistencia entre las personas desempleadas) fue del 9,4 por ciento en 2012-2013, mientras que la tasa de subempleo durante el mismo período fue del 8,9 por ciento, un nivel particularmente frecuente en el sector agrícola. Además, mientras que el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de la pobreza disminuyó de 24,3 por ciento en 2009-2010 a un 19,7 por ciento en 2012-2013, siguen persistiendo disparidades considerables en los niveles de pobreza en todas las regiones, y entre las regiones rurales y urbanas, informándose que los niveles más elevados de pobreza se observan en Uganda septentrional (44 por ciento). La Comisión toma nota de la adopción del segundo Plan Nacional de Desarrollo 2015/2016-2019/2020 (NDPII) en junio de 2015, cuyo principal objetivo es «fortalecer la competitividad del país para la creación sostenible de riqueza, empleo y crecimiento inclusivo». **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados alcanzados y las dificultades encontradas en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la política del empleo establecidos en el segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDPII), incluyendo resultados de los programas establecidos para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, atender las necesidades de la mano de obra y resolver los problemas de desempleo y subempleo. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe facilitando información actualizada incluyendo datos estadísticos desglosados por sector económico, sexo y edad, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, el desempleo y subempleo en todo el país y en las diferentes regiones.**

Promoción del empleo juvenil. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que transmitiera información sobre los resultados de los programas en materia de educación y formación profesionales para los jóvenes, así como sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación de empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que, según el NDPII, los jóvenes constituyen el 21,3 por ciento de la población total y el 57 por ciento de la fuerza de trabajo. Según datos de la UBOS, el número de jóvenes en el empleo aumentó de 63,1 por ciento en 2013 al 64,5 por ciento en 2015; además, la tasa de desempleo de los jóvenes también se incrementó de 9,7 por ciento en 2013 a 14,7 por ciento en 2015. Además, la amplia mayoría de los jóvenes trabajadores (92 por ciento) estaban ocupados en el empleo informal en 2015. La Comisión toma nota de que, en respuesta a las altas tasas de desempleo y pobreza entre los jóvenes, en diciembre de 2016, el Gobierno puso en marcha el programa relativo a los medios de subsistencia de los jóvenes (YLP) auspiciado por el Ministerio de Trabajo, Género y Desarrollo Social (MLGSD) y con la participación de las principales partes interesadas. En el marco del YLP se imparte a los jóvenes formación para mejorar sus competencias profesionales y se les conceden préstamos sin intereses para que puedan trabajar por cuenta propia. En relación con la educación de la fuerza de trabajo, la Comisión toma nota de que la encuesta sobre la transición del ámbito escolar al mundo laboral (SWTS-2015), elaborada por la OIT, muestra que el 68 por ciento de los jóvenes ugandeses que están fuera de la escuela sólo completaron la educación primaria, mientras que únicamente el 3,4 por ciento completó la educación terciaria. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción de la Política Nacional de Educación para Adultos 2014 y del Plan de acción (2011/2012-2015/2016) que tienen la finalidad de orientar la prestación y coordinación de los servicios para la enseñanza de adultos. Además, durante el período 2009-2013, la inscripción en cursos de formación y enseñanza profesional, técnica y administración empresarial (BTJET) aumentó al 73 por ciento (66 por ciento de hombres y 34 por ciento de mujeres). La inscripción en el nivel de educación superior se incrementó al 18 por ciento, con un considerable aumento en la matriculación de las jóvenes. No obstante, según las conclusiones de la SWTS-2015, los niveles de desempleo de los jóvenes con niveles de educación terciaria son superiores (12 por ciento) a la media nacional. A pesar de la adopción del plan estratégico BTJET 2011-2020 en 2011, las dificultades persistentes destacadas por el NDPII en el ámbito de la educación y la formación profesionales incluyen: la falta de competencias adecuadas para apoyar el proceso de producción y expansión cada vez mayor; la escasa preparación para el trabajo de muchos de los jóvenes que dejan la educación formal e ingresan en el mercado de trabajo; la vinculación insuficiente entre empleadores y la enseñanza en el lugar de trabajo y el analfabetismo. **La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la manera en que la aplicación del programa relativo a los medios de subsistencia de los jóvenes (YLP) y otros programas que imparten educación y formación profesionales para los jóvenes han promovido el acceso de los jóvenes a un pleno empleo, productivo y libremente elegido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas previstas o adoptadas para reducir la tasa de desempleo de los jóvenes, especialmente aquéllos con niveles elevados de educación, y reducir el porcentaje de jóvenes en el empleo informal.**

Promoción del empleo de las mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre las medidas adoptadas para mejorar la creación de empleo y aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. El Gobierno informa que, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Uganda (UNHS), de 2012-2013, el 45 por ciento del total de la población empleada estaba formado por mujeres, pero sólo el 39,1 por ciento en un empleo remunerado. El NDPII indica que se han observado mejoras en relación con el número de mujeres en cargos de liderazgo político, y con la paridad de género en la inscripción de varones y niñas a nivel de enseñanza primaria, así como el incremento del número

de mujeres propietarias de tierras. La Comisión también toma nota de que la priorización de la igualdad de género que figura en la Declaración de la Visión de Uganda para 2020 es un importante factor transversal de la transformación socioeconómica y la aplicación del Programa Empresarial para las Mujeres de Uganda (UWEP) auspiciado por el MLGSD, con el objetivo de contribuir a la creación del empleo por cuenta propia y la prosperidad de los hogares a través de actividades tales como la movilización y sensibilización de las comunidades, la formación y el desarrollo de la capacidad, y el acceso al crédito, así como a las tecnologías y mercados apropiados. No obstante, la Comisión toma nota de que a pesar de los progresos realizados, persisten las condiciones determinantes de las disparidades de género en el acceso y control de los recursos productivos tales como la tierra (sólo el 27 por ciento de las tierras registradas son propiedad de mujeres); la participación limitada de las mujeres en el empleo remunerado en el sector no agrícola; y las tasas de analfabetismo superior de la mano de obra femenina en relación con la mano de obra masculina (27,6 por ciento de mujeres y 12,3 por ciento de hombres carecen de educación formal). ***Al recordar los comentarios de la Comisión sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), en relación con la segregación profesional de la mujer en el mercado de trabajo y su contribución a las diferencias salariales por motivos de género, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir la persistencia de la segregación profesional por motivos de sexo (tanto la segregación vertical como la horizontal) y aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo formal.***

Economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar el acceso a la justicia, los derechos de propiedad, los derechos laborales, y los derechos empresariales a los trabajadores y empresas pertenecientes a la economía informal, y que indique la forma en que las iniciativas del Gobierno relativas a las microempresas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal. La Comisión toma nota de la importancia cada vez mayor de la economía informal, que absorbe a cuatro de cada cinco personas que ingresan al mercado de trabajo. Según datos de la SWTS-2015, el 92 por ciento de los jóvenes trabajadores está ocupado en el empleo informal (93 por ciento de mujeres y 91 por ciento de hombres). La tasa de empleo informal en las regiones rurales es superior (94 por ciento) al de las regiones urbanas (87 por ciento). Además, el Gobierno indica que la economía informal se caracteriza por violaciones generalizadas del derecho laboral y déficits de trabajo decente. En particular, los trabajadores del sector informal están excluidos de la protección de la seguridad social y existen importantes carencias en términos de diálogo social. La Comisión toma nota de que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), funcionan de manera informal. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción, en consulta con las partes interesadas, de la política de las MIPYME en junio de 2015, destinada a facilitar a dichas empresas oportunidades para incrementar sus competencias a través de la mejora de las competencias laborales y la certificación, y las alienta a formalizar sus operaciones para disfrutar de una mayor legitimidad mediante una protección oficial. ***Al tomar nota de que una proporción cada vez mayor de la fuerza de trabajo está empleada en la economía informal, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la justicia, los derechos de propiedad, los derechos laborales, y los derechos empresariales a los trabajadores y las empresas pertenecientes a la economía informal (véase Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, párrafo 697). Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique la forma en la que las iniciativas en relación con las micro, pequeñas y medianas empresas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal, especialmente para los jóvenes.***

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el NDPII fue desarrollado en colaboración con las partes interesadas, incluyendo ministerios, gobiernos locales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Además, en el NDPII se hace hincapié en que el Gobierno debería ser totalmente responsable de su aplicación con la participación de otros actores, incluidos, el sector privado, los asociados para el desarrollo, la sociedad civil y otros actores no estatales. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la aplicación del segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDPII).***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 29 de agosto de 2018, así como de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, respectivamente. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 26 de septiembre de 2018. Toma nota también de las respuestas del Gobierno a las observaciones de los interlocutores sociales de 2017. ***La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con las observaciones recibidas en 2018.***

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Medidas para responder a la crisis económica. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que continúa diseñando e implementando un conjunto de medidas, políticas y programas con miras a fortalecer, mejorar e impulsar la mayor protección, inclusión social y el reconocimiento de los derechos sociales de la población venezolana. El Gobierno añade que, en este marco, se presentó el Plan de desarrollo económico y social de la nación 2019-2025, denominado «Plan de la Patria», que incluye entre sus objetivos la inamovilidad laboral, la cual ha sido introducida por diversos decretos, el último de ellos el 28 de diciembre de 2015, en el que se establece la inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras por un lapso de tres años. Por lo tanto, durante dicho período no se podrán realizar despidos sin causa justificada y éstos sólo podrán realizarse con apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral. El Gobierno se refiere asimismo a la implementación de diversas

medidas con la finalidad de promocionar el empleo, tales como la creación de las divisiones de previsión social, unidades operativas que prestan servicios integrales, tales como: asesoría, orientación y articulación para la inclusión, reinserción laboral, el otorgamiento de prestaciones por pérdida involuntaria de empleo y migraciones laborales. A través de estos servicios se atienden a trabajadores y trabajadoras con discapacidad, migrantes laborales, cesantes por pérdida involuntaria del empleo y no dependientes. Además, el Gobierno indica que se ha incrementado de manera sucesiva el salario mínimo con miras a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores. El último incremento salarial realizado durante el período incluido en la memoria, fijaba el salario mínimo en 3 000 000 bolívares fuertes mensuales y comenzó a implementarse en junio de 2018. El Gobierno se refiere también a la implementación de la Ley del Cestaticket Socialista (a través del decreto núm. 3233, publicado en la *Gaceta Oficial Extraordinaria* núm. 6354, de 31 de diciembre de 2017), por la que se ajusta la base de cálculo para el pago del CestaTicket Socialista para los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, a 61 unidades tributarias por día, a razón de 30 días por mes. Asimismo, en virtud del decreto núm. 3393, publicado en la *Gaceta Oficial Extraordinaria* núm. 41388, de 30 de abril de 2018, se incrementó de las unidades tributarias base de cálculo a 580 bolívares. Por último, el Gobierno indica que se mantuvo la política de inclusión al sistema de pensiones y homologación de su pago, con base en el salario mínimo nacional. Al respecto, el Gobierno informa que en abril de 2018 habían 3 780 674 beneficiarios, que representan más del 70 por ciento de la población venezolana mayor de 55 años en el caso de las mujeres y de 60 años en el de los hombres.

La Comisión toma nota igualmente de que las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA denuncian en sus observaciones los altos niveles de informalidad, vulnerabilidad y precariedad del empleo en el país que lo distancian de los objetivos del empleo decente, productivo y de calidad. En este sentido, la CTASI indica que, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), en 2017, el 44 por ciento de los ocupados no tenía ningún tipo de contratación, el 10 por ciento estaba contratado a través de un contrato verbal y el 7 por ciento tenía contratos temporales. Igualmente, sostiene que se ha producido una disminución en el acceso a los beneficios laborales legales. En particular, señalan que en 2017, únicamente el 35,5 por ciento de los trabajadores gozó de vacaciones pagadas, solamente el 31,1 por ciento cotizó en el Instituto Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), el 34 por ciento recibió el bono de alimentación y el 41,5 por ciento reportó obtener utilidades o bonificaciones de fin de año. La CTASI señala que en 2017 había un 2,2 por ciento de subempleo, es decir, trabajadores que laboraban menos de 15 horas a la semana. Además, había un 4,1 por ciento de trabajadores que ganaban menos de un salario mínimo integral pese a trabajar más de 40 horas a la semana. En relación con la remuneración de los trabajadores, la CTASI afirma que hasta septiembre de 2018, antes de que el país entrara en la superinflación, el 82 por ciento de los ocupados percibía ingresos por debajo del mínimo integral. Según la CTASI, el hecho de ir al trabajo resulta más costoso para los trabajadores que los ingresos que se generan, por lo que muchos prefieren abandonar sus trabajos formales para dedicarse a oficios informales (la economía informal aumentó del 30,6 por ciento en 2014 al 37,5 en 2017) o subsistir a través de algún tipo de financiamiento otorgado por el Estado. Por su parte, UNETE, CTV y CGT denuncian las medidas económicas actuales, adoptadas posteriormente al envío de la memoria por el Gobierno, tales como la adopción del nuevo salario mínimo de 1 800 bolívares soberanos en agosto de 2018 y la fijación de manera unilateral del cestaticket alimentario a un 10 por ciento del salario mínimo, lo que vulnera el principio de progresividad establecido en el ordenamiento jurídico y elimina los beneficios contemplados en los convenios colectivos en vigor. La Comisión toma nota también de que la OIE y FEDECAMARAS sostienen una vez más que el Gobierno continúa sin adoptar una política eficaz de fomento del empleo. Asimismo, las organizaciones de empleadores se refieren a información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una inflación de 1 000 000 por ciento para finales de 2018. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las medidas concretas tomadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio.***

Tendencias del mercado laboral. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa de que la tasa de ocupación era del 93 por ciento en el segundo semestre de 2017, y la tasa de desocupación era del 7 por ciento. El Gobierno añade que, si bien, existe una mayor participación de la población masculina (59,8 por ciento), se aprecia un incremento en la ocupación femenina, al pasar de 4 682 402 mujeres ocupadas en 2008 a 5 828 388 al 2017. El Gobierno indica que esta situación está asociada a las políticas y programas desarrollados con miras a incrementar la tasa de ocupación de las mujeres, entre otras, la creación de instituciones que instrumentan dichos programas, así como la capacitación y financiamiento de proyectos socioproduktivos propuestos por mujeres. La Comisión observa que el Gobierno informa del aumento de la tasa de ocupación del 18,6 por ciento en 2016 al 66,1 por ciento en 2017 entre los mayores de 65 años. El Gobierno indica también que la economía informal se redujo de un 52,4 por ciento en 2003 a un 42,87 por ciento en el segundo semestre de 2017. La Comisión toma nota, sin embargo, de que las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT, CODESA y CTASI se refieren a los resultados de la ENCOVI, de acuerdo a los cuales, en 2017, el 58,5 por ciento de la población se encontraba económicamente activa y el 41,5 por ciento inactiva. Señalan que la tasa de desempleo abierto aumentó del 7,4 por ciento en 2016 al 9 por ciento en 2017. Además, UNETE, CTV, CGT y CODESA indican que la pobreza por nivel de ingresos aumentó del 81,8 por ciento en 2016 al 87 por ciento en 2017, mientras que la pobreza extrema pasó del 51,5 por ciento al 61,2 por ciento. Destacan que se sigue evidenciando una profunda desigualdad territorial, ya que mientras que en Caracas (donde vive menos del 20 por ciento de la población) la pobreza multidimensional alcanza al 34 por ciento de los hogares, en las zonas menos pobladas (donde en conjunto viven el 25 por ciento de la población), la pobreza se duplica hasta alcanzar el 74 por ciento. Las centrales de trabajadores denuncian que la información estadística proporcionada por el Gobierno no corresponde con las cifras reales. Por su parte,

la OIE y FEDECAMARAS lamentan que desde abril de 2016 no se publican las cifras oficiales de la fuerza de trabajo que publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE), ni existen mecanismos de rendición de cuentas que proporcionen información acerca de las variables más relevantes de la fuerza de trabajo. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y edad, sobre la situación y las tendencias del mercado laboral en el país. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que continúe enviando información sobre el impacto de las medidas tomadas para dar efecto al Convenio.***

Régimen laboral transitorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase la situación actual en la que se encuentra la aplicación de la resolución núm. 9855, mediante la cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para el reimpulso del sector agroalimentario, que prevé la inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas en otras empresas (empresas requirientes) de dicho sector, distintas a las que generan la relación de trabajo originaria. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la citada resolución se dictó en el marco del decreto por el que se declaraba el estado de excepción y de la emergencia Económica, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que el Estado debe garantizar la soberanía alimentaria. Indica igualmente que la resolución no fue implementada durante el tiempo de su vigencia, por lo que no se llegó a efectuar ningún traslado de trabajadores relacionado con la aplicación de la misma. El Gobierno añade que la resolución tenía una vigencia de 180 días y que nunca se emitió una nueva resolución con miras a prorrogar la misma. El Gobierno concluye que, en consecuencia, la resolución núm. 9855 se encuentra derogada, ya que quedó sin efecto en enero de 2017, al no ser prorrogada. ***La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior sobre el estado de la resolución núm. 9855.***

Empleo juvenil. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el número de jóvenes ocupados, entre 15 y 24 años, aumentó de 565 727 en 2016 a 670 974 en 2017. El Gobierno indica que, a través de las 32 oficinas de los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo (CEET), se desarrolla una política dirigida a garantizar la inclusión integral de los jóvenes en el proceso social del trabajo, tomando en consideración sus capacidades y potencialidades. En 2017, se registraron 6 479 jóvenes en los CEET (el 57 por ciento de los cuales eran hombres y el 43 por ciento mujeres), que posteriormente se incorporaron a cada una de las cadenas productivas que tuviese mayor necesidad de fuerza de trabajo. El Gobierno informa de que el 63 por ciento de los jóvenes registrados en los CEET se encuentran ocupados, el 31 por ciento está desempleado y un 6 por ciento está buscando trabajo por primera vez. La Comisión toma nota también de que el Gobierno se refiere, entre otros, al Programa de atención integral dirigido a la población en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad y jóvenes de entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios, que se encuentran cursando los procesos de prácticas, pasantías, servicio comunitario y/o proyectos de investigación, que son incluidos como voluntarios en los procesos de abordaje de las diferentes entidades de trabajo priorizadas por motores estratégicos. El Gobierno destaca la transformación del Plan chamba juvenil en la Gran misión chamba juvenil mediante el decreto núm. 3485 de 22 de junio de 2018, publicado en la *Gaceta Oficial* núm. 41429 de 28 de junio de 2018. Esta nueva Gran misión está dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años, con el objetivo de incorporarlos a la ocupación laboral y productiva, en áreas orientadas a la satisfacción de necesidades humanas, identificadas a través del instrumento del Carnet de la Patria, en el marco del Movimiento somos Venezuela. En particular, la Gran misión chamba juvenil focaliza su atención en los jóvenes universitarios desocupados, no escolarizados, con cargas familiares o en situación de vulnerabilidad social y madres solteras. El Gobierno indica que a un año de su creación se han registrado 1 100 000 jóvenes en la Misión, se han aprobado 11 647 proyectos socioproductivos que han beneficiado a más de 33 000 jóvenes, y se han incorporado jóvenes chambistas en 2 206 empresas públicas y privadas. Entre sus líneas estratégicas se encuentra la promoción y el fortalecimiento de una nueva cultura para el proceso social del trabajo, la vuelta al campo (producción agropecuaria y agrourbana), la promoción de una cultura de emprendimiento productivo y la integración de programas para la juventud. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno continúa sin proporcionar una evaluación elaborada con la participación de los interlocutores sociales, de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. ***Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que presente una evaluación elaborada con la participación de los interlocutores sociales de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión solicita además al Gobierno que continúe proporcionando información estadística detallada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.***

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas. La Comisión observa que el Gobierno no comunica información al respecto. La Comisión toma nota de que en sus observaciones, la OIE y FEDECAMARAS señalan que, según cifras del INE, entre 1998 y 2006, han desaparecido más del 40 por ciento de las empresas del país. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas.***

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión reiteró su solicitud al Gobierno de que transmitiera información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. Asimismo, la Comisión solicitó una vez más al Gobierno que proporcionase información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información al respecto en su memoria. La Comisión toma nota también de que en sus observaciones las organizaciones de empleadores OIE y FEDECAMARAS denuncian que no se están celebrando consultas o cooperando con los interlocutores sociales para la elaboración de una política de fomento del empleo, conforme a lo requerido por el artículo 3. **Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que transmita información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo, así como sobre el resultado de dichas consultas. Asimismo, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio.**

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 88** (Belice, Guinea-Bissau, Madagascar, Malta, Mongolia); el **Convenio núm. 122** (Antigua y Barbuda, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, República Centroafricana, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, China: Región Administrativa Especial de Macao, Costa Rica, Ecuador, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Francia: Polinesia Francesa, Kirguistán, Líbano, Países Bajos: Aruba, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido: Guernsey, Rumania, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Viet Nam, Yemen); el **Convenio núm. 159** (Bélgica, Côte d'Ivoire, Egipto, Kirguistán, Madagascar, Malawi, Perú, San Marino, Turquía); el **Convenio núm. 181** (Albania, Francia, Francia: Nueva Caledonia, Mongolia, Níger, Serbia).

Orientación y formación profesionales

Guinea

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1978)

Artículo 1 del Convenio. Elaboración y aplicación de las políticas de educación y de formación. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que el Ministerio de Enseñanza Técnica, Formación Profesional, Empleo y Trabajo ha examinado posibles medidas destinadas a valorizar la formación inicial de los docentes. Entre estas medidas, se quiere aumentar el nivel de admisión al primer grado universitario de formación docente y conceder una prima inicial de 150 000 francos guineanos al mes a los alumnos docentes durante los dos años de formación con el objeto de atraer a los mejores candidatos. El Gobierno hace referencia asimismo a la liberalización de iniciativas privadas que han favorecido la proliferación de centros privados, a los que asisten muchos graduados de las Escuelas Universitarias de Formación Docente (ENI). En este sentido, señala que se ha creado una estructura estatal para llevar a cabo el seguimiento, el control y la coordinación de estos centros privados a escala local y nacional. El Gobierno indica que para reforzar la relación entre la formación y el empleo, se ha previsto establecer una estrategia para vincular el examen final con el examen de oposición para acceder a la función pública, de la que se encargaría una comisión interministerial que aúna la función pública, las finanzas, el presupuesto, la educación nacional, la alfabetización y la enseñanza técnica. El Gobierno tiene intención de lanzar una iniciativa dirigida a la formación de los jóvenes a través del proyecto «Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes» (Reforzar las competencias para mejorar la empleabilidad de los jóvenes), en el que las instituciones de formación técnica y profesional, así como las de la enseñanza superior, participan en colaboración con el sector privado en la elaboración de los proyectos de formación en el marco de una asociación público-privada con vistas a favorecer la empleabilidad de los graduados recientes. En el marco de la valorización de la función docente, la Comisión toma nota de la firma del decreto conjunto núm. 2018/1629/MESRS/METFPET/SGG, de 21 de marzo de 2018, relativo a la concesión de diplomas de licencia a los estudiantes que acuden a las instituciones de formación tipo «B». El Gobierno añade que, para hacer frente a la falta de docentes, ha iniciado un proyecto consistente en formar a 2 000 docentes al año con el apoyo del Banco Mundial. Con este fin, se han puesto en práctica dos estrategias de formación innovadoras: una formación de urgencia, que consiste en tres meses en la institución y nueve meses de prácticas, seguidas de otros tres meses en la institución; y una formación regular, que comprende una formación en la institución de nueve meses y nueve meses de prácticas. La Comisión toma nota de que, según el programa sectorial de educación para 2015-2017, el Gobierno ha emprendido numerosas actuaciones para luchar contra las desigualdades de género de las que son víctimas las jóvenes. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas con vistas a poner fin a las desigualdades de género entre mujeres y hombres jóvenes, así como acerca de los resultados alcanzados. Solicita al Gobierno que transmita datos estadísticos desglosados por sexo y edad sobre la repercusión de las medidas puestas en práctica en el marco de las estrategias y los programas de formación mencionados, así como un ejemplar del decreto de 21 de marzo de 2018. La Comisión hace referencia a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y solicita de nuevo al Gobierno que aporte información detallada sobre la manera en que coordina de manera eficaz las políticas y los programas de orientación y formación profesionales y las políticas y los programas de empleo, así como sobre el modo en que fomenta el aprendizaje permanente, como se prevé en el párrafo 3, a), de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195). Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que informe sobre la repercusión de dichas políticas en la creación de empleos decentes y la erradicación de la pobreza, de conformidad con el párrafo 16 de dicha Recomendación. Por último, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la consulta y la coordinación entre los diversos organismos encargados de elaborar políticas y programas de orientación y formación profesionales completos y concertados.**

Artículo 5. Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, durante la puesta en práctica del proyecto de formación de 2 000 docentes al año, los interlocutores sociales, los padres de alumnos, los representantes locales, la comunidad y las ONG tuvieron una gran participación. Añade que ha decidido, en colaboración con los interlocutores sociales, que era preciso revisar este proyecto, que se aplicó de 2011 a 2012. En este sentido, el Gobierno y los interlocutores sociales pusieron en pie a través del programa sectorial de educación un nuevo modelo de formación, con el apoyo institucional del CEPEC-International de Lyon. El Gobierno indica que los interlocutores sociales también participan en la ejecución de ese modelo, en vigor en las ENI, durante los cursos de formación práctica de los alumnos docentes. **La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales y otras partes interesadas en la elaboración y la puesta en práctica de políticas y programas de orientación y formación profesionales. Asimismo, solicita al Gobierno que describa todo procedimiento o mecanismo que se establezca a estos efectos.**

Guyana

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1983)

Artículos 2 y 6 del Convenio. Formulación y aplicación de una política a fin de promover la concesión de licencias pagadas de estudios. La Comisión recuerda que desde hace muchos años ha venido pidiendo al Gobierno que comunicara información sobre las medidas tomadas para dar efecto al Convenio. En su memoria, el Gobierno proporciona resúmenes de decisiones judiciales pertinentes en lo que respecta a la concesión de licencias pagadas de estudios en el sector de los servicios públicos. El Gobierno indica que en el sector privado la formación se imparte sobre la base de las necesidades de las empresas, tales como la planificación de la sucesión, las necesidades en materia de mano de obra y la actualización tecnológica, mientras que en el sector público se imparte a través de becas. Esta formación se otorga sobre la base de las necesidades anticipadas por el Gobierno en materia de mano de obra. Las convocatorias se anuncian en diversos ministerios y organismos así como en los periódicos nacionales. La Comisión recuerda de nuevo que el Convenio dispone que el Gobierno deberá formular y llevar a cabo una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario por etapas, la concesión de licencias pagadas de estudios con fines de formación profesional a todos los niveles de educación general, social o cívica y de educación sindical (*artículo 2*) en consulta con los interlocutores sociales (*artículo 6*). **Tomando nota de que la información contenida en la memoria del Gobierno no indica la manera en que se da efecto al artículo 2 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que indique el contenido y el ámbito de la política para fomentar la concesión de licencias pagadas de estudios con los fines especificados en el artículo 2 del Convenio y que comuniqué todos los textos, a saber las declaraciones, los posicionamientos y otros documentos del Gobierno, a través de los cuales se expresa dicha política. Además, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas a fin de dar efecto a estas disposiciones del Convenio.**

Artículos 5 y 6. Arreglos para facilitar la licencia con fines de educación a través de convenios colectivos. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Comité nacional tripartito, establecido en 1993, ha creado un subcomité en materia de cuestiones de formación y colocación. Añade que no se dispone de información sobre la manera en que las autoridades públicas, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y las instituciones que proporcionan educación o formación han sido consultadas sobre la formulación y la aplicación de la política nacional para promover la concesión de licencias pagadas de estudios con los fines especificados en el Convenio. Además, el Gobierno señala que en el proceso de negociación los interlocutores sociales han previsto algunas medidas en materia de licencias pagadas de estudios en el sector privado. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas para facilitar la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las instituciones que proporcionan educación o formación en la formulación y aplicación de la política nacional para la promoción de la concesión de licencias pagadas de estudios con los fines especificados en el artículo 2 del Convenio.**

Artículo 8. No discriminación. El Gobierno indica que la formación con arreglo al artículo 2, a), incluye la formación dirigida a los aprendices y grupos en situación de vulnerabilidad. A este respecto, la Comisión toma nota de que la Ley sobre Formación Industrial, capítulo 39:01, mencionada en la memoria del Gobierno, regula los aprendizajes, aunque su artículo 3, 1), sólo se refiere a los aprendices varones. El Gobierno no proporciona información en relación con la formación destinada a los grupos en situación vulnerable. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo, sobre las oportunidades de seguir programas de aprendizaje disponibles para los niños y las niñas. Al tiempo que toma nota de que el artículo 3, 1), de la Ley sobre Formación Industrial puede ser interpretado de forma que se excluya a las niñas, la Comisión pide también al Gobierno que considere modificar la ley para extender los aprendizajes tanto a los hombres como a las mujeres aprendices. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar que los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad tienen acceso a las licencias pagadas de estudios.**

Aplicación del Convenio. Parte V del formulario de memoria. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione una valoración general sobre la forma en la que se aplica el Convenio, y que incluya, por ejemplo, extractos de informes, estudios y encuestas así como estadísticas desglosadas por sexo y edad sobre el número de trabajadores a los que se han concedido licencias pagadas de estudios durante el período de memoria.**

República de Moldova

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1, párrafos 1 y 2, del Convenio. Formulación y aplicación de políticas y programas de educación y de formación. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en octubre de 2013, en la que se incluye información

detallada y completa en respuesta a su solicitud directa de 2009. En 2012, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo «Moldova 2020» que incluye entre las prioridades de desarrollo vincular el sistema educativo con las necesidades del mercado de trabajo a fin de potenciar la productividad de los trabajadores e incrementar el número de empleos. El Gobierno indica que, desde 2010, se incluye un módulo sobre desarrollo personal y carrera y un módulo sobre legislación del trabajo en el plan de estudios modernizado sobre educación cívica. En general, las instituciones educativas ofrecen actividades extracurriculares tales como orientación profesional, y encuentros con especialistas en derecho laboral y agentes económicos. Además, en las escuelas secundarias los estudiantes pueden elegir entre una serie de cursos optativos sobre materias que incluyen la ética empresarial, la protección del consumidor, la formación empresarial y la educación sobre igualdad de género e igualdad de oportunidades. La Comisión toma nota de que, a fin de ofrecer formación a los desempleados, en 2013, se establecieron acuerdos contractuales con 17 instituciones de formación profesional técnica que imparten formación en 49 profesiones y ocupaciones. Además, la Agencia Nacional de Empleo (NEA) lleva a cabo un estudio anual «Previsión/Pronóstico sobre el Mercado de Trabajo» a fin de establecer programas de formación profesional vinculados con las necesidades del mercado de trabajo. Las 35 estructuras territoriales de la NEA tienen en cuenta las previsiones pertinentes sobre el mercado de trabajo cuando ofrecen sus servicios (a saber orientación profesional y formación profesional para los desempleados). **La Comisión acoge con agrado la información recibida e invita al Gobierno a transmitir más información sobre la elaboración y aplicación de las políticas y programas de educación y formación, estrechamente vinculadas con las necesidades del empleo.**

Artículo 4. Formación profesional y aprendizaje permanente. El Gobierno indica que, con arreglo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la política en el ámbito de la educación se orientará hacia la calidad. La formación de una fuerza de trabajo calificada se garantizará promoviendo la orientación profesional y proporcionando oportunidades de formación profesional permanente. La Comisión toma nota con *interés* de que en febrero de 2013 se adoptó la Estrategia de Desarrollo de la Educación Profesional/Técnica junto con su plan de acción. El Gobierno indica que el objetivo general de la estrategia es modernizar y racionalizar la educación profesional y técnica, a fin de incrementar la competitividad de la economía nacional; el objetivo específico núm. 2 establece la formación profesional basada en las calificaciones y su vinculación con los requisitos del mercado de trabajo. **La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información actualizada sobre la aplicación de la Estrategia de Desarrollo de la Educación Profesional/Técnica (2013-2020). Asimismo, invita al Gobierno a transmitir información en relación con todas las medidas adoptadas sobre el aprendizaje permanente.**

Artículo 5. Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Consejo nacional sobre estándares ocupacionales y certificación de las calificaciones profesionales es la plataforma de diálogo social desde junio de 2008. El Consejo ayuda a garantizar las sinergias entre la educación profesional y técnica, el mercado de trabajo y la economía nacional. **La Comisión invita al Gobierno a transmitir más información sobre las medidas adoptadas, en el marco del Consejo nacional, para que los interlocutores sociales participen en la formulación y aplicación de políticas y programas de orientación profesional y formación profesional.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Polonia

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc», recibidas el 31 de agosto de 2018, junto con la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a dichas observaciones, recibida el 22 de octubre de 2018.

Artículos 2 a 5 del Convenio. Concesión de licencia pagada de estudios. La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, la cuestión del derecho a una licencia pagada de estudios para los trabajadores que deseen mejorar sus calificaciones profesionales se rige por el Código del Trabajo. En sus observaciones, Solidarnosc indica que el uso de dicha licencia depende de la iniciativa o el consentimiento del empleador. La Comisión observa una vez más de que el Código del Trabajo no aborda el tema de la educación general, social o cívica y la educación sindical. El Gobierno indica que la educación en estos campos se rige por leyes especiales. Solidarnosc señala que, con arreglo al artículo 103 del Código del Trabajo, si un trabajador quiere mejorar sus calificaciones en ámbitos extraprofesionales se le concederá la licencia, pero no recibirá remuneración. Solidarnosc añade que el Código del Trabajo no contiene ninguna regla en la que se reconozca el tiempo invertido en formación como tiempo de trabajo, a excepción del tiempo que invierte un trabajador en participar en una formación sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), que sí se considera tiempo de trabajo. En su respuesta a las observaciones de Solidarnosc, el Gobierno hace referencia a la posición del servicio nacional de inspección del trabajo, consistente en que la participación de un trabajador en una formación destinada a mejorar sus calificaciones profesionales o desarrollar competencias específicas que se requieren en un lugar de trabajo concreto se considera como tiempo de trabajo, si la participación en dicha formación es obligatoria. La Comisión constata que, en cuanto a la licencia pagada para educación sindical, de conformidad con el artículo 31, 3), de la Ley de Sindicatos, el derecho de disfrutar de una licencia pagada se otorga a los trabajadores que desempeñan funciones sindicales y no a todos los trabajadores, y sólo en relación con la realización de actividades *ad hoc* derivadas de dichas funciones sindicales. En opinión del Gobierno, esto se ajusta al *artículo 10* del Convenio, en el que se establece la posibilidad de introducir diversos requisitos para los trabajadores, en función del tipo de formación que vayan a seguir. Solidarnosc señala que esta disposición no se extiende a los trabajadores que no desempeñan ninguna función sindical. Añade que la participación en una formación en materia de educación sindical, que por definición se organiza y anuncia por adelantado, no cumple el criterio de que la actividad sea *ad hoc*. Por tanto, Solidarnosc observa que ni el Código del Trabajo ni la Ley de Sindicatos contienen disposiciones sobre la concesión de una licencia pagada de estudios para permitir que los trabajadores participen en actividades de educación sindical. En lo concerniente a la cuestión de la

elegibilidad, la Comisión indica que en el párrafo 17, 1), de la Recomendación sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 148), se establece que, al fijar las condiciones de elegibilidad, deberían tenerse en cuenta los tipos de programas educativos o de formación disponibles, las necesidades de los trabajadores y de sus organizaciones, las necesidades de las empresas y el interés público. No obstante, la Comisión señala que, si bien las condiciones de elegibilidad pueden variar, el Convenio no contempla que se limite la licencia pagada de estudios a las actividades sindicales *ad hoc*. La Comisión toma nota de que en 2015 se creó el Fondo Nacional de Formación (NTF) para respaldar las inversiones en recursos humanos, que cuenta con la aprobación de Solidarnosc. En su respuesta a las observaciones, el Gobierno destaca que, ya que el NTF es un fondo para personas que están empleadas, las normas sobre la licencia prevista para fines de formación es una parte relevante de las reglas que rigen el funcionamiento de dicho fondo. La Comisión recuerda que el Gobierno, en su memoria anterior, indicó que, con el fin de reforzar el papel de los interlocutores sociales en el proceso de gestión de los recursos del Fondo del trabajo y la programación y el control de la política de mercado laboral, se proyectaba establecer consejos de mercado del trabajo, que se crearían en lugar de los consejos del empleo. Sin embargo, el Gobierno no comunica si estos consejos de mercado llegaron a crearse. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se garantiza en la práctica el derecho a una licencia pagada de estudios para educación general, social y cívica y para educación sindical (artículo 2 del Convenio). Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que incluya documentación, como informes, estudios y datos estadísticos, que permita valorar la aplicación del Convenio en la práctica (parte V del formulario de memoria). Solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre la manera en que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participan en la elaboración y puesta en práctica de la política de fomento de la licencia pagada de estudios, y que comuniquen información específica sobre la creación de consejos de mercado del trabajo (artículo 6).***

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc», recibidas el 9 de agosto de 2018, así como de la respuesta del Gobierno a dichas observaciones, recibida el 22 de octubre de 2018.

Artículos 1 a 4 del Convenio. Formulación e implantación de políticas y programas de orientación y formación profesionales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en respuesta a la observación de 2013. La Comisión constata el incesante esfuerzo del Gobierno por mejorar la calidad y la eficacia de la orientación y formación profesionales. El Gobierno indica que entre 2013 y 2017 se hicieron varias enmiendas a la Ley sobre Promoción del Empleo y las Instituciones del Mercado Laboral, de 2004 (ley de 2004), en particular la modificación de 14 de marzo de 2014, que entró en vigor el 27 de mayo de 2014, y por la que se introdujeron cambios en el ámbito de la orientación profesional con el fin de adaptar en mayor medida los servicios que ofrecen las oficinas de empleo a las necesidades de los solicitantes, y mejorando así la eficacia del Servicio Público de Empleo (PES). Según el Gobierno, los servicios de orientación e información profesionales y de asistencia a la búsqueda de empleo formaban parte de un único servicio de orientación profesional. Algunos miembros del personal del PES fueron destinados a puestos de asesores profesionales y se les impartió formación para mejorar sus competencias, aumentando de ese modo el número de asesores y la disponibilidad de los servicios de orientación profesional. La Comisión toma nota de que 48 806 desempleados se beneficiaron de la orientación profesional individual y en grupo que ofrecieron las oficinas del PES en 2017, lo que representa un descenso con respecto a los 74 016 desempleados de 2013. El Gobierno atribuye esta reducción al correspondiente descenso de la tasa de desempleo en Polonia en ese período. Asimismo, la Comisión constata la introducción de dos nuevas formas de orientación profesional dirigidas a atender las necesidades de los usuarios del PES dada la rápida evolución de las tecnologías de la información: servicios de orientación a distancia y de información a distancia. En sus observaciones, Solidarnosc sostiene que el PES no ofrece un acceso amplio a la orientación profesional, ya que ésta se centra principalmente en los desempleados registrados. En su respuesta, el Gobierno indica que tanto los desempleados como las personas que buscan trabajo, con diversos niveles de educación y calificaciones profesionales, y en distintas etapas de su desarrollo profesional, tienen la oportunidad de usar los servicios gratuitos de orientación profesional del PES. Además, señala que las oficinas de empleo de los distritos prestan asesoramiento individual o en grupo, así como información y formación profesionales en el ámbito de las técnicas de búsqueda de empleo a desempleados registrados, además de apoyo en el terreno de la información profesional a los que no están registrados. En cuanto a la formación profesional, el Gobierno indica que el 14 de marzo de 2014 se revisó la ley de 2004, ampliando la prestación de orientación a los desempleados de larga duración, tanto jóvenes de menos de 30 años como personas a partir de 50 años de edad, para ayudarlos a entrar y permanecer en el mercado laboral. La Comisión toma nota de que los empleadores que contratan a jóvenes reciben ahora apoyo mediante nuevos instrumentos: «vales» de formación y de colocación. En virtud del sistema de los «vales» de colocación, la persona desempleada realiza unas prácticas de seis meses con un empleador designado, que se compromete a emplear al individuo durante seis meses más. El Gobierno señala que desde 2015 hay prácticas disponibles, no sólo para jóvenes, sino también para todos los grupos de desempleados en situación difícil dentro del mercado de trabajo. Sin embargo, Solidarnosc indica que el Gobierno no ha desarrollado una política del empleo de los jóvenes coherente que tenga en cuenta las necesidades especiales de este grupo en el mercado de trabajo o que les ofrezca respaldo en las diferentes etapas de su carrera profesional. En su respuesta, el Gobierno afirma que el apoyo a los jóvenes se ofrece mediante Cuerpos voluntarios de trabajo, unidades supervisadas por el Ministro de Trabajo y especializadas en actividades dirigidas a los jóvenes de entre 15 y 25 años, en particular los que

están en riesgo de exclusión social. El Gobierno también se remite a la creación, en 2015, del Fondo Nacional de Formación (NTF) para respaldar las inversiones en recursos humanos. A este respecto, apunta que el importe anual disponible con cargo a este fondo es aproximadamente de 200 millones de zlotys polacos, que se destina a cofinanciar el aprendizaje permanente para trabajadores y empleadores por iniciativa o con la autorización del empleador. La Comisión toma nota de que, en el período comprendido entre 2014 y 2017 el PES empleó esos fondos para financiar la formación de unos 315 000 trabajadores. Además, el Gobierno se refiere a una serie de actividades en el ámbito del aprendizaje permanente. La Comisión toma nota con *interés* de que en 2017 más del 80 por ciento de los desempleados encontraron un empleo después del programa de prácticas, lo que constituye la tasa más elevada en los últimos cinco años. No obstante, Solidarnosc sostiene que el PES no fomenta la formación profesional para adultos. Al tiempo que toma nota de que en 2016 sólo 242 adultos recibieron formación profesional, Solidarnosc atribuye este hecho a la baja remuneración que se ofrece a una persona que sigue una formación profesional para adultos, así como a la pesada carga administrativa que conlleva. Añade que se restringió el acceso a la formación para mejorar las calificaciones profesionales a raíz del recorte de los recursos del NTF para 2018. En su respuesta, el Gobierno señala que en 2017 más de 50 000 personas participaron en formaciones, las cuales tienen muy buena acogida tanto entre los desempleados como entre las personas que buscan trabajo. Asimismo, el Gobierno indica que en 2018 se asignaron 105 608 000 zlotys polacos al NTF (28 086 100 dólares de los Estados Unidos) y se reforzó la función de los interlocutores sociales a la hora de decidir la atribución de las reservas del NTF, dado que el Consejo Tripartito del Mercado Laboral determina las prioridades en las que se invierte el 30 por ciento del NTF. La Comisión toma nota de las actividades destinadas a respaldar a estudiantes en sus decisiones formativas y profesionales llevadas a cabo por el Ministerio de Educación Nacional y de la introducción en 2016 de clases de orientación profesional. Además, constata que se está examinando un proyecto de ley para modificar la Ley de Educación y la Ley sobre el Sistema Educativo y algunas otras leyes a escala interdepartamental, en el que se proponen nuevos cambios del sistema educativo, y que se está consultando a los interlocutores sociales al respecto. Se prevé que el proceso finalice en septiembre de 2019. ***La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información detallada, que comprenda datos estadísticos actualizados y desglosados por edad y sexo, sobre la repercusión de las medidas tomadas para establecer políticas y programas exhaustivos y coordinados en lo relativo a la orientación, la educación y la formación profesionales y el aprendizaje permanente relacionados con el Servicio Público de Empleo. Además, pide al Gobierno que aporte información sobre los resultados de las medidas para ayudar a las personas desfavorecidas a acceder a servicios de educación y formación profesionales adaptados a sus necesidades, incluidos los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad. Al tiempo que toma nota de la reducción de los recursos del NTF para 2018, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información sobre los motivos de dicho recorte, así como acerca de la disponibilidad de otros recursos para respaldar la educación y la formación de modo que los individuos puedan mejorar sus calificaciones profesionales. Asimismo, pide al Gobierno que transmita un ejemplar de la ley por la que se modifica la Ley de Educación y la Ley sobre el Sistema Educativo y algunas otras leyes, una vez que se haya aprobado.***

Artículo 5. Cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Gobierno comunica que ha emprendido una serie de actividades destinadas a mejorar la cooperación con los empleadores polacos a la hora de establecer e implantar políticas y programas de orientación y formación profesionales. En este sentido, la Comisión observa que el 20 de enero de 2015 se creó un equipo consultivo tripartito encargado de cuestiones relativas a la educación profesional. El Gobierno indica que la labor de este equipo llevó a introducir un reglamento promulgado por el Ministerio de Educación Nacional el 11 de agosto de 2015, en el que se contempla la organización de clases prácticas en los lugares de trabajo de los empleadores que respondan a las necesidades de éstos. El Gobierno añade que, con el fin de promocionar la coordinación y la coherencia a la hora de impartir educación y formación profesionales, el Ministerio de Educación Nacional tomó medidas para asegurar la participación de los representantes de las organizaciones de empleadores, el gobierno local y las asociaciones profesionales. La Comisión toma nota de que, tras consultar a los empleadores, se reestructuró el sistema educativo en septiembre de 2017 con el objeto de crear una escuela industrial en la que se imparte un primer nivel de educación técnica en tres años. Además, los representantes de los empleadores examinaron las necesidades de calificaciones del mercado de trabajo, lo que desembocó en la creación de un programa de formación en 60 profesiones, que incluía cinco profesiones auxiliares para alumnos con discapacidad mental. La Comisión acoge con agrado el nuevo programa de formación que se introdujo en las escuelas de formación en septiembre de 2017. En sus observaciones, Solidarnosc defiende que no se incluye de forma activa a los interlocutores sociales en el proceso de elaboración de políticas educativas y laborales, y que éstos no tienen voz en cuanto a la manera en que se gastan los recursos del Fondo de Trabajo. Además, Solidarnosc afirma que no tuvieron la oportunidad de participar realmente en el proceso de formulación de la nueva ley sobre el mercado de trabajo. En su respuesta, el Gobierno indica que el proyecto de la nueva ley se envió al Consejo de Diálogo Social y el Consejo del Mercado Laboral, y que se respetó el período prescrito de treinta días para su examen. ***Al tiempo que toma nota de los esfuerzos del Gobierno por aumentar la cooperación con los empleadores a la hora de establecer e implantar políticas y formación profesionales, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el modo en que se ha consultado a las organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores, así como a las instituciones competentes, al establecer, implantar y supervisar las políticas y los programas de orientación y formación profesionales.***

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 26 de septiembre de 2018. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.**

Artículos 2 a 6 del Convenio. Formulación y aplicación de una política a fin de promover la concesión de licencias pagadas de estudios. Participación de los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara los casos en que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prevé que se conceda una licencia pagada de estudios, en el sentido del Convenio. En su memoria, el Gobierno se refiere al artículo 316 de la LOTTT, que prevé que «los patronos y las patronas, podrán otorgar permisos a los trabajadores y trabajadoras que cursen estudios». El Gobierno añade que en el ordenamiento jurídico nacional, el empleador no tiene la obligación de otorgar licencia pagada estudios a sus trabajadores. No obstante, conforme a lo establecido en los artículos 298 y 300 de la LOTTT, los patronos están obligados a contratar aprendices y admitir a los pasantes cuando así lo solicitan las instituciones educativas. Asimismo, las misiones desarrolladas por el Ejecutivo nacional destinadas a la formación técnica y escolar de los trabajadores y trabajadoras podrán requerir a los patronos que les proporcionen el espacio y el personal necesario para el desarrollo de los planes de formación dirigidos a los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, sin que esto implique la interrupción de sus labores productivas. En este sentido, la Comisión recuerda «la exigencia esencial de que las actividades de educación o de formación tengan lugar durante las horas de trabajo. La imputación del tiempo consagrado a dichas actividades al tiempo de trabajo es necesaria para que pueda hablarse realmente de licencia de estudios...» (véase Estudio General de 1991, Desarrollo de los recursos humanos, párrafo 349). El Gobierno indica que las licencias pagadas para estudio son garantizadas en la medida en que se fomenta la celebración de contratos colectivos, los cuales en ocasiones incluyen el derecho a dichas licencias. En tales casos, el trabajador y el patrón deciden la forma en la que se utilizará la licencia de estudio de manera que afecte en la menor medida posible al tiempo de trabajo, para lo cual se podrá acordar cambiar el horario y establecer la forma en la que el trabajador deberá reponer las horas necesarias para cumplir con los objetivos de trabajo. No obstante, la Comisión toma nota de que UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que como consecuencia de la eliminación de las distintas tablas salariales y del establecimiento de un salario único en septiembre de 2018, independientemente de la profesión, condición de estudio o tiempo de servicio, se eliminaron *de facto* todos los convenios colectivos celebrados anteriormente, de manera que desaparecieron los beneficios e incentivos otorgados en los mismos a los trabajadores para acceder a la educación integral, continua y permanente, incluidas las licencias pagadas de estudios. Las organizaciones sindicales observan que estas acciones han neutralizado la posibilidad de crecimiento o avance del trabajador en el país. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información en su memoria sobre las políticas o medidas adoptadas con miras a fomentar la concesión de licencia pagada para los objetivos específicos previstos en el artículo 2. Al respecto, la Comisión recuerda que el Convenio exige la formulación y aplicación de «una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, la concesión de licencia pagada de estudios» (artículo 2) con la participación de los interlocutores sociales (artículo 6). **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la formulación y aplicación de políticas y medidas para promover la concesión de licencias pagadas de estudios con fines de formación profesional a todos los niveles, así como con fines de educación sindical (artículos 2 y 5), y que comunique los textos pertinentes. La Comisión solicita además al Gobierno que indique las modalidades según las cuales se concede la licencia pagada de estudios, en particular en lo que respecta a: a) las condiciones que deben reunir los trabajadores para beneficiarse de tal licencia; b) la duración de la licencia, y c) el nivel de las prestaciones económicas pagadas (artículo 3). Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada, desglosada por sexo, sobre los trabajadores que se han beneficiado de una licencia pagada de estudios (parte V del formulario).**

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 26 de septiembre de 2018. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.**

Artículos 1 a 5 del Convenio. Aplicación de políticas y programas de orientación y formación profesionales. Colaboración con los interlocutores sociales. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno informa de la creación en 2014 del despacho del Viceministro para la Educación y el Trabajo para la Liberación, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, cuya principal función es proponer lineamientos, políticas, planes y estrategias de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores implementados por las diversas misiones educativas y las universidades. El Gobierno añade que el señalado despacho se encuentra presente en las distintas regiones a través de 32 oficinas denominadas Centros de Encuentro para la Educación y el

Trabajo (CEET), los cuales implementan los programas de formación con miras a garantizar la inclusión de los jóvenes en el proceso social del trabajo a fines de, entre otras cosas, optimizar sus condiciones y oportunidades de educación. A este respecto, el Gobierno se refiere a la creación en 2018 de la «Gran Misión Chamba Juvenil», dirigida a nacionales o extranjeros con residencia en el país en los últimos diez años, de entre 15 y 35 años de edad. Entre sus principales objetivos se encuentra, la formación de los jóvenes en materia agropecuaria y diversas áreas de criptoconomía, así como la promoción de una cultura de emprendimiento entre los mismos. El Gobierno indica que la gran misión consta de cinco grandes vértices, que incluyen el diseño y ejecución de un plan de formación en áreas estratégicas para la satisfacción de la demanda alimentaria, de producción y de atención sanitaria en el país. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno en relación con los programas desarrollados por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), tales como el Programa nacional de formación de aprendices, en el marco del cual las empresas que tengan 15 trabajadores o más están obligadas a contratar y formar aprendices de entre 14 y 18 años de edad. El Gobierno indica además que está previsto el desarrollo de un plan estratégico de formación productivo que será implementado por el INCES. La Comisión toma nota de que, por su parte, las organizaciones de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que la falta de seguridad alimentaria, la interrupción del suministro de agua, electricidad y gas en los hogares, así como los problemas de transporte han afectado negativamente al rendimiento de la población en edad de escolarización y su asistencia regular a los centros de enseñanza. Las organizaciones sindicales señalan que, actualmente, el 38 por ciento — cuatro de cada diez — de los niños y adolescentes entre 3 y 17 años han dejado de asistir a la escuela por distintas causas, incluyendo problemas de transporte, apagones o falta de alimentación. En lo que respecta a los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, los sindicatos observan que el 48 por ciento de los mismos — casi la mitad — no estudian. Asimismo, destacan que, debido a la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, se ve limitada la posibilidad de que éstos y sus hijos puedan acceder a la educación y formación profesionales, y que el sector educativo público presenta además un problema de falta de personal provocado por la emigración de profesores a otros países en busca de mejores condiciones de vida debido a la situación en el país. Por último, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre la manera en que, de conformidad con el artículo 5 del Convenio, se asegura la colaboración con los interlocutores sociales y representantes del sector privado en la elaboración y aplicación de las políticas y programas de formación y orientación profesionales para alcanzar los objetivos del Convenio.

Observando que la información proporcionada por el Gobierno se refiere únicamente a los jóvenes, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar el acceso a la formación y orientación profesionales de trabajadoras y trabajadores, particularmente de grupos de trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas o tribales, personas en zonas rurales o comunidades remotas. Solicita también que indique de qué manera se garantiza que los trabajadores tienen libertad para escoger los programas de orientación y formación profesionales a los que asisten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 5, del Convenio. La Comisión solicita además al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada, incluyendo estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto de las políticas y los programas aplicados en relación a la orientación y formación profesionales. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que envíe información específica y detallada sobre la manera en la que se han consultado a los interlocutores sociales y representantes del sector privado en relación con la formulación, la aplicación y seguimiento de las políticas y programas de orientación y de formación profesional (artículo 5).

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 140** (Afganistán, Belice, Bosnia y Herzegovina, Chile, Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Guinea, Hungría, Iraq, Kenya, Montenegro, Nicaragua, Países Bajos: Aruba, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Jersey, San Marino, Suecia, República Unida de Tanzania); el **Convenio núm. 142** (Afganistán, Antigua y Barbuda, Argentina, Burkina Faso, República Centroafricana, Cuba, Dinamarca, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia: Polinesia Francesa, Georgia, Hungría, Iraq, Kenya, Kirguistán, Letonia, Líbano, México, Nicaragua, Níger, Países Bajos: Aruba, Suiza, República Unida de Tanzania, Tayikistán, Túnez).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 142** (Italia).

Seguridad del empleo

República Democrática del Congo

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1987)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Comentarios de la Central Congoleña del Trabajo (CCT). Despidos improcedentes e irregulares. La CCT manifiesta su preocupación por el conflicto colectivo de trabajo que derivó en un despido masivo, abusivo e irregular de unos 40 trabajadores de una empresa privada multinacional francesa, una situación que las autoridades públicas dejaron que se deteriorase en detrimento de las disposiciones del Convenio. La CCT también señala, en este contexto, la violación intencional por parte del empleador de las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, en particular, los que conciernen al empleo y las relaciones laborales. La Comisión toma nota de que la CCT solicitó que las autoridades, garanticen, por una parte, la reintegración de los trabajadores que han sido objeto de un despido improcedente e irregular y, por otra, que apliquen las disposiciones del Convenio que se refieren al derecho a indemnización por cese y a los despidos colectivos. *La Comisión invita al Gobierno a presentar sus propios comentarios en relación con las observaciones de la CCT. Espera que el Gobierno estará en condiciones de señalar si los despidos citados han demostrado estar fundados en causas justificadas (artículo 4 del Convenio) y si los trabajadores despedidos han podido acogerse a su derecho a una indemnización por fin de servicios (artículo 12). La Comisión pide al Gobierno que suministre también informaciones sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, tales como las que se han previsto en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166).* La Comisión recuerda que la OIT puede prestar su asistencia para promover la Declaración de principios tripartitos sobre las empresas multinacionales y la política social.

En respuesta a la solicitud anterior, el Gobierno ha proporcionado las disposiciones pertinentes de la Ley núm. 13/005, de 15 de enero de 2013, relativa al Estatuto Militar de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (*artículo 2, párrafo 4, del Convenio*). *La Comisión invita nuevamente al Gobierno a suministrar una memoria contentiva de informaciones sobre el accionar de la inspección del trabajo y de las decisiones de los tribunales sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de los artículos 4, 5 y 7 del Convenio. Sirvase indicar el número de recursos interpuestos por despido injustificado, el resultado de dichos recursos, la naturaleza de la reparación concedida y el promedio de tiempo empleado para el pronunciamiento de las sentencias correspondientes (partes IV y V del formulario de memoria).*

Artículo 7. Procedimiento previo a la terminación del trabajo o colocación de ésta. El Gobierno proporciona el texto del convenio colectivo interprofesional nacional, de diciembre de 2005, que no parece haber previsto la posibilidad de un procedimiento particular previo a la terminación de la relación de trabajo o en el momento de producirse ésta, tal como exige el Convenio. *La Comisión invita nuevamente al Gobierno a transmitir el texto de los convenios colectivos que prevén dicha posibilidad y a informar, en su próxima memoria, sobre la forma en la que se garantiza la aplicación de esta disposición del Convenio a los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos.*

Artículo 12. Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de los ingresos. El Gobierno señala en su memoria que el artículo 63 del Código del Trabajo de 2002 protege el empleo y recomienda la readmisión en caso de rescisión abusiva del contrato de trabajo. Si no se concediera dicha readmisión, el Tribunal de Trabajo fijará una indemnización en concepto de daños y perjuicios. La Comisión subraya que este modo de resarcimiento por despido injustificado o la concesión de una indemnización por daños y perjuicios por parte de un tribunal es más bien el resultado de la aplicación del *artículo 10* del Convenio que establece el pago de una indemnización adecuada o de otra reparación que se considere apropiada. La indemnización por terminación de la relación de trabajo, que es una de las formas de protección de los ingresos, debe distinguirse de la cuantía por daños y perjuicios en caso de despido injustificado. En virtud del *artículo 12* del presente Convenio, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tiene derecho: a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas; o, a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desempleados o de otras formas de seguridad social; o, a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y toma nota de que el Código del Trabajo no precisa el monto de la indemnización por terminación de servicios que deberá abonarse a los trabajadores de conformidad con el *artículo 12* del Convenio. *La Comisión invita nuevamente al Gobierno a informar sobre cómo ha dado cumplimiento al artículo 12 del Convenio.*

Artículos 13 y 14. Terminación de la relación de trabajo por motivos económicos o similares. El Gobierno señala que el Ministro de Empleo, de Trabajo y de Previsión Social ha firmado 15 órdenes ministeriales autorizando el despido colectivo por razones económicas o similares, lo que ha afectado a 701 trabajadores entre 2012 y 2013. *La Comisión invita al Gobierno a precisar si los trabajadores despedidos tienen derecho a indemnizaciones por fin de servicios (artículo 12). La Comisión espera que el Gobierno esté también en disposición de suministrar información sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, tal como se prevé en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166).*

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 1 del Convenio. Durante algunos años, la Comisión ha pedido información sobre la revisión en curso del proyecto de ley de relaciones laborales que, según la memoria del Gobierno de 2013, incluye disposiciones sobre la terminación de la relación de trabajo con el objetivo de dar efecto al Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que el proyecto de ley de relaciones laborales sigue pendiente en el Departamento de Trabajo y Relaciones Laborales y está siendo objeto de consultas técnicas finales. El Gobierno añade que el comité técnico de trabajo del Departamento de Trabajo y Relaciones Laborales ha realizado diversas consultas con partes interesadas nacionales, tales como la Oficina del Procurador General, la Comisión de Reforma Constitucional y Jurídica, el Departamento de Gestión del Personal, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Planificación, Comercio e Industria, así como con asociados técnicos externos, incluida la OIT. ***En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que la nueva ley da pleno efecto a las disposiciones del Convenio. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que tan pronto como se promulgue la ley transmita a la OIT un informe detallado y copia de la ley a fin de que la Comisión pueda examinar su conformidad con el Convenio.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 158** (*Malawi, Santa Lucía, Yemen*).

Salarios

Belarús

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1961)

Artículo 4 del Convenio. Pago parcial del salario en especie. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para asegurar que el pago del salario en especie sólo pudiera ser parcial, de conformidad con el artículo 4. La Comisión toma nota de que el Gobierno confirma en su memoria que, en virtud del artículo 74 del Código del Trabajo, el pago del salario con prestaciones en especie es posible parcial o totalmente. **Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en particular revisando el artículo 74 del Código del Trabajo, a fin de asegurar que el pago del salario en especie sólo pueda ser parcial, de conformidad con el artículo 4.**

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1977)

Artículos 4, 6, 7, 8 y 12 del Convenio. Protección del salario de los trabajadores agrícolas indígenas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las medidas tomadas por el Gobierno para luchar contra el trabajo forzoso y las prácticas abusivas en el pago de los salarios a los trabajadores agrícolas indígenas y pidió al Gobierno que proporcionara información sobre el impacto de estas medidas en la situación de estos trabajadores. La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno proporciona información sobre las acciones desarrolladas por la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo para proteger los derechos laborales de los trabajadores agrícolas indígenas y sobre los resultados de las intervenciones de las inspectorías móviles integrales, en particular en las zonas rurales alejadas y en las empresas que ocupan trabajadores indígenas. La Comisión toma nota también de que este tema se está tratando en el marco de la supervisión de la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). En este contexto, la Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 29.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 31 de agosto y el 7 de noviembre de 2018.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante la Comisión de la Conferencia), en junio de 2018, en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que procediera sin demora a: i) llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas sobre la fijación de salarios mínimos; ii) tener en cuenta, al determinar el nivel de salario mínimo, las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como los factores económicos en los términos que establece el artículo 3 del Convenio; iii) recurrir a la asistencia técnica de la OIT para garantizar sin demora el cumplimiento del Convenio en la legislación y en la práctica, y iv) aceptar una misión de contactos directos de la OIT. La Comisión de la Conferencia también recomendó al Gobierno que enviara una memoria detallada a la Comisión en 2018.

Artículos 3 y 4, 1) y 2), del Convenio. Factores para determinar el nivel del salario mínimo y consultas exhaustivas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que: i) se incrementó el salario mínimo nacional para 2018, mediante el decreto supremo núm. 3544, de 1.º de mayo de 2018; ii) los factores socio económicos considerados para la fijación del salario mínimo nacional incluyen la inflación, la productividad, el producto interno bruto (PIB), el PIB per cápita, el índice de precios al consumidor, el crecimiento económico, las tasas de desempleo, las fluctuaciones de mercado, y el costo de vida; iii) para la gestión 2018, se hicieron las correspondientes consultas en primera instancia, a la CEPB y luego a la Central Obrera Boliviana (COB); iv) el Gobierno llevó a cabo reuniones con los representantes de ambos sectores y se les consultaron sus criterios y proposiciones en materia salarial, y v) ambas partes se mantienen en sus posicionamientos y corresponde al Gobierno buscar el equilibrio justo. Por otro lado, la Comisión toma nota de que la CEPB y la OIE indicaron en sus observaciones, así como en la discusiones en la Comisión de la Conferencia, que: i) el sector empleador no pudo formular criterios respecto de la fijación del salario mínimo; ii) entre 2006 y 2018 el salario mínimo nacional subió en un porcentaje muy por encima de la inflación acumulada de ese período; iii) el incremento del salario mínimo para 2018 desconoció variables tales como el índice de productividad, la sostenibilidad de las empresas, la generación de más y mejores empleos y el

avance de la informalidad, y iv) el Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión de la Conferencia en cuanto a la convocatoria a los sectores de los empleadores y de los trabajadores para la discusión sobre la fijación del salario mínimo. Asimismo, la Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia, los miembros trabajadores indicaron que: i) el incremento del salario mínimo había tenido en cuenta un pliego de recomendaciones presentado por la COB, así como los factores socioeconómicos tales como la inflación, la productividad, el PIB, el PIB per cápita, el índice de precios al consumidor, el crecimiento económico, las tasas de desempleo, las fluctuaciones de mercado y el costo de vida, y ii) avalan la importancia del diálogo social y la consulta con los interlocutores sociales previa a la fijación del salario mínimo.

La Comisión observa que mientras que el Gobierno afirma que se llevaron a cabo consultas con los interlocutores sociales, la CEPB y la OIE manifiestan lo contrario. Asimismo, la Comisión observa que existen divergencias en cuanto a los criterios que se habrían tenido en cuenta para definir el salario mínimo. La Comisión recuerda, una vez más, que el Convenio requiere que se consulte exhaustivamente y de buena fe con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas para el establecimiento, aplicación y modificación de los mecanismos a través de los cuales se fijan y ajustan en el tiempo los salarios mínimos (*artículo 4, 1) y 2)*), y que la participación activa de estas organizaciones es esencial para que se tengan en cuenta del mejor modo posible todos los factores pertinentes en el contexto del país (Estudio General de 2014, Sistemas de salarios mínimos, párrafo 285). En este contexto, la Comisión **lamenta** que el Gobierno no haya respondido todavía a la solicitud de la Comisión de la Conferencia de enviar una misión de contactos directos formulada por la Comisión de la Conferencia. A este respecto, la Comisión recuerda que las misiones de contactos directos consisten en enviar al país concernido un representante del Director General de la OIT para tratar de buscar una solución a las dificultades que se encuentran en la aplicación de los convenios ratificados. El trabajo de la misión consiste en determinar los hechos y examinar *in situ* las posibilidades de solución de los problemas que se plantean. Se trata de una forma eficaz de diálogo, con el objetivo de encontrar una solución positiva a los problemas. **La Comisión expresa la firme esperanza de que dicha misión podrá llevarse a cabo sin demora y que la misma contribuirá a resolver las dificultades planteadas en relación con la aplicación del Convenio.**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Burundi

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 30 de agosto de 2018, así como de la respuesta del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Funcionamiento del mecanismo de fijación de los salarios mínimos. En relación con sus comentarios anteriores al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que encargó dos estudios, uno sobre la política salarial equitativa y otro sobre la clasificación de los empleos en Burundi, y que la fijación del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) tendrá lugar como consecuencia de estos estudios y se integrará en las disposiciones del Código del Trabajo en curso de revisión. Toma nota asimismo de que: i) en sus observaciones, la COSYBU solicita que se establezcan los métodos para la fijación de los salarios mínimos, así como las modalidades de su aplicación, y ii) al respecto, el Gobierno precisa que, aun si el SMIG actual no es satisfactorio, los empleadores fijarán, en colaboración con los trabajadores, los salarios, habida cuenta de la coyuntura económica y del poder adquisitivo actual de la población. La Comisión recuerda que la última orden que fija el SMIG, se adoptó en 1988. Toma nota de que el artículo 249, párrafo 1, del Código del Trabajo, prevé que el Consejo Nacional del Trabajo tiene la obligación de estudiar los elementos que pueden servir de base para la determinación del salario mínimo y proceder, con carácter anual, al examen de las tasas de los salarios mínimos. Además, toma nota de que las tasas de los salarios mínimos pueden fijarse mediante la negociación colectiva. **La Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar todas las medidas necesarias para reactivar, sin retrasos, el proceso de examen de las tasas de los salarios mínimos, como prevé el artículo 249 del Código del Trabajo, y proceder a un reajuste del SMIG a la luz de este examen. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva comunicar informaciones al respecto, así como sobre los salarios mínimos por categorías aplicables y que se fijan mediante convenios colectivos en las diferentes ramas de actividad o en las empresas.**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Centroafricana

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (ratificación: 2006)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados en materia de salario, la Comisión estima oportuno examinar los Convenios núms. 131 (salarios mínimos) y 95 (protección del salario) en un mismo comentario.

Salarios mínimos

Artículo 4 del Convenio núm. 131. Ajuste periódico de los salarios mínimos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la información disponible, el último decreto relativo a la fijación del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y del salario mínimo agrícola garantizado (SMAG) se adoptó en 1991. Toma nota con **preocupación** de que el Gobierno indica en su memoria que no ha tenido lugar ninguna fijación o ajuste de los salarios mínimos durante el periodo cubierto por la memoria, y de que el Gobierno no proporciona información sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Permanente del Trabajo (CNPT), órgano tripartito entre cuyas funciones figura, en virtud del artículo 226 del Código del Trabajo, emitir un dictamen al fijarse el SMIG y el SMAG. **Por lo tanto, la Comisión pide firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para proceder sin demora a un examen de los salarios mínimos y para ajustar el nivel del SMIG y del SMAG a la luz de este examen. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas a este respecto, en particular sobre todo dictamen emitido por el CNPT en este contexto.**

Protección del salario

Artículo 12 del Convenio núm. 95. Pago del salario a intervalos regulares. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la regularización de los atrasos salariales en el sector público. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Recuerda que la aplicación en la práctica del artículo 12 se apoya en tres elementos esenciales: i) un control eficiente; ii) sanciones adecuadas, y iii) medios de reparación del daño causado (véase el Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 368). La Comisión toma nota de que el Código del Trabajo contiene disposiciones que regulan estos tres elementos, pero de que el Código excluye a los funcionarios de su ámbito de aplicación. La remuneración de los funcionarios es regulada por la Ley núm. 09014, de 10 de agosto de 2009, sobre el Estatuto General de la Administración Pública Centroafricana, ley que no contiene disposiciones que pongan en práctica los tres elementos mencionados anteriormente. **Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que suministre información sobre la regularización de los atrasos salariales en el sector público. Le pide asimismo que adopte las medidas necesarias para garantizar el pago del salario a intervalos regulares en este sector, asegurando un control eficiente, la imposición de sanciones adecuadas en caso de infracción y la existencia de medios de reparación de todo daño causado. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 10/010, de fecha 27 de abril de 2010, sobre Contratación Pública. Sin embargo, toma nota de que esta nueva ley, que tiene como objetivo adaptar al sistema de contratación a las exigencias de transparencia, racionalidad y eficacia que caracterizan actualmente este sector vital, no contiene ninguna disposición sobre las cláusulas de trabajo que deben insertarse en los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con este artículo del Convenio. A este respecto, la Comisión estima necesario referirse a su Estudio General de 2008, en el que recuerda que el objetivo esencial del Convenio es garantizar, gracias a la inserción de cláusulas de trabajo adecuadas en los contratos públicos, a los trabajadores empleados por un empleador y remunerados indirectamente con fondos públicos, salarios y condiciones de trabajo que al menos sean tan satisfactorios como los salarios y las condiciones de trabajo que normalmente se ofrecen para el tipo de trabajo en cuestión, tanto si se fijan a través de un convenio colectivo o de otra forma. **Tomando nota de que el artículo 49 de la ley núm. 10/010, prevé un pliego de condiciones que determina las condiciones de contratación y que comprenderá cláusulas administrativas generales, así como cláusulas administrativas particulares, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas adecuadas para que se incluyan en las cláusulas administrativas generales del pliego de condiciones disposiciones que den plenamente efecto al artículo 2 del Convenio. La Comisión espera que cuando se adopten decretos de aplicación de la Ley núm. 10/010 sobre Contratación Pública, el Gobierno aproveche la oportunidad para poner, finalmente, su legislación de conformidad con el Convenio, y ruega al Gobierno que comunique copia de todo nuevo texto que se adopte.**

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Dominica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2007.

Artículo 6 del Convenio. Legislación que aplica el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno nunca ha comunicado información alguna sobre la naturaleza práctica relativa a la aplicación del Convenio. *En consecuencia, agradecería al Gobierno que compilara y transmitiera, junto a su próxima memoria, información actualizada sobre el número promedio de contratos públicos otorgados anualmente y el número aproximado de trabajadores contratados en su ejecución, extractos de los informes de inspección que muestren casos en los que se hayan retenido pagos, contratos que hayan sido finalizados o contratistas que hayan sido excluidos de la licitación pública por incumplimiento de las normas relativas a los salarios justos, así como cualquier otra información que permita que la Comisión entienda claramente la manera en la que se aplica el Convenio en la práctica.*

Además, la Comisión entiende que el Gobierno se ha incorporado a un proyecto de asistencia técnica financiado por el Banco Mundial para el crecimiento y la protección social, con miras a mejorar, entre otras cosas, el funcionamiento transparente y la gestión eficiente de la contratación pública. *En relación con esto, la Comisión valoraría recibir información adicional sobre la aplicación de este proyecto y los resultados obtenidos, en particular en lo que respecta a cualquier enmienda introducida o prevista en las leyes y reglamentaciones relativas a la contratación pública, que pudiese afectar a la aplicación del Convenio.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Jamaica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que, a pesar de las explicaciones detalladas comunicadas en comentarios anteriores sobre el campo de aplicación y la finalidad del Convenio, así como de las medidas requeridas para su aplicación práctica, el Gobierno sigue refiriéndose a textos legislativos que tienen poca pertinencia con el Convenio, puesto que no aportan cláusulas de trabajo del tipo prescrito en el artículo 2 del Convenio. Más concretamente, la Comisión toma nota de las referencias del Gobierno a la Ley de Fábricas y a la Ley de Salarios Mínimos, como instrumentos que protegen a todos los trabajadores sin excepción, y también al Acuerdo entre los trabajadores y la dirección (LMA), de 2011-2013, para la industria de la edificación y la construcción. En particular, la Comisión toma nota de que el LMA prevé una escala salarial que es más elevada que la tasa del salario mínimo, que se revisó por última vez en septiembre de 2012 y que está fijada en la actualidad en 5 000 dólares de Jamaica (JMD) (aproximadamente 48 dólares de los Estados Unidos) por una semana laboral de 40 horas.

En relación con esto, la Comisión recuerda que el Convenio requiere que los contratos públicos (sean obras de construcción, fabricación de mercancías o prestación de servicios) incluyan cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, por medio de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o de una legislación o reglamentación nacional. En el caso de un contrato de construcción, por ejemplo, este requisito significaría prácticamente que el contratista seleccionado y todo subcontratista, estarían obligados a pagar unos salarios que se situaran al menos en la tasa del LMA — y no en el salario mínimo nacional —, siempre y cuando el LMA contuviera las condiciones salariales más favorables para los trabajadores de la construcción. Esto es así precisamente porque el empleo y las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral general se mejoran a menudo a través de la negociación colectiva respecto de la cual la Comisión ha expresado sistemáticamente la opinión de que el simple hecho de que la legislación nacional sea aplicable a todos los trabajadores, no libera al Gobierno interesado de su obligación de prever la inserción de cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. *Recordando que el Convenio no requiere necesariamente la adopción de una nueva legislación, sino que también puede aplicarse a través de instrucciones o circulares administrativas, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno adopte rápidamente medidas para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, tanto en la ley como en la práctica.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Marruecos

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), así como de las realizadas por la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), que se recibieron el 17 de agosto de 2017. **Pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.**

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio. En su memoria, el Gobierno indica que en 2013 adaptó el dispositivo jurídico y técnico que rige la licitación pública a la evolución del mundo de los negocios y a sus compromisos en el marco de los acuerdos internacionales. En este contexto, el Gobierno adoptó el decreto núm. 2-12-349 de 20 de marzo de 2013 relativo a la contratación pública. El Gobierno señala que el decreto exhorta a la introducción de importantes innovaciones en el proceso de gestión de los contratos públicos, como por ejemplo la unicidad de su reglamentación, la simplificación y la clarificación de los procedimientos, así como a la mejora del clima de negocios y al reforzamiento de la competencia. El Gobierno añade que, en lo que respecta a la constitución del expediente técnico por los licitantes, el apartado b) del artículo 25 del decreto obliga a esos licitantes a presentar los medios humanos y técnicos que tienen a su disposición para ejecutar las prestaciones del contrato público. Asimismo, se refiere al artículo 23 del decreto núm. 2-14-394 de 13 de mayo de 2016 por el que aprueban las cláusulas administrativas generales aplicables a los contratos públicos (CCAG-T), publicados en el *Boletín Oficial* de 2 de junio de 2016. Este decreto obliga al empresario a cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos en vigor que rigen la contratación y el pago de los trabajadores, y en particular a pagar un salario igual o superior al salario mínimo legal previsto en los textos de aplicación en el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que, según el artículo 25, apartado a), párrafo 1, b), del decreto núm. 2-12-349 relativo a los contratos públicos y el artículo 519 del Código del Trabajo, cada participante en una licitación pública debe depositar una fianza a fin de que se vea obligado a respetar sus compromisos. La Comisión toma nota de las observaciones de la CDT en las que se indica que los principios y disposiciones del Convenio no se han incluido en la legislación nacional y que el decreto de 20 de marzo de 2013 no incluye las disposiciones requeridas. En este contexto, no se destacan los derechos de los trabajadores en el marco de los contratos públicos porque el decreto núm. 2-12-349 de 20 de marzo de 2013 no contiene las disposiciones que deben incluirse en la legislación nacional sobre la contratación pública. La UMT observa que la ley sobre la contratación pública no contempla suficientes garantías para los trabajadores durante la ejecución de la transacción o después de su conclusión y que los contratos públicos no contienen cláusulas sociales. Asimismo, indica que los conflictos resultantes de la ejecución de contratos públicos no se solucionan automáticamente. Si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar la transparencia de los contratos públicos, la UMT le pide que ponga las cuestiones relativas a la contratación pública de conformidad con las disposiciones del Convenio y del Código del Trabajo. También pide al Gobierno que incluya a todos los sindicatos en los talleres en materia de reforma de la reglamentación sobre la contratación pública y que introduzca cláusulas sobre las cuestiones sociales en los contratos públicos. La Comisión observa de nuevo que las disposiciones de los dos textos antes mencionados no son suficientes para garantizar la aplicación del Convenio ya que sólo recuerdan a los licitantes la obligación de cumplir la legislación del trabajo. Se trata, en efecto, de criterios de elegibilidad o requisitos de precalificación que los empresarios y los proveedores deben cumplir para conformarse con las disposiciones en vigor en Marruecos. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a los párrafos 117 y 118 de su Estudio General de 2008, cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, en los que señaló que el Convenio no se refiere a criterios generales de elegibilidad o requisitos de precalificación de individuos o empresas que presentan ofertas en contratos públicos. En el mismo sentido, la certificación ofrece pruebas del desempeño del licitador y de su actuación respecto del cumplimiento de la legislación en el pasado, pero no entraña ningún compromiso respecto de los trabajos a realizar en el futuro. La Comisión reitera que el Convenio exige informar previamente a las empresas de licitación, mediante las cláusulas de trabajo estándar que figuran en los documentos de llamado a licitación de que, si son aceptadas, deberán aplicar en el marco de la ejecución del contrato, salarios y demás condiciones de empleo no menos favorables que las normas más elevadas establecidas en la misma región por medio de un convenio colectivo, un laudo arbitral o la legislación. **Por consiguiente, tomando nota de que la reglamentación sobre la contratación pública sigue sin dar efecto a las disposiciones del Convenio, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio. Recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.**

Nigeria

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1961)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)

A fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre los salarios, la Comisión considera apropiado examinar conjuntamente los Convenios núms. 26 (salarios mínimos) y 95 (protección del salario).

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC) recibidas el 8 de septiembre de 2017 sobre la aplicación de estos Convenios.

Salario mínimo

Artículo 1 del Convenio núm. 26. Alcance de la protección de los salarios mínimos. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo referencia a las exclusiones de la Ley sobre el Salario Mínimo Nacional, y pidió al Gobierno que indicara todo progreso realizado con respecto a la extensión del ámbito de aplicación de dicha legislación a todos los trabajadores necesitados de dicha protección. En lo referente a su último comentario sobre la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que futuras enmiendas a la Ley sobre el Salario Mínimo Nacional extenderán su cobertura a la fuerza de trabajo que está excluida actualmente. **Por consiguiente, confía en que esta cuestión se aborde en el contexto de la próxima revisión del salario mínimo nacional, y pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en relación con esto.**

Artículo 4, 1). Sistema de control y de sanciones. La Comisión toma nota de que el NLC señala que, a nivel estatal, los gobiernos son reacios a aplicar la Ley sobre el Salario Mínimo Nacional. **La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto y que indique cómo vela por que el salario mínimo nacional se aplique a todos los niveles, en particular a nivel estatal.**

Protección del salario

Artículo 2 del Convenio núm. 95. Protección del salario de los trabajadores a domicilio y los trabajadores domésticos. En relación con sus comentarios anteriores sobre este tema, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el proyecto de ley sobre las normas del trabajo que hacía extensiva la aplicación de la legislación laboral a los trabajadores a domicilio y los trabajadores domésticos ha sido retirado de la Asamblea Nacional y está siendo revisado por las partes interesadas. **La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en lo que atañe a la revisión de la legislación laboral y sobre cualquier medida adoptada o prevista para asegurar la protección del salario de los trabajadores a domicilio y los trabajadores domésticos.**

Artículos 6 y 12, 1). Libertad del trabajador de disponer de su salario y pago del salario a intervalos regulares. La Comisión recuerda que pidió anteriormente al Gobierno que revisara el artículo 35 de la Ley del Trabajo, que permite al Ministro del Trabajo autorizar el retraso del pago de hasta el 50 por ciento del salario de los trabajadores hasta la finalización de su contrato. En ausencia de nueva información sobre este tema, la Comisión recuerda que este retraso del pago obstaculizaría la libertad de los trabajadores de disponer de su salario y que es incoherente con el requisito del pago del salario a intervalos regulares. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que revise el artículo 35 de la Ley del Trabajo y que suministre información sobre los progresos realizados a este respecto. Pide asimismo al Gobierno que señale en qué circunstancias se ha utilizado esta disposición en años recientes.**

Artículo 7, 2). Economatos. La Comisión toma nota de que el artículo 6, 1), de la Ley del Trabajo prevé que el Ministro del Trabajo podrá, previa celebración de consultas con la autoridad estatal, conceder autorización a un empleador para que establezca un economato a fin de vender mercancías a sus trabajadores, y que ningún contrato o acuerdo, escrito u oral, obligará a un trabajador a comprar mercancías en ningún economato establecido de esta manera. La Comisión recuerda que el artículo 7, 2), prevé asimismo que, cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios distintos de los explotados por el empleador, la autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas para asegurar que las mercancías se vendan a precios justos y razonables, y que los servicios se presten en las mismas condiciones, y exclusivamente en beneficio de los trabajadores interesados. **En ausencia de cualquier disposición que regule esta situación particular en la Ley del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que indique qué medidas se han adoptado para asegurar la aplicación de esta disposición del Convenio.**

Artículo 12, 1). Pago del salario a intervalos regulares. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el NLC señala que en varios Estados existen problemas relacionados con el pago del salario a intervalos no regulares. La Comisión toma nota asimismo de la ausencia de cualquier respuesta del Gobierno a su anterior solicitud de información sobre la situación de los atrasos salariales en el país. La Comisión recuerda una vez más la importancia que reviste asegurar el pago puntual y completo del salario debido a los trabajadores, y subraya que la acumulación de deudas salariales contraviene la letra y el espíritu del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas**

necesarias, como el refuerzo del control y el fortalecimiento de las sanciones, con miras a abordar esta cuestión, y que proporcione información sobre los sectores y regiones más afectados, y la duración media de los retrasos en los pagos

Artículo 14. Información sobre el salario antes de ocupar un empleo e indicaciones concernientes al salario. La Comisión toma nota de que el artículo 7, 1), de la Ley del Trabajo prevé que las tasas de los salarios y los métodos de cálculo del pago y la periodicidad del mismo deberán comunicarse a los trabajadores a más tardar tres meses después del comienzo de su empleo. Además, la Comisión toma nota de que la Ley del Trabajo no prevé que deban proporcionarse a los trabajadores indicaciones relativas al salario al efectuarse cada pago. La Comisión recuerda que el artículo 14 establece que deberá informarse a los trabajadores de las condiciones salariales aplicables antes de ocupar un empleo y que se proporcionen indicaciones concernientes al salario al efectuarse cada pago. ***La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para asegurar la plena conformidad con esta disposición del Convenio.***

Rwanda

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que a lo largo de más de treinta años ha estado formulando comentarios sobre el incumplimiento por el Gobierno de los requisitos básicos del Convenio. A este respecto, el Gobierno se refiere al artículo 44 de la ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, que prevé que los subcontratos deben contener una garantía del pago de los salarios y prever el respeto de las condiciones generales de trabajo, de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y de otras obligaciones del empleador respecto del trabajador. La Comisión recuerda de nuevo que la simple aplicación de la legislación laboral general a la contratación pública no produce los mismos efectos jurídicos que la incorporación de las cláusulas de trabajo explícitamente prescritas con arreglo al artículo 2 del Convenio. Además, tal como la Comisión ha señalado en diversas ocasiones, la legislación a la que se refiere el Gobierno en la mayoría de los casos dispone normas mínimas, por ejemplo en lo que respecta a los niveles salariales, y no refleja necesariamente las verdaderas condiciones laborales de los trabajadores. Así, si la legislación establece un salario mínimo pero los trabajadores de una determinada profesión perciben verdaderamente salarios más elevados, el Convenio exigiría que todo trabajador contratado para la ejecución de un contrato público — en el mismo ámbito y por un trabajo del mismo tipo — tuviese derecho a percibir el salario que se paga generalmente y no el salario mínimo prescrito en la legislación. En otros términos, la aplicación de la legislación laboral general no es suficiente en sí misma para garantizar la aplicación del Convenio, puesto que las normas mínimas fijadas por la ley se mejoran a menudo mediante convenios colectivos o de otra manera. En su memoria, el Gobierno indica que la ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, que regula el trabajo en Rwanda actualmente está siendo revisada. La Comisión toma nota de las garantías dadas por el Gobierno respecto a que la revisión de la legislación nacional del trabajo preverá la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas a fin de velar por que los trabajadores interesados se beneficien de salarios, horas de trabajo y otras condiciones de trabajo, y al hacerlo se pondrá la legislación nacional de conformidad con las disposiciones del Convenio. ***La Comisión espera que el Gobierno aproveche la oportunidad que ofrece la revisión de la ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, para poner su legislación nacional en plena conformidad con las disposiciones del Convenio, especialmente en lo que respecta a: la determinación de los términos de las cláusulas de trabajo que deban incluirse en los contratos celebrados por las autoridades públicas a los que se aplica el Convenio, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas (artículo 2, párrafo 3); la difusión de esas cláusulas por medio de la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otros con el fin de que los postores conozcan los términos de las cláusulas (artículo 2, párrafo 4); la colocación de avisos en sitios visibles para garantizar que los trabajadores interesados sean informados sobre sus condiciones de trabajo (artículo 4, a), iii), y el establecimiento y la aplicación de un sistema de inspección y de sanciones adecuadas, como la denegación de contratos o la retención de los pagos debidos, por la no aplicación de las disposiciones de las cláusulas de trabajo (artículo 5). Además, tomando nota de que en virtud de la Ley de 2007 sobre la Contratación Pública, la autoridad de contratación pública de Rwanda (RPPA) es competente en la reglamentación y supervisión de todas las operaciones de contratación pública, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre toda medida adoptada o prevista por la RPPA con miras a garantizar unas condiciones de trabajo justas a los encargados de la ejecución de contratos públicos.***

Ucrania

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), en 2017, en relación con la situación de los atrasos salariales en el país, y de la respuesta del Gobierno. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU), recibidas el 31 de agosto y el 29 de octubre de 2018, en relación con la misma cuestión.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución)

La Comisión toma nota de que, en marzo de 2017, el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la FPU, la KVPU, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Transporte, la Asociación de Sindicatos Autónomos Panucranianos, la Asociación de Sindicatos Panucranianos y las asociaciones sindicales unidas (*«Iednist»*), la Confederación de Sindicatos Independientes de Ucrania y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Pequeñas y Medianas Empresas de Ucrania, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT (documento GB.329/INS/20/2). Tomando nota de la reclamación presentada sobre la situación de demoras en el pago de los salarios en el país, el Comité examina más abajo el seguimiento dado a las recomendaciones del comité tripartito en virtud del artículo 12.

Artículo 12 del Convenio. Pago del salario a intervalos regulares. Medidas para remediar la situación de los salarios al terminar la relación de trabajo. Situación de demoras salariales en el país. Tanto la Comisión en sus comentarios anteriores como el Consejo de Administración en su decisión sobre la reclamación pidieron al Gobierno que continuara sus esfuerzos para remediar la cuestión de las demoras salariales. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que, pese a que se han adoptado diversas medidas para remediar el problema, las demoras salariales en Ucrania han aumentado desde 2016 debido a la difícil situación económica y al conflicto armado en el este del país. La Comisión toma nota también de que la KVPU señala que, a pesar de las numerosas normas aprobadas, las demoras salariales han aumentado en los últimos años. La Comisión reitera que la aplicación del artículo 12 en la práctica comprende tres elementos esenciales: 1) control eficiente y supervisión; 2) sanciones adecuadas, y 3) medios de reparación del daño causado, incluido no sólo el pago total de las sumas adeudadas, sino también una compensación justa por las pérdidas ocasionadas en razón de la demora en el pago (Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 368).

En relación con el control eficiente y la supervisión, la Comisión toma nota de que el Consejo de Administración pidió al Gobierno que adoptara sin demora todas las medidas adicionales que sean necesarias para garantizar un control efectivo del pago de los salarios por parte de los servicios de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre las inspecciones efectuadas por el Servicio Estatal del Trabajo y por sus direcciones territoriales sobre el pago de los salarios, lo que ha dado lugar a que se dicten instrucciones para corregir la situación, se remitan algunos casos a los organismos encargados de aplicar la ley y los tribunales administrativos, y se impongan sanciones y el pago de un porcentaje de las demoras salariales. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la KVPU considera que los organismos estatales encargados de controlar y supervisar la aplicación de la legislación pertinente no funcionan con eficacia. *Al tiempo que destaca la importancia del funcionamiento adecuado de los servicios de inspección del trabajo que deberán ser capaces de identificar las violaciones de la legislación en materia de salarios y sancionar a los infractores por el incumplimiento del artículo 12 (Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 369), la Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación de los Convenios núms. 81 y 129.*

En relación con la imposición de sanciones adecuadas la Comisión toma nota de que el Consejo de Administración pidió al Gobierno que adoptara sin demora todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación plena del Convenio, incluyendo sanciones suficientemente eficaces y disuasorias para prevenir y castigar las infracciones. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala: i) el artículo 41 del Código de Infracciones Administrativas, el artículo 265 del Código del Trabajo y el artículo 175 del Código Penal, que establecen sanciones por el impago o el pago atrasado de los salarios, y ii) el Consejo de Ministros ha adoptado una serie de medidas, en particular, el aumento de las multas aplicables a los directores de los departamentos encargados de aplicar la ley que han tolerado las demoras en el pago de los salarios, y la limitación de las primas concedidas a los directores de empresas públicas en las que se dan casos de demoras salariales. El Gobierno proporciona también información detallada sobre las cuantías de las sanciones administrativas y de las multas económicas impuestas en 2016 y 2017 por demoras en el pago de los salarios. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la KVPU considera que no se aplica en la práctica la legislación sobre responsabilidad de los empleadores. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.*

En lo que se refiere a las medidas para corregir los perjuicios causados, la Comisión toma nota de que el Consejo de Administración pidió al Gobierno que garantice que los trabajadores afectados por los salarios atrasados reciban una indemnización adecuada. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el 22 de julio de 2016, el Consejo de Ministros adoptó un plan de medidas urgentes para el pago de los atrasos salariales (orden núm. 517-p); ii) se han emprendido investigaciones de seguimiento de las quejas individuales presentadas, y iii) algunos casos de demoras salariales son remitidos a los tribunales locales. La Comisión toma nota también de que la FPU y la KVPU señalan también que las decisiones judiciales sobre el pago de las demoras salariales no se están aplicando. La KVPU informa además de que los trabajadores se tropiezan con trabas para interponer los recursos judiciales a su disposición, en particular, debido a su falta de conocimientos jurídicos y de recursos económicos para subvenir a los costes de los abogados. *La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.*

Demoras salariales en la industria naval. La Comisión toma nota de los informes de la FPU de que las demoras salariales han aumentado en uno de los tres astilleros a los que alude la reclamación examinada por el Consejo de Administración. En este sentido, el Gobierno señala que: i) en marzo de 2018, se llevó a cabo una visita de inspección en el astillero en cuestión, en el que se pusieron de manifiesto vulneraciones de la legislación en materia de pago de salarios,

y que ii) a raíz de esta inspección, se ordenó al director del astillero que pusiera fin a estas violaciones, se elaboró un informe de las infracciones cometidas, y los resultados de la inspección fueron transmitidos a la oficina regional para una ulterior decisión sobre la imposición de una multa. La Comisión toma nota de esta información.

Demoras salariales en la industria de la minería. La Comisión toma nota de que la KVPU señala que las demoras salariales son especialmente frecuentes en las empresas públicas de minería de carbón. En concreto, la KVPU alega que las situaciones de demora salariales han conducido a una serie de acciones de protesta en las provincias de Donetsk, Luhansk y Volyn, incluido un caso de autoinmolación, y otros de huelgas de hambre y de rechazo de los mineros a salir de la mina, con graves repercusiones para su salud. La Comisión toma nota de que el Gobierno no respondió a estos graves alegatos. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.**

La práctica de «pago de los salarios en sobres». En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para eliminar la práctica con arreglo a la cual los trabajadores se ven obligados a aceptar el pago no declarado de sus salarios «en sobres», lo que da lugar al impago de las cotizaciones sociales correspondientes. **Tomando nota de que el Gobierno no proporciona ninguna información a este respecto, la Comisión reitera su solicitud previa.**

Por último, la Comisión toma nota de que el Consejo de Administración alentó al Gobierno a involucrar plenamente a los interlocutores sociales en la búsqueda de soluciones al problema de las demoras salariales. **Reiterando que para poner fin al problema de la acumulación de atrasos salariales se requiere de un diálogo abierto y permanente con los interlocutores sociales (Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 374), la Comisión pide al Gobierno que involucre plenamente a los interlocutores sociales en la búsqueda de soluciones a la cuestión de las demoras salariales y a que garantice el pago de los salarios a intervalos regulares. La Comisión recuerda también al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.**

La Comisión toma nota de que en la aplicación del nuevo ciclo de presentación de memorias para los convenios técnicos adoptados por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2018, se pedirá al Gobierno que envíe una memoria sobre la aplicación del Convenio en 2019.

La Comisión plantea otras cuestiones sobre la aplicación de convenios ratificados en materia de salario en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)

Artículo 3 del Convenio. Funcionamiento del mecanismo de fijación de los salarios mínimos. La Comisión recuerda que, tras la discusión de este caso ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2014, había solicitado al Gobierno que proporcionara información sobre la reactivación anunciada de la Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos y la ulterior fijación de un nuevo salario mínimo en el país. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que en 2015 se designó una Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos, y que ésta realizó un estudio exhaustivo de la economía con miras a prestar asesoramiento al Gobierno sobre la viabilidad de fijar un salario mínimo en el país y la forma que el salario mínimo debería adoptar. El Gobierno señala asimismo que el informe de la Junta Consultiva se estaba discutiendo en el Gabinete. No obstante los progresos realizados con la reactivación del mecanismo de fijación de los salarios mínimos en 2015, la Comisión toma nota con **preocupación** de que el salario mínimo, que se fijó por última vez en 1984, aún debe ajustarse. **Por consiguiente, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar el nivel del salario mínimo sin demora. Recordando la importancia que reviste asegurar la plena participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las fases de este proceso, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la composición de la Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos y sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales al revisar el nivel del salario mínimo.**

Uruguay

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1954)

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que la limitación del ámbito de aplicación del decreto núm. 475/005 y de la ley núm. 18098 a los contratos públicos de servicio responde a las características especiales de este tipo de contratos, cuyo cumplimiento se prolonga en el tiempo, por lo que establece vínculos laborales que demandan el reconocimiento de derechos especiales. Por el contrario, el contrato de bienes comprende obligaciones cuyo cumplimiento se da de forma instantánea en el momento en que el proveedor entrega el bien o producto. En lo que respecta a los contratos de obra pública, el Gobierno indica que dado que este tipo de contratos implican el suministro tanto de bienes como de servicios, los citados textos son igualmente aplicables a todos aquellos aspectos del contrato que impliquen la prestación de un servicio. En este sentido, el Gobierno se refiere a la adopción del decreto núm. 257/015, de 23 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales para los Contratos de Obra Pública y al manual de contratación pública y pliegos de licitación de bienes, obras y servicios, que incluyen la ley núm. 18098 dentro de la normativa que rige para la contratación pública. La Comisión toma nota de las aclaraciones proporcionadas por el Gobierno y recuerda que, tal y como se explica en la Guía práctica preparada por la Oficina en 2008 (pág. 17), el Convenio se aplica a todos los contratos públicos, tengan por objeto trabajos de construcción de obras (por ejemplo, la construcción de una nueva autopista o la ampliación de una terminal de aeropuerto), bienes (como por ejemplo, la compra de uniformes de funcionarios de aduanas o la compra de equipos de informática) o servicios (por ejemplo, servicios de limpieza o de tecnología de la información). Por otra parte, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre la adopción de las medidas tomadas para modificar la ley núm. 18098 con miras a armonizarla plenamente con los requisitos de este artículo del Convenio, ya que esta ley sólo impone el respeto de las normas salariales fijadas por los consejos de salarios y no el de las condiciones más favorables previstas por la legislación, un convenio colectivo o un laudo arbitral. ***Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la ampliación del alcance de las disposiciones del decreto núm. 475/005 a fin de cubrir todos los tipos de contratos públicos previstos por el Convenio. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno que modifique la ley núm. 18098 para armonizarla plenamente con los requisitos del artículo 2 del Convenio.***

Yemen

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1969)

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. El Gobierno informa de que en coordinación con la OIT se ha preparado un proyecto de Código del Trabajo que está de conformidad con las normas internacionales del trabajo. El Gobierno añade que las cuestiones planteadas en los comentarios anteriores de la Comisión en relación con la inclusión de cláusulas laborales en los contratos celebrados por las autoridades públicas, tal como establece el artículo 2 del Convenio, se señalarán a la atención de la Comisión Suprema sobre Licitaciones y Subastas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que quiere recibir la asistencia técnica de la OIT en relación con las medidas a adoptar para garantizar que todos los contratos públicos contengan cláusulas de trabajo que estén en conformidad con el Convenio. ***La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los contratos públicos contengan cláusulas de trabajo y espera que el Gobierno esté pronto en posición de informar de que se han realizado progresos en lo que respecta a dar pleno efecto a este requisito fundamental del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.***

Zambia

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1979)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (ratificación: 1972)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados en materia de salario, la Comisión estima oportuno examinar los Convenios núms. 131 (fijación de salarios mínimos) y 95 (protección del salario) en un solo comentario.

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)

Artículo 4, 2) y 3), del Convenio. Consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y participación directa de las mismas en el sistema de fijación de salarios. La Comisión toma nota de que, en respuesta a las cuestiones planteadas anteriormente por la Federación de Empleadores de Zambia (ZFE) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) relativas a la ausencia de consultas con las organizaciones de empleadores en el proceso de ajuste de los salarios mínimos, el Gobierno indica en su memoria que las consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores tienen lugar a través del Consejo Consultivo Tripartito de Trabajo (TCLC) establecido en virtud de la Ley de Relaciones Laborales. El Gobierno indica asimismo que responderá a las preocupaciones expresadas anteriormente por la Comisión en relación con el artículo 3, 1), de la Ley sobre Salarios Mínimos y Condiciones de Trabajo, que prevé únicamente la celebración de consultas con los sindicatos en el proceso de fijación de los salarios mínimos, en el contexto de la reforma de la legislación laboral en curso. En particular, el Gobierno hace referencia al proyecto de Código del Trabajo, que revisaría y refundiría diversas leyes, incluida la Ley sobre Salarios Mínimos y Condiciones de Trabajo. El Código del Trabajo propuesto establecería un Comité Consultivo Laboral, como un comité *ad hoc* del TCLC, con el mandato de investigar los salarios y las condiciones de trabajo en cualquier sector, y de formular recomendaciones al Ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre los salarios mínimos y las condiciones de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que la reforma de la legislación laboral se lleva a cabo en consulta con los interlocutores sociales. ***La Comisión confía en que, al finalizar el proyecto de legislación***

en plena consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, el Gobierno tenga en cuenta sus comentarios, y le pide que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto. Pide asimismo al Gobierno que asegure la plena consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, según proceda, la participación directa de las mismas, en la siguiente revisión de los salarios mínimos.

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)

Artículo 12 del Convenio. Pago del salario a intervalos regulares. En lo que respecta a sus comentarios anteriores en los que solicita una relación detallada de los problemas de impago o de pago retrasado del salario observados en el país, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no había información disponible sobre este tema en el momento de la presentación de su memoria. **Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud de que el Gobierno suministre información detallada sobre la cuantía de los salarios atrasados y el número de trabajadores afectados, e indique qué sectores de actividad económica, en su caso, se ven afectados por el pago irregular del salario.**

La Comisión plantea otras cuestiones relativas a la aplicación de los convenios en materia de salario en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 26** (Barbados, Canadá, China: Región Administrativa Especial de Macao, Colombia, Dominica, República Dominicana, Guinea-Bissau, Lesotho, Malawi, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Zimbabwe); el **Convenio núm. 94** (Antigua y Barbuda, Belice, ex República Yugoslava de Macedonia, Guyana, Islas Salomón, Malasia: Sabah, Malasia: Sarawak, Mauritania, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Curazao, Sierra Leona, Singapur, Turquía, Uganda); el **Convenio núm. 95** (Albania, Argentina, Bahamas, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Brasil, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Dominica, República Dominicana, España, Eswatini, Granada, Islas Salomón, Kirguistán, Malasia, Nicaragua, Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, República Unida de Tanzania, Tayikistán, Ucrania, Uganda, Zambia); el **Convenio núm. 99** (Colombia, Kenya, Malawi, Papua Nueva Guinea, Seychelles, Zimbabwe); el **Convenio núm. 131** (Antigua y Barbuda, Brasil, El Salvador, ex República Yugoslava de Macedonia, Kenya, Kirguistán, Ucrania, Zambia); el **Convenio núm. 173** (Albania, Botswana, España, Ucrania, Zambia).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 26** (Argentina, Bahamas, Belarús, República Checa, Chile, China, Ghana, Granada, Jamaica, Luxemburgo); el **Convenio núm. 95** (Barbados, República Checa, Santa Lucía); el **Convenio núm. 99** (República Checa, El Salvador, Granada); el **Convenio núm. 131** (Albania, Chile, Eswatini, República Unida de Tanzania).

Tiempo de trabajo

Haití

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (ratificación: 1952)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (ratificación: 1952)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) (ratificación: 1952)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (ratificación: 1958)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo, la Comisión estima que conviene examinar los Convenios núms. 1, 14, 30 y 106 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 29 de agosto de 2018, de la Asociación de Industrias de Haití (ADIH), recibidas el 31 de agosto de 2018, y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (Comisión de la Conferencia), y de la repercusión de la misma, en particular, sobre la ley relativa a la organización y reglamentación del trabajo con una duración de veinticuatro horas repartida en tres segmentos de ocho horas (en adelante, Ley sobre el Tiempo de Trabajo), de 2017, sobre la aplicación de los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo. En sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: i) revise, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, la conformidad del Código del Trabajo y de la Ley sobre el Tiempo de Trabajo con los convenios de la OIT sobre el tiempo de trabajo que han sido ratificados; ii) fortalezca la inspección del trabajo y otros mecanismos de control del cumplimiento pertinentes para velar por que los trabajadores se beneficien de la protección que brindan los convenios; iii) informe a la Comisión de Expertos sobre estas medidas, y iv) recurra a la asistencia técnica de la OIT para abordar estas cuestiones.

La Comisión toma nota de que en el curso de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, el Gobierno recordó que los convenios ratificados por Haití forman parte del cuerpo jurídico interno de conformidad con el artículo 276-2, de la Constitución haitiana, y por lo tanto están por encima de la legislación nacional en la jerarquía normativa y pueden invocarse sin reserva ante los tribunales. En seguimiento de las observaciones de la Comisión de Expertos acerca de la aplicación de la Ley sobre el Tiempo de Trabajo, el Gobierno señaló que preveía celebrar consultas tripartitas para detectar y abordar principales dificultades encontradas a la hora de aplicar la ley, y adoptar ordenanzas o medidas reglamentarias en las que se indique el ámbito de aplicación correspondiente. Por otra parte, el Gobierno es consciente del retraso de la finalización del proceso de reforma del Código del Trabajo; las discusiones se entablaron en la oficina del Primer Ministro y proseguirán en un marco tripartito, con arreglo al Acuerdo de San José, de 21 de marzo de 2018, y a las recomendaciones de la Oficina.

Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CTSP lamenta la ausencia de progresos sobre las cuestiones relativas al tiempo de trabajo desde que tuvo lugar la discusión de la Comisión de la Conferencia. No obstante, la CTSP señala que se han retomado las discusiones sobre la reforma del Código del Trabajo. Además, la Comisión toma nota de que la ADIH confirma que, en agosto de 2018, se reanudaron las discusiones tripartitas sobre la reforma del Código del Trabajo. Según la ADIH, la Ley sobre el Tiempo de Trabajo debe ser derogada, y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben ser consultadas sobre la aplicación de los convenios ratificados en la materia. La Comisión toma nota asimismo de que la CSI se refiere a la discusión del caso en el seno de la Comisión de la Conferencia y señala, en particular, que: i) la Ley sobre el Tiempo de Trabajo que liberaliza la reglamentación sobre este tema conlleva graves abusos; ii) esta ley ha sido adoptada sin consultas previas y al margen del proceso de negociación del nuevo Código del Trabajo, y iii) la situación se ha agravado por la falta de recursos de la inspección del trabajo. La CSI se refiere en particular a: i) los trabajadores en los sectores informal y doméstico que están sometidos a condiciones de trabajo indignas, tanto en lo que se refiere a la duración del tiempo de trabajo como en materia de derecho a vacaciones; ii) los agentes de seguridad y los trabajadores de empresas subcontratadas en el sector textil, donde cabe lamentar la ausencia de horarios de trabajos fijos y el rechazo al pago de las horas extraordinarias por parte de los empleadores, y iii) los trabajadores de las zonas francas de exportación que están particularmente expuestos a estos abusos. **La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre el conjunto de estas observaciones.**

Por último la Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la cual informa a la Comisión que, a raíz de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, ha solicitado la asistencia técnica de la Oficina con objeto, en particular, de que lo ayude a presentar las memorias debidas, impulsar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social con miras a la aplicación de reformas sociales, así como a tratar otros puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno señala asimismo que espera poder recibir esta asistencia técnica antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. ***La Comisión espera que dicha asistencia pueda prestarse sin demora. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre los resultados de la asistencia técnica prevista, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación efectiva en la legislación y en la práctica de los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2020.]

Indonesia

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (ratificación: 1972)

Artículo 8 del Convenio. Excepciones temporales al descanso semanal normal. En comentarios anteriores, la Comisión observó que en el artículo 11, b), del decreto del Ministerio de Mano de Obra y Migraciones núm. KEP 102/MEN/VI/2004 sobre el trabajo en horas extraordinarias y su remuneración (el decreto de 2004) se dispone que, en caso de que los trabajadores trabajen en su día de descanso semanal, se les deberán pagar horas extraordinarias. La Comisión, al tiempo que recordó que, con arreglo al artículo 8, 3), en el que se prevén excepciones temporales en lo relativo al día de descanso semanal, deberá concederse un descanso semanal compensatorio de una duración total de veinticuatro horas, como mínimo, al margen de toda compensación económica, pidió al Gobierno que tomase las medidas adecuadas para garantizar que la legislación nacional diese pleno efecto al artículo 8. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, basándose en los resultados de un examen del decreto de 2004, se ha convenido que éste va a revisarse con el fin de que contemple un tiempo de descanso compensatorio cuando los trabajadores trabajan en su día de descanso semanal. El Gobierno señala también que los trabajadores no han comunicado a los inspectores del trabajo que no se haya respetado el día de descanso y que esto se debe al hecho de que la aplicación del decreto en la práctica se rige por un convenio entre los trabajadores y sus empleadores. La Comisión entiende a partir de la memoria del Gobierno que el trabajo durante el día de descanso semanal está regulado por convenios colectivos. Asimismo, la Comisión toma nota de que el decreto de 2004 no contiene una lista de las circunstancias limitadas en las que podría permitirse trabajar durante el día de descanso semanal. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 8, 1), sólo permite excepciones temporales al descanso semanal normal en tres circunstancias: a) en caso de accidente o grave peligro de accidente y en caso de fuerza mayor o de trabajos urgentes que deban efectuarse en las instalaciones, pero solamente en lo indispensable para evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal del establecimiento; b) en caso de aumentos extraordinarios de trabajo debidos a circunstancias excepcionales, siempre que no se pueda normalmente esperar del empleador que recurra a otros medios, y c) para evitar la pérdida de materias perecederas. Recuerda además que, de conformidad con el artículo 8, 2), las organizaciones representativas interesadas de empleadores y de trabajadores, si las hubiera, deberán ser consultadas para determinar las circunstancias en que se pueden conceder exenciones temporales de conformidad con las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo precedente. En su Estudio General de 2018 relativo a los instrumentos sobre el tiempo de trabajo, la Comisión destacaba la importancia de limitar la aplicación de excepciones a la regla general de veinticuatro horas de descanso semanal a lo estrictamente necesario, y de que tales excepciones se autoricen en condiciones claramente definidas, de conformidad con el artículo 8, 1). ***Por lo tanto, la Comisión solicita al Gobierno que, con ocasión de la revisión del decreto de 2004 sobre las horas extraordinarias, se limiten las circunstancias en las que se pueda autorizar el trabajo durante los días de descanso semanal a las que se definen en el artículo 8, 1), y que se conceda un descanso compensatorio, con arreglo al artículo 8, 3), al margen de toda compensación económica. Pide al Gobierno que comunique todo avance efectuado al respecto. También pide al Gobierno que provea información sobre cualquier convenio colectivo que regule las posibles exenciones del descanso semanal normal.***

Malasia

Sarawak

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (ratificación: 1964)

Artículo 2 del Convenio. Derecho al descanso semanal. Uniformidad del periodo de descanso semanal. En comentarios anteriores, la Comisión constató que, dada la definición restrictiva del término «asalariado» en la ordenanza del trabajo de Sarawak (ley núm. A1237, de 2005), algunas categorías de trabajadores no gozan de la protección jurídica que se otorga en el artículo 105B, 1), de dicha ley, en el que se establece que debe concederse a todo asalariado un descanso semanal de un día completo. En particular, tomó nota de que era así en el caso de los trabajadores no manuales

que trabajan en empresas industriales y cuyo salario mensual supera los 2 500 ringgit malasios, ya que están excluidos de la definición de «asalariado» (artículo 2 y lista). Al tiempo que recordó que el Convenio se aplica a «todo el personal empleado en cualquier empresa industrial» (*artículo 2, 1*)), solicitó al Gobierno que indicase de qué manera garantizaba el derecho al descanso semanal de aquellos trabajadores que no estaban cubiertos por la ordenanza del trabajo. Asimismo, la Comisión recordó que en el Convenio se establece que el período de descanso semanal se concederá, siempre que sea posible, al mismo tiempo a todo el personal de cada empresa, y que, siempre que sea posible, coincidirá con los días consagrados por la tradición o las costumbres del país o de la región (*artículo 2, 2*), y 3)). Pidió al Gobierno que especificase cómo se estaban aplicando en la ley y en la práctica estos principios. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que: i) en el caso de los asalariados que queden excluidos del ámbito de aplicación de la ordenanza del trabajo, sus condiciones de trabajo están determinadas por los términos y las condiciones del contrato laboral o convenio colectivo correspondiente; esos asalariados tendrán derecho a un día de trabajo si así lo especifica su contrato de trabajo; ii) en la ordenanza del trabajo no se indica cuándo debe tomarse el día de descanso, y iii) el empleador fijará el día de descanso cada cierto tiempo. Así, la Comisión constata con *preocupación* que no se ha avanzado hacia la plena aplicación del *artículo 2*. ***Pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que: i) todo el personal empleado en una empresa industrial tenga derecho a un descanso semanal; ii) el período de descanso se conceda, siempre que sea posible, al mismo tiempo a todo el personal de cada empresa, y iii) el descanso semanal coincida, siempre que sea posible, con los días consagrados por la tradición o las costumbres del país o de la región.***

Artículo 5. Descanso compensatorio. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 105C de la ordenanza del trabajo de Sarawak sólo contempla una compensación monetaria, y no un descanso compensatorio, para los trabajadores que trabajen en su día de descanso. La Comisión recordó que en el *artículo 5* se establece que se concedan períodos de descanso compensatorios, siempre que sea posible, a los trabajadores que trabajen en su día de descanso, y solicitó al Gobierno que considerase la posibilidad de modificar la ordenanza del trabajo de Sarawak para dar pleno cumplimiento a las disposiciones de dicho artículo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no hay ninguna disposición en la legislación que establezca la obligación de que el empleador conceda un descanso compensatorio. ***Dado que no se ha progresado, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se conceda un descanso compensatorio a los trabajadores que tengan que trabajar en su día de descanso, independientemente de toda compensación monetaria.***

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 1** (*Guinea Ecuatorial*); el **Convenio núm. 30** (*Guinea Ecuatorial*); el **Convenio núm. 101** (*Sierra Leona*).

Seguridad y salud en el trabajo

Antigua y Barbuda

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2002)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 2002)

Con el fin de aportar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar conjuntamente los Convenios núms. 155 (SST) y 161 (servicios de salud en el trabajo) en un mismo comentario.

Disposiciones generales

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la intención del Gobierno de adoptar una nueva legislación en materia de SST y de derogar la división D del Código del Trabajo (núm. 14 de 1975) (capítulo 27) relativa a la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que no se han adoptado medidas legislativas o de otra índole en relación con la aplicación de este Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todo avance en lo referente a su intención de adoptar una nueva legislación en materia de SST. Pide asimismo al Gobierno que tenga en cuenta los comentarios de la Comisión que figuran a continuación en el contexto de cualquier reforma de su legislación en materia de SST, y que adopte las medidas necesarias para velar por que se dé pleno cumplimiento a las disposiciones de este Convenio. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre toda medida adoptada o prevista a este respecto.**

Artículos 4, 5, 7, 11, a), b), e) y f), y 15 del Convenio. Formular y aplicar una política nacional en materia de SST. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno no había tomado medidas para formular o implementar una política nacional coherente en SST. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas o previstas para formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de SST y medio ambiente de trabajo en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, teniendo en cuenta las esferas de acción establecidas en el artículo 5 y asegurando que las funciones a las que se hace referencia en los apartados a), b), e) y f) del artículo 11 se realicen progresivamente, y que se tomen las disposiciones institucionales mencionadas en el artículo 15.**

Artículos 13 y 19, f). Protección contra consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la legislación nacional no comentó sobre las cuestiones reguladas en los artículos 13 y 19, f), del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se proteja de consecuencias injustificadas a los trabajadores que juzguen necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud, y para garantizar que no se exija a dichos trabajadores que reanuden una situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud.**

Artículo 17. Medidas encaminadas a asegurar que dos o más empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo colaboren en la aplicación de las medidas previstas en el Convenio. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no hay disposiciones en la legislación nacional que den efecto a este artículo del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en la legislación y en la práctica a fin de asegurar la colaboración en la aplicación de las medidas previstas en este Convenio cuando dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo.**

Artículo 19, a)-e). Disposiciones adoptadas a nivel de empresa a fin de asegurar condiciones adecuadas para todos los aspectos de la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes, las consultas con ellos y su formación. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas, en la legislación y en la práctica, para dar cumplimiento al artículo 19, a)-e), del Convenio.**

Artículo 20. Cooperación entre los empleadores y los trabajadores y/o sus representantes en la empresa. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione más información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 20 del Convenio.**

Aplicación en la práctica. Tomando nota de la ausencia de información a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyendo información sobre el número, naturaleza y causas de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedades notificadas.

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

Medidas para aplicar el Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno proporcionar información sobre los servicios de salud en el trabajo establecidos con arreglo a convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los trabajadores interesados, o de cualquier otra manera aprobada por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados. La Comisión toma nota con **preocupación** de la indicación del Gobierno de que no se han adoptado medidas legislativas o de otra índole en relación con la aplicación de este Convenio, y de que no existen servicios específicos de SST en el país con funciones preventivas que se encarguen de asesorar a los empleadores. La Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno según la cual en los casos de incidentes en materia de SST, las personas suelen solicitar la asistencia de los médicos locales. **Recordando que el establecimiento de servicios de salud en el trabajo puede efectuarse por vía legislativa, con arreglo a convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los trabajadores interesados; o de cualquier otra manera aprobada por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se dé pleno cumplimiento a las disposiciones de este Convenio en un futuro cercano. Pide asimismo al Gobierno que facilite información detallada sobre toda medida adoptada o prevista este respecto.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belice

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general del 2015 con relación al presente Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.

La Comisión toma nota de la información que figura en la última memoria del Gobierno en el sentido de que el proyecto de ley sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) toma efectivamente en consideración todas las observaciones de la Comisión debido a que garantiza la protección eficaz de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. La Comisión también toma nota de que según la memoria del Gobierno en el proyecto de ley SST se incluyen disposiciones relativas a las dosis máximas admisibles de las radiaciones ionizantes, el empleo alternativo (especialmente para las mujeres embarazadas) y la prevención de la exposición laboral durante una emergencia. Además, según la información disponible, el proyecto de ley SST aún no ha sido adoptado debido a que existen preocupaciones de que puede resultar gravoso para los empleadores. La Comisión toma nota de que, a pesar de su solicitud anterior, el Gobierno no ha proporcionado la memoria detallada requerida. La Comisión desea subrayar que la indicación de que la nueva legislación se encuentra en proceso de adopción no libera al Gobierno de la obligación de garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio durante el período de transición y de suministrar esa información en su memoria. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación del Convenio, incluida la nueva legislación, de haber sido adoptada y, en caso contrario, la manera en que el Gobierno garantiza la aplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. Además, solicita nuevamente al Gobierno que responda detalladamente a su observación anterior, redactada como sigue:**

Artículo 3, párrafo 1, y artículo 6, párrafo 2, del Convenio. Dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que el 13 de marzo de 2009 fue reactivada la Junta Consultiva del Trabajo cuya función principal es encargarse de la revisión de la legislación nacional del trabajo. La Comisión toma nota de que en el Ministerio se está determinando cuál será el consultor que, junto con la Junta Consultora del Trabajo llevará a cabo la revisión de la legislación y de que los comentarios formulados por la Comisión se someterán ante la mencionada junta. **La Comisión espera que, en el curso de la revisión actual de la legislación nacional del trabajo, se tengan debidamente en cuenta los límites de exposición adoptados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica con objeto de garantizar la protección efectiva de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes en el curso de sus labores.**

Artículo 14. Empleo alternativo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que en la Ley del Trabajo no existen disposiciones que contemplen el traslado de las embarazadas de un trabajo que implica la exposición a radiaciones ionizantes, a otro trabajo. No obstante, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, adoptada por el Gabinete el 9 de noviembre de 2004, puede proporcionar un marco adecuado para la elaboración de una legislación que pueda prever ese traslado y que esa legislación sea elaborada en consulta con la Junta Consultiva del Trabajo. **La Comisión espera que durante la revisión de la legislación nacional del trabajo que se lleva a cabo actualmente, se tenga debidamente en cuenta la necesidad de garantizar que se brinden oportunidades de empleo alternativas adecuadas que no impliquen una exposición a radiaciones ionizantes para los trabajadores que hubiesen acumulado una dosis efectiva más allá de la cual pueda derivarse un perjuicio inaceptable, así como para las mujeres embarazadas, que de otro modo podrían verse enfrentadas al dilema de que la protección de su salud signifique la pérdida de su empleo.**

Exposición ocupacional durante una emergencia. La Comisión toma nota de que en la Ley del Trabajo no existe una disposición que establezca las circunstancias en las que se autoriza una exposición excepcional. **La Comisión solicita al Gobierno que durante la revisión de la legislación nacional del trabajo que se lleva a cabo actualmente, se tenga debidamente en cuenta la necesidad de determinar las circunstancias en las que se autoriza una exposición excepcional, y que la protección tenga toda la eficacia posible contra los accidentes y durante las operaciones de emergencia, especialmente respecto del diseño y de las características de protección del lugar del trabajo y del equipo, y el desarrollo de intervenciones**

técnicas de emergencia, cuya utilización en situaciones de emergencia permita evitar la exposición de las personas a radiaciones ionizantes.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1977)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1990)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar la aplicación de los Convenios núms. 136 (benceno) y 162 (asbesto).

Protección contra riesgos particulares

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)

Artículo 4 del Convenio. Prohibición del empleo de benceno como disolvente o diluyente. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que no se prohíbe el empleo del benceno. **La Comisión pide al Gobierno, de acuerdo con el artículo 4 del Convenio, que adopte las medidas necesarias para prohibir el empleo de benceno o de productos que contengan benceno como disolvente o diluyente, salvo cuando se efectúe la operación en un sistema estanco o se utilicen otros métodos de trabajo igualmente seguros.**

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

Artículos 3 y 4 del Convenio. Legislación y consulta. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria informaciones sobre las normas generales de salud y seguridad en el trabajo a las cuales se refirió anteriormente. La Comisión toma nota con **preocupación** de que no se han adoptado las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 3. Asimismo, con respecto a la aplicación del artículo 4, el Gobierno se refiere a la consulta con los interlocutores sociales acerca del sector de la construcción, pero no específicamente relacionada con el asbesto. **La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que, en aplicación de los artículos 3 y 4, adopte las medidas legislativas necesarias para: a) prevenir y controlar los riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto; b) proteger a los trabajadores contra tales riesgos, y c) consultar las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas acerca de las medidas que habrán de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.**

Artículos 9, 10, 11, 12 y 16. Medidas legislativas de prevención. Prohibición de la crocidolita y de la pulverización. Medidas prácticas para la prevención y el control. **La Comisión pide al Gobierno una vez más que proporcione información sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para garantizar la aplicación de los artículos 9 y 10 (medidas legislativas de prevención), 11 (prohibición de la crocidolita), 12 (prohibición de la pulverización) y 16 (medidas prácticas para la prevención y el control).**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Centroafricana

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2006)

Artículos 4, 5 y 8 del Convenio. Política nacional. Esferas de acción. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que el Departamento de Medicina de Trabajo emprendió un proyecto sobre la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). **Al tiempo que toma debidamente nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de SST y de medio ambiente de trabajo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y que tome las medidas necesarias por vía legislativa o reglamentaria para dar efecto a esta política, de conformidad con los artículos 4, 5 y 8 del Convenio.**

Artículo 7. Examen periódico de la situación en materia de SST y de medio ambiente de trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que el examen de la situación en materia de SST y de medio ambiente de trabajo no se lleva a cabo de manera sistemática ni a intervalos apropiados, debido a la falta de recursos materiales, humanos y financieros. **Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno relativas a la falta de recursos, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y de medio ambiente de trabajo sea objeto de un examen general a intervalos apropiados.**

Artículos 13 y 19, f). Situación de peligro inminente y grave para la vida o la salud. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre: a) las medidas adoptadas o previstas para asegurar que se proteja de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud, de conformidad con el artículo 13 del Convenio, y b) las medidas adoptadas para asegurar que un empleador no pueda exigir del trabajador que reanude una situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud, de conformidad con el artículo 19, f), del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar efecto a los artículos 13 y 19, f), del Convenio.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

China

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2007)

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (ratificación: 2002)

A efectos de dar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera adecuado examinar juntos el Convenio núm. 155 (seguridad y salud de los trabajadores) y el Convenio núm. 167 (seguridad y salud en la construcción).

A. Disposiciones generales

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

Artículo 11, c) y e), del Convenio. Elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión sobre las múltiples agencias responsables de las estadísticas relativas a la seguridad en el trabajo y que el Gobierno estableció un sistema de estadísticas mensual para aclarar el alcance, el contenido y la notificación de los accidentes del trabajo. La Comisión acoge con agrado la adopción de un sistema de estadísticas anual para el sector de las minas de carbón, como consecuencia de la alta incidencia de neumoconiosis en ese sector. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se notificaron, en 2013, 26 393 casos de enfermedades profesionales, 23 152 de los cuales correspondieron a neumoconiosis. **Solicita información sobre las medidas concretas adoptadas como consecuencia de la información estadística compilada respecto de la prevención de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedades profesionales, incluidas las medidas específicas adoptadas en relación con las neumoconiosis. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información acerca de la elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y que continúe transmitiendo estadísticas en ese sentido, incluso respecto del número de casos de neumoconiosis notificados. Solicita al Gobierno que comunique más información sobre la publicación anual de esta información, de conformidad con el artículo 11, e), del Convenio.**

B. Protección en las ramas específicas de actividad

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)

Artículo 8 del Convenio. Cooperación entre dos o más empleadores que realizan actividades simultáneamente en una misma obra. La Comisión tomó nota con anterioridad de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre las cuestiones relativas a la seguridad y la salud derivadas de la subcontratación en la industria de la construcción, y solicitó información sobre la aplicación de este artículo del Convenio en la práctica. A este respecto, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno en su memoria al artículo 24 del reglamento administrativo sobre seguridad en el trabajo en los proyectos de construcción, que establece que el principal contratista será responsable de la seguridad laboral general en la obra. Cuando el contratista principal subcontrate un proyecto de construcción a cualquier otra entidad, estipulará, de manera explícita, y de conformidad con la ley, sus respectivos derechos y obligaciones en relación con la seguridad en el trabajo. El contratista principal y el subcontratista tendrán una responsabilidad conjunta y solidaria respecto de la seguridad del proyecto subcontratado y compartirán obligaciones y responsabilidades. La Comisión también toma nota de que el Gobierno identifica algunos factores que contribuyen a la elevada tasa de accidentes en el sector de la construcción, incluidas la inadecuación de la propiedad de la empresa, la responsabilidad y la rendición de cuentas. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento en la práctica del artículo 24 del reglamento administrativo sobre seguridad en el trabajo en los proyectos de construcción, incluidas las inspecciones realizadas, las violaciones detectadas y las sanciones impuestas por incumplimiento. También solicita más información sobre la manera en que el principal contratista garantiza el cumplimiento de las medidas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores y su aplicación respecto de las obras con varios niveles de subcontratación.**

Artículo 18, 1). Trabajos en alturas, incluidos los tejados. La Comisión tomó nota con anterioridad de las observaciones de la CSI, en las que se indica que es frecuente que los trabajadores no usen arneses de seguridad cuando trabajan en alturas, con el fin de poder trabajar con más rapidez para finalizar los proyectos de construcción. En este sentido, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en respuesta a su solicitud anterior, según la cual, en virtud del artículo 3.0, 5), del Código Técnico de Seguridad del Trabajo en Alturas en la Construcción, los trabajadores estarán equipados con dispositivos y ropas de protección. La Comisión toma nota asimismo de la información disponible en el sitio web del Ministerio de Gestión de Emergencias, sobre el elevado número de accidentes en el sector de la construcción, que identifica las caídas desde alturas como una de las principales causas de accidentes de trabajo en el sector. ***La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para hacer cumplir la seguridad en los trabajos en altura y a que promueva el uso de equipos de seguridad en las obras de construcción. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para aplicar en la práctica el artículo 3.0, 5), del Código Técnico de Seguridad del Trabajo en Alturas en la Construcción. También solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de accidentes laborales registrados (y sus resultados) debido a la caída desde alturas.***

Artículo 35. Cumplimiento efectivo de las disposiciones del Convenio y aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en respuesta a su solicitud anterior, según la cual, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural fortaleció la supervisión de la seguridad y obliga a las empresas y obras de construcción a mejorar su gestión de la seguridad laboral. El Gobierno también indica que ha adoptado algunas medidas para promover la aplicación del Convenio, que incluyen: realizar inspecciones nacionales de seguridad laboral en la construcción; priorizar la inspección de las ciudades, empresas y proyectos con elevadas tasas de accidentes; y realizar un trabajo de investigación sobre la supervisión de la seguridad. El Gobierno indica asimismo que se adoptarán medidas para abordar los diversos problemas de la seguridad de la construcción, especialmente: mejorar la supervisión en la inspección de la seguridad, y fortalecer la investigación de los accidentes y las sanciones correspondientes. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, se produjeron 522 accidentes de trabajo y 648 fallecimientos en los proyectos nacionales de vivienda municipal en 2014. Según el Gobierno, las razones que hay detrás de estos accidentes incluyen la no estandarización del mercado de la construcción; la inadecuación de la propiedad de la empresa, rendición de cuentas y responsabilidad; falta de esmero en la eliminación de los riesgos ocultos en el lugar de trabajo; y la insuficiencia de las investigaciones y de las sanciones consecutivas a accidentes de trabajo. Además, la Comisión toma nota de la información disponible en el sitio web del Ministerio de Gestión de Emergencias, según la cual, en 2018, la industria de la construcción es el sector con mayor número de accidentes de trabajo. Toma nota con ***preocupación*** de que entre 2017 y 2018, se produjo un aumento del 4,3 por ciento en el número de accidentes de la construcción. ***La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la aplicación del Convenio en la práctica, y a que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para abordar las cuestiones relativas a la seguridad que se identificaron en el sector de la construcción. También insta al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para garantizar que se brinde los servicios de inspección adecuados en el sector y sanciones, y que comunique información detallada sobre toda evolución a este respecto. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyéndose el número y la naturaleza de las contravenciones registradas y las medidas adoptadas para abordarlas, y el número, la naturaleza y la causa de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que se notificaron.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Croacia

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1991)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 1991)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1991)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar los Convenio núms. 155 (SST), 161 (servicios de salud en el trabajo) y 162 (asbesto) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (UATUC) y de los Sindicatos Independientes de Croacia (NHS), recibidas en 2016.

A. Disposiciones generales

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información que figura en el registro del Instituto Croata de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo (CIHPSW) para 2017, y toma nota con ***preocupación***

de que el número total de casos registrados de enfermedades profesionales aumentó entre 2016 y 2017, pasando de 153 en 2016 a 172 en 2017. También toma nota de que, según el informe anual de 2017 de la Inspección del Trabajo, 22 accidentes mortales ocurrieron en 2017. ***La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la manera en que se aplica el Convenio y que continúe suministrando información sobre el número, la naturaleza y la causa de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales denunciadas.***

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

Artículos 5, a), b), c), e), g), h), i) y k), y 6 del Convenio. Establecimiento y funciones de los servicios de salud en el trabajo. La Comisión toma nota de la derogación de la antigua ley en materia de SST por la Ley sobre SST de 2014, y recuerda que los artículos 22 y 82 de la ley derogada daban efecto al artículo 5 del Convenio. La Comisión nota que el artículo 80 de la Ley sobre SST de 2014 obliga al empleador a proporcionar a los trabajadores servicios de salud en el trabajo para asegurar una vigilancia de la salud de los trabajadores apropiada a los riesgos, peligros y exigencias del lugar de trabajo, con el fin de proteger la salud de los trabajadores. El artículo 81 de la Ley sobre SST de 2014 prevé además que las actividades de medicina del trabajo, así como el plan y el programa de medidas de protección de la salud, deben ser prescritos en normas específicas en materia de protección y aseguramiento de la salud, y que el número mínimo de horas que el especialista en medicina del trabajo debe estar presente en el lugar de trabajo debe ser estipulado en una ordenanza. A este respecto, el Comité toma nota de las observaciones de la UATUC y de los NHS según las cuales, hasta 2016, el Ministerio de Salud no había adoptado normas que establezcan cuestiones tales como la presencia mínima del especialista en medicina del trabajo en el lugar de trabajo o los procedimientos para administrar los primeros auxilios. También nota que el Gobierno indica que la participación del especialista en medicina del trabajo en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo no se encuentra prevista en la legislación nacional y que la experiencia muestra que, en la práctica, el empleador raramente consulta con un especialista en medicina del trabajo para realizar esta evaluación, a pesar de que el artículo 5, a), del Convenio establece que las funciones de los servicios de salud en el trabajo deberán incluir la identificación y la evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. Adicionalmente, el artículo 20 de la Ley de Asistencia Sanitaria (en su versión modificada) define los tipos de atención sanitaria que se encuentran dentro del ámbito de las atenciones específicas para los trabajadores, pero establece que el contenido de las medidas relativas a las atenciones específicas para los trabajadores y el método para implementarlas deben ser establecidos por el Ministerio de Salud mediante una ordenanza a propuesta del CIHPSW, previa aprobación del Ministerio de Trabajo y del Sistema de Pensiones. Sin embargo, la UATUC y los NHS indican que estas medidas no han sido prescritas. ***Tomando nota de que la Ley sobre SST de 2014 no da efecto a la mayoría de las disposiciones del artículo 5 del Convenio y de que requiere la adopción de normas especiales que aún no han sido adoptadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione información sobre las medidas adoptadas para dar pleno efecto a los artículos 5 y 6 del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que indique si se han tomado medidas dirigidas a la adopción de las normas especiales relativas a las actividades relacionadas a la salud en el trabajo y al plan y al programa de medidas de protección de la salud, según lo previsto en el artículo 81 de la Ley sobre SST de 2014, así como las ordenanzas indicadas en el artículo 20 de la Ley de Asistencia Sanitaria. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una lista de tales normas, en caso de haber sido adoptadas.***

B. Protección contra riesgos específicos

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

Efectiva compensación de los trabajadores de la fábrica de Salonit. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió información sobre la aplicación en la práctica de la ley sobre compensación de los trabajadores empleados en Salonit d.d. (núm. 84/11), en virtud de la cual los trabajadores empleados en la fábrica Salonit (que elabora productos que contienen asbesto), cuando se declaró la quiebra en 2006, podían solicitar una compensación dentro de los sesenta días (artículo 2). A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el pago de la compensación debida a los trabajadores por la pérdida del empleo fue planeado en cuotas durante dos años, en 2011 y 2012. La Comisión toma nota con *interés* de la indicación del Gobierno de que todas las solicitudes de compensación han sido atendidas, todos los trabajadores de la fábrica de Salonit, 170 personas, han sido compensados en los casos en que tenían derecho a recibir una compensación y que han presentado una solicitud al Fondo de Protección del Medio Ambiente y la Eficiencia Energética, para ser compensados. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa al establecimiento de una comisión de quejas para resolver los recursos contra las decisiones adoptadas por el Fondo, integrada por representantes del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, Planificación Física y Construcción, Ministerio de Economía, Trabajo y Actividades Empresariales, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y el Fondo para la Protección del Medio Ambiente y la Eficiencia Energética. ***La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre toda evolución a este respecto, incluyendo el número de recursos presentados, y sobre las decisiones adoptadas por la comisión de reclamaciones ad hoc.***

Comisión para la solución de reclamaciones de compensación de los trabajadores afectados por enfermedades profesionales causadas por la exposición al asbesto (la Comisión de reclamaciones). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno de que, desde la creación de la Comisión de reclamaciones en 2007 hasta mediados de 2016, se han resuelto 1 318 reclamaciones (1 072 finalizaron con el pago de compensaciones), 22 están pendientes de resolverse ante los tribunales y 245 todavía no están resueltas. La Comisión toma nota de las observaciones

formuladas por el UATUC y el NHS, que proporcionan diferentes estadísticas relativas a las reclamaciones de compensación resueltas y sin resolver. La Comisión también toma nota de la falta de información relativa a las medidas adoptadas para sensibilizar a los trabajadores en relación con las posibilidades de buscar una reparación. **La Comisión pide al Gobierno que siga garantizando que todas las reclamaciones y solicitudes de compensación por parte de los trabajadores afectados por una enfermedad profesional, causada por la exposición al asbesto en el curso de su trabajo, se traten con la mayor rapidez posible. Pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos a este respecto, así como sobre las medidas adoptadas para sensibilizar a dichos trabajadores en relación con las posibilidades de buscar una reparación.**

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa al registro del CIHPSW sobre las enfermedades profesionales causadas por el asbesto, que se publica anualmente en línea y que incluye datos y estadísticas actualizados sobre las enfermedades causadas por el asbesto, desglosados por distribución geográfica, tipos de enfermedades, género, edad, tipos de educación y formación y otras mediciones. La Comisión toma nota de que, según los datos del CIHPSW, 89 casos de enfermedades profesionales causadas por el asbesto fueron registrados en 2017, de los cuales 79 (88,8 por ciento) afectaron a hombres y 10 (11,2 por ciento) a mujeres. Además, la Comisión toma nota de que, según los datos del CIHPSW, el porcentaje de enfermedades profesionales causadas por la exposición al asbesto en 2017 fue del 52 por ciento (89 de un total de 172 casos registrados). **Tomando nota del porcentaje, que permanece alto, de enfermedades profesionales causadas por el asbesto, la Comisión insta al Gobierno a que incremente sus esfuerzos para asegurar en la práctica la supervisión médica de los trabajadores que están o han estado expuestos al asbesto. La Comisión también pide al Gobierno que siga facilitando información relativa a la aplicación de este Convenio en la práctica, incluyendo todas las medidas adoptadas a nivel institucional para la aplicación del Convenio. Además, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica de la prohibición del uso del asbesto y de materiales que contengan asbesto en Croacia, que entró en vigor el 1.º de enero de 2006.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2006.

La Comisión toma nota de que el proyecto de reglamento de 31 de enero de 2003 sobre la utilización sin riesgos de productos químicos en el trabajo se está examinando. Además, toma nota de la declaración del Gobierno según la cual este proyecto de reglamento prevé la protección contra el cáncer profesional y remite a la norma internacional establecida para los límites de exposición por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el capítulo 3.6 del anexo 2 del proyecto contiene reglas aplicables en materia de efectos cancerígenos. También toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual este proyecto debería prever exámenes médicos. Espera que el reglamento se adopte próximamente y que garantice la aplicación del Convenio y prevea exámenes médicos o biológicos u otras pruebas o investigaciones, durante y después del empleo, de conformidad con el artículo 5 del Convenio. **La Comisión ruega al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación del Convenio y que transmita una copia de este reglamento una vez que se haya adoptado.**

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Marino

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2009.

Artículo 4 (prevención y limitación de los riesgos profesionales y protección de los trabajadores contra tales riesgos), artículo 8 (establecimiento de criterios que permitan definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y los límites de exposición), artículo 9 (medidas técnicas para garantizar que todo riesgo debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones se elimina en los lugares de trabajo) y artículo 10 (equipo de protección personal) del Convenio. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, aún se están definiendo las normas técnicas de referencia sobre la contaminación del aire en general y las vibraciones, y los criterios que permiten definir los casos en los que se deben proporcionar equipos de protección personal están directamente relacionados con estas normas técnicas de referencia. **La Comisión señala de nuevo su esperanza de que las normas técnicas cuya preparación estaría en curso se adopten en un futuro próximo, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados así como copias de las normas una vez que se hayan adoptado.**

Artículo 5. Consultas entre la autoridad competente y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión se felicita por la información relacionada con las numerosas consultas que el Departamento de Salud

Pública ha realizado con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre las medidas a adoptar para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de las pequeñas empresas, que llevaron a la adopción del decreto núm. 4, de 14 de enero de 2008, de revisión del anexo I del decreto núm. 123/2001. ***La Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre la aplicación práctica de este decreto.***

Artículo 11, párrafo 3. Otro empleo adaptado u otras medidas propuestas para asegurar el mantenimiento de los ingresos del trabajador trasladado. La Comisión toma nota con interés de las directivas detalladas sobre el establecimiento del control médico en base a la ley núm. 31/98, y de los textos de ley adoptados el 20 de diciembre de 2002 después de un amplio proceso de consultas. Esas directivas mencionan el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), y proporcionan instrucciones detalladas sobre los tipos de exámenes médicos y las obligaciones legales y médicas resultantes de esos exámenes. Asimismo, toma nota de que los trabajadores cuya capacidad de trabajo se ha visto reducida pueden ser empleados en actividades protegidas en los lugares de integración del Estado (Cantieri Integrativi Dello Stato). Por último, toma nota de que en virtud del artículo 9 del decreto núm. 15/2006, los trabajadores a los que cubre éste decreto podrían ser empleados por la administración pública en condiciones definidas en el acuerdo entre el Estado y el sindicato. ***La Comisión ruega al Gobierno que indique si el traslado a otro empleo al que se hace referencia sólo concierne a los trabajadores con discapacidad, o si también se prevé en los casos en los que la exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones no se aconseja por motivos médicos, incluso aunque no exista discapacidad. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre los casos en los que un traslado a otro empleo se ha producido tal como se prevé en este artículo del Convenio.***

Artículo 16. Sanciones y servicios de inspección. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de las estadísticas transmitidas por el Gobierno, que contienen información sobre las inspecciones efectuadas y los datos recogidos. Según estas estadísticas, se registraron 21 infracciones en grandes empresas, cuatro en empresas medianas y una en una pequeña empresa. ***La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las infracciones de este tipo, y que continúe transmitiendo información detallada sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyendo estadísticas sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación aplicable, si es posible, desglosadas por sexo, así como sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota con ***profunda preocupación*** de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 1997.

Desde hace algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la legislación nacional no contiene disposición alguna que dé efecto a la parte II del Convenio (prohibición de venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y exposición de máquinas desprovistas de dispositivos adecuados de protección) y no establece la plena aplicación del ***artículo 17 del Convenio*** (que se aplica a todos los sectores de actividad económica), por cuanto no es aplicable a determinadas ramas de actividad, entre otras, los transportes marítimo, aéreo o terrestre y las minas.

Desde 1979, en respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno venía indicando en sus memorias que se encontraba en proceso de redacción un proyecto de ley que revisaba la Ley de Fábricas de 1974, que contenía disposiciones que estaban en consonancia con las del Convenio y que se aplicaría a todos los sectores de actividad económica. En su última memoria (recibida en 1986), el Gobierno indica que la comisión parlamentaria competente había examinado el proyecto de Ley de Fábricas de 1985 y que iba a someterse al Parlamento para su adopción.

Con su memoria para el período que finaliza el 30 de junio de 1991, el Gobierno comunicó una copia de los extractos del proyecto de Ley de Fábricas con el contenido de las disposiciones que deberían dar efecto a la parte II del Convenio. En relación con esto, se solicitó al Gobierno que indicara en qué fase del procedimiento legislativo se encontraba el proyecto de ley y qué organismo tenía a su cargo el proceso de examen del mismo. ***Al no haber comunicado el Gobierno información alguna al respecto, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que se adopte en un futuro cercano el mencionado proyecto de ley y solicita al Gobierno que envíe una copia de este texto en cuanto haya sido adoptado.***

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ucrania

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (ratificación: 2011)

Artículos 5, 1), y 16 del Convenio. Supervisión de la seguridad y salud en las minas, medidas correctivas y aplicación. La Comisión toma nota de que en 2014, se creó el Servicio Estatal de Trabajo (SLS), que ha asumido las funciones del antiguo Servicio Estatal de Supervisión de Minas. A este respecto, la Comisión toma nota de que se refiere a los comentarios formulados este año por este organismo, en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), en lo relativo a las restricciones de las facultades de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que en las discusiones en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sobre la aplicación de los Convenios núms. 81 y 129 por Ucrania en 2017 y 2018, algunos oradores indicaron que la moratoria en la inspección del trabajo había afectado especialmente a los trabajadores de las minas, y que si bien las inspecciones en las minas habían aumentado tras un incidente minero grave,

que tuvo lugar en marzo de 2017 en el oeste de Ucrania (en el que fallecieron ocho mineros y más de 20 resultaron gravemente heridos), no se disponía de información sobre las medidas adoptadas a raíz del gran número de infracciones de las normas de seguridad y salud en las minas. Asimismo, la Comisión toma nota de la información de 2016 contenida en las observaciones formuladas por la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres de Ucrania (KVPU) sobre la aplicación del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) recibidas el 31 de agosto de 2018, según las cuales la tasa de lesiones mortales en las minas de carbón había aumentado en un 40 por ciento y la tasa de accidentes mortales se había elevado en un 2,5 por ciento. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la OIT, según la cual en 2017, la minería era el sector en que se producía el 18,9 por ciento de los accidentes relacionados con el trabajo acontecido en el país, con un balance de 936 personas heridas y 33 fallecidas. **En referencia a sus comentarios en virtud de los Convenios núms. 81 y 129, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el número de inspecciones efectuadas en las minas, el número de casos de incumplimiento observados y los aspectos con los que éstos están relacionados, así como las medidas correctivas ordenadas y las sanciones impuestas.**

Artículos 5, 2, c) y d), 7 y 10, a). Procedimientos para la investigación de los accidentes mortales o graves, y compilación y publicación de estadísticas. Medidas correctivas apropiadas y medidas que deben adoptar los empleadores para prevenir futuros accidentes a raíz de las investigaciones. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que, en 2012, 3 654 trabajadores resultaron heridos en accidentes mineros, lo que provocó 125 fallecimientos, y que el 78,5 por ciento de estos accidentes se debieron a factores relacionados con la organización, el 11,7 por ciento a causas técnicas y el 9,8 por ciento a razones psicológicas o de otro tipo. La Comisión constata a partir de las estadísticas sobre accidentes mineros proporcionadas por el Gobierno en respuesta a la solicitud previa de la Comisión que, en 2014, se produjeron en las minas de carbón 2 034 accidentes de trabajo, con un balance de 99 fallecimientos, y en las explotaciones mineras metálicas y no metálicas hubo 220 accidentes de trabajo, que se cobraron 12 vidas. Asimismo, la Comisión toma nota de la información aportada por el Gobierno en respuesta a la solicitud anterior de ésta en lo relativo al procedimiento de investigación de accidentes y acerca del procedimiento de investigación y notificación de accidentes, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, aprobados por la decisión núm. 1232 del Consejo de Ministros, de 2011, que establece que los empleadores tienen la obligación de investigar los accidentes, analizar sus causas y tomar medidas para prevenir futuros accidentes. El Gobierno indica también que el SLS lleva a cabo una investigación especial en caso de accidente grave o mortal, accidente en grupo (accidente en el que dos o más personas están involucradas de forma simultánea), desaparición de un trabajador en el curso del desempeño de sus funciones o muerte de un trabajador en su lugar de trabajo. Sin embargo, la Comisión constata que el Gobierno no ha proporcionado la información solicitada sobre las medidas tomadas para abordar las causas de los accidentes y los resultados de esas medidas. **Dado que no se ha aportado esa información, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione: i) información detallada sobre el resultado de los procedimientos de investigación de accidentes graves y mortales, incidentes peligrosos y desastres; ii) información acerca de los diversos factores (de organización, técnicos y psicológicos) que se identifiquen como causas de los accidentes, y iii) información sobre las medidas adoptadas para abordar las causas y acerca de sus resultados, inclusive cualquier medida correctiva de seguridad y salud tomada o contemplada. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la incidencia de accidentes de trabajo, incluidos los accidentes mortales, y acerca de las enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uruguay

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) transmitidas por el Gobierno.

Artículos 3 y 5 del Convenio. Medidas para la prevención, el control y la protección de los trabajadores contra los riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto. Aplicación efectiva. En su comentario anterior, la Comisión lamenta tomar nota de que, aunque el decreto núm. 154/002, de 2002, prohíbe la producción, importación y comercialización del asbesto, el Gobierno todavía no da pleno cumplimiento a la mayoría de las disposiciones del Convenio. En respuesta a este comentario, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere en su memoria al decreto núm. 125/014, de 2014, relativo a la seguridad y salud en la construcción, que establece medidas preventivas en ese sector, pero no hace una referencia específica al asbesto. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el PIT-CNT relativas a que en la práctica, la aplicación del decreto núm. 154/002 no se encuentra suficientemente garantizada mediante controles efectivos, por ejemplo en la reparación o sustitución del aislamiento de los techos. **La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento al Convenio, en lo referente a las cuestiones planteadas en la solicitud directa relativas a los artículos 20, 2) y 3), y 21, 3) así como posteriormente en relación a las cuestiones relativas a los artículos 17, 19 y 22, 2). También solicita al Gobierno que proporcione información sobre las inspecciones realizadas para controlar la prohibición de asbesto, así como las medidas adoptadas para garantizar la protección de todos los trabajadores que pueden verse expuestos al**

asbesto en el curso de su trabajo, incluidas las medidas adoptadas relativas a los trabajadores que realizan trabajos en techo y de aislamiento.

Artículo 17. Demolición de instalaciones y estructuras que contengan asbesto y la eliminación del asbesto. La Comisión toma nota de que, si bien el capítulo VII del decreto núm. 125/014 relativo a la seguridad y salud en la construcción establece requisitos para la seguridad y salud con respecto al trabajo de demolición, no contiene ninguna disposición que se refiera específicamente al asbesto. **La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales de aislamiento de asbesto friable, y la eliminación del asbesto de los edificios o estructuras en los que el asbesto es susceptible de ser transportado por el aire, deben ser emprendidas sólo por empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados para efectuar dichos trabajos. La Comisión también solicita al Gobierno que garantice que se exigirá a los empleadores o los contratistas elaborar un plan de trabajo antes de iniciar dicho trabajo específico de demolición, en consulta con los trabajadores o sus representantes.**

Artículo 19. Gestión de los residuos de asbesto. **Como el Gobierno una vez más no ha dado respuesta, la Comisión le solicita que adopte las medidas necesarias para asegurar que los empleadores deberán eliminar los residuos que contienen asbesto de una manera que no presente riesgo alguno para la salud de los trabajadores interesados, incluidos aquellos que manipulan residuos de asbesto, o la población vecina a la empresa. También solicita al Gobierno que garantice la adopción de medidas adecuadas por parte de la autoridad competente y de los empleadores para evitar la contaminación del medio ambiente general por la liberación del polvo de asbesto desde el lugar de trabajo.**

Artículo 22, 2). **Obligación de los empleadores de formular por escrito políticas y procedimientos relativos a las medidas de educación y de formación periódica de los trabajadores sobre los riesgos debido al asbesto.** La Comisión toma nota de que el decreto núm. 125/014 relativo a la seguridad y salud en la construcción establece, entre otras cosas, la obligación de los empleadores de formar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en los lugares de trabajo en la construcción y sobre las medidas preventivas necesarias, sin referirse específicamente al asbesto. **La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento al artículo 22, 2), del Convenio para garantizar que los empleadores han formulado políticas y procedimientos por escrito relativos a las medidas de educación y de formación periódica de los trabajadores sobre los riesgos debidos al asbesto y los métodos de prevención y control.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 13** (República Centroafricana); el **Convenio núm. 45** (Croacia, Guinea, Nigeria); el **Convenio núm. 62** (República Centroafricana); el **Convenio núm. 115** (Kirguistán); el **Convenio núm. 119** (República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ghana, Kirguistán, Tayikistán); el **Convenio núm. 120** (República Centroafricana, República Democrática del Congo, Indonesia, Kirguistán, Tayikistán); el **Convenio núm. 127** (Hungría); el **Convenio núm. 136** (Estado Plurinacional de Bolivia, Zambia); el **Convenio núm. 139** (Croacia); el **Convenio núm. 148** (China: Región Administrativa Especial de Macao, Croacia, Finlandia, Hungría, Kirguistán, Tayikistán); el **Convenio núm. 155** (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, República Centroafricana, China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Croacia, El Salvador, Gabón, Granada, Nueva Zelandia, Tayikistán, Zambia); el **Convenio núm. 161** (Croacia, Hungría); el **Convenio núm. 162** (Australia, Estado Plurinacional de Bolivia, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Uganda, Uruguay); el **Convenio núm. 167** (Estado Plurinacional de Bolivia, China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Gabón, Noruega, Turquía); el **Convenio núm. 170** (China, Finlandia); el **Convenio núm. 174** (Finlandia); el **Convenio núm. 176** (Turquía, Ucrania, Uruguay, Zambia); el **Convenio núm. 184** (Bélgica, Ghana, Kirguistán); el **Convenio núm. 187** (Argentina, República Dominicana, Eslovenia, Francia, Francia: Nueva Caledonia, Indonesia, Noruega, Turquía, Zambia).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 13** (Croacia); el **Convenio núm. 119** (Croacia); el **Convenio núm. 120** (Estado Plurinacional de Bolivia); el **Convenio núm. 136** (Croacia).

Seguridad social

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1983)

Durante varios años, la Comisión ha venido subrayando la no aplicación o la aplicación parcial de algunas de las disposiciones del Convenio. La Comisión recuerda que, en memorias anteriores, el Gobierno había expresado su intención de actualizar la ordenanza núm. 24 sobre indemnización de los trabajadores, de 1956. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que actuará de conformidad con las solicitudes de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias, tal como se describe a continuación.

Artículo 5 del Convenio. Indemnización en forma de capital. La Comisión insta al Gobierno a que enmiende el artículo 8 de la ordenanza, a fin de asegurar que la indemnización debida en caso de accidentes que ocasionen una incapacidad permanente se pague en forma de renta, o excepcionalmente en forma de capital, si se garantiza a la autoridad competente un empleo razonable del mismo.

Artículo 7. Indemnización suplementaria cuando se necesite la asistencia de otra persona. La Comisión pide al Gobierno que enmiende el artículo 9 de la ordenanza a efectos de que se conceda una indemnización suplementaria a las víctimas de accidentes del trabajo que requieren la asistencia de otra persona en los casos de incapacidad permanente, y no sólo en los casos de incapacidad temporal.

Artículo 9. Asistencia médica y farmacéutica. La Comisión pide al Gobierno que enmiende el artículo 6, 3), de la ordenanza, a fin de no establecer límite alguno a los gastos y costos del tratamiento médico seguido por un trabajador como consecuencia de un accidente del trabajo del cual el empleador sea responsable, y de incluir una disposición expresa sobre la cobertura de los costos quirúrgicos y farmacéuticos conexos.

Artículo 10. Suministro de aparatos de prótesis y ortopedia en general. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 10 de la ordenanza, con el fin de que los aparatos de prótesis y ortopedia se suministren en todos los casos en los que sea necesario, y no sólo a fin de mejorar la capacidad de obtener ganancias de la persona de que se trate.

Se ha informado a la Comisión de que, sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (Grupo de Trabajo tripartito del MEN), el Consejo de Administración ha decidido que debería alentarse a los Estados Miembros para los cuales el Convenio está en vigor a que ratifiquen el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), más reciente, o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (parte VI) (véase el documento GB.328/LILS/2/1). Los Convenios núms. 121 y 102 reflejan el enfoque más moderno de las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Por lo tanto, la Comisión alienta al Gobierno a que realice un seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), por la que aprueba las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del MEN, y a que considere la ratificación de los Convenios núms. 121 y/o 102 (parte VI) como los instrumentos más actualizados en este ámbito.

Armenia

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 2004)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA) y de la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) comunicadas junto con la memoria del Gobierno. A fin de proporcionar una visión completa de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la indemnización por accidentes del trabajo, la Comisión estima oportuno examinar en un único comentario el Convenio núm. 17 (accidentes) y el Convenio núm. 18 sobre las enfermedades profesionales.

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)

Artículo 11 del Convenio. Indemnización a las víctimas de accidentes del trabajo en caso de insolvencia del empleador o del asegurador. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo referencia a las observaciones presentadas por la CTUA en junio de 2013, en las que se describía la cuestión de aproximadamente 800 trabajadores empleados por empresas liquidadas después de 2004, a quienes, tras la adopción de la decisión gubernamental núm. 1094-N de 2004, no se había pagado una indemnización en caso de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales ocurridas entre 2004 y 2009. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que esta cuestión está examinándose, y

que se ha previsto establecer mecanismos que garanticen una indemnización adecuada a las personas que tienen derecho a recibir una indemnización por las lesiones causadas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero que no la han recibido. ***Recordando que, en virtud del Convenio, se debe pagar en toda circunstancia una indemnización a los trabajadores en caso de insolvencia del empleador o del asegurador, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias sin demora para garantizar que se indemnice debidamente a los trabajadores de que se trate, y que proporcione información a este respecto.***

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, que responde a las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre información estadística actualizada sobre el número de trabajadores que se vieron afectados por los tres tipos de enfermedades profesionales (intoxicación producida por el plomo, intoxicación producida por el mercurio e infección carbuncosa) contempladas en el Convenio.***

Se ha informado a la Comisión de que, sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (GTT del MEN), el Consejo de Administración ha decidido que se debería alentar a los Estados Miembros para los cuales los Convenios están en vigor a ratificar el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), más reciente, o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (parte VI) (véase el documento GB.328/LILS/2/1). Los Convenios núms. 121 y 102 reflejan el enfoque más moderno de las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus memoria anteriores, el Gobierno había expresado la intención de introducir un régimen de seguridad social obligatorio para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. ***Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a realizar un seguimiento de la decisión del Consejo de Administración en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016) aprobando las recomendaciones del GTT del MEN, y a que considere la ratificación de los Convenios núms. 121 y/o 102 (parte VI) como los instrumentos más actualizados en este tema.***

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2020.]

Barbados

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1974)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con ***satisfacción*** de la adopción del Reglamento sobre el Seguro y la Seguridad Social Nacionales (prestaciones) (enmienda), de 2006 (SI, 2006, núm. 130), por el cual el artículo 59 del reglamento principal de 1967 se sustituyó por el nuevo texto, que permite el pago de prestaciones en el extranjero a las personas que están residiendo en otro país, de conformidad con el artículo 5 del Convenio. ***La Comisión invita al Gobierno a que proporcione en su próxima memoria informaciones sobre las medidas tomadas para aplicar los nuevos reglamentos, incluyendo informaciones sobre toda decisión judicial o administrativa tomada al respecto.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Djibouti

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1978)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. Igualdad de trato en materia de reparación de los accidentes del trabajo. Desde que tuvo lugar la ratificación del Convenio, en 1978, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de enmendar el artículo 29 del decreto núm. 57-245, de 1957 sobre la reparación de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, para armonizar la reglamentación nacional con el artículo 1, párrafo 2, del Convenio, garantizando a los nacionales de los Estados que hubiesen ratificado el Convenio, así como a sus derechohabientes, la igualdad de trato con los ciudadanos de Djibouti en materia de reparación de los accidentes del trabajo. En virtud del decreto de 1957, al contrario de lo que ocurre en el caso de los ciudadanos nacionales, los extranjeros víctimas de accidentes del trabajo que trasladan su residencia al extranjero, ya no perciben una renta, sino una indemnización global igual a tres veces la renta que se les pagaba. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno hace referencia a la Ley núm. 154-AN/02/4.ª-L, de 31 de diciembre de 2002, sobre la Codificación del Funcionamiento del Organismo de Protección Social y del Régimen General de Jubilaciones de los Trabajadores Asalariados, indicando que ésta no establece ninguna diferencia de trato entre los asalariados nacionales y los asalariados extranjeros y sus derechohabientes por el otorgamiento de las indemnizaciones relativas a los accidentes del trabajo, y no establece, de conformidad con el Convenio, ninguna condición de residencia respecto de los trabajadores extranjeros, con miras a que gocen de sus derechos a prestaciones. Sin embargo, la Comisión observa que la mencionada ley no regula las rentas de los accidentes del trabajo como objetivo principal, sino únicamente la cuestión de su acumulación con las prestaciones de jubilación.

Además, observa que, en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17), el Gobierno sigue remitiéndose a las disposiciones del decreto núm. 57-245, de 1957, en lo que atañe al régimen jurídico de las rentas de los accidentes del trabajo. ***Habida cuenta de los elementos que anteceden, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proceda a la modificación del artículo 29 del decreto núm. 57-245, de modo tal que se armonice plenamente la legislación nacional con el artículo 1, párrafo 2, del Convenio.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (ratificación: 1978)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1 del Convenio. Establecimiento de un sistema de seguro de enfermedad obligatorio. La Comisión toma nota de que la ley núm. 212/AN/07/5.^a-L, sobre la creación de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) prevé que se instituyan, por vía reglamentaria, nuevos instrumentos sociales complementarios, como, especialmente, el seguro de enfermedad (artículo 5 de la ley). Toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 199/AN/13/6.^a-L, de 20 de febrero de 2013, por la que se amplía la cobertura de la asistencia a los trabajadores independientes, y del decreto núm. 2013-055/PR/MTRA, de 11 de abril de 2013, por el que se fijan las modalidades de registro y las cotizaciones de los trabajadores independientes ante la CNSS. El Gobierno declara que estos textos son precursores de la instauración, en un futuro próximo, de un seguro de enfermedad universal en Djibouti. ***La Comisión espera que, una vez instaurado, este seguro asuma el pago de las prestaciones de enfermedad a los asegurados, que en la actualidad corren a cargo del empleador, lo que contraviene el Convenio. Se invita al Gobierno a que mantenga a la Oficina informada sobre toda evolución en relación con el establecimiento de un seguro de enfermedad universal.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37) (ratificación: 1978)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Establecimiento de un sistema de seguro de invalidez obligatorio. En relación con su observación respecto del Convenio núm. 24, la Comisión recuerda que, desde hace algunos años, el sistema nacional de protección social se encuentra en una fase de reestructuración que implica la fusión de diferentes cajas de seguro existentes, con miras a racionalizar la gestión. En este contexto, mientras que el sistema de protección social no prevé una rama específica relativa a las prestaciones de invalidez, el Gobierno indica que la Ley núm. 154/AN/02/4.^a-L, de 31 de enero de 2002, sobre la Codificación del Funcionamiento de la Oficina de Protección Social (OPS) y del régimen general de jubilaciones de los trabajadores asalariados, prevé algunas disposiciones que autorizan que los trabajadores mayores de 50 años, afectados por una disminución permanente de sus capacidades físicas o mentales, tengan derecho a una pensión de jubilación anticipada cuando justifiquen un mínimo de 240 meses de seguro (artículo 60 y siguientes). A este respecto, la Comisión subraya que, si se justifica en el contexto de una jubilación anticipada, la fijación de una edad mínima para gozar de la protección en caso de invalidez que prevé la ley núm. 154/AN/02/4.^a-L, está en contradicción con los artículos 4 de los Convenios núms. 37 y 38. Además, la duración del período de calificación que precede y que da derecho a una pensión de invalidez, no podrá exceder de 60 meses de afiliación, en virtud de los artículos 5, párrafo 2, de los Convenios núms. 37 y 38. ***En vista de la insuficiencia de estas disposiciones para dar cumplimiento a las principales exigencias de los Convenios núms. 37 y 38, la Comisión pide al Gobierno que realice los estudios de viabilidad necesarios para el establecimiento de un régimen de seguro de invalidez.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38) (ratificación: 1978)

La Comisión ***lamenta*** tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Establecimiento de un sistema de seguro de invalidez obligatorio. En relación con su observación respecto del Convenio núm. 24, la Comisión recuerda que, desde hace algunos años, el sistema nacional de protección social se encuentra en una fase de reestructuración que implica la fusión de diferentes cajas de seguro existentes, con miras a racionalizar la gestión. En este contexto, mientras que el sistema de protección social no prevé una rama específica relativa a las prestaciones de invalidez, el Gobierno indica que la Ley núm. 154/AN/02/4.^a-L, de 31 de enero de 2002, sobre la Codificación del Funcionamiento de la Oficina de Protección Social (OPS) y del régimen general de jubilaciones de los trabajadores asalariados, prevé algunas disposiciones que autorizan que los trabajadores mayores de 50 años, afectados por una disminución permanente de sus capacidades físicas o mentales, tengan derecho a una pensión de jubilación anticipada cuando justifiquen un mínimo de 240 meses de seguro (artículo 60 y siguientes). A este respecto, la Comisión subraya que, si se justifica en el contexto de una jubilación anticipada, la fijación de una edad mínima para gozar de la protección en caso de invalidez que prevé la ley núm. 154/AN/02/4.^a-L, está en contradicción con los artículos 4 de los Convenios núms. 37 y 38. Además, la duración del período de calificación que precede y que da derecho a una pensión de invalidez, no podrá exceder de 60 meses de afiliación, en virtud de los artículos 5, párrafo 2, de los Convenios núms. 37 y 38. ***En vista de la insuficiencia de estas disposiciones para dar cumplimiento a las principales exigencias de los Convenios núms. 37 y 38, la Comisión pide al Gobierno que realice los estudios de viabilidad necesarios para el establecimiento de un régimen de seguro de invalidez.***

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 5 del Convenio. Pago de las prestaciones en caso de residencia en el extranjero. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con *interés* de la conclusión, en 2012, del Convenio general de seguridad social de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyo objetivo es, en particular, permitir que los trabajadores migrantes retirados que hayan trabajado en uno de los 15 Estados miembros de la CEDEAO puedan disfrutar de su derecho a la seguridad social en sus países de origen mediante la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social. *Sin embargo, en la medida en que Cabo Verde es el único otro país de la CEDEAO que ha ratificado el Convenio, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si, como cree entender a la lectura del artículo 91 del Código de Seguridad Social, los nacionales de todo Estado que hayan aceptado las obligaciones del Convenio respecto a la rama correspondiente deberían en principio poder pretender, en lo sucesivo, al servicio de sus prestaciones en caso de residencia en el extranjero. En la afirmativa, la Comisión pide al Gobierno que se sirva indicar si la Caja Nacional de Seguridad Social ha establecido un procedimiento de transferencia, para responder a las eventuales solicitudes de transferencias de prestaciones al extranjero. Además, la Comisión pide al Gobierno que se sirva precisar si los nacionales de Guinea que trasladen su residencia al extranjero también se pueden beneficiar de la transferencia de sus prestaciones al extranjero, de conformidad con el principio de igualdad de trato establecido por el artículo 5 del Convenio.*

Artículo 6. Pago de las prestaciones familiares. En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años sobre el otorgamiento de asignaciones familiares en relación con los niños que residan en el extranjero, la Comisión toma nota de que, según el artículo 94, apartado 2, del Código, para tener derecho a las prestaciones familiares, los niños a cargo «deben residir en la República de Guinea, salvo disposiciones particulares aplicables de los convenios internacionales de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdos de reciprocidad o de convenios bilaterales o multilaterales». Por lo que respecta a los acuerdos de reciprocidad o a los convenios bilaterales o multilaterales, la Comisión recuerda que Guinea no ha concluido hasta el presente ningún acuerdo de ese tipo para el pago de las prestaciones familiares con respecto a los niños que residen en el extranjero. En relación con las disposiciones particulares aplicables a los convenios de la OIT, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio, todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio, en lo que respecta a la rama i) (Prestaciones familiares), deberá garantizar el beneficio de las prestaciones familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio respecto a la misma rama, así como a los refugiados y a los apátridas, en relación con los niños que residan en el territorio de uno de esos Estados, a reserva de las condiciones y limitaciones que puedan establecerse de común acuerdo entre los Estados interesados. *La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no proporciona información alguna a este respecto y espera que el Gobierno podrá confirmar formalmente, en su próxima memoria, que el pago de las prestaciones familiares se extiende también a los asegurados en regla con sus cotizaciones (sean nacionales, refugiados, apátridas o nacionales de los Estados que hayan aceptado las obligaciones del Convenio con respecto a la rama i)) cuyos hijos residan en el territorio de uno de esos Estados y no en Guinea. La Comisión pide además al Gobierno que proporcione informaciones sobre la manera en que se tiene en cuenta en esos casos la supresión de la condición de residencia para la aplicación del artículo 99, apartado 2, del nuevo Código, que no reconoce como hijos a cargo sino a los hijos «que viven con el asegurado», así como de su artículo 101, que sujeta el pago de las prestaciones familiares a la revisión médica del niño una vez por año, hasta la edad en que se ha seguido por el servicio médico escolar, y a la asistencia regular de los niños beneficiarios en edad escolar a las clases de los establecimientos escolares o de formación profesional.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) (ratificación: 1955)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1955)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (ratificación: 1955)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) (ratificación: 1955)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017 y el 29 de agosto de 2018, y de las observaciones de la Asociación de la Industria de Haití (ADIH), recibidas el 31 de agosto de 2018, en relación con la aplicación de los convenios ratificados en materia de seguridad social. La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se

han recibido las memorias del Gobierno en relación con los Convenios núms. 12, 17, 24, 25 y 42. Al tiempo que se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012, la Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 30 de octubre de 2018, en la que informa a la Comisión que, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, solicitó la asistencia técnica de la Oficina, sobre todo con el fin de recabar ayuda para presentar las memorias debidas, reforzar los servicios de inspección, consolidar el diálogo social para que prosigan las reformas sociales y tratar los demás puntos planteados por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indica asimismo que espera poder recibir esta asistencia antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. ***La Comisión espera que esta asistencia técnica pueda ser proporcionada sin demora y que dé lugar a la entrega oportuna de todas las memorias pendientes. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a las observaciones de la CTSP y de la ADIH.***

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la CTSP recibidas el 31 de agosto de 2016, mediante las cuales reiteró la mayoría de las cuestiones planteadas con anterioridad, indicando que, aun cuando fueron visibles algunos esfuerzos del Estado para ampliar la cobertura del seguro, éstos se centraron en la ciudad capital, dejando de lado a las personas que viven en las zonas rurales.

La Comisión toma nota de que, el 15 de septiembre de 2015, la CTSP ha comunicado sus comentarios en lo que se refiere a la aplicación de los convenios objeto de examen. La CTSP señala que la cobertura contra los accidentes del trabajo es sumamente débil en el marco de una economía informal que representa el 90 por ciento de la economía del país. Pese a que la afiliación de los empleadores y la Oficina del Seguro de Accidentes del Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA) es una obligación jurídica, representa únicamente una realidad para menos del 5 por ciento de los trabajadores. En lo que se refiere al caso específico de los trabajadores agrícolas, la CTSP considera que es necesario adoptar medidas de manera urgente para ampliar la cobertura efectiva de estos trabajadores en la OFATMA, por cuanto éstos representan la mayoría de los trabajadores en el país y están totalmente desprovistos de protección social aun cuando generan el 30 por ciento del producto interno bruto.

La Comisión es plenamente consciente de la información proporcionada por el Gobierno en su última memoria, según la cual la ley de 28 de agosto de 1967, por la que se crea la OFATMA, cubre al conjunto de los trabajadores dependientes, sea cual sea su sector de actividad, pero el hecho de que no existan empresas agrícolas en la economía formal hace que la mayor parte de los trabajadores agrícolas sean contratados en la agricultura familiar de subsistencia y sean excluidos del ámbito de aplicación de la legislación en materia de seguridad social. Sin embargo, la Comisión constata que la aplicación de la legislación existente parece plantear algunas dificultades incluso en lo que concierne a los trabajadores de la economía formal. Además, no se ha establecido nunca un régimen de seguro de enfermedad en el país pese a que el Gobierno ha señalado que ha seguido tratando de establecer progresivamente una rama de seguro de enfermedad que abarque al conjunto de la población y que permita a la OFATMA recobrar la confianza de la población.

Con el fin de poder evaluar mejor los desafíos que afronta el país en la aplicación de los convenios sobre seguridad social y con objeto de apoyar mejor las iniciativas adoptadas en la materia, la Comisión solicita al Gobierno que le comunique, en su próxima memoria, más información sobre el funcionamiento del seguro de accidentes del trabajo gestionado por la OFATMA (número de afiliados, cuantía de las cotizaciones recaudadas anualmente, número de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales registradas, cuantía de las prestaciones efectuadas en concepto de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). Sírvase proporcionar informaciones sobre las estrategias adoptadas para mejorar la participación de las personas protegidas en la gestión de la OFATMA y la utilización de sus servicios por dichas personas.

Asistencia internacional. La Comisión observa que el Gobierno recibe un apoyo sustancial de la OIT y de la comunidad internacional, en particular, en materia de inspección del trabajo. Además, desde 2010, la OIT y todo el sistema de las Naciones Unidas ponen a disposición del Gobierno sus conocimientos técnicos en materia de elaboración de un piso de protección social. La Comisión considera que es necesario que el Gobierno se plantee de manera prioritaria la creación de mecanismos que permitan proporcionar al conjunto de la población, incluidos los trabajadores de la economía informal y sus familias, un acceso a atenciones médicas básicas y a ingresos mínimos cuando su capacidad de obtener ingresos ha quedado mermada a raíz de una enfermedad, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En este sentido, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en 2012 la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) con objeto de establecer un conjunto de garantías elementales de seguridad social con miras a prevenir y reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En este sentido, la aplicación de los convenios y de la Recomendación núm. 202 debería acometerse en paralelo, buscando y explotando las sinergias y las complementariedades.

La Comisión recuerda que la creación de un piso de protección social fue incluida por el Gobierno haitiano como uno de los elementos del Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití, adoptado en marzo de 2010. No obstante, el Gobierno no ha comunicado hasta el momento ninguna información sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de este objetivo. Además, la Comisión, toma nota de la conclusión en 2015 de un programa nacional de promoción del trabajo decente que contiene un apartado dedicado a la creación de un piso de protección social con objeto de dar mejor cumplimiento a las obligaciones asumidas en lo que se refiere a los convenios de seguridad social ratificados por Haití.

Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas. La Comisión toma nota de que en su 328.^a reunión, celebrada en octubre-noviembre de 2016, el Consejo de Administración de la OIT adoptó las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (GTT del MEN), recordando que los Convenios núms. 17, 24, 25 y 42 en los que Haití es parte han sido superados y pidiendo a la Oficina que realice un seguimiento a fin de alentar a los Estados partes en esos Convenios a ratificar el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), el Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130) y el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y a aceptar las obligaciones con arreglo a sus partes II y III, habida cuenta de que estos instrumentos son los más actualizados en este ámbito.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kenya

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1964)

Reforma legislativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se encontraba en el proceso de enmienda de la Ley sobre Prestaciones por Accidentes del Trabajo, de 2007 (WIBA, 2007). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha desplegado esfuerzos para elaborar una nueva legislación que colmará las lagunas existentes en la ley actual y reemplazará la WIBA, 2007, y que el proyecto de ley aún debe presentarse al Parlamento. **La Comisión confía en que esta nueva ley tenga debidamente en cuenta los comentarios que ha venido formulando con el fin de dar plena aplicación al Convenio.**

Artículo 5 del Convenio. Pago de una indemnización en forma de renta en caso de incapacidad permanente o de muerte. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 30 de la WIBA, 2007, un trabajador que sufra una incapacidad permanente tiene derecho al pago de una indemnización en forma de capital equivalente al salario de 96 meses. Asimismo, invitó al Gobierno a revisar la WIBA, 2007, a fin de prever el pago de una indemnización en forma de renta a las víctimas de accidentes profesionales que sufran una incapacidad permanente, o a las personas a su cargo en caso de accidentes mortales, y a proporcionar una indemnización en forma de capital únicamente cuando se garantice a la autoridad competente un empleo razonable del mismo. La Comisión toma nota de que el Gobierno no indica si el nuevo proyecto de ley reglamentará una indemnización en forma de renta. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que aproveche la reforma legislativa en curso con miras a asegurar el pleno cumplimiento del artículo 5 y que facilite información sobre el estado de progreso de la reforma.**

Artículos 9 y 10. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 47 de la WIBA, 2007, prevé que un empleador debe asumir los gastos médicos incurridos razonablemente como consecuencia de un accidente del trabajo. El Gobierno había señalado en sus memorias anteriores que la expresión «gastos razonables» se definiría con motivo de la revisión de la WIBA, 2007, con objeto de incluir toda la intervención médica necesaria. La Comisión acoge con agrado la indicación del Gobierno de que la cláusula 55 del proyecto de ley contendría una lista de los gastos en que incurra un trabajador como consecuencia de un accidente sobrevenido a causa del trabajo, o durante la ejecución del mismo, que debe cubrir el empleador.

Artículo 11. Indemnización de los accidentes del trabajo en caso de insolvencia del empleador o del asegurador. La Comisión toma nota de que la WIBA (2007), no contiene disposiciones encaminadas a garantizar, en toda circunstancia, en caso de insolvencia del empleador o del asegurador, el pago de una indemnización a los trabajadores que sufran lesiones personales a causa de accidentes del trabajo. **La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en el contexto de la reforma legislativa en curso a fin de asegurar que se prevea el pago de una indemnización a las víctimas de accidentes del trabajo en caso de insolvencia del empleador.**

Se ha informado a la Comisión de que, sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (Grupo de Trabajo tripartito del MEN), el Consejo de Administración ha decidido que debería alentarse a los Estados Miembros para los cuales el Convenio está en vigor a que ratifiquen el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), más reciente, o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (parte VI) (véase el documento GB.328/LILS/2/1). Los Convenios núms. 121 y 102 reflejan el enfoque más moderno de las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. **Por lo tanto, la Comisión alienta al Gobierno a que realice un seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), por la que aprueba las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del MEN, y a que considere la ratificación de los Convenios núms. 121 y/o 102 (parte VI) como los instrumentos más actualizados en este ámbito.**

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2020.]

Malasia

Malasia Peninsular

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1957)

Sarawak

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 19 de septiembre de 2018. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.**

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, mayo-junio de 2018)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2018, relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión recuerda que la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas se ha basado en cuestiones de larga data planteadas por la Comisión y en comentarios formulados por la misma, en los que instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con miras a restablecer el principio de igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y los trabajadores nacionales en caso de accidente del trabajo. La Comisión observa que la Comisión de Aplicación de Normas, en sus conclusiones, acogió con agrado el compromiso declarado del Gobierno de asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros, tal como exige el Convenio. La Comisión observa que la Comisión de Aplicación de Normas instó al Gobierno a que: i) tomara medidas para formular y comunicar su política encaminada a regular la contratación y el trato de los trabajadores migrantes; ii) adoptara medidas inmediatas para finalizar su labor en lo que respecta a los medios para reestablecer la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, en particular extendiendo de manera efectiva la cobertura del Régimen de Seguridad Social de los Empleados (ESS) a los trabajadores migrantes; iii) celebrara verdaderas consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores con objeto de elaborar una legislación que asegure la eliminación de las prácticas discriminatorias entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales, en particular en relación con los accidentes del trabajo; iv) estableciera disposiciones especiales con otros Estados Miembros ratificantes a fin de superar las dificultades administrativas que conllevan controlar el pago de las indemnizaciones en el extranjero, y v) adoptara las medidas legales y prácticas necesarias para velar por que los trabajadores migrantes tengan acceso a atención médica en caso de accidentes del trabajo. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que aceptara una misión de contactos directos de la OIT con miras a aplicar estas recomendaciones, y a que estableciera mecanismos para superar estas cuestiones prácticas que afectan a la aplicación del régimen de seguridad social nacional a los trabajadores migrantes. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había señalado reiteradamente a la atención del Gobierno que, desde 1993, la legislación nacional dispone que los trabajadores extranjeros empleados en Malasia durante un máximo de cinco años sean transferidos del ESS, que prevé pagos periódicos para las víctimas de accidentes del trabajo, al Régimen de Indemnización de los Trabajadores (WCS), que garantiza únicamente el pago de una suma global de una cuantía considerablemente inferior. La Comisión toma nota de que, en su respuesta, el Gobierno indica que está desplegando grandes esfuerzos para reorientar la protección de los trabajadores extranjeros de la Ley de Indemnización de los Trabajadores al ESS, con objeto de respetar el principio de igualdad de trato de los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que ha acordado extender el ESS, que estará bajo la Organización de Seguridad Social (SOCSO), a los trabajadores extranjeros. Con este fin, se prevé un período de transición para que esta extensión tenga lugar sin contratiempos con miras a establecer mecanismos de aplicación, bases de datos, hojas de ruta, y reuniones de colaboración con los agentes interesados y los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se prevé que el período de transición dure, como máximo, tres años, debido a tres factores principales, a saber: i) se ha encomendado recientemente a la SOCSO la puesta en práctica del Sistema del Seguro de Empleo, por lo que se requiere cierto tiempo para que los fondos estén en una fase sostenible, y para asegurar el funcionamiento sin trabas de los asuntos administrativos relacionados con el Sistema del Seguro de Empleo. Además, se enmendará la Ley de Seguridad Social de 1969 vigente; ii) existe una obligación contractual con los paneles de seguros y el proveedor de sistemas del régimen de indemnización electrónica, y iii) se concede a los empleadores tiempo suficiente para adaptarse a los cambios que se producirán al pasar del WCS al ESS. La Comisión acoge con agrado la declaración de que el Gobierno está dispuesto a adoptar medidas inmediatas, incluida la mayor deliberación y colaboración con los interlocutores sociales de los sindicatos y la federación de empleadores. La Comisión acoge con agrado la intención del Gobierno de solicitar la asistencia técnica de la OIT. La Comisión celebra que el Gobierno haya aceptado la misión de contactos directos que tendrá lugar en 2019. **La Comisión confía sinceramente en que el Gobierno aproveche la misión de contactos directos para poner en práctica las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas y dar curso a sus solicitudes de larga**

data, con miras a garantizar a los trabajadores extranjeros el derecho fundamental a la igualdad de trato respecto de los trabajadores nacionales en caso de accidentes del trabajo.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Santa Lucía

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual, contrariamente al artículo 7 del Convenio, no se prevé, en la legislación nacional, el pago de una indemnización adicional a los trabajadores lesionados que requieren una ayuda constante de otra persona; y la indemnización de todos los gastos (médicos, quirúrgicos o farmacéuticos, etc.), se limita a 20 000 dólares del Caribe Oriental, mientras que no se prevé tal límite máximo en el Convenio, en caso de accidente del trabajo (artículos 9 y 10 del Convenio). La Comisión *lamenta* tomar nota de que, desde la entrada en vigor del Convenio en 1980, el Gobierno no ha podido armonizar las disposiciones de la legislación nacional con los artículos 7, 9 y 10 del Convenio. *Ante esta situación, la Comisión considera necesario solicitar al Gobierno que realice un estudio actuarial que determine las implicaciones financieras de la introducción en el régimen de seguro nacional de las prestaciones garantizadas por estos artículos del Convenio. La Comisión desea recordar al Gobierno la posibilidad de beneficiarse de la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2004.

La Comisión nota que el país se menciona en un párrafo especial del informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia por no haber comunicado información en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión.

La Comisión espera que el Gobierno pronto podrá informar sobre la aplicación del Convenio núm. 17 y recuerda que está a su disposición la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Unida de Tanzania

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1962)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota con *interés* de que el Gobierno señala en su memoria que el Fondo de Indemnización de los Trabajadores (WCF) está activo y que se ha aprobado el reglamento sobre la indemnización de los trabajadores, de 2016. Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios sobre indemnización por accidentes ratificados, la Comisión considera apropiado examinar en un solo documento el Convenio núm. 17 (accidentes) y el Convenio núm. 19 sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo).

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)

Artículo 5 del Convenio. Indemnizaciones pagadas en forma de capital en caso de incapacidad permanente. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 49 de la Ley núm. 20 de Indemnización de los Trabajadores, de 2008, cuando una pensión no alcanza el mínimo prescrito por mes, el director general del WCF puede decidir pagar una indemnización en forma de capital, en lugar de la pensión mensual por incapacidad permanente que se haya concedido de conformidad con el artículo 48 de la ley. La Comisión constata que el Gobierno indica que se ha aprobado el reglamento sobre la indemnización de los trabajadores, de 2016, con vistas a ofrecer orientación de cara a la aplicación de la ley.

Artículo 6. Pago de una indemnización. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que explicara cómo y por medio de quién se paga la indemnización a las víctimas de accidentes después del primer mes. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud de los artículos 46, 3), y 46, 4), de la Ley de Indemnización de los Trabajadores, son los empleadores los encargados de ofrecer a los trabajadores víctimas de accidentes la

indemnización por incapacidad provisional durante el primer mes y a continuación todos los pagos se harán con cargo al fondo. Además, la Comisión constata que el Gobierno afirma que, en cualquier caso, se ha puesto en práctica un mecanismo para garantizar que el fondo pueda asumir directamente esos pagos, incluso el del primer mes.

Artículo 7. Indemnización suplementaria. La Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que el derecho a una indemnización suplementaria en casos en que las víctimas necesiten la asistencia constante de otra persona no debería depender de una decisión administrativa del WCF, como se establece en el artículo 51 de la ley de 2008. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el reglamento de 2016 contempla que el director general del WCF determine la concesión de subsidios para el cuidado constante mediante directrices, como prevé la regla 40, 1), del reglamento sobre la indemnización de los trabajadores. Asimismo, la Comisión observa que, por medio de la Ley de la Caja de Seguridad Social de la Administración Pública, de 2018, se ha derogado el artículo 40, 2), de la Ley del Fondo Nacional de Seguridad Social, de 1997, en el que se contemplaba una indemnización suplementaria del 25 por ciento de la prestación por accidente del trabajo para el cuidador, en caso de que el beneficiario de la prestación por incapacidad permanente a causa de un accidente del trabajo necesitara la asistencia constante de otra persona. **La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para incluir reglas jurídicas relativas a los subsidios para la asistencia constante en caso de incapacidad provisional y permanente en las futuras directrices con el objeto de dar pleno efecto a esta disposición del Convenio.**

Artículos 9 y 10. Asistencia médica gratuita. Aparatos de prótesis y ortopedia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 62 de la Ley de Indemnización de los Trabajadores, de 2008, el fondo debe hacerse cargo de los costos razonables de la asistencia médica que se presta en caso de accidente del trabajo durante un período máximo de dos años. Asimismo, el fondo también puede correr con los costos adicionales de la prolongación del tratamiento si se piensa que ésta puede reducir la incapacidad. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en el artículo 4 de la ley, se define la asistencia médica como aquella que incluye servicios médicos, quirúrgicos, de tratamiento hospitalario y de enfermería especializada, así como la prestación y reparación de toda prótesis o dispositivo que sean necesarias, además del servicio de ambulancia. La Comisión también toma nota de que el Gobierno afirma que el fondo suministrará los aparatos ortopédicos, las prótesis y la asistencia farmacéutica como parte de la rehabilitación médica de la víctima del accidente. El Gobierno añade que los comentarios de la Comisión se tendrán en cuenta a la hora de elaborar las directrices que publicará el director general del fondo, de acuerdo con el reglamento sobre la indemnización de los trabajadores, de 2016. **La Comisión pide al Gobierno que garantice que las directrices incluyan la definición de costos médicos razonables, así como la renovación de los aparatos de prótesis y de ortopedia que deben suministrarse de forma gratuita.**

Artículo 11. Insolvencia del asegurador. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo relativo a la insolvencia del empleador o del asegurador, en la que se reconoce que el Gobierno es el garante en caso de que el fondo se declare insolvente, también en virtud de una obligación constitucional.

Se ha comunicado a la Comisión que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (Grupo de Trabajo tripartito del MEN), el Consejo de Administración ha decidido que se debería alentar a los Estados Miembros para los que el Convenio núm. 17 está en vigor a ratificar el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (parte VI) (véase GB.328/LILS/2/1), más recientes. Los Convenios núm. 121 y 102 reflejan un enfoque más moderno de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. **Por lo tanto, la Comisión alienta al Gobierno a que siga la decisión del Consejo de Administración, adoptada en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), por la que se aprueban las recomendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del MEN, y que considere la posibilidad de ratificar los Convenios núms. 121 y 102 (parte VI), por ser éstos los instrumentos más actualizados en este ámbito.**

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)

Artículo 1, 2), del Convenio. Pago de una indemnización por accidente en el extranjero. **La Comisión solicita al Gobierno que especifique cómo se regula la transferencia al extranjero de beneficios monetarios en caso de accidentes del trabajo tanto en lo relativo a ciudadanos del país como a ciudadanos extranjeros y a sus derechohabientes, con el fin de asegurar que los nacionales de otros Estados Miembros que hayan ratificado el Convenio reciban el mismo trato que el Gobierno dispensa a sus propios nacionales.**

Con respecto a la legislación aplicable en Zanzíbar, **la Comisión pide al Gobierno que considere la posibilidad de enmendar la Ley de Indemnización de los Trabajadores núm. 15, de 1986, de Zanzíbar, en virtud de la cual la responsabilidad del pago de la indemnización recae directamente en el empleador, con el fin de armonizarla con la Ley de Indemnización de los Trabajadores núm. 20, de 2008, en la que se establece un régimen de seguro social en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.**

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 12** (Angola, Dominica, Guinea-Bissau); el **Convenio núm. 17** (China: Región Administrativa Especial de Macao, Djibouti, Guinea-Bissau, Kirguistán, Uganda); el **Convenio núm. 18** (Angola, Djibouti, Guinea-Bissau); el **Convenio**

núm. 19 (*Dominica, Guinea-Bissau, Indonesia, Santa Lucía*); el **Convenio núm. 42** (*Islas Salomón*); el **Convenio núm. 102** (*Barbados*); el **Convenio núm. 118** (*Guinea*); el **Convenio núm. 121** (*Guinea*); el **Convenio núm. 128** (*Barbados*); el **Convenio núm. 157** (*Kirguistán*).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 12** (*Antigua y Barbuda, Gabón, República Unida de Tanzania*); el **Convenio núm. 19** (*China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Gabón, Kenya*); el **Convenio núm. 42** (*Italia*).

Protección de la maternidad

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) (ratificación: 1985)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2004.

En relación con sus comentarios relativos a la aplicación del *artículo 6 del Convenio*, la Comisión toma nota de que, al igual que la ley núm. 8/1992, los artículos 111 y 112 de la Ley núm. 2/2005, de 9 de mayo de 2005, sobre Funcionarios, prevén la posibilidad de despedir a las trabajadoras por faltas muy graves previa instrucción del oportuno expediente disciplinario. En memorias anteriores, el Gobierno indicó su intención de ajustar la legislación en el sentido de que las faltas que cometan las mujeres embarazadas serían objeto de expedientes disciplinarios tras concluir el período de su licencia por maternidad o permiso postnatal. *La Comisión confía en que el Gobierno tome todas las medidas necesarias a fin de garantizar una prohibición formal de comunicar su despido a una funcionaria durante su ausencia por licencia de maternidad o de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante la mencionada ausencia.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Política social

Jamaica

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2013, que indica que el principal objetivo en la planificación del desarrollo económico sigue siendo la realización de la mejora de los niveles de vida. Además, el Gobierno menciona que, si bien pequeños grupos de personas experimentan realmente una mejora, la mayoría atraviesa percances o una caída de su nivel de vida. El Gobierno atribuye esta situación a las medidas rigurosas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y al deterioro económico global. En cuanto a los medios empleados para ayudar a los productores independientes a alcanzar un nivel de vida más elevado, el Gobierno se refiere a la concesión de subvenciones, formación y mercados para los productos. Además, existen programas para asistir en la mitigación de las dificultades que atraviesan los productores independientes cuando no pueden mantener un nivel de vida mínimo. **La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información actualizada, indicando de qué manera se considera el «mejoramiento del nivel de vida» como «el objetivo principal de los planes de desarrollo económico», de conformidad con el artículo 2 del Convenio. Sírvasse también comunicar información detallada sobre las medidas adoptadas en la promoción de cooperativas y en la mejora de los niveles de vida de los trabajadores de la economía informal (artículos 4, e), y 5).**

Parte IV. Remuneración de los trabajadores. Protección de los salarios. El Gobierno indica que no existe ninguna legislación que por objeto directo garantizar que todos los salarios devengados se paguen debidamente. Además, en lo que atañe a las medidas contempladas para dar efecto al artículo 11, párrafo 8), del Convenio, el Gobierno reitera la información transmitida en su memoria anterior. La Comisión recuerda que hace ahora algunos años se le solicita al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a varios subpárrafos del artículo 11. **La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas para facilitar la supervisión necesaria para garantizar que todos los salarios devengados se paguen debidamente y para que los empleadores lleven un registro de la nómina, a efectos de garantizar la cuestión relativa al estado de los pagos de los salarios a los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información específica sobre las políticas, las prácticas o cualquier otra medida adoptada, en la que indique, cuando proceda, las disposiciones pertinentes de la legislación y de los reglamentos administrativos que garanticen que todos los salarios devengados se paguen debidamente, como prevé cada uno de los subpárrafos del artículo 11 del Convenio.**

Anticipos de los salarios. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, en este momento, no ha adoptado, ni contempla adoptar, ninguna medida encaminada a regular los anticipos de los salarios en el sector privado. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 12 del Convenio, no sólo se ha regulado la manera en que se realiza el reembolso de los anticipos de los salarios, sino que también tienen que determinarse las cuantías máximas de los anticipos y todo anticipo en exceso de la cuantía fijada tiene que ser legalmente irrecuperable. La mencionada obligación comprende al sector público y al sector privado. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o contempladas para regular los anticipos de los salarios, de conformidad con el artículo 12 del Convenio.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Nicaragua

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1981)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016) y las otras iniciativas adoptadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población. A este respecto, la Comisión toma nota de la aprobación en febrero de 2018 de la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022 con el Banco Mundial, con la finalidad de reducir la pobreza y promover la prosperidad para más nicaragüenses. La EAP tiene entre sus objetivos fundamentales invertir en las personas, especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales como el Corredor Seco y las regiones del Caribe, donde se encuentran la mayoría de las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema), fomentar la inversión privada para la creación de empleos y mejorar las instituciones. Asimismo, de acuerdo al documento que recoge la citada estrategia, dado que el 80 por ciento de la población es vulnerable o pobre y que la fuerza de trabajo continuará expandiéndose en las próximas dos décadas, el CPF también contempla invertir en actividades que están focalizadas hacia la economía en su conjunto, mejorando su funcionamiento, apuntando a un crecimiento más rápido y ayudando a crear más y mejores empleos. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no proporciona información en su memoria sobre los resultados alcanzados por el PNDH 2012-2016, así como sobre todas aquellas medidas adoptadas con miras a mejorar el nivel de vida de la población.

La Comisión toma nota con **profunda preocupación** de la grave situación en el país provocada por la crisis política y social originada tras las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 y que ha perjudicado seriamente las condiciones

de vida de la población. En este sentido, la Comisión toma nota de la información incluida en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) «Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, del 18 de abril al 18 de agosto de 2018», en el que se expresa preocupación en relación con las violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. La Comisión toma nota de que en el citado informe se destaca que la independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que, desde el inicio de la crisis, 215 000 personas habían perdido su trabajo y 131 000 habían caído bajo la línea de pobreza desde el 28 de junio de 2018. El informe señala que la crisis también ha estado marcada por una ola de ocupaciones ilegales de tierras privadas sin precedentes por parte de grupos progubernamentales. Según estimaciones de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 31 de julio de 2018, alrededor de 4 000 hectáreas habían sido ilegalmente ocupadas en los siete departamentos del Pacífico y del centro del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha denunciado otras violaciones de derechos, incluyendo ataques contra empresas y retrasos injustificados en la liberación de mercancía importada. Igualmente, el disfrute del derecho a la salud se ha visto significativamente afectado por la crisis, estimándose en 2 000 el número de personas heridas durante las protestas. Al respecto, el 25 de mayo de 2018, la Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas, incluyendo el cierre de hospitales o su acordonamiento por parte de las autoridades, la policía, y/o elementos armados progubernamentales. Además, médicos y otros profesionales de la salud, entre otros, enfermeras y personal administrativo, han sufrido despidos por atender a personas heridas durante las protestas o por supuesto involucramiento en las mismas, al igual que aquellos maestros y profesores que apoyaron las protestas. La Comisión toma nota igualmente de que el informe señala que en este contexto, el 14 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional aprobó una ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares de los Estados Unidos (recortando así aproximadamente el 7 por ciento del presupuesto anual). De acuerdo al informe, estas medidas afectarán los proyectos gubernamentales de los sectores de salud, vivienda, justicia y educación, entre otros, y podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la alimentación de la mayoría de la población, que ya ha estado experimentando los impactos negativos de los últimos meses debido a la crisis. Por otro lado, la Comisión observa que, según información publicada en octubre de 2018 por el Banco Mundial y disponible en su sitio web, después de alcanzar un crecimiento récord de 5,1 por ciento en 2011, la economía desaceleró del 4,7 por ciento en 2016 al 4,5 por ciento en 2017, y se prevé una contracción en 2018 de un 3,8 por ciento adicional. ***Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016), la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense (artículo 2), especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes. Al tiempo que toma nota del detrimento de las condiciones de vida de la población como consecuencia de la crisis política y social en el país, la Comisión solicita al Gobierno que tome las acciones necesarias para que tales medidas tengan en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación en tales medidas (artículo 5, párrafo 2). Solicita además al Gobierno que envíe información sobre todas las medidas tomadas al respecto y el resultado de éstas. En este contexto, la Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la OIT.***

Parte III. Trabajadores migrantes. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa que, en el marco del acuerdo celebrado con Costa Rica, 28 452 trabajadores nicaragüenses han emigrado de forma regulada y ordenada a Costa Rica en los diferentes ciclos agrícolas desde 2006 hasta 2018. El Gobierno indica que la mayoría de los trabajadores emigrantes son hombres que trabajan en el sector agrícola en los rubros de caña de azúcar, melones y piña. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) observó el considerable número de trabajadores fronterizos y de temporada que se dirigen, en particular, a Costa Rica y, en el número cada vez mayor, a Honduras, El Salvador y Panamá. Asimismo, el CMW observó con preocupación que la migración procedente del Estado parte se debe principalmente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que puede poner a los trabajadores migratorios nicaragüenses y sus familiares en situaciones de precariedad o inseguridad (véase documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafos 51 y 65). ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre las medidas adoptadas para que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tengan en cuenta sus necesidades familiares. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares.***

Artículo 13. Ahorro voluntario. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre la manera en que las cooperativas de ahorro y crédito han contribuido a estimular las formas de ahorro voluntario de los trabajadores y de los productores independientes. El Gobierno informa de que el Ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), registra 277 cooperativas de ahorro y crédito, en las que participan 107 615 trabajadores y productores. La Comisión toma nota, no obstante, de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el CMW observó con preocupación la falta de medidas para apoyar el acceso a las instituciones

financieras y promover mayores conocimientos financieros de los receptores, en particular de las mujeres (documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafo 49). ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para estimular a los asalariados y a los productores independientes que practiquen alguna de las formas de ahorro voluntario contempladas por el Convenio. Solicita también al Gobierno que indique las medidas adoptadas para proteger a los mismos contra la usura, en particular, que especifique las medidas tomadas con miras a reducir los tipos de interés de los préstamos mediante el control de las operaciones de los prestamistas y mediante el aumento de facilidades para obtener préstamos para fines apropiados por intermedio de organizaciones cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la autoridad competente. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información sobre aquellas medidas adoptadas al respecto que estén especialmente dirigidas a las mujeres.***

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 26 de septiembre de 2018. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 29 de agosto de 2018. ***La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.***

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el conjunto de programas sociales adoptados con miras a fortalecer las misiones y grandes misiones para mejorar la calidad de vida de la población. Entre otras medidas, el Gobierno se refiere a la transformación en junio de 2018 del «Plan Chamba Juvenil» en la «Gran Misión Chamba Juvenil», que está dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años, especialmente universitarios desocupados, no escolarizados, madres solteras, personas con cargas familiares o en situación de vulnerabilidad. Esta gran misión tiene entre sus objetivos el incorporar a los jóvenes a la ocupación laboral y productiva en áreas orientadas a la satisfacción de necesidades humanas, así como formar y capacitar jóvenes en oficios para la producción de bienes y servicios con alta demanda social. El Gobierno informa que en agosto de 2018, se encontraban inscritos 1 100 000 jóvenes en la gran misión. En junio de 2017, se creó el «Movimiento Somos Venezuela», formado mayoritariamente por jóvenes que realizan visitas a los distintos hogares con miras a abordar a las familias en situación de vulnerabilidad para fortalecer las políticas sociales. En 2016, se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que actualmente cuentan con más de 32 000 comités en todo el país encargados de distribuir productos de primera necesidad (alimentos e higiene) a más de 6 millones de familias. El Gobierno informa además de la creación del «Carnet de la Patria», un sistema innovador de protección social, a través del cual se registran los beneficiarios de los distintos programas sociales con miras a agilizar la implementación de tales programas y en el que se encuentran inscritas 16 595 140 personas. El Gobierno se refiere también a la «Gran Misión Hogares de la Patria», que tiene como objetivo acabar con la pobreza extrema en el país, que actualmente se encuentra, según informa el Gobierno, en el 4,4 por ciento. Dicha misión atiende a más de 1 300 000 familias en situación de vulnerabilidad y tiene como meta alcanzar a 2 millones de hogares. Asimismo, indica que la «Gran Misión Vivienda Venezuela», desde su creación en 2011, ha logrado la construcción de 1 926 448 viviendas y tiene como objetivo edificar 3 millones de viviendas más para 2019.

La Comisión expresa su ***profunda preocupación*** en relación con la situación en el país, que denuncia la CTASI en sus observaciones, particularmente la falta de acceso a los productos y bienes de primera necesidad, que han conducido al aumento de las migraciones a otros países de la región y del número de protestas, así como al crecimiento de la violencia y de los delitos asociados a la falta de alimentos (entre otros, saqueos, robos, ventas clandestinas, contrabando y amenazas a responsables de la distribución de alimentos). Señala que la pobreza por ingresos en el país creció del 81,8 por ciento en 2016 al 87 por ciento en 2017. Además, sostiene que en 2017 se inició un balance del sistema alimentario venezolano caracterizado por una reducción sostenida de la producción nacional, las importaciones y el consumo de alimentos, que profundizaron los alarmantes niveles de desnutrición aguda entre la población. Denuncia que las mujeres y niñas son las más afectadas y que se han reportado casos de sexo transaccional a cambio de cajas de alimentos de los CLAP. La CTASI afirma también que se han adoptado diversas regulaciones con miras a controlar la distribución y producción de alimentos en el país, entre las que destaca la aprobación, en enero de 2018, de la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. A este respecto, señala irregularidades en la distribución de alimentos en el marco de los CLAP, tales como su insuficiente frecuencia y cobertura geográfica, la no toma en consideración del criterio de la vulnerabilidad de los hogares, la discriminación por motivos de afiliación política en el acceso a los alimentos y casos de intoxicaciones como consecuencia del mal estado de los alimentos. La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que, por su parte, UNETE, CTV, CODESA y CGT sostienen que el «Carnet de la Patria» es un mecanismo de control social. Afirman que, con promesas de depósitos bancarios, bonos de alimentación, adquisición de juguetes y otros beneficios, el

Gobierno utiliza el «Carnet de la Patria» y el «Movimiento Somos Venezuela» con la finalidad de movilizar votantes a las mesas electorales. También alegan que el Gobierno utiliza la escasez de alimentos para mantener el control total sobre los mismos y la entrega de cajas de alimentos a través de los CLAP en ocasiones con fines electorales. En relación con los programas implementados, señalan que la «Gran Misión Chamba Juvenil» no garantiza el acceso de los jóvenes a un trabajo estable y digno, sino a «chambas» de corto plazo y que, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), los programas de alimentación escolar adolecen de problemas en la planificación, supervisión y control interno. *La Comisión se remite a los comentarios que formula sobre la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), el Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) y el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), afines al presente Convenio, y solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada en su próxima memoria sobre el Convenio en relación con el impacto de las medidas implementadas para mejorar el nivel de vida de toda la población. Asimismo, solicita al Gobierno que indique cómo se garantiza que tales medidas tengan en cuenta las necesidades familiares, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido y la asistencia médica, incluido el acceso a medicinas y la educación.*

Parte IV. Remuneración de los trabajadores. Anticipos de salarios. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara decisiones de tribunales de justicia o ejemplos actualizados de resoluciones administrativas que hayan abordado la cuantía máxima y la forma de reembolso de los anticipos de salario que den efecto al artículo 12, párrafos 2 y 3, del Convenio. La Comisión toma nota que el Gobierno se refiere en su memoria al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al artículo 103 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) que establecen que el salario es inembargable. El Gobierno reitera que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la LOTT, «mientras dure la relación de trabajo, las deudas que los trabajadores y las trabajadoras contraigan con el patrono o patrona sólo serán amortizables, semanal o mensualmente, por cantidades que no podrán exceder de la tercera parte del equivalente a una semana de trabajo o a un mes de trabajo, según el caso». El Gobierno indica que las decisiones de las autoridades administrativas facultadas para tal fin se sustentan en lo dispuesto en dicho artículo. El Gobierno añade que se reembolsan los préstamos pero no los anticipos por prestaciones sociales otorgados para cubrir necesidades básicas por vivienda, educación y salud, las cuales pueden alcanzar hasta el 75 por ciento. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no proporciona ejemplos concretos de decisiones de tribunales de justicia o de resoluciones administrativas que hayan abordado la cuantía máxima y la forma de reembolso de los anticipos de salario. *La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione copias de ejemplos concretos y actualizados de decisiones de tribunales de justicia o de resoluciones administrativas que hayan abordado la cuantía máxima y la forma de reembolso de los anticipos de salario, de conformidad con los requerimientos del artículo 12 del Convenio.*

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 82** (Francia: Polinesia Francesa, Nueva Zelandia: Tokelau, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Bermudas, Reino Unido: Islas Malvinas (Falkland), Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido: Montserrat); el **Convenio núm. 117** (República Centroafricana, República Democrática del Congo, Georgia, Ghana, Guinea, Jordania, Madagascar, Malta, República de Moldova, Ucrania).

Trabajadores migrantes

Barbados

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1967)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 7 y 9 del Convenio. Servicios gratuitos, asistencia y transferencia de divisas. En sus comentarios anteriores, la Comisión consideró que el requisito de que los trabajadores migrantes que participan en el Programa para Trabajadores Agrícolas Estacionales del Canadá y el Caribe (Programa de Trabajo Agrícola) estén obligados a enviar el 25 por ciento del ahorro de sus ganancias al Gobierno desde el Canadá, el 5 por ciento de cuyo importe se retiene en concepto de costos administrativos del Programa, podría vulnerar el espíritu del artículo 9 del Convenio. La Comisión tomó nota asimismo de las preocupaciones expresadas por el Congreso de Sindicatos y Asociaciones de Personal de Barbados (CTUSAB) ante el hecho de que este requisito junto con la deducción automática de su salario de algunos gastos correspondientes a billetes de avión, cotizaciones al régimen de pensiones y las contribuciones médicas, cree dificultades económicas para los trabajadores afectados, y por tanto, que el Programa necesitara ser objeto de revisión. La Comisión llamó también la atención del Gobierno sobre el hecho de que el Convenio prohíbe cobrar a los trabajadores los gastos puramente administrativos de las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación (Estudio General de 1999, Trabajadores migrantes, párrafo 170).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han concertado acuerdos para que se remitiera al país un porcentaje de las ganancias obtenidas por los trabajadores en los programas en el extranjero a fin de que lo tengan a su disposición a su regreso y para que se exija a los trabajadores que viajan en virtud de programas de trabajo en el extranjero que firmen un «acuerdo» (contrato de empleo) que autorice la deducción del 20 por ciento de su salario para cubrir gastos administrativos y cotizaciones al seguro nacional. De acuerdo con el Gobierno, a su llegada al Canadá los trabajadores son recibidos por los funcionarios de enlace de Barbados, y, en Barbados, la Oficina Nacional de Empleo, que se encarga de supervisar la preparación y la salida de los trabajadores, pone a disposición de éstos servicios de empleo libres de cargo. La Comisión toma nota de que el «Acuerdo para el empleo en Canadá de los trabajadores agrícolas estacionales de países caribeños de la Commonwealth, de 2013» establece que el trabajador acepta que el empleador remita a la agencia gubernamental el 25 por ciento del sueldo de cada nómina del trabajador y que «el Gobierno retendrá un porcentaje especificado del 25 por ciento en concepto de deducción de costos administrativos asociados con la prestación del programa» (artículo IV, párrafos 1 y 3). El trabajador también está de acuerdo en pagar al empleador una parte de los costos de transporte y, éste, en nombre del trabajador, adelantará las tasas del permiso de trabajo que la agencia gubernamental le reembolsará posteriormente (artículo VII, párrafos 3 y 4). *La Comisión solicita al Gobierno que clarifique por qué se considera necesario obligar a los trabajadores migrantes dentro del Programa de Trabajo Agrícola a que envíen el 25 por ciento de sus ingresos al Servicio de enlace de ahorros obligatorios, incluyendo los costos administrativos, y que indique si dicho servicio de enlace tiene un papel en la contratación, la introducción y la colocación de trabajadores migrantes, y si algunos de los gastos administrativos recaudados por el Servicio de enlace son en concepto de reclutamiento, introducción o colocación de trabajadores. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se autoriza a los trabajadores migrantes a que transfieran sus ingresos o una determinada parte de sus ingresos y ahorros como lo deseen, y a que se suministre información sobre cualquier medida adoptada, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para revisar la repercusión del Programa de Trabajo Agrícola sobre la Situación de los Trabajadores Migrantes en Barbados.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

España

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 17 de agosto de 2017, y transmitidas también por el Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno.

Artículo 6, 1), a) y b), del Convenio. Igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo y seguridad social. La Comisión toma nota de las observaciones de la UGT sobre la exclusión de las trabajadoras domésticas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ley núm. 31, de 8 de noviembre de 1995, y más particularmente sobre la no aplicación a estas trabajadoras de lo previsto en el artículo 26 de dicha ley sobre protección de la maternidad. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en su memoria, indicando, entre otros, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se aplica al trabajo doméstico porque el hogar familiar no se considera como una empresa o un centro de trabajo, con la consiguiente imposibilidad de control del cumplimiento de obligaciones en este ámbito; sin embargo, la misma ley establece que «el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene» (artículo 3, párrafo 4). El Gobierno también se refiere al artículo 7.2 del Real decreto núm. 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, en virtud del cual «[e]l empleador está obligado a cuidar de que el trabajo del empleado del hogar se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual adoptará medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. El incumplimiento grave de estas obligaciones será justa causa

de dimisión del empleado». *Recordando que las personas trabajadoras domésticas migrantes son particularmente vulnerables a abusos y explotación, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas con miras a: i) asegurarse que éstas reciban información, de manera apropiada y en un idioma que comprendan, sobre las condiciones de trabajo aplicables en virtud de la legislación nacional, y ii) garantizar que los mecanismos de denuncia existentes sean eficaces y accesibles. Además, recordando que más de la mitad de los extranjeros empleados en España trabajan en el servicio doméstico, la Comisión solicita información sobre las denuncias presentadas por los trabajadores domésticos, las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno

Kenya

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 1979)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículos 10 y 12 y 14, a), del Convenio. Política nacional de igualdad de oportunidades y de trato y libre elección del empleo. Desde hace varios años, la Comisión ha venido refiriéndose a la política de «kenyanización» de los empleos, considerando que dicha política es contraria al principio establecido por el Convenio de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros siempre que estos últimos residan legalmente en el país que los emplea. La Comisión toma nota con *interés* de que el artículo 5 de la Ley de Empleo de 2007, prevé que el Ministro, los funcionarios laborales, y el Tribunal de Relaciones Laborales deberán promover y garantizar la igualdad de oportunidades de un trabajador migrante o de un miembro de la familia de ese trabajador, que se encuentre legalmente en Kenya. El artículo 5 prohíbe también la discriminación directa e indirecta basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, discapacidad, embarazo, estado mental o condición de seropositiva, en relación con la contratación, la formación, los ascensos, los términos y condiciones de empleo, la terminación de la relación de trabajo u otras cuestiones derivadas del empleo. Asimismo, establece que el empleador deberá pagar a los trabajadores una remuneración igual por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota también de la adopción de la Ley sobre Comisión Nacional de Género e Igualdad, de 2011 y la Ley sobre el Servicio de Administración para Nacionales y Extranjeros, de 2011. *La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se aplica en la práctica el artículo 5 de la Ley de Empleo, de 2007, en particular, de qué modo se traduce en una política nacional destinada a promover y a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio, como se prevé en los artículos 10 y 12, a) a g), del Convenio. Sírvese facilitar información sobre el funcionamiento y las medidas adoptadas sobre estas cuestiones por la Comisión Nacional de Igualdad de Género y el Servicio de Administración para Nacionales y Extranjeros.*

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Sabah

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1964)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2017.

Artículo 6 del Convenio. Igualdad de trato. Salarios mínimos y gravamen sobre los trabajadores extranjeros. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional de Salarios, de 2011 (ley núm. 732), y la orden de salarios mínimos, de 2012, prevén un salario mínimo mensual regional para Sabah, que abarca a los trabajadores nacionales y extranjeros, pero excluyen de su aplicación a los trabajadores domésticos. También recuerda que ha de pagarse al Departamento de Inmigración un gravamen anual sobre los trabajadores extranjeros del sector de las plantaciones, de los sectores agrícola y pesquero, del sector manufacturero, del sector de la construcción, del sector de los servicios, así como los trabajadores domésticos. El Gobierno también indicó que, a partir del 1.º de enero de 2014, todos los empleadores que emplean a trabajadores extranjeros deberían pagar el salario mínimo y se permitiría deducir el gravamen sobre los trabajadores extranjeros y los gastos de alojamiento de los salarios de los trabajadores migrantes, pero no del salario mínimo. Dado que el Gobierno indicó en el pasado que el gravamen lo pagaba el empleador y no podía deducirse de los salarios de los trabajadores extranjeros, la Comisión consideró que existía ambigüedad en relación con el gravamen sobre los trabajadores extranjeros y las deducciones autorizadas de los salarios mínimos de estos trabajadores, desde el establecimiento del salario mínimo regional para Sabah.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de que el Gobierno comunicó, en 2016, una información que confirma que la política del Gobierno de Malasia exige que el gravamen corra a cargo de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, el Gobierno indica que, en virtud del artículo 113, 4), de la ordenanza del trabajo de Sabah (capítulo 67), no se autorizan las deducciones de los gravámenes y de los gastos de alojamiento, salvo que haya una solicitud por escrito del empleado y con la autorización previa de la autoridad competente. El Gobierno añade que, cuando se

aprueban esas solicitudes, se tiene en cuenta el deseo de los trabajadores extranjeros de pagar el gravamen en cuotas o mediante una suma global, no autorizándose que la deducción del gravamen de los salarios de los trabajadores extranjeros, a pesar de su solicitud por escrito, sólo imponga una carga a esos trabajadores. Al tiempo que toma nota de esas explicaciones, la Comisión sigue manifestando su preocupación de que, en la práctica, los empleadores aún puedan deducir la cuantía del gravamen del salario mínimo de los trabajadores extranjeros, lo que redundaría en un trato menos favorable de estos trabajadores respecto de los nacionales, en contravención del artículo 6, 1), a), del Convenio. Tomando nota asimismo de que el Gobierno informó con anterioridad de que el gravamen estaba destinado a ayudar a sufragar los costos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura utilizadas por los trabajadores extranjeros durante su estancia en el país, la Comisión considera que, especialmente cuando las tasas de los gravámenes son elevadas, la imposición de la carga del gravamen sobre los trabajadores extranjeros no sería equitativa y podría ejercer un impacto negativo en los salarios y en las condiciones laborales generales, así como en los derechos de los trabajadores migrantes. En cuanto a las deducciones por gastos de alojamiento, la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno de que no se autorizarán esas deducciones, si se acuerda que el empleador tiene la obligación de proporcionar un alojamiento gratuito a los trabajadores. **La Comisión solicita al Gobierno que aclare las razones de imponer la carga de los costos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura, a través del pago de un gravamen anual, a los trabajadores extranjeros, y que indique si se está dando alguna consideración al traslado de la carga del gravamen de los trabajadores extranjeros al empleador o que examine las formas alternativas de compensar los llamados gastos de instalaciones e infraestructura generados por los trabajadores extranjeros durante su estancia. La Comisión también solicita al Gobierno que especifique las disposiciones legales aplicables o las políticas que prohíben deducciones del gravamen del salario mínimo, y que indique las medidas adoptadas para garantizar que, en la práctica, los empleadores no deduzcan la cuantía del gravamen de los salarios mínimos pagados a los trabajadores extranjeros. Recordando que el Gobierno indicó con anterioridad que estaba dispuesto a examinar el impacto del sistema de gravámenes en las condiciones laborales y en la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, incluyendo los salarios, la Comisión solicita al Gobierno que realice tal evaluación y que comuniqué información sobre sus resultados y todo seguimiento dado a la misma.**

Artículo 6, párrafo 1, b), del Convenio. Igualdad de trato respecto de la seguridad social. Prestaciones por lesiones profesionales. La Comisión toma nota de que, a pesar de los comentarios de larga data de la Comisión sobre las diferencias de trato de los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros temporales respecto del pago de las prestaciones de seguridad social en caso de accidentes del trabajo, no se ha recibido la memoria del Gobierno. Las diferencias se relacionan con el Régimen de Indemnización de los Trabajadores (WCS) que garantiza a los trabajadores extranjeros que trabajan en el país durante un período de hasta cinco años, únicamente el pago de una suma global de una cuantía considerablemente inferior a los pagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales previstos en el Régimen de Seguridad Social de los Empleados (ESS), mientras que los malayos y los trabajadores extranjeros con residencia permanente en Malasia (Sabah) siguen cubiertos por el ESS. El Gobierno había indicado que, con la participación de todas las partes interesadas, estaba examinando diversas opciones a fin de poner la legislación nacional de conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión recuerda que desde 1993 ha estado planteando la misma cuestión en sus comentarios en virtud del Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) en lo que respecta a Malasia Peninsular y Sarawak. La Comisión remite al Gobierno a su observación sobre el Convenio núm. 19 en la que toma nota de la discusión sobre la aplicación de ese Convenio en Malasia Peninsular y Sarawak que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017. Asimismo, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió de nuevo al Gobierno que adoptara medidas inmediatas, prácticas y efectivas para asegurar que se cumpla el requisito de la igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales previsto en el Convenio y que acelerara sus esfuerzos con este fin habida cuenta de que la necesidad de lograr avances reales es cada vez más apremiante. **La Comisión insta firmemente al Gobierno a tener en cuenta sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 19 en Malasia Peninsular y Sarawak cuando aborde la cuestión de la igualdad de trato entre trabajadores migrantes y trabajadores extranjeros en lo que respecta a los accidentes del trabajo en Sabah.**

Otras prestaciones de seguridad social. En lo que respecta a las demás prestaciones de seguridad social, incluidas las prestaciones en materia de asistencia médica, vejez e invalidez así como las pensiones de sobrevivientes y las prestaciones de enfermedad y de maternidad, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado más información a este respecto. **Teniendo en cuenta el elevado número de trabajadores extranjeros afectados, la Comisión insta firmemente al Gobierno a facilitar información adicional sobre las medidas adoptadas, incluyendo la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales para garantizar que los trabajadores migrantes no reciban un trato menos favorable que el aplicado a los trabajadores nacionales o a los trabajadores extranjeros con residencia permanente en el país respecto de todas las prestaciones en materia de seguridad social.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 97** (Barbados, Belice, Dominica, Ecuador, España, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Kirguistán, Malasia: Sabah, Malawi, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido: Jersey, Reino Unido: Montserrat, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Uruguay); el **Convenio núm. 143** (Guinea, Kenya, San Marino, Uganda).

Gente de mar

Dominica

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 2 del Convenio. Legislación de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha establecido un comité tripartito para asesorar al Gobierno sobre todas las cuestiones relacionadas con la legislación y los cambios institucionales necesarios para la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Asimismo, toma nota de que se ha preparado un Plan nacional de acción a fin de formular recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la legislación y la administración marítimas. Si bien acoge con agrado las medidas adoptadas por el Gobierno para ratificar el MLC, 2006, la Comisión se ve obligada a señalar que la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio núm. 147 no contiene información sobre las leyes o reglamentos, u otras medidas, que dan efecto a los requisitos específicos de este Convenio. *Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique detalladamente la manera en la que cada uno de los artículos del Convenio se aplica en la legislación y práctica nacionales, y explique, en particular, de qué forma las disposiciones de la Ley Marítima Internacional, de 2002, y el reglamento marítimo de Dominica, de 2002, son sustancialmente equivalentes a los convenios mencionados en el anexo del Convenio relativos a las normas de seguridad, las medidas de seguridad social y las condiciones de empleo y de vida a bordo, en consonancia con lo establecido en el artículo 2 del Convenio.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Egipto

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) (ratificación: 1982)

Artículos 6 a 17 del Convenio. Prescripciones sobre el alojamiento de la tripulación. En comentarios anteriores, la Comisión observó que la legislación nacional no da efecto a ninguna de las normas técnicas relativas al alojamiento que se establecen en los artículos 6 a 17 del Convenio, como las que se refieren a la superficie mínima de los dormitorios, el tamaño de las literas, la iluminación, la ventilación, la calefacción, los comedores, las instalaciones sanitarias y la enfermería. A este respecto, la Comisión recuerda que en el análisis de las lagunas legislativas que se elaboró en 2010 con ayuda de la Oficina para brindar asistencia al Gobierno de cara a la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), también se llegó a la conclusión de que, si se modificase la Ley Marítima núm. 8, de 1990, deberían contemplarse prácticamente todos los aspectos del alojamiento de la tripulación que contiene el Título 3 del MLC, 2006. Asimismo, la Comisión toma nota de que la Oficina condujo en 2015 un taller sobre el MLC, 2006 en Alejandría. En su respuesta, el Gobierno indica que se está ajustando la legislación nacional a las disposiciones del Convenio núm. 92. Además, el Gobierno señala que los diversos comités legislativos prosiguen sus reuniones para adecuar la legislación nacional pertinente a las disposiciones del MLC, 2006, a modo de preparación para su aplicación efectiva previa a la ratificación. *La Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para adecuar su legislación marítima a las prescripciones de este Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que informe a la Oficina sobre todo avance del proceso de ratificación del MLC, 2006.*

Ghana

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108) (ratificación: 1960)

Artículos 1 a 6 del Convenio. Otorgamiento de los documentos de identidad de la gente de mar. La Comisión había tomado nota de que, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de la Marina Mercante, 2003 (ley núm. 645) de Ghana, el Ministerio puede elaborar reglamentos para prever las condiciones de servicio de las personas que trabajan a bordo de buques ghaneses y de los nacionales ghaneses que prestan servicio a bordo de buques extranjeros, así como la aplicación de cualquier convenio internacional relativo al empleo, el bienestar, la seguridad, la certificación o la condición de la gente de mar. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno, en su memoria, no proporciona información sobre ninguna norma adoptada a fin de aplicar las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota además de que el Gobierno reitera la indicación de que no se dispone del espécimen del documento de identidad de un marino. *Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento al Convenio y para proporcionar un espécimen del documento de identidad de la gente de mar.*

Artículo 5. Readmisión de la gente de mar portadora de documentos de identidad de la gente de mar ghaneses. La Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para asegurar que la gente de mar no ghanesa portadora de un documento de identidad de la gente de mar ghanés sea admitida en territorio

ghanés. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su indicación anterior que se requiere un documento de identidad de la gente de mar y una prueba de contratación de una empresa naviera antes de que el marino pueda entrar en el territorio. La Comisión recuerda que cualquier marino portador de un documento de identidad de la gente de mar válido y otorgado por la autoridad competente de un territorio para el cual esté en vigor el Convenio, será readmitido en dicho territorio, con independencia de que esté contratado en ese momento por una compañía naviera o un agente naviero. Lo mismo sucede durante un período de al menos un año tras la expiración de su documento de identidad. ***Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno, una vez más, que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio.***

México

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) (ratificación: 1934)

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) (ratificación: 1939)

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) (ratificación: 1974)

Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163) (ratificación: 1990)

Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164) (ratificación: 1990)

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) comunicadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) el 26 de julio de 2016 acerca de la aplicación por parte del Gobierno de los Convenios núms. 22, 55, 134, 163 y 164. La CONCAMIN indica que teniendo en cuenta las consideraciones de la Comisión y la legislación vigente, resultaría oportuno analizar el conjunto normativo relativo a la gente de mar y manifiesta su disposición a participar en el proceso de análisis e implementación de una reglamentación *ad hoc*. ***La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.*** La Comisión toma nota asimismo de las memorias transmitidas por el Gobierno sobre la aplicación de dichos convenios marítimos y del Convenio núm. 166. A fin de ofrecer una visión de conjunto de las cuestiones que tienen que abordarse en relación con la aplicación de estos Convenios, la Comisión considera apropiado examinarlas en un único comentario, que figura a continuación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en virtud del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México (Constitución) y del artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, de 1.º de abril de 1979, los tratados forman parte del derecho nacional y pueden aplicarse sin que se requiera la adopción de una normativa nacional. La Comisión observa que el artículo 133 de la Constitución establece que, dicha Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Gobierno con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, y que los jueces de cada entidad federativa se arreglan a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. La Comisión observa asimismo que según el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia. Sobre esta base, en ausencia de disposiciones nacionales específicas que den efecto a las disposiciones auto-ejecutivas de los Convenios, la Comisión ha considerado dichas disposiciones directamente aplicables en México. Sin embargo, la Comisión desea destacar que los convenios marítimos contienen un número de disposiciones que no son de carácter auto-ejecutivo y por lo tanto requieren la adopción de legislación u otras medidas por parte del Gobierno.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)

Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Facilidades para el examen del contrato de enrolamiento antes de ser firmado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara de qué manera garantiza a la gente de mar el goce de las facilidades para el examen del contrato de enrolamiento antes de firmarlo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a este respecto, según la cual, la gente de mar puede consultar de forma gratuita sobre toda duda acerca del contenido del contrato con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. La Comisión toma nota también de que el Gobierno informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el trabajador mexicano trabaje en el

extranjero, el contrato será sometido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de comprobar que éste cumple con las condiciones de trabajo requeridas por dicha ley. La Comisión toma nota de esta información.

Artículo 6, párrafo 3, 10). Datos que debe contener el contrato de enrolamiento. Condiciones de su terminación. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la Ley Federal del Trabajo no incluía entre las indicaciones que deben constar por escrito en el contrato de enrolamiento las condiciones para la terminación del mismo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales tales condiciones se encuentran previstas en los artículos 194 y 195 de la Ley Federal del Trabajo los que, entre otros elementos, estipulan que el contrato deberá indicar si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje, y el artículo 206 de la misma ley que regula la terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores de los buques. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en aplicación del artículo 133 de la Constitución y del artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo antes mencionados, las disposiciones del *artículo 6, párrafo 3* del Convenio sobre los datos que debe contener el contrato de enrolamiento son directamente aplicables en derecho interno. Al tiempo que recuerda el carácter auto-ejecutivo del *artículo 6* del Convenio, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y considera que responde a su solicitud anterior sobre este punto.

Artículo 9. Terminación del contrato de enrolamiento. En numerosos comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo, según el cual las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo y otras circunstancias es contraria a lo previsto en el *artículo 9* del Convenio, que prevé que el contrato de enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado en cualquier puerto de carga o descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el propósito del artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo es evitar que se exponga a los trabajadores y al propio buque a situaciones excepcionales de riesgo y no impide la terminación de la relación de empleo una vez que deje de existir esta situación. Sin embargo, la Comisión observa una vez más con *profunda preocupación* que el artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo impide que pueda terminarse el contrato de enrolamiento de duración indeterminada en cualquier puerto de carga o descarga tal como lo exige el Convenio. ***En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el artículo 9 del Convenio.***

Artículo 14, párrafo 1. Inscripción de la finalización del enrolamiento en el documento de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el ejemplar de la libreta de mar e identidad marítima comunicada por el Gobierno no incluía un espacio para inscribir la expiración o terminación del contrato. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autoridad competente para la emisión de dicho documento, comunicó que dadas las medidas de austeridad en cuanto al uso de los recursos gubernamentales y el número significativo de libretas de mar e identidad marítima en circulación, aún no se ha incorporado en el referido documento el espacio que indique la anotación de la expiración o terminación del contrato de la gente de mar. ***La Comisión pide al Gobierno que le comunique informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para garantizar que todo licenciamiento se inscriba en el documento entregado a la gente de mar, de conformidad con el artículo 14, párrafo 1 del Convenio.***

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (num.55)

Artículo 6 del Convenio. Gastos de repatriación en caso de enfermedad o accidentes. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de que en virtud del artículo 204, VII, de la Ley Federal de Trabajo, los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los marinos alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos en los casos de enfermedades. Sin embargo, no se menciona la responsabilidad del armador de pagar los gastos de repatriación a un marino enfermo o herido que es desembarcado durante el viaje como consecuencia de enfermedad o accidente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Ley Federal del Trabajo no establece de manera específica la obligación de pagar los gastos de repatriación en dichas circunstancias. El Gobierno indica, sin embargo, que esta obligación se deriva del artículo 123, XXVI, de la Constitución que obliga a que los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero especifiquen claramente que los gastos de repatriación queden a cargo del empresario. La Comisión observa que dicha disposición de la Constitución no regula la repatriación de los marinos a bordo de buques de bandera mexicana o aquellos en los que el armador no es extranjero. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar a toda la gente de mar el derecho de ser repatriado a cargo del armador en caso de enfermedad o accidentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Convenio.***

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)

Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. Estadísticas detalladas sobre los accidentes del trabajo a bordo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para disponer de estadísticas relativas a los accidentes del trabajo en los buques que indiquen claramente en qué parte del buque (puente, máquinas o locales de servicios generales) y en qué lugar (en el mar o en el puerto) ha tenido lugar un accidente, de conformidad con el *artículo 2, párrafo 3*. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: la Dirección General de Marina Mercante de la SCT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboran las estadísticas pertinentes; el

IMSS basa sus estadísticas sobre los datos recopilados en el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT), y la norma oficial mexicana NOM-036-SCT4-2007, de 17 de agosto de 2007, está en proceso de actualización. La Comisión observa sin embargo que las estadísticas de la Dirección General de Marina Mercante de la SCT comunicadas por el Gobierno no indican la parte del buque ni el lugar donde ocurrieron los accidentes. La Comisión observa también que el Gobierno no le comunicó las estadísticas del IMSS y que el formulario de aviso de accidente del SIAAT no incluye un espacio para indicar en qué parte del buque y en qué lugar ha ocurrido el accidente. Por último, al tiempo que observa que la NOM-036-SCT4-2007 prevé que el armador reporte los accidentes del trabajo a la autoridad marítima, la Comisión señala que dicha norma no permite aclarar el nivel de detalles de tales reportes. ***La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que indique si y de qué manera los diferentes mecanismos previstos para la compilación de información sobre los accidentes del trabajo a bordo (mediante la Dirección General de Marina Mercante de la SCT o mediante el sistema SIAAT) permiten que el Gobierno disponga de estadísticas desagregadas de conformidad con lo requerido por el artículo 2, párrafo 3 del Convenio.***

Artículo 3. Investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos propios al empleo marítimo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para llevar a cabo investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos propios al empleo marítimo. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre las Comisiones Consultativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a nivel nacional (COCONASST) y estatal (COCOESST) y sobre el Comité consultativo nacional de normalización de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota asimismo de las indicaciones del Gobierno según las cuales el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo que se aplica a los buques requiere que los patrones investiguen los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y transmitan informaciones a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El Gobierno indica asimismo que los patrones pueden investigar los riesgos de accidentes de trabajo a través de comisiones y servicios de seguridad e higiene en el trabajo. La Comisión observa sin embargo que los dispositivos de investigación de los riesgos del trabajo descritos por el Gobierno no son propios al empleo marítimo. ***Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que aclare si, en la práctica, dichas investigaciones permiten establecer las tendencias generales y los riesgos propios al trabajo marítimo, utilizables para la prevención de los accidentes en el contexto particular del trabajo marítimo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Convenio.***

Artículo 4, párrafo 3. Disposiciones sobre la prevención de accidentes del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó firmemente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que las normas aplicables a la gente de mar para la prevención de accidentes y protección de la salud en el empleo especifiquen los aspectos propios del empleo marítimo enumerados en el artículo 4, párrafo 3, tales como las características estructurales del buque, las máquinas, las medidas especiales de seguridad sobre el puente, los equipos de carga y de descarga, la prevención y extinción de incendios, las anclas, cadenas, cables, las cargas y lastres peligrosos, y el equipo personal. La Comisión toma nota de que la información suministrada por el Gobierno es de carácter general y no menciona la adopción de normas que respondan a los requisitos del artículo 4, párrafo 3. ***La Comisión pide, por consiguiente, una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que las normas aplicables a la gente de mar para la prevención de accidente de trabajo incluyan los aspectos enumerados en el artículo 4, párrafo 3 del Convenio.***

Artículo 8. Programas de prevención de accidentes del trabajo de la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la formulación y la organización de los programas de prevención de los accidentes del trabajo dirigidos a la gente de mar. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la SCT y la Secretaría de la Marina tienen competencia en la materia cubierta por el Convenio. La Comisión observa sin embargo que el Gobierno no precisa si dichas autoridades elaboraron los programas de prevención exigidos en virtud del artículo 8. La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno según la cual la Secretaría del Trabajo y Prevención Social no cuenta con programas distintos para la prevención de los accidentes del trabajo de la gente de mar, a quienes se aplica el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de alcance general. La Comisión ***lamenta*** tomar nota una vez más de que la información proporcionada por el Gobierno se refiere a programas de seguridad y salud en el trabajo de aplicación general, mientras que el Convenio requiere programas marítimos específicos que han de establecerse en colaboración con las organizaciones de armadores y de gente de mar. ***Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno una vez más que tome las medidas necesarias para formular y aplicar programas que den efectivo cumplimiento al artículo 8 del Convenio.***

Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)

Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Medios y servicios de bienestar en los puertos. Revisión de los medios y servicios de bienestar. Cooperación internacional. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre el funcionamiento de las casas del marino situadas en diferentes puertos del país así como sobre la revisión de los medios y servicios de bienestar de la gente de mar y la cooperación internacional al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más al Reglamento General del Marino de los Estados Unidos Mexicanos, de 8 de diciembre de 1943, sin aclarar cómo funcionan las casas del marino en la práctica. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere nuevamente al artículo 214 de la Ley Federal del Trabajo que prevé que el ejecutivo federal determinará la forma de sostener y mejorar los servicios de la casa del marino, sin indicar si se ha promulgado algún reglamento en virtud de dicho artículo. La Comisión recuerda que, de acuerdo con el artículo 2 del Convenio, todo

Miembro se compromete a velar por que se faciliten medios y servicios de bienestar adecuados a la gente de mar tanto en los puertos como a bordo de buques. Tales servicios deben revisarse con frecuencia a fin de asegurar que son apropiados, habida cuenta de la evolución de las necesidades de la gente de mar como consecuencia de avances técnicos, funcionales o de otra índole que sobrevengan en la industria del transporte marítimo (*artículo 5*). Asimismo, todo Miembro se compromete a cooperar con los demás Miembros con miras a garantizar la aplicación del Convenio (*artículo 6*). **La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar aplicación a estas disposiciones del Convenio.**

Convenio sobre la protección de la salud y asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)

Artículo 4, párrafo c), del Convenio. Derecho de visitar a un médico. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en los puertos de escala, cuando ello sea posible. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: a) la gente de mar tiene el derecho irrestricto de asistir a consulta médica en los puertos de arribo, y b) los marinos pueden acudir a los hospitales del IMSS ubicados en los puertos mexicanos y están cubiertos para su asistencia médica en el extranjero por las pólizas de seguro que los armadores contratan con los clubes de protección e indemnización. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión observa que el Gobierno no indica las disposiciones legales que garantizan el cumplimiento del *artículo 4, párrafo c)*, del Convenio según el cual debe garantizarse a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en los puertos de escala, cuando ello sea posible. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione dicha información.**

Artículo 5, párrafos 4 y 5. Inspección del botiquín de a bordo a intervalos regulares. Comprobación del etiquetado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para dar cumplimiento a los requisitos específicos del Convenio relativos a la inspección del botiquín de a bordo a intervalos regulares no superiores a doce meses y la comprobación del etiquetado, de las fechas de caducidad y de las condiciones de conservación de todos los medicamentos contenidos en el botequín de a bordo de conformidad con lo previsto en el *artículo 5* del Convenio. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno según la cual: a) la Dirección General de Marina Mercante de la SCT está encargada de la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT4-2009, de 24 de febrero de 2009, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte, y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, la cual establece que el botequín de primero auxilios debe ser llevado a bordo, y b) las inspecciones de seguridad marítima son constantes y se llevan a cabo en cualquier momento. La Comisión observa sin embargo que la información proporcionada por el Gobierno no permite aclarar cómo se garantiza que dichas inspecciones sean llevadas a cabo a intervalos regulares no superiores a doce meses y que se verifiquen los requisitos de conservación de los medicamentos enumerados en el *artículo 5, párrafos 4 y 5*. **Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la frecuencia de las inspecciones de los botiquines de a bordo, y sobre la verificación del cumplimiento con los requisitos del Convenio relativos al etiquetado y conservación de los medicamentos.**

Artículo 7. Consultas médicas por radio o por satélite. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo se garantiza que los buques puedan efectuar consultas médicas, en cualquier hora del día, por radio o por satélite, con arreglo al *artículo 7*. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno se refiere una vez más al respecto del reglamento de inspección de seguridad marítima, de 12 de mayo de 2004, que exige la existencia de un equipo de radiocomunicación a bordo. La Comisión recuerda que tal existencia no es suficiente para garantizar la disponibilidad del personal médico competente para efectuar consultas médicas por radio o por satélite a los buques en alta mar, en cualquier hora del día o de la noche, como exigido en virtud del *artículo 7*. **Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio.**

Artículo 8. Presencia de un médico a bordo de buques. En su comentario anterior, la Comisión señaló al Gobierno que ni el reglamento de inspección de seguridad marítima ni la Ley Federal del Trabajo especifican los buques o categorías de buques que deben llevar un médico entre los miembros de su tripulación. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más al *artículo 204, VIII*, de la Ley Federal del Trabajo, según el cual los patrones deben llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. **Dado que las disposiciones mencionadas por el Gobierno no satisfacen los requisitos del artículo 8, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que los buques cubiertos por el Convenio lleven a bordo un médico entre los miembros de su tripulación.**

Artículo 9. Cursos de formación destinados a las personas encargadas de la asistencia médica. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que los cursos de formación destinados a las personas que sin ser médicos están encargados de garantizar asistencia médica a bordo de los buques deben cumplir con los requisitos del *artículo 9*, tales como ser aprobados por la autoridad competente y basarse en el contenido de las relevantes guías internacionales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual las escuelas náuticas y el centro educativo ofrecen a los oficiales y personal subalterno de la Marina Mercante cursos de capacitación de conformidad con los requisitos del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), los cuales incluyen los siguientes cursos: primeros auxilios básicos, primeros auxilios médicos, y cuidados médicos. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que dichos cursos están avalados a

nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Marítima, mientras que los títulos y refrendos otorgados, son reconocidos a nivel mundial por la Organización Marítima Internacional. La Comisión toma nota de esta información que responde de manera satisfactoria a los requerimientos del Convenio.

Artículo 11. Enfermería independiente. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la legislación nacional no daba cumplimiento al requisito del artículo 11 según el cual todo buque de 500 toneladas de registro bruto o más, que lleve 15 o más marinos a bordo y que efectúe una travesía de más de tres días, deberá disponer a bordo de una enfermería independiente. La Comisión **lamenta** tomar nota al respecto de que el Gobierno se refiere una vez más al artículo 49 del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, de 13 de noviembre de 2014, que regula la prestación de servicios preventivos de medicina del trabajo. La Comisión reitera que la citada norma es de carácter general y no contiene disposiciones sobre la determinación del tipo de buques en los cuales se exige la construcción de una enfermería independiente ni sobre la descripción de las características propias de dicha enfermería. **La Comisión pide por lo tanto una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 11 del Convenio.**

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)

Artículo 2, párrafo 1, c), del Convenio. Repatriación en caso de enfermedad, accidente o cualquier otra razón médica. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de que en virtud del artículo 204, VII, de la Ley Federal de Trabajo, los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los marinos alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos en los casos de enfermedades. Sin embargo, no se menciona la responsabilidad del armador de pagar los gastos de repatriación a un marino enfermo o herido que es desembarcado durante el viaje como consecuencia de enfermedad o accidente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Ley Federal del Trabajo no establece de manera específica la obligación de pagar los gastos de repatriación en dichas circunstancias. El Gobierno indica, sin embargo, que esta obligación se deriva del artículo 123, XXVI, de la Constitución que obliga a que los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero especifiquen claramente que los gastos de repatriación queden a cargo del empresario. La Comisión observa sin embargo que dicha disposición de la Constitución no regula la repatriación de los marinos a bordo de buques de bandera mexicana o aquellos en los que el armador no es extranjero. **La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar a toda la gente de mar el derecho de ser repatriado a cargo del armador de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, párrafo 1, c), del Convenio.**

Artículo 2, párrafo 1, e) y f). Repatriación en caso de incapacidad del armador de seguir cumpliendo las obligaciones legales o contractuales y en caso de que un marino no consienta ir a una zona de guerra. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para garantizar que los marinos tengan derecho a ser repatriados en las circunstancias previstas en el artículo 2, párrafo 1, e) — es decir, cuando el armador no puede seguir con sus obligaciones legales o contractuales como empleador del marino a causa de quiebra, venta del buque, o por cualquier otro modo análogo, y en el artículo 2, párrafo 1, f) — es decir, cuando un buque se dirija hacia una zona de guerra a la cual el marino no consienta ir. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el artículo 204, IX, de la Ley Federal del Trabajo garantiza la repatriación, sin importar la causa. Sin embargo, la Comisión **lamenta** observar que dicho artículo excluye del ámbito de la garantía las situaciones de separación por causas que no son imputables al patrón, las cuales pueden incluir los casos enumerados en el artículo 2, párrafo 1, e) y f). **Dado que el artículo 204, IX, de la Ley Federal del Trabajo no da efecto de manera apropiada al artículo 2, párrafo 1, e) y f), la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para garantizar la obligación de repatriación a cargo del armador prevista en el artículo 2, párrafo 1, e) y f).**

Artículo 2, párrafo 1, g). Repatriación en caso de terminación o interrupción del empleo como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la ausencia de disposiciones de la legislación nacional relativas al derecho a la repatriación en caso de interrupción o terminación del empleo como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo. La Comisión toma nota de que al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la Comisión **lamenta** observar que dicho artículo sólo garantiza la repatriación en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque. Por lo tanto, no cubre los casos de terminación o interrupción del empleo debidos a un laudo arbitral o un convenio colectivo. **Dado que el artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo no da efecto de manera apropiada al artículo 2, párrafo 1, g), la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para garantizar la obligación de repatriación a cargo del armador prevista en el artículo 2, párrafo 1, g), del Convenio.**

Artículo 2, párrafo 2. Duración máxima del servicio. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la inexistencia de disposiciones relativas a la duración máxima del servicio a bordo que da derecho a la repatriación. La Comisión **lamenta** tomar nota de que al respecto, el Gobierno se refiere a los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 133 de la Constitución. La Comisión recuerda que el artículo 2, párrafo 2 requiere que la legislación nacional o los convenios colectivos prescriban la duración máxima del servicio a bordo al término del cual el marino tiene derecho a la repatriación. **En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas apropiadas para que dicha duración sea prescrita por la legislación nacional o los convenios colectivos.**

Artículo 3. Destinos de la repatriación. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la falta de disposiciones que establezcan el derecho de los marinos a elegir entre diferentes puntos de destino para la repatriación. La Comisión toma nota de que al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. La Comisión *lamenta* observar que dicho artículo sólo cubre las repatriaciones en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque, y no permite que en tales situaciones los marinos puedan elegir entre diferentes puntos de destinos. La Comisión *lamenta* tomar nota de que al respecto, el Gobierno indica que los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 133 de la Constitución dan cumplimiento al artículo 3. La Comisión recuerda sin embargo que el artículo 3, párrafo 1, requiere que la legislación nacional prescriba los puntos de destino a los cuales podrá repatriarse a la gente de mar. **Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte la legislación necesaria para dar efecto al artículo 3.**

Artículos 4 y 5. Responsabilidad del armador de organizar la repatriación. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación, por parte del armador, de organizar la repatriación por medios rápidos y apropiados. La Comisión toma nota de que, al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. La Comisión observa sin embargo que dicho artículo garantiza la repatriación sólo en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque. La Comisión *lamenta* observar que dichas disposiciones no cubren todos los casos de repatriación contemplados en el Convenio, no precisan lo que debe incluirse en los gastos de repatriación enumerados en el artículo 4 ni aclaran cómo se organiza la repatriación cuando el armador no toma las disposiciones necesarias de conformidad con lo previsto en el artículo 5. **Dado que el artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo no dan efecto de manera apropiada a los artículos 4 y 5 del Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para asegurar que la repatriación se organice de conformidad con lo establecido en el Convenio.**

Artículo 6. Pasaporte y otros documentos de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que especificara cómo se garantiza que los marinos que van a ser repatriados puedan disponer de su pasaporte y otros documentos de identidad. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al respecto a la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) de realizar las gestiones relativas a la entrada en los países de repatriación. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que el artículo 6 aspira a proteger a los marinos contra situaciones en las cuales éstos se ven obligados a entregar su pasaporte al armador, capitán o agencia de empleo, con lo que podrían quedar sin documento de identidad al momento de la repatriación. **La Comisión pide por lo tanto una vez más al Gobierno que aclare cómo se garantiza que los marinos puedan disponer de su pasaporte y otros documentos de identidad para fines de repatriación.**

Artículo 7. Vacaciones retribuidas. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la legislación nacional no contiene disposición alguna que garantice que el tiempo invertido en espera de la repatriación y en la duración del viaje no sea descontado de los días de vacaciones remuneradas que el marino hubiese adquirido. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la aplicación directa del Convenio e indica que los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 133 de la Constitución dan aplicación al artículo 7. La Comisión toma nota de esta información que responde a sus requerimientos anteriores.

Artículo 12. Disponibilidad del texto del Convenio en el idioma apropiado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo se garantiza que el Convenio sea puesto a disposición de los miembros de la tripulación en todo buque matriculado en su territorio en un idioma apropiado. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se consultará con la Dirección General de Marina Mercante de la SCT sobre la posibilidad de que esa autoridad difunda el texto del Convenio, en inglés y en español, a los miembros de la tripulación de todo buque dedicado a la navegación marítima matriculado en el territorio de México. **La Comisión pide al Gobierno que, tras haber consultado a la Dirección General de Marina Mercante de la SCT proporcione información actualizada sobre la aplicación de esta disposición del Convenio.**

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 22** (Brasil, Iraq, Papua Nueva Guinea, Reino Unido: Anguilla); el **Convenio núm. 23** (Azerbaiyán, Iraq, Reino Unido: Anguilla); el **Convenio núm. 55** (Perú); el **Convenio núm. 56** (Perú); el **Convenio núm. 68** (Guinea-Bissau); el **Convenio núm. 69** (Guinea-Bissau); el **Convenio núm. 92** (Azerbaiyán, Iraq, República de Moldova); el **Convenio núm. 108** (Guinea-Bissau, Islas Salomón, Reino Unido: Anguilla, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía); el **Convenio núm. 133** (Azerbaiyán, Brasil); el **Convenio núm. 134** (Azerbaiyán); el **Convenio núm. 146** (Brasil, Iraq); el **Convenio núm. 147** (Azerbaiyán, Brasil, Iraq, Trinidad y Tabago); el **Convenio núm. 163** (Brasil); el **Convenio núm. 164** (Brasil); el **Convenio núm. 166** (Brasil); el **Convenio núm. 178** (Brasil); el **Convenio núm. 186** (Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Benin, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, China, Filipinas, Ghana, Honduras, Hungría, India, República Islámica del Irán, Irlanda, Japón, Kenya, Liberia, Malta, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido: Bermudas, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Suiza, Togo).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 68** (Egipto); el **Convenio núm. 108** (Irlanda, Malta).

Pescadores

Guinea

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) (ratificación: 1960)

Artículos 2 a 5 del Convenio. Certificado médico. Durante trece años, la Comisión ha pedido al Gobierno que proporcione información sobre los textos legislativos que dan efecto a los requisitos específicos de los *artículos 3 a 5* del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se dio inicio, a principios de 2015, a una revisión del Código de la Marina Mercante, con el fin de adaptarlo a la realidad actual, teniendo en cuenta los convenios internacionales ratificados. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en su memoria, que el Código de la Marina Mercante sigue aún en vía de revisión y promete enviar una copia del mismo después de este proceso. Al respecto, la Comisión recuerda que la revisión del Código de la Marina Mercante debería tomar en consideración los problemas de incumplimiento del Convenio planteados desde hace muchos años. Éstos, se refieren a la obligación de presentar un certificado médico antes del contrato para trabajar a bordo de un barco de pesca (*artículo 2*), la determinación de la naturaleza del examen médico que deba efectuarse y las indicaciones que deban anotarse en el certificado médico (*artículo 3*), la duración de la validez del certificado médico de los pescadores jóvenes se limita a un año (*artículo 4*) y la posibilidad de pedir otro reconocimiento en caso de que se haya negado un certificado (*artículo 5*). **En vista de lo anterior, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva adoptar toda medida necesaria que permita dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio.**

Federación de Rusia

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) (ratificación: 1969)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno sobre la aplicación de los convenios relacionados con la pesca. Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de éstos, la Comisión considera útil examinarlos en un solo comentario.

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

Artículo 5 del Convenio. Reconocimiento médico adicional realizado por un árbitro médico. En sus comentarios anteriores, tomando nota de que el Gobierno reiteraba que se estaba adoptando legislación en materia de aplicación, la Comisión le pidió que indicara las medidas adoptadas para prever las disposiciones necesarias a fin de que una persona a la que, después de un reconocimiento médico, se ha negado un certificado pueda pedir otro reconocimiento por un árbitro médico independiente, conforme a lo establecido en el *artículo 5* del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que un proyecto de orden del Ministerio de Sanidad de Rusia sobre la aprobación del procedimiento para realizar exámenes en materia de aptitud para el trabajo y los tipos de evaluaciones médicas de la aptitud para realizar determinados trabajos está actualmente en proceso de consulta pública. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en lo que respecta a la pesca, que está regulada por el Código de la Marina Mercante, el procedimiento para realizar exámenes médicos y los tipos de evaluaciones médicas para determinar si existen contraindicaciones para trabajar en un buque los establece el órgano ejecutivo federal responsable de la elaboración de la política estatal y la normativa legal en el ámbito de la atención sanitaria, mediante un acuerdo con el órgano ejecutivo federal en el ámbito del transporte. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que dicho procedimiento no se ha establecido. La Comisión recuerda que la falta de legislación que regule el procedimiento de interposición de un recurso cuando se ha denegado un certificado médico a un pescador ha estado pendiente durante muchos años. **Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para aplicar sin demora esta disposición del Convenio.**

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)

Artículo 3, 1), del Convenio. Legislación sobre el alojamiento de la tripulación. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la falta de progresos notables de cara a la aprobación de una legislación que dé pleno efecto a las disposiciones del Convenio y expresó la esperanza de que se adopte pronto la legislación pertinente. Asimismo, constató que el Gobierno, en memorias anteriores, señaló que estaba elaborando un proyecto legislativo que reemplazaría al reglamento de 1977 sobre normas sanitarias para buques y embarcaciones soviéticos, para asegurar la conformidad con las disposiciones del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el reglamento del registro marítimo ruso de buques contiene normas para los buques mercantes, pero no comprende requisitos especiales para el alojamiento en los buques pesqueros. Además, el

Gobierno indica que la introducción de modificaciones en el Código de la Marina Mercante y en varias leyes, que se están debatiendo en la Duma del Estado de la Federación de Rusia, tiene el objeto de definir el concepto de buque pesquero y mejorar la seguridad del transporte marítimo y la navegación. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión *lamenta* que apenas se ha avanzado en lo relativo a la modificación de la legislación para ajustarla al Convenio. *Al tiempo que recuerda que lleva años señalándose a la atención del Gobierno la necesidad de aprobar una legislación que dé efecto a varias de las disposiciones del Convenio, la Comisión solicita al Gobierno una vez más que adopte sin demora las medidas necesarias.*

La Comisión plantea otras cuestiones relativas al Convenio núm. 126 en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sierra Leona

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2005.

Artículos 3 a 15 del Convenio. Certificados de competencia. La Comisión ha realizado comentarios durante bastantes años sobre la falta de legislación que dé efecto al Convenio. El Gobierno afirma en su memoria comunicada en 2004 que se ha progresado a este respecto y que se organizó un taller nacional sobre la elaboración de políticas de pesca. Asimismo, el Gobierno indica, en su última memoria, que tan pronto como se hayan adoptado se comunicarán a la OIT copias de los nuevos textos legislativos y de los textos que prevean la nueva política. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultados del taller nacional encargado de elaborar la política de pesca y sobre todos los progresos concretos realizados en lo que respecta a la adopción de leyes nacionales para dar aplicación al Convenio.* La Comisión considera que la Oficina está preparada para ofrecer asesoramiento y responder favorablemente a toda petición específica de asistencia técnica a este respecto. *Por último, la Comisión le ruega al Gobierno proporcionar información actualizada sobre la industria de la pesca, incluidas estadísticas sobre la composición y capacidad de la flota pesquera del país y el número aproximado de pescadores remunerados empleados en el sector.*

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 112** (Guatemala); el **Convenio núm. 113** (Costa Rica, Cuba, Guatemala, Montenegro); el **Convenio núm. 114** (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Montenegro, Panamá); el **Convenio núm. 125** (Brasil, Francia: Polinesia Francesa, Panamá); el **Convenio núm. 126** (Brasil, Francia: Polinesia Francesa, Panamá, Federación de Rusia, Sierra Leona).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 113** (Brasil, Ecuador).

Trabajadores portuarios

Congo

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota con *preocupación* de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2008.

La Comisión *lamenta* tomar nota de que la memoria presentada por el Gobierno es idéntica a la última memoria que presentó en 2007, en base a la cual la Comisión estableció su observación de 2008, retomada en 2009, en 2010 y en 2011, a falta de respuesta del Gobierno. *La Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien recurrir a la asistencia técnica de la OIT para resolver todo problema vinculado con la aplicación de este Convenio, y espera que se comuniquen una memoria para su examen en su próxima reunión. Mientras tanto, y ante la ausencia de nuevas informaciones, la Comisión se ve obligada, una vez más, a reiterar su observación anterior, en los siguientes términos:*

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno que indica que una comisión nacional técnica de consultas sobre higiene, seguridad en el trabajo y prevención de los riesgos profesionales se estableció, de conformidad con el decreto núm. 2000-29, de 17 de marzo de 2000, que da efecto al artículo 7 del Convenio. Sin embargo, nota también que posteriormente el Gobierno proporcionará las informaciones solicitadas sobre la aplicación de los artículos 2, 4, 5, 6 y 11 a 36. En lo que se refiere a las otras informaciones solicitadas, la Comisión toma nota que no se haya respondido a los puntos planteados en sus comentarios anteriores o que sólo se ha proporcionado informaciones aplicables a las empresas de manera general. El Gobierno parece indicar que los trabajadores portuarios deberían ser tratados de igual modo que los demás trabajadores y que los puertos deberían ser considerados como cualquier otra empresa. *Refiriéndose a los artículos 4 a 7 del Convenio, la Comisión desea recordar que el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones específicas del Convenio. Se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores que estaban redactados en los términos siguientes:*

La Comisión señala a la atención del Gobierno la falta de disposiciones relativas a la seguridad y salud en los trabajos portuarios. La Comisión había tomado nota de que un proyecto de decreto destinado a regir este ámbito había sido elaborado por los servicios técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. En su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, el Gobierno repite esta información añadiendo que este proyecto está en fase de adopción. La Comisión confía en que las disposiciones del texto en cuestión garantizarán la aplicación de las disposiciones siguientes del Convenio: artículo 4 (Objetivos y ámbitos que tienen que cubrir las disposiciones que prescribe la legislación nacional, de conformidad con la parte III del Convenio); artículo 5 (Responsabilidad de los empleadores, propietarios, capitanes u otras personas, según los casos, en la aplicación de las medidas de seguridad y salud; obligación de colaboración de los empleadores siempre que varios de ellos realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo), y artículo 7 (Consultas y colaboración entre empleadores y trabajadores). *La Comisión ruega al Gobierno que le comuniquen una copia de este decreto una vez que haya sido adoptado.*

En sus anteriores memorias el Gobierno se refirió a los decretos núm. 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT sobre la organización y funcionamiento de centros sociosanitarios de las empresas instaladas en la República del Congo, y núm. 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT que establece las formas de constituir centros sociosanitarios comunes para diversas empresas instaladas en la República del Congo. *Como estos textos nunca se han recibido, la Comisión agradecería al Gobierno que le transmitiese copias de ellos.*

Artículo 6. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, deben organizarse sesiones de información y de sensibilización de los trabajadores sobre las medidas de seguridad en el lugar de trabajo para que el jefe del establecimiento informe a los trabajadores de los peligros resultantes de la utilización de máquinas así como sobre las precauciones que deben adoptarse. *La Comisión ruega al Gobierno que indique las disposiciones relativas a la organización de estas sesiones así como las disposiciones adoptadas para dar efecto al apartado c) del párrafo 1 de este artículo.*

Artículo 8. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993 según la cual todas las medidas de seguridad se han previsto en el capítulo II del decreto núm. 9036 de 10 de diciembre de 1986. La Comisión observa que esta parte del decreto contiene disposiciones que prevén medidas de protección generales mientras que el Convenio exige la adopción de medidas específicas para los trabajos portuarios. *Ruega al Gobierno que indique las disposiciones que establecen la adopción de medidas eficaces (vallándolo, colocando señales de advertencia, o utilizando otros medios adecuados, incluyendo, en caso de necesidad, la cesación del trabajo) para proteger a los trabajadores hasta que el lugar reúna de nuevo condiciones de seguridad.*

Artículo 14. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, la aplicación de este artículo la garantizan los inspectores del trabajo cuando realizan visitas a las empresas. *La Comisión ruega al Gobierno que indique las disposiciones que garantizan que los equipos e instalaciones eléctricos se construyen, instalan, accionan y mantienen de manera que se prevengan los riesgos y que precise las normas reconocidas por la autoridad competente para los equipos e instalaciones eléctricos.*

Artículo 17. La Comisión toma nota de que el artículo 41 del decreto núm. 9036, citado por el Gobierno en su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, como el que da efecto a este artículo del Convenio, no contiene las medidas específicas a adoptar para la utilización de aparejos de izado en condiciones atmosféricas especiales (acción del viento). *La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que el acceso a las bodegas o a las cubiertas de carga de los buques se efectúa de una forma que esté de conformidad con las disposiciones de este artículo.*

Artículo 21. La Comisión ha tomado nota de las disposiciones de los artículos 47 a 49 del decreto núm. 9036 citadas por el Gobierno, en su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, como las disposiciones que dan efecto a este artículo del Convenio. Toma nota de que los artículos citados prevén medidas de protección de algunas máquinas o de partes y dispositivos que pueden ser peligrosos. *Ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para que todo aparejo de izado y todas las piezas del equipo accesorio y de manipulación, así como toda eslinga o dispositivo elevador que forme parte integrante de la carga, estén de conformidad con las disposiciones del Convenio.*

Artículos 22, 23, 24 y 25. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere, en su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993, a la certificación de las máquinas, incluidos los aparejos de izado, realizada por el control técnico de los órganos asesores como medida de carácter general que garantiza la solidez y el buen funcionamiento de los aparejos de izado. Sin embargo, estos artículos del Convenio prevén diversas medidas a fin de garantizar la utilización de aparatos y accesorios sin peligro ni riesgo para los trabajadores: prueba de todo aparejo de izado y de todo equipo accesorio de manipulación (cada cinco años en los buques); examen en profundidad (al menos una vez cada 12 meses); e inspección antes de cada utilización. **La Comisión ruega al Gobierno que indique las disposiciones que establecen que las medidas antes mencionadas se aplicarán a todos los aparejos de izado, en los puertos y en los buques, así como a todos los equipos accesorios de manipulación.**

Artículo 30. La Comisión toma nota de que el artículo 43 del decreto núm. 9036 al que se refiere el Gobierno no tiene relación con la fijación de cargas a un aparejo de izado. **Ruega al Gobierno que indique las disposiciones relativas a la fijación de cargas a los aparejos de izado.**

Artículo 34. **La Comisión ruega al Gobierno que le transmita una copia de las consignas en relación con la utilización de material de protección individual a las que se refiere en su memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 1993.**

Artículo 35. En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el artículo 147 del Código del Trabajo rige la evacuación de los heridos y enfermos que se puedan transportar, y que no puedan ser tratados con los medios de los que disponga el empleador. Toma nota de que el Gobierno también se refiere en sus memorias a los decretos núms. 9033 y 9034 mencionados en el párrafo 2 *supra*. **La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas, en virtud de los textos mencionados, o de otras formas, para garantizar que para administrar los primeros auxilios se dispone de medios suficientes, y especialmente de personal con formación.**

Artículo 37, párrafo 1. La Comisión recuerda que según esta disposición del Convenio se deberán crear comisiones de seguridad e higiene compuestas por representantes de los empleadores y de los trabajadores en todos los puertos donde se emplea a un gran número de trabajadores. **Recordando la declaración del Gobierno según la cual las comisiones de seguridad e higiene previstas por la ley no han sido creadas, la Comisión le ruega que indique las medidas adoptadas para garantizar la formación de estas comisiones en los puertos que tengan un número importante de trabajadores.**

Artículo 38, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que a falta de comisiones de seguridad e higiene sus funciones en materia de instrucción y de formación se confían a un agente especializado en este ámbito a nivel de empresa. **La Comisión ruega al Gobierno que le comunique información sobre las actividades de estos agentes.**

Artículo 39. La Comisión toma nota de que el artículo 61 de la ley núm. 004/86, de 25 de febrero de 1986, por la que se crea el código de seguridad social sólo da efecto a este artículo del Convenio de forma parcial. **Ruega al Gobierno que indique las disposiciones que garantizan su aplicación a las enfermedades profesionales.**

Artículo 41, párrafo 1, a). En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al decreto núm. 9036, de 10 de diciembre de 1986, como el texto que establece las obligaciones de carácter general de las personas y organismos interesados en lo que respecta a los trabajos portuarios (considerando el puerto como cualquier empresa industrial) así como del comentario realizado al mismo tiempo por éste respecto a que no se han adoptado medidas específicas para los trabajos portuarios. **La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para precisar las obligaciones específicas de las personas y organismos interesados en los trabajos portuarios.**

A falta de información sobre la aplicación de las disposiciones siguientes, la Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas específicas que dan efecto a estas disposiciones del Convenio:

- **Artículo 9, párrafos 1 y 2.** Medidas de seguridad a adoptar (alumbrado y señalamiento) en caso de obstáculos peligrosos.
- **Artículo 10, párrafos 1 y 2.** Mantenimiento de las superficies utilizadas para el tránsito de vehículos o para el apilamiento de mercancías y precauciones a adoptar durante el apilamiento.
- **Artículo 11, párrafos 1 y 2.** Anchura de los pasillos y pasillos separados para el tránsito de peatones.
- **Artículo 16, párrafos 1 y 2.** Seguridad del transporte para ir a un buque por mar o desde un buque a otro lugar, y seguridad del embarque y desembarque; seguridad del transporte por tierra hasta un lugar de trabajo o de regreso de éste.
- **Artículo 18, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5.** Reglamentación sobre los cuarteles.
- **Artículo 19, párrafos 1 y 2.** Protección de las aberturas de los puentes; cierre de las bocas de escotillas cuando éstas ya no se utilizan.
- **Artículo 20, párrafos 1, 2, 3 y 4.** Medidas de seguridad a adoptar cuando se utilizan vehículos a motor en la bodega; fijación de los cuarteles de escotilla; reglamentación en materia de ventilación; medios de evacuación sin peligro de las tobas durante la carga o descarga seca a granel.
- **Artículo 26, párrafos 1, 2 y 3.** Reconocimiento mutuo de las disposiciones tomadas por los Miembros en lo que concierne a las pruebas y exámenes.
- **Artículo 27, párrafos 1, 2 y 3.** Indicación de las cargas máximas en la utilización de los aparejos de izado.
- **Artículo 28.** Planes de utilización de los aparejos.
- **Artículo 29.** Resistencia y construcción de bateas o paletas de contención de carga.
- **Artículo 31, párrafos 1 y 2.** Disposición y funcionamiento de las estaciones terminales de contenedores de carga y organización del trabajo en estas terminales.
- **Artículo 38, párrafo 2.** Edad mínima límite para encargarse del funcionamiento de los aparatos de izado.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

España

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1975)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), incluidas en la memoria del Gobierno.

Artículos 2, 3 y 5 del Convenio. Política nacional para fomentar el empleo permanente o regular a los trabajadores portuarios. Trabajadores portuarios registrados. Cooperación entre los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el régimen aplicable a los trabajadores portuarios en virtud de, entre otros instrumentos jurídicos, el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), aprobado por el Real decreto legislativo núm. 2/2011, de 5 septiembre de 2011, y la resolución de 17 de enero de 2014 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. El Gobierno indica que, según lo dispuesto en el artículo 151, párrafo 1, del TRLPEMM y el artículo 6.3.1 del IV Acuerdo, los trabajadores portuarios están vinculados con un contrato de carácter indefinido a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), constituidas en los puertos de interés general. El Gobierno añade que las SAGEP mantienen un registro de los trabajadores portuarios, respecto a los cuales existe una prioridad de contratación por parte de las empresas estibadoras, tal y como establecen los artículos 142 y siguientes del TRLPEMM. La Comisión observa, no obstante, que se introdujeron profundos cambios al citado régimen mediante la aprobación del Real decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo de 2017, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13. La señalada sentencia del TJUE condenó al Reino de España por el incumplimiento de la libertad de establecimiento al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseaban desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general, la obligación de inscribirse y participar en el capital de una SAGEP, y de contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a disposición por dicha sociedad anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente. En este sentido, la Comisión observa que, de acuerdo con lo dispuesto en la exposición de motivos del citado Real decreto-ley (RDL), en el nuevo régimen se establece el principio de libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías. De este modo, según el RDL, los operadores no están obligados a participar en ninguna empresa de puesta a disposición de trabajadores portuarios y pueden contratar a éstos con plena libertad, siempre que se cumplan una serie de requisitos respecto a la capacitación de tales trabajadores. Asimismo, se prevé la creación de centros portuarios de empleo (CPE), cuyo objeto será el empleo regular de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de manipulación de mercancías, así como su formación y cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales portuario. Los CPE operarán como empresas de trabajo temporal (ETT) específicas para el sector precisando la autorización de la administración laboral exigida para tales empresas en el ordenamiento jurídico. Las empresas estibadoras no tendrán la obligación de participar en los centros que se creen, ni tampoco de contratar a los trabajadores puestos a disposición por ellos de forma prioritaria. La Comisión toma nota asimismo de que en sus observaciones las organizaciones de trabajadores denuncian que el nuevo régimen del trabajo portuario no se encuentra de conformidad con los requerimientos del Convenio. En lo que respecta a la articulación de medidas que aseguren el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios, la UGT sostiene que con el nuevo régimen desaparece la obligación de que la contratación de trabajadores por la SAGEP deba realizarse de forma indefinida. Además, cuestiona que las nuevas contrataciones realizadas por parte de estas sociedades o por los CPE tiendan hacia la utilización de contratos de carácter indefinido, puesto que su regulación será la propia de las ETT. Igualmente, durante el período de transformación de las SAGEP, el cual se prevé que será de tres años, se establece una progresiva reducción de la obligación de las empresas estibadoras de recurrir a los trabajadores de aquéllas hasta que en el cuarto año desaparezca dicha obligación, pasando a partir de ese momento a que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a trabajadores portuarios cualificados, ya sea a través de las SAGEP, CPE o ETT, con lo cual se verá afectada la regularidad en la prestación de servicios actuales por parte de los trabajadores portuarios. La UGT informa de que esta modificación ha tenido una gran contestación por parte de los sindicatos representativos de la estiba, tanto mediáticamente como a través de la convocatoria de jornadas de huelga, cuyo objeto ha sido intentar mantener el empleo actualmente existente. La UGT indica que, en este contexto, se consiguió celebrar un acuerdo con la patronal del sector por el cual se modificó el IV Acuerdo marco del sector de la estiba portuaria con miras a incluir una cláusula referente a la subrogación de los trabajadores de la SAGEP en las empresas estibadoras en función de su participación en las mismas. En definitiva, la UGT denuncia que, como consecuencia de la adopción del nuevo régimen, se verá afectada la seguridad en el empleo de los trabajadores portuarios así como sus ingresos mínimos, especialmente respecto de los nuevos trabajadores, debido a su contratación bajo el régimen de empresas de trabajo temporal. En relación con el mantenimiento de un registro de los trabajadores portuarios, la UGT y la CCOO denuncian que, pese a las demandas realizadas por las organizaciones de trabajadores, la nueva reglamentación no establece ninguna obligación al respecto. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre cómo se asegura bajo el nuevo régimen, el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios (artículo 2, párrafo 1). Solicita también al Gobierno que indique el mínimo de períodos de empleo e ingresos mínimos que se han asegurado a los trabajadores portuarios**

ocasionales como resultado de la implementación del nuevo régimen y de la negociación colectiva (artículo 2, párrafo 2). La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información sobre las modalidades en el nuevo régimen del trabajo portuario, de acuerdo con las cuales se establecen y llevan los registros para todas las categorías de trabajadores portuarios y de qué modo se asegura la prioridad a los trabajadores portuarios matriculados para la obtención de un trabajo en los puertos y de qué modo deben estar dispuestos a trabajar (artículo 3). Por último, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre las cuestiones planteadas por los interlocutores sociales, así como sobre los resultados del proceso de diálogo, incluido todo cambio en la manera en que se organiza el trabajo portuario en el país (artículo 5).

Artículo 6. Seguridad, higiene, bienestar y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que bajo el régimen anterior, el artículo 153 del TRLPEMM establecía la cualificación exigida para acceder a los censos de los trabajadores portuarios. A este respecto, el Gobierno se refiere, entre otros instrumentos normativos, a la orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre de 2012, por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y a la Resolución de puertos del Estado, de 11 de abril de 2011, por la que se publica el Acuerdo del consejo rector relativo al contenido mínimo de las pruebas de aptitud psicofísica para acreditar la idoneidad de los trabajadores que deseen desarrollar actividades que integren el servicio de manipulación de mercancías. Asimismo, el Gobierno indica que el artículo 152 del TRLPEMM preveía la obligación de las SAGEP de destinar anualmente como mínimo el 1 por ciento de su masa salarial a la formación continua de sus trabajadores para garantizar su profesionalidad. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en virtud del artículo 3 del RDL se modifica la regulación anterior relativa a las exigencias de formación de los trabajadores portuarios. En virtud del citado artículo se solicita como requisito de capacitación la obtención del certificado de profesionalidad previsto en el anexo VIII (Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo) del Real decreto 988/2013, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establecen nueve certificados de profesionalidad de la familia profesional marítimopesquera. No obstante, el artículo 3, párrafo 2, del RDL prevé que dicha certificación no resultará exigible a determinados trabajadores, tales como aquéllos que acrediten haber realizado con anterioridad a la entrada en vigor del RDL más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. A este respecto, la Comisión toma nota de que la UGT señala que la aplicación de los nuevos requisitos de formación plantea un problema en el caso de aquellos trabajadores portuarios con contrato temporal que, si bien accedieron al servicio mediante las titulaciones requeridas por la regulación anterior, no han acumulado las 100 jornadas de trabajo. La UGT señala que dichos trabajadores podrán ser excluidos como trabajadores portuarios, pese a tener la cualificación requerida bajo el régimen anterior, hasta la obtención del certificado profesional exigido. En lo que respecta a las medidas de seguridad, higiene y bienestar, el Gobierno indica que es de aplicación la Ley núm. 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo. La UGT añade que la nueva regulación en materia de formación puede originar problemas de seguridad, ya que la misma prevé la posibilidad de homologar la certificación requerida por el RDL con jornadas de trabajo que se hayan realizado en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin que se establezca que las mismas deban limitarse a las funciones de estiba o bajo qué condiciones o capacitación. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre las cuestiones formuladas por los interlocutores sociales en relación con la aplicación de las nuevas disposiciones relativas a la formación de los trabajadores portuarios.**

Aplicación del Convenio en la práctica. El Gobierno indica que a 31 de marzo de 2017 habían 6 165 trabajadores portuarios registrados, de los cuales 1 487 se encontraban registrados en el puerto de Algeciras, 1 455 en el de Valencia y 1 030 en el de Barcelona. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique una valoración general de la manera en que se aplica el Convenio en el país, incluyendo, por ejemplo, extractos de los informes y datos sobre el número de trabajadores portuarios y sobre las variaciones en su número a lo largo del tiempo.**

Guyana

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota *con preocupación* de que, desde 2002, viene solicitando reiteradamente al Gobierno que comunique información que le permita determinar de qué manera se da efecto al Convenio en Guyana. Toma nota de la breve memoria del Gobierno, que indica que las modalidades de trabajo de los trabajadores portuarios no están estructuradas, ni organizadas. El Gobierno añade que los trabajadores portuarios son fundamentalmente trabajadores independientes que realizan su actividad de manera informal en el sector privado y que, en consecuencia, es difícil determinar si se aplican las disposiciones del Convenio. En este sentido, la Comisión recuerda que el Convenio no excluye a los trabajadores independientes. El Convenio se aplica a las personas que se dedican al trabajo portuario de manera regular y que obtienen de ese trabajo la mayor parte de sus ingresos anuales (*artículo 1, párrafo 1*). **Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la manera en la que se asegura el cumplimiento de las disposiciones del Convenio. Solicita además al Gobierno que comunique información sobre el número de trabajadores portuarios en todas las categorías ocupacionales registrados de conformidad con el artículo 3 del Convenio y sobre los cambios que se produzcan al respecto (parte V del formulario de memoria).**

La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información completa en respuesta a sus comentarios anteriores.

República de Moldova

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) (ratificación: 2007)

La Comisión *lamenta* tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Legislación. La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio. Asimismo, toma debida nota de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (RM núm. 186-XVI de 10 de julio de 2008) (en adelante, la Ley OSH), así como de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior y el funcionamiento de los botes salvavidas y del equipo de salvamento de los buques (en adelante, las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior) a la que hace referencia el Gobierno. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no ha proporcionado la legislación ni las disposiciones reglamentarias concretas que dan efecto al Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las disposiciones pertinentes que dan efecto a cada artículo del Convenio y que transmita el texto de dichas disposiciones, así como una copia de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior, si es posible en uno de los idiomas de trabajo de la Oficina.**

La Comisión también toma nota de que el Puerto Franco Internacional de Giurgiulesti (GIFP), que dispone de la capacidad necesaria para recibir tanto buques de navegación interior como de navegación marítima, cuenta con un fácil acceso al Mar Negro y que cada vez cobra mayor importancia en la región. **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que transmita a la Oficina las normas por las que se rige el GIFP, así como cualesquiera otras normas o reglamentaciones aplicables a los empleadores y los trabajadores, una vez que se las haya adoptado.**

Artículo 1 del Convenio. Trabajos portuarios. La Comisión recuerda que en este artículo del Convenio se establece que al elaborar o revisar la definición de trabajos portuarios se deberá consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su concurso con ese fin en alguna otra forma. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y sobre la manera en que se las ha consultado a la hora de elaborar la definición de «trabajos portuarios».**

Artículo 5, párrafo 1. Responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 4. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, en el artículo 10, párrafo 1, de la Ley OSH se establece que el empleador deberá tomar las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, incluidas las medidas de prevención de riesgos laborales, el suministro de información y formación, y las medidas tendientes a garantizar la organización y provisión necesarias de recursos. **La Comisión pide al Gobierno que facilite información adicional sobre la legislación nacional que deberá hacer recaer sobre las personas apropiadas la responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas a las que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio.**

Artículo 6, párrafo 1. Medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores portuarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que se llevan a cabo reuniones informativas periódicas con los empleados de las empresas sobre técnicas de seguridad y que se les imparte capacitación en métodos y criterios de seguridad en el trabajo, y que se han elaborado instrucciones en materia de técnicas de seguridad. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar a fin de dar efecto a este artículo del Convenio.**

Artículo 7, párrafo 2. Establecimiento de una estrecha colaboración entre los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha establecido un comité sindical para garantizar una cooperación más estrecha entre los trabajadores y los empleadores y para resolver las controversias que puedan surgir. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre el comité sindical y la labor que éste desarrolla a fin de garantizar la aplicación de las medidas contempladas en el párrafo 1, del artículo 4 del presente Convenio.**

Artículo 14. Instalación, construcción, operación y mantenimiento de equipos eléctricos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la inspección de suministro eléctrico del Estado (Gosenergonadzor) aprobó normas relativas a la operación por parte de los usuarios de las instalaciones eléctricas y normas de seguridad sobre el funcionamiento de las instalaciones eléctricas. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre las normas concretas de seguridad, en relación con la operación de las instalaciones eléctricas, destinadas a dar aplicación al presente artículo.**

Artículo 15. Medios de acceso al buque correctamente instalados y sujetos cuando se lleven a cabo operaciones de carga o descarga. La Comisión toma nota de que en la información facilitada por el Gobierno se retoman los términos del artículo, sin proporcionar información detallada sobre los medios de acceso al buque correctamente instalados y sujetos, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. **La Comisión pide al Gobierno que describa los medios de acceso correctamente instalados y sujetos que se exigen cuando se cargue o descargue un buque atracado a un muelle o a otro buque.**

Artículo 16. Medidas adecuadas que han de tomarse cuando los trabajadores tengan que embarcar para ir a un buque o desde un buque a otro lugar, o haya que transportar trabajadores, por tierra, hasta un lugar de trabajo o de regreso de éste, para garantizar su embarque, transporte y desembarque en condiciones de seguridad. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al párrafo 2 de la norma 2.4 de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior, en el que se establece que se proporcionarán en todos los buques de más de 25 metros de eslora, a excepción de los buques de pasajeros de alta velocidad y los demás buques de esa índole que operen en ciudades y de los buques sin propulsión propia y sin tripulación. Sin embargo, la Comisión advierte que esta disposición no garantiza la plena aplicación de este artículo del Convenio. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre las medidas previstas para el embarque, desembarque y transporte de los trabajadores en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.**

Artículo 17. Acceso a la bodega o a la cubierta del buque. La Comisión toma nota de que en la información facilitada por el Gobierno se retoman los términos de este artículo, sin proporcionar información concreta sobre su aplicación. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los medios de acceso a las bodegas o las cubiertas de carga de los buques, de conformidad con el párrafo 1, b), del presente artículo.**

Artículo 34, párrafo 1. La Comisión toma nota de que en la información proporcionada en la memoria del Gobierno se retoman los términos del presente artículo, sin facilitar información concreta sobre la aplicación del mismo. **La Comisión pide al Gobierno que describa las circunstancias en las cuales se exige la provisión y utilización de equipos y prendas de protección personal.**

Artículo 36, párrafo 1. Exámenes médicos. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que se celebran consultas con los empleadores en reuniones generales anuales y que el *Ungheni River Port*, en consulta con el sindicato de industria que representa los intereses de los trabajadores, celebrará un convenio colectivo de tres años de duración. **La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se llevan a cabo las consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores de todos los puertos de Moldova en relación con los exámenes médicos.**

Artículo 38, párrafo 1. Instrucción o formación adecuada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las instrucciones que se imparten a los trabajadores deberán formularse respecto de todas las ocupaciones y tareas que se realizan en la empresa, en función de sus características concretas y de la naturaleza específica de las tareas y de los puestos de trabajo. **La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se proporciona la instrucción y formación a los trabajadores que realizan trabajos portuarios.**

Por otra parte, al no haberse facilitado información alguna sobre su aplicación, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar, en la legislación y en la práctica, para dar pleno efecto a las siguientes disposiciones del Convenio:

- *Artículo 6, párrafo 2.*
- *Artículo 7, párrafo 1.*
- *Artículo 8.*
- *Artículo 9.*
- *Artículo 10.*
- *Artículo 11.*
- *Artículo 12.*
- *Artículo 13, párrafos 1 a 3 y 5 a 6.*
- *Artículo 19.*
- *Artículo 20.*
- *Artículo 21.*
- *Artículo 22, párrafos 3 y 4.*
- *Artículo 24.*
- *Artículo 25.*
- *Artículo 26.*
- *Artículo 31.*
- *Artículo 32.*
- *Artículo 34, párrafos 2 y 3.*
- *Artículo 35.*
- *Artículo 36, párrafos 2 y 3.*
- *Artículo 37.*
- *Artículo 38, párrafo 2.*
- *Artículo 39.*
- *Artículo 40.*
- *Artículo 41.*

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre la aplicación práctica de las disposiciones que dan efecto al Convenio. **En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una valoración general de la manera en que se aplica el Convenio en el país y facilite información sobre el número de trabajadores portuarios empleados, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, la medida a que tales infracciones dieron lugar, el número de accidentes y enfermedades profesionales informados, y que adjunte los extractos pertinentes de los informes de los servicios de inspección en cuestión.**

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Portugal

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1981)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión recuerda que el Consejo de Administración aprobó en su 324.^a reunión (junio de 2015) el informe del comité encargado de examinar la reclamación en la que se alegaba el incumplimiento por Portugal del Convenio núm. 137, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Estibadores, Manipuladores de Carga y Apuntadores Marítimos del Centro y el Sur de Portugal; el Sindicato XXI – Asociación Sindical de Trabajadores

Administrativos, Técnicos y Operarios de Terminales de Carga de Contenedores del Puerto de Sines; el Sindicato de Trabajadores del Puerto de Aveiro y el Sindicato de Estibadores, Manipuladores de Carga y Apuntadores Marítimos del Puerto de Caniçal (documento GB.324/INS/7/8, de 13 de junio de 2015). El Consejo de Administración confió a la Comisión el seguimiento de las cuestiones planteadas en el citado informe. A este respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que presentase informaciones sobre la aplicación de la Ley núm. 3/2013 sobre el Trabajo Portuario de 14 de enero de 2013 y aquellas otras medidas que se hubiesen adoptado en un marco tripartito para continuar mejorando las condiciones de trabajo y la eficacia de los puertos (párrafo 57 del informe). La Comisión solicitó también al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes y las organizaciones de empleadores signatarias del acuerdo, de 12 de septiembre de 2012, para la aplicación del nuevo régimen jurídico del sector portuario y que incluyese datos estadísticos comparados actualizados sobre la cantidad de trabajadores portuarios en el país, incluyendo el número de trabajadores portuarios temporales u ocasionales (párrafo 83). Asimismo, solicitó al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para poner en consonancia los convenios colectivos en vigencia en los distintos puertos del país con el nuevo marco jurídico del trabajo portuario previsto en la ley núm. 3/2013 (párrafo 84).

La Comisión toma nota de la breve información comunicada por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores. El Gobierno indica que, tras la aprobación por la Asamblea de la República del nuevo marco jurídico del trabajo portuario previsto en la ley núm. 3/2013 de 14 de enero de 2013, se mantuvieron todos los puestos de trabajadores portuarios con contratos sin límite de tiempo pertenecientes a empresas estibadoras o empresas de trabajo portuario, incluso de aquellos trabajadores que realizan tareas que dejaron de estar clasificadas como «trabajo portuario» a raíz del nuevo marco jurídico. El Gobierno informa que en 2016 había 1 653 trabajadores portuarios (incluidos aquellos con contratos sin límite de tiempo y con contratos temporales u ocasionales) en Portugal continental. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no indica qué porcentaje del total de tales trabajadores eran temporales u ocasionales. Por otro lado, el Gobierno indica que estos trabajadores gozan de buenas condiciones de trabajo y que con miras a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios, se han impartido cursos de formación, actualización y perfeccionamiento profesional a los trabajadores portuarios y se han llevado a cabo inspecciones para verificar las condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. El Gobierno informa de que en 2014 se realizaron 28 inspecciones del trabajo en el ámbito del trabajo portuario, mientras que en 2015 únicamente se efectuaron dos inspecciones en las que no se detectaron infracciones. Por último, la Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno cita los acuerdos colectivos vigentes que fueron celebrados en el sector portuario entre 2013 y 2016, no indica cuáles fueron las medidas adoptadas para poner en consonancia tales acuerdos con el nuevo marco jurídico portuario. ***La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación de la Ley núm. 3/2013 sobre el Trabajo Portuario y de todas aquellas otras medidas que se hayan adoptado en un marco tripartito para continuar mejorando las condiciones de trabajo y eficacia de los puertos. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes y las organizaciones de empleadores signatarias del acuerdo, de 12 de septiembre de 2012, para la aplicación del nuevo régimen jurídico del sector portuario y que incluya datos estadísticos comparados actualizados sobre la cantidad de trabajadores portuarios en el país, desglosados por edad y sexo, y tipo de contrato (contratos sin límite de tiempo, contratos temporales y contratos ocasionales). La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las medidas adoptadas para poner en consonancia los convenios colectivos en vigencia en los distintos puertos del país con el nuevo marco jurídico del trabajo portuario establecido en la ley núm. 3/2013.***

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 27** (Kirguistán, Papua Nueva Guinea); el **Convenio núm. 32** (Croacia, Singapur); el **Convenio núm. 137** (Afganistán, Costa Rica, Francia, Iraq, Federación de Rusia).

Pueblos indígenas y tribales

Observación general

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

A lo largo de sus cien años de existencia, el tema de los pueblos indígenas ha estado siempre presente en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo. En ocasión del 30.º aniversario de la adopción del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), la Comisión quisiera destacar algunos avances importantes en la aplicación de dicho instrumento, respecto de los cuales la Comisión ha podido tomar nota al examinar las medidas tomadas por los Estados que lo han ratificado. Este aniversario también permite a la Comisión destacar algunas de las dificultades que aún impiden alcanzar la plena realización de los derechos de los pueblos indígenas y tribales consagrados en el Convenio.

El Convenio es el único tratado internacional que aborda de manera integral y específica los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La Comisión recuerda que el Convenio constituye una revisión del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), que procuraba la integración de dichas poblaciones en la comunidad nacional de los Estados. Este enfoque se ha considerado como superado y en su lugar se adoptó el Convenio núm. 169 que consagra los principios del respeto a la integridad cultural de los pueblos indígenas, reconociendo su valor, y de la participación en las decisiones que los afectan. A la fecha, un total de 23 Estados han ratificado el Convenio. En su 328.ª reunión (octubre-noviembre 2016), el Consejo de Administración pidió a la Oficina que iniciara un seguimiento con los Estados Miembros que todavía están vinculados por el Convenio núm. 107 alentándolos a ratificar el Convenio núm. 169, como el instrumento más actualizado en este ámbito.

En materia de *identificación* de los pueblos indígenas y tribales, la Comisión ha subrayado la importancia de garantizar que todos los pueblos que cumplen con los criterios de definición contenidos en el Convenio, independientemente de su reconocimiento jurídico en la legislación nacional, gocen de los derechos reconocidos en dicho instrumento. El Convenio enumera una serie de criterios objetivos para identificar a los pueblos indígenas y tribales. Establece que la conciencia de su identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican sus disposiciones. Por lo tanto, la conciencia de su identidad constituye el criterio subjetivo que complementa los criterios objetivos. La Comisión ha tomado nota de que muchos países han enviado información estadística detallada en relación con el número y ubicación geográfica de los pueblos indígenas y tribales. Además, cabe destacar que, en ocasión de los censos poblacionales, algunos países han aplicado el criterio de autoidentificación. A este respecto, la Comisión reitera que disponer de datos estadísticos fiables sobre la población indígena, su localización y sus condiciones socioeconómicas constituye una herramienta esencial para definir y orientar eficientemente las políticas relativas a los pueblos indígenas, así como para monitorear el impacto de las acciones emprendidas. Lo anterior también es indispensable para que los gobiernos puedan tomar las medidas apropiadas para reconocer, proteger y valorar la identidad social y cultural, las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas.

La Comisión toma nota de que el Convenio consagra como eje fundamental el derecho de los pueblos indígenas a *participar* de manera efectiva en la adopción de decisiones que puedan afectarlos, así como en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Para que se garantice una participación efectiva, la Comisión considera que es clave que se desarrollen y fortalezcan instituciones con la participación de los pueblos indígenas. Varios países han creado entidades encargadas de la elaboración y de la coordinación de la política nacional sobre cuestiones indígenas, sean éstas ministerios o viceministerios responsables de los asuntos indígenas, consejos consultivos, organismos de coordinación o instituciones independientes. En ciertos países, se ha adoptado un enfoque transversal con la creación de áreas específicas dedicadas en la mayoría de los ministerios e instituciones públicas. Además, algunos países han creado espacios permanentes de diálogo y participación. Independiente del tipo de estructura establecida, la Comisión ha destacado en varias ocasiones que la entidad encargada de los asuntos indígenas debe disponer de personal y recursos financieros adecuados, un marco legal bien definido y de poder de decisión. Además, los pueblos indígenas deben estar representados y participar en dichas instituciones.

La Comisión observa que las medidas tomadas para reforzar las instituciones representativas de los pueblos indígenas contribuyen a la realización de la obligación del Estado de desarrollar una *acción coordinada y sistemática* en la implementación del Convenio. La acción coordinada y sistemática tiene por objetivo garantizar la coherencia entre las diferentes instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades de implementar programas o políticas relacionados con los pueblos indígenas y es clave para superar la desigualdad que todavía afecta a algunos de estos pueblos indígenas. A menudo, la Comisión ha pedido a los gobiernos informaciones sobre las medidas que hacen efectiva dicha coordinación y cómo se garantiza la participación de los pueblos indígenas en la planificación, implementación y evaluación de las mismas.

La Comisión subraya que el Convenio consagra el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados como una herramienta para que los pueblos indígenas puedan participar plenamente en la adopción de decisiones que les afecten. En este sentido, el Convenio prevé la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente; y, especialmente antes de emprender o

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de recursos existentes en sus tierras. La Comisión ha observado que en varios países se han desplegado esfuerzos importantes para establecer mecanismos apropiados de consulta con los pueblos indígenas, con la activa participación de dichos pueblos. Se adoptaron leyes específicas que definen el alcance de la consulta y reglamentan su procedimiento. En otros países, se están examinando proyectos de legislación cuyo objetivo es reglamentar el proceso de consulta a los pueblos indígenas. La Comisión recuerda la importancia de realizar consultas previas con los pueblos indígenas antes de adoptar dicha legislación o establecer dicho mecanismo de consulta. Al respecto, la Comisión observa que el Convenio y los comentarios de la Comisión han constituido un marco de referencia para estas iniciativas. Asimismo, la Comisión tuvo la ocasión de aclarar el concepto de «consulta» en sus observaciones generales publicadas en 2009 y 2011. La Comisión destacó que las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. Además la Comisión recuerda que corresponde a los gobiernos establecer mecanismos apropiados de consulta a escala nacional, y que las autoridades públicas deben realizarla, sin injerencias, de una manera adaptada a las circunstancias; a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales; y con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas.

La Comisión desea subrayar que la consulta debe ser percibida como un instrumento esencial para promover el diálogo social significativo y efectivo, la comprensión mutua así como la seguridad jurídica. También la consulta es un paso importante para garantizar la participación libre, efectiva y permanente de los pueblos indígenas y tribales en los procesos de toma de decisiones que los afectan, como consagra el Convenio. La Comisión recuerda que se desprende de la lectura del conjunto de las disposiciones del Convenio que la consulta va más allá de una medida particular. A través de la consulta se promueve además que todas las disposiciones del Convenio se apliquen de manera sistemática y coordinada en cooperación con los pueblos indígenas, lo que supone un proceso gradual de creación de los órganos y mecanismos adecuados a esos fines.

En relación con el tema de las *tierras*, la Comisión recuerda que el Convenio reconoce los valores culturales y espirituales que los pueblos indígenas atribuyen a las tierras. En varias ocasiones, la Comisión ha destacado que la utilización del término «tierras» en el Convenio cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera (por ejemplo, para la caza, la pesca, o rituales religiosos/culturales). En relación con el derecho de propiedad y de posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, la Comisión destaca que se han adoptado medidas con miras a lograr el reconocimiento legal de este derecho en la legislación nacional. En ciertos países este derecho se consagra en la Constitución. Al respecto, se han creado e implementado políticas y programas de titulación de tierras indígenas y varios gobiernos han proporcionado informaciones estadísticas detalladas sobre las áreas tituladas y las comunidades que se beneficiaron de estos programas. También es necesario destacar la adopción y aplicación de planes de restitución de tierras para los desplazados internos con la participación de los pueblos indígenas interesados. No obstante la adopción de dichas medidas, la determinación de las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente, y por ende el reconocimiento de sus derechos a la propiedad y a la posesión, siguen siendo en algunos países temas críticos que incluso llegan a generar conflictos. La Comisión recuerda que el reconocimiento de la ocupación tradicional como fuente de derechos de propiedad y posesión es la piedra angular sobre la cual reposa el sistema de derechos sobre la tierra establecido por el Convenio y alienta a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para establecer procedimientos adecuados al respecto. Además, la Comisión desea subrayar la necesidad de adoptar medidas específicas para impedir que los pueblos indígenas sean trasladados de las tierras que ocupan. En este sentido, el Convenio establece que el traslado y la reubicación de los pueblos indígenas de sus tierras constituyen una medida excepcional que sólo puede llevarse a cabo con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

En materia de *condiciones de empleo*, la Comisión ha tomado nota con preocupación de graves abusos contra trabajadores indígenas, especialmente en el área rural y en el sector agrícola. Al respecto, la Comisión ha pedido a los gobiernos que adopten medidas para eliminar el trabajo forzoso y la discriminación de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a pueblos indígenas, subrayando la necesidad de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales en el trabajo. El fortalecimiento de la inspección del trabajo en áreas habitadas por pueblos indígenas es fundamental en este sentido. La Comisión también ha destacado la importancia de adoptar medidas que fomenten la participación de las mujeres indígenas en el mercado de trabajo. En materia de formación profesional, la Comisión ha invitado a los gobiernos a desarrollar programas de formación vocacional teniendo en cuenta las condiciones económicas, ambientales, sociales y culturales de los pueblos indígenas.

La Comisión recuerda que el Convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la formulación y ejecución de programas de *educación*. La Comisión ha tomado nota de que, a fin de fomentar el empleo de las lenguas tradicionales de los pueblos indígenas en las escuelas, varios gobiernos han formulado e implementado programas de educación bilingüe con la participación de miembros de dichos pueblos. Al mismo tiempo se han impartido programas de formación a docentes indígenas sobre el currículum educativo y se han tomado en cuenta sus perspectivas culturales en su implementación. La Comisión también ha tomado nota de medidas especiales adoptadas para el rescate de lenguas en riesgo de desaparición.

La Comisión saluda las medidas adoptadas por los gobiernos para fomentar servicios de *salud* intercultural en los cuales los miembros de las comunidades indígenas contribuyen con sus conocimientos de medicina tradicional. Al mismo tiempo la Comisión alienta a los gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos para extender la cobertura de seguridad social a los miembros de los pueblos indígenas. Al respecto, la Comisión subraya la importancia de velar por que se tengan en cuenta las características, necesidades y perspectivas específicas de los pueblos indígenas y tribales en la elaboración y aplicación de los sistemas nacionales de protección social.

La Comisión destaca que, a pesar de los progresos realizados en la implementación de políticas y programas para el reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas previstos en el Convenio, la situación de los *derechos humanos* de los pueblos indígenas en varios países sigue siendo objeto de preocupación. La Comisión ha instado en varias ocasiones a los gobiernos a tomar medidas para prevenir los actos de violencia sufridos por los pueblos indígenas y sus representantes, incluidos asesinatos e intimidaciones, en el marco de su acción para la defensa de sus derechos. Igualmente preocupan a la Comisión las denuncias presentadas por los interlocutores sociales relativas a la criminalización de la protesta social. La Comisión recuerda la obligación de los Estados que han ratificado el Convenio de garantizar que los pueblos indígenas disfruten plenamente de todos sus derechos humanos. Al respecto, la Comisión destaca la importancia de adoptar medidas apropiadas para que se investiguen todos los actos de violencia contra personas o pueblos indígenas y que se garantice la integridad personal y la seguridad de las comunidades indígenas. La Comisión recuerda la importancia de velar por que los pueblos indígenas conozcan sus derechos y tengan acceso a la justicia para hacerlos valer. El Convenio prevé específicamente que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales.

La Comisión toma nota de que en el marco de la implementación de la Estrategia de los derechos de los pueblos indígenas para un desarrollo incluyente y sostenible, adoptada por el Consejo de Administración en 2015, la Oficina deberá seguir realizando actividades de sensibilización y de formación sobre el Convenio así como elaborar y difundir herramientas que recopilan experiencias y buenas prácticas que podrán orientar a los mandantes al adoptar políticas y programas con respecto a los pueblos indígenas. La Comisión saluda la adopción de esta Estrategia que demuestra la importancia del Convenio para la realización del mandato de la OIT y espera que, en este marco, la Oficina pueda brindar la asistencia técnica apropiada a los países que la soliciten. La Comisión observa que la Estrategia también prevé reforzar la colaboración con las Naciones Unidas en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. A este respecto, la Comisión observa que el Convenio y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, son dos instrumentos jurídicos de distinta naturaleza y alcance, que se complementan y refuerzan mutuamente. La Comisión considera que la implementación efectiva del Convenio contribuye a la realización de los objetivos de la Declaración así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

República Centroafricana

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2010)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su profunda preocupación por el hecho de que la seguridad seguía siendo precaria en el país y en lo que respecta a los actos de violencia de los que fueron víctimas las comunidades indígenas del país y redundaron en la huida de muchos pastores, especialmente Mbororo, que se exiliaron en países limítrofes. La Comisión pidió a las autoridades nacionales de transición que realizaran esfuerzos adicionales para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y especialmente de los niños y las mujeres de las comunidades Aka y Mbororo.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que debido a la crisis que atraviesa el país desde 2013 se han producido desplazamientos masivos de pueblos indígenas en general, y en particular de los Mbororo, contra su voluntad, debido a la inseguridad reinante. Precisa que, durante el período de transición los pueblos Mbororo y Aka fueron identificados y sus representantes nombrados consejeros nacionales para que pudieran debatir, proteger y defender sus derechos. Asimismo, el Gobierno se refiere a las garantías consagradas en la nueva Constitución de 2016, y en particular en el artículo 6, que prevé la garantía por el Estado de la protección reforzada de los derechos de las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. El Gobierno indica que el Plan nacional de recuperación y consolidación de la paz en la República Centroafricana, adoptado en octubre de 2016, constituye una respuesta urgente e inmediata a las necesidades de todos los grupos de la población, sin distinción alguna.

La Comisión toma nota de diferentes documentos de los órganos de las Naciones Unidas en los que se examina la situación en la República Centroafricana y especialmente de los informes del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana, de la Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana y del grupo de expertos sobre la República Centroafricana (documento S/2018/922, de 15 de octubre de 2018; documento A/HRC/39/70, de 13 de agosto de 2018 y declaración de 27 de septiembre de 2018, y documento S/2018/729, de 23 de julio de 2018). La Comisión toma nota de que en su declaración de septiembre de 2018, la Experta Independiente indica que la situación de los derechos humanos se caracteriza por una actividad constante de los grupos armados, que llevan a cabo ataques contra civiles, una autoridad estatal aún demasiado frágil, la impunidad dominante,

casos de discriminación basada en la etnia y la religión, la fragmentación social y la marginación de ciertas poblaciones. De forma general, la Comisión observa que de la información que figura en estos documentos se desprende que si bien se han realizado ciertos progresos, en particular en el marco de la iniciativa de paz africana y de los acuerdos locales de paz, la situación humanitaria y de los derechos humanos sigue siendo preocupante, con aumento de las zonas de enfrentamientos, abusos constantes y violaciones de los derechos humanos vinculados con la persistencia de ataques de diversos grupos armados, violencia entre las comunidades y un número considerable de personas desplazadas. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 4 de mayo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la persistencia de la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad extrema de los pueblos indígenas (Mbororo y Aka), que siguen haciendo frente a importantes obstáculos para el disfrute de los derechos enunciados en el pacto, situación que se ha deteriorado aún más en el contexto del conflicto que atraviesa la República Centroafricana.

La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de toda esta información. ***Reconociendo la complejidad de la situación que atraviesa el país, la Comisión espera insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y la violación de los derechos humanos que sufre la población civil y especialmente los pueblos indígenas que se han visto obligados a abandonar sus territorios. La Comisión confía que la aplicación del Plan nacional de recuperación y consolidación de la paz de la República Centroafricana permita restablecer el orden, la seguridad y la estabilidad en el país a fin de garantizar a los pueblos Mbororo y Aka el beneficio de los derechos previstos en el Convenio, proteger su integridad y permitir que las personas desplazadas regresen a sus comunidades. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este fin y que precise la forma en la que los pueblos indígenas y sus representantes han participado en la definición y aplicación de las medidas que les conciernen.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chile

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile) recibidas el 13 de septiembre de 2018. ***La Comisión pide al Gobierno que trasmita sus comentarios al respecto.***

Artículo 6 del Convenio. Consulta previa. Consulta Constituyente Indígena. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria sobre los procesos de consulta previa con pueblos indígenas llevados a cabo desde 2009 hasta 2017, tanto respecto de medidas legislativas como de proyectos de desarrollo, y de que han finalizado 85 de un total de 127 procesos de consulta. El Gobierno también incluye una lista de 45 oficios de órganos de administración del Estado en los que se establecen la no procedencia de la realización de procesos de consulta indígena.

La Comisión toma nota del *Informe Final Sistematización Proceso de Consulta Constituyente Indígena* publicado en 2017 por el Ministerio de Desarrollo Social. El informe describe el proceso de consulta con los pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio del país con miras a consagrar el reconocimiento constitucional de dichos pueblos y sus derechos bajo la supervisión de un Comité Consultivo y de Seguimiento conformado por organismos del Sistema de Naciones Unidas y Consejeros Nacionales Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Las consultas tuvieron lugar entre agosto de 2016 y enero de 2017 con los pueblos Mapuche, Rapa Nui, Aymara, Quechua, Atacameño (o Likan Antai), Diaguita, Colla, Kawashkar y Yagán a través de encuentros convocados, encuentros autoconvocados y participación individual, siendo las universidades las ejecutoras del proceso. Un total de 17 016 personas fueron consultadas. La Comisión toma nota del Acta Resultados del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta para el Reconocimiento Constitucional de los Derechos de los Pueblos Indígenas suscrita el 21 de octubre de 2017 por representantes de los pueblos indígenas, el Ministerio de Desarrollo Social a nombre del Gobierno, y la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile en calidad de garante y facilitador. En el Acta se recogen las medidas sobre las que hay acuerdos totales que incluyen: i) el reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio; ii) el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones; iii) el deber del Estado de preservar la diversidad cultural del país; iv) el reconocimiento y protección de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, su patrimonio cultural, material e inmaterial, y v) la reafirmación del principio de igualdad y no discriminación fundada en origen indígena. La Comisión toma nota que el 19 de julio de 2018 se presentó ante la Cámara de Diputados de Chile el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para consagrar el reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura y tradiciones, y garantizar su participación y representación política (boletín núm. 11939-07) con base en los acuerdos obtenidos del proceso constituyente indígena.

La Comisión toma nota con *interés* del proceso de consulta llevado a cabo con los pueblos indígenas en el país y de la presentación ante la Cámara de Diputados del proyecto de ley de modificación de la Carta Fundamental para consagrar el reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura y tradiciones y garantizar su participación y representación política. La Comisión saluda los esfuerzos del Gobierno al respecto que contribuyen a fortalecer la confianza de los pueblos indígenas. ***La Comisión pide al Gobierno que suministre informaciones sobre los avances en el proceso de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos, dando seguimiento a los acuerdos consagrados***

en el Acta Resultados del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta para el Reconocimiento Constitucional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 21 de octubre de 2017. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre la manera en que se ha dado atención a las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas en los casos en que se ha determinado que no procede la realización de procesos de consulta previa.

Artículo 6 y 7, 3). Consultas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la Ley núm. 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, que estableció el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como del decreto núm. 40 de 2013 que regula el SEIA. La Comisión recuerda que la ley núm. 19300 establece un procedimiento de participación informada de las comunidades en el proceso de calificación de los estudios de impacto ambiental; y que el decreto núm. 40 disponía que los proyectos que ingresen al SEIA que afecten directamente a grupos pertenecientes a pueblos indígenas, debían ser sometidos a un proceso de consulta de buena fe. La Comisión tomó nota del artículo 85 del decreto núm. 40, según el cual el proceso de consulta debe ser diseñado y ejecutado por el Servicio de Evaluación Ambiental; contemplando los mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo, y a través de sus instituciones representativas de modo que las comunidades puedan tener la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental.

La Comisión recuerda que, en seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por el Sindicato Interempresas núm. 1 de Panificadores Mapuches de Santiago, adoptadas por el Consejo de Administración (documento GB.326/INS/15/5), pidió al Gobierno que presentara informaciones que demuestren que, en los proyectos susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas que ingresan al SEIA, se haya cumplido con los *artículos 6 y 7*, y, según proceda, los *artículos 15 y 16* del Convenio. En respuesta a este pedido, el Gobierno incluye en su memoria información detallada sobre dos proyectos ingresados al SEIA que han sido consultados con comunidades indígenas con base en etapas acordadas entre éstas y el Servicio de Evaluación Ambiental. El primer proyecto denominado «Embalse Chironta», ubicado en la región de Arica y Parinacota, fue calificado favorablemente en septiembre de 2014 luego de ser consultado con las comunidades indígenas Aymaras de Challapo, Chapisca, Molinos Inti Marka así como por las Asociaciones Indígenas de Molinos y Chapisca. El Gobierno indica que dichas comunidades eran susceptibles de ser afectadas directamente por el proyecto debido a la circulación de vehículos por un camino no pavimentado, que provocaría altas emisiones de ruido y de material articulado. Como resultado de la consulta se lograron 24 acuerdos sobre, entre otros aspectos, la utilización de medios de mitigación y la generación de un convenio con la Oficina Municipal de Información Laboral de la Municipalidad de Arica para capacitaciones en los oficios que puedan surgir durante el desarrollo de la obra. El segundo proyecto denominado «Nueva línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas», ubicado en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, fue calificado favorablemente en marzo de 2016 después de haber sido consultado con la comunidad indígena Aymara de Quillagua. El Gobierno indica que dicha comunidad era susceptible de ser afectada directamente debido a que el proyecto se pretendía ejecutar sobre sitios arqueológicos donde la comunidad realizaba manifestaciones culturales. Como resultado de la consulta se lograron 13 acuerdos relacionados a medidas de mitigación para proteger el componente arqueológico; así como medidas de compensación, entre éstas la recuperación de caminos, inclusión de mano de obra local, construcción y mejoramiento de infraestructura de la sede de la comunidad y del Centro de Información Turística Quillagua.

La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a los acuerdos llegados con las comunidades consultadas en relación a los proyectos «Embalse Chironta», y «Nueva línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas», así como para dar cumplimiento a otros acuerdos con comunidades indígenas que hayan sido consultadas por medio del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a proyectos de desarrollo que los afecten directamente.

Artículos 7, 3), 15 y 16. Reforma a la legislación sobre evaluación de impacto ambiental. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la creación de una comisión asesora para evaluar y proponer reformas al SEIA y expresó la esperanza de que en esa ocasión el Gobierno vele por la eficacia de los mecanismos de consulta y la participación de los pueblos indígenas, de conformidad con los *artículos 6, 7, 15 y 16* del Convenio. El Gobierno indica que la Cámara de Diputados ha iniciado el análisis de una propuesta de ley de modernización al SEIA presentada por el Presidente de la República mediante el mensaje núm. 062-366, de 27 de julio de 2018. La propuesta contempla entre sus objetivos «la incorporación de la participación ciudadana anticipada para los proyectos que pretendan ingresar al SEIA con el objeto de generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente», bajo el entendimiento de que «el momento oportuno para iniciar el diálogo es previo a la evaluación del proyecto». Entre los criterios bajo los cuales se desarrollaría la etapa de participación ciudadana temprana se incluyen la entrega de información completa, veraz y oportuna; la creación de espacios de interacción para que las comunidades puedan influir en aspectos relacionados con el proyecto; buena fe y respeto a los derechos humanos. Esta etapa concluiría con la creación de términos de referencia que servirían de base para la preparación y presentación del respectivo estudio de impacto ambiental. La Comisión observa que el Gobierno indica al respecto que no se han realizado consultas en esta materia con los pueblos indígenas, sin perjuicio de que una vez que estas posibles reformas se materialicen en un proyecto de ley, deban ser consultadas en la medida que impliquen modificaciones legislativas en lo referido a la consulta de los pueblos indígenas.

La Comisión subraya que, el 5 de septiembre de 2018, la Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto de ley que moderniza al SEIA (núm. 20-2018) en el cual sostiene que el proceso de participación ciudadana anticipada constituye

una oportunidad para que los interesados o directamente afectados por el proyecto o actividad puedan informarse de manera completa y oportuna, especialmente en aspectos relacionados a los beneficios económicos y sociales y a las eventuales externalidades ambientales. La Corte Suprema se refiere a la necesidad de aclarar si, en el proceso de participación ciudadana anticipada, queda comprendida la consulta previa a los pueblos originarios cuando el proyecto o actividad afecte directamente a uno o más grupos pertenecientes a pueblos indígenas; en cuyo caso, según la Corte Suprema, el SEIA deberá diseñar un proceso de consulta de buena fe. En este sentido, la Corte Suprema, invocando el artículo 7, 3), del Convenio, subraya que la participación temprana de las comunidades indígenas a través de la consulta previa les permitiría conocer y comprender los impactos culturales y sociales que las iniciativas de inversión puedan generar en sus comunidades. La Comisión observa que la Corte se refiere al informe final de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA en el cual se indica que es necesario «analizar los procesos de Consulta Indígena (PCI) que se desarrollan en el marco del SEIA, toda vez que éstos actualmente se enfrentan a cuestionamientos y críticas referidas al procedimiento, a los resultados esperados y a los plazos asociados». ***Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance de las modificaciones propuestas, la Comisión confía en que el Gobierno tome las medidas necesarias para que se lleven a cabo consultas con los pueblos indígenas durante el proceso de reforma a la ley núm. 19300 que establece el SEIA, así como respecto a las posibles modificaciones que se realicen a su reglamento, en los aspectos que afecten directamente a sus derechos. La Comisión pide al Gobierno que vele por que toda propuesta de legislación relativa a la evaluación de impactos ambientales: i) dé cumplimiento a los artículos 6 y 15 del Convenio en lo que respecta a la consulta con los pueblos indígenas sobre proyectos de prospección o explotación de recursos existentes en tierras tradicionalmente ocupadas por dichos pueblos; ii) asegure la cooperación de los pueblos interesados en la evaluación de la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre dichos pueblos, en base al artículo 7 del Convenio, y iii) atienda las situaciones previstas en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 16 del Convenio en relación con proyectos que impliquen el traslado de los pueblos interesados de sus tierras tradicionalmente ocupadas. En este sentido, la Comisión recuerda que el Convenio establece que el traslado y la reubicación de los pueblos indígenas de sus tierras constituyen una medida excepcional que sólo puede llevarse a cabo con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107) (ratificación: 1958)

Perspectivas de ratificación del Convenio más actualizado. En sus comentarios anteriores, la Comisión saludó los avances legislativos e institucionales en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas; en particular el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, la conformación de la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas de Cultura, y las actividades desarrolladas por el Departamento de Pueblos Indígenas adscrito al Ministerio de Cultura. Tomando nota de que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social había elaborado un documento de análisis favorable a la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), la Comisión pidió al Gobierno que informara sobre las consultas celebradas y los progresos realizados con miras a la ratificación de dicho Convenio. En su memoria, el Gobierno indica que el proceso de ratificación se encuentra aún en estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual realiza consultas con todas las instituciones del Estado para proceder, en una segunda instancia, a la solicitud de ratificación a la Asamblea Legislativa. En este contexto, el Gobierno ha solicitado asistencia técnica a la OIT para conocer el contenido integral de dicho Convenio y las experiencias de su aplicación de otros países. ***La Comisión toma debida nota de esta información y recuerda que, en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), el Consejo de Administración pidió a la Oficina que iniciara un seguimiento con los Estados Miembros que actualmente están vinculados por el Convenio: i) alentándolos a ratificar el Convenio núm. 169, como el instrumento más actualizado en este ámbito, lo cual implicaría la denuncia automática del Convenio, y ii) acopiando información de esos Estados Miembros con el objetivo de entender mejor los motivos que tienen para no ratificar el Convenio núm. 169 (véase documento GB.328/LILS/2/1 (Rev.)). Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a que considere la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión y a que examine la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 169. Al respecto, la Comisión expresa la esperanza de que la Oficina pueda brindar sin demora la asistencia técnica solicitada por el Gobierno.***

Artículos 3 y 4 del Convenio. Protección de las instituciones, bienes y valores culturales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el 11 de agosto de 2016 se adoptó la Ley de Cultura (decreto legislativo núm. 509) que contiene un capítulo exclusivo sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota con ***interés*** de que el artículo 11 de dicha ley garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnicolingüísticos el derecho a conservar, enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural. Además, el artículo 27 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho individual o colectivo al disfrute pleno de sus derechos humanos, y consagra, en su artículo 28, la obligación del Estado de adoptar políticas públicas orientadas al reconocimiento y visibilidad de los pueblos indígenas. El Gobierno también indica que el Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de la Cultura sigue ofreciendo asistencia a los municipios para la elaboración de ordenanzas municipales. Entre abril de 2015 y marzo de 2017, se

adoptaron tres ordenanzas que reconocen los derechos de las comunidades indígenas de los municipios de Panchimalco, Cuisnahuat y Conchagua, las cuales disponen que las municipalidades, en coordinación con las comunidades indígenas bajo su jurisdicción, desarrollarán esfuerzos para recuperar, sistematizar y promocionar la memoria histórica de dichas comunidades. Además, el Gobierno proporciona información en relación con las acciones realizadas por el Ministerio de Cultura para proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, entre ellas diplomados para líderes indígenas, apoyo a iniciativas para manifestaciones culturales y artísticas, incluyendo el rescate del idioma originario de los pueblos Náhuat. ***La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las acciones realizadas, en el marco de la Ley de Cultura, para la protección de las instituciones y valores culturales y religiosos de los pueblos indígenas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre los resultados de los procesos llevados a cabo por las distintas municipalidades, así como por otras entidades gubernamentales, para recuperar, sistematizar y promocionar la memoria histórica de las comunidades indígenas y su identidad cultural.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guatemala

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas en 2017 y el 1.º de septiembre de 2018. Igualmente, la Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) recibidas en 2016 y el 13 de febrero de 2018, y de las observaciones conjuntas del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala recibidas el 1.º de septiembre de 2018. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno contiene información detallada y saluda sus esfuerzos al respecto.

Artículos 2 y 33 del Convenio. Acción coordinada y sistemática. En sus comentarios anteriores, la Comisión alentó al Gobierno a seguir desplegando esfuerzos, en cooperación con los pueblos indígenas, para establecer un mecanismo que permita llevar a cabo una acción coordinada y sistemática de las políticas y programas que requiere el Convenio. El Gobierno se refiere en su memoria a la instalación del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en 2016, como órgano consultivo y deliberativo dependiente de la Presidencia de la República, y que tiene entre sus funciones: velar por que en cada ministerio exista un cuerpo de asesoría de pueblos indígenas; evaluar las acciones del Estado en materia de pueblos indígenas e interculturalidad; y gestionar e impulsar estudios e investigaciones sobre el grado de impacto de las políticas. El Gabinete está conformado por nueve ministerios, cinco secretarías, instituciones gubernamentales encargadas de asuntos indígenas y por los delegados nacionales de los pueblos indígenas en el Sistema de Consejos de Desarrollo. El Gobierno destaca que una de las prioridades del Gabinete es la construcción de la Política de Pueblos Indígenas e Interculturalidad (PPII) 2018-2030, dando de esta manera seguimiento a un proceso iniciado en 2013. A este efecto, se conformó un comité técnico interinstitucional y se aprobó una ruta operativa de trabajo.

Adicionalmente, el Gobierno se refiere al Plan nacional de desarrollo: k'atun nuestra Guatemala 2032, enfatizando que en éste se incorpora una perspectiva de equidad con miras a mejorar la calidad de la vida de toda la población, incluidos los hombres y mujeres indígenas. El Gobierno destaca que, de un total de 62 políticas públicas, en 34 se visualizan los derechos de los pueblos maya, xinca y garífuna. Asimismo, los lineamientos generales de política 2019-2023 dedican una atención especial a los pueblos indígenas en los temas de desnutrición, salud, agua y recursos naturales. En materia de inversión pública, fueron beneficiados los siguientes departamentos que concentran un alto porcentaje de población indígena: Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sacatepéquez. El Gobierno proporciona información sobre las actividades desplegadas por varias instituciones que tratan de manera directa o indirecta las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, en particular el Fondo de desarrollo indígena guatemalteco.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones conjuntas, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala lamentan que no exista una institucionalidad rectora de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas. La Comisión observa que, en su informe anual de 2017, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala señala que las 32 entidades creadas para atender específicamente a los pueblos indígenas enfrentan grandes desafíos, entre ellos la inestabilidad institucional a falta de un marco legal sólido, así como la falta de presupuesto y de personal que les impide ampliar la cobertura de los servicios que prestan.

La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con miras a la pronta adopción de la Política de Pueblos Indígenas e Interculturalidad (PPII) y le pide que indique cómo los pueblos indígenas han sido consultados y han participado en la elaboración de dicha Política. La Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para asegurar que el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad disponga del personal y los recursos materiales adecuados para evaluar las acciones del Estado en materia de pueblos indígenas e interculturalidad. Sírvasse comunicar información sobre los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por dicha entidad. Por último, al tiempo que toma nota de la existencia de varias instituciones que tienen por objetivo garantizar los derechos de los pueblos indígenas previstos en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que asegure la

eficiente coordinación y sistematización de las acciones emprendidas por las mismas, definiendo adecuadamente su marco legal. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto.

Artículo 3. 1. Derechos humanos. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para evitar que la fuerza o la coerción sean utilizadas en violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. La Comisión también pidió información actualizada sobre el estado del proceso judicial iniciado en relación con los acontecimientos ocurridos en Totonicapán en 2012 y sobre las decisiones dictadas en relación con las personas procesadas en dicha causa. La Comisión toma nota de que el Gobierno transmite información del Ministerio Público que describe las diferentes etapas del procedimiento judicial iniciado contra un coronel de infantería y ocho miembros de la seguridad ciudadana del ejército de Guatemala acusados de varios delitos, incluido el de homicidio, cometidos durante los acontecimientos en Totonicapán. El Gobierno informa también sobre las medidas tomadas para facilitar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, indicando en particular que, en 2017, se inauguró una secretaría de pueblos indígenas en el Ministerio Público y el organismo judicial, y que se adoptó la Política de acceso de los pueblos indígenas al ministerio público 2017-2025.

La Comisión observa que el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala expresan su preocupación por el notable aumento de la represión contra las organizaciones sociales, comunitarias e indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos. Las organizaciones alegan además que el Ministerio Público ha cumplido un papel fundamental en la criminalización de los pueblos indígenas, especialmente de líderes y lideresas que se oponen a proyectos de infraestructura que se desarrollan en sus territorios. A efectos ilustrativos, las organizaciones sindicales se refieren a situaciones concretas de líderes de los pueblos indígenas asesinados, detenidos o violentados que ilustran la represión y la criminalización de sus protestas.

La Comisión también toma nota del informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas relativo a su visita a Guatemala, del 10 de agosto de 2018. La Comisión observa que la Relatora Especial expresa su suma preocupación «por el recrudecimiento de la incidencia de procedimientos penales contra personas indígenas que defienden sus tierras y recursos». El informe también destaca que «Guatemala enfrenta una alarmante intensificación de violencia que se evidencia en el aumento de asesinatos de defensores indígenas que intentan defender sus derechos sobre sus tierras tradicionales» (documento A/HRC/39/17/Add.3).

La Comisión expresa su profunda preocupación por los asesinatos, actos de violencia y por la represión de la protesta social de los pueblos indígenas, e insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se investiguen los asesinatos así como todos los actos de violencia denunciados, y que se inicien los procedimientos judiciales pertinentes a efectos de identificar a los autores, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. La Comisión pide al Gobierno que comunique copia de toda decisión de justicia dictada en este contexto. La Comisión también insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para propiciar un clima libre de violencia en el marco del cual se salvaguarde la integridad de las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas, así como el respeto de sus derechos humanos y de todos los derechos consagrados en el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el resultado de los procedimientos en relación con los sucesos de Totonicapán.

2. Lucha contra la discriminación. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en relación con las actividades realizadas para combatir la discriminación y para la promoción, valorización, rescate y práctica de la cultura de los pueblos que conforman la nación (maya, garífuna, xinca y mestizo). La Comisión toma nota en particular de los programas ejecutados por la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas; de las actividades de formación en materia de prevención de la discriminación y del racismo legal, económico e institucional desarrolladas por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) dirigidas a operadores de justicia, servidores públicos, y encargados de formación de las instituciones del Ejecutivo (diplomados, programa de postgrado, curso de formación de formadores, talleres de capacitación); así como de la Política de equidad de género institucional, la cual tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de la participación activa de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas en los procesos electorales. El Gobierno también transmite información sobre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el delito de discriminación, los casos ingresados en órganos de primera instancia penal y sobre personas condenadas por este delito entre 2015 y febrero de 2018. La Comisión observa que se han presentado en promedio 350 denuncias por año y que se han emitido ocho sentencias con base en el artículo 202 del Código Penal que prohíbe la discriminación.

La Comisión observa que en su informe de 2017, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala indica que la agenda indígena pendiente en el Congreso no ha prosperado porque «no ha tenido lugar en Guatemala un cambio de paradigmas sobre la diversidad cultural, un compromiso de lucha contra la «discriminación» y una disposición a consultar a los pueblos indígenas». El Procurador considera que la pertenencia cultural de las políticas públicas necesita un segundo enfoque con «estructuras inclusivas en todas la instituciones públicas, políticas específicas manejadas con cuotas de presupuestos y sobre criterios de transparencia y participación; medidas afirmativas y medidas para luchar contra el racismo y la discriminación en el ámbito público e institucional». **La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos con miras a prevenir y luchar contra la discriminación que afecta a los miembros de las comunidades indígenas, con especial énfasis en las mujeres indígenas, y que transmita información sobre las actividades**

desarrolladas por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) a este respecto, así como por los otros organismos públicos competentes.

Artículos 6 y 7. Mecanismo apropiado de consulta y participación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que las disposiciones que establecen procedimientos de consulta contenidas en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural no permitían dar pleno cumplimiento al Convenio. La Comisión expresó la esperanza de que se desarrollara en el país un diálogo constructivo para establecer un mecanismo apropiado de consulta y participación y pidió al Gobierno que informara sobre los resultados alcanzados. El Gobierno indica que en octubre de 2016 se lanzó el «Diálogo nacional para la construcción de estándares básicos para la consulta a los pueblos indígenas» cuyos objetivos eran desarrollar reuniones y talleres participativos con autoridades ancestrales, líderes y representantes de organizaciones de pueblos indígenas; definir un instrumento orientador para dar cumplimiento al Convenio; y obtener información para la elaboración de la guía operativa para la consulta a pueblos indígenas. El Gobierno indica que la metodología utilizada durante el proceso de consulta en el marco de dicho diálogo nacional incluyó cinco fases: i) abordaje territorial con identificación de los líderes, autoridades y organizaciones indígenas con coincidencia en el territorio lingüístico; ii) realización de talleres, diálogos y reuniones bilaterales con el objetivo de recolectar insumos; iii) recopilación de insumos e incorporación en la guía; iv) realización de tres talleres regionales de retroalimentación para la construcción de la guía, y v) proceso de socialización y presentación nacional de la guía. El Gobierno indica que la guía constituye un documento de orientación a la institucionalidad pública sobre cómo debe cumplirse la consulta previa con los pueblos indígenas. El Gobierno destaca al respecto que la guía cumple con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 26 de mayo de 2017 en relación con los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II (expedientes acumulados núms. 90-2017, 91-2017 y 92-2017) en la cual se dispone, entre otros aspectos, las pautas y los lineamientos que debe seguir toda consulta con los pueblos indígenas con aplicación obligatoria a los organismos del Estado, conminando al Congreso de la República a que, en el plazo de un año, produzca el proceso legislativo a efecto de asegurar la aprobación de la ley atinente al derecho de consulta. Al respecto, el Gobierno indica que se encuentran ante el Congreso dos iniciativas de ley en relación con el derecho de consulta de los pueblos indígenas, y que una de ellas ha sido transmitida por el Ministerio del Trabajo a la OIT. Adicionalmente, a fin de ilustrar cómo se implementa la metodología prevista en la guía, el Gobierno describe las diferentes etapas del proceso de consulta realizado por el Ministerio de Energía y Minas con la comunidad maya q'eqchi en relación a las centrales generadoras Hidroeléctricas Oxec y Oxec II. El Gobierno destaca la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos como observador y garante del proceso de consulta, así como de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para garantizar la traducción en el idioma q'eqchi. El proceso de consulta culminó con la presentación de propuestas para el establecimiento de un acuerdo en lo relativo a la construcción de la paz; los aspectos ambientales; y el desarrollo sostenible.

La Comisión toma nota de que el CACIF reconoce los esfuerzos del Gobierno para la elaboración de la guía operativa para la consulta a pueblos indígenas, cuyo contenido fue consultado con el sector empleador y con los representantes de los pueblos indígenas. El CACIF destaca que, si bien la guía no es un instrumento jurídico, su aplicación por las autoridades debería contribuir a dar certeza a futuros procesos de consulta. Sin embargo, el CACIF expresa su preocupación por la ausencia de una reglamentación adecuada que garantice la debida aplicación del derecho a consulta consagrado en el Convenio, así como por la incertidumbre originada en los fallos emitidos por los tribunales de justicia nacionales que han generado jurisprudencia contradictoria en cuanto a los alcances y forma en que debe llevarse a cabo la consulta con los pueblos indígenas. Refiriéndose a la decisión en el caso Oxec de la Corte de Constitucionalidad, el CACIF valora el hecho que la Corte haya intentado dar un criterio unificador al determinar pautas para los tribunales y demás organismos del Estado para la realización de cualquier consulta a pueblos indígenas en Guatemala. El CACIF también destaca que en dicha decisión, la Corte determinó que se debía realizar la consulta con las comunidades indígenas afectadas por los proyectos Oxec en un plazo de doce meses y que, en tanto se celebrara la consulta, la empresa a cargo del proyecto podría seguir operando. El CACIF lamenta que, en fallos posteriores, se ordenó la cancelación de licencias o suspensión de operaciones a empresas, afectando directamente al sector empleador, así como al sector trabajador por los puestos de trabajo que se han perdido.

La Comisión observa que el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala indican que las iniciativas de ley dirigidas a regular el derecho a consulta no han sido consultadas con los pueblos indígenas y que muchas de las autoridades tradicionales rechazaron la guía operativa para el proceso de consulta a pueblos indígenas adoptada en 2017. Las organizaciones sindicales consideran que los escasos reconocimientos prácticos del derecho a consulta sólo provienen de las sucesivas demandas presentadas por los pueblos indígenas en el ámbito judicial.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos desplegados por el Gobierno en relación con el proceso de consulta llevado a cabo para la adopción de la guía Operativa para la consulta a Pueblos Indígenas. Al tiempo que toma nota de la decisión de la Corte Constitucional en relación con los proyectos Oxec y de la presentación ante el Congreso nacional de dos proyectos de ley para reglamentar la consulta con los pueblos indígenas, la Comisión observa que el Gobierno no informa si los pueblos indígenas han sido consultados, y de qué manera, en relación con los dos proyectos de ley. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 6 del Convenio, el Gobierno debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben llevarse a

cabo de buena fe, a través de un verdadero diálogo, por mecanismos apropiados y adaptados a las circunstancias, y con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. Asimismo, debe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos internos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas.

Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las medidas necesarias para que los pueblos indígenas sean consultados, en los términos previstos en el artículo 6, y puedan participar de manera apropiada, a través de sus entidades representativas, en la elaboración del proyecto de ley que reglamente el mecanismo de consulta de los pueblos indígenas, de manera tal que puedan expresar sus opiniones e influir en el resultado final del proceso. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para velar por que toda legislación que se prevea adoptar para la implementación de la consulta previa con los pueblos indígenas permita dar pleno efecto a los artículos del Convenio que tratan de la consulta (artículos 6, 15, 2), 16, 17, 22, 27 y 28). Hasta tanto se adopte la legislación, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los procesos de consulta realizados en relación con las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, así como sobre toda denuncia presentada al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que, si lo estima pertinente, puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina al respecto.

Artículo 14. Tierras. En comentarios que formula desde varios años, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas transitorias necesarias para proteger los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, de conformidad con el artículo 14 del Convenio, mientras no se avance en la regularización de la tenencia de la misma. A este respecto, la Comisión había tomado nota de la Ley de Registro de Información Catastral (decreto núm. 41-2005) y observó que su título VII «Regularización en el marco del proceso catastral» es aplicable hasta tanto entre en vigencia la «Ley de la Tenencia de la Tierra» y que el artículo 65, incluido en dicho título provisional, establece los mecanismos de determinación y registro de las tierras comunales. En su último comentario, la Comisión pidió al Gobierno informaciones sobre la aplicación en la práctica de la Ley de Registro de Información Catastral y su reglamento de 2009. También solicitó información sobre el impacto de las medidas adoptadas en materia de desarrollo rural y de política agraria en el reconocimiento efectivo de los derechos sobre tierras de los pueblos indígenas.

El Gobierno indica que, durante los años 2015-2017, 6 728 familias beneficiaron de resoluciones jurídicas de adjudicación y regularización de tierras del Estado en el marco del Programa de regularización y adjudicación de tierras del Estado. El Gobierno considera que este programa da cumplimiento al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria de 1996, en lo relativo a la regularización de titulación de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. En este sentido, el Fondo de tierras analiza los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado. La Comisión observa que, según surge de estas informaciones, la mitad de las resoluciones beneficiaron a familias mayas y que las familias xinca o garífuna no habrían sido beneficiadas. El Gobierno también proporciona información sobre los programas desplegados por el Fondo de tierras, entre ellos el Programa de acceso a la tierra vía créditos subsidiados y el Programa especial de arrendamiento de tierras, dirigidos a familias campesinas y o indígenas sin tierras o con tierras insuficientes en situación de pobreza.

El Gobierno indica también que: i) la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) desarrolla una labor estratégica, que ha permitido a través de diferentes mecanismos facilitar resolución negociada y consensuada entre los actores relacionados a los conflictos agrarios; ii) la SAA no posee la facultad de definir quién es el sujeto que tiene el derecho, sino que apoya en la realización de estudios históricos registrales y catastrales; iii) el reconocimiento del derecho a la tierra compete al Registro General de la Propiedad a través de las certificaciones que expide de las fincas debidamente inscritas; adicionalmente se reconoce la posesión de la tierra, en forma pública pacífica y de buena fe, además de la tenencia consuetudinaria de los pueblos indígenas; iv) la SAA privilegia la utilización del derecho consuetudinario para resolver conflictos relativos a la tierra que involucren a miembros de una misma comunidad o entre comunidades; v) en lo relacionado a casos de alto impacto se identificaron alrededor de 35 conflictos en los que se establecen mesas permanentes de diálogo; vi) según los datos comunicados, durante el año 2017, las delegaciones de la SAA atendieron un total de 1 425 casos y se finalizaron 485 conflictos; vii) los departamentos con mayor incidencia de conflictos agrarios fueron: Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Quiché e Izabal, y viii) entre las dificultades identificadas por la SAA, el Gobierno menciona la dificultad de lograr acuerdos en menor tiempo, de encontrar vías más adecuadas de tratamiento de los problemas mediante métodos alternos y de establecer comunicación directa con todas las personas o grupos.

La Comisión toma nota de que el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala alegan que existe una dinámica de desalojos por órdenes judiciales que vulneran los derechos humanos individuales y colectivos en comunidades indígenas. A su juicio, los desalojos han traído consecuencias graves para las comunidades que quedan en una situación de desprotección total, sin acceso a servicios básicos y sus prácticas ancestrales y otras actividades colectivas se ven en riesgo de desaparecer.

La Comisión toma nota de que en su informe sobre su visita a Guatemala de agosto de 2018, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas indica que «la alarmante falta de protección de los derechos colectivos de propiedad de sus tierras se produce en un contexto de extrema desigualdad en la distribución de la tierra y de inseguridad en la tenencia, con un inadecuado sistema de registro que permite que sigan titulándose tierras ancestrales indígenas a terceras partes, y sin mecanismos apropiados para la resolución de los conflictos de propiedad, que

tienden a judicializarse» (documento A/HRC/39/17/Add.3). En su informe de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala destaca que «persiste la falta de protección de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, y ello afecta particularmente a las mujeres en los ámbitos de la titularidad de la tierra y el acceso a los créditos» (documento A/HRC/37/3/Add.1).

Al tiempo que toma nota del Programa de regularización y adjudicación de tierras del Estado, la Comisión observa que no se desprende de la información proporcionada por el Gobierno que el proceso de regularización de las tierras que los pueblos indígenas han tradicionalmente ocupado haya progresado en términos de identificación y registro de tierras comunales. ***La Comisión pide al Gobierno que sin demora adopte las medidas necesarias para proteger de manera apropiada los derechos a la tierra de los pueblos indígenas de conformidad con el artículo 14 del Convenio y que trasmita información sobre las áreas de tierras tituladas, el número de personas concernidas y las zonas geográficas correspondientes. La Comisión reitera su solicitud de informaciones concretas sobre la aplicación en la práctica del decreto núm. 41-2005 y su reglamento de 2009 sobre tierras comunales. La Comisión también pide al Gobierno que envíe información sobre la situación del procedimiento de registro de tierras. Sírvese seguir brindando informaciones sobre los mecanismos de resolución de conflictos, indicando los conflictos resueltos y los pendientes.***

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nicaragua

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2010)

La Comisión toma nota de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua aprobada en enero de 2014, la cual modifica la denominación «comunidades de la Costa Atlántica» por la de «comunidades de la Costa Caribe» contenida en el artículo 180 de la Constitución, y reconoce a dichas comunidades el «derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus tradiciones históricas y culturales». En consecuencia, en marzo de 2016, se reformó la ley núm. 28 que contiene el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua a fin de que se reemplacen la denominaciones «Región Autónoma Atlántico Norte» y «Región Autónoma Atlántico Sur» por las de «Región Autónoma de la Costa Caribe Norte» y «Región Autónoma de la Costa Caribe Sur» respectivamente. La Comisión recuerda que el Gobierno ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en dichas regiones autónomas, así como en las zonas Pacífico, centro y norte de Nicaragua.

Artículo 3 del Convenio. Derechos Humanos. Violencia contra comunidades indígenas en la Costa Caribe Norte. La Comisión toma nota de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su resolución de 1.º de septiembre de 2016, dictó medidas provisionales a favor de miembros del pueblo indígena Miskitu de la región de la Costa Caribe Norte que habitan en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi a fin de erradicar el clima de violencia que afecta dicha región a causa de conflictos sobre posesión de tierras. Dichas medidas incluyen, entre otras, el establecimiento de una instancia u órgano para diagnosticar las fuentes del conflicto y la propuesta de vías de pacificación con la participación de las comunidades afectadas; así como garantías de protección para las personas que hayan abandonado sus comunidades por causa de la violencia y deseen retornar a las mismas. En resoluciones posteriores adoptadas el 23 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió dichas medidas provisionales a favor de los miembros del pueblo Miskitu que habitan en las comunidades Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa, respectivamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se basó en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo referencia a que «existe un conflicto de territorios entre integrantes de tales comunidades y terceros «colonos» que ha tenido como consecuencia múltiples hechos de violencia que incluyen asesinatos, secuestros, lesiones, violaciones sexuales, destrucción de bienes y el desplazamiento de los integrantes de algunas comunidades» en el marco de procesos de saneamiento y reivindicación de territorios ancestrales (véase resolución de la corte de 1.º de septiembre de 2016, párrafo 7). La Comisión toma nota de que el Gobierno comunicó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha puesto en marcha un plan de atención implementado por el ejército de Nicaragua del destacamento militar norte para atender de la situación de los comunitarios y colonos en comunidades afectadas por la violencia, y que ha establecido una comisión de diálogo y entendimiento para impulsar acciones que promuevan el diálogo y entendimiento entre los líderes territoriales, comunales y otros actores con el propósito de evitar acciones confrontativas (véase resolución de 23 de noviembre de 2016, párrafos 23 y 31). ***La Comisión expresa su preocupación por los conflictos y por los hechos de violencia ocurridos en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte a raíz de las reivindicaciones territoriales y de los procesos de saneamiento. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para prevenir todo acto de violencia y para garantizar la vida e integridad cultural de las comunidades del pueblo Miskitu de dicha región, y el ejercicio de sus derechos colectivos; y las medidas adoptadas para investigar los actos de violencia, deslindar responsabilidades de los autores de los hechos y para sancionar a los responsables. Por último, la Comisión también pide al Gobierno que indique de qué forma los miembros de las comunidades Miskitu afectadas por el clima de violencia participan en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas adoptadas, incluyendo los planes de seguridad.***

Artículo 14. Demarcación y procesos de titulación de tierras. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que informe sobre los avances en los procesos de demarcación y titulación de tierra de los pueblos indígenas. La Comisión tomó nota de las garantías constitucionales y legales relativas a la propiedad comunal de las tierras de los pueblos indígenas. La Comisión recuerda que los procesos de demarcación y titulación de los pueblos indígenas de las regiones autónomas de la Costa Caribe se rigen por la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (ley núm. 445 de 2002), la cual creó la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) para que, entre otras funciones, dictamine y resuelva sobre las solicitudes de demarcación y titulación. Observando que no existía una ley específica que regulara la propiedad comunal de los pueblos indígenas del Pacífico, centro y norte del país, la Comisión pidió al Gobierno que describiera las medidas para identificar las tierras ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas en dichas zonas, así como las modalidades de tenencia de tierra.

El Gobierno indica en su memoria que tiene la voluntad de seguir avanzando en el proceso de demarcación y titulación de las tierras. El Gobierno señala que, dentro del período 2007-2016, se han demarcado, titulado e inscrito 23 territorios a favor de las comunidades indígenas, de los cuales 16 títulos corresponden a territorios en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, cuatro a territorios a la región de la Costa Caribe Sur y tres a territorios en la Zona de Régimen Especial. El área titulada ha beneficiado a 304 comunidades indígenas y equivale al 28,95 por ciento del territorio nacional. El Gobierno indica que el procedimiento legal de saneamiento — quinta y última etapa del proceso de legalización de los territorios originarios en las regiones autónomas del Caribe — constituye un problema nacional sumamente complejo. La Comisión toma nota de la adopción del decreto presidencial núm. 15-2013 que establece la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en los Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay que tiene entre sus objetivos ejercer en lo posible la mediación y la solución alternativa de conflictos que involucren a terceros pobladores de áreas pertenecientes a comunidades indígenas. En relación con las zonas del Pacífico, centro y norte del país, el Gobierno destaca que las autoridades de los pueblos originarios consideran que sus títulos de propiedad están registrados y que gozan de plena validez legal. Sin embargo, el Gobierno indica que existen dificultades vinculadas con el reconocimiento de títulos de propiedad colectiva y con la ocupación ilegal por parte de latifundistas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial, ha venido implementando el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) que tiene como objetivo facilitar la demarcación, titulación y registro de derechos de propiedad de los pueblos indígenas en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y Rivas. De acuerdo con el informe núm. PIDC536 publicado por el Banco Mundial, el número de beneficiarios del proyecto PRODEP II al 31 de diciembre de 2017 ascendió a 633 627 personas y 92 995 hogares. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno sobre la falta de consenso entre las comunidades respecto a dicho proyecto, así como respecto a los mapas cartográficos oficiales elaborados por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

La Comisión saluda los esfuerzos desplegados para velar por la protección efectiva del derecho de propiedad y posesión sobre las tierras de los pueblos indígenas y pide al Gobierno que continúe informando sobre los resultados de los procesos de demarcación y titulación de territorios tradicionales de los pueblos cubiertos por el Convenio, tanto en el ámbito del régimen establecido para las regiones autónomas de la Costa Caribe (ley núm. 445) como para las comunidades establecidas en el Pacífico, centro y norte. Sírvase informar sobre la participación de los pueblos indígenas y tribales en la implementación del proyecto PRODEP II, así como sobre los procedimientos establecidos para resolver los desacuerdos surgidos de los procesos de demarcación entre las comunidades, y entre éstas y terceros.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de las observaciones detalladas de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 29 de agosto de 2018 así como de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 26 de septiembre de 2018. *La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones en relación a dichas observaciones.*

Artículos 2, 6 y 33 del Convenio. Acción coordinada y sistemática. Consulta. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del marco institucional y legislativo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en materia de consulta y participación y solicitó al Gobierno que presente informaciones sobre las actividades del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y de otras entidades gubernamentales encargadas de asuntos indígenas, para promover una acción coordinada y sistemática en relación con la implementación del Convenio. El Gobierno indica en su memoria que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas es el órgano rector de las políticas gubernamentales en el ámbito indígena y que trabaja conjuntamente con la misión Guaicaipuro, la cual opera desde 2003 como instancia de coordinación, promoción y ejecución de políticas, planes y proyectos para los pueblos indígenas, con la participación de los consejos comunales y organizaciones indígenas. El Gobierno añade que la participación de los

representantes indígenas en temas socio-económicos nacionales se promueve a través de comisiones interinstitucionales y actividades de formación sobre temas que conciernen a los pueblos indígenas y las normas que los amparan.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CTASI se refiere a la declaración de la Asamblea Waramasen emitida en febrero de 2017 conjuntamente por los pueblos indígenas pemón, akawaio, arawako y kariña, en la cual dichos pueblos manifiestan su descontento, entre otros aspectos, por su falta de participación en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral nacional, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CTASI indica, en relación con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, que miembros de los pueblos indígenas no están conformes con la metodología empleada por el Gobierno para escoger candidatos indígenas para la Asamblea Constituyente por interferir con los procesos internos de las comunidades para la selección de sus representantes. La Comisión toma nota de la adopción del decreto adoptado por la Asamblea Constituyente el 8 de agosto de 2017 que contiene las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. De conformidad con dicho decreto, los órganos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, debiendo cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que adopte la Asamblea para preservar la paz, la tranquilidad pública, la independencia nacional, la estabilidad del sistema socioeconómico y financiero, y la garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano.

La Comisión pide al Gobierno que especifique de qué manera se asegura que los pueblos indígenas participen libremente en la adopción e implementación de políticas y programas que les conciernen dentro de los organismos administrativos competentes, tanto a nivel nacional como a nivel de los distintos estados, indicando también el rol que cumple la misión Guaicaipuro. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones sobre las medidas adoptadas para promover una acción coordinada y sistemática entre el Gobierno central y los estados, así como entre instituciones gubernamentales, para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que suministre informaciones detalladas sobre los mecanismos que se han instaurado para consultar a los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, respecto de las medidas adoptadas por la Asamblea Constituyente que les afecten directamente.

Artículos 3. Derechos humanos. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para asegurar que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados y que, en caso de que se denuncien violaciones, se realicen las investigaciones correspondientes. La Comisión solicitó en particular información sobre el resultado de los procesos iniciados en relación con el asesinato del líder indígena del pueblo Yukpa Sabino Romero y sobre la masacre de miembros del pueblo yanomami en el municipio de Alto Orinoco. Al respecto, el Gobierno indica que el Tribunal 14 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medidas de privación de libertad para cinco imputados por la presunta comisión del delito de asesinato de Sabino Romero. Luego de varios procedimientos, uno de los cinco presuntos culpables fue sentenciado a pena de prisión de 30 años. Además, el Gobierno indica que, de acuerdo a las investigaciones conducidas por una comisión técnica del Ministerio Público, no se pudo constatar la ocurrencia de la masacre de indígenas yanomami.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CTASI se refiere al asesinato de cinco miembros del pueblo Pemón en el estado de Bolívar, entre 2016 y 2017, por parte de supuestos grupos armados vinculados a la minería ilegal. La CTASI observa que, como respuesta al hostigamiento de mineros y a la falta de acción de las fuerzas armadas, se creó un consejo de seguridad bajo la jurisdicción indígena denominado «guardia territorial pemón» para frenar la expansión minera en la comunidad de Ikaburú. La CTASI añade que, según denuncias presentadas por miembros de la comunidad ante la Fiscalía General de la República, la guardia territorial pemón estaría asumiendo las funciones de las autoridades policiales y militares. La Comisión toma nota además de que la UNETE, CTV, CGT y CODESA denuncian en sus observaciones violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la violencia en contra de miembros de las comunidades indígenas en la Guajira, así como el asesinato de un líder indígena en un enfrentamiento con un sindicato minero en el estado de Bolívar el 24 de agosto de 2018.

La Comisión toma nota de que, en sus comentarios de agosto de 2018 al informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo sobre su misión a Venezuela (A/HRC/39/47.Add.2), el Gobierno se refiere a la creación de la Comisión Presidencial para la protección, el desarrollo y la promoción integral de la actividad minera lícita en la región Guayana (COMPRODEPROIN), la cual tiene como fin elaborar y ejecutar un plan de acción para abordar, de manera integral, la práctica de la minería ilegal en la región Guayana. El Gobierno también indica que se estableció la Comisión nacional de la lucha contra el contrabando que tiene como fin el seguimiento, control y análisis de los esfuerzos de todos los entes públicos, nacionales y regionales dedicados a generar políticas que permitan resolver el problema de invasión y destrucción de áreas protegidas por la extracción ilegal de minerales, así como los problemas sociales y de salud de las comunidades indígenas y rurales de los estados de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.

La Comisión expresa su profunda preocupación por las informaciones relativas a la situación de inseguridad que afecta a varios pueblos indígenas en el país, en especial al pueblo pemón e insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prevenir y poner fin a los conflictos generados por las expansiones mineras, y para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente del pueblo indígena pemón. Asimismo,

la Comisión pide al Gobierno que indique de qué forma los miembros de las comunidades afectadas por el clima de violencia participan en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas adoptadas. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre las investigaciones llevadas a cabo en relación con las denuncias presentadas respecto de los actos de la guardia territorial pemón, y sobre la forma en que se asegura el respeto a los derechos humanos de los miembros de la comunidad de ikaburú. Además, la Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre las acciones emprendidas por la COMPRODEPROIN y la Comisión nacional de la lucha contra el contrabando para salvaguardar los derechos de los miembros de las comunidades afectados por la minería ilegal.

Artículos 3 y 25. Escasez de alimentos y medicamentos. La Comisión toma nota de que, en su comunicado oficial del 1.º de octubre de 2018, relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas indican que el acceso a la salud en el país se encuentra en estado de serio deterioro. En sus observaciones, la CTASI indica que personas pertenecientes a pueblos indígenas sufren la carencia de alimentos y la escasez de medicamentos que generan condiciones de vida críticas obligándoles a migrar a otros lugares dentro o fuera del país, como es el caso de las comunidades wayúu del estado de Zulia y de las comunidades warao del estado de Delta Amacuro. En particular, la CTASI evoca la crisis de salud que afecta a varias comunidades indígenas warao en el Estado Delta Amacuro a causa del aumento de casos de sarampión, malaria, VIH y otras enfermedades infecto-contagiosas entre miembros de las comunidades. Dichas alegaciones también han sido reflejadas en las observaciones de la UNETE, CTV, CGT y CODESA así como en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2017 (OEA/Ser.L/V/II Doc.209). **La Comisión expresa su preocupación por la situación de escasez de alimentos y de medicamentos que afecta a ciertas comunidades indígenas e insta al Gobierno a que examine la situación, tome las medidas necesarias al respecto y presente informaciones sobre el impacto de dichas medidas.**

Artículo 15. Recursos naturales. Arco Minero del Orinoco. Consulta previa. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la aplicación de las disposiciones de la Ley de Aguas, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Bosques en relación con la consulta previa a las comunidades indígenas, los estudios de impacto ambiental y sociocultural, el pago de indemnizaciones y la participación de las comunidades en los beneficios de las actividades de explotación de recursos naturales en sus tierras. La Comisión observa que el Gobierno se limita a indicar que se llevaron a cabo consultas con comunidades indígenas previo a la conformación de la Franja Petrolera del Orinoco a través de múltiples asambleas en el seno de las comunidades. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTASI respecto al inicio de las operaciones mineras en el estado de Bolívar en 2017 como parte del proyecto Arco Minero del Orinoco. Según la CTASI, las operaciones se llevan a cabo a través de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, sin haberse consultado previamente a las comunidades indígenas afectadas de Apanao, Bloque El Callao, Bloque Guasipati-El Callao, Sifontes Norte, El Foco, El Triunfo y Gran Corazón de Jesús. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las consultas realizadas con las comunidades indígenas afectadas por las actividades mineras realizadas como parte del proyecto Arco Minero del Orinoco, así como sobre los acuerdos a los que se hayan llegado entre el Gobierno y las comunidades, incluyendo indicaciones sobre los términos de distribución de beneficios.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 107** (Angola, Bélgica, El Salvador, Ghana, Malawi, Pakistán, República Árabe Siria); el **Convenio núm. 169** (República Centroafricana, Chile, Dominica, España, Guatemala, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el **Convenio núm. 107** (Cuba, República Dominicana); el **Convenio núm. 169** (Países Bajos).

Categorías específicas de trabajadores

Bulgaria

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) (ratificación: 2009)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Trabajadores Independientes e Informales («UNITY»), recibidas el 23 de octubre de 2014 y el 31 de agosto de 2018, en lo relativo a la situación de los trabajadores a domicilio del sector industrial que no trabajan con contrato y que por tanto no están cubiertos por el Código del Trabajo. Además, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, recibida el 1.º de noviembre de 2018. La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria (CITUB), recibidos el 1.º de noviembre de 2018, junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Declaración y aplicación de una política nacional en materia de trabajo a domicilio. El Gobierno indica que el 27 de julio de 2018 se celebró una reunión en el Ministerio de Trabajo y Política Social (MLSP) con representantes de UNITY para debatir la situación de los trabajadores a domicilio, los trabajadores independientes y los trabajadores de la economía informal. La Comisión celebra que el Gobierno indique que se contrajo el compromiso de proseguir este diálogo y que el MLSP se encargó de organizar una reunión entre representantes del organismo ejecutivo de la inspección del trabajo y UNITY para explorar posibilidades de cooperación entre ellos. En sus observaciones de 2018, UNITY proporciona información sobre la aplicación del Convenio. Asimismo, transmite un ejemplar del Acuerdo nacional sobre la regulación del trabajo a domicilio en la República de Bulgaria, firmado el 24 de noviembre de 2010, relativo a la regulación del trabajo a domicilio tal y como se define en el Convenio núm. 177. Además, UNITY proporciona una copia de un trabajo de investigación sobre los términos y las condiciones laborales de los trabajadores a domicilio, llevado a cabo por Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO). UNITY hace referencia a sus observaciones de 2014, en las que expresó su preocupación porque: a pesar de las enmiendas al Código del Trabajo, no existe una política nacional sobre el trabajo a domicilio en Bulgaria, como se dispone en el *artículo 3* del Convenio; el Gobierno ha negado que UNITY tenga «derechos de consulta» sobre la base de que es una organización que se ocupa del trabajo a domicilio; el Gobierno insiste en que los trabajadores a domicilio son contratistas independientes que están excluidos del ámbito de aplicación tanto del Convenio como del Código del Trabajo; y las tarifas de trabajo a destajo que se paga a los trabajadores a domicilio son muy inferiores al salario mínimo. UNITY sostiene que la situación de los trabajadores a domicilio no ha cambiado. Observa que estos trabajadores son los trabajadores más marginados de la cadena de suministro, ya que son los empleadores los que determinan de forma unilateral los términos y condiciones de su trabajo, y carecen de un contrato por escrito, aunque trabajen bajo el control de sus empleadores. Según UNITY, la mayoría de los trabajadores a domicilio de Bulgaria trabajan en el sector del calzado y la confección, y para un único empleador o una única fábrica. En sus observaciones, la CITUB se refiere a la conferencia nacional celebrada el 25 de septiembre de 2018 sobre el tema de la economía informal y el trabajo no declarado, que contó con la participación de representantes del Gobierno, del presidente de UNITY y de varios trabajadores a domicilio. La CITUB indica que en dicha conferencia se señaló que la legislación nacional no protege a los trabajadores a domicilio, y que los participantes llegaron a la conclusión de que es necesario crear una plataforma nacional contra el trabajo no declarado, que sirva para poner de relieve políticas destinadas a resolver los problemas que origina el trabajo no declarado en todas sus formas, incluido el trabajo a domicilio. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada en lo relativo a las medidas adoptadas o previstas para mejorar la situación de los trabajadores a domicilio, y que indique las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se ha consultado con respecto a la elaboración, aplicación y revisión de dichas medidas.**

Artículos 1 y 4, 2), a), d), e), g) y h). Definición de trabajador a domicilio. Igualdad de trato. En sus observaciones, UNITY alega que los trabajadores a domicilio no están cubiertos por el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los trabajadores a domicilio que trabajan en virtud de un contrato tienen los mismos derechos que otros trabajadores con arreglo al Código del Trabajo. Sin embargo, UNITY apunta que el Gobierno no exige a los empleadores que suscriban un contrato con los trabajadores a domicilio y que por tanto muchos de ellos están trabajando sin el beneficio de un contrato de trabajo escrito, a pesar de depender de su empleador y de trabajar bajo el control de éste. En este sentido, la Comisión recuerda que en el *artículo 1* del Convenio se define a un trabajador a domicilio como aquel trabajador que realiza un trabajo en su domicilio o en locales que escoja, distintos de los del empleador, a cambio de una remuneración, y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales. Por consiguiente, la Comisión toma nota de que el Convenio puede aplicarse a los trabajadores asalariados a los que no se considera asalariados en virtud de la legislación nacional, pero que sin embargo tienen una relación de dependencia económica con otra persona física o jurídica. Además, la Comisión toma nota de que el *artículo 4, 1)*, del Convenio indica que uno de los objetivos del Convenio es promover, lo más posible, la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa.

En sus observaciones, la CITUB indica que la condición de los trabajadores a domicilio se rige únicamente por el artículo 107, b), del Código del Trabajo de Bulgaria, en el que se establece que un contrato de trabajo puede prever la realización de un trabajo a cambio de una remuneración en el domicilio del trabajador o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador. No obstante, la CITUB señala que, con arreglo al Código del Trabajo, la única diferencia entre un asalariado que realiza trabajo a domicilio y un trabajador a domicilio independiente es la existencia de un contrato de trabajo tal y como se contempla en el artículo 107, b), del Código del Trabajo. Si existe un contrato, entonces el trabajador disfruta de los derechos que se garantizan a los trabajadores en virtud del Código del Trabajo, como los relativos al tiempo de descanso y las vacaciones. Si, por el contrario, un trabajador realiza un trabajo para otra persona sin un contrato de trabajo, se considerará que el trabajador es un contratista independiente, incluso si depende económicamente de esa persona. En cuanto a los comentarios previos de la Comisión sobre la aplicación del artículo 4, 2), g) y h), del Convenio, el Gobierno indica que el Código del Trabajo contempla la celebración de contratos de trabajo a domicilio, y añade que, si existe un contrato de trabajo a domicilio, el trabajador tiene los mismos derechos que otros trabajadores en virtud del Código del Trabajo, como el derecho a licencias por embarazo, maternidad y nacimiento de un hijo, así como para el cuidado de los hijos. En lo concerniente a la aplicación del principio de la igualdad de trato, UNITY hace referencia al artículo 4, 2), a), del Convenio, que contempla el derecho de los trabajadores a domicilio a constituir o afiliarse a las organizaciones que escojan, y recomienda al Gobierno de Bulgaria que reconozca a estas organizaciones. En lo relativo a la remuneración y la seguridad social (artículo 4, 2), d) y e)), UNITY indica que se ha modificado el Código del Trabajo para ajustarlo al Convenio, pero alega que aquél no se está cumpliendo. UNITY sostiene también que los trabajadores a domicilio cobran mucho menos del salario mínimo. Indica que el salario mínimo en Bulgaria es actualmente de 510 levas búlgaras (unos 260 euros al mes), pero indica que muchos trabajadores a domicilio del sector de la confección y el calzado sólo ganan 89,09 euros al mes. Además, si los trabajadores a domicilio están enfermos o se toman un día de descanso dejan de recibir ingresos. Por otra parte, UNITY alega que a menudo se tarda en pagar a los trabajadores a domicilio. Asimismo, UNITY señala que muchos trabajadores a domicilio no tienen acceso a la seguridad social y no alcanzan el umbral relativo al seguro fijado en 150 levas búlgaras (artículo 4, 2), e)). **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o previstas para garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y otros trabajadores, en consulta con los interlocutores sociales interesados, con vistas a identificar a los trabajadores a domicilio que se encuentran en una relación de trabajo directa tal y como se define en el artículo 1 del Convenio, que deberían beneficiarse de las protecciones previstas en el Código del Trabajo. Asimismo, al tiempo que recuerda que en el párrafo 13 de la Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184), se establece que deberían fijarse tasas salariales mínimas para el trabajo a domicilio, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, la Comisión pide al Gobierno que responda con detalle a las observaciones de UNITY en lo relativo a los bajos ingresos de los trabajadores a domicilio. Por último, además de tomar nota de que el Gobierno no indica en su memoria, como se le solicitó previamente, qué disposiciones del Código del Trabajo se refieren a la edad mínima de admisión al trabajo a domicilio, la Comisión le solicita una vez más que aclare este punto.**

Artículo 6. Estadísticas del trabajo. Artículo 9 y parte V del formulario de memoria. Medidas de cumplimiento. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, desde 1996, no se han llevado estadísticas en lo relativo al número de trabajadores a domicilio. La CITUB considera que el hecho de no llevar estadísticas constituye un incumplimiento del Convenio, y destaca la importancia de disponer de esta cifra con el fin de sacar a estos trabajadores de la economía sumergida y combatir el trabajo informal. Además, expresa su preocupación por el reducido número de infracciones observadas. UNITY también insta a que se lleven estadísticas sobre el trabajo a domicilio. En respuesta a los comentarios previos en los que se pedía información relativa a la aplicación en la práctica del Convenio, el Gobierno indica que el organismo ejecutivo de la inspección del trabajo supervisa el cumplimiento de la legislación laboral en lo concerniente a los trabajadores de fábricas y de oficina a domicilio. En virtud del artículo 402, 1), 2), del Código del Trabajo, la inspección del trabajo puede visitar los locales en domicilios o terrenos particulares en los que se realiza el trabajo para inspeccionar las condiciones laborales. El Gobierno añade que de 2013 a mediados de 2018 se observaron 17 infracciones de las disposiciones que regulan el trabajo a domicilio. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que se recaban y se analizan estadísticas sobre los trabajadores a domicilio, desglosadas por sexo y edad. Además, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información actualizada relativa a la aplicación en la práctica del Convenio, incluyendo textos de decisiones judiciales en relación con los principios del Convenio y extractos de los informes de inspección, y que indique el número de inspecciones llevadas a cabo y el resultado de éstas.**

Cuba

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), recibidas el 30 de agosto de 2018, alegando la falta de consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la implementación del Convenio por parte del Gobierno. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.**

Parte V del Convenio (vacaciones anuales pagadas). Artículos 36 a 42. En sus comentarios de 2013, la Comisión expresó su esperanza de que una vez finalizado el nuevo proyecto de Código del Trabajo, éste tuviera debidamente en cuenta sus comentarios en relación con la necesidad de enmendar el artículo 98 del Código del Trabajo, que preveía bajo ciertas condiciones la liquidación en efectivo de las vacaciones sin disfrutar del descanso. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 98 del Código del Trabajo anterior fue derogado en virtud de la ley núm. 116 de 20 de diciembre de 2013 por la que se adopta el nuevo Código del Trabajo (Código de 2013). La Comisión observa que el artículo 2, apartado f), del Código de 2013 establece el derecho de los trabajadores a vacaciones anuales pagadas, y el artículo 74, apartado c), dispone que dicho derecho deberá ser de al menos siete días. La sección sexta del capítulo IX regula el derecho a las vacaciones anuales pagadas. En particular, el artículo 101 del Código de 2013 prevé que los trabajadores tienen derecho al disfrute de treinta días naturales de vacaciones anuales pagadas por cada once meses de trabajo efectivo. El trabajador que no llegara a alcanzar los once meses de trabajo tiene derecho a vacaciones pagadas de duración proporcional a los días efectivamente laborados. El trabajador con más de un empleo tiene derecho a disfrutar de un descanso efectivo de vacaciones anuales pagadas hasta un total de treinta días naturales y a cobrar la totalidad de la retribución que por este concepto tenga derecho en cada contrato. Además, los artículos 104 y 105 del Código de 2013 establecen la obligación del empleador de conceder a sus trabajadores las vacaciones anuales pagadas y de adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir el programa de vacaciones y garantizar que el descanso sea efectivo. Por último, la Comisión toma nota de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 del Código de 2013, «si transcurrido el tiempo acumulado para disfrutar de los períodos de vacaciones anuales pagadas, surgen circunstancias excepcionales que demandan la permanencia del trabajador en su actividad, el empleador oído el criterio de la organización sindical, puede posponer su disfrute o acordar con el trabajador simultanear el cobro de las vacaciones acumuladas y el salario por el trabajo realizado, garantizando el descanso efectivo de siete días al año como mínimo». El citado artículo añade que el trabajador y el empleador deberán dejar constancia escrita de lo acordado y que los días trabajados por esta razón acumulan tiempo y salarios a los fines del nuevo período vacacional. **La Comisión recuerda que el artículo 41 del Convenio prevé que se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas. La Comisión solicita al Gobierno que indique la manera en que se asegure que el artículo 107 del Código del Trabajo de 2013 da pleno efecto a este artículo del Convenio, en particular, a la luz del apartado de dicho artículo del Código del Trabajo que autoriza al empleador a requerir la presencia del trabajador, bajo circunstancias excepcionales, y que permite al empleador posponer o reducir las vacaciones del trabajador y pagar al mismo la proporción reducida de las vacaciones acumuladas.**

Parte IV. Salarios. Artículos 24 a 35. La Comisión recuerda que la parte IV del Convenio contempla el establecimiento de procedimientos y mecanismos para fijar y asegurar salarios mínimos a los trabajadores de las plantaciones. **La Comisión solicita al Gobierno que indique la manera en la que se da efecto a esta disposición del Convenio.**

Partes IX y X (derecho de sindicación y de negociación colectiva – libertad sindical). Artículos 54 a 70. El Gobierno indica en su memoria que el Código de 2013 reconoce y promueve las organizaciones sindicales de diferentes sectores. Asimismo, prevé medidas de protección de los dirigentes de tales organizaciones con miras a que dispongan de las facilidades apropiadas para el desempeño de sus funciones. Por otro lado, el Gobierno se refiere a la regulación de los convenios colectivos así como de los mecanismos de solución de las discrepancias que puedan surgir en la elaboración, modificación y revisión de los mismos. Por último, el Gobierno informa que el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros cuenta con 2 010 sindicatos de base y 127 331 trabajadores afiliados, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros con 8 834 sindicatos de base y 381 094 trabajadores afiliados. **La Comisión se refiere a sus comentarios de 2016 sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores de las plantaciones no sean discriminados o perjudicados en su empleo por el ejercicio pacífico del derecho de huelga y solicita también que proporcione informaciones relativas al ejercicio de dicho derecho en la práctica. Asimismo, la Comisión se refiere a sus comentarios en relación con la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y solicita al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de convenios colectivos firmados en el ámbito de las plantaciones, indicando los sectores de actividad y el número de trabajadores cubiertos.**

Parte XI (inspección del trabajo). Artículos 71 a 84. La Comisión se refiere a sus comentarios de 2015 sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en los que tomó nota con satisfacción de la adopción del decreto núm. 326 de 12 de junio de 2014, reglamento del Código del Trabajo, que deroga los artículos 11 y 12 del reglamento del sistema nacional de inspección del trabajo de 2007. Dichos artículos establecían que toda visita de inspección estaba subordinada a la comunicación al empleador de una orden de inspección que contuviera cierta información, incluido el objetivo de la visita de inspección. El Gobierno indica que en 2017 la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo realizó 76 inspecciones en el sector de la agricultura, en las que se detectaron 389 infracciones, 140 de ellas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno añade que las principales infracciones detectadas fueron la no garantía de condiciones higiénicas y seguras para los trabajadores y la violación de la normativa relativa a la entrega de equipos de protección personal. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno sobre las sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la ASIC denuncia supuestos de personas privadas de libertad que son sometidas a trabajo forzoso en plantaciones. La ASIC

denuncia también casos de trabajo infantil durante las vacaciones escolares y el empleo de estudiantes de secundaria en granjas estatales en la época de cosecha. A este respecto, indica que los estudiantes no reciben una remuneración por su trabajo, sino crédito académico y recomendaciones favorables para ingresar en la universidad. ***La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre el número de personas privadas de libertad y de estudiantes de secundaria que trabajan en las granjas estatales, desglosada por edad, tipo de trabajo y la manera en que se les compensa, así como sus condiciones de trabajo, y la forma en que se asegura que los estudiantes tengan la libertad de trabajar o no. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas de supervisión y control de observancia de las condiciones de trabajo de los trabajadores de las plantaciones, en particular sobre las visitas de inspección realizadas en las plantaciones, las infracciones observadas a la legislación del trabajo y las sanciones impuestas.***

Parte IV del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre la aplicación, en la práctica del Convenio, incluyendo: i) estudios recientes sobre las condiciones socioeconómicas de los trabajadores en las plantaciones; ii) informaciones estadísticas, desagregadas por sexo y edad, sobre el número de explotaciones y de trabajadores a los que se aplica el Convenio; iii) copia de los convenios colectivos aplicables al sector, y iv) el número de organizaciones de trabajadores y de empleadores establecidas en el sector de las plantaciones y cualquier otra información que permita que la Comisión evalúe la situación de los trabajadores en las plantaciones, en relación con las disposiciones del Convenio.

[Se solicita al Gobierno que envíe una memoria detallada en 2019.]

Polonia

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ) recibidas el 31 de agosto de 2018, junto con la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, recibidas el 22 de octubre de 2018.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Política nacional relativa a los servicios de enfermería y al personal de enfermería. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para garantizar que se proporcione al personal de enfermería unas condiciones de empleo y de trabajo adecuadas, en particular en relación con las perspectivas de carrera y la remuneración, así como sobre las medidas adoptadas para promover un mayor interés en las profesiones de la enfermería y la partería. El Gobierno indica que un equipo establecido por el Ministerio de Salud en 2017 elaboró la «Estrategia para el desarrollo de la enfermería y la partería en Polonia» (en adelante «la Estrategia»), que se trata de un documento que establece una serie de medidas, acordadas en consulta con los representantes de las enfermeras y parteras, que deben ponerse en práctica a fin de mejorar la calidad de los cuidados de enfermería para los pacientes y las condiciones de trabajo para las enfermeras. El Gobierno indica que el Ministerio de Salud tendrá en cuenta la Estrategia al aplicar la política de atención de salud. La OPZZ observa que el Sindicato Nacional de Enfermeras y Parteras (OZZPiP) fue el único sindicato que participó en la elaboración de la Estrategia. Añade que la Estrategia no prevé la financiación de las medidas que se adoptarán; tampoco indica la manera en que se supervisará la consecución de los objetivos, ni aclara la importancia que se concederá a la Estrategia. La Comisión toma nota de que, el 23 de septiembre de 2015, la Asociación Nacional Profesional de Enfermeras y Parteras, el Consejo Nacional de Enfermeras y Parteras, el presidente de la Caja Nacional de Salud y el Ministerio de Salud concluyeron un acuerdo salarial. En sus observaciones, la OPZZ expresa su preocupación porque en julio de 2018 se concluyó un acuerdo salarial ulterior, y pone de relieve que ambos acuerdos sólo se discutieron con un sindicato, por lo que se discriminó a otros sindicatos, violándose por consiguiente la Constitución polaca y la Ley de Sindicatos. En su respuesta a las observaciones de la OPZZ, el Gobierno indica que el acuerdo concluido en 2015 por el Ministerio de Salud con los representantes de las enfermeras constituyó la base para el proyecto de resolución pertinente del Ministerio de Salud, que se sometió a consultas públicas con los interlocutores sociales. A este respecto, la Comisión toma nota de que, el 8 de septiembre de 2015, el Ministerio de Salud emitió la resolución sobre las condiciones generales de los contratos para la prestación de servicios de atención de salud, enmendada por la resolución emitida por el Ministerio de Salud el 14 de octubre de 2015, que aseguraba fondos adicionales para los servicios prestados por las enfermeras y parteras. El Gobierno señala que la nueva resolución prevé un incremento anual de la remuneración mensual promedio de las enfermeras y parteras de 400 zlotis polacos brutos al año (4x400). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual las normas sólo se aplican a las enfermeras y parteras empleadas por entidades que han concluido contratos con la Caja Nacional de Salud. La OPZZ alega que la resolución de 8 de septiembre de 2015 discrimina a otros trabajadores del sector de la atención de salud, ya que prevé incrementos anuales únicamente del salario de las enfermeras y parteras, omitiendo a otros profesionales del sector de la salud. Añade que la asignación de fondos con miras al incremento de los salarios de las enfermeras y parteras está llevándose a cabo conformemente a lo acordado con los sindicatos que representan a las enfermeras y parteras que prestan servicios en las instalaciones de proveedores de servicios de atención de salud, por lo que se omite a muchas enfermeras y parteras que prestan servicios en otros entornos. En su respuesta, el Gobierno indica que la resolución de 8 de septiembre de 2015, no discrimina a otros grupos

profesionales en el sector de la atención de salud o a los sindicatos asociados en organizaciones representadas a nivel nacional, porque estas organizaciones pueden someter cuestiones de gran importancia social y económica al Consejo de Diálogo Social, y expresar sus opiniones e iniciar negociaciones con respecto a un acuerdo con un alcance objetivo y subjetivo concreto. La OPZZ señala asimismo que, desde 2015, los fondos asignados para aumentar los salarios de las enfermeras y parteras se extraen de los fondos asignados por la Caja Nacional de Salud para los servicios de atención de salud a los pacientes. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa a la ley de 8 de junio de 2017, sobre la manera de definir el salario básico más bajo de los trabajadores de la profesión médica empleados en instalaciones médicas, incluidas las enfermeras y parteras. En virtud de la ley, el 1.º de julio de 2017, el salario básico más bajo de un trabajador que practica una profesión médica, incluidas las enfermeras y parteras, se incrementó por lo menos un 10 por ciento de la diferencia entre el salario básico más bajo y la remuneración básica del trabajador. El Gobierno señala que el 1.º de julio de 2018 tuvo lugar un aumento adicional del salario básico más bajo. **La Comisión pide al Gobierno que suministre información actualizada sobre las medidas adoptadas con el fin de asegurar que se proporcione al personal de enfermería unas condiciones de empleo y de trabajo, en particular en relación con las perspectivas de carrera y la remuneración, que alienten a las personas a ejercer la profesión de enfermería y que las retengan en dicha profesión.**

Uruguay

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) (ratificación: 2012)

Artículo 17, párrafos 2 y 3, del Convenio. Inspección del trabajo y sanciones. Acceso al domicilio del hogar. La Comisión toma nota con **interés** de la detallada información comunicada por el Gobierno en relación con las medidas implementadas relativas a la inspección del trabajo en el sector del trabajo doméstico. El Gobierno informa de que la metodología empleada por la inspección en este sector se basa en: denuncias concretas, actuaciones de oficio, operativos que se orientan a la cobertura de amplios sectores de trabajadores en un determinado momento y fiscalizaciones articuladas con enfoque integral (intervienen otros organismos competentes en materias conexas, por ejemplo, respecto a trabajadores migrantes, trabajo adolescente o trata de personas con fines laborales). El Gobierno indica que en el supuesto de denuncia, existe un protocolo, de acuerdo al cual cuando se realiza una denuncia por presunto trabajo doméstico informal, automáticamente se visita el hogar denunciado, así como otros hogares de la zona. De esta manera, se consigue un doble objetivo, realizar inspecciones en un mayor número de hogares y no exponer al denunciante. El Gobierno informa también que, desde 2013, se ha incrementado el número de denuncias recibidas y de que se está diseñando un esquema especial para detectar el trabajo doméstico extranjero. Asimismo, la Comisión toma nota de la información incluida en el informe de fiscalización en el trabajo doméstico durante el periodo 2010-2016, proporcionado por el Gobierno. Dicho informe destaca un crecimiento cualitativo de las inspecciones efectuadas en el sector a través de la adopción de medidas, tales como el reforzamiento de la capacitación del cuerpo inspectivo respecto a la legislación relativa al sector del trabajo doméstico. Según el citado informe, gran parte de los incumplimientos identificados durante las inspecciones se referían a infracciones relativas al salario y situaciones de vulnerabilidad laboral de trabajadoras extranjeras originarias en su mayoría del Perú, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Brasil. Por último, el Gobierno indica que ha recibido solicitudes de otros países de América Latina para compartir conocimientos acerca de las buenas prácticas realizadas en la fiscalización del sector del trabajo doméstico. **La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o previstas relativas a la inspección del trabajo que presenten debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, y que tomen en consideración la presencia de trabajadores extranjeros. Solicita también al Gobierno que proporcione información sobre el número de inspecciones en el sector, el número y tipo de infracciones detectadas y las sanciones impuestas.**

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 26 de septiembre de 2018. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 29 de agosto de 2018. **La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.**

Artículos 2, párrafo 2, b), y 5, párrafo 2, del Convenio. Determinación de las condiciones de empleo mediante negociación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que son aplicables al personal de enfermería la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT); la III convención colectiva entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y los institutos autónomos a él adscritos y la Federación de Enfermeras(os) de Venezuela de 2002; las convenciones

colectivas del trabajo adoptadas por reunión normativa Laboral de 2013 y 2015, y el convenio del sector de salud de 2018. La Comisión observa que el Gobierno proporciona una copia de la III Convención Colectiva entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y los Institutos Autónomos a él adscritos y la Federación de Enfermeras(os) de Venezuela de 2002, así como del Convenio del Sector de Salud de 2018, los cuales regulan condiciones tales como las horas de trabajo, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas; y el pago de primas y compensaciones especiales, respectivamente. No obstante, la Comisión toma nota de que las organizaciones de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA afirman que, ante la aprobación de la resolución ejecutiva por la que se impone una tabla salarial única para todos los trabajadores de la administración pública a partir de septiembre de 2018, se dejan sin efecto más del 90 por ciento de las convenciones colectivas celebradas en el sector de la salud, ya que éstas incluyen tablas salariales más ventajosas. Sostienen también que debido a la imposición de la tabla salarial única, se elimina el pago de primas y otros beneficios laborales establecidos en tales convenciones colectivas. La Comisión toma nota asimismo de que la CTASI señala que ha aumentado el personal de enfermería que emigra a otros países en búsqueda de mejores condiciones laborales. **La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas previstas o adoptadas para proporcionar al personal de enfermería las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al personal en la profesión (artículo 2, párrafo 2, b)). Solicita también al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a celebrar negociaciones con las organizaciones de trabajadores y empleadores para determinar las condiciones de empleo y de trabajo del personal de enfermería (artículo 5).**

Artículos 2 y 7. Empleo y seguridad y salud en el trabajo del personal de enfermería. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviara su respuesta en relación con los comentarios formulados por la CTV, en los que señaló que las condiciones de trabajo del personal de enfermería se habían deteriorado al igual que toda la infraestructura del sistema de salud pública del país, en particular en los grandes hospitales urbanos, incluyendo los centros de maternidad y los hospitales infantiles. Asimismo, sostuvo que se han registrado casos de asesinato, acoso y despidos por protestas del personal de enfermería y de los servicios de urgencia, este último víctima regular de crímenes y violencia. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 487 de la LOTTT, recogen el derecho de los trabajadores y trabajadoras a manifestarse en el marco de la ley, el cual ha sido respetado por las autoridades competentes. El Gobierno añade que, a pesar de encontrarse en proceso la discusión de un acta de convenio para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector salud, un grupo de profesionales de enfermería, entre los que se encuentra, la junta directiva del Colegio de Enfermería del distrito capital, incumplieron los acuerdos establecidos en las mesas de discusión en la que participaron gremios con representación legítima y las autoridades establecidas para este fin. El Gobierno indica además que a través de la Misión Barrio Adentro se avanza en el establecimiento de un sistema público nacional de salud integrado y eficiente. El Gobierno informa que, entre 2000 y 2014, se han construido 24 hospitales y se han remodelado 200 áreas quirúrgicas. La Comisión toma nota, sin embargo, que en sus observaciones la CTASI denuncia la falta de dotación de insumos médicos en los centros de salud del país, las precarias condiciones de trabajo en los hospitales (donde se alega que hay falta de suministro de agua y comida), las amenazas sufridas por el personal de enfermería y la falta de salarios justos. Además, la CTASI sostiene que, como consecuencia de las precarias condiciones señaladas, el 25 de junio de 2018 se produjo la paralización de las actividades del personal de enfermería en el sector público. Por último, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 7 de julio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESC) observó con preocupación «la información sobre la crítica situación que enfrenta el sistema de salud (...), debido a la grave escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico y equipos médicos. Asimismo, expresó su preocupación respecto al deterioro en que se encuentran algunos hospitales y la información sobre la falta de personal médico» (documento E/C.12/VEN/CO/3, párrafo 27). **Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, con miras a elaborar y poner en práctica una política de servicios y de personal de enfermería que, en el marco de una programación general de los servicios de salud y dentro de los recursos totales disponibles para los mismos, tenga por objeto prestar tales servicios en la cantidad y calidad necesarias para asegurar a la población el mejor nivel posible de salud (artículo 2). Además, observando que el Gobierno no ha respondido a los comentarios de la CTV relativos a los presuntos casos de asesinato, acoso y despidos por protestas del personal de enfermería y de los servicios de urgencia, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que envíe sus comentarios al respecto (artículo 7).**

Artículo 4. Legislación relativa a las condiciones que deben reunirse para tener derecho al ejercicio de la práctica de la enfermería. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara si habían sido adoptados el reglamento relativo a la aplicación de la Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería (*Gaceta Oficial* núm. 38263, de 1.º de septiembre de 2005) y el reglamento relativo a los honorarios mínimos que percibe el personal de enfermería del sector privado. Al respecto, el Gobierno indica que la fijación de los honorarios mínimos del personal de enfermería se encuentra en proceso de discusión entre la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela y el ente rector en materia de salud con miras a actualizar y adecuar los mismos a la situación actual en el país. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no indica en su memoria si se ha llevado a cabo la adopción del reglamento de aplicación de la Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería. **La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el resultado de las negociaciones celebradas con miras a fijar los honorarios mínimos del personal de enfermería. Además, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique si se ha**

adoptado el reglamento de aplicación de la Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería, y de ser así, que proporcione una copia del mismo.

Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre cómo se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos estadísticos sobre los efectivos del personal de enfermería — desglosado, por sexo, por sector de actividades, niveles de formación y funciones —, sobre la relación proporcional del personal de enfermería/población, sobre el número de personas que se matriculan en las escuelas de enfermería y el número de personas que abandonan la profesión cada año, copias de informes oficiales o de estudios relativos a los servicios de enfermería, así como información sobre toda dificultad práctica encontrada en la aplicación del Convenio, tal como el déficit o la migración del personal de enfermería.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el **Convenio núm. 110** (Filipinas, México, Panamá, Uruguay); el **Convenio núm. 149** (Bélgica, Congo, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Jamaica, Kirguistán, Letonia, Malawi, Malta, República Unida de Tanzania, Tayikistán, Uruguay); el **Convenio núm. 172** (Chipre, República Dominicana, Guyana, Iraq, Libano, México, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Uruguay); el **Convenio núm. 177** (Albania, Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, ex República Yugoslava de Macedonia, Países Bajos, Tayikistán); el **Convenio núm. 189** (Bélgica, Chile, República Dominicana, Finlandia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Sudáfrica, Uruguay).

II. Observaciones acerca de la sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo (artículo 19 de la Constitución)

Afganistán

Falta grave de sumisión. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones.

Albania

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión al Parlamento albanés de los instrumentos restantes adoptados por la Conferencia en su 82.^a reunión (Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947) y 90.^a reunión (Recomendaciones núms. 193 y 194), así como los instrumentos adoptados en sus 78.^a, 84.^a, 86.^a, 89.^a, 92.^a, 95.^a (Recomendación núm. 198), 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones.

Angola

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) por Angola se registró el 11 de octubre de 2016. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique la información requerida sobre los 14 instrumentos pendientes de sumisión a la Asamblea Nacional, adoptados en las 91.^a, 92.^a, 94.^a, 95.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones de la Conferencia (2003-2017), así como la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.^a reunión, 1992), el Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (82.^a reunión, 1995) y la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189) (86.^a reunión, 1998).

Antigua y Barbuda

Sumisión al Parlamento. La Comisión recuerda la información comunicada por el Gobierno en abril de 2014, en la que se indica que el Ministro de Trabajo volvió a someter al Gabinete de Antigua y Barbuda, el 11 de marzo de 2014, los instrumentos adoptados por la Conferencia, desde su 83.^a reunión hasta su 101.^a reunión (1996-2012). La Comisión insta firmemente al Gobierno que especifique las fechas en las que se sometieron al Parlamento de Antigua y Barbuda los instrumentos adoptados por la Conferencia desde su 83.^a reunión hasta su 101.^a reunión.

Además, la Comisión solicita una vez al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo

forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, así como de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión. Se solicita también que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión.

Azerbaiyán

Falta grave de sumisión. Al tiempo que la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, en relación con los instrumentos adoptados en las 95.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado una vez más la información solicitada sobre la sumisión a la autoridad competente (Asamblea Nacional). La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en 2016, 2017 y 2018, de que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a su autoridad competente. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que comunique información respecto de la sumisión a la Asamblea Nacional (Milli Mejlis) de la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.ª reunión) y los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª, 89.ª, 90.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones de la Conferencia. **La Comisión recuerda que, desde 2005, ha venido solicitando al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195), e insta firmemente al Gobierno a que comunique, sin más retrasos, esta información. Además, la Comisión solita al Gobierno que comunique información sobre si se sometió a la Asamblea Nacional (Milli Mejlis), y en qué fecha, la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.**

Bahamas

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (el Parlamento) los convenios, las recomendaciones y los protocolos. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 24 instrumentos adoptados por la Conferencia con ocasión de las 14 reuniones celebradas entre 1997 y 2017 (85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones).**

Bahrein

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera que la información suministrada por el Gobierno, en noviembre de 2016, indicando que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), fue sometida a la autoridad competente de acuerdo a la Constitución de Bahrein. Sin embargo, la Comisión toma nota de que no se comunicó información alguna sobre la fecha de sumisión de dicho instrumento a la Asamblea Nacional. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que, de acuerdo con el artículo 47, a), de la Constitución de Bahrein, los convenios internacionales se tienen que someter al Consejo de Ministros, que es el órgano responsable de la formulación de la política pública del Estado y del seguimiento de su aplicación. La Comisión recuerda además que el Gobierno señaló, en septiembre de 2011, que al establecerse la Asamblea Nacional — compuesta por el Consejo Consultivo (*Majlis Al-Shura*) y el Consejo de Representantes (*Majlis Al-Nuwab*) — fue necesario establecer un mecanismo nuevo para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que la OIT brindó su disposición a examinar, junto con las autoridades nacionales, el modo de establecer algún tipo de mecanismo para someter a la Asamblea Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en virtud de la Constitución de la OIT. **La Comisión expresa su firme esperanza, al igual que lo hizo en la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, junio de 2017 y junio de 2018, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, recomendaciones y protocolos a la autoridad competente (Asamblea Nacional). La Comisión insta firmemente, por tanto, al Gobierno a que comunique información completa sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 14 reuniones de la Conferencia celebradas entre 2000 y 2017. La Comisión recuerda una vez más que la asistencia técnica de la OIT a este respecto está a la disposición del Gobierno.**

Bangladesh

Sumisión al Parlamento. La Comisión toma nota con **interés** de la indicación del Gobierno, según la cual se presentaron a la autoridad competente (la Comisión Parlamentaria Permanente al Ministerio de Trabajo y Empleo)

41 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 77.^a, 79.^a, 81.^a, 82.^a, 83.^a, 86.^a, 88.^a, 89.^a, 90.^a, 92.^a, 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a y 104.^a reuniones, y la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) adoptada en su 106.^a reunión. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual se presentó a la Comisión Parlamentaria Permanente, en sus 8.^a, 13.^a, 14.^a, 15.^a y 17.^a reuniones, el contenido de los instrumentos, y se celebró, el 18 de febrero de 2018, la 17.^a reunión. ***La Comisión acoge con agrado los progresos realizados por el Gobierno en el cumplimiento de su obligación constitucional y solicita al Gobierno que comunique información sobre las fechas de las reuniones en las que se efectuaron las sumisiones.***

Belice

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. ***La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y junio de 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (la Asamblea Nacional). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de 41 instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia en las 21 reuniones celebradas entre 1990 y 2017.***

Estado Plurinacional de Bolivia

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera la información transmitida por el Gobierno, indicando que el 26 de abril de 2005 se sometieron al Congreso Nacional los convenios internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2003. Sin embargo, no ha recibido información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de las 13 recomendaciones y de los tres protocolos adoptados por la Conferencia durante dicho período (1990-2003). ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de tres convenios adoptados por la Conferencia desde 2006, al igual que las 22 recomendaciones y los cuatro protocolos pendientes de sumisión.***

Brunei Darussalam

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. ***La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes, en el sentido del artículo 19, 5) y 6), de la Constitución de la OIT, de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a y 104.^a reuniones (2007-2015). La Comisión solicita además que comunique información sobre la sumisión de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.^a reunión.*** La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Burkina Faso

Falta de sumisión. ***La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2010-2017).***

Burundi

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la sumisión a la Asamblea Nacional el 23 de mayo de 2018 de diez instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2006 a 2017: el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y su Recomendación sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199); la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200); el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y su Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011; la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202); el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203); la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), y la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). ***La Comisión acoge con beneplácito los progresos realizados por el Gobierno en cumplimiento de su obligación constitucional e invita al Gobierno a que siga comunicando regularmente información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia.***

República Centroafricana

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).**

Chad

Falta de sumisión. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).**

Chile

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. **Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique la información solicitada sobre la sumisión al Congreso Nacional, precisando la fecha de la sumisión de los 30 instrumentos adoptados en las 16 reuniones de la Conferencia, celebradas entre 1996 y 2015 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198)), 96.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones). Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) a las autoridades competentes, indicando la fecha de la sumisión.**

Comoras

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, junio de 2017 y junio de 2018 la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea de la Unión de Comoras de los 44 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 22 reuniones celebradas entre 1992 y 2017.**

Congo

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda la declaración formulada por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia, en 2011 y 2012, en la que se indicaba que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General del Gobierno convinieron en someter algunos convenios a la Asamblea Nacional cada tres meses, con miras a su ratificación. **La Comisión solicita una vez más al Gobierno que complete el procedimiento de sumisión en relación con 65 convenios, recomendaciones y protocolos, adoptados por la Conferencia durante 31 reuniones desde 1970 a 2017, que aún no han sido sometidos a la Asamblea Nacional.**

Croacia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y junio de 2018, que indica que el Gobierno tomó muy en serio sus obligaciones normativas. Agradeció a la Oficina la asistencia técnica prestada en 2016. **Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión al Parlamento croata de los 22 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 13 reuniones celebradas entre 1998 y 2017 (86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones).**

República Democrática del Congo

Falta de sumisión. **La Comisión solicita al Gobierno que comunique la información pertinente sobre los ocho instrumentos pendientes de sumisión al Parlamento, adoptados desde la 99.ª reunión (2010) hasta la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia.**

Dominica

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota una vez más con **preocupación** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta

importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Cámara de la Asamblea de los 42 instrumentos adoptados por la Conferencia durante las 21 reuniones celebradas entre 1993, 2015 y 2017 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones).* La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

El Salvador

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por una representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia, en junio de 2018, indicando que el país agradece la cooperación técnica suministrada por la OIT para la preparación del protocolo de procedimientos institucionales para la sumisión de los instrumentos de la OIT. Señaló que el Gobierno se dispone a tomar las primeras medidas para someter a la autoridad competente los convenios y las recomendaciones pertinentes. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a someter a la Asamblea Legislativa los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 23 reuniones celebradas entre octubre de 1976 y junio de 2017. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión de los instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia en sus 63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157), 67.ª (Convenio núm. 154 y Recomendación núm. 163), 69.ª (Recomendación núm. 167) y 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194) reuniones.*

Emiratos Árabes Unidos

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha dado una respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión. *Por ello, la Comisión pide una vez más al Gobierno que concluya el procedimiento de sumisión y proporcione información sobre la presentación a las autoridades nacionales competentes del MLC, 2006 (94.ª reunión, febrero de 2006), del Convenio núm. 189 y de las Recomendaciones núms. 200, 201 y 202, adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2010-2012). También pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, sobre la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, así como sobre la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión.*

Eswatini

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, que indica que está preparando la sumisión de los instrumentos pendientes a la Cámara de la Asamblea y que informará a la Comisión del progreso realizado al respecto. *La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Cámara de la Asamblea de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª, así como información sobre la sumisión de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada en la 106.ª reunión de la Conferencia.*

Ex República Yugoslava de Macedonia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con *preocupación* de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. *La Comisión solicita al Gobierno que comunique la información pertinente acerca de la sumisión a la Asamblea de la República (Sobranie) de 27 instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) adoptados por la Conferencia, de octubre de 1996 a junio de 2017.*

Fiji

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en septiembre de 2017 en la que señala que, desde 2006 hasta septiembre de 2013, la autoridad competente en Fiji fue el Gabinete de Ministros. El Gobierno señala además que la autoridad competente en la actualidad es el Parlamento de Fiji. La Comisión se remite a los comentarios que ha venido formulando desde 2012, en los que ha señalado que el Gobierno sólo podrá someter los instrumentos adoptados por la Conferencia después de que se establezca un Parlamento. *La Comisión expresa*

la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (Parlamento), los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados. La Comisión pide, por tanto, al Gobierno que facilite información sobre la sumisión al Parlamento de los 22 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 83.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (1996-2017).

Gabón

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a proporcionar información sobre la sumisión al Parlamento de los 25 convenios, recomendaciones y protocolos adoptados en las 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones de la Conferencia.*

Gambia

Falta de sumisión. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. *La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).*

Granada

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. *La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e insta firmemente de nuevo al Gobierno a que comunique la fecha de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1994 y 2006, así como las decisiones adoptadas por el Parlamento de Granada en relación con los instrumentos sometidos. Asimismo, la Comisión reitera su pedido al Gobierno de que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de Granada de los instrumentos adoptados en las 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones de la Conferencia (2007-2017).*

Guinea

Sumisión a la Asamblea Nacional. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione información relativa a la sumisión a la Asamblea Nacional de los 29 instrumentos adoptados en las 16 reuniones celebradas por la Conferencia entre octubre de 1996 y junio de 2017 (84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones).*

Guinea-Bissau

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional del Pueblo de los 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2001-2017).*

Guinea Ecuatorial

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir información sobre la sumisión al Parlamento de los 35 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2017.*

Guyana

Sumisión al Parlamento. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. **La Comisión pide de nuevo al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Guyana de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª, 104 y 106.ª reuniones.**

Haití

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, de que el Gobierno dará cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (la Asamblea Nacional). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los siguientes instrumentos:**

- a) los restantes instrumentos de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155, y Recomendaciones núms. 163 y 164);
- b) los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;
- c) los restantes instrumentos adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y Recomendaciones núms. 175 y 176), y
- d) los instrumentos adoptados en las 25 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1989 y 2017.

Hungría

Falta de sumisión. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).**

República Islámica del Irán

Falta de sumisión a la Asamblea Consultiva Islámica. **La Comisión solicita al Gobierno que indique la fecha de la sumisión a la Asamblea Consultiva Islámica del Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (90.ª reunión, junio de 2002) y de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).**

Islas Marshall

Falta de sumisión. La Comisión recuerda que, el 3 de julio de 2007, las Islas Marshall se convirtieron en Miembro de la Organización. De conformidad con el artículo 19, 5), a), y 6), a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno el texto del Convenio, las Recomendaciones y el Protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015). **La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre la sumisión al Parlamento de los siete instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2010 y 2015, así como sobre la sumisión de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión.** La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT relativas a la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes.

Islas Salomón

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota una vez más con **profunda preocupación** de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento Nacional). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1984 y 2017. Se insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin dilación, medidas para someter al Parlamento Nacional los 62 instrumentos pendientes.**

Kazajstán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. **En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud una vez más al Gobierno que comunique información sobre la fecha de sumisión al Parlamento de la Recomendación núm. 204. Además, la Comisión solicita nuevamente al**

Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 34 instrumentos restantes adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2017, incluida la fecha de sumisión y toda medida adoptada por el Parlamento respecto de la sumisión de estos instrumentos.

Kirguistán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que, una vez más, el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera que la información comunicada por el Gobierno, en noviembre de 2016, en relación con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), incluyendo sobre la economía informal en Kirguistán. La Comisión tomó nota, no obstante, de que el Gobierno no ha transmitido ninguna información sobre la sumisión. La Comisión se refiere una vez más a los comentarios que ha venido formulando desde 1994 y reitera que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, todos los Miembros se comprometen a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes compete la materia para que le den forma de ley o adopten otra medida. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. ***Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la autoridad nacional competente de los 42 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 21 reuniones celebradas entre 1992 y 2017. La Comisión recuerda al Gobierno que tiene a su disposición la asistencia técnica de la OIT para superar esta grave demora.***

Kiribati

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Toma nota de que un representante del Gobierno indicó, ante la Conferencia, que la OIT ha prestado asistencia técnica al Gobierno, y que se espera que en un próximo futuro, el Gobierno estará en posición de cumplir con sus obligaciones constitucionales. ***La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y 2018, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 21 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 12 reuniones celebradas entre 2000 y 2017 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones).***

Kuwait

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado una vez más la información solicitada sobre la sumisión a la autoridad competente (la Asamblea Nacional). La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en 2016, 2017 y 2018, de que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de someter a la Asamblea Nacional los convenios, las recomendaciones y los protocolos. ***En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah) de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones. También se refiere a sus comentarios anteriores y solicita una vez más al Gobierno que especifique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 77.ª (Convenios núms. 170 y 171, Recomendaciones núms. 177 y 178, y el Protocolo de 1990), 80.ª (Recomendación núm. 181), 86.ª (Recomendación núm. 189) y 89.ª (Convenio núm. 184 y Recomendación núm. 192) reuniones de la Conferencia. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para someter a la Asamblea Nacional la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada en la 106.ª reunión de la CIT.***

Lesotho

Falta de sumisión. La Comisión toma nota con ***preocupación*** de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. ***La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional y al Senado de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).***

Líbano

Falta de sumisión. La Comisión reitera la información comunicada por el Gobierno en febrero de 2016, en la que señala que el Ministerio de Trabajo ha sometido a la consideración del Consejo de Ministros la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), y que el Consejo de Ministros ha decidido establecer una comisión especial para examinar dicha Recomendación. ***La Comisión se remite a sus comentarios***

anteriores y una vez más pide al Gobierno que señale la fecha en la que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a y 104.^a reuniones (2010-2015) fueron sometidos a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Nuwwab). La Comisión pide además que el Gobierno proporcione información sobre la sumisión ante la Asamblea Nacional de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) adoptada en la 106.^a reunión de la Constitución.

Liberia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Nacional de los 23 convenios, recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2017, así como de los Protocolos de 1990 y 1995.*

Libia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, 2017 y 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a las autoridades competentes. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes (en el sentido del artículo 19, 5) y 6), de la Constitución de la OIT) de los 35 convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia en 18 reuniones celebradas entre 1996 y 2017.*

Malasia

Falta grave de sumisión. La Comisión *lamenta* tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. *La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Malasia de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.^a (Recomendación núm. 198), 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2006-2017).*

Malawi

Falta de sumisión. *La Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión y los datos de sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2010-2017).*

República de Maldivas

Falta de sumisión. La Comisión toma nota con *preocupación* de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que la República de Maldivas se convirtió en Miembro de la Organización el 15 de mayo de 2009. Posteriormente, con arreglo al artículo 19, 5), a), y 6), a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno el texto del Convenio, las recomendaciones y el protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a y 104.^a reuniones. *La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión (especificando las fechas de la sumisión) al Majlis del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a y 104.^a reuniones (2010-2015). Asimismo, solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Majlis del pueblo de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) adoptada en la 106.^a reunión de la Conferencia.* La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia al Majlis del Pueblo.

Malí

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha sometido los instrumentos adoptados durante la 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones de la Conferencia (2011-2017). *La Comisión felicita al Gobierno por los progresos realizados en lo que respecta a cumplir con sus obligaciones en materia de sumisión, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT.*

Malta

Falta grave de sumisión. La Comisión **lamenta** tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. **La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comuniquen información sobre la sumisión a la Cámara de Representantes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2007-2017).**

México

Sumisión al Senado. **La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión al Senado de la República de los instrumentos adoptados en las 95.ª, 96.ª, 100.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones de la Conferencia.**

República de Moldova

Sumisión al Parlamento. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. **La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 106.ª reuniones.**

Mozambique

Sumisión a la Asamblea de la República. La Comisión toma nota con **interés** de la ratificación, el 14 de junio de 2018, del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), y del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y del Protocolo de 1995 sobre la inspección del trabajo, 1947. **La Comisión pide al Gobierno que comuniquen información sobre la sumisión a la Asamblea de la República de los 33 instrumentos adoptados por la Conferencia en 16 reuniones celebradas entre 1996 y 2014. La Comisión también pide al Gobierno especificar la fecha de la sumisión a la Asamblea de la República del Convenio núm. 129 y comunicar información sobre la sumisión de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) a la Asamblea de la República.**

Pakistán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información suministrada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2018, en la que indicó que, gracias a la asistencia técnica de la OIT, el proceso de presentar 36 instrumentos pendientes de sumisión se había completado. Añadió que el informe pertinente sería comunicado al ministerio competente a su debido tiempo, y remitido con posterioridad al gabinete. **La Comisión manifiesta la firme esperanza, al igual que lo hizo en la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados, e informará a la OIT a este respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que finalice el procedimiento a fin de poder someter a las autoridades nacionales competentes los 39 instrumentos adoptados por la Conferencia en 19 reuniones celebradas entre 1994 y 2017.**

Papua Nueva Guinea

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que someta al Parlamento Nacional los 23 instrumentos adoptados por la Conferencia, en 14 reuniones celebradas entre 2000 y 2017.**

Rwanda

Falta grave de sumisión. **La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien proporcionar también información sobre la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los 36 convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia en 19 reuniones celebradas entre 1993 y 2017 (80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones.**

Saint Kitts y Nevis

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta

importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. La Comisión recuerda asimismo que la autoridad nacional competente debería ser normalmente el Poder Legislativo, es decir, en el caso de Saint Kitts y Nevis, la Asamblea Nacional. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y en junio de 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de 27 instrumentos adoptados por la Conferencia en 16 reuniones celebradas entre 1996 y 2017 (83.^a, 85.^a, 86.^a, 88.^a, 89.^a, 90.^a, 91.^a, 92.^a, 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones).*

Samoa

Falta grave de sumisión. La Comisión acoge con agrado la información comunicada por el Gobierno, en la que se indica que se dio inicio al proceso de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2006-2017). *En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la fecha de sumisión de los mencionados instrumentos a la Asamblea Legislativa y las medidas adoptadas en consecuencia, si las hubiere.*

Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión acoge con agrado la información comunicada por el Gobierno sobre las consultas con los interlocutores sociales en el Foro Tripartito Nacional de Samoa (SNTF), en cuatro ocasiones en 2017, acerca de la sumisión a la Asamblea Legislativa de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2006-2017). La Comisión toma nota con *interés* de la recomendación del SNTF de que se consideren para su ratificación el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). *La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados de las consultas tripartitas en relación con las sumisiones.*

San Vicente y las Granadinas

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con *preocupación* de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 y en junio de 2018, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (la Asamblea), los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados. La Comisión insta firmemente, por lo tanto, al Gobierno que facilite información sobre la sumisión a la Asamblea de los 29 instrumentos adoptados (convenios, recomendaciones y protocolos) por la Conferencia en 16 reuniones celebradas entre 1995 y 2017 (82.^a, 83.^a, 85.^a, 88.^a, 89.^a, 90.^a, 91.^a, 92.^a, 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones).*

Santa Lucía

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con *preocupación* de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a proporcionar información sobre la sumisión al Parlamento de los convenios, recomendaciones y protocolos pendientes de sumisión adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2017 (66.^a, 67.^a (Convenios núms. 155 y 156 y Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.^a (Convenio núm. 157 y Protocolo de 1982), 69.^a, 70.^a, 71.^a, 72.^a, 74.^a, 75.^a, 76.^a, 77.^a, 78.^a, 79.^a, 80.^a, 81.^a, 82.^a, 83.^a, 84.^a, 85.^a, 86.^a, 88.^a, 89.^a, 90.^a, 91.^a, 92.^a, 94.^a, 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones).*

Seychelles

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios precedentes. *Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información actualizada sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en 12 reuniones celebradas de 2001 a 2017.*

Sierra Leona

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con *profunda preocupación* de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. *Al igual que la Comisión de la*

Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en octubre de 1976 (Convenio núm. 146 y Recomendación núm. 154, adoptados en su 62.ª reunión) y de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1977 y 2017. Se insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin dilación, medidas para someter al Parlamento los 99 instrumentos pendientes.

República Árabe Siria

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda las indicaciones del Gobierno, en septiembre de 2015, de que el Consejo Consultivo para la Consulta y el Diálogo Social celebró discusiones relacionadas con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes. La Comisión recuerda asimismo que 38 instrumentos adoptados por la Conferencia siguen pendientes de sumisión al Consejo del Pueblo. **La Comisión espera que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el Gobierno esté en posición de proporcionar información sobre la presentación al Consejo del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 66.ª y 69.ª reuniones (Recomendaciones núms. 167 y 168) y en sus 70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª y 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194), 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones.**

Somalia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y junio de 2017, indicando que el Gobierno reconocía que los instrumentos adoptados por la Conferencia no se habían sometido a la autoridad nacional competente. La representante también señaló que el prolongado período de guerra civil y de inseguridad que había atravesado el país había repercutido en el incumplimiento, pero que la situación estaba mejorando. Pidió asistencia técnica para que el Gobierno pueda cumplir con sus obligaciones de envío de memorias y se mostró optimista en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones constitucionales en un futuro muy próximo. **Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión a la autoridad nacional competente de los 52 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1989 y 2017.**

Timor-Leste

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. **Por lo tanto, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, 104.ª y 106.ª reuniones (2010-2017).**

Tuvalu

Falta de sumisión. La Comisión toma nota una vez más con **preocupación** de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que, el 27 de mayo de 2008, Tuvalu se convirtió en Miembro de la Organización. De conformidad con el artículo 19, 5), a), y 6), a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno el texto del convenio, de las recomendaciones y del protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª, y 104.ª reuniones (2010-2015). **La Comisión confía en que el Gobierno esté pronto en posición de proporcionar información sobre la sumisión a las autoridades competentes de los ocho instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2010 y 2017.** La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, para que le ayude a cumplir sus obligaciones dimanantes del artículo 19 de la Constitución de la OIT relativas a la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes.

Vanuatu

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con **preocupación** de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que la obligación constitucional de sumisión es de la más alta importancia y constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. **La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016, en junio de 2017 y en junio de 2018, de que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento de Vanuatu). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los instrumentos adoptados por la**

Conferencia en 11 reuniones celebradas entre 2003 y 2015 (91.^a, 92.^a, 94.^a, 95.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones). La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Yemen

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno a la Conferencia en junio de 2018, indicando que no había logrado someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Cámara de Representantes, debido al conflicto persistente en el país. **Tomando nota de la compleja situación en el país, en particular el conflicto persistente, la Comisión confía en que, cuando lo permitan las circunstancias del país, el Gobierno estará en condiciones de comunicar información sobre la sumisión a la Cámara de Representantes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 90.^a, 94.^a, 96.^a, 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones, así como la sumisión de las Recomendaciones núms. 191, 192 y 198, adoptadas por la Conferencia en sus 88.^a, 89.^a y 95.^a reuniones.**

Zambia

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno una vez más no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda la información comunicada por el Gobierno, en septiembre de 2010, que indica que se sometieron a la Asamblea Nacional 12 instrumentos adoptados por la Conferencia, de 1996 a 2007. **Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique la fecha en la que se sometieron a la Asamblea Nacional los mencionados instrumentos. También solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada por la Asamblea Nacional en relación con la sumisión, así como las consultas tripartitas que tuvieron lugar con los interlocutores sociales antes de la sumisión. Además, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.^a, 100.^a, 101.^a, 103.^a, 104.^a y 106.^a reuniones (2010-2017).**

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, Côte d'Ivoire, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Honduras, Irlanda, Islas Cook, Italia, Jamaica, Jordania, Kenya, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Omán, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Federación de Rusia, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam.



Anexos

Anexo I. Cuadro de las memorias registradas sobre convenios ratificados al 8 de diciembre de 2018

(artículos 22 y 35 de la Constitución)

El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que «cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite». El artículo 23 de la Constitución prescribe que el Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las memorias que le hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada Estado Miembro enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

En su 204.^a reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las siguientes disposiciones relativas a la presentación por el Director General a la Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución:

- a) la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de cuadros las memorias posteriores a las primeras presentadas después de la ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas las memorias, incluidas las primeras memorias;
- b) el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los pueda consultar, los textos originales de todas las memorias sobre los convenios ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse fotocopias de estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.

En su 267.^a reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación.

Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución figuran de manera simplificada, en un cuadro anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras memorias aparecen entre paréntesis.

Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse al secretariado de la Comisión de Aplicación de Normas.

Anexo I. Memorias solicitadas sobre los convenios ratificados

(artículos 22 y 35 de la Constitución)

Lista de memorias registradas al 8 de diciembre de 2018 y de memorias no recibidas*Nota: Las primeras memorias figuran entre paréntesis.***Afganistán****5 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111, 137, 140, 142

Albania**18 memorias solicitadas**

- 11 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 97, 102, 105, 122, 138, 143, 168, 176, 181, 182
- 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 177, 185, (MLC, 2006)

Alemania**10 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 140, 142, 144, 152, 172, 182, 189

Angola**11 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 19, 26, 27, 107, 111
- 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 18, 81, 100, (188)

Antigua y Barbuda**4 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 81, 100, 111, 142

Argelia**10 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 32, 42, 44, 81, 87, 100, 111, 142, (MLC, 2006)

Argentina**11 memorias solicitadas**

- 10 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 100, (102), 111, 129, 142, 169, (188), 189
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. 177

Armenia**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 174, 176

Australia**4 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 142

Austria**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 142, 172

Azerbaiyán**9 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, (132), 140, 142, 149, 185

Bahamas**15 memorias solicitadas**

- 13 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 42, 81, 97, 100, 105, 111, 117, 138, 182
- 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 185, MLC, 2006

Bahrein**2 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 111

Bangladesh**6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 107, 111, 149, 185

Barbados	18 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 42, 81, 95, 97, 98, 100, 102, 105, 111, 118, 122, 128, 138, 172	
Belarús	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 100, 111, 142, 149	
Bélgica	12 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 82, 100, 107, 111, 129, 140, 149, (167), (175), 177, 189	
Belice	31 memorias solicitadas
· 16 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 26, 42, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 108, 135, 141, 144, 151, (MLC, 2006)	
· 15 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 29, 88, 97, 100, 105, 111, 115, 138, 140, 150, 154, 155, 156, 182	
Benin	4 memorias solicitadas
· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 100, 111	
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 11	
Bolivia, Estado Plurinacional de	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 117, 129, 131, 138, 169, 189	
Bosnia y Herzegovina	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 140, 142, 177, 185, (188)	
Botswana	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182	
Brasil	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 98, 100, 111, 117, 140, 142, 169, 185	
Brunei Darussalam	2 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 138, 182	
Bulgaria	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 177	
Burkina Faso	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 142, (187)	
Burundi	11 memorias solicitadas
· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 17, 26, 27, 42, 81, 100, 105, 138, 182	
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 111	
Cabo Verde	8 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 19, 81, 100, 111, 118, 138, (MLC, 2006)	
Camboya	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 105, 111, 122	
Camerún	5 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 100, 111, 122	
Canadá	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, (138)	

Centroafricana, República	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 117, 142, 169	
Chad	14 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 11, 29, 81, 98, 100, (102), 105, 111, (122), 138, 144, 151, 182	
Checa, República	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 140, 142	
Chile	5 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, 140, 169, 189	
China	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, (MLC, 2006)	
China - Región Administrativa Especial de Hong Kong	2 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 142	
China - Región Administrativa Especial de Macao	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111	
Chipre	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 142, (170), 172	
Colombia	13 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 81, 95, 99, 100, 111, 129, 136, 162, 169, 170, 174, 189	
Comoras	15 memorias solicitadas
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 17, 42, 52, (144)	
· 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 11, 13, 14, 81, 89, 100, 101, 106, 111	
Congo	13 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 81, 87, 100, 105, 111, 149, 150, 152, 182, (185), (MLC, 2006), (188)	
Corea, República de	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 138, 142, 144, 182, 185	
Costa Rica	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 117, 129, 169, 189	
Côte d'Ivoire	15 memorias solicitadas
· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 18, 19, 29, 81, 105, 110, 111, 129	
· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, (150), (155), (160), (161), (171), (187)	
Croacia	13 memorias solicitadas
· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 102, 106, 111, 121, 129, 156, 182	
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 32, 185	
Cuba	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 107, 110, 111, 140, 142	
Democrática del Congo, República	22 memorias solicitadas
· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 87, 98, 102, 118, 121, 135	
· 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 27, 81, 94, 95, 100, 111, 117, 119, 120, 144, 150, 158	

Dinamarca	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 142, 149, 169	
Dinamarca - Groenlandia	2 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. (98), 169	
Dinamarca - Islas Feroe	1 memoria solicitada
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. (108)	
Djibouti	15 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 12, 17, 18, 19, 24, 29, 37, 38, 81, 100, 105, 111, 122, 138, 182	
Dominica	26 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 105, 108, 111, 135, 138, 144, 147, 150, 169, 182	
Dominicana, República	8 memorias solicitadas
· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 100, 107, 111, 172, (183), 189	
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (102)	
Ecuador	10 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 98, 100, 110, 111, 117, 142, 149, 169, 189	
Egipto	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 100, 105, 107, 111, 129, 142, 149	
El Salvador	11 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 100, 107, 111, 129, 138, 142, 144, 149, 182	
Eritrea	7 memorias solicitadas
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 111	
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 105, 138	
Eslovaquia	5 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 140, 142	
Eslovenia	12 memorias solicitadas
· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 95, 98, 100, 111, 122, 140, 143, 149, 173	
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 142, (MLC, 2006)	
España	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 140, 142, 169, 172, 185	
Estonia	12 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 81, 100, 105, 111, 122, 129, 138, 182, (MLC, 2006), (188)	
Eswatini	2 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98	
Etiopía	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, 181	

Ex República Yugoslava de Macedonia**16 memorias solicitadas**

- 10 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 32, 90, 94, 97, 100, 111, 131, 143, 144
- 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98, 122, 140, 142, 177

Fiji**11 memorias solicitadas**

- 8 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 142, 149, 169, 172
- 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19

Filipinas**7 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 110, 122, 149, 185, 189

Finlandia**10 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 129, 140, 142, 149, 177, MLC, 2006, 189

Francia**13 memorias solicitadas**

- 11 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 97, 100, 106, 111, 129, 137, 140, 142, 185, (188)
- 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 82, 149

Francia - Nueva Caledonia**8 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 82, 100, 111, 129, 142, 149, MLC, 2006

Francia - Polinesia Francesa**10 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 81, 82, 100, 111, 125, 126, 129, 142, 149

Francia - Tierras australes y antárticas francesas**1 memoria solicitada**

- No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. 111

Gabón**7 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, (161), 182
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. (MLC, 2006)

Gambia**8 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Georgia**8 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 100, 105, 117, 138, 142, 182, 185

Ghana**8 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 107, 117, 138, 144, 149, 182

Granada**11 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 12, 19, 29, 81, 87, 97, 98, 105, 138, 144, 182

Grecia**11 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 87, 98, 105, 138, 144, 149, 182, MLC, 2006

- 1 memoria no recibida: Convenio núm. 142

Guatemala**10 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 105, 110, 117, 138, 144, 149, 169, 182

Guinea**15 memorias solicitadas**

- 7 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 45, 105, 138, 142, 144, 182
- 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 114, 117, 118, 121, 135, 140, 149, 151

Guinea-Bissau**25 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 12, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 45, 68, 69, 73, 74, 81, 88, 91, 92, 98, 100, 105, 107, 108, 111, 138, 182

Guinea Ecuatorial**14 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 14, 29, 30, (68), 87, (92), 98, 100, 103, 105, 111, 138, 182

Guyana**17 memorias solicitadas**

- 8 memorias recibidas: Convenios núms. 19, 29, 42, 98, 142, 166, 182, (189)
- 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 94, 97, 105, 138, 139, 140, 144, 149, 172

Haití**24 memorias solicitadas**

- 4 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 14, 30, 106
- 20 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 25, 29, 42, 45, 77, 78, 81, 87, 90, 98, 100, 105, 107, 111, 138, 182

Honduras**8 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 105, 138, 144, 169, 182, (MLC, 2006)

Hungría**9 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 138, 140, 142, 144, 182, 185, MLC, 2006

India**8 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 105, 107, 141, 142, 144, 185

Indonesia**6 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182, 185

Irán, República Islámica del**4 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 142, 182

Iraq**22 memorias solicitadas**

- 15 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 19, 29, 77, 78, 105, 107, 138, 140, 142, 144, 167, 172, 182, (187)
- 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 22, 23, 92, 146, 147, 149

Irlanda**14 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 32, 81, 87, 98, 105, 138, 142, 144, 172, 177, 182, 189

Islandia**5 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182

Islas Cook**5 memorias solicitadas**

- Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. (11), (14), (29), (99), (105)

Islas Marshall**1 memoria solicitada**

- Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 185

Islas Salomón**18 memorias solicitadas**

- 15 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 16, 19, 26, 29, 81, 87, 94, 98, 100, 105, 108, 111, 138
- 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 42, 95, 182

Israel**7 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 117, 138, 142, 144, 182

Italia**14 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 97, 105, 117, 129, 138, 142, 143, 144, 149, 182, MLC, 2006, 189

Jamaica**14 memorias solicitadas**

- 4 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 19, 87, 98
- 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 94, 97, 105, 117, 138, 144, 149, 182, (189)

Japón**7 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 138, 142, 144, 182
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006

Jordania**9 memorias solicitadas**

- 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 117, 138, 144, 182
- 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 105, 142, 185, (MLC, 2006)

Kazajstán**7 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 138, 144, 182, 185
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. 105

Kenya**10 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 97, 105, 138, 144, 149
- 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 140, 142, 143, 182

Kirguistán**32 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 17, 27, 29, 32, 45, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 100, 105, 111, 119, 120, 122, 124, 131, 138, 142, 144, 149, 154, 157, 159, 160, 182

Kiribati**9 memorias solicitadas**

- 2 memorias recibidas: Convenios núms. 98, 111
- 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 138, 182, (185)

Kuwait**6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 117, 138, 144, 182

Lao, República Democrática Popular**6 memorias solicitadas**

- 2 memorias recibidas: Convenios núms. 111, 182
- 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 29, 138, 144

Lesotho**6 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 135, 138, 144, 182

Letonia**7 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 142, 144, 149, 182

Líbano**8 memorias solicitadas**

- 1 memoria recibida: Convenio núm. 100
- 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 81, 105, 138, 142, 172, 182

Liberia	9 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 4 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 111, 144, 182 · 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, MLC, 2006 	
Libia	15 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 12 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 87, 95, 98, 102, 105, 118, 121, 122, 131, 182 · 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 53, 130, 138 	
Lituania	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 142, 144, 149, 182, MLC, 2006, (188)	
Luxemburgo	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 142, 149, 172, 182, 185, MLC, 2006	
Madagascar	17 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 10 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 26, 81, 88, 95, 97, 124, 129, 159, 173 · 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 105, 117, 138, 144, 182, 185 	
Malasia	10 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 98, (131), 138, 182 · 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 95, 100, 123, 144 	
Malasia - Malasia - Peninsular	4 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 1 memoria recibida: Convenio núm. 19 · 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17 	
Malasia - Malasia - Sabah	3 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 94, 97 	
Malasia - Malasia - Sarawak	5 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 1 memoria recibida: Convenio núm. 19 · 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 16, 94 	
Malawi	18 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 138 · 14 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 45, 81, 97, 99, 105, 107, 129, 144, 149, 150, 158, 159, 182 	
Maldivas, República de	7 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, (100), 105, 138, 182, (185), (MLC, 2006) 	
Malí	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, (88), 105, (122), 138, 144, (155), (181), 182	
Malta	7 memorias solicitadas
<ul style="list-style-type: none"> · No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 117, 138, 149, 182, MLC, 2006 	
Marruecos	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182, (188)	
Mauricio	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182, 189	

Mauritania**5 memorias solicitadas**

- No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 100, 105, 138, 182

México**11 memorias solicitadas**

- 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, (138), 169, 182
- 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 105, 110, 140, 142, 144, 172

Moldova, República de**13 memorias solicitadas**

- 2 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 129
- 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 92, 105, 117, 133, 138, 142, 144, 152, 182, 185

Mongolia**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182

Montenegro**9 memorias solicitadas**

- 8 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 140, 142, 144, (171), 182
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)

Mozambique**8 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 87, 98, 105, 138, 144, 182

Myanmar**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 87, 182, (MLC, 2006)

Namibia**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182

Nepal**8 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 98, 105, 131, 138, 144, 169, 182

Nicaragua**18 memorias solicitadas**

- 10 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 110, 117, 138, 140, 142, 144, 169, 182, 189
- 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 17, 77, 78, 95, 105, 137, (MLC, 2006)

Níger**6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 117, 138, 142, 182

Nigeria**13 memorias solicitadas**

- 12 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 26, 29, 45, 94, 98, 100, 105, 137, 138, 144, 182
- 1 memoria no recibida: Convenio núm. 185

Noruega**12 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 29, 105, 118, 138, 142, 144, 149, 169, 182, (188)

Nueva Zelandia**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 82, 105, 144, 182

Nueva Zelandia - Tokelau**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 82, 105

Países Bajos**9 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 140, 142, 144, 169, 177, 182

Países Bajos - Aruba**16 memorias solicitadas**

- 6 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 90, 95, 122, 131
- 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 94, 105, 113, 114, 138, 140, 142, 144, 182

Países Bajos - Caribe parte de los Países Bajos	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 172	
Países Bajos - Curazao	14 memorias solicitadas
· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 10, 29, 33, 81, 87, 90, 94, 95, 105, 144, (151), 172	
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. (182), (MLC, 2006)	
Países Bajos - Sint Maarten	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 144, 172	
Pakistán	11 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 81, 87, 90, 98, 100, 107, 111, 144, 185	
Palau	1 memoria solicitada
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. MLC, 2006	
Panamá	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 107, 110, 117, 122, 189	
Papua Nueva Guinea	12 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 26, 27, 87, 98, 99, 100, 105, 111, 122, 138, 158, 182	
Paraguay	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 123, 169, 189	
Perú	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 159, 169, (183)	
Polonia	6 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 140, 142, 149	
Portugal	8 memorias solicitadas
· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 142, 149	
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. (MLC, 2006), 189	
Qatar	1 memoria solicitada
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 81	
Reino Unido	7 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98, 122, 140, 142, MLC, 2006	
Reino Unido - Anguilla	9 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 59, 82, 85, 87, 98, 99, 105, 140	
Reino Unido - Bermudas	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98	
Reino Unido - Gibraltar	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98, 142	
Reino Unido - Guernsey	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 142	
Reino Unido - Isla de Man	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122	

Reino Unido - Islas Caimanes	1 memoria solicitada
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. MLC, 2006	
Reino Unido - Islas Malvinas (Falkland)	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98	
Reino Unido - Islas Vírgenes Británicas	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98	
Reino Unido - Jersey	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 140	
Reino Unido - Montserrat	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 95, 98	
Reino Unido - Santa Elena	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 82, 87, 98	
Rumania	6 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 87, 98, 117, 122, (MLC, 2006)	
Rusia, Federación de	8 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 140, 142, 149, (175), 185	
Rwanda	10 memorias solicitadas
· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 26, 94, 100, 111, 123	
· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 42, 87, 98, 122	
Saint Kitts y Nevis	3 memorias solicitadas
· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98	
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006	
Samoa	3 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 182	
San Marino	20 memorias solicitadas
· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 100, 103, 143, 150	
· 16 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 119, 138, 140, 142, 144, 148, 151, 156, 159, 160, 161, 182	
San Vicente y las Granadinas	21 memorias solicitadas
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 87, 94, 98, (102)	
· 16 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 29, 81, 95, 100, 105, 108, 111, 122, 129, 138, 144, 182, (MLC, 2006)	
Santa Lucía	22 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 26, 29, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 105, 108, 111, 154, 158, 182	
Santo Tomé y Príncipe	2 memorias solicitadas
· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 98	
Senegal	4 memorias solicitadas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 117, 122	
Serbia	8 memorias solicitadas
· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 87, (94), 98, 122, 140, 142, MLC, 2006	
1 memoria no recibida: Convenio núm. 144	

Seychelles**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 149

Sierra Leona**23 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 17, 19, 22, 26, 29, 32, 45, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144

Singapur**9 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 19, 29, 32, 81, 94, 98, 100, 144, 182

Siria, República Árabe**5 memorias solicitadas**· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 117, 144
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 107**Somalia****16 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 17, 19, 22, 23, 29, 45, 84, 85, (87), 94, 95, (98), 105, 111, (182)

Sri Lanka**5 memorias solicitadas**· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 110, (122)
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)**Sudáfrica****5 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 98, MLC, 2006, (188), 189

Sudán**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 98, 117, 122

Sudán del Sur**3 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 98, 100, 111

Suecia**6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 140, 142, 149

Suiza**6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 142, 172, 189

Suriname**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122

Tailandia**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 122, (MLC, 2006), (187)

Tanzanía, República Unida de**5 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 140, 142, 149

Tayikistán**8 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 97, 98, 122, 124, 142, 149, 177

Timor-Leste**6 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, (100), (111), 182

Togo**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122

Trinidad y Tabago**7 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 97, 98, 100, 111, 122, 144

Túnez**9 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 100, 107, 111, 117, 122, 142, (185)

Turkmenistán**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 185

Turquía**15 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 55, 68, 69, 73, 87, 92, 98, 108, 122, 133, 134, 142, 146, 164, 166

Ucrania**10 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98, (102), 117, 122, 129, 140, 142, 149

Uganda**14 memorias solicitadas**

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 17, 19, 87, 94, 95, 98, 100, 111, 122, 123, 124, 143, 162

Uruguay**7 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 110, 122, 149, 172, 189

Uzbekistán**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. (87), 98, 122

Vanuatu**8 memorias solicitadas**· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 185**Venezuela, República Bolivariana de****8 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 140, 142, 149, 169

Viet Nam**9 memorias solicitadas**· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 27, 100, 111, 123, 124, 144, (187)
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 122**Yemen****21 memorias solicitadas**· 18 memorias recibidas: Convenios núms. 19, 29, 59, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 122, 131, 138, 144, 156, 158, 182
· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 16, 58, 185**Zambia****6 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 138, 149

Zimbabwe**3 memorias solicitadas**

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 140

Total generalSe ha solicitado un total de 1 683 memorias (artículo 22),
de las cuales se recibieron 1 038 (61,68 por ciento)Se ha solicitado un total de 107 memorias (artículo 35),
de las cuales se recibieron 84 (78,50 por ciento)

**Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias registradas
sobre los convenios ratificados al 8 de diciembre de 2018**
(artículo 22 de la Constitución)

Año de la reunión de la Comisión de Expertos	Memorias solicitadas	Memorias recibidas en la fecha solicitada		Memorias registradas para la reunión de la Comisión		Memorias registradas para la reunión de la Conferencia	
1932	447	-		406	90,8%	423	94,6%
1933	522	-		435	83,3%	453	86,7%
1934	601	-		508	84,5%	544	90,5%
1935	630	-		584	92,7%	620	98,4%
1936	662	-		577	87,2%	604	91,2%
1937	702	-		580	82,6%	634	90,3%
1938	748	-		616	82,4%	635	84,9%
1939	766	-		588	76,8%	-	
1944	583	-		251	43,1%	314	53,9%
1945	725	-		351	48,4%	523	72,2%
1946	731	-		370	50,6%	578	79,1%
1947	763	-		581	76,1%	666	87,3%
1948	799	-		521	65,2%	648	81,1%
1949	806	134	16,6%	666	82,6%	695	86,2%
1950	831	253	30,4%	597	71,8%	666	80,1%
1951	907	288	31,7%	507	77,7%	761	83,9%
1952	981	268	27,3%	743	75,7%	826	84,2%
1953	1026	212	20,6%	840	75,7%	917	89,3%
1954	1175	268	22,8%	1077	91,7%	1119	95,2%
1955	1234	283	22,9%	1063	86,1%	1170	94,8%
1956	1333	332	24,9%	1234	92,5%	1283	96,2%
1957	1418	210	14,7%	1295	91,3%	1349	95,1%
1958	1558	340	21,8%	1484	95,2%	1509	96,8%
De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios							
1959	995	200	20,4%	864	86,8%	902	90,6%
1960	1100	256	23,2%	838	76,1%	963	87,4%
1961	1362	243	18,1%	1090	80,0%	1142	83,8%
1962	1309	200	15,5%	1059	80,9%	1121	85,6%
1963	1624	280	17,2%	1314	80,9%	1430	88,0%
1964	1495	213	14,2%	1268	84,8%	1356	90,7%
1965	1700	282	16,6%	1444	84,9%	1527	89,8%
1966	1562	245	16,3%	1330	85,1%	1395	89,3%
1967	1883	323	17,4%	1551	84,5%	1643	89,6%
1968	1647	281	17,1%	1409	85,5%	1470	89,1%
1969	1821	249	13,4%	1501	82,4%	1601	87,9%
1970	1894	360	18,9%	1463	77,0%	1549	81,6%
1971	1992	237	11,8%	1504	75,5%	1707	85,6%
1972	2025	297	14,6%	1572	77,6%	1753	86,5%
1973	2048	300	14,6%	1521	74,3%	1691	82,5%
1974	2189	370	16,5%	1854	84,6%	1958	89,4%
1975	2034	301	14,8%	1663	81,7%	1764	86,7%
1976	2200	292	13,2%	1831	83,0%	1914	87,0%

Año de la reunión de la Comisión de Expertos	Memorias solicitadas	Memorias recibidas en la fecha solicitada	Memorias registradas para la reunión de la Comisión	Memorias registradas para la reunión de la Conferencia
De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976), desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según determinados criterios, a intervalos de dos o cuatro años				
1977	1529	215 14,0%	1120 73,2%	1328 87,0%
1978	1701	251 14,7%	1289 75,7%	1391 81,7%
1979	1593	234 14,7%	1270 79,8%	1376 86,4%
1980	1581	168 10,6%	1302 82,2%	1437 90,8%
1981	1543	127 8,1%	1210 78,4%	1340 86,7%
1982	1695	332 19,4%	1382 81,4%	1493 88,0%
1983	1737	236 13,5%	1388 79,9%	1558 89,6%
1984	1669	189 11,3%	1286 77,0%	1412 84,6%
1985	1666	189 11,3%	1312 78,7%	1471 88,2%
1986	1752	207 11,8%	1388 79,2%	1529 87,3%
1987	1793	171 9,5%	1408 78,4%	1542 86,0%
1988	1636	149 9,0%	1230 75,9%	1384 84,4%
1989	1719	196 11,4%	1256 73,0%	1409 81,9%
1990	1958	192 9,8%	1409 71,9%	1639 83,7%
1991	2010	271 13,4%	1411 69,9%	1544 76,8%
1992	1824	313 17,1%	1194 65,4%	1384 75,8%
1993	1906	471 24,7%	1233 64,6%	1473 77,2%
1994	2290	370 16,1%	1573 68,7%	1879 82,0%
De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), fueran solicitadas para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios				
1995	1252	479 38,2%	824 65,8%	988 78,9%
De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), las memorias se solicitaran, según determinados criterios, a intervalos de dos o cinco años				
1996	1806	362 20,5%	1145 63,3%	1413 78,2%
1997	1927	553 28,7%	1211 62,8%	1438 74,6%
1998	2036	463 22,7%	1264 62,1%	1455 71,4%
1999	2288	520 22,7%	1406 61,4%	1641 71,7%
2000	2550	740 29,0%	1798 70,5%	1952 76,6%
2001	2313	598 25,9%	1513 65,4%	1672 72,2%
2002	2368	600 25,3%	1529 64,5%	1701 71,8%
2003	2344	568 24,2%	1544 65,9%	1701 72,6%
2004	2569	659 25,6%	1645 64,0%	1852 72,1%
2005	2638	696 26,4%	1820 69,0%	2065 78,3%
2006	2586	745 28,8%	1719 66,5%	1949 75,4%
2007	2478	845 34,1%	1611 65,0%	1812 73,2%
2008	2515	811 32,2%	1768 70,2%	1962 78,0%
2009	2733	682 24,9%	1853 67,8%	2120 77,6%
2010	2745	861 31,4%	1866 67,9%	2122 77,3%
2011	2735	960 35,1%	1855 67,8%	2177 77,4%
De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (marzo 2011), las memorias se solicitan, según determinados criterios, a intervalos de tres o cinco años				
2012	2207	809 36,7%	1497 67,8%	1742 78,9%
2013	2176	740 34,1%	1578 72,5%	1755 80,6%
2014	2251	875 38,9%	1597 70,9%	1739 77,2%
2015	2139	829 38,8%	1482 69,3%	1617 75,6%
2016	2303	902 39,2%	1600 69,5%	1781 77,3%
2017	2083	785 37,7%	1386 66,5%	1543 74,1%
2018	1683	571 33,9%	1038 61,7%	

Anexo III. Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

Alemania

- | | |
|---|--|
| • Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA) | sobre los Convenios núms.
29, 105, 138, 140, 142, 172, 182, 189 |
| • Organización Internacional de Empleadores (OIE) | 29, 105, 138, 140, 142, 172, 182, 189 |

Antigua y Barbuda

- | | |
|--|------------------------------|
| • Asociación de la Administración Pública de Antigua y Barbuda (ABPSA) | sobre el Convenio núm.
87 |
|--|------------------------------|

Argelia

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Confederación General de Empleadores (CGP) | sobre los Convenios núms.
100, 142 |
| • Confederación General Autónoma de Trabajadores en Argelia (CGATA) | 87 |
| • Confederación General de Empresas Argelinas (CGEA) | 100, 142 |
| • Confederación Sindical de Fuerzas Productivas (COSYFOP) | 87, 135 |
| • Confederación Sindical Internacional (CSI) | 87, 98 |
| • Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y del Gas (SNATEGS) | 87, 98, 135 |
| • Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP) | 100 |
| • Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Energético (SNT ENERGIE) | 87, 135 |
| • Sindicato Nacional del Sector Industrial (SNSI) | 87, 135 |

Argentina

- | | |
|--|--|
| • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) | sobre los Convenios núms.
169 |
| • Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) | 87, 100, 111, 189 |
| • Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) | 81, 87, 98, 100, 102, 111, 129, 151, 154, 169, 177, 188, 189 |
| • Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA) | 81, 87, 100, 102, 111, 129, 142, 169, 177, 188, 189 |
| • Confederación Sindical Internacional (CSI) | 87, 102 |
| • Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-SITRAJU) | 154 |
| • Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT) | 87 |

Armenia

- | | |
|--|---|
| • Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA) | sobre los Convenios núms.
81, 100, 111, 174, 176 |
| • Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) | 81, 100, 111, 174, 176 |

Australia

- | | |
|--|--|
| • Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) | sobre los Convenios núms.
81, 100, 111, 142 |
|--|--|

Austria

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Cámara del Trabajo Austriaca (AK) | sobre los Convenios núms.
81, 100, 111, 142, 172 |
| • Cámara Federal del Trabajo (BAK) | 81, 100, 111, 142, 172 |

Bahrein

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Confederación Sindical Internacional (CSI) | sobre los Convenios núms.
111 |
| • Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) | 111 |

Bangladesh

- | | |
|--|------------------------------|
| • Confederación Sindical Internacional (CSI) | sobre el Convenio núm.
81 |
|--|------------------------------|

Belarús

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Confederación Sindical Internacional (CSI) | sobre los Convenios núms.
29, 87 |
| • Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP) | 29, 87, 105, 111 |

Bélgica

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
111

Belice

- Cámara de Comercio e Industria de Belice (BCCI)
- Congreso Nacional de Sindicatos de Belice (NTUCB)

sobre los Convenios núms.
MLC, 2006
MLC, 2006

Bolivia, Estado Plurinacional de

- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB)

sobre los Convenios núms.
26, 122, 131, 138

189

Botswana

- Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU)

sobre los Convenios núms.
19, 87, 98, 100, 111, 182

Brasil

- Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA)
- Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Confederación Nacional de la Industria (CNI); Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
95, 98, 122, 144, 154, 155
98, 154

81, 98, 100, 111, 117, 142, 169

98

Bulgaria

- Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (CITUB)
- Sindicato de Trabajadores Independientes e Informales «UNITY»

sobre los Convenios núms.
81, 100, 111, 177
177

Burundi

- Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)

sobre los Convenios núms.
26, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 135,
138, 144

Camboya

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
105

Camerún

- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT)
- Sindicato Nacional de Marineros Registrados y Similares del Camerún (SYNIMAC)
- Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)

sobre los Convenios núms.
87
81, 87, 100, 111, 122

81, 87, 100, 111, 122

Canadá

- Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN)
- Congreso del Trabajo del Canadá (CLC)
- Consejo de Empleadores del Canadá (CEC)

sobre los Convenios núms.
100, 111
100, 111, 138
100, 111, 138

Checa, República

- Confederación de la Industria y del Transporte (SP ČR)

sobre el Convenio núm.
100

Chile

- Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
- Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile)
- Colegio de Profesores de Chile A.G.

sobre los Convenios núms.
100
100, 111, 140, 169, 189
35, 37

Colombia

- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC); Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE)
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Confederación General del Trabajo (CGT); Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
- Confederación General del Trabajo (CGT)
- Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo (SCTA)

sobre los Convenios núms.

26, 81, 95, 99, 100, 111, 129, 162, 169, 189
95, 151, 154, 169

26, 81, 99, 100, 111, 129, 136, 169, 170, 174, 189
95, 162

81, 99, 129
111

Comoras

- Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTTC)

sobre los Convenios núms.

12, 14, 17, 42, 52, 98, 144

Corea, República de

- Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU)
- Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU)

sobre los Convenios núms.

19, 138, 142, 182, 185
138, 142, 182

Costa Rica

- Central Sindical Juanito Mora Porras (CSJMP); Confederación Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTIC); Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
- Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD)
- Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

81, 100, 111, 129, 144, 169

81, 100, 117
81, 100, 111, 129, 169, 189

Croacia

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Cuba

- Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)

sobre los Convenios núms.

81, 110, 111

Dinamarca

- Asociación Nacional de Gobiernos Locales de Dinamarca (KL)
- Confederación de Empleadores de Dinamarca (DA)
- Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO)
- Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO); Confederación de Organizaciones de Empleados y Funcionarios Públicos de Dinamarca (FTF)

sobre los Convenios núms.

100, 111
100, 111
111
100

Dinamarca (Groenlandia)

- Asociación de los Pescadores y Cazadores de Groenlandia (KNAPK)
- Confederación de Graduados en Groenlandia (IK/ASG)
- Organización de Empleados Públicos de Groenlandia (AK)
- Sindicato de Profesores de Groenlandia (IMAK)
- Sulimernik Inuussutissarsiuqartut Kattuffiat (SIK)

sobre los Convenios núms.

169
169
98, 169
98, 169
98

Dominicana, República

- Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

sobre los Convenios núms.

81, 87, 98, 100, 111, 183, 189

Ecuador

- Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH)
- Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador (ISP-Ecuador); Unión Nacional de Educadores (UNE)

sobre los Convenios núms.

189
98

Egipto

- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Congreso Democrático Egipcio del Trabajo (EDLC)
- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT)
- Organización Sindical de Trabajadores del Transporte (TUWC)
- Sindicato de la Autoridad de Recaudación de Impuestos Inmobiliarios; Comité Sindical de los Servicios de Transporte de Qalyoubia; Comité Sindical de los Pescadores de Damietta; Comité Sindical de los Trabajadores de los Clubes del Canal de Suez; Sindicato de Trabajadores de Telecom Egipto; Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca de Alejandría
- Sindicato General de Trabajadores del Transporte y de los Servicios (GUTWS)

sobre los Convenios núms.

87, 98

87

87

87

87

87

El Salvador

- Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS)

sobre los Convenios núms.

87, 98, 144

87, 98, 135, 144, 151

Eritrea

- Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

29, 105

Eslovenia

- Asociación de Sindicatos Libres de Eslovenia (AFTUS)

sobre los Convenios núms.

87, 122

España

- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Unión General de Trabajadores (UGT)

sobre los Convenios núms.

87, 98, 117, 122, 140, 142, 169, 172

87, 98, 117, 122, 140, 142, 169, 172, 185

87, 98

87, 98, 117, 122, 140, 142, 169, 172, 185

Eswatini

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Fiji

- Congreso de los Sindicatos de Fiji (FTUC)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Filipinas

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Finlandia

- Comisión de Empleadores de Entidades Locales (KT)
- Confederación de Industrias de Finlandia (EK)
- Federación de Empresas de Finlandia
- Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK); Confederación Finlandesa de Profesionales (STTK); Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación Superior (AKAVA)

sobre los Convenios núms.

100

81

81, 100, 111

81, 100, 111, 140, 142, 149

Francia

- Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC); Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT); Confederación Francesa de Ejecutivos – Confederación General de Personal Directivo (CFE-CGC)

sobre el Convenio núm.

185

Georgia

- Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

100

Grecia

- Asociación Griega del Cuerpo Médico Militar (ESTIA)
- Confederación General Griega del Trabajo (GSEE)
- Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.
29
29, 87, 98, 154
98, 144

Guatemala

- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco;
Sindicatos Globales de Guatemala
- Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)
- Organización Internacional de Empleadores (OIE); Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF)

sobre los Convenios núms.
87, 98
87, 169

169
87, 110, 138, 169, 182

Haití

- Asociación de la Industria de Haití (ADIH)
- Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público
y Privado (CTSP)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Coordinadora Sindical de Haití (CSH)

sobre los Convenios núms.

Honduras

- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.
87, 98
14, 29, 105, 106, 138, 144, 169, 182,
MLC, 2006

India

- Central de Sindicatos Indios (CITU)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Sindicato de Trabajadores encargados de la Manipulación de Alimentos
de la Food Corporation of India (FCIHWU)

sobre los Convenios núms.
81
29
100, 122

Irlanda

- Confederación de Empresas y Empleadores de Irlanda (IBEC)
- Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU)
- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT)

sobre los Convenios núms.
87
81, 87, 98, 144, 172
29

Italia

- Unión Italiana del Trabajo (UIL)

sobre el Convenio núm.
97

Japón

- Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)
- Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO)
- Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN)
- Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN)
- Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FCTU);
Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU)
- Sindicato Nacional de la Construcción de Buques - Región de Kanto
- Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Sociales
y de la Protección de la Infancia (NUWCW)

sobre los Convenios núms.
87, 98
29, 87, 138, 144
87
29, 144
29

29
159

Kazajstán

- Confederación de Empleadores de la República de Kazajstán (KRRK)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
87
29, 87, 98, 105, 182

Kirguistán

- Federación de Sindicatos de Kirguistán (KFTU)

sobre los Convenios núms.
138, 182

Letonia

- Confederación de Sindicatos Libres de Letonia (FTUCL)

sobre los Convenios núms.
29, 138, 142

Líbano

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
29

Lituania

- Sindicato de la Gente de Mar de Lituania (LSU)

sobre el Convenio núm.
MLC, 2006

Madagascar

- Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA)

sobre el Convenio núm.
124

Malasia

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
98, 131

Malasia - Peninsular

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
19

Malasia - Sarawak

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
19

Mauritania

- Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
29, 100, 105, 138, 182
29

México

- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
- Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- IndustriALL Global Union (IndustriALL)
- Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

sobre los Convenios núms.
87
29, 87, 169
87
87
87

Moldova, República de

- Confederación Nacional de Sindicatos de Moldova (CNSM)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
81, 87, 98, 129
81, 129

Myanmar

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
87

Nepal

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
29

Níger

- Confederación del Trabajo del Níger (CNT)

sobre los Convenios núms.
29, 105, 117, 138, 142, 182

Nigeria

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre el Convenio núm.
98

Noruega

- Sindicato Noruego de Ingenieros Marítimos (NUME)

sobre el Convenio núm.
188

Nueva Zelandia

- Business Nueva Zelandia
- Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)

sobre los Convenios núms.
29, 105, 144, 182
29, 105, 144, 182

Nueva Zelanda (Tokelau)

- Business Nueva Zelanda
- Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda (NZCTU)

sobre los Convenios núms.
29, 82, 105
29, 82, 105

Países Bajos

- Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV)
- Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV); Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV)
- Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV); Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV); Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP)

sobre los Convenios núms.
29
29, 105
138, 140, 142, 144, 177

Pakistán

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
87, 98

Panamá

- Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI)
- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT)

sobre los Convenios núms.
87, 98, 110, 117, 122
87, 98

Paraguay

- Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A);
Sindicato de Trabajadores Unidos de la ESSAP (SITUE)

sobre los Convenios núms.
87, 98

Perú

- Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
- Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

sobre los Convenios núms.
87, 98, 122, 159, 169, 183
169

Polonia

- Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc»

sobre los Convenios núms.
87, 98, 122, 149
87, 98
87, 98, 122, 140, 142

Portugal

- Confederación de la Industria Portuguesa (CIP)
- Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN)

sobre los Convenios núms.
87, 98, 117, 122, 142
87, 98, 122

Reino Unido

- Congreso de Sindicatos (TUC)

sobre los Convenios núms.
87, 98

Reino Unido (Islas Caimanes)

- Congreso de Sindicatos (TUC)

sobre el Convenio núm.
MLC, 2006

Rumania

- Bloque de los Sindicatos Nacionales (BNS); Confederación de Sindicatos Democráticos de Rumania (CSDR); Confederación Nacional Sindical (CNS «CARTEL ALFAê)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.
87, 98
87, 98

Rusia, Federación de

- Confederación de Trabajo de Rusia (KTR)

sobre los Convenios núms.
87, 98, 122

Rwanda

- Congreso del Trabajo y de la Fraternidad de Rwanda (COTRAF-RWANDA)

sobre los Convenios núms.
17, 26, 94, 100, 111, 123

Senegal

- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Unión Nacional de Sindicatos Autónomos del Senegal (UNSAS)

sobre los Convenios núms.
87, 98
87, 117

Serbia

- Asociación Serbia de Empleadores (SAE)
- Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS)
- Confederación de Sindicatos «Nezavisnost»
- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

87
87, 94, 98, 122, 140, 142
87, 98, 122, 140
87, 98

Somalia

- Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU)

sobre los Convenios núms.

87, 98, 111, 182

Sri Lanka

- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Sindicato de los Empleados de Bancos de Ceilán (CBEU);
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones de Ceilán (CESU);
Federación del Trabajo de Ceilán (CFL); Sindicato de Trabajadores
Mercantiles, Industriales y Otros Trabajadores (CMU)
- Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales
(FTZ & GSEU)

sobre los Convenios núms.

87, 98
81

87, 98

Suecia

- Confederación Sueca de Sindicatos (LO)

sobre el Convenio núm.

121

Suiza

- Unión Patronal Suiza (UPS)
- Unión Suiza de Campesinos (USP)

sobre los Convenios núms.

189
189

Túnez

- Confederación Sindical Internacional (CSI)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Turkmenistán

- La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)

sobre los Convenios núms.

87, 98

Turquía

- Asociación de Armadores Turcos (TAS)
- Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK)
- Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK)
- Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK)
- Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de la Ciencia de Turquía
(EGITIM SEN); Internacional de la Educación (IE)

sobre los Convenios núms.

55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164, 166
87, 98, 122, 142
87, 98, 122, 142
87, 98
87, 98
55, 68, 69, 73, 87, 92, 98, 108, 122,
134, 146, 164, 166, 167, 176
87, 98, 135
87, 98

Ucrania

- Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU)
- Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU)

sobre los Convenios núms.

87, 95, 98
87, 98
87, 98

Uruguay

- Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS);
Cámara de Industrias del Uruguay (CIU);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

87, 98, 131, 135, 144, 154

Uzbekistán

- La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)

sobre el Convenio núm.

87

Venezuela, República Bolivariana de

- Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI) sobre los Convenios núms.
87, 95, 98, 117, 122, 144, 149, 169
- Confederación General del Trabajo (CGT); Confederación de Sindicatos
Autónomos (CODESA); Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV);
Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) 87, 98, 117, 122, 140, 142, 149, 169
- Organización Internacional de Empleadores (OIE); Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) 26, 87, 88, 122, 144, 158

Zimbabwe

- Asociación de Docentes de Zimbabwe (ZIMTA); sobre los Convenios núms.
87, 98
- Internacional de la Educación (IE)
- Confederación Sindical Internacional (CSI) 87, 98
- Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) 87, 98

Anexo IV. Resumen de la información proporcionada por los gobiernos en lo que respecta a la obligación de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes

El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en los párrafos 5, 6 y 7 impone a los Estados Miembros la obligación de someter a las autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Estas mismas disposiciones prevén que los gobiernos de los Estados Miembros deberán informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos a las autoridades competentes, y comunicar asimismo toda información relativa a la autoridad o las autoridades.

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, se presentó a la Conferencia un resumen de la información comunicada por los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 19.

En su 267.^a reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación de los procedimientos. Al respecto, el resumen de tales informaciones se publica en el anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

El presente resumen contiene las informaciones más recientes sobre la sumisión a las autoridades competentes del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptada en la 103.^a reunión de la Conferencia (junio 2014), la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada en la 104.^a reunión de la Conferencia (junio de 2015), y la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.^a reunión (junio de 2017).

Las informaciones resumidas incluyen asimismo las que fueron comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo después de la clausura de la 107.^a reunión de la Conferencia (junio de 2018) y que, por consiguiente, no pudieron ponerse en conocimiento en dicha reunión.

Australia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 14 de junio de 2018.

Bangladesh. El Protocolo de 2014, y las Recomendaciones núms. 203, 204 y 205 fueron sometidas a la Comisión Parlamentaria Permanente del Ministerio de Trabajo y Empleo el 18 de febrero de 2018.

Belarús. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Asamblea Nacional el 14 de febrero de 2018.

Bélgica. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 27 de septiembre de 2018.

Burundi. El Protocolo de 2014, las Recomendaciones núms. 203, 204 y 205 fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2018.

Cabo Verde. El Protocolo de 2014, las Recomendaciones núms. 203, 204 y 205 fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre de 2017.

Cuba. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Consejo de Estado el 28 de mayo de 2018.

Chipre. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Cámara de Representantes el 28 de febrero de 2018.

República Checa. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Senado del Parlamento el 17 de mayo de 2018 y a la Cámara de Diputados del Parlamento el 18 de mayo de 2018.

Dinamarca. Las Recomendaciones núms. 203 y 205 fueron sometidas al Parlamento danés el 9 de octubre de 2014 y el 7 de octubre de 2015, respectivamente.

Estonia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento de Estonia (*Riigikogu*) el 9 de enero de 2018.

Finlandia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 18 de diciembre de 2017.

Islandia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento (*Althing*) el 20 de marzo de 2018.

India. La Recomendación núm. 205 fue sometida a ambas Cámaras del Parlamento: la Lok Sabha el 19 de marzo de 2018 y la Rajya Sabha el 21 de marzo de 2018.

Indonesia. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Cámara de los Representantes del Pueblo el 25 de mayo de 2018.

Japón. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Dieta el 25 de mayo de 2018.

Letonia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 30 de julio de 2018.

Lituania. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento (*Seimas*) el 24 de enero de 2018.

Malí. Las Recomendaciones núms. 204 y 205 fueron sometidas a la Asamblea Nacional el 19 de abril de 2018.

Montenegro. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 24 de enero de 2018.

Marruecos. La Recomendación núm. 205 fue sometida a ambas Cámaras del Parlamento el 3 de octubre de 2017.

Myanmar. Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento (*Pyidaungsu Hluttaw*) el 18 de mayo de 2018.

Namibia. El Protocolo de 2014 fue sometido al Parlamento y posteriormente ratificado el 6 de noviembre de 2017. Además, la Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 12 de octubre de 2016.

Países Bajos. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 11 de junio de 2018.

Níger. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2018.

Panamá. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Asamblea Nacional el 7 de mayo de 2018.

Paraguay. La Recomendación núm. 203 fue sometida al Congreso Nacional el 29 de julio de 2016.

Filipinas. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Senado y a la Cámara de Representantes el 4 de octubre de 2018.

Polonia. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Sejm el 30 de mayo de 2018.

Serbia. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Asamblea Nacional el 5 de marzo de 2018.

Eslovaquia. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Reunión de Gobierno de la República de Eslovaquia el 22 de noviembre de 2017.

Suiza. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Consejo Federal el 4 de julio de 2018.

República Unida de Tanzania. El Protocolo de 2014 relativo al Convenio de trabajo forzoso, 1930 y las Recomendaciones núms. 203, 204 y 205 fueron sometidos al Parlamento el 5 de octubre de 2017.

Túnez. El Protocolo de 2014 relativo al Convenio de trabajo forzoso, 1930 y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) fueron sometidos a la Asamblea Popular el 17 de julio de 2017.

Turquía. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Gran Asamblea Nacional el 16 de diciembre de 2017.

Uruguay. Las Recomendaciones núms. 203 y 204 fueron sometidas a la Asamblea General el 31 de julio de 2017.

Uzbekistán. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento (*Oliy Majlis*) el 7 de junio de 2018.

Anexo V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes

(31.^a a 107.^a reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2018)

Nota. Los números de los convenios y las recomendaciones aparecen entre paréntesis, precedidos por la letra C o R, en los casos en que solamente algunos de los textos adoptados en el curso de una misma reunión hayan sido sometidos a las autoridades competentes. Los protocolos se indican con la letra P, seguida del número del convenio correspondiente. Los convenios ratificados y las recomendaciones correspondientes se consideran como sometidos.

Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados Miembros a la OIT para determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos adoptados son tomados en consideración. La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.^a reunión (junio de 1972), 73.^a reunión (junio de 1987), 93.^a reunión (junio de 2005), 97.^a reunión (junio de 2008), 98.^a reunión (junio de 2009), 102.^a reunión (junio de 2013), 105.^a reunión (junio de 2016) y 107.^a reunión (junio 2018).

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Afganistán	31-56, 58-72, 74-92, 94, 95	96, 99-101, 103, 104, 106
Albania	79-81, 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, P147, R186), 85, 87, 88, 90 (P155), 91, 94, 95 (C187, R197)	78, 82 (P081), 84 (C179, C180, R185, R187), 86, 89, 90 (R193, R194), 92, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106
Alemania	34-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, R177), 78-92, 94-96, 99-101, 104	77 (C171, P089, R178), 103, 106
Angola	61-72, 74-78, 79 (C173), 80, 81, 82 (R183, C176), 83-85, 87-90, 96	79 (R180), 82 (P081), 86, 91, 92, 94, 95, 99-101, 103, 104, 106
Antigua y Barbuda	68-72, 74-82, 84, 87, 94, 100	83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 106
Arabia Saudita	61-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Argelia	47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Argentina	31-56, 58-72, 74-90, 92, 94-96, 99-101, 103	91, 104, 106
Armenia	80-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Australia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Austria	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99	100, 101, 103, 104, 106
Azerbaiyán	79 (C173), 80-82, 85-88, 91, 92	79 (R180), 83, 84, 89, 90, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Bahamas	61-72, 74-84, 87, 91, 94	85, 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Bahrein	63-72, 74-87	88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Bangladesh	58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Barbados	51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99	100, 101, 103, 104, 106
Belarús	37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Bélgica	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Belice	68-72, 74-76, 84, 87, 88, 94	77-83, 85, 86, 89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Benin	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Bolivia, Estado Plurinacional de	31-56, 58-72, 74-79, 80 (C174), 81 (C175), 82 (C176), 83 (C177), 84 (C178, C179, C180), 85 (C181), 87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 100	80 (R181), 81 (R182), 82 (P081, R183), 83 (R184), 84 (P147, R185, R186, R187), 85 (R188), 86, 88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94-96, 99, 101, 103, 104, 106
Bosnia y Herzegovina	80-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Botswana	64-72, 74-92, 94-96, 99, 100	101, 103, 104, 106
Brasil	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Brunei Darussalam		96, 99-101, 103, 104, 106
Bulgaria	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Burkina Faso	45-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Burundi	47-56, 58-72, 74-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106	94
Cabo Verde	65-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Camboya	53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (R203), 104	103 (P029), 106
Camerún	44-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101	99, 100, 103, 104, 106
Canadá	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Centrafricana, República	45-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Chad	45-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Checa, República	80-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Chile	31-56, 58-72, 74-82, 87, 94, 95 (C187, R197), 100	83-86, 88-92, 95 (R198), 96, 99, 101, 103, 104, 106
China	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Chipre	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Colombia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Comoras	65-72, 74-78, 87	79-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Congo	45-53, 54 (C131, C132), 55, 56, 58 (C138, R146), 59, 60 (C142, R150), 61, 62, 63 (C148, C149, R157), 64-66, 67 (C154, C155, C156), 68 (C158), 71 (C160, C161), 74, 75 (C167, C168), 76, 84, 87, 91, 94, 96	54 (R135, R136), 58 (C137, R145), 60 (C141, C143, R149, R151), 63 (R156), 67 (R163, R164, R165), 68 (C157, P110, R166), 69, 70, 71 (R170, R171), 72, 75 (R175, R176), 77-83, 85, 86, 88-90, 92, 95, 99-101, 103, 104, 106
Corea, República de	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Costa Rica	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 104, 106	103 (R203)
Côte d'Ivoire	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Croacia	80-85, 87, 91, 94	86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Cuba	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Democrática del Congo, República	45-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Dinamarca	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Djibouti	64-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Dominica	68-72, 74-79, 87	80-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Dominicana, República	31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99, 100	96, 101, 103, 104, 106
Ecuador	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 104	103 (R203), 106
Egipto	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
El Salvador	31-56, 58-61, 63 (C149), 64, 67 (R164, R165, C155, C156), 69 (R168, C159), 71, 72, 74-81, 87, 90 (P155)	62, 63 (R156, R157, C148), 65, 66, 67 (R163, C154), 68, 69 (R167), 70, 82-86, 88, 89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Emiratos Árabes Unidos	58-72, 74-92, 95, 96	94, 99-101, 103, 104, 106
Eritrea	80-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Eslovaquia	80-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Eslovenia	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
España	39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Estados Unidos	66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Estonia	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Eswatini	60-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Etiopía	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Ex República Yugoslava de Macedonia	80-83, 85, 87, 88, 95 (C187, R197)	84, 86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106
Fiji	59-72, 74-82, 84, 85, 87, 89, 92, 94	83, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Filipinas	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Finlandia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Francia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Gabón	45-56, 58-72, 74-81, 82 (C176), 83 (C177), 84, 85 (C181), 87, 89 (C184), 91, 94	82 (P081, R183), 83 (R184), 85 (R188), 86, 88, 89 (R192), 90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Gambia	82-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Georgia	80-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Ghana	40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 104	103, 106
Granada	66-72, 74-92, 94, 95	96, 99-101, 103, 104, 106
Grecia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Guatemala	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Guinea	43-56, 58-72, 74-83, 87, 95 (R197, C187), 100	84-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99, 101, 103, 104, 106
Guinea-Bissau	63-72, 74-88, 94	89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Guinea Ecuatorial	67-72, 74-79, 84, 87	80-83, 85, 86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Guyana	50-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100	96, 99, 101, 103, 104, 106
Haití	31-56, 58-66, 67 (C156, R165), 69-72, 74, 75 (C167), 87	67 (C154, C155, R163, R164), 68, 75 (C168, R175, R176), 76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Honduras	38-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Hungría	31-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
India	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Indonesia	33-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Irán, República Islámica del	31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96	90 (P155), 99-101, 103, 104, 106
Iraq	31-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89, 90 (P155), 91, 94, 95 (C187, R197), 96 (C188), 100 (C189)	88 (R191), 90 (R193, R194), 92, 95 (R198), 96 (R199), 99, 100 (R201), 101, 103, 104, 106
Irlanda	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Islandia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Islas Cook		104, 106
Islas Marshall		99-101, 103, 104, 106
Islas Salomón	74, 87	70-72, 75-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Israel	32-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Italia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Jamaica	47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Japón	35-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Jordania	39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Kazajstán	82 (C176, R183), 87, 88, 91	80, 81, 82 (P081), 83-86, 89, 90, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Kenya	48-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Kirguistán	87, 89	79-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Kiribati	91, 94	88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Kuwait	45-56, 58-72, 74-76, 78, 79, 80 (C174), 81-85, 87, 88, 90, 91	77, 80 (R181), 86, 89, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Lao, República Democrática Popular	48-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83-92, 94-96, 99, 100, 103	82 (P081), 101, 104, 106
Lesotho	66-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Letonia	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Líbano	32-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Liberia	31-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, C171, R177, R178), 78-81, 82 (C176, R183), 83-87, 91, 94	77 (P089), 82 (P081), 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Libia	35-56, 58-72, 74-82, 87	83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Lituania	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Luxemburgo	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Madagascar	45-56, 58-72, 74-91, 94-96, 100	92, 99, 101, 103, 104, 106
Malasia	41-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197)	95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Malawi	49-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Maldivas, República de		99-101, 103, 104, 106
Malí	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Malta	49-56, 58-72, 74-92, 94, 95	96, 99-101, 103, 104, 106
Marruecos	39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Mauricio	53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Mauritania	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
México	31-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (R198), 99, 101	95 (C187, R197), 96, 100, 103, 104, 106
Moldova, República de	79-91, 95 (C187, R197), 104	92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 106
Mongolia	52-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101	82 (P081), 103, 104, 106
Montenegro	96, 99-101, 103, 104, 106	
Mozambique	61-72, 74-82, 87, 103 (P029), 104	83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103 (R203), 106
Myanmar	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Namibia	65-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 104	103 (R203), 106
Nepal	51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Nicaragua	40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Níger	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Nigeria	45-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100, 104	96, 99, 101, 103, 106
Noruega	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Nueva Zelandia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Omán	81-92, 95 (R197, R198), 99	94, 95 (C187), 96, 100, 101, 103, 104, 106
Países Bajos	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Pakistán	31-56, 58-72, 74-80, 87, 91	81-86, 88-90, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Palau		101, 103, 104, 106
Panamá	31-56, 58-72, 74-87, 88 (R191), 89 (R192), 90 (R193, R194), 92, 94, 95 (R197, R198), 96 (R199), 99-101, 103, 104, 106	88 (C183), 89 (C184), 90 (P155), 91, 95 (C187), 96 (C188)
Papua Nueva Guinea	61-72, 74-87	88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Paraguay	40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Perú	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Polonia	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Portugal	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Qatar	58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Reino Unido	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Rumania	39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Rusia, Federación de	37-56, 58-72, 74-88, 91, 94, 95 (C187, R197), 103, 104	89, 90, 92, 95 (R198), 96, 99-101, 106
Rwanda	47-56, 58-72, 74-79, 81, 85, 87, 95 (C187, R197)	80, 82-84, 86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106
Saint Kitts y Nevis	84, 87, 94	83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Samoa	94	95, 96, 99-101, 103, 104, 106
San Marino	68-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
San Vicente y las Granadinas	84, 86, 87, 94	82, 83, 85, 88-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Santa Lucía	67 (C154, R163), 68 (C158, R166), 87	66, 67 (C155, C156, R164, R165), 68 (C157, P110), 69-72, 74-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Santo Tomé y Príncipe	68-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Senegal	45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Serbia	89-92, 94-96, 99-101, 103, 106	104
Seychelles	63-72, 74-88, 94	89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Sierra Leona	
45-56, 58-61, 62 (C145, C147, R153, R155)	62 (C146, R154), 63-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Singapur	
50-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 104	103, 106
Siria, República Árabe	
31-56, 58-65, 67, 68, 69 (C159, R167), 71, 72, 74-76, 77 (C170, R177), 84, 87-89, 90 (P155), 94	66, 69 (R168), 70, 77 (C171, P089, R178), 78-83, 85, 86, 90 (R193, R194), 91, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106
Somalia	
45-56, 58-72, 74, 75, 87	76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Sri Lanka	
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Sudáfrica	
81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Sudán	
39-56, 58-72, 74-80, 81 (R182), 82-92, 95, 96, 99-101, 103, 104	81 (C175), 94, 106
Sudán del Sur	
	101, 103, 104, 106
Suecia	
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Suiza	
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Suriname	
61-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Tailandia	
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100 (R201), 101, 103, 104	100 (C189), 106
Tanzanía, República Unida de	
46-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Tayikistán	
81-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Timor-Leste	92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Togo	44-56, 58-72, 74-90, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	91
Tonga		106
Trinidad y Tabago	47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101	103, 104, 106
Túnez	39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Turkmenistán	81-92, 94-96, 99, 100	101, 103, 104, 106
Turquía	31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	
Tuvalu		99-101, 103, 104, 106
Ucrania	37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Uganda	47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106
Uruguay	31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 95 (R197, R198), 99-101, 103 (R203), 104	90 (P155), 94, 95 (C187), 96, 103 (P029), 106
Uzbekistán	80-92, 94-96, 99-101, 103, 106	104
Vanuatu		91, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106
Venezuela, República Bolivariana de	41-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103	104, 106
Viet Nam	79-92, 94-96, 99-101, 103, 104	106

	Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes	Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)
Yemen	49-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 95 (C187)	88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94, 95 (R197, R198), 96, 99-101, 103, 104, 106
Zambia	49-56, 58-72, 74-92, 94-96	99-101, 103, 104, 106
Zimbabwe	66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106	

**Anexo VI. Situación de los Estados Miembros en relación
con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia al 8 de diciembre de 2018**

Reuniones de la CIT	Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas por los gobiernos:			Número de Estados Miembros de la OIT al momento de la reunión
	Todos los instrumentos han sido sometidos	Algunos instrumentos han sido sometidos	Ningún instrumento ha sido sometido	

Todos los instrumentos adoptados entre la 31.^a y la 53.^a reuniones han sido sometidos a las autoridades competentes por los Estados Miembros

54.^a	(Junio de 1970)	119	1	0	120
55.^a	(Octubre de 1970)	120	0	0	120
56.^a	(Junio de 1971)	120	0	0	120
58.^a	(Junio de 1973)	122	1	0	123
59.^a	(Junio de 1974)	125	0	0	125
60.^a	(Junio de 1975)	125	1	0	126
61.^a	(Junio de 1976)	131	0	0	131
62.^a	(Octubre de 1976)	129	1	1	131
63.^a	(Junio de 1977)	131	2	1	134
64.^a	(Junio de 1978)	134	0	1	135
65.^a	(Junio de 1979)	135	0	2	137
66.^a	(Junio de 1980)	138	0	4	142
67.^a	(Junio de 1981)	138	4	1	143
68.^a	(Junio de 1982)	142	2	3	147
69.^a	(Junio de 1983)	143	2	3	148
70.^a	(Junio de 1984)	143	0	6	149
71.^a	(Junio de 1985)	145	1	3	149
72.^a	(Junio de 1986)	145	0	4	149
74.^a	(Octubre de 1987)	147	0	2	149
75.^a	(Junio de 1988)	144	2	3	149
76.^a	(Junio de 1989)	142	0	5	147
77.^a	(Junio de 1990)	136	3	8	147
78.^a	(Junio de 1991)	140	0	9	149
79.^a	(Junio de 1992)	144	2	10	156
80.^a	(Junio de 1993)	151	2	14	167
81.^a	(Junio de 1994)	155	2	14	171
82.^a	(Junio de 1995)	148	9	16	173
83.^a	(Junio de 1996)	148	2	24	174
84.^a	(Octubre de 1996)	154	2	18	174
85.^a	(Junio de 1997)	149	2	23	174
86.^a	(Junio de 1998)	143	0	31	174
87.^a	(Junio de 1999)	173	0	1	174
88.^a	(Junio de 2000)	143	4	28	175
89.^a	(Junio de 2001)	137	4	34	175
90.^a	(Junio de 2002)	132	7	36	175

Reuniones de la CIT	Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas por los gobiernos:			Número de Estados Miembros de la OIT al momento de la reunión
	Todos los instrumentos han sido sometidos	Algunos instrumentos han sido sometidos	Ningún instrumento ha sido sometido	
91.^a (Junio de 2003)	145	0	31	176
92.^a (Junio de 2004)	134	0	43	177
94.^a (Febrero de 2006)	147	0	31	178
95.^a (Junio de 2006)	128	14	36	178
96.^a (Junio de 2007)	123	2	53	178
99.^a (Junio de 2010)	112	0	71	183
100.^a (Junio de 2011)	114	3	66	183
101.^a (Junio de 2012)	106	0	79	185
103.^a (Junio de 2014)	85	6	94	185
104.^a (Junio de 2015)	83	0	103	186
106.^a (Junio de 2017)	41	0	146	187

Anexo VII. Lista de las comentarios presentados por la Comisión por país

Los comentarios abajo indicados han sido redactados en forma de «observaciones» que se reproducen en este Informe, o bien como «solicitudes directas», que no se publican, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados. Son igualmente mencionadas las respuestas recibidas a las solicitudes directas, de las cuales la Comisión ha tomado nota.

Afganistán	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 137, 140, 142</i> Observación sobre la sumisión
Albania	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 111, 122, 129, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 95, 100, 105, 111, 129, 173, 177, 181</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 131</i> Observación sobre la sumisión
Alemania	Observaciones para los Convenios núms. 29, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Angola	Observación para el Convenio núm. 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 18, 81, 100, 107, 111</i> Observación sobre la sumisión
Antigua y Barbuda	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 17, 81, 100, 111, 144, 155, 161 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 94, 100, 111, 122, 131, 142, 155</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12</i> Observación sobre la sumisión
Arabia Saudita	Observación para el Convenio núm. 81 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 81</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Argelia	Observaciones para los Convenios núms. 6, 29, 87, 105, 181 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Argentina	Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 95, 100, 111, 142, 155, 156, 177, MLC, 187</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 26</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Armenia	Observaciones para los Convenios núms. 17, 18, 122, 138 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Australia	Observaciones para los Convenios núms. 29, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 162, 182, MLC</i>
Austria	<i>Solicitud directa para el Convenio núm. 122</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Azerbaiyán	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 92, 122, 133, 134, 147</i> Observación sobre la sumisión
Bahamas	Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 138 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 95, 105, 111, 138, 182, MLC</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 26</i> Observación sobre la sumisión

Bahrein	Observación para el Convenio núm. 111 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 111</i> Observación sobre la sumisión
Bangladesh	Observación para el Convenio núm. 81 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, MLC</i> Observación sobre la sumisión
Barbados	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 97, 98, 100, 111, 118, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 97, 98, 100, 102, 105, 111, 122, 128, 138, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 95</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Belarús	Observaciones para los Convenios núms. 29, 95 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 29</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 26</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Bélgica	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 107, 149, 159, 177, 184, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Belize	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 105, 115 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 94, 97, 100, 105, 111, 138, 140, 144, 150, 154, 155, 156, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 141</i> Observación sobre la sumisión
Benin	Observaciones para los Convenios núms. 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182, MLC</i>
Bolivia, Estado Plurinacional de	Observaciones para los Convenios núms. 29, 95, 131, 136, 138, 162 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 95, 105, 122, 129, 136, 138, 156, 162, 167</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 120</i> Observación sobre la sumisión
Bosnia y Herzegovina	Observación para el Convenio núm. 122 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 140, 177, MLC</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Botswana	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 105, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 95, 138, 173, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Brasil	Observaciones para los Convenios núms. 98, 122, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 95, 98, 125, 126, 131, 133, 146, 147, 163, 164, 166, 178, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 113</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Brunei Darussalam	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Bulgaria	Observación para el Convenio núm. 177 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 156</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Burkina Faso	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 142</i> Observación sobre la sumisión
Burundi	Observaciones para los Convenios núms. 26, 105, 111, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión

Cabo Verde	Observaciones para los Convenios núms. 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182, MLC</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Camboya	Observación para el Convenio núm. 105 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 105</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Camerún	Observación para el Convenio núm. 87 <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Canadá	Observación para el Convenio núm. 122 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 122</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Centroafricana, República	Observaciones para los Convenios núms. 81, 95, 131, 155, 169 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 62, 81, 95, 117, 119, 120, 122, 142, 155, 169</i> Observación sobre la sumisión
Chad	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 29, 111, 144, 151, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 105, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Checa, República	<i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 95, 99</i>
Chile	Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 122, 169 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 140, 169, 189</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 131</i> Observación sobre la sumisión
China	Observaciones para los Convenios núms. 155, 167 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 155, 167, 170, MLC</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 26</i> <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 122</i>
Región Administrativa Especial de Hong Kong Región Administrativa Especial de Macao	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 26, 122, 148, 155, 167</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 19</i>
Chipre	Observación para el Convenio núm. 122 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 172</i>
Colombia	Observación para el Convenio núm. 29 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 95, 99</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Comoras	<i>Solicitud directa general</i> <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111</i> Observación sobre la sumisión
Congo	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 100, 111, 152, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 149, 182</i> Observación sobre la sumisión
Corea, República de	Observaciones para los Convenios núms. 111, 156 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 138, 144, 156, 182</i>
Costa Rica	Observación para el Convenio núm. 122 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 113, 114, 122, 137</i>
Côte d'Ivoire	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 138, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 159, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>

Croacia	Observaciones para los Convenios núms. 81, 98, 129, 155, 161, 162 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 32, 45, 81, 98, 129, 139, 148, 155, 161, 162, 182</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 119, 136</i> Observación sobre la sumisión
Cuba	Observación para el Convenio núm. 110 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 113, 142</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 107</i>
Democrática del Congo, República	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 100, 111, 135, 144, 158 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 100, 111, 117, 119, 120, 150</i> Observación sobre la sumisión
Dinamarca	<i>Solicitud directa para el Convenio núm. 142</i>
Djibouti	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 19, 24, 37, 38, 122, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 18, 29, 81, 100, 105, 111, 138, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Dominica	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 94, 138, 147 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 19, 26, 29, 87, 95, 97, 100, 105, 111, 135, 144, 150, 169, 182</i> Observación sobre la sumisión
Dominicana, República	<i>Solicitud directa general</i> <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 95, 172, 187, 189</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 107</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Ecuador	Observaciones para los Convenios núms. 98, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 97, 105, 114, 122, 138, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 113</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Egipto	Observaciones para los Convenios núms. 87, 92, 105 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 159</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 68</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
El Salvador	Observaciones para los Convenios núms. 87, 107, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 107, 131, 138, 155, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 99</i> Observación sobre la sumisión
Emiratos Árabes Unidos	Observación sobre la sumisión
Eritrea	Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105, 138</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Eslovaquia	Observaciones para los Convenios núms. 81, 129, 156 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 129, 140, 156</i>
Eslovenia	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 98, 129 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 129, 187</i>
España	Observaciones para los Convenios núms. 97, 100, 111, 137, 181 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 97, 98, 111, 169, 173</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Estados Unidos	<i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>

Estonia	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182</i>
Eswatini	Observación para el Convenio núm. 87 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 98</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 131</i> Observación sobre la sumisión
Etiopía	Observaciones para los Convenios núms. 105, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Ex República Yugoslava de Macedonia	Observaciones para los Convenios núms. 81, 98, 111, 129 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 94, 111, 122, 129, 131, 140, 142, 144, 150, 162, 177</i> Observación sobre la sumisión
Fiji	Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111</i> Observación sobre la sumisión
Filipinas	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 110, MLC</i>
Finlandia	Observación para el Convenio núm. 156 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 140, 148, 156, 170, 174, 189</i>
Francia	Observaciones para los Convenios núms. 122, 156 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 137, 149, 156, 181, 187</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Nueva Caledonia	Observaciones para los Convenios núms. 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 181, 187</i>
Polinesia Francesa	<i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 82, 100, 111, 122, 125, 126, 129, 142</i> <i>Solicitud directa general</i>
Tierras australes y antárticas francesas	
Gabón	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 155, 167</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 19</i> Observación sobre la sumisión
Gambia	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Georgia	Observación para el Convenio núm. 100 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 117, 142</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Ghana	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 100, 108, 111, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 107, 111, 117, 119, 138, 144, 149, 182, 184, MLC</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 26</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Granada	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 81, 144 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 95, 97, 105, 138, 155, 182</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 99</i> Observación sobre la sumisión

Grecia	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122, 138 <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Guatemala	Observaciones para los Convenios núms. 87, 138, 144, 169, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 112, 113, 114, 138, 149, 169, 182</i>
Guinea	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 111, 113, 118, 138, 142, 156, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 45, 100, 105, 111, 117, 118, 121, 138, 140, 143, 144, 149, 156, 182</i> Observación sobre la sumisión
Guinea-Bissau	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 81, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 17, 18, 19, 26, 29, 68, 69, 81, 88, 100, 105, 108, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Guinea Ecuatorial	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 103, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 30, 105, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Guyana	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 98, 137, 138, 139, 140 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 97, 144, 149, 172, 182</i> Observación sobre la sumisión
Haití	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 42, 81, 87, 98, 106, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 77, 78, 87, 100, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Honduras	Observaciones para los Convenios núms. 87, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 144, 182, MLC</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Hungría	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 129 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 127, 129, 140, 142, 144, 148, 161, 182, MLC</i> Observación sobre la sumisión
India	Observaciones para los Convenios núms. 29, 81 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 141, MLC</i>
Indonesia	Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 105, 106, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 29, 81, 105, 120, 138, 144, 182, 187</i>
Irán, República Islámica del	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182, MLC</i> Observación sobre la sumisión
Iraq	Observaciones para los Convenios núms. 29, 100, 111, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 23, 29, 92, 100, 105, 111, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 147, 172, 182</i>
Irlanda	Observaciones para los Convenios núms. 111, 144 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111, MLC</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 108, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Islandia	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 144</i>
Islas Cook	<i>Solicitud directa para el Convenio núm. 11</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Islas Marshall	Observación sobre la sumisión

Islas Salomón	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 29, 42, 87, 94, 95, 98, 105, 108, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Israel	Observación para el Convenio núm. 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 111, 138, 144, 182</i>
Italia	<i>Solicitud directa para el Convenio núm. 29</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 42, 105, 142</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Jamaica	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 105, 117, 138, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 87, 97, 149, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 26</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Japón	Observaciones para los Convenios núms. 29, 87 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 144, MLC</i>
Jordania	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 111, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 111, 117, 144, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Kazajstán	Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Kenya	Observaciones para los Convenios núms. 17, 138, 143, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 99, 131, 138, 140, 142, 143, 182, MLC</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 19</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Kirguistán	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 27, 29, 81, 87, 95, 97, 98, 100, 105, 111, 115, 119, 120, 122, 124, 131, 138, 142, 144, 148, 149, 150, 154, 157, 159, 160, 182, 184</i> Observación sobre la sumisión
Kiribati	Observación general Observación para el Convenio núm. 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Kuwait	Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 111</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Lao, República Democrática Popular	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 111, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111, 138, 144, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Lesotho	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 105, 144, 182</i> Observación sobre la sumisión
Letonia	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 142, 149</i>
Líbano	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 100, 111, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 122, 138, 142, 172, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 59</i> Observación sobre la sumisión

Liberia	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 144, 182, MLC</i> Observación sobre la sumisión
Libia	Observaciones para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 122, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182</i> Observación sobre la sumisión
Lituania	Observaciones para los Convenios núms. 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111, 144, 156</i>
Luxemburgo	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 129</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 150</i>
Madagascar	Observaciones para los Convenios núms. 105, 124, 138, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 29, 88, 117, 159, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Malasia	Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 100, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 95, 100, 144, 182</i> Observación sobre la sumisión <i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 19 Observación general Observación para el Convenio núm. 97 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97</i> <i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 14, 19 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 94</i>
Malawi	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 29, 129, 138, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 81, 87, 97, 98, 99, 105, 107, 149, 150, 158, 159, 182</i> Observación sobre la sumisión
Maldivas, República de	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Malí	Observaciones para los Convenios núms. 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 144, 182</i> Observación sobre la sumisión
Malta	<i>Solicitud directa general</i> <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 117, 149, MLC</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 108</i> Observación sobre la sumisión
Marruecos	Observaciones para los Convenios núms. 29, 94, 105, 111, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 111, 138, 144, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Mauricio	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 144</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Mauritania	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 100, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 100, 105, 138, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
México	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 22, 55, 87, 134, 163, 164, 166 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 110, 138, 142, 144, 172</i> Observación sobre la sumisión

Moldova, República de	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 129, 142, 152 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 92, 105, 117, 138, 144, 182</i> Observación sobre la sumisión
Mongolia	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 181, MLC</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Montenegro	<i>Solicitud directa general</i> <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 113, 114, 140, 144, 182, MLC</i>
Mozambique	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 105, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Myanmar	Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 63, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Namibia	Observación para el Convenio núm. 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Nepal	Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Nicaragua	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 117, 138, 169, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 95, 100, 138, 140, 142, 144, 169, 182, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Níger	Observaciones para los Convenios núms. 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 138, 142, 150, 181, 182</i>
Nigeria	Observaciones para los Convenios núms. 26, 29, 88, 95, 98, 138, 144, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 45, 81, 94, 105, 138, 182, MLC</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Noruega	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 129, 167, 187</i>
Nueva Zelandia	Observación para el Convenio núm. 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 144, 155, MLC</i> <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 82</i>
Tokelau	
Omán	<i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Países Bajos	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 144, 177</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 169</i> <i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 138 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 94, 105, 122, 138, 140, 142, 144, 182</i> <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 172</i>
Aruba	
Caribe parte de los Países Bajos	
Curazao	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 144, 151, 172</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87</i> <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 144, 172</i>
Sint Maarten	
Pakistán	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 107, 144</i> Observación sobre la sumisión
Palau	<i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>

Panamá	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 110, 114, 122, 125, 126, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Papua Nueva Guinea	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 98, 111, 138, 158, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 26, 27, 29, 87, 99, 100, 105, 111, 122, 138, 182</i> Observación sobre la sumisión
Paraguay	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 156</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Perú	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 159 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 55, 56, 87, 100, 111, 122, 156, 159</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Polonia	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 122, 129, 140, 142, 149 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 129</i>
Portugal	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 98, 137 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Qatar	Observaciones para los Convenios núms. 81, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 111</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Reino Unido	Observación para el Convenio núm. 87 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i> Anguilla <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 23, 82, 87, 97, 98, 108, 140</i> Bermudas <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 82, 98, MLC</i> Gibraltar Observación para el Convenio núm. 100 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 100</i> Guernsey <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 122</i> Islas Malvinas (Falkland) <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 82</i> Islas Vírgenes Británicas <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 82, 97, 98</i> Jersey Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 140</i> Montserrat <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 82, 87, 97, 98</i> Santa Elena Observación para el Convenio núm. 98
Rumania	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111, 122, 129 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 108, 111, 122, 129</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Rusia, Federación de	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111, 113, 126 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 95, 111, 126, 137, 150, 156</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Rwanda	Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 100 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 122</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 123</i> Observación sobre la sumisión
Saint Kitts y Nevis	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182, MLC</i> Observación sobre la sumisión
Samoa	Observación para el Convenio núm. 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 182</i> Observación sobre la sumisión

San Marino	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 148, 160 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111, 140, 143, 156, 159</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
San Vicente y las Granadinas	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 95, 100, 105, 108, 111, 122, 129, 138, 144, 182</i> Observación sobre la sumisión
Santa Lucía	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 17, 87, 98, 100 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 19, 26, 29, 87, 100, 108, 111, 154, 158, 182</i> <i>Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 95</i> Observación sobre la sumisión
Santo Tomé y Príncipe	<i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 98 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 87</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Senegal	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Serbia	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 129, 144 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 129, 150, 162, 181</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Seychelles	Observación para el Convenio núm. 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 87, 99</i> Observación sobre la sumisión
Sierra Leona	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 17, 29, 81, 88, 98, 119, 125, 144 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 87, 94, 95, 100, 101, 105, 111, 126</i> Observación sobre la sumisión
Singapur	<i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 81 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 32, 81, 94, 100, 144</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Siria, República Árabe	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 107</i> Observación sobre la sumisión
Somalia	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 182</i> Observación sobre la sumisión
Sri Lanka	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Sudáfrica	<i>Solicitud directa general</i> Observación para el Convenio núm. 87 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, MLC, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Sudán	Observaciones para los Convenios núms. 81, 122 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 81</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>

Sudán del Sur	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Suecia	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 140</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Suiza	Observación para el Convenio núm. 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 142, MLC</i>
Suriname	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 98, 122, 150</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Tailandia	<i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Tanzania, República Unida de Tanganyika	Observaciones para los Convenios núms. 17, 19, 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 95, 140, 142, 149</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 131</i> <i>Solicitud directa para el Convenio núm. 81</i>
Tayikistán	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 81, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 95, 97, 98, 111, 119, 120, 122, 142, 148, 149, 155, 177</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Timor-Leste	Observación general <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 182</i> Observación sobre la sumisión
Togo	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitud directa para el Convenio núm. MLC</i>
Tonga	<i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Trinidad y Tabago	Observación general Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 97, 100, 111, 122, 144, 147, 150</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Túnez	Observación para el Convenio núm. 87 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 142, 144</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Turkmenistán	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Turquía	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 159, 167, 176, 187</i>
Tuvalu	Observación sobre la sumisión
Ucrania	Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 95, 100, 129, 176 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 95, 98, 100, 111, 117, 129, 131, 144, 156, 173, 176</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Uganda	<i>Solicitud directa general</i> Observaciones para los Convenios núms. 26, 81, 87, 98, 122 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 81, 94, 95, 100, 111, 123, 124, 143, 162</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Uruguay	Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 100, 162, 189 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 97, 100, 110, 111, 129, 149, 156, 162, 172, 176, 189</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>

Uzbekistán	Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Vanuatu	<i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98</i> <i>Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105</i> Observación sobre la sumisión
Venezuela, República Bolivariana de	Observaciones para los Convenios núms. 87, 117, 122, 140, 142, 144, 149, 169 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 169</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Viet Nam	Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 124, 138, 144, 182</i> <i>Solicitud directa sobre la sumisión</i>
Yemen	Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 138, 182 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 138, 144, 158, 182</i> Observación sobre la sumisión
Zambia	Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 98, 100, 111, 131, 138 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 95, 100, 111, 131, 136, 138, 144, 155, 173, 176, 187</i> Observación sobre la sumisión
Zimbabwe	Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111 <i>Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 99, 100, 111</i>